



XXXII CONGRESO INTERNACIONAL
ALAS PERÚ 2019



Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida
del 1 al 6 de diciembre-Lima

DOSSIER

DESARROLLO RURAL Y CUESTIÓN

AGRARIA

GRUPO DE TRABAJO 5

Lima, Perú 2020

**ALAS****XXXII CONGRESO INTERNACIONAL ALAS PERÚ 2019****©ALAS-ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA****DOSSIER****DESARROLLO RURAL Y CUESTIÓN AGRARIA****GRUPO DE TRABAJO 5****PRESIDENCIA ALAS:**

Jaime Ríos Burga (Perú)

VICEPRESIDENCIA ALAS:

Mg. Jesús Díaz (República Dominicana)

COMITÉ DIRECTIVO:

Dr. Federico Schuster (Argentina)

Dr. Breno Bringel (Brasil)

Dr. Milton Vidal (Chile)

Dr. Alexander Gamba (Colombia)

Dra. Angélica Cuellar (México)

Dra. Briseida Barrantes (Panamá)

Dr. Eduardo Arroyo (Perú)

Dra. Marina Ortíz (República Dominicana)

COORDINADORES GRUPO DE TRABAJO 5:

Albero Riella (Uruguay)

Ivaldo Gehlen (Brasil)

Sulema Loayza (Perú)

Eliseo Zevallos (Perú)

EDITADO POR:

© ALAS-ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA PERÚ

Jr. Alonso de Molina N° 1231, Dpto. 303 - Santiago de Surco

Lima-Perú

<http://sociologia-alas.org/>

Primera edición digital, noviembre 2020.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Angelo Aguilar (Perú)

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú**ISBN: 978-612-48166-5-9****DERECHOS RESERVADOS ALAS ©**



PRESENTACIÓN

El DOSSIER que presentamos es el resultado de las ponencias entregadas al XXXII Congreso Internacional ALAS Perú realizado en diciembre del 2019. Cada uno de nuestros 25 Grupos de Trabajo: Ciencia, Tecnologías e Innovación; Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio; Producción, Consumos Culturales y Medios de Comunicación; Estado, Legitimidad, Gobernabilidad y Democracia; Desarrollo Rural y cuestión agraria; Imaginarios Sociales y Memoria; Desarrollo Territorial, Desigualdades y descentralización; Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social; Estructura Social, Dinámica Demográfica y Migraciones; Estudios políticos, Socio jurídicos e Instituciones; Género, Feminismos y sus aportes a las Ciencias Sociales; Sociología de la Cultura, Arte, Interculturalidad y Religiones; Teoría Social y Pensamiento Latinoamericano; Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo Sustentable; Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales; Universidad Latinoamericana: interpelaciones y desafíos; Trabajo y Restructuración Productiva; Salud, Seguridad Social y Discapacidades; Acciones Colectivas y Movimientos Sociales; Sociología de la Niñez, Juventud y Envejecimiento; Corrupción, Violencia Social, Seguridad y Defensa; Alimentación y Cocinas en las Américas; Sociología de la Educación, Políticas Educativas y Deporte; Integración Regional, Geopolítica y Desarrollo; y, Sociología de los Cuerpos y las Emociones; muestran su rica producción teórica empírica desde sus propias experiencias críticas de saber en América Latina y el Caribe.

Reflexión que en sus diversos campos específicos nos muestran la riqueza del diálogo y el debate realizado en nuestro XXXII Congreso ALAS Perú 2019. Así mismo, queda como evidencia la integración de la sociología cada vez más con los otros campos del saber, sacando a luz o visibilizando la sociología de las ausencias y emergencias en la presente transición global. Un esfuerzo epistémico y metodológico por adentrarse a las situaciones y problemáticas más saltantes de la vida social en sus interacciones y transversalidad temática con sus áreas de problemática y otras áreas centrales de investigación social presentes en nuestros Grupos de Trabajo de investigación y otras comunidades científica del mundo en el esfuerzo creativo por construir un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida que descoloniza el ser, el saber y el poder afirmando la calidad de vida en nuestras sociedades.



Mi agradecimiento en nombre de la Presidencia y Comité Directivo actual a cada uno de la/os coordinadoras/es, quienes hicieron realidad este compromiso institucional con ALAS.

Dr. Jaime Ríos
Presidente de ALAS



INTRODUCCIÓN

Este DOSSIER presenta las ponencias enviadas al Grupo de Trabajo “Desarrollo Rural y Cuestión Agraria en América Latina” del XXXII Congreso Internacional ALAS Perú realizado en diciembre del 2019. Su contenido busca recoger parte de las discusiones y aportes realizados por los ponentes en las ocho sesiones del Grupo de Trabajo durante el congreso. Los noventa y cinco trabajos que contiene la publicación abarcan problemáticas y estudios de caso en Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, Uruguay y España. Su presentación está organizada en siete grandes líneas temáticas que cubren una amplia gama de los problemas rurales y agrarios de nuestro continente. La primera línea reúne trabajos sobre las *Transformaciones agrarias*, continúa luego la temática de *Políticas agrarias*, la tercera línea trata de *Producción familiar, empleo y condiciones de vida en los mundos*, en cuarto lugar están los trabajos de *Soberanía alimentaria y políticas públicas*. La quinta línea temática agrupa las ponencias sobre *Territorialidades, movimientos sociales y resistencia*, luego continúan los temas de *Género, juventud y desigualdades en la ruralidad contemporánea* y el dossier se cierra con los trabajos enviados sobre la temática de *Desagrarización y cambios de la sociedad rural*.

Este conjunto de investigaciones sobre temas y circunstancias tan diversas nos muestran la riqueza y diversidad de la sociología rural y los estudios agrarios y dan cuenta de su fuerte vínculo con las tensiones, conflictos, desafíos y alternativas que enfrentan hoy los territorios rurales latinoamericanos. Las ponencias abordan los múltiples planos, dimensiones y escalas que los procesos de reestructuración capitalista a nivel mundial están generando en nuestro continente con sus tendencias a la concentración económica, a la destrucción de la naturaleza, a la profundización de las desigualdades y a al aumento de los niveles de exclusión social.

Todos estos trabajos indican, como afirmamos en la convocatoria inicial al Grupo de Trabajo, que los primeros veinte años del siglo XXI han generado importantes cambios en los territorios rurales y agrarios del continente latinoamericano. Aparecen problemáticas de carácter global como son la protección ambiental, la soberanía alimentaria y las identidades étnico-raciales, que conviven con el avance de las cadenas agroalimentarias globales y la expansión de sus nuevas formas productivas basadas en la informática, la robótica y las comunicaciones. Todo ello coexiste en los territorios



rurales con temas estructurales como la marginación de las economías campesinas, la precariedad de los trabajos agrícolas y la vulnerabilidad de los hogares rurales. En tanto, en este escenario, los movimientos sociales y políticos rurales se enfrentan a sectores dominantes de la sociedad latinoamericana para denunciar y enfrentar los impactos negativos que estos procesos generan en sus comunidades y en la naturaleza.

Estas transformaciones, también ponen en juego el estudio de los nuevos vínculos entre lo que llamábamos urbano y rural, que trae implícito propuestas de acción y de gestión de políticas que pueden impulsar la ampliación de las bases democráticas y estimular mayor participación en la cuestión pública. En efecto, la consolidación y desarrollo de la democracia implica la necesidad de reconocer los derechos individuales y colectivos de los diversos actores sociales del mundo rural contemporáneo.

Este dossier pone de manifiesto como las heterogeneidades de las sociedades rurales presentan emergentes sociales, económicos, culturales y étnicos que están contribuyendo a reconfigurar las agendas políticas de nuestras sociedades latinoamericanas.

Con la presente publicación de nuestro grupo de trabajo de ALAS aspiramos contribuir a un espacio de reflexión e intercambio sobre estas cuestiones para poder analizar con mayor rigurosidad los desafíos actuales y abrir nuevas interrogantes para construir sociedades más justas, democráticas y territorialmente integradas.

Albero Riella



5. DESARROLLO RURAL Y CUESTIÓN AGRARIA EN AMÉRICA LATINA

Línea Temática 1. Transformaciones agrarias

Pág. 16

Cambios en la orientación ganadera de un distrito altoandino: El caso de Ocongate (Cusco).

Diana Rosas Morales

Mirada de la asamblea general de ejidatarios sobre problemáticas y retos actuales del ejido Santa Ana Hueytlalpan, Tulancingo, Hidalgo.

Miriam Yolanda Flores Santuario, Adriana Gutiérrez Ramírez, Lourdes Raymundo Sabino

A “produção” do desenvolvimento sustentável na Amazônia Central: uma análise das estratégias de engajamento e enquadramento promovidas pelas ONGs em Apuí.

Pedro Frizo, Paulo Niederle

Atravessando as fronteiras de um mercado global: trabalho e diferença na selva alta peruana.

Ricardo Luiz Cruz

"Relatos del Agua": La práctica cultural del Riego Comunitario. Conflictos y Discursos.

Lourdes Zúñiga M., Jessica Barraza Rivera

Monocultura e concentração de terra - expansão do agronegócio canavieiro no estado de São Paulo, Brasil.

José Giacomo Baccarin, Gláucia Elisa Mardegan, Regina Aparecida Leite de Camargo

Financeirização da Agricultura: A complexidade da apropriação de terras pelo capital financeiro no Brasil no século XXI.

Bruna Figueiredo Gonçalves

Formas e processos políticos do agronegócio brasileiro: articulações de interesses nas cadeias produtivas de soja e carne.

Antonio Marcos Pereira dos Santos, Felipe Ferrari da Costa

Transição Agrícola Percebida por Agricultores Familiares em Região de Produção Intensiva no Noroeste de Minas Gerais, Brasil.

Rosana Passos Cambraia, Ianna Santana Souza, Marivaldo Aparecido de Carvalho

Processo de modernização da agropecuária do Nordeste brasileiro: Uma análise para os anos de 1970 – 1975 – 1980 – 1985 – 1995 – 2006.

Nayara de Sousa Rodrigues, Maria Jeanne Gonzaga de Paiva

A produção de Cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil: Valorização do agronegócio e expansão do capital.

Ilena Felipe Barros

Santa Catarina (Brasil): A evolução de sua agropecuária no período de 2006 A 2017.

Luiz Carlos de Carvalho Júnior



La estructura organizacional y los mecanismos de coordinación de la extensión rural de un grupo de productores indígenas de café orgánico en Chiapas, México.

Fernando Manzo-Ramos, Yocellyn Vázquez-Ibarra, Esperanza Molina-Hernández

Formação e Transformação da Sociedade Rural Brasileira.

Renner Coelho Messias Alves, Ingrid Mendes Miranda

Histórico e transformações da agricultura: Um estudo na comunidade de Rodagem, Lapão-BA.

Maria Lúcia da Silva Sodré, José Fernando Gaspar

Configuración del sistema de innovación del cultivo de girasol en México.

Angelica Torres Ávila, Jorge Aguilar Ávila, Enrique Genaro Martínez González

Línea Temática 2. Políticas agrarias

Pág. 287

Del populismo de los años 30s al progresismo del siglo XXI: Las transformaciones del campo latinoamericano.

Blanca Rubio Vega, Jaime Peña Ramírez

Neoliberalismo e mercado internacional de terras

Leandro Renato Monerato, Newton Narciso Gomes Junior.

Agricultura familiar e as políticas públicas de assistência ao âmbito rural: Uma análise das implicações da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no município de Coelho Neto/MA.

Jennifer Maria Gonçalves Pereira

Análise da política de assentamentos via crédito fundiário no Estado de Mato Grosso do Sul – Brasil.

Leonardo Borges Reis

Políticas agrárias no Brasil: Do pós-ditadura aos governos neoliberais dos anos 90.

Dione Pereira Barbosa, Daniella Florencio P. Siqueira

A reforma agrária como instrumento de poder político: Pensando a conjuntura brasileira.

Aucilene Rodrigues da Silva

Evasão e permanência na reforma agrária: Um estudo de caso no estado do Rio de Janeiro.

Gabriel Souza Bastos

A questão agrária e o reacionarismo no Brasil: A desconstrução das políticas públicas do campo.

Zaira Sabry Azar, Lenilde de Alencar Araújo

Instrumentos de la agenda neoliberal del gobierno. Temer desde las perspectivas agraria, ambiental y minera.

Acácio Zuniga Leite, Caroline Buosi Molina



Línea Temática 3. Producción familiar, empleo y condiciones de vida en los mundos rurales

Pág. 407

¿Hacia dónde va la pequeña agricultura familiar? El caso de la irrigación Majes.

Alipio Montes Urday

Variáveis associadas ao crescimento da moradia citadina de agricultores: Características do fenômeno na Zona da Mata Mineira, Brasil.

Angelina Carvalho, Ana Louise de Carvalho, Fiúza Taís Azevedo de Lima

La precariedad y la viabilidad de la pequeña producción en el transcurso del nuevo milenio

Humberto de Luna López

Entre el campo y la urbe: Organización social y dinámicas de movilidad espacial en jóvenes universitarios provenientes de comunidades alpaqueras de Huancavelica - Perú.

Lady Sihuay Castillo

Entre la reproducción cultural y la explotación infantil: Características y percepciones sobre la participación infantil en la ganadería altoandina.

Lady Sihuay Castillo

Cooperativa e Cooperativismo: um paralelo entre as configurações brasileiras e maltesas

Rosemary Aparecida Scopinho

La producción del mezcal en México: denominación de origen, internacionalización y la condición de vida en el mundo rural.

Ever Sánchez Osorio, María de Lourdes Flores López

“El trabajo femenino en la agricultura familiar: características descriptivas, departamento 25 de Mayo, de San Juan, Argentina.”

Clara Isabel de la Vega, Graciela de Cara, Martín Riveros, Enzo Aciar, Florencia Caif, Gabriela Tomsig, Gabriela Carabajal

Capitalismo, agro y explotaciones familiares. El caso de Entre Ríos.

Germán Andrés Orsini.

Agricultura Familiar e Circuitos curtos de proximidade: a conformação de um espaço de reciprocidade na Feira Agroecológica de Casa Forte, Recife – Pernambuco.

Manuella Carolina Costa de Oliveira De Carvalho Fiúza

Agronegocio del brócoli y agricultura campesina e indígena. El caso de la comuna de Yacubamba, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

María Sol Fransoi

“Economías domésticas y factores que influyen en su desarrollo: Caso Urcurume – Cutervo”.

Nicolás Agustín Torres Castro



Transformaciones en la transmisión del conocimiento tradicional de los artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca.

Elvira Iveth Pérez López, Elia María del Carmen Méndez García

Tradição e racionalização nas estratégias econômicas de produtores familiares no Assentamento Reunidas, em Promissão-SP.

José Geraldo A. B. Poker, Mirian C.L. Simonetti

Lá se vive como aqui”: Reflexões sobre a construção de fronteiras sociais e identidades étnicas de comunidades quilombolas no contexto regional do Baixo Amazonas, Santarém-PA1.

Diego Pérez Ojeda del Arco

Alternativas productivas en la Provincia de Buenos Aires. Las experiencias agroecológicas de Guaminí y Saladillo.

María de la Paz Acosta

Línea Temática 4. Soberanía alimentaria y políticas públicas

Pág. 644

Percepção do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) no município de alta floresta Mato Grosso – Brasil.

Robredo Delmonte

Diversidade produtiva e soberania alimentar no quilombo Charco, São Vicente Férrer – MA, Brasil.

Roberta Batista de Figueiredo Lima, Evaristo de Lima Neto, Júlia Pereira Ferreira

La propiedad intelectual y la ocupación de las tradiciones cognitivas locales: el caso de la ley de Semillas en Costa Rica.

María José Murillo Chaves

Feira da agricultura familiar e circuitos curtos de produção: O caso de Xaxim/SC.

Idiane Mânica Radaelli, Daiane Pegoraro Bochi, Cristiano Nunes Nesi

Huertas de montaña: Mecanismo de soberanía agroecológica.

Carla Marchant, Nicolás Fuentes y Graciela Castet

Influência da cooperativa agropecuária Mista Ouro Verde (COMOV) na produção leiteira do setor sul de Alta Floresta/MT.

Robredo Delmonte

Heterogeneidad y especificidades del agronegocio en México. Adaptación, agencia y retos para los pequeños productores.

Héctor B. Fletes Ocón, Hugo Pizaña Vidal, Guadalupe Ocampo Guzmán, Elvira Iveth Pérez López, Elia María del Carmen Méndez García

Análisis del contexto internacional del mercado de la miel.

Karen Ramirez Mijangos, María Palacios Rangel, Jorge Ocampo Ledesma, Jorge Aguilar Ávila



Sobre los Sistemas Alimentarios Indígenas, el ejemplo del Pueblo Rapa Nui, Chile. Fortalecimiento y contribuciones en la seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático.

Javier Lastra Bravo

Línea Temática 5. Territorialidades, movimientos sociales y resistencias

Pág. 763

Conflitos socioambientais no Sapê do Norte.

Wander Pereira dos Santos

A definição do espaço rural como local para o desenvolvimento territorial.

Daltro Cella, Paula de Jesus Pinsetta Pavarina, Oriowaldo Queda

Capitalismo en el Istmo de Tehuantepec: vulnerabilidad social y sustitución forzada.

Agustín Raymundo Vázquez García

Tierra y Cafe: Un Estudio Exploratorio para Entender la Resistencia Campesina en Colombia.

Aura Angelica Hernandez Cardenas

Defensa del territorio habitado por parte de campesinos indígenas ante la posible implementación de megaproyectos. Una etnografía de las comunidades totonacas de Tuxtla y Zongozotla en la Sierra Norte de Puebla.

Citlaly Casalez Linares

As “ocupações” como estratégia de reivindicação do Direito a Terra no Brasil

Clarissa Machado de Azevedo Vaz, João Vitor Martins Lemes.

La lucha del conflicto armado, después de las armas: El caso del ETCR Urías Rondón.

Diego Alejandro Álvarez Pinzón

Relações internacionais e Questão Agrária: neoliberalismo, transnacionalismo e agronegócio na nova fronteira agrícola do cerrado brasileiro.

Fabiana Scoleso

Marcha Carnaval em Defesa da Água, Vida e Território: resistência camponesa diante do megaprojeto mineiro “La Colosa” em Cajamarca, Tolima.

Maria Carolina Bitu Lira Cavalcante

Mujeres en Junta por el reconocimiento de la mujer en la ruralidad colombiana: Resistir desde lo vital, caso Comité de Mujeres de la ACIT.

María Paula Jiménez Gómez

Estrategias de sobrevivencia de pequeños productores campesinos en Chiapas.

María Guadalupe Ocampo Guzmán, Héctor B. Fletes Ocón

Terra e liberdade: a educação como “passaporte” para a reivindicação de direitos de cidadania no brasil contemporâneo.

Matteo Gigante



Reconfiguración de múltiples formas de resistencia al gran capital. Audiencias públicas, tractorazos y “Frutazo” en la Patagonia norte.

Norma Beatriz Andrade

Miradas de Gênero: A participação das mulheres no movimento sindical rural de Sergipe/Brasil.

Magaly Nunes de Góis, Márcia Santana Tavares

“Representaciones socioculturales y memoria histórica del ferrocarril en el Distrito de Peralta de Turrialba: abordaje explicativo en el contexto de la crisis del cierre del ferrocarril desde la década de los noventa al presente”

Karen Liseth Orozco Sánchez

Desdobramentos violentos dos conflitos no campo: Desvendando resistências e enfrentamentos no estado da Bahia de 2006-2018.

Rayane Lucia Rocha Nunes, Gilca Garcia de Oliveira

Neoliberalismo en el campo colombiano: El caso del Parque Nacional Natural Los Picachos, Caquetá- Meta 2016-2018.

Sandra Milena Polo Buitrago

Escuchando al otro (Exguerrilleros de las FARC- EP): Desafios de la educación en la construcción de la paz y territorio.

Luz Sierra Fandiño, Marian Morales Vega, Maria Molina Albarracin

Construcción de capital social a partir de experiencias de asociatividad en territorios afectados por el Conflicto Armado en Colombia. Estudios de caso en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Y Nariño.

Sonia Bibiana Rojas Wilches, Carlos Arturo Romero Huertas

Contradicciones de los emprendimientos de la economía solidaria que producen commodities en el noreste brasileño: Planta Catende.

Victoria Puntriano Zuniga Melo, Angela Maria Carneiro Araújo

La recuperación de tierras a partir de la organización comunitaria. En resguardo indígena de Guachucal Nariño Colombia 1980-1992.

Aura Patricia Canchala Aza

Imaginarios geográficos de la periferia. Aportes para una geografía de las relaciones de poder.

Jaiber Orozco Sánchez

La frontera rural uruguayo-brasileña y sus territorios.

Mauricio de Souza Silveira

El problema de la tierra en el espacio rural de la Araucanía (1962-2017) Pobreza, desigualdad y conflicto.

Nicolás Pareja Arellano

Límites de los emprendimientos de la economía solidaria que producen commodities agrícolas en el noreste brasileño: Planta Catende.

Victoria Puntriano



Alimentación, territorio y memorias del conflicto armado en la vereda el vergel del municipio San Carlos, Antioquia.
Yury M. Ocampo Buitrago

Línea Temática 6. Género, juventud y desigualdades en la ruralidad contemporánea

Pág. 1121

Entre a escolha e a decisão: O papel das políticas públicas de educação do campo para a ampliação das liberdades dos jovens
Márcia Moreira da Cunha

A educação no Maranhão: indicações sobre a proposta político pedagógica do “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”
Zaira Sabry Azar, Cristiana Costa Lima

Autonomía femenina y turismo rural en Tzibanzá, Cadereyta de Montes, Querétaro.
Ilithya Guevara Hernández

La construcción- de las agendas de género en la ruralidad argentina: Urgencias en disputa. Tensiones entre las Organizaciones y el Estado.
María Marta Muro

El trabajo de mujeres rurales en México: Las artesanas y las economías comunitarias.
Jozelin Soto Alarcón , Rosalba Díaz Vázquez , Angélica Vázquez Rojas, Mario Martínez Rescalvo

Las mujeres rurales y su inserción en los procesos de producción agrarios. Dos regiones argentinas: estudio de casos.
Claudia Marcela Torres Zanotti, Adhemar Enrique Pascuale, Marisa de Luján Gonnella

Relações identitárias e modo de vida camponês: uma análise sobre os jovens do assentamento Pirituba, do MST, em Itapeva (SP).
Camila de Araujo Maciel

A Retração da política fundiária brasileira e o reverso geracional nos assentamentos rurais do Brasil.
Adelma Ferreira de Souza, Eonilson Antonio de Lima, Glaucyo Ramos de Sousa.

Trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales: el papel del territorio y de las políticas públicas.
Juan Fernández Labbé, Eugenia Quingaísa

El agronegocio en Uruguay y sus asalariados: desigualdades generacionales.
Juan Romero Cabrera

Los jóvenes rurales en México y su invisibilidad en las políticas públicas.
Lorenzo Alejandro López Barbosa

Crisis y desigualdad y vulnerabilidad social: Una lectura de la brecha rural-urbana.
Luis Camarero



Línea Temática 7. Desagrarización y cambios de la sociedad rural

Pág.1303

Antes era mais bonito! O tempo do sítio e da comunidade utópica.

Alice Miguel de Paula Peres

La participación de población destinataria en los proyectos de desarrollo: La experiencia de la ONG Ceder.

Ana Rosario Miaury Vilca

Sociología rural y decolonialidad en América Latina.

Armando Sánchez Albarrán

Dinámicas culturales en la comunidad de Santiago Tenango influencia y su papel sobre la desarrollo comunitario político social.

Miguel Angel Maximino

Economía social y género: el caso del Hotel Taseltozin.

Nadia Eslinda Castillo Romero

Crisis y disolución de la identidad cultural en las comunidades campesinas. Caso CC San Mateo de Penachí. Distrito de salas. Región Lambayeque. 2019.

Carlos Edmundo Ravines Zapatel

Cambios socioeconómicos en familias rurales a causa de la migración rural-urbana. El caso de Santa Sofía (Boyacá, Colombia).

Natalia Espinosa-Becerra, Katherin Rojas Gamboa, Katherine Schuhayre Vanegas

Desagrarización del campo en el norte de México. El caso de La Laguna.

Hilda Georgina Hernández Alvarado



Línea Temática 1.
Transformaciones agrarias



Cambios en la orientación ganadera de un distrito altoandino: el caso de Ocongate (Cusco)

Diana Rosas Morales

Resumen

Al momento de la Reforma Agraria de 1969, Lauramarca era la hacienda ganadera más extensa del departamento de Cusco. Desde entonces, este espacio ha transitado grandes y rápidos cambios. Uno de estos ha sido el de la orientación ganadera de los productores, quienes desde el siglo XIX se dedicaban a la producción de lanas de oveja y alpacas orientada a las grandes industrias textiles europeas. El estudio analiza la trayectoria de la producción pecuaria de este espacio mediante la revisión de documentos, estadísticas y entrevista a productores locales. Se concluye que la orientación ganadera del distrito ha pasado de ser de producción de ganado ovino y alpaquero al de crianza de ganado vacuno lechero.

Palabras clave

Ganadería, andes, producción lechera, reforma agraria, cambios agropecuarios

Introducción

La ponencia busca hacer un recorrido por los cambios en la orientación agropecuaria del distrito de Ocongate (Cusco-Perú) desde la expropiación de las tierras por la Reforma Agraria de 1969 hasta el año 2018. Se trata de un espacio que fue dominado por la hacienda Lauramarca, una de las más extensas del departamento de Cusco. Durante la mayor parte del siglo XX, las principales actividades económicas eran la crianza de ovejas y la producción de fibra de alpaca para el mercado internacional. Los bajos precios de esta, entre otros factores, han contribuido a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos como la ganadería de vacunos, la crianza de cuyes y otras actividades no-agrícolas.

Para lograr los objetivos, seguí una metodología mixta que incluyó entrevistas a productores de la zona e informantes clave, análisis de las estadísticas agropecuarias, y revisión documental. Se observa la dramática reducción de ganado ovino y la introducción de nuevas actividades económicas agrícolas. Uno de los cambios más resaltantes es el incremento de las familias dedicadas a la ganadería de producción lechera, y una mayor especialización de las familias en actividades como la crianza de cuyes o la aparición de los llamados “empresarios agrícolas” dedicados a la



transformación de la leche. Además, existe mayor movilidad espacial y contacto con las urbes y niveles más altos de escolaridad en las nuevas generaciones.

Fundamentación del problema

El estudio se centra en Ocongate, un distrito altoandino del departamento de Cusco, ubicado por encima de los 3 600 msnm., y que tradicionalmente se caracterizó por la crianza de alpacas y ovejas. Hasta 1970, la mayor parte de su territorio formaba parte de la Hacienda Lauramarca. Luego de la Reforma Agraria que expropió las tierras de la hacienda, se organizó la Cooperativa Agraria de Producción Lauramarca, que se desactivó en 1987. Se trata entonces de un espacio que ha estado cambiando constantemente en el último siglo, así como otro de los Andes peruanos.

Me interesaron los cambios en la orientación productiva del distrito, desde la época de la hacienda hasta el día de hoy. Este estudio de caso analiza el impacto de las medidas estatales en la vida ser los campesinos de Ocongate, así como la influencia de los cambios económicos internacionales. En 2019 se cumplieron 50 años de la Reforma Agraria peruana, dada por el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado. Resulta por tanto fundamental preguntarnos con las consecuencias de esta en el espacio rural peruano.

Metodología

Para la realización del estudio revise documentos y bibliografía sobre el sistema de haciendas, la Reforma Agraria y la producción pecuaria en el país. Asimismo, sistematicé la información estadística disponible sobre la orientación ganadera del distrito, la población animal y la distribución en el territorio de lo que antes fue la hacienda. Esto incluyó datos del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), y los censos nacionales agropecuarios. Finalmente, realicé entrevistas a los productores de la zona para identificar los cambios que han percibido durante el periodo de tiempo analizado.

Resultados y discusión

La Hacienda Lauramarca

El origen de la hacienda Lauramarca se remonta a las primeras composiciones de tierras, el principal mecanismo de adquisición de las tierras excedentes de los ayllus (Garret 2009). Según Olivera (1977), en 1570, el juez visitador don Antonio de Calatayud vendió en remate público la estancia de Lauramarca a don Gabriel Ruíz de la Peña. La



estancia ocupaba la cuenca alta del río Mapacho. Además, en este espacio había otras estancias propiedad de españoles: Pinchimuro, Palca y Patapallpa.

La economía de la zona se basaba en la producción de papa y maíz, y en la crianza de animales. Según el registro del párroco Arredondo en 1689, un total de 378 personas residían en las estancias y en los cuatro ayllus de la zona (Villanueva 1992). La más poblada era la estancia de Pallca, con 150 personas, y le seguía Lauramarca, con 110 personas. Para entonces, la estancia de Lauramarca era propiedad de Alonso Cano Verdugo.

Varias investigaciones han señalado el uso del poder económico y político de los hacendados para adquirir tierras a expensas de las comunidades indígenas (Ramírez 1991). Así, es posible que los ayllus de Ocongate perdieran progresivamente el acceso a las tierras en favor del desarrollo de la propiedad de los españoles y criollos. En 1630, Juan de Sala y Valdez (teniente gobernador), Sebastián de Perez de Suyos y Sebastián de Velazco, entre otros, solicitaron al Visitador de tierras, el capitán don Diego de Alcázar: “*las tierras del Rey para trabajarlas y proteger a los vasallos indígenas*”¹. El indio pregonero, Dionicio Miranda dirigió la comisión que señaló los límites de los ayllus de Ocongate:

*Norte -a este se señala en Paucartambo el sitio del mismo lindero de ello-Machucarhuayo, río Jachacalla (Corregimiento de Paucartambo), pasando por Urin Cunca siguiendo esta línea recta Jatun Cruz, Huallahualla Peruyani dando vuelta al sur Ausangate y Chillej, en línea recta dando vuelta al oeste Qesqaray-Muñapata-Chinchaqoq, Ausaray, dando vuelta al norte línea recta Chinchaysuyo línea recta para el río del mismo nombre*²

Para inicios del siglo XX, Lauramarca controlaba la mayor parte del territorio de la cuenca alta del río Mapacho³. Sánchez Garrafa (1972) indica que, en la década de 1960, el territorio de la hacienda Lauramarca se extendía por el Norte hasta los límites de la hacienda Capana y la comunidad de Q'eros; por el Este, hacia los nevados de Huallahualla, Colquecruz, Callangate y Ausangate; por el Sur, hacia los nevados de Sobrerumi y Surimana; y por el Oeste, hacia la parcialidad de Yanama y la hacienda de Palcca. Así, se puede notar que los linderos señalados por Dionicio Miranda en 1632 se constituyen en límites de la hacienda Lauramarca en el siglo XX. Es decir, entre los siglos XVII y XIX, la hacienda expandió sus tierras hasta aquellas que antes eran controladas por los ayllus de Ocongate.



El circuito lanero y las haciendas del sur andino peruano

Desde fines del siglo XIX, la economía del sur andino se basó en la producción de lanas para su exportación (Burga y Reategui 1981; Burga y Flores Galindo 1987). El proceso de mercantilización de la producción lanera se incrementó después de 1835, cuando se disparó la demanda de la fibra de alpaca por las industrias británicas (Burga y Reategui 1981). La red del circuito de lanas conectaba a las fibras producidas en las grandes haciendas del sur andino con las textilerías nacionales y europeas (Burga y Flores Galindo 1987).

Según Rénique (1981), la mercantilización impulsada por el circuito lanero no alteró las bases coloniales de la estructura social. La rígida estructura social tenía en su cúspide a los grandes terratenientes, entre los que figuraba el dueño de Lauramarca, José Felipe Loayza. En la base de la estructura, se encontraban los colonos de las haciendas y los campesinos que eran obligados por los hacendados y mestizos a trabajar por un poco de tierra (Tamayo 1981; Valcárcel 1981). En los pequeños pueblos como Ocongate, los habitantes se dedicaban al comercio.

Las relaciones serviles de producción, propias del sistema de haciendas, se fortalecieron en el siglo XX. Además, durante la primera mitad del siglo XX se inició la construcción de la carretera Urcos – Marcapata, que comunicaba al pueblo de Ocongate con la ciudad del Cusco. Esta vía no incluyó en su trazo a la hacienda de Lauramarca, por cuyo caserío pasaba el camino de herradura Cusco – Marcapata. La nueva carretera incrementó el comercio en los pueblos por los que hacía su paso, afectando al control comercial que tenía la hacienda sobre los colonos. Para entonces, Lauramarca ya era la hacienda ganadera más grande del departamento de Cusco, contando con 81 726 hectáreas de extensión (Reategui 1977).

La Reforma Agraria y la CAP Lauramarca

Según Kuczynski, un médico polaco que visitó Lauramarca en la década de 1940, la baja productividad de la hacienda, no permitía un excedente para dar salario a los peones de la hacienda. Las crisis internacionales sucedidas en la década de 1920 desestabilizaron los precios de las lanas. Por entonces, la hacienda era administrada por Carolina Romainville, quien es recordada por su trato tiránico hacia los colonos. En 1946, Kuczynski calculó a los activos de la hacienda en 40 mil cabezas de ganado, entre camélidos, ovinos, caballos y vacunos. En 1945, la familia Saldívar vendió la hacienda (Reategui 1977). Esta pasó por varios dueños hasta 1950, cuando la firma de capitales



argentinos Menéndez Beherty adquirió la mayoría de las acciones (CENCIRA 1972).

Durante las décadas de 1920 y 1960, los colonos de Lauramarca se sumaron a las protestas que se desarrollaban en todo el país contra el abuso de los terratenientes. Se han hecho varias lecturas sobre estos sucesos: algunos las han visto como reivindicaciones mesiánicas como parte de un programa milenarista andino (Piel 1967, Kapsoli 1977, Burga 1986); otros, como parte de las luchas contra el sistema cuasi feudal hacendatario (Reátegui 1977, Quintin 1994); y hay quienes enfatizan el carácter étnico de las protestas (De la Cadena 2004). En Lauramarca y Capana, las demandas abarcaban las relaciones de trabajo abusivas en la hacienda, la coacción de los hacendados en la venta de la producción campesina y en la ocupación de las tierras de las comunidades.

Las denuncias contra las haciendas de Cusco y Puno presentadas a mediados de 1920 al gobierno de turno fueron más de 7 mil (Roca 1935, en Rénique 1991). En 1922, los colonos de Lauramarca presentaron un documento al Ministerio de Fomento, donde denunciaban los bajos salarios en la hacienda y las duras condiciones del trabajo en los viajes forzados a los valles de Marcapata (ceja de selva). Asimismo, otro grupo de colonos denunciaron ante la Dirección de Asuntos Indígenas, los medios violentos usados por los administradores de Lauramarca. Según esto, el dueño de la hacienda, Maximiliano Saldívar, obligaba a los campesinos a venderles su producción de fibra de alpaca al precio de 2 soles/libra, cuando el precio en el mercado fluctuaba entre 9 y 20 soles. Estas y otras denuncias contra las haciendas de Lauramarca y Capana han sido recogidas y analizadas por Reátegui (1977)⁴. Otras medidas de los colonos incluyeron huelgas de brazos caídos, la apropiación del ganado y tierras de la hacienda y la articulación con grupos indigenistas y gremios departamentales (Kapsoli 1977, Kuczynski 2004, Válcarcel 1981).

El sistema de haciendas llegó a su fin en 1969, cuando el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria. Según el Ministerio de Agricultura, aproximadamente, el 90% de las tierras agrícolas estaban en manos del 5% de propietarios⁵. En setiembre de 1969, se promulgó la expropiación de las tierras de la hacienda Lauramarca, mediante el D.S. N° 190-69 (INP 1973). En diciembre de ese mismo año, se formó la Cooperativa Agraria de Producción (CAP) Lauramarca, con 175 socios que la Dirección General de Reforma Agraria calificó como beneficiarios⁶. La nueva empresa mudó su sede central al sector de T'inki.



Las tierras expropiadas tuvieron una extensión de 64 916 hectáreas. De estas, el 7% fue adjudicado la CAP; y el 93%, directamente a los socios. Al momento de la transferencia, la CAP contaba con 1 040 animales. Una cantidad bastante inferior en comparación a la registrada en 1953, cuando la hacienda contaba con más de 44 mil animales (Reategui 1977).

Alpacas/auquénidos*	Hacienda Lauramarca	CAP Lauramarca			
	1953 (Reategui, 1977)	1970 (CENCIRA)	1972 (Hancco)	1973 (Carmona)	1976 (Hancco)
Ovejas	18 291	399	3 577	2 879	3 102
Alpacas/auquénidos*	20 982	364	2 273	2 579	1 765
Llamas	3 589	-	-	-	-
Vacas	619	246	625	658	616
Caballos	1 161	31	31	37	15
TOTAL	44 642	1 040	6 506	6 153	5 498

Cuadro N 1. Población pecuaria de la Hacienda Lauramarca y la CAP Lauramarca, según diferentes fuente

**Hancco (1972, 1976) usa la categoría auquénidos.*

Fuente: Reategui, 1977; CENCIRA, 1972; Hancco, 1978; Carmona, 1979.

Elaboración propia.

Como se puede observar en el cuarto N 1, en 1953 la mayor población pecuaria estaba conformada por ovejas y alpacas. Sin embargo, de las 18 291 ovejas registradas en 1953, quedaban sólo 399 al momento de la creación de la CAP. Asimismo, las 21 982 alpacas contabilizadas en 1953 se redujeron a 364 en 1970. La reducción de ganado se explica por la descapitalización de la hacienda por parte de los administradores ante la inminencia de la reforma agraria. No sólo vendieron animales, sino también tierras y herramientas.

Para incrementar los activos de la CAP, cada socio entregó una alpaca y una oveja. Además, el Consejo administrativo se prestó del Banco de Fomento Agropecuario casi 3 millones de soles para compra de animales y herramientas. De este modo, los animales de la CAP se incrementaron a 6 506 en 1972 (Hancco 1978). Estas cifras se mantuvieron estables durante la década de 1970.

Para mediados de la década de 1970, los socios de la CAP estaban descontentos con el funcionamiento de la empresa. Algunos consideraban que la cooperativa era una nueva forma de "patrón" que continuaba forzándoles al trabajo gratuito, y que la producción beneficiaba solo a los directivos. La situación se repetía en otras empresas asociativas del país. Los conflictos por las tierras y las finanzas de la cooperativa



terminaron en su desarticulación en 1987, repartiéndose los recursos a las familias de los socios.

Reformas neoliberales en el agro

En la década de 1990, el agro peruano se caracterizaba por la tendencia a la parcelización de las tierras, la descapitalización del campo y la (re) organización de las comunidades campesinas. El nuevo gobierno inició una serie de políticas agrarias que buscaban fortalecer la propiedad privada y la liberalización del mercado de tierras, marcando así el giro neoliberal (Ágreda 1997: 173). La reforma implicó la retirada del Estado en lo concerniente al agro (CCAIJO 2000 15). Las ONG empezaron a llenar el vacío dejado, asumiendo la promoción técnica y comercial (Del Pozo-Vergnes 2004: 20). Durante la primera mitad de los 90, las ONG invirtieron entre 90 y 100 millones de dólares en el departamento de Cusco, mientras el Estado, 34.2 millones (Azpur y Chevarria 2001: 58).

En Ocongate, una ONG asumió el rol de promotora del desarrollo agropecuario. CCAIJO ya venía trabajando en la zona desde la década de 1960, pero sobre todo en la alfabetización y fortalecimiento de organizaciones. Desde 1990, CCAIJO tuvo dos proyectos pecuarios importantes: la formación de una asociación de productores de fibra de alpaca y la promoción de la crianza de ganado vacuno. Estas respondían a la inestabilidad que caracteriza a los precios de la fibra de alpaca y a la búsqueda de romper con el aprovechamiento de los rescatistas de fibra.

A inicios de la década de 1990, la mayoría de la población de Ocongate se dedicaba a las actividades pecuarias, principalmente a la crianza de ovinos y alpacas. El 76% de los productores del distrito tenían ganado ovino, sumando un total de 51 289 animales que constituían el 50% del total de la población pecuaria (CENAGRO 1994). La crianza de alpacas ocupaba al 57% de productores, quienes poseían 37 684 alpacas, que constituían el 37% de la población pecuaria. El ganado vacuno se incrementó en comparación al tiempo de la cooperativa. En 1994, Este comprendía a 3 530 animales, que comprendían apenas el 3,6% del total de la población pecuaria, y que se encontraban en manos de 1 160 productores.

Siglo XXI: diversificación de la ganadería

En 2012 se realizó el IV CENAGRO. Los resultados mostraron que la población de ganado ovino disminuyó drásticamente desde 1994, pasando de 51 289 animales a 21



690. Esto significa una reducción del 58% en 18 años. La disminución se explica por la caída de los precios de lana en el mercado internacional y a la mayor demanda de fibras sintéticas. Además, el censo mostro un incremento en los hatos de alpacas de los productores, pasando de 31 alpacas en 1994 a 37 en 2012.

Por otro lado, el cambio más significativo ha sido el crecimiento de la ganadería vacuna. Pasaron de 1 160 productores dedicados a la crianza de vacas a 1955 en el año 2012. El mayor incremento se concentra en las familias que crían ganado de raza Brown Swiss. Para los productores, la producción de ganado vacuno implica menos riesgos e ingresos constantes a lo largo del año. A diferencia de las alpacas, cuya fibra se obtiene sólo una vez al año, entre los meses de noviembre a marzo. Asimismo, la diferencia entre los precios de los productos en el mercado es considerable: la libra de fibra de alpaca suele costar entre 9 y 15 soles, mientras un litro de leche fresca es vendida en el mercado local a 1,50 soles el litro

Animal	1994	%	1994	De raza
Alpacas	1 215	56,51	37 684	37 684
Ovinos	1 632	75,91	51 289	224
Vacunos	1 160	53,95	3 540	252
Porcinos	1 080	50,23	3 530	11
Llamas	371	17,26	4 685	
Caprinos	8	0,37	48	
Total	2 150	100,00	100 776	

Cuadro N 2: Población pecuaria 1994-2012
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario 1994
Elaboración propia

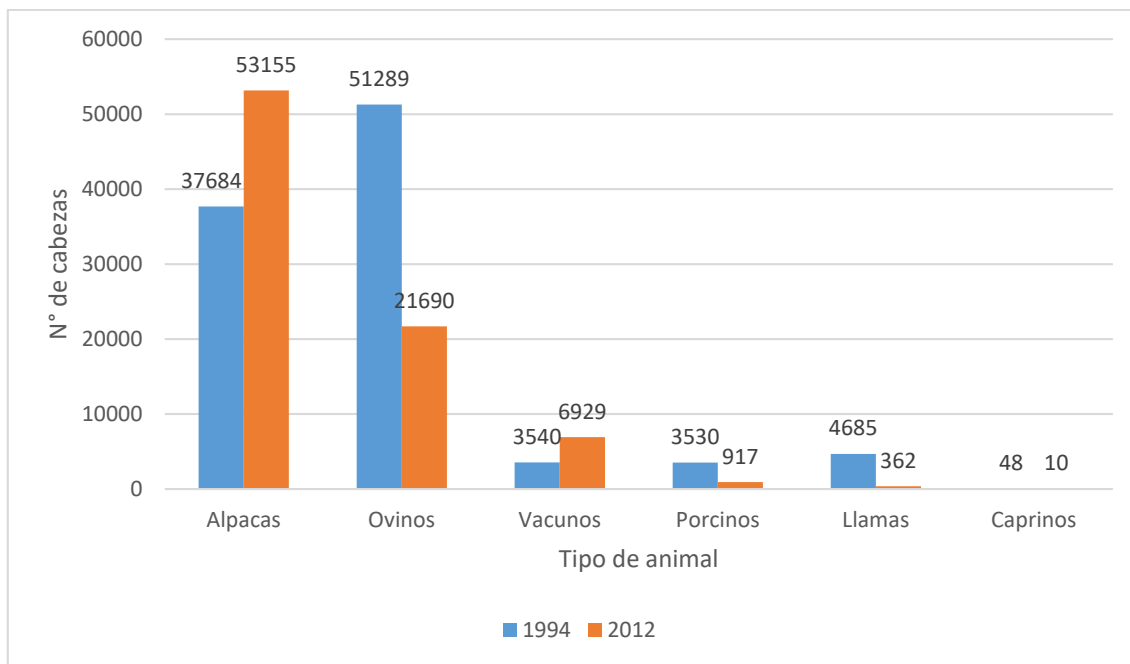


Gráfico N 1: Población pecuaria 1994-2012

Los productores de ganado vacuno fueron especializándose y el día de hoy, 17 familias han establecido plantas lecheras para producir quesos, yogurt y otros productos lácteos. Estos nuevos empresarios han creado marcas de queso que han logrado posicionarse en el mercado regional. La Municipalidad distrito ha tomado el rol que antes tuvo CCAIJO y se encarga de brindar capacitaciones para mejorar la calidad de los productos lácteos y mejorar las cadenas de comercialización.

Reflexiones finales

En el periodo de 1990 a 2014, la orientación ganadera de los productores de Ocongate ha pasado a centrarse en la crianza de ganado vacuno lechero y de alpacas. Esta decisión se fundamenta en la mayor rentabilidad y menor riesgo que ofrece la ganadería lechera, en comparación con la producción de lanas. Los cambios observados en Ocongate nacen de la Reforma Agraria de 1969 que permitió la redistribución de recursos y el ingreso de nuevos actores como el Estado y las ONG.

Notas

¹ Extractos del documento son recogidos por Sánchez Garrafa (1972) en su informe para la Subdirección de Investigación de CENCIRA. El documento se encontraba en los archivos de la gobernatura de Ocongate y fue redactado por Juan Martín Melgarejo, escribano del rey en el Corregimiento de Quispicanchis, el 8 de agosto de 1632.



² Extracto recogido por Sánchez Garrafa (1972) en su informe para CENCIRA.

³ En 1946, el médico polaco Máximo Kuczynski visitó Ocongate y recogió datos interesantes sobre la hacienda Lauramarca

⁴ Los documentos se encuentran en el Archivo del Ministerio de Trabajo y Comunicaciones (Exp. N° 57) (Reátegui 1977: 30-35).

⁵ <http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/70-marco-legal/titulacion-agraria-en-el-peru/413-el-proceso-de-reforma-agraria> (consulta del 25 de noviembre de 2019).

⁶ La CAP Lauramarca Ltda. N° 56 fue reconocida en marzo de 1970 por Resolución N° 597-70-ONDECOOP, e inscrita en Registros Públicos de Cusco (CENCIRA 1972).

Referencias bibliográficas

Ágreda, V. "La comercialización de la fibra de alpaca después del ajuste". En: E. González de Olarte. *Perú: Problema Agrario en debate. SEPIA VI*. Pp. 173-202. Lima: SEPIA.

Azpur, J. Y Chevarria, C. 2001. "Cooperación técnica internacional y desarrollo regional en Cusco". En: M. Valderrama y F. Negrón. *Concertación regional y cooperación internacional*. Lima: ALOP, CEPES, IFCB.

Burga, M. y Alberto Flores Galindo. 1987. *Apogeo y crisis de la República Aristocrática: oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú, 1895-1932*. Lima: Rikchay Perú.

Burga, M. y Reátegui, W. 1981. *Lanas y capital mercantil en el sur. La casa Rickets, 1895-1935*. Lima: IEP.

Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (CENCIRA). 1972. *Cooperativa Agraria de Producción Lauramarca Ltda. N 56, Quispicanchis, Cuzco*. R. Sánchez Garrafa Ed. s.l.

García Sayán, D. 1982. *Tomas de tierras en el Perú*. Lima: Desco.

Fonseca, C. y Mayer, E. 1986. "De la hacienda a la comunidad. El impacto de la reforma agraria en la provincia de Paucartambo. Cuzco, Perú". F. Salomón. *Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX vol. II* Quito: Abya-Yala.

Hanco, C. 1979. Lauramarca y el movimiento democrático revolucionario del campesino por la tierra y contra la semifeudalidad. *Crítica Andina* (3).

Instituto Nacional de Planificación (INP). 1973. *La implementación de la Reforma Agraria en las Cooperativas Agrarias de producción Tupac Amaru II N° 106 y Lauramarca N° 56*. Cusco: INP.

Quintín, P. 1994. *Hacendados, comuneros y comerciantes en el Ocongate del siglo XX: transformaciones de las estructuras de mediación política y de articulación económica*



en la sierra sur de Perú. Barcelona: Universitat de Barcelona. Tesis para optar el título de Doctor en Antropología Social.

Reategui, W. 1977. *Explotación agropecuaria y las movilizaciones campesinas en Lauramarca – Cusco*. Lima: UNMSM.

Rénique, J. 1991. *Los sueños de la sierra: Cusco en el siglo XX*. Lima: Cepes.

Sánchez Gárrafa, R. 1972 *Informe del trabajo realizado en la Cooperativa Agraria de Producción Lauramarca Ltda. N 56*. Cusco: s.e.

Tamayo Herrera, J. 1981. *Historia social del Cuzco Republicano*. Lima: editorial Universo.

Valcárcel, L. 1981. *Memorias*. Lima: IEP.

Valderrama, M. 1982. *7 años de Reforma Agraria peruana 1969-1976*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Villanueva, H. 1982. *Cusco 1689 documentos. Economía y sociedad en el sur andino*. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas.



Mirada de la asamblea general de ejidatarios sobre problemáticas y retos actuales del ejido Santa Ana Hueytlalpan, Tulancingo, Hidalgo

Miriam Yolanda Flores Santuario¹
Adriana Gutiérrez Ramírez²
Lourdes Raymundo Sabino³

Resumen

El objetivo del trabajo es exponer las problemáticas y retos actuales a los que se enfrenta la asamblea general de ejidatarios de Santa Ana Hueytlalpan, Tulancingo, Hidalgo, identificados mediante la aplicación de un diagnóstico rural participativo, empleando observación participante, entrevistas semiestructuradas y estadísticas sobre sujetos agrarios. La reforma constitucional al artículo 27 en 1992 y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, se materializaron jurídicamente en el ejido Santa Ana Hueytlalpan en 2005, propiciando el parcelamiento formal de la superficie social, un cambio en la administración de la tierra y la titularidad de derechos parcelarios, solares y uso común, en las formas de organización al interior del núcleo agrario. Los resultados arrojan que entre las problemáticas señaladas se encuentran la presencia e involucramiento de otros actores sociales en decisiones concernientes estrictamente a la asamblea, como en el caso de parcelas escolares, tampoco se cuenta con un padrón de ejidatarios actualizado, dificultando la realización de reuniones legalmente válidas, conflictos para aprovechar beneficios y oportunidades que se han presentado, así como la existencia de trámites pendientes por realizarse, concluirse o regularizarse; como retos son la mejora en las formas de organización interna, en los canales de comunicación de las decisiones de la asamblea, aplicar estrategias para la rendición de cuentas sobre los recursos económicos obtenidos, entre otros. Se puede concluir que los desafíos que se encuentran presentes en la unidad de análisis son en cierto grado superables a través de la creación de un plan de acción y seguimiento en la gestión y organización ejidal.

Palabras clave

Ejido, retos, problemáticas, sujetos agrarios.

Introducción

Mediante este trabajo se expone la situación actual que enfrentan los sujetos de agrarios y problemáticas relevantes e inmediatas dentro del ejido Santa Ana Hueytlalpan, debido a que tales situaciones repercuten directamente en quienes integran el núcleo agrario,



en sus familias, así como en la superficie que comprende el ejido Santa Ana Hueytlalpan, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México. Se fundamenta el problema y se realiza la ubicación del área de estudio, aportando algunos datos sobre el proceso de reparto agrario que vivió el núcleo ejidal desde que se constituyó legalmente y de los trabajos del PROCEDE, la forma en cómo se encuentra integrado el ejido Santa Ana Hueytlalpan en sus dimensiones espaciales, de sujetos agrarios que conforman la asamblea general y tipos de tierra según su uso o destino, así como sus formas de organización y representación. Se presenta un marco de referencia teórico de la propiedad en México, y de las distintas figuras jurídicas vinculadas a la propiedad social-ejidal, relatando el contexto histórico, económico, político y social en el que el agro mexicano se encontró de comienzos del siglo XX y hasta la entrada en vigencia del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Más adelante se narra la fase de campo y vinculación con los integrantes de la asamblea general de ejidatarios para realizar el estudio, misma que hizo posible describir y comprender, desde la mirada de los propios sujetos de investigación, problemáticas y retos actuales a los que se enfrentan como sujetos agrarios y que identificaron durante sus reuniones de asamblea en el auditorio ejidal. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, afirmando que la principal aportación de este trabajo es dar cuenta de la situación actual que viven las y los integrantes del ejido Santa Ana Hueytlalpan, y facilitar el diálogo entre ellos y ellas, y consensuar las soluciones o procedimientos que corresponden a cada necesidad relacionada sus problemáticas, lo que está generando en el presente procesos graduales que se traducirán en resultados benéficos en la regularización documental de sus derechos civiles y/o agrarios y facilitar la convivencia armoniosa entre los/as integrantes del núcleo. La metodología utilizada es principalmente cualitativa, se empleó el estudio de caso y de investigación acción, principalmente; sin embargo, para aspectos generales de identificación del área de estudio y de sujetos agrarios fue cuantitativa. A partir del enfoque cualitativo, se combinó la investigación-acción con estrategias de vinculación comunitaria. De igual manera se llevó a cabo la planeación y diseño de técnicas y metodológicas a emplear de forma participativa, el método etnográfico con observación participante, entrevistas semiestructuradas en grupos focales e individuales a habitantes e/o integrantes del ejido, charla informal, gestoría y asesoría en trámites ante el Registro Agrario Nacional, un diagnóstico participativo para identificar problemáticas al interior del ejido, consulta de archivos y demás fuentes secundarias.



Fundamentación del problema

Hablar del agro mexicano es hablar de la historia del país, al menos de los últimos 200 años, es un tema complejo, que abarca el sistema alimentario de naciones con distinta autoadscripción, es hablar de justicia, de libertad, cultura y en general, de derechos humanos, y con ello, de los principales problemas que aquejan a los grupos más desfavorecidos en México: las y los productores primarios; en una realidad de contrastes sin lógica aparente, aquellos/as que alimentan a un pueblo y que, sin embargo, son con frecuencia invisibilizados. Por eso resulta necesario hablar de los núcleos agrarios y de la situación que actualmente viven, porque de su futuro dependerá el de las ciudades.

La cuestión agraria ha sido ampliamente discutida y estudiada por diversos autores desde lo global y local. En el presente estudio se retoman algunas investigaciones antecedentes, realizadas en la sierra madre oriental, en el ejido Santa Ana Hueytlalpan o en sus proximidades:

Flores (2012), en su trabajo *La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional y su impacto jurídico en la superficie parcelada de los ejidos de Tulancingo de Bravo, Hidalgo (1992-2012)*, da cuenta de las consecuencias legales de la reforma a partir de la autorización para adoptar el dominio pleno sobre parcelas ejidales, haciendo uso de una metodología mixta, empleando la hipótesis de la tendencia a la desarticulación de los núcleos agrarios como uno de los efectos problemáticos o negativos que dicha reforma generó, está generando o generará en la tierra social y demuestra que en 11 ejidos de los 15 que existen en el municipio de Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo, la reforma ha sido adoptada como parte de sus acuerdos de asamblea general, produciendo que parte o la totalidad, incluso, de la tierra parcelada de los mismos salga del régimen ejidal y se convierta en propiedad privada, con los efectos correspondientes de su entrada al ámbito civil, que, entre otras implicaciones, es la regulación normativa de ámbito local, no federal. En su investigación muestra parte de las problemáticas que se harían presentes tiempo después de los núcleos agrarios; sin embargo, no profundiza en las mismas, sólo refiere impactos a escala jurídica. Debido al tiempo de implementada la reforma agraria de 1992 es de vital importancia someterla al análisis de sus alcances legales sobre el territorio de carácter social, los cuales al tiempo de aprobarse no necesariamente pudieron tomarse en consideración. Por ello es preciso y oportuno identificar las ventajas y desventajas de tal reforma, así como posibles contradicciones o limitantes.



Flores y Andrade (2017), en su trabajo *El Procede y la Identidad colectiva en el ejido San Pablo, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo* realizan una investigación cuyo fin fue el análisis del proceso de construcción de identidad de los miembros del núcleo agrario desde el origen del ejido para comprender los cambios culturales y problemáticas.

Otro trabajo que hace referencia a problemáticas ejidales en el estado de Hidalgo, es el realizado por Flores y Francisco (2019) titulado *Implicaciones y desafíos en las sucesiones jurídicas agrarias y civiles. Estudio de caso: Ejido San Pablo, Tenango de Doria, Hidalgo, México*. En este, los autores describen la situación actual que guardan las sucesiones jurídicas agrarias y civiles del ejido, un poblado medianamente próximo al núcleo agrario motivo de esta ponencia, sus implicaciones y desafíos vinculados con el ordenamiento territorial, identificando problemáticas que enfrentan los sujetos durante el traslado de derechos, al cumplirse el supuesto de fallecimiento del titular de los mismos y su impacto en el territorio. Los resultados arrojaron que tales problemáticas dificultan un adecuado ordenamiento, planeación y disposición del territorio ejidal en términos jurídicos y reales, entre ellas la existencia de errores en el contenido de documentos necesarios para trámites sobre sucesiones agrarias o civiles; procedimientos burocráticos que obstaculizan el desarrollo normal de tales procesos. Dicha investigación únicamente se enfoca en problemáticas relacionadas a la sucesiones o transmisiones del patrimonio por herencia, dejando de lado cualquier otro tipo de hechos o actos que puedan derivar en situaciones no deseadas.

Metodología

La investigación parte de la selección del tema a investigar, que inició con la revisión exhaustiva de literatura especializada sobre el tema para después, optar por un estudio de caso, predominando el paradigma interpretativista, aunque se evidencian ciertos “elementos” de positivismo. Se parte de un marco referencial con inmersiones iniciales en campo. Un “ingrediente” adicional ha sido el continuo ejercicio de la empatía, la cual no ha sido sencilla considerando la gama de puntos de vista y de formas de vida. Se trata de una investigación exploratoria, por lo que los resultados son una visión aproximada. Por lo tanto, el método de investigación es bajo un enfoque mixto. Se requirió tanto de la investigación documental como de campo. Fue decisiva y necesaria la consulta de información y recolección de datos en Archivos del Registro Agrario Nacional (R.A.N.), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), páginas oficiales de gobierno federal, estatal y municipal, así como en los archivos del núcleo



agrario que se estudia. Se analizó la información documental obtenida (planos, actas de asamblea, carpeta básica), testimonios de integrantes de la asamblea general de ejidatarios, y se construyó una matriz de información o base datos para la depuración del padrón ejidal, identificando a los sujetos agrarios fallecidos, que han enajenado o cedido sus derechos y no han regularizado dicho trámite, o bien, aquellos que actualmente han salido del régimen ejidal debido a la adopción del dominio pleno. De esta manera, y para responder el problema planteado, se optó hacer especial énfasis en la fase de campo, a partir de la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar sus variables.

Por tales motivos, el desarrollo metodológico se puede describir en varias etapas: La primera que detalla la parte de *investigación documental*, en la cual se realizó la consulta y revisión de libros, tesis, artículos, archivos históricos, plataformas o sistemas en línea, actas de asamblea, planos, con el fin de indagar en el marco teórico sobre la cuestión agraria y el ejido Santa Ana Hueytlalpan, para contextualizar la o las realidades que ahí se observan desde los distintos actores sociales inmersos en la dinámica de la vida cotidiana. En esta fase también se hizo la revisión bibliográfica que sirviera como soporte para la construcción del marco metodológico, para luego proceder al diseño de la ruta crítica, selección de métodos, técnicas, herramientas e instrumentos de recolección y de análisis.

La segunda denominada *estrategia de vinculación comunitaria y de campo*, a través de la cual se tuvo una inmersión inicial en el campo, con el C. Ángel Castro Tienda, entonces presidente del Comisariado Ejidal del núcleo agrario de Santa Ana Hueytlalpan, quien posteriormente hizo la presentación ante la asamblea general de ejidatarios durante una reunión, con el propósito de dar asesoría y acompañamiento jurídico al núcleo, actividad que comenzó en dos mil dieciocho y continúa. Y en la cual también se utilizaron las técnicas de observación directa, charla informal, observación participante, entrevista no estructurada y semiestructurada en la modalidad de individual y grupos focales a integrantes del ejido, procediendo con ellos/as el análisis sus testimonios para identificar problemáticas que identificaron. La **tercera** para el *procesamiento y análisis de resultados*, se emplearon técnicas de registro y clasificación de datos, y las técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y síntesis, respectivamente.

Resultados y discusión

Contexto: Caracterización del área de estudio: ejido Santa Ana Hueytlalpan, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México. Hidalgo es una de las 32 entidades que integran los Estados Unidos Mexicanos. Se ubica en la zona centro del país, colinda con los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí (*Ver mapas 1 y 2*). Cuenta con cerca de 2 858,359 habitantes, de los cuales un 1 489,334 son mujeres y 1 369,025 son hombres, ocupando el lugar 17 a nivel nacional por su número de habitantes (INEGI, 2015). Se conforma de 84 municipios, uno de los más importantes por su ubicación geopolítica y económica es Tulancingo de Bravo.



Mapa 1. Ubicación del estado de Hidalgo, en los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente: Registro Agrario Nacional (SRA, 2012)

A 46 kilómetros de Pachuca de Soto, capital del estado, Tulancingo; colinda con los municipios de: Acatlán, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan, Metepec y Acaxochitlán (*ver mapa 2 y mapa 4*) (H. Ayuntamiento de Tulancingo, 2016), a una altura que oscila entre los 2200 y 2400 msnm (metros sobre el nivel del mar), con una superficie total de 217.16 kilómetros cuadrados, que representa el 1.4% del total de la superficie territorial del Estado de Hidalgo (INAFED, 2015) donde en el pasado predominó el bosque templado. Tulancingo cuenta con una población de 161,069 habitantes (INEGI, 2015).

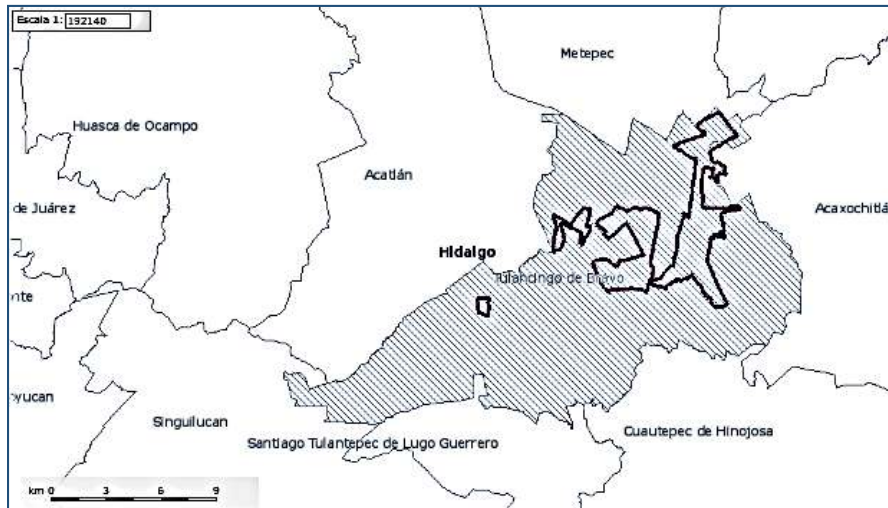


Mapa 2. Localización de Tulancingo, en el estado de Hidalgo.
Fuente: (SRA, 2012)



Mapa 3. Superficie ejidal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Fuente: (SRA, 2012)

El ejido Santa Ana Hueytlalpan es uno de los 15 núcleos agrarios reconocidos legal y registralmente (Santa María Asunción, Tulancingo, San Nicolás Cebolletas, Aocol, Huapalcalco, Ahuehuetitla, Mimila, Jaltepec, Zapotlán de Allende, El Paraíso, La Lagunilla, Laguna del Cerrito, Ojo de Agua, Santiago Caltengo y Santa Ana Hueytlalpan) que pertenecen al municipio de Tulancingo de Bravo (*ver mapas 3 y 4*). Cuenta con una superficie aproximada de 2671.6 has. y su población es, a diferencia del resto de los ejidos mencionados, el único con población originaria ñuhü (otomí), lo que lo hace particular en su dinámica social y organizativa.



Mapa 4. Localización del ejido Santa Ana Hueytlalpan, municipio de Tulancingo.
Fuente: (SRA, 2012)

Se integra por tres polígonos o fracciones de extensiones de tierra, compuestos por área parcelada para fines agropecuarios, área de uso común y área de asentamiento humano (ver mapa 4). Tiene su origen histórico-jurídico con el decreto de dotación ejidal de fecha 25 de agosto de 1933, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) en fecha 27 de septiembre del mismo año, a través del cual se dotó a 332 capacitados de una superficie de 2,385 hectáreas, según documentos que obran en la carpeta básica del ejido (SEDATU-RAN, 2019).

De los 15 ejidos pertenecientes a Tulancingo (ver mapa 4), 11 recibieron ampliaciones de tierra, producto de las constantes solicitudes al Gobernador en turno y a la Comisión Agraria Mixta, a comienzos del siglo XX, concretándose tales repartos entre 1936 y 1962. En el caso del ejido Santa Ana Hueytlalpan, la primera ampliación se llevó a cabo jurídicamente en fecha 15 de marzo de 1961, y se publicó en el D.O.F. en fecha tres de abril del mismo año, beneficiando con una superficie de 213 hectáreas a 26 capacitados según documentos que obran en la carpeta básica del ejido (SEDATU-RAN, 2019). Sin embargo, con la entrada de los trabajos del PROCEDE al ejido, en noviembre de 2005, la superficie total que se certificó por dicho programa fue de 2,671.16 hectáreas, (S.R.A, 2013) y (SEDATU, 2019).

El ejido Santa Ana Hueytlalpan cuenta con 757 sujetos agrarios con calidad de ejidatarios/ ejidatarias según el padrón de ejidatarios más reciente (RAN, 2019), 291 posesionarios y 98 avecindados (S.R.A, 2013), lo que lo coloca como el núcleo agrario más grande del municipio Tulancingo. El órgano supremo del núcleo es la asamblea general de ejidatarios, con derecho de voz y voto, y cuentan con un órgano de



representación denominado Comisariado Ejidal, integrado por un/a presidente/a, un/a secretario/a y un/a tesorero/a, y con un órgano de vigilancia llamado *Consejo de Vigilancia*, conformado por un/a presidente/a, y dos secretarios/as (H. Congreso de la Unión, 1992).

Discusión teórica.

A continuación, se presentan algunos de los conceptos que se considera relevante analizar para comprender el problema de investigación, a partir de las cuales se puede dar sentido a la base teórica que explica la dinámica actual que persiste por lo general en los núcleos agrarios de México, sobre todo a partir de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional. Comenzando por el término de *propiedad*, sus *tipologías* y *características* son determinantes para la comprensión de las problemáticas que coexisten en los ejidos del siglo XXI en este país.

La palabra propiedad proviene del latín *proprietas-atís*, y hace alusión al pleno dominio sobre la cosa poseída, es un derecho que contiene tres el *jus utendi*, o derecho de uso; el *jus fruendi*, o derecho a recibir los frutos de la misma y; el *jus abutendi*, poder de disponer de la cosa hasta el extremo de poder destruirla o venderla.

A continuación, se enlista una serie de definiciones sobre la propiedad con el propósito de presentar los elementos básicos que son constantes entre ellas:

Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto (Rojina, 1981, págs. 78-79).

La propiedad es, según el artículo 17º, “un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa” (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789: 113)”. Es el derecho que tiene todo hombre de disfrutar y disponer a su voluntad de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria” (Terzi, 2006: 217). Por su parte John Locke, la señala como “un derecho natural sagrado, innato e inalienable, siendo el hombre dueño de su esfuerzo y de cualquier obra auténticamente suya”. Mientras que, para Rousseau “la propiedad privada provoca la diferencia entre débiles y poderosos” (Locke J. (1632-1704) y Rousseau J. (1712-1778) citados por Terzi, 2006: 217). De igual forma, Escriche



(1998) la define como “el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan, abarcando tanto el derecho en sí mismo llamado dominio y el objeto indirecto sobre el que recae ese derecho” (Escriche, 1998, pág. 578). Por otro lado, el Código Civil para el estado de Hidalgo (2018), establece que “el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”. Sin embargo, para efectos de este trabajo se retoma la definición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en virtud del alcance jurídico que tiene sobre derechos humanos y a la interpretación unificada del artículo 133 del mismo ordenamiento en la constitución mexicana.

Terzi (2006) explica la conexión que existe entre propiedad y libertad, pensando a la primera como una garantía de la libertad y de la dignidad humana, y por lo tanto la coloca como premisa contra la marginación y esclavitud, por lo tanto, se deben incluir como principios el trabajo, la justicia y la equidad. No se puede ni debe imaginar a una persona carente de los derechos fundamentales respectivos, es ahí donde se encuentra la justificación máxima de existencia del derecho a la propiedad, al mismo tiempo que se coloca al Estado como garante del pleno ejercicio de los principios generales del Derecho que al ser insertados en el cuerpo normativo nacional integran los derechos humanos, de tal modo que, para materializar este derecho, en México se han establecido modalidades de propiedad, ya que, en el país, la tenencia de la tierra es una cuestión compleja, que mezcla temas como “identidad nacional”, a través de variados modelos agrarios, durante las etapas de la historia, tales como la Colonia, la Independencia, la Reforma y la Revolucionaria. (Terzi, 2006, pág. 214)

El derecho sobre el territorio, ha sido estandarte de diversos movimientos armados, desde el periodo colonial hasta nuestros días. A pesar de ello, las constantes en todos estos momentos históricos han sido “la ausencia de distribución justa de la riqueza” y “la falta de consenso en la administración de los recursos de la Nación. Es así que el tema de la tenencia de la tierra ha pasado por varios procesos de configuración, sobre todo durante las reuniones del Congreso Constituyente de 1917, mientras se redactaba el artículo 27 constitucional de la siguiente forma:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada [...] La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público [...] se dictarán las medidas necesarias para el



fraccionamiento de los latifundios [...] Por tanto se confirman las dotaciones de terreno que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el Decreto de 6 de enero de 1915 (H. Congreso Constituyente de Querétaro, 1917)

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM señala que en México existen tres tipos de propiedad: privada, pública y social en el actual artículo 27; y a lo largo de toda la carta magna se va haciendo referencia en diversos artículos a esos conceptos, en los que se plantean la necesidad de compartir la directriz de procurar el desarrollo campo-ciudad, sin descuidar alguno de estos aspectos. La importancia del campo como fuente de insumos y de servicios ambientales no puede pasar a un segundo plano ante la vorágine de la urbe porque ello conllevaría colocar a la población en un nivel de dominación del capital bajo un perfil utilitarista del derecho de propiedad.

En lo que respecta a la propiedad privada, el sistema económico y político por el que un país se rige está determinado de manera directa por la asignación o distribución de los recursos con los que el territorio cuenta, de tal manera que en un modelo capitalista la propiedad debe ser predominantemente privada, en virtud de que se considera como una mercancía más que puede ser susceptible de comercialización o enajenación. El régimen de propiedad dará cuenta del modo de organización productiva de una sociedad. Por ello el sistema capitalista o neocapitalista parte de la premisa de que todo o casi todo puede ser valorado en términos monetarios y por lo tanto sustituible.

La “*propiedad privada*” se encuentra sometida a las limitaciones legales que conlleva el hecho de que “la Nación sea la dueña originaria del territorio mexicano, y por tanto pueda hacer uso de expropiaciones por casusa de utilidad pública o reactivas, en caso de la existencia de asentamientos irregulares” (Sandoval, 2010, págs. 122-124). La causa que motivó que la propiedad privada se volviera relativa fue la serie de dilapidaciones que el territorio mexicano sufrió durante el siglo XIX. En consecuencia, quedó sujeta a lo dispuesto en la carta magna, y demás disposiciones legales y de planeación del territorio.

En tanto, la “*propiedad pública*”, ante el crecimiento de las ciudades mexicanas durante el siglo XX y comienzos del XXI, las autoridades y sociedad civil han tomado decisiones que prevean cuestiones de ordenamiento del territorio y que eviten la pérdida de territorio mexicano. Una de ellas es la delimitación de la propiedad pública o “*res pública*” (cosas del pueblo) que tienen como finalidad brindar al habitante el disfrute y goce de determinados bienes, sin que pueda disponer de ellos de forma absoluta a través de la



enajenación, destrucción, etcétera, es decir, no es rival ni excluyente, puesto que permite que todos los individuos puedan usarlos sin detrimento del uso que otros puedan darles y a su vez debe contar con los accesos necesarios en el amplio sentido para tales efectos sin que segregue a algún sector de la sociedad, y nace como respuesta al desequilibrio social de otros tiempos, en los que la clase proletaria no contaba con lugares de esparcimiento o de interacción humana. Manuel González Oropeza (1984), define la propiedad pública como “el derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público que no son objeto de comercio en términos de la legislación civil”.

La última modalidad a la que nos vamos a referir y de la que se desprende el problema de investigación, es la “propiedad social”, que puede ser abordada desde dos acepciones, la primera en un sentido amplio como el derecho de la sociedad sobre la tierra, aguas y bosques, o bien en un sentido estricto como el derecho de determinados sectores de la sociedad, específicamente ejidatarios y comuneros, lo que implicaría un sesgo del término *social*. Y es así como surge el derecho social, derivado de los movimientos campesinos y obreros del siglo XIX y XX, principalmente. Y de él, comienza a emanar el reconocimiento de dos nuevos derechos, el laboral y el agrario; de este último se desprende la propiedad ejidal y comunal; en nuestro país, la propiedad social la constituyen las tierras, bosques y aguas otorgadas o dotadas a los núcleos agrarios producto de la revolución mexicana, conocido como *reparto agrario*, a través de expropiaciones presidenciales, cobrando relevancia lo que hoy se ha construido como *derecho agrario*, definido como el ordenamiento total de normas jurídicas que disciplina las relaciones que se constituyen en el ejercicio de la actividad agraria.

Para comprender el concepto de Derecho Agrario, es menester, partir del término *Agrario*, proveniente del latín *agrariu*, de *ager*, campo, es decir, todo lo relativo al campo; entonces se puede definir al *Derecho Agrario* como las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la propiedad rústica: agricultura, ganadería, silvicultura, aprovechamiento de aguas, crédito rural, seguros agrícolas, colonización y planificación agraria; o como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y las explotaciones de carácter agrícola. (Mendieta, 1981). En el Diccionario Jurídico Mexicano (UNAM, 1993), lo define como un ordenamiento jurídico regulador tanto de relaciones entre sujetos que intervienen en la actividad agraria, como de los problemas de la tenencia de la tierra, y diversas formas de la propiedad y actividad agraria. Este es



el derecho que rige al núcleo agrario de Santa Ana Hueytlalpan por cuanto hace a los aspectos ejidales.

Por otra parte, la palabra “ejido” proviene del vocablo latín *exitus*, que significa salida. Lo ejidal presupone a un grupo de personas con determinados derechos agrarios, y lo comunal indica a los integrantes de una comunidad que comparten derechos proindivisos o porcentualmente sobre bienes específicos, tal es el caso del *derecho sobre las tierras de uso común*; así mismo, rasgos culturales, políticos o identitarios en común, lo cual excluye al resto de la sociedad a su alrededor. Sin embargo, para efectos de esta investigación se considerará la propiedad social como sinónimo de tierra ejidal o comunal.

Es así como podemos llegar al abordaje de los aspectos generales del ejido en México a través del siglo XX y una vez finalizado el periodo revolucionario y para lograrlo es necesario mencionar que el artículo 27 de la C.P.E.U.M. es una de las aportaciones más valiosas que ha dado el constitucionalismo propio de comienzos del XX, cuyo sentido profundo fue darle vida a los derechos fundamentales reconocidos: *la libertad, la propiedad y la alimentación*, a través de los cuales se buscó fortalecer la soberanía e independencia nacional y gestar un clima de mayor igualdad y dignidad humana.

A finales de los años 40 se da el despegue de la industrialización en México, con el propósito de consolidarse a mediados del siglo XX, a través de un sector industrial más dinámico; sin embargo, esta meta aún no se cumple, debido a la inconsistencia de los modelos económicos eurocéntricos que han sido aplicados en México de forma indistinta a una realidad cuyas características son las de un país en vías de desarrollo. (Orive & Cordera, 1981, pág. 153). Durante este proceso denominado fase inicial de la reforma agraria, el fomento a la industrialización encabezó las prioridades del gobierno, teniendo como directriz el aumento de la producción agraria, provocando el desgaste de los suelos con vocación agrícola. *“Una década después, empezaron a madurar los rasgos de una relación orgánica típicamente capitalista entre la industria y la agricultura, época conocida como desarrollo extensivo del modo de producción capitalista”* (Moguel, *Historia de la cuestión agraria mexicana*, 1988, pág. 3).

A mediados del siglo XX, y luego de vivir los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de transición hacia la paz, el sector rural mantuvo sus demandas hacia el Estado como rector de la economía, a ello se le sumaron los reclamos laborales; sin embargo, el rumbo que tomó el país sometió tales exigencias a la prioridad de lograr



el bienestar social y crecimiento económico, aunque también se observaba la evidente importancia que para el gobierno tenía el realizar acuerdos con otros países, debido a las amenazas políticas y económicas de otros países, principalmente de las grandes potencias.

Se vivió una transformación en la forma de hacer política en el país, de manera que el sector primario de la economía sufrió un rezago como nunca antes en su historia, principalmente el agro y la minería, debido a que se dio especial impulso a la industria de la construcción y de la transformación, así como a la manufacturera. México optó por cerrar sus fronteras, situación que no pudo mantener por mucho tiempo ya que países, como Estados Unidos de Norteamérica, comenzaron a presionar con altas cuotas en las importaciones y bloqueos progresivos en algunos otros estados nacionales. Se buscaba un desarrollo a través de una economía basada en los productores nacionales. El campo mexicano comienza una etapa de decadencia y atraso en su tecnificación, obligando a ese sector a tomar decisiones trascendentales como el abandono de sus lugares de origen para emigrar a las urbes, dando comienzo al crecimiento exponencial de la Ciudad de México. De este modo, para finales de los años 60 y comienzos de los 70 se pudo observar el efecto negativo en el campo, puesto que dejó de ser el lugar de producción de materia prima para convertirse en tierra disponible para dotaciones, ampliaciones o creaciones de nuevos centros urbanos, bajo una visión antropocéntrica de consumo. En esta fase el desgaste del suelo hace que las parcelas ya no sean idóneas para la actividad agrícola, recibiendo el impacto del crecimiento de la población rural y la transición hacia lo urbano, se intensifica el flujo migratorio a la Ciudad de México principalmente. Surgen a su vez los procesos productivos industriales concatenados que requerían de mano de obra calificada, por lo cual los gobiernos comienzan a canalizar los recursos a los centros urbanos, pasando de una política agraria basada en el reparto de tierras y cumplimiento de los compromisos de la revolución, a una política cimentada en la urbe, con problemáticas y necesidades como la cobertura de vivienda, empleo, transporte, capacitación para el trabajo, seguridad, infraestructura y equipamiento. También es a partir de ese periodo que se sientan las bases de la economía y la política mexicana, entre una lucha de transiciones económicas y de explotación, de las que no siempre deja constancia la historia.

La falta de planeación nacional en términos económicos, políticos y sociales evidenció la decadencia del desarrollo compartido y la obsolescencia de un sistema centralizado frente a una sociedad con necesidades nuevas y hambrienta de participar en las



decisiones del país. Los problemas entre las clases productivas antagónicas por excelencia (campesinos-terratenientes) (obreros-patrones) y la brecha salarial entre norte y sur del país fue cada vez más notoria, ya que decisiones como las de los años 70 trajeron consecuencias desastrosas para el campo mexicano que hasta la fecha no han permitido un nuevo impulso al sector primario. Políticas como las del gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo sumergieron en el rezago a la agricultura de nuestro país, bajo la incompetividad y falta de tecnificación, generando que México perdiera su lugar en la economía mundial. Esta situación precaria para el campesino se agudizó años más tarde.

Como puede observarse, a lo largo de esas décadas la directriz fue la organización y lucha de los campesinos en el terreno productivo, surgiendo una nueva etapa de lucha ahora por la apropiación del ciclo productivo, la acumulación de capital, el control sobre los medios, la producción a gran escala además de la tecnificación y búsqueda de la optimización de los tiempos y movimientos (Moguel, Botey, & Hernández, 1992). Es relevante recordar que en 1971, es expedida la Ley Federal de Reforma Agraria “ante un escenario de campesinos sin tierra, víctimas de la desigual y mala distribución de la riqueza, un escenario de minifundistas” (Eckstein, Zaragoza, Ordoño, & Botey, 1979) que desde el punto de vista cuantitativo cumplió con éxito los propósitos. Pese a tal escenario las instituciones contenidas dentro de dicho ordenamiento aspiran a una constante evolución que no contradiga su naturaleza, siendo el “espíritu de la ley” el que el campesino y su familia cuente con un patrimonio ejidal que garantice asegure su subsistencia (Leyva, 2010, pág. 34). En tal contexto comenzaron a construirse las raíces del sistema capitalista, ante la influencia de las políticas de Milton Friedman, y el evidente desplome del sistema keynesiano en el que el Estado ejerce la mayor parte de las facultades económicas del país, principalmente las referentes a las políticas fiscales y monetarias que se oponían al libre mercado (Moguel, Historia de la cuestión agraria mexicana, 1988, pág. 4).

Ya para comienzos de los años 80’s la política económica de México había pasado de ser un sistema cerrado a uno abierto. Parte de la superficie rural había sido repartida, y los movimientos sociales, especialmente el campesino había cambiado de intereses, su objetivo se convirtió en una búsqueda de mejoras a su condición como productores y en los precios, obtención de apoyos al campo y colocación de los productos en el mercado de bienes, lo que deja de lado la lucha por una correcta distribución de la tierra, por lo que puede concluirse que el mismo campesinado instó por terminar con el reparto



agrario (Morett, 2001, págs. 12-14). En México estaba por gestarse una crisis económica a la que más tarde se incorporaría una oleada de inflaciones y devaluaciones de la moneda mexicana. México tuvo en pocos años una acelerada migración descontrolada y no planeada, generando problemas de asentamientos humanos irregulares, debida en parte a los procesos de industrialización y de transformación de los insumos, además de la falta de apoyo integral al sector agropecuario y la dependencia alimentaria que esto conllevaría. El reparto agrario trajo consigo problemas de tipo legal, como las controversias agrarias que siguen vigentes debido a que se usó como herramienta política y fue con la reforma de 1992 cuando se concluye de manera oficial la entrega de tierras. Sin embargo, la entrada de nuevos paradigmas como el de “modernidad” inacabada y demandas globales venidas de modelos económicos y políticos de otros países trajeron contradicciones postmodernas y brechas entre realidades continentales, que terminaron por alejar las soluciones para el campo mexicano. Fue así que desde inicios de los 80’s México fue sacudido por un proceso de inestabilidad económica. Entre las principales causas fue la compra de empresas por parte del Estado y la fluctuación del peso mexicano con un tipo de cambio que llegó a casi los ciento cincuenta pesos por dólar y repercutió en toda la cadena productiva del país. El sector más afectado fue el primario que acababa de pasar por serias dificultades durante los años 60’s y 70’s, cuando se le rezagó a través de políticas públicas que dieron prioridad al sector secundario, encabezado por la industria de la construcción, lo que sumergió a los campesinos en un espiral descendente de miseria.

Antes de 1992, la tierra de propiedad social no se podía vender, embargar, ni traspasar a terceros, “pero cada ejidatario podía ceder sus derechos ejidales a un único sucesor.” (Maya, 2004, págs. 317-318). En ese tenor, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decide emitir recomendaciones a México como condición para intervenir en el rescate del país, entre las que destacan el adelgazamiento de las facultades del Estado para contrarrestar el excesivo gasto público que se había venido dando para sostener a los industriales nacionales. Otras medidas fueron el establecimiento de un control de tipo del cambio, la devaluación del peso frente al dólar y la renegociación de la deuda externa. La consecuencia principal para México al adherirse a las condicionantes del FMI fue pasar de un modelo económico Keynesiano, basado en el totalitarismo del Estado a un modelo de libre mercado cuyos cimientos fueron la apertura de la economía al mercado mundial ante las presiones globales.



Campos & López (2006) señala que hizo falta dar seguimiento y continuidad al proceso de estabilidad económica y social en el aspecto técnico-financiero de 1950 a 1990, ocasionando un cambio de política durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la reforma al artículo 27 constitucional. (Campos & López, 2006, págs. 37-38)

Serna hace referencia a una época crucial para la economía de México, los años 80. Señala que los distintos sectores sociales que conformaban la plantilla productiva del país, demandaban del gobierno una mejora en su calidad de vida, incluyendo salarios y capacidad para adquirir una vivienda, trabajo digno. Por cuanto hace a los productores agrícolas exigían un precio más justo por los cultivos comerciales que producían. El problema del “no reparto agrario de manera contundente” trajo consigo lo que Moguel llama “la apropiación del proceso productivo”. Los miembros de los núcleos agrarios ya para ese momento se encontraban igualmente integrados en organizaciones campesinas para hacer frente a la precaria situación que vivían y hacerse escuchar por el gobierno federal en turno. (Serna, 2012)

Es así como, en 1991, se impulsó la mayor de las reformas sociales, sobre el artículo 27 constitucional, argumentando la grave situación de pobreza rural del pueblo mexicano y la necesidad de dar certidumbre jurídica a los miembros de los núcleos agrarios. A partir de que el ejecutivo federal expuso la situación que vivía el agro mexicano se sentaron las bases para las formas de asociación de ejidatarios y comuneros con el objeto de lograr inversiones en el campo y mayor implementación de tecnología, lo que debía traducirse en mayor productividad y crecimiento de la economía. Debíó partirse de otorgar una mayor independencia de decisión y disponibilidad sobre la tierra ejidal, con el objetivo de hacer atractiva la introducción de capitales de otros actores económicos, ante la apertura comercial que estaba surgiendo conocida como “globalización” y una transformación radical del campo mexicano. Con ello se da origen a la introducción constitucional de la figura del *dominio pleno*, como modalidad para adquirir la propiedad individual y privada sobre parcelas con antecedente agrario.

Los objetivos de la Reforma Agraria dejaron de cumplirse y empezó a realizarse el sueño contrario al espíritu del movimiento.

Se pueden destacar dos vertientes que se han diferenciado en su posición frente a la política agraria en los últimos regímenes presidenciales y también en cuanto a sus métodos de acción: una que ha asumido históricamente los vaivenes de la política agraria



y, otra, que la ha puesto en cuestión por considerar que no ha atacado a fondo problemas básicos como la concentración agraria, la orientación de la producción agropecuaria y la falta de estímulos para su desarrollo (Canabal, 1988, citado en: Serna, 2012: 5)

“Por el resto del siglo XX, uno de los mayores desafíos de las poblaciones rurales de México consistió en ganar la independencia organizacional del Estado y autonomía de otras organizaciones política” (Bartra & Otero, 2008, pág. 404).

Las reformas del Artículo 27 en 1992 fueron un parte aguas importante para tratar de virar el timón de un barco que agonizaba en un último intento por permanecer a flote [...] en sus inicios, la Reforma Agraria (entendida como movimiento social) hizo fructificar los anhelos de millones de mexicanos y, a lo largo del tiempo [...] la solución de la problemática en el campo no se conseguirá con meros cambios legales ni con la compra indiscriminada de tierras [...] sino con la inyección de recursos para la modernización tecnológica en la producción y [...] establecimiento y fortalecimiento de mercados que absorban dicha producción. (Campos & López, 2006, págs. 37-38)

Sin embargo, Serna (2012), se opone a tal argumento puesto que señala que lejos de ser una solución la reforma, significó el desahucio del sector agrario al fragmentar su movimiento para después dar paso a una nueva forma de privatización de los bienes de la Nación y de las actividades económicas basándose en un modelo neoliberal.

Resultados Problemáticas identificadas

El reparto agrario no terminaba de darse como se había propuesto cuando ya se habían instaurado las nuevas ideas sobre la tierra social. De manera que en este trabajo se presentan algunos pendientes que, desde lo local visualiza la asamblea general de ejidatarios que tienen su origen en este proceso histórico que ha vivido el sector agropecuario y forestal, y que exige soluciones estructurales a problemas estructurales que se agudizaron con la entrada en vigor de la reforma constitucional de 1992 en materia agraria. El trabajo comenzó en diciembre de dos mil dieciocho y fue producto indirectamente del desarrollo de una propuesta como cuerpo académico en formación sobre estudios de población: territorio y género. gestoría y acompañamiento jurídico a la población del ejido Santa Ana Hueytlalpan, del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo en trámites ante el Registro Agrario Nacional y Tribunales en materia familiares, civil y agraria. Fue en el 2019 que las sesiones ordinarias de la asamblea general de ejidatarios, dicho órgano comenzó a identificar y describir, en mayor o menor medida, las problemáticas que viven como cuerpo colectivo y que dificultan la dinámica del



núcleo. A continuación, se mencionan aquellas que la asamblea ejidal de Santa Ana Hueytlalpan ha identificado en el último año: 1. No está depurado el padrón de ejidatarios y por lo tanto no se tiene certeza del total de sujetos que conforman la asamblea general, se ignora el total de derechosos fallecidos, así como quienes han enajenado sus derechos. 2. Se observa desconfianza entre los y las integrantes de la asamblea general de ejidatarios con relación a la rendición de cuentas y manejo de los recursos por parte de los órganos de representación y de vigilancia, sobre todo por la construcción de una cisterna que no se realizó; sin embargo, no ha trascendido de una discusión pública y democrática durante las sesiones. 3. otra de las problemáticas que más ha sido mencionada en las reuniones generales de este año ha sido la de tomar acciones sobre la “desensolvación” (desasolve) de las presas y jagüeyes ubicados en “San Alejo”, “La Ciénega”, “Otontepec” (cuya capacidad es de 16,000 metros cúbicos) y “El Llano”, principalmente, a través de solicitar el apoyo del gobierno estatal para gestionar el préstamo de maquinaria, ocupándose el ejido de aportar la mano de obra y el combustible diésel. Cabe mencionar que las presas a las que se refieren han sido afectadas en los últimos años por distintas eventualidades, ya sea por fenómenos naturales o por obras de infraestructura carretera, como es el caso de la presa San Alejo, por lo que se procedió a demandar a la empresa o insituciones que afectó dicho cuerpo de agua al mandarlo rellenar. 4. Se puso a discusión la regularización de predios lotificados sin la autorización de la asamblea o sin el debido trámite de dominio pleno y se expresó por parte de la asamblea que será responsabilidad del ejidatario que venda o transfiera su parcela, y un integrante los exhorta a que realicen el trámite de cambio de régimen ejidal a “pequeña propiedad” (propiedad privada). 5. Se presentó un ingeniero, quien es presidente del comité de regularización de predios en Bosques de Napateco (área comprendida dentro del ejido Santa Ana Hueytlalpan) solicitando la aprobación para la regularización de predios y la asamblea propone que se fije una postura de cuánto van a aportar de cooperación de cada predio. 6. La falta de rendición de cuentas de las cuotas obtenidas por la Asociación de Padres de Familia de la escuela ejidal. 7.

Se expuso que una persona vendió a otra una parcela perteneciente al ejido sin ser Él el titular de la misma y ahora el comprador solicita regularización de su trámite y de sus documentos. 8. Una mujer ejidataria de la tercera edad compareció ante la asamblea para manifestar que tiene su casa ubicada sobre el camino interparcelario y cuando se realizaron los levantamientos topográficos del PROCEDE no se le expidieron los documentos para acreditar su propiedad, y su hija expresa que lleva toda su vida



viviendo ahí, por lo que se acordó emitirle una constancia de posesión. 9. Existe también un problema referente a la parcela escolar, ya que la Secretaría de Educación Pública por conducto de su personal a cargo de la institución educativa del plantel llevaron a cabo un trámite de cambio de nombre de la parcela escolar para denominarla “20 de noviembre”, sin consultar a la asamblea general de ejidatarios, además de que el comité de padres de familia no ha rendido cuentas tampoco al ejido sobre las ganancias derivadas de la renta, para fines agrícolas, de una fracción de la parcela escolar. 10. Otro problema que la asamblea identifica es el del camino de Napateco a la altura de la colonia Buenos Aires, donde se está realizando una afectación a tierra del ejido por invasión.

De igual manera se exponen los retos del ejido, siendo los principales: aprovechar las oportunidades que se están presentando en la actualidad sobre:

1. la reactivación de los almacenes CONASUPO, por lo que se llevó a cabo una reunión extraordinaria para atender el tema del mantenimiento a las bodegas, dándose amplia información acerca de que fue aprobado el recurso para habilitar las instalaciones (puertas, báscula), acopiar y vender su maíz a precio de garantía y contratar personal necesario (un velador, un ingeniero agrónomo para la asistencia técnica), por lo que sugieren que se haga el deslinde del área y se realice la obra; sin embargo, existen varios inconvenientes para lograr el acopio de maíz, ya que existen varias restricciones, destacando que sólo se admitirá maíz blanco, y que para poder vender en el centro de acopio el maíz, deberá asistir el titular de la parcela, pero en caso de las parcelas, cuyo titular ha fallecido y su familia sigue cultivándolas no se admitirá el producto, lo que puede propiciar el intermediarismo o “coyotaje” para la entrega en el centro de acopio a través del “préstamo de certificados parcelarios o de escrituras o títulos tratándose de la propiedad privada”.

2. La nueva tecnología que se está dando en comodato por parte del gobierno al ejido, consistente en un dron para fumigar y o aplicar agroquímicos, siempre y cuando los usuarios den una cooperación por hectárea de \$300.00 (trescientos pesos moneda nacional) para la “adquisición” o alquiler de un vehículo con características especiales para transportarlo y se reúnan por ocasión superficies no menores a 10 hectáreas para su uso. 3. Se presentó un actor externo al ejido para solicitar que se le dejara colocar una antena de internet dentro del núcleo agrario, la asamblea analizó la propuesta y finalmente le fue negado el permiso debido a la falta de beneficios colectivos al ejido. 4.



La termoeléctrica va a atravesar tierra ejidal y no se han realizado las indemnizaciones correspondientes.

Otros de los desafíos apremiantes que fueron manifestados son la resistencia y desconfianza sobre trámites vinculados al ejido (regularización de trámites inconclusos de ventas o herencias sobre derechos ejidales) o a actos o hechos jurídicos de tipo familiar (correcciones de nombres o apellidos en sus documentos). A eso se suma el proceso de conurbación que se vive dentro y alrededor del ejido, debido a su cercanía con la zona urbana del resto del municipio, lo que amenaza la permanencia del régimen ejidal, máxime con el acuerdo que la asamblea tomó en el año 2011, referente a adoptar el dominio pleno, según documentos que se tuvieron a la vista durante esta investigación. Con esto último se confirma lo que pronosticó Gardner (2003) “el fin del ejido a partir de la reforma”, ya que consideró que “esta incentivaría la privatización formal de tales superficies” (Gardner, 2003, pág. 55). Lo cual ya está pasando a partir del año 2011 en el ejido Santa Ana Hueytlalpan, como en la mayoría de los ejidos de Tulancingo (Flores, 2012).

La tierra, ancestralmente presenta una especial relación de carácter vital con la actividad del campo; la lucha por poseerla ha generado constantes movilizaciones de algunos sectores sociales, a ellas hay que sumar los fenómenos que día a día acontecen en el espacio rural, como lo es el proceso de urbanización vivido en las últimas décadas sobre las periferias de las ciudades mexicanas, cuyas formas de organización del territorio *“han pasado de ser ciudades insertas en un espacio agrícola a ciudades rodeadas por campo urbanizado para posteriormente configurarse en una única gran ciudad con algunas zonas de campo incorporadas en ella denominado urbanización difusa”* (Indovina, 1990, págs. 13-43).

En ese tenor, la reforma constitucional de 1992 ha venido a reforzar tal proceso, convirtiendo a la periferia urbana en el motivo de disputa entre quienes, según Aguado (2006), pretenden obtener “ganancias fáciles a corto plazo sobre aquellas parcelas cuyo régimen jurídico ha pasado de ejido a propiedad privada por medio del dominio pleno” (Aguado & Hernández, 2006, pág. 31). A lo anterior puede adherirse la excesiva normatividad jurídica sobre los sujetos agrarios y la falta de capacidad gubernamental para ordenar y planear sobre el territorio, como factores detonantes del crecimiento desordenado y proliferación de asentamientos humanos irregulares en tierras de origen ejidal. Una de las cuestiones más relevantes en materia de facultades dentro de un



territorio es el compartir un mismo espacio bajo distintas competencias, como es la coexistencia de núcleos ejidales (de competencia federal) y de territorio propiamente bajo la autoridad de ayuntamientos (de competencia municipal). En este sentido, cobra especial importancia lo que sucede en las principales ciudades del estado de Hidalgo, entre ellas Tulancingo de Bravo, debido a lo susceptible que es de encontrarse en tal realidad.

Conclusiones o reflexiones finales

Finalmente, se puede afirmar que a través de este trabajo se da cuenta de la situación actual que viven las y los integrantes del ejido Santa Ana Hueytlalpan, de los consensos, soluciones y procedimientos que corresponden a cada necesidad relacionada sus problemáticas, generando en el presente, procesos graduales que se traducirán en resultados benéficos en la regularización documental de sus derechos civiles y/o agrarios y facilitar la convivencia armoniosa entre los/as integrantes del núcleo y los distintos actores sociales internos y externos al ejido, cuidando siempre el bienestar colectivo. En el ejido de estudio existen distintas problemáticas que dificultan un adecuado ordenamiento, planeación y disposición del territorio ejidal en términos jurídicos y reales, derivados de enajenaciones de parcelas que han realizado algunos/as integrantes de la asamblea, y que se ha intensificado con la adopción de dominio pleno de 2011. Existe una tendencia a la desarticulación del ejido Santa Ana Hueytlalpan, tanto en la estructura de la asamblea general como en la superficie ejidal. Sin embargo, se puede observar un momento determinante o coyuntural en la reactivación del campo mexicano a escala nacional, pudiendo ser éste una oportunidad para revertir en alguna medida los efectos negativos de finales del siglo XX en cuanto a las políticas de no tecnificación y desarrollo integral del agro nacional. Es probable que las siguientes décadas sean determinantes para el futuro del sector campesino en México, en la medida en que los fueron las anteriores, aunque las condiciones actuales no son las mismas en cuestiones sociodemográficas, comercio internacional, calidad de los suelos y el agua, normatividad, etcétera. Existen problemas comunes en los núcleos agrario del país, y algunos específicos relacionados con la distancia espacial con centros urbanos, la geografía, los recursos naturales que albergan, elementos culturales e identitarios, entre otros aspectos, que pueden ser determinantes en el devenir de los ejidos. La población va en aumento en las ciudades y la demanda de reservas territoriales para usos de habitación será cada vez mayor, por eso se requiere de un diálogo directo e indemnizaciones justas con quienes lleguen a ser afectados en su



patrimonio por causa de utilidad pública o derivado de la planeación del territorio. Aunado a que El PROCEDE generó modificaciones en la manera de ordenar, planear y administrar el territorio, y de establecer los procesos, procedimientos institucionales que se deben agotar para transmitir válida y legalmente el patrimonio de quienes integran la asamblea general de ejidatarios y de los posesionarios, lo que puede representar limitaciones a las facultades del órgano supremo, la *asamblea general de ejidatarios*, generando una controversia por limitar la legitimación.

Notas

- ¹ Profesora de tiempo completo en la UICEH, correo: santuariomi@hotmail.com
² Profesora de tiempo completo en la UICEH, correo: adriadianagr9@gmail.com
³ Estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) correo: lourdes.rs.8187@gmail.com

Referencias bibliográficas

- Aguado, E., & Hernández, F. (2006). Tierra social y desarrollo urbano: experiencias y posibilidades. Estudios Agrarios. Recuperado el 3 de Febrero de 2019
- Bartra, A., & Otero, G. (2008). Movimientos indígenas campesinos en México: La lucha por la tierra, la autonomía y la democracia. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Recuperado el 12 de Mayo de 2019
- Campos, R., & López, C. (2006). Antinomias y rumbos de la reforma agraria. Estudios Agrarios, 37-38. Recuperado el 24 de Agosto de 2019
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2003). Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales em Países Independientes (Primera ed.). México D. F., México: CDI. Recuperado el 9 de Abril de 2019, de http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
- Eckstein, S., Zaragoza, J., Ordoño, S., & Botey, C. (1979). Los factores de la organización campesina. México D. F., México: Centro de Investigaciones Agrarias. Recuperado el 13 de Octubre de 2018
- Escriche, J. (1998). Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. México D. F., México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Recuperado el 20 de Marzo de 2018
- Flores, M. (2012). La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional y su impacto jurídico en la superficie parcelada de los ejidos de Tulancingo de Bravo, Hidalgo (1992-2012). Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Recuperado el 14 de Enero de 2019



- Flores, M., & Andrade, Y. (2017). El Procede y la Identidad colectiva en el ejido San Pablo, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo: proceso de construcción, problemáticas y dilemas en la investigación-acción. En A. L. Sociología, Memorias del XXXI Congreso Alas 2017 (pág. 658). Montevideo, Uruguay: ALAS. Recuperado el 10 de Abril de 2019, de <https://bit.ly/36JpHio>
- Flores, M., & Francisco, J. (2019). Implicaciones y desafíos en las sucesiones jurídicas agrarias y civiles. Estudio de caso: Ejido San Pablo, Tenango de Doria, Hidalgo, México. Tenango de Doria. Recuperado el 11 de Agosto de 2019
- Gardner, D. (2003). Tenencia de la tierra, movilidad y ejido: un caso en tierra caliente veracruzana (Vols. Enero-Junio). Ulúa, Veracruz, México. Recuperado el 13 de Mayo de 2019
- González, M. (1984). Propiedad Pública. Diccionario Jurídico Mexicano (Vol. I). México D. F., México: UNAM. Recuperado el 12 de Julio de 2018
- H. Ayuntamiento de Tulancingo. (2016). Presidencia Municipal de Tulancingo. Recuperado el 10 de Julio de 2019, de http://www.hidalgo.gob.mx/page/municipio/tulancingo_de_bravo
- H. Congreso de la Unión. (1992). Ley Agraria. México D. F., México. Recuperado el 5 de Mayo de 2019, de www.ordenjuridico.gob.mx
- H. XXXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. (2018). Código Civil para el Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Instituto de Estudios Legislativos. Recuperado el 20 de Marzo de 2019, de www.ordenjuridico.gob.mx
- H. Congreso Constituyente de Querétaro. (1917). Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. Querétaro, México. Recuperado el 12 de Mayo de 2019, de www.ordenjuridico.gob.mx
- INAFED. (2015). Instituto Nacional para el Federalismo. Recuperado el 1 de Octubre de 2019, de <https://bit.ly/2GHtXnZ>
- Indovina, F. (1990). La Ciudad Difusa. En La città diffusa. Venecia, Italia: DAEST.
- INEGI. (Octubre de 1996). Planos internos de los ejidos de Tulancingo. Recuperado el 10 de Octubre de 2018
- INEGI. (9 de Octubre de 2012). Planos Internos de Ejidos del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Planos internos. Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México. Recuperado el 10 de Octubre de 2018
- INEGI. (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 30 de Julio de 2019, de <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/hgo/poblacion/>



Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. (1993). Diccionario Jurídico Mexicano (Sexta ed.). México D. F., México: Porrúa. Recuperado el 5 de Abril de 2019

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 9 de Septiembre de 2017, de <https://bit.ly/36MFm0c>

Leyva, H. (Mayo-Agosto de 2010). Naturaleza jurídica de la parcela ejidal (unidad de dotación) es un derecho sustentable. *Revista de los Tribunales Agrarios, Segunda época, año III (39)(29)*. Recuperado el 12 de Mayo de 2019

Maya, L. (17 de Marzo de 2004). El PROCEDE y el PISO en la incorporación del suelo de propiedad social a usos urbanos en los municipios conurbados de la ZMCM. *Estudios Demográficos y Urbanos, 19(2)*, 327. Recuperado el 20 de Agosto de 2018

Mendieta, L. (1981). *Introducción al Estudio del Derecho Agrario (Cuarta ed.)*. México D. F., México: Porrúa. Recuperado el 24 de Mayo de 2018

Moguel, J. (1988). A manera de introducción: El desarrollo capitalista del sector agropecuario en el periodo 1950-1970. En J. Moguel, R. Robles, & B. Rubio, *Historia de la cuestión agraria mexicana. La época de oro y el principio de la crisis de la agricultura (Primera ed.)*. México D. F., México: Siglo XXI Editores. Recuperado el 11 de Junio de 2018

Moguel, J., Botey, C., & Hernández, L. (1992). *Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural. Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural (Primera ed.)*. México D. F., Moguel, J., Botey, C., & Hernández, L. (1992.). *Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural*. México: Siglo XXI/CEHAM. Recuperado el 11 de Octubre de 2018

Morett, J. (2001). *El ocaso de la reforma agraria mexicana (Primera ed.)*. Texcoco, Estado de México, México: Universidad Autónoma Chapingo. Recuperado el 12 de Febrero de 2018

Orive, A., & Cordera, R. (1981). *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*. México D.F., México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado el 10 de Mayo de 2018

Procuraduría Agraria. (1993-2007). *Carpetas básicas del PROCEDE. Actas de Asamblea, Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales*. Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México. Recuperado el 13 de Enero de 2019

RAN. (23 de Julio de 2019). Padrón de ejidatarios. 1-58. Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Recuperado el 10 de Agosto de 2019

Rojina, R. (1981). *Compendio de Derecho Civil (Vol. tomo II)*. México: Porrúa. (Vol. III). México D. F., México: Porrúa. Recuperado el 4 de Abril de 2018



S.R.A. (14 de Octubre de 2013). Padrón e Historial de Núcleos Agrarios PHINA. Recuperado el 14 de octubre de 2013, de Registro Agrario Nacional: <http://phina.ran.gob.mx/phina2/Sesiones>

Sandoval, C. (2010). El valor de la tierra rural bajo distintos escenarios. México, México: Centro de Estudios Investigación e Innovación Tecnológica de la Valuación para América Latina. Recuperado el 23 de Mayo de 2019

Secretaría de Gobernación. (1961). Decreto de dotación ejidal. Diario Oficial de la Federación.

Serna, A. (8 de Octubre de 2012). El movimiento campesino en México: una identidad fragmentada. México: Procuraduría Agraria. Recuperado el 10 de Abril de 2019, de <http://www.pa.gob.mx/publica/pa070404.htm>

SRA. (2003). www.ran.gob.mx. Obtenido de Registro Agrario Nacional: <http://www.sct.gob.mx/obrapublica/MarcoNormativo/3/3-3/3-3-5.pdf>

SRA. (31 de Julio de 2012). Secretaría de la Reforma Agraria. Recuperado el 20 de Noviembre de 2012, de Registro Agrario Nacional: Fuente: <https://bit.ly/3ltf3Ap>

SRA. (31 de Julio de 2012). Secretaría de la Reforma Agraria. Obtenido de Registro Agrario Nacional: <http://sig.ran.gob.mx/localidades/map.phtml>

Terzi, C. (2006). Los derechos de propiedad y la reforma agraria. Posgrado de Derecho de la UNAM, 2(3). Recuperado el 2 de Marzo de 2018

McAdam, D; Tarrow, S; TILLY, C. *Dynamics of Contention*. Nova York: Cambridge University Press, 2001.

Ministério do Meio Ambiente. "Lista de Municípios Prioritários da Amazônia Brasileira". Available at: <http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2017/09/mais-cidades-sao-adicionadas-a-lista-de-combate-ao-desmatamento-na-amazonia-legal>

NEE, V. The New Institutionalism in Economics and Sociology. *CSES Working Paper Series*, Paper #4. Nov./2003.

Niederle, P.; WESZ JR., W. *As novas ordens alimentares*. Porto Alegre: UFRGS, 2018.

North, D., C. *Structure and Change in Economic History*. New York: W. W Norton & Company, 1983.

Olson, M. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1965.

Schumpeter, J. *Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. New York: McGraw-Hill, 1939.

Scott, W., S. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests and Identities*. SAGE Publishing, 4th edition, 2014.



Silva, M.; Cotanda, F.; Pereira, M. Interpretación e ação coletiva: o 'enquadramento interpretativo' no estudo de movimentos sociais. *Revista de Sociologia e Política*, v. 25, p. 143-164, 2017.

Velho, O., G. *Capitalismo autoritário e campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento*. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009.

Wanderley, M, N, B. *As origens históricas do campesinato brasileiro*. XX Encontro Anual da ANPOCS. GT 17 – Processos Sociais Agrários. Caxambu, Minas Gerais, 1996.

Weber, M. *Economy and Society*. Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press, 1978.

Zhao, D. Theorizing the Role of Culture in Social Movements: Illustrated by Protests and Contentions in Modern China. *Social Movement Studies*, v. 9, n. 1, p. 33–50, 2010.



A “produção” do desenvolvimento sustentável na Amazônia Central: uma análise das estratégias de engajamento e enquadramento promovidas pelas ONGs em Apuí

Pedro Frizo¹
Paulo Niederle²

Resumo

Inúmeras organizações não-governamentais (ONGs) atuam na Amazônia brasileira na mobilização de recursos para viabilizar novos modelos de produção agropecuária. Os principais esforços voltam-se à redução do desmatamento por meio da construção de projetos agroflorestais alternativos à pecuária extensiva. Este artigo analisa as estratégias de engajamento adotadas por estas organizações “produtoras do desenvolvimento sustentável”. A pesquisa foi realizada em Apuí, um dos municípios que encabeçam a lista de municípios prioritários no combate ao desmatamento. Os resultados demonstram uma mudança nas estratégias das ONGs, as quais passaram de um foco eminentemente conservacionista, que encontrou resistência junto aos agricultores, para ações que, ao longo do tempo, se “culturalizaram” ao arranjo institucional local, bem como aos interesses materiais e existenciais dos atores locais – fatores que se atrelam, de maneira constitutiva, ao êxito na produção de engajamento e, por consequência, na construção de processos de trabalho “sustentáveis”.

Palavras-chave

Desenvolvimento sustentável; Amazônia; Habilidade social; Empreendedorismo institucional.

Introdução

A região amazônica abriga inúmeras iniciativas de desenvolvimento pautadas na promoção da “sustentabilidade”. Somente no ano de 2018, por exemplo, mais de 400 empreendimentos ribeirinhos amazônicos foram classificados como “negócios sociais sustentáveis”, ou seja, de cunho comunitário e com geração de renda a partir da preservação dos recursos naturais e florestais (Conexsus, 2018).

A “sustentabilidade” destes empreendimentos atrela-se, principalmente, à promoção de novos regimes de apropriação e exploração dos recursos naturais. Neste sentido, as organizações não-governamentais (ONGs) estão dentre os principais atores na promoção destes novos regimes. Subsidiadas por fundações filantrópicas, organismos



privados, recursos públicos e agências bilaterais e multilaterais, elas cumprem um papel fundamental para viabilizar novos arranjos produtivos e comerciais nos seus territórios de atuação. O objetivo deste artigo é analisar como as ONGs produzem o engajamento de outros atores sociais com vistas a viabilizar projetos de “desenvolvimento sustentável”. Junto com tal intento emerge uma questão sobre a própria noção de sustentabilidade que é produzida a partir destes processos de engajamento. A análise toma como pressuposto que as ONGs têm se revelado “atores sociais hábeis” para, no campo de disputas que caracteriza os espaços de produção do desenvolvimento sustentável na Amazônia, construir “enquadramentos” acerca dos problemas públicos (o desmatamento, por exemplo) e das soluções para os mesmos, e, a partir disso, engajar outros atores nas suas estratégias. Para tanto, o artigo ampara-se nas discussões contemporâneas do neoinstitucionalismo sociológico acerca da ação estratégica de atores sociais capazes de manejar recursos e discursos para produzir cooperação (Fligstein e McAdam, 2012).

A pesquisa foi realizada em 2017 no Projeto de Assentamento Dirigido Rio Juma (PA Juma), localizado no município de Apuí, no sul amazonense. Com pouco mais de 20 mil habitantes, o PA Juma foi instituído em 1982 e, na época, despontava como o maior assentamento rural de toda a América Latina, com mais de 670 mil hectares e com capacidade total de abrigar 7,5 mil famílias. A partir da sua criação, este assentamento presenciou um intenso processo de substituição de atividades agrícolas e de subsistência – tais como o cultivo de arroz, feijão, milho e mandioca – para a criação extensiva de gado de corte (Frizo e Niederle, 2018). Com a adoção deste padrão produtivo, o modelo de desenvolvimento rural adotado possui sua gênese não apenas nas escolhas dos próprios agricultores, mas também na oferta de crédito governamental subsidiado à pecuária, na ampla presença de atravessadores de gado de corte e na ação da extensão rural focada nesta atividade. Os impactos ambientais deste regime de produção logo se tornaram evidentes e Apuí se tornou o segundo município com a maior taxa de desmatamento no estado do Amazonas (Imazon, 2017), o que levou o Ministério do Meio Ambiente à incluí-lo na lista de municípios prioritários no combate ao desmatamento (MMA, 2017).

Foi em virtude do avanço dos processos de degradação ambiental advindos da pecuária extensiva que ONGs passaram a atuar no município a partir de 2008. O objetivo delas era implementar, segundo seus próprios termos, sistemas “sustentáveis de produção e comercialização agropecuária”, os quais deveriam associar geração de renda e a



“manutenção da floresta em pé” (ou seja, evitar o desmatamento para introdução de gado em modos extensivos). Para tanto, sete projetos foram desenvolvidos entre 2008 e 2017 (alguns dos quais continuam em execução), cujos graus de efetividade foram muito variáveis, o que pode ser notado, por exemplo, pela grande oscilação no número de “parceiros” – termo doravante utilizado para definir aqueles agricultores e pecuaristas que ocupam parcelas de terra do PA Juma – engajados com a “proposta ‘sustentável’”. Entre 2008 e 2016, o número de parceiros envolvidos nos projetos variou de 1,7% da população rural de Apuí para aproximadamente 25%, tendo a participação uma expansão significativa entre 2014 e 2016. Mais recentemente, em 2017, houve uma redução e o número retornou ao nível de 2013, cerca de 4%.

A expressiva variabilidade no número de parceiros envolvidos foi o primeiro indicador que nos levou a questionar sobre os fatores que afetam a capacidade de engajamento das ONGs. Como demonstraremos neste artigo, muitos destes fatores extrapolam as dinâmicas locais de engajamento, haja vista, por exemplo, as mudanças nas diferentes esferas políticas do país e a crise institucional e econômica que afetou a disponibilização de recursos nacionais e internacionais às ONGs. Não obstante, o resultado que mais chamou a atenção foi a mudança na estratégia de engajamento das organizações. Se a redução, em 2017, no número de parceiros envolvidos foi fortemente impactada pela crise no campo político-institucional, o movimento anterior de engajamento refletiu principalmente a ação das ONGs como empreendedores institucionais que inovaram nas estratégias de produção do desenvolvimento sustentável.

O artigo está estruturado em cinco seções. Na próxima, apresentamos o referencial teórico e conceitual da pesquisa. A partir daí, discorreremos brevemente sobre o contexto empírico. Em seguida, apresentamos um panorama das primeiras iniciativas mantidas pelas ONGs em Apuí, buscando ressaltar as dimensões atreladas à produção de engajamento. Uma vez feito isto, discutiremos os últimos projetos mantidos por essas organizações buscando entender em que medida estes diferem dos primeiros no que tange aos mecanismos de engajamento. Por fim, as considerações finais apontam as principais contribuições e limitações do estudo.

Ação estratégica, empreendedorismo institucional e a produção de engajamento à proposta sustentável

O conceito de “empreendedorismo” se tornou um mantra nos projetos sociais, inclusive naqueles que focalizam a produção do desenvolvimento sustentável. De modo geral,



ele privilegia um olhar para a agência individual na produção de novas tecnologias e processos de trabalho. Nas abordagens clássicas, a ação empreendedora é atribuída ao indivíduo capaz de orquestrar recursos humanos, físicos e tecnológicos para a estruturação de processos produtivos que tragam acréscimos de produtividade (Schumpeter, 1939). Na nova economia institucional, contudo, autores como North (1983) também passaram a destacar a importância do “empreendedor ideológico”, ou seja, daquele ator capaz de mobilizar não apenas recursos, mas ideias, discursos e símbolos capazes de fazer outros atores se engajarem em um projeto comum. Ao propor este conceito, North abriu caminho para pensar o empreendedor como um promotor de ações coletivas, e cuja lógica não se deve, como imaginava Olson (1965), apenas às expectativas individuais de ganhos utilitários.

Este conceito de “empreendedor ideológico” não reverberou na ciência econômica, e sequer foi utilizado por North em estudos empíricos ou teóricos (Frizo, 2018). Foi na sociologia e, mais especificamente, nas discussões do neoinstitucionalismo sociológico (Hall e Taylor, 2003; Nee, 2003), que a produção da ação coletiva por “atores hábeis” se tornou o centro de uma série de estudos teóricos e empíricos sobre “empreendedores institucionais” – atores que se empenham na construção de ações coletivas com vistas a reconfigurar a dinâmica dos “campos”, o que, segundo Neil Fligstein e Doug McAdam (2012), implica no manejo das regras, significados e identidades que definem as posições e hierarquias sociais.

Para Fligstein e McAdam (2012), empreendedores institucionais são atores “socialmente habilidosos” que manejam as instituições sociais para construir identidades e significados, o que, por sua vez, lhes permite interferir na construção dos “interesses existenciais” dos indivíduos. Na medida em que estes interesses existenciais

E não o interesse utilitário – são os principais mobilizadores da ação coletiva, produzir enquadramentos de identidades e significados – incluindo aquele de “sustentabilidade”

Torna-se o principal trabalho do empreendedor institucional com vistas a fazer outros atores cooperarem em torno do seu projeto. Por sua vez, sem nenhuma obrigatoriedade de engajarem-se, os atores participam de mobilizações coletivas se, e somente se, há uma imediata associação de seus propósitos com o conjunto de seus interesses individuais – sejam estes materiais, culturais, simbólicos ou políticos. Isso significa que, neste caso, não estamos diante de indivíduos utilitaristas, mas de atores estratégicos imersos em diferentes contextos sociais (Granovetter, 1985).



Esta perspectiva dialoga com o neoinstitucionalismo vigorante na sociologia das organizações, o qual compreende as rotinas, procedimentos, projetos, hábitos e práticas organizacionais como instâncias regidas não somente por uma racionalidade burocrática orientada a fins/ganhos (Weber, 1978), mas também “culturalizada” (Zhao, 2010), isto é, “impregnada” por regras, moralidades e valores do contexto social no qual se situam. Esta perspectiva situacionista, ou seja, de reiteração da crucialidade do “lugar de atuação” para a formação das linhas e procedimentos organizacionais, é essencial para compreendermos, em nosso estudo, como a ação empreendedora mobiliza instituições para legitimar socialmente a produção da sustentabilidade na Amazônia.

Enquanto produtor de engajamentos, o empreendedor institucional catalisa a crítica transformadora que subjaz, de maneira latente, em outros atores com interesses congêneres, e que, em geral, encontram-se atomizados em sua individualidade solitária e em seus espaços rotineiros. Para tanto, há um processo de “culturalização” dos discursos, ou seja, de ajuste das suas estratégias discursivas à realidade social na qual os atores estão imersos. A capacidade de reconfigurar um determinado campo social depende da habilidade do empreendedor institucional em congregar interesses existenciais desarticulados, manejando valores, crenças, interesses e expectativas em um processo de formação e veiculação de “enquadramentos interpretativos” (Silva, Cotanda e Pereira, 2017). Neste processo, o empreendedor institucional busca suscitar expectativas positivas entre os demais atores quanto às perspectivas futuras de efetivação dos seus interesses individuais caso se engajem no projeto coletivo. Entretanto, o que complica este trabalho é o fato de que estes atores também possuem habilidades reflexivas para interpretar o que está em jogo e denunciar os processos de enquadramento se julgarem contrários aos seus interesses.

Foi a partir deste arcabouço conceitual que procuramos compreender como as ONGs têm buscado estimular outros atores sociais a engajarem-se em projetos de “agropecuária sustentável” na Amazônia. Em termos metodológicos, a pesquisa consistiu em uma análise qualitativa cujo foco esteve voltado à produção discursiva da sustentabilidade – e, mais especificamente, de um tipo de sustentabilidade – como resposta à uma crise ecológica e econômica igualmente construída discursivamente para legitimar e impulsionar o processo de engajamento. Para tanto, coletamos dados a partir de entrevistas, análise documental e observações sistemáticas.³ Os dados qualitativos foram agrupados em 25 categorias construídas a partir de análise de conteúdo. Todas elas, com exceção da categoria



“concepções sobre sustentabilidade” e “concepções sobre “desenvolvimento”, foram criadas *a posteriori*, ou seja, a partir do conteúdo dos dados coletados em campo, manifestadas de maneira voluntária pelos entrevistados. A partir do conteúdo associado a cada categoria, buscou-se encontrar significações similares, padrões de frequência e de relevância à realidade social dos atores.

Desmatamento e pecuária extensiva: a construção do problema público

Historicamente, o desmatamento constitui uma das principais atividades econômicas do Brasil. Entre os três maiores biomas do Brasil (Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica), foi na Mata Atlântica que teve início o processo de ocupação colonial, fazendo desta região local onde a situação é mais crítica, uma vez que restam somente 12% de sua área original, em sua maioria distribuída em pequenas parcelas dispersas no território brasileiro (INPE, 2018; SOS Mata Atlântica, 2018). Já o Cerrado brasileiro, a “savana mais rica do mundo” (El País, 2018), considerado atualmente a principal área de produção agrícola do país, já perdeu cerca da metade da cobertura nativa (Silva, 2013), processo este impulsionado pelos vários programas do período militar e novamente acentuado pelas políticas para o agronegócio no período recente. No entanto, embora o ritmo de destruição do Cerrado atualmente supere a de todos os demais biomas, nas últimas décadas, quando se falou em desmatamento, os olhos voltaram-se para a Amazônia, que atualmente tem cerca de 20% de sua área de floresta desmatada (Prodes, 2017).

O avanço do desmatamento na Amazônia ocorre tanto para alimentar a indústria madeireira e mineral quanto para introduzir a pecuária e as lavouras de grãos. Os anos 2000 mostraram uma gradativa redução no ritmo desta prática, o que foi resultante do controle exercido pelos órgãos públicos, da reação de compradores internacionais às críticas dos movimentos ambientalistas e de consumidores, e também do trabalho ativo de organizações sociais para a construção de novos regimes de exploração dos recursos naturais (Carneiro, 2008). No entanto, no período mais recente, após 2012, o desmatamento voltou a crescer. Os estados que lideram a lista são Pará e Mato Grosso. Com 171 mil km² desmatados até o ano 2000, o Pará avançou para 262 mil km² em 2016 (extensão maior que a área total do estado de São Paulo). No mesmo período, o Mato Grosso passou de 150 para 214 mil km². A lista prossegue com Maranhão (100 mil km² em 2016), Rondônia (91 mil km²) e Amazonas (38 mil km²) (Prodes, 2018).

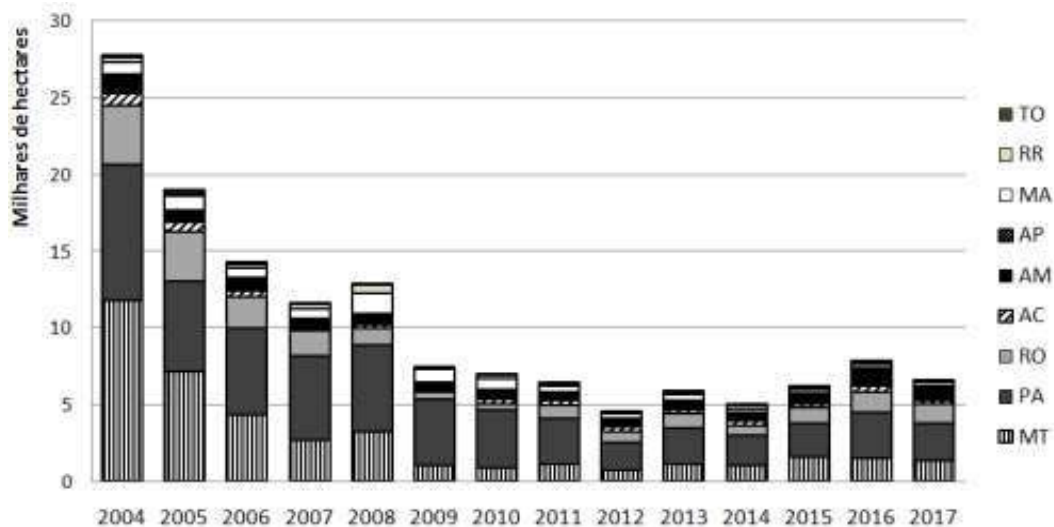


Figura 1 Áreas desmatadas (em milhares de ha) por Estado na Amazônia Legal entre 2004 e 2016.

Fonte: Niederle e Wesz Junior (2018).

A retomada do desmatamento após 2012 vincula-se, dentre outras coisas, à aprovação do novo Código Florestal (Lei n. 12.651 / 2012). Além de flexibilizar as normas, a nova regra anistiou as infrações ambientais praticadas antes de 22/06/2008, criando uma expectativa entre os desmatadores de que isto pode ocorrer novamente nos próximos anos (Horochovski et al., 2016). Com efeito, após embate judicial acerca da anistia prevista pelo Código Florestal, em 28 de fevereiro de 2018, por uma diferença de apenas um voto (6 contra 5), o Supremo Tribunal Federal aprovou o perdão de multas milionárias, a maioria delas aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) entre 2006 e 2008. Entre os desmatadores, 48 fazendeiros também respondem a processos por crimes contra o ambiente e dez já foram processados por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. Os dez maiores desmataram 98 mil hectares e deveriam pagar, conjuntamente, multas que alcançavam R\$ 166 milhões.

As áreas de controle prioritário (Figura 2) do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), coincidem com aquelas de avanço da fronteira agrícola na Amazônia, onde, ademais, também se revelam práticas espúrias e violentas de acesso à terra e aos recursos naturais (Niederle e Wesz Jr., 2018). No caso de Apuí, identificamos esta prática na ação de indivíduos e empresas que, primeiro, compram a terra dos parceiros, ou invadem áreas pertencentes a reservas florestais ou unidades de conservação; em



seguida, contratam mão de obra para “abrir” estas áreas, isto é, desmatá-las. Uma vez desmatadas, são suspensas quaisquer atividades, com o intuito de que a fiscalização não encontre ninguém nesses locais que possa ser responsabilizado pelo desmatamento. Após uma média de dois ou três anos, e de sucessivas incursões dos fiscais sem sucesso, aviões semeiam capim nestas terras. Por fim, uma vez germinado e desenvolvido o capinzal, coloca-se gado para a criação, concretizando o processo de ocupação dessas terras (Frizo, 2018).



Figura 2 - Áreas de monitoramento do PRODES na Amazônia Legal brasileira e municípios prioritários de combate ao desmatamento, com destaque para Apuí.

Fonte: INPE – PRODES (2018).

Foi em virtude do avanço deste tipo de prática que várias iniciativas passaram a ser desenvolvidas na região. Uma das mais conhecidas é a chamada “moratória da soja na Amazônia”, uma ação conjunta de ONGs, notoriamente do Greenpeace, e representantes das grandes empresas de grãos e exportadores de cereais e óleos vegetais, que visa frear o avanço da soja na Amazônia. Entre 2001 e 2006, cerca de 14% das áreas desmatadas eram ocupadas por soja e, após a moratória, assinada em 2006, o índice caiu para 5,6% (Kastens et al., 2017). No entanto, nos últimos onze anos a área de cultivo de soja saltou de 1,14 milhão de hectares na safra 2006/2007 para 4,48 milhões na safra de 2016/2017, o que pode estar associado à retomada do desflorestamento nos últimos anos, mas também à ocupação pela soja de áreas anteriormente destinadas à pecuária – empurrando a pecuária para as novas áreas de desmatamento.

Outro exemplo amplamente estudado de redução da derrubada de florestas é o Projeto Pecuária Verde, no qual se destaca o município de Paragominas (Pará), terceiro colocado na lista dos maiores desmatadores do país, com 44% de sua área total desmatada até 2016 (Carneiro e Assis, 2015). A partir de uma série de ações articuladas visando alterar as práticas produtivas na pecuária para permitir a recomposição das áreas degradadas,



o município de Paragominas foi o primeiro a sair da “Lista dos Municípios Amazônicos Prioritários para Ações de Prevenção, Monitoramento e Controle do Desmatamento Ilegal”. Enquanto a expansão da área desmatada neste município passou de 7,2 mil ha em 2000 para 8,6 mil ha em 2010, ela se manteve relativamente estável nos últimos anos, alcançando 8,8 mil ha em 2016. De acordo com Carneiro e Assis (2015), o caso de Paragominas revela uma “experiência parcial e conservadora de modernização ecológica”, a qual conseguiu frear o avanço do desmatamento por meio da adoção das principais restrições ambientais legais.

No entanto, a redução do desmatamento não foi generalizada na região. Pelo contrário, sob influência de dinâmicas econômicas e institucionais locais e globais, alguns municípios continuaram com um forte ritmo de expansão desta prática. Este é o caso já mencionado de Apuí (AM), onde a área total desmatada saltou de 1,7 mil ha em 2010 para 2,3 mil ha em 2016. A particularidade envolvendo o caso apuiense está na sua localização no estado do Amazonas: a unidade da federação que ainda abriga as maiores proporções não desmatadas da floresta amazônica. Apuí congrega importantes unidades de conservação com crescentes áreas de pastagem dentro do PA Juma. Para ampliar a criação animal em larga escala, fomentaram-se no assentamento as práticas de queimada, derrubada e abertura de áreas de floresta (Carrero e Fearnside, 2011). Em um primeiro momento, tais práticas liberaram uma enorme quantia de madeira, a qual era vendida pelos parceleiros às serrarias locais. Em um segundo momento, a abertura de novas áreas permitia a liberação de vastos contingentes de terra para a implementação de pastagens, dado que as pastagens anteriores já se encontravam em intenso processo de degradação devido à criação animal em modo extensivo (Carrero et al., 2014).

A utilização extensiva dos recursos naturais se configura como importante instituição cultural-cognitiva entre os parceleiros. Primeiramente, porque se constituiu ao longo do tempo como o modo de gerenciamento da propriedade que permite às famílias lograrem o seu sustento material, bem como se adaptar ao êxodo rural, à aquisição de vastas porções de terras não tituladas e à ausência de recursos para a produção agrícola. Além disso, o pecuarista, enquanto ocupação profissional, goza de amplo prestígio e status na sociedade apuiense: os maiores estabelecimentos comerciais pertencem a famílias de criadores de gado; o candidato vencedor das eleições de 2016 é um tradicional pecuarista na região, tendo sido apoiado por “atravessadores” (comerciantes) de gado de corte; por fim, o maior festival cultural de Apuí é o Rodeio de Touros, um dos maiores eventos do tipo em todo o Amazonas.



A dinâmica queimada-derrubada-abertura intensificou as taxas de desmatamento e de degradação ambiental no município de Apuí. Em face das consequências ambientais diretamente atreladas à existência de um regime “extensivo” de apropriação e exploração dos recursos naturais, ONGs passaram a atuar localmente a partir de 2008. O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM) e o World Wide Fund for Nature (WWF) integram uma frente “ambientalista” de ação no PA Juma em Apuí, cuja ação volta-se à redução do desmatamento e dos processos de degradação ambiental que dele derivam. Em conjunto, estas organizações já desenvolveram, desde 2008, sete projetos, os quais possuem múltiplas iniciativas de ação e intervenção com vistas a consolidar o que os seus funcionários entrevistados denominam sistemas “sustentáveis” de utilização dos recursos naturais.

Tais iniciativas desmembram-se em múltiplas linhas de ação, com vistas a engajar a população local – e externa ao PA Juma – na adoção de práticas “sustentáveis”. O engajamento de agentes públicos para a promoção da “sustentabilidade”, por exemplo, tem ocorrido, principalmente, no suporte a iniciativas de educação ambiental, na realização de oficinas técnicas e na estruturação de um viveiro de sementes e mudas de árvores nativas. Da mesma forma, os agentes financeiros – isto é, as grandes instituições filantrópicas, bilaterais, multilaterais ou organismos privados de doações atrelados a empresas privadas – atuam na concessão de recursos financeiros, geralmente à fundo perdido, para as duas ONGs conduzirem suas iniciativas locais. Por fim, os parceleiros atuam na promoção de práticas “sustentáveis” principalmente a partir da adoção, via a assessoria técnica concedida pelo IDESAM e pelo WWF, de sistemas produtivos agroflorestais e/ou silvipastoris. Em conjunto, as ONGs, os agentes públicos, financeiros e famílias parceleiras que conduzem essas práticas integram uma “coalizão ambientalista”, a qual visa promover um regime “sustentável” de apropriação e exploração dos recursos naturais no PA Juma em Apuí.

Projetos de desenvolvimento sustentável no PA Juma

A atuação do IDESAM e do WWF no município de Apuí começou no ano de 2008, quando a primeira organização deu início ao Projeto Apuí Mais Verde (PAMV). Este ano pode ser considerado um marco da “atuação ambientalista” no município. Desde então, um total de sete projetos diferentes foram propostos por ambas as organizações, contando com as mais variadas iniciativas, modelos de intervenção, parcerias e evidências de efetividade em relação à participação social de atores locais e externos (Quadro 1).



Projeto	ONG	Objetivo principal	Público Alvo	Principais apoiadores
Apuí Mais Verde (PAMV) 2009-2011	IDESA M	“Recuperar áreas degradadas, áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, por agricultores e pecuaristas do município de Apuí, recompondo a saúde do solo e das nascentes dos rios do município, além de promover o sequestro de carbono que contribui para combater o aquecimento global”	Parceiros com áreas degradadas, passíveis de penalidade ambiental	Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Prefeitura de Apuí, Fundação Avina
Semeando Sustentabilidade I, II e III (SSA) 2011-2017	IDESA M e WWF	“Fortalecer a gestão ambiental em Apuí e capacitar a população para o desenvolvimento de atividades produtivas mais sustentáveis”	Parceiros em geral e Secretaria Municipal do Meio Ambiente	Fundo Vale, Prefeitura de Apuí, Secretaria do Meio Ambiente, Sindicatos
Projeto de Microcrédito 2015- Presente	IDESA M	“Recuperar a área que está usando e não abrir novas áreas”	Parceiros criadores de gado de corte	Organismo filantrópico e religioso holandês
Café Agrofloresta I 2012- Presente	IDESA M	“Fomentar e fortalecer a cadeia do café agroflorestal em Apuí como alternativa sustentável para a geração de renda e crescimento social”	Parceiros produtores de café	Natura, IMAGLORA, Prefeitura de Apuí, Cooperativa 1, EMBRAPA, USP-ESALQ, INCRA, CATIE, INPA, Ouro Verde
Plano de Gestão dos Mosaicos (PGM) 2006-2010	WWF	“Ferramenta fundamental para assegurar a efetividade de implementação das Áreas Protegidas. Referência para os gestores, moradores, associações comunitárias e demais entidades governamentais e não governamentais que estão envolvidas nos processos de gestão dessas áreas”	Parques estaduais e nacionais de conservação	Prefeitura de Apuí, Governo do Estado do Amazonas e Governo Federal
Projeto de ATEs 2014-2017	IDESA M	“Implantar um modelo baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial”	Famílias Assentadas	INCRA

Quadro 1. Projetos coordenados pelas ONGs em Apuí. Fonte: Elaborado pelos autores com base em entrevistas e análise dos seguintes documentos: Projeto Apuí Mais Verde; Relatório de atividades do SSA I; Relatório Resultados & Perspectivas do Projeto Café Agroflorestal; Plano de Gestão do Mosaico de Unidades de Conservação do Apuí e Informativo Apuí Rural n. 4.

A partir dos seis projetos que coordenou, o IDESAM se tornou o ator central na proposição de um regime “sustentável” de apropriação e exploração dos recursos naturais. As iniciativas propostas por esta organização podem ser divididas em duas frentes. Em um primeiro momento, despontaram projetos essencialmente ambientalistas, voltados a monitorar a aplicação das principais normativas ambientais previstas no Código Florestal, tais como o respeito e recuperação de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e Áreas



de Reserva Legal (ARLs). Estão neste conjunto de projetos o PAMV e o PGM, os quais, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, focalizaram a elaboração de um plano de gestão para as 13 unidades de conservação localizadas dentro dos limites do município. Especificamente no que tange o PAMV, concebido em parceria com a Prefeitura de Apuí, com a Secretária Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e com a Fundação Avina – instituto filantrópico latino-americano –, o objetivo era recuperar áreas degradadas pelo uso excessivo dos recursos florestais, recuperando margens e nascentes de rios, bem como parte da mata original das propriedades rurais. A seleção dos parceiros era voluntária, ou seja, estes deveriam

procurar o IDESAM e demonstrar interesse em recuperar as áreas degradadas de suas respectivas propriedades.

Com este projeto esperava-se estruturar uma das primeiras iniciativas de *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) no Amazonas, a partir da qual os parceiros receberiam por seus “serviços ambientais”. No entanto, as iniciativas não previram apoio técnico à produção e às necessidades de reprodução material das famílias de agricultores. Na visão dos entrevistados, isto se constituiu como a principal razão para a ineficácia dos primeiros projetos em produzir o engajamento da população local. O PAMV, por exemplo, se estendeu de 2009 a 2011 e teve seu fim explicado pelos atores entrevistados nos seguintes termos: faltaram investidores interessados em pagar pelo serviço ambiental prestado pelos parceiros; e, em virtude disso, somente 70 famílias – 3,3% do total de famílias rurais locais – se cadastraram junto ao IDESAM para reflorestamento e recuperação ambiental por intermédio do projeto. Atualmente, os próprios funcionários do IDESAM reconhecem que o PAMV não conjugava propostas atreladas às necessidades mais iminentes das famílias parceiras, as quais em geral, vivem em condições de pobreza. Conforme elucidou um dos coordenadores desta organização:

A princípio, nossa atuação era restaurar. A gente fez um mapeamento de mais de 1.500 áreas de APP, com GPS e tudo, mas não saiu do papel, porque os produtores, como eles falam, ‘quando você tá no vermelho você não pensa no verde’. Em resumo: a nossa estratégia foi mudando aos poucos, porque se você chegar lá e só falar ‘vamos restaurar’, ninguém comprava a ideia. Então, a estratégia também foi mudando pra esse lado, partindo de um negócio mais purista de restauração e mitigação das mudanças climáticas pra envolver realmente cadeias produtivas (Técnico do IDESAM. Entrevista concedida em março de 2017).



As reduzidas taxas de engajamento dos parceiros aos projetos apontaram à necessidade das ONGs alterarem suas estratégias de ação, mobilizando novos recursos e discursos. Assim, em um segundo momento, emergiram projetos que mesclam abordagens e objetivos ambientais com propósitos econômicos e sociais. Nestes novos projetos (Café Agroflorestal, Semeando Sustentabilidade I, II e III, Projeto de Microcrédito e Projeto de ATES) despontam termos como “desenvolvimento”, “renda”, “produção sustentável”, “crescimento” e “cadeias produtivas”. O processo de “culturalização” dos procedimentos, rotinas, projetos, práticas e hábitos organizacionais das ONGs passou pela incorporação de dimensões institucionais que refletem a formação histórica do PA Juma em Apuí. Enquanto espaço concebido como parte integrante do projeto de colonização da Amazônia, a ocupação do PA Juma resumiu uma série de aspirações e expectativas por parte dos parceiros – protagonistas de um longo e extensivo movimento migratório principiado na década de 1980 – de consolidação do que Wanderley (1996) denomina “território familiar”: espaço rural de onde o indivíduo e sua família, amparados sobre a força de trabalho familiar e sobre o controle da terra juridicamente legitimado, sacam a sua própria subsistência, reproduzindo a estrutura familiar ao longo do tempo. A ampla maioria dos parceiros apuienses emigrou, inicialmente, dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e, em um segundo momento, já no fim da década de 1980 e início da década de 1990, do Espírito Santo, da Bahia e de Rondônia. Três razões motivaram a migração destas pessoas: o tamanho das famílias nas regiões de origem, o alto preço da terra nos locais de origem e o reduzido custo para acessá-la na nova fronteira agrícola. Somase a isso o projeto de colonização do governo militar brasileiro, o qual estava interessado em mitigar as pressões e conflitos fundiários nas regiões mais populosas do país e, ao mesmo tempo, povoar um território supostamente “desocupado” (Ianni, 1978). Contribuiu para este processo a construção imaginária da “fronteira”, um território “inventado” pelo Estado como espaço “selvagem” à espera da “civilização” (Velho, 2009). A “fronteira” foi compreendida e apropriada simbolicamente como a região de efetivação de oportunidades socioeconômicas – de “futuros imaginados”, diria Beckert (2016) – não possíveis de usufruto nas regiões de origem das famílias parceiras. O principal componente deste discurso era a oportunidade de fixação definitiva em um pedaço de terra, de onde os agricultores poderiam tirar o sustento para a reprodução da estrutura familiar.

No entanto, a fronteira se revelou um espaço social mais complexo e desafiador do que muitos imaginaram. No que tange à reprodução econômica dos migrantes, houve uma



enorme frustração de expectativas. Um dos principais problemas da produção agropecuária no município foi a gradativa queda na produtividade da terra ao longo do tempo e, com isso, a redução do rendimento das famílias assentadas. Com efeito, ao compararmos a renda agrícola média em 2006 e 2014, nota-se uma queda de quase 30%, de R\$ 18.245,25 para R\$ 12.934,31, em valores deflacionados (Frizo, 2018). Em virtude disso, com o passar do tempo, muitos parceiros começaram a deixar o assentamento em direção a outras áreas rurais ou em busca de empregos urbanos. No momento de realização da pesquisa, restavam pouco menos de 2 mil famílias no assentamento que deveria abrigar 7,5 mil. Além disso, entre todos os municípios da microrregião geográfica do Rio Madeira, Apuí foi o único que apresentou decréscimo de sua população rural entre 2000 e 2010. Para o parceiro, a não efetivação da fixação perene no “território familiar” representa um risco à sua identidade social de agricultor. Não impressiona, portanto, que nos seus discursos o termo “terra” foi amplamente dominante em todos os estratos de entrevistas relativos à categoria “Identidade Social” – foram 34 referências, vindas de 18 parceiros diferentes. A significação do parceiro acerca da sua condição e posição dentro do assentamento tem como referência a efemeridade da posse da terra, os escassos capitais econômicos, sociais, simbólicos e políticos/culturais que ele possui para lograr esta posse, e a reduzida capacidade institucional para fazer valer seus direitos de controlar em definitivo um pedaço de terra. Isto é visível no depoimento de um dos parceiros mais antigos do assentamento, para quem é a posse e a fixação definitiva na terra “que faz de um produtor rural um produtor rural”.

Em face desta situação, a capacidade dos “sistemas ‘sustentáveis’”, calcados na produção agroflorestal e/ou silvipastoril, de incrementar a produtividade da terra, passou a ser um dos componentes mais relevantes do discurso das ONGs para enquadrar a sustentabilidade e engajar os parceiros nos seus projetos. Ao invés da proteção da floresta, o discurso volta-se à manutenção do agricultor e da sua família na terra, o que implica na manutenção do que lhe é mais caro: a sua identidade.

Novas estratégias para a produção de engajamento

A mudança nas estratégias de produção de engajamento por parte das ONGs foi um processo de *learning-by-doing*, estimulado a partir das percepções dos técnicos acerca da efetividade dos projetos. Ela não ocorreu apenas com relação aos atores e recursos mobilizados, mas também nas práticas discursivas de enquadramentos interpretativos da “proposta sustentável”.



O Quadro 2 resume a evolução das instituições que amparam a ação das ONGs em Apuí e os seus respectivos enquadramentos mobilizados. Embora no que tange às instituições regulatórias há uma visível similaridade dos projetos mais recentes com os anteriores, nota-se um significativo câmbio nas instituições normativas e cognitivas. Enquanto o PAMV e o PGM privilegiavam abordagens atreladas a uma moral preservacionista, os projetos mais recentes conectam os valores “ecológicos” às dimensões mais práticas da subsistência familiar, as quais são constitutivas do interesse existencial do parceiro – em especial, com a questão da fixação definitiva na terra. Com efeito, a noção de “sustentabilidade” passou a ser fortemente atrelada à ideia de “sustento material”: para pouco mais de 40% dos 23 parceiros entrevistados, ao perguntarmos sobre o sentido da palavra “sustentabilidade”, a resposta esteve associada ao sustento econômico prolongado e perene a partir da apropriação dos recursos naturais, sem qualquer menção à sua preservação ambiental.

No meu entendimento é uma coisa que você... vai se sustentar daquilo. Entende? Como a andiroba [árvore nativa]... nós temos a andiroba e tamo começando a vender a andiroba, tirar o óleo. Nós não sabia viver do próprio sítio. Entendeu? Isso o que eu entendo. Sustentabilidade. Plantar e você viver daquilo (Parceiro, entrevista concedida em fevereiro de 2017).

A “culturalização” das instituições mobilizadas pelas ONGs também pode ser identificada no tipo de assistência técnica que elas passaram a fornecer. De um estágio marcado pela recuperação exclusiva de áreas de APP e ARL, as iniciativas voltaram-se para outras práticas, tais como: (a) parcerias estratégicas com associações rurais para a promoção de certificações orgânicas; (b) parcerias com órgãos públicos para selar acordos de cooperação técnica/produtiva; (c) parcerias com institutos filantrópicos e agentes financeiros para o recebimento de doações; (d) parceria com investidores para a viabilização de microcrédito a parceiros; (e) cooperação técnica com outras ONGs; (f) realização de viagens e excursões técnicas com parceiros; (g) implementação e expansão de unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais e silvipastoris; (h) assistência técnica para a produção orgânica; (i) assistência técnica para a certificação; (j) atuação direta em cadeias produtivas do café, da copaíba e do gado de corte, negociando e relacionando-se com compradores finais e atravessadores; (k) realização de oficinas, workshops e seminários para a capacitação técnica das famílias parceiras em atividades agrícolas, extrativistas e pecuárias.



Este conjunto de iniciativas não apenas focaliza mais diretamente nas relações de trabalho e produção, mas também no produto econômico que se auferem a partir destas relações. Em outras palavras, a natureza passa a ser manejada como componente das práticas econômicas, isto é, como capital imobilizado nos processos de trabalho rurais e não mais somente como matéria-prima à disposição para o consumo produtivo indefinido.



Projeto	Regulatórias			Normativas			Cognitivas		
	Parceiros	Agentes financeiros	Agentes públicos	Parceiros	Agentes financeiros	Agentes públicos	Parceiros	Agentes financeiros	Agentes públicos
Apuí Mais Verde (PAMV) 2008-2011	Não participam	Intangível	Antigo Código Florestal	Não participam	Intangível	Intangível	Não participam	Intangível	Intangível
Semeando Sustentabilidade I, II e III (SSA) 2011-2017	Embargos do IBAMA e conformação às regras ambientais	Antigo Código Florestal	Intangível	Responsabilidade em ser "ecologicamente correto"	Marketing verde	Intangível	Valores preservacionistas	Conhecimento científico/críticos para doações	Intangível
Projeto de Microcrédito 2015-Presente	Código Florestal (conformação à regra dos 20/80%) e embargos do IBAMA	Código Florestal	Intangível	Responsabilidade do patriarca para com a propriedade rural e com a subsistência familiar	Marketing verde	Intangível	Estrutura familiar e identidade rural	Conhecimento científico/críticos para doações	Intangível
Café Agroflorestal 2012-Presente	Código Florestal (conformação à regra dos 20/80%) e embargos do IBAMA	Não participam	Cumprimento às regras nacionais de ATES	Responsabilidade do patriarca para com a propriedade rural e com a subsistência familiar	Não participam	Responsabilidade em gerir colonização /assentamento	Estrutura familiar e identidade rural	Conhecimento científico/críticos para doações	Nenhum
Plano de Gestão dos Mosaicos (PGM) 2006-2010	Código Florestal (conformação à regra dos 20/80%) e embargos do IBAMA	Código Florestal	Intangível	Responsabilidade do patriarca para com a propriedade rural e com a subsistência familiar	Marketing verde	Intangível	Estrutura familiar e identidade rural	Conhecimento científico/críticos para doações	Intangível
Projeto de ATES 2014-2017	Código Florestal (conformação à regra dos 20/80%) e embargos do IBAMA	Código Florestal	Intangível	Responsabilidade do patriarca para com a propriedade rural e com a subsistência familiar	Intangível	Agentes públicos não participam	Estrutura familiar e identidade rural	Conhecimento científico/críticos para doações	Agentes públicos não participam

Quadro 2. Instituições regulatórias, normativas e culturais-cognitivas sustentadoras dos projetos e iniciativas das ONGs.
 Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados coletados em campo (2017).



É interessante notar que este processo de “transformação contábil” da natureza reforçou a dimensão “tecnocrática” da ação das ONGs. O PA Juma em Apuí foi parte integrante da apropriação simbólica da Amazônia como uma “fronteira em transição”: de um território “selvagem”, avesso à fixação e ao trabalho humano, para um território “civilizado”, construído de tal modo a partir das intervenções militares nas grandes obras de infraestrutura e nos assentamentos rurais. A visão do PA Juma como um território “vocado” à produção agropecuária fez parte do imaginário dos primeiros migrantes e se constituiu como apropriação simbólica continuamente desafiada diante das precariedades estruturais para a consolidação perene de um “território familiar” entre os parceiros apuienses. O enquadramento “tecnocientífico” promovido pelas ONGs passa, então, a dialogar diretamente com esta imagem compartilhada entre os atores locais sobre as dificuldades de permanência na terra. Em vista disso, as ONGs procuraram se posicionar como aptas a conduzir esta almejada “transição à modernidade”, apropriando-se, para tanto, da autoridade do discurso científico.

Concebido originalmente como uma organização de pesquisa científica, o IDESAM evoluiu gradativamente para a execução de projetos de intervenção social. No entanto, a pesquisa e a produção de conhecimento científico ainda ocupam papel central dentro de sua estrutura organizacional, haja vista a manutenção de um corpo de funcionários exclusivamente focado nestas atividades. Ademais, os relatórios, artigos e planos de avaliação redigidos pelo corpo de especialistas mantidos pelo IDESAM também são elucidativos do papel central da ciência na produção de engajamento entre as famílias parceleiras. As projeções de renda e de produtividade incluídas nestes documentos são comumente apresentadas nas reuniões (e nas próprias entrevistas), a fim de legitimar a implementação dos projetos. A viabilidade econômica dos sistemas é compreendida pelos agentes das ONGs como fator “objetivo” desvelado pelo conhecimento tecnocientífico, cabendo assim ao técnico do IDESAM, ao apresentar os projetos aos parceiros, demonstrar como a adoção dos sistemas agroflorestais e silvipastoris possuem um benefício irrevogável.

Eu acho que tem pouco conhecimento sobre isso [sistemas agroflorestais e silvipastoris]. Porque são pessoas que saíram das suas casas lá no Sul no Sudeste do país e vieram pra cá e foram largadas ali naquela área pelo Governo. Então a regra que eles tinha era...era chegar, ocupar a terra, desmatar e produzir. E eu não sei como isso mudou recentemente, mas eu acho que ainda na cabeça não tá muito...não tem muito conhecimento, assim, não conhece muito, sabe? Acho que não é nem porque não que



né, mas ainda porque não tem isso como verdade absoluta. (Técnico, entrevista concedida em janeiro de 2017).

Se, por um lado, os parceiros adotaram inercialmente as técnicas de produção agropecuária usualmente herdadas de seus antepassados, ou construídas ao longo de sua experiência prática de trabalho na agropecuária, as técnicas apresentadas pelas ONGs são

métodos de plantio, cultivo e criação desenvolvidos nas universidades e centros de pesquisa, cabendo aos técnicos atuarem como *brokers* (Lewis e Mosse, 2006) entre o mundo acadêmico e o mundo prático do parceiro. Já amplamente criticada na sociologia rural, esta visão difusionista do extensionista rural enquanto agente que “leva” tecnologias modernas esteve presente no discurso de todos os técnicos entrevistados. Isto explica a razão pela qual emergiram recorrentes manifestações sobre a atuação das ONGs como instâncias de reprodução de assimetrias de poder e conhecimento. Cada vez mais, a proposta sustentável das ONGs passou a incorporar o discurso da produtividade:

Hoje a gente tem um rebanho, ah não sei, de 400 mil e esses novos sistemas [silvipastoris]

conseguem triplicar em média: se o cara tem uma [cabeça de gado], ele consegue pôr três.

Hoje nós temos 400 mil, se eles conseguissem ter três nesse mesmo tamanho de área que se tem aberto hoje, a gente teria 1 milhão e 200 [cabeças de gado]. Ficaria muito mais aquecida a economia e o melhor de tudo: os caras tão sendo auto sustentável. (Técnico, entrevista concedida em março de 2017)

Os sistemas agroflorestais e silvipastoris garantem a fixação mais efetiva dos nutrientes no solo, a redução da dependência de inputs químicos como o calcário, a diminuição no ritmo de degradação das pastagens, o aumento da produtividade das plantações, e o acréscimo na qualidade do produto. Assim, longe de serem entendidos como exclusivamente provedores de serviços ambientais, estes sistemas são entendidos pela maioria dos atores entrevistados como capazes de prover “serviços econômicos através da conservação”, ou um “serviço ambiental economicizado”. Com efeito, ao passo que 45% dos agentes de ONGs entendem os sistemas agroflorestais e silvipastoris como sistemas cuja principal função é “aumentar a renda doméstica”, cerca de 65% dos parceiros entrevistados os significam como sistemas que “aumentam a produtividade



da terra”. Este padrão de enquadramento dos recursos naturais ilustra a mudança contábil que o componente florestal passa a ter dentro do sistema produtivo estruturado sob a lógica agroflorestal e/ou silvipastoril.

A compreensão econômica destes sistemas explica porque, ao analisarmos os significados das ações de “Assistência Técnica”, prevalecem junto aos entrevistados enquadramentos associados ao mundo material das famílias parceleiras. Enquanto a implementação de normativas ambientais não foi referenciada por nenhum entrevistado com relação ao papel da Assistência Técnica, outros enquadramentos que dão conta de capturar os “benefícios tecnológicos e econômicos” trazidos pelas iniciativas desenvolvidas pelas ONGs foram amplamente referidos (46% das referências categorizadas), com destaque para práticas como o empréstimo de máquinas e equipamentos, a concessão de adubos e a frequência das visitas técnicas para acompanhamento da produção. Logo em seguida, estão os benefícios identificados à “capitalização do parceleiro” (10% das referências), a qual se associa à “descomoditização da produção e incentivos a novos canais de escoamento” (23%).

Os projetos visam ainda agregar valor à produção agropecuária por meio da certificação orgânica e/ou da articulação de redes de consumidores que se dispõem a pagar um preço prêmio pelos produtos agroecológicos. Segundo esta estratégia, as iniciativas do IDESAM, por exemplo, visam ocupar um “nicho de mercado” dentro da cadeia produtiva do café, o que permite o pagamento de valores diferenciados pelas sacas produzidas pelas famílias parceleiras aderentes ao projeto Café Agroflorestal. Para tanto, tem-se realizado oficinas técnicas e reuniões mensais, bem como o financiamento de visitas técnicas de pesquisadores e acadêmicos para estruturar a Associação Ouro Verde de Produtores Rurais como organismo para atuar na avaliação participativa da conformidade da produção orgânica do café.

A fim de viabilizar o escoamento e comercialização dos grãos orgânicos e agroflorestais, o IDESAM dialoga diretamente com dois importantes atores da cadeia produtiva desta commodity: Laércio e Eliseu, os únicos atravessadores de café em Apuí. Representantes de uma “elite” econômica do município, ambos são alicerces fundamentais para a consolidação de um nicho de mercado para o café orgânico e agroflorestal. Para tanto, Laércio paga um sobrepreço de 30 reais para grãos de café produzidos em uma determinada faixa de “defeitos” e sob práticas orgânicas e agroflorestais, comercializando-os para Eliseu após o descascamento dos grãos. Por sua vez, este torra



e embala o produto em uma embalagem desenhada especificamente para este tipo de café, trazendo estampado o nome *Café Apuí Agroflorestal* e os logos do IDESAM e do Fundo Vale – principal financiador do projeto. Já o IDESAM auxilia na comercialização deste produto em centros urbanos como Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo, para isso, contratado um funcionário para trabalhar especificamente junto a estabelecimentos comerciais e feiras de produtos orgânicos. Acima de tudo, esta múltipla parceria entre organismos e indivíduos demonstra como a cooperação das ONGs com atravessadores – adaptando os projetos às suas regras e padrões de produção – permite mobilizar recursos e redes úteis para lograr o engajamento dos parceiros, tendo em vista que estes possuem maiores rendimentos com a integração na cadeia orgânica e agroflorestal.

Considerações finais

Mesmo a satisfação das necessidades materiais mais básicas do ser humano depende, em última instância, da existência de um trabalho social para assegurá-las. A sociologia revela-se, então, uma área chave para compreender os fenômenos econômicos, a fim de propiciar materiais para conhecer as motivações que levam as pessoas a cooperar, inclusive para a produção coletiva de mercadorias. Partindo deste pressuposto, entendemos que processos de desenvolvimento econômico, onde se presenciam profundas transformações nos processos de trabalho, longe de serem originados exclusivamente de choques exógenos à estrutura e organização social, constituem-se como processos que também encontram a sua força motriz no aspecto mais elementar da vida em sociedade: na interação social, instrumento pelo qual se cria e se reforça vínculos e redes sociais que permitem a transferência de uma série de recursos.

Neste sentido, no que tange à consolidação de laços de cooperação entre agentes estratégicos, um dos principais resultados obtidos neste estudo diz respeito à identificação de um processo de culturalização dos discursos e das ações das ONGs em face do contexto institucional que define a realidade sociohistórica dos parceiros apuienses. Ao longo do tempo, a proposta “sustentável” destas organizações migrou de um viés fortemente preservacionista, desconectado das necessidades materiais dos atores locais, e que falhou em propiciar a identificação mútua entre ONGs e parceiros, para uma ideia de “modernização ecológica”, a qual se coaduna aos interesses existenciais mais imediatos dos parceiros, bem como à imagem do PA Juma como um “território de transição”, uma fronteira ainda à espera da civilização, tal qual imaginado pelos governos militares nos anos 1960-70, e perpetuado no imaginário social local.



A adoção de técnicas agroflorestais e silvipastoris não foi mediada estritamente por uma razão utilitária, da mesma forma que não se fez produto de uma ação coercitiva – seja esta coerção os preços de mercado das mercadorias agrícolas e pecuárias, os quais impulsionam o parceleiro a reordenar seus fatores de produção a fim de aumentar cada vez mais a produtividade; seja a ação de organismos federais de controle do desmatamento, tal como o IBAMA. Ao contrário, a adoção das mencionadas técnicas se fez mediada por instituições morais e culturais, haja vista que a expectativa fundamental dos parceleiros era a manutenção de sua identidade social – i.e., a consolidação do “território familiar”. Enfim, este artigo demonstrou que o aumento da capacidade de engajamento das ONGs envolveu não apenas o manejo de recursos financeiros provenientes de financiamento público e privado para atender interesses utilitários, mas também, e centralmente, o re-enquadramento semântico dos projetos de desenvolvimento e, a partir disso, da própria noção de sustentabilidade.

Notas

¹ Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Economista pela Universidade de São Paulo (ESALQ-USP).

² Professor dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) e Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

³ As entrevistas foram realizadas nos municípios de Apuí e Manaus (capital do estado) entre os dias 27 de janeiro e 24 de março de 2017. No total, foram 45 entrevistas semiestruturadas com representantes e técnicos das ONGs, parceleiros, gestores públicos e comerciantes. As observações sistemáticas consistiram no acompanhamento de técnicos em atividades de extensão rural e de reuniões mensais de associações rurais de Apuí. Por sua vez, a análise documental deu-se a partir da seleção de 13 documentos produzidos pelas ONGs com vistas a divulgar seus projetos de desenvolvimento sustentável.

Referências

Beckert, J. *Imagined futures: fictional expectations and capitalist dynamics*. Cambridge: Harvard University, 2016.

Carneiro, M. Crítica social e responsabilização empresarial: análise das estratégias para a legitimação da produção siderúrgica na Amazônia Oriental. *Caderno CRH*, v. 21, p. 323-336, 2008.



- Carneiro, M.; Assis, W. O controle do desmatamento na Amazônia como um processo de modernização ecológica: a experiência do Projeto Município Verde. *Revista Pós Ciências Sociais*, v. 12, p. 53, 2015.
- Fligstein, N. Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions. *American Sociological Review*, v. 61, n. 4, p. 656-673, ago./1996.
- Fligstein, N.; McAdam, D. *A Theory of Fields*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Frizo, P. *Os fundamentos institucionais para o gerenciamento dos bens comuns na Amazônia Central*. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Porto Alegre: UFRGS, 2018.
- Governo do Estado do Amazonas. *Plano de Gestão do Mosaico de Unidades de Conservação do Apuí*. Série Técnica Planos de Gestão, vol. I e II, Apuí – Amazonas, março de 2010.
- Granovetter, M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, v. 9, n. 3, p. 481-510, 1985.
- Hall, P.A.; Taylor, R.C.R. As Três Versões do Neo-Institucionalismo. *Lua Nova*, n. 58, p. 193-224, 2003.
- Ianni, O. *Colonização e Contra-Reforma Agrária na Amazônia*. Petrópolis: Editora Vozes, 1979.
- Instituto Conexsus. *Mapa de Negócios Comunitários Sustentáveis*. Disponível em: <http://desafioconexsus.org/mapa/>. Acesso em 10 de setembro de 2018.
- Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM). *Informativo Apuí Rural*, nº4 – março, 2016.
- Kastens, J. et al. *Soy moratorium impacts on soybean and deforestation dynamics in Mato Grosso, Brazil*. Plos One, 2017. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176168>
- Lewis, D.; Mosse, D. *Development Brokers and Translators: The Ethnography of Aid and Agencies*. Bloomfield, Connecticut: Kumarian Press Inc., 2006.
- McAdam, D; Tarrow, S; Tilly, C. *Dynamics of Contention*. Nova York: Cambridge University Press, 2001.
- Ministério do Meio Ambiente. “Lista de Municípios Prioritários da Amazônia Brasileira”. Available at: <https://bit.ly/34EJsVv>
- Nee, V. The New Institutionalism in Economics and Sociology. *CSES Working Paper Series*, Paper #4. Nov./2003.
- Niederle, P.; Wesz Jr., W. *As novas ordens alimentares*. Porto Alegre: UFRGS, 2018.
- North, D., C. *Structure and Change in Economic History*. New York: W. W Norton & Company, 1983.



Olson, M. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1965.

Schumpeter, J. *Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. New York: McGraw-Hill, 1939.

Scott, W., S. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests and Identities*. SAGE Publishing, 4th edition, 2014.

Silva, M.; Cotanda, F.; Pereira, M. Interpretação e ação coletiva: o 'enquadramento interpretativo' no estudo de movimentos sociais. *Revista de Sociologia e Política*, v. 25, p. 143-164, 2017.

Velho, O., G. *Capitalismo autoritário e campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento*. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009.

Wanderley, M, N, B. *As origens históricas do campesinato brasileiro*. XX Encontro Anual da ANPOCS. GT 17 – Processos Sociais Agrários. Caxambu, Minas Gerais, 1996.

Weber, M. *Economy and Society*. Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press, 1978.

Zhao, D. Theorizing the Role of Culture in Social Movements: Illustrated by Protests and Contentions in Modern China. *Social*



Atravessando as fronteiras de um mercado global: Trabalho e diferença na selva alta peruana

Ricardo Cruz

Resumo

As últimas décadas registraram uma forte expansão no cultivo de cafés certificados como “orgânicos” entre os cafeicultores peruanos, um movimento que tem implicado numa mudança nas suas formas de trabalho, e que vem sendo conduzido pelos funcionários das suas cooperativas. Este artigo procura olhar para essa transformação produtiva como um meio para entender como se dá a crença dos produtores nas ações e nas falas desses profissionais. Os primeiros costumam desconfiar dos trabalhadores não rurais, identificados com as atividades – técnicas ou administrativas- envolvidas na comercialização de seus grãos. O texto mostra que a confiança entre os produtores e os “técnicos” (que intermediam suas relações com as normas internacionais de produção orgânica e a perspectiva dos consumidores) é construída através de um processo pedagógico marcado por uma metamorfose de pontos de vista, no qual as suas diferenças – historicamente irredutíveis - são diluídas.

Palavras-chave

Trabalho; rural; mercados; tradução; Peru.

Abstract

The last decades have witnessed a strong expansion in the cultivation of certified “organic” coffees among Peruvian coffee growers, a movement that changed their ways of working, and that have being led by the employees of their cooperatives. This article seeks to look at this productive transformation as a means to understand the producers' belief in the actions and speeches of these professionals. The assumption is that the former usually distrust the non-rural workers, identified by them with the – technical or administrative - activities involved in the marketing of their grains. The text shows that the trust between producers and “technicians” (who intermediate their relations with international standards of organic production and the perspective of consumers) is built through a pedagogical process marked by a metamorphosis of points of view where the - historically irreducible - differences between them are diluted.



Key-words

Labor; rural; markets; translation; Peru.

Introdução

A agricultura “orgânica” é, por definição, um modelo de cultivo que se contrapõe ao uso de fertilizantes e pesticidas inorgânicos nas plantações. Trata-se de um ideal que enfatiza a utilização de materiais vistos como facilmente degradáveis no meio ambiente; uma maneira de “preservá-lo” de transformações mais radicais produzidas pela intervenção humana. Existem diversas normas, tanto públicas quanto privadas, que servem de parâmetro para que as chamadas “agências certificadoras” identifiquem uma mercadoria como oriunda de um cultivo orgânico. Cada uma dessas normas é representada por um selo que acompanha os produtos certificados por essas agências. Isso permite aos seus consumidores se depararem com um sistema que controla a relação dos agricultores com os insumos produzidos sinteticamente. As últimas décadas registraram uma expansão no cultivo de cafés certificados como orgânicos entre os cafeicultores da “selva alta” (onde se costuma plantar o grão no Peru). Esse movimento tem implicado numa mudança na forma de trabalho desses sujeitos, e vem sendo conduzido pelos funcionários das cooperativas nas quais estão inseridos.¹

Este texto procura olhar para essa transformação produtiva como um meio para entender como se dá a crença ou confiança dos produtores nas ações e nas falas dos profissionais responsáveis por adequar seus comportamentos às novas normas vigentes nos mercados agrícolas internacionais. Ele se soma a um esforço, dentro da antropologia, de pensar “a ideia de tradução e diferença num mundo contínuo” (Velho, 2007: 348).² Traduzir implicaria fazer sentido segundo a perspectiva de uma pessoa “como um todo” ou enquanto “um nódulo em umnexo de relações” (idem). É com essa ideia de tradução que podemos compreender os esforços dos funcionários das cooperativas em diluir as fronteiras historicamente construídas entre eles e os agricultores com quem se relacionam, haja vista a tradicional desconfiança dos cafeicultores diante dos trabalhadores não rurais, identificados com as diferentes atividades envolvidas na comercialização dos seus grãos. Do seu ponto de vista, esses trabalhadores costumam obter ganhos econômicos a partir do trabalho dos produtores na terra sem, contudo, oferecer uma contrapartida satisfatória.³ Diante desse pano de fundo, a mudança em suas lavouras - que envolve a legitimação do trabalho não agrícola dos funcionários das cooperativas - vem sendo conduzida por uma nova geração de membros das famílias



dos cafeicultores, através de um processo definido aqui como a “pedagogia da agricultura orgânica certificada”.

Ao longo do artigo procura-se abordar a relação que um grupo de cafeicultores pertencentes a uma das cooperativas localizadas na selva alta mantêm com os “técnicos” que trabalham nessa organização. Grande parte do trabalho realizado por estes últimos envolve o “controle” das práticas dos agricultores, tendo em vista as chamadas “inspeções” dos representantes das agências responsáveis pela certificação das plantações como orgânicas. Contudo, olhando de perto esse papel desempenhado pelos funcionários da cooperativa é possível perceber que os ensinamentos e indicações, dirigidos aos cafeicultores, possibilitam não apenas uma interiorização de normas em torno dessa forma de cultivo, mas também uma preocupação sistemática e cotidiana com a visão dos compradores e consumidores estrangeiros dos seus grãos. Trata-se, portanto, de um processo de racionalização do comportamento desses agricultores aparentemente afim com a emergência de um “sistema agroalimentar global orientado pela demanda”.⁴ Tendo como base uma pesquisa etnográfica realizada em meados de 2005, o objetivo do texto é refletir sobre a disposição dos cafeicultores para trabalhar dessa maneira sistematicamente pautada pelas perspectivas externas.

O que a análise revela é que a racionalização de conduta submetida a esses cafeicultores busca engendrar uma forma de trabalho subordinada não só à “demanda estrangeira”, mas, também, à sua própria realidade, para além de seus interesses em produzir mais cafés e vendê-los por um preço maior.⁵ Os técnicos procuram controlar as ações dos membros da cooperativa, assim como traduzir para eles os parâmetros ou referenciais utilizados nesse controle, em uma atitude que parece se valer de suas experiências como filhos de produtores do grão. Conforme será destacado mais à frente, a perspectiva dos produtores de café deve ser entendida como um ponto de vista onde se conjugariam os planos da razão e da sensibilidade – dimensões que estariam separadas no discurso de muitas pessoas de fora do universo cafeicultor que se relacionam com eles. A socialização desses técnicos, desde seus primeiros anos de vida, nesse universo social, os diferenciaria dessas pessoas de fora, em especial, de quem se apoiaria, basicamente, numa racionalidade econômica para convencer os cafeicultores a mudar suas práticas e/ou a direcionar sua produção para um canal comercial qualquer. O mercado de café, nos seus diferentes segmentos e com os seus distintos atores, é o espaço de encontro com a alteridade, por excelência, para esses produtores do grão. Sob o prisma desses agricultores, a diferença está no corpo: o “outro” é aquele que gozaria a vida à custa dos



seus suores e seus sacrifícios na lavoura; ele olharia o mundo a partir de um lugar apartado do dia a dia de quem trabalha na terra; sua insensibilidade perante os primeiros transpareceria nos seus gestos e modos de falar. A presença, cada vez maior, de filhos de cafeicultores em posições de mediação mercantil, que antes eram ocupadas, notadamente, segundo os produtores, por pessoas não identificadas com seus universos, tem feito com que o mercado de café deixe de se colocar para os agricultores como uma zona fronteira marcada por divisões intransponíveis e se apresente como um espaço caracterizado por situações em que “uma coisa gradualmente se transforma em outra, onde há indistinção, ambiguidade e incerteza” (Hannerz, 1997).

A legitimidade do trabalho dos técnicos das cooperativas caminha junto com a diluição das fronteiras entre eles e os cafeicultores. Os primeiros não seriam capazes de justificar seus ofícios com base apenas nas propriedades sociais que os diferem destes últimos sujeitos, como um papel de mediação comercial ou uma maior familiaridade com as novas regras dos mercados externos, por exemplo.⁶ São suas aptidões para *incorporar* ou *encarnar* o ponto de vista dos produtores rurais, isto é, torná-los presentes em suas falas, olhares e gestos - nos seus argumentos e sentimentos - que fazem com que seus prismas sejam encarados por eles como algo *possível* de ser interiorizado e suas ocupações reconhecidas como socialmente legítimas. Essa metamorfose de perspectivas (ou o que, com base em Geertz (2002), poderia se chamar de “diferenças mescladas”) parece estar no centro das ações dos técnicos que conduzem a construção social da disposição dos agricultores em trabalhar de uma maneira sistematicamente pautada pela perspectiva dos compradores e consumidores estrangeiros.⁷

A interiorização do ponto de vista da demanda externa

Em um plano maior, essa disposição pode envolver outros cafeicultores peruanos. Dados recentes indicam que 35% dos cafés exportados pelo país são destinados aos chamados mercados de cafés “especiais”, isto é, que demandam grãos considerados de “melhor qualidade” (com menos “impurezas”, como pedaços de gravetos e de terra, por exemplo, e com sabor mais valorizado) do que os normalmente comercializados no dito “mercado convencional” (onde circula a esmagadora maioria dos cafés e a preços, em geral, mais baixos).⁸ Há três tipos principais de cafés especiais: “solidários”, orgânicos e gourmet. No Peru, a maior parte deles é exportada através de cooperativas e não pelas empresas “privadas” que dominam o mercado convencional.



É comum que os cafeicultores da selva alta se refiram a um passado no qual a principal preocupação seria a de “produzir muito café”, fazendo uso intensivo de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Atualmente, “produzir um grão de qualidade” seria mais um de seus objetivos. Para esses agricultores, o significado de um “café de qualidade” está mais ligado as exigências do mercado em relação à “pureza” dos grãos e aos aspectos sensoriais do produto pronto para o consumo, e não tanto ao fato de sua produção ser certificada como orgânica. Contudo, como já ressaltado, o processo de “transição” de um produtor “convencional” para “orgânico” se coloca como uma forma de racionalizar sua conduta de modo a adequar o aumento da produção ao atendimento das demandas de compradores e consumidores estrangeiros. Portanto, dentre os produtores de café, o cafeicultor orgânico ocupa uma posição paradigmática, principalmente quando se trata da interiorização desse prisma externo.

De acordo com Laura Reynolds e John Wilkinson (2007), as últimas décadas têm sido marcadas por uma produção de comida industrializada feita cada vez mais com base numa segmentação dos mercados alimentícios (em “nichos”) e/ou numa diferenciação dos produtos comercializados nesses mercados. Trata-se, nas visões desses sociólogos, da passagem de um sistema global onde a competição entre os agentes econômicos se dava essencialmente através dos preços para outro onde eles também competem por meio da “qualidade” de seus produtos. Isso implicaria na introdução do chamado paradigma da “produção flexível” no mercado de alimentos (em substituição a um modelo “fordista” de controle mais centralizado). Tais mudanças seriam conduzidas pelos grandes grupos atacadistas do setor agroalimentar (anteriormente as indústrias alimentícias que orientariam a dinâmica desse setor). É dentro desse contexto atual que podemos entender a difusão dos “cafés especiais” e também o aprimoramento da qualidade dos “cafés convencionais”. Mas o que levaria um cafeicultor a se preocupar, de forma sistemática, com as exigências dos compradores ou consumidores estrangeiros?

Um caminho para se responder essa pergunta pode ser encontrado na literatura sociológica e antropológica que se debruça sobre um dos principais ramos ou segmentos dos mercados de cafés especiais: o “comércio justo” regulado pela Fair Trade Labelling Organizations International (FLO).⁹ Trabalhos como os de Reynolds, Murray & Wilkinson (2007), Jaffee (2007), Sick (2008) e Luetchford (2008), por exemplo, apontam para a necessidade das cooperativas de cafeicultores em adequar os grãos de seus associados às exigências dos consumidores do comércio justo, como é o caso de suas demandas por um produto não só orgânico, mas também “de qualidade”.¹⁰ A questão que deixam



em aberto é entender, nos seus pormenores, esse papel de mediação técnica desempenhado pelos funcionários dessas organizações.¹¹

Segundo esses estudiosos, o mercado convencional, responsável pelo comércio da maioria dos cafés ao redor do mundo, se caracteriza, desde o final da década de 1980, por períodos prolongados de preços reduzidos desses grãos, a ponto de ocasionarem uma “crise” na cafeicultura de “pequena escala”, aquela que congrega a maior parte de seus produtores.¹² Estaríamos diante de um cenário no qual o cultivo de café perdeu seu lugar de destaque como uma atividade privilegiada para a reprodução social de inúmeras famílias espalhadas pelo mundo. O comércio justo se colocaria como um entre outros modos de atenuar - e não, suplantar - suas “carências materiais” (caberia a cada uma das famílias cafeicultoras a escolha de uma “estratégia econômica” supostamente mais adequada às necessidades e às capacidades dos seus membros).

Em meados de 2005, me dirigi até o Peru, para dar início a pesquisa de doutorado sobre o comércio justo entre os seus produtores de café. Para além do que era definido como uma “crise” internacional nos preços desse grão, me deparei com problemas que agravavam ainda mais a situação vivida pelos cafeicultores, como, por exemplo, a fragmentação das propriedades rurais devido às suas transmissões através de herança, o envelhecimento das plantações e o esgotamento dos solos.

Naquele ano, depois de alguns dias acompanhando seu trabalho junto aos produtores orgânicos, um dos técnicos, aqui retratados, me disse que os últimos tendiam a se “desanimar” quando os valores do café no mercado interno eram superiores aos praticados internacionalmente e que serviam de referência no estabelecimento dos preços do café orgânico vendido através do comércio justo. Tal desânimo provinha da desvalorização dos grãos orgânicos em relação aqueles produzidos de forma convencional que, justamente, alimentavam esse mercado interno. A produção de café, em todo o país, decaiu bastante em 2005, principalmente por causa da seca, fazendo com que o preço do “café convencional” praticamente se equiparasse com o do “café orgânico”. As cooperativas tiveram que pagar aos “sócios” o mesmo valor que os comerciantes estavam oferecendo para os produtores locais. Ao contrário, ficariam sem a quantidade necessária de café para cumprir seus contratos com os compradores do comércio justo, apesar de seus associados serem obrigados a entregá-la quantidades pré-estipuladas do produto. Contudo, os produtores ainda se viam em desvantagem diante de suas vendas para as cooperativas, na medida em que os comerciantes



aceitavam os cafés com maior umidade e com mais “impurezas” ou “defeitos físicos”, o que fazia com que o peso dos grãos e, conseqüentemente, seu valor, aumentassem.¹³ “É todo um esforço para, no fim, acabar vendendo pelo mesmo preço disponível para quem não é certificado”, afirmou o técnico, ponderando, logo em seguida: “mas isso não acontece todos os anos”, ou seja, normalmente, os agricultores “orgânicos”, filiados às cooperativas, recebem um valor maior para seus cafés do que seus vizinhos não certificados.

Mas os cafeicultores não se comportavam como pessoas que agiam de acordo com valores de ordem exclusivamente econômica. Justo pelo contrário, eles também se viam como sujeitos que olhavam o mundo a partir de um lugar muito além das posições que ocupavam em suas relações mercantis. Durante os contatos que mantive com os associados de distintas cooperativas de produtores de café do país, percebi que era comum criticarem os profissionais graduados ou especialistas, que chamavam de “engenheiros” – independentemente do curso de Ensino Superior que estes últimos haviam participado. Segundo eles, esses profissionais vinham até as suas propriedades para apresentar uma série de propostas produtivas e que se mostravam inviáveis por questões não apenas econômicas, mas também temporais, morais, pedagógicas e afetivas. Muitos funcionários de suas organizações eram criticados pelo seu comportamento excessivamente cidadão, isto é, demasiadamente impessoal, frio, impaciente ou deselegante.

Por um lado, a transformação dos cafeicultores em “produtores orgânicos” tinha como pano de fundo a autoridade dos técnicos construída sobre seus títulos acadêmicos e o caráter científico, além de mercadológico, de suas práticas.¹⁴ Mas o seu trabalho podia também levar em conta o prisma mais amplo dos agricultores, que incluía não só as distintas temporalidades que orientavam as suas vidas, como formas de se comunicar ou de interagir com as pessoas, próprias do universo social desses sujeitos, adquiridas pelos técnicos através do convívio com eles, como era o caso, por exemplo, do uso da língua nativa (o quéchuá) ou de um comportamento qualquer que envolvia o estabelecimento de uma relação de confiança ou proximidade. Essas linguagens e sensibilidades se mostravam, muitas vezes, imprescindíveis para captar a atenção dos cafeicultores e os motivá-los em relação aos seus ensinamentos.

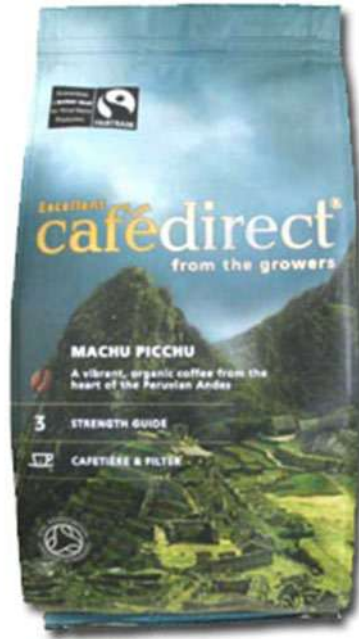
Cerca de 150.000 famílias se dedicavam, em 2005, à produção de café no Peru. Mais ou menos 90% delas tinha entre meio e cinco hectares de terra e praticamente todas



viviam nas chamadas zonas de selva alta (JNC, 2005). Os cafeicultores eram, em geral, migrantes oriundos dos Andes peruanos e seus filhos. A interiorização da perspectiva da demanda externa, por parte dos produtores orgânicos, pode ser pensada como um processo cuja eficácia nos mostra o quanto à adequação desses agentes às alterações mais gerais do capitalismo pressupõe um trabalho de mediação que leve em conta seus prismas. Como assinalado, esse processo se apoiava nas diferenças sociais entre os técnicos e os cafeicultores e na capacidade dos primeiros olharem o mundo da posição dos segundos. Isso implica não apenas em ver o trabalho rural (no caso, a agricultura de base familiar) como uma *forma* de trabalho e como uma *perspectiva* sobre a realidade, mas também em compreender a relação entre esses seus dois modos de expressão num contexto social onde ele igualmente se expressa enquanto uma *matriz de significados* dentro da qual o comércio agrícola aparece como uma atividade assentada na apropriação indevida dos valores produzidos através do cultivo da terra.

O contato com o campo

A selva alta foi surgindo, pela primeira vez, diante dos meus olhos, durante uma caminhada de quatro dias até Machu Picchu. Era julho de 2000, e eu havia partido de Cuzco, centro do Império Inca (1483 – 1533), hoje uma cidade de 300.000 habitantes, capital do departamento homônimo, localizada a 3.400 metros acima do nível do mar. Estava na companhia de um colega da faculdade e de outros visitantes estrangeiros que, assim como nós, seguiam um guia turístico por uma trilha de pedra construída pelos incas, segundo nos era informado. A exuberância da vegetação amazônica foi aos poucos se sobrepondo à – aparentemente - menos diversa e um tanto monótona flora característica da cordilheira andina. O ápice dessa transição ecológica se deu quando avistamos as imponentes ruínas de Machu Picchu cercadas de montes verdejantes. Mas o trajeto até esse ícone do turismo global não me chamou a atenção apenas pela indescritível beleza da selva alta. Fiquei igualmente fascinado pelos moradores desse espaço intermediário entre os Andes e a Amazônia. Não sabia quem eram eles, apenas tinha certeza de que estavam mais próximos do universo social andino do que dos povos tradicionalmente associados à floresta amazônica. O desejo de conhecê-los viria à tona quase cinco anos depois. Estava terminando de escrever minha dissertação de mestrado e buscava um grupo que pudesse retratar no doutorado.¹⁵ Foi então que me deparei com a seguinte imagem numa página eletrônica da internet:



Acabei decidindo que iria pesquisar os agricultores responsáveis pela produção dos grãos de café cultivados nos arredores de Machu Picchu - havia chegado até essa imagem através de uma breve investigação, na internet, sobre os produtos identificados com algum tipo de certificado do comércio justo. Assim, em julho de 2005, deixei o Brasil tendo apenas um destino certo no Peru: a XXII feira anual da *Central de Cooperativas Agrarias Cafeteleras* COCLA.¹⁶ Era através dessa feira que pretendia entrar em contato com cafeicultores do entorno de Machu Picchu. Ao longo do evento, transitei pelas barracas (ou *stands*) das então 23 cooperativas filiadas à COCLA, e onde expunham seus cafés, além de outros produtos de menor importância econômica. Procurei, circulando pela feira, me relacionar com os expositores - os funcionários e sócios das cooperativas. Ao visitar suas barracas, era confundido com os “gringos do comércio justo”, isto é, com algum dos - não mais que 10 - compradores estrangeiros de café certificado que também perambulavam por lá. Ao contrário deles, não havia sido convidado para o evento e, conseqüentemente, não era esperado por ninguém. De qualquer modo, o seu caráter público me pareceu ser uma via de acesso privilegiada para entrar em contato com um universo social que desconhecia completamente. No *stand* de uma cooperativa em particular, de nome Huadquiña, me chamaram a atenção determinadas amostras de café nele expostas, cada uma demarcada com o nome de seu produtor e o selo de certificação do produto. Sete amostras estampavam a certificação orgânica própria da união europeia e outra um selo de “sustentabilidade” de uma organização não governamental, todas concedidas por uma agência certificadora.¹⁷ Conversando com os expositores conheci Israel, o presidente da Cooperativa



Huadquiña, e que me convidou para visitar as dependências da organização. Alguns dias depois, descobri que tal cooperativa era justamente aquela responsável pela produção do café cuja embalagem havia despertado meu desejo inicial de realizar minhas pesquisas no Peru. Israel me apresentou ao “técnico” Juan Carlos que, por sua vez, me colocou em contato com outros membros daquela organização. Acabei me tornando o fotógrafo “oficial” da cooperativa durante um concurso em que um de seus associados alcançou o primeiro lugar pela qualidade de seus grãos de café. Dias depois, fui com Juan até Santa Teresa, capital de um distrito de mesmo nome, um dos nove distritos da província de La Convención, localizada no departamento de Cuzco.¹⁸ Fomos numa van margeando, durante algumas horas, as imponentes montanhas da selva alta cusquenha.

A Cooperativa Huadquiña

No meu segundo dia em Santa Teresa, me encontrei com Juan e fomos até a sede da Cooperativa Huadquiña. Chegando às dependências da organização conheci alguns de seus produtores e dirigentes (que também eram seus sócios). Ela tinha 420 associados. Eles plantavam o café em suas propriedades ou chacras (um termo de origem quéchua), e que tinham um tamanho médio de três hectares, com dois as menores e cinco as maiores – desde a reforma agrária realizada em La Convención, no ano de 1963, os latifúndios deixaram de fazer parte da paisagem local. Através da COCLA, eles vendiam seus cafés para as companhias (estrangeiras) Café Direct e Twin Tradind. Essa primeira organização teria como seu papel principal “conquistar mercados”, cabendo aos agricultores, auxiliados pelas cooperativas, o cuidado com a produção.

Na época da minha visita, três técnicos trabalhavam na Cooperativa Huadquiña e tinham a obrigação, segundo meus interlocutores, de “monitorar” os seus associados.¹⁹ Como exemplo desse monitoramento, citaram os chamados “cursos de capacitação”.²⁰ Quem não frequentava os cursos era punido financeiramente quando fosse receber o dinheiro da venda dos seus cafés, o mesmo acontecendo com aqueles que não participavam das assembleias da cooperativa. Mas os sócios não apresentariam muitos problemas em acatar as regras impostas pela cooperativa.

Discutindo com eles o cronograma das atividades junto aos associados, falaram das “inspeções internas” que antecederiam as “inspeções externas” conduzidas pelos inspetores das agências certificadoras.²¹ As primeiras eram feitas pelos técnicos de uma “cooperativa base” da COCLA e 15 a 20 sócios “capacitados” dessa mesma cooperativa.



Eles visitariam, em dois ou três dias, as chacras dos associados de outra cooperativa base. O mesmo se repetiria com as 23 cooperativas bases e, posteriormente, começariam as inspeções externas, que envolveriam em torno de 30% dos membros das cooperativas, escolhidos, ao acaso, pelos inspetores externos.²² Entre estes últimos inspetores, os do comércio justo seriam os mais exigentes; “eles pedem para não discriminarmos os sócios que produzem pouco, apesar deles também usarem da mesma forma a assistência técnica”, exemplificou um dos agricultores presentes.²³

O cronograma da Huadquiña girava em torno das inspeções externas.²⁴ Entretanto, o ponto de vista dos inspetores externos deveria ser interiorizado pelos sócios, notadamente, por quem tinha plantaçaõ certificada como orgânica ou se encontrava em transição (de “convencional” para “orgânico”). Nesse caso, é preciso se perguntar pelas mediações sociais envolvidas nos processos de interiorização dessa perspectiva externa. O trabalho dos técnicos, retratado nas próximas páginas, se colocou como um lugar privilegiado para se observar essas mediações. Pude perceber as consequências desse trabalho logo que deixei a sede da cooperativa e segui com o sócio Pablo até sua chacra. Ela tinha dois hectares e estava há quinze anos em suas mãos.²⁵ Enquanto conversávamos, ao longo de uma estrada ao lado de sua propriedade, ele recolhia os lixos deixados por pessoas que passaram por ali. O local por onde andávamos era extremamente agradável. Ele se mostrava bastante orgulhoso de sua “chacra orgânica” e, por isso, acabei não economizando nos elogios referentes à beleza da mesma.

Enquanto Pablo me contava sobre a necessidade do “sócio orgânico” providenciar uma “barreira” - de oito metros de distância - em relação a um “vizinho não orgânico”, um vizinho seu, sócio e orgânico, passou e nos cumprimentou. Quando esse senhor se afastou, Pablo me disse que “apesar dele não compreender as normas das agências certificadoras, ele era capaz de praticá-las”. Meu interlocutor parecia ter interiorizado essas normas e demonstrava estar adaptado a uma realidade onde o ponto de vista dos compradores de alimentos deveria fazer parte do cotidiano dos produtores desses bens. Nos próximos dias me encontraria com outros agricultores que, assim como ele, aparentavam preocupar-se quase que obsessivamente com a qualidade dos seus grãos. Não à toa que sua organização conquistou o primeiro lugar no concurso “Café de Ouro”, realizado durante a feira da COCLA, pouco tempo antes.²⁶



As “visitas de campo”

No meu terceiro dia em Santa Teresa, acordei de madrugada para encontrar Juan Carlos na cooperativa. Meu intuito era acompanhá-lo em suas “visitas de campo”, ou seja, nas visitas que iria fazer junto aos sócios da Huadquiña. Juan dividia um escritório com outros dois técnicos: Raul (ou Russo, seu apelido) e Mario. O último era o único, dos três, que era casado e não havia frequentado uma universidade, além de ser o mais velho. Também só ele era filho de agricultores associados à cooperativa.²⁷ Em outra ocasião, conversando com Juan sobre seu trabalho nessa organização, ele me disse que ele e Raul eram “engenheiros” (agrônomos) e Mario “apenas um técnico” (florestal).²⁸ Na realidade, Mário era formado em um “instituto”, uma instituição de Terceiro Grau, mas que não tinha o mesmo prestígio que uma faculdade ou universidade perante não só entre eles como entre os peruanos de um modo geral. De qualquer modo, entre os produtores ligados à cooperativa, os três eram comumente chamados de “engenheiros”, e de uma maneira que se colocava como uma espécie de reverência.²⁹

A sede da Huadquiña contava com um armazém onde havia a seguinte classificação escrita na parede: café orgânico, café sustentável (sostenible) e café planta.³⁰ Abaixo da inscrição “café orgânico”, havia uma segunda classificação, só que com relação à localidade de origem do café ou sua cuenca (bacia hidrográfica, em espanhol). O armazém também funcionava como uma sala de reunião. No escritório dos técnicos, destacavam-se as pastas de “registro de dados do agricultor”, com documentos como as “fichas de recomendações”, “fichas de visita de campo”, “contratos de compra e venda” e “compromissos de produção de café orgânico”. Era um imenso “mecanismo integrado de controle” feito pela burocracia da Huadquiña e que a preparava, juntos aos seus associados, para as visitas dos inspetores externos.

Acompanhei Juan, Raul e Mario, em suas visitas de campo, ao longo de três dias – nessas visitas eles preenchem muitos dos documentos que estavam no seu escritório. No primeiro dia, estive mais próximo de Raul, apesar do meu contato inicial com Juan. Junto de Raul, e em direção à chakra de um sócio, passamos em frente à propriedade de um agricultor que não era associado à Huadquiña. À sua volta, havia uma grande quantidade de lixo espalhado entre as árvores e arbustos, ao contrário da área que cercava a chakra do seu vizinho ligado à cooperativa, onde não havia praticamente nenhum lixo. Raul fez questão de observar que o café do produtor não associado era “heterogêneo demais”, decorrente de uma “colheita e beneficiamento tradicional” e não de uma “colheita seletiva e beneficiamento técnico”.³¹ Além disso, o café do primeiro era secado numa lona preta



de plástico próxima ao chão de terra e não numa laje de concreto, conforme a cooperativa exigia de seus sócios. De acordo com que um produtor havia me dito no dia anterior: “o mercado quer homogeneidade”. Ele traduzia em palavras o que podia ser observado nas visitas às chacras da região.

Chegando à propriedade de um sócio, Raul foi logo conversando, em quéchua, com a mulher do proprietário. Seu marido não se encontrava na chacra naquele momento – ele estava trabalhando no reparo da estrada logo abaixo, nos explicou a produtora. Seguindo adiante, entramos na área de outro “não sócio”; o lixo e o modo de secar não permitido pela cooperativa mais uma vez me chamaram a atenção. Nas chacras dos associados, pelas quais íamos passando, era possível perceber uma variedade impressionante de cultivos, incluindo árvores frutíferas, entre elas a da granadilla, uma fruta de sabor indescritível e que havia provado na feira da COCLA pelas mãos de Raul.³² Finalmente, chegamos à chacra do outro cafeicultor que planejáramos visitar nesse dia, mas que, em virtude do seu falecimento, estava sob a responsabilidade da sua viúva - Raul comentou comigo, logo no começo do seu diálogo, em quéchua, com a produtora: “primeiro as observações e conversas, depois as recomendações de acordo com as potencialidades da propriedade”. Essas recomendações, junto dos planos de produção e demais indicações, além de servirem para controlar as práticas dos agricultores (com base nas normas das certificadoras), podem ser pensados como elementos fundamentais para a criação e o reforço de um modo de se comportar adequado a uma nova realidade socioeconômica global em torno da produção de alimentos.

Tais recomendações, indicações e conselhos dados pelos técnicos aos produtores, ao levarem em conta as “potencialidades da propriedade”, acabavam aproximando suas perspectivas do que seria a realidade vivida pelos agricultores. Os técnicos, levando em conta seu conhecimento sobre essas potencialidades, no que incluía uma noção sobre a forma como os cafeicultores percebem o mundo ao seu redor, os incentivava a adotar uma nova disposição em relação à agricultura, assim como um treinador de futebol incitaria seus jogadores a seguir um novo estilo de jogo, ao incutir neles os meios de superação. Não sem razão que a construção social da autoridade de muitos dos atuais treinadores de futebol (no Brasil e em outros países) se dê com base nos seus estudos superiores e nas suas experiências como ex-jogadores enquanto uma característica que lhes ajudaria a transmitir (melhor) seus ensinamentos aos seus atletas.



A questão, portanto, é enxergar o trabalho de Raul e de seus colegas como um processo de longo prazo – realizado durante anos - cuja eficácia depende da autoridade que constroem perante os produtores, da legitimidade de suas práticas e do compartilhamento das representações acionadas em suas falas. Tudo isso faz com que os cafeicultores interiorizem as novas regras do campo econômico - e pressupõem um trabalho de mediação social e cultural, ao invés de um contato direto com as transformações nos mercados de café ou de outro produto.

O dia seguinte também foi dedicado às visitas de campo com os técnicos. Voltamos todos para Sahuayaco, o mesmo comitê em que havíamos estado anteriormente. O programado era encontrar os produtores de granadilla da região para uma reunião que, dado às suas ausências, não aconteceu. Os três técnicos então debateram quais sócios iriam visitar. Segui com Juan morro acima. A mais de dois mil metros de altura, medidos com o GPS da Huadquiña em suas mãos, deparamo-nos com as árvores de granadilla. Essa fruta era vendida aos comerciantes locais, mas a ideia da cooperativa era criar uma associação de produtores, tendo em vista “organizar um mercado do produto”, disse Juan. Esse projeto deveria começar no ano seguinte. Num terreno situado acima de dois mil e duzentos metros de altura, o cultivo de café não seria vantajoso, de acordo com o técnico, que iria nesse dia informar aos sócios que, apesar de, nessa altitude, a qualidade do grão ser excelente, a “produtividade dos cafezais era baixa”.

O primeiro sócio que visitamos era um “produtor orgânico”. Chegamos em sua propriedade no momento em que ele colhia suas granadillhas, com a ajuda de quatro a cinco pessoas contratadas para realizar essa tarefa. Juan lhe repassou as informações sobre um “sistema de irrigação” - o sócio se interessou pela sugestão, mas o custo do empreendimento logo o desencorajou. Frente a isso, Juan o aconselhou a adquirir apenas uma parte do sistema, “a título de experiência”. Tratava-se de uma, dentre outras de suas propostas, que tinha como objetivo o aprimoramento da produção orgânica daquele agricultor, ao mesmo tempo em que o familiarizava com um conjunto de normas difícil de ser transmitido, na sua sistematicidade, e de maneira “abstrata”, “teórica” ou “escolar”. Durante o almoço, ao qual fomos gentilmente convidados a compartilhar com sua família, ficou evidente a simetria existente entre o sócio e o técnico; ambos se sentiam à vontade e se reconheciam em torno de uma perspectiva comum que parecia remeter à uma socialização anterior no universo de agricultores familiares.³³



Seguimos morro acima, em direção à chakra de um tio desse sócio. A conversa de Juan com esse senhor já de idade avançada, aconteceu quase inteiramente em quéchua, intercalada com os comentários que eu recebia desse técnico, em espanhol. Durante a visita ao cafezal, ele sugeriu ao agricultor que plantasse mais árvores de granadilla: “dá mais dinheiro”, conclui o técnico, ainda observando: “a qualidade do café é boa, mas a produção é pequena nessa altura”. No final da visita, Juan repassou ao sócio as suas recomendações, entre as quais incluíam: (1) “poda seletiva e poda total nas plantas pré-determinadas”, (2) “barreiras naturais”, (3) “composto orgânico no adubo” e (4) “melhor limpeza das instalações” (os sócios tinham que cumprir com sete tarefas indicadas pelos técnicos). Tratavam-se de tarefas que se mostravam ao alcance do produtor e que eram transmitidas com uma extrema delicadeza e respeito.

Pude conversar bastante com Jaime, um sujeito de 37 anos que se identificou como um técnico, mas que não era considerado como tal pelos outros três (eles o viam apenas como um sócio da Huadquiña). Ele realizava visitas de campo e administrava cursos para os associados, mas, apesar de trabalhar no local como os demais, não tinha mesa no escritório. Era como uma exceção que confirmava a regra, no que diz respeito às propriedades socialmente reconhecidas dos técnicos: como não cursou o Terceiro Grau, revelou ter aprendido o que sabia na prática, entre os produtores, e através de livros. Disse que gostava de ler e que desejava cursar, em breve, uma faculdade.

Visitei, ao lado de Jaime, a propriedade de um cafeicultor cujos grãos estavam expostos na feira da COCLA. O pai do agricultor começou a cultivar café nesse espaço em 1963, isto é, logo após receber seu terreno do governo no contexto da reforma agrária local (uma porção de terra que mais tarde seria dividida entre seus filhos). Em 2004, o sócio em questão havia “entregue” para a cooperativa 22 quintais do grão; em 2005 deveria entregar 11 quintais e no ano seguinte 25 quintais. Seu “caderno do produtor” não estava passado a limpo e isso deveria ser feito “até a próxima semana”, lhe avisou Jaime³⁴. Tal atitude seria recorrente: “eles não gostam de escrever”, comentou. Transcrevo parte da conversa entre Jaime e o sócio em torno do “plano de produção”. Seu tom afetivo criava – ou reproduzia - um vínculo afetivo entre eles e fazia com que suas cobranças aparecessem como de alguém que se importava com o sócio.

O que vamos fazer Don Basilio? (Jaime)

Poda. (sócio)

Qual outra tarefa? (Jaime)



Trabalhar entre setembro e dezembro em um hectare de milho. (sócio)

Tem que fazer o poço! (Jaime)

Em dezembro faço. (sócio)

Como dito aqui anteriormente, o número mínimo de tarefas que um sócio tinha que cumprir, enquanto “plano de produção”, eram sete. Jaime repreendeu mais uma vez o produtor por não passar a limpo, no “caderno de registro”, aquilo que diariamente anotava num outro caderno. “No curso ensinam como usar o caderno (de registro)”, comentou, em seguida, o sócio. Os cafeicultores tinham que anotar quase tudo o que faziam com relação à agricultura. Na “ficha de recomendação”, Jaime escreveu: (1) “teto para a planta de beneficiamento”, (2) “tem que colocar na lixeira inorgânica os lixos que estão espalhados pela propriedade”, (3) “construir o poço”, (4) “fazer placa de identificação do sócio de madeira e não de papel”, (5) “cumprir com o plano de produção”, além de outros dois itens que acabei não registrando.

A questão é que Jaime também vivenciava as misturas ou confluências de pontos de vista que atravessavam os técnicos da cooperativa, só que a perspectiva do produtor parecia assumir nele um peso ou dimensão maior. Ele era capaz de traduzir um saber especializado para os agricultores com desenvoltura e segurança, o que mostrava sua evidente familiaridade com o meio rural e a sua não tão explícita proximidade com o universo técnico. Ou seja, seu desempenho profissional (em campo) não o diferenciava tanto de Juan, Raul e Mario. Mas sua posição ou lugar aparentemente ambíguo, entre esses três, era um sinal de que as fronteiras entre as perspectivas dos produtores e as dos técnicos não eram estanques. Esses pontos de vista se aproximavam ou se separavam dependendo de suas interações.³⁵ Em alguns contextos, suas diferenças eram realçadas como, por exemplo, durante o controle das práticas dos associados. Diante de outras situações, notadamente, ao longo dos aconselhamentos feitos aos sócios, os técnicos eram levados a olhar a realidade como produtores. O exemplo de Jaime mostrava que os agricultores também podiam assumir, pelo menos temporariamente, o prisma de quem ocupava os cargos mais escolarizados da cooperativa.³⁶

A diluição das fronteiras entre os cafeicultores e os técnicos passava pelo corpo. Como assinala Tim Ingold (1993), “modos de perceber são a sedimentação de histórias passadas de envolvimento direto entre pessoas e seus ambientes” (idem, p. 221). Aprender a perceber, diz o autor, é “aprender a participar do mundo de certa maneira



através do envolvimento com outros em contextos diários da ação prática” (idem, p. 222). A diferenciação que Ingold faz entre um olhar *no* mundo e um olhar *sobre* o mundo nos ajuda a atender a legitimidade que os agricultores conferem a quem encara a realidade a partir de seu prisma como um ponto de vista que se conhece *na prática* ou *na experiência*, pois tendem a confiar nos conselhos dos sujeitos cujos corpos se mostram socializados num ambiente parecido/igual ao onde vivem/trabalham. Essa “comunhão de experiência” ou a “consciência de se viver num mundo em comum”, para utilizar as palavras do autor, desfaz as fronteiras entre os produtores e os técnicos, ao criar um “fundamento relacional” onde ambos podem trocar de papéis ou perspectivas.

Para além das diferenças

Em 2011, o café da Cooperativa Huadquiña se converteu no sétimo produto reconhecido, pelo governo do Peru, por sua “denominação de origem”. Tal feito foi amplamente divulgado pela imprensa do país. Numa dessas reportagens, por exemplo, afirma-se que esse rótulo fora concedido depois de três anos de “avaliação técnica das características diferenciadas” desse grão, um processo conduzido por um instituto estatal e através do qual foram levadas em conta suas “características especiais de qualidade, aroma, corpo e acidez derivadas de seu entorno” (Calderón, 2011). Segundo o jornalista, “sua alta qualidade e características especiais têm feito com que o café gourmet Machupicchu-Huadquiña conseguisse se posicionar com muito êxito nos mercados internacionais” (idem). Para um dos dirigentes da Huadquiña com quem ele conversou, “essa certificação de denominação de origem será um valor agregado que beneficiará os 600 pequenos sócios” (idem). Contudo, para além das dimensões organolépticas e comerciais em torno do café da cooperativa, essa reportagem também chama a atenção para as mudanças das disposições dos seus sócios diante do trabalho. “Quem não se submete às regras de exigência máxima do mercado não pode estar na cooperativa”, afirmou seu gerente para depois completar seu raciocínio: “antes os sócios entregavam ‘qualquer coisa’, agora sabem que um produto melhor é um preço melhor” (idem). O autor da matéria também relata a transformação vivida por um sócio:

Odil Vivanco Candia é um agricultor do setor de Yanatile. Sem que pudesse imaginar, se tornou um exemplo a ser seguido. Há quatro anos ele tinha quatro hectares com pouca produção. Os técnicos o aconselharam a substituir seus cafezais. Depois de conversar com sua esposa, começou a praticar a poda seletiva, por meio da qual, suas plantas velhas, que estavam disformes, raquíticas, com crescimento horizontal, foram extirpadas. Hoje em dia esse cafeicultor renovou quase 50 por cento de seus cafezais.



Se antes ele produzia 12 quintais por hectare – pouquíssimo – hoje seus índices ascendem a 25 quintais, com a meta de chegar a 50, uma vez que termine a renovação. A renovação deve ser feita aos poucos, e em três anos a chacra estará toda renovada, comenta. “As vantagens de renovar são muitas, produz mais grãos, as plantas não são mais tão altas, facilita a colheita, e a mão de obra não se afasta, pois prefere ir onde é mais fácil colher”, acrescentou. Antes precisava de doze pessoas para colher um quintal de 100 libras. Hoje em dia só necessita de oito e logo será menos (idem).

Quem lê essa reportagem, pode ser levado a acreditar que a racionalização das práticas agrícolas dos agricultores da Huadquiña é guiada somente pelos retornos econômicos que ela é capaz de proporcionar.³⁷ Porém, olhando de perto os procedimentos pedagógicos que envolvem esse processo, vemos que ele deve ser traduzido à realidade dos produtores e é por isso que os “conselhos” dos técnicos são evocados na matéria.³⁸ Tal mudança na *forma* do trabalho rural (sua “racionalização”) se apoia, portanto, numa mudança na perspectiva dos funcionários da cooperativa: a adoção da visão dos sócios.³⁹ Ou seja, para entender as transformações do trabalho desses cafeicultores é preciso vê-lo também como um *ponto de vista* sobre o mundo capaz de ser adotado por aqueles que não são classificados como agricultores ou trabalhadores rurais. A Cooperativa Huadquiña representava não só um ideal comercial ou produtivo, mas também de relacionamento entre os cafeicultores e os agentes que intermediavam suas relações com os universos que iam além do plano local. Esses, não raro, “outros”, como os técnicos e gerentes das cooperativas, os comerciantes “privados” e os políticos, deveriam, em certos momentos, se posicionar como uma espécie de “nós” para que essa intermediação ganhasse uma maior legitimidade da perspectiva dos produtores de café. Essas metamorfoses, por meio das quais é possível ultrapassar certas fronteiras sociais, não estariam tão presentes no passado, quando os vínculos entre os cafeicultores e os mediadores comerciais ou políticos eram quase inexistentes. Mas, a partir dos anos 1960, começaram a ser criadas as cooperativas de produtores de café, devido, de modo especial, à falta de confiança nos compradores do grão (Cruz, 2013). Estes últimos agentes eram vistos (e continuam sendo) pelos primeiros como seus “exploradores”, isto é, pessoas que gozariam a vida à custa dos seus trabalhos/esforços. Os comerciantes do grão estariam, portanto, na fronteira da moral - não à toa que quem era identificado enquanto comerciante privado, era, comumente, associado à figura do “ladrão”. De acordo com um (outrora) proeminente líder dos cafeicultores peruanos:



Quando, por iniciativa de agricultores visionários, dedicados à cafeicultura, se formaram as primeiras cooperativas em 1965, decididas a controlar os baixos preços que recebia o cafeicultor, o roubo no peso, a especulação e a exploração do colonizador da Selva Alta em benefício de atacadistas e exportadores intermediários inescrupulosos, cujos ganhos obtidos facilmente eram gastos em viagens ao estrangeiro, na aquisição de artigos suntuosos, no consumo de bebidas e produtos importados, residindo nas cidades, desfrutando do luxo e da abundância; enquanto a economia do campesinato era cada vez mais menosprezada, disseminando a desmoralização e o fatalismo no homem do campo, que morava em casas inadequadas e desconfortáveis, submetido a todo tipo de privações, sem serviços essenciais de nenhum tipo, esgotando-se lentamente como consequência de sua miséria, afundado pelo frequente consumo de tabaco e álcool; não se previam, nem se especulavam sobre, as perspectivas e alcances desse movimento cooperativo de transformação, redenção e mudança na Selva Alta. (Revista Café Peru, edição de janeiro-fevereiro de 1980)

A fundação e o controle de muitas das cooperativas teriam contado com pessoas com as quais os agricultores de origem andina pareciam não se identificar, como é o caso de uma organização da província de Satipo (na “selva central”) que o antropólogo Robin Shoemaker (1981) visitou entre 1973 e 1975. A experiência de um sócio dessa cooperativa, que havia se tornado um de seus “delegados”, mostra as diferenças ou discontinuidades que existiam no interior dessa entidade:

Desde que se tornou delegado, ele aprendeu que o administrador chefe e os gerentes da cooperativa estavam roubando dinheiro da instituição. A maioria desses diretores, segundo ele, são os antigos patrões (latifundiários) de Satipo ou seus filhos. Eles são os que fundaram a cooperativa dez anos antes e tomaram seu controle apesar de todas as mudanças sociais que aconteceram. A ditadura corrupta continua no poder porque poucos colonos entendem as leis ou têm alguma noção de seus direitos como membros da cooperativa. A maioria dos atuais colonos tem origem indígena, diz ele, e faltam a eles a “educação e cultura” necessárias para se oporem eficazmente aos gerentes de sua cooperativa (idem: 19-20).

Entretanto, com o passar dos anos, uma parte dos descendentes dos cafeicultores andinos se formou no Ensino Superior e passou a conduzir ou a liderar suas cooperativas. Por isso, a atual posição privilegiada de algumas dessas organizações no mercado de café acaba sendo um reflexo de uma espécie de mudança na identidade de seus funcionários. Não que as pessoas de fora do universo cafeicultor não pudessem se identificar com ele, apenas que os agricultores andinos tinham como referência um



senso comum no qual o “outro”, enquanto o sujeito ligado ao comércio agrícola, tendia a assumir, num maior ou menor grau, o papel de explorador do trabalho dos proprietários rurais, como dito acima.⁴⁰ Os filhos mais escolarizados dos produtores se mostravam mais abertos e confiantes do que eles para entrar em contato com a esfera mercantil. Através de suas experiências familiares e escolares eles acabaram incorporando uma disposição que os legitimava a traduzir, com certa propriedade, o mundo exterior para eles.

Eram as segundas ou terceiras gerações das famílias desses agricultores que, aparentemente, se mostravam as principais responsáveis pela diminuição do “clima” de desconfiança dos produtores em relação ao comércio. Mas essa “atmosfera” ainda permeava as visões dos produtores a respeito dos mediadores comerciais e isso explicava a relutância de muitos em se associar às cooperativas ou ingressar nos “programas de cafés orgânicos”, apesar de todas as “vantagens econômicas” que poderiam obter partir da inserção ou participação nessas organizações ou programas.⁴¹ Não à toa a preocupação (explícita) dessas entidades em obter a confiança dos seus sócios.

Por fim, como explicar esse pano de fundo de “desconfiança generalizada”? Peter Luetchford (2008), num livro em que aborda a questão do comércio justo numa cooperativa de cafeicultores da Costa Rica, afirma que eles tenderiam a ver o valor do café como algo derivado das atividades envolvidas na sua produção e não do seu comércio, uma visão que teria uma raiz cristã.⁴² Trata-se, segundo esse autor, de uma “teoria do valor”, que pressupõe um arcabouço conceitual ou simbólico organizado ao redor de uma ideia de trabalho rural.⁴³ Guardada as devidas diferenças, creio que essa visão de mundo também está presente entre os cafeicultores peruanos. No entanto, no caso deles, ela se associa à tradicional condenação andina do ócio, sendo a labuta diária no campo vista como a ocupação por excelência.⁴⁴ Nessa direção, a noção de trabalho rural pode ser pensada como uma *matriz de significados*, ou seja, como *fonte de sentidos* para interpretarem suas ações e de quem não é agricultor.

A deslegitimação das atividades ligadas ao comércio agrícola aparece entre os produtores de café do Peru como uma condição das suas integrações lógicas e sociais. Em outras palavras, a visão negativa que compartilham a respeito dos mediadores



comerciais é naturalizada tendo em vista o reconhecimento de uma identidade comum. Porém, ela deve ser desconstruída a partir do momento em que esses “outros” queiram estabelecer uma relação de confiança com eles. Este artigo mostrou que essa desconstrução vem sendo feita através de uma metamorfose de pontos de vista protagonizada, notadamente, por filhos dos cafeicultores que conseguem *incorporar* o prisma dos agricultores em suas falas, gestos e olhares. A legitimação desses mediadores, isto é, a transformação dos “outros” em “nós”, se relacionava com o processo de racionalização das práticas agrícolas. Essa mudança do trabalho rural era o reflexo de uma interiorização, pelos produtores, da perspectiva da demanda externa através da confiança nos ensinamentos e conselhos dos técnicos. Novas hexis corporais caminhavam juntas com a diluição das fronteiras de um mercado global.

Notas

¹ A selva alta é uma região do Peru, de clima tropical e úmido, situada entre a cordilheira andina e a planície amazônica, que o atravessa de norte a sul.

² Existiria uma continuidade, entre as pessoas e o mundo ao redor, anterior aos atos de tradução: “não que a vida social não implique, portanto, atos de construção e de separação, mas esse não é o momento inicial, e sim a habitação do mundo, contínuo” (idem: 347). Tal continuidade implica, segundo o autor, não encarar as percepções das pessoas a partir da separação entre mente e corpo.

³ Apresento, mais à frente, o arcabouço conceitual ou simbólico que dá sentido a essa suspeita. Entretanto, é importante ressaltar que essa desconfiança recai não apenas sobre os comerciantes propriamente ditos como também sobre os funcionários das cooperativas de cafeicultores, independentemente dos seus cargos.

⁴ A ideia de “sistema agroalimentar global orientado pela demanda” aparece em John Wilkinson (2002). Retomo, mais à frente, os argumentos desse autor.

⁵ O contraponto aqui são os estudos que encaram a adoção de novas práticas agrícolas como uma questão de maximização de recursos econômicos dentro do sistema capitalista. Segundo José de Souza Martins (1975), por exemplo, a inovação agrícola no capitalismo deve ser “funcionalmente racional no nível do sistema e substancialmente racional no nível do proprietário da terra” (idem: 81). Para ele, a adoção de novas técnicas pressupõe uma “consciência burguesa” ou “vocaçãõ empresarial”. Ricardo Abramovay (1992) entende que a transformação dos camponeses em “agricultores profissionais”, isto é, dotados de uma “racionalidade econômica”, se constitui na “base fundamental do progresso técnico e do desenvolvimento do



capitalismo na agricultura contemporânea” (idem: 211). Tais estudos reconhecem, mas não retratam, os papéis (cruciais) desempenhados pelos agentes responsáveis pela intermediação das relações dos produtores rurais com as novas tecnologias ou técnicas agrícolas.

⁶ Eric Wolf (2003), tomando como referência a história mexicana, analisa as transformações dos agentes que intermediam as relações dos camponeses/agricultores com os universos sociais mais abrangentes (com destaque para o Estado Nacional). A “função básica” desses “intermediários” seria “estabelecer relações” entre os “indivíduos orientados para a comunidade”, que buscam satisfazer suas necessidades materiais, e os “indivíduos orientados para a nação”, interessados em aumentar seu “séquito” político. Wolf acaba reduzindo a perspectiva dos agricultores sobre os intermediários a uma questão econômica. Ele não se preocupa em indagar sobre as condições sociais por detrás da legitimidade desses mediadores.

⁷De acordo com Clifford Geertz (2002), os antropólogos têm que lidar, nos dias de hoje, com um mundo marcado pelo que ele define como um “espectro gradativo de diferenças mescladas”. “Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski e Benedict atuaram num mundo em que havia uma montagem mais descontínua de diferenças mais separadas (os bororos, os azande, os trombriandeses, os zunhis), e os grandes poli-historiadores que eles substituíram (Tylor, Morgan, Frazer etc.) haviam funcionado num mundo de imensa dicotomia entre os civilizados em aperfeiçoamento e os selvagens aperfeiçoáveis” (idem: 192). Velho (2007) chama a atenção para a importância de se reconhecer as “pequenas diferenças”, nas cadeias ou redes de mediadores, que articulam diferentes “socialidades” pelo mundo.

⁸Esse número – de 35% - se refere ao ano de 2014 e foi divulgado pela Junta Nacional do Café (o “grêmio” que reúne as cooperativas do Peru). Ver: www.juntadelcafe.org.pe. Em 2004, o número era de 13,48%, com 71% vendidos só como orgânicos, 14% como de comércio justo (orgânico ou não), 11% como *sostenible* e 4% como gourmet (Schwarz, 2005). Ou seja, nesse intervalo de 10 anos, a porcentagem de cafés especiais exportados aumentou.

⁹O comércio justo de café certificado é um mercado internacional criado no ano de 1988 e organizado com base num ideal de solidariedade dos consumidores para com os “pequenos produtores” reunidos em cooperativas autorizadas a participar desse sistema comercial.



¹⁰Há uma associação entre o comércio justo e a produção de cafés certificados como orgânicos, por conta, em especial, do valor maior pago a esses grãos dentro desse sistema comercial.

¹¹Conforme aponta Ricardo Abramovay (1992), na década de 1920, o economista russo Alexander Chayanov chamava a atenção para o papel dos funcionários das cooperativas de agricultores em adequar a produção de seus associados às demandas do mercado mundial.

¹²Entre os sintomas dessa crise se destacariam: uma situação de pobreza nas regiões associadas à produção de café, um êxodo rural oriundo dessas zonas, uma ênfase de seus moradores na agricultura de subsistência e a substituição dos seus cafezais por pasto ou outras lavouras comerciais (incluindo plantações de matérias-primas utilizadas na produção de drogas ilícitas).

¹³As chamadas impurezas ou defeitos físicos podem ser não só os já citados pedaços de gravetos e de terra como também de folhas, além de grãos “verdes”, “pretos” ou atingidos por uma praga.

¹⁴O trabalho dos técnicos pressupunha uma socialização dos cafeicultores numa sociedade dominada pelas relações mercantis e onde o espírito técnico-científico é valorizado.

¹⁵A dissertação tratou da construção social de um mercado financeiro agropecuário organizado com base no ideal do mercado “perfeito”. Para o doutorado, pretendia estudar a construção social de um mercado organizado através de um ideal de “solidariedade”.

¹⁶As “centrais” de organizações de produtores de café são entidades legais de “segundo grau”, isto é, diferentemente das cooperativas e associações, cujos membros ou sócios são os próprios cafeicultores, entre as centrais os associados são as cooperativas ou as associações.

¹⁷Os cafés *sostenibles* eram identificados com base em critérios “sociais” e “ambientais”.

¹⁸O distrito de Santa Teresa foi fundado em 1957. A Huadquiña foi criada no ano de 1963.

¹⁹No total, a cooperativa dispunha de 20 funcionários.

²⁰Tais cursos eram divididos em duas partes: “teórica” e “prática”. Neles os cafeicultores aprendiam como produzir adubo orgânico, como podar os cafezais, como registrar suas tarefas num “diário” e o que era o sistema de comércio justo regulado pela FLO, entre outros assuntos.



²¹ Um cronograma organizado em torno das inspeções “internas” e “externas” era comum entre organizações peruanas de produtores de café ligadas ao comércio justo. A partir do ano de 2007, a própria FLO passou a exigir, das cooperativas, a presença de um sistema de controle interno.

²² Ser um inspetor externo não significava necessariamente ser estrangeiro ou vir de fora do país. Havia peruanos que trabalhavam para certificadoras e algumas tinham seus escritórios no Peru.

²³ Os inspetores da FLO visitariam a parte “burocrática” das organizações de cafeicultores, para saber “se estavam usando corretamente” seus recursos, e somente abordariam os agricultores para lhes perguntar a respeito dos “critérios genéricos do comércio justo”.

²⁴ Entre janeiro e fevereiro, meses de chuva, o grão é plantado. Entre abril e julho é a colheita.

²⁵ Em 2005, um hectare de terreno era vendido, em média, a 1.500 soles (US\$ 500).

²⁶ A preocupação com a “qualidade” dos cafés a serem vendidos era vista pelos cafeicultores como algo recente e fruto das demandas dos compradores estrangeiros. Os agricultores diziam que bebiam, em suas casas, “apenas café de baixa qualidade”.

²⁷ Raul tinha 27 anos; Juan 22. Ambos eram filhos de cafeicultores de La Convención e moravam juntos em Santa Teresa. Sua casa era pequena, sem fogão e tanque, por exemplo. Ganhavam 1.200 soles mensais (em torno de US\$ 400), além do dinheiro para o transporte.

²⁸ Escutaria de Raul que seu desejo era, no fundo, “se desenvolver” (profissionalmente) como cafeicultor, o que se colocava como mais um exemplo do fato de que ele e os demais técnicos eram atravessados por distintas identidades ou pontos de vista ligados ao trabalho.

²⁹ De acordo com o censo nacional de 2007, entre os habitantes do distrito de Santa Teresa com 15 anos ou mais, 8,6 por cento tinha uma educação de nível superior. Já os analfabetos formavam 15,5 por cento da sua população com 15 anos ou mais. Ver www.inei.gob.pe.

³⁰ Café *planta* era o café também chamado de convencional, tradicional ou comum.

³¹ A “colheita seletiva” envolvia os grãos maduros e, conseqüentemente, com características (como corpo, aroma, acidez, doçura e amargor) mais próximas do paladar dos consumidores dos mercados de cafés “especiais”. O “beneficiamento técnico” permitia um maior controle dessas distintas e economicamente valorizadas características desses cafés. Já a secagem dos grãos em lajes de concreto tinha como



objetivo principal mantê-los afastados do solo (onde podiam entrar, mais facilmente, em contato com as chamadas “impurezas”, como gravetos e terra, por exemplo).

³² Havia um discurso, dos funcionários das organizações de cafeicultores, que valorizava a “diversificação” das fontes de onde seus associados tiravam os seus recursos. Na Huadquiña, como deve ficar claro ao longo do texto, a ênfase no cultivo da *granadilla* era colocada pelos técnicos como algo que, antes do que contradizer seus discursos em torno da produção de café, servia para garantir essa produção entre os agricultores que apresentavam certas desvantagens produtivas em relação aos seus pares. Isso implicava num olhar mais global da perspectiva destes últimos antes do que apenas vê-los como produtores de café.

³³ Na época da pesquisa, não estava predisposto a olhar com a atenção e o cuidado, que teria hoje, as dimensões sensíveis das falas e das ações desses sujeitos (um reflexo da falta de distanciamento do universo racionalizado no qual fui criado). Porém, guardo na memória a lembrança de que os técnicos e os cafeicultores compartilhavam um conjunto de afetos que os unia. Esses afetos permeavam seus olhares, movimentos, tom de voz e expressões faciais, por exemplo. Eles encarnavam – em seus corpos – um modo de vida que talvez tenha me atraído justamente por dar vasão à uma sensibilidade que não encontrava em mim.

³⁴ Cada quintal corresponde a 46 quilos.

³⁵ É possível dizer que o trabalho dos técnicos envolvia uma alternância entre uma forma de relacionamento baseada no controle e outra assentada na pedagogia. Porém, suas fronteiras não eram estanques: o controle podia permear a interação de caráter pedagógico e vice-versa.

³⁶ Outro exemplo era o dos sócios “capacitados” que auxiliavam os técnicos de sua cooperativa durante as “inspeções internas” às “cooperativas bases” da COCLA.

³⁷ “A melhoria de seus cafezais nasceu quando os mercados de café orgânico e de comércio justo chegaram a pagar US\$ 30 a mais por quintal” (Calderón, 2011).

³⁸ “A busca por um grão mais uniforme e limpo passou por uma revolução de pensamento. Todos os sócios se submeteram aos conselhos dos técnicos” (Calderón, 2011).

³⁹ Oferecer um conselho (ou um bom conselho) envolveria se colocar no lugar de um interlocutor.

⁴⁰ Não sem razão que o tema do “colonialismo interno” é central na narrativa de Shoemaker (1981). Segundo ele, “o problema enfrentado pelos agricultores de Satipo pode ser definido de maneira simples: o produtor de alimentos é explorado pelas



pessoas que controlam os canais mercantis” (idem: 205). Tal olhar se apoia tanto nas visões dos cafeicultores quanto no viés teórico desse autor: a “economia política”.

⁴¹ Em 2014, algumas cooperativas peruanas de cafeicultores, outrora situadas entre as que mais exportavam café no país, enfrentaram graves dificuldades financeiras e as quais acabaram alimentando um sentimento de desconfiança de seus sócios para com seus funcionários.

⁴² Os que apoiavam mais enfaticamente a cooperativa seriam os jovens e os produtores “tecnicamente mais informados”. Já seus críticos seriam os agricultores mais velhos.

⁴³ De acordo com essa teoria: “aqueles que não trabalham duro”, isto é, que não transformam a natureza, “não têm direito de se apropriar (do trabalho) daqueles que agem dessa maneira” (Luetchford, 2008: 142). Os profissionais que trabalham no escritório da cooperativa, assim como outros tipos de agentes intermediários, seriam acusados, pelos produtores, de serem preguiçosos, uma crítica ou divergência que “está ancorada na crença de que o verdadeiro valor advém do trabalho na terra e da interação com a força que Deus colocou na natureza (idem).

⁴⁴ “Os produtores parecem compartilhar alguma coisa com os consumidores e ativistas do comércio justo; a idealização do trabalho sobre a natureza como criador de valor e o direito de reter esse valor criado” (Luetchford, 2008: 138). Com base em Woortmann (1987), é possível dizer que se trata de uma visão de mundo ou ética cujas raízes perpassam o cristianismo e se estendem até as ideias do filósofo grego Aristóteles.

Referências

- Abramovay, Ricardo. 1992. *Paradigmas do Capitalismo Agrário em questão*. São Paulo: Hucitec.
- Cruz, Ricardo. 2013. “Governo militar e o movimento social dos produtores de café no Peru (1968-1980): cooptação ou aliança?” *Cadernos CERU*, 24.
- Geertz, Clifford. 2002. *Obras e Vidas*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
- Hannerz, Ulf. 1997. “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional”. *Mana*. vol.3 n.1.
- Ingold, Tim. 1993. “The art of translation in a continuous world”. In: *Beyond Boundaries*. Pálsson, Gísli. Oxford/Providence: Berg.
- Jaffee, Daniel. 2007. *Brewing Justice – Fair trade coffee, sustainability, and survival*. Berkeley: University of California Press.
- Junta Nacional del Café. 2005. *Agenda*. Lima: JNC.
- Raynolds, Laura & Wilkinson, John. *Fair Trade – The challenges of transforming globalization*. London: Routledge, 2007.



Martins, José de Souza. 1975. *Capitalismo e tradicionalismo*. São Paulo: Pioneira.

Schwarz, Laura. 2005. *Caracterización de la producción de café orgánico en Perú*.

Lima: Junta Nacional del Café.

Shoemaker, Robin. 1981. *The Peasants of El Dorado: Conflict and Contradiction in a Peruvian Settlement*. Cornell University Press. Ithaca and London.

Velho, Otávio. 2007. *Mais realistas do que o Rei – Ocidentalismo, religião e modernidade alternativas*. Rio de Janeiro: Topbooks.

Wilkinson, John. 2002. "Os gigantes da indústria alimentar entre a grande distribuição e os novos clusters a montante". *Estudos Sociedade e Agricultura*, 18.

Wolf, Eric. *Antropologia e poder*. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.



"Relatos del Agua": La práctica cultural del Riego Comunitario. Conflictos y Discursos.

Lourdes Zúñiga Mitchell
Jessica Barraza Rivera

Resumen

El presente estudio, tiene como objetivo principal rescatar y poner en valor la práctica cultural del riego comunitario en el Oasis de Pica, donde nuestros objetivos específicos se relacionan con describir y dar cuenta esta práctica cultural. Además, de realizar un mapa de actores relevantes para dicha práctica comunitaria, al igual que relevar el rol fundamental del agua en dicha tarea. Lo cual, se realizó a través de un riguroso trabajo de observación etnográfica, así como a través de un análisis documental respecto del Código de Agua chileno. Teóricamente la investigación se enmarca en las lógicas identitarias en torno al riego comunitario, y la relación con el recurso hídrico desde la Cosmovisión Andina; el diálogo del agua que aún sufren las comunidades agrícolas (Greslou), que les permite generar tejido social e identidad local (Van kessel). Lógicas que están siendo amenazadas por el paradigma neoliberal; evidenciadas en las políticas de aguas chilenas, en la modernización del territorio, en la centralización de las políticas públicas y el auge de la gran minería en la zona que, en consecuencia, han provocado cambios en estas prácticas tradicionales reflejada en la urbanización del territorio.

Palabras Clave

Práctica cultural; Identidad local; Agua; Lógicas Andinas; Riego Comunitario.

Marco Metodológico

Planteamiento del Problema

Pica es un oasis, situado en el pie monte al lado occidental de la cordillera de los andes, a 1.300 metros, sobre el nivel del mar. Con una compleja y dinámica identidad que ha estado asociada con la agricultura; se han encontrado artefactos líticos, relacionados desde hace 12.000 años. Por lo tanto, se establece la presencia humana desde ese tiempo en estos oasis; durante el periodo formativo 3.000 a.c. se hacen las primeras experiencias en términos de domesticación de plantas y animales, de ahí viene una agricultura avanzada, se especializan las comunidades agrícolas. (Núñez, C. Agüero; M. Uribe y otros).



Por lo demás, una vez llegado los españoles, trajeron consigo sus prácticas agrícolas, y con ello llega al oasis el cultivo de los parrones, que se desarrollaron dadas las condiciones únicas del territorio, tanto por su altura como aridez, dando paso al desarrollo de la actividad frutícola, actualmente desarrollada en el Oasis. De hecho, durante trescientos años, tanto Pica como Matilla y el valle de Quisma, vivieron de la producción vitivinícola. Mas, producto del aumento de impuestos a dicha producción, acompañado del desvío de las aguas del valle de Quisma hacia Iquique, todo esto bajo el contexto de chilenización que vivió por esos años la Provincia de Tarapacá, finalmente, terminó por sepultar esta verdadera industria.

Existen pues, dentro del sector agrícola del oasis; una zona de cultivos antiguos, donde los árboles frutales tienen en promedio 150 años; correspondientes a las antiguas terrazas de cultivo, difíciles de identificar con una simple observación. Pero además la particularidad, es que el riego se hace por inundación. El hecho de regar sus “chacras” implicaría que los elementos naturales, la técnica asociada, y la práctica comunitaria, no sólo sean entendidas como una forma sustentable de preservar el oasis, sino también una práctica, que con el tiempo ha ido desapareciendo y en donde el agua se convierte en un elemento central.

Preguntas de investigación

¿De qué manera, la desaparición de la Práctica Comunitaria del Riego, nos indica también, la pérdida de identidad local, en el Oasis de Pica, en la región de Tarapacá, Chile?

Objetivos

Objetivo General:

Poner en valor, en cuanto patrimonio intangible, la práctica ancestral del riego comunitario, en el Oasis de Pica, Provincia del Tamarugal, región de Tarapacá.

Objetivos Específicos:

- Describir la práctica agrícola del riego, en el Oasis de Pica.
- Identificar a los actores relevantes de la agricultura en el Oasis, a través de la realización de un “mapeo de actores” en la zona investigada.
- Relevar la importancia del agua, en el contexto eco/socio/cultural para la sustentabilidad y sostenibilidad del Oasis.



Hipótesis

La pérdida de las prácticas culturales de una localidad y/o comunidad, son reflejo de su pérdida de identidad, puesto que en sus usos y costumbres se encuentra contenida su cultura y forma de vida. Es por ello, que urgen acciones e iniciativas destinadas al trabajo comunitario y fortalecimiento del tejido social, única forma de preservar en cuanto comunidad su memoria e historia.

Diseño Metodológico

Producto de la naturaleza que caracteriza al presente estudio, la metodología más adecuada para realizar el mismo es la de tipo cualitativa, con alcances descriptivos, donde el trabajo de campo ha implicado recurrir a fuentes primarias, a través de un largo proceso de trabajo etnográfico, el que implicó un proceso de fuerte integración a la comunidad Piqueña. A su vez, se recurrió a fuentes secundarias, por medio de una revisión bibliográfica, acerca del código de agua chileno. Por lo cual, el equipo de investigación para abordar la investigación se ha situado desde el paradigma Interpretativo. Siendo sus fundamentos hermenéuticos, aquellos que la sustentan, comprendiendo, que la Práctica Cultural del Riego Comunitario, se enmarca en un contexto socio/histórico/cultural. Es decir, en un tiempo y un espacio determinado. Puesto que, Pica es una comuna de la provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, con características geográficas determinadas (Oasis), que han sido fuertemente afectadas y/o intervenidas por las faenas mineras, tanto en lo que respecta al fuerte proceso migratorio a la zona, y del desarraigo cultural sufrido por los jóvenes tarapaqueños, quienes optan por las actividades mineras, en desmedro de las agrícolas, que ancestralmente, ha sido la actividad productiva de la zona. Todo lo anterior, durante el año 2018 y 2019.

Técnica de Recogida de Datos

Dado que, el estudio implica, tanto fuentes primarias como secundarias, es que las herramientas de recogida de datos también son diversas. En este sentido, la observación etnográfica, a través de un fuerte proceso de trabajo participativo con la comunidad Piqueña, fue fundamental para comprender el proceso de Riego Comunitario y las prácticas culturales en torno a este. Donde, las tomas de Notas de Campo, jugó un rol fundamental, en cuanto herramienta para la recolección y posterior sistematización de la información. A su vez, se recurrió al Análisis Documental, como herramienta para recolectar los datos relevantes para el estudio, respecto del código de



agua chileno, y sus implicancias para con la preservación del Patrimonio Intangible que constituye la Práctica Cultural del Riego Comunitario.

Estrategia de Análisis

En relación, a la Estrategia utilizada para la sistematización y análisis de la información recogida, corresponde al Análisis de Discurso. Donde, a través de una interrogación al texto, se obtuvo la información pertinente para cumplir con los objetivos, por este estudio trazados.

Marco Teórico

El agua y su cosmovisión Andina

Uno de los factores que inciden dentro de esta práctica comunitaria, es la concepción que se tiene del recurso hídrico, en el mundo andino y como bien lo define Francisco Greslou, el hombre andino gracias a su tradición cultural milenaria ha aprendido a “dialogar” con el agua, de diversas maneras, canales abiertos y subterráneos, represas, la captación de manantiales, camellones son entre otros algunos ejemplos de las técnicas de empleo racional y eficiente del agua.

Para el hombre andino, el mundo es un todo vivo; su trabajo es cultivar la vida del mundo en la chacra, el ganado, la casa, y todo lo que ella representa. Desde la semilla y la planta, hasta la cosecha merecen un trato de respeto y cariño, que exige una dedicación responsable. Donde el trabajo, es más que una simple actividad productiva; es un culto religioso a la vida, como señala Juan van Kesell.

En la génesis de la cosmovisión andina, el trabajo agrícola, nos presenta un sistema de producción altamente comunitario. Por lo tanto, la organización del trabajo, los recursos naturales y la responsabilidad del sistema de producción son asuntos de la comunidad. Donde, al poner el énfasis en la comunidad, esta se vuelve responsable de sus recursos naturales, lo que implica autosuficiencia, pero que también, crea lazos; tejiendo las redes sociales que le darán identidad a la misma.

Por tanto, el agua se vuelve un elemento de marcada importancia económica, ecológica, social simbólica y ritual, siendo un elemento cohesionador de la comunidad; un elemento de vida que permite a través de rituales crear identidad y organización y en donde los recursos naturales en general no son considerados como elementos de propiedad privada en el sentido del código civil.



En la cosmovisión andina la legitimación de la tenencia de las tierras y de las aguas contempla una concepción unitaria de las actividades productivas por un lado y los aspectos sociales e ideacionales de la cultura (Baver, pág. 71).

Existe pues, todo un mundo complejo como lo expone Philipie Rousseau, en donde “las técnicas culturales utilizadas por los campesinos derivan esencialmente de un conocimiento empírico transmitido de generación en generación”, ese conocimiento que da vida a la práctica del riego, es la base para que el oasis sea sustentable en el tiempo, y que a nuestros ojos constituye un patrimonio intangible fundamental de Pica.

Esta identidad la definiremos como “noción de pertenencia a un grupo, asumiendo la participación de un código cultural compartido, la que supone una conciencia de las diferencias respecto de otro grupo y se sustenta fuertemente en una memoria colectiva y en una flexibilidad que le otorga la posibilidad de continuidad y cambio” (M. Romo: La transición entre las tradiciones de los oasis del desierto y de las quebradas altas del Loa superior. Rev. Chungara). Es en estos espacios, que aún perduran la Práctica Comunitaria del Riego; pero que en otros lugares del sector agrícola se han perdido dando paso al oficio del regador.

Riesgo cultural.

Para comprender la relación que actualmente mantienen los comuneros piqueños con respecto al agua, debemos insertar la discusión dentro de las temáticas y conflictos medio ambientales. Entendiendo al medio ambiente como el entorno natural del sistema social, que en definitiva comprendería a una Bio/tecno/estructura, compuesta por seres humanos, quienes conviven con la naturaleza, o más bien como señalaría Carlos Marx, que serían parte de esta. Puesto que, como “Ser genérico”, el individuo tendría una relación dialéctica con su medio. Por tanto, todo aquello que contamine a su “nicho ecológico”, cual efecto boomerang, finalmente también terminará por afectar al ser humano.

Según el sociólogo Alemán Ulrich Beck, la creación de tecnoestructura, es decir de todas aquellas construcciones humanas, fenómeno principal del proceso de industrialización que caracteriza a la Modernidad, ha generado en muy poco tiempo la aparición excesiva de “bienes”, que en definitiva llegan a elevar la calidad de vida de los sujetos. Mas, esta confianza excesiva en el progreso tecnológico, no permitió dar cuenta de los “males” que dichos bienes provocaban en la bio/geo diversidad. En este sentido,



las normativas chilenas, enmarcadas profundamente por las reglas del modelo neoliberal, tenderían a proteger y/o fomentar la explotación de los bienes naturales, por parte de corporaciones transnacionales, quienes atraídas por la falta de regulación y fiscalización en materia medio ambiental, se convertirían en el escenario perfecto para la acumulación de capital.

Lo propio ha ocurrido en el Oasis de Pica. Donde, producto de sus características geográficas, ha sido el escenario perfecto para la producción agrícola. Dando sustento económico a las familias piqueñas ancestralmente. Por ello, su relación con la tierra y los recursos naturales, sobre todo el recurso hídrico tiene una envergadura mayor, dado que, es el que en definitiva les procura la vida. No obstante, el oasis, se encuentra inserto dentro de un territorio mayor denominado “macrozona norte”, la cual tiene como característica principal, además de la aridez de su clima; la riqueza mineral de su tierra. Han provocado, que históricamente este territorio fuese intervenido por capitales extranjeros; desde la explotación de la plata, pasando por la época salitrera, hasta nuestros días, en donde la explotación de cobre, por parte de la minera, durante las últimas décadas, han generado una preocupación por parte de los comuneros, respecto al déficit del recurso hídrico; con el respectivo riesgo tanto social como cultural, económico y medio ambiental que esto provocaría. Toda vez que además de ser un peligro latente para el ecosistema, lo sería para la comunidad piqueña, quien vería amenazada su estructura identitaria, respecto de la naturaleza. Puesto que, al extinguirse los recursos hídricos, se extinguirían con ellos toda expresión cultural, con relación a la actividad agrícola, incluida la actividad del riego comunitario.

Análisis de Datos

Descripción de Práctica Cultural del Riego Comunitario

Acercamiento al Campo

El proceso de observación etnográfica, para efectos de esta investigación, se realizó entre marzo y diciembre del año 2018, en la comuna de Pica; Oasis ubicado a 1.300 metro sobre el nivel del mar, en la Provincia de Tamarugal, en medio del desierto más árido del mundo. La cual, tiene características marcadamente rurales, donde ancestralmente ha existido producción agrícola. Empero, que actualmente, producto de la fuerte inmigración experimentada por la comuna, se ha dividido en dos sectores; una nueva y moderna y otra antigua y con prácticas culturales tradicionales, siendo esta última la de interés para esta investigación. Es así, como al transitar por los callejones y canales conductores de agua, propios de la zona agrícola piqueña, se constata el



comienzo de un cambio de paisaje; pasando de uno netamente rural y agrícola, hacia uno más bien relacionado con la urbanización del territorio, donde una característica fundamental, lo constituyen las edificaciones de casas/habitaciones, sin ninguna normativa al respecto. En este sentido, dichos terrenos, están siendo ocupados por inmigrantes, que buscan en Pica hacerse de una Parcela de Agrado, y con ello cambiando el uso que cultural y ancestralmente se les ha dado a dichos suelos.

Notas de Campo

Dentro del sector agrícola del oasis, coexisten dos zonas; una nueva y otra antigua, la que nos interesa, para efectos de este estudio, es la zona de cultivos antiguos. Donde, los árboles frutales, tienen en promedio 150 años, y que corresponde a las otrora terrazas de cultivo. Aquí, la particularidad radica en que estos sectores se riegan por inundación. Lo cual, conlleva a que cada agricultor sea quién, de manera comunitaria, riegue sus chacras, debido a que, se realiza de manera compartida con los agricultores, dueños de los terrenos vecinos. Es así como, por medio de sonidos particulares, propio de la cotidianeidad en las chacras, se van alertando los turnos. En este sentido, para poder regar, cada agricultor va sacando aquellas compuertas artesanales denominadas como “pongos”, del quechua “punku”, que significa puerta, las que impiden el natural flujo del agua, por los canales, que cual venas, va recorriendo el Oasis. Cabe destacar, que actualmente dichos canales se encuentran encementados, por parte de la Asociación Agrícola, quienes ven en este acto de modernización una forma de hacer más eficiente el recurso hídrico. No obstante, esto ha aportado a que la caña que crecía, gracias a las escurrajas de los canales, vayan desapareciendo. Donde la importancia de dichas cañas radica en que eran utilizadas en la construcción de viviendas, y que también, se constata que son utilizadas como cierre perimetral de las chacras, las cuales, por cierto, en su mayoría, no superan la media hectárea.

Respecto de lo anterior, históricamente el ciclo del riego, habría ocurrido cada 28 días, es decir, cada Ciclo Lunar. Sin embargo, producto de la optimización del recurso hídrico, antes mencionado, actualmente, el riego por inundación de las chacras piqueñas, se realiza cada 15 días. Cabe destacar, que este sector antiguo, poseen estanques, o como en el Oasis denominan “Cochas”, que sirven para contener y acumular el agua que fluye desde las vertientes. Donde, aquella que contiene el agua proveniente de la vertiente principal, corresponde a la denominada “Cocha Resbaladero”, mostrando su recorrido a lo largo del Oasis, hasta irrigar la última chacra, al poniente de Pica. En este sentido, dicha Cocha, actualmente se encuentra convertida en un balneario municipal, al cual



asisten turistas de diferentes lugares, y que destaca por contener pequeños socavones, los que, en su génesis, tienen como función la captación del agua, técnica traída por los europeos, que, a su vez, fue adoptada desde los moros. Por lo demás, son tres cochas más, las que ayudan a contener el agua que será utilizada para el regadío; “Concoba”; “Miraflores” y las “Ánimas”. Sin embargo, esta última, actualmente se encuentra seca, por lo que se alimenta de la vertiente “Resbaladero”. Por lo demás, sólo los agricultores, que se alimentan de la vertiente Miraflores, actualmente se mantiene regando de manera comunitaria, es decir por

sus propios dueños, y de manera compartida con sus vecinos, los cuales, en su mayoría superan los sesenta años. Donde, justamente, el buen funcionamiento de esta práctica va a depender exclusivamente de la organización de los agricultores del sector, quienes irán regando de acuerdo, a la hora que le corresponda hacerlo, lo que se denomina la “redondilla”, parte de los usos y costumbres de este pueblo desde tiempos inmemoriales, según lo manifestado por los mismos agricultores (as). Mientras que, los demás actualmente pagan un sueldo a los denominados como Regadores de Oficio, para que realicen dicha función.

Respecto de lo anterior, es al amanecer cuando se inicia el riego de las aguas acumuladas en estas cochas, lo cual comienza, como antes se mencionó, con la abertura del pongo de la cocha, para que fluya el agua, por las venas que constituyen los canales de regadío que irrigan a las distintas chacras del sector. Siendo este ejercicio, por cierto, fuertemente comunitario, donde se construye el tejido social entre los agricultores Piqueños. Por lo demás, durante dichos periodos de tiempo, los vecinos aprovechan de socializar y compartir. Lo cual, subyace al mundo agrícola.

A su vez, para comprender como se realiza el proceso de riego de las chacras, se realizaron constantes observaciones en el sector de Miraflores; sector donde aún se riega por inundación. Como antes se mencionó, este proceso comienza en la madrugada, cuando se van llenando las heras; regando mangos, naranjos y guayabos, entre otros. Donde el agua ingresa por el canal norte, sector alto de la chacra, donde esta baja producto de la gravedad, irrigando todo el terreno. En este sentido, cobra relevancia la función de las “Tomitas”, espacios que son la unión de canales, y donde el agua sigue fluyendo. Pero, que también constituían espacios lúdicos, donde antiguamente los agricultores y sus familias compartían; se bañaban y lavaban sus ropas.



Matriz de Mapeo de Actores Relevantes

A continuación, se presenta una matriz que contiene a todos aquellos actores relevantes, respecto del proceso de Riego Comunitario, en cuanto patrimonio intangible de la comunidad del Oasis de Pica. En el cual, se identifica también, el nivel de fuerza de la relación, para con el objeto de estudio. Así, como el nivel de acción en donde actúa la organización, para lo cual se establecieron tres niveles: Macro: correspondiente a instituciones de orden Estatal; Meso: relacionado con Organizaciones Sociales y Micro: el cual, dice relación con un orden individual.

Organización	Características	Nivel de Fuerza respecto de la Práctica Cultural del Riego Comunitario
Asociación de Propietarios Agrícola Resbaladero Banda y ánimas Nivel de Acción: Meso	Es una asociación creada el año 1991, producto del conflicto que se originó con la municipalidad, por el balneario de la Cocha Resbaladero. Esta asociación tiene 450 miembros todos del sector antiguo.	El nivel de fuerza de esta organización es fuerte, producto de que constituye la principal Asociación de Agricultores de la zona. Dado que, es aquella que genera proyectos y establece alianzas para el mejoramiento del sector agrícola en general.
Ilustre Municipalidad de Pica Nivel de Acción: Meso	El municipio tiene el manejo de la Cocha Resbaladero, el cual es un considerado el balneario turístico principal, donde esta obtiene el 51% de las ganancias que deja esta.	Su nivel de fuerza es baja, puesto que, su relación, respecto del mundo del riego, sólo tiene que ver con un convenio con los agricultores, en relación al usufructo del balneario municipal.
Minera Doña Inés de Collahuasi Nivel de Acción: Macro	Minera transnacional, asentada en la zona desde el año 1994, gran responsable del proceso de migratorio y de modernización experimentado por el Oasis, durante los últimos años.	Su nivel de fuerza es fuerte, dado que, realiza aportes en términos económicos a los agricultores para las obras requeridas por la zona agrícola. Por lo demás, ha creado una Fundación Educacional, donde se imparten carreras relacionadas a la minería, en gran parte responsable de la pérdida de interés de las nuevas generaciones, respecto de la actividad agrícola.
Comunidades del Agua Nivel de Acción: Meso	Actualmente, corresponden a seis comunidades de agua, las cuales pueden constituirse por tres personas. Mas, según el código de aguas que nos rige, tienen personalidad jurídica, por el sólo imperio de la ley. Las rige la Dirección General de Aguas, y tiene fines de lucro.	Su nivel de fuerza es baja, dado que, su función no es constante, y más bien sólo de hecho. Puesto que, se conforman cuando es requerida por la ley, para el desarrollo de proyectos, por parte del Estado y/o las empresas mineras.
Indap Nivel de Acción: Macro	El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y corresponde a la presencia del Estado, en materia de desarrollo agrícola, en el territorio.	El nivel de fuerza es media, dado que, es la Institución del Estado que provee de financiamiento a proyectos que surgen de la Asociación de Propietarios Agrícolas, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), del cual los agricultores deben ser parte, para optar a los Fondos Públicos en materia de agricultura.



<p>CONADI Nivel de Acción: Macro</p>	<p>La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), corresponde a la presencia del Estado, en relación, al mundo indígena, en el territorio.</p>	<p>El nivel de fuerza es media, dado que, su relación con el mundo de la agricultura piqueña, radica en que para ser parte del programa PDTI, y con ello acceder a fondos del Estado, es requisito fundamental estar registrado en CONADI, en cuanto perteneciente a un pueblo originario. Lo que ha conllevado a que gran parte de los agricultores piqueños, se reconozcan como pertenecientes a comunidades indígenas, cobrando relevancia las de origen Quechua.</p>
<p>Regadores por Oficio Nivel de Acción: Micro</p>	<p>Correspondiente a cuatro regadores; tres hombres y una mujer, los cuales reciben una remuneración por regar las distintas chacras.</p>	<p>Su nivel de fuerza es media, puesto que, a pesar de practicar el riego de forma remunerada por parte de la Asociación de Propietarios Agrícolas. Son ellos, quienes cumplen el rol de destapar la cocha cuando el sol se levanta y de volverla a tapar cuando el sol se esconde, conocimientos ancestrales que aún va quedando en esta práctica.</p>

Rol del Agua

El agua cumple un rol fundamental, de hecho, es el elemento principal de esta práctica comunitaria piqueña. Mas, al estar privatizada, es también, uno de los factores que más incide en la pérdida del Riego Comunitario. De hecho, en el mundo andino el agua tiene otra lógica, más ritual y simbólica, que comercial. Debido a su tradición cultural el agricultor(a) andino ha aprendido a "dialogar" con el agua, de diversas maneras, lo que se ve reflejado en la construcción de canales abiertos y subterráneos, represas, estanques o cochas, captación de manantiales, camellones etc., los que, entre otros, son algunos ejemplos de las técnicas de empleo racional y eficiente del agua.

Para el agricultor(a) andino el mundo es un todo vivo, su trabajo es cultivar la vida en la chacra y todo lo que ella representa desde la semilla, la planta hasta la cosecha, reciben un trato, asociado al respeto y cariño. Reflejando, que el trabajo agrícola, constituye más que una actividad productiva. Por lo demás, en la génesis de la cosmovisión andina, el ámbito agrícola, se nos presenta como un sistema altamente comunitario. Por lo tanto, la organización del trabajo; los recursos naturales y el sistema de producción son asuntos de la comunidad. Dentro de esa organización del trabajo, están las prácticas culturales que contienen dicha cosmovisión.

El agua se vuelve entonces, en un elemento de marcada importancia económica, ecológica, social, simbólicamente, constituyendo un elemento cohesionador de la



misma comunidad; un elemento de vida, que permite, a través de ciertas prácticas y rituales, crear identidad y organización.

No obstante, en Chile, el actual código de aguas, el cual, rige desde 1982, y que separa el agua de la tierra, estableciendo según el artículo 5, que: "Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas...". Mientras que, en su artículo 6 establece que: "El derecho de aprovechamiento, es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas... el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quién podrá usar, gozar y disponer de él, en conformidad a la ley".

Respecto de lo anterior, esta lógica mercantil e individualista sobre el recurso hídrico, se contrapone a la lógica comunitaria que tiene el agricultor (a) andino sobre el agua; el cual, bajo esta lógica, se tranza en la bolsa de valores en acciones en donde una acción equivale a 10 minutos de agua, y en donde, aquel que ostente mayor cantidad de capital económico, tendrá la opción de adquirir mayores derechos de agua.

Actualmente, los conceptos modernos sobre el trabajo y los recursos naturales se desarrollan en un mundo desacralizado, donde todo se reduce a una actividad económica -productiva, centrada en la satisfacción de necesidades materiales. Producto de esto, muchas de las prácticas, fiestas y rituales se han ido perdiendo en el tiempo. Sin embargo, quedan muchas por valorar y entender.

Conclusiones

La actividad minera, ha sido uno de los factores claves en el crecimiento urbano del Oasis de Pica. Puesto que ha generado una inmigración tanto de ciudadanos extranjeros, como de chilenos, provenientes de otras regiones; así como de la misma región, pero de zonas interiores. De hecho, según datos del Censo, entre 1.992 y 2.002, década en la que se instalan las empresas mineras, en la zona, la tasa de crecimiento poblacional anual fue de un 9%. Siendo una de las más altas a nivel país. Situación que en definitiva ha afectado considerablemente la cotidianeidad de estos Oasis. Dado que, muchos de dichos inmigrantes, han comprado las antiguas chacras del sector, no para comercializar la fruta, sino para utilizarlas de casa habitación; siendo un factor fundamental en que las prácticas agrícolas en torno a las chacras vayan desapareciendo. A su vez, las antiguas propiedades agrícolas, dejan de ser rentables, Por un lado, producto del bajo precio de la fruta, así como producto del poco recambio



generacional, en referencia a la actividad agrícola. De hecho, datos aportados por la asociación de propietarios agrícolas de la comuna de Pica, señalan que el 80% de la tenencia de la tierra están en manos de personas mayores de 60 años. Lo cual, se ve agravado por la falta de mano de obra. Debido a que, las nuevas generaciones prefieren trabajar en el rubro minero, el cual es mejor remunerado. Por lo demás, cabe hacer notar que, una de las particularidades de estas propiedades agrícolas, es que, al ser de herencias, estas se van parcelizando cada vez más, lo que también incide en que se hagan menos rentable, debido a que su área productiva, es menor. Por lo tanto, se observa un incremento en la venta de los predios agrícolas, siendo adquiridas por personas que, en la mayoría de los casos, vienen de lugares urbanos y que ven en un predio agrícola un lugar de agrado y descanso habitacional, pero que en lo concreto no tienen ninguna relación con las prácticas agrícolas locales. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento demográfico, la baja rentabilidad de la fruta, la falta de mano de obra; la parcelización de las tierras, el poco recambio generacional, sumado al recurso hídrico, que como lo establece el código de aguas pasa a ser un bien transable en el mercado, lo que ha producido especulaciones en torno a dicho recurso; se venden derechos de agua dejando a muchas propiedades sin el líquido vital, pero que se siguen regando de acuerdo a “usos y costumbres”. Repercuten, en que este sistema de organización, no sólo en términos culturales, sino también, en términos ecológicos estén amenazados en el tiempo.

El paisaje se va transformando y con ello las prácticas que lo sustentan, cabe hacer notar en el caso de las prácticas comunitarias del riego; los regadores, no podemos aislarlos de su entorno, existen prácticas comunitarias que se han perdido con el tiempo; la pisa de uvas; se perdió el calendario lunar que fijaba los tiempos de poda y de la vendimia y mucho más atrás, la limpieza de canales; prácticas agrícolas comunitarias que le iban dando un sentido de pertenencia a la comunidad. Como se constata el sector agrícola antiguo también se ve afectado por esta expansión demográfica y urbana, y esto puede generar como consecuencia la pérdida de esta práctica agrícola; que la consideramos vital como componente identitario, y donde el riego es central, y con ello todo el sistema de irrigación que lo compone y que mantendría implícitos “un conjunto de tres categorías de elementos: factores naturales; factores técnicos y factores socioculturales”. (Philippe R.)

Por tanto, el riego por inundación se ve amenazado en situación de privatización del recurso, sobre todo, al estar geográficamente en el desierto más árido del mundo, lo



cual, sin duda, se ve agravado por los efectos del cambio climático. Sin embargo, el riego por inundación permite que el agua filtre, volviendo nuevamente hacia las mismas napas subterráneas. Es decir, constituye una forma de economía circular, que permite que el Oasis de Pica corresponda a un gran sistema hidropónico natural, en pleno desierto. Por lo tanto, la eficiencia de la técnica de riego en términos de manejo ecológico es totalmente sustentable y sostenible en el tiempo. Lo cual, no habría sido posible, si el agricultor(a) andino no hubiese puesto su conocimiento y sabiduría en ello.

Bibliografía

Beck; Ulrich; (1998); La sociedad del riesgo, Hacia una nueva modernidad; Barcelona; Paidó.

Greslou; Francisco; (1990) ;"Agua, Visión Andina y Usos Campesinos"; Hisbol.

Van Kessel; Juan (1992) "Holocausto al Progreso"; Hisbol.

Van Kessel; Juan (1992) "Criar la Vida"; Bivarium.

Baver; Karl; (2004); "Cantos de Sirenas"; El derecho de aguas chileno como modelo para reformas internacionales; Chile; Primera edición Bakeaz.

Baver; Karl; (1995); "Los derechos de Agua y el Mercado: Efectos e implicancias del Código del Agua"; Chile; Bakeaz.

Claveria; Ricardo; "Visión y el Concepto de Desarrollo en las Culturas Andinas"; Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura; Odepa.

Castro; Milka; "Agua, Derechos y Cultura en los Andes del Norte de Chile"; Chungará 29, 1997; Página 63-80; Universidad de Tarapacá; Arica.

Código de Aguas; Título 2; Art. 5, Art. 6.

Lozada; Blithz; "Visión andina y usos campesinos del agua". La Páz; Wiracocha.



Monocultura e concentração de terra - expansão do agronegócio canavieiro no estado de São Paulo, Brasil

José Giacomo Baccarin
Gláucia Elisa Mardegan
Regina Aparecida Leite de Camargo

Resumo

Por razões históricas e institucionais, o complexo sucroalcooleiro no Brasil contempla grande integração vertical entre produção industrial e agrícola. Os usineiros, nome atribuído aos proprietários de agroindústrias de açúcar e etanol, mantêm sob sua administração, em terras próprias ou arrendadas, mais de 60% das lavouras de cana-de-açúcar necessárias para o processamento industrial. Esta integração vertical não é constatada, com tal intensidade, em outros complexos agroindustriais e a expansão da lavoura canavieira sobre áreas de outras atividades tende a contribuir para aumentar a concentração fundiária. Além disto, a partir de 1997, acelerou-se a mecanização da lavoura canavieira, resultando também em efeitos concentradores. Pretendeu-se, primeiramente, verificar se, entre 2006 e 2017, o dinamismo sucroalcooleiro e canavieiro continuou contribuindo para a elevação da concentração da terra em São Paulo, como já se verificara entre 1996 e 2006. O segundo objetivo é testar a hipótese de que a concentração ocorreu com mais contundência na posse do que na propriedade da terra agrícola em São Paulo. Usaram-se dados dos censos agropecuários do Brasil, a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dos cadastros de imóveis rurais, de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Vem se desenvolvendo desde 1996, mais fortemente após 2006, um novo padrão de distribuição da posse da terra no estado de São Paulo, com expressivo crescimento da importância dos estabelecimentos agropecuários acima de 1.000 hectares, que controlavam pouco acima de 25% da área agrícola estadual, em 1996, passando para valor próximo a 45%, em 2017. Este crescimento não esteve associado à aquisição expressiva, mas sim ao arrendamento de terras, especialmente de pequenos e médios pelos grandes estabelecimentos, ou seja, acentuou-se a concentração da posse, sem maiores modificações na concentração da propriedade da terra. Associa-se o crescimento da importância dos grandes estabelecimentos à expansão da área de outras lavouras e, especialmente, da cana-de-açúcar. Em 2017, quase 80% da área de cana-de-açúcar em São Paulo estava localizada em estabelecimentos acima de 1.000 ha.



Palavras chave

Estrutura Agrária, Concentração da Terra, Mecanização Agrícola.

Introdução

Este trabalho estuda a relação entre a expansão do agronegócio canavieiro, de 1996 a 2017, com a concentração da posse e da propriedade da terra no estado de São Paulo, Brasil. Baseado em estudos anteriores, supõe-se que esta expansão foi marcada não apenas pelo monocultivo quase absoluto de vastas regiões do Estado, mas também pelo crescimento mais acentuado da área média dos estabelecimentos agropecuários (exploração da terra) do que dos imóveis rurais (propriedade da terra). Isto se deu porque grandes agricultores, além de terras próprias, lançaram mão do arrendamento de terras de terceiros para expansão de seus canaviais.

Esta separação entre propriedade e exploração econômica da terra aparece na abordagem clássica de Marx (1982), da realidade britânica do século XIX, em que se considera a existência de três classes agrárias, os proprietários da terra, que recebiam a renda da terra, os grandes arrendatários, que administravam a exploração da terra e recebiam os lucros e os trabalhadores, assalariados pelos arrendatários. Esta construção permite explorar o duplo sentido econômico da terra, o de ser um patrimônio (ou reserva de valor), garantindo a percepção da renda da terra, e o de ser objeto de exploração agropecuária que, além de cobrir os custos de produção, salários incluídos, proporciona lucros aos seus gestores.

Em estudo para uma região brasileira, Beskow (1986) informa que, entre 1944/45 a 1978/79, em média, 66% da área de arroz no estado do Rio Grande do Sul foram cultivados em terras arrendadas. No mais das vezes, os arrendadores eram criadores extensivos de gado bovino e ovino, que procuravam, na cessão de terras, um rendimento adicional, importante especialmente nos momentos de baixa de preços da carne. Por sua vez, os arrendatários eram de grande porte, com capital originário, muitas vezes, de atividades comerciais do arroz e que lhes permitia a realização de investimentos na sistematização topográfica do terreno irrigado, construção de açudes, aquisição de bombas de recalque de água e maquinário agrícola, além do pagamento da renda da terra e gastos com o cultivo de arroz.

Algo semelhante acontece, atualmente, nas regiões canavieiras paulistas. Os usineiros, que são os proprietários de agroindústrias sucroalcooleiras, na média do Estado, gerenciam o cultivo de 58% da cana-de-açúcar que processam e compram os 42%



restantes de agricultores independentes, chamados de fornecedores de cana (CONAB, 2008). Das terras gerenciadas pelos usineiros, 20% são terras próprias e 80% arrendadas, enquanto entre os fornecedores esta proporção é de meio a meio (São Paulo, 2016).

A alta integração vertical entre produção sucroalcooleira e cultivo canavieiro é uma característica histórica do Brasil e tem-se mantido no período recente. Além dessa integração vertical, maior que a verificada em outras atividades agropecuárias, deve-se levar em conta que, na média, as usinas de São Paulo gerenciavam 21.557 ha de cana, com a área média de cana própria alcançando 12.628 ha e a de fornecedores, apenas 56 ha, em 2008 (CONAB, 2008). Desta forma, a expansão da área de cana em São Paulo sobre outras lavouras e pastagens tende a provocar aumento do tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários, conforme Baccharin (2016).

O mesmo autor discorre sobre os prováveis efeitos que o aprofundamento da mecanização da colheita de cana, de 1996 a 2017, teve sobre a concentração da posse da terra. Segundo a CONAB (2008), uma colhedora de cana tem capacidade de operar próximo a 1.200 ha/safra, além de ter um custo muito alto. Isto dificulta a permanência dos pequenos e médios fornecedores na atividade canavieira, ao menos que comprem as máquinas em condomínio ou as aluguem junto a empresas especializadas.

Os três últimos censos agropecuários levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram os de 2006 e 2017. Esta é a justificativa prática para ter-se escolhido o período 1996 a 2017 para o estudo. Além disto, ele praticamente coincide com a aceleração da colheita mecânica canavieira em São Paulo.

O primeiro objetivo é verificar se, entre 2006 e 2017, o dinamismo sucroalcooleiro e canavieiro continuou contribuindo para a elevação da concentração da terra em São Paulo, como já se verificara entre 1996 e 2006. O segundo objetivo é testar a hipótese de que a concentração ocorreu com mais contundência na posse do que na propriedade da terra agrícola.

Usam-se duas fontes de dados, a dos três últimos censos agropecuários do IBGE (1995/96, 2006, 2017), que trazem informações sobre os estabelecimentos agropecuários, que é um conceito de posse ou exploração da terra. Outra fonte são os cadastros de imóveis ou propriedades rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com dados de 2018.



Na segunda seção apresentam-se mais detalhes da relação econômica entre usineiros, fornecedores de cana e arrendadores de terra. A terceira seção é dedicada ao estudo de dados censitários e está relacionada com o primeiro objetivo do texto. A quarta faz uma comparação entre dados do IBGE e do INCRA, relacionando-se com o segundo objetivo proposto. Por fim, há uma seção de considerações finais.

Controle da Produção e da Terra sob os Canaviais

Indo além da questão histórica, de formação do capital agroindustrial sucroalcooleiro, pode-se discutir as vantagens e desvantagens da alta integração vertical verificada neste ramo, entre processamento industrial e cultivo agrícola. Entre as primeiras, estaria a maior garantia de fornecimento de matéria prima agrícola para a indústria e a capacidade de influenciar mais fortemente nos preços da cana recebida dos fornecedores. Os fatos dos canaviais não poderem estar muito distantes das usinas, da cana ter que ser processada o mais rapidamente possível e que um canavial deva permitir vários cortes e ser mantido na mesma área entre cinco a seis anos, para amortizar seus altos custos de instalação, servem de estímulos adicionais à continuidade desta alta integração vertical.

Contudo, devem ser destacadas pelo menos duas desvantagens. Uma é que a integração vertical pode levar à imobilização de grande volume de capital em terras agrícolas, comprometendo outros investimentos dos usineiros, especialmente nas instalações industriais. Tal fato, na prática, vem sendo contornado pela substituição da compra pelo arrendamento de terras, o que mantém a administração direta de usineiros sobre os canaviais. Disto pode derivar outra desvantagem, a do empresário se afastar do foco de seu negócio, a produção de açúcar e etanol, para se dedicar a atividades agrícolas.

Alguns grupos sucroalcooleiros, desde há alguns anos, fogem do padrão e compram a maior parte da cana que processam de fornecedores, o que pode estar se ampliando para outros grupos, conforme indicam algumas evidências preliminares (Baccarin, 2019). Se isto se confirmar como tendência significativa nos próximos anos, não deverá resultar em diminuição da concentração da terra sob os canaviais, pois está se dando preferência a contratos firmados com grandes fornecedores, que produzem e entregam muita cana e apresentam capacidade de bancarem os investimentos relacionados à sua colheita mecânica.



Há diferentes tipos de contrato de fornecimento, desde aquele que estipula que o agricultor entregue a cana cortada na unidade agroindustrial até aquele em que todas as atividades agrícolas, plantio, tratamentos culturais e colheita, são gerenciadas pela usina. Entre os dois, há contratos em que a usina assume o gerenciamento da colheita e outros, do plantio e da colheita. Quando prestados pela usina, os serviços citados têm seu custo descontado do preço pago por tonelada de cana.

Atualmente, parece haver uma tendência das usinas diminuírem o gerenciamento direto de atividades na área dos fornecedores, exigindo a entrega de cana colhida em suas unidades industriais. Neste sentido, segundo São Paulo (2017), em 2015, 73% da área de cana dos fornecedores foram colhidos pelas usinas, valor que caiu para 60%, em 2017. Isto também pode ser uma evidência da exclusão de pequenos e médios fornecedores da lavoura canavieira.

Quanto ao aluguel de terras de terceiros realizado por grandes fornecedores e usinas, ele assume a forma de contrato de arrendamento ou parceria agrícola. Esta última traz vantagem tributária, ao permitir recolhimento bem menor de Imposto de Renda pelo proprietário da área. Por isto é usada e não pode ser confundida com parcerias mais antigas, em que o parceiro era de pequeno porte e se submetia às decisões gerenciais do proprietário da terra (D'Incao, 1975).

Os contratos de arrendamento ou parceria duram cinco ou seis anos, período médio do ciclo da cana, antes que se faça um novo plantio na área. O aluguel de terras junto a terceiros pode ser motivado pela resistência de seus proprietários em se desfazerem de seu patrimônio imobiliário ou pela opção dos usineiros em não imobilizarem capital em terras agrícolas em detrimento de investimentos em máquinas e equipamentos agrícolas ou industriais.

Para os pequenos e médios proprietários, a cessão de suas terras para o cultivo de cana possibilita o recebimento de aluguel/ha maior do que na cessão para plantio de grãos ou exploração da bovinocultura (Pinto, 2018). Além disso, ao não gerenciar diretamente a produção, livram-se dos riscos inerentes à agropecuária e, ao mesmo tempo, podem se dedicar a outras atividades econômicas nas cidades. Contudo, há também riscos nessa cessão, como o de não receber o aluguel das terras quando problemas financeiros atingem usineiros e grandes fornecedores.



Outro ponto a considerar, como já anunciado, é o crescimento do corte mecânico de cana-de-açúcar, dificultando a permanência de pequenos agricultores em seu cultivo. De 1997 a 2006, o percentual de área de cana colhida mecanicamente em São Paulo passou de 18% para 40% (Paes, 2007) e, em 2014, ele atingiu 85% (CONAB, 2017).

Aquele que cedeu suas terras para usinas ou grandes fornecedores de cana, depois de alguns anos, tem dificuldades em voltar a ser agricultor, pois sua área encontra-se desprovida de cercas e outras benfeitorias e foi manejada de maneira a facilitar apenas o cultivo de cana. Além disto, seu maquinário agrícola vai se sucateando ou é vendido, o que exige novos investimentos para a retomada da função de agricultor. O envolvimento com outras atividades econômicas na cidade é outro ponto que dificulta sua volta às lides agrícolas, fato que tende a ser mais acentuado no caso dos seus descendentes, herdeiros do patrimônio imobiliário rural.

Conforme Baccarin (2016) é muito comum que nas regiões canavieiras os contratos de parceria ou arrendamento sejam constantemente renovados, de forma a alcançar períodos de várias décadas. Em regiões com muitas usinas, os proprietários rurais podem receber maiores valores pelo arrendamento/parceria, devido à disputa de terras entre elas. Também a qualidade topográfica e química do solo e a distância da sede da usina, entre outros fatores, influenciam no preço pago por hectare alugado.

A aceleração da mecanização dificultou que alguns proprietários continuassem arrendando suas terras para o cultivo de cana, entre eles, os com área com alta declividade e cujo formato exige muitas manobras “improdutivas” (em que não se colhe cana) do maquinário. Também, a partir de uma conjuntura menos favorável, vivida pelo ramo sucroalcooleiro a partir de 2010, terras situadas mais distantes das usinas não tiveram seus contratos de arrendamento/parceria renovados.

A mudança de conjuntura se confirma ao saber que, de 2007/08 a 2010/11, foram abertas novas 82 usinas da cana no Centro-Sul do Brasil (onde se situa São Paulo) e fechadas 12, resultando em saldo positivo de 60 unidades. Já entre 2011/12 e 2016/17, as unidades inauguradas resumiram-se a 11, contra 62 fechadas, com saldo negativo de 51 usinas (UNICA, 2017).

Em regiões com muitas usinas, o fechamento de algumas delas pode não resultar na redução da área canavieira, à medida que as usinas que permaneçam absorvam as áreas das que fecharam. Neste caso, a concentração da terra agrícola tende a se



acentuar. Ao mesmo tempo, aos arrendadores de terras das usinas que fecharam resta a possibilidade de fazer contratos com as usinas em atividade.

Em regiões em que essas substituições não foram possíveis, por exemplo, em que havia apenas uma usina em funcionamento, seu fechamento pode ter resultado em diminuição da concentração da posse da terra e necessidade dos pequenos proprietários voltarem a exercer a função de agricultor.

Uso e Distribuição das Terras dos Estabelecimentos Agropecuários

Ao analisar a Tabela 1, deve-se atentar, inicialmente, que o censo agropecuário registra uma diminuição na área total dos estabelecimentos agropecuários, de 1996 a 2017, muito provavelmente de origem metodológica. Por isto sugere-se maior cuidado nas análises dos valores absolutos.

Ano	Valor	Cana	OuCult.*	Pastagem	Matas	Outros	Total
1996	Mil ha	2.124,5	3.728,7	9.062,3	1.352,4	1.101,4	17.369,2
	%	12,2	21,4	52,2	7,8	6,3	100,0
2006	Mil ha	3.045,8	4.429,1	6.976,2	1.800,7	703,0	16.954,9
	%	18,0	26,1	41,1	10,6	4,1	100,0
2017	Mil ha	4.824,5	4.238,5	4.773,7	1.997,2	678,2	16.512,1
	%	29,2	25,7	28,9	12,1	4,1	100,0
Var. 1996-2017		2.700,0	509,8	-4.288,6	644,8	-423,2	-857,1

Tabela 1. Área dos estabelecimentos agropecuários de São Paulo, segundo o uso da terra, 1996 a 2017.

*Fonte: IBGE (1998, 2009, 2019). *Outros Cultivos - de outras lavouras, exceto cana, e reflorestamento.*

De qualquer forma, evidencia-se uma expressiva expansão da área com cana-de-açúcar, de quase 3,0 milhões ha, fazendo sua participação na área total mais do que dobrar entre 1996 e 2017. A expansão foi mais intensa no subperíodo 2006 a 2017, ainda que outras fontes apontem seu arrefecimento após 2010 (CONAB, 2019).

A área com outros cultivos apresentou pequeno crescimento, absoluto e relativo. Também cresceu a área com matas naturais, indicando recuperação (ainda que insuficiente) de parte da vegetação nativa de São Paulo. As expansões verificadas (cana, outros cultivos e matas), basicamente, ocorreram sobre área de pastagem, que perdeu mais de 4 milhões ha, entre 1996 e 2007.



Em termos de estrutura fundiária, a Tabela 2 evidencia o grande crescimento da participação dos estabelecimentos acima de 1.000 ha na área total. Em 1996, eles ocupavam pouco acima de 25% da área dos estabelecimentos em São Paulo e, em 2017, este valor se aproximou de 50%. As outras quatro faixas de áreas dos estabelecimentos agropecuários perderam participação na área total, de 1996 a 2017.

Pode-se considerar que, após 1996, desenvolveu-se um novo padrão de distribuição da posse da terra em São Paulo. Conforme Baccarin (2019), a análise de oito censos agropecuários, de 1940 a 1996, mostrou certa constância na distribuição do número e da área dos estabelecimentos por grupos de área. Por exemplo, aqueles abaixo de 50 ha representavam próximo a 75% do seu número e apenas 15% de sua área total, enquanto os maiores que 1.000 ha não passavam de 1% do número e tinham sob o seu controle entre 25% e 30% da área total.

Grupo (ha)	Item	1996		2006		2017	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
0 a 50	Núm.	158.913	73,0	177.204	78,6	147.740	78,6
	Área	2.602,6	15,0	2.537,2	15,0	2.068,1	12,5
50 a 100	Núm.	25.599	11,8	20.688	9,2	16.374	8,7
	Área	1.821,9	10,5	1.467,9	8,7	1.162,8	7,0
100 a 200	Núm.	16.258	7,5	13.036	5,8	10.849	5,8
	Área	2.284,8	13,2	1.834,3	10,8	1.522,2	9,2
200 a 1.000	Núm.	14.904	6,8	12.429	5,5	10.718	5,7
	Área	5.903,8	34,0	4.941,6	29,1	4.346,5	26,3
Mais 1.000	Núm.	2.086	1,0	2.093	0,9	2.167	1,2
	Área	4.756,1	27,4	6.173,9	36,4	7.412,5	44,9
Total	Núm.	217.760	100,0	225.450	100,0	187.848	100,0
	Área	17.369,2	100,0	16.954,9	100,0	16.512,1	100,0

Tabela 2. Distribuição do número e área (mil ha) dos estabelecimentos agropecuários, por grupos de área, São Paulo, 1996 a 2017.

Fonte: IBGE (1998, 2009, 2019).

Estudo de Hoffmann e Ney (2010) aponta que o Índice de Gini da distribuição da posse da terra entre estabelecimentos agropecuários de São Paulo passou de 0,760, em 1996, para 0,803, em 2006, ao mesmo tempo em que a participação na área dos 5% maiores estabelecimentos elevava-se de 52,7% para 60,6%. Provavelmente, estes índices, ao serem calculados para 2017, revelarão a continuidade da trajetória de aumento da concentração fundiária em São Paulo.



A elevação da concentração fundiária, ou pelo menos o aumento da participação de grandes estabelecimentos na área total, vem se associando à expansão da área de lavouras, como pode ser visto na Tabela 3.

Grupo (ha)	Cana			Outras Lavouras			Reflorestamento			Pastagem		
	1996	2006	2017	1996	2006	2017	1996	2006	2017	1996	2006	2017
0-50	7,1	5,7	1,7	24,9	17,1	5,1	5,3	6,5	6,0	14,3	19,1	22,7
50-100	6,5	4,6	2,0	13,4	8,8	3,9	4,0	4,1	3,9	11,2	11,2	12,4
100-200	9,7	7,0	3,4	14,6	10,7	6,3	5,2	5,9	5,4	14,5	13,4	14,8
200-1000	29,0	18,3	14,6	31,4	29,2	22,7	24,7	23,3	19,6	37,4	34,3	34,7
+1000	47,7	64,4	78,3	15,6	34,2	62,1	60,7	60,1	65,1	22,6	22,1	15,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabela 3. Distribuição porcentual de terras com diversos usos entre estabelecimentos de diferentes grupos de área, São Paulo, 1996 e 2006.
Fonte: IBGE (1998, 2009, 2019).

Contrariando o senso comum, entre 1996 e 2017, os estabelecimentos acima de 200 ha perderam importância na área de pastagem e aumentou muito a participação daqueles até 50 ha. Destes, 52% da sua área eram ocupadas por pastagem, em 2017, contra apenas 10% nos estabelecimentos acima de 1.000 ha. Uma suposição a ser estudada é que os pequenos estabelecimentos que não foram absorvidos (via compra ou arrendamento) por maiores vêm apresentando dificuldades para explorarem mais intensivamente suas terras, mantendo-as como reserva de valor e com pequena lotação de animais por área de pastagem.

No caso do reflorestamento, a participação dos estabelecimentos acima de 200 ha na área plantada já era muito alta em 1996, próximo a 85%, valor que, praticamente, se manteve até 2017.

Nas outras lavouras, a participação de estabelecimentos abaixo de 50 ha ainda era muito significativa em 1996 e se reduziu abruptamente a partir de então. Por seu lado, a participação dos estabelecimentos acima de 200 ha passou de 47% para 85% no período considerado, concentrando-se fortemente nos estabelecimentos acima de 1.000 ha em 2017.

Em se tratando da lavoura canieira, observa-se que, em 1996, perto de 77% de sua área se concentravam nos estabelecimentos maiores que 200 ha, valor que aumentou para quase 93%, em 2017. A aproximação a ser feita é que não se planta mais cana-



de-açúcar em estabelecimentos pequenos e médios em São Paulo, mesmo porque quase 80% de sua área se localizavam nos estabelecimentos maiores que 1.000 ha, em 2017.

Entende-se que o efeito concentrador provocado pela exploração canavieira foi maior que o oriundo de outras lavouras pelo fato de que a cana apresentou um crescimento de área muito mais significativo no período analisado. Em grande parte, o crescimento da área de cana veio associado à expansão do tamanho dos estabelecimentos que já a cultivavam inicialmente, seja via aquisição ou arrendamento de novas áreas.

Importância do Arrendamento Agrícola em São Paulo

Sabendo que estabelecimento agropecuário não é um conceito de propriedade, mas de exploração econômica, que pode se dar em terras de terceiros, se indaga como usineiros ou grande fornecedores de cana conseguiram aumentar suas áreas, entre 1996 e 2017, comprando ou alugando novas terras? As evidências apontam que o aluguel teve papel preponderante nesse aumento.

Os dados censitários mostram que o número de estabelecimentos sob a responsabilidade de administradores passou de 11,3%, em 1996, para 18,0%, em 2006, ao mesmo tempo em que a área por eles gerida passava de 40,3% para 47,9%, em detrimento de proprietários, parceiros e arrendatários. Ou seja, em 2006, quase a metade da área dos estabelecimentos agropecuários paulistas tinha administradores como responsável (IBGE, 1998, 2009). Os dados de 2017 não são diretamente comparáveis com os dos dois censos anteriores e subestimam a participação dos administradores, mesmo assim eles foram registrados em 19,1% do número e 35,1% da área dos estabelecimentos (IBGE, 2019).

O emprego de administradores na agricultura é indicativo de que um mesmo produtor tem, sob seu domínio, mais de um estabelecimento agropecuário. Aquele com um único estabelecimento tende a administrá-lo diretamente ou através de um membro de sua família, ao menos que se dedique também a outras atividades econômicas.

Na Tabela 4 distingue-se a condição do produtor da condição legal da terra, isto porque um produtor pode ter terras com diferentes condições legais sob seu controle. Fica evidente que diminuiu a importância do proprietário e da propriedade na administração das terras em São Paulo. Isto não pode ser interpretado, integralmente e de pronto, como resultado da venda de propriedades. O que parece que de fato aconteceu é que



muitos proprietários deixaram de administrar diretamente suas terras e as concederam em arrendamento ou parceria. Assim, em 1996, 12,9% das terras agrícolas em São Paulo estavam sendo administradas sob arrendamento ou parceria, valor que passou para 17,6%, em 2006, dando um grande salto depois, atingindo 34,5%, em 2017.

Ano	Item	Proprietário/ Propriedade		Arrendatário/ Arrendamento		Parceiro/ Parceria		Outro (a)*	
		Área	%	Área	%	Área	%	Área	%
1996	Produtor	15.665,7	90,2	1.170,2	6,7	363,1	2,1	170,2	1,0
	Uso Legal	14.951,8	86,1	1.663,1	9,6	567,1	3,3	187,2	1,1
2006	Produtor	15.240,0	89,9	1.158,4	6,8	347,7	2,1	208,8	1,2
	Uso Legal	13.729,4	81,0	2.223,6	13,1	768,8	4,5	223,2	1,3
2017	Produtor	12.128,2	73,5	2.098,1	12,7	1.913,4	11,6	372,4	2,3
	Uso Legal	10.376,4	62,8	3.190,6	19,3	2.506,7	15,2	438,4	2,7

Tabela 4. Distribuição da área dos estabelecimentos agropecuários paulistas, de acordo com a condição do produtor e legal de seu uso, São Paulo, 1996-2017.

Fonte: IBGE (1998, 2009, 20019). *Ocupante, comandatário e assentado de reforma agrária

Em trabalho anterior, Baccarin et al (2018) atribuíram aos proprietários (grandes, principalmente) a responsabilidade pelo aumento da importância das áreas sob o arrendamento/parceria em São Paulo, de 1996 a 2006. Recuando mais no tempo, enquanto em 1975, 17,0% das terras arrendadas ou tomadas em parceria estavam nas mãos de proprietários, em 2006 este percentual alcançara 49,7% (IBGE, 1979, 2009). Ainda Baccarin et al (2018) afirmam que os dados mostram que a área dos muito grandes estabelecimentos agropecuários se expandiu em 1.417,8 ha, de 1996 a 2006, enquanto a área em arrendamento/parceria crescia 1.486,3 ha. Não necessariamente são as mesmas áreas, mas pode-se estabelecer que o crescimento dos muito grandes estabelecimentos se deveu, em grande parte, ao fato de seus responsáveis arrendarem ou tomarem em parceria novas áreas.

A parceria atual é empregada por grandes agricultores porque traz vantagens tributárias, mas de fato trata-se de uma relação de arrendamento. Em 1975, verificava-se a área média dos estabelecimentos de parceiros era de 11,7 ha e apenas 7,7% deles não administravam diretamente ou via membro da família suas áreas (IBGE, 1979). Em 2017, a área média dos estabelecimentos sob o controle de parceiros alcançou 575,6 ha, bem acima da área média de todos os estabelecimentos agropecuários paulistas, de 87,5 ha, e mesmo dos proprietários, de 82,7 ha, enquanto em arrendamento era de



111,7 ha. Os parceiros atuais, em sua grande maioria, não guardam qualquer relação de submissão social e administrativa ao proprietário da terra.

Tomando-se a situação de 2006, o Gráfico 1 mostra clara relação entre o crescimento da participação da cana na área e da importância do arrendamento/ parceria em diferentes mesorregiões de São Paulo. Destaque-se que o coeficiente de correlação atingiu valor acima de 0,9.

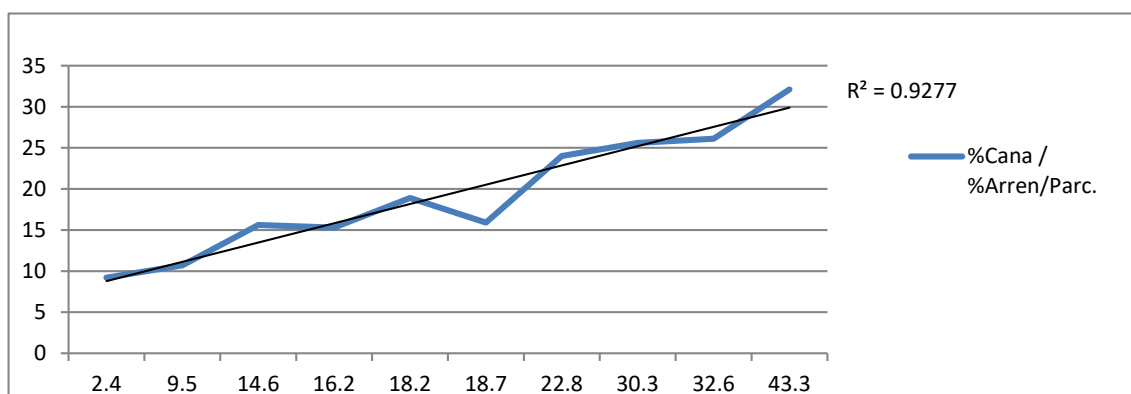


Gráfico 1. Relação entre área canavieira (eixo horizontal) e em arrendamento/parceria, mesorregiões São Paulo, 2006.
Fonte: IBGE (2009).

Grandes Agricultores e Pequenos Proprietários

Ao comparar a distribuição da propriedade e da posse da terra em São Paulo, através da Tabela 5, uma primeira observação é que o total de área levantada no censo agropecuário equivale a 69% da área dos imóveis rurais em São Paulo, indicando que os dados do IBGE apresentam alguma subestimativa. No caso do número, o dos estabelecimentos é de apenas 39% o dos imóveis, indicando que, além da subestimativa, a existência de estabelecimentos que são compostos por vários imóveis rurais.

Grupo de Área-ha	Imóveis Rurais				Estabelecimentos Agropecuários			
	Número	%	Área	%	Número	%	Área	%
até 50	395.105	82,1	5.496	23,0	147.740	78,6	2.068	12,5
50-100	41.866	8,7	2.939	12,3	16.374	8,7	1.163	7,0
100-500	37.814	7,9	7.678	32,2	18.893	10,0	4.000	24,2
500-1000	4.127	0,9	2.845	11,9	2.674	1,4	1.869	11,3
+ 1000	2.297	0,5	4.917	20,6	2.167	1,2	7.412	44,9
Total	481.209	100,0	23.875	100,0	187.848	100,0	16.512	100,0

Tabela 5. Distribuição dos imóveis rurais (2018) e estabelecimentos agropecuários (2017), mil hectares, estado de São Paulo.
Fonte: IBGE (2019), INCRA (2019).



A distribuição dos estabelecimentos é mais desigual, com aqueles até 50 ha detendo apenas 12,5% da área, contra 23,0%, no caso dos imóveis. Já os estabelecimentos acima de 1.000 ha detinham 44,9% da área, mais do que o dobro do verificado para os imóveis, em que esta participação era de 20,6%.

A região imediata de Ribeirão Preto (SP) - RIRP/SP é composta por 26 municípios e fortemente marcada pelo domínio da cana-de-açúcar sobre suas terras. Nesta região os dados da Tabela 6 mostram maior diferença entre a distribuição da posse e da propriedade da terra, em comparação ao Estado. Os estabelecimentos maiores que 1.000 ha na RIRP/SP ocupavam 58,7% de suas terras, bem acima do valor correspondente de São Paulo.

Grupo de Área-ha	Imóveis Rurais				Estabelecimentos Agropecuários			
	Número	%	Área	%	Número	%	Área	%
até 50	11.293	77,4	175.071	18,9	4.603	75,6	60.089	7,7
50-100	1.457	10,0	102.711	11,1	572	9,4	40.292	5,1
100-500	1.537	10,5	301.750	32,6	695	11,4	148.320	18,9
500-1000	204	1,4	143.000	15,5	110	1,8	75.144	9,6
+ 1000	93	0,6	202.831	21,9	108	1,8	459.771	58,7
Total	14.584	100	925.363	100,0	6.088	100,0	783.615	100,0

*Tabela 6. Distribuição dos imóveis rurais (2018) e estabelecimentos agropecuários (2017), região imediata de Ribeirão Preto.
Fonte: IBGE (2019), INCRA (2019).*

A estrutura de propriedade parece ter sido menos atingida pelo dinamismo recente da agricultura paulista, com destaque ao avanço da área canavieira, acompanhado do aprofundamento de sua mecanização. O aumento da escala produtiva não foi tolhido, contudo, com os estabelecimentos crescendo através do arrendamento de terras de outros proprietários.

Considerações Finais

Após quase seis décadas de relativa constância, um novo padrão de distribuição da posse ou exploração da terra se estabeleceu no estado de São Paulo a partir de 1996, mais fortemente de 2006 a 2017. Verificou-se forte crescimento da importância dos estabelecimentos agropecuários acima de 1.000 hectares, que controlavam pouco acima de 25% da área agrícola estadual, em 1996, passando para valor próximo a 45%, em 2017.



Este crescimento não esteve associado à aquisição expressiva, mas sim ao arrendamento de terras, especialmente de pequenos e médios pelos grandes estabelecimentos. Isto pode ser comprovado ao se comparar a distribuição da propriedade com a da posse da terra, nesta última a participação dos estabelecimentos acima de 1.000 ha é mais do que o dobro da participação dos imóveis de mesma dimensão no total de área do Estado. No caso de uma região tipicamente canavieira, a de Ribeirão Preto (SP), a distância entre a importância de grandes estabelecimentos e grandes imóveis é ainda maior.

Em termos formais, o arrendamento, muitas vezes, é registrado como parceria agrícola, pois isto traz uma vantagem tributária ao dono da terra. A área média dos estabelecimentos em parceria mostra-se cinco vezes maior que o tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários em São Paulo. Parceiro hoje é um grande produtor sem relação de submissão administrativa ao proprietário, diferente dos pequenos parceiros, que predominavam na agricultura paulista na década de 1970.

Associa-se o crescimento da importância dos grandes estabelecimentos à expansão da área de outras lavouras e, especialmente, da cana-de-açúcar. O dinamismo desta teve efeito mais contundente, pois a expansão de sua área foi muito superior à expansão da área de outras lavouras. Além disto, o aprofundamento da mecanização canavieira, com uso de maquinário de grande porte e com controles operacionais à distância, dificultou a permanência de pequenos e médios agricultores na atividade. Em 2017, quase 80% da área de cana-de-açúcar em São Paulo estava localizada em estabelecimentos acima de 1.000 ha.

Pretende-se em seguida fazer um estudo regionalizado, que incorpore também informações sobre o parque produtivo sucroalcooleiro. Quer-se comparar os efeitos na distribuição da posse da terra entre regiões com diferentes dinamismos da produção sucroalcooleira e, portanto, da lavoura canavieira, entre 2006 e 2017.

Outro desdobramento pretendido é uma análise mais detalhada do perfil produtivo e da renda obtida de estabelecimentos de diferentes portes. Em 2017, pequenos estabelecimentos, abaixo de 50 ha, apresentaram mais da metade de sua área com pastagem, o que pode estar significando falta de maiores perspectivas de exploração de suas terras. Deve ser testada com mais informações, a suposição de que as condições recentes de desenvolvimento no estado de São Paulo permitiram o crescimento de grandes agricultores em detrimento de médios e pequenos, sem que



isto tenha aumentado a exclusão de pequenos proprietários, muitos deles com rendas familiares dependentes do aluguel de suas terras para terceiros.

Bibliografia

Baccarin, J.G. Expansão e mudanças tecnológicas no agronegócio canavieiro - impactos na estrutura fundiária e na ocupação agropecuária no estado de São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2019.

Baccarin, J.G.; Mardegan, G. & Camargo, R. A. L de. Crescimento de empresas canavieiras e efeitos sobre a distribuição da posse e propriedade da terra no estado de São Paulo, Brasil. In X Congreso ALASRU. *Anais...* 25 a 30 novembro 2018, Montevideo, Uruguay.

Beskow, P. R. *O arrendamento capitalista na agricultura* – evolução e situação atual da economia de arroz no Rio Grande do Sul. São Paulo: HUCITEC, Brasília: CNPq, 1986.

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). *Perfil do setor do açúcar e do álcool no Brasil* - situação observada em novembro de 2007 a abril de 2008. Brasília: CONAB, 2008.

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). *Perfil do Setor do Açúcar e do Etanol no Brasil* - Edição para a safra 2014/15. Brasília: CONAB, 2017.

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). *Safras - cana-de-açúcar, séries históricas*. Disponível em <http://www.conab.gov.br>. Acesso em 25 de outubro de 2019.

D'Incao, M. C. *O boia-fria: acumulação e miséria*. Petrópolis: Vozes. 1975. 154 p.

Hoffmann, R. & NEY, M. G. *Estrutura fundiária e propriedade agrícola no Brasil, grandes regiões e unidades da federação (1970 a 2006)*. Brasília: MDA. 2010. 108 p.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censo Agropecuário do Estado de São Paulo de 1975*. Série Regional, Volume I, Tomo 17, 1ª. e 2ª. Partes. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censo Agropecuário do Estado de São Paulo de 1995-96*. Número 19. Rio de Janeiro: IBGE, 1998.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censo Agropecuário de 2006 - São Paulo*. Número 19. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006_segunda_apuracao/default_tab_uf_xls.shtm. Acesso em 17 de janeiro de 2016. Segunda Apuração.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censo Agropecuário de 2017*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html. Acesso em 12 de novembro de 2019.



INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). *Estrutura fundiária dos municípios do estado de São Paulo*. Brasília: INCRA, 2019.

Marx, K. *O Capital: crítica da Economia Política*. São Paulo: DIFEL, Livro I, Vol. 2, Cap. XXIII. 1982. P. 712-827. 7ª. Edição.

Paes, L. A. D. Áreas de expansão do cultivo da cana. In: MACEDO, I. de C. (Org.). *A energia da cana-de-açúcar – doze estudos sobre a agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil e sua sustentabilidade*. São Paulo: UNICA, 2007. P 125-133. (2ª. Edição).

Pinto, R. Arrendamento e parceria agrícola tornaram-se um grande vilão no Estado de São Paulo. Disponível em <http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1150229>. Acesso em 12 de dezembro de 2018.

São Paulo, Estado de (Secretaria do Meio Ambiente). Etanol Verde - fechamento safra 2014/15. Disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/files/2015/05/Balan%C3%A7o-da-safra-14_15-Dados-Preliminares.pdf. Acesso 9 abril de 2016.

UNICA (União da Indústria de Cana-de-açúcar). Relatório final safra 2016/2017 - Região Centro-Sul do Brasil. Disponível em <http://www.unicadata.com.br/listagem.php?idMn=95>. Acesso em 25 de outubro de 2017.



Financeirização da Agricultura: a complexidade da apropriação de terras pelo capital financeiro no Brasil no século XXI¹

Bruna Figueiredo Gonçalves²

Resumo

A participação do capital financeiro na agricultura tem crescido notavelmente nas últimas duas décadas. A fase mais recente da financeirização da economia remonta aos anos 1970, mas foi nos anos mais recentes que o setor agrícola se tornou destino importante dos investimentos financeiros. O processo de financeirização da economia tem se manifestado por uma pluralidade de formas, estando relacionado na agricultura a novos instrumentos financeiros, que permitem que investidores comprem tanto terras agrícolas quanto produções agrícolas em todo o mundo, até à predominância da lógica financeira nas relações sociais. Nesse sentido, o objetivo do artigo é refletir sobre a ampliação da participação do mercado financeiro na agricultura no período recente, particularmente nos mercados de commodities agrícolas e de terras, notando de que maneira tem ocorrido, e discutir seus efeitos sobre este campo. Ademais, busca-se refletir sobre o papel desempenhado pelo Estado na mediação entre o capital financeiro e a agricultura. A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica, com a utilização de fontes secundárias e técnicas de análise de conteúdo, que incluem fichamentos de leitura e contraste entre teorias e opiniões de outros autores. As conclusões parciais indicam que a presença do capital financeiro na agricultura contribui para transformações profundas no meio rural, como pela subordinação da produção de alimentos às dinâmicas do mercado financeiro, privilegiando um modelo de desenvolvimento que tende a levar ao aumento da fome e da insegurança alimentar e a desconsiderar a função social da terra.

Palavras chaves

Financeirização; agricultura; commodities; mercado de terras;

Introdução

As últimas décadas do século XX e o início do século XXI foram marcadas por transformações profundas nas esferas econômica, política e social, associadas fundamentalmente aos fenômenos da globalização, neoliberalismo e da financeirização da economia. O fortalecimento do capitalismo financeiro, em particular, tem contribuído para transformações significativas na agricultura, e suscita o questionamento de em que medida e de que forma a produção de alimentos, o acesso à terra, a preservação



ambiental e outros tantos aspectos fundamentais ligados ao setor têm sido subordinados às dinâmicas dos mercados financeiros.

A crescente associação entre o capital financeiro e a agricultura tem recebido destaque na mídia e em debates acadêmicos desde meados da década de 2000, período de convergência de múltiplas crises, como a ambiental, financeira, alimentar e energética, devido à especulação financeira com *commodities* agrícolas e alimentares, que elevaram significativamente os valores dos alimentos. A presença de investidores financeiros na agricultura não é propriamente uma novidade e a participação no mercado de *commodities* agrícolas é uma de suas formas mais antigas.

Todavia, o interesse desses atores por este setor parece ter sido renovado nos anos recentes, e além das *commodities*, as terras agrícolas e toda a cadeia da agricultura se tornaram uma nova fronteira de investimento para o setor financeiro. O fenômeno *land grabbing*, termo que se refere a apropriação de terras envolvendo a transferência de propriedade, de direitos de uso e de controle sobre os recursos (Fairhead, Leach, & Scoones, 2012), é expressão do aumento do interesse de investidores financeiros pelo mercado agrícola e de terras.

O presente artigo se insere nessa temática com o objetivo de refletir sobre a ampliação da participação do mercado financeiro na agricultura brasileira no período recente, particularmente nos mercados de *commodities* agrícolas e alimentares e de terras, notando de que maneira tem ocorrido, e discutir seus efeitos sobre este campo. O papel desempenhado pelo Estado na financeirização da agricultura também deve ser analisado.

As análises das dinâmicas do capitalismo contemporâneo têm destacado o caráter financeirizado da economia mundial e, dentre as principais contribuições teóricas sobre o tema no campo da Economia Política estão Greta Krippner, Giovanni Arrighi, David Harvey, Leda Paulani, Gerald Epstein, François Chesnais, alguns autores dos quais os principais conceitos serão brevemente resgatados na primeira parte deste artigo. Cabe ressaltar que o propósito do artigo é refletir sobre a financeirização, sem esgotar o tema, e relaciona-la ainda de maneira introdutória aos investimentos financeiros em agricultura.

Na segunda parte do artigo, pretende-se refletir sobre a complexidade dos novos atores e das novas dinâmicas na apropriação de terras no Brasil, trazidas substancialmente



pela dinâmica da financeirização da economia mundial, que possibilitou a criação e ampliação de novos mecanismos de controle, ainda pouco compreendidos, mas que têm impacto direto sobre a agricultura de modo geral e os *land grabs*. Por fim, o artigo se propõe a refletir, ainda de maneira inicial, sobre as implicações da crescente financeirização da agricultura, bem como pensar o papel do Estado nesse processo.

A metodologia utilizada no artigo é a de pesquisa bibliográfica, com a utilização de fontes secundárias e técnicas de análise de conteúdo, que incluem fichamentos de leitura e contraste entre teorias e opiniões de outros autores. As considerações finais dessa análise indicam que a presença do capital financeiro na agricultura contribui para transformações profundas no meio rural, como pela subordinação da produção de alimentos às dinâmicas do mercado financeiro, privilegiando um modelo de desenvolvimento que tende a levar ao aumento da fome e da insegurança alimentar e a desconsiderar a função social da terra.

A financeirização da economia mundial

O capitalismo tem experimentado desde as últimas décadas do século XX um fortalecimento do capital financeiro, que tem sido tratado na literatura pelo termo *financeirização*. Trata-se de uma expansão das finanças na economia mundial, que começa a ocorrer em meados da década de 1960, período em que, após anos de crescimento mundial vigoroso conduzido pelas políticas keynesianas, marcadas pelo controle de demanda efetiva, Estado de Bem-Estar Social, reconstrução da Europa e da Ásia e industrialização da América Latina, o crescimento econômico começa a desacelerar (Paulani, A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a situação do Brasil¹, 2009).

Nesta mesma década, inicia-se um processo simultâneo de dismantelamento do liberalismo estadunidense, com o fim das políticas acima mencionadas, e a construção de uma narrativa do que era até então pensado como uma 'restauração de ideias conservadoras'. Nesse processo, por um lado, as ideias que constituíam as bases das instituições liberais foram desacreditadas pela combinação dos efeitos tanto da mobilização das empresas, que buscavam ampliar sua influência no sistema político, quanto da contestação ideológica do liberalismo. Por outro lado, tal desestabilização e deslegitimação da ordem institucional anterior abriram espaço para que as ideias do livre mercado fossem resgatadas, se fortalecessem e fossem então implementadas em



determinados países - o neoliberalismo se fortalecia como modelo alternativo de desenvolvimento (Blyth, 2002).

Nos anos de 1970, assim, observa-se uma série de transformações que leva ao fim do regime de acumulação fordista, caminhando rumo a um novo momento no desenvolvimento do capitalismo, no qual a financeirização apresenta-se como característica fundamental. Com o neoliberalismo, diversas medidas de liberalização e desregulamentação foram adotadas primeiramente pelos países centrais, tendo sido estas respaldadas e difundidas a outros países por instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

Dos anos 1930 a 1970, o sistema financeiro era enquadrado por regras que visavam protegê-lo dos efeitos da concorrência, regras estas que mudam radicalmente nos anos 1980, passando a regulamentar a concorrência geral entre todos os atores financeiros em escala internacional (DARDOT & LAVAL, 2016). Nesse sentido, a série de reformas legislativas realizadas permitiu a instalação de um mercado único de capitais, ou seja, houve uma liberação política das finanças (DARDOT & LAVAL, 2016).

Conforme Paulani (2009), nesse mesmo período ocorre a formação de uma massa de riqueza em diversos países, que buscava sua valorização fora do circuito da produção, dadas as perspectivas de lucros menores. A formação dessa massa corroborou os argumentos em favor da desregulamentação e abertura financeira dos mercados, que seriam implementados por Thatcher e Reagan na Inglaterra e nos EUA, respectivamente.

Os países da América Latina após o aumento de suas dívidas com o choque do petróleo, mas todavia ainda afim de dar continuidade a seus crescimentos, apresentavam-se como a demanda por crédito que esses capitais sobreacumulados buscavam. Desse modo, Paulani afirma que no Brasil a financeirização da economia ocorre primeiramente de forma passiva, por ter sido vítima da chamada “crise da dívida externa” nos anos 1980, e então de maneira ativa, a partir de meados dos anos 1990, como potência financeira emergente (Paulani, Não há saída sem a reversão da financeirização, 2017)

Paulani (2009) expõe a expansão das finanças na economia mundial por meio da apresentação de dados que mostram o crescimento do estoque mundial de ativos financeiros, numa velocidade muito maior do que a apresentada pelo crescimento da renda real, logo, da riqueza real. Conforme a autora, entre 1980 e 2006 o PIB mundial



cresceu 314%, ou 4,1 vezes, enquanto a riqueza financeira mundial cresceu, no mesmo período, 1.292%, ou 13,9 vezes. Apesar desses dados, a discussão sobre a financeirização é cercada de disputas e dissensos quanto às afirmações sobre a sua existência, relevância ou significado. De maneira semelhante, a definição do termo financeirização não é consensual na literatura sobre o tema, mas é marcada por uma gama de perspectivas diferentes.

Conforme Greta Krippner (2011), em uma excelente discussão sobre a ascensão das finanças, três correntes de pensamento se destacam no debate sobre tal financeirização da economia. A primeira corrente é constituída por alguns autores que usam o termo financeirização para tratar de novas concepções de administração de empresas, em que a noção de “valor de acionista” (*shareholder value*) passa a direcionar as empresas para os mercados financeiros. A segunda corrente entende a financeirização como uma “mania especulativa” (*speculative manias*), que se iniciam por variadas razões que levam a processos psicológicos e sociais que se tornam manias. Por fim, a terceira perspectiva inclui autores ligados às teorias marxista e do sistema mundo, que, assim como Krippner, defendem a crise da década de 1970 como a raiz para a virada para as finanças, mas veem isso como um padrão estrutural gerado por tendências mais profundas operando no sistema capitalista como um todo (KRIPPNER, 2011).

A terceira corrente identificada por Krippner se sobressai entre as demais pela sua importância e potencial de reflexão. Ainda que estas perspectivas sejam diversas e possuam diferenças entre os argumentos dos seus autores, a autora defende que há em comum entre tais a ideia de que existe algo profundamente sistêmico na recente ascensão das atividades financeiras. Como mencionado anteriormente, os autores dessas correntes defendem que a virada para as finanças ocorre como resposta das organizações governamentais e empresariais à crise da década de 1970, de modo que, em geral, a financeirização adia a crise iminente temporariamente.

No campo marxista, destacam-se como grandes expoentes dessas perspectivas os autores Giovanni Arrighi e David Harvey. Arrighi defende, em sua teoria dos ciclos de longa duração, que a ascensão das finanças ou “expansões financeiras” é um elemento do sistema capitalista mundial, que ocorre regularmente. A partir de uma análise com largo alcance temporal, desde o século XV, o autor defende que uma fase de expansão financeira vem após uma fase de expansão material, quando emerge uma crise de



sobreacumulação, e o capital, não podendo mais ser reinvestido com a mesma lucratividade, migra para a esfera financeira (Arrighi, 1996).

Tal perspectiva em muito se assemelha a desenvolvida por Harvey (2011) para pensar a financeirização. A fase mais recente da financeirização, para Harvey, surgiu como resposta à crise de sobreacumulação da década de 1970, ou seja, um momento em que havia um excesso de liquidez na economia, originado no aumento dos preços do petróleo, à procura de algo rentável em que pudesse ser colocado. Estes países redirecionaram seus capitais excedentes aos mercados financeiros, em atividades especulativas em que o lucro era passível de ser realizado. A financeirização surgiu como uma necessidade e uma forma de absorver o capital excedente (Harvey, 2011).

Krippner, todavia, defende que as três perspectivas mencionadas oferecem uma explicação insatisfatória para pensar o papel do Estado em moldar a virada para as finanças. As perspectivas marxistas e do sistema mundo possuem diversos méritos para a autora, e, por isso, há muito que se aprender com estes teóricos quanto a financeirização, especialmente por compreenderem seu enraizamento histórico e por defenderem o papel do Estado nesse processo não como algo externo, mas completamente interno à análise.

Apesar disso, para a autora, duas críticas gerais a alguns de seus autores devem ser feitas: em primeiro, Krippner argumenta que diversos autores dessa corrente analisam o Estado de maneira instrumental, fazendo a correspondência direta entre os interesses do setor financeiro com os do Estado ou simplesmente assumindo que estes são idênticos; em segundo, defende que a amplitude dessas abordagens, localizadas no nível sistêmico, dificultam a compreensão dos mecanismos e instituições mais concretos relevantes para a análise do processo de ascensão das finanças no período considerado, crítica que cabe aos autores Arrighi e Harvey.

De certo, afirma a autora, está claro que o direcionamento dos investimentos ao mercado financeiro em um momento de baixos retornos nos investimentos produtivos favoreceu as empresas, mas Krippner defende que os autores de tais correntes não esclarecem como a financeirização solucionou não apenas os problemas econômicos das empresas, mas também a crise social e política na qual essa crise econômica estava inserida (KRIPPNER, 2011). Para a autora, é necessário um olhar mais atento aos mecanismos e atores específicos envolvidos nesse processo, sobretudo o Estado e



suas políticas que contribuíram para a financeirização, ainda que não tenha sido uma ação planejada para este fim, que se torna a proposta de sua obra.

Por fim, Krippner afirma que, em sua concepção, o termo financeirização se refere à tendência de lucrar na economia crescentemente por meios financeiros ao invés de por atividades produtivas. Por mais consistentes que sejam os argumentos de Krippner e a metodologia então adotada em sua pesquisa, entende-se que estes não invalidam os argumentos teóricos de autores como David Harvey, mas apresentam-se como complementares a tais.

Diante deste amplo debate em torno da financeirização, este artigo adota uma definição para o fenômeno mais ampla que a de Krippner, pois parece mais apropriada para pensar a crescente relação entre a agricultura e o capital financeiro. Para Epstein (Epstein, 2005, p. 3), outro importante autor do fenômeno, financeirização significa “o papel crescente dos motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros e instituições financeiras na operação das economias doméstica e internacional.” Esta definição destaca o papel crescente das finanças, sem excluir o papel que a atividade produtiva ainda possui na economia.

A financeirização da agricultura

O papel crescente dos motivos, mercados, atores e instituições financeiras na economia brasileira, como argumentou-se acima, tem alcançado cada vez mais a agricultura de vários países, em particular a do Brasil. De certo, a relação entre os setores agrícola e financeiro é de longa data, multiforme e tem se dado ao longo da história por diversos meios, como o financiamento da produção agrícola, apoio financeiro para negociações em bolsas de *commodities* agrícolas, bem como investimentos financeiros em derivativos agrícolas e outras (Clapp & Martin, Agriculture and Finance, 2018).

A presença de investidores financeiros na agricultura, portanto, não é novidade e uma de suas formas mais antigas de participação é no mercado de *commodities* agrícolas. Há relatos que indicam a existência do mercado de futuros de *commodities* já no século XVI na Europa (Clapp & Martin, Agriculture and Finance, 2018). Contudo, esse mercado tem aumentando significativamente nos últimos anos e compreende diversas operações, e garante tanto a proteção contra a volatilidade dos preços das *commodities* a compradores e vendedores, como também possui o papel de ‘descobridor de preços’, visto que os atores dos mercados de *commodities* passam a confiar nos preços futuros



destes contratos, segundo Clapp. No período mais recente, esses mercados atraíram diversos especuladores que investem nos contratos de preços de alimentos a curto prazo como forma de diversificação de seus portfólios (Clapp, 2015).

Nos anos recentes, além das *commodities* agrícolas, as terras agrícolas e toda a cadeia da agricultura se tornaram uma nova fronteira de investimento para o setor financeiro. Seguindo os argumentos do Harvey (2011), com a virada para as finanças, os investimentos financeiros buscaram refúgio em diferentes setores da economia, como o de tecnologia e o imobiliário. Com isso, sobretudo a partir dos anos 2000, o setor agrícola se tornou destino destes investimentos, impulsionados por uma série de razões.

A literatura sobre o fenômeno *land grabbing* vem apontando que investidores financeiros estão entre os principais atores no aumento de apropriações de terras agrícolas no início do século XXI (Mcmichael, 2012). Tal fenômeno se refere à apropriação de terras em larga escala, com vistas a obter o controle sobre este e outros recursos, como a água e recursos verdes, bem como atividades relacionados, em uma dinâmica que tem sido tratada como uma corrida global por terras.

O aumento significativo nas apropriações de terras está relacionado à conjuntura específica em que ocorrem, portanto, ao contexto histórico, político e econômico recente, em particular a ocorrência de múltiplas crises no final da década de 2000, que contribuíram para o aumento do interesse de investidores pelo setor agrícola, como a financeira, alimentar, energética e ambiental, e os programas de ajuste estrutural implementados nos anos 1980 e 1990, que tornaram possíveis os investimentos estrangeiros nos países em desenvolvimento.

Dessa maneira, tem-se que a financeirização da economia é determinante para o aumento de casos de *land grab* em todo o mundo. Segundo Clapp & Martin (2018, p. 7), dentre outros efeitos, “a financeirização fez com que os investimentos na produção agrícola parecessem ser mais seguros do que os investimentos financeiros e fornecessem uma maneira de minimizar os riscos associados aos preços voláteis dos produtos agrícolas.”. A financeirização está relacionada a novos instrumentos financeiros, que permitem que investidores comprem tanto terras agrícolas quanto produções agrícolas em todo o mundo em busca de lucros, ao mesmo tempo que reduzem riscos que foram evidenciados neste contexto de crise. Ainda que o valor produtivo da terra continue sendo chave para atração de investimentos, o crescente



interesse dos mercados financeiros pela compra e venda de terras agrícolas deve ser notado.

Seguindo a ampla definição mencionada de Epstein (2005) para a financeirização, que destaca o papel crescente das finanças sem excluir o papel que a atividade produtiva ainda possui na economia, podemos pensar tais investimentos. Conforme Fairbairn (2014), a terra é, simultaneamente, um ativo produtivo e um ativo financeiro. Apesar de sempre ter possuído qualidades financeiras, a partir da nova fase de financeirização, as terras agrícolas puderam ser incorporadas nos circuitos de capital por diversos mecanismos.

O argumento de Fairbairn é que é justamente essa dupla função que torna a terra singularmente atrativa para os investidores, pois a permite reservar o valor nela investido e até mesmo gerar riqueza pela sua apreciação (especulação que gera ganhos de capital), ao mesmo tempo que permite a produção, gerando rendimentos. As recentes apropriações de terras em larga escala combinam ambos os papéis da terra, isto é, são motivadas tanto pela produção quanto pela especulação, que podem ocorrer, e frequentemente ocorrem, ao mesmo tempo, de maneira a tornar turva a distinção entre as operações financeiras e as produtivas no tocante a terras agrícolas (Fairbairn, 2014). Esta distinção torna-se ainda mais frágil pelas diversas conexões financeiras entre os investidores em terra, conforme será visto na seção seguinte.

As qualidades financeiras da terra são fontes importantes de ganhos de capital que atraem os investidores, que se dão, por exemplo, pela valorização passiva ou valorização através de transformações na terra, como pela formalização de títulos legais de posse ou pela melhoria da infraestrutura de transportes, segundo Fairbairn. Estes investidores costumam ver as terras como fontes de retornos relativamente estáveis a longo prazo, formas de diversificação de seus portfólios e *hedge* contra a inflação. Estes investimentos são feitos em grande parte por bancos, empresas especializadas, fundos de investimentos e ainda outros. Porém, não só atores do setor financeiro tem tratado a terra como um ativo financeiro, mas também atores de dentro do agronegócio, que anteriormente viam na terra apenas seu valor de uso, visto que, conforme mencionado, ao mesmo tempo que as qualidades financeiras da terra despertam interesses, seu valor produtivo também adquiriu uma importância renovada nos últimos anos (Fairbairn, 2014).



A revisão de bibliografia realizada permitiu observar que há uma complexidade nos investidores financeiros do setor agrícola e nos mecanismos utilizados por tais, que todavia seguem pouco compreendidos pela literatura sobre o tema. Assim, estes aspectos serão tratados na seção seguinte, com vistas a compreender esta complexidade de atores e formas de participação no mercado de *commodities* agrícolas e alimentares e de terras.

A complexidade da apropriação de terras no Brasil pelo capital financeiro: novos atores e novas dinâmicas

A expansão da financeirização tem sido acompanhada da emergência de novos atores e novos mecanismos financeiros dos mais diversos tipos. No que tange o setor agrícola, o século XXI é um marco para a entrada de diversos atores no campo brasileiro, de modo que “diferentes tipos de investidores tem alocado capital em todo o circuito produtivo agrícola, desde o controle de terras até as redes agroindustriais, sem deixar de lado a produção propriamente dita” (Frederico & Gras, 2017, p. 14). Apesar de historicamente avessos à investimentos que imobilizam o capital, como os realizados em terra, a financeirização da economia mundial abriu novas possibilidades de incorporação da terra aos circuitos financeiros por meio da sua transformação em um ativo (Fairbairn, 2014).

Entre os novos atores financeiros participantes do mercado de terras e *commodities* agrícolas estão um número significativo de grandes empresas controladas por fundos financeiros e de corporações ligadas tanto à agricultura, como a outros setores da economia, que por vezes se articulam com empresas agrícolas nacionais e grandes produtores para atuarem em diferentes etapas produtivas e culturas (Frederico & Gras, 2017). O relacionamento entre os diversos tipos de investidores e os seus diversos tipos de investimento, estratégias, estruturas organizacionais, dentre outros aspectos, apresentam-se como um quadro complexo de análise e compreensão da financeirização da agricultura. Diante disso, esta seção se esforça em compreender quais são estes novos atores e as suas principais estratégias de atuação no tocante aos ativos alternativos relacionados à agricultura.

Primeiramente, é oportuno compreender que existe uma *classificação de ativos* financeiros, nos quais as diferentes classes de investidores podem investir. Esta classificação se dá em termos da classe de ativos financeiros, que são agrupados devido às suas características comuns. É uma estratégia cada vez mais frequente no



mercado de capitais possuir investimentos em diferentes classes de ativos, para construir uma carteira diversificada entre diferentes tipos de investimento e, assim, reduzir riscos associados a determinada classe em possíveis situações específicas menos favoráveis.

Os ativos financeiros “tradicionais” incluem aqueles de renda fixa, como títulos públicos, títulos de crédito privado, fundos de investimento, e renda variável, como o mercado de ações, mercado de opções, contratos a termo. Gras e Frederico (2017) mostram que, dentro do universo dos investimentos financeiros, tem ganhado cada vez mais destaque e atenção por parte dos investidores os investimentos financeiros classificados como “alternativos”, dentre os quais incluem-se os ativos financeiros, como fundos *hedge*, de *private equity* e mercado de futuro de *commodities*, e os ativos reais, sejam estes agricultura, plantações florestais, imobiliários urbanos, infraestrutura, mineração, energia, metais diversos, dentre outros. Embora os ativos alternativos tenham apresentado amplo crescimento nos anos recentes, ainda representam uma pequena parte dos investimentos totais.

Em segundo lugar, é fundamental notar os diferentes *tipos de investidores* de mercados de capitais existentes, que apesar de possuírem estratégias de atuação e estruturas variadas e distintas, podem ser classificados simplesmente em duas categorias. Existem os investidores individuais, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, que participam sozinhos, diretamente no mercado, e os investidores institucionais, que são fundos de pensão públicos e privados, fundos mútuos, fundações universitárias, fundos de doações, seguradoras, bancos, fundos *hedge* e de *private equity*, entre outros.

Os investidores institucionais destacam-se entre os principais investidores do setor agrícola. O número de fundos de investimento especializados em alimentos e agricultura aumentou de 33 em 2005 para 440 em 2018, administrando cerca de US\$ 73 bilhões em ativos, dentre os quais 16% dos fundos e 17% desse montante administrado estão na América do Sul (Valoral Advisors, 2018). Os fundos de investimento em terra agrícola, particularmente, também cresceram nesse mesmo período, passando de 20 em 2005 para 145 em 2017, administrando cerca de US\$ 32 bilhões, concentrados majormente na América do Norte e na América do Sul (Valoral Advisors, 2018).

Os fundos de pensão têm sido uma das principais fontes de capital novo para o setor e merecem destaque. Estes fundos são numerosos em suas estratégias de atuação, e, quando se trata do setor agrícola, algumas tendências se observam. Muitas vezes, estes



fundos investem em grandes fundos de terras agrícolas que buscam construir carteiras de terras agrícolas diversificadas (Valoral Advisors, 2018). Com o passar do tempo, os fundos de pensão tem passado a atuar em investimentos diretos com empresas em operação, investido em ativos de produção primária (como gado) e atividades da cadeia do agronegócio, em busca de uma implantação mais eficiente de capital e maior controle (Valoral Advisors, 2018).

Alguns grupos corporativos também se destacam como investidores no setor agrícola, particularmente os amplamente conhecidos ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. No período recente, grupos comerciais asiáticos têm direcionado novos investimentos para o setor, sobretudo nos países da América do Sul, como é o caso da chinesa Cofco (Valoral Advisors, 2018).

Algumas tendências podem ser observadas na atuação desses novos atores, como a de associação entre estes dois tipos de investidores centrais, sejam estes grandes corporações, envolvidas no processo produtivo ou não, e investidores institucionais, que então financiam as atividades dessas corporações, estabelecem parcerias e as controlam, direta ou indiretamente. Por exemplo, a criação de subsidiárias financeiras por corporações não financeiras tem se tornado prática comum no universo dos investimentos em agricultura, bem como fusões, aquisições ou associações de múltiplas maneiras.

A observação de alguns investimentos recentes em terras, como os apresentados no quadro 1 abaixo, permite afirmar que os principais investidores adotam variadas estratégias organizacionais e formas de articulação, que vão de encontro a indicação de Krippner (2011) de uma crescente reorganização das corporações estadunidenses em direção a atuação através da criação de empresas subsidiárias. Segundo a autora, uma subsidiária é formada “quando uma firma multidivisional vende uma de suas divisões, criando uma entidade legal separada na qual a controladora detém uma participação controladora, mantendo a participação majoritária das ações da empresa subsidiária” ou ainda estas “podem ser adquiridas quando uma empresa adquire uma participação majoritária em outra empresa” (Krippner, 2011, p. 43).

A complexidade das formas de associação entre diferentes investidores financeiros, que faz parte de suas estratégias de negócios, está intimamente relacionada à própria financeirização da economia mundial. Segundo Dowbor, este fenômeno afeta as estruturas organizacionais das grandes corporações e, portanto, o controle dessas



corporações. Por 'controle' compreende-se a participação dos atores econômicos nas ações da empresa, que dão oportunidades de se ver seus interesses predominarem nas estratégias de negócios da empresa. Hoje se verifica um forte controle de uma corporação sobre outras, pelas diversas conexões financeiras existentes entre tais. Disso decorre o conceito empregado pelo autor de *teia de participações* e a noção de *controle em rede*.

O *controle em rede* corresponde ao montante total econômico sobre o qual um agente tem poder, de modo que, conforme dados analisados pelo autor, um número reduzido de corporações fortemente amarrado hoje detêm cumulativamente a maior parte das participações umas nas outras. Disso, observa-se uma concentração do controle da rede de corporações por parte de um número reduzido de tais, em que predominam intermediários financeiros (Dowbor, 2017, p. 45). Um aspecto fundamental da concentração do controle das demais corporações é o poder econômico e político conferido a este pequeno grupo de corporações no topo da rede.

Dowbor propõe analisar uma pesquisa coordenada por Lumsdaine et al (2015), *A Complexidade Intrafirma das Instituições Financeiras Sistemicamente Importantes*, que identifica 28 principais instituições financeiras mundiais, que compõem o núcleo daquelas que se encontram no topo da rede mundial de corporações. As 'instituições financeiras sistemicamente importantes' são aquelas cuja falência poderia levar a consequências negativas para a economia global por causa das suas dimensões, complexidade e interconexões sistêmicas (Lumsdaine, Rockmore, Foti, Leibon, & Farmer, 2015).

Os dados apresentados pela pesquisa ressaltam a necessidade de se considerar não somente a complexidade interpresarial, mas também a complexidade intraempresarial, que, no âmbito dos investimentos em agricultura, tem se mostrado um aspecto chave, conforme afirma Dowbor. Todavia, essa complexidade e a falta de transparência faz com que se trate de um universo opaco, que dificultam pesquisas (Dowbor, 2017).. Dentre as 28 corporações³ identificadas como sistemicamente importantes pelos autores, encontram-se algumas das investidoras em terras no Brasil, como as japonesas Mitsui e Mitsubishi.

É notável que uma corporação chega a controlar diversas outras empresas, em variados países e setores de atividade econômica, tornando a capacidade de acompanhamento



das atividades internas extremamente limitadas, e, por isso, o resultado financeiro tem sido muitas vezes o único critério acompanhado pela empresa no topo (Dowbor, 2017).

Associado à isso, nota-se que as empresas têm desenvolvido diversas maneiras para aumentar a criação desse valor acionário financeiro, como por fusões-aquisições, recentralização no foco do negócio, terceirização de certos segmentos da produção, redução do tamanho da empresa (Dardot & Laval, 2016).

As regras de controles das empresas foram modificadas com a passagem do capitalismo fordista ao capitalismo financeiro. Observa-se o peso cada vez maior de investidores institucionais, bem como o aumento de capitais estrangeiros na estrutura da propriedade das empresas, que levam as empresas a agirem de modo a buscar os objetivos dos seus acionistas (Dardot & Laval, 2016). O mercado de ações das empresas e a criação e manutenção do seu valor acionário se tornam fundamentais na gestão dos dirigentes, de modo que o comportamento das empresas é profundamente afetado, conforme indicam Dardot e Laval (2016), e o mercado financeiro se constitui em agente disciplinante para todos os atores da empresa, isto é, desde o dirigente até o assalariado de base, todos devem submeter-se à prestação de contas.

No quadro 1 apresentado abaixo estão os principais estrangeiros compradores de terras agrícolas no Brasil, segundo dados da ONG GRAIN (2016). As estratégias mencionadas ao longo desta seção podem ser amplamente observadas na atuação destas grandes empresas, que, embora possuam processos e características em comum, são múltiplas e um levantamento mais detalhado sobre tais não cabem no escopo deste trabalho.

Empresa/Fundo	Principal Proprietário ou Investidor estrangeiro	Hectares	Base do proprietário ou investidor estrangeiro	Sector de Investimento
BrasilAgro	Cresud	166.000	Argentina	Agronegócio
Brookfield Asset Management	Brookfield Asset Management	97.124	Canada	Financeiro
Universo Verde Agronegócios Ltd	Chongqing Grain Group	100.000	China	Agronegócio
Cofco Agri Ltd	COFCO Corp	145.000	China	Agronegócio
Louis Dreyfus Commodities	Louis Dreyfus Commodities	430.000	França	Agronegócio
Renuka do Brasil SA	Shree Renuka Sugars	133.000	Índia	Agronegócio
Agrex do Brasil	Mitsubishi	70.000	Japão	Agronegócio, Industrial
Contagalo General Grains SA	Sojitz Corporation	150.000	Japão	Agronegócio
SLC-MIT Empreendimentos Agrícolas S.A.	Mitsui & Co. Ltd	87.000	Japão	Agronegócio, Industrial



Grupo Iowa	BXR Group	12.000	Holanda	Financeiro, Energético
Fonterra	Fonterra	850	Nova Zelândia	Agronegócio
Prio Foods	Nutre	29.528	Portugal	Agronegócio
El Tejar	Altima Partners	130.000	Reino Unido	Agronegócio
Triscorp Investimentos	Milltrust International Group	10.000	Reino Unido	Financeiro
Adecoagro	George Soros	127.000	EUA	Agronegócio
Archer Daniels Midland	Archer Daniels Midland	12.000	EUA	Agronegócio
Bunge	Bunge	249.000	EUA	Agronegócio
Galtere	Galtere	25.000	EUA	Financeiro
Proterra Investment Partners	Cargill	35.000	EUA	Agronegócio
Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA)	Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA)	424.000	EUA	Financeiro
YBY Agro	YBY Agro	320.000	EUA	Agronegócio

Quadro 1. Principais estrangeiros compradores de terras no Brasil
Fonte: GRAIN (2016). Elaboração própria.

Além das múltiplas inovações em produtos financeiros, práticas e tecnologias, que impulsionaram a ascensão das finanças e da conjuntura política e econômica específica de convergência de múltiplas crises, de aparecimento de *commodities* flexíveis, dentre outros fatores, que tornaram elementos do setor agrícola mais atraentes ao capital financeiro, deve-se destacar ainda o papel primordial desempenhado pelo Estado no processo de financeirização da economia como um todo, e da agricultura em particular. Este debate será realizado na seção seguinte.

O papel do Estado

O capital financeiro é historicamente relutante em investir na agricultura devido aos riscos inerentes à natureza desta atividade em comparação a outros setores. Por isso, os governos têm desempenhado papéis fundamentais no fornecimento de apoio a agricultores por meio de subsídios como empréstimos, hipotecas, políticas de preços, ajuda a exportação, além de sistemas de financiamento rural mais amplos, que incluem diversos tipos de seguros, entre outros (Clapp & Martin, Agriculture and Finance, 2018). Todavia, Clapp e Martin (2018) indicam que hoje se observa um certo afastamento do Estado nos assuntos financeiros da agricultura e um gradual aumento do papel do próprio setor financeiro em moldar a atividade agrícola. Este processo está intrinsecamente relacionado ao fenômeno da financeirização.

A ação estatal nos anos 1980 e 1990 em diversos países, como é o caso do Brasil, que, por meio de reformas de liberalização e privatização, redução do papel de agências de



crédito nacionais e o encorajamento do investimento estrangeiro direto, dentre os medidas, contribuiu significativamente para a ascensão das finanças. Paulani (2017) afirma existir um arcabouço institucional no Brasil construído para atender aos interesses da riqueza financeira, que explicam

“(...) a enorme abertura financeira, com ausência de qualquer controle sobre os fluxos internacionais de capital, a internacionalização do mercado brasileiro de bônus, as concessões tributárias a proprietários de ações e a ganhos financeiros de não residentes, as alterações legais para dar maior garantia aos credores do Estado (Lei da Responsabilidade Fiscal) e do setor privado (reforma da Lei de Falências), as alterações no regime geral previdenciário (INSS) e nos regimes próprios de servidores públicos e, last but not least, a adoção de um receituário macroeconômico agressivamente voltado para o benefício da riqueza financeira, baseado na austeridade fiscal e em taxas reais de juros absurdamente elevadas, frequentemente as campeãs do mundo.” (Paulani, Não há saída sem a reversão da financeirização, 2017, p. 30).

No que tange os investimentos em terras, a ação do Estado brasileiro possui papel essencial em criar condições necessárias para o avanço desses negócios, conforme afirma Kato (2018):

“Políticas de regularização fundiária facilitam a transferência de terras públicas para as mãos privadas. As áreas devolutas passam a ser negociadas e destinadas com mais rapidez. Políticas ambientais e trabalhistas são fragilizadas. Essas dinâmicas chegam aos territórios permeadas do uso da força, da violência contra indígenas, posseiros e agricultores familiares. Com isso, povos e comunidades tradicionais ora são expropriados, ora são submetidos à integração e à exploração nas cadeias globais.”

Com a instauração do neoliberalismo, o que se nota é que “o capitalismo se reorganizou sobre novas bases, cuja mola é a instauração da concorrência generalizada, inclusive na esfera da subjetividade” (Dardot & Laval, 2016, p. 202). Desse modo, “o que aprouve chamar “desregulamentação”, termo ambíguo que poderia dar a entender que o capitalismo não conhece nenhum outro modo de regulação, é na realidade uma nova *ordenação* das atividades econômicas, das relações sociais, dos comportamentos e das subjetividades” (Dardot & Laval, 2016, p. 202).

Os autores falam da emergência de uma nova racionalidade para pensar o período tratado. O papel do Estado e das organizações econômicas internacionais no



estabelecimento do novo regime de acumulação predominantemente financeiro é indicativo da emergência dessa nova racionalidade, uma nova *ordenação* das atividades econômicas, das relações sociais, dos comportamentos e das subjetividades, no qual o Estado possui papel ativo (Dardot & Laval, 2016).

Os efeitos dos investimentos em larga escala em alimentos e terras agrícolas

O aumento da participação de atores financeiros e a criação de novos instrumentos financeiros na economia têm sido debatidos por diversos pesquisadores, membros da sociedade civil e outros pelos efeitos que estes possuem sobre a agricultura e o mundo rural, ainda que estes efeitos ainda não sejam plenamente compreendidos por todos. A complexidade das teias financeiras, dos instrumentos utilizados, muitas vezes ininteligíveis para boa parte da população, bem como a falta de transparência em termos de capitais alocados e a própria novidade e dinamismo dessas atividades tornam a apreensão de tais e de seus efeitos mais difíceis.

Contudo, alguns elementos já conhecidos permitem afirmar que a presença do capital financeiro na agricultura certamente contribui para transformações profundas no meio rural. Indicativo central disso é a subordinação da produção de alimentos às dinâmicas do mercado financeiro, que privilegia um modelo de desenvolvimento que tende a levar ao aumento da fome e da insegurança alimentar e a desconsiderar a função social da terra.

Destaca-se, portanto, na literatura sobre o tema a preocupação com o sistema alimentar. Jennifer Clapp (2014) indica haver um crescente “distanciamento” no sistema alimentar entre os produtores e os consumidores de alimentos. A grande financeirização do sistema alimentar global contribui para tal distanciamento pelo aumento no número de atores envolvidos nas cadeias globais de *commodities* agroalimentares e pela abstração da comida da sua forma física para derivativos de alta complexidade, que são incompreensíveis para a maior parte da população. Este distanciamento obscurece o papel dos atores financeiros e os custos colocados por suas atividades, tornando mais difícil a luta de grupos que buscam a redução do impacto das finanças sobre a volatilidade dos alimentos e sobre a fome.

O distanciamento entre a empresa que efetivamente produz um alimento e os diversos níveis de *holdings* a que ela pertence, dado o frequente alto grau de concentração, hierarquização, burocratização e gigantismo, implicam na dificuldade de governança de



grandes grupos econômicos e de asseguarção da coerência das atividades com os interesses da sociedade (Dowbor, 2017). Os investidores institucionais como fundos de pensão e outros, pouco conhecem o que acontece em suas empresas bases ou pouco se interessam pelos impactos sociais e ambientais de suas produções – suas estruturas fazem com que estes acompanhem apenas o rendimento do mix de ações da sua carteira de aplicações. Conforme Dowbor, estas corporações tropeçam de processo em processo judicial, de crise em crise, tendo como único denominador comum de racionalidade a maximização dos resultados financeiros (Dowbor, 2017).

A financeirização da terra transformou a terra e um ativo e a agricultura em uma atividade cada vez mais subordinada à lógica financeira. Dessa disputa por recursos naturais decorrem ameaças e pressões sobre ruralidades alternativas, que fogem a lógica produtivista dominante (Kato, 2018). Nesse processo, populações têm sido expulsas de suas terras em diversas partes do mundo, recursos antes partilhados, como a água, têm sido privatizados e inseridos na lógica capitalista de acumulação, o agronegócio substituído a agropecuária familiar, aumentam-se os níveis crescentes de toxidades na terra e na água, e muito mais (Sassen, 2016).

Considerações finais

A participação do mercado financeiro na agricultura brasileira, particularmente nos mercados de *commodities* e de terras agrícolas, tem se ampliado no período recente por uma série de fatores apontados ao longo desse artigo. A financeirização da agricultura tem sido marcado pela entrada de uma pluralidade de atores econômicos na disputa por recursos naturais, alguns que até mesmo nunca foram ligados ao mundo rural, que se relacionam de maneira complexa entre si, com os ativos reais nos quais investem, com a sociedade e o meio ambiente. Os efeitos dessa financeirização estão relacionados a à subordinação da produção de alimentos às dinâmicas do mercado financeiros, à mercantilização da terra e outros recursos naturais, a uma reconcentração da terra no Brasil, e a expulsões de populações tradicionais.

Notas

¹ Pesquisa realizada com apoio financeiro da CAPES e do CPNQ

² Doutoranda em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo CPDA/UFRRJ. E-mail: bruna_fg@ymail.com

³ Ver (Lumsdaine, Rockmore, Foti, Leibon, & Farmer, 2015).



Referências

- Arrighi, G. (1996). *O Longo Século XX: dinheiro, poder e as origens do nosso tempo*. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Blyth, M. (2002). *Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Changes in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clapp, J. (2015). Distant agricultural landscapes. *Sustainability Science*, pp. 305-216.
- Clapp, J., & Martin, S. J. (2018). Agriculture and Finance. Em K. D. Thompson P., *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics* (pp. 1-9). Dordrecht: Springer.
- Dardot, P., & Laval, C. (2016). *A Nova Razão do Mundo. Ensaio Sobre a Sociedade Neoliberal*. São Paulo: Boitempo.
- Dowbor, L. (2017). *A Era do Capital Improdutivo*. São Paulo: Outras Palavras & Autonomia Literária.
- Epstein, G. A. (2005). Introduction: Financialization and the World Economy . Em G. A. (Ed.), *Financialization and the World Economy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Fairbairn, M. (2014). Like gold with yield': evolving intersections between farmland and finance. *The Journal of Peasant Studies*, pp. 777-795.
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2).
- Frederico, S., & Gras, C. (2017). Globalização Financeira e Land Grabbing: constituição e translatinização das megaempresas argentinas. Em J. A. Bernardes, S. Frederico, C. Gras, V. Hernandez, & G. M. (orgs), *Globalização do Agronegócio e Land Grabbing: a atuação das megaempresas argentinas no Brasil* (pp. 12-32). Lamparina.
- Grain. (2016). *El acaparamiento global en el 2016: sigue creciendo y sigue siendo malo*. Grain, Barcelona. Acesso em 10 de julho de 2010, disponível em <https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo>
- Harvey, D. (2011). *O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo*. São Paulo: Boitempo.
- Kato, K. (2018). Financeirização da terra: campo-cidade hoje e o conceito de bem viver. Em I. Moura, & M. P. (Orgs), *Outras Economias: alternativas ao capitalismo e ao atual modelo de desenvolvimento* (pp. 41-52). Rio de Janeiro: Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS).
- Krippner, G. R. (2011). *Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.



- Land Matrix. (2018). *The Land Matrix Global Observatory*. Acesso em 26 de mar de 2018, disponível em The Land Matrix Global Observatory: <http://www.landmatrix.org/en>
- Lumsdaine, R., Rockmore, D., Foti, N., Leibon, G., & Farmer, J. (2015). *The Intrafirm Complexity of Systemically Important Financial Institutions*. Fonte: <https://ssrn.com/abstract=2604166>
- Mcmichael, P. (2012). The land grab and corporate food regime restructuring. *Journal of Peasant Studies*, 39(3).
- Paulani, L. M. (2009). A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a situação do Brasil1. *Estudos Avançados*, 66(23), pp. 25-39.
- Paulani, L. M. (2017). Não há saída sem a reversão da financeirização. *Estudos Avançados*, 31(89), pp. 29-35.
- Sassen, S. (2016). *Expulsões: Brutalidade e Complexidade na Economia Global*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Valoral Advisors. (2018). *2018 Global Food & Agriculture Investment Outlook*. Valoral Advisors.



Formas e processos políticos do agronegócio brasileiro: Articulações de interesses nas cadeias produtivas de soja e carne

Antonio Marcos Pereira Santos¹
Felipe Ferrari da Costa²

Resumo

Entender os processos e formas políticas de expansão do agronegócio brasileiro requer considerar a relação de interdependência da estrutura fundiária com a esfera política institucional decisória. O objetivo desse artigo é apontar os elementos políticos da articulação de interesses do setor agropecuário em relação a duas *commodities* do agronegócio brasileiro (soja e carne). Neste propósito, pretende-se também entender o poder de influência do setor ruralista nas decisões políticas voltadas a este setor. Considerando as contradições políticas e econômicas das formas de expansão do agronegócio, cabe explorar o papel das coalizões ruralistas formadas para coordenar interesses e, influenciar nos resultados relacionados à economia política do agronegócio. Neste sentido, as questões centrais de investigação colocadas aqui são: a) Em linhas gerais, como se desenvolveram as políticas de expansão do agronegócio brasileiro e, especificamente das cadeias produtivas de soja e carne no período recente? b) Como determinados atores políticos, ligados a estas cadeias, atuaram na concertação política do agronegócio neste contexto? Assim, toma-se a estrutura política e institucional para entender a concertação política de interesses dos atores ligados ao agronegócio. Metodologicamente, além do diálogo com a literatura existente, analisou-se alguns dos resultados de políticas institucionais voltadas para a economia política do agronegócio no período recente, refletindo a respeito do conteúdo político destas decisões, que influenciaram no processo de expansão do agronegócio brasileiro.

Palavras chave

Agronegócio; Coalizões; Ruralistas; Interesses; Instituições.

Introdução

Partimos da hipótese geral de que as estratégias, ações e omissões do Estado brasileiro contribuíram para construção da narrativa de sucesso econômico do agronegócio. Nessa premissa hipotética argumentamos a existência de uma constante configuração de defesa de interesses deste setor agropecuário pelo Estado. Desse modo pretendemos percorrer a relações de interdependência entre as esferas políticas e econômicas para compreender as formas e processos políticos recentes de



reestruturação do agronegócio brasileiro. Para delimitar a caracterização dessa dinâmica política e econômica do setor agropecuário na agenda do Estado a partir da década de 2000, usaremos a denominação de economia política do agronegócio para além da concepção metodológica de análise da concertação política do setor agropecuário. Associamos também à concepção de economia política do agronegócio como pacto hegemônico de um modelo de desenvolvimento pautado em uma agenda política agroindustrial (Mendonça, 2015; Almeida, 2011; Belik, Reydon, Guedes, 2007; Reydon, 2007).

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é problematizar, à luz da literatura já existente, as recentes formas e processos políticos de expansão do agronegócio brasileiro, tendo como foco as cadeias produtivas de soja e carne. Considerando a diversidade de atores políticos (indivíduos, grupos e instituições) e de interesses (complementares ou antagônicos) que se entrelaçam no cenário político e econômico dessas duas principais cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, busca-se apreender as redes de interdependência e a configuração estabelecida entre os atores políticos em seus espaços de atuação (Elias, 2000, 2001, 2008). No caso dos agentes do agronegócio, a configuração social que os envolve é também uma configuração de poder, que lhes assegura posições privilegiadas no processo de tomada de decisões, perante outros agentes e grupos sociais.

Para explorar essas dimensões interdependentes de configuração do agronegócio brasileiro, este estudo se pauta em dois principais questionamentos, a saber: a) Em linhas gerais, como se desenvolveram as políticas de expansão do agronegócio brasileiro e, especificamente das cadeias produtivas de soja e carne no período recente? b) Como determinados atores políticos, ligados a estas cadeias, atuaram na concertação política do agronegócio neste contexto?

Para tanto, este trabalho está organizado em quatro seções, além desta introdução: na primeira seção refletimos sobre alguns dos elementos econômicos que compõem o cenário de desenvolvimento das cadeias produtivas de soja e carne no Brasil, considerando o período recente; na segunda seção desenvolvemos alguns apontamentos relacionados à ação política do agronegócio neste contexto, buscando compreender como o setor agropecuário e agroindustrial atua e se faz representar na esfera política institucional brasileira; na terceira seção buscamos construir alguns elementos de reflexão sobre a dinâmica configuracional do agronegócio, pensando



especificamente no âmbito das cadeias de soja e carne; e, por fim, na quarta seção esboçamos alguns elementos de considerações finais deste artigo.

Alguns elementos econômicos das cadeias de soja e carne no Brasil recente

Analisando-se o desenvolvimento das cadeias agroindustriais brasileiras a partir da década de 1990, percebe-se um significativo processo de retomada de crescimento deste setor em termos de produção e participação na composição do comércio externo do país. Especificamente a partir de 1994, houve ligeiro crescimento na contribuição do setor agropecuário para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, processo que se manteve constante até 1999, quando ocorre nova onda de crescimento do setor, consolidando, na década de 2000, forte retomada do protagonismo das cadeias agroindustriais na política macroeconômica brasileira.

Este processo, entendido por Delgado (2012) como momento de relançamento da chamada “economia do agronegócio”, teve como base uma expansão no mercado das *commodities* agrícolas, a “reprimarização” do comércio externo brasileiro, a revalorização no preço das terras e dos arrendamentos no país e a reconstituição de importantes políticas públicas de fomento ao setor agrícola, sobretudo aquelas ligadas ao crédito rural.

Uma das bases desta reprimarização do comércio externo brasileiro – onde se intensificou no país uma política de exportação centrada em torno dos produtos oriundos do agronegócio, dos recursos naturais e dos produtos industriais de baixa intensidade tecnológica -, foi a alta no preço das *commodities* agropecuárias, processo iniciado em meados de 2001, tendo sido impulsionado, de um lado, pelo crescimento da demanda chinesa em relação a estes produtos e, de outro lado, por um relativo esgotamento da capacidade de ampliação da produção em países como os Estados Unidos (Pompeia, 2018).

Desta forma, a partir de meados dos anos 1990, o agronegócio brasileiro tornou-se o setor produtivo com maior contribuição no PIB e na balança comercial do país. Como dito, esta perspectiva de aumento na produção e exportação das *commodities* agropecuárias foi confirmada e, até mesmo, intensificada na década de 2000. De 2002 a 2011 o PIB agropecuário cresceu 57,6%, superando a indústria (40,6%) e serviços (53,5%) (Belik, 2001, 2015). É neste período que o Brasil se consolida, com significativa margem de diferença, como o segundo maior exportador mundial de soja. Além disso,



a área plantada é outra característica da expansão do complexo da soja. Enquanto entre 1990 e 1999 o crescimento da área cultivada foi de 38,6%, entre 2000 e 2018 foi de 160,2%. Assim, o crescimento percentual ao longo da série histórica entre 1990 e 2018 foi de 260,2% (IBGE, 2017).

O setor da pecuária de corte, especificamente do complexo da carne bovina, também acompanhou esta perspectiva de crescimento, sendo que no período entre 2000 e 2011, o efetivo de crescimento do rebanho bovino de corte foi de 25,2% (Belik, 2015). Já o aumento da produção de carne, considerando agora uma série histórica mais ampla (de 2000 a 2018) registrou aumento de 58,8%, sendo que em 2018 o Brasil bateu recorde no volume de carne exportada, com 1,64 milhão de tonelada, alcançando um crescimento de 11% em comparação ao ano anterior (2017)(ABIEC, 2018).

Os gráficos abaixo exemplificam o crescimento do agronegócio a partir das características quantitativas das duas *commodities* agropecuárias em questão (soja e carne) em uma série histórica entre 1990 e 2018. Os exemplos ilustram a evolução destas *commodities* sem deduzir relação direta e conclusiva entre as variáveis apontadas. Os dados sobre crédito rural, produção e área utilizada servem para ilustrar quantitativamente o pano de fundo dos processos aqui abordados.

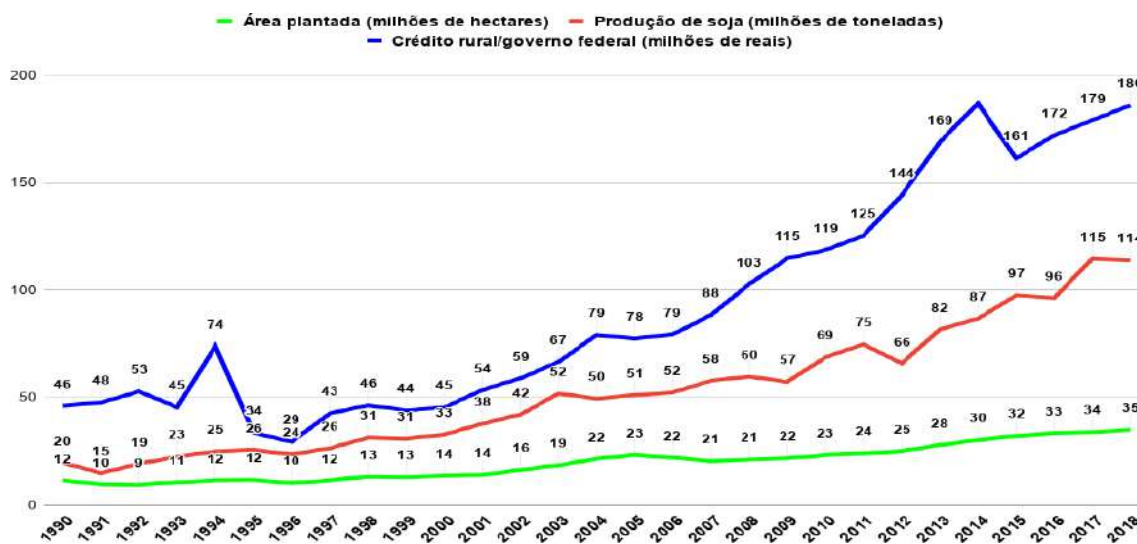


Gráfico 1. Evolução da soja entre 1990 e 2018

Fonte: Elaboração própria, extraído do IBGE/PAM/SIDRA (2017) e Banco Central (2018).

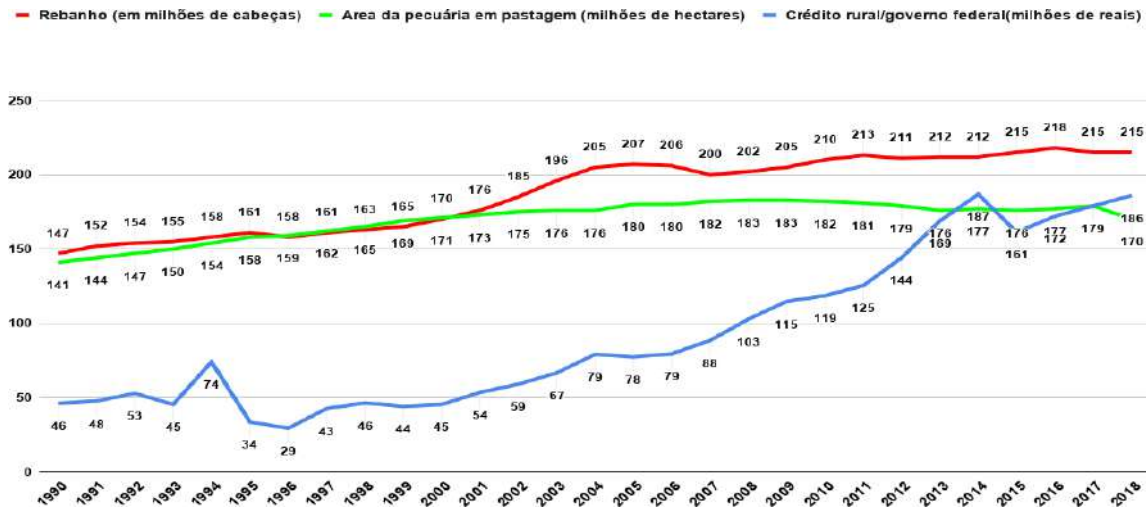


Gráfico 2. Evolução pecuária bovina entre 1990 e 2018

Fonte: Elaboração própria, extraído do IBGE/PAM/SIDRA (2017); Banco Central(2018) e ABIEC (2018).

Apresentados estes dados, cabe destacar que este forte crescimento na produção e aquecimento no mercado das *commodities* agropecuárias resultou também de diversas políticas governamentais adotadas em esfera nacional, como financiamento e crédito a juros baixos, desenvolvimento de infraestrutura de produção, beneficiamento e comercialização, pesquisas agropecuárias com forte articulação aos interesses das empresas multinacionais do setor, além da flexibilização das normas do mercado de terras e da garantia da propriedade e do monopólio fundiário.

Estas ações apontavam o empenho e comprometimento que o Estado brasileiro teria na reestruturação ou no relançamento da chamada “economia do agronegócio”. Neste cenário de articulações e interdependência entre diversos atores econômicos e políticos, o conceito de agronegócio é inserido para caracterizar a lógica agroempresarial que envolve diversos atores sociais, como produtores rurais, fornecedores de insumos, processadores de matérias primas, empresas multisetoriais e o grande capital nacional ou multinacional.

Conforme Delgado (2012, pp. 89-93), do ponto de vista político, o agronegócio pode ser entendido como resultante de uma aliança entre as cadeias agroindustriais, a grande propriedade fundiária e o Estado brasileiro, com vistas a configurar determinado modelo de acumulação capitalista no campo. Portanto, é a partir desta noção de agronegócio e da conceituação de configuração social (Elias, 2000, 2001, 2008) que nos propomos pensar alguns dos processos econômicos e políticos ocorridos no arranjo institucional decisório em torno dos setores de carne e soja, a partir da década 1990. Com isso,



busca-se compreender alguns elementos, formas e processos políticos da expansão do agronegócio brasileiro no período recente.

Alguns apontamentos sobre a ação política do agronegócio brasileiro

Como comentado, o aumento da importância do agronegócio na política macroeconômica brasileira resultou de um conjunto de decisões políticas executadas pela cooperação público e privado, através da criação e alteração de normas e regras institucionais e da produção de políticas voltadas para o setor agropecuário.

Mendes (2017) mostra que o apoio ostensivo de legislações, jurisprudências, normas e recursos financeiros do Estado, possibilitou o fortalecimento do agronegócio na década de 2000. Segundo o autor, estas decisões políticas moldaram as formas institucionais de consolidação do agronegócio no país. Neste sentido, Silva (2012) também argumenta que o comportamento dos atores do agronegócio na esfera institucional é articulado por suas principais entidades de representação corporativa e por alguns partidos políticos, com objetivo de obter resultados políticos favoráveis ao setor.

Desta forma, em diálogo com a literatura que versa sobre o tema (Bruno, 1997, 2009; Mendonça, 2009, 2010; Silva, 2012; Pilatti, 2008), considera-se aqui a importância da representação coletiva e o poder de pressão das entidades de classe do setor agropecuário e agroindustrial nas tomadas de decisões políticas ligadas ao agronegócio. Parte-se da premissa que a atuação destes agentes, seja em entidades representativas, partidos políticos ou espaços de pressão e de *lobby*, contribui para a organização do agronegócio na agenda política governamental e para seu fortalecimento político na sociedade de modo geral. Assim, a representação política dos agentes do agronegócio, é pensada aqui como um dos principais traços que caracterizam a ação política destes grupos: a multiorganização do setor, processo que teve início com a modernização agrícola no país, ganhando intensidade a partir de 1985, período conhecido como Nova República (Bruno, 1997; 2009; Mendonça, 2009; 2010).

Segundo Bruno, Lacerda e Carneiro (2012, pp. 521-522), “a prática da multiorganização em muito contribui para neutralizar a segmentação de interesses e para a construção do consenso” no seio das classes dominantes agroindustriais.

Neste processo, “frequentemente uma mesma fração de classe, setor produtivo ou porta-voz participa, concomitantemente, de várias instâncias de representação”, as quais vão desde a estrutura oficial do sindicalismo patronal rural, representado



nacionalmente pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), passando por associações por produto e multiproduto, por entidades tradicionais do setor, como a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) ou por entidades como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). Em alguns casos, estas lideranças do agronegócio se fazem representar nos departamentos e conselhos das Federações da Indústria e do Comércio, ligados ao tema da agricultura.

Além disso, de modo geral, as entidades de representação corporativa e os porta-vozes do agronegócio articulam-se no âmbito da política institucional com a atuação de políticos e parlamentares ligados aos interesses do agronegócio. No âmbito do Congresso Nacional, a atuação destes agentes articula-se, sobretudo, em torno da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), também conhecida como Bancada Ruralista.

Desta forma, se são diversos seus espaços de representação e de atuação política, o agronegócio deve ser visto também a partir de sua heterogeneidade interna, já que envolve relações entre agentes e grupos com divergências de concepções, diferenças de poder e disputas sobre vários temas. Estas tensões se manifestam como disputas gerais e lutas pela definição do conteúdo das políticas setoriais para o agronegócio, podendo, em última análise, se converter em disputas em torno da própria legitimidade da representação patronal (Bruno, 1997; 2009; Mendonça, 2009; 2010).

No entanto, mesmo com interesses muitas vezes divergentes e específicos de acordo com sua cadeia produtiva e condição de produção, os agentes do agronegócio se unem em torno da defesa de interesses fundamentais do grupo - sobretudo no que se refere à defesa da propriedade e do monopólio da terra - e, desta forma, compartilham estratégias para assegurar uma estrutura política decisória e constitucional favorável à institucionalização de seus interesses, defendendo condições favoráveis para o desenvolvimento de atividades ligadas à produção rural e, de modo geral, à rede de negócios industriais, empresariais e fundiários que compõe o agronegócio.

Analisando-se concretamente o cenário de desenvolvimento deste setor no período recente, percebe-se que a expansão do agronegócio a partir de 2000 foi acompanhada por um conjunto de leis e decisões políticas específicas. Houve significativa flexibilização das normas ambientais e a institucionalização de políticas que ampliaram e desregularam o mercado de terras, facilitando seu uso especulativo e como reserva



de valor. Além disso, percebe-se que, ao buscar seu favorecimento por políticas econômicas de amparo à grande produção agropecuária, os agentes do agronegócio atuam para anular a especificidade e a efetividade das políticas fundiárias para fins de reforma agrária.

De modo geral, estes agentes defendem a propriedade e o monopólio da terra também através da subordinação e do apagamento da questão fundiária em uma agenda de políticas agrícolas que os favoreça. Esta diferenciação entre políticas agrícolas e agrárias – e o espaço de subordinação ocupado pelas últimas - contempla as estratégias recorridas pelos atores políticos ligados ao agronegócio, já que visa assegurar recursos políticos institucionais voltados a estes setores, ao mesmo tempo em que garante a reprodução da concentração e do monopólio fundiário. Neste cenário, enquanto as políticas agrícolas em favor do agronegócio avançam significativamente, as políticas voltadas à agricultura familiar e camponesa, perpetuam-se na instabilidade, sendo marcadas pela precariedade de um ordenamento jurídico incapaz de conter os conflitos sociais no campo e efetivar uma política de reforma agrária (Sauer, 2017; Mendes, 2017; Paulino, 2015).

Desta forma, os fracassos e digressões das políticas agrárias, no que diz respeito à busca pela democratização da terra, devem-se ao efeito direto do posicionamento político da representação do agronegócio na esfera política estatal e parlamentar, notadamente a partir do reconhecimento político e institucional da Bancada Ruralista (Costa, 2012; Sauer, 2017; Campos, *et al.*, 2017, Castilho, 2012).

Assim, considerando o agronegócio brasileiro a partir de uma configuração de poder que envolve diversos agentes e grupos sociais, percebe-se que as relações estabelecidas entre alguns agentes de Estado e os representantes deste setor abriram espaço e possibilitaram a consolidação de diversas agendas políticas, que materializam uma série de interesses do patronato rural e agroindustrial na esfera da política institucional brasileira.

Neste cenário, diversas ações governamentais compuseram as diretrizes da política econômica do agronegócio no país, atendendo direta ou indiretamente aos interesses de seus representantes e, desta forma, sendo primordiais para seu fortalecimento econômico e político - trata-se de ações como investimento em tecnologias de produção agrícola (fortalecimento de institutos de pesquisas privados e estatais – como a Embrapa), mudança na política cambial, crédito e financiamento estatal dos planos



safras e agrícolas, regularização fundiária (regulação frouxa do mercado de terras), redução de juros nos créditos agrícolas, perdão de dívidas agrícolas, flexibilização da legislação ambiental e fortalecimento das leis de segurança jurídica visando garantir a propriedade privada da terra³.

Além disso, a institucionalização de Conselhos e Câmaras Setoriais do agronegócio em diversos órgãos estatais ajudou estruturar e consolidar importantes políticas em favor deste setor. Neste sentido, qualquer análise que se proponha entender a economia política do agronegócio deve considerar o papel dos múltiplos e interdependentes atores políticos e seu poder de decisão na agenda das coalizões de governos.

Protagonismo dos sojicultores e pecuaristas na esfera institucional

O avanço das políticas setoriais do agronegócio, processo que ganhou nova intensidade a partir de 2000, teve grande contribuição de diversas instâncias governamentais, como as pastas ministeriais ligadas aos temas da agricultura, das relações exteriores, da indústria e comércio e da Fazenda (Cyrino, 2017; Buainaim, 2007). A representação e *lobby* das diversas cadeias produtivas do agronegócio nestes e em outros órgãos institucionais reivindicavam do Estado a garantia de melhores condições econômicas em seu favor, sempre alicerçados no discurso fundamental da competição no mercado internacional.

Cabe frisar que, no âmbito das entidades de representação corporativa do setor, estas cadeias do agronegócio podem atuar por meio de entidades intersetoriais – como a CNA, as Federações Estaduais de Agricultura, a Abag, o Cosag/Fiesp, a SRB, etc. -, mas também através de suas entidades específicas de representação, voltadas aos interesses de cada cadeia produtiva. No que se refere aos setores produtivos aqui analisados (soja e carne), destaca-se, entre outras entidades, a atuação da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja), da Associação Brasileira dos Criadores (ABC) e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC).

Além disso, a especialização das cadeias produtivas e de suas entidades de representação setoriais foi acompanhada também pelo aumento e fortalecimento da representação das câmaras setoriais da agropecuária em esfera governamental. No caso do MAPA, este processo ocorreu com maior intensidade com a chegada de Roberto Rodrigues, figura histórica do agronegócio brasileiro, ao comando da pasta em 2003, no primeiro governo Lula. Naquele contexto, além da organização das câmaras



setoriais, visando atender os interesses específicos das principais cadeias agropecuárias, houve a institucionalização do Conselho do Agronegócio (Consagro) neste Ministério, órgão responsável por organizar as câmaras setoriais e as pautas de suas cadeias produtivas, conforme demanda de entidades como a Aprosoja e a ABIEC.⁴

Assim, as negociações e articulações políticas em torno dos interesses específicos de cadeias especializadas foram concertados entre atores públicos e privados também dentro da esfera institucional. Nesta configuração, intensificou-se as interrelações de poder entre atores estatais e empresários do agronegócio na arena pública:

As câmaras constituíram-se, ao longo dos anos, num instrumento fundamental de interlocução, negociação e estabelecimento de ações conjuntas entre a burocracia estatal e os empresários da agropecuária. É verdade que aquela nova institucionalidade sofreu forte abalo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com o esvaziamento e a extinção de quase todas as câmaras entre 1996 e 2002, mas manteve-se viva com a difusão de inúmeras câmaras setoriais da agropecuária no âmbito dos estados ao longo de toda a década de 1990 e dos anos 2000. A recriação, a partir de 2003, já sob o governo Lula, de muitas das antigas câmaras, bem como a criação de câmaras temáticas e de conselhos formados por empresários rurais e a tecnocracia estatal, têm conformado, no entanto, uma determinada concepção de matriz regulatória que proporciona espaços mais amplos de negociação e articulação de políticas entre Estado e empresariado do que aqueles que o agronegócio conheceu no passado recente. Além disso, as câmaras e os conselhos funcionam como caixas de ressonância do setor privado, canalizando pressões e ajudando a legitimar as tomadas de decisão da burocracia estatal (Iglécias, 2007, pp. 8).

Diante disso, percebe-se que a esfera governamental do Estado brasileiro desenvolveu uma estrutura específica de órgãos institucionais para acompanhar, estudar, financiar e desenvolver tecnologias voltadas ao projeto do agronegócio brasileiro. Especificamente em relação a cadeia produtiva da carne, foi criada uma estrutura administrativa e financeira no MAPA denominada de Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. A cadeia da soja também obteve um espaço institucional na estrutura do Estado (câmara temática), como instituto de negociação e articulação das decisões políticas. Desta forma, efetivaram-se um conjunto de decisões governamentais em favor destas cadeias, caracterizando atuação de interdependência entre agentes institucionais do Estado e os representantes destes setores privados.



No entanto, além do Ministério da Agricultura (MAPA), como espaço institucional de diálogo e concertação de políticas ligadas ao agronegócio, destacam-se outros institutos e centros de pesquisa, na esfera pública e para além dela, que desenvolveram importante papel na divulgação de estudos e pesquisas e, desta forma, não só legitimaram as práticas produtivas do agronegócio, como também desenvolveram a mediação na concertação política dos interesses do setor. Entre estes, destaca-se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Centro de Conhecimento em Agronegócios (Pensa/FIA/USP), o Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV), o Instituto Pensar Agropecuária (IPA) e o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Agroicone).

De toda forma, é a partir deste cenário que se desenvolvem as interações, os conflitos e as disputas de força em torno de políticas setoriais do agronegócio no Brasil. Assim, a compreensão das ações e iniciativas dos atores institucionais em relação à política econômica do agronegócio brasileiro nos últimos vinte anos, passa por compreender que este modelo econômico se desenvolve por meio de uma configuração de poder que envolve o grande capital agroindustrial, a grande propriedade fundiária e parcelas do Estado brasileiro por via do arranjo institucional. Trata-se de uma associação estratégica do capital financeiro para perseguir o lucro e a renda da terra, sob patrocínio de políticas do Estado (Delgado, 2010). A política econômica do agronegócio, alcançada através da associação entre estes agentes, tem desenhado uma nova e complexa configuração das relações de força na política nacional, onde se vê o apoio do Estado na construção de uma melhor posição relativa do agronegócio no país, por meio de financiamentos e decisões políticas institucionais que priorizam os interesses destes setores patronais rurais e agroindustriais.

Considerações finais

A partir das breves reflexões desenvolvidas neste trabalho, pode-se apontar alguns elementos que caracterizaram o cenário de desenvolvimento do agronegócio brasileiro no período recente, tendo em conta, especificamente, as características de duas de suas principais cadeias expostas desse cenário apontam que o agronegócio não é apenas produto também das ações do Estado, mas também sua atual e principal agenda econômica e política. Nota-se que uma configuração social de interdependência do arranjo institucional decisório com a representação e *lobby* do setor patronal agroindustrial possibilitou a inserção dos interesses no agronegócio na agenda política do Estado brasileiro.



Em primeiro lugar, como parte dessa configuração social, percebe-se a crescente importância do setor como um todo e, especificamente, das cadeias produtivas citadas na política macroeconômica brasileira. Auxiliando na expansão no mercado das *commodities* agrícolas e na “reprimarização” do comércio externo brasileiro, processos que marcaram a realidade nacional durante o período estudado, as cadeias de soja e carne responderam por importante parcela das exportações brasileiras, contribuindo para o aumento da participação da agropecuária na formação do PIB brasileiro.

Este processo, no entanto, não ocorreu sem intensa participação e apoio de órgãos governamentais diretamente ligados à política agropecuária do país, oferecendo subsídios, créditos, financiamentos, políticas públicas de produção e comercialização, além de garantias constitucionais no campo das políticas ambientais e fundiárias que favorecessem o desenvolvimento do agronegócio e de suas cadeias produtivas.

A partir deste processo destaca-se a importância de se compreender as formas de atuação e as estratégias de reprodução política do patronato rural e agroindustrial brasileiro na sociedade em geral e frente ao Estado. Ademais, destaca-se também a complexidade das redes de relações que conformam seus espaços de atuação no período recente, já que envoltos em configurações de poder com agentes públicos e privados, aliados e adversários, em processos complementares ou antagônicos. Com isso, em diálogo com Delgado (2012), reforça-se uma noção de agronegócio como resultante de uma aliança entre as cadeias agroindustriais, a grande propriedade fundiária e o Estado brasileiro, com vistas a configurar determinado modelo de acumulação capitalista.

Notas

¹ Mestre em Ciência Política e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp. Pesquisador pelo CNPq no Centro de Estudos Rurais - CERES/Unicamp.

² Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo CPDA/UFRRJ e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp.

³ Lei nº 10.696/2003 (operações de crédito rural); MP 113/2003 (legalização do cultivo da soja transgênica) Lei Kandir (PLC 87/96); Lei nº 11.105/2012 (Lei de Biosegurança); Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); PEC nº 215 (demarcação de terras); Lei nº 13.123/2015 (patrimônio genético e biodiversidade); Decreto nº 9.179/2007 (conversão de multas ambientais em prestação de serviços); Decreto nº 6.514/2008 (Crimes ambientais); MP nº 793/2017 (regularização tributária rural- Refis rural); MP nº 726/2016



(extinção do MDA); MP nº 759/2016 (regularização fundiária); Decreto nº 8.447/2015 (Criação da agência do Matopiba); Lei nº 10.437/2002 (Renegociação de dívida agrícola); Lei nº 8.107/2017 (Alteração de limites florestais); Lei nº 11.076/2004 (criação de títulos de crédito do agronegócio); Lei nº (Lei do Fundo de catástrofe); Lei nº 12.058/2009 (Isenção de imposto da cadeia da carne).

⁴ Cabe destacar que uma estrutura semelhante de representação das cadeias produtivas já existia na CNA. A criação do Conselho Superior de Agricultura e Pecuária (Rural Brasil) dentro desta entidade em 2002, já sinalizava a importância e desempenho que as *commodities* de soja e carnes haviam adquirido naquele contexto.

Referências Bibliográficas

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC. (2018). BeefREPORT: Perfil da Pecuária no Brasil. Recuperado em 26 de julho de 2019, de <https://www.beefpoint.com.br/abiec-perfil-da-pecuaria-no-brasil/>

Almeida, Fernando R. de F. (2011). A Economia Política do Agronegócio. Mural Internacional, Ano II (2), 38-46.

Banco Central do Brasil - BACEN. (2018). Relatórios circunstanciados do crédito Rural. Recuperado em 15 de julho de 2019, de <https://bit.ly/3iJqrGw>

Belik, W.; Reydon, P.; Guedes, Sebastião Neto R. (2007). Instituições, ambiente institucional e políticas agrícolas. In: Ramos, P. *et al.* (Orgs.). Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas. Brasília: MDA/Nead Estudos, 15, 103-140.

Belik, W. (2001). Muito além da Porteira – Mudanças nas formas de coordenação da cadeia agroalimentar no Brasil. Recuperado do Repositório da produção científica intelectual da Unicamp em 10 de abril de 2019 de <https://bit.ly/3iGW6bP>

_____. (2015). O financiamento da agropecuária brasileira no período recente. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea - Brasília: Rio de Janeiro: Recuperado em 28 de julho de 2019 de <https://bit.ly/3iNEM4K>

Bruno, Regina A. L. (1997). Senhores da terra, senhores da guerra: a nova face política das elites agroindustriais. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

_____. (2009). Um Brasil Ambivalente. Agronegócio, Ruralismo e Relações de Poder. MAUAD X ed. /Edu-UFRRJ.

Bruno, R., Lacerda, E., Carneiro, O. B. (2012). Organizações da Classe Dominante no Campo. In: Caldart, R. (Org). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 521- 533.



Buainain, A. M. (2007) Modelo e principais instrumentos de regulação setorial: uma nota didática. In: Ramos, P. *et al.* (Orgs.). Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas. Brasília: MDA/Nead Estudos, 15, 53-104.

Campos, C. S. S. *et al.* (2017) Estado e agronegócio no Brasil: uma análise do papel dos poderes Executivo e Legislativo para a expansão do agronegócio. In: Medeiros, R. M. V.; Lindner, M. (Orgs.). Dinâmicas do Espaço Agrário: Velhos e Novos Territórios - NEAG 10 anos. Porto Alegre: Ed. Evangraf, 259-282.

Castilho, A. L. (2012) Partido da Terra: como os políticos conquistam o território brasileiro. São Paulo: Contexto.

Cyrino, T. N. (2017) A Cadeia produtiva da carne e a política neodesenvolvimentista dos Governos Lula (2003-2010). Dissertação de mestrado da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Recuperado em 14 de maio de 2018, de <https://bit.ly/36P8Bji>

Costa, S. H. G. (2012) A questão agrária no Brasil e a Bancada Ruralista no Congresso Nacional. Tese de doutorado na USP – Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado em 06 de janeiro de 2017, de <https://bit.ly/36NvkMv>

Delgado, Guilherme Costa. (2012) *Do Capital Financeiro na Agricultura à Economia do Agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1965-2012)*. Porto Alegre, Editora UFRGS.

_____. (2010). Tensões externas e internas sobre os preços dos alimentos: Fatores explicativos. In: Almeida F. N; Ramos, P. (Orgs.). Segurança Alimentar, Produção Agrícola e Desenvolvimento Territorial. Campinas: Ed. Alínea.

Elias, N. (2001). A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

_____. (2008). Introdução à Sociologia. Edições 70 LDA.

Elias, N.; Scotson, J. L. (2000). Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Zahar. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/PAM. (2017). Produção Agrícola Municipal. Recuperado em 12 de julho de 2019 de <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613>.

Iglecias, W. (2007). O empresariado do agronegócio no Brasil: ação política e formas de atuação política - batalhas do açúcar e do algodão na OMC. Revista de Sociologia e Política, 28, 75-97.

Mendonça, M. L. (2015). O Papel da Agricultura nas Relações Internacionais e a Construção do Conceito de Agronegócio. *Contexto Internacional*, 37(2).

Mendonça, S. R. (2010) A classe dominante agrária: natureza e comportamento – 1960 – 1990. In: STEDILE, João Pedro (Org.). A questão agrária no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 17-200.



_____. (2009) O Patronato Rural no Brasil Recente (1964-1993). Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.

Paulino, E. T. (2015). Questão Agrária: lutas, conflitos territoriais e contradições sociais no mundo do século XXI. In: Mitidiero Jr. *et al.* (Orgs.). *A questão agrária no século XXI: escalas, dinâmicas e conflitos territoriais*. São Paulo: Ed. Outras Expressões, 26-41.

Pompeia, C. (2018) Formação Política do Agronegócio. Tese de doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Recuperado em 19 de março de 2019 de <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/332572>

Reydon, Bastian P. (2007). A regulação institucional da propriedade da terra no Brasil: uma necessidade urgente. In: Ramos, P. *et al.* (Orgs.). *Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas*. Brasília: MDA/Nead Estudos, 15, 226-262.

Pilatti, A. (2008). A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris.

Sauer, S. (2017). A política agrária no Governo Lula (2003-2010): Compromissos e embates nas políticas agrária e agrícola. In: Mattei, L. (org.). *Reforma agrária no Brasil: Trajetórias e dilemas*. Florianópolis, Ed. Insular, 209-246.

Silva, J. G. (2012). *Buraco Negro: A Reforma Agrária na Constituinte*. São Paulo: Paz e Terra.

Mendes, G. Teixeira. (2017). As barreiras institucionais para a reforma agrária no Brasil. In: Mattei, L. (org.). *Reforma agrária no Brasil: Trajetórias e dilemas*. Florianópolis, Ed. Insular. 161-186.



Transição Agrícola Percebida por Agricultores Familiares em Região de Produção Intensiva no Noroeste de Minas Gerais, Brasil

Rosana Passos Cambraia
Ianna Santana Souza
Marivaldo Aparecido de Carvalho

Resumo

Regiões intensamente cultivadas do Brasil apresentam mudanças nos modos de vida dos agricultores familiares, nas formas tradicionais de cultivo de alimentos, na manutenção da biodiversidade e da segurança alimentar, para o convencional, cada vez mais especializado e dependente de pacotes tecnológicos. Com esta problemática, o objetivo desta pesquisa foi conhecer a percepção do processo da transição agrícola ocorrida na agricultura familiar, em uma comunidade no noroeste de Minas Gerais, Brasil, em região de intensa produção agrícola. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada na teoria fundamentada, que conjuga a pesquisa empírica com a reflexão teórica, com emersão dos processos sociais e dos processos comportamentais de base, que permeiam os fenômenos indagados. As fontes primárias de informações foram geradas em entrevistas com agricultores familiares da comunidade Tabocas (Unaí, Minas Gerais, Brasil). Foram realizadas observações de campo e registro das situações no ambiente da pesquisa. Resultados e discussão: Com a percepção social em atividades geradoras de mudança, resgatou-se a memória e valores de formas de policultivos, como utilizados no passado, dando sentido às lutas agrárias do presente. Os dados obtidos com agricultores familiares, sob a perspectiva da sociologia rural, amplia a compreensão da transição agrícola que ocorre na região e subsidia o planejamento de ações e programas voltados a população rural. Apoio: PPGER, UFVJM.

Palavras-chave

Agricultura familiar; Modo de vida; Sustentabilidade; Transição agrícola.

Resumen

Las regiones de Brasil intensamente cultivadas muestran cambios en los medios de vida de los agricultores familiares, las formas tradicionales de cultivo de alimentos, el mantenimiento de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, a los paquetes convencionales, cada vez más especializados y dependientes de la tecnología. Con este problema, el objetivo de esta investigación fue conocer la percepción del proceso de



transición agrícola que ocurrió en la agricultura familiar, en una comunidad en el noroeste de Minas Gerais, Brasil, en una región de intensa producción agrícola. Metodología: se trata de una investigación cualitativa, basada en la teoría fundamentada, que combina la investigación empírica con la reflexión teórica, con la aparición de procesos sociales y procesos conductuales básicos que impregnan los fenómenos en cuestión. Las principales fuentes de información se generaron a través de entrevistas con agricultores familiares en la comunidad de Tabocas (Unaí, Minas Gerais, Brasil). Se realizaron observaciones de campo y registro de las situaciones en el entorno de investigación. Resultados y discusión: Con la percepción social en las actividades que generan cambios, se recuperaron la memoria y los valores de las formas de policultivo, como se usaban en el pasado, dando sentido a las luchas agrarias actuales. Los datos obtenidos de los agricultores familiares, desde la perspectiva de la sociología rural, amplían la comprensión de la transición agrícola que ocurre en la región y subsidian la planificación de acciones y programas dirigidos a la población rural. Soporte: PPGER, UFVJM.

Palabras clave

Agricultura familiar; Modo de vida; Sostenibilidad; Transición Agrícola

Introdução

Este trabalho é resultado de uma pesquisa do mestrado acadêmico interdisciplinar em Estudos Rurais, na linha de pesquisa 'configurações do rural, política e meio ambiente'. Dedicase a discussão do processo da transição agrícola ocorrida na agricultura familiar numa comunidade do município de Unaí, Minas Gerais, Brasil. O caso específico é a fazenda Taboca, composta por agricultores familiares que lutam pela posse da terra a muitos anos. No local já foram produzidos milho, feijão e arroz, além de outros cultivos para auto consumo. Técnicas ancestrais, como o uso de charrete, arado e carro de boi, sementes crioulas, esterco dos animais para adubação, eram utilizadas pelos agricultores na fazenda Tabocas. Ao longo do tempo, com a chegada da modernização agrícola na região, essas técnicas foram substituídas por equipamentos modernos, máquinas agrícolas, insumos químicos, espécies modificadas geneticamente, entre outras práticas para aumento da produtividade e mecanização no trabalho na terra.

A comunidade Taboca está localizada no município de Unaí, cujo perfil tecnológico de produção agrícola é comparável aos mais avançados do mundo, destacando-se principalmente na produção intensiva de grãos. A pesquisa de Produção Agrícola



Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) aponta o município como o maior produtor de feijão no Brasil e um dos dez maiores de sorgo e milho. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Unaí (PMU, 2007), possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário de Minas Gerais.

Fundamentação do problema

As percepções das mudanças causadas nas formas de cultivo de alimentos e nos modos de vida de agricultores familiares em Unaí, desde a chegada do agronegócio para a região, assim como o sentido dos impactos que essas mudanças trazem em termos econômicos, ambientais, sociais, culturais e políticos, instigaram as seguintes questões: As famílias agricultoras reconhecem a mudança na forma de cultivo, do tradicional policultivo para o convencional intensivo vigente? Existe dependência dos agricultores familiares quanto ao uso de insumos industriais agrícolas? Respostas a essas questões são buscadas no decorrer deste trabalho.

O objetivo geral da pesquisa foi investigar o processo de transição agrícola que ocorre com agricultores familiares a partir dos cultivos intensivos em uma comunidade de Unaí (Minas Gerais, Brasil). O estudo pretendeu também verificar o entendimento dessas famílias sobre as mudanças nas formas de cultivo e determinar alterações nas formas tradicionais de produção da agricultura familiar com a introdução de tecnologias de cultivo intensivo na região.

Metodologia

Esta é uma pesquisa qualitativa, baseada na teoria fundamentada, de acordo com Corbin & Strauss (2002), na qual um conjunto de procedimentos oferece uma maneira de pensar o mundo que enriquece a investigação. A finalidade em usar tal metodologia foi de construir uma visão mais ligada aos dados e menos influenciada pelos referenciais e esquemas teóricos previamente estabelecidos. Constitui-se uma tentativa de deixar que os dados apresentem elementos de conexão entre si, na busca de identificação de padrões e teorias explicativas (Acypriste, 2016).

A meta com esse modelo foi uma visão detalhada dos dados, buscando a identificação de minúcias e singularidades com base em comparações sistemáticas entre os dados. A partir dessa metodologia de análise qualitativa, buscou-se a teorização com base no que os dados trazem de conteúdo, ao passo que se teve como foco não se ater à mera



descrição da realidade, mas sim à construção de uma cadeia de relações, visões de mundo e formas de ação concreta dos sujeitos da pesquisa (Acypreste, 2016).

O instrumento principal na teoria fundamentada, mesmo não sendo o único, é a entrevista semiestruturada. Assim, enquanto emerge a teoria e se definem as categorias, as entrevistas se tornam sempre mais estruturadas: se inicialmente as entrevistas são pouco estruturadas (nunca completamente abertas), progressivamente chega-se a uma definição mais pontual das perguntas (Tarozzi, 2011). O investigador procura processos, partindo de uma série de hipóteses, combinando abordagens indutivas e dedutivas (Santos & Nobrega, 2001).

Os códigos relacionados às decisões foram construídos a partir do uso recorrente do gerúndio, que possibilita assim uma perspectiva de ação e de continuidade nos dados das decisões (Charmaz, 2009). Em seguida, realizou-se uma hierarquização dos códigos, para agrupamento dos que apresentam propriedades e dimensões semelhantes, para posterior comparação sistemática (Gibbs, 2009).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFVJM, que emitiu parecer consubstanciado n. 2.451.185 de 20/12/2017.

Resultados e Discussão

Dados da PMU (2007) dão conta de que até o final da década de 1950 a vasta área do planalto central brasileiro era um 'vazio' demográfico e econômico e a pecuária extensiva era a atividade que se destacava economicamente na região. Com a inauguração de Brasília acelerou-se o processo de ocupação do território com expansão da fronteira agrícola. Estes fatos resultaram no intenso uso dos terrenos planos e vales abertos do cerrado e dos recursos oferecidos pelo solo. Uma agricultura do tipo empresarial foi introduzida intensificando-se a mecanização e o uso de insumos agrícolas, voltada de modo especial, para a produção de grãos, com destaque para soja, milho, feijão e café.

O município também presencia, além da produção agropecuária empresarial, a ocorrência de unidades de produção distribuídas em pequenas e médias fazendas de proprietários, arrendatários, agricultores e assentados de programas de reforma agrária, que tem sua base de sustentabilidade econômica na agricultura familiar. Conforme o Atlas Escolar, Histórico e Geográfico do Município de Unaí, Estado de Minas Gerais



(2003) essas unidades produzem, entre outros produtos, milho, café, cebola, laranja, banana, mandioca, cana-de-açúcar, suínos, aves, ovos, leite e hortaliças.

Embora o município apresente espaço que abriga várias unidades de agricultores, de arrendatários e de assentados existem, segundo Oliveira et al. (2009), poucas organizações e entidades populares que atuam na luta pela terra; o principal protagonista nessa ação é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí, filiado à Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) que representa “a maioria dos trabalhadores sem terra, os assalariados e acampados, os assentados e uma parte de agricultores familiares das comunidades tradicionais [...]” (Oliveira et al., 2009, p. 99). As organizações de base são constituídas pelas associações comunitárias rurais e dos projetos de assentamento de reforma agrária, que representam os agricultores familiares em escala local.

No que se refere às cooperativas agrícolas do município, Oliveira et al. (2009) ressaltam a existência de três que são administradas por grandes produtores: duas voltadas para a produção de grãos e fibras e outra voltada para a produção leiteira, esta última associa empresários, agricultores patronais e agricultores familiares, inclusive das áreas de reforma agrária.

A atividade pecuarista na região onde se localiza o município de Unaí foi iniciada a partir de duas importantes ‘entradas’: dos bandeirantes paulistas, e de rebanhos provenientes da região Nordeste, que subiam o Rio São Francisco até o interior de Minas Gerais (Oliveira, 2008). Segundo Ribeiro (2002), a criação de gado bovino foi a mais importante e duradoura atividade econômica do cerrado a partir do século XVIII e sua expansão foi favorecida pela disponibilidade do mercado consumidor de carne e couro nos centros mineradores da região, contribuindo de forma decisiva para sua consolidação e permanência no período posterior.

O município de Unaí está situado na porção Noroeste de Minas Gerais, a 500 km da capital Belo Horizonte, e a pouco mais de 150 km da capital federal, possui área de 8.438,4 km², sendo o segundo maior município em extensão territorial do Estado. A fazenda Taboca, nosso objeto de estudo, está localizada nas terras do vão em Unaí, com alguns locais planos na beira do Rio Preto e algumas serras do vale. É ocupada por agricultores familiares posseiros; a comunidade tem como atividade predominante a pecuária extensiva, apesar de já ter sido cultivado milho, feijão e arroz em grandes extensões.



Do ponto de vista socioeconômico, a inauguração de Brasília em 1960 permitiu a intensificação do processo de ocupação da região de Unai, com expansão da fronteira agrícola. A incorporação dessas terras agrícolas foi apoiada e facilitada pela abertura de rodovias, como a rodovia BR-040, que interliga Brasília ao restante do país, bem como projetos de aproveitamento e colonização do cerrado. Esses projetos consolidaram a agropecuária como a principal atividade econômica, representando mais da metade do PIB do Estado (Xavier, 2003).

A fazenda Taboca foi ocupada por agricultores arrendatários a partir da década de 1960, quando chegaram os primeiros agricultores para trabalhar com plantios de feijão, arroz e milho no local. Esses agricultores nasceram em cidades do entorno de Unai; desde a chegada deles na fazenda, esta passou por processos de mudanças sociais, ambientais, culturais, econômicas e políticas. No local já existiam antigos moradores agregados, que prestavam serviços para o antigo dono da terra, os quais chegaram à fazenda em meados da década de 1940. Uma das entrevistadas de 74 anos, nasceu na fazenda e relata que sua mãe se separou do pai quando era ainda nova e que a mãe trabalhava na fazenda “lavando roupa, socando arroz no pilão, fiando, tecendo e plantando roça, para criar os filhos”.

Os trabalhos nessa época eram manuais, usando-se de técnicas tradicionais rudimentares. Os agricultores agregados à fazenda viveram longos anos utilizando-se dessas técnicas para realização dos trabalhos diários na fazenda, em forma de prestação de serviço ao antigo proprietário, que em troca fornecia moradia e um local para cultivo dos alimentos para auto consumo.

Dos primeiros agricultores a trabalhar na terra como arrendatários, três eram irmãos, vindos de outras regiões e outros dois também eram irmãos, porém nascidos na fazenda. Recebiam a terra nua ou com mata fechada, tinham que arcar com a desmatamento das terras, com a construção da casa para moradia, com as cercas de arame, com todo o custo de plantio e ainda assim pagavam ao proprietário da fazenda 40% de arrendo do que produziam. O que sobrava do pagamento do arrendamento, uma parte era destinada ao consumo da família e o excedente comercializavam ou trocavam nos armazéns da cidade por outros bens de consumo, tais como sal, macarrão, batatinha, café, açúcar, farinha de trigo e querosene.

Hamdan (1994) argumenta que um dos supostos mais importantes sobre o funcionamento das explorações familiares é que sua racionalidade econômica tem como



objetivo central assegurar a subsistência familiar, para a qual procura maximizar um ingresso global que cubra essa subsistência, ainda que não se remunerem todos os fatores de produção (terra, trabalho e capital).

Após a morte do antigo proprietário, os herdeiros da fazenda Tabocas entraram na justiça requerendo o despejo dos agricultores moradores. Foi um processo litigioso, por meio de ameaças com uso de armas de fogo, despejos, invasões e derrubadas de lavouras e cercas, utilizando-se de máquinas agrícolas, nas áreas onde as famílias cultivavam e moravam. Em 1989 chegaram as ordens judiciais de despejo, permitindo apenas que os agricultores mais antigos permanecessem em suas casas, com as mudanças realizadas por policiais; muitos se mudaram para outros locais e algumas famílias foram para as casas dos pais dentro da própria fazenda.

Domingues e Bermann (2012) observam que ocorre o deslocamento de populações das áreas rurais das regiões de expansão da fronteira agrícola para as cidades devido à introdução da monocultura em extensas propriedades de terra. As empresas de produção intensiva de grãos ocupam espaços no campo antes ocupado por cultivos familiares diversificadas, reduzem o emprego no campo e a capacidade de produção de alimentos tradicionais, comprometendo a segurança alimentar e nutricional de famílias agricultoras.

Neste processo, aquelas famílias que optaram por sair da fazenda após o despejo, permaneceram afastadas por um período de aproximadamente seis anos. Durante esse período, o processo continuou em andamento no judiciário, onde os agricultores requeriam o direito de uso da terra. Após anos do despejo, as famílias que saíram da fazenda, receberam a notícia para voltar para suas casas, pois estava quase resolvido o processo de regularização das terras.

A Taboca está em fase de regularização pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para criação de um projeto de assentamento da reforma agrária. O INCRA iniciou o processo da regularização das terras há alguns anos, quando fizeram delimitações prévias dos lotes. No entanto, conforme observado por Brandão (2007), os sucessivos programas de reforma agrária seguem destinando porções residuais de lotes em assentamentos precariamente assistidos, enquanto se empenham, uns após os outros, em apoiar os latifúndios de agropecuária de mercado e a incentivar a expansão do agronegócio, à custa de um crescente deterioro das



condições de vida de famílias agricultoras e de comunidades rurais, além da degradação, em vários espaços, irreversíveis, do meio ambiente.

A seguir serão relatados alguns costumes, formas de cultivos dos alimentos e modos de vida dos agricultores da Taboca.

Os plantios eram feitos principalmente na beira do Rio Preto na Taboca, próximo às casas dos agricultores mais antigos, que na época ocupavam uma faixa da fazenda margeando o rio. Só o antigo fazendeiro é que possuía gado leiteiro, os agricultores trabalhavam na terra plantando as lavouras de milho, feijão e arroz e outros alimentos para auto consumo, tais como abóbora, açafrão, amendoim, cana-de-açúcar, inhame, mandioca e milho de pipoca. Além dos plantios, podiam criar galinhas e porcos, que eram as fontes de proteína animal principal na alimentação das famílias. Quando matavam um porco, como na época não havia energia elétrica nem geladeira, preparava-se a 'carne de lata', que é a carne de porco mergulhada na gordura do próprio porco; dessa forma podiam consumir essa carne por mais tempo sem refrigeração.

Para obter o leite usado na alimentação da família, alguns agricultores faziam trocas de serviços com o vaqueiro da fazenda vizinha. Houve um agricultor que comprou algumas cabritas para produção de leite, já que esses animais também eram permitidos na fazenda. Ainda é comum a criação de porcos e galinhas para o auto consumo das famílias na comunidade. Geralmente as galinhas caipiras são criadas soltas nos quintais em volta das casas e a criação de porcos em chiqueiros rústicos também situados próximos, para facilitar o trato dos animais. Em geral, do que sobra do consumo da família, uma parte é distribuída entre parentes e outra parte é vendida na cidade.

Para Caldeira-Pires, Rabelo e Xavier (2002) um aspecto a ser considerado sobre a agricultura familiar refere-se à diversidade das atividades econômicas na propriedade. A produção diversificada busca a redução do risco, por meio do atendimento das necessidades da família, principalmente na alimentação, bem como em uma série de consumos intermediários, sobretudo, na alimentação do gado e de pequenos animais. Além disso, há uma contribuição das diversas atividades na composição da renda monetária da propriedade.

Góis (2002) argumenta que a importância da agricultura familiar vai muito além da mera produção primária, pois provê um conjunto de serviços e bens públicos, destacando-se a contribuição à segurança alimentar, aos cuidados com o território, à conservação do



meio ambiente, à preservação de valores culturais, à ocupação de mão-de-obra e à geração de empregos. Assim, a agricultura familiar é pluriativa e multifuncional.

Quando iam plantar capim, capinar, plantar roça e construir as casas na comunidade Taboca, os moradores juntavam as famílias e faziam o trabalho em mutirões, também por meio de trocas de dias de serviço, ocorrendo um rodizio nas áreas de cada um. Hoje os mutirões foram substituídos por máquinas, dispensando o trabalho braçal realizado antigamente.

Das sementes colhidas, uma parte era armazenada na própria casa do agricultor, para serem utilizadas nos próximos plantios. Hoje as sementes são compradas na cooperativa, os agricultores perderam o costume de guardar sementes, devido à facilidade de compra e as propagandas e *marketing* de que as sementes híbridas ou transgênicas são melhores que as de antigamente. De acordo com os entrevistados, antigamente era mais simples produzir alimentos, os agricultores plantavam e colhiam somente com a 'força da terra', sem adubos, sem muitos insumos que são encontrados atualmente. O solo da beira do rio era arenoso e as folhas depositadas pelas árvores do entorno é que provia a adubação e a cobertura do solo. Não existiam tantas pragas e invasores como hoje, plantavam feijão sem adubo químico e sem uso de veneno, o que já não conseguem mais. Era costume consumir algumas frutas do cerrado, sendo o araticum e o pequi consumidos em maior quantidade e ainda muito utilizados para alimentação e comercialização.

As terras eram aradas com uso de bois, eram meses arando as terras, o mato era capinado com uso de enxadas, o transporte acontecia com uso de charretes, carroças e carros de boi e não se usavam pesticidas agrícolas e nem adubos químicos nos plantios. Atualmente todos os agricultores têm vacas, sendo esta a atividade econômica principal das famílias, a tração animal foi substituída pelo trator, pois as terras foram ficando compactadas para aração com os bois, as enxadas foram substituídas por veneno para matar o mato, as charretes, carroças e carros de boi foram substituídas pelos veículos, motos e caminhões, apesar de ainda manterem as charretes nas propriedades, ainda utilizadas em algumas ocasiões. A chegada da energia elétrica possibilitou o uso do tanque para armazenamento e resfriamento do leite e a compactação e empobrecimento dos solos por uso intensivo culminaram na necessidade do uso de insumos químicos para a produção agrícola.



Ao analisar transformações macroestruturais em todo o mundo em uma era de globalização, Ianni (2002) soma-se a outros estudiosos 'do que está acontecendo', ao lembrar que, mesmo nos espaços mais aparentemente dominados pelo gigantismo 'do que mudou', as formas de vida comunitárias e tradicionais, de ocupação e produção em multiespaços partilhados de vida, labor e trabalho, não apenas resistem e sobrevivem, mas, em alguns cenários, proliferam, adaptam-se e transformam-se. Ainda que essa transformação represente uma progressiva perda de autonomia em nome dos polos de domínio da economia agropastoril. Lembrando que o próprio agronegócio se expande a expensas da pequena agricultura e, mais ainda, em aliança com pequenas e médias propriedades agrícolas modernizadas e a meio caminho entre a economia de excedente e a economia de mercado, segundo *Martins (1975)*. O arroz e o feijão, que eram cultivados em extensas áreas e por todas as famílias, já não conseguem cultivar nas condições atuais, nem mesmo na beira do rio, devido a instabilidade climática, falta de chuvas, solos degradados, pragas e invasores existentes. Essas mudanças marcam fortemente o processo de transição agrícola que ocorreu entre os agricultores da Taboca ao longo dos anos, passando de técnicas tradicionais ligadas a terra, para formas conhecidas como sofisticadas e modernas, acelerando a produção, intensificando o uso da terra, em processos exploratórios, causando erosões, compactações, assoreamento dos rios, aparecimento de pragas e doenças, entre tantos outros impactos que trazem prejuízos.

Pode-se perceber que a modernização da agricultura não trouxe mudanças apenas nas técnicas de geração e manejo agrário, mas impôs, também, subjetivamente, a ideia de 'desenvolvimento', em franca oposição à 'estagnação' e 'atraso', associados à lavoura tradicional. Os saberes e costumes locais de outrora foram taxados como 'primitivos' e 'não científicos', sem possibilidade de resistirem diante do novo e 'necessário' sistema de produção em alta escala, trazido pelo pacote tecnológico. Dessa forma, o cultivo dos pequenos produtores rurais e das comunidades agrícolas, apegados aos modos de vida tradicionais ligados a terra e às práticas naturais, foi substituído aceleradamente por vastas plantações monocultoras (Jodas & Portanova, 2014).

A perda da autonomia do lavrador familiar junto com os seus saberes sobre o gerenciamento da vida na propriedade foi sentida nas distintas realidades da sociedade, sendo que atualmente quando o agricultor não está afastado das atividades do campo, é considerado um acessório no ciclo produtivo capitaneado pelas corporações químicas (Shiva, 2003).



Para Wanderley (1999), a agricultura familiar que se reproduz nas sociedades modernas deve adaptar-se ao seu contexto socioeconômico, o que a obriga a realizar importantes modificações na sua forma de produção e em sua vida social tradicional. Essas transformações, no entanto, não produzem uma ruptura total e definitiva com as formas 'anteriores', o que significa que o agricultor familiar atual possui ainda uma tradição do campo, que lhe permite, precisamente, adaptar-se às novas exigências da sociedade. O campesinato brasileiro tem características particulares (em relação ao conceito clássico de camponês) que são o resultado do enfretamento de situações próprias da história social do país e que servem de fundamento a esse patrimônio sociocultural, com o qual deve adaptar-se às exigências e condicionamentos da sociedade brasileira moderna.

Reflexões

Sobre a vida do agricultor de hoje em comparação com antes, é comum entre os moradores de Tabocas dizer que melhorou muito, que as casas de hoje são mais bem estruturadas e maiores, que a renda melhorou, facilitando a compra dos produtos da cidade. Relatam que hoje já tem o carro, que facilitou o transporte, o trator, que facilitou os plantios, tem água de poço artesiano (por muitos anos buscavam água no córrego com as charretes), tem luz elétrica, que proporcionou o uso da geladeira, do tanque de armazenamento e resfriamento de leite, da ordenhadeira mecânica, além da melhoria na assistência a saúde, etc.

Porém, todas essas mudanças trouxeram também impactos negativos, que já são evidenciados pelos agricultores. Dentre os impactos ambientais, a degradação do solo, a redução na quantidade da água dos córregos e rios, o surgimento de pragas e invasores cada vez mais resistentes aos produtos químicos aplicados, desequilíbrios climáticos, que vem diminuindo a produção a cada ano, entre outros fatores.

Percebeu-se nas entrevistas com os agricultores familiares na Taboca que a comunidade já desenvolveu práticas agroecológicas, quando trabalhavam em mutirões, guardavam sementes nativas para o plantio em uma nova safra, utilizavam esterco animal na adubação das plantas, folhas secas e outros resíduos orgânicos na cobertura do solo, organizavam encontros culturais na comunidade, plantavam em sistemas de policultivos, entre outras técnicas de manejo dos agroecossistemas. Com a chegada do agronegócio na região esses agricultores foram aos poucos migrando para o sistema convencional vigente, incentivados pelas empresas que vendem os insumos químicos



utilizados no manejo dos sistemas convencionais e por empresas de assistência técnica, que promovem a transição para sistemas considerados mais modernos de produção.

Foi possível perceber que ocorreram mudanças ao longo dos anos nas formas de cultivo dos alimentos entre os agricultores familiares, o sistema tradicional de policultivo, foi sendo substituído por sistemas convencionais com uso químico, espécies modificadas geneticamente e máquinas agrícolas. Além dessas mudanças observadas nas técnicas de plantios, foi possível a identificação de alterações no âmbito social, cultural, econômico e político, podendo destacar a redução dos encontros culturais em festejos tradicionais que aconteciam na comunidade com frequência, além da tendência de individualização das famílias em suas atividades cotidianas, eliminando os trabalhos em mutirões.

Não podemos deixar de mencionar a necessidade de mudanças estruturais, entre as quais destaca-se uma profunda e qualificada reforma agrária e foco expressivo no suporte aos agricultores familiares, na implementação e no fortalecimento de políticas públicas de assistência técnica para cultivos alternativos sustentáveis de alimentos, sem uso de insumos químicos, prejudiciais a saúde e ao ambiente.

Agradecimentos

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

Referencias

Atlas Escolar, Histórico e Geográfico do Município de Unaí, Estado de Minas Gerais. (2003) Governo Municipal de Unaí, MG. Belo Horizonte: Didata.

Acypreste, Rafael. (2016) *Ações de reintegração de posse contra o movimento dos trabalhadores sem teto: Dicotomia entre propriedade e direito à moradia*. Brasília. 145 p. Tese de mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Brandão, C. R. (2007) Tempos e espaços nos mundos rurais do Brasil. *Ruris*, 1(1), 28.

Caldeira-Pires, A., Rabelo, R. R., & Xavier, J. H. V. (2002) Uso potencial da análise do ciclo de vida (ACV) associada aos conceitos da produção orgânica aplicados à agricultura familiar. *Cadernos de Ciência e Tecnologia*, 19(2), 149-178.

Charmaz, K. (2009) *A construção da teoria fundamentada: Guia prático para análise qualitativa*. Tradução Joice Elias Costa. Porto Alegre: Artmed.



Corbin, Juliet, & Strauss, Ansel. (2002) *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Contus Editorial, Universidad de Antioquia.

Domingues, Mariana Soares, & Bermann, Célio. (2012) O arco de desflorestamento na Amazônia: Da pecuária à soja. *Ambiente & Sociedade*, 15(2), 1-22.

Gibbs, G. (2009) *Análise de dados qualitativos*. Tradução Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed.

Góis, S. L. L. (2002) *O papel da multifuncionalidade da agricultura familiar na geração de emprego e renda: Um estudo de caso na Amazônia*. (Dissertação de mestrado) 175 p. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Hamdan, V. (1994) Analisis microeconômico de explotaciones familiares: Un aporte metodológico. In: *Seminário INTA – INRA*. Anais..., Mar del Plata, p. 103-118.

Ianni, Octavio. (2002) *A era do globalismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2004) *Pesquisa de Produção Agrícola Municipal*. Recuperado de <http://www.ibge.gov.br>

INCRA/FAO – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/*Food And Agriculture Organization*. (2000) *Novo retrato da agricultura familiar: O Brasil redescoberto*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 74p.

Jodas, Natália, & Portanova, Rogério Silva. (2014) Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e agroecologia: Uma abordagem crítica à agricultura moderna. *Revista do Direito Público*, 9(3), 129-152.

Martins, José de Souza. (1975) *Capitalismo e tradicionalismo: Estudos sobre as contradições da sociedade agrária no Brasil*. São Paulo: Pioneira.

Oliveira, M. N., Sabourin, E., Altafin, I. G., & Almeida, S. G. R. (2009) As organizações sociais: trajetórias, lições e perspectivas. In: *Projeto Unai: Pesquisa e desenvolvimento em assentamentos de reforma agrária*. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica. p. 95-141.

Oliveira, Daniel Coelho. (2008) *Elite do agronegócio em Unai: Percepções sobre pobreza e desigualdades sociais*. 116 p. (Dissertação de mestrado) Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

PMU - Prefeitura Municipal de Unai. (2017) *Unai: Um município pronto para o futuro*. Recuperado de <http://www.prefeituraunai.mg.gov.br>



Ribeiro, Ricardo Ferreira. (2002) O eldorado do Brasil central: História ambiental e convivência sustentável com o cerrado. In: Alimonda, Héctor (Org.). *Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 249-275.

Santos, Sérgio Ribeiro, & Nobrega, Maria Miriam Lima. (2001) A *Grounded Theory* como alternativa metodológica para pesquisa em enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 55(5), 575-579.

Shiva, Vandana. (2003) *Monoculturas da mente*. São Paulo: Gaia.

Tarozzi, Massimiliano. (2011) *O que é Grounded Theory: Metodologia de pesquisa e de teoria fundamentada nos dados*. Tradução de Carmem Lussi. Petrópolis: Editora Vozes Ltda.

Xavier, Jose Humberto Valadares. (2003) *Análise do ciclo de vida (ACV) da produção agrícola familiar em Unaí-MG: Resultados econômicos e impactos ambientais*. Brasília. 149 f. (Tese de doutorado) CDS, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Wanderley, M. N. B. (2000) Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: *Pronaf. Pronaf perguntas e respostas*. Brasília. Recuperado de <https://bit.ly/36OuAGM>



Processo de modernização da agropecuária do Nordeste brasileiro: Uma análise para os anos de 1970 – 1975 – 1980 – 1985 – 1995 – 2006

Nayara de Sousa Rodrigues¹
Maria Jeanne Gonzaga de Paiva²

Resumo

O processo de modernização da agropecuária do Nordeste brasileiro tem seu ponto de inflexão nos anos de 1970, intensificado com as ações do II PND, através das políticas de desenvolvimento regional pautadas na SUDENE. A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de transformação da agropecuária do Nordeste ao longo do período estudado, mostrando a evolução da agropecuária e seus determinantes. Nas décadas de 1960 e 1970 a agricultura brasileira passou por processo de modernização, conhecido como modernização conservadora. Esse processo visava mecanizar o campo conservando a estrutura política da região, ou seja, a modernização foi limitada aos grandes latifúndios. Metodologicamente se recorreu à base do Censo agropecuário fornecido pelo Sistema Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Recuperação Automática (SIDRA), os dados secundários do Censo agropecuário foram tabulados com a utilização do software MS-Excel e com a elaboração de tabelas seguidas das respectivas análises estatísticas descritivas. O nível utilizado de desagregação dos dados foi por estado da federação, o Nordeste brasileiro é composto por nove estados. Os resultados revelam que ao longo dos anos o número de máquinas no campo está aumentando, enquanto o número de trabalhadores vem diminuindo. A mecanização do campo exige um número menor de trabalhadores, além de uma mão de obra mais qualificada. A agropecuária do Nordeste brasileiro é bem diversificada, a qual se contrapõem grandes latifúndios, com máquinas sofisticadas e insumos agrícolas, e um grande número de pequenos agricultores que não tem acesso aos equipamentos agrícolas e que sobrevivem apenas da agricultura familiar.

Palavras chave

Modernização – Agropecuária - Nordeste brasileiro – Transformações – Equipamentos agrícolas

Introdução

O Nordeste brasileiro durante o período áureo do açúcar era a região mais desenvolvida do país, mas após o declínio dessa atividade econômica tornou-se uma região “esquecida” pelo poder público estigmatizada como atrasada e sem potencial. Ao



longo da história a questão climática foi tida como o principal fator desse atraso e da desigualdade existentes entre as regiões no país. Contudo, os problemas que essa região enfrenta vão muito além, envolvendo também fatores sociais e políticos que persistem ao longo da história.

Nas décadas de 1960 e 1970 a agricultura brasileira passou por processo de modernização, conhecido como modernização conservadora. Esse processo visava mecanizar o campo conservando a estrutura política da região, ou seja, a modernização foi limitada aos grandes latifúndios. Na prática aumentou o número de máquinas no campo, como por exemplo, os tratores, possibilitou o uso mais intensivo de defensivos químicos, fertilizantes e conseqüentemente aumentou a produtividade agrícola. O processo de modernização da agropecuária do Nordeste brasileiro tem seu ponto de inflexão nos anos de 1970, intensificado com as ações do II PND, através das políticas de desenvolvimento regional pautadas na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE.

A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de transformação da agropecuária do Nordeste ao longo do período estudado, mostrando a evolução da agropecuária e seus determinantes. Metodologicamente se recorreu à base do Censo agropecuário fornecido pelo Sistema Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Recuperação Automática (SIDRA), os dados secundários do Censo agropecuário foram tabulados com a utilização do software MS-Excel e com a elaboração de tabelas seguidas das respectivas análises estatísticas descritivas. O nível utilizado de desagregação dos dados foi os estado da federação do Nordeste brasileiro sendo composto por nove estados.

Os resultados revelam que ao longo dos anos o número de máquinas no campo está aumentando, enquanto o número de trabalhadores vem diminuindo. A mecanização do campo exige um número menor de trabalhadores, além de uma mão de obra mais qualificada. A agropecuária do Nordeste brasileiro é bem diversificada, a qual se contrapõem grandes latifúndios, com máquinas sofisticadas e insumos agrícolas, e um grande número de pequenos agricultores que não tem acesso aos equipamentos agrícolas e que sobrevivem apenas da agricultura familiar. O trabalho se justifica pela importância do setor primário na economia do Nordeste e na contribuição que essa pesquisa pode ter para a elaboração de políticas públicas.



Agropecuária brasileira e a modernização do campo

A agropecuária brasileira vem se destacando ano após ano devido à utilização de técnicas e equipamentos sofisticados proporcionando o aumento da produtividade dos fatores de produção em geral, destacando a terra e o trabalho. Pois, através da mecanização do campo e da utilização de fertilizantes torna-se possível produzir mais, utilizando menores extensões de terra e uma quantidade menor de mão de obra.

Conforme Gasques et al. (2013), os reflexos do aumento da produtividade no Brasil podem ser observados nas taxas negativas do uso de insumos totais na última década. As áreas de pastagens tiveram reduções significativas, enquanto o efetivo de animais teve grande aumento. Outro aspecto relevante diz respeito à redução da mão de obra na agricultura e o índice do capital, que tem apresentado um padrão contínuo e intenso de crescimento, trazendo como resultado a implementação da modernização agrícola (Felema; Raiher; Ferreira, 2013, p. 557).

Gasques et al. (2010) apud Felema, Raiher e Ferreira (2013, p. 557) ao verificar mudanças estruturais ocorridas na agropecuária brasileira elencaram uma série de alterações que resultara no aumento da produtividade:

A redução do pessoal ocupado, que reflete no maior uso de tecnologia através de máquinas e equipamentos, redução da área disponibilizada na criação de animais com aumento da produtividade pecuária, em que se verifica a capacidade de suporte das pastagens, a utilização de máquinas mais eficientes operacionalmente, o uso de novas técnicas de cultivo (plantio direto, inoculação com bactérias, manejo de pragas, criação de espécies com capacidade de adaptação, dentre outros), foram de fundamental importância. Também é destacado que as políticas agrícolas de investimentos em pesquisas, qualificação da mão de obra, financiamentos e gestão dos estabelecimentos estão entre as causas do crescimento das produtividades.

É relevante pontuar que a agricultura tem um papel importante na evolução da economia brasileira, sendo caracterizada por muito tempo como uma economia primária exportadora. Destacando o ciclo do açúcar no Nordeste, durante o período colonial, e o ciclo do café concentrado principalmente em São Paulo. Atualmente o Brasil é um grande exportador de grãos que geram divisas que contribuem para estabilizar a economia, aumentando a reserva nacional de moeda estrangeira.

Segundo Graziano da Silva (1998) o elemento fundamental do processo histórico de passagem da agricultura brasileira do chamado “complexo rural” para uma dinâmica comandada pelos “complexos agroindustriais” é o desenvolvimento do capitalismo no



mercado interno. O princípio de desenvolvimento do capitalismo no geral é o mesmo no campo e na cidade: o aprofundamento da divisão social do trabalho. Ocorrendo a proletarização dos camponeses e a destruição da economia natural, existente antes da entrada do capital, assim criando as bases para o desenvolvimento do capitalismo no meio rural.

Para Graziano da Silva (1981, p. 43 *apud* Graziano da Silva, 1998, p. 3) a separação entre cidade/campo se dá quando a indústria saiu do meio rural em direção à cidade, entendo que no início o artesanato doméstico era um complemento das atividades de famílias camponesas que depois migram para a cidade onde por meio de um longo processo são transformadas em grandes indústrias, se reunificando quando o próprio campo se converte em uma fábrica. “Quando isso ocorre, a agricultura entendida como um ‘setor autônomo’ desaparece; ou melhor, converte-se num ramo da própria indústria(...)”.

O longo processo de transformação da base técnica – chamado de modernização – culmina, pois, na própria industrialização da agricultura. Esse processo representa na verdade a subordinação da Natureza ao capital que gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. Assim, se faltar chuva, irriga-se; se não houver solos suficientemente férteis, aduba-se, se ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos químicos ou biológicos, e se houver ameaças de inundações, estarão previstas formas de drenagem (Graziano da Silva, 1998, p. 3).

A agropecuária brasileira tem seu ponto de inflexão nas décadas de 1960 e 1970, sendo denominada de Modernização conservadora. Nessa mesma época o país vivia um período de grande crescimento econômico, caracterizado pela retomada dos investimentos públicos em infraestrutura indo à consonância com o processo de industrialização que estava a todo vapor no Brasil.

A modernização da agricultura nesse período revela-se como um instrumento do capital industrial, ou seja, o intuito era aumentar a lucratividade nas atividades da indústria de insumos e implementos agrícolas. Como estratégia principal, “a modernização da agricultura deve ser alicerçada dentro das garantias de dependência financeira e integração com a indústria de bens de produção agrícolas (tratores e insumos), tornando-se o agricultor um consumidor extremamente subordinado” (Souza, 2011, p. 236).



Essa modernização se mostrou excludente principalmente para os pequenos produtores da agricultura familiar que não tiveram o acesso a essa modernidade que serviu principalmente ao interesse do capital. No Nordeste pode ser observada uma enorme discrepância entre os grandes latifundiários, que possuem grandes extensões de terra, técnicas e equipamentos sofisticados que permitem o aumento da produtividade, e os pequenos produtores que sobrevivem muitas vezes apenas da agricultura familiar e de pequenas vendas, utilizando técnicas rudimentares.

Evolução da agropecuária do nordeste

A região Nordeste no período colonial era o centro dinâmico da economia brasileira, onde as principais atividades desenvolvidas eram ligadas ao açúcar. Com o declínio dessa atividade o centro dinâmico se deslocou para outras regiões e o Nordeste foi sendo “esquecido” pelo poder público. Sendo caracterizado pela seca, pela grande concentração de renda e terra nas mãos de poucas pessoas devido a fatores históricos, nos quais os grandes coronéis eram proprietários de muitas terras, além de um grande número de pessoas pobres que dependiam da assistência do governo para sobreviver, governo esse que por muito tempo fez da seca uma indústria para conseguir votos se aproveitando dessa população carente.

Nesse contexto as discrepâncias entre as regiões do país eram enormes, enquanto o Sudeste estava crescendo em um ritmo acelerado, o Nordeste estava estagnado. Por isso, para diminuir as disparidades existentes entre o Nordeste e o restante do país em 1959 surgiu a Sudene, tendo o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da região. Pois mesmo com o processo de industrialização ocorrendo nacionalmente crescia a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul do país, tornando necessária uma intervenção direta do governo federal.

A Sudene entendia que a industrialização era a maneira necessária para promover o desenvolvimento dessas regiões mais atrasadas. Passou-se então a promover políticas públicas que buscaram industrializar as regiões mais dinâmicas do Nordeste, que findou aumentando a urbanização e que acabou proporcionando a formação de regiões metropolitanas. Através das políticas desenvolvidas pela Sudene e principalmente após a segunda metade da década de 1970 através das ações do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), percebe-se uma relativa amenização dos determinantes históricos da colonização regional através da execução de grandes projetos de infraestrutura que permitiam melhor adaptação do nordestino no meio em que vivia.



Segundo Ferreira; Ramos; Rosa; Lima; Leite (2006, p. 101),

(...) a partir de 1970 foi intensificada a modernização da agricultura brasileira, por meio de políticas de crédito subsidiado, preços mínimos, pesquisa e extensão rural. Nessa década, havia ainda o sistema de substituição de importações de insumos agroindustriais, como tratores, fertilizantes, equipamentos mecânicos etc. A substituição desses insumos deu-se com taxas de juros subsidiadas e programas de sustentação de preços mínimos financiados pelo governo federal. Dessa forma, se o processo de substituição de importação prejudicou a agricultura, penalizando as exportações das commodities brasileiras (Rezende, 2003), por outro lado, possibilitou maior aquisição de insumos modernos.

Na década de 1970 também se verificou no Nordeste um impulso de modernização da agropecuária “com a construção de grandes perímetros irrigados públicos – que associava à irrigação pública projetos de assentamento, produção de alimentos, colonização e incentivo à produção familiar” (Ferreira; Ramos; Rosa, 2006, p. 505). Mesmo com o avanço que a agropecuária teve na região Nordeste ainda é possível verificar grandes divergências “ela apresenta heterogeneidade em sua estrutura agrícola, onde coexistem subemprego, instabilidade no emprego e baixa renda, além de grandes disparidades no nível tecnológico entre pequenos e grandes produtores rurais” (Ferreira; Ramos; Rosa, 2006, p. 505).

Na década de seguinte, as condições macroeconômicas desfavoráveis foram reflexos da reestruturação política de preços mínimos e redução do crédito rural subsidiado, essa década ficou mundialmente conhecida como década perdida. Vale ressaltar que a agropecuária não foi tão atingida devido à infraestrutura criada na década de 1970. (Ferreira; *et al*, 2006).

Sinteticamente, observam-se no Nordeste grandes desigualdades entre os grandes latifundiários e os pequenos agricultores da agricultura familiar, onde uns dispõem de níveis elevados de tecnologia e os outros vivem a mercê da irregularidade climática, da falta de auxílio do governo e das mazelas sociais.

Metodologia

Caracterização da área de estudo

A área de estudo da pesquisa é o Nordeste brasileiro, composto por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sendo a terceira maior região Brasil e possuindo a segunda maior população.



Mesmo com a importância da agricultura e da pecuária para a região, essas são prejudicadas pela irregularidade das chuvas, características da região, e agravadas pela falta de apoio do poder público. Sendo esse um agente importante para disseminar conhecimento e meios para que a população, e principalmente os pequenos agricultores, se adaptem a falta de chuva. Durante muito tempo vinha falando-se em combate a seca um termo equivocado entendendo que esse fenômeno é causado pelo clima da região que não pode ser modificado, ou seja, não se trata de combater a seca, mas sim de aprender a conviver com ela.

Natureza dos dados

Metodologicamente se recorreu à base do Censo agropecuário, fornecida pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) que visa facilitar aos administradores públicos e à sociedade em geral, através da Internet, a obtenção gratuita dos dados agregados de estudos e pesquisas realizadas pelo IBGE.

Métodos de análise

Os dados secundários do Censo agropecuário são tabulados com a utilização do software MS-Excel na elaboração das tabelas seguidas das respectivas análises provenientes de estatísticas descritivas.

Resultados e discussão

Os dados apresentados nessa pesquisa foram extraídos no Censo agropecuário para os anos de estudo. A seleção dessas variáveis para a análise foi feita a partir da sua capacidade de caracterizar a agropecuária ao longo dos anos. A Tabela 1 e a Tabela 2 evidenciam a área dos estabelecimentos agropecuários, primeiro mostrando a área em hectares e depois a taxa de variação no período (Tabela 2).

Através das Tabelas 1 e 2 verifica-se que as áreas que compõem os estabelecimentos agropecuários no Nordeste tem um crescimento mais acentuado até o ano de 1985 ocorrendo uma redução dessas áreas nos anos posteriores. Observa-se que a área dos estabelecimentos em 1985 no Nordeste era de 92.054.181 hectares e um pouco mais de quinze anos depois era de 76.074.411, mas mesmo com essa redução a produção continuou a crescer devido à utilização de máquinas e implementos agrícolas que permitiram o aumento da produtividade.



Brasil, Nordeste e Unidades da federação	ANOS					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	10794912	12409067	15134236	15548267	12560692	13033568
Piauí	9606730	10523517	11162096	11828025	9659972	9506597
Ceará	12104811	10991579	11743268	11009161	8963842	7948067
Rio Grande do Norte	4571683	4376359	4513493	4383018	3733521	3187928
Paraíba	4582830	4736225	4906465	4872094	4109347	3787404
Pernambuco	6393597	6294682	6655794	6699919	5580734	5434076
Alagoas	2238522	2284369	2396569	2363770	2142460	2112574
Sergipe	1743200	1809540	1897771	1918508	1702628	1482437
Bahia	22260826	25263546	30032595	33431402	29842900	29581760
Nordeste	74298713	78690488	88443907	92054181	78296096	76074411
Brasil	294145466	323896082	364854421	374924929	353611246	333680037

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 1. Área dos estabelecimentos agropecuários (hectares) no Brasil, Nordeste e nas Unidades da Federação que compõe o Nordeste, para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.

Na Tabela 2 torna-se mais fácil a observação do crescimento ou redução da área dos estabelecimentos. No Ceará e no Rio Grande do Norte a redução da área dos estabelecimentos já começou em 1975 tendo um leve aumento em 1980 e voltando a reduzir posteriormente. No Pernambuco, verificou-se uma leve redução ou basicamente uma estagnação entre os anos de 1970 e 1975, tendo uma recuperação na década de 1980 e logo após reduzindo-se novamente. No restante das Unidades da Federação, no Nordeste e no Brasil observa-se um crescimento até 1985 e depois verifica-se redução da área dos estabelecimentos agropecuários.

Brasil, Nordeste e Unidades da Federação.	ANOS					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	100	114,95	140,20	144,03	116,36	120,74
Piauí	100	109,54	116,19	123,12	100,55	98,96
Ceará	100	90,80	97,01	90,95	74,05	65,66
Rio Grande do Norte	100	95,73	98,73	95,87	81,67	69,73
Paraíba	100	103,35	107,06	106,31	89,67	82,64
Pernambuco	100	98,45	104,10	104,79	87,29	84,99
Alagoas	100	102,05	107,06	105,60	95,71	94,37
Sergipe	100	103,81	108,87	110,06	97,67	85,04
Bahia	100	113,49	134,91	150,18	134,06	132,89
Nordeste	100	105,91	119,04	123,90	105,38	102,39
Brasil	100	110,11	124,04	127,46	120,22	113,44

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 2. Taxa de variação das áreas dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, Nordeste e nas Unidades da Federação que compõe o Nordeste, para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.



Outra variável importante é o número de pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários e da mesma maneira da área dos estabelecimentos tem uma tendência à redução ao longo do período em estudo. No Nordeste o número passa de 7.568.847 em 1970 tendo o seu ápice em 1985 com um total de 10.441.667 empregados e reduzindo para 7.699.138 em 2006. Outra característica importante é a contratação de mão de obra mais qualificada, pois com a inserção de máquinas sofisticadas é necessário pessoas que saibam operá-las.

Brasil, NORDESTE e Unidades da Federação	Ano					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	1182711	1494705	1672502	1672820	1331864	991600
Piauí	518736	613521	790326	818465	666465	831827
Ceará	1021712	999721	1069258	1271800	1170724	1145990
Rio Grande do Norte	307881	382488	432188	432317	332516	247515
Paraíba	584656	799632	648607	763963	479987	490317
Pernambuco	1128264	1137787	1218817	1307160	975288	944909
Alagoas	430279	493661	543524	624588	432104	451743
Sergipe	268782	298307	295055	348069	313271	268800
Bahia	2125809	2518925	2662835	3202485	2508590	2326437
Nordeste	7568847	8738763	9333172	10441667	8210809	7699138
Brasil	17582089	20345692	21163735	23394919	17930890	16568205

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 3. Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários no Brasil, Nordeste e nas Unidades da Federação que compõe o Nordeste, para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.

Um ponto chave do trabalho é mostrar a mecanização do campo no Nordeste brasileiro, nesse trabalho, sendo verificada a partir do número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários. O número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários teve uma extraordinária elevação, partindo de

7.281 no Nordeste em 1970 e indo para 62.444 em 2006, um aumento de mais de 800%. O Maranhão teve uma elevação mais de 3000% da quantidade de tratores entre os anos



de 1970 e 2006, as demais Unidades da Federação também tiveram relevantes aumentos.

Esse fenômeno foi possível devido à chamada modernização conservadora, que visava mecanizar as áreas rurais, sendo beneficiada com as ações da Sudene e do II PND. Não só no Nordeste, mas em todo o país houve uma intensa implementações de tratores nos estabelecimentos agropecuários visando aumentar a produção reduzindo os custos. No Brasil o número de tratores passou de 165.870 em 1970 para 820.718 em 2006

Brasil, Nordeste e Unidade da Federação	Ano					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	168	372	2304	2956	3965	6045
Piauí	244	370	1622	2057	2402	3813
Ceará	734	1419	3881	4198	4528	5701
Rio Grande do Norte	570	1231	3029	3093	3650	4283
Paraíba	822	1416	3109	2884	3225	2896
Pernambuco	1519	2570	5081	4821	5649	5532
Alagoas	965	2294	3736	3711	3630	3598
Sergipe	420	1056	1934	2054	2984	2989
Bahia	1838	4342	13349	15953	25443	27587
Nordeste	7281	15074	38046	41727	55476	62444
Brasil	165870	323113	545205	665280	803742	820718

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 4. Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários (Unidades) no Brasil, Nordeste e nas Unidades da Federação que compõe o Nordeste, para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.

As Tabelas 5 e 6 utilizam a variável número de estabelecimentos agropecuários, na tabela 5 por unidades e na tabela 6 a taxa de variação ao longo do período utilizando o ano de 1970 como parâmetro de comparação. De modo geral, observa-se um aumento no número de estabelecimentos até 1985, expressando o amplo processo de expansão e ocupação de novas áreas destinadas à agropecuária como pode ser observado na tabela 1.



No período posterior ocorre a redução do número de estabelecimentos assim como no total da área utilizada por estes. Sendo importante destacar que esse processo ocorre devido ao aumento da produtividade das terras, beneficiando na maior parte os grandes latifundiários. Além disso, com o crescimento das cidades e a migração da população do campo para a cidade o número de estabelecimentos caem assim como as áreas que estes ocupam, mas em compensação a produtividade cresce a cada ano.

Brasil, Nordeste e Unidades da Federação	ANO					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	396761	496737	496758	531413	368191	287039
Piauí	217886	216704	249129	270443	208111	245378
Ceará	245432	251650	245878	324278	339602	381017
Rio Grande do Norte	103630	104842	106458	115736	91376	83053
Paraíba	169667	199987	167485	203277	146539	167286
Pernambuco	331409	316562	330701	356041	258630	304790
Alagoas	105160	115576	117986	142774	115064	123332
Sergipe	95276	101234	95892	115271	99774	100607
Bahia	541566	548123	637225	739006	699126	761558
Nordeste	2206788	2351416	2447513	2798239	2326413	2454060
Brasil	4924019	4993252	5159851	5801809	4859865	5175636

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 5. Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades) no Brasil, Nordeste e nas Unidades da Federação que compõe o Nordeste, para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.

Na Tabela 6 pode se verificar mais claramente a elevação do número de estabelecimentos até 1985 e logo depois a sua redução. O Maranhão foi o estado que mais reduziu o número de estabelecimentos comparando o ano de 2006 e de 1970. O Ceará indo na contramão no que estava acontecendo nos demais estados não reduziu o número de estabelecimentos e sim aumentou, em números absolutos

passou de 245.432 em 1970 para 381.017 em 2006, mas fazendo uma ligação com a Tabela 2 percebe-se que o Ceará foi o estado que mais perdeu território destinado a agropecuária. Então deduzimos a existência de um número considerável de pequenos produtores que possuem pequenas extensões de terras.



Tanto o Ceará com o Nordeste caracterizam-se pela presença de grande número de pequenos produtores agropecuários, grande concentração de terra, baixa produtividade e irregularidades das chuvas (Ferreira; Ramos; Rosa 2006).

Apesar dos problemas mencionados, a agricultura é um setor particularmente importante para a economia cearense e tem dado, historicamente, uma inquestionável contribuição ao desenvolvimento do estado, participando na geração de emprego, renda e divisas. Nos últimos anos, o Ceará vem demonstrando crescimento sucessivo do PIB, com taxas superiores às do Nordeste e Brasil, além de índices crescentes em suas exportações. (Rosa, Alves, 2001 apud Ferreira; Ramos; Rosa, 2006, p. 505-506).

Brasil, Nordeste e Unidades da Federação	ANOS					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Maranhão	100	125,20	125,20	133,94	92,80	72,35
Piauí	100	99,46	114,34	124,12	95,51	112,62
Ceará	100	102,53	100,18	132,13	138,37	155,24
Rio Grande do Norte	100	101,17	102,73	111,68	88,18	80,14
Paraíba	100	117,87	98,71	119,81	86,37	98,60
Pernambuco	100	95,52	99,79	107,43	78,04	91,97
Alagoas	100	109,90	112,20	135,77	109,42	117,28
Sergipe	100	106,25	100,65	120,99	104,72	105,60
Bahia	100	101,21	117,66	136,46	129,09	140,62
Nordeste	100	106,55	110,91	126,80	105,42	111,21
Brasil	100	101,41	104,79	117,83	98,70	105,11

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Tabela 6. Taxa de variação do número de estabelecimentos agropecuários para o Brasil, Nordeste e Unidades da Federação que compõe o Nordeste, nos anos de 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006.

No Nordeste e no Brasil o número de estabelecimentos cresce até 1985 caem em 1995, no caso do Brasil caem para um número menor do que foi apresentado em 1970, e ambos têm uma pequena elevação em 2006.



Conclusão

Os resultados revelam a mecanização crescente dos estabelecimentos agropecuários no Nordeste no período em estudo, assim como a redução da mão de obra fazendo com que a produtividade aumente a cada ano. Através dos dados e da pesquisa bibliográfica, verifica-se que os investimentos feitos na década de 1970 permitiram que a agropecuária se expandisse até 1985, aumentando a área dos estabelecimentos e o número de pessoas empregadas. Mas, após esse período pode ver os resultados desses investimentos, através da redução do custo de produção dos bens agropecuários.

A mecanização do campo exige um número menor de trabalhadores, mas em compensação necessitam de uma mão de obra mais qualificada, que sabia operar máquinas, expulsando os trabalhadores sem qualificação os deixando a margem desse processo. A agropecuária do Nordeste brasileiro é bem diversificada, a qual se contrapõem grandes latifúndios, com máquinas sofisticadas e insumos agrícolas, e um grande número de pequenos agricultores que não tem acesso aos equipamentos agrícolas e que sobrevivem apenas da agricultura familiar.

Notas

¹ Graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri (URCA); Bolsista de iniciação científica do programa institucional de bolsas de iniciação científica (PIBIC-URCA). Fone: 55 (88) 9 8802 5775. E-mail: n-sousa-rodriques@bol.com.br

² Orientadora, Docente do Departamento de Economia da URCA, Doutoranda em Economia pela Universidade Federal Fluminense-UFF, Líder do grupo de pesquisa em negócios urbanos e rurais (Genur) do CNPq. E-mail: jeanne.paiva@urca.br

Referências

Felema, J.; Raiher, A. P.; Ferreira, C. R. Agropecuária Brasileira: desempenho regional e determinantes de produtividade. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Piracicaba – SP, v. 51, n° 3, p. 555-574, jul/set 2013.

FERREIRA, M. de O.; RAMOS, L. M.; ROSA, A. L. T. da. Crescimento da agropecuária cearense: comparação entre as produtividades parciais e total. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Rio de Janeiro, v. 44, n. 3, p. 503-524, jul./set., 2006.

Ferreira, M. de O.; RAMOS, L. M.; Rosa, A. L. T. da; LIMA, P. V. P. S.; LEITE, L. A. de S. Especialização produtiva e mudança estrutural da agropecuária cearense. *Teoria e Evidência Econômica*, Passo Fundo, v. 14, n. 26, p. 91-111, maio 2006.



Graziano da Silva, J. *A nova dinâmica da agricultura brasileira*. 2 ed. Campinas, SP: UNICAMP. IE, 1998.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. *Censo agropecuário*. Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br> >. Acesso em: 20 de ago de 2019.

Souza, L. R. de S. A modernização conservadora da agricultura brasileira, agricultura familiar, agroecologia e pluriatividade: diferentes óticas de entendimento e de construção do espaço rural brasileiro. *Cuadernos de desarrollo rural* [em linea] 2011. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11722041010>>. acesso em: 20 de dez. 2018.



A produção de Cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil: Valorização do agronegócio e expansão do capital

Ilena Felipe Barros

Resumo

O presente artigo origina-se dos estudos e pesquisas realizados na área canavieira do Nordeste brasileiro. O objetivo central é analisar a reprodução e acumulação do capital, a partir da monocultura da cana-de-açúcar na região Nordeste do Brasil. Desde a colonização brasileira, a produção de cana-de-açúcar ganhou destaque no desenvolvimento econômico e hoje é uma importante monocultura do agronegócio e da expansão do capital no campo. As transformações ocorridas no setor sucroalcooleiro revelam a dinâmica e metamorfose do capital a cada fase e como ele se reestrutura para garantir sua reprodução, dominando o processo de trabalho, os meios de produção e a força vital que faz gerar a riqueza. Tudo isso via avanço científico e tecnológico, incentivos fiscais, ajuste estrutural da economia local e prioridade ao agronegócio. Esse “progresso” modernizador representa a valorização do capital, à medida que desenvolve estratégias de extração da mais valia de trabalhadores agrícolas e industriais. Como resultado desse processo de acumulação do capital no campo, tem-se a intensificação da exploração da força de trabalho; degradação ambiental; uso intensivo de agroquímicos; altos índices de empobrecimento e miséria da população local; entre outras consequências. Para elaboração desse artigo utilizou-se de pesquisa documental e revisão de literatura.

Palavras chave

Nordeste; cana-de-açúcar; agronegócio; agroindústria; capital.

Introdução

O Nordeste tem sido um importante produtor de cana-de-açúcar desde a colonização brasileira (realizada pelos Portugueses) até os dias atuais. A produção de açúcar e álcool tem sido um setor importante para o desenvolvimento econômico do Nordeste. No período da colonização, o sistema *plantation*, iniciado em Pernambuco e na Bahia na primeira metade do século XVI, foi destinado, sobretudo à cana-de-açúcar, provocando o desmatamento e fixando os engenhos que fabricavam o açúcar bruto, a rapadura e a aguardente. Estes eram movimentados pela força humana. Posteriormente, os engenhos utilizaram a tração animal - bois e éguas - ou a água.



Havia engenhos dos mais diversos portes e importância, convivendo com os chamados engenhos reais e as engenhocas. Em geral, os proprietários eram sesmeiros ligados aos donatários das capitanias e recebiam o financiamento de comerciantes europeus, sobretudo de judeus sefarditas que haviam sido expulsos de Portugal e se instalado na Holanda. (Andrade, 2001, p. 05)

O desenvolvimento da monocultura da cana e da produção de açúcar transposto do Brasil para as Antilhas após a expulsão dos holandeses do Nordeste provocou uma melhoria nas técnicas de produção e na qualidade do produto. Ocorre, então, um impacto sobre o Nordeste que continuou, até o começo do século XIX, a cultivar a cana crioula, a usar a força de trabalho manual - o arado só foi introduzido em meados do século XIX - e a produzir o açúcar bruto, de baixa qualidade.

Ainda na historiografia de Andrade (2001), ressalta-se que as inovações em escala internacional introduzidas no século XIX determinaram a necessidade de modernização da produção açucareira, dando margem ao programa imperial de implantação de engenhos de maior porte. Assim, a partir de 1874 foram reestruturados os engenhos banguêses, visando à produção de açúcar branco e demerara, surgindo então às fábricas de maior capacidade de produção. Quando eram de propriedade particular, chamavam-se usinas; quando de empresas comerciais, geralmente estrangeiras, denominavam-se engenhos centrais. O que distinguia umas das outras era que as usinas, sendo de propriedade de antigos senhores de engenho e de parentes e vizinhos associados, não separavam a produção da industrialização da cana e utilizavam a força de trabalho escrava, enquanto os engenhos centrais, subsidiados e com garantias de juros do capital aplicado pelo governo, tinham restrições quanto à posse de terras para a cultura da cana e à utilização da mão-de-obra escrava. A produção da cana a ser industrializada nos engenhos centrais era feita por proprietários de terra, antigos senhores de engenho que a vendiam ao engenho central, comprometendo-se a fornecer cotas anuais. Esses proprietários de engenho que desmontavam a sua indústria eram chamados de fornecedores de cana, substituindo os banguezeiros.

Com a criação das usinas foram fundadas numerosas pequenas unidades produtivas, muitas delas com instalação de algumas máquinas que lhes permitia a produção do açúcar demerara. À medida que aumentavam a sua capacidade de produção iam absorvendo os engenhos banguêses que restavam e, posteriormente, também pequenas e médias usinas. Observou-se, então, que a instalação de maquinário



moderno, ao mesmo tempo em que diminuía o número de usinas em atividade, aumentava a produção de açúcar.

Andrade (2001, p. 06), afirma que “o grupo dominante, formado com a colonização, teve a capacidade de se adaptar a cada momento histórico, continuando até hoje no controle da produção açucareira regional, expandindo-se até em outros estados da Federação e formando uma oligarquia política que manteve por muito tempo o controle do Estado”.

Metodologia

Para elaboração desse artigo utilizou-se de pesquisa documental e revisão de literatura. Para apreender de forma aprofundada os determinantes da acumulação do capital no campo e a expansão a monocultura da cana-de-açúcar foi necessário realizar uma imersão na literatura da questão agrária brasileira para apropriar-se de algumas categorias temáticas que se articulam com o tema central desse artigo, são elas: expansão e crise do capital/padrão de intervenção estatal; questão agrária; agronegócio; acumulação e reprodução capitalista no campo. Posto isso, é importante afirmar a importância da pesquisa no mundo rural, suas particularidades e singularidades.

A pesquisa, pois, é fundamental para a formação profissional e o conhecimento que deriva da prática profissional. A apreensão do real, em uma perspectiva de totalidade, não se coloca imediatamente de modo pronto e acabado, mas se constrói, através da pesquisa científica. Neste sentido, “[...] a pesquisa garante o status de maioria para a profissão”. (Guerra, 2009, p.702)

Dessa forma, buscou-se conhecer o real, para contribuir na sua transformação. A perspectiva de totalidade inscrita no método de Marx é a opção teórico-metodológica desse artigo, na busca de apreender o real em suas múltiplas determinações, relacionando aparência e essência em sua relação dialética. Parte da premissa de que “[...] a realidade, os fatos, os acontecimentos, precisam ser desmascarados, desvendados. Daí esse percurso entre o que é a aparência e a essência, entre a parte e o todo e o singular e o universal” (IANNI, s/d, p. 03-04).



Resultados e discussões

Expansão da Monocultura da Cana-de-açúcar e a formação de sua agroindústria no Nordeste.

A organização da agroindústria canavieira no Nordeste e no Brasil tem como características a forte concentração da renda e do poder nas mãos dos proprietários de terra (senhores de engenho, usineiros e fazendeiros), que influíram decisivamente na articulação de uma rede de relações políticas e institucionais, com apoio governamental, criação de mecanismos e dispositivos de proteção à monocultura e a reprodução ampliada do capital.

Até a década de 1940, o Nordeste era o maior produtor de açúcar para exportação. Após a Segunda Guerra Mundial, o Sudeste, especialmente, São Paulo passa a ser o maior produtor de açúcar, orientado para o mercado interno. Mas o Nordeste continuou sendo o maior exportador, financiado pelo Estado. Esse apogeu das exportações de açúcar pelo Nordeste foi mantido até a década de 1990, quando ocorre a desregulamentação.

Na década de 1960, o Brasil implementa um forte processo de modernização das usinas, com aumento da capacidade de moagem e da área plantada para atender ao mercado americano, pois Cuba, seu maior fornecedor, deixara de cumprir esse papel, dado o embargo norte-americano, devido a Revolução Socialista. As usinas paulistas aproveitam a modernização tecnológica e ampliam sua capacidade produtiva e superam a produção do Nordeste.

Em 1970, o complexo agroindustrial canavieiro passa por um processo de modernização para atender às exigências das exportações. A mecanização agrícola se processou na etapa do preparo do solo, mas o plantio e o corte permaneceram manuais, exigindo quantidade significativa de força de trabalho. A produção extensiva, somada à modernização demandou uma expansão da área plantada, portanto de mais terra, requerendo um número maior de trabalhadores para o corte e plantio da cana-de-açúcar. Como a modernização foi parcial, nas décadas de 1960 e 1970, o plantio, a colheita e o carregamento da cana continuaram sendo manual, até final da década de 1980. Como destacam

Apenas as atividades de transporte das mudas, abertura dos sulcos, ou valas, fechamento e adubação passaram a ser feitas por caminhões e máquinas agrícolas. No plantio manual, ou semimecanizado, os trabalhadores, que realizam as atividades de



jogar e picar a cana, estão submetidos a um elevado ritmo de trabalho, determinado pela velocidade das máquinas, que estão na frente e atrás dos trabalhadores. (Novaes e Alves, 2007, p.25)

Esse processo de modernização tecnológica também acarretou a expulsão de milhares de trabalhadores rurais que viviam da agricultura de subsistência, em suas pequenas glebas. Estes foram obrigados a deixar suas terras, forçados pelo processo de expropriação e pela própria lógica de expansão da área de monocultura canavieira e obrigados a subjugar-se ao assalariamento rural nas usinas. A modernização colocou a favor da expansão do capital agroindustrial uma massa de trabalhadores rurais sem terra.

Em meados da década de 1970, a agroindústria canavieira passa por nova modernização, quando da produção de álcool combustível, incentivada pelo Programa Nacional do Álcool (PRO-ÁLCOOL), do governo federal, incorporado a matriz energética brasileira. Nesse momento, há uma expansão da área canavieira e a expropriação de agricultores familiares nos arredores das terras das usinas e destilarias, disponibilizando força de trabalho barata para o trabalho nos canaviais. Nesse processo de modernização da agroindústria canavieira, registra-se a migração intensa de trabalhadores rurais para a produção do Sudeste, principalmente dos Estados do Nordeste.

De acordo com Novaes e Alves (2007, p. 26) esse período caracterizou-se por uma,

[...] dinâmica do complexo agroindustrial canavieiro, tanto voltada ao mercado externo quanto ao mercado interno, nas décadas de 1960 e 1970, respectivamente, promoveu o desenvolvimento de uma capacidade competitiva, fundada em: baixos salários, eficiência de suas operações, uso extensivo da terra e intensivo de meios disponibilizados pela natureza.

Os anos 1980 foram caracterizados pela fase de desaceleração, coincidindo com a crise fiscal e financeira, que causou um impacto negativo no Nordeste. A taxa média de crescimento econômico diminuiu, então, para 4,3%. Na década de 1990, o Estado brasileiro passa por mudanças significativas para inserir-se nas políticas de ajuste estrutural do neoliberalismo e não consegue prosseguir com a política de crédito, promovendo a desregulamentação parcial do setor canavieiro e uma abertura comercial, acrescido da queda do preço de açúcar e álcool em âmbito internacional. “A relação do



setor canavieiro com o Estado modifica-se ao longo deste período, porém a aliança histórica com a classe dominante mantém-se". (Sant'Ana, 2012, p. 28).

A partir da desregulamentação do complexo canavieiro, diferentes estratégias foram implementadas para o retorno do crescimento do setor, principalmente o crescimento técnico nas unidades produtivas e a concorrência interna entre as empresas do complexo agroindustrial. Instala-se um novo padrão de produção enxuta, com a redução de custos. Esse novo paradigma, como nos informa Novaes e Alves (2007) prever:

Adoção de mecanização do plantio e do corte da cana crua; automação no controle de processos de produção industrial; aumento da produtividade do trabalho, com redução do número de trabalhadores empregados; [...] aumento da produtividade agrícola, medida em quantidade de sacarose; mudanças empreendidas nas formas de gestão da força de trabalho [...]. (Novaes e Alves, 2007, p. 28)

Assim, a partir de 2002, o setor volta a desenvolver-se e ganha novo dinamismo. Isso devido a alguns fatores: crescimento da demanda interna de álcool, em decorrência dos novos modelos de automóveis "flex fuel", movidos por álcool e gasolina; efeitos do Protocolo de Kyoto que impõe a redução da emissão de CO² na atmosfera; a incapacidade dos EUA, maior produtor de álcool de milho, de atender o crescimento do mercado interno e externo; baixo custo de produção de açúcar e álcool; crescimento da produtividade do trabalho agrícola e industrial na região Sudeste do país.

Com a crise do capital a partir de 2008, as empresas do setor sucroalcooleiro intensificaram as fusões com grupos estrangeiros e parte deste passou para corporações como Cargill, Louis Dreyfus Commodities, Tereos, Adeco Agropecuária, Nouble e Infinity Bioenergy. Dados de 2008 da União dos Produtores de Bioenergia (Udop) revelaram que a participação de grupos estrangeiros na moagem de cana no centro-sul do país avançou de 9,21% em 2007, para 11,1% no ano seguinte. Entre 1996 e 1999 havia em torno de sete fusões e aquisições de usinas. Nesse período, o setor entra em crise e apenas na década seguinte (2000) volta a crescer e passa por grande reestruturação e um forte investimento na política do etanol. Fruto dessa reestruturação entre 2000 e 2007 ocorreram 80 fusões na agroindústria canavieira.

Toda essa acumulação e expansão do capital tiveram o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES. Em 2004 o setor sucroalcooleiro recebeu do BNDES a quantia de R\$ 605 milhões e, em 2007, o montante de R\$ 3,6 bilhões, representando 4,76% do crédito total concedido pelo banco. Entre 2009 e 2010 o setor sucroalcooleiro



movimentou cerca de R\$ 56 bilhões, o que significou 2% do PIB nacional. Chama atenção o número de trabalhadores empregados no período - 33 milhões – que foram responsáveis pela produção de 33 milhões de toneladas de açúcar e 29 bilhões de litros de etanol. (LIMA, 2011).

As transformações ocorridas no setor sucroalcooleiro revelam a dinâmica e metamorfose do capital a cada fase e como ele se reestrutura para garantir sua reprodução, dominando o processo de trabalho, os meios de produção e a força vital que faz gerar a riqueza. Tudo isso via avanço científico e tecnológico, incentivos fiscais, ajuste estrutural da economia local e prioridade ao agronegócio. Esse “progresso” modernizador representa a valorização do capital, à medida que desenvolve estratégias de extração da mais valia de trabalhadores agrícolas e industriais.

O avanço tecnológico, concebido através da mecanização, maquinário, informática, inovações químicas e biológicas, revela-se em capital com o propósito de subjugar e controlar a força de trabalho, os meios de produção, o processo de trabalho agrícola e industrial e apoderar-se da riqueza produzida pelo trabalho excedente, trabalho não pago, que agora se transforma em lucro, em mais valor. É a preponderância do capital sobre o trabalho, decompondo tudo em renda (terra, recursos hídricos, trabalhadores, tecnologia, etc). Na concepção de Tomaz Júnior (2002) o trabalho objetivado tende a aumentar em relação ao trabalho vivo.

Na medida, então, em que o desenvolvimento das forças produtivas (relações técnicas de trabalho e produtividade) depende e é condição do desenvolvimento das relações sociais de produção (regras de trabalho, gerenciamento), o “trabalho objetivado” (máquinas, capital constante) tende a aumentar em relação ao trabalho vivo (capital variável), como forma de garantir o processo de valorização do capital. Pode-se dizer que o capital busca, incessantemente, a transformação dos meios de produção e do próprio trabalhador. (Thomaz Júnior, 2002, p.136)

Os incrementos tecnológicos, somados aos econômicos, financeiros e fiscais, através do Pró-álcool, contribuíram para o aumento da produtividade do trabalho, favorecendo a valorização do capital, com o rebaixamento do custo de produção, novas formas de gestão e controle do processo de trabalho, assinalando no tempo e nos territórios estratégias de contratação e tratamento da força de trabalho assalariada. Nesse cenário aparecem novas funções e até tipos de trabalhadores, agora polivalentes, integrado as



forças de mercado, adequados às novas exigências do processo de trabalho. Esse contexto impõe novos desafios para suas organizações sindicais e movimentos sociais. Esse movimento do capital financeiro sobre a produção agrícola, também se reflete na região canavieira de Pernambuco, por exemplo, com fortes conseqüências para a vida dos trabalhadores assalariados.

Valorização do Agronegócio na Zona Canavieira de Pernambuco: uma experiência no coração do Nordeste

A área canavieira de Pernambuco é parte desse processo de acumulação e expansão do capital. Ela é composta por 43 municípios, ocupando uma área de 8.738 km², correspondente a 8,9% do território estadual. É uma das Regiões de maior potencial econômico do Nordeste, pelos recursos naturais disponíveis (água, solo, etc.), pelas vantagens locais (em torno da Região Metropolitana do Recife), com razoável infraestrutura econômica (estradas, portos marítimos, aeroportos) e abundante contingente de força de trabalho. No último censo demográfico, a sua população era de 1.132.544 habitantes, equivalendo a 15,9% da população do estado, dos quais 62% se encontravam na zona urbana. Nessa Região concentra-se a monocultura canavieira, que, em uma área de aproximadamente 450 mil hectares, chegou a empregar em épocas de safra, mais de 200 mil pessoas.

Em relação às condições sócioeconômicas, cerca de 17,2% dos habitantes da Mata Norte vivem em situação de extrema pobreza, o que se agrava quando se considera apenas a população rural, onde uma em cada cinco pessoas se encontra nessa situação. Os indicadores não são diferentes para a Mata Sul, onde 17,9% dos moradores vivem em extrema pobreza e, considerando a população rural, cerca de 24,3% estão nessa condição, ou um em cada quatro indivíduos.

Tal situação se revela nos dados do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco (CONSEA), que registram o alto índice de insegurança alimentar grave na região, 7,3% para a Zona da Mata Norte e 9,6% para a Mata Sul. Quanto ao mercado de trabalho, observou-se crescimento entre 2006 e 2010, no que diz respeito ao número de vínculos formais, 7,2% para Pernambuco, segundo os registros da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). No entanto com menor intensidade para as Matas Norte (4,4%) e Sul (2%). (IBGE, 2010)



O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), sobre o setor sucroalcooleiro revela a perda de participação relativa da produção pernambucana de cana-de-açúcar, que, na safra 2013/14, deverá representar apenas 3% da área plantada e 2% da produção de cana no país. Em termos absolutos, isso representa 295,4 mil ha para uma produção de 14.632 mil t, com uma produtividade média de 49,5 toneladas por hectare, contra uma média nacional de 73,5 t/ha. Em dez anos, o estado reduziu 18,7% da área plantada e, em 23%, a produção de cana, o que implicou redução da produtividade de 5,3%, no período em análise. Esse declínio, que vem desde o fim do Proálcool, no início da década de 90, reflete o deslocamento da produção para outras regiões do país, em especial, o Centro Sul, que atualmente representa 91% da produção nacional. Para a safra 2019/2020 estima-se que Pernambuco produzirá 12,5 milhões de toneladas, sendo 430 milhões de litros destinados à produção de etanol e 800 mil toneladas para a produção de açúcar.

Há um aumento significativo de produtividade nas safras a partir de 2007. Isso se deu em função da reestruturação do setor a partir de 2002, com mais incentivos fiscais, fusão de algumas empresas, avanço tecnológico, mecanização e novas formas de gestão da produção e da força de trabalho. Mesmo em um cenário de expansão de consumo de açúcar e etanol – com o aumento da composição de álcool na gasolina e a produção de carros multicomcombustíveis, o que garante um mercado estável e crescente para a produção sucroenergética, as perspectivas de ampliação da base produtiva nesse setor em Pernambuco são bastante tímidas, principalmente quando comparadas a períodos da história em que o Estado se configurou como o maior produtor nacional.

A perda de dinamismo do setor se refletiu no mercado de trabalho, entre 2006 e 2011, quando se observou uma redução de 35% no número de vínculos registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o cultivo de cana-de-açúcar no estado, passando de 53.832 para 34.970 postos formais, que, em sua maioria, eram ocupados por homens (93%), entre 25 e 49 anos (67%), que tinham, no máximo, o Ensino Fundamental completo (92%). (FETAPE, 2013)

Mesmo em meio à crise do setor, registra-se um número de 13 empresas em funcionamento na Mata Sul e Norte de Pernambuco, quais sejam: Usivale Indústria e Comércio Ltda (Usina Laranjeiras); Usina Cruangi S/A; Usina Central Olho D'água; Usina São José S/A; UNA Açúcar e Energia Ltda; Interiorana Serviços e Construções Ltda; Usina Bom Jesus S/A; Usina Salgado S/A; Usina Ipojuca; Cachool Comércio e



Indústria S/A; Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda; Usina Pumaty S/A; Usina Petribu S/A.

As empresas sucroalcooleiras em funcionamento em Pernambuco são responsáveis pela produção de açúcar e álcool do Estado, segundo maior produtor do Nordeste, perdendo apenas para Alagoas. Chama atenção a empresa Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda, pertencente ao Grupo Farias que domina 20 mil hectares de terra com cana-de-açúcar em Pernambuco. Além disso, esse grupo detém outras agroindústrias sucroalcooleiras no Brasil (Goiás, Acre e São Paulo) e empresas em outros ramos da produção agrícola e industrial, tais como: concessionárias de veículos, produção de fruticultura irrigada, projetos de ecoturismo, logística e desenvolvimento imobiliário. Isso evidencia a diversificação dos ramos de produção das empresas transnacionais, articuladas aos empresários nacionais, com apoio do Estado.

Da mesma forma, o Grupo Petribu que investe em agroindústria canavieira, sorvetes e picolés, termoelétrica, além de ser acionário do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE). Esse grupo tem uma capacidade de produzir 375 toneladas de cana de açúcar por hora; 800 sacos de 50 Kg de açúcar por hora; 8,35 metros cúbicos de etanol por hora; uma área de aproximadamente 25.000 hectares cultivados e área total de 32.122 hectares.

Já o Grupo Olho D'Água possui duas empresas sucroalcooleiras, Usina Central Olho D'Água/PE e a Companhia Industrial Vale do Parnaíba/PI (COMVAP) – Açúcar e Álcool Ltda., esta última adquirida em 2002, quando tinha uma moagem de apenas 200.000 toneladas de cana por safra. Sob a administração do grupo, a empresa moeu na última safra, 807.000 toneladas de cana-própria e mais 206.000 toneladas de fornecedores de cana. Atualmente, tem uma moagem consolidada de 2.700.000 toneladas de cana-de-açúcar e emprega na safra e entressafra 7.630 e 3.500 funcionários respectivamente.

Com a reestruturação do setor a partir dos anos 1990, várias usinas e destilarias do Estado foram desativadas e as terras estão abandonadas ou nas mãos de arrendatários que tentam sobreviver do fornecimento de cana-de-açúcar para as empresas maiores. Exemplo disso é a falência da Usina Pumaty, situada no município de Joaquim Nabuco que dispensou 1,8 mil trabalhadores em julho de 2013.

No momento da falência, a empresa tinha cerca de 2.200 trabalhadores/as na indústria e no campo. Outro exemplo dessa crise é a desativação da Usina Gruangi, em



Timbaúba, que o Governo Federal ameaçou desapropriar para fins de reforma agrária, mas os fornecedores de cana e os proprietários não permitiram e entraram em acordo com o governo para arrendar as terras da usina. Outras áreas de cana-de-açúcar estão em processo de conflito de terra, pois foram ocupadas por famílias sem terra, organizadas pelo MST ou pela FETAPE. Estima-se que há em Pernambuco, existem cerca de 33 acampamentos de luta pela terra, na área canavieira, ocupando as áreas de engenhos e usinas desativadas.

A crise da produção sucroalcooleira coloca em xeque o modelo de desenvolvimento hegemônico da Zona da Mata Pernambucana, baseado na monocultura da cana, que absorvia inclusive a produção de pequenas propriedades e assentamentos, que, sem o apoio sistemático de políticas públicas voltadas para a produção, assistência técnica, financiamento e comercialização/escoamento de alimentos, acabavam por engrossar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Não foram criadas alternativas de absorção da mão de obra dispensada pelo setor e a tendência é que, com a opção de reconfiguração produtiva em curso na região também não criará alternativas sustentáveis de ocupação para esses/as trabalhadores/as, sobretudo para a juventude. (Fetape, 2013)

A reestruturação produtiva que se processou no setor a partir dos anos 1990 está intimamente ligada às novas exigências do capitalismo: maior produtividade, menor custo, menor preço de mão-de-obra e diminuição de trabalhadores canavieiros.

Conclusão

As transformações ocorridas nas últimas décadas nas formas de reprodução e acumulação do capital inauguraram um novo ciclo do desenvolvimento capitalista, caracterizado pela mundialização da esfera financeira. A mundialização da economia está amparada nos grupos e empresas transnacionais, de capital industrial associada ao capital financeiro que comandam a acumulação, com apoio estatal. Nessa nova ordem mundial, altera-se o processo produtivo, criando novas relações de trabalho e acentuando as desigualdades sociais, produzidas pelo sistema capitalista.

De acordo com Behring (2003, p. 40) esse período caracteriza-se pela acumulação flexível, para alcançar o máximo de produtividade da força de trabalho com o mínimo custo, ou seja, um processo de super exploração da força de trabalho para ampliar a taxa de mais-valia e de lucro, mas sem preocupação com o crescimento e os efeitos de barbarização da vida social.



Como resultado desse processo de acumulação do capital no campo, tem-se a intensificação da exploração da força de trabalho; degradação ambiental; uso intensivo de agroquímicos; altos índices de empobrecimento e miséria da população local; entre outras consequências.

Referências bibliográficas

Andrade, Manoel Correia. Espaço e Tempo na Agroindústria Canavieira de Pernambuco. Estudos Avançados vol.15 nº43 São Paulo, Setembro/Dezembro, 2001. (Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142001000300020>. Acessado em 12/08/2019).

Behring, Elaine Rossetti. Brasil em Contra-reforma: Desestruturação do Estado e Perda de Direitos. São Paulo: Cortez, 2003.

Fetape. Diretrizes para Reestruturação Sócioprodutiva da Zona da Mata: Uma Contribuição da Sociedade Civil. Recife, 2013.

Guerra, Yolanda. A Dimensão Investigativa no Exercício Profissional. In. CFESS (ORG). Serviço social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

Ianni, Octavio. A Construção da Categoria. s/d (mimeo)

IBGE. Censo Demográfico, 2010.

Lima, Eduardo Sales de. Cana-de-açúcar, mais máquinas e produtividade, a mesma exploração. Jornal Brasil de Fato, junho 2011.

Novaes, José Roberto e ALVES, Francisco (Orgs.). Migrantes – Trabalho e Trabalhadores no Complexo Agroindustrial Canavieiro (os heróis do agronegócio brasileiro). São Carlos: EDUFSCAR, 2007

Novaes, José Roberto Pereira. Idas e Vindas: Disparidades e Conexões Regionais – Um Estudo sobre o Trabalho Temporário de Nordestinos na Safra da Cana Paulista. IN: _____ e ALVES, Francisco (Orgs.). Migrantes – Trabalho e Trabalhadores no Complexo Agroindustrial Canavieiro (os heróis do agronegócio brasileiro). São Carlos: EDUFSCAR, 2007.

Sant’Ana, Raquel Santos. Trabalho Bruto no Canavial – Questão Agrária, Assistência e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012.

Thomaz Júnior, Antônio. Por trás dos canaviais, os “nós” da cana: a relação capital X trabalho e o movimento sindical dos trabalhadores na agroindústria canavieira paulista. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2002.



Santa Catarina (Brasil): A evolução de sua agropecuária no período de 2006 a 2017

Luiz Carlos de Carvalho Júnior

Resumo

O objetivo deste trabalho foi verificar como evoluiu a agropecuária do estado de Santa Catarina (Brasil) no período entre 2006 e 2017, no que se refere à estrutura fundiária, utilização das terras nos estabelecimentos, condição legal das terras, utilização de sistema de preparação do solo, irrigação das terras, pessoal ocupado, a evolução da lavoura e pecuária e adoção de insumos modernos. Os dados foram coletados nos censos agropecuários daqueles dois anos. Os resultados mostram que ocorreu queda no número de estabelecimentos agropecuários, mas a área ocupada pelos mesmos aumentou, o que resultou em elevação na sua área média, e que a concentração da posse da terra aumentou levemente. Foi ainda observado que as lavouras permanentes, as lavouras temporárias e as pastagens naturais tiveram as suas áreas diminuídas entre os dois anos, ao passo que para as pastagens e as matas plantadas, as suas áreas apresentaram elevada expansão; que o arrendamento e a parceria experimentaram significativo aumento no número de estabelecimentos que adotaram tal forma de posse da terra; que os sistemas de cultivo mínimo e o de plantio direto na palha passaram a ser mais utilizados; que os sistemas de irrigação mais utilizados foram o de inundação e o localizado; que o pessoal ocupado nos estabelecimentos diminuiu; que aumentou o número de tratores, colheitadeiras, adubeiras e/ou distribuidoras de calcário nos estabelecimentos; que houve crescimento no número de estabelecimentos usuários de agrotóxicos e adubos. Por último, foi constatado aumento significativo na produção de soja, ao passo que para feijão, fumo e milho ocorreu o inverso. A produtividade subiu para todos estes produtos. Na pecuária, foi observada elevação no efetivo de bovinos e suínos, e redução no efetivo de frangos e a produção de leite dobrou, com ganho significativo de produtividade das vacas.

Palavras-chave

Agropecuária; Santa Catarina; Estrutura fundiária

Introdução

No decorrer do tempo, o processo de desenvolvimento econômico de regiões e países se caracterizou pela perda de representatividade do setor agropecuário na economia, e



inicialmente, com o aumento da participação do setor industrial, e mais recentemente, com a predominância do setor de comércio e serviços.

No estado de Santa Catarina, localizado no sul do Brasil, foi também verificada perda na participação da agropecuária na economia do estado. No ano de 1995, o setor agropecuário foi responsável por 9,1% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, tendo atingido 6,7% em 2010 (FIESC, 2015) e 6% segundo Epagri (2018). Porém, existem setores industriais que possuem elevada dependência do setor agropecuário, tais como os fornecedores de insumos para a mesma e aqueles que utilizam como matéria-prima produtos agropecuários. A união do setor agropecuário com aqueles segmentos industriais é conhecida como o agronegócio. E assim como acontece no Brasil, o agronegócio detém uma participação superior a 20% no PIB de Santa Catarina.

Além disso, o estado possui destaque na produção de alguns produtos agropecuários, pois é o líder na produção de cebola, maçã e carne suína, ocupa a segunda posição na produção de arroz, fumo e carne avícola. Ocupa ainda a quarta posição na produção de banana e leite. Em termos da representatividade da produção estadual na produção nacional, no ano 2017, Santa Catarina foi responsável por 51% da produção de maçã, 35 % da produção de cebola, 27% da produção de fumo, 18,8% da produção de alho, 26,6% da produção de carne suína, 14,8% da produção de carne de frango e de 9,4% de leite (EPAGRI, 2018).

Para a maioria dos produtos, a agropecuária catarinense apresentou aumento na produtividade dos fatores de produção. Considerando os principais produtos da lavoura catarinense, no período de 1999 a 2017, a produtividade da terra evoluiu de 15988 quilos por hectare (kg/ha) para 22030 para a cebola, de 1403 para 2037 kg/ha no cultivo do fumo, de 25937 para 41952 kg/ha para a maçã e de 2138 para 3960 kg/ha no cultivo da soja (EPAGRI, vários anos).

As informações acima expostas, mostram que apesar de ter ocorrido queda na participação da agropecuária na economia em Santa Catarina, o estado possui destaque nacional em produtos da lavoura e da pecuária. Foi ainda constatado que a produtividade de fatores de produção nos produtos da agropecuária catarinense aumentou no decorrer das últimas décadas. Tais fatos despertaram a curiosidade de identificar a evolução deste setor.



O objetivo deste trabalho foi verificar como evoluiu a agropecuária de Santa Catarina entre 2006 e 2017, no que se refere à sua estrutura fundiária, utilização de tecnologia, a evolução da produção, área colhida, produtividade, o uso da terra e o pessoal ocupado.

Metodologia

Recentemente foram divulgados os resultados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, esta que é a principal fonte de informações sobre a realidade das atividades agropecuárias no Brasil. A comparação dos dados de 2017 com os do Censo de 2006, permitiram verificar que aspectos das atividades no setor agropecuário sofreram modificações, bem como aqueles em que isto não aconteceu.

Para tal foram coletados dados nos censos agropecuários, publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para captar com maior clareza a evolução dos indicadores escolhidos e a representatividade das variáveis definidas para a verificação da evolução da agropecuária de Santa Catarina foi adotada a abordagem do cálculo percentual.

Apresentação dos resultados e discussão

Sobre os estabelecimentos agropecuários

Estrutura fundiária

A tabela 1 mostra que entre 2006 e 2017, verificou-se uma redução de 10618 estabelecimentos agropecuários no estado de Santa Catarina, o que representou uma queda de 5,5% no período, mas a área ocupada pelos mesmos aumentou em 383,7 mil hectares, um acréscimo de 6,3%. A área média dos estabelecimento que havia sido de 31,3 ha em 2006 atingiu 35,21 ha em 2017, um acréscimo de 12,5%.

A concentração da posse da terra pode ser verificada através da distribuição dos estabelecimentos e sua área nos estratos de área. Os estabelecimentos com menos de 10 ha tiveram uma queda de 2,4% em seu número e de 2,8% em suas áreas, e a sua área média permaneceu em 4,80 ha. Os estabelecimentos de 10 a 50 ha apresentaram redução de 6,8% em seu número e de 4,5% em suas áreas. Sua área média passou de 20,91 ha para 21,41 ha. Os estabelecimentos com área entre 50 e 100 ha aumentaram seu número em cerca de 7,3%, o mesmo acontecendo com a área que ocuparam entre os dois anos e sua área média permaneceu em torno de 66,7 ha. Os estabelecimentos de 100 a 500 ha mostraram crescimento de cerca de 7,5% para ambas as variáveis e



sua área média ficou em torno de 196 ha. Os estabelecimentos de maior porte, isto é, aqueles com área superior a 500 ha, tiveram acréscimos de cerca de 21% em seu número e na sua área ocupada entre 2006 e 2017 e sua área média passou de 1325,8 para 1346 ha.

Estratos de área (em ha)	Estabelecimentos				Área (mil ha)			
	2006		2017		2006		2017	
	Número	Part %	Número	Part %	Hectares	Part %	Hectares	Part %
Menos de 10	69390	35,8	67706	36,9	334,2	5,5	325,0	5,04
10 a 50	101721	52,5	94797	51,8	2126,6	35,1	2030,1	31,5
50 a 100	10723	5,5	11510	6,3	715,7	11,8	767,7	11,9
100 a 500	6513	3,4	7026	3,8	1280,2	21,1	1375,7	21,3
Mais de 500	1194	0,6	1447	0,8	1605,5	26,5	1947,7	30,2
Outros	4122	2,1	559	0,3	---			
Total	193663	100	183045	100	6062,5	100	6446,2	100

Tabela 1. Número e área ocupada, segundo estratos de área no Estado de Santa Catarina, 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

Em termos de representatividade dos estratos em relação ao total de Santa Catarina, os estabelecimentos de pequeno porte, isto é, aqueles com menos de 50 ha mantiveram a sua participação no número de estabelecimentos em torno de 88,5%, mas apresentaram queda na sua participação na área ocupada, de 40,7% para 36,5%. Por outro lado os maiores estabelecimentos, aqueles com mais de 500 ha, a sua representatividade no número passou de 0,6 para 0,8% e na área ocupada de 26,2% para 30,2%.

Os resultados mostram que a concentração da posse da terra foi ampliada entre os dois anos, o que foi confirmado pela evolução do índice de Gini, que havia sido de 0,682 em 2006 (IBGE 2006), tendo atingido 0,69 (EPAGRI, 2018).

Utilização da terra nos estabelecimentos

No que se refere à utilização das terras nos estabelecimentos, nos dois anos enfocados neste trabalho, os dados apresentados na tabela 2 mostram que houve uma redução de 105515 ha (-48%) na área ocupada pelas lavouras permanentes, o que representou uma queda na sua representatividade na área total dos estabelecimentos, que passou



de 3,6% em 2006 para 1,8% em 2017. As lavouras temporárias ocuparam uma área menor em 139730 ha em 2017 em relação a 2006 (-9,3%), o que resultou em queda de 24,8% para 21,1% na sua participação na área total dos estabelecimentos. Nas pastagens naturais, ocorreu queda de 105259 ha (-8,4%) e na participação na área total, de 20,8% para 17,8%. Por outro lado, as pastagens plantadas expandiram sua área em 230215 ha (+51,3%) e sua participação passou de 7,4% para 10,5%. As matas naturais tiveram expansão de 290676 ha (+18%) e sua representatividade aumentou de 26,6% para 29,5%. As matas plantadas apresentaram comportamento semelhante, pois sua área aumentou em 296625 ha (+47%) e sua participação na área total passou de 10,2% para 14,2%.

Utilização	2006	2017
a) Lavouras permanentes	219965 (3,6%)	114450 (1,8%)
b) Lavouras temporárias	1503335 (24,8%)	1363605 (21,1%)
C) Pastagens naturais	1259081 (20,8%)	1153822 (17,8%)
D) Pastagens plantadas	448.553 (7,4%)	678768 (10,5%)
E) Matas naturais	1613840 (26,6%)	1904516 (29,5%)
F) Matas plantadas	621512 (10,2%)	918137 (14,2%)
Total	6062556	6446155

*Tabela 2. Utilização das terras agropecuárias em Santa Catarina (em hectares) – 2006 e 2017
Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina*

Portanto, nos dois anos, as formas de utilização das terras mais representativas foram as matas naturais, as lavouras temporárias e as pastagens naturais. As lavouras permanentes, apesar de sua baixa representatividade, tiveram queda significativa na área ocupada. As lavouras temporárias e as pastagens naturais também tiveram sua área diminuída. Por outro lado, as pastagens plantadas e as matas plantadas tiveram aumento elevado nas suas áreas.

A situação das terras no que tange à sua condição legal é mostrada na tabela 3. A propriedade da terra é dominante nos dois anos, apresentando certa estabilidade, pois aparecia em 88,2% dos estabelecimentos agropecuários em 2006, e em 89,6% deles em 2017. A terra obtida via concessão por órgão fundiário sem titulação definitiva estava presente em 1,5% dos estabelecimentos em 2006, e em 2,5% onze anos depois. O número de estabelecimentos que possuía terras em tal condição aumentou em 62% entre os dois anos, o que possivelmente ocorreu devido ao programa de reforma agrária



do governo federal. Houve um aumento de 23,1% no número de estabelecimentos que tinham terra arrendada nos dois anos. Em 2006, 8,9% deles utilizavam tal forma de posse da terra, passando para 11,6% em 2017. No que se refere à parceria, esta foi utilizada por 25,9% a mais de estabelecimentos entre os dois anos, e se 2,2% dos estabelecimentos a utilizavam em 2006, 3,0% o faziam em 2017. O arrendamento da terra por permitir o acesso à terra a um custo menor, torna-se uma alternativa tanto aqueles produtores que não possuem terra, como para aqueles que desejam ampliar a sua disponibilidade de terra. Motivação semelhante acontece com a parceria, que se diferencia ao arrendamento, pelo fato de o pagamento ocorrer mediante parcela da produção realizada. E por último, verificou-se que 7830 estabelecimentos deixaram de utilizar áreas ocupadas, condição adotada por 4,8% deles em 2006 e por somente 0,8% em 2017, o que possivelmente foi decorrente de concessão de maior volume de crédito para aquisição de terras ou de legalização de terras anteriormente ocupadas.

Condição legal	2006	2017
Própria	170913	164052
Concedida por órgão fundiário ainda sem titulação definitiva	2880	4668
Arrendada	17196	21169
Em parceria	4297	5412
Em regime de comodato		8764
Ocupada	9234	1404
Total de estabelecimentos	193663	183065

Tabela 3. Condição legal das terras nos estabelecimentos em Santa Catarina – 2006 e 2017
Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

A tabela 4 traz os dados sobre a utilização de sistemas de preparação do solo, os quais segundo o IBGE (2009) podem ser classificados em cultivo convencional, cultivo mínimo e plantio direto na palha. No cultivo convencional, o solo é preparado inicialmente com aração, seguida por gradagem com grades aradoras ou grades pesadas. No cultivo mínimo, a preparação solo se dá com menor utilização de implementos, basicamente a grade niveladora e arado escarificador. No plantio direto na palha, o plantio é realizado com abertura de pequenos sulcos abertos no solo coberto de palha, sem adoção de aração ou gradagem no terreno, e com a permanência no solo dos restos das culturas anteriores.

Mais de 70% dos estabelecimentos usaram algum sistema de preparação do solo nos dois anos. O sistema de cultivo convencional teve uma queda de 27% no número de



estabelecimentos que o utilizavam, e se 34,4% o usavam em 2006, somente 26,% continuaram a fazê-lo em 2017. O sistema de cultivo mínimo apresentou uma elevação de 11,8% nos estabelecimentos que o adotavam, e 15,2% deles o usavam em 2006 e 17,7% em 2017. Para o sistema de plantio direto na palha, a evolução positiva na sua utilização foi de 11,8%, e se 34,1% dos estabelecimentos o adotavam em 2006, 40,4% o fizeram em 2017, o que fez com que tal sistema passasse a ser o mais utilizado em Santa Catarina.

Sistema / Ano	2006	2017
Nenhum sistema	54534	47578
Utilizaram	139134	135086
Cultivo convencional	66661	48525
Cultivo mínimo	29454	32508
Plantio direto na palha	66207	74005
Área com plantio direto na palha	757879	999485

Tabela 4. Utilização de sistema de preparação do solo nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina– 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

Na tabela 5 é apresentada a utilização de irrigação nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina. De acordo com Testezlaf (2017) a irrigação pode ser definida como sendo técnicas usadas para direcionar água artificialmente às plantas para satisfazer suas necessidades e aponta como possíveis benefícios: a) garantir o atendimento da necessidade de água das plantas e com isso reduzir os riscos de queda da safra por seca; b) aumento da produtividade das culturas por proporcionar umidade adequada da cultura; c) melhora da qualidade do produto final e: d) aumento no número de safras agrícolas e colheita na entressafra.

Nos censos agropecuários, foram levantadas informações sobre a utilização pelos produtores do distintos sistemas de irrigação no estabelecimento: inundação, sulcos, aspersão e o localizado. Segundo Testezlaf (2017) no sistema por inundação a água é aplicada sobre a área plantada, ficando acumulada na superfície do solo e se infiltrando no mesmo. No sistema de sulcos, a aplicação da água ocorre por inundação parcial da área irrigada, ocorrendo o escoamento e infiltração em sulcos construídos na superfície do solo. No sistema de irrigação por aspersão, a distribuição da água ocorre com



gotejamento sobre a cultura e a superfície do solo e no sistema de irrigação localizada, a água é aplicada no solo em uma área restrita.

Ano	2006		2017	
	Estab	Área (ha)	Estab	Área (ha)
Total	13954	136249	16261	167473
Inundação	5884	98532	5051	121180
Sulcos	598	10498	63	788
Aspersão (pivot central)	9	1020	99	910
Localizado	1164	2430	3454	9523

Tabela 5. Utilização de irrigação nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina – 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

Os dados da tabela 5 mostram que o número de estabelecimentos que fizeram irrigação aumentou 16,5% entre 2006 e 2017, mas mesmo assim um reduzido percentual fez uso de tal procedimento, pois somente 7,2% utilizaram algum sistema de irrigação em 2006 e 8,8% em 2017. O sistema mais utilizado é por inundação, por ser o mais adequado para a produção de arroz no sul do estado, tendo sido adotado por cerca de 3% dos estabelecimentos nos dois anos. A presença do sistema localizado nos estabelecimentos passou de 0,6% deles em 2006 em 2006 para 1,8% em 2017. Mas, o sistema que apresentou maior crescimento na sua utilização foi o por aspersão, visto que somente nove unidades produtivas o utilizavam em 2006 e 99 unidades onze anos depois, tendo ocorrido uma expansão de 1000%.

Sobre o pessoal ocupado nos estabelecimentos

A tabela 6 mostra que ocorreu uma redução de 73693 pessoas ocupadas (-12,9%) nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina entre 2006 e 2017. Já havia ocorrido uma diminuição de 147178 pessoas (-25,8%) entre 1996 e 2006. Portanto, as atividades agropecuárias tem utilizado menos a força de trabalho humano, e substituindo-a por máquinas e equipamentos, que geram maior produtividade da terra. Na composição por sexo na força de trabalho, as mulheres tiveram o seu número reduzido em 22,6%, enquanto para os homens tal redução foi de 6,8% entre os dois anos. Tal resultado se refletiu na participação de cada sexo total da força de trabalho, pois os homens que correspondiam a 61,6% do pessoal ocupado em 2006, passaram para 65,8% em 2017.



Para as mulheres, os dados foram de 38,4% e 34,2%, respectivamente. Portanto, foi observada uma maior redução das mulheres na força de trabalho no campo.

Ano	2006		2017	
	Número	%	Número	%
Homens	351.856	61,6	327800	65,8
Mulheres	219.660	38,4	170023	34,2
Total	571. 516	100,0	497.823	100,0

Tabela 6. Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina, por sexo – 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

O pessoal ocupado que possuía laço de parentesco com o produtor representou mais de 80% do pessoal ocupado total nos dois anos. De acordo com os dados da tabela 7, tais pessoas eram 496234 em 2006, e 401450 em 2017, o que significou uma redução em seu quantitativo em 94784 pessoas

(-19,5%). Os homens com mais de 14 anos tiveram seu número diminuído em 11%, os homens com menos de 14 anos em 68,2%, as mulheres com mais de 14 anos em 21,3% e as mulheres com menos de 14 anos em 62,7%. Portanto, para o pessoal ocupado com laços de parentesco com o produtor, as maiores reduções se deram para as mulheres e para homens e mulheres com menos de 14 anos. Tal resultado reforça a situação descrita no parágrafo anterior, e indica que a participação das mulheres e de crianças no pessoal ocupado nos estabelecimentos vem se reduzindo.

Ano	Total	Homens com mais de 14 anos	Homens com menos de 14 anos	Mulheres com mais de 14 anos	Mulheres com menos de 14 anos
2006	496234	270134	20262	188199	17639
2017	401450	240296	6436	148133	6585
Variação %	- 19,5	-11	-68,2	-21,3	-62,7

Tabela 7. Pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina – 2006 e 2017

Fonte: Censo agropecuário de Santa Catarina

O pessoal sem laço de parentesco com o produtor foi 72690 pessoas em 2006 e de 90567 pessoas em 2017, isto é, aumentou em 24,6%. Nesta classificação, o pessoal permanente passou de 30899 (2006) para 41666 (2017), um acréscimo de 34,8%. Já o



peçoal temporário que havia sido de 41791 (2006) atingiu 48901 (2017), expansão de 17%. Portanto, uma pequena parcela do peçoal ocupado da família do produtor, provavelmente composta por peçoas que resolveram abandonar as atividades nos estabelecimentos, tenham sido substituídas por peçoal contratado.

Evolução da produção da lavoura e da pecuária

Na tabela 8 é apresentada a evolução do cultivo de importantes produtos da lavoura catarinense. Para a área colhida, somente a soja teve a sua área expandida (+102%). As quedas na área colhida foram significativas para o feijão (-49,7%), para o fumo (-51%) e para o milho (-55%). Quanto à produção, dos cinco produtos da tabela, dois deles, o arroz e a soja, tiveram aumento, de respectivamente, 9,6% e de 168%, respectivamente, entre 2006 e 2017. Por outro lado, para os três outros produtos, ocorreu queda na produção, de 45% para o feijão, de 45,7% para o fumo e de 28% para o milho. A produtividade subiu para os cinco produtos.

De acordo com EPAGRI (2018), o decréscimo na área cultivada com feijão decorreu da menor rentabilidade deste em relação a outros produtos e à menor competitividade da produção catarinense em relação à de outros estados. No caso do milho, a menor área plantada seria decorrência de utilização da área para a produção de milho para silagem e para o cultivo da soja, devido à maior rentabilidade oferecida pelo cultivo desta oleaginosa. A expansão da soja também aconteceu em áreas onde antes não havia o cultivo de lavouras anuais. A redução da área plantada com fumo pode ser explicada por decisão de algumas empresas beneficiadoras do fumo de reduzir a compra da matéria-prima em Santa Catarina (EPAGRI, 2019)

Lavouras	Produção (mil t)		Área colhida (ha)		Rendimento (kg/ha)	
	2006	2017	2006	2017	2006	2017
Arroz	846378	928039	132937	126333	6367	7345
Feijão	185245	101921	122211	61535	1515	1656
Fumo	306530	166315	154702	75687	1981	2197
Milho	4110184	2952314	886803	396005	4630	7455
Soja	714115	1913892	264471	534262	2700	3582

Tabela 8 - Produção, área colhida e rendimento das principais lavouras de Santa Catarina – 1995 e 2006

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina



Os efetivos de animais em Santa Catarina nos anos de 2006 e 2017 são apresentados na tabela 9, onde se verifica que o efetivo de bovinos aumentou em 19,2%, o de bubalinos em 3,4%, o de ovinos em 13,7% e o de suínos em 28,5%. Por outro lado, o efetivo de caprinos teve queda de 41,6% e o de frangos de 22%. Dos animais listados na tabela, Santa Catarina é destaque nacional no abate de suínos (primeiro lugar) e de frangos (segundo lugar) (EPAGRI, 2019). Devido à importância na avicultura na agropecuária de Santa Catarina, chama a atenção a queda significativa no efetivo de frangos que ocorreu entre os dois anos.

Espécies	2006	2017
Bovinos	3126002	3725827
Bubalinos	10651	11016
Caprinos	40411	23590
Ovinos	194819	221509
Suínos	6569714	8442850
Frangos	216414197	168819747

Tabela 9. Efetivo de animais em Santa Catarina, 2006 e 2017
 Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

A tabela 10 traz dados que mostram a evolução da pecuária leiteira em Santa Catarina. A produção de leite aumentou em 103%, mesmo com a redução no número de estabelecimentos que atuavam na atividade (-20,2%). Isto aconteceu porque o número de vacas ordenhadas teve um acréscimo de 20,3% e foi observado incremento na produtividade das vacas, pois em 2006 a média de produção por vaca havia sido de 2402 litros, tendo atingido 4062 litros em 2017. O volume de leite produzido por estabelecimento passou de 15,6 mil litros em 2006 para 39,9 mil onze anos depois. Do leite produzido, 95,2% foram vendidos em 2006, e 93,8% em 2017. Possivelmente, a evolução positiva da pecuária leiteira de Santa Catarina está associada à adoção de vacas de raças mais produtivas, bem como às melhorias no que se refere à nutrição, sanidade e no manejo, observadas nos estabelecimentos.

Ano	Produção			Venda
	Estabelecimentos	Vacas ordenhadas	Leite produzido (1000 l)	Leite (1000 l)
2006	89043	580228	1394146	1327005
2007	71054	697916	2835216	2658145

Tabela 10. Produção e venda de leite nos estabelecimentos em Santa Catarina, 2006 e 2017
 Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina



Evolução da adoção de tecnologias e insumos modernos

Neste trabalho admite-se que o produtor adquire máquinas, equipamentos e produtos que lhes permitam ampliar a quantidade de produto por hectare de seu estabelecimento (aumentar a produtividade) e para reduzir o esforço físico dispendido. Com base neste raciocínio, buscou-se verificar a evolução no uso de tratores, semeadeiras-plantadeiras, adubeiras e o uso de agrotóxicos e de adubos.

Segundo os dados da tabela 11, 29,6% dos estabelecimentos possuíam trator em 2006, e 45% em 2017. O número de estabelecimentos que informaram possuir trator teve um acréscimo de 43,9% nos dois anos e a quantidade total de tratores aumentou 55%. Portanto, houve uma intensificação no uso deste equipamento, pois mesmo que o número de estabelecimentos agropecuários tenha diminuído, o número de estabelecimentos que o possuíam e a quantidade dos mesmos cresceram.

Ano	Estabelecimentos	Quantidade
2006	57249	69884
2007	82384	108374

Tabela 11. Tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina – 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

De acordo com os dados da tabela 12, houve uma queda de 12,5% no número de estabelecimentos que possuíam semeadeiras-plantadeiras entre os dois anos, o mesmo aconteceu com o número destes equipamentos que teve redução de 5,1%. Em 2006, 16,3% dos estabelecimentos tinham tal equipamento, e em 2017 tal percentual havia caído para 15%. Portanto, foi constatada menor utilização deste bem de capital.

Ano	Semeadeiras-plantadeiras		Colheitadeiras		Adubeiras e/ou distribuidora de calcário	
	Estab	Número	Estab	Número	Estab	Número
2006	31550	34107	7937	8539	11617	8539
2017	27610	32351	10342	11147	22593	24541

Tabela 12. Semeadeiras-plantadeiras, colheitadeira e adubeiras/distribuidoras de calcário nos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina – 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

Com as colheitadeiras ocorreu situação inversa, pois se 0,4% dos estabelecimentos possuíam tal equipamento em 2006, onze anos depois 0,6% o detinham. O número de



estabelecimentos com colheitadeiras cresceu em 30,7% no período, e a quantidade do equipamento teve expansão de 30,5. Conseqüentemente, tais informações indicam a crescente incorporação deste bem nas unidades produtivas de Santa Catarina.

Entre os dois anos, subiu o número de estabelecimentos usuários de agrotóxicos (+4,1%) e de adubos (+0,86%), segundo os dados da tabela 13. Em 2006, 64,1% dos estabelecimentos usavam agrotóxicos, contra 69% observados em 2017. Os adubos eram utilizados por 72,8% dos estabelecimentos em 2006 e por 77,6% deles em 2017.

A maior utilização de capital no campo, através do uso de máquinas, equipamentos e insumos modernos, altera os sistemas de produção, gerando maior produtividade da terra e da mão-de-obra, mas também tem relação com a utilização de mão-de-obra, reduzindo a necessidade da mesma em diversas atividades. Em algumas situações, o uso maior capital pode compensar a menor disponibilidade de mão-de-obra no local, seja devido ao emprego de parcela da mesma em atividades não-agrícolas na própria região de localização dos estabelecimentos, ou devido à continuidade de saída do campo de pessoas em busca de melhorias condições de vida, via a obtenção de emprego em atividades urbanas em maiores municípios.

Ano	Número total de estabelecimentos	Agrotóxicos	Adubação
2006	193663	124256	141065
2017	183045	129362	142131

Tabela 13. Estabelecimentos com uso de adubação e agrotóxicos – Santa Catarina – 2006 e 2017

Fonte: Censos agropecuários de Santa Catarina

Conclusão

Entre os dois anos censitários foi verificada uma queda no número de estabelecimentos agropecuários em Santa Catarina, mas a área ocupada pelos mesmos aumentou, o que resultou em elevação na sua área média. Foi constatado que os estabelecimentos de menor porte, isto é, de menos de 50 ha tiveram redução no seu número e em sua área, e que para os estabelecimentos com área superior a 50 ha houve aumento em ambas as variáveis. Mas, os maiores ganhos aconteceram para os estabelecimentos com mais de 500 ha. Tais resultados e a evolução do índice de Gini indicam ter ocorrido incremento da concentração da posse da terra em Santa Catarina entre 2006 e 2017.

Na utilização da terra nos estabelecimentos, nos dois anos, as matas naturais, as lavouras temporárias e as pastagens naturais foram as formas de utilização mais



representativas. As lavouras permanentes, as lavouras temporárias e as pastagens naturais tiveram as suas áreas diminuídas entre os dois anos, ao passo que para as pastagens e as matas plantadas, as suas áreas apresentaram elevada expansão.

Na situação das terras quanto à sua condição legal, a propriedade das mesmas mostrou-se dominante nos dois anos e com representatividade estável, seguida pelo arrendamento e parceria, que experimentaram significativo aumento no número de estabelecimentos que adotaram tal forma de posse da terra. Chamou a intensidade da queda das terras ocupadas.

Em mais de dois terços dos estabelecimentos agropecuários de Santa Catarina, ocorreu utilização de algum sistema de preparo do solo, mas para o cultivo convencional houve redução na sua utilização, enquanto que os sistemas de cultivo mínimo e o de plantio direto na palha foi constatado aumento na sua adoção pelos estabelecimentos, sendo que este último tornou-se o mais utilizado em Santa Catarina.

O número de estabelecimentos que fizeram irrigação é reduzido, pois não chega a 10% do total, mas aumentou entre os dois anos. Os sistemas de irrigação mais utilizados foram o de inundação e o localizado.

O pessoal ocupado nos estabelecimentos diminuiu, mas isto aconteceu devido à redução no número de pessoas da família do produtor atuantes e, com maior intensidade para as mulheres e para as pessoas com menos de 14 anos. Por outro lado, o pessoal ocupado sem laços de parentesco aumentou entre 2006 e 2017, mas não o suficiente para compensar a queda do pessoal ocupado da família. A menor utilização do trabalho humano nos estabelecimentos pode ser parcialmente explicada pelo maior uso de tecnologia no campo. Foi verificado que no período enfocado neste trabalho, a utilização de tratores, colheitadeiras, adubeiras e/ou distribuidoras de calcário se expandiu. Foi ainda constatado crescimento no número de estabelecimentos usuários de agrotóxicos e adubos.

No que se refere à evolução da lavoura, a área colhida da soja teve significativa expansão, ao passo que as áreas colhidas de feijão, fumo e milho apresentaram importantes reduções. Quanto à produção, a soja teve elevado crescimento, o mesmo acontecendo com o arroz, porém com taxa moderada. O feijão, o fumo e o milho tiveram queda na sua produção. A produtividade subiu para todos os cinco produtos. Na pecuária, foi observada elevação no efetivo de bovinos e suínos, e redução no efetivo



de frangos e a produção de leite dobrou, com ganho significativo de produtividade das vacas.

Referências

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Entensão DE Santa Catarina (EPAGRI). Síntese anual da agricultura de Santa Catarina. Florianópolis: Secretaria da Agricultura, 2018.

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Santa Catarina em dados. Florianópolis: FIESC, 2015.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censos agropecuários de Santa Catarina, 2006 e 2017.

Testezlaf, Roberto. Irrigação: métodos, sistemas e aplicações. Campinas, SP: Unicamp/FEAGRI, 2017.



La estructura organizacional y los mecanismos de coordinación de la extensión rural de un grupo de productores indígenas de café orgánico en Chiapas, México.

Fernando Manzo Ramos
Yocellyn Vázquez Ibarra
Esperanza Molina Hernández

Resumen

A pesar de que nuevas entidades ya ofrecen asistencia técnica y capacitación en las áreas rurales, los estudios sobre procesos de institucionalización de la extensión se centran en entidades públicas o universidades. Se estudia el proceso de establecimiento de un programa de educación/capacitación para la renovación de cafetales infestados con Roya que la cooperativa indígena Comon Yaj Noptic S.S.S. (La Comon) ofreció a sus 150 socios. A partir de entrevistas abiertas a extensionistas y socios se estudiaron el proceso de institucionalización del programa de extensión, en particular la estructura organizacional y sus mecanismos de coordinación. Los resultados indican que en dos años de operación del programa se recuperó el 70% de la producción de café que se había perdido y que el 90% de los cafetales se renovó. La Comon presenta una estructura Burocrática Profesionalizada, que sustenta su operación en un Núcleo Operativo altamente eficiente y formado por productores capacitados como extensionistas. Las capacidades y conocimientos necesarios para convertir a un productor con experiencia en producción de café, en un extensionista capaz de facilitar un proceso educativo y de dirigir un Programa de Extensión, se logran por medio de un sofisticado mecanismo de Estandarización de Destrezas. Esto define una estructura descentralizada en su coordinación y toma de decisiones que se sustenta en altos niveles de Ajuste Mutuo entre los extensionistas. Se concluye que organizaciones indígenas de productores marginados de café orgánico pueden institucionalizar exitosamente programas de extensión sofisticados y exitosos, sin ayuda del Estado.

Palabras clave

Organización; Indígenas; Extensión; Roya; Ajuste mutuo; Burocracia profesional; Estandarización de destrezas; Estructura organizacional.

Introducción

Una de las formas de entender el funcionamiento efectivo de una organización, es a través del diseño de su estructura organizacional. La estructura de una organización es



la suma total de las formas en que su trabajo es dividido y coordinado en diferentes áreas. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de tareas que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima, esperando que cada persona asuma un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible y se alcancen los fines de la organización (Culebro, 199; Laurence & Lorsch, 1967; Mintzberg, 1989).

En el diseño de las organizaciones eficientes según Mintzberg (1989), la organización tiene dos procesos fundamentales. El primero es la división del trabajo en las diversas tareas donde se llevará a cabo el trabajo y a las que se denominan elementos estructurales (Ápice Estratégico, Línea Media, Staff de Apoyo y Núcleo Operativo). El segundo proceso se refiere a la coordinación de estas tareas para realizar el trabajo y lograr los fines de la organización, en donde los mecanismos elementales que coordinan el trabajo en las organizaciones son: Ajuste Mutuo, **SD**, Estandarización de Procesos de Trabajo, Estandarización de Productos del Trabajo y Estandarización de Destrezas de trabajadores.

Según Mintzberg (1989) el proceso de división de trabajo busca separar actividades para mejorar la eficiencia de la estructura, mientras que la coordinación pretende coordinar los esfuerzos de las distintas partes diferenciadas o elementos estructurales para garantizar de manera adecuada el cumplimiento del trabajo y los objetivos de la organización. De esta manera los mecanismos de coordinación constituyen un grupo de variables de diseño organizativo que contribuyen a integrar la estructura. Los mecanismos mediante los cuales se garantiza la coordinación del trabajo corresponden tanto a control y comunicación como a coordinación. Entre los propósitos fundamentales de la coordinación está conseguir que todos los miembros de un grupo adopten decisiones coherentes, es decir, homogenizar estructuras de comportamiento y conocimiento que conduzcan a un común acuerdo (García, 2009).

A medida en que las organizaciones asumen las labores de división de trabajo, pueden llegar a crear muchos campos de actividad funcional, lo que daría problemas de espacio, tiempo, inspección y uso de recursos; reflejándose en problemas de coordinación en el trabajo (García, 2013). Según Mintzberg (1989) la interacción que existe entre los elementos estructurales influye en la función y operación de cada elemento y, por lo tanto, el funcionamiento y desempeño organizacional. A mayor grado de complejidad organizacional, división del trabajo, aumento en los niveles jerárquicos y crecimiento de



la organización; mayor es la necesidad de integración o uso de mecanismos de coordinación (Hall, 1983; Laurence & Lorsch, 1967; Mintzberg, 1989; García, 2009, 2013). De aquí la importancia de que las organizaciones evalúen los mecanismos más apropiados que garanticen la coordinación del trabajo (Marín, 2012).

Para este análisis se utilizó el marco de análisis de Mintzberg (1989) de las estructuras organizacionales, centrándose en el proceso de coordinación del trabajo dentro de una organización de productores que implementa un Programa de Extensión muy eficiente y exitoso (Vázquez-Ibarra, 2019). Desde la perspectiva de Boone (1985) en donde los procesos de extensión incluyen todo un sistema de toma de decisiones. Por lo que se vuelve interesante analizar los mecanismos de coordinación que utiliza una organización de productores como medio para coordinar el trabajo de extensión y conseguir que todos los miembros adopten decisiones coherentes, es decir, homogenizar estructuras de comportamiento y conocimiento que conduzcan a relacionar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos, con objeto de facilitar su funcionamiento y su éxito. Actualmente los programas de extensión son ejecutados por diferentes organizaciones. Según Swanson (2010), las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las organizaciones de agricultores asumen con mayor frecuencia algunas funciones y actividades de extensión. Sin embargo, aunque se reconoce la extensión por parte de las organizaciones de productores, no existe información concreta sobre sus procesos de extensión.

De esta forma, el objetivo de la presente investigación es analizar los mecanismos de coordinación en la estructura organizacional que utiliza una organización de productores de café para coordinar su trabajo, en relación a su Programa de Extensión, diseñado y ejecutado por los integrantes de la misma. Cuyo objetivo es generar conocimientos y habilidades necesarias en los socios para el establecimiento y manejo de parcelas de renovación. El Programa de Extensión está ligado a un Programa General de Renovación de Cafetales, cuyo propósito consiste en fomentar la productividad de La Comon, a través de la renovación de cafetales afectados por la infestación de roya anaranjada del cafeto (*Hemileia vastatrix*), en 2012.

Metodología

Se estudió el Programa de Extensión que la cooperativa de productores Comon Yaj Noptic S.S.S. (La Comon) implementa en su Programa de Renovación de Cafetales. La Comon está integrada por productores indígenas con actividades productivas



responsables con el medio ambiente; dedicada a la producción de café orgánico de alta calidad con fines de exportación, y con 27 años de trabajo. Sus oficinas están en la comunidad Nuevo Paraíso (en la región conocida como Zona de Amortiguamiento de la Biósfera de la Reserva del Triunfo) municipio de La Concordia, Chiapas, México desde donde organiza producción de café orgánico, en 391.06 ha manejadas por 147 pequeños productores, con un promedio de 2.6 ha de superficie de producción, distribuidas en las 15 comunidades donde viven los socios de La Comon.

La investigación se realiza a través de un enfoque cualitativo, mediante el método etnográfico, con alcance descriptivo-explicativo (Hernández et. al., 2014). La unidad de estudio son 15 integrantes de La Comon, compuesta por productores que participan como extensionistas, directivos y algunos productores beneficiarios del Programa de Extensión. Para seleccionar la unidad de estudio se utilizan muestras homogéneas y en cadena, definidas por el método de saturación de información (Hernández et. al., 2014). A finales de 2017 se aplicaron en campo y en las oficinas entrevistas semiestructuradas y observación no participante, tres cédulas semiestructuradas para directivos, extensionistas y socios productores de La Comon, aplicadas en campo y oficinas. El análisis de la información se realiza a través del análisis detallado de los datos con el proceso de generación de categorías o temas (Hernández et. al., 2014).

Resultados y Discusión

A continuación, se presenta un análisis general del funcionamiento de La Comon, seguido del análisis de los mecanismos de coordinación de la estructura organizacional, conforme a los elementos estructurales de la división del trabajo en las distintas tareas del Programa de Extensión, desde el enfoque estructural de Mintzberg (1989). Según la investigación realizada por Vázquez (2019), la configuración estructural de La Comon funciona como una Burocracia Profesional, de acuerdo con el modelo estructural de las organizaciones de Mintzberg (1989). Esta configuración estructural es común en universidades, hospitales generales, sistemas escolares, firmas de contadores públicos, agencias de trabajo social, firmas de producción artesanal, entre otras (Mintzberg 1989). Por lo regular, estas organizaciones ofrecen servicios, más que bienes tangibles y existen en entornos complejos (Daft, 2011).

Funcionamiento Organizacional

La Comon ha creado una estructura organizativa coordinada y eficiente, que se muestra flexible a la integración de nuevas actividades a sus funciones. Conforme ha ido

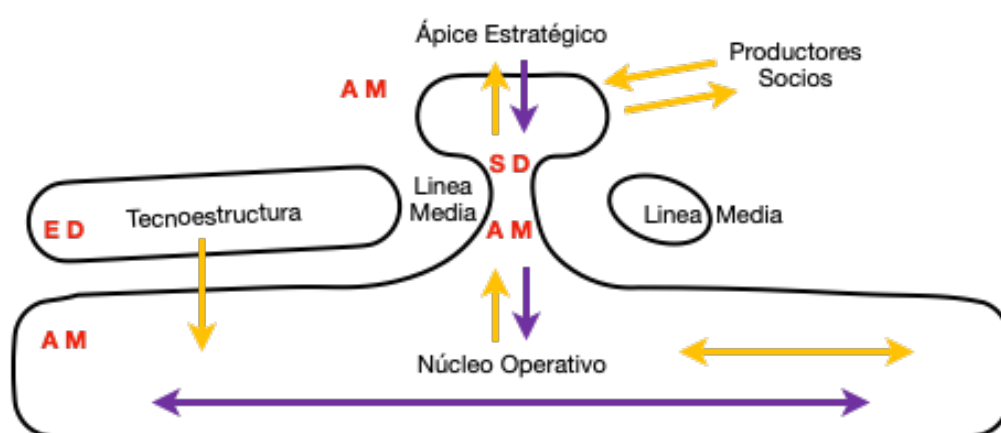


creciendo, su estructura se ha modificado de acuerdo a las necesidades y problemáticas que se presentan al desarrollar el trabajo. Con la integración de nuevas personas, cargos actividades, áreas y programas, logrado establecer una estructura organizativa funcional adecuada a la naturaleza de La Comon.

Actualmente el trabajo de La Comon está distribuido en tres programas: el programa general de Producción de Café Orgánico, el Programa de Renovación de Cafetales y el Programa de Extensión. Para entender el funcionamiento general de La Comon, se integraron los miembros que conforman su estructura organizacional, y se representaron como actores participantes en sus programas se clasificó la posición de las personas que participan en La Comon, de acuerdo a los cinco elementos estructurales generados de la división del trabajo que propone Mintzberg (1989) para el funcionamiento de una estructura organizacional: Ápice Estratégico (AE), Línea Media (LM), Tecnoestructura (Te), Apoyo (Ap) y Núcleo Operativo (NO). Se observó una rotación entre las posiciones de los actores, que provoca que algunos integrantes estén participando en diferentes elementos estructurales de un programa y en elementos de diferentes programas, al mismo tiempo. Con la existencia de un amplio flujo de participación de los mismos actores, dentro de las funciones de los elementos estructurales a diferentes niveles jerárquicos, se permite el manejo de todos los programas a través de una acción colectiva, que caracteriza su funcionamiento general. De esta manera, el Programa de Extensión está ligado al funcionamiento general de La Comon, ya que las mismas personas participan en los demás programas. Es decir, al agregar las actividades del Programa de Extensión no se agrega un área de trabajo nueva o diferente, solo se cambian de posición a algunos actores. La naturaleza de La Comon permite insertar sobre su estructura base nuevos programas estratégicos. Provocando que las actividades de los programas tengan características y funcionamiento similares; que se utilicen los mismos lineamientos, recursos y relaciones, y estén vinculadas a las funciones de la estructura general de La Comon. De esta forma se explica que los tres programas se manejen como uno solo, provocando que todos los actores estén involucrados y tengan información y conocimiento de los procesos y actividades organizacionales. Se puede decir que el Programa de Extensión no funciona como una entidad individual, más bien, está ligado a las demás actividades de La Comon. Cualquier cambio o decisión que se tome en el gran eje de Producción Orgánica, afecta o modifica al Programa de Renovación y el de Extensión.

Mecanismos de coordinación

Una organización divide su trabajo en cinco elementos estructurales, y a la par de esta diferenciación, se da la coordinación de las actividades que se propone alcanzar (Mintzberg, 1989; Marín, 2012 y García, 2013). En la Figura 1, se esquematizan los elementos estructurales en los que se divide el trabajo de La Comon, respecto a su Programa de Extensión, y los mecanismos de coordinación que utiliza como una forma de homogenizar las estructuras de comportamiento y conocimiento que permiten conseguir que todos los integrantes adopten decisiones coherentes que conduzcan a cumplir con el trabajo de La Comon.



Notas: Flujo de información para toma de decisiones →
Descentralización →

Códigos: (ED) Estandarización de Destrezas, (AM) Ajuste Mutuo. (SD) Supervisión Directa.
Figura 1. Mecanismos de coordinación y elementos estructurales de la estructura organizacional de la Comon Yaj Noptic S.S.S., Chiapas, México.

En los elementos estructurales, resalta la participación de los extensionistas en tres de los cinco elementos de la estructura organizacional, de acuerdo al Programa de Extensión. Convirtiéndolos en los operadores con responsabilidad de mayor número actividades y encargados de brindar el principal servicio del Programa de Extensión. Esto hace que el NO sea el elemento estructural más amplio y clave de la estructura organizativa, como se muestra en la Figura 1, concordando con Mintzberg (1989) quien menciona que el NO es la parte clave de la burocracia profesional, al separar sus variadas tareas operativas y designar las actividades particulares a profesionales, relativamente autónomos, debidamente capacitados y enseñados.

A continuación, se describen los principales mecanismos de coordinación que utiliza La Comon para coordinar su trabajo: Ajuste Mutuo (AM), Supervisión Directa (SD), y



Estandarización de Destrezas (ED); de acuerdo a las actividades del Programa de Extensión.

Ajuste Mutuo

Este mecanismo coordina el trabajo mediante el sencillo proceso de comunicación informal, colocando el control del trabajo en manos de quienes lo efectúan, en otras palabras, la gente que realiza el trabajo interactúa entre sí para coordinarse en redes de contacto informales (García 2009; Mintzberg 1989). Este mecanismo se presenta en dos niveles dentro de la estructura organizacional, el primero corresponde a la interacción entre los diferentes elementos estructurales del Programa de Extensión, y el segundo a la elevada interacción entre los integrantes del NO, de forma interna.

En el primer nivel se ejerce la coordinación mediante la comunicación informal a través de reuniones imprevistas e institucionalizadas. Las reuniones imprevistas se refieren a cuando la gente que se encuentra con otros y deciden tener una reunión (Mintzberg, 1989); este tipo de reuniones se presentan muy constantemente en La Comon, sobre todo entre los integrantes del AE, LM y NO. Las reuniones institucionalizadas, como parte de la estructura formal, son programadas de forma regular en donde se designan formalmente sus participantes (Mintzberg, 1989). En La Comon, éstas son denominadas: Asamblea de Delegados, Junta Comunitaria y Junta de Operadores; establecidas como una forma de distribuir información y tomar decisiones.

En ambos casos la coordinación se realiza incluyendo la comunicación informal, los integrantes interactúan entre sí para ponerse de acuerdo a través de la discusión de actividades, procesos, resultados y recursos, para toma de decisiones. Según Mintzberg (1989) esto sucede cuando es requerido un contacto extenso y bastante regular, por lo menos por un periodo de tiempo, entre los miembros de varias unidades para discutir asuntos comunes.

En el segundo nivel se encuentra la coordinación por el AM entre los integrantes del NO, a través de comunicación informal. Se basa en el flujo de información y conocimientos, manteniendo una relación afectuosa y alto nivel de apoyo entre pares para realizar el trabajo y resolver problemas.

“Ambos nos apoyamos, cualquier información que él necesita [coordinador del SIC], si le proporcionamos y ya el también a nosotros. Como todo el equipo extensionista ya nos



compartimos informaciones de campo, de talleres, ya nos comparten manuales o algo de preparados, si nos compartimos los archivos.” 2b

Las decisiones de qué y cómo hacer el trabajo en el NO se apoyan en un alto nivel de coordinación entre los mismos operadores, quienes acuerdan, consultan con compañeros,

aclaran dudas y resuelven problemas entre pares, a través de la coordinación por AM.

“Los técnicos con experiencia ayudaban a los demás con materiales o información, para que aclararan dudas y pudieran cumplir mejor su trabajo. Si hay la confianza para poder preguntarles dudas a los demás técnicos”. 2b

En La Comon, el nivel de coordinación a través de AM, sobrepasa la SD de otros integrantes de la parte superior de la estructura, para la coordinación de las actividades del NO. Esto concuerda con lo que comúnmente sucede en las burocracias profesionales, según Hall (1983) y Mintzberg (1989). Debido a que estas organizaciones contratan a especialistas debidamente capacitados y enseñados, y se tiene como base para realizar el trabajo la confianza, el reconocimiento profesional o el prestigio (Mintzberg 1989 y García 2009). Esta situación se presenta en La Comon por el alto nivel de confianza que se tiene en el trabajo de los operadores.

Según Mintzberg (1989) y García (2009) un elevado nivel de AM corresponde a organizaciones con alto nivel de colaboración entre sus integrantes, como en La Comon. En donde los profesionales están inclinados a entenderse cara a cara con sus compañeros y a desarrollar fuertes lazos de compañerismo, como lo menciona Hall (1983), debido a la necesidad que se tiene de socializar la información y el conocimiento para coordinar el trabajo colectivo.

Supervisión directa

Este mecanismo surge a medida que una organización sobrepasa su estado más simple, incluyendo a más persona en su estructura. Obligándose a requerir de una persona que logre la coordinación emitiendo instrucciones a otras personas, responsabilizándose de su trabajo y supervisando sus acciones (Mintzberg, 1989). Aun cuando es muy notable el alto nivel de coordinación por AM; también se implementa, en baja proporción, la SD, principalmente del AE a la LM y de esta última al NO. En La Comon, el AE se encarga de que todas las áreas organizacionales funcionen



correctamente, por lo cual solicitan mensualmente reportes de actividades de cada área, para obtener información y conocer las actividades que se están realizando. Esto se realiza principalmente a través de las reuniones institucionalizadas, en donde todas las áreas presentan un informe del trabajo realizado. Sin embargo, esta supervisión no exige un control directo sobre las actividades del NO; debido a que los integrantes del AE, especialmente el comité ejecutivo, tienen claro que su cargo cambia cada dos años y que el resto de los integrantes son constantes y tienen más tiempo y experiencia en sus puestos; por lo que confían en sus conocimientos y capacidades para tomar decisiones y realizar el trabajo.

“Yo me puedo asesorar con los mismos que estamos aquí, todos saben de todo, ya tienen más tiempo aquí. No puedo tomar una decisión que a ellos les corresponde decir si está bien o están mal” 1f

Los productores socios de La Comon cumplen un papel importante dentro de la función de SD, principalmente a través del AE, en donde se encuentran sus representantes (el comité de delegados) a través de los cuales exigen el cumplimiento de las actividades de La Comon (Figura 1). En el caso del Programa de Extensión, los productores exigen el cumplimiento del trabajo de los operadores, pues según lo establecido en el plan de renovación, necesitan de asistencia técnica, firmas de inspección y aprobación de actividades en las parcelas, para poder recibir los desembolsos del financiamiento del Programa de Renovación.

La LM tiene la función de coordinar y supervisar el trabajo del NO, para lo que necesitan tener información constante de lo que está sucediendo en campo. Los operadores tienen la obligación de entregar a la LM un plan de actividades y un reporte de actividades realizadas mensualmente. La LM se basa de estos reportes para monitorear las actividades, analizar la información, pasarla al AE y a su vez, basarse en ella para realizar un reporte general de actividades que será presentado en la asamblea de delegados mensualmente. Sin embargo, la LM no tiene la necesidad de ordenar a los integrantes del NO lo que tienen que hacer, les proporciona libertad porque confía en sus conocimientos y capacidades para realizar el trabajo. Además, existe un Plan Agronómico de Renovación, basado en el ciclo productivo del café, que sirve como guía para las actividades de renovación y, por ende, del Programa de Extensión.

“No, los extensionistas ya saben el trabajo que tienen que hacer, se basan también en el plan agronómico, que ellos ya conocen”. 2c



A medida en que se complica el trabajo, puede ser incluida la estandarización, de forma automática, a través de los estándares que predeterminan lo que las personas hacen, logrando la coordinación desde antes de comenzar el trabajo. (Mintzberg, 1989). La Estandarización de Procesos de Trabajo se refiere a la especificación o programación del contenido del trabajo directamente, se refiere al grado en el que las reglas y los procedimientos son diseñados y escritos (Hall, 1983; Mintzberg, 1989; Weber, 1993 y Culebro, 1998) y sirve para controlar y regular el comportamiento de los miembros de La Comon. La Estandarización de Producciones de Trabajo se refiere a la especificación de los resultados del trabajo (por ejemplo, las dimensiones del producto o el desempeño), pero dejando la elección del proceso al trabajador (Mintzberg, 1989). En La Comon, los productos y procesos del trabajo operativo son poco especificados, lo que refleja con el funcionamiento de una burocracia profesional, en donde según Mintzberg (1989) los mismos procesos del trabajo profesional son demasiado complejos para ser estandarizados y los productos del trabajo no pueden ser medidos fácilmente y así no se prestan a la estandarización a través de sistemas de planeamiento y control impuestos por analistas. Por ende, son difíciles de controlar para cualquiera que no sean los operadores mismos.

Estandarización de Destrezas

Cuando los productos o procesos no pueden ser estandarizados, se recurre a la coordinación a través de los trabajadores, estandarizando las destrezas y conocimientos para regularizar el comportamiento deseado de sus integrantes dentro del trabajo (Mintzberg, 1989). En las burocracias profesionales normalmente la mayor parte de la **ED** se realiza al momento de contratar al profesional, debidamente capacitado y enseñado (Mintzberg, 1989 y Weber, 2005). Así, los operadores ejercen un arrastre hacia el profesionalismo, definido por Daft (2011) como el nivel de educación formal y capacitación de los empleados.

Sin embargo, La Comon no contrata a profesionistas expertos, por normativa, van integrando a su trabajo a productores e hijos de productores de la misma, que no cuentan con estudios académicos a nivel profesional. De hecho, el mayor nivel académico entre la mayoría de ellos es la primaria terminada. De esta manera se asume que los conocimientos y destrezas que tienen para realizar su trabajo, no están dados por un proceso educativo formal como se presenta normalmente en las Burocracias profesionales.



La Comon utiliza un amplio esquema de ED que le permite formar conocimientos y destrezas para regularizar el comportamiento deseado en sus integrantes. Debido a esto, como se puede mostrar en la Figura 1, la Te se vuelve un elemento estructural más amplio que en las burocracias profesionales. A continuación, se explican los tres mecanismos de estandarización: Capacitación, Adoctrinamiento y Rotación de Tareas.

Capacitación. Se refiere al proceso por el cual se enseñan los conocimientos y las destrezas relacionadas con el cargo, como una forma de proveer a un profesionalista que ya sabe cómo hacer su trabajo, el conocimiento y comportamiento específico requeridos (Mintzberg, 1989). Sin embargo, en La Comon, este proceso se vuelve más extenso, al tratarse de productores e hijos de productores que se han formado progresivamente, enfrentándose al reto de cubrir deficiencias de conocimientos y destrezas, principalmente técnicas. Estas deficiencias han sido cubiertas por largos procesos de capacitación, en donde uno de los factores clave ha sido el interés de La Comon por promover el desarrollo de capacidades en sus integrantes.

La Comon ha utilizado las relaciones establecidas con otras instituciones para recibir diferentes capacitaciones a nivel técnico, organizativo, directivo y comercial. Todos los integrantes de la estructura organizacional han recibido diferentes cursos y capacitaciones para que sean capaces de cumplir con sus funciones; desde el encargado de vivero hasta el presidente. Los tipos de capacitaciones son acordes a las funciones organizacionales y a los conocimientos y destrezas necesarias en los integrantes. Por ejemplo, los temas recientes en los que se han capacitado son: diversificación productiva; renovación de cafetales; adaptación y mitigación de cambio climático; desarrollo de modelos de negocios; cultura financiera; actualización de normas orgánicas, entre otros. La Comon aprovecha la oferta de capacitación de varias organizaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil, entre ellas: Root capital, Ecualex, Certimex, Solidaridad, Ecosur, IICA, CONABIO, y la misma Comon Yaj Noptic; que fomentan la formación de conocimientos y destrezas para desarrollar la capacidad institucional. Permittedole a La Comon desarrollar una estructura altamente capacitada a través de una estrategia de redes. Elemento que se diferencia a lo reportado en la investigación de Ruiz (2006) en donde una deficiencia de las cooperativas que son dirigidas por sus socios está relacionada con el bajo nivel de formación, creando una mentalidad individualista y la tendencia al «no asociacionismo». Aquellos socios que tienen menor formación entienden que la cooperación, desde un principio, es problemática, cuanto más el crecimiento o la unión con otras empresas



cooperativas. Desde esta perspectiva, manifiestan su preferencia por trabajar en una dimensión menor.

Los integrantes del NO y la LM conforman un grupo de cuatro personas, que son los responsables del mayor número de funciones del Programa de Extensión, por esta razón son los integrantes sometidos a capacitaciones constantes, en diferentes áreas, principalmente de índole agrícola, ambiental y normativa, de acuerdo a la naturaleza de La Comon. Asisten a diferentes eventos como: cursos, talleres y giras de intercambio de experiencias, generalmente con una duración entre uno y cinco días. Principalmente de forma local y a otros municipios del estado; algunas veces llegan a ir a otros estados y eventualmente al extranjero, últimamente a Honduras y Guatemala. Los gastos de la asistencia a estos eventos, en ocasiones son cubiertos con recursos de la misma organización, otros por instituciones externas, y en ocasiones la misma persona decide cubrir con los gastos de su capacitación.

Un complemento del desarrollo de destrezas técnicas se genera por la socialización de la información y conocimiento entre compañeros. Las personas que se capacitan fuera de La Comon, regresan y transfieren la información al resto de los integrantes, tomando el papel de capacitadores como parte de las funciones de la **Te**. La información obtenida en estos cursos se analiza y se hace una réplica de los elementos o técnicas que sirven y pueden adecuarse a las características y capacidades de los socios y La Comon. De esta manera gran parte del trabajo que se realiza en el Programa de Extensión y las estrategias del **NO**, están basadas en parte como profesionales individuales dentro de la organización y por sus conocimientos y experiencias como productores; además de fuera de la organización, por las instituciones capacitadoras. Con la implementación de estrategias adaptadas a sus necesidades e intereses, como lo menciona Mintzberg (1989), como un proceso común en las burocracias profesionales.

En el programa de Producción Orgánica, se realiza un Curso anual de Actualización del Sistema de Información y Control, con la finalidad de formar y certificar a inspectores. En estos cursos se abordan temas referentes a normas orgánicas, procesos de inspección, tecnología móvil, control de calidad y cuestiones agrícolas. El administrador de la LM, algunos extensionistas del NO e inspectores con experiencia fungen como capacitadores. Estos cursos también son fuente importante de socialización de información y conocimiento entre los integrantes de La Comon. La capacidad de auto



impartirse cursos de certificación, hace evidente el alto nivel de conocimientos y destrezas que tienen los integrantes del programa.

Adoctrinamiento. A través de este mecanismo se obtienen las normas organizacionales, está basado en la socialización, proceso por el cual un nuevo miembro aprende el sistema de valores, normas y los esquemas de comportamiento requeridos por la sociedad, organización o grupo al que se está atendiendo (Mintzberg, 1989). En La Comon una parte del adoctrinamiento se realiza al permitir la participación exclusiva de productores e hijos de productores en sus cargos. Ocasionando que todos sean campesinos originarios de la misma zona, que saben de café, que comparten cultura y tienen costumbres y creencias muy similares.

Todos los integrantes de la estructura organizacional han ingresado por voluntad propia a participar en las actividades de La Comon. En el caso de los integrantes del NO y LM, la mayoría menciona haber iniciado a participar en las actividades, eventos, capacitaciones y reuniones organizacionales por interés propio, sin recibir ningún tipo de remuneración. Así fueron conociendo su naturaleza y funcionamiento, a partir del cual se generó el interés por la extensión. De forma práctica, empezaron acompañando las actividades de los demás integrantes para aprender de su trabajo, les enseñaban cómo comportarse y relacionarse con los productores; cómo hacer el trabajo técnico, monitorear y dejar recomendaciones a los productores, además de enseñarles rutas, ubicación de parcelas y domicilio de los productores. Todos los integrantes mencionan que les gusto el trabajo y decidieron seguir participando en actividades de capacitación en La Comon. Por lo tanto, podemos decir que el cargo que tienen y el trabajo que realizan dependen altamente de su interés, disponibilidad y preferencias o gusto por el trabajo.

“No me gustaría cambiarme a otro lugar, yo me apropio de las condiciones, en otro lado no podría, somos de la zona, estamos realizando las actividades que nos gustan, mi papa está dentro de la organización y la idea es crecer, si ahorita no tengo un buen sueldo, no veamos eso como una limitante porque al final de cuentas podemos recuperarnos, y la remuneración quizás más adelante puede mejorar” 2c

En todos los integrantes entrevistados pudo notarse el alto sentido de pertenecía a La Comon. Todos consideran que son parte de ella, al ser socios o tener a más familiares agremiados; por lo que comparten intereses similares.



“En mi caso, en lo personal es valorar lo que es la cooperativa, formo parte, mi familia forma parte, lo que queremos es un éxito de la cooperativa, no es únicamente de lo personal. Nos sentimos que somos el dueño, no es sacarle provecho si no hacer bien las cosas en la cooperativa” 2b

Este sentido de pertenencia ocasiona que todos tengan el mismo interés de que funcione bien La Comon, para beneficio de todos. Y se refleja en el compromiso que tienen con su trabajo, con los productores y con la función organizacional general.

“La organización, te apropia de tu organización, esa es una gran ventaja, que te sientes propio de tu organización, te pones la camiseta, cosa que en otras organizaciones, si eres externo te vale, recibes un sueldo y todo lo que pase te vale, aquí como que es diferente y la gente lo nota, todo el que viene de fuera lo nota y te dice sabes que, realmente me gusta esto” 2c

El compromiso que muestran todos los integrantes con el adecuado funcionamiento organizacional, reluce en el cumplimiento de su trabajo con un apoyo económico poco significativo, además del cumplimiento de sus actividades operativas, ligadas principalmente a la satisfacción de necesidades y la búsqueda del bienestar social de los productores.

“Esa es la meta, tratar de solventar las necesidades del productor, en este caso siempre les decimos bueno que se necesita, estamos viendo que se necesita y tratar de buscar la manera de como solventar eso, porque no les podemos decir les vamos a dar esto porque ya viene el proyecto, no, porque qué tal que no lo necesita” 1f.

Es importante resaltar la influencia que tiene el hecho de ser productor o hijo de productor sobre la orientación del trabajo con: el sentido de pertenencia y compromiso con su trabajo, La Comon y los productores; el amplio conocimiento del ambiente social, cultural, político y geográfico en el que se desenvuelve La Comon; y el alto nivel de conocimientos prácticos sobre el manejo del cultivo, además del conocimiento de las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan los productores. Estos elementos orientan su trabajo al servicio y bienestar de los socios, más que a un negocio lucrativo.

“La verdad yo soy uno de los productores, si me voy con un productor, yo siento la misma necesidad de estar con el mismo problema, yo me pongo la misma camisa del productor, porque sé que realmente necesita en el campo” 2d



Rotación de Tareas. Según Mintzberg (1989) las organizaciones pueden reforzar los comportamientos de sus integrantes con una serie de dispositivos para el personal, como la rotación de tareas. Elemento que se presenta en La Comon en dos dimensiones: Rotación de Tareas a través del tiempo y Rotación de Tareas actualmente.

Rotación de *Tareas a través del tiempo*. La primera dimensión se analizó a través de la participación de los integrantes en los diferentes cargos formales que han ocupado desde su ingreso a La Comon, observando el alto nivel dinámico de rotación entre los integrantes y la rotación de tareas a través del tiempo implica que los integrantes que están actualmente en el AE, han pasado por un periodo de experiencia previa en diferentes cargos del mismo nivel y además, en cargos de nivel operativo. Este hecho permite la continuidad en términos de dirección y funcionamiento, que concuerda con Bataille-Chedotel y Huntzinger (2004) cuando mencionan que las competencias colectivas son el resultado de un aprendizaje organizativo: al ir escalando los peldaños de la escala jerárquica, el escalador aprende gradualmente, en contacto con otros empleados, cómo trabajar con ellos y cuál es el mecanismo de gestión de una cooperativa. Según Pelled et al. (1999) de este modo están más familiarizados con las posiciones de los demás y conocen las interacciones.

“Como soy productor, fui delegado, estuve en control de calidad, de catación, ya sé que necesita la gente. No es la primera vez que me habían elegido [como presidente]; pero por problemas personales no había aceptado”1f.

Rotación de *Tareas actualmente*. Además de participar en diferentes cargos formales a través del tiempo para obtener experiencia antes de obtener el puesto actual; algunos integrantes participan actualmente hasta en cuatro cargos formales al mismo tiempo. Lo que permite que los integrantes tengan conocimiento e información del manejo actual de diferentes cargos formales. También implica que las personas sean responsables directos de diferentes cargos, que conllevan a un alto nivel actividades, responsabilidad e inversión de tiempo.

En este análisis de la dimensión de rotación de tareas actualmente, podemos observar que el funcionamiento de los programas organizacionales se combina. La activa participación de los integrantes en diferentes cargos formales y la participación informal dentro de los programas y niveles estructurales, demuestra el manejo colectivo de todas las actividades concernientes a La Comon, asumiendo que existe un alto nivel de cooperación entre los integrantes que permite potenciar su funcionamiento. Según



García (2009:2013) la cooperación puede conducir al incremento de la coordinación entre individuos, grupos o empresas; pues además de incorporar esfuerzos distintos para alcanzar un objetivo común, en la cooperación se concentran y enfocan actividades coordinadas de esfuerzos y energía a fin de evitar la dispersión y de unir las tareas que inicialmente fueron divididas.

Se puede decir que el mecanismo de rotación de tareas, en sus dos dimensiones, ha permitido que los integrantes tengan experiencia, conocimiento e información necesaria para realiza su trabajo, facilitando los niveles de coordinación en sus diferentes actividades. Al crear personal altamente capacitado en el funcionamiento general de La Comon y con la capacidad de tomar decisiones a diferentes niveles, con criterios que permiten que las cosas avancen y La Comon vaya progresando. Sin la necesidad de prescindir de algún integrante en específico. Esto concuerda con Terrazas et al. (2006) sobre el efecto de favorecer la comunicación y el conocimiento mutuo en áreas de una mayor coordinación y la formación continuada a través de la rotación por distintos servicios de atención especializada entre médicos.

Como se puede observar, estos tres mecanismos de Estandarización (Capacitación, Adoctrinamiento y Rotación de tareas) utilizados para la ED, equivalen a la internalización de esquemas de comportamiento aceptados y estandarizados en los trabajadores de La Comon. A través de estos Mecanismos, los integrantes de la estructura organizacional han formado sus conocimientos para manejar sus cargos formales; sus destrezas y conocimientos técnicos en el manejo del cultivo de café; sus conocimientos y experiencia práctica como productores en el manejo del cultivo de café; su conocimiento de las necesidades y problemáticas de los productores y La Comon; su conocimiento del ambiente económico, político y social; su sentido de pertenencia a La Comon; sus costumbres y creencias similares al resto de los productores de La Comon; sus intereses similares entre los integrantes; su compromiso con el trabajo, los productores y los fines de La Comon, y sus conocimientos y experiencia en el funcionamiento general de La Comon (cargos, niveles estructurales y programas). La generación de estos elementos característicos en los integrantes, han permitido cumplir adecuadamente con el trabajo profesional de La Comon.

Para Daft (2011), el profesionalismo es el nivel de educación formal y capacitación de los empleados, y se considera alto cuando los empleados requieren largos periodos de capacitación para tener ciertos puestos en La Comon. La mayoría de los integrantes en



La Comon no han pasado por un proceso de educación formal para ocupar su cargo; pero han recibido largos procesos de capacitación informal, Además, según Mintzberg (1989), la capacitación profesional debe ser seguida generalmente de un aprendizaje en el cargo (experiencia particular) antes de que la persona sea considerada totalmente capacitada, elemento que se presenta en La Comon, con el sistema de rotación de tareas en sus dos dimensiones. Aunado a estos dos procesos, se suma el mecanismo de adoctrinamiento, como una forma de asegurar que la persona que ocupe un cargo, desarrolle los comportamientos necesarios para trabajar. De esta manera se explica cómo una organización de productores, se encarga de profesionalizar a sus integrantes y construye una estructura burocrática profesionalizada a través de un amplio mecanismo de ED.

Estos mecanismos de ED han permitido formar a productores e hijos de productores sin estudios académicos a nivel profesional; como un NO profesional altamente capacitado para realizar su trabajo, con la capacidad de tomar decisiones a diferentes niveles. Demostrando una de las marcas de buena calidad de la profesionalización: la capacidad y la disposición para tomar decisiones basándose para ello en un entrenamiento y experiencia profesional (Hall, 1983). De tal manera que mucha de la responsabilidad del Programa de Extensión puede recaer en ellos, sin ningún problema. Logrando que La Comon otorgue a sus operadores considerable control sobre su propio trabajo, confiando en las destrezas y conocimientos de sus profesionales, para funcionar y producir productos o servicios estándar; como se realiza en las burocracias profesionales (Hall, 1983; Mintzberg, 1989; Weber, 2005 y Daft, 2011).

De esta manera, La Comon maneja la mayor parte de la coordinación necesaria conforme al trabajo de los profesionales operadores, por ED y Conocimientos, como se hace en las burocracias profesionales según Mintzberg (1989). Esto coincide con la investigación de Terraza et al. (2006) en organizaciones sanitarias en donde se dispone de instrumentos alternativos basados en la estandarización de habilidades que pretenden mejorar el acceso al conocimiento especializado en la atención primaria. En donde las habilidades normalizadas de sus profesionales se ocupan de gran parte de la coordinación.

En estas organizaciones, la ED se vuelve el mecanismo coordinador más importante para formar esquemas de comportamiento aceptados y estandarizados en los trabajadores. Sin embargo, en las burocráticas profesionales, la Te no suele ser un



elemento estructural muy amplio; pues la ED en estas organizaciones se realiza al momento de hacer la contratación de los profesionales (Mintzberg, 1989 & Weber, 1993). Sin embargo, en la estructura organizacional de La Comon, la Te aparece más grande de lo normal en una burocracia profesional (Figura 1), pues al contrario de otras burocracias profesionales, La Comon se resuelve la deficiencia de conocimientos y destrezas en los operadores, haciéndose responsable de la formación de sus profesionales, a través de los tres mecanismos de Estandarización antes mencionados.

Con base a esta información, se deduce que La Comon utiliza los mecanismos de AM y ED para coordinar su trabajo, coincidiendo con lo reportado por Pucheu (2010) quien menciona que combinaciones en las que predominan el AM y la estandarización de habilidades, ocurre en el caso de empresas familiares o burocracias fordianas que deben evolucionar a burocracias profesionales. Estos mecanismos homogenizan estructuras de comportamiento y conocimiento en los integrantes, para que sean capaces de adoptar decisiones coherentes que permiten cumplir con las actividades de La Comon de forma adecuada, en cada uno de las estructuras, en términos de su dirección. Asumiendo que la dirección de La Comon, es una cuestión colectiva que involucra no solo a los integrantes del AE, sino también a las funciones de abajo.

Descentralización

A través del análisis de los mecanismos que utiliza La Comon para coordinar su trabajo, podemos deducir que la distribución del poder de decisión dentro de los elementos estructurales que conforman el Programa de Extensión de La Comon, está distribuida en varias personas y, por lo tanto, puede calificarse como una estructura descentralizada, según Mintzberg (1989) y Culebro (1998). Esto concuerda con la investigación realizada por Ruiz (2006) en cooperativas productoras de aceite de oliva en donde los socios son el elemento fundamental y con tienen activa participación en diferentes elementos estructurales (AE, LM y NO) en donde las organizaciones son gestionadas democráticamente por sus socios, quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. En donde la estructura se caracteriza por ser descentralizada pues, aunque la autoridad formal para la toma de decisiones está, en última instancia, en manos de la base social, hay delegación en el resto de órganos. La autoridad y el control proceden de los niveles más altos y se va filtrando hacia la base de La Comon. También coincide con la investigación realizada por Terraza et al., (2006) en donde menciona que entornos como el sanitario, los profesionales



toman de forma descentralizada las decisiones relacionadas con la producción de servicios.

En cuanto al AE y la LM, puede deducirse que estos elementos estructurales brindan total libertad para que los operadores realicen su trabajo. Se presenta bajo nivel de SD, simplemente se centraliza información para saber que está sucediendo con el trabajo operativo y se corrobora que las actividades planeadas sean ejecutadas. A la LM no le interesa controlar directamente el trabajo de los operadores, por lo que no existe discrepancia entre estos dos elementos estructurales. No existen problemas por querer controlar el trabajo de los operadores como se presenta normalmente en las burocracias profesionales según Mintzberg (1989). Lo que contribuye a la amplia libertad del operador para programar su trabajo.

De esta manera, podemos deducir que, en esta estructura descentralizada, una gran cantidad de poder de decisión sobre el trabajo operativo del Programa de Extensión, reside en la base de la estructura, con los profesionales del NO, como según Mintzberg (1989) se presenta en las burocracias profesionales. Este nivel de confianza para la toma de decisiones, surge de la capacidad profesional que tienen los operadores para realizar su trabajo. La Comon depende del conocimiento especializado, coloca su poder de decisión en donde está el conocimiento, es decir con los expertos del NO, lo que le permite desarrollarse efectivamente, según Mintzberg (1989).

En La Comon, el NO es libre de hacer su trabajo, todos los operadores coinciden en tener amplia libertad para planear e implementar sus actividades a su consideración, pueden tomar decisiones libremente sobre las técnicas a utilizar, las actividades, el contenido y fechas de sus actividades. Lo que les ha permitido perfeccionar e innovar sus técnicas operativas, contribuyendo a mejorar los resultados del trabajo. Esto se ha permitido debido a que entre menor centralización se tenga en las burocracias profesionales, se proporciona mejor capacidad para controlar y operar eficazmente, según Mintzberg (1989).

De este modo el trabajo operativo del Programa de Extensión queda en manos de los operadores sin imposiciones o restricciones por parte del AE, la Te o la LM. Demostrando que en la medida en la que los gerentes y administradores otorgan a los operadores la libertad que necesitan, centralizando solo aquellos procesos indispensables; una burocracia se puede enfocarse en resultados y así ser muy eficiente, efectiva y equitativa. (Mintzberg, 1989).



Conclusiones

La configuración estructural de la Comon Yaj Noptic S.S.S. corresponde a una Burocracia Profesional. La Comon maneja la mayor parte de la coordinación necesaria conforme al trabajo del Programa de Extensión por AM y ED, como mecanismos para homogenizar estructuras de comportamiento y conocimiento en los integrantes, que permiten adoptar decisiones coherentes para el cumplimiento de las actividades del Programa de Extensión de forma exitosa. El alto nivel de AM entre las diferentes áreas de La Comon, y entre los operadores, permite distribuir información y conocimientos para la toma de decisiones, y corresponde con la necesidad de coordinarse debido al funcionamiento a través de una acción colectiva y participativa. La ED permite profesionalizar a sus integrantes a través un amplio proceso de capacitación informal, acompañado de un proceso de aprendizaje en el cargo (Rotación de Tareas) y un mecanismo de Adoctrinamiento; generando integrantes altamente capacitados y comprometidos con su trabajo, los socios y La Comon. Esto le ha permitido a los operadores de La Comon a cumplir adecuadamente con el trabajo profesional sin necesidad de un profesional externo que la dirija.

El mecanismo de ED ha permitido formar a socios e hijos de socios sin estudios académicos a nivel profesional; como operadores altamente capacitados y relativamente autónomos con: experiencias y conocimientos suficientes para realizar su trabajo; con valores, costumbres y creencias similares a las del público objetivo del Programa de Extensión; altamente capacitados en el funcionamiento general de La Comon, y con la capacidad de tomar decisiones a diferentes niveles. Logrando que La Comon otorgue a los operadores considerable control sobre su propio trabajo, confiando en las destrezas y conocimientos de sus profesionales para programar e implementar las actividades del Programa de Extensión.

El poder y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones, dentro del funcionamiento del Programa de Extensión de La Comon, está distribuido en varias personas, por lo tanto, puede calificarse como una estructura descentralizada en donde el poder de decisión se centra principalmente en el los operadores profesionales. Logrando un equilibrio entre el nivel de descentralización y el nivel de control de las actividades del Programa de Extensión, proporcionando a los operadores la capacidad para controlar y operar eficazmente y supervisando lo necesario para asegurar el cumplimiento del trabajo.



Bibliografía

- Bataille-Chedotel, F. & Huntzinger, F. (2004). Directivos y gobierno de las cooperativas obreras de producción. Un estudio exploratorio sobre diez cooperativas francesas. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*. 48, 79-98, abril.
- Boone, E. 1985. *Developing Programs in Adult Education*. NJ, EEUU: Prentice-Hall.
- Culebro, J. 1998. *Cambio Organizacional: Transformación y Diseño Estructural*. Centro de Investigación y Docencia Económica: Mexico. 66 p.
- Daft, R. (2011). *Teoría y Diseño Organizacional*. Décima edición. Cengage Learning Editores: México, D.F. 650 p.
- García, A. 2009. Mecanismos de coordinación en empresas. *Revista Inventio*, (9): 33-40.
- García, A. (2013). *La importancia de los procesos y mecanismos de coordinación en la empresa: una aproximación a partir de la teoría de la organización*. España.
- Hall, R. (1983). *Organizaciones, Estructura y Procesos*. 3a. Ed. Dossat, S. A., Plaza Santa Ana 9 - Madrid 12, España. 351 p.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. 6a. ed. México D.F.: McGraw-Hill.
- Lawrence, P. y Lorsch, J. (1967). Differentiation and Integration in Complex Organizations. *Administrative Science Quarterly* (12): 1-47.
- Marín, D. (2012). Estructura organizacional y sus parámetros de diseño: análisis descriptivo en pymes industriales de Bogotá. *Estudios Gerenciales* (28): 43-63.
- Mintzberg, H. (1989). *Diseño de Organizaciones Eficientes*. 2a. Ed. McGill University: Canada.
- Pelled, L. H., Eisenhardt, K. M., & Xin, K. R. (1999). Exploring the Black Box: An Analysis of Work Group Diversity, Conflict, and Performance. *Administrative Science Quarterly*, 44(1), 1-28. doi:10.2307/2667029
- Pucheu, A. 2010. Relaciones entre la estructura en el self y el modelo de mecanismos de coordinación organizacional de Mintzberg. *Psicoperspectivas*, 9 (1):158-180.
- Ruiz, C. 2006. Disfunciones en el gobierno de las sociedades cooperativas agrarias: el caso de las almazaras cooperativas. *GEZKI*, (2):73-103.
- Swanson, B. (2010). *Estudio mundial sobre buenas prácticas de la extensión y asesoramiento agropecuarios en el mundo*. Universidad de Illinois. FAO: Roma. 72p.
- Terraza Núñez, R., Vargas Lorenzo, I., & Vázquez Navarrete, M. L. (2006). La coordinación entre niveles asistenciales: una sistematización de sus instrumentos y medidas. *Gaceta Sanitaria*, 20, 485-495.



Vázquez-Ibarra, Y. (2019). La extensión implementada por productores de café orgánico en Chiapas, México. *Tesis de Maestra en Ciencias*. Colegio de Postgraduados: Montecillo, México.

Weber, M. (1993). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica, FCE: México. 1245



Formação e Transformação da Sociedade Rural Brasileira

Renner Coelho Messias Alves¹
Ingrid Mendes Miranda²

Resumo

Este ensaio objetiva discorrer sobre a formação e a transformação da sociedade rural brasileira, a qual, inicialmente, teve como pilares a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo. Como substrato desses pilares, encontrava-se a massa de operários rurais, prestadores de serviços, diaristas, posseiros, meeiros, arrendatários, enfim, camponeses e outros profissionais atuantes em trabalhos incertos, sazonais e ocasionais. As relações de poder, portanto, foram estruturadas no campo com o estabelecimento de correspondências e equivalências para o meio urbano. Em meio aos usos e sentidos atribuídos à administração privada do público, sobretudo nas raízes agrárias da formação social brasileira, são discutidas as transformações do mundo rural brasileiro ao passar dos séculos. Conforme discutido nesta pesquisa, presenciavam-se reconfigurações entorno do campesinato brasileiro, a exemplo das novas estratégias de exploração econômica do mundo rural. Apesar disso, alguns aspectos permanecem constantes ao passar dos anos, como a produção agroalimentar latifundiária agroexportadora. Os novos rumos, ainda incertos, sugerem, de um lado, os surgimentos de novas estratégias econômicas, no entanto, por outro lado, sinalizam a permanência dos embates acerca do acesso democrático à terra. Permeado pela busca da consciência das raízes herdadas, ao brasileiro são atribuídos os esforços para adotar uma postura reacionária para transformação de sua realidade. Em associação com outros atores e instituições, as alterações sociais ora ocorrem de modo estrutural, ora se manifestam pela impulsão de interesses particulares, sendo desenvolvidos ao longo do tempo.

Palavras-chave

Sociedade rural brasileira. Campesinato brasileiro. Mundo rural. Campo. Cidade.

Empreendimentos privados nos primórdios do Brasil colonial

Por vezes a sociologia rural implementou uma oposição entre campo e cidade, como realidades espaciais descontínuas, ao passo que o campo é categorizado como um espaço subordinado à cidade, seja nas relações econômicas, sociais ou políticas (Carneiro, 2012). Esse cenário é melhor entendido ao considerar as raízes históricas da formação da sociedade brasileira, na qual o colonizador português, a partir do século



XVI, segundo Freyre (2005, p. 69), contribuiu para o “especialíssimo caráter que tomou a colonização do Brasil, a formação *sui generis* da sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos”.

Assim, o ambiente rural brasileiro, à época da colonização, mantinha a função primordial de fornecedor de produtos primários demandados pelo mercado externo (Prado Jr., 1961). Nesse período, a grande lavoura, a variar em razão da região, se expressava na monocultura de cana-de-açúcar, por exemplo, com predomínio de trabalho escravo. Coexistiam com os produtores latifundiários os trabalhadores livres “degradados”, os quais contribuía para a agricultura de subsistência, de modo a estarem localizados nas proximidades das grandes propriedades e de centros urbanos a que serviam (Prado Jr., 1961).

Os indivíduos desclassificados ocuparam posições laborais transitórias, incertas ou definidas conforme a demanda e a oportunidade local. Surgiram, por conseguinte, do “vácuo imenso entre os extremos da escala social: os senhores e os escravos; a pequena minoria dos primeiros e a multidão dos últimos” (Prado Jr, 1961, p. 279). Dessa forma, os senhores, proprietários dos latifúndios, eram privilegiados na hierarquia social, tornando-se, posteriormente, “os dirigentes da colonização nos seus vários setores” (Prado Jr., 1961, p. 279). Já os escravos e, de certa maneira, os trabalhadores degradados, formavam a massa trabalhadora da sociedade colonial.

Especificamente a camada social desprivilegiada, ou seja, composta pelos desclassificados, desempenhou significativo papel na colonização, uma vez que sua característica de fluidez e instabilidade no trabalho permitiu ocupar funções exclusivas. Esses postos exclusivos, de acordo com Mello e Souza (1982, p. 63), consistiam em “funções que o escravo não podia desempenhar, ou por antieconômico desviar mão de obra da produção, ou por colocar em risco a condição servil.” Por isso, os desclassificados, desprovidos de quaisquer assistências por parte do estado, mantinham lealdade aos senhores e exerciam “funções de supervisão (o feitor), de defesa e policiamento (capitão-do-mato, milícias e ordenanças), e funções complementares à produção (desmatamento, preparo do solo para o plantio)” (Mello e Souza, 1982, p. 63).

Em suas pequenas lavouras voltadas para subsistência, com excedente comercializado no intuito de abastecer o comércio local, o protocampesinato brasileiro se configurou como essencial na estrutura social colonial. Também identificado como “brecha



camponesa”, segundo Cardoso (2004, p. 122), ela representou, por exemplo, uma oportunidade “situada sem dúvida dentro do sistema, mas abrindo possibilidades inéditas para atividades autônomas dos cativos”. No caso dos escravos, a abordagem analítica como simples objeto foi substituída pela compreensão de sua importância como sujeito social para o seu tempo.

Canaviais, florestas fornecedoras de látex, prestação de serviços por profissionais livres e desclassificados, enfim, as formas de produção, de prestação de serviços e de comércio quase não contavam a presença do Estado. Em alguns casos, as instituições administrativas priorizavam os setores de arrecadação de impostos, como foi o caso da mineração em Minas Gerais e em Goiás (Prado Jr., 1961). Essa configuração organizacional estatal, aparentemente de pouca monta, se comparada à atualidade, ocorreu em razão “de condições geográficas e da forma com que se constituiu o país” (Prado Jr., 1961, p. 307). No âmbito da administração pública, por conseguinte, houve o “solapamento da autoridade pública, a dissolução de seus poderes que se anulam muitas vezes diante de uma desobediência e indisciplina sistemáticas” (Prado Jr., 1961, p. 307).

A partir dessa conjuntura, o que imperou no Brasil colonial foram ações e organizações sociais provenientes de empreendimentos particulares. Para Freyre (2005, p. 80), “no Brasil, como nas colônias inglesas de tabaco, de algodão e de arroz da América do Norte, as grandes plantações foram obra não do Estado colonizador, sempre somítico em Portugal, mas de corajosa iniciativa particular”. Nesse sentido, Holanda (1995) evidenciou a formação da aristocracia agrária brasileira, a qual, ao longo do processo de evolução histórica, estendeu seus poderes do campo aos centros urbanos.

A obra de Sérgio Buarque de Holanda, intitulada “raízes do brasil” foi publicada e se reuniu a outros títulos consagrados à historiografia da formação da sociedade brasileira, a exemplo de “Casa-Grande & Senzala” (Freyre, 2005), e de “a formação do brasil contemporâneo” (Prado Jr., 1961). Em suas discussões, Holanda (1995) apresenta as evidências socioculturais dos colonizadores portugueses, de maneira a influenciar a formação da identidade brasileira, pois “podemos dizer que de lá [Portugal] nos veio a forma atual de nossa cultura; o resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma” (Holanda, 1995, p. 40).

Com essa percepção sobre a formação social, ainda segundo Holanda (1995), entre outras facetas desenvolvidas na sociedade brasileira, são destacadas as origens das



articulações para alcançar elevados postos administrativos e títulos de distinção, a repulsa ao trabalho regular e às atividades utilitárias, o encantamento atribuído aos assuntos relacionados ao ambiente urbano em detrimento daqueles do rural. Uma vez potenciais delineadores da personalidade, esses traços culturais tendem a se repercutir no trato com a coisa pública, com as consequentes manifestações de patrimonialismo, clientelismo, coronelismo, enfim, exemplos de disfunções burocráticas.

Em meados do século XIX, iniciou-se o processo de substituição do braço escravo pelos operários rurais imigrantes. Tal processo teve como principais destinos as lavouras existentes nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Petrone, 1984). Os fluxos transoceânicos de imigrantes com destino ao Brasil foram atraentes em razão do “fácil acesso à terra, acenos de abundância de trabalho, possibilidades ilimitadas de enriquecer ou de pelo menos sobreviver com dignidade” (Petrone, 1984, p. 10). Os imigrantes, ainda segundo Petrone (1984), ocuparam inicialmente pequenas propriedades, formaram colônias e contribuíram para a “evolução e o branqueamento da raça”.

Assim como em outras nações, o debate sobre a superioridade da raça em relação às demais permeou o Brasil. Nessa perspectiva, a evolução da raça mestiça no país seria alcançada a partir de “um processo acelerado de cruzamento, e depuradas mediante uma seleção natural (ou quiçá milagrosa), levaria a supor que o Brasil seria, algum dia, branco” (Scwarcz, 1995, p. 12). A estratégia, portanto, consistia em fomentar a presença do colono imigrante de países previamente definidos, de maneira a progredir o cenário agrícola brasileiro, cuja mão de obra consistiu predominantemente de escravos negros e de trabalhadores livres degradados.

Assim, ao avaliar outras condições pós-coloniais no Brasil, houve o predomínio do poder privado em relação ao poder estatal, retoma-se aqui o fenômeno social inicialmente apresentado por Leal (2012), o coronelismo. Na visão do autor, o coronelismo é compreendido como “uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base representativa” Leal (2012, p. 44). Nessa medida, para Carvalho (1997), o coronelismo apresentado por Leal (2012) significou o relacionamento de fazendeiros com o governo, de maneira a considerar nessa polarização de poder os demais cidadãos como parceiros ou rivais desses líderes políticos.



Nesse contexto em que o poder privado prevalece diante do poder estatal, o trabalhador rural ficava suscetível aos favores dos “coronéis” e às conseqüentes obrigações deles provenientes. Ainda segundo Leal (2012, p. 46), “o roceiro vê sempre no ‘coronel’ um homem rico, ainda que não o seja; rico, em comparação com sua pobreza sem remédio”. Ou seja, de um lado, ao proprietário da fazenda, em termos gerais, cabia “um conforto primário, mas inacessível ao trabalhador do eito” (Leal, 2012, p. 46). E, por outro lado, o trabalhador rural, com poder inferior, recorre ao proprietário da fazenda em busca de espaço para plantio, financiamento e empréstimos, enfim, recursos para assegurar a sobrevivência e a de seus familiares.

Significativo estudo sobre as formas de organização do contrato informal realizado entre trabalhador e fazendeiro foi desenvolvido por Candido (2010). Esse autor pesquisou os trabalhadores rurais do interior do estado de São Paulo, já nas décadas de 1940 e 1950. As relações entre trabalhador rural e fazendeiro se estabeleciam por meio de parcerias, arrendamentos, posse (com ou sem consentimento do proprietário), enfim, lavoura desenvolvida geralmente de forma transitória. Outras contribuições que permitem melhor compreender essas relações foram apresentadas por Queiroz (1973) e por Martins (1981), os quais envidaram esforços para demonstrar a dinâmica social, cultural e econômica na relação entre o camponês, o fazendeiro e a cidade.

Conforme demonstrado por Candido (2010), o camponês brasileiro, ora conhecido como caipira na região paulista, não esteve em condições de isolamento total em seu mundo rural, tomado supostamente como distante da modernidade do mundo urbano. Ainda segundo os pressupostos do autor, o caipira sempre esteve, a seu modo, em constante interação com o meio urbano e suas manifestações de modernidade, seja por meio das visitas às regiões de comércio e concentração urbana, seja por meio de incorporação de novas ferramentas e tecnologias em seus processos de produção. Assim, na seção seguinte, discutem-se as relações de hierarquia campo e cidade, ao longo do século XX, uma vez que suas tensões repercutem, por conseguinte, na vida camponesa.

Hierarquia brasileira na relação campo e cidade

Ao refletirmos sobre a administração pública, considerada nesta pesquisa como aparelho administrativo-operacional de instituições do Estado (Banson, 2010), a análise nos conduz a um caminho que considere a existência de estruturas distintas para a cidade e para o campo. Há um conjunto de significações sobre o rural e de como se



projetam as relações no campo, seja pela perspectiva cultural, pelas políticas públicas ou pelas representações que os próprios sujeitos rurais possuem sobre si. Assim, apresentam-se aqui algumas concepções teóricas sobre alguns dos significados de rural para melhor compreender a presença do Estado nos primórdios do Brasil, com exposições sobre parte das discussões realizadas por Rambaud (1969), Willians (1989), Lefebvre (2002), Carneiro (2012), Delgado (2010), Moreira (2014), entre outros pesquisadores da área.

No que tange ao estado da arte sobre o tema, Carneiro (2012) ressalta que, ao longo do século XX, houve inúmeras correntes teóricas que reduziam o rural à produção agrícola, e a sociologia rural consistia na sociologia das atividades agrícolas. Esse cenário pode ser compreendido ao avaliar o papel do rural e da produção agrícola no desenvolvimento nacional, sobretudo, pela modernização conservadora da década de 1970 (Delgado, 2010). Por conseguinte, houve o predomínio do olhar sobre rural pela ótica da escassez e do atraso nas técnicas de produção agrícola.

O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, em seu estudo intitulado a Revolução Urbana, apresentou evidências, de uma perspectiva histórica, dos modos de vida urbana e rural, sobretudo no período posterior à Revolução Industrial na Europa. Lefebvre (2002) conceituou que os modos de vida urbana se sobrepujam aos da vida rural, em uma espécie de dilatação do tecido urbano. Lefebvre (2002) salientou, ademais, que a urbanização completa da sociedade absorveu a produção agrícola, a qual foi transformada em produção industrial com concentração do capital. Nessa perspectiva, o tecido urbano se expandiu para o mundo rural, com consequente alteração de práticas e significados. Em outras palavras, seria o predomínio das cidades sobre o campo.

É preciso expor, além disso, que campo-cidade e rural-urbano são conceitos distintos, apesar de, ao longo da história, nem sempre serem tratados como tal. O primeiro se refere a espaço de relações, e o segundo, aos modos de vida contidos nesses espaços. Nesse sentido, Rambaud (1969) constatou que os rurais absorvem, em certa medida e com um grau de adaptação, a cultura urbana, apropriando-se daquilo que lhes seria conveniente e possível. De modo geral, essa apropriação se daria de forma individual e não coletiva, em que Rambaud define como “constituição do Canivar de cada indivíduo” (Fiúza; Pinto; Nascimento, 2012, p. 47).



No Brasil, sobretudo após a década de 1970, o campo passou a absorver cada vez mais técnicas agrícolas que mudou significativamente sua economia e suas dinâmicas de produção. Deixou, portanto, de ser um país estritamente agrícola para absorver atividades pluriativas que vão para além da produção de alimentos (Carneiro, 2012). Para Rambaud (1969), é preciso encarar o processo de urbanização que incidiu sobre o campo como um fator que modificou práticas e hábitos, entendendo, com efeito, que a relação campo-cidade é uma condição de continuidade e não de contraposição.

Existe, no entanto, uma noção do rural como espaço de preservação do meio ambiente ou da natureza vista sob uma perspectiva de contemplação que passa a concorrer com o significado de rural como lugar da produção agrícola, tendo consequências diretas sobre os usos e conflitos de interesse (Carneiro, 2012). Williams (1989) previu em seu estudo *O campo e a cidade na história e na literatura* que o turismo rural (talvez não com essa terminologia) consistiria numa nova possibilidade de a sociedade urbana encarar o campo. Ressaltava que o campo “não é mais o lugar do trabalhador rural, mas do habitante desocupado, cansado da cidade, tem uma atribuição terapêutica e temporária” (Williams, 1989, p. 70).

Nesse sentido, para Carneiro (2012), existe uma tendência para o resgate ou reinvenção do tradicional que se mistura com a revalorização da natureza como o lugar de descanso e contemplação, pela qual as consequências práticas é uma mobilização do que a autora denomina de neorrurais, os quais impulsionam essas novas práticas voltadas para turistas de fim de semana. Para Freitas, Freitas e Dias (2012, p. 1.585) é preciso encarar o rural como um “novo rural”, que combina atividades agrícolas com não agrícolas, “que promovem a integração setorial, representada pela agricultura em relação com o comércio e o setor de serviços; e a integração espacial, inter-relacionando as noções de rural com a de urbano”.

Dentro das perspectivas teóricas relatadas, Carneiro (2012) é incisiva ao destacar que definir as fronteiras de rural e urbano é um erro a medida que ignoramos a complexidade cultural dentro desses rótulos. É preciso, noutra medida, operacionalizar este significado a partir das práticas sociais e do olhar do próprio ator social. Moreira (2014) apontou que, na contemporaneidade, “o rural está sendo imaginado como natureza, podendo isso significar múltiplos sentidos, distintos daqueles do rural da modernidade, hegemonicamente representado como atrasado e como agrícola” (Moreira, 2014, p. 59).



Por último, destaca-se que existe uma visão otimista sobre as entidades públicas responsáveis pela promoção do desenvolvimento rural e de como estas tem sentido a categoria de rural nos últimos anos. Delgado (2010, p. 70) ressaltou uma posição institucional interessante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), pois o “Brasil rural comporta uma diversidade de ecossistemas, raças, etnias, religiões, povos, culturas, segmentos econômicos e sociais, sistemas de produção, padrões tecnológicos, formas de organização social e política”. Nessa perspectiva de formulação e aplicação de políticas ao meio rural importa destacar, ao menos teoricamente, um olhar atento para a diversidade e complexidade das relações sociais e econômicas, completamente diferente da modernização intensiva do campo em décadas anteriores (Delgado, 2010).

Diante dessa conjuntura, o camponês brasileiro, de um lado, manteve-se suscetível às forças de poder provenientes das produções em larga escala nos latifúndios. No entanto, por outro lado, novas configurações ampliaram a diversidade de exploração econômica do campo, de maneira que a coexistir outras formas de renda paralelas às tradicionais produções agropecuárias. Por isso, na discussão que se encontra a seguir, destaca-se, mais uma vez, o desenvolvimento de valores e forças inéditas em relação ao camponês e sua forma de produtividade.

Se no período colonial havia influências de grandes proprietários de terras nacionais, esse cenário sofre leve alteração ao deslocar a posse para um processo de internacionalização. Em outros termos, o século XXI desencadeia efeitos no mundo rural brasileiro que transcendem, em partes, as fronteiras nacionais de produção agroalimentar. Assim, a financeirização e a internacionalização do segmento agroalimentar causa novas conjunturas locais, de forma a tensionar alterações na vida camponesa, além de consolidar disparidades existentes ao passar dos anos.

A internacionalização agroalimentar do século XXI e seus efeitos no Brasil

O setor rural brasileiro, em especial o segmento agroalimentar, tem sido alterado a partir da intensificação dos processos de internacionalização e financeirização, sobretudo a partir das crises financeira, energética e dos preços dos alimentos ao longo do século XXI. Essas modificações tornou o sistema global agroalimentar um mercado financeiro, segundo Clapp (2014), atraente para atores capitalistas transnacionais interessados no agronegócio. Com isso, novos conceitos (e/ou categorias) passaram a ter seus sentidos atualizados e rediscutidos, a exemplo da renda da terra (Rubio, 2014).



As alterações socioeconômicas desencadeadas pelo capitalismo, em particular a liberalização econômica e especulação do mercado de capitais, desencadeou transformações no cenário agroalimentar. Com os preceitos fordistas de aumento da produtividade agroalimentar, a busca por lucros e acumulação de capital expandiu-se suas fronteiras nacionais, com o alcance global na relação entre mercados financeiros, empresas e produtores (Clapp, 2014). Para Epstein (apud CLAPP, 2014, p. 3, tradução nossa), a financeirização está relacionada à “importância dos mercados financeiros, motivações financeiras, instituições financeiras e elites financeiras no funcionamento da economia e suas instituições governantes, tanto a nível nacional como internacional”.

Com isso, esse processo de financeirização contou com atores corporativos em escala internacional. Ou seja, em termos empíricos, investidores de um país estão aptos a fomentar e influenciar no sistema de produção agroalimentar de outro país. Na visão de Clapp (2014), a agricultura tornou-se suscetível à especulação e à manipulação do mercado financeiro. Assim, bancos, empresas multinacionais e acionistas interessaram-se nos proventos desse nicho mercadológico. Além de atraente, esse segmento, tomado em escala internacional, cria suas próprias regras comerciais, às vezes obscuras e descomprometidas com interesses sociais e sustentabilidade dos recursos naturais (Clapp, 2014).

A crescente importância do mercado de capital no agronegócio fortaleceu o regime de acumulação financeirizada. Na visão de Balestro e Lourenço (2014), entre 1940 e 1970, era rigorosa a regulação dos preços e do comércio agrícola. Diante dos “limites estruturais impostos ao crescimento da produção e do consumo (seja por questões ambientais ou questões de mercado)” (Balestro; Lourenço, 2014, p. 251), o foco no desempenho do mercado financeiro adquiriu prioridade em relação ao mercado real. Esse distanciamento entre produção real e investimento financeiro ocorreu, segundo Clapp (2014), em razão do maior número e variedade de atores envolvidos na cadeia produtiva agroalimentar global. Assim, busca-se a lógica “vender primeiro, plantar depois”.

O descompasso entre a real produção e a liquidez financeira gerada a partir de sua comercialização desencadeia volatilidade no mercado de commodities e nos preços dos alimentos. Diante dessa conjuntura, a terra assume um papel essencial no “funcionamento estrutural do capitalismo” (Rubio, 2014, p. 129, tradução nossa). Em meio ao aumento internacional dos preços de comercialização desses produtos e à



incessante busca pela redução dos custos de produção, impôs aos produtores rurais a aceitação de valores abaixo da tendência internacional. De acordo com Rubio (2014, p. 134, tradução nossa), a desvalorização na valorização prejudicou os produtores que enfrentaram altos custos e beneficiaram “as grandes empresas comercializadoras, as quais pagaram internamente preços baixos e venderam aos preços internacionais”.

O caráter inédito desse fenômeno, segundo Rubio (2014), está relacionado ao capital investido em terras distantes do país de origem dos investidores, com o objetivo prioritário de valorizar-se. Além do Brasil, outros países da América Latina como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai recebem investimentos e comercializam terras com outras nações de outros continentes, a exemplo da China e da Índia (Rubio, 2014). Essa estratégia de promover a renda da terra está intimamente conectada ao processo de financeirização, uma vez que serve de medida preventiva para conflitos bélicos e potenciais bloqueios comerciais no contexto geopolítico.

Essa modalidade de obtenção, especulação e manipulação da renda da terra fortalece as grandes empresas agroalimentares e exclui os pequenos produtores agrícolas, geralmente, membros de uma mesma família. Nesse sentido, Rubio (2014) destaca o risco dessa conjuntura para a soberania alimentar tendo em vista a produção de alimentos básicos da produção de alimentos básicos, como milho, arroz e outros cereais. Ressaltam-se as contribuições de Amartya Sen (Sen, 1999), ao propor que simplesmente o crescimento e desenvolvimento econômico não asseguram a satisfação das necessidades básicas da humanidade. Por isso, a atuação mercadológica deveria respaldar-se em transações éticas, com respeito aos contratos comerciais, ao meio ambiente, à diversidade cultural das sociedades e à promoção das liberdades individuais do ser humano.

Além de Sen (1999), Wilkinson (2015) também evidenciou a necessidade de valores éticos para o mercado agroalimentar. A financeirização de terra e da produção agroalimentar, por vezes, subordina “a dinâmica do mercado aos direitos e capacidades humanos, animais e naturais” (Wilkinson, 2015, p. 10). Um dos aspectos visíveis da ausência de ética na financeirização agroalimentar diz respeito a condições de trabalho rural análoga ao trabalho escravo (Leão, 2016). Diante do exposto, organizações não governamentais, associações civis, Estados e organizações internacionais precisam envidar esforços para conciliar interesses multilaterais na busca pela produção



agroalimentar ambientalmente sustentável, eticamente atuante e socialmente responsável.

Em meio à reconfiguração da geopolítica internacional, o camponês, no extremo da linha de produção, pouco impacta modificações na conjuntura de poder sobre o mundo rural. Com reduzida capacidade de força internacional frente aos conglomerados agroalimentares, os camponeses procuram unir-se na helênica luta pelo direito à terra e à diversidade da produção agrícola. A monocultura, desde a formação da sociedade agrária brasileira, ainda permeia os espaços rurais, com ênfase na produtividade e lucratividade.

Conforme discutido nesta pesquisa, houve reconfigurações entorno do campesinato brasileiro, a exemplo das novas estratégias de exploração econômica do mundo rural. Apesar disso, alguns aspectos permanecem constantes ao passar dos anos, como a produção agroalimentar latifundiária agroexportadora. Os novos rumos, ainda incertos, sugerem, de um lado, o surgimento de novas estratégias econômicas, no entanto, por outro lado, sinalizam a permanência dos embates acerca do acesso democrático à terra.

Considerações finais

A formação da sociedade rural brasileira, em análise nesta pesquisa, teve como pilares a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo. Como substrato desses pilares, encontrava-se a massa de operários rurais, prestadores de serviços, diaristas, posseiros, meeiros, arrendatários e muitos outros representantes do campesinato brasileiro atuantes em trabalhos incertos, sazonais e ocasionais. As relações de poder, por conseguinte, foram estruturadas no campo, de maneira a estabelecer suas correspondências e equivalências para o meio urbano.

Processo em constante aprimoramento, os estudos sobre a sociologia rural revelam as transformações do mundo rural brasileiro ao passar dos séculos. Assim como predominou nos países capitalistas centrais, ocorreu a partir de alterações em diversos setores, sobretudo as modificações no Estado, na propriedade privada e nos direitos e deveres sociais dos indivíduos. Embora a temática envolva extensa e complexa discussão, foram apresentados aqui aspectos dessa conjuntura capitalista, de modo a destacar suas repercussões na sociedade rural brasileira.

Permeado pela busca da consciência das raízes herdadas, ao brasileiro são atribuídos os esforços para adotar uma postura reacionária para transformação de sua realidade.



Em associação com outros atores e instituições, as alterações sociais ora ocorrem de modo estrutural, ora se manifestam pela impulsão de interesses particulares, sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Ou seja, o mundo rural brasileiro não é inteiramente cúmplice de um destino histórico fadado ao insucesso e permeado por relações de poder dominadas pelos latifundiários. Na condição de atores políticos, os camponeses detêm meios de alterar sua realidade historicamente herdada, por menor que seja a margem de manobra.

Nesta pesquisa, foram apresentadas, em síntese, os arranjos relacionados ao campesinato brasileiro na perspectiva de exploração econômica do mundo rural. Conforme discutido, parte desses aspectos se mantêm ao longo dos séculos, a exemplo da produção agroalimentar latifundiária agroexportadora. Ainda volátil e incerto, o futuro do campesinato brasileiro sinaliza contar com o aparecimento de novas estratégias econômicas, de um lado, ao passo que se conservem as seculares lutas entorno do acesso democrático à terra, por outro lado.

Notas

¹ Professor do Departamento de Secretariado Executivo, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), e Discente do Programa de Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). rennercma@gmail.com.

² Administradora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e especialista em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF). ingrid.miranda.ufrj@gmail.com.

Referências

- Balestro, M. V.; Lourenço, L. C. B. (2014). Notas para uma análise da financeirização do agronegócio: além da volatilidade dos preços das commodities. 241-266. In Buainain, A. M.; Alves, E.; Silveira, J. M.; Navarro, Z. (Eds.). (2014). *O mundo rural no Brasil no século 21: a formação de um novo padrão agrário e agrícola*. Brasília: Embrapa. Recuperado de https://www3.eco.unicamp.br/nea/images/arquivos/O_MUNDO_RURAL_2014.pdf.
- Candido, A. (2010). *Os parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meio de vida*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul.
- Cardoso, C. F. S. (2004). *Escravo ou camponês?: o protocampesinato negro nas Américas*. 1ª reimp. 1ª ed. São Paulo: Brasiliense.



- Carneiro, M. J. (Org.). (2012). *Ruralidades contemporâneas: modos de viver e pensar o rural na sociedade brasileira*. Rio de Janeiro: Mauad, FAPERJ.
- Carvalho, J. M. (1997). Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual. *Dados*, Rio de Janeiro, 40(2). Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581997000200003>.
- Clapp, J. (2014). Financialization, distance and global food politics. *The Journal of Peasant Studies*, 41(5). Recuperado de <https://bit.ly/30OxMyl>
- Delgado, N. G. (2010). O papel do rural no desenvolvimento nacional: da modernização conservadora dos anos 1970 ao Governo Lula. In Bruno, R.; Moreira, R. J. (Orgs.). (2010). *Dimensões rurais de políticas brasileiras*. Rio de Janeiro: MAUAD X; Seropédica: EDUR.
- Fiúza, A. L. C.; Pinto, N. M. A.; Nascimento, P. F. (2012). As contribuições de Placide Rambaud para a aplicação da distinção conceitual entre campo/rural e cidade/urbano. *Raízes*, 32(1), 45-54.
- Freyre, G. (2005). *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 50ª ed. ver. São Paulo: Global.
- Holanda, S. B. (1995). *Raízes do Brasil*. 26ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
- Leal, V. N. (2012). *Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil*. 4ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.
- Leão, L. H. C. (2016). Trabalho escravo contemporâneo como um problema de saúde pública. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(12), 3.927-3.936, dez. Recuperado de <https://bit.ly/30LlIxN>
- Lefebvre, H. (2002). *A revolução urbana*. 1ª reimp. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Martins, J. S. (1981). *Os camponeses e a política no Brasil - as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político*. Petrópolis: Vozes.
- Mello e Souza, L. (1982). *Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII*. Rio de Janeiro: Edições Graal.
- Petrone, M. T. S. (1984). *O imigrante e a pequena propriedade (1824-1930)*. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense.
- Prado Jr., C. (1961). *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. 6ª ed. São Paulo: Brasiliense.
- Queiroz, M. I. P. (1973). *O campesinato brasileiro: ensaios sobre civilização e grupos rústicos no Brasil*. Petrópolis: Vozes.
- Rambaud, P. (1969). *Société rurale et urbanisation*. Paris: Ed. du Seuil.



Rubio, B. (2014). Resurge la renta de la tierra? La revalorización de los bienes agropecuarios y su impacto en América Latina. *Revista Análisis Latinoamericano del Medio Rural (ALASRU)*, 10, out., 127-146. Recuperado de <https://bit.ly/3lvqtDS>

Swarcz, L. M. (1995) *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870/1930*. 6ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras.

Sen, A. *Sobre ética e economia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

Williams, R. (1989). *O campo e a cidade na história e na literatura*. São Paulo: Companhia das Letras.

Wilkinson, J. (2015). Food security and the global agrifood system: ethical issues in historical and sociological perspective. *Global Food Security*, 7, 9-14. Recuperado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912415300201>.



Histórico e transformações da agricultura: Um estudo na comunidade de Rodagem, LAPÃO-BA

Maria Lúcia da Silva Sodré
José Fernando Gaspar

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo compreender os sistemas de produção desenvolvidos ao longo da história na Comunidade de Rodagem, entre 1970 até os anos de 2018, e, as transformações ocorridas. A comunidade tem a produção agrícola como base de sustentação de sua população. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, através do método de estudo de caso. Os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontaram para uma agricultura de base familiar apresentando três momentos distintos nas transições das práticas agrícolas. O primeiro momento compreendido entre 1949 até 1970 apontou para uma diversificação de cultura cultivada com ferramentas simples, manual e tração animal, o segundo momento de 1970 até 1990, retratou uma agricultura mecanizada priorizando o cultivo de apenas três culturas (feijão, milho e mamona) e o terceiro momento de 1990 até 2018, devido à irregularidade e diminuição das chuvas na região, traduziu uma agricultura irrigada com a utilização de sistemas de irrigação e mecanização do solo com ferramentas ainda mais avançadas. Estes resultados levaram a concluir que os processos produtivos na comunidade possuíram várias etapas diferentes nas formas de trabalho e nas ferramentas utilizadas, contudo, percebeu-se que se não houver uma mudança imediata no modo de trabalho atual, sobretudo, dos que detêm as maiores propriedades, riquezas e tecnologias, pode ocorrer um esgotamento dos recursos naturais que pode impossibilitar a geração de emprego e renda provenientes da atividade agrícola, sobretudo, de base familiar, para a população atual e para as gerações futuras.

Palavras-chave

Agricultura familiar. Irrigação. Sistema de produção. Esgotamento de recursos naturais. Tecnologia.

Introdução

A Comunidade de Rodagem, objeto deste estudo, está localizada na zona rural do município de Lapão, no território de Irecê, e, fica a 517 km de Salvador a capital do Estado da Bahia. A base de sustentação de sua população sempre foi a produção



agrícola. No entanto, as práticas agrícolas passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Tais mudanças acompanharam um modelo desenvolvimentista imposto pela revolução verde.

O fato da Comunidade de Rodagem está localizado na região semiárida com uma vegetação de bioma exclusivamente brasileiro - Caatinga, e com poucas chuvas anuais, se faz necessário destacar que as práticas agrícolas da comunidade de Rodagem deveriam ser pautadas em processos conservacionistas, devido à fragilidade de seu ecossistema e possibilidades de esgotamento de seus recursos naturais rapidamente. No entanto, foram percebidos, em observações in loco, e, a partir de relatos de moradores daquela localidade, grandes problemas relacionados a esta temática.

Assim, a escolha da localidade para o estudo deve-se também ao fato de a mesma apresentar um alto índice de exploração dos recursos naturais, demonstrando através de suas práticas de cultivo que os recursos naturais são infinitos, à medida que cada vez mais poços são abertos sem o devido controle dos órgãos de fiscalização competentes, sinalizando inúmeros problemas.

Nesse cenário, o objetivo deste trabalho foi compreender os sistemas de produção desenvolvidos ao longo da história na Comunidade de Rodagem, entre 1970 até 2018, e, as transformações ocorridas.

Percurso metodológico

O trabalho parte de uma abordagem qualitativa para compreensão do histórico e das transformações da agricultura na comunidade de Rodagem do município de Lapão-Ba. Para a efetivação do estudo foi desenvolvida, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica sobre o tema estudado para embasamento teórico. Para a obtenção dos dados empíricos foi realizada uma pesquisa de campo onde foram aplicados como instrumentos de coleta dos dados, entrevista semiestruturada.

A amostra para desenvolvimento do estudo teve um recorte temporal e geracional, assim divididos: a primeira parcela foi composta por 10 produtores que desenvolveram suas atividades desde 1949 até a década de 1970, portanto, os que possuem conhecimento sobre as formas iniciais de trabalho praticadas naquela comunidade, estes agricultores, são maiores de 60 anos. Foram entrevistados também 10 produtores que cultivaram de 1970 até 1990, que estão em uma faixa etária variando entre 39 e 59 anos, e, finalmente 10 produtores os quais desenvolveram suas atividades na



agricultura a partir de 1990 até o início do ano de 2018, portanto, produtores que compõem o grupo de entrevistados mais jovens que desenvolveram suas atividades produtivas, totalizando uma amostra de 30 entrevistados, representando 10%.

Cabe destacar que, os produtores que estão na amostra representados pelos anos de 1970 até 1990, e, àqueles a partir de 1990 continuam desenvolvendo os trabalhos produtivos no campo e contribuíram com informações importantes das formas atuais de trabalhos para esta pesquisa.

As entrevistas foram as responsáveis por coletar as informações sobre a localidade, formas de produção e trabalho, tipos de mercados, questões ambientais, entre outros questionamentos que contribuíram para o alcance dos objetivos desta pesquisa e, também, podem servir de referências para outros estudos, e, contribuir para ações na localidade, a partir da interpretação dos resultados, e, compreensão do universo estudado.

A abordagem qualitativa permitiu descrever, compreender através do diálogo entre os objetivos propostos e os resultados de campo atribuindo a eles significados à luz da teoria.

Resultados e discussões

Características da Comunidade e perfil dos agricultores

A formação da comunidade de Rodagem iniciou-se, a partir do ano de 1949, com a chegada das primeiras famílias naquelas terras em busca de um lugar de solo fértil para o cultivo de plantas e criação de animais. Cabe salientar que, ainda com toda riqueza proporcionada pela biodiversidade, com condições adequadas de relevo e, terras muito férteis, com ótimas condições de produção, esta localidade, trata-se de uma comunidade, como as demais do semiárido, que lidam com os efeitos das secas (Santos, 2010, p. 464).

Os resultados da pesquisa demonstraram que 40% da população que constituiu a comunidade vieram de municípios do território de Irecê, 30% do centro norte baiano da Chapada Diamantina (Seabra e Iraquara), estes representam os primeiros moradores da comunidade. Os outros 30% que compõem a amostra vieram de fazendas vizinhas à localidade. A pesquisa ainda identificou habitantes que chegaram do norte da Bahia e de outros estados como da Paraíba e Pernambuco, chegada que coincidem com o auge da produção de e feijão, milho e mamona da região em 1970.



Este período inicial de alta produtividade de grãos na região foi atrativo para pessoas de vários lugares “tentar a sorte”, na produção, nos tratos culturais e na colheita dos grãos, onde muitas destas pessoas adquiriram terras, construíram suas casas e constituíram famílias e permanecem na localidade até os dias atuais contribuindo para as formas de produção e tradições com técnicas e costumes trazidos de seus lugares de origem.

Os resultados de campo ainda demonstram que os produtores que representam a população mais jovem são todos originários da própria comunidade, filhos dos moradores mais antigos.

Atualmente a comunidade é composta de 255 famílias com média de 4 pessoas, chegando a um total de 1.020 habitantes, que em sua grande maioria são produtores agrícolas. Os dados ainda revelam que estas famílias possuem em média 15 hectares de terras, em um intervalo entre 5 a 20 ha que soma 66,6% do total onde parte destas terras foi recebida como herança e outra parte adquirida através de compras.

Cabe ressaltar que, Lapão onde está localizada a comunidade de Rodagem, tem como medida para um módulo fiscal 65 hectares, ou seja, os agricultores entrevistados possuem menos de um módulo fiscal.

O campo destacou também que, no núcleo familiar, há em média 4 pessoas trabalhando nessa área entre homem, mulher, filhos, netos, genros e noras, garantindo dessa forma, a transferência do conhecimento das pessoas mais experientes com as atividades do campo para a população mais jovem, geração de renda estimulando o jovem a viver da produção agropecuária, sobretudo na tentativa de dar continuidade à permanência da família no meio rural, através da sucessão familiar.

Formas de produção e trabalho

A pesquisa demonstrou que a agricultura praticada inicialmente na comunidade era desenvolvida com ferramentas simples, sendo elas de uso manual, como: facão, foice, enxada, cuia de cabaça, chucho (pedaço de pau pontiagudo), máquina de plantar. Em poucos casos, ferramentas de tração animal, como o arado de boi, riscador e a capinadeira. Estas, empregadas sempre em pequenos roçados onde era plantada uma diversidade de culturas, como: milho, melancia, abóbora, jerimum, mandioca, aipim, arroz e vários tipos de feijões como: andu, feijão de arranca, feijão de corda, mangalô e fava.



Ou seja, todo o alimento que a família precisava era cultivada na mesma área e servia basicamente para o sustento familiar, para a troca com os vizinhos por outros produtos, a venda de uma pequena parte para suprir algumas necessidades que a produção do roçado não atendia, e, também guardava sementes garantindo o plantio do próximo período de chuva, conservando assim, um banco genético de variedades resistentes e adaptadas ao clima da região semiárida.

Com o expressivo desenvolvimento da cultura do algodão e dos excelentes resultados obtidos com o cultivo do feijão, milho e mandioca, houve um despertar do interesse no potencial das terras de toda região. Atraindo dessa forma, investimentos governamentais, o que gerou grandes modificações nas atividades agrícolas, provocando outra estruturação agrária para dinamizar a nova fase de produção, pois as técnicas utilizadas até então não possibilitavam expandir a área de plantio para o modelo de produção agrícola imposto pelo regime militar entre 1964 e 1985 (Codes, 2010, p. 23).

A partir desse período, combinando os movimentos de estímulo a “modernização” e a expansão do capital agrícola com instalações de agências financiadoras de crédito na região, entrando de vez na rota agrícola, com os negócios de insumos, máquinas e implementos. Resultando no aumento do desmatamento e da mecanização do solo através dos incentivos da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, que passam a alugar tratores por preços acessíveis e financiar outros implementos agrícolas para implantação do chamado tri-consórcio: feijão-milho-mamona. Atraindo muitos migrantes para a região, em especial, pessoas do agreste e sertão de Pernambuco e Paraíba (Santos; Rio Filho; Sousa, 2008, p. 6).

A pesquisa de campo mostrou também que, posteriormente estes agricultores que constituíram a comunidade e outros que chegaram do norte baiano e de estados como Paraíba e Pernambuco iniciaram uma nova forma de cultivar a terra. Substituindo uma agricultura diversificada praticada em pequena escala e voltada basicamente para a produção de alimentos para a família, por uma agricultura com apenas três culturas (feijão, milho e mamona) em áreas maiores utilizando técnicas mais sofisticadas, máquinas, implementos e insumos externos à propriedade.

Houve a introdução de máquinas como o trator e vários equipamentos de manejar a terra, como: arado, grade, cultivador, plantadora e debulhadora. Segundo relato de campo dos produtores, estes equipamentos foram muito importantes para diminuir a



carga de trabalho dos agricultores que antes eram feitos todos de forma manual, um dos entrevistados afirmou que “o trator serviu para diminuir a carga de trabalho, que antes era feito quase todo manualmente, com as máquinas, hoje o trator faz quase tudo” (Entrevista N° 12).

Alguns agricultores também relataram que o trator serviu para aumentar a área plantada e a renda da família, e principalmente não perder a umidade da terra no período do plantio, “plantar um pouco mais e aproveitar o molhado” (entrevista N° 14), esta observação é importante, já que a comunidade está localizada na região semiárida com chuvas irregulares e por um período curto. Alguns agricultores também relataram que o trator serviu para aumentar a área plantada e a renda da família, e principalmente não perder a umidade da terra no período do plantio, “plantar um pouco mais e aproveitar o molhado” (entrevista N° 14), esta observação é importante, já que a comunidade está localizada na região semiárida com chuvas irregulares e por um período curto.

O trabalho de campo também revelou que a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Rodagem-ACOPAR, fundada em 11 de maio de 1985, teve participação fundamental nessa nova forma de praticar agricultura na comunidade. Foi responsável pela compra dos primeiros tratores e equipamentos para preparar o solo, plantar e colher a produção dos associados conseguindo fazer o serviço por um preço 10% a menos que os tratores de fora da comunidade e ainda organizar a comercialização dos produtos via cooperativa.

Quando questionado se estas mudanças na forma de trabalho foram importantes para a agricultura, todos os produtores acharam que sim, no entanto alguns dos entrevistados ressaltaram que a máquina tomou alguns postos de serviços antes ocupados pelo homem, como afirmou o entrevistado: “para muitas coisas não foram importante, as pessoas precisavam trabalhar e a máquina ocupou esse espaço, mas por outro lado foi beneficiado por ter uma maior rapidez no trabalho” (Entrevista N° 19).

Os agricultores relatam que no início desse processo de modificação das práticas de agricultura, houve ótimos resultados, devido à disponibilidade dos recursos naturais acumulados há muito tempo no sistema ecológico local. Situação essa que levou “o território de Irecê a passa a ter destaque no cenário nacional a partir dos anos de 1970 recebendo o título de capital do feijão” (Santos; Rio Filho; Sousa, 2008, p. 9).

Os produtores de Rodagem relataram que, quando começaram a plantar o feijão o milho



e a mamona na comunidade houve uma enorme produção, destacando que era colhido de 8 a 10 sacos. O que fez com que os preços dos produtos baixassem muito devido à grande oferta no mercado local. A alternativa era se organizarem na Associação Comunitária que possui grandes depósitos construídos com recursos da Companhia de Ação Regional-CAR, onde era armazenada a produção e posteriormente entregue a Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê- COOPIRECÊ, que pagava pelo produto o preço do dia que estava no mercado.

A COOPIRECÊ armazenava o produto na Cibrazem-Companhia brasileira de armazenamento, atual CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento, e depois distribuía para todo o país. Por sua vez ela repassava as sobras para os agricultores quando conseguia melhores preços pelo produto, como afirmou o entrevistado: “a Cooperativa de Irecê comprava o feijão e vinha buscar na porta do produtor e armazenava na Cibrazem, que quando o produto subia de preço esse aumento era devolvido para o produtor” (Entrevista N° 21).

Ainda possuíam os agricultores que vendiam em menores quantidades para atravessadores na própria comunidade ou nas feiras livres da região. Mercado esse que permaneceu durante o declínio da produção de grãos e ainda permanece como estratégias de comercialização até os dias atuais.

Com o passar do tempo, práticas agrícolas inadequadas para aquele ecossistema, como a utilização de máquinas pesadas, implementos e tratores culturais associadas às modificações causadas pelo desmatamento, houve uma redução drástica na produção, e “em 1980, por exemplo, a produção de feijão foi de 77.000 t e caiu para 2.200 t em 1984; a lavoura de mamona que foi de 39.000 t em 1980 caiu para 20.000 t” (Moura, 1997, p. 11).

Redução essa que ocorreu continuamente a cada ano, até não produzir praticamente nada, que segundo os agricultores essa redução foi provocada pela falta e irregularidade das chuvas na região. No entanto, outros agricultores que plantam de sequeiro (expressão utilizada pelos agricultores para o plantio feito no período chuvoso) afirmaram que estão acostumados a perder a lavoura, mas estão sempre plantando no período das chuvas tentando alguma colheita.

No entanto, a grande maioria dos agricultores da comunidade revelou ter abandonado o plantio do feijão e do milho de sequeiro para a comercialização ou até mesmo para o



consumo, como apontado na entrevista: “já cheguei a planar até 45 sacos de feijão e depois fui diminuindo e hoje está em zero” (Entrevista n°4), e, assim, permanecendo apenas com o plantio da mamona em áreas menores, cultura resistente à seca e que produz o ano todo, “houve grande mudança de 80 para cá, as coisas estão ruim, tem 15 anos que não planto feijão” (Entrevista n° 27).

Justificando a escassez e a irregularidade das chuvas na comunidade de Rodagem, fato que leva o aumento da incerteza da colheita com o que se plantava, uma vez que só poderiam confiar nas águas das chuvas, os agricultores passaram a introduzir estratégias estabelecendo outra forma de produzir a partir de 1990, que foi através da irrigação.

Assim, se valendo de tecnologias ainda mais avançadas, como perfuração de poços, retirada das águas subterrânea e utilizando na irrigação através de sistemas fornecido pela CAR. Mais uma vez, a área da associação comunitária serviu de base para início dessa nova forma de trabalho. “A irrigação iniciou a partir de 1990 com a associação. Lá foi o berço da irrigação e quase todos os produtores aprenderam lá e expandiu para suas propriedades” (Entrevista n° 14), ressaltou o campo.

Com a entrada da agricultura irrigada na comunidade, o cultivo das culturas tradicionais na época das chuvas como o feijão, milho, e a mamona, continuou mesmo como atividade secundária em áreas bem menores que antes, mas vale destacar que, estas foram basicamente para o consumo da família. Porém os agricultores passaram a desenvolver cultivos durante o ano todo com a irrigação, já que o plantio não depende das chuvas, e sim das águas retiradas do subsolo. Metodologia de trabalho que garante uma colheita com no máximo 4 meses. As principais culturas, citada na lavoura irrigada são cenoura, beterraba, cebola e o tomate.

Os produtores trabalham o ano todo com a irrigação e quem não é produtor pode trabalhar como mão de obra na roça do vizinho. Existem também as sobras da cultura para alimentação dos animais. Podendo cultivar parte para alimentação da família em qualquer data do ano com a irrigação, deixando de comprar frutas e verduras produzidas na propriedade. Estas modificações ocorridas nas formas de trabalho foram vistas pela população como muito positiva, pois segundo eles o que se plantava antes da irrigação não estava produzindo ou produzia bem pouco, com a irrigação modificou tudo. Houve a introdução de novas ferramentas no campo, a exemplo de subsolador, sulcador, enxada rotativa, plantadora simples e de precisão, pulverizadores costal manual, costal



mecanizado e a jatos mecanizados através de trator.

Com os novos sistemas de irrigação como microaspersores, gotejamento, pivô central e a utilização de fertirrigação na aplicação de fertilizantes e agroquímicos, as entrevistas apontaram que, estes serviram para acelerar ainda mais os trabalhos, diminuindo a carga do trabalhador, mas, também a redução da geração de novos postos de trabalhos no campo.

É característico na microrregião o desenvolvimento de uma agricultura de pequenas unidades de produção familiares mecanizadas e irrigadas através de poços artesianos. Os lotes disponíveis para o cultivo situam-se na sua grande maioria em torno de 10 a 20 ha, sendo utilizadas técnicas díspares nos seus respectivos manejos, pois ao tempo em que se observa a utilização de técnicas rudimentares como a enxada, constata-se a utilização de técnicas mecanizadas, como o uso do trator e da irrigação, através de Pivô Central. Assim, “[...]. as técnicas de cultivo, portanto, são bastante diversificadas, onde a prática de sequeiro é feita através da plantação do feijão, ao lado da irrigação, através da cenoura, beterraba, dentre outras culturas que demandam maiores tratamentos culturais” (Couto et al., 2006, p. 4)

Para a comunidade em si, houve muitos avanços, principalmente no período de estiagem com a geração de trabalhos e renda, o que possibilitou as pessoas construírem casas melhores e mais confortáveis, proporcionar uma educação melhor para os filhos e adquirirem automóveis. Utilização de novas tecnologias no campo melhorando a qualidade de vida das pessoas, permitindo a produção mais diversificada de alimento para a mesa da população.

Os produtores ainda revelaram que não recebem acompanhamento técnico continuado, apenas orientações das casas que comercializam os produtos como na utilização de implementos agrícolas, sementes, agroquímicos, e nos sistemas de irrigação. Enfatizado pela entrevista, afirmando que “os filhos já entendem das plantações e quando precisa procura o agrônomo das casas de materiais de irrigação” (Entrevista n°4).

Alguns revelam que houve acompanhamento em programas de estímulo ao plantio da mamona com o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, com distribuição de sementes e acompanhamento técnico ao desenvolvimento da cultura da mamona.



Outros afirmaram que receberam acompanhamento técnico do Centro de Assessoria do Assuruá-CAA por certo período. Afirmaram também que a instituição bancária quando financia alguns projetos também faz o acompanhamento na implantação do mesmo. Mas que, não há um acompanhamento técnico permanente e continuado aos produtores.

Nesse novo período, ou seja, a partir dos anos 1990 aos anos de 2018, parte da população local que não planta no sistema irrigado, trabalha na irrigação do vizinho nos tratos culturais e na colheita e também passou a desejar perfurar um poço e praticar agricultura irrigada, já que dessa forma possibilita trabalhar o ano todo e com mais segurança de colheita, como é o caso da cenoura irrigada com relação ao cultivo de sequeiro.

Esta realidade, também possibilitou reduzir quase que em 100% o êxodo rural de pessoas que saíam da comunidade em busca de trabalho em outros estados. Assim possibilitando a agregação familiar, como destacada na entrevista “as famílias estão mais juntas, antes o povo viajava muito para São Paulo, Goiás e Minas Gerais e hoje o povo está mais acomodado aqui no lugar” (Entrevista n°4).

No que diz respeito ao destino da produção, todos responderam que uma pequena parte é destinada para o consumo da família e a outra é comercialização na própria comunidade. A Associação continua atuando nessa parte junto ao agricultor com alguns projetos para compra da produção, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, via mercado institucional, comprando o produto por um preço justo e distribuindo para as famílias mais carentes da comunidade e comunidades vizinhas.

Porém a maior parte dos produtos é vendida para atravessadores, que apesar de ser reconhecido como figura importante pelos produtores na compra e no transporte dos produtos, este foi relatado como um dos maiores problemas no momento da comercialização, juntamente com a grande oferta do produto no mercado. Sendo responsável por pagar preços muito baixos e demorar no pagamento do produto. “De acordo com a oferta e a procura, chega a perder o produto na roça, principalmente ofertas de outros estados como Goiás e Minas Gerais” (Entrevista n° 18). O trabalho de campo, ressaltou outro problema que refere-se aos preços pagos pelos atravessadores. “A questão de preços, devido à exploração dos atravessadores baixando os preços, pegando produtos em outros estados” (Entrevista n° 4).



Foram identificados vários problemas relacionados ao ambiente, problemas estes que já vem ocorrendo desde o período do tri-consórcio feijão- milho-mamona, como o desmatamento de quase 100% da caatinga, o que para muitos foi o maior responsável pela diminuição e irregularidade das chuvas, compactação do solo pelo uso excessivo de maquinas e implementos pesados de forma errada, surgimento de pragas e doenças devido o desequilíbrio ambiental ocorrido.

Mais recentemente a utilização excessiva de agrotóxico e principalmente a utilização sem controle das águas subterrânea. Sobre esta questão a entrevista apontou que: “a água que é a mais explorada já está acabando, a mata já acabou tudo! O governo é o culpado, pois financiou todo o desmatamento através dos bancos, o homem não tinha como fazer todo esse desmatamento com uma foice. Tem culpa no esgotamento da água também, financiando a abertura de poços e a instalação através de projetos. Quando deveria criar um projeto para ter um limite na perfuração de poço e no uso da água” (Entrevista n°21).

No entanto, essa nova forma de trabalho através da irrigação apresentou problemas rapidamente através do excesso de perfuração de poços e o rebaixamento no nível das águas subterrâneas devido à falta de controle de uso das águas. Como pode ser também observada na entrevista a baixo: “a irrigação tem um tempo determinado. Um poço que antes era 40 metros, hoje para achar água tem que ser 124 metros e chegar a 180 metros de profundidade. Foi encontrada caverna seca com 10, 26, 34 e 48 metros, antes era tudo passagem de água” (Entrevista n°24).

Contudo, na visão dos produtores, a utilização da irrigação é a única forma de manter suas famílias naquela localidade, produzindo seu próprio alimento e tirando o sustento da terra. Apesar de revelarem que aquela forma de trabalho pode levar o esgotamento dos recursos naturais do local, principalmente com os sucessivos anos com poucas chuvas. Porém, segundo entrevistas, o que realmente ameaça o esgotamento dos recursos naturais naquele local mais rapidamente são os grandes proprietários de terras que estão explorando excessivamente como foi inicialmente com a retirada da vegetação nativa e agora com as águas subterrânea.

Como aponta a entrevista: “até a população atual está ameaçado, se continuar do jeito que tá, terá que ir para outro canto. Tem que parar com a exploração, principalmente os ricos que tem dinheiro e tecnologia para irrigar, tem gente tirando 150.000 litros de água por hora (Entrevista n° 12).



A pesquisa revelou que 24% dos produtores entrevistados trabalham apenas com o plantio de sequeiro, 16% trabalham só com a irrigado e os outros 60% trabalham com agricultura irrigada e o sequeiro, mesmo que tenha que irrigar quando faltar as chuvas. Ou seja, ao todo são 76% destes produtores desenvolvendo agricultura irrigada. No entanto, entrevista ressaltou que, “o pequeno produtor explora o suficiente para sobreviver, está havendo uma super exploração dos grandes produtores” (Entrevista nº 14).

Para o desenvolvimento dessa agricultura irrigada na localidade de Rodagem, os recursos hídricos são provenientes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como principais rios da região o rio Verde e o Jacaré, além do lençol freático existente, contudo a água do lençol apresenta um grande teor de calcário (Couto et al., 2006, p. 3).

Como revelou a pesquisa, a água que é utilizada na irrigação vem dando sinais de esgotamento. Segundo Sobrinho et al. (2012, p. 3) estudos regionais realizados em 2003 e 2005, apontam para um rebaixamento progressivo do nível hidrostático do aquífero com o tempo (0,32 m/ano), associados a uma redução média das chuvas (240mm/ano) no mesmo período, configurando um regime de super exploração desses recursos hídricos subterrâneos. Estão retirando mais água do aquífero do que a natureza repõe por meio das chuvas.

Com base nos dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia/PERH (2004), a reserva reguladora (Rr) na região das Bacias Hidrográfica dos rios Verde e Jacaré onde a precipitação é <800mm/ano é da ordem de 0,56. 109 m³/ano e 23,99. 103 m³/km²/ano; então, para a Bacia Hidrográfica do Riacho do Juá que possui 150 km², a Rr será 3,60. 106 m³/ano, segundo os autores “[...]. Isso quer dizer que, embasado nos dados apresentados, o volume diário de água disponível para uso na citada BH do riacho do Juá é da ordem de 9.858,90 m³/dia; o cadastro demonstrou o uso de volume de água declarado da ordem de 35.963,99 m³/dia, um volume 2,65 vezes maior que a disponibilidade do aquífero” (Sobrinho et al., 2012, p. 3).

Estas informações evidencia um esgotamento anunciado da reserva de água subterrânea desta região, já que está havendo uma retirada de água maior do que é repostada pelas chuvas e conseqüentemente está ocorrendo um rebaixamento do nível da água a cada ano. O que demonstra a insustentabilidade dos sistemas atuais de produção.



Conclusões

O desenvolvimento da presente pesquisa de campo com os produtores de Rodagem possibilitou concluir que os processos produtivos na comunidade passaram por várias etapas diferentes de produção. Sobretudo quando se refere às formas de trabalho, tipo de cultura, ferramentas utilizadas em cada período e os objetivos para com a produção local.

Inicialmente a produção desenvolvida pela população era basicamente para atender as necessidades da família, trocas com vizinhos e garantir sementes para plantios futuros, tudo isso com ferramentas muito simples. Posteriormente essa forma simples de cultivar foi substituída por ferramentas mais tecnicada e um tri-consórcio de feijão, milho e mamona em áreas maiores visando, sobretudo, a geração de capital e outra pequena parte para o consumo da família. Essa produção era comercializada coletivamente através da associação para uma cooperativa visando um mercado com preços mais justo pelo produto e outra parte para atravessadores.

Não obstante, com a redução e irregularidade das chuvas o tri-consorcio feijão-milho-mamona foi substituído por culturas irrigadas como a cenoura, beterraba, cebola, tomate entre outras. No entanto essa nova forma de trabalho exigiu a utilização de recursos naturais já escassos como a água, o que levou uma redução drástica desse bem, ameaçando também essa nova forma de trabalho.

Apesar de perceberem uma redução dos recursos naturais utilizados para se manterem produzindo, estes produtores melhoraram relativamente suas condições de vida. Criaram mecanismos de trabalho coletivo com seus familiares para facilitarem suas atividades diárias no campo, transferindo esta metodologia societária de vivencia e geração de renda para toda comunidade. Entretanto a forma como está ocupada e por quem vem sendo feito a divisão das terras e para quem está sendo distribuída, a detenção dos meios produtivo no campo continuará sendo ocupado pela figura masculina, excluindo a mulher da principal forma de geração de renda da comunidade.

Contudo, se não houver uma mudança imediata no modo de trabalho atual, que demanda perfuração excessiva de poços em busca de água para utilização na agricultura irrigada, sobretudo dos que detém as maiores propriedades, riquezas e tecnologias e que explora de forma exaustiva as águas subterrâneas. O que leva acreditar no esgotamento dos recursos naturais que pode criar impossibilidade à produção de alimento e à geração de emprego e renda para a população atual e as



gerações futuras.

Os sistemas de produção desenvolvidos ao longo da história na comunidade de Rodagem, entre 1970 até os anos de 1918 foi desde uma prática simplificada de agricultura, posteriormente o tri consórcio (feijão, milho e mamona), e logo depois a agricultura irrigada. Devido a essa forma de agricultura praticada na comunidade houveram diversas transformações como por exemplo: o desmatamento, irregularidade e diminuição das chuvas, rebaixamento do nível da água subterrânea e conseqüentemente o esgotamento da água de vários poços.

Enfim, faz se necessário uma mudança significativa nos atuais sistemas de produção desenvolvidos na comunidade no sentido de conscientização quanto ao uso desenfreado dos recursos naturais que necessitam para que haja produção, uma vez que os mesmos estão sendo exauridos pelo uso de maneira inconsciente.

Nesse contexto, conclui-se que o modelo tem sido insustentável, pois embora tenha possibilitado mudanças ao longo dos anos no sistema de produção da comunidade, acarretaram outras conseqüências, sobretudo, para o meio ambiente, como já destacado.

Referências

- Codes - Irecê. Plano territorial de desenvolvimento rural sustentável – PTDRS. Brasília: MDA/SDT. Agosto, 2010. 22-23 p.
- Couto, V. de A. et al. Sistemas de produção familiar no município de Lapão, Bahia. 2006. 26 jul. Pesquisa de um grupo de mestrandos do Curso de Ciências Econômicas, membros do Grupo de Pesquisa em Agricultura Familiar, Universidade Federal da Bahia- UFBA, Salvador, 2006. (mimeo.)
- Moura, A. M.. O impacto da agricultura no crescimento do comércio na cidade de Irecê: análise da década de oitenta aos dias atuais. 1997. 10-12 p. Monografias (Ciências Econômicas) - Universidade Federal da Bahia. 1997.
- Santos, C.; Rio Filho, J.; Sousa, G.. O semi-árido baiano e o agronegócio dos “biocombustíveis”: problematizando a região de irecê-ba (primeiras aproximações). Revista Pegada, Bahia, v. 09 n. 2, p. 6-9, dez. 2008.
- Santos, J. R. A.. Lapão, Cem Anos de Historia. Bahia: Editora Print Fox, 2010. 464-466 p.



Sobrinho et al. Utilização de água subterrânea do aquífero carstíco do município de Lapão/Bahia: análise realizada através dos dados do cadastro de usuários de recursos hídricos do estado da Bahia. Anais... In: XVII Congresso brasileiro de águas subterrâneas, 1., 2012, p. 3.



Configuración del sistema de innovación del cultivo de girasol en México

Angelica Torres Ávila
Jorge Aguilar Ávila
Enrique Genaro Martínez González

Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica del cultivo de girasol en México desde la perspectiva de sistema de innovación (SI), con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de su situación actual y proponer áreas de mejora. A pesar de tener una larga trayectoria en México desde la década de los 70s, el girasol no ha logrado integrarse como un cultivo comercial más amplio. No obstante, las cualidades funcionales y nutricionales del aceite obtenido de híbridos de girasol mejorados han permitido que las industrias lo vean como una opción para la elaboración de alimentos industriales libres de grasas trans, lo cual ha posibilitado su producción en el país durante los últimos años. Para alcanzar el objetivo propuesto, se recopiló información de una amplia variedad de publicaciones e información estadística referentes a esta oleaginosa, publicados durante los últimos 10 años. Adicionalmente se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas a actores clave del SI. La información recabada se ordenó cronológicamente, identificado actores y hechos relevantes, positivos y negativos, que han afectado la trayectoria del cultivo y la configuración del SI. Los principales resultados evidencian que la configuración del SI se ha conducido como un proceso subdesarrollado, caracterizado por una articulación débil de los actores y por la ausencia de actores orientados a la generación de conocimientos locales y no solo encauzados al suministro de recursos materiales. La conformación de alianzas público-privadas impulsadas por algún articulador sistémico podría contribuir al desarrollo del SI, logrando así, un mayor grado de madurez.

Palabras clave

Sistema de innovación, funciones del sistema de innovación, trayectoria, oleaginosas, articulador sistémico

Introducción

El girasol es un cultivo originario de América utilizado principalmente para la extracción de aceite, con uso en industrias alimentarias y no alimentarias. Su semilla tiene un alto contenido de aceite (40% o más), mayor que el de la semilla de soya (18%) (Kleingartner, 2002). Con un 9% de la producción mundial de aceites vegetales en el mundo, el aceite de girasol ocupa la cuarta posición después de los aceites de palma,



soya y canola. La producción de semilla de girasol reportada por la FAOSTAT (2016) es de alrededor de 47 millones de toneladas distribuidas en una superficie de 26 millones de hectáreas, ubicadas principalmente en la región del Mar Negro y la Unión Europea. Rusia, Ucrania y Argentina son los principales productores, concentrando más del 50% de la producción, referidos como el triángulo del girasol.

En el caso de México a pesar de ser considerado posible centro de origen del girasol, este cultivo es introducido. Los primeros intentos para su producción comercial se dieron en la década de 1970, no obstante, se ha mantenido con una superficie marginal e intermitente. En orden de importancia, los principales aceites vegetales producidos en México han sido el de canola, soya, copra y palma. Es de mencionarse que hasta la fecha al menos el 80% de los insumos demandados, aceite crudo y semillas oleaginosas, se importan. En el caso del aceite de girasol, si bien su demanda ha sido inferior con respecto a las demás oleaginosas (menor al 2%), el crecimiento en su consumo ha derivado en importaciones de aceite y semilla de girasol, pues con la producción interna se satisface menos del 10% de los requerimientos nacionales.

Ahora bien, en los últimos años la industria de alimentos ha mostrado interés en la producción nacional de girasol alto oleico para la obtención de aceite, debido a sus cualidades nutricionales y funcionales, siendo una opción para sustituir insumos como el aceite de palma y otros que para su manejo y almacenamiento son sometidos al proceso de hidrogenación, con lo cual se generan grasas *trans* con efectos perjudiciales en la salud (Downs, Thow, & Leeder, 2013). Por tanto, esto representa una oportunidad para el desarrollo de este sistema productivo en México.

En este contexto, el objetivo del trabajo fue analizar la dinámica del cultivo de girasol alto oleico en México desde la perspectiva de sistema de innovación, con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de su situación actual y proponer áreas de mejora.

La literatura actual ofrece varias formas bajo las cuales se puede estudiar un sistema de innovación (Klerkx, van Mierlo, & Leeuwis, 2012). En este sentido, las funciones del sistema de innovación se muestran como un marco pertinente para analizar el proceso de innovación. Mediante este análisis se identifican procesos o actividades clave que son importantes en el desempeño del sistema de innovación y, por tanto, en el éxito o fracaso de las innovaciones (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Rickne, 2008; Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007).



Los investigadores han identificado siete funciones que son importantes para que un sistema de innovación se desarrolle y crezca: creación de conocimiento, difusión de conocimiento a través de redes, actividades empresariales, orientación a búsqueda, formación de mercado, movilización de recursos y creación de legitimidad (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Rickne, 2008; M.P. Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007; Marko P. Hekkert & Negro, 2009).

Metodología

Para alcanzar el objetivo propuesto, se recopiló información de una amplia variedad de publicaciones e información estadística referentes a esta oleaginosa, publicados durante los últimos 10 años. Adicionalmente se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas a informantes clave. La información recabada se ordenó cronológicamente, identificado actores y eventos relevantes, positivos y negativos, que han afectado la trayectoria del cultivo y la configuración del sistema de innovación.

De este modo los eventos identificados se categorizaron en alguna de las funciones del sistema de innovación según fuera el caso. La contribución positiva de un evento al cumplimiento de cualquiera de las funciones se indica en el esquema de asignación mediante un signo positivo (+), mientras que, los eventos que contribuyeron negativamente se les asigna un signo negativo (-). El resultado final del análisis del evento es una narración donde se argumenta sobre cómo los diferentes elementos estructurales y las funciones del sistema de innovación han dado forma al sector productivo de girasol. En el cuadro 1 se proporciona una lista sobre tipo de eventos asociados a cada una de las funciones, los cuales sirvieron de guía para este trabajo.

Función	Tipos de eventos
F1. Actividades empresariales	Participación en proyectos de innovación Inversiones en una nueva tecnología
F2. Desarrollo del conocimiento	Proyectos de investigación científica Publicaciones científicas
F3. Difusión de conocimiento	Actividades de difusión (talleres, cursos, capacitaciones) Redes de información
F4. Orientación de la búsqueda	Documentos de visión compartida Acuerdos entre actores Reclamaciones
F5. Formación de mercado	Desgravaciones fiscales Regulaciones que afectan directamente ciertos procesos de producción
F6. Movilización de recursos	Subsidios Inversiones públicas y privadas
F7. Creación de legitimidad	Actividades lobby Presión pública para resolver un problema

*Cuadro 1. Tipos de eventos como indicadores de las funciones del SI.
Fuente: Elaboración propia, basado en Hekkert et al. (2007), Hekkert & Negro (2009).*



Resultados y Discusión

En la década de 1970 la Unión Soviética inició el programa de mejoramiento genético para aumentar el nivel de ácido oleico en girasol, obteniéndose la primera población mutante con 75% de este tipo de ácido (Soldatov, 1976). La progenie resultante se ha utilizado para producir semillas comerciales de girasol en todo el mundo, alcanzando niveles de hasta 90% de ácido oleico (Salas, Bootello, & Garcés, 2015). A pesar de su desarrollo temprano, el uso de los híbridos comerciales no se extendió hasta inicios del siglo XXI cuando en la década de 1990 se aportó evidencia concluyente sobre los efectos negativos de las grasas trans en la salud. Con estas evidencias pronto varios países empezaron a implementar medidas legislativas respecto al uso de este tipo de grasas en los alimentos (Downs et al., 2013; Monge-Rojas, Colón-Ramos, Jacoby, & Mozaffarian, 2011; World Health Organization, 2018). Estas condiciones incentivaron la búsqueda de alternativas para sustituir a los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, siendo una opción los obtenidos de los cultivos alto oleico. Al igual que con otros países, en México las cualidades funcionales y nutricionales del aceite obtenido de híbridos de girasol alto oleico han permitido que las industrias lo vean como una opción para la elaboración de alimentos industriales libres de grasas trans y saturadas, lo cual ha posibilitado su producción en el país durante los últimos años (Figura 1).

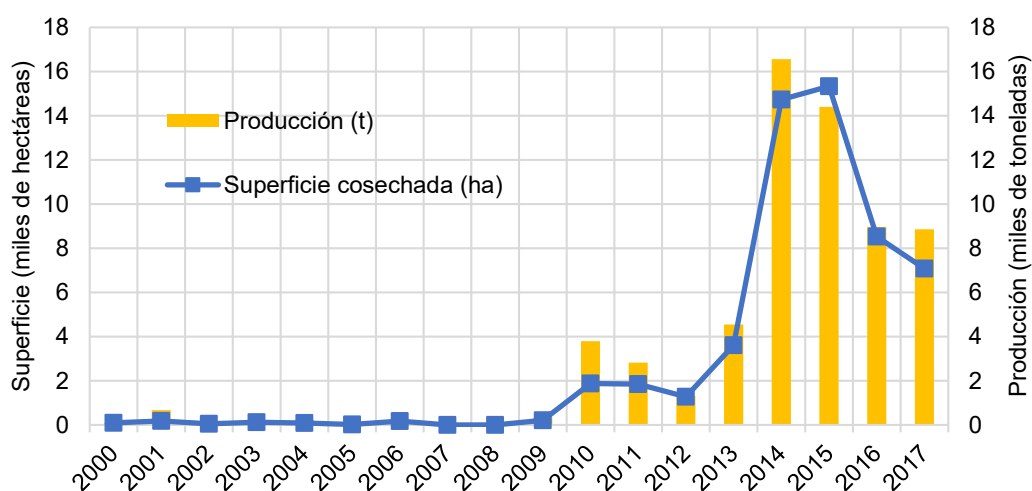


Figura 1. Evolución de la producción de girasol en México.

Para analizar el proceso de innovación desarrollado a partir de la introducción del girasol alto oleico se han identificado las funciones del sistema de innovación, ya que dan una mayor claridad de lo que se ha estado haciendo, quienes están involucrados y las oportunidades de mejora que se tienen.



Funciones del sistema de innovación girasol

En la figura 2 se muestran los eventos más relevantes relacionados con las funciones del sistema de innovación las cuales se detallan a continuación. La demanda de los consumidores por productos más saludables derivado del efecto negativo de las grasas saturadas y grasas trans, las regulaciones que se han implementado respecto a su uso, así como los avances tecnológicos, han incentivado a la industria alimentaria mundial a la búsqueda de alternativas para la producción de alimentos libres de estas grasas [F4-Orientación a búsqueda]. México no ha sido la excepción, se han implementado algunas regulaciones para la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles (Kaufer-Horwitz et al., 2018) y la industria alimentaria ha reaccionado a dichos cambios. Esta situación ha generado un nicho de mercado para la producción de girasol alto oleico en México y el despliegue inicial de varios actores [F5-Formación de mercado].

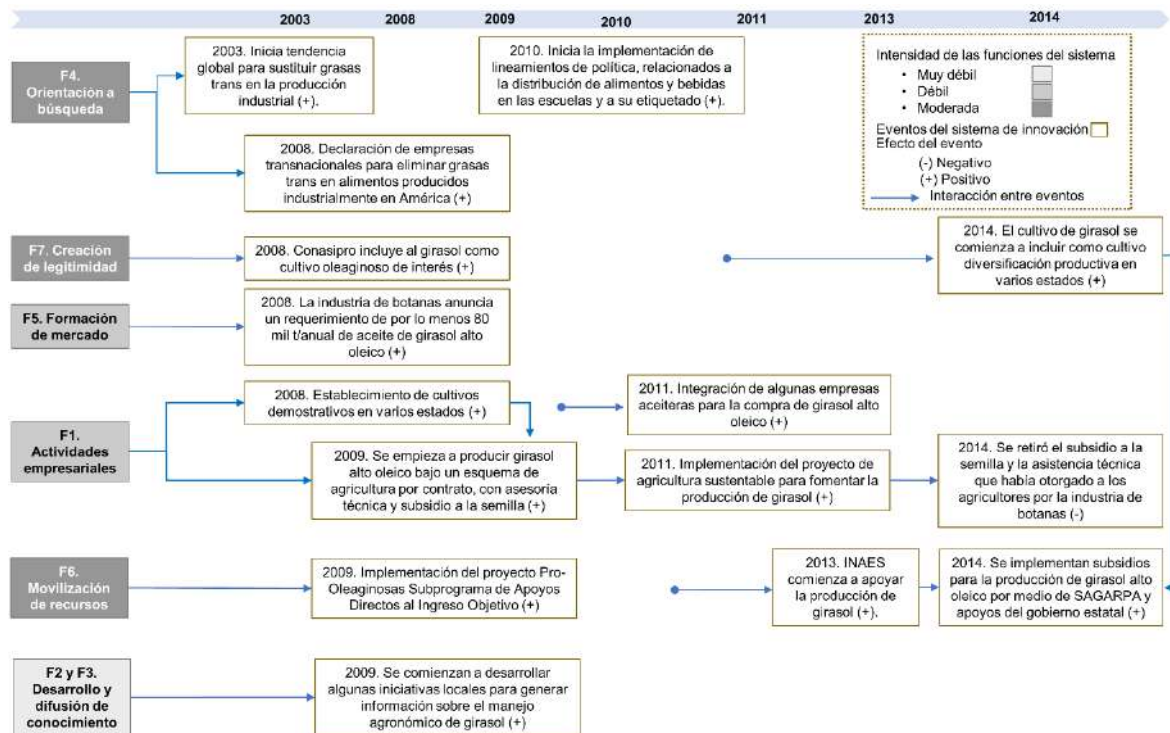


Figura 2. Funciones del sistema de innovación girasol

En este contexto, la industria de botanas se interesó en el aceite de girasol alto oleico para utilizarlo en la elaboración de sus productos (González *et al.*, 2014; Martínez, 2015; PepsiCo, 2010). De este modo, la integración de diferentes actores para impulsar el cultivo de girasol alto oleico ha sido similar en todas las regiones de producción, caracterizado por la intervención de la industria de botanas en colaboración con un proveedor de semillas [F1-Actividades empresariales y F6-Movilización de recursos],



apoyados por el gobierno integrando al girasol como un cultivo de reconversión [F4-Orientación a búsqueda] que ha incluido varios tipos de apoyos económicos y asesoría técnica [F6-Movilización de recursos], así como, la participación de otros actores que han contribuido a la adquisición de maquinaria y equipo y desarrollo de infraestructura [F6-Movilización de recursos]. En algunos estados ha sido importante la participación del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), las Fundaciones Produce, universidades u otros actores para la validación y transferencia de tecnología para el cultivo [F2-Desarrollo de conocimiento].

Problemas sistémicos

Las circunstancias señaladas anteriormente han hecho que el cultivo de girasol se desarrolle en diferentes partes del país en los últimos 10 años. Sin embargo, la producción de 2009 a 2017 ha sido errática y las regiones productoras aún no son consistentes; entre los años 2014 a 2017 pasó de 15,624 a 7,216 hectáreas.

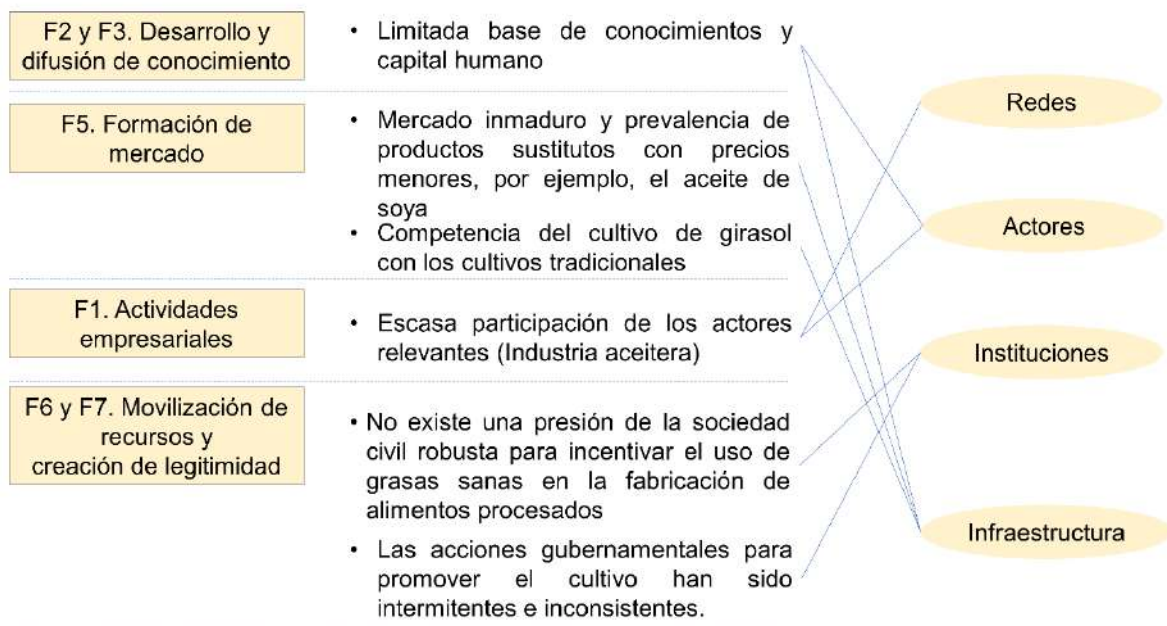


Figura 3. Funciones débiles y bloqueos identificados en el sistema de innovación girasol.

Hasta ahora las funciones desarrolladas únicamente han permitido la introducción de materiales vegetales alto oleico, no obstante, estas funciones no son suficientes para asegurar la continuidad del cultivo. Por tanto, dado que las funciones de un sistema de innovación son resultado de la interacción de los componentes estructurales, su desarrollo deficiente está relacionado a problemas con la presencia y calidad de estos componentes (Wieczorek & Hekkert, 2012). En la figura 3 se indican los principales bloqueos de las funciones del sistema de innovación girasol.



Con respecto a las actividades empresariales y formación de mercado (funciones con una intensidad débil), la participación de la industria de botanas se ha reducido y el involucramiento de la industria aceitera ha sido parcial. Un desafío que enfrenta el aceite de girasol al ganar participación de mercado es que existen varios tipos de aceites bien posicionados y más competitivos, aunque no necesariamente más saludables y funcionales, que dificulta la penetración en el mercado.

Por otro lado, las zonas de producción no siempre están localizadas cerca de la industria de extracción de aceite, lo cual aumenta los costos de movimiento, sobre todo al considerar que el transporte por unidad de volumen se incrementa debido a la baja densidad de la semilla.

Con respecto a las funciones desarrollo y difusión de conocimiento (de intensidad muy débil), existe una serie de restricciones en la producción primaria que deben ser solucionadas. La introducción de girasol alto oleico inició con un nulo conocimiento local respecto al comportamiento de los híbridos importados y el manejo agronómico a seguir. La validación y la transferencia de la tecnología, girasol alto oleico, se ha dado de manera parcial, solo en algunas regiones. El insuficiente conocimiento sobre las prácticas adecuadas ha dado como resultado densidades y fechas de siembra inapropiadas, así como un manejo inadecuado de plagas y enfermedades, lo que resulta en pérdidas de productividad y aumento de costos unitarios de producción.

Adicionalmente, para la siembra y cosecha de girasol es necesario hacer adaptaciones a la maquinaria de la que se dispone o tener implementos específicos para esta semilla, lo cual no siempre se cumple, ocasionando pérdidas al final del ciclo de cultivo.

Conclusión

El objetivo del trabajo fue analizar la dinámica del cultivo de girasol alto oleico en México desde la perspectiva de sistema de innovación, con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de su situación actual y proponer áreas de mejora. A pesar de los esfuerzos para promover el cultivo de girasol realizados por la industria de botanas y la colaboración de otros actores, no se ha podido lograr estabilizar la producción de esta oleaginosa a nivel nacional. La formación y configuración del sistema de innovación para apoyar el cultivo ha sido un proceso rezagado, caracterizado por una débil articulación entre el eslabón de los agricultores y el eslabón de la industria aceitera, así como, la ausencia de actores orientados a la generación de aprendizajes colectivos y no solo



focalizados al suministro de recursos materiales. Eventualmente las funciones del sistema realizadas han permitido la reactivación de girasol y cierta estabilidad, no obstante, son insuficientes para asegurar la sostenibilidad del cultivo.

El girasol en México tiene posibilidades de continuar respaldado por dos factores: 1) hay una demanda interna creciente de aceite de girasol y, 2) el reordenamiento productivo implementado en varios estados ha puesto al cultivo de girasol como una opción pertinente, ya sea como un cultivo de rotación o como opción de conversión.

Referencias bibliográficas

- Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. *Research Policy*, 37, 407-429. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003>
- Downs, S. M., Thow, A. M., & Leeder, S. R. (2013). The effectiveness of policies for reducing dietary trans fat: a systematic review of the evidence. *Bulletin of the World Health Organization*, 91(4), 262-269. <https://doi.org/10.2471/BLT.12.111468>
- Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. *Technological Forecasting and Social Change*, 74(4), 413-432. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002>
- Juarez, B., & Harrison, T. (2017). *Oilseeds and Products Annual*.
- Kaufer-Horwitz, M., Tolentino-Mayo, L., Jáuregui, A., Sánchez-Bazán, K., Bourges, H., Martínez, S., ... Barquera, S. (2018). Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. *Salud Pública de México*, 60(4), 479-486. <https://doi.org/10.21149/9615>
- Kleingartner, L. W. (2002). NuSun sunflower oil: Redirection of an industry. En J. Janick & A. Whipkey (Eds.), *Trends in new crops and new uses* (pp. 135–138). USA: ASHS Press.
- Klerkx, L., van Mierlo, B., & Leeuwis, C. (2012). Evolution of systems approaches to agricultural innovation: Concepts, analysis and interventions. En I. Darnhofer, D. Gibbon, & B. Dedieu (Eds.), *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic* (pp. 431-455). Dordrecht: Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-4503-2>
- Monge-Rojas, R., Colón-Ramos, U., Jacoby, E., & Mozaffarian, D. (2011). Voluntary reduction of trans-fatty acids in Latin America and the Caribbean: current situation. *Rev Panam Salud Publica*, 29(2), 126-129.



Salas, J. J., Bootello, M. A., & Garcés, R. (2015). Food Uses of Sunflower Oil. En *Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization* (pp. 441-464). Elsevier Inc.

Soldatov, K. I. (1976). Chemical mutagenesis in sunflower breeding. En *Proceedings of the 7th international sunflower conference* (pp. 352-357). Krasnodar, USSR: International Sunflower Association.

Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems : A framework for policy makers and innovation scholars. *Science and Public Policy*, 39, 74-87. <https://doi.org/10.1093/scipol/scr008>

World Health Organization. (2018). Replace trans fat: an action package to eliminate industrially-produced trans-fatty acids.



Línea Temática 2.

Políticas agrarias



Del populismo de los años 30s al progresismo del siglo XXI: Las transformaciones del campo latinoamericano

Blanca Rubio Vega¹
Jaime Peña²

Resumen

El objetivo de la ponencia consiste en analizar y contrastar el populismo de los años 30s con el progresismo y posneoliberalismo de los años 2000, con el fin de indagar cuáles fueron las condiciones que permitieron el potencial transformador del populismo y cuáles aquellas que generaron el fenómeno reciente, que castraron su capacidad transformadora, fundamentalmente en el ámbito del campo latinoamericano. Mientras el populismo de los años 30s trajo consigo cambios estructurales en el campo que impulsaron la integración productiva de los campesinos y su inserción como garantes de la producción alimentaria nacional a bajos precios; el progresismo no logró modificar el rol de la agricultura en el proceso de acumulación de capital, por lo que se centró esencialmente en políticas asistencialistas enfocadas a la situación de pobreza, sin lograr superar la exclusión productiva que generó el régimen neoliberal sobre los productores rurales latinoamericanos. Toda vez que se trata de un tema muy amplio, se darán líneas generales tanto en las causas de los procesos como en las transformaciones rurales y políticas públicas, sin profundizar en las especificidades de cada país, debido a la limitación del espacio.

Palabras clave

Exclusión Productiva, Campo, Políticas, Populismo, Progresismo.

Introducción

Uno de los fenómenos relevantes de la etapa reciente, lo constituye la emergencia de gobiernos de izquierda en América Latina que desafiaron las políticas impuestas desde los años ochenta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A partir de 1998, año en que tomó el poder Hugo Chávez en Venezuela, se replicaron triunfos semejantes en Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, El Salvador y Paraguay, hasta culminar con el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018 en México. El ascenso del progresismo corresponde a una fase de transición del capitalismo, identificada por la decadencia del régimen de acumulación neoliberal y la ruptura de la hegemonía norteamericana, en la cual se debilitaron las clases dominantes, pero sobre todo sus representaciones políticas, lo que permitió el



ascenso de gobiernos disidentes del neoliberalismo. Dichos gobiernos surgieron impulsados por grandes movimientos populares frente al hartazgo de la exclusión social y la forma represiva de gobernar que predominó durante la fase neoliberal. Uno de los rasgos más importantes de los gobiernos de izquierda que ha causado mayor debate, lo constituye el bajo potencial para transformar estructuralmente a las economías e impulsar una nueva forma de organización del capital y del trabajo, alternativa al Neoliberalismo. Este fenómeno contrasta claramente con el populismo que emergió durante la crisis de 1929 en América Latina, y constituyó una de las fuerzas más importantes para impulsar el régimen de acumulación conocido como *Sustitución de Importaciones*, el cual trajo consigo una etapa “incluyente” de las masas populares, fundamentalmente del campesinado en el caso de México. Al igual que el progresismo, el populismo ocurrió en una fase de transición, con la fractura del liberalismo y la decadencia de la oligarquía terrateniente, en el contexto del declive de la hegemonía británica. En este contexto, el objetivo de esta investigación consiste en analizar y contrastar el populismo de los años 30s con el progresismo y posneoliberalismo de los años 2000, con el fin de indagar cuáles fueron las condiciones que permitieron el potencial transformador del populismo y cuáles aquellas que generaron el fenómeno reciente, que castraron su capacidad transformadora, fundamentalmente en el ámbito del campo latinoamericano. En el primer punto se aborda la visión teórica y metodológica, para enseguida tratar la transición del siglo XX y el populismo, así como la transición del siglo XXI y el progresismo. Al final se plantea una visión comparativa a manera de conclusión y la bibliografía utilizada.

Visión teórica y metodológica

Partimos de la crítica de la economía política, por considerar que es el punto de vista más potente para analizar la etapa actual. El marxismo es la corriente que ha desarrollado en mayor medida la teoría de la crisis capitalista y por tanto, la que tiene las herramientas para entender los procesos de transición como los que analizamos. Se privilegia, además, una visión histórica estructural, por considerar que el análisis del populismo de los años 30s arroja luz sobre la comprensión del progresismo-postneoliberalismo, en tanto es un fenómeno acabado y ampliamente estudiado, por lo que constituye un referente indispensable para comprender la etapa actual y sus especificaciones históricas.

Partimos del concepto de *transición capitalista* como un proceso que contiene una interfase entre dos regímenes de acumulación y entre dos órdenes mundiales regidos



por una potencia económica. Tanto en la etapa del populismo como del progresismo ocurrió una transición capitalista de gran envergadura, que explica en gran medida, debido a las contradicciones que en ella se generan, el ascenso de los gobiernos nacional populares o de izquierda. En este contexto, dichos gobiernos son por su naturaleza transitorios y tienden a declinar, cuando se configuran las condiciones para el surgimiento y consolidación de los procesos germinales que sustituyen a los decadentes.

En cuanto a los conceptos, consideramos el del populismo como un fenómeno histórico y no como una categoría analítica (Moira y Petrone, 1999, p. 15). Es un “modo de organización política de las relaciones de producción en una época en la que crecen las fuerzas productivas y el mercado interno” (Ianni, 1977, p. 85).

En este sentido no se puede, por tanto, llamar populismo o neopopulismo al proceso que ocurre en la etapa actual, toda vez que lo consideramos una categoría histórica.

Desde nuestra perspectiva el fenómeno actual corresponde a otra coyuntura histórica por lo que preferimos llamarle Progresismo o Postneoliberalismo como lo hace Emir Sader, para quien:

El término posneoliberalismo es descriptivo y designa procesos nuevos, que son una reacción a las profundas transformaciones represivas inducidas por el neoliberalismo, pero todavía no han definido un formato permanente; es lo que se ve en Venezuela, Bolivia y Ecuador. No caracteriza una etapa histórica específica, diferente del capitalismo y del socialismo, sino una nueva configuración de las relaciones de poder entre las clases sociales, que promete la formación de un nuevo bloque social dirigente de procesos históricos sui géneris, en condiciones mucho más favorables a las fuerzas populares, cuyo destino será decidido por una dinámica concreta de construcción de Estados posneoliberales. (Sader, 2009, p.183)

Desde nuestro parecer, el progresismo es un fenómeno histórico que corresponde a la transición capitalista de la hegemonía norteamericana y del régimen neoliberal, en la cual ocurre un debilitamiento del dominio del capital financiero y corporativo, así como el declive del poder de los organismos multilaterales sobre los países de América Latina, que permite el ascenso de gobiernos no alineados, sostenidos sobre las masas populares, que impulsan procesos de nacionalización de los recursos naturales así como políticas distributivas del gasto público. Desde una visión metodológica, cabe



señalar que en la ponencia se reivindican principalmente visiones generales del proceso y en menor medida, las transformaciones rurales, debido a lo inicial de la investigación.

La transición hegemónica del siglo XX y el Populismo

A principios del siglo XX ocurrió un largo período de transición entre el régimen de acumulación liberal y el régimen de sustitución de importaciones, a la par con el paso de la hegemonía mundial de gran Bretaña a Estados Unidos. Se trató de una transformación de gran calado en el ámbito mundial que requirió de dos guerras mundiales y una crisis capitalista de orden estructural. La transición inició con la primera guerra mundial conocida como “la gran guerra”, que culminó en 1918 y tuvo su punto más álgido en la crisis de 1929, en la cual se evidenció el agotamiento del régimen liberal de producción. La crisis capitalista tuvo como causas estructurales, el agotamiento de una forma particular de funcionamiento del régimen liberal, el cual se sustentó en el estancamiento de los salarios y el declive de los precios de los alimentos y las materias primas, con el fin de impulsar las ganancias, a la vez que combinó elevados incrementos de la productividad del trabajo con políticas deflacionarias. El resultado de esta forma de funcionamiento en las etapas de expansión, lo constituye la emergencia de la sobreacumulación de capital y la sobreproducción de mercancías, en tanto la demanda no crece al mismo ritmo que la productividad, pues tanto los obreros como los campesinos fueron sometidos a bajos salarios y bajos precios. Al ocurrir un sobrante de productos y de capital, sin posibilidades de realización y reinversión rentable debido a la estrechez del mercado, suele ocurrir que el capital emigre hacia el área especulativa para valorizarse.

El proceso especulativo tiende a separarse de la esfera de la producción, por lo que se crea una burbuja bursátil que estallará cuando se agoten las condiciones para su reproducción, ya sea por cambios en las políticas monetarias o bien cuando los valores se intentan vender sin que surjan compradores, y van perdiendo nivel, llevando a la ruina a quienes habían invertido en ellos.

Esto fue lo que ocurrió en la crisis de 1929, cuando la separación del valor y su representación dineraria llevó al *crack* bursátil, al que sobrevinieron las quiebras bancarias y la reducción del crédito que afectó a las empresas, con lo cual se redujo la producción y el empleo.



En el ámbito de las materias primas, el estallamiento de la crisis trajo consigo el declive brutal de los precios:

En los meses que van de noviembre de 1929 a enero de 1939, la media del índice (de los precios y stocks agrícolas mundiales) fue de 64, con un descenso de 9% respecto al nivel de julio-octubre. Y después llegó el diluvio: 58 en marzo de 1930; 51.4 en junio; 45.5 en agosto, y, en diciembre de 1930 38.9, lo que significaba una disminución del 50% desde la primera mitad de 1928. En diciembre de 1932 el índice había disminuido casi en otro 50%, hasta un 24.4% de la base de 1923-25, mientras que los stocks habían crecido hasta 260, medidos sobre esa misma base. (Kindleberger, 2009, p. 139)

La caída en el precio de las materias primas agrícolas y mineras en el ámbito mundial, fue la puntilla que acabó por debilitar a la oligarquía exportadora en América Latina. Esta clase de la burguesía nativa empezó a resentir además el declive de la demanda de bienes primarios debido a la crisis que enfrentaron las grandes potencias, por lo que se generó un vacío de poder en el ámbito de la representación política, lo cual permitió el ascenso de líderes ajenos a las filas de la clase en el poder.

En estos procesos, ocurre un intenso antagonismo ya que ninguna clase puede imponerse sobre las otras, de modo que las fuerzas en lucha se equilibran de una manera catastrófica a través de una coalición de antagónicos (Ianni, 1975, p. 57).

Surge así el régimen populista, como un modo de organización política de las relaciones de producción, que representa a la clase emergente; una clase que por su debilidad germinal no puede impulsar el nuevo régimen de producción y debe ser impuesto por el Estado.

La burguesía nacional industrial comanda, a través del Estado, la transformación del régimen liberal al régimen de acumulación de sustitución de importaciones, que permitió poner a la industria en el centro y someter a su lógica de funcionamiento al resto de los sectores productivos.

Los llamados populismos clásicos que surgieron en las décadas de los 30 y 40s, como Lázaro Cárdenas del Río en México y Juan Domingo Perón en Argentina, Haya de la Torre en Perú, Rómulo Ernesto Betancourt en Venezuela y Jorge Eliécer Gaitán en Colombia; así como los más tardíos que ocurrieron en los años 50-60 como Getulio Vargas en Brasil, Paz Estenssoro en Bolivia, Carlos Ibáñez del campo en Chile y Velasco Ibarra en Ecuador (Moira y Petrone, 1999, p. 20), muestran la generalización



del fenómeno en América Latina, así como las condiciones favorables del mercado mundial que permitieron el ascenso de dicha modalidad de los gobiernos.

A partir de 1932, pero sobre todo de 1939, con el inicio de la segunda conflagración mundial, los precios de las materias primas se incrementaron consistentemente:

(...) el “modelo de desarrollo latinoamericano hacia adentro” se asentó sobre las posibilidades circunstanciales de una relación favorable en los términos de intercambio y en la limitada participación de la población en los beneficios del desarrollo. (Cardoso y Faletto, 1969, p. 137)

Esta favorable situación mundial, permitió a los gobiernos populistas contar con recursos para el impulso de las políticas sociales que incluyeron, en algunos casos, aumento de los salarios a los obreros, impulso a la salud pública por el Estado así como a la educación, control de los precios de los alimentos básicos, una distribución del ingreso progresiva que trajo consigo la movilidad social de la población.

Cabe señalar que las políticas tendientes a ampliar el consumo en el populismo, tenían un claro sentido de apoyar a la industrialización, al incrementar la demanda de bienes industriales de punta de esa época, que eran los bienes de consumo duradero y no duradero.

Toda vez que la incipiente industria nacional producía para el mercado interno, el consumo de amplias masas obreras y campesinas era fundamental para su reproducción, por lo que la distribución del ingreso tenía un sentido de apuntalar la acumulación, con más énfasis que el criterio clientelar, que también existió pero subordinado al interés económico. Los regímenes populistas tenían, como hemos señalado, una clara posición antiimperialista, lo cual fue un factor relevante para impulsar el desarrollo nacional centrado en la industria, bajo la concepción promovida por la CEPAL. Por ello fue muy relevante la nacionalización de los recursos naturales, como otro elemento que coadyuvó a fortalecer la producción industrial y agrícola nacional.

En el ámbito rural el populismo trajo cambios estructurales de gran envergadura. Aun cuando la mayoría de los autores plantean que el populismo fue un fenómeno básicamente urbano (Ianni, 1975, p. 166), como en el caso de Argentina y Brasil, y aceptan que solo tuvo repercusiones rurales en México y Bolivia; en esta ponencia planteamos que el populismo transformó radicalmente la relación industria-agricultura,



pues puso a ésta última al servicio de la industria, hecho que no existía anteriormente. Las divisas obtenidas por las exportaciones agropecuarias fueron utilizadas para la importación de bienes de capital para la industria; la población desplazada del campo fue convertida en el ejército de reserva para el empleo industrial, la población rural fue orientada como demanda para los productos industriales, a la vez que se fortaleció la producción alimentaria nacional a bajos precios para garantizar alimentos baratos que permitieran establecer salarios reales altos.

Además, en los casos de México con Cárdenas y Bolivia con Paz Estenssoro, se impulsó un cambio radical en el campo con la implementación de la reforma agraria. En el primer país, el impulso de los ejidos colectivos, el acto de armar a los campesinos para defender las tierras del embate de los terratenientes, la creación de Instituciones estatales para impulsar la producción básica, etc., trajeron consigo la inclusión productiva de los campesinos, quienes tenían un rol funcional en el proceso de acumulación.

La transición hegemónica del siglo XXI y el progresismo-postneoliberalismo

A partir del 2003 –de manera convencional- se inició una etapa de transición capitalista debido a dos procesos principales. El aumento tendencial de los precios del petróleo y las materias primas agrícolas y mineras, y el estallamiento de la segunda guerra de Irak, impulsada por Estados Unidos con el fin de apropiarse del petróleo de dicha nación asiática.

Ambos procesos expresaban el declive hegemónico de Estados Unidos, pues perdió el control sobre los precios del hidrocarburo e impulsó una guerra sin el consenso de las élite mundiales, que a la postre acabaría por perder, por lo que dicha potencia empezó a ejercer el poder como dominio sin hegemonía (Arrighi, 2007, p.160).

Además del declive hegemónico, la transición capitalista albergaba como señalamos, el agotamiento del régimen de acumulación neoliberal, que se expresó cabalmente en la crisis capitalista mundial iniciada en el año de 2007.

Las causas estructurales de dicha crisis remiten en primer lugar, a la incapacidad del régimen de acumulación neoliberal para generar áreas de inversión productivas rentables, debido esencialmente a la imposición de elevadas cuotas de explotación que generaron altas tasas de plusvalía, pero también una restringida capacidad de consumo de la población. Tal hecho fue gestando, como en la crisis del 29, un proceso de



sobreacumulación, que tuvo como contraparte el flujo del capital hacia el área financiera con el fin de valorizarse. Esta primera contradicción fortaleció el proceso de financiarización, como aquel según el cual, el capital financiero domina al capital productivo y se desarrolla a expensas de él, al absorber valor sin reinvertirlo, lo cual lo convierte en un sector parasitario que tiende a atrofiar a la pequeña y mediana industria.

La sobreacumulación se tradujo, desde la perspectiva material, en un proceso de sobreproducción de mercancías sin posibilidades de realización o de venta. Esta situación fue resuelta creando una demanda ficticia, a través de impulsar el endeudamiento entre la población, a quien se otorgaba crédito sin garantía real, con el fin de ampliar el mercado y crear poder de compra. La incapacidad del régimen de acumulación para generar una demanda creciente de capitales productivos y de mercancías, dado su carácter excluyente, derivó así en el crecimiento insospechado de capitales especulativos sin correspondencia en la creación de valor y en mercancías vendidas a consumidores endeudados sin capacidad real de pago. Tal forma de funcionamiento puede desarrollarse de manera artificial durante una etapa expansiva del capital, pero tiende necesariamente a colapsarse ante la separación del valor de su representación dineraria, difiriendo pagos y creando una burbuja que tarde o temprano acaba por estallar.

Esto fue lo que ocurrió en el 2007, cuando los créditos otorgados sin respaldo en el terreno inmobiliario no pudieron cobrarse, provocando una cadena de quiebras del capital involucrado.

En el ámbito latinoamericano, la crisis trajo consigo dos procesos esenciales. Por un lado, la revalorización de las materias primas agrícolas y mineras y, por otro, una mayor libertad política debido al declive hegemónico de Estados Unidos y su orientación hacia Irak. Estas condiciones permitieron el surgimiento de gobiernos alternativos al neoliberalismo.

La crisis capitalista trajo también el debilitamiento de las fracciones financieras del capital dominante, así como del capital exportador, debido al declive de la demanda en los países desarrollados que enfrentaban la caída de la rentabilidad. En este contexto ocurrió de nuevo un vacío de poder, un equilibrio catastrófico de las élites que habían dominado durante el Neoliberalismo, pero fundamentalmente de sus representaciones políticas que agotaron sus mecanismos de control, ante el descontento masivo de las clases populares orilladas a la exclusión y la marginalidad.



De esta suerte, al igual que en los años 30s, emergieron gobiernos de izquierda, como una corriente de transformación política y económica en América Latina, de corte antiimperialista y sostenida en el apoyo popular.

En 1998 tomó posesión Hugo Chávez en Venezuela, en 2003 Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina también en 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en 2005, Evo Morales en Bolivia en 2006, Manuel Zelaya en Honduras en 2006, Rafael Correa en Ecuador en 2007, Cristina Kirchner que sucedió a su esposo en Argentina en 2007, Fernando Lugo en Paraguay en 2008, Mauricio Funes en El Salvador en 2009, la reelección de Evo Morales en 2009, el ascenso de José Mujica que sucedió a Tabaré Vázquez en Uruguay en 2010, Dilma Rousseff que sucedió a Lula en Brasil en 2011, a lo que se suma la reelección de Cristina Kirchner en 2011, la de Rafael Correa en 2013, la elección de Maduro en Venezuela en 2013 y la reelección de Evo Morales en 2014; el regreso de Tabaré Vázquez en Uruguay en 2015 y Andrés Manuel López Obrador en México, en 2018.

Estos gobiernos han tenido alcances y características muy diferentes, dependiendo de las condiciones históricas de cada país, la forma en que llegaron al poder y las oligarquías que han enfrentado. Donde se desarrollaron procesos más radicales fue en los países andinos, Bolivia, Venezuela y Ecuador, mientras que los llamados “progresistas” (Brasil, Argentina y Uruguay) siguieron pautas más moderadas, y los pequeños países como El Salvador enfrentaron muchas dificultades para afianzarse. Sin embargo, el conjunto comparte una posición no alineada frente a Estados Unidos, el impulso al gasto social, la nacionalización de los recursos naturales y un rechazo implícito o explícito al Neoliberalismo.

Aun cuando los gobiernos alternativos al neoliberalismo no han transformado las relaciones de dominación política y apropiación económica y han dejado intactos los intereses de las clases dominantes; con todo, han orientado la política hacia otros derroteros.

En primer lugar, expropiaron los recursos naturales como el gas, el petróleo, etc., con el fin de favorecer las finanzas estatales, dando aire así a un manejo más autónomo del poder.



Asimismo, construyeron Instituciones como la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), PETROCARIBE, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), y el Banco del Sur (Gauster y Fradejas, 2008, p. 43).

Por otra parte, en el plano legislativo avanzaron, sobre todo los países postneoliberales, en el establecimiento consensuado de una Nueva Constituyente que implica la refundación de los Estados.

Una característica que comparten todos los gobiernos alternativos ha sido la disminución de la pobreza a niveles no vistos en la etapa reciente. De esta suerte, la pobreza se redujo en Brasil de 38.8% de la población en 2003 a 19.9% en 2017; mientras que en Bolivia el tránsito fue de 66.1% en el 2000 al 35.1% en 2017; en Ecuador pasó de 64.4% en el año 2000 a 22.8% en 2017 (CEPAL, 2019). En el caso de Argentina, el porcentaje de la población en pobreza pasó de 57,5% en 2003 al 33.6 en 2018 (BID, 2019 y UCA, 2019).³

En el ámbito de lo rural, se observó un mayor énfasis en el apoyo agropecuario en relación a los gobiernos anteriores. Durante las crisis alimentarias del 2008 y 2011, fueron los países no alineados los que mostraron un mejor desempeño como lo señala la FAO:

En efecto, los países que han logrado amortiguar mejor las consecuencias de la crisis han sido aquellos donde el Estado tenía importante participación en áreas estratégicas, como el fomento integral a la producción de alimentos para el mercado interno, el financiamiento agrícola, el abastecimiento de alimentos (Compras públicas, formación de reservas, distribución de alimentos) los programas de protección social, así como la capacidad de generar iniciativas para la diversificación de sus fuentes de importaciones de alimentos y la suscripción de acuerdos comerciales bilaterales e intrarregionales. (FAO, 2010, p. 48)

Los pocos países en desarrollo que han apostado a invertir en la agricultura familiar como Brasil y Ecuador, han demostrado más capacidad para resistir el impacto de la crisis (...). (Rosero, Carbonell y Regalado, 2011, p. 12)

Podemos concluir que el bloque contrahegemónico desplegó una serie de transformaciones de manera desigual, según la historia de cada país y la radicalidad del proceso, pero todos comparten el común denominador de un distanciamiento del enfoque neoliberal ortodoxo.



Conclusiones y visión comparativa

La pregunta central que rige esta ponencia, lo constituye indagar porque en el proceso del progresismo y postneoliberalismo no pudieron ocurrir cambios estructurales como durante el populismo. En primer lugar, durante la transición del siglo XX, el populismo surgió cuando ya existían las condiciones para el ascenso de la clase alternativa que sustituiría a la oligarquía terrateniente. Es decir, la burguesía industrial. Las condiciones para el ascenso del proceso de industrialización estaban ya maduras, en tanto la guerra impedía en un plano internacional, obtener los bienes industriales requeridos por los países vía importaciones, por lo que era posible impulsarlos internamente. Como señalamos, el populismo constituye un régimen que impulsa la industrialización ante la debilidad de la incipiente burguesía industrial y el declive de la clase terrateniente en decadencia.

En la fase de transición del siglo XXI, en cambio, no se encuentran maduras las condiciones para el ascenso de una clase alternativa al capital financiero y corporativo que son dominantes. La crisis de 2008, trajo consigo el debilitamiento del sector financiero en el ámbito mundial, pero fue fortalecido por los gobiernos de los países desarrollados apuntalando así el sistema neoliberal vigente y postergando la caída definitiva de este sector. En América Latina se debilitó el sector financiero ante la crisis mundial, pero el sector corporativo cobró fuerza debido al aumento en los precios del petróleo y las materias primas en el ámbito mundial.

Lo que se debilitó fueron los mecanismos internacionales de dominio de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos, debido a la crisis y a la derrota en la guerra de Irak, como ya señalamos, sin que ello llevara a un debilitamiento real de las élites nativas. En cambio, este declive del dominio imperial sí repercutió en un debilitamiento de las representaciones políticas de las élites en poder, ante el hartazgo de las clases subalternas golpeadas por la crisis económica y alimentaria.

En este proceso no emergió aún la clase de la burguesía que sustituirá al capital financiero, por lo que los gobiernos progresistas se vieron imposibilitados para abanderar esta transformación. Lo cual quiere decir que las condiciones económicas y sociales de la transición, no estaban aún maduras para el impulso de un nuevo régimen de acumulación que sustituya al neoliberalismo. Durante el progresismo y el postneoliberalismo, se intentaron impulsar cambios estructurales, pero ante el embate del capital nativo (golpes de estado en Venezuela y Ecuador, contienda separatista de



Santa Cruz en Bolivia, movilizaciones de la derecha en Brasil, lucha contra las retenciones en Argentina), los gobiernos acabaron estableciendo alianzas con el capital dominante, que castraron cualquier tipo de transformación profunda. Desde la perspectiva de las políticas sociales, durante el populismo las políticas distributivas tenían el sentido de impulsar la demanda popular para apuntalar a la industria, como señalamos. En cambio en el progresismo, las políticas distributivas caían en el vacío, pues no apuntalaban al nuevo régimen de acumulación, y por lo tanto se redujeron a un nivel asistencialista para fortalecer la práctica clientelar.

En el ámbito rural, durante el populismo se reorganizó la relación industria-agricultura, poniendo ésta última al servicio del sector manufacturero, como ya señalamos. En este contexto, el impulso a la producción alimentaria a bajos precios tenía el sentido de apuntalar la acumulación elevando los salarios reales al mismo tiempo que la explotación de la fuerza de trabajo. Por ello fue tan importante el impulso de la reforma agraria en México y Bolivia, que permitieron distribuir la tierra a los campesinos, como aquellos capaces de garantizar bajos precios al ahorrar la renta de la tierra.

En cambio, durante el progresismo y postneoliberalismo, persistió el dominio corporativo sobre el sector rural, apuntalado por el aumento en los precios de las materias primas, con lo cual los intentos de transformación del campo fueron limitados, en tanto no ha surgido un nuevo régimen de acumulación que ubique el rol funcional de la agricultura y los campesinos en términos productivos y ambientales. Tanto en el populismo como en el progresismo se impusieron precios altos de las materias primas en el ámbito mundial, lo cual les permitió contar con recursos para impulsar las políticas sociales, pero estas fueron de distinto contenido en ambos procesos. Podemos concluir entonces que las condiciones económicas nativas y mundiales del populismo fueron favorables a la transformación e inclusión de las clases subalternas, mientras que en el progresismo y postneoliberalismo las condiciones han sido adversas, por lo que los cambios han sido superficiales, de tal manera que cuando dichos gobiernos son abatidos por la derecha, esta puede echar por la borda las transformaciones logradas.

Notas

¹ Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Correo: blancaa@unam.mx

² Investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Correo: jiper48@yahoo.com.mx



³ Las cifras de pobreza corresponden al último dato disponible, para cada caso.

Bibliografía

Arrighi, Giovanni (2007). *Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI*, Madrid: Akal.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2019). *Estadísticas de pobreza y desigualdad*, Washington, Estados Unidos. Disponible en línea en <<https://bit.ly/34DW8Mp>>

Cardoso, Fernando H. y Faletto, Enzo (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica*. México: Siglo XXI Editores.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019). *Estadísticas e Indicadores Sociales. Pobreza*, Santiago de Chile. Disponible en <<https://bit.ly/30Kxnx5>>

Food and Agriculture Organization (FAO) (2010). *Panorama de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe*, Roma: FAO.

Gauster, Susana, y Fradejas, Alberto (2008). *Propuesta de institucionalidad y políticas públicas para la promoción de la agricultura campesina de Guatemala*. Guatemala: idear/Oxfam International.

Ianni, Octavio (1975). *La formación del Estado Populista en América Latina*, México: ERA.

Kindleberger, Charles (2009). *La crisis económica, 1929-1939*, Madrid: Traficantes de sueños

Moira, María y Petrone, Mario (1999). "Los complejos de la cenicienta", en María Moira y Mario Petrone (comps.) *Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta*, Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires - UBA, pp. 11-55.

Rosero, Fernando; Carbonell, Karen y Regalado, Fabián (2011). *Hacia nuevas políticas alimentarias en América Latina y Europa*, Policy Paper 12, Ecuador: Friedrich Ebert Stiftung.

Rubio, Blanca (2015). *El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y alimentos*, México: Juan Pablos Editor - UACH - UAZ - CP, 2a edición.

Sader, Emir (2009). *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*, Argentina: Editorial Siglo XXI.

Universidad Católica de Argentina (UCA) (2019). *Observatorio de la Deuda Social Argentina*, Argentina, Pontificia Universidad Católica de Argentina. Disponible en <<https://bit.ly/2GQJRMA>>



Neoliberalismo e mercado internacional de terras¹

Leandro Renato Monerato²
Newton Narciso Gomes Junior³

Resumo

Em meados da década de 1970 coincidem os choques do petróleo e a publicação do documento *Land Reform Policy Paper* no qual Banco Mundial e FMI defendem a liberalização dos mercados de compra, venda e arrendamento de terras. A partir da crise da dívida de 1980, essas instituições cederão empréstimos volumosos aos países atrasados desde que estes assumissem o compromisso de realizar a reforma agrária do mercado (MRAM). Na década de 1990 esses programas são realizados em quase todos países da América Latina, como parte da difusão e implementação do neoliberalismo em escala internacional e o objetivo explícito de criar mercados financeiros rurais. Após anos de sua implementação, quando da crise econômica mundial em 2008, o Banco Mundial anunciará a existência de uma Corrida Mundial por Terras, em que monopólios internacionais se apoderam de milhões de hectares por todo o globo. Este artigo procura demonstrar a relação intrínseca entre a criação do mercado internacional de terras e o neoliberalismo e busca investigar as razões econômicas para isso à luz da teoria da renda fundiária estabelecida por Karl Marx no Livro III *d'O Capital*. Segundo nossas conclusões estaria ocorrendo um processo de acoplamento da propriedade fundiária ao capital financeiro, que até então havia sido definido como a fusão dos monopólios do capital industrial e bancário. Por fim, discutimos o problema que a desnacionalização das terras coloca para a manutenção da soberania nacional diante do sistema financeiro mundial.

Palavras-chave

Neoliberalismo- Corrida Mundial por Terras- Questão Agrária- Terra Fictícia-Renda fundiária.

Introdução

O biênio 2007-2008 foi marcado por uma crise mundial de grandes proporções. Bancos, seguradoras, empresas e Estados foram à bancarrota. Iniciada com o estouro de uma bolha financeira criada no mercado de hipotecas imobiliárias nos EUA, a crise chegou a fechar usinas de açúcar e etanol no Brasil, mostrando a interdependência entre os setores financeiros e produtivos. Em 2008, contudo, os preços das *commodities* caíram, pois os capitais especulativos buscaram títulos de baixo risco e baixa rentabilidade como



os títulos do governo norte-americano (Delgado, 2012). Em seguida, os preços retomaram um processo inflacionário para, novamente, cair e de forma ainda mais aguda a partir da safra 2012/2013.

Mesmo após a queda nos preços das *commodities*, pode-se perceber a continuidade da subida do preço da terra, verificando-se um “descolamento” entre a produção da mercadoria e a renda da terra (Delgado, 2012; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2015 e 2018). Ou seja, o aumento do preço da terra em plena queda dos preços das *commodities* desvelava a terra, propriamente dita, como um ativo financeiro, como alvo principal de investimento. Seria isso apenas conjuntural ou corresponderia a alguma tendência mais profunda do capitalismo?⁴. Dois movimentos realizados por grandes empresas monopolistas produtoras de *commodities* (soja, açúcar, milho, etc.), nesse período, apontam para uma realidade de maior fôlego do que uma resposta conjuntural à crise. No período 2005-2007, abrem seu capital nas bolsas de valores, e em 2008/2009 passam a atuar no mercado de terras comprando vastas extensões. O capital financeiro passa a adquirir terras por meio da participação societária em imobiliárias rurais em larga escala. Esse fenômeno ficou conhecido, a partir dos documentos publicado pelo Banco Mundial como corrida mundial por terras.

Segundo o estudo do Banco Mundial, publicado em 2010, *Is rising global interest in farmland*, os agentes compradores de terras identificados até então são os seguintes: a) governos preocupados com a demanda interna e sua incapacidade de produzir alimentos suficientes para a população, especialmente a partir de 2008; b) empresas financeiras que, em um contexto de insegurança do mercado, procuraram vantagens comparativas por meio da aquisição de terras; c) empresas do setor agroindustrial e do agronegócio que, devido ao alto nível de concentração do comércio e processamento, procuraram expandir seus negócios.

Deste modo, se o fenômeno da corrida mundial por terras iniciado a partir da crise de 2007/2008 significou um processo de financeirização do mercado de terras, é de se questionar qual a sua relação com o processo de financeirização em geral da economia mundial realizado nas últimas décadas sob a égide do que veio a ser conhecido como neoliberalismo. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é argumentar que a corrida mundial por terras não é um raio em céu azul, mas um fenômeno intrincado, desde o início, às políticas neoliberais de privatização, desregulamentação e criação de mercados mundiais. Através do estudo das políticas agrárias realizadas pelas principais



agências propagadoras do neoliberalismo pelo mundo, ou seja, Banco Mundial e FMI é possível estabelecer de modo evidente esta relação.

O texto busca evitar dois perigos metodológicos: a análise abstrata desconectada do real e o empirismo pouco explicativo. O caminho metodológico percorrido, entretanto, não corresponde à ordem de exposição aqui apresentada. Em oposição ao positivismo/empirismo, segundo o qual uma teoria científica seria uma coleção de dados empiricamente coletados e sistematizados e que, portanto, assume como pressuposto uma identidade entre aparência e essência, entre forma e conteúdo, nesta dissertação se assumem os pressupostos do método histórico dialético, seguindo a exposição de Caio Prado Júnior (1980) em *Dialética do Conhecimento*. Como diz Prado Jr. (1980, p. 533, grifado no original): “para se ter o conhecimento de algumas coisas, é preciso organizar a sucessão. É precisamente como procede o pensamento; e a observação, análise e compreensão desse processo constitui o primeiro passo para o método dialético”. Contudo, a lógica dialética opera com categorias fluidas, já que a tese se transforma na sua antítese e vice-versa, e a busca do método dialético se dá por processos (Prado JR., 1980, p. 535).

O presente estudo, portanto, busca afastar-se da descrição, encontrar as interconexões e compreender o fenômeno enquanto unidade. Para captar os processos, os movimentos, as transformações do fenômeno, é preciso deter-se em cada uma de suas fases, acompanhar conscientemente a marcha do desenvolvimento concreto.

Nossa conclusão é que de modo coordenado, o imperialismo desenhou um conjunto de ações no sentido de desbloquear determinados limites da estrutura fundiária dos países atrasados, de maneira a criar um mercado financeiro de terras internacional. Após décadas de implementação dessas políticas agrárias neoliberais, a corrida mundial por terras em 2008 é o florescimento desse mercado internacional de terras sob controle do setor financeiro. É a especificidade da terra como não-valor, e o controle das terras pelos latifundiários e por sua vez, a grande pressão histórica que estes exercem sob os estados nacionais, é que implicou no retardo da financeirização das terras em detrimento à financeirização de outros setores. Por último, procuramos estabelecer os motivos para essa apropriação.

A política agrária do Banco Mundial e o neoliberalismo

As crises de 1974 e 1976 marcaram um ponto de inflexão na história econômica devido



ao colapso das políticas keynesianas até então seguidas pela maioria dos países imperialistas. Já a partir de 1978-1980, segundo David Harvey (2014), marcam a ascensão do neoliberalismo como política dominante. Segundo ele, a liberalização da China por Deng Xiaoping em 1978, a chegada de Paul Vocker ao comando do Banco Central dos Estados Unidos (FED) em julho de 1979, a eleição de Margaret Thatcher como primeira-ministra da Grã Bretanha em maio do mesmo ano e a eleição de Ronald Reagan como presidente dos EUA em 1980, foram epicentros para disseminar o neoliberalismo a todo o mundo. O objetivo dessa política era: “restringir o poder do trabalho, desregular a indústria, a agricultura e os setores extrativistas, assim como liberar os poderes das finanças tanto internamente como no cenário mundial.” (Harvey, 2014: p.11)

“O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro.(...). Além disso, se não existirem mercados (em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a segurança social ou a poluição ambiental), estes devem ser criados, se necessário pela ação do Estado.” (idem, grifo nosso - p.12)

Em 1975, o Banco Mundial lançou um documento importante que passou a orientar sua política de investimentos no setor agrário mundial, o Land Reform Policy Paper, que na década de 1990 sofreu revisões em alguns aspectos, mas manteve o foco do Banco Mundial em patrocinar programas para a criação do mercado de terras internacional, esse conjunto de políticas a partir da década de 1990 ficou conhecido internacionalmente como Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM). Mas, só é possível compreender como é que esse projeto foi imposto ao mundo se voltarmos à crise da dívida externa deflagrada no início de 1980, pois são parte e consequência da implementação de um programa de ajuste estrutural nos países atrasados por meio de acordos com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

[...] de um lado, a crise de endividamento constituiu oportunidade ímpar para o Banco Mundial – agente central na elaboração e difusão do MRAM – tornar-se, ao lado do FMI, o principal organismo financeiro internacional e, desse modo, atuar como pivô da reestruturação econômica neoliberal da América Latina; de outro lado, porque a



valorização gradativa das transações de mercado como mecanismo principal de distribuições de terras, em detrimento do modelo desapropriacionista, tem como pressuposto as políticas de ajuste (Pereira, 2009, p. 35).

O receituário da política macroeconômica envolvia a abertura comercial e financeira, privatizações, desregulação, ajuste fiscal e proteção à propriedade privada. O imperativo era tornar os mercados mais eficientes e, nesse sentido, seria fundamental que também o mercado de terras funcionasse “competitivamente”. Segundo João M. M. Pereira (2006), os quatro pilares para que o primeiro imperativo pudesse ser efetivo seriam, segundo o Banco Mundial, os seguintes:

[...] a) longevidade, de modo que os contratos de arrendamento, transferíveis e de longo prazo, se tornassem “quase indistinguíveis dos direitos de propriedade privada”; b) clareza legal e segurança, de maneira que não houvesse sobreposição de legislações nem de órgãos jurídicos (ambiguidade legal); c) transferibilidade total, o que só poderia ser conseguido pela supressão das restrições de compra e venda e ao arrendamento, a serem mantidas apenas em casos excepcionais; d) baixos custos de transação (Deininger; Feder⁵, 2002, apud Pereira, 2006, p. 44, grifo nosso).

Mais uma vez se comprova aquilo que Marx (1984) postulou no livro III de O Capital, que a luta entre capitalistas e proprietários de terras se dá pela duração dos contratos, uma vez que isso determina com quem fica grande parte da renda diferencial II, ou seja, a renda gerada por sucessivos investimentos de capital na terra. Contudo, a posição indica algumas novidades: uma coordenação política do imperialismo mundial no sentido de garantir a extensão dos contratos de arrendamento. Como corolário disso, interessa-se em garantir a transferibilidade do contrato de arrendamento. Por exemplo, o Banco Mundial recomendou ao Brasil a revisão do Estatuto da Terra, que limita as possibilidades de arrendamento e proíbe a sublocação. A transferibilidade dos arrendamentos tenderia a criar um mercado especulativo a partir desses contratos de arrendamento, e não só a especulação envolvendo compra e venda.

A reforma agrária de mercado é parte de uma política agrária mais ampla do Banco Mundial/FMI na difusão e na implementação do neoliberalismo em escala internacional; sendo a reforma agrária de mercado (MRAM) aplicada em países com grande concentração fundiária. Os focos fundamentais da ação dos programas financiados pelo Banco Mundial e FMI consistem:



A. Compra e Venda

Embora inquestionável a necessidade de “avançar na liberalização dos mercados de compra e venda”, motivado por resultados negativos, o Banco Mundial relegaria tal política a um plano secundário. “Surge daí, uma abordagem mais matizada, que reconhece a necessidade de entender de maneira interconectada o funcionamento de diferentes mercados e dos diversos fatores neles intervenientes” (Deininger; Binswanger, 1998, apud Pereira, 2009, p. 57). Ou seja, a ideia é que a liberalização deveria ser mediada pelo contexto e que fosse elaborada uma sequência de políticas estratégicas que por fim alcançassem o objetivo final.

B. Titulação

Durante muitos anos, o Banco Mundial financiou, em várias partes do mundo, programas de titulação individual, no Brasil chamados de regularização fundiária. Na África, foram tituladas terras antes comunais que depois foram vendidas de modo a aquecer o mercado de terras. Perseguem-se formas “cada vez mais privadas de propriedade da terra, vistas como sinônimo de evolução social e desenvolvimento econômico” (Deininger; Binswanger, 1999, apud Pereira, 2009, p. 59). De acordo com os economistas do Banco Mundial, para melhorar a *performance* dos programas de titulação, seria preciso garantir certas condições, dentre as quais: a) a existência de mercados de crédito formal que aceitem a terra titulada como garantia de obtenção de financiamentos; b) a eliminação de restrições de ordem social, política e cultural que impeçam a emergência de mercados de compra e venda de terras; c) a existência de uma base legal e uma infraestrutura institucional capaz de garantir a execução do programa, proteger grupos politicamente frágeis e garantir a propriedade legítima da terra, pois, do contrário, as relações de poder deturpariam todo o processo; d) que a oferta e titulação seja superior à demanda, de modo que reduza os custos de transação posteriores (Deininger; Binswanger, 1998, apud Pereira, 2009, p. 59).

C. Arrendamento

Segundo a reavaliação do documento de 1975, em meados de 1990, o arrendamento havia sido subestimado como meio de acesso à terra, dando ênfase, como se viu, nos mercados de compra e venda. Nos documentos do Banco Mundial, passa-se a enumerar vantagens do arrendamento em relação à compra e venda, como as seguintes:

a) custos de transação menores; b) menor vulnerabilidade em relação a “falhas” dos



mercados de crédito; c) maior flexibilidade para encontrar arranjos condizentes com as especificidades locais; d) oportunidade para acumular recursos e experiência necessários à condição de proprietário (Pereira, 2009, p. 60).

Na América Latina, especialmente, deveriam ser estimuladas também as relações de parceria, pois existia “um grau elevado de informalidade e insegurança quanto aos direitos de propriedade e uso da terra” (Pereira, 2009, p. 60).

Com base nessas razões, salvo situações excepcionais, o Banco [...] defende a remoção total das restrições ao funcionamento dos mercados de arrendamento de terras como medida de alta prioridade a ser implementada pelos governos nacionais, trabalhando ativamente para a sua difusão e institucionalização (Deininger, 2001, p.80) Por esta lógica, as regulações jurídicas que defendem (minimamente) os pequenos arrendatários deveriam, de modo geral, ser revistas em favor de contratos mais “flexíveis”. Esta é a linha de ação mais importante da política agrária do Banco Mundial, depois que outras entraram em colapso ou simplesmente não avançaram conforme as suas expectativas (Pereira, 2009, p. 60).

D. Modernização de cadastros, sistemas de registro de terras e informações de mercado

Segundo João M. M. Pereira (2009), esta é a linha de ação em que se concentra a maior parte de empréstimos do Banco Mundial para a área agrária. Programas dessa natureza foram aplicados no Leste Europeu, na África e na Ásia Central e, a partir da metade dos anos 1990, ganharam escala na América Latina e no Caribe.

E. Prevenção e controle de conflitos agrários

O Banco Mundial “defende a criação de organismos descentralizados para a prevenção e/ou resolução de conflitos agrários [...]. Trata-se pois de prevenir e neutralizar conflitos para garantir a segurança do capital, e não para assegurar os direitos do campesinato” (Pereira, 2009, p. 63).

F. Tributação da propriedade rural

O Banco Mundial mostra “pouco entusiasmo em relação à viabilidade política de propostas de tributação progressiva da terra rural [...] A diretriz política de fundo é a descentralização administrativa e fiscal e a municipalização dos instrumentos de política agrária” (Pereira, 2009, p. 64). Isso porque é sabido que, quanto mais centralizado é o aparato estatal, maior é o poder; em contrapartida, maiores são as possibilidades de os



movimentos sociais realizarem o enfrentamento.

G. Privatização de fazendas coletivas e reestruturação agrícola do Leste Europeu e da ex-URSS

Segundo João M. M. Pereira (2009), grande parte da motivação do Banco Mundial na elaboração e no financiamento de programas coerentes de política de terras nos anos 1990 foi seu papel na retransformação da base de propriedade na antiga URSS. Ele cita dois documentos do Banco Mundial, um de 1997 e outro de 2002. Parte dos registros segue abaixo:

Desde 1990 o Grupo do Banco Mundial tem apoiado o governo russo na implementação de políticas de reforma agrária [sic]. O princípio da propriedade privada da terra é agora protegido pela Constituição e fazendas familiares privadas tornaram-se aceitas no interior [...] Dois objetivos principais da política de terras foram incorporados à porção de reforma estrutural da linha de crédito do FMI para a Rússia. Estes eram a clarificação e proteção dos direitos à terra para os dez milhões de membros dos grandes coletivos e a introdução de mecanismos de hipoteca de terras. Os objetivos dessa política foram atingidos durante os três primeiros meses de 1996 (Pereira, 2009, p. 64-5).

Para implementá-las, o Banco Mundial tem atuado no sentido de mudar as legislações agrárias, aumentando a liberação de empréstimos de modo a montar um aparato estatal para garantir a livre transação de terra e atração de capital para o campo. Maria Luisa Mendonça e Marcelo Resende (2004) enquadraram essas linhas de ação como percorrendo as seguintes etapas: a) cadastro e georreferenciamento dos imóveis rurais; b) privatização de terras públicas e comunitárias; c) titulação das posses; d) mercantilização da reforma agrária; e) mercado de terras; f) integração dos camponeses ao agronegócio.

Conforme afirma Peter Rosset (2004, p. 17-18):

Os projetos têm diferentes nomes em diferentes países: titulação, registro, mapeamento, etc., embora algumas vezes eles sejam simplesmente chamados de “administração de terras” para agrupar todos os componentes. Começam frequentemente com um levantamento de terras, cadastro, etc. – basicamente o que o Banco chamaria “colocando em ordem a situação da posse da terra”.



Mas, como aponta Peter Rosset (2004, p. 20):

É claro que conceder um título pode, em alguns casos, atender a uma demanda legítima e comum de pequenos agricultores para ter a posse segura de seu pedaço de terra. Contudo, um grave problema é que tudo isso está ocorrendo no contexto das políticas neoliberais – promovidas pelo Banco Mundial – que solapam a lucratividade e a viabilidade da agricultura familiar. A abertura do mercado nacional traz enormes prejuízos para os produtores locais, abaixando o preço de seus produtos e, basicamente, tornando a agricultura ou as pequenas fazendas economicamente inviáveis.

E, como demonstrou Sérgio Sauer (2016), muitos proprietários acabam endividados e/ou cancelam o programa ou vendem/arrendam a propriedade. Ou seja, o Banco Mundial atinge com sucesso o aquecimento do mercado de terras e não consegue a diminuição da pobreza e da desigualdade social, pois o aquecimento do mercado de terras favorece a concentração e a centralização de terras em cada vez menos mãos. Como aponta Manuel Domingos Neto (2004), o índice de Gini no Brasil passou de 0,831 em 1992 para 0,843 em 1998.

Ou seja, a corrida mundial de terras é resultado dos processos da reestruturação econômica pela qual passou o mundo após os dois choques do petróleo, que, agrupados, ficaram conhecidos como o receituário neoliberal. Contudo, internacionalizar e financeirizar a terra de todo o mundo demandava muito mais tempo de maturação da reforma agrária de mercado do que a internacionalização e a financeirização de outros setores da economia demandou. A financeirização chegou ao setor agroindustrial já nas décadas de 1970 e 1980. Daí em diante, o agronegócio (resultado da integração de capitais) encontrava outro setor monopolista – a propriedade da terra – e, para absorvê-lo, foram necessárias antes várias medidas, que se agrupam sob a diretriz da reforma agrária de mercado. Nesse mesmo sentido, também apontam as passagens de Saskia Sassen (2016) de sua obra *Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global*:

A aquisição de terra estrangeira não é um acontecimento solitário. Ela requer, e por sua vez estimula, a criação de um vasto mercado global de terras. Implica o desenvolvimento de uma infraestrutura de serviços igualmente vasta para permitir vendas e aquisições, obter a posse ou os direitos de arrendamento, desenvolver instrumentos legais apropriados e até pressionar pela criação de novas leis que acomodem essas compras em um país soberano. Essa infraestrutura vai muito além de apoiar o mero ato da compra. Não apenas facilita, como também estimula novas aquisições de terra por parte de estrangeiros. Esse setor de serviços cada vez mais sofisticado inventa novos tipos de



contrato e formas de propriedade e cria instrumentos inovadores de contabilidade, legislação e de seguros. À medida que se desenvolve, ele depende, por sua vez, de novas aquisições de terra estrangeira como fonte de lucros. Vemos o começo de uma mercantilização em grande escala, o que pode levar à financeirização da mercadoria que continuamos a chamar simplesmente de terra. [...] As aquisições de terras estrangeiras em grande escala são hoje possibilitadas por objetivos explícitos e por consequências não planejadas do FMI e dos programas de reestruturação do Banco Mundial implementados em grande parte do Sul global na década de 1970. A isso podemos acrescentar as demandas da Organização Mundial do Comércio (OMC) na década de 1990 e no início da de 2000 para levantar barreiras de importação-exportação em nome do “livre-comércio” [...] buscado principalmente por grandes empresas e pelos governos dos países dominantes. [...] Em resumo, esses vários programas tiveram como efeito o recondicionamento de quadros nacionais soberanos, de forma a permitir a inserção do território nacional em circuitos corporativos globais ou emergentes. Uma vez lá, o território se tornou à venda no mercado global. [...] os programas de reestruturação eram muito mais do que o pagamento da dívida: seu objetivo era moldar uma economia política e reposicionar aqueles países como lugares de extração de recursos naturais, e até do poder de consumo de sua população (Sassen, 2016, p.100, p.103-104, p. 110).

Concordamos plenamente com essa argumentação e damos um passo no sentido de tornar ainda mais concreta a análise de Sassen (2016) sobre o conjunto de programas de reestruturação, ao apontar a reforma agrária do mercado como uma preparação planejada com intuito explícito de criar um mercado financeiro de terras ou um novo mercado de terras, como ela se refere. No bojo do pagamento da dívida impagável, que os países do Sul tiveram e continuam tendo que pagar, muitos programas foram executados de modo a abrir as suas fronteiras ao capital financeiro dos países imperialistas. Com o terreno sendo preparado desde a década de 1990, quando estourou a crise de 2008 rapidamente o capital migrou para o mercado de terras com intuito de obter o lucro de fundador da transformação de toda a terra em ativo financeiro. E isso ocorreu com uma velocidade extraordinária, que justificou o termo corrida mundial por terras.

Land grabbing à luz da teoria do valor

Segundo Marx (1984), o total da mais-valia produzida, através do processo de circulação é distribuído pelo conjunto das classes proprietárias, ora como lucro, para os capitalistas industriais e comerciais, ora como juros, para os capitalistas bancários, ora como renda fundiária, para os proprietários de terras. Estes últimos, recebem parte do



valor sem contrapartida, já que a terra não possui valor. É apenas a possibilidade jurídica dos proprietários de terras monopolizarem o direito de acesso a elas é que lhes garante o poder de receber parte do valor.

Em fins do século XIX e início do século XX assistiu-se uma fusão entre os monopólios industriais, comerciais e bancários formando o capital financeiro (Hilferding, 1985), que marcou o início do imperialismo, fase superior do capitalismo (Lênin, 1980). Este capital financeiro, através dos mecanismos de exportação de capitais concluiu um acordo histórico com os latifundiários dos países atrasados. E a industrialização da agricultura nestes países aumentou o poder do capital financeiro no interior destes países. Quando o capital financeiro passa a ser apossar das terras pode-se dizer que estamos diante uma nova fase do imperialismo em que está ocorrendo um acoplamento do elemento terra ao domínio do capital financeiro.

Um dos motivos mais profundos da captura da terra pelo capital financeiro é que, “dada a renda fundiária, a taxa de juro regula o preço do solo. Se essa taxa desce, sobe o preço da terra, e vice-versa” (Marx, 1984, v. VI, p. 928). Por sua vez, a taxa de juros é regulada pela taxa de lucro, que segue tendencialmente em queda. Ou seja, quanto mais a crise capitalista avança, maior é o valor abocanhado pelos proprietários de terra, e o capital financeiro não pode suportar a concorrência do monopólio da propriedade privada da terra, ainda mais que retém parte crescente dos dividendos. A luta entre proprietários e capitalistas se acentua quando os preços das *commodities* se elevam acima do padrão. Os proprietários desejam reter parte desse superlucro; da mesma maneira, nas épocas de baixa, há um esforço normalmente bem-sucedido de socializar os prejuízos com os pequenos proprietários por parte da agroindústria. A partir deste processo de substituição dos antigos proprietários de terras pelo capital financeiro, a terra titulada transformar-se-á na base de uma nova pirâmide especulativa a partir de algo que não é capital, apenas terra. A valorização do capital financeiro terá como uma de suas bases o monopólio dos recursos naturais do mundo e, desse modo, deterá o poder de extrair o preço de monopólio a um nível como nunca antes teve oportunidade. Ou seja, é a crise estrutural do capitalismo que ao mesmo tempo em que tende a diminuir a taxa de lucro a zero, faz a renda fundiária subir. Nesse sentido, é fundamental para a sobrevivência do capital financeiro a centralização de parcelas gigantescas de mais-valia que se dividem pelos latifundiários de todo o globo. A necessidade de submeter, centralizar a renda fundiária, explica o movimento coordenado do capital financeiro para criar um mercado internacional de terras.



Conclusão

Segundo Lênin (1982, p. 212), Engels formulou a lei sobre a renda diferencial: “quanto mais capital se investe na terra, quanto mais alto é o grau de desenvolvimento da agricultura e da civilização em geral num país, tanto mais elevada se torna a renda”. Isso porque a renda da terra é pressuposto para o preço da terra, e dada a renda fundiária ela varia na razão inversa da variação da taxa de juros (Marx, 1984, p. 928). Isso explica porque “o preço da terra tende a subir, independente mesmo do movimento da renda fundiária e do preço dos produtos agrícolas” (idem, p. 722) como aconteceu a partir de 2008, com o descolamento entre preço das *commodities* e do preço da terra.

As décadas de 1950 e 1960 operaram uma verdadeira revolução tecnológica no campo dos países atrasados levando ao surgimento de imensos complexos agroindustriais que unificavam ramos inteiros de produção. Este setor monopolista que se desenvolveu na agricultura estava desde seu início intrincado com os desígnios do capital financeiro. Tudo isso aumentou sobremaneira a tensão existente entre capitalistas de um lado e proprietários de terra de outro, pois a questão do aumento da renda fundiária e do preço da terra passaria a ser enfrentado em nível internacional pelo capital.

As crises de 1970 marcaram um salto de qualidade na crise estrutural do capitalismo. Já em fins de 1970, o Banco Mundial expressava a necessidade do capital financeiro mundial em capturar o mercado de terras. Natural, diante da crescente quantia detida pelo proprietário de terra face ao amadurecimento do desenvolvimento capitalista na agricultura em larga escala nas décadas progressas.

Esse movimento do capital financeiro em busca da renda da terra iria se acentuar na década de 1990, quando o receituário neoliberal havia se alastrado diante da crise da dívida externa da década de 1980 vis a vis com a implementação em grande parte do globo da reforma agrária de mercado. O intenso processo de financeirização que se assistiu em toda a economia a partir dos choques de petróleo encontrava uma estrutura agrária juridicamente instável que seria preciso atacar com dezenas de programas coordenados pelo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, FMI, por mais de uma década para que o mercado financeiro de terras pudesse funcionar. Internacionalizar e financeirizar a terra de todo o mundo demandava muito mais tempo de maturação da reforma agrária de mercado do que a internacionalização e financeirização de outros setores da economia demandou.

Com o terreno sendo preparado desde a década de 1990, quando estourou a crise de 2008, rapidamente, o capital migrou para o mercado de terras com intuito de obter o lucro de fundador da transformação de toda a terra em ativo financeiro, correspondente



aos ganhos objetivos da unificação, ou melhor, da integração das terras divididas em diversas propriedades. A confirmação do sucesso relativo dessa empreitada imperialista ficou evidente quando veio à tona a corrida mundial por terras. Esta, por sua vez, não remonta apenas à crise de 2008 como se fosse um marco zero, a história do *land grabbing* está diretamente ligada à reforma agrária do mercado, que por sua vez está associada ao desenvolvimento do neoliberalismo. O capital sobreacumulado nas esferas especulativas está custeando a maior “acumulação primitiva” de todos os tempos por parte do capital financeiro mundial; o capital financeiro enquanto classe transforma-se em proprietário de terra em detrimento de grandes latifundiários tradicionais e pequenos produtores. Ou seja, pode-se dizer que está ocorrendo a execução de uma contra-reforma agrária na etapa imperialista do capitalismo, pois se trata de um processo de concentração/centralização fundiária à nível mundial.

Notas

¹ Esse artigo apresenta partes da discussão realizada na dissertação de mestrado “Terra Fictícia: capital financeiro e agricultura” apresentada ao PPG-Mader da FUP/Unb.

² Graduado em Ciências Sociais pela Unicamp (2008). Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela UnB (2018).

³ Professor Adjunto do Dep. de Serviço Social da UnB; professor permanente do PPG em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural FUP/UnB; professor do quadro permanente do PPG em Política Social, Coordenador do Diretório de Pesquisa Mercados&Comida UnB/CNPq.

⁴ A previsão do Banco Mundial de que “é improvável que a ‘corrida por terra’ desacelere” (Banco, 2010, apud Sauer; Borras Jr., 2016, p. 10).

⁵ Deininger e Feder são intelectuais vinculados ao Banco Mundial.

Bibliografia

Delgado, G. Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio - mudanças cíclicas em meio século. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012.

Harvey, D. O neoliberalismo: história e implicações. Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2014.

Hilferding, R. O Capital Financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

Lênin, V. I. Imperialismo, fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1980.

_____. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. São Paulo: Brasiliense, 1982.

Marx, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: DIFEL, 1984.



Mendonça, M. L.; Resende, M. Apresentação. In: Martins, M. (Org). O Banco Mundial e a terra: ofensiva e resistência na América Latina, África e Ásia. São Paulo: Viramundo, 2004.

Pereira, J. M.M. A política de reforma agrária de mercado do Banco Mundial: fundamentos, objetivos, contradições e perspectivas. São Paulo: Hucitec, 2009.

Prado Júnior, C. Dialética do Conhecimento. São Paulo: Brasiliense, 1980.

Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. A Empresa Radar S/A e a Especulação com Terras no Brasil. São Paulo: Outras Expressões, 2015.

_____. Imobiliárias agrícolas transnacionais e a especulação com terras na região do Matopiba. São Paulo: Outras Expressões, 2018.

Rosset, P. O bom, o mau e o feio: a política fundiária do Banco Mundial. In: Martins, M. (Org). O Banco Mundial e a terra: ofensiva e resistência na América Latina, África e Ásia. São Paulo: Viramundo, 2004.

Sassen, S. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2016.

Sauer, S.; Borrás JR., S. M. 'Land Grabbing' E 'Green Grabbing': Uma leitura da 'corrida na produção acadêmica' sobre a apropriação global de terras. Campo-Território: revista de geografia agrária, ed, esp., p. 6-42, jun. 2016.



Agricultura familiar e as políticas públicas de assistência ao âmbito rural: Uma análise das implicações da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no município de Coelho Neto/MA

Jennifer Maria Gonçalves Pereira

Resumo

O Presente trabalho foi desenvolvido no município de Coelho Neto situado no estado do Maranhão com o objetivo de compreender os discursos atribuídos a respeito das políticas públicas voltadas para o âmbito rural. Dado que as concepções e práticas de agricultura (familiar) presentes no município são diversificadas e que há desigualdade em relação a distribuição de recursos para o plantio e colheita, assim como a discrepância entre as noções de agricultura familiar e noções de agronegócio; surgem, em forma de medidas remediadoras para segurança alimentar em zonas de insegurança nutricional, diretrizes de políticas públicas, como as do Programa Nacional de alimentação escolar (PNAE), o Programa de aquisição de alimentos (PAA) e o Programa de fortalecimento da agricultura familiar (Pronaf), para fortalecer esse tipo de agricultura e produção regional. Para verificar a procedência dessas medidas, pesquisei quais eram os discursos atribuídos às políticas que estavam estruturando-se no município, no caso o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Em um primeiro momento, as entrevistas feitas no trabalho de campo, mostraram caráter positivo, no entanto, no decorrer da operacionalização e execução dos programas, alguns agricultores não conseguiram atingir as metas dos programas. O que comprova o caráter universalizante da política pública, que desconsidera as particularidades de cada contexto. No caso estudado, por exemplo, os resultados não foram satisfatórios, os objetivos não foram alcançados e não se conseguiu fortalecer e garantir meios necessários para que os agricultores/as do município conseguissem se reproduzir enquanto agentes do campo.

Palavras-chave

Coelho Neto. Agricultura Familiar. Políticas Públicas. Produção Local. Segurança Alimentar.

Introdução

O meu objetivo neste trabalho foi de compreender o processo de operacionalização e execução do Programa de Compra Direta dos produtos provenientes da agricultura



familiar para a merenda escolar no município de Coelho Neto, situado na microrregião *Timbiras* e na mesorregião dos cocais na região leste do Estado do Maranhão. De um modo geral, essas políticas de assistência ao agricultor e agricultora tem como meta contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e com a segurança alimentar dos estudantes que recebem a merenda escolar.

O interesse pelo tema escolhido nasceu de motivações pessoais e inquietações quando a prefeitura de minha cidade lançou o edital referente à primeira chamada pública convocando os agricultores e agricultoras para participarem do programa nacional de alimentação escolar – o Pnae. Até o presente momento da chamada, os agricultores e agricultoras não possuíam um mercado próprio para a venda de seus produtos e nem políticas de assistência.

Com a operacionalização e execução dessa política de assistência aos agricultores meu interesse foi despertado para compreender os sentidos, por meio das práticas e discursos dos sujeitos que estão envolvidos nessa política e a forma que vem sendo feita essa operacionalização e execução do programa. Com isso, desde a construção do projeto da pesquisa, com as leituras referentes ao tema e a ida ao campo, compreendi que a agricultura familiar - enquanto uma categoria social que abarca diferentes sentidos - está estruturada, ao longo dos anos, com uma série de políticas públicas que tem como objetivos a tentativa de minimizar as desigualdades no campo, assegurar a prática da agricultura familiar como uma forma sustentável de produzir alimentos e promover a segurança alimentar.

Com a implementação e execução do Programa Nacional Alimentação Escolar (PNAE) implantado no município de Coelho Neto no ano de 2017, que tem como objetivo a tentativa de promover a segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar, despertou meu interesse na compreensão da forma como vem se dando essa operacionalização e execução do programa, tendo em vista as especificidades do município e o grau de disparidade das unidades de produção (o roçado e as hortas) que os agricultores/as estão inseridos. Assim, a problemática desta pesquisa consistiu em analisar como vinha sendo realizada a implementação e execução do PNAE no município de Coelho Neto – MA para a merenda escolar municipal e os discursos atribuídos a este programa por parte dos sujeitos envolvidos.

Assim, diante do exposto acima, a pesquisa tem como objetivo compreender e analisar o processo de implementação e execução da política de compra direta dos produtos



advindos da agricultura familiar para a merenda escolar no município de Coelho Neto - MA, a partir do ano de 2017. Para atingir o objetivo proposto busquei, por meios dos objetivos específicos, construir o perfil socioeconômico dos agricultores/as cadastrados no Pnae e as localidades em que estão inseridos. Identifiquei os atores sociais envolvidos tanto da gestão pública responsável pela execução do programa quanto os agricultores/as, suas práticas e discursos sobre o programa. Busquei, através da imersão no campo, compreender as práticas e os discursos produzidos pelos diferentes sujeitos envolvidos nesse processo, com o intuito de compreender os diferentes sentidos atribuídos ao programa e a forma como estão sendo negociados os diferentes recursos entre (agricultores/as e os agentes que compõem a gestão que executa o programa).

Metodologia

A pesquisa teve por objetivo analisar os agricultores e agricultoras envolvidos no Programa de Aquisição de Alimentos provenientes da agricultura familiar para a merenda escolar do município. Os sujeitos envolvidos nesse processo estão localizados na mesorregião leste Maranhense na cidade de Coelho Neto, o município está localizado no estado do Maranhão. Possui, aproximadamente 48 078 habitantes, de acordo com estimativas de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e localiza-se a 385 quilômetros da capital maranhense, São Luís. Distribuídos nas localidades da Baixa Fria, São Pedro, Piranhas, Quatis, Guará, Santa Maria, Marinheiro e Araim. Ao todo, na primeira chamada do programa, foram cadastradas quarenta famílias praticantes da agricultura familiar distribuídas nestes oito povoados.

O presente trabalho foi desenvolvido através de uma abordagem predominantemente qualitativa por meio do método descritivo (Goldenberg, 2004). Busquei, assim, compreender os diversos sentidos atribuídos ao programa tanto da gestão que o executa quanto dos agricultores e agricultoras cadastrados no programa. Com o intuito de atingir os objetivos propostos fez-se necessário o uso de diferentes estratégias e abordagens metodológicas. Desse modo, no primeiro momento, da pesquisa, optei por fazer o levantamento bibliográfico (Alves-Mazzottl, Gewandsznajder 2004), com a finalidade de conhecer os principais autores e autoras que fazem parte do debate e da construção de conhecimento sobre as categorias trabalhadas na pesquisa.

Depois de ter verificado a bibliografia e os principais debates acerca do tema proposto e a construção do projeto, adentrei ao campo com a finalidade conhecer a realidade em



que os sujeitos (estavam) estão envolvidos, as localidades e suas unidades de produção. Com o intuito de compreender as suas práticas e discursos sobre o programa, realizei entrevistas estruturadas em tópicos guias e entrevistas semiestruturadas (May, 2004), utilizando o método que melhor se adequou ao campo.

Realizei a pesquisa documental, analisando o cadastro de agricultores e agricultoras cadastrados no Pnae, utilizando tanto a abordagem qualitativa e a quantitativa, com o intuito de identificar onde esses atores sociais estavam inseridos, o que produzem e o que fornecem ao programa. Utilizei, ao longo da pesquisa, o diário de campo descrevendo todas as sensações e inquietações vivenciadas durante a pesquisa de campo para tal o diário de campo foi de extrema importância, pois foi nele que descrevi as impressões vividas durante a pesquisa.

Resultados e discussões

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) conhecido popularmente como “Merenda Escolar”, tem na sua administração o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que fica encarregado de fazer a distribuição dos recursos financeiros para os estados e municípios. A Constituição Federal de 1988 assegura e reforça o direito à alimentação para os estudantes. Cabe ressaltar que o:

“FNDE abre contas para fazer a transferência do recurso para os estados, municípios e escolas federais; o dinheiro é depositado todo mês nessas contas abertas pelo FNDE. O recurso Federal é transferido em dez parcelas para as entidades que executam o programa, cada parcela corresponde a duzentos dias letivos” (BRASIL, 2006 p.20).

As diretrizes dessas políticas públicas têm por objetivo fortalecer e estimular agricultura familiar e a produção de alimentos regionais e agroecológicos respeitando os hábitos alimentares locais e o consumo de alimentos saudáveis por parte dos estudantes. Tem como objetivo promover uma alimentação saudável e adequada, a descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração entre a esfera governamental e o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para aquisição de alimentos diversificados produzidos por populações tradicionais. (Saraiva, et al .2012).

No ano de 2003, se cria o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, que se estrutura com a política pública do Programa Bolsa Família, ações afirmativas executadas no governo Lula, onde visam estruturar ações no âmbito da política agrária e da segurança alimentar (Brasil,



2003). De acordo com Altair Toledo Machado (2008) aquisição de alimentos do PAA para alimentação escolar foi uma importante iniciativa para minimizar a deficiência no consumo de alimentos e promover, ao mesmo tempo, a produção familiar em vários municípios. Criado em 2003,

“tal programa integra no mesmo dispositivo de política pública o apoio à comercialização dos produtos da agricultura familiar e o combate à fome. Assim, os agricultores familiares devem, por meio de uma organização que os represente, fornecer alimentos regularmente durante um ano a diferentes instituições de assistência social” (Schmitt, 2005, p.64).

É importante ressaltar que o Programa de Aquisição de Alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar faz parte de um conjunto de políticas de assistência no âmbito rural, política está que faz parte de uma ramificação de políticas de assistência ao âmbito rural. Com o surgimento do Pronaf nos anos 90, surge a necessidade de se pensar na segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Dessa forma, a agricultura familiar se fortalece e ganha visibilidade na medida em que as esferas governamentais criam políticas públicas de assistência para a permanência desses agricultores e agricultoras no campo.

Outro programa que está articulado com o PAA é o Programa de Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que de acordo com o autor Toyoyoshi *et al* (2003) é um dos programas mais antigos na área de alimentação e nutrição. No início o programa era operacionalizado de forma mais centralizada visando a redução nas deficiências nutricionais das crianças carentes no Brasil. Entretanto, ao longo dos anos, o programa foi se articulando através das especificidades de cada contexto local. E em 1988 a alimentação escolar passou a ser um direito dos estudantes, garantido pela constituição (Toyoyoshi *et al*. 2003).

Em 1994, houve a promulgação da Lei n. 8.913 que aprovou a descentralização do PNAE. A partir disso, a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, e responsável pelo PNAE, estabelece convênios com estados e municípios para o repasse de recursos financeiros, que ficou condicionado à criação de Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) municipais e estaduais, que deveriam fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar e também acompanhar a elaboração dos cardápios (atividade que passou a ser de responsabilidade dos estados e municípios). Em 1997, O Programa



passou a ser coordenado pela Secretária Executiva do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE)” (Toyoyoshi et al. 2013, p. 330).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao longo de sua execução no Brasil tem apresentados avanços relativos nos seus objetivos, gestão e operacionalização com o decreto da lei n. 11.326/2006, enfatiza que cerca de 30% do recurso tem que ser gastos com produtos advindos da agricultura familiar. Assim, além do programa contribuir com hábitos alimentares mais saudáveis colabora com o fortalecimento da agricultura familiar. Com a formulação desta lei, o PNAE se torna essencial para a contribuição da Segurança

Alimentar e Nutricional, que de acordo com Toyoyoshi *et al*, contribuindo para o desmonte do ciclo da pobreza, por meio da redistribuição de renda aos agricultores e agricultoras familiares (Toyoyoshi *et al*. 2013).

“É uma segurança que a gente tem, uma certa venda garantida dos produtos”: Os discursos e as práticas atribuídas à política pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos a essa política de assistência ao agricultor familiar, participei das reuniões referentes às chamadas públicas e se aproximar dos agricultores/as envolvidos. Ao longo da pesquisa, compreendi que a política do Pnae, onde a prefeitura compra diretamente do agricultor os alimentos para a preparação da merenda escolar do município, proporcionou uma boa parte do escoamento da produção dos agricultores.

Assim, de acordo com os agricultores, com a implementação e execução do programa, estes passaram a contar com um mercado formal para a comercialização dos seus produtos. Com a execução do programa, os agricultores passaram a ter um mercado fixo para o escoamento da produção e uma renda fixa todos os meses.

“(…) É uma segurança que o produtor rural tem, embora você comercialize o seu produto na feira, nos verdurões que tem por aí, mas você tem aquela certeza que você não vai ficar com o seu produto perdido...” (Agricultor Miguel, localidade piranhas. Setembro, 2010)

Com a ida ao campo, visitando as propriedades e estabelecimentos de produção agrícola dos agricultores, ressalto que mesmo com toda essa assistência e subsídios, que os agricultores(as) passaram a dispor com a execução do programa de alimentação



escolar, há uma presença de agricultores/as em níveis diferentes de estrutura de produção agrícola (em termos de equipamentos como poços artesianos, sombrite, irrigação, sementes, adubos...etc). Essa desigualdade em termos estruturais afeta diretamente a produção do agricultor.

Com isso, as consequências podem ser visualizadas quando o agricultor tem dificuldades em atingir as demandas do programa, assim, o não cumprimento das diretrizes do programa não recai sobre o agricultor familiar, mas sim sobre a política pública que tem que tomar medidas equitativas para subsidiar os agricultores/as que se encontram em desvantagens em termos estruturais da produção agrícola e acometidos, muitas vezes, por questões climáticas em casos que a produção toda é perdida. Incluo também, que a produção de alimentos depende de n° variantes para ser passível de êxito. A exemplo, as questões climáticas que devastam produções agrícolas inteiras como excessos de chuvas e principalmente a falta dela. Desse modo, o agricultor Miguel cita que

(...) e tá desse jeito, naquele eclipse que deu naquele dia meus canteiros morreram bem uns sete. O Edvaldo disse que lá no Irmão Renato não escapou um. Então, ele tá sabendo que por mais que a gente tente, por mais que você tente, por mais que você queira fazer as coisas tudo por dentro da técnica, mas aí vem a natureza e tem hora que ela diz que a gente não aprendeu nada. Ela que manda.

Para uma família do campo, que tem como única fonte de renda as atividades exercidas na horta e na roça e que essa renda é utilizada para as despesas domésticas e para a reprodução e manutenção da atividade agrícola, perpassa por algumas dificuldades para manter o bem estar social e econômico, pois nem sempre o que é retirado da terra consegue dá conta das despesas da família, das hortas e roçados. Quando o agricultor/a familiar não consegue tirar da produção a renda suficiente para a reprodução do estabelecimento agrícola e as despesas domésticas este se vê obrigado a optar pela emigração à procura de trabalho nas indústrias, principalmente as indústrias da cana de açúcar e soja.

Conclusões

No decorrer da pesquisa de campo, realizando as entrevistas e estando inserida no contexto estudado, por meio das falas dos agricultores/as e até mesmo dos meus familiares compreendi que a relação do homem com a terra é carregada de sentidos e simbologias. A lógica que permeia essa relação entre indivíduo e meio ambiente vai



muito além de um viés estritamente econômico, onde a lógica que fundamenta as bases do “pequeno agricultor” estão pautadas em uma tríplice relação - família, terra e trabalho -. Antes mesmo do agricultor familiar se inserir no mercado ele já produzia com a finalidade de reproduzir a sua subsistência no campo. Praticando hábitos e técnicas repassadas de geração para geração. (Woortmann, 1987).

Através da minha vivência no campo e por fazer parte de uma família que desenvolvia atividades no campo, tive contato com a produção de hortaliças e com a lógica da vida no campo. Ora, se é da natureza que tiramos nosso sustento, então devemos atentar para sua preservação e continuidade. Assim, a forma de produzir alimentos na agricultura familiar contribui significativamente para a construção da Segurança Alimentar e nutricional da sociedade. Antes do programa ser operacionalizado e executado no município, já existia agricultores familiares em diferentes níveis, em termos de estruturas de produção, produzindo seus alimentos de forma sustentável e segura, comercializando uma parte na feira da cidade e a outra para alimentação da família.

Creio que isso já foi frisado muitas vezes no corpo deste trabalho, mais quando a política pública direcionada para o âmbito rural é executada, levando em consideração as especificidades e contexto de cada município, ela contribui parcialmente com a reprodução da família no campo, ou seja, o agricultor passa a ter como exercer suas atividades nas hortas e roçados sem ter que praticar o êxodo rural e deixar toda a sua história e laços sociais para trás. Tentei explanar, ao longo deste trabalho, as práticas e discursos que os agricultores atribuem a política pública, mas também demonstrar o cenário em que se dá a dinâmica e os processos de negociações do programa.

Contudo, é preciso frisar um aspecto de extrema importância que só pude perceber quando o trabalho já estava finalizado, pois no decorrer da pesquisa com as entrevistas e conversas com os agricultores/as que estavam cadastrados na pesquisa os discursos que foram atribuídos a política pública executada no município de Coelho-Neto/MA foram positivas, em um primeiro momento, em que todos estavam sendo subsidiados e participando ativamente e conseqüentemente sendo beneficiados com o programa. Entretanto, com a volta ao campo os relatos que encontrei não condizia em nada com os que estavam na monografia, alguns interlocutores relataram que com o passar dos meses alguns agricultores foram sendo retirados do programa pois não conseguiram atingir as metas.



Com isso o programa de compra direta dos alimentos advindos da agricultura familiar priorizou aqueles agricultores/as que já possuíam uma estrutura de produção apta para a produção dos alimentos e excluiu aqueles encontravam-se com dificuldades de manter a estrutura da produção apta a produzir. Esse aspecto da política pública universalizante acaba que excluindo aqueles que mais precisam de assistência pois ignoram as particularidades de cada contexto específico, acentuando ainda mais a pobreza no campo.

Referências

Alves-Mazzoti, A. J.; Gewandsznajder, F. Revisão de bibliografia. In: O método nas ciências naturais e sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson, Learning, 2004, p. 179-188.

Brasil. Ministério da Educação. Manual Aquisição de produtos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. 2016. 2o edição- versão atualizada com a resolução CD/FNDE no 04/2015. Disponível em Disponível em: <https://bit.ly/2GMxcdR>

Goldenberg, Mirian. A arte de pesquisar. Editora Record, 1997.

Saraiva, et al. Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar para o programa Nacional de Alimentação Escolar. Red de Revistas Científica de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 2012.

Schmitt, Claudia Job. Aquisição de alimentos da agricultura familiar Integração entre política agrícola e segurança alimentar e nutricional. Revista de política agrícola, v. 14, n. 2, p. 78-88, 2005.

Toyoyoshi, J. Y. et al. "Avaliação da aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para a alimentação escolar", O Mundo da Saúde; 2013, p. 329-335.

Woortmann, Klaas. Com parente não se negueia. O campesinato como ordem moral. Anuário Antropológico. Brasília, Editora UNB/Tempo Brasileiro, 1987.



Análise da política de assentamentos via crédito fundiário no Estado de Mato Grosso do Sul – Brasil

Leonardo Borges Reis

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a análise dos chamados assentamentos de crédito fundiário, mais especificamente, daqueles estabelecidos no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. A genealogia das políticas de reforma agrária por crédito fundiário ocorre no Brasil nos moldes da chamada reforma agrária de mercado (RAM), cujos assentamentos foram implantados inicialmente pelo Banco Mundial a partir da década de 1990 no Estado do Ceará e, posteriormente, em diversos estados, cujo mercado de terras oferecia brechas inexploradas aos interesses do capital. A experiência inicial conduzida pelo Banco Mundial, durante o governo FHC (1995-2002) serviria mais tarde de arcabouço ideológico para a instalação do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no governo Lula (2003-2010), transformando-o em uma política “complementar” de reforma agrária. Na modalidade do PNCF a entrada na terra se faz via mediação comercial: adquirentes do lote, o latifundiário, o Estado e o capital financeiro. Reeditado nos mesmos princípios da RAM do Banco Mundial, o objetivo central do PNCF está em esvaziar a ascensão política de movimentos sociais pró-reforma agrária. A disposição espacial ampla dos assentados no território confirma o viés estratégico de dissuasão presente no PNCF, tal como a progressiva paralisação da reforma estatal que lhe acompanha. A essência da RAM está em desconstruir a noção de reforma agrária redistributiva, concebida até então como uma política pública para atender às reivindicações históricas de luta pela terra no país. Através de investigação quantitativa na base de dados do Sistema de Informações Gerenciais do Crédito Fundiário (SIG-CF), produzimos um quadro geral do avanço do neoliberalismo no campo e seu impacto nas relações entre Estado e campesinato no Estado de Mato Grosso do Sul.

Palavras chave

Reforma agrária de mercado, neoliberalismo, políticas públicas.

Introdução

A presente investigação da temática intitulada reforma agrária de mercado (RAM) foi iniciada há três anos. Os primeiros passos da investigação sobre esse objeto se deram através da avaliação quantitativa e qualitativa dos assentamentos de crédito fundiário



existentes no município de Jardim, cidade polo do Sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul¹, subdividida pela microrregião da Bodoquena. A vasta microrregião, que possui fronteiras com Bolívia e Paraguai, foi palco nas últimas décadas de uma expansão sem precedentes da agricultura comercial e do complexo agroindustrial. Processo este que atinge todo o Estado de Mato Grosso do Sul, desde a corrida aberta pelo mercado externo às *commodities* do agronegócio brasileiro

Em virtude de um longo histórico de concentração fundiária, as forças sociais e políticas que se aglutinam na modernização conservadora do campo expandem sua monopolização sobre o território com severos impactos sociais. Mais recentemente, com a hegemonia do capital financeiro sob a chamada acumulação flexível, os objetivos políticos do Estado brasileiro em torno da reforma agrária sofreram uma disputa acirrada, acentuada por esse bloco histórico em sua retomada neoliberal. Um dos atores institucionais mais significativos dessa fase do capitalismo é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. O arquiteto universal do que ficou conhecido como “Modelo de Reforma Agrária de Mercado” (MRAM) ou reforma agrária de mercado (RAM)².

Na América Latina na década de 1990 a reestruturação capitalista se deu com grande intensidade através de uma primeira geração de reformas, na esteira da crescente dívida externa que assolava os países capitalistas periféricos desde os anos 80. As políticas de liberalização e desmonte do pacto social, de matriz keynesiana, contudo, não foram suficientes, como sói acontecer ao neoliberalismo, para o abrandamento das contradições sociais na região, o estado geral de estagnação e recessão promovido pelo FMI acentuou um conjunto de disputas sociais encabeçadas por encarniçados movimentos sociais.

Do MST ao Zapatismo, a estabilidade macroeconômica então estabelecida se viu ameaçada, como resposta ao cenário, o Bird prepara um pacote reciclado da política neoliberal, no intuito de aprofundar as reformas estruturais de primeira geração. O discurso da mudança, numa propalada alavancada “pós-consenso de Washington”, enfatizou então a necessidade de combate ou alívio da pobreza, tendo sob a mira um desenvolvimento que integrasse de maneira ainda mais eficiente Estado e Mercado³. Um dos componentes estruturais da agenda dessas reformas, chamadas de segunda geração, estava no mantra da liberalização do mercado de terras como panaceia universal.



Entre 1996-1998 a proposta desenhada pelo Bird através de seus intelectuais para a América Latina e Caribe estabeleceu como prioridade três ações estratégicas: a) reforma do Estado; b) combate à pobreza; c) liberalização do mercado de terras, de créditos e trabalho através de mudanças legislativas. No escopo da reformulação das reformas de segunda geração nota-se a ênfase em mudanças internas aos Estados, que de certa maneira foram colocadas em segundo plano inicialmente, afinal, anteriormente a prioridade esteve nos programas de ajuste fiscal e de renegociação da dívida externa. O Bird agora mudará a estratégia por compreender que sem a liberalização das economias nacionais, rumo à superação da “rigidez” e “fechamento” das economias (Políticas Estatais de substituição de importações), não poderia haver a garantia do pagamento do serviço da dívida, por essa razão a mudança nas políticas e instituições tornava-se estratégica.

As citadas políticas de ajuste estrutural e as reformas de segunda geração, suas continuadoras, tem o intuito de garantir a funcionalidade do padrão hegemônico de crescimento econômico, e constituirão a base sobre a qual nascerá o enfoque pró-mercado de terras⁴. Nesse sentido, o combate à pobreza é meramente instrumental, assumindo o caráter esvaziado de uma política compensatória. O rearranjo institucional e jurídico deverá passar na ideologia neoliberal, conseqüentemente, pelo imperativo de tornar os mercados mais dinâmicos e operativos. A liberalização dos mercados de terras (compra, venda e arrendamento) além de trazer a segurança jurídica capaz de reforçar os direitos de propriedade, deveria elevar a economia como um todo à condição de eficiência. Nas palavras de Ramos Filho (2013), que resume exemplarmente a questão:

“A poção mágica apontada para a redução da pobreza (nunca sua eliminação) perpassa à estratégia de liberalização da terra, mediante a difusão da titulação alienável das terras públicas, comunais e privadas, com vistas à promoção de um ambiente político estável, que não ofereça riscos aos produtores nem aos investidores. Com a posse de títulos alienáveis, os investimentos podem facilmente ser ampliados, tendo em vista que a terra, convertida em mercadoria, pode ser oferecida em troca de créditos, possibilitando, por um lado, a contratação de seguros em caso de calamidade, por outro alavancar atividades econômicas que ampliem a produtividade rural, gerando crescimento econômico e conseqüente bem-estar, além de, obviamente, impulsionar o preço da terra convertendo-a em rentável mercadoria. A perspectiva de desenvolvimento apresentada assume uma condição unidimensional, cujo crescimento econômico é o fim único. O capital e o mercado de terras assumem a condição de protagonistas na promoção da



redistribuição deste bem ao eliminar aqueles ociosos por produtores mais eficientes.”
(Ramos Filho, 2013, p. 29).

A distribuição de ativos aos pequenos camponeses e aos mais pobres seria a solução ideal pró-mercado, uma solução barata e mais eficiente, capaz de preservar a poupança social para outros investimentos (provavelmente para a continuidade da remuneração do serviço da dívida). Para destravar o processo de formação dos direitos de propriedade seria necessário afastar as distorções promovidas pelo Estado, principalmente as restrições relativas à transferência da terra. As forças do mercado frente ao processo de acumulação primitiva, só a exemplo da estreiteza e do elevado grau de idealização do argumento, estariam isentas de responsabilidade pelo arranjo desigual da estrutura fundiária.

A flagrante assertiva neoclássica é recorrente, nela a eficiência econômica deveria prescindir da ação reguladora do Estado. As dicotomias Mercado x Estado, Estado-coerção X Mercado-Liberdade acompanham o bojo da elaboração teórica. Contudo, a consequência da elaboração não encontra respaldo objetivo, empírico. O mercado não é o espaço privilegiado do não constrangimento, defender tais pressupostos significa estabelecer os ditames do capitalismo concorrencial, anacronicamente, como ainda válidos no capitalismo do século XXI. Em segundo lugar, nega-se o papel do Estado e da regulação pública sobre as relações econômicas, que por “razões histórico-estruturais, não favorecem o campesinato pobre em parte alguma do mundo.” (Pereira, 2009, p. 51).

Toda a problemática da terra e da desigualdade da estrutura fundiária é tratada sob o idílio do mercado habitado por agentes econômicos abstratos, num jogo cujas regras estariam niveladas. Em outros termos, a ideologia do raciocínio iguala agentes que são historicamente desiguais. A perversidade dessa concepção naturalizante do sistema social só não é menos deletéria do que o processo de sucateamento do aparelho público que lhe segue. Ao se transferir as funções das políticas sociais ao mercado, ignora-se a precarização das condições de vida das populações periféricas. O Estado como agente meramente administrativo, esvaziado em seu papel de pactuante social, deve nesse imperativo abrir espaço aos agentes econômicos livres⁵. Nesse âmbito, pensar a política agrária pelo viés redistributivo e universal torna-se incongruente.

A subordinação da questão agrária ao circuito de acumulação do capital agroindustrial-financeiro é uma das dimensões essenciais da RAM. Estudos como o de Sauer e Pereira



(2006), Pereira (2009) e Ramos Filho (2013) convergem quanto à compreensão de que através do esvaziamento da reforma agrária redistributiva o Estado é tomado como um mero instrumento da ascensão de novas estruturas de poder, estruturas tais baseadas na hegemonia do capital financeiro oligopolizado. Na RAM é clara a relação de esvaziamento das relações de poder, uma vez que ao Estado não cabe desempenhar o papel redistributivo. O viés administrativista é empobrecedor quanto à teoria do Estado:

“a tese do 'nivelamento do campo de jogo', assim como todo o discurso do Banco Mundial sobre a 'reforma institucional' partem do pressuposto de que o Estado seja tão somente uma entidade administrativa, que poderia (e deveria) limitar-se a prover as melhores condições para que agentes econômicos agissem livremente, resultando daí maior eficiência econômica global” (Pereira, 2009, p. 52).

Em seu conjunto, as linhas de ação do Bando Mundial e do MRAM, portanto, estabelecerão ênfase na titulação privada, com avanço sobre direitos comunais e consuetudinários. A garantia institucional de um pungente mercado de terras tituladas alimentaria os mercados de crédito, em consequência ao fato da terra ser tomada como garantia para as operações financeiras. A busca de eliminação de disposições sociais, políticas ou culturais que impeçam a emergência do mercado de compra e venda de terras será o mote dessa proposição, por isso, força-se o avanço de uma base legal e de uma nova configuração institucional que seja capaz de garantir a execução dos programas da RAM. Para que o sistema fosse eficiente, a oferta de titulação deveria ser superior à demanda, para reduzir os custos da terra. Contudo, se na década de 2000 os estudos apontavam que a oferta de créditos era dirigida a grandes proprietários, em 2018, a própria reformulação do PNCF segue essa tendência, haja vista a flexibilização das exigências de renda e patrimônio aos mutuários.

Desde então se torna lugar comum a deslegitimação do Estado e a proposição de arranjos público-privados que desfederalizem a política agrária. Há uma acusação quase que caricatural do Estado, associado à corrupção e ineficiência. É interessante retomar o que Pereira (2009) pondera nesse sentido, afinal, “nenhuma palavra é pronunciada a respeito da grilagem de terras e das diversas modalidades de apropriação privada ilegal de terras públicas, muito comuns nos países do Sul. Definitivamente, as reivindicações históricas do campesinato a favor da retomada de suas terras ilegalmente apropriadas por grandes fazendeiros não constam das diretrizes do Banco mundial.” p. 63.



A retórica em torno da necessidade de um novo aparato de administração de terras terá como base a ideia de diminuir e reorientar o poder regulatório do Estado sobre aquelas questões ligadas à terra rural, mas aqui a reformulação seguirá pela via da simples dinamização dos mercados fundiários. Disfarçada de política, a RAM e o processo de desregulamentação por ela desencadeado delimitam um claro projeto de engenharia social, que, nas palavras do Bird e do governo brasileiro, assume a forma de preocupação com a “paz social”, paz esta necessária ao ambiente de livre-iniciativa e de atração de capitais privados, em outros termos, a chamada segurança institucional. Como reforça Pereira (2009):

“Tais mecanismos são pensados à luz da dinamização dos mercados fundiários, e não da necessidade de proteção dos pequenos agricultores, pois nada se fala a respeito da violência cada vez mais aguda provocada pela expansão da apropriação privada da terra associada à produção de commodities para exportação. Trata-se, pois, de prevenir ou neutralizar conflitos para garantir a segurança do capital, e não para assegurar os direitos do campesinato.” p. 63

Como consequência dessa redefinição do papel do Estado a única política de reforma agrária que será reconhecida como solução para a alta concentração fundiária é a chamada reforma agrária assistida pelo mercado (*market-assisted land reform*). Chamada também de reforma agrária negociada, baseada na comunidade ou administrada pela comunidade “voluntariamente”. Sempre enfatizando esse pano de fundo social em que as relações entre os grupos se dariam de maneira contratualmente harmônica. A presença incontestada do Bird enquanto condutor técnico e moral da gestão da política agrária dos Estados funda-se na universalidade da racionalidade econômica do mercado, sobretudo deste mercado que emerge após o fim do ciclo de 1989, período que ficará conhecido como “o fim da história”. Por essa razão “os agentes locais deveriam se ajustar numa tradução local das estratégias defendidas pelos cânones da teoria econômica dominante. O importante é preservar o estoque de riquezas acumulado por uma minoria, e evitar assim a modificação profunda entre os grupos de poder e classes sociais” (Pereira, 2009, p. 80).

A lógica central do MRAM é a outra face de Janus, que corresponde à subordinação da problemática agrária à dinâmica de reprodução ampliada do capital agroindustrial e da acumulação flexível, aqui se evidencia:



“uma visão monetarista da terra rural, como se fosse tão somente um fator de produção, bem puramente econômico, uma commodity, transacionável como qualquer outra mercadoria. Desconsidera-se que a terra tenha um caráter multidimensional (político, econômico e cultural), razão pela qual o controle e dos direitos de propriedade sobre ela expressam, antes de mais nada, relações de poder entre classes e grupos sociais” (Pereira, 2009, p.80)

Incapaz de solucionar o problema histórico da concentração fundiária, a RAM avançou nas últimas décadas no Brasil de forma alarmante, no estado de Mato Grosso do Sul, conforme veremos, segue-se a tendência estrutural relatada pela literatura.

Fundamentação do problema

Conforme salientado por Fabrini (2008), o processo de concentração de terras no sul de Mato Grosso do Sul está associado ao próprio processo de ocupação do Estado, isto é, a estrutura fundiária dessa região se desenhou praticamente com a chegada do colono europeu. Destarte, o poder das oligarquias regionais se mantém num *continuum* do segundo império à proclamação da república “quando o governo vendia ou arrendava terras devolutas a grandes fazendeiros e empresas capitalistas” (FABRINI, 2008, p. 53). A atuação da famigerada Cia Erva Mate Laranjeira no século XIX bloqueou a fragmentação das terras, nem mesmo pequenos proprietários assalariados foram adotados, uma vez que, prioritariamente, deu-se a exploração da mão- de-obra indígena por meio do cativo. No início do século XX duas frentes colonizadoras aportam ao sul do Mato Grosso do Sul, a primeira é formada por imigrantes sulinos em busca de campos para a expansão da atividade pecuária e ervateira, a segunda frente, mais recente, avança entre meados de 1950 e 1960 e se estabelecem próximos às fronteiras com São Paulo e Paraná. Para Fabrini, em resumo:

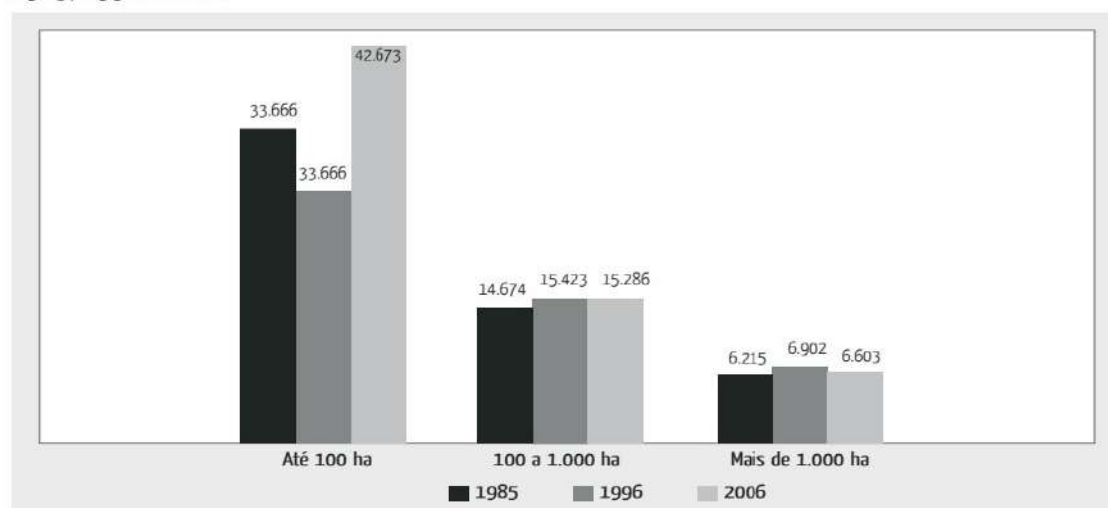
“a estrutura fundiária altamente concentrada deve-se ao processo de ocupação das terras, ou seja, quando o Estado promoveu a transferência/venda de grandes áreas de terras públicas para proprietários fundiários. Portanto, a estrutura fundiária no Sul de Mato Grosso do Sul ‘nasceu’ concentrada.” (Fabrini, 2008, p.54)

De acordo com os dados do último amplo levantamento da situação fundiária do Estado, que ocorre com o censo agropecuário de 2016, e sem contar os dados mais atualizados, o Estado de Mato Grosso do Sul conta com cerca de 70 mil agricultores familiares. Este montante representa 63% dos estabelecimentos agrários do estado, que detêm 1.190.206 hectares. Quando confrontado esse número em relação à posse de terras,



constata-se que representam não mais do que 4% da totalidade. Como se não bastasse essa discrepância, é válido lembrar que os mesmos agricultores familiares “respondem por 40% da produção global, 46% da mão de obra ocupada, 70% da produção de comida, 80% do valor bruto anual por hectares e 95% de pessoas em cada 100 hectares de terra (Fialho, 2014, p.79-80).

Mato Grosso do Sul – Número de propriedades por tamanho (ha)
1985, 1996 e 2006



Fonte Censo Agropecuário de 2006 – IBGE 2006.

Gráfico 1
Fuente: Fialho (2014)

Mato Grosso do Sul – Agricultura Familiar (critério da Lei 11.326)
2006

Item	2006	%
Estabelecimentos	41.104	63
Área dos estabelecimentos (ha)	1.190.206	4
Pessoal ocupado (pessoas)	97.431	46
Com 14 anos ou mais de idade	89.142	45
Valor bruto da produção (R\$ milhões)	500	14

Fonte Censo Agropecuário de 2006 – IBGE 2006.

Tabla 1
Fuente: Fialho (2014)



Mato Grosso do Sul – Área de estabelecimentos agropecuários (ha)
1985, 1996 e 2006

Grupos de área	1985	1996	2006
Menos de 10 ha	64.490	39.681	64.816
10 a menos de 100 ha	670.574	637.163	873.699
100 a menos de 1.000 ha	5.406.314	5.992.676	5.995.105
1.000 ha e mais	24.967.432	24.273.252	23.123.327
Sem infraestrutura ou sem área			
Total	31.108.810	30.942.772	30.056.947

Fonte Censo Agropecuário de 2006 – IBGE 2006.

Tabla 2
Fuente: Fialho (2014)

Conforme se nota, a situação fundiária de Mato Grosso do Sul, no que tange ao restante do Brasil, é particularmente concentradora. A reprodução da pequena propriedade no Estado é ainda mais difícil, visto que a grande propriedade agrícola concentra quase toda a área agricultável dessa região. A exceção à regra é representada, em parte, pelos assentamentos agrários que embora ocupem uma pequena fatia do território, respondem por parcela significativa da população rural. Este fato é referendado pelos municípios de Nioaque e Itaquiraí, onde a população assentada supera a população total. O avanço da RAM no Mato Grosso do Sul têm sido sistemático desde a criação do Banco da Terra entre 2001 e 2002. Nos anos iniciais do programa foram implantados 37 projetos, com 742 famílias, num total de 8.485 hectares. O total de recursos destinados a esses projetos foi da ordem de R\$ 674.442,65. Segundo dados da pasta do governo Estadual, responsável pelos projetos, a SEMAGRO, atualmente os projetos ultrapassam a casa dos cinco mil contratos.

Contudo, a inexistência de dados de pesquisa independentes dificulta a confrontação e avaliação do significado do avanço da reforma agrária neoliberal no Estado de Mato Grosso do Sul. Além do mais, não existem levantamentos sobre o grau de sucesso/fixação desses assentados, o gênero da inserção produtiva regional, tal como das dificuldades de reprodução dos meios de vida desses trabalhadores. Os referidos cinco mil contratos são uma aproximação grosseira se confrontados com os registros do sistema SIG-CF. Quando filtrados os registros de contratos ativos e inativos - isto é, daqueles que devido a alguma pendência burocrática junto ao governo ou banco foram abandonados – obtemos cerca de 2.358 registros, entre assentamentos coletivos e projetos de financiamento individuais, um aumento de 321%.



Apesar do propalado sucesso desses projetos de assentamento, observamos que na modalidade Banco da Terra (uma carteira de financiamento que vigou no Estado entre 2001-2002) os índices de inadimplência são incrivelmente altos. Apesar de não termos acesso às informações de inadimplência, podemos inferir pelo tempo médio de vigência dos contratos mais antigos que os mesmos estão em atraso. Nossa inferência é constatada pelas ações de repactuação promovidas pela agência estadual (AGRAER) que busca sanar as dívidas dos assentados⁶.

Observando os números do SIG-CF, notamos que apenas 15% dos assentados na modalidade Banco da Terra conseguiu quitar os empréstimos. O restante destes, 85%, permanece em inadimplência. Mesmo a condição de quitação não é sinal de que os assentados poderão gozar de boas condições de vida ou produção. O único assentamento responsável pelo índice de 15% está localizado no município de Jardim. Foi possível constatar em pesquisa de campo a este assentamento que parte considerável da renda das famílias é obtida em atividades desenvolvidas fora na terra.

Metodologia

Existem poucas pesquisas no Brasil que tenham sistematizado os dados contidos no SIG-CF (Sistema de informações gerenciais do Crédito Fundiário). Talvez a pesquisa quantitativa mais relevante sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) seja a de Eraldo da Silva Ramos Filho, a saber, *Movimentos Socioterritoriais, a contrarreforma Agrária do Banco Mundial e o Combate à pobreza Rural*, de 2013. Adotamos, em linhas gerais, a metodologia de pesquisa proposta por Eraldo. Inicialmente realizamos o cadastro junto ao governo federal (Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA) para obter acesso ao SIG-CF. Esse sistema permite que lancemos um olhar geral sobre todos os assentamentos do PNCF no Brasil. A pesquisa de Eraldo é pioneira no levantamento e sistematização dessas informações. A coleta e tratamento de dados via SIG-CF é um trabalho exaustivo, que consiste em confrontar informações, descartar incongruências de cadastro (pois o sistema não diferencia, por exemplo, cadastros efetivados daqueles que não passaram do papel), além verificar se os códigos dos imóveis no INCRA coincidem com aqueles contidos no sistema.

O levantamento quantitativo que elaboramos, ainda em fase de execução, produziu algumas variáveis tangíveis. A análise e classificação das informações serão apresentadas conforme tabelas e gráficos da seção de resultados e discussão. Apesar



de o diagnóstico produzido contar apenas com dados do banco do SIG-CF, é necessário ressaltar a importância de pesquisas *in loco*, capazes de aprofundar a leitura do cenário de desenvolvimento das famílias assentadas, tal como dos seus mecanismos de reprodução na terra. Uma das principais barreiras para que estas se realizem está na própria dimensão territorial do Estado de Mato Grosso do Sul, que ocupa uma superfície de 358.159 km², o que corresponde a 22,2% da superfície da Região Centro-Oeste do Brasil e 4,2% do total da área territorial brasileira. Para exemplificar, basta lembrar que o Estado de MS é ligeiramente maior que a Alemanha.

Resultados e discussão

O registro de projetos contratados, segundo o SIG-CF, compreende o intervalo de 2001 a 2018. Na pesquisa de Eraldo Ramos, concluída em 2013, o total de empreendimentos registrados em Mato Grosso do Sul foi de 106 (entre assentamentos coletivos e financiamentos individuais). Esse quantitativo compreendia 0,37% do total dos empreendimentos no país. O levantamento de Eraldo registrou 559 famílias contempladas pelo PNCF no Estado de Mato Grosso do Sul em 2006, o que correspondia a 0,55% do total do país. Em 2017, segundo dados da Subsecretaria de Reordenamento Agrário (2016) o total de contratos efetivados salta para 3,4%. Quanto à área total de assentamentos no Estado, registrou-se 4.351 hectares, o que representava 0,23% da totalidade das áreas de assentamento no Brasil.

Apesar de ainda não termos registrado o total de hectares no PNCF no MS, que inclui os microdados dos assentamentos coletivos e dos contratos individuais, que em muitos casos apenas ampliam uma área produtiva já em funcionamento, foi possível identificar o total de hectares dos assentamentos coletivos do PNCF entre 2001 e 2019. O valor é de 26.111,88 hectares, distribuídos em 98 projetos de assentamento com 2.889 famílias (Gráfico 1). Apesar de se tratar de uma área menor do que aquela gerada pelos assentamentos do INCRA no mesmo período (14.903 famílias em 324.437,27 hectares), a distribuição espacial do PNCF é mais ampla, dos 79 municípios do Estado apenas 22 possuem assentamentos do INCRA. Quanto ao PNCF, o mesmo atinge 48 municípios com seus contratos coletivos e individuais. Atribuimos esta distribuição espacial ao fato das agências responsáveis pela implantação (AGRAER) contarem com maior capilaridade nos municípios. As agências estaduais estão presentes dos 79 municípios do Estado, enquanto que a Superintendência Estadual do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) conta com apenas 6 unidades.



O avanço da RAM no Estado de Mato Grosso do Sul ainda assim é expressivo, principalmente se considerarmos a promessa governamental de que o PNCF funcionaria de maneira complementar, algo que não corresponde à realidade. As desapropriações estão paradas há quase 9 anos. Confrontados os registros do INCRA, verifica-se que o último assentamento realizado pelo órgão foi em 2010. Visto por essa ótica, o avanço do PNCF em Mato Grosso do Sul há muito ultrapassou a política pública de desapropriação, no período estacionário do INCRA, o SIG/CF registra 1.626 propostas. As regiões com maior índice de contratos de RAM correspondem também àquelas de maior registro de acampamentos. Trata-se da região central do Estado, de maior pressão demográfica, uma vez que conta com a capital, Campo Grande, só nesta área são registrados 643 contratos do PNCF.

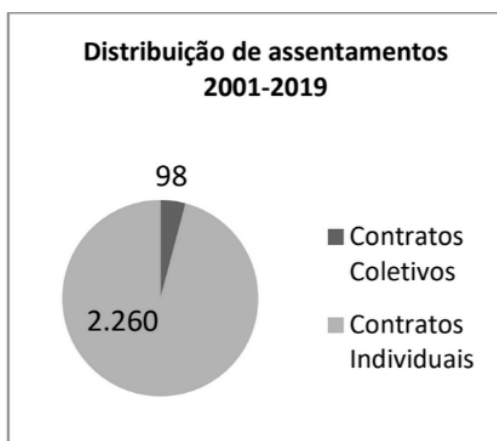


Gráfico 01
Fonte: SIG-CF/MDA 2019

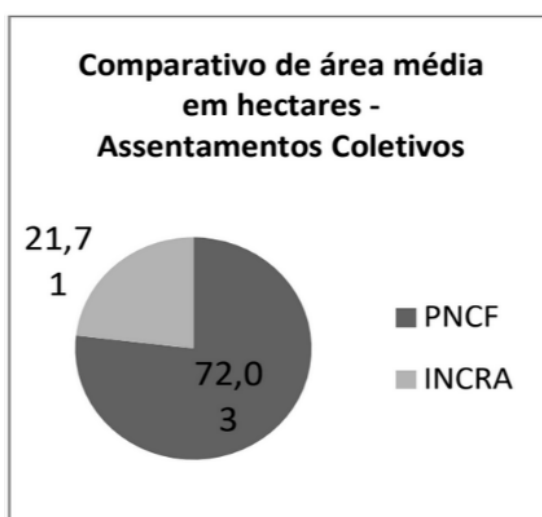


Gráfico 02
Fonte: SIG-CF/MDA 2019

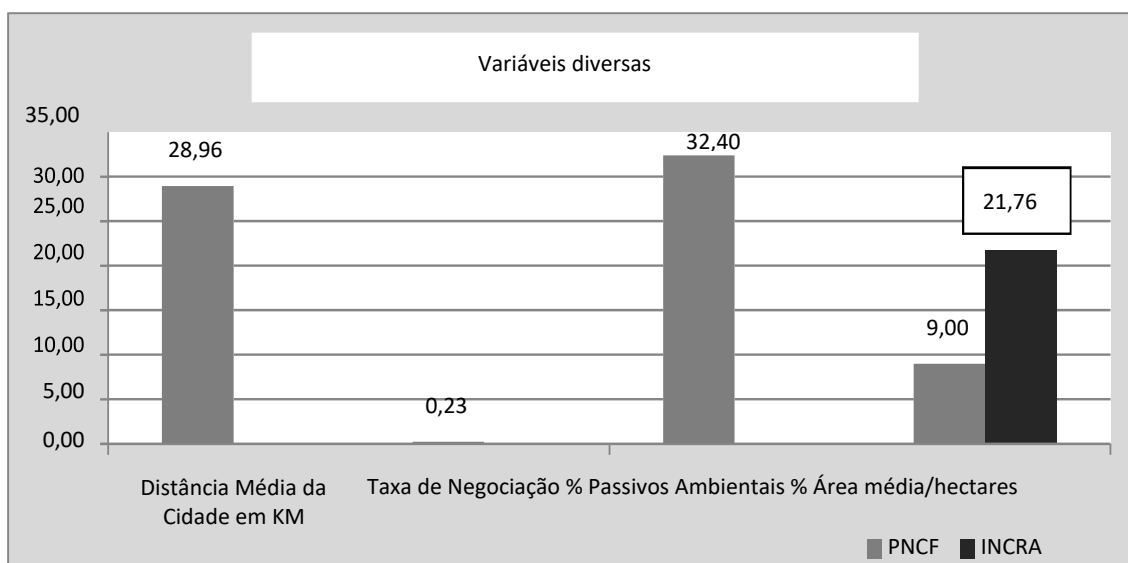


Gráfico 02

Tabela 03

Fonte: SIG-CF/MDA 2019

A partir das variáveis apresentadas na tabela 03 podemos traçar equiparações do desempenho da RAM no Estado de Mato Grosso do Sul que condizem com os problemas estruturais já identificados pelas avaliações nacionais do PNCF produzidas na literatura crítica (Sauer e Pereira, 2006). A desconexão com a política oficial de reforma agrária pode ser constatada, inclusive, pela área média incompatível com o módulo rural. A média dos assentamentos coletivos do PNCF é de 9 de hectares, isto é, área inferior a média dos assentamentos do INCRA. O grau de alcance em número de famílias atingidas também é mais impactante na reforma agrária estatal como Ramos Filho (2013) esclarece

“na reforma agrária os assentamentos criados, na maioria das vezes, por meio da luta pela terra beneficia um grande número de famílias, enquanto os empreendimentos de crédito fundiário abarcam associações de trabalhadores formadas por grupos reduzidos, em média com 30 famílias; além do que, muitos empreendimentos, principalmente aqueles das linhas Banco da Terra e o seu substituto Consolidação da Agricultura Familiar serem implantados com apenas uma família.” p. 74.

A ausência de uma estratégia de desenvolvimento rural é notada, igualmente, pela baixa taxa de negociação das terras, a lógica da mercadoria parece mostrar-se distante daquela prevista pelos ideólogos do Banco Mundial. Não houve constatação de diferenças de preços entre o que foi pedido pelos proprietários e o que se negociou com os contratantes. Fato que se deu por diversas razões, tais como a pressão das condições de vida nos acampamentos, até mesmo a simples falta de informações.



A expansão na última década dos projetos rompeu com o alegado papel de complementaridade às reformas desapropriacionistas. Houve desaceleração das desapropriações. O elevado índice de áreas degradadas (passivo ambiental) é alarmante, o que supõe que muitas das áreas em que ocorreram os projetos do PNCF são passíveis de desapropriação. Além do mais, a ação dos agentes governamentais na implantação dos contratos denota a contrarreforma política, servindo de instrumento de concorrência com os movimentos sociais. Os memoriais de infraestrutura registrados no SIG-CF apontam a existência de imóveis rurais subutilizados, se os assentados aceitam contratos de propriedades com graves problemas ambientais e sem infraestrutura mínima, está implícito o elemento de pressão das condições sociais desses camponeses para terem acesso a terra.

Apesar da relativa proximidade em relação às cidades (28,96 km), muitos assentados relataram em pesquisas de campo⁵ dificuldades de escoar a produção, sendo obrigados a recorrer a produtores intermediários para vender o excedente. O índice de inadimplência apontado pela Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) era de 30% em 2006. Contudo, registros de imprensa com convocações de renegociações (como no caso da carteira Banco da Terra) são superiores a 80%. O perfil de assentado que costuma sobreviver a essas condições é principalmente daqueles que gozavam de algum tipo de renda para que possam bancar sua permanência na terra, ou que necessitam exercer atividades externas ao lote agrário. Podemos supor que sob estas condições o estabelecimento de assalariamentos contingentes (diárias/trabalho assalariado temporário) para garantir a permanência na terra é provavelmente expressivo, além de que a baixa produção de excedentes comercializáveis gera uma inclusão mercantil deficitária.

Considerações finais

A análise empírica dos processos de implantação da reforma agrária de mercado em Mato Grosso do Sul confirma uma condição estrutural (já apontada pela literatura) desse sistema. A transação voluntária entre agentes sociais guiados pela livre vontade é um velho idílio neoclássico.

Notas

¹“A Região Sudoeste é formada por oito municípios e ocupa uma extensão territorial de 40.346,7 km². Grande parte de sua base territorial se localiza na parte sul da bacia pantaneira. A principal atividade econômica vem da agropecuária. Maior evidência para



a pecuária bovina de corte, com um rebanho de 2,8 milhões de cabeças. Os municípios com maiores rebanhos são: Porto Murinho - 820 mil cabeças e Bela Vista - 439 mil. A produção agrícola ainda é incipiente, obtendo em 2009 pouco mais de 158 mil toneladas de grãos em uma área de 50.166ha cultivada. Destaque para a produção de soja e milho nos municípios de Bela Vista e Bonito. Outras cultivares aparecem em pequenas quantidades como a cana-de-açúcar e a mandioca, que juntas ocupam uma área de 1.225 ha. Pela avaliação de produção de bens e serviços de 2008, a região Sudoeste é detentora de um PIB estimado em R\$ 1,22 bilhões, onde 12,9% da formação dessa riqueza vem da atividade industrial. Por ser uma região com forte vocação turística, o setor terciário responde por 54,63% da sua economia, seguido do setor primário, com peso de 32,46%.” (Fialho, 2014, p.67).

² É preciso acentuar aqui a complexa disputa ideológica em torno da noção de reforma agrária, ancorada numa realidade social orgânica que por vezes o termo “reforma agrária comunitária” ou “reforma agrária dirigida pelo mercado não deixa entrever. A matriz de pensamento dos intelectuais neoclássicos do Bird costuma acentuar a unilateralidade do fenômeno, em outras palavras, qualquer abrangência política ou histórica do conceito é descartada. Conforme acentua Ramos Filho (2013), “indubitavelmente, o Banco Mundial, ao atribuir à sua política neoliberal de acesso à terra a denominação de reforma agrária, objetiva esvaziar o conteúdo político e conflituoso embutido neste conceito” p. 32. Em conformidade com os movimentos sociais e principais estudiosos do tema adotamos o conceito de MRAM/RAM largamente utilizado por Sauer, 2006, Pereira, 2009, Ramos Filho, 2013, etc.

³ Segundo João Márcio Mendes Pereira (2009) uma das principais características das reformas de segunda geração, a que Atílio

Borón chamará de contrarreformas, está no reconhecimento implícito de que as reformas promovidas pelo ajuste estrutural dos anos 80 provocaram o crescimento da desigualdade e das tensões sociais. Dessa maneira os programas relativos à mitigação da pobreza não são mais do que exatamente isso, mitigadores. A crítica às políticas de ajuste estrutural é relegada a escanteio, pois “a lógica dos programas de alívio da pobreza do Banco Mundial é, de fato, subordinada ao receituário de reformas estruturais” (Pereira, 2009, p. 41).

⁴ Qualquer levantamento local desse fenômeno, da implantação massiva de assentamentos modelados pela lógica mercantil, terá como articulação primeira a ascensão da crise dos anos 80, no âmbito do endividamento externo das economias do capitalismo periférico, que empuxa então programas de ajuste estrutural e reformas de



austeridade fiscal. O modelo de reforma agrária desapropriatória sofrerá um sistemático ataque no seio daquela clássica disputa política já elucidada por Francisco de Oliveira em “Os direitos do antivalor”.

⁵ Cf. REIS, L. B. e BEM, A. Reforma Agrária de Mercado: análise do crédito fundiário no assentamento Quero-Quero em Jardim, Mato Grosso do Sul, Brasil. In: XVI EGAL 2017 - Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2017, La Paz. MEMORIAS de las ponencias del EGAL 2017. La Paz: Egal, 2017. v. 1. p. 1-15.

⁶ Cf. <http://www.msnoticias.com.br/editorias/geral-ms-noticias/prazo-para-quitacao-de-dividas-do-credito-fundiario-e-banco-da-terra/80133/>

Referências bibliográficas

Fabrini, J. E (2008). A posse e concentração de terra no sul de Mato Grosso do Sul. Em Rosemeire, A. A (Ed.). (2008). *A questão agrária em Mato Grosso do Sul: uma visão multidisciplinar* (pp 53-79). Campo Grande, MS: Editora UFMS.

Fialho, F. (Ed.). (2014). *Mato Grosso do Sul 2000-2013*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.

Pereira, J. M. M (2009). *A política de reforma agrária de mercado do Banco Mundial: fundamentos, objetivos, contradições e perspectivas*. São Paulo: Hucitec.

Ramos Filho, E. S. (2013). *Movimentos socioterritoriais, a Contrarreforma Agrária do Banco Mundial e o Combate à Pobreza Rural* São Paulo/Buenos Aires: Clasco.

Sauer, S. e Pereira, J. M. M. (Ed.). (2006). *Capturando a terra: Banco Mundial, políticas fundiárias neoliberais e reforma agrária de mercado*. São Paulo: Editora Expressão Popular.



Políticas agrárias no Brasil: Do pós-ditadura aos governos neoliberais dos anos

90

Dione Pereira Barbosa¹
Daniella Florencio P. Siqueira²

Resumo

Devido ao aparecimento de novos governos, claramente alinhados com o pensamento Neoliberal no Brasil e alguns países da América Latina, este artigo buscou apresentar e discutir as políticas agrárias brasileiras sob efeito do avanço do neoliberalismo no Brasil, a partir da trajetória dos governos do pós-ditadura militar da última década do século XX. Observando as políticas agrárias implementadas pelos governos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, assim também as relações entre movimentos campestres e o Estado brasileiro. Buscou-se ainda, discutir as medidas governamentais na questão agrária e as mudanças de perspectivas e de modelo de reforma agrária, como por exemplo a implementação do I PNRA e o Modelo de Reforma Agrária de Mercado, ambos modelos que acabaram muito mais por atender os interesses da elite rural do que tão somente aos dos camponeses. Portanto, este trabalho se coloca de forma a poder compreender a forma como os governos neoliberais se comportam diante de massas de camponeses em luta pela terra.

Palavras-chave

Reforma Agrária; Questão Agrária; Política Agrária; Neoliberalismo.

Resumen

Debido a la aparición de nuevos gobiernos, claramente alineados con el pensamiento neoliberal en Brasil y en algunos países latinoamericanos, este artículo buscaba presentar y discutir las políticas agrarias brasileñas con efecto del avance del neoliberalismo en Brasil, a partir de la trayectoria de los gobiernos después de la dictadura militar de la última década del siglo XX. Observar las políticas agrarias implementadas por los gobiernos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, así como las relaciones entre los movimientos campesinos y el Estado brasileño. También se buscaba discutir las medidas gubernamentales en la cuestión agraria y los cambios en las perspectivas y el modelo de reforma agraria, como la implementación de la I PNRA y el Modelo de Reforma del Mercado Agrario, ambos modelos que terminaron sirviendo a los intereses de la élite rural mucho más que sólo a de los campesinos. Por lo tanto, este trabajo se coloca de



tal manera que se pueda entender cómo se comportan los gobiernos neoliberales frente a las masas de campesinos en lucha por la tierra.

Palabras clave

Reforma Agraria; Cuestión Agraria; Política Agraria; Neoliberalismo.

Considerações Iniciais

A Reforma Agrária, como uma política pública, sempre foi tida como um tema que causa desconforto nos governantes brasileiros, assunto que pode colocar orador na condição de ‘comunista’ e que já foi até fundamento para golpe de Estado no Brasil³. “A reforma agrária não é só assunto de lavradores, a reforma agrária é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, parafraseado Pedro Terra, com a poesia A fala da terra.” (SILVA, 2012, p.105). Porém, entender o tema ‘Reforma Agrária’ apenas como algo que cause desconforto é ser reducionista, pelo fato de historicamente este tema se apresentar como uma ferida aberta e causadora de muita violência no campo brasileiro. Entende-se que a Reforma Agrária, como Prado Júnior afirma, é:

Uma repartição melhor da propriedade agrária, e o mais fácil acesso a ela para os trabalhadores rurais constitui portanto a meta principal de uma política orientada para a transformação das relações de trabalho, e melhoria das condições de vida dos trabalhadores.”(Prado Júnior, 1979, p. 69)

Sem acesso à terra, a população continuará condenada à exclusão social. Um país como o Brasil, de dimensões continentais, que mais concentra terras no mundo, fruto de um processo histórico excludente, escravocrata e monocultor.

Questão Agrária: De José Sarney à Itamar Franco

Com o fim da Ditadura Civil-Militar, em que durante vinte e um anos o Brasil esteve submetido, e com o início do período de redemocratização (1985) o primeiro presidente civil a assumir o governo foi José Sarney (1985-1989). No que diz respeito à política agrária desse governo, na abertura do IV Congresso da CONTAG⁴, realizado em Brasília em 1985, Sarney apresentou o I Plano Nacional de Reforma Agrária – I PNRA, que inicialmente apresentou números bem ousados para um governo liderado por um latifundiário do Norte do país⁵, pois previa-se neste plano a cobertura de 15 anos com a desapropriação de 481, 2 milhões de hectares, assentando, assim, próximo de 7,1 milhões de famílias. Esse Plano previa que, em seu primeiro ano em vigor, seriam assentadas 1,4 milhões de famílias em mais ou menos 43 milhões de hectares.



Acontece que nesse contexto de possibilidade da distribuição de terras aos sem-terra brasileiros a elite rural, em franca e evidente oposição, se articulou com a criação da União Democrática Ruralista (UDR)⁶. E, sob pressão desse novo grupo opositor, o I PNRA recebeu 12 versões diferentes, como aponta Silva (2012, p. 87):

Em oposição a essa proposta do governo Sarney, e mesmo do bloco que se formava congregando várias forças sociais (MST, CPT, OAB, CONTAG, ABRA (Associação Brasileira para Reforma Agrária, CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria), surgiu a União Democrática Ruralista – (UDR) uma organização paraestatal. Em 1985, venceu o processo de disputa, passando o I PNRA por 12 versões, recebendo no final elogio dos proprietários rurais e a sofrer severas críticas por parte dos trabalhadores rurais. Em síntese, no governo Sarney pouco fizeram para a concretização das propostas do I PNRA.

Em 1990, Fernando Collor de Melo assumiu a presidência da República, onde permaneceu somente dois anos, devido ao impeachment que sofrera e seu vice assumir sua posição. Durante seu período de governo, assim como nas demais áreas de atuação, o governo Collor viveu de promessas, tudo a bem de manter a elite do país ao seu lado. Na questão agrária não foi diferente, seu ministro da Agricultura, Antonio Cabrera, afirmava: “Vou roubar a bandeira da reforma Agrária das mãos da esquerda” (Morisawa, 2001, p. 148). Em um claro ato demagógico, lançou o Programa Terra Brasil, que prometia desapropriar 2,9 milhões de hectares, assentar 50 mil famílias, destinar Cr\$114 bilhões aos assentados, além de assistência técnica e financeira para as famílias já assentadas e, por fim, destinar a quantia de Cr\$30 bilhões do Banco do Brasil em crédito para os pequenos agricultores. Assim como todos os seus falaciosos projeto de governo, o Programa Terra Brasil em nada foi concretizado (Morissawa, 2001). Em 1992, Collor foi retirado do poder e em seu lugar o mineiro Itamar Franco assume a presidência. Em seu período de governo, Itamar aprovou a Lei Agrária (Lei 8. 629/93) onde foram reclassificadas as propriedades rurais brasileiras, seguindo a seguinte denominação:

Minifúndio – dimensão menor que o módulo rural fixado para o município;

Pequena propriedade – dimensão entre 1 e 4 módulos rurais

Médias propriedades – dimensão entre 5 e 15 módulos rurais

Grandes propriedades – dimensão superior a 15 módulos rurais. (Morissawa, 2001, p. 110)



Ainda, para Morissawa (2001, p.110), “Assim como o Estatuto da Terra⁷, a Lei Agrária foi criada para controlar, pelo menos momentaneamente, as lutas pela reforma agrária”. Já que, conforme o Gráfico 1, entre 1986 e 1993 houve uma explosão na violência no campo.

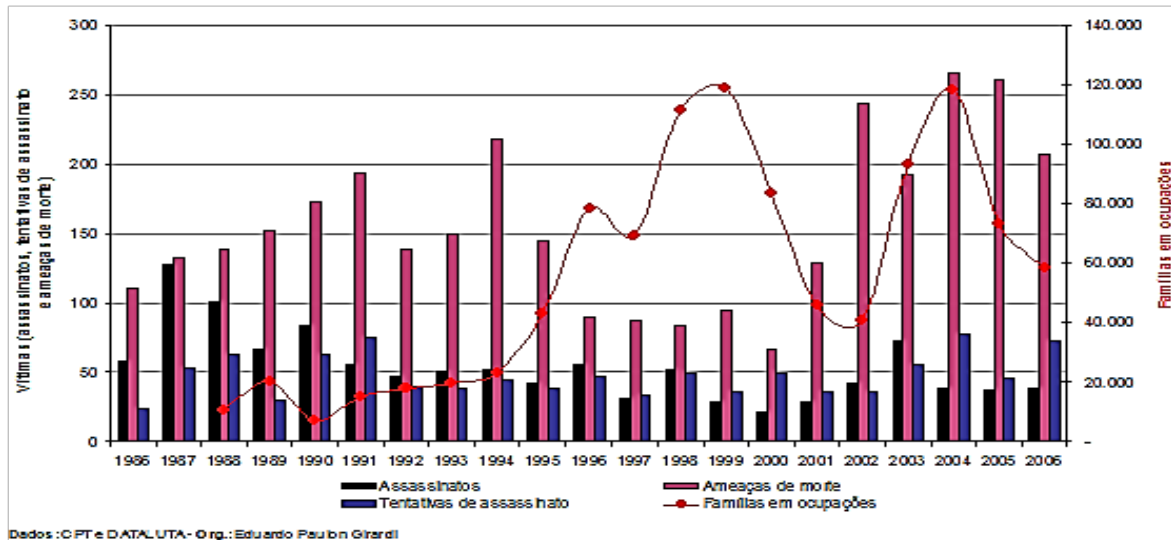


Gráfico 1 - Assassinatos, ameaças de morte e tentativas de assassinato de camponeses e trabalhadores rurais - 1986-2006⁷

Pode-se perceber, no Gráfico 1, que entre os anos de 1986 e 1991, há um grande pico de assassinatos e tentativas de assassinatos no campo e que esses números só foram mais controlados a partir 1992, coincidindo com a saída de Collor, que tinha uma implacável perseguição aos movimentos sociais, a entrada de Itamar Franco e a aprovação da Lei Agrária. Importante também analisarmos o quanto a quantidade de famílias em ocupações foram contidas entre 1991 e 1994, o que não significa que houve uma resolução da questão, mais sim que o Estado pouco fez por esta questão.

O Governo de Fernando Henrique Cardoso e a Relação com a Questão Agrária

Em 1995, chegou à presidência Fernando Henrique Cardoso que havia sido Ministro da Fazenda e um dos criadores do Plano Real no governo Itamar Franco. A política de governo de FHC está amplamente ligada ao neoliberalismo⁸ e a atender as demandas do mercado financeiro. O neoliberalismo nascera como uma resposta à crise do liberalismo, Dadort e Laval (2016, p. 68), apontam que

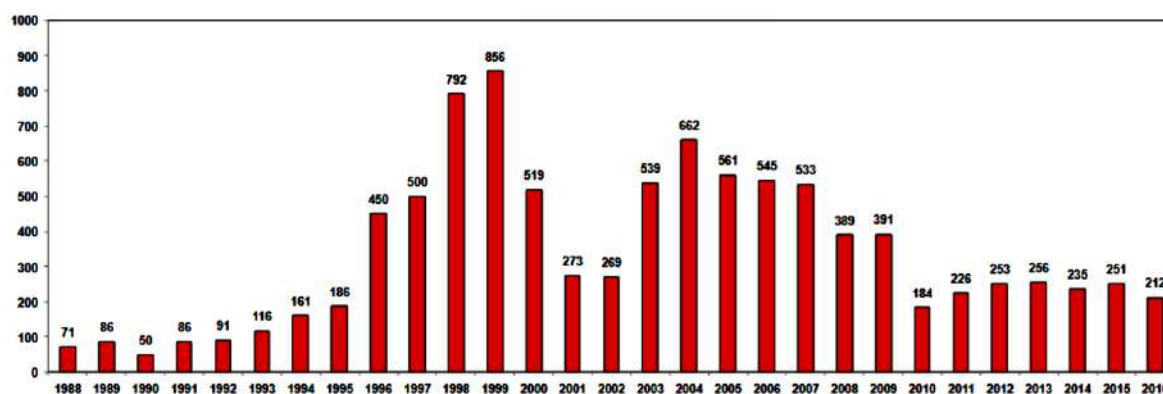
A “crise do liberalismo” revelou a insuficiência do princípio dogmático do laissez-faire para a condução dos negócios governamentais. O caráter fixo das “leis naturais” tornou-



se incapazes de guiar um governo cujo objetivo declarado é assegurar a maior prosperidade possível e, ao mesmo tempo, a ordem social.

O Banco Mundial⁹ torna-se o tutor dos países considerados, a época, desenvolvidos e ao sofrer com as consequências do desenvolvimento capitalista, buscou aplicar soluções para as convulsões sociais. Soluções estas que não estavam preocupadas em combater o mal na raiz, mas sim tratar e controlar os seus efeitos.

O primeiro mandato de FHC (1995-1998) foi marcado pelo grande aumento das ocupações de terras no Brasil, como é apresentado no Gráfico 2¹⁰.



Fonte: DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra, 2017 www.fct.unesp.br/dataluta

Gráfico 2 - Brasil - número de ocupações - 1988-2016

Outra marca dos governos de FHC está na forma como lidava com os movimentos sociais de luta pela terra. Não se pode deixar de lembrar que neste período ocorreram dois massacres contra camponeses no Brasil que se tornaram símbolos da violência do campo, o primeiro foi o massacre de Corumbiara, ocorrido em 08 de Agosto de 1995, o segundo foi o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de Abril de 1996¹¹. Ambos os massacres tiveram repercussão nacional e internacional, o que levou o governo a admitir a grande demanda por terra no Brasil (Carvalho, 2010).

Como reflexo do aumento da violência no campo e o aumento de ocupações das terras, foram lançadas diversas medidas provisórias, chamadas à época de “Pacote anti-invasão”, medidas essas criadas com o objetivo de criminalização dos movimentos sociais do campo, são elas: as MP’s 2.027-38, 2.109-56 e 2.183-56.¹² Estas medidas previam, por exemplo, que “o imóvel rural objeto de esbulho possessório não seria vistoriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, e que a entidade ou organização



que, de qualquer forma, colaborasse com ocupação de terra não receberia qualquer tipo de recursos públicos.” (Carvalho, 2010, p.406). No Art. 2º da MP 2.183/2001, que atualizou a Lei 8. 629 de 1993, temos a seguinte redação:

§ 7o Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em processo de cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for efetivamente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça, sequestro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações.

A redação supracitada mostra como esse pacote, na verdade, serviu para perseguir aqueles que não tinham acesso à terra e que pudessem, por meio dos movimentos sociais do campo, lutar para conquistar a terra, também servindo como uma forma de desarticular os movimentos sociais. Silva (2012, p. 90), afirma que,

O primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998) foi marcado pelo aumento expressivo das ocupações de terra. O alcance dessas lutas é expresso na política de implantação de milhares de assentamentos rurais no país e não das políticas governamentais, como é costumeiro veicular-se na mídia.

Forças Neoliberais e o Modelo de Reforma Agrária de Mercado

O aumento de assentamentos pelo país mudou a forma como Fernando Henrique tratou a questão agrária em seu segundo mandato (1999-2002). Essa mudança se deu ao colocar em prática o Modelo de Reforma Agrária de Mercado – MRAM¹³, assim, este modelo que foi adotado representava a política do Banco Mundial e “não se pode esquecer que as políticas difundidas pelo Banco Mundial tinham como seu eixo discursivo a temática da pobreza, tida como o principal problema social do mundo, a ser combatido a qualquer custo.” (Mendonça, 2013, p. 118). Não havia então um ideal de redistribuição da renda e de riqueza nem tão pouco uma mudança estrutural na concentração de terra, por exemplo. O que se entende é que o “social” estava dissociado do econômico (Mendonça, 2013).



Segundo Ramos Filho (2008),

De 1996 até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, foram criadas quatro linhas de crédito para o financiamento de terras a camponeses, a saber: Projeto São José (PSJ) e a Reforma Agrária Solidária (na escala local do Ceará); Projeto-Piloto de Reforma Agrária e Alívio da Pobreza, mais conhecido como o Cédula da Terra (PCT); Programa Fundo de Terras e de Reforma Agrária – Banco da Terra (BT) e o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural (CFCPR). Todas essas linhas de crédito foram influenciadas diretamente pelas diretrizes programáticas da política fundiária neoliberal, emanada do Banco Mundial. (apud Carvalho, 2013, p. 407).

O Projeto São José ou Reforma Agrária Solidária ocorreu no Ceará, onde uma parceria entre Governo do Estado e Banco Mundial, por meio de um Convênio de Cooperação Técnica com o Banco do Nordeste, disponibilizando um crédito de R\$ 4 milhões e uma complementação do BIRD de R\$ 6 milhões “Esse investimento se consolidou no financiamento de 44 imóveis, distribuídos no Ceará, atendendo 694 famílias, em 23.700 ha.” (Juvêncio, 2011).

Já o Programa Cédula da Terra – PCT, lançado em 1997, tendo como região escolhida a que apresentava a maior concentração de pobreza rural do Brasil (Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia e norte de Minas Gerais), partiu de um empréstimo de US\$90 milhões que seria utilizado para a compra de terras pelos trabalhadores rurais negociados diretamente com os proprietários, esses trabalhadores deveriam estar organizados por meio de associações comunitárias. Mendonça (2013, p.120) aponta que “politicamente, o Cédula Terra visava minimizar a pressão provocada pelas ocupações de terra e a ascensão política dos movimentos sociais, introduzindo o mecanismo de mercado como mediador obrigatório do acesso à terra.”

O Banco da Terra, segundo Mendonça (2013, p.121),

[...] aprovado por unanimidade no Senado (em dezembro de 1997) e consagrado na Câmara dos Deputados (em janeiro de 1998). Tamanha rapidez, inédita nas lides políticas brasileiras, ilustra o empenho do patronato rural em apoiar a implantação do novo Banco, que daria ao mecanismo de mercado como meio de acesso a terra uma dimensão nacional.



A nova instituição baseou-se num fundo nacional, previsto constitucionalmente e destinado a financiar a compra de terras por trabalhadores rurais, tendo como principal objetivo criar uma alternativa nacional ao “modelo tradicional de reforma agrária”, capaz de aliviar os níveis de tensão social no campo e de obstaculizar a ascensão política do MST.

Sendo assim, como os demais programas do governo FHC, este nada mais era do que uma forma de aliviar os conflitos no campo por meio do acesso à terra via comércio. Estes programas, na verdade, não melhoraram a vida das populações camponesas, pois, com a disponibilização de linhas de créditos para compra de terras, o governo acabou por impor duas situações aos trabalhadores sem-terra. Primeiramente, a alta do preço do hectare de terras, que muitas vezes não eram boas, gerando uma concorrência no mercado terras e o consequente aumento de seu preço. Um segundo ponto, talvez o mais agrave, é que ao propor a comercialização de terras, que muitas vezes deveriam ser terras consideradas improdutivas e destinadas a Reforma Agrária, os programas estatais de acesso à terra acabaram por, na verdade, distribuírem uma dívida para o trabalhador ao invés de distribuir riqueza, como aponta Lima et al (2017, p.10),

Quando se usa o termo “reforma agrária de mercado”, para definir e identificar a reforma agrária do nosso país, nele está implícito a crítica a tudo o que ela significa. De fato, de acordo com Sauer (2010), entende-se que o principal objetivo desta é a compra e venda de terra entre agentes privados, conforme a lógica de mercado de oferta e procura, com acréscimo de uma parcela variável de subsídio para investimentos sócio-produtivos. Isso resulta, além de uma disputa político-ideológica com os movimentos sociais agrários, num processo de endividamento desacelerado das famílias envolvidas em programas como o PNCF. E então, o sonho de possuir seu pedaço de chão passa a ser um pesadelo para essas famílias, que diante ao não cumprimento do financiamento precisam renegociar, o que acaba sendo uma dívida impagável.

O PNCF representou a possibilidade de milhares de camponeses de terem acesso à terra, porém a forma desse acesso acabou por tirar a possibilidade de mudança da estrutura social, distribuindo riqueza ou, como Silva (2012, p. 106) afirma,

[...] o PNCF tem contribuído para o amortecimento da luta pela terra, tem seduzido um público potencial da reforma agrária. Homens e mulheres que tinham o desejo de ter a posse da terra para nela se reproduzir enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais.



Considerações Finais

Nos anos posteriores ao recorte temporal feito por este trabalho a Reforma Agrária, no modelo tradicional, seguiu ainda sendo apenas uma utopia dos movimentos sociais, visto que a Reforma Agrária de Mercado tem predominado, mesmo com os últimos governos autointitulados “ala progressista”. Se faz necessário um movimento que seja revolucionário, que possa proporcionar a redistribuição das riquezas e, assim, acabar com sua concentração, neste país onde há muitos pobres com poucas terras e poucos ricos com muitas terras. Ainda será necessário muita luta e resistência para isso ser concretizado, daí toda a importância dos movimentos camponeses, que há anos travam as mais duras batalhas em defesa do direito à terra e, infelizmente, com centenas de mártires.

A mudança de perspectiva de que a terra deveria ser ‘distribuída’, mesmo que por meio da RAM, se deu não por concepção de distribuição da riqueza, mas sim para evitar a explosão de conflitos sociais que levassem a convulsão social e, dessa forma, uma ameaça a estrutura de nossa sociedade capitalista. Como já dito anteriormente, a RAM gerou a elevação do preço de terras e dívida aos camponeses, não trouxe de fato uma mudança na estrutura social, mesmo sob a égide de um governo que se identificou como progressista, os governos posteriores a FHC seguiram a mesma linha de Reforma Agrária de Mercado.

Notas

¹ Professor de História no Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino no Brasil e mestrando em Sociologia pelo Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional/PROFSOCIO, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

² Graduada em História, Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação da Paraíba, Campus-Monteiro-PB e mestranda em Sociologia pelo Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional/PROFSOCIO, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

³ O Golpe Civil-Militar ocorrido no Brasil no ano de 1964 teve como motivação o risco da “comunização” do Brasil, mas que na prática foi uma resposta da elite brasileira ao anúncio das Reformas de Base prometida pelo então presidente João Goulart

⁴ A Confederação Nacional do Trabalhadores da Agricultura – CONTAG, foi fundada em 1963, é uma entidade brasileira que representa os trabalhadores rurais, através das Fetags - Federações estaduais - que, por sua vez, reúnem os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de cada município.



⁵ A Família Sarney detém um patrimônio avaliado em R\$250 milhões, proprietárias de diversos empreendimentos como radio, canais de televisão, propriedades rurais como a fazenda na Ilha de Curupu, Segundo o Site República dos Ruralistas, “Sarney é apontado por uma reportagem recente como proprietário de terras reivindicadas como território quilombola, a 60km de Brasília: a comunidade de Mesquita. Durante as discussões do Código Florestal, em 2011, rejeitou a proposta de moratória de dez anos para o desmatamento na Amazônia.”

⁶ A União Democrática Ruralista – UDR nasceu no período do Governo de José Sarney com o objetivo de defender os interesses da elite ruralista do Brasil naquele momento, especificamente, para evitar a expropriação de terras improdutivas para fins de Reforma Agrária e a aprovação do texto do I PNRA. A UDR é acusada de ser a grande responsável pela violência no campo. Esta entidade alega defender os interesses de todos os produtores rurais, porém sua prática tem sido contrária, defendendo os interesses dos grandes ruralistas.

⁷ A Lei 4504/65, conhecida popularmente como “Estatuto da Terra”, foi uma lei criada pelos Militares no poder durante a ditadura civil-militar no Brasil para reger a questão agrária do país. Nesta lei está disciplinada a forma de acesso à terra via reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura, porém a Reforma Agrária ficou apenas no papel.

⁸ Atlas da Questão Agrária Brasileira, in: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/violencia.htm>

⁹ O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas que prega a não intervenção estatal em todos os setores da sociedade, dentre seus ideais estão: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, privatização de empresas estatais, desregulamentação (flexibilização de leis econômicas e trabalhistas) direito à propriedade intelectual. Essa política tem beneficiado as grandes potências e corporações, tem gerado desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional.

¹⁰ O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que efetua empréstimos a países em desenvolvimento. É o maior e mais conhecido banco de desenvolvimento no mundo, além de possuir o status de observador no Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas e em outros fóruns internacionais, como o G-20 financeiro. A sede do banco está situada em Washington, D.C., Estados Unidos da América. O Banco Mundial é parte do Grupo do Banco Mundial.

¹¹ Dataluta (2016, p. 15)



¹² O Massacre de Corumbiara foi o resultado de um conflito violento ocorrido em 9 de agosto de 1995, no município de Corumbiara, Rondônia. O conflito começou quando policiais entraram em confronto com camponeses sem-terra que estavam ocupando uma área, resultando na morte de 12 pessoas (entre elas uma criança de nove anos e dois policiais). O Massacre de Eldorado dos Carajás ocorreu em 17 de abril de 1996 no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. No massacre 19 sem-terra foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. O confronto ocorreu quando 1.500 sem-terra que estavam acampados na região decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras, principalmente as da Fazenda Macaxeira. A Polícia Militar foi encarregada de tirá-los do local, porque estariam obstruindo a rodovia PA-150, que liga a capital (Belém) ao sul do estado. Dezenove pessoas morreram na hora, outras duas morreram anos depois, vítimas das sequelas, e outras 67 ficaram feridas.

¹³ As MP's, conhecidas como anti-invasão era uma série de medidas provisórias que proibia repasse de dinheiro a entidades que participaram desse tipo de prática. Além disso, pelo proposto por FHC na ocasião, as terras invadidas ficavam proibidos por dois anos de serem inseridas em programas de reforma agrária. Alckmin disse que vai dobrar esse tempo.

¹⁴ Modelo de Reforma Agrária – MRAM, também chamada de Reforma Agrária Racional, é um modelo de reforma agrária praticado dentro do PNCF, para a elite ruralista, este modelo é *racional*, já que aquisição de terra é via processo de compra e venda entre as famílias e os proprietários de terra, desprezando a desapropriação de terras em prol de uma política agrária de valorização do mercado. A Reforma Agrária Racional seria: aquela que não gera conflito; O assentamento de famílias enquanto uma política social compensatória; Onde as famílias negociem, pacífica e diretamente, a compra e venda da terra com os proprietários, nesse caso o processo de mercantilização da política de reforma agrária. A compra da terra é feita através das associações de trabalhadores, sem autonomia na escolha das áreas. Essas associações muitas vezes são organizadas pelos próprios donos dos imóveis e políticos locais; Onde os proprietários não saiam prejudicados, recebendo dinheiro mediante venda e não através de títulos da Dívida Agrária (20 anos para resgatar); Substituição do instrumento constitucional de desapropriação (SILVA, 2012). Outro modelo de Reforma seria a Reforma Agrária Tradicional, que, para Silva (2012, p. 25), "Tradicional é o modelo dominante a partir de meados da década de 1980, baseado na desapropriação de terras consideradas improdutivas e na criação de assentamentos rurais."



Referências

Brasil (2001). Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001. Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1o de março de 1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências. Medida Provisória Nº 2.183-56. Brasília, DF, 24 ago. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2183-56.htm>. Acesso em: 01 mar. 2019.

Carvalho, L. H. (2010). A concentração fundiária e as políticas agrárias governamentais recentes. *Revista IDEAS – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade*, v. 4, n. 2, (pp. 395-428), Rio de Janeiro – RJ.

Dardot, P. & Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Editora Boitempo.

Girardi, E. P. et al (Org.) (2016). *Dataluta: Banco de dados da luta pela terra relatório Brasil 2016*. São Paulo: Unesp.

Juvencio, S. M. S. (2011). Reforma agrária a luz das ações do banco mundial: Experiência do projeto São José – Ação fundiária no Ceará. In: *Jornada internacional de políticas públicas*, 5, São Luís. Anais. São Luís: UFMA, 2011. p. 1 - 9. Disponível em: <<https://bit.ly/36RQb12>>. Acesso em: 01 mar. 2019.

Lima, V. M. C., Silva, A. L. M., Dantas, A. B. S. C. & Oliveira, I. V. F. (2017). O impacto do programa nacional de crédito fundiário nas condições de vida dos trabalhadores rurais no Brasil. In: *Jornada Internacional Políticas Públicas*, 8. 2017, (pp. 1 – 10) São Luís. Anais. São Luís: UFMA. Disponível em: <<https://bit.ly/3ddKQ5B>>. Acesso em: 01 mar. 2019.

Mendonça, S. R. (2013) As políticas de “reforma agrária” no Brasil recente (1995 – 2002). *Estudios Rurales*, Buenos Aires, v. 3, n. 4, (pp.116-125), Semestral. Disponível em: <<https://bit.ly/2GQQZsb>>. Acesso em: 01 mar. 2019.

Morissawa, M. (2001). *A história da luta pela terra e o MST*. São Paulo: Expressão Popular, 2001.

Prado JR., C. (1979) *A questão agrária*. 4.ed. São Paulo, Brasiliense.

Silva, M. F. (2012). “Reforma Agrária de Mercado” ou Atualização do Clientelismo? O Programa Nacional de Crédito Fundiário e o assentamento de famílias sem-terra no Cariri Ocidental paraibano. 2012. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande.



A reforma agrária como instrumento de poder político: Pensando a conjuntura brasileira

Aucilene Rodrigues da Silva

Resumo

Embora as discussões a respeito da reforma agrária brasileira tenha se iniciado há alguns anos, se perpetua até os dias atuais, uma das questões mais intrigante: quais os motivos que levaram a não concretização da reforma agrária no Brasil. Assim, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre a reforma agrária como instrumento de poder político no Brasil. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental em diversas fontes: livros, revistas, artigos, relatórios, leis, dentre outros. O trabalho aponta e problematiza o posicionamento dos representantes políticos em determinados períodos históricos e identifica as perspectivas da reforma agrária no contexto atual. Diante das análises percebe-se que a reforma agrária no Brasil só será possível mediante uma modificação na correlação de forças políticas e diante de um novo projeto de país que enxergue a reforma agrária como uma questão urgente e necessária para o desenvolvimento nacional.

Palavras-chave

Desigualdade Social. Desenvolvimento. Latifúndio. Questão Agrária. Políticas Públicas.

Introdução

A questão agrária no Brasil (má distribuição de terra e renda, injustiça no campo e desigual estrutura agrária), tem sua origem no processo de colonização portuguesa que se instaurou através do regime de sesmarias. Neste sistema o domínio das terras era mantido pelo rei ou Estado, enquanto o agricultor, só tinha direito a posse da terra. No entanto, não eram todos que tinham esse privilégio, apenas os brancos “puro de sangue” e católicos. Sendo assim, escravos, índios e imigrantes eram excluídos (Miralha, 2006).

Segundo Ribeiro e Oliveira (2014) a formação da estrutura agrária brasileira se constituiu em um momento histórico no qual a terra era tida como sinônimo de poder, em virtude disso, concentrava-se nas mãos de alguns poucos proprietários. Estes poucos e grandes proprietários desempenharam ou ainda desempenham o papel de chefe político local, a partir da lógica paternalista, onde a política é praticada como uma



extensão da vida privada e, assim sendo, a política desponta como um negócio privado das elites.

Seguindo por este viés, a reforma agrária aparece como inviável aos olhos dos grandes proprietários de terras e políticos, tendo em vista, que a mesma não se trata apenas da distribuição pura de terras, mas de um conjunto de medidas que visem atender os princípios de justiça social e o aumento da produtividade conforme previsto na lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no art 1º, § 1 que conceitua a reforma agrária da seguinte maneira:

Art.1º, § 1º- Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade (Brasil, 1964).

Considerando a definição acima, acredita-se que a implementação da reforma agrária seria a solução para muitos problemas sociais do Brasil, a saber: o êxodo rural e a superlotação nos centros urbanos; a redução das desigualdades sociais e, conseqüentemente, da miséria; criminalidade e desemprego; e contribuiria para o aumento da produtividade no campo através da colaboração do Estado na implementação de políticas de apoio à produção e comercialização.

Nesse sentido, o artigo tem como objetivo refletir sobre a reforma agrária como instrumento de poder político no Brasil. A metodologia utilizada foi do tipo bibliográfica e documental realizada em diversas fontes: livros, revistas, artigos, relatórios, leis, dentre outros.

A Reforma Agrária e Distribuição de Terra: uma Dicotomia

A questão agrária é um problema amplamente discutido no Brasil e existe uma diversidade de conceitos e métodos para abordagem dessa problemática. Além disso, tem-se um marco legal, a lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da terra), que regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. Esse tópico não tem o objetivo de discutir as diferenças conceituais existentes, mas esclarecer a dicotomia entre reforma agrária e distribuição de terra.

Como mencionado anteriormente, o art 1º, § 1 do Estatuto da terra estabelece uma reformulação na estrutura agrária de modo a atender aos princípios de justiça social e



ao aumento de produtividade, evidenciando nas entrelinhas, a ineficiência do sistema vigente. Partindo desse pressuposto, Lima (1997) se debruça sobre o aspecto da eficiência para afirmar que a “reforma agrária é a modificação da estrutura agrária deficiente, de um país, ou de uma região, para torná-la eficiente, de acordo com uma política do poder público”, sendo executada de acordo com as instituições jurídicas especialmente elaboradas a sua execução, modificando assim, as até então existentes (Lima, 1997, p. 231).

Corroborando com essa ideia, Alvarenga (1971) apud Magalhães (1988), enfatiza que a reforma agrária deve “liquidar um determinado sistema agrário que se reputa como inadequado” (Magalhães, 1988, p. 08). o autor enfatiza a necessidade de uma reforma agrária com rapidez, que importe em redistribuição de terra e eliminação das barreiras institucionais que impedem o processo de desenvolvimento social e econômico. Como ressalta Borges (1991, p.22) reforma agrária “[...] não se trata de distribuição de terras pura e simplesmente, mas envolve a ideia de corrigir o que estiver mal feito, atentando aos princípios de justiça social”.

Cavalcanti (1959) em sua definição aponta a reforma agrária como sendo um conjunto de aspectos que estão interligados entre si e que proporcionam o melhoramento das condições de vida para os sujeitos do campo. Em suma:

A reforma agrária é a revisão e o reajustamento das normas jurídico- sociais e econômicos-financeiras que regem a estrutura agrária do país, visando à valorização do trabalhador do campo e ao incremento da produção, mediante a distribuição, utilização e exploração sociais e racionais da propriedade agrícola, à melhor organização e extensão do crédito agrícola e ao melhoramento das condições de vida da população rural. (Cavalcanti, 1959, p.52)

O conceito de reforma agrária é bastante amplo, não podendo se reduzir a distribuição de terras pura e simplesmente, e sim, compreendida como uma série de fatores que juntos promovam o bem-estar social, o incentivo à produtividade no campo e o desenvolvimento econômico de modo geral.

De acordo com a Constituição de 1988 a desapropriação da grande propriedade de terra improdutiva se dá mediante a interesses público e/ou o respeito à função social. Este último tem gerado grandes debates, pois trata-se do elemento essencial no processo de reforma agrária.



Para Araújo (1999) a função social da terra corresponde ao uso correto e a distribuição justa da terra a fim de atender ao bem estar-social da coletividade, por meio do aumento da produtividade e da promoção de justiça social. Tanajura (2000) destaca que a terra que não atender aos critérios de função social mencionados, fica vulnerável a intervenção do Estado e, certamente, a desapropriação.

No que diz respeito a desapropriação, Whitaker (1927, p. 3) explicita: “a autoridade pública competente, em casos expressos em lei e mediante indenização, determina que a propriedade individual seja transferida a quem dela se utilize em interesse da coletividade”. Neste contexto, a desapropriação é defendida como a transferência da propriedade privada ao patrimônio público com finalidade de suprir as necessidades da coletividade.

A desapropriação de terra no país foi parcialmente colocada em prática, aconteceram várias desapropriações entre o governo de Sarney (1985-1989) e Dilma Rousseff (2011-2013). Conforme citado por Guerrero e Bergamasco (2014) foram no total 6.630 imóveis desapropriados, por decreto, após o período de redemocratização do país. Essas propriedades desapropriadas pelo Estado foram loteadas e direcionadas às famílias que não possuíam terras. Entretanto, as condições materiais dos assentamentos e a falta de políticas básicas, tais como: crédito, comercialização, capacitação técnicas dentre outras, capazes de assegurar que os assentados tenham condições digna de permanecer no lote é o X da questão.

Nesse sentido concorda-se aqui com Miralha (2006, p. 162) que “não se tem realizado reforma agrária no Brasil, mas sim, uma política de distribuição de terras com pouca preocupação quanto ao futuro do assentado na terra [...]” e que a política de assentamentos rurais “não se constitui em uma verdadeira reforma agrária, também, pelo fato de, na maioria das desapropriações ocorrer a indenização dos ‘proprietários’ a preços que incluem a especulação imobiliária”. Esse fato impede um melhor investimento nos assentamentos e dificulta uma reforma ampla na estrutura agrária.

Desse modo, percebe-se que a dicotomia existente está estreitamente ligada à execução do projeto de reforma agrária no país, na qual, a materialização de um dos seus principais objetivos, a política de assentamentos rurais, não é desenvolvida de maneira satisfatória pelo Estado. A seguir, será feito um recorte histórico acerca das discussões sobre o processo de reforma agrária no país.



Recorte Histórico: a Reforma Agrária nos Governo de Goulart a Temer

Goulart - Sarney

No Brasil houve apenas dois momentos em que a reforma agrária chegou de fato a entrar em pauta na política nacional. O primeiro foi no mandato de João Goulart (1961-1964), e se deu por iniciativa do Executivo Federal para discutir as chamadas reformas de base que, posteriormente, foi brecada pelo golpe militar de 1964. O segundo foi no governo de Sarney (1985-1989) com a divulgação do Plano Nacional de Reforma Agrária em 1985 resultante do processo de democratização e grandes mobilizações da sociedade (Cardia, 2003).

Para Nobuaki Yamauti (2005), no início do mandato de João Goulart, existia fortemente o interesse pela concretização das reformas sociais, especialmente, a reforma agrária, por parte do governo, partidos políticos, sindicatos, igreja, militares, movimentos sociais e sociedade civil. Nesta época, ocorreram alguns avanços visando a modificação da estrutura fundiária do Brasil, começando pelo enquadramento da pauta na agenda Nacional.

Em 1962 foi constituída, com o apoio federal, a Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA), instituição similar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) dos dias atuais. Posteriormente, João Goulart, cumprindo com o compromisso firmado durante a campanha eleitoral, no dia 15 de Abril de 1963, encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de emenda constitucional que possibilitaria a indenização de desapropriação com títulos da dívida pública e não mais em dinheiro como descrito na Carta Magna (Alcantara, 1976, p.211).

Em seguida, o cenário favorável ao projeto de reforma agrária começou a ser fragmentado diante do posicionamento por parte de alguns partidos políticos em contraposição às ideias pleiteadas pelo governo no tocante da reforma agrária. Iniciou-se com a União Democrática Nacional - UND que, acatando os interesses da oposição, decidiu que a constituição era intocável (Castelo Branco, 1975).

De acordo com Nobuaki Yamauti (2005, p.71), a decisão não foi por acaso, era o início da articulação para o golpe militar, pois dias antes o deputado Bilac Pinto, que seria eleito a presidente da UND, se reuniu com o general Humberto Castelo Branco, responsável pelo comando do golpe militar no ano seguinte 1964, no qual, “garantiu que, qualquer que fosse a decisão do Congresso Nacional, teria o apoio das tropas dispostas a se oporem a uma ação subversiva dos círculos governamentais”.



Nobuaki Yamauti (2005), destaca ainda que, a UND tinha a base política praticamente composta pela oligarquia rural, aspecto este, que, possivelmente, colaborou para a decisão do partido político. Alcantara (1976) aponta que após o posicionamento da UND e, diante da pressão de suas bases ruralistas, o Partido Democrático Social - PSD que demonstrava apoio a emenda constitucional apresentada pelo governo recuou imediatamente.

Em maio de 1963, o projeto que viabilizava a reforma agrária proposto através de emenda constitucional pelo Partido Trabalhista Brasileiro foi rejeitado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, por interferência do relator Aliomar Baleeiro, da UND (Hippolito, 1985; Alcantara, 1976).

No ano seguinte, em março de 1964, foi desenvolvida pelo Ibope uma pesquisa junto a população para saber se a reforma agrária era necessária no Brasil, onde 72% dos entrevistados nas oito principais capitais do país afirmaram ser necessária, enquanto 11% disseram ser desnecessária e os 16% restante não sabiam responder (Lavareda, 1989). Curiosamente, após a pesquisa, em abril de 1964, os planos de Goulart de realizar uma reforma agrária efetiva no Brasil foram frustrados pelo golpe militar articulado contra o governo.

Em concordância, Miralha (2006, p.07) considera que “o grande momento histórico da realização da reforma agrária e a diminuição das desigualdades sociais no Brasil foi sabotado e destruído por um pacto entre as elites (o golpe de Estado)”. Assim, “a velha oligarquia rural que permeia o poder político através de vários deputados, senadores, governadores, etc. e a burguesia industrial decidiram manter inalterada a estrutura fundiária brasileira e assim, mudaram o rumo do país”.

A história é semelhante durante o mandato de Sarney (1985-1989), após um mês do anúncio da proposta do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), os proprietários de terra realizaram um congresso em Brasília e criaram a União Democrática Ruralista (UDR) no intuito de combater o plano de reforma do governo. Assim como discorre José de Souza Martins,

Terminou a ditadura e sobrou a questão agrária não resolvida e mal encaminhada [...] a ditadura resolveu modernizar a economia dos grandes proprietários de terra promovendo uma associação entre o grande capital e a grande propriedade territorial, através de incentivos fiscais. (Martins, 1997, p. 35).



Para o autor, a escolha tomada pelo Estado foi não confrontar os interesses dos ruralistas. No primeiro ano de seu governo, em 1985, a versão final do PNRA foi aprovada com algumas transformações, por um lado, privilegiando os interesses dos grandes proprietários de terra e, por outro, não contemplando os interesses dos movimentos sociais e nem tampouco dos trabalhadores rurais.

Fernandes (2003, p. 33) aponta que o ataque dos ruralistas foi “exterminador” e denuncia que os ruralistas vinculados ao governo “influenciaram politicamente para a derrubada do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)” e, posteriormente, frearam a implantação do PNRA em sua versão original.

No decorrer deste período houve um agrupamento de empecilhos, dentre eles jurídicos, condicionados para paralisar as ações da reforma agrária. Bergamasco e Norder (2003) a “criação de obstáculos jurídicos e administrativos que apontavam para uma paralisia não apenas política, mais também jurídica e institucional dos programas de implementação de assentamentos rurais” que, embora muito lenta e parcialmente, estava acontecendo nos anos 80. (Bergamasco; Norder, 2003, p. 33).

Em linhas gerais, a reforma agrária, no período apresentado, tinha grande chance de ser concretizada, considerando que estava inserida na pauta governamental e contava com projeto em tramitação no congresso, todavia, não foi efetivada devido às articulações e aos interesses políticos da bancada ruralista que se sobressaíram e paralisaram o projeto de reforma agrária.

Fernando Henrique Cardoso (FHC)

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 -1998), após muitas reivindicações da sociedade civil e dos movimentos sociais foi realizada a mais ampla política de assentamentos rurais, foram 287.994 famílias assentadas, conforme dados apresentados pelo INCRA. Com isso, propagou-se o discurso que o governo de FHC desenvolveu a maior reforma agrária no país.

Mattei (2012) salienta que, embora o governo insistisse que estava fazendo a maior “reforma agrária do mundo”, os dados exibidos pelo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006) apontava que aproximadamente 450 mil propriedades rurais, especialmente, as com áreas inferiores a 10 hectares, haviam desaparecido, ou seja, ainda existia a forte tendência de concentração de terras no país.



Fernandes (2003, p. 35) externa que “na verdade, o governo Cardoso nunca possuiu um projeto de reforma agrária, a maior parte dos assentamentos implantados foram resultados de ocupações de terra”, ou seja, era uma estratégia utilizada para apazegar os conflitos. Ainda na percepção do autor(p.02), FHC “em seu segundo mandato, mudou de estratégia e desenvolveu uma política agrária extremamente repressora, criminalizando a luta pela terra e desenvolvendo uma política de mercantilização da terra.”

Exemplo disso,foia declaração de Malan ministro da Agricultura, alegando que “pesquisadores ligados ao governo buscaram demonstrar que o futuro do campo brasileiro é ter cerca de 600 mil estabelecimentos agropecuários e apenas 5% da população trabalhando na agricultura” (Alentejano, 2004, p. 04). O ministro tinha como principal intuito promover as exportações através da narrativa de que a agricultura brasileira deveria se especializar na produção de alimentos com melhor mercado internacional, importando os demais, o que significaria, a eliminação de políticas direcionadas à agricultura familiar.

Martins (2003) expressa a questão agrária é também uma questão política mediante ao conjunto de interesses sociais e políticos revelado pelas classes dominantes, especificamente, pelos setores que têm grandes interesses pela propriedade da terra.

Neste sentido, a reforma agrária por se tratar de uma questão política, envolvendo vários interesses e segmentos sociais não foi, historicamente, concretizada. O Brasil tradicional e arcaico da dominação patrimonial, do clientelismo político, do coronelismo, é também um produto do regime fundiário e parte da questão agrária. Não fosse assim, a reforma teria sido feita e concluída. (Martins, 2003, p.167).

Conforme discorrido, o discurso incorporado pelo próprio FHC e pela sociedade civil era que ele tinha desenvolvido a maior reforma agrária no país. Entretanto, a literatura acessada esclarece que o governo atendia apenas às pressões impostas pelos movimentos sociais e, posteriormente, demonstra a inexistência de um modelo de reforma agrária que vise a distribuição de renda e inclusão social adotado pelo governo e, finalizando, ressalta que os interesses das classes dominantes, sobretudo, daqueles que têm grandes interesses pela propriedade da terra são sempre atendidos e/ ou mantidos pelos governos.



Lula - Dilma - Temer

De acordo com Santos (2014), às expectativas da sociedade civil e movimentos sociais afloraram no governo Lula e Dilma (2003 - 2016), sobretudo, no primeiro mandato do governo Lula por se colocar adepto à reforma agrária. No entanto, enquanto governo de coalizão, fez alianças com vários setores, incluindo, as oligarquias atrasadas que dominavam a política em várias regiões e ainda com o agronegócio. Assim, a questão agrária passou a ser abordada como um problema institucional e não mais como uma luta de classe e, portanto, seria resolvida com diálogo e não com conflitos.

Santos (2014) frisa ainda que esse critério governamental se tratava apenas de uma maneira de maquiar as verdadeiras intenções contidas no seio do governo, pois na medida em que o governo elaborava o II Plano Nacional de Reforma Agrária outro plano paralelo, a ser adotado pelo governo, era elaborado por técnicos das autarquias agrárias do Estado. Muito inferior em termos de meta e com outra abordagem conceitual. (Santos, 2014).

No que concerne ao PNRA, Albuquerque (2006, p. 98) comenta que “a proposta do II Plano Nacional de Reforma Agrária foi elaborada por solicitação do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), construída em interação com a estrutura do MDA/ INCRA e em comunicação com os movimentos sociais”.

O PNRA foi fruto do esforço coletivo entre servidores e técnicos do governo, movimentos sociais e comunidade acadêmica e apresentava condições favoráveis a implantação de um projeto de reforma agrária o que motivou as autarquias do Estado a elaborarem outro plano, muito inferior em termos de meta e com outra abordagem conceitual, para substituí-lo. Em outros termos, com a adoção do plano secundário, “o governo Lula deu continuidade à política agrária do governo de FHC, intensificou ainda mais o desenvolvimento do sistema do agronegócio, estruturou uma política de estado que pudesse conciliar o desenvolvimento pleno da agricultura capitalista” (Santos, 2014, p. 11). O problema é ainda mais denso, pois além de, em certa medida, o governo Lula e, posteriormente Dilma, defender os interesses das elites, em sua maioria, os grandes proprietários de terra envolvidos com o agronegócio, Lula e Dilma “tornaram o agronegócio como peça chave da economia brasileira, reestruturando o país como exportador de produtos primários e intensificando ainda mais seu papel na divisão internacional do trabalho” (Santos, 2014, p.11).



A lógica de coalizão desenvolvida na gestão petista optando por uma política agrícola que fortalecesse a agricultura familiar e o agronegócio, concomitantemente, sofreu uma ruptura em meados de 2015 e resultou na união entre bancada ruralista e o vice-presidente, em seguida, no impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Logo após, Michel Temer assumiu a presidência do Brasil e se dedicou a executar práticas contrárias aos direitos do povo, inclusive, referente a reforma agrária começando pela extinção do MDA.

Para Alentejano (2018), Temer deixou claro seu posicionamento com o cancelamento das desapropriações de terra e demarcações indígenas e quilombolas, atendendo aos interesses impostos pela Bancada Ruralista. A Comissão Pastoral da Terra (CPT), também faz uma dura crítica ao governo Temer citando a suspensão do Programa de Reforma Agrária, em abril de 2016 com o Acórdão nº 755°2016, do Tribunal de Conta da União - TCU. Tal medida paralisou a criação de novos assentamentos e novas concessões de benefícios como de assistência técnica e crédito, causando um impacto negativo na vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais e assentados sem terras que ficam desamparados.

Com base no cenário descrito, percebe-se que o governo Temer não estava interessado em adotar nenhuma medida que favorecesse a reforma agrária, pelo contrário, seus interesses estavam estreitamente ligados a manter a cisão social. Como menciona Mattei (2018) referindo-se ao governo Temer:

[...] observa-se que o governo atual fez uma opção clara por um projeto de desenvolvimento agrário que não atende aos interesses da grande maioria da população rural, representada pelos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, extrativistas, quilombolas, povos indígenas, dentre outros. Ao contrário, as intervenções do governo Temer vêm exatamente no sentido de excluir das benesses das políticas públicas parcelas expressivas dessa população rural. (Mattei, 2018, p.12).

Moreira (2018) salienta que as ações desenvolvidas por Temer corresponderam ao “golpe de morte na reforma agrária”, isto é, uma série de retrocessos para a agricultura camponesa e reforma agrária e, excepcionalmente, a falta de proporcionalidade na força política existente entre os donos do agronegócio e os trabalhadores do campo.

Em síntese, pode-se dizer que a grande expectativa por parte dos trabalhadores rurais e movimentos sociais, em especial, o MST era que durante os mandatos de Lula e Dilma



do Partido dos Trabalhadores – PT houvesse uma mudança na correlação de forças políticas, sobretudo, no tocante da reforma agrária, mas isso não ocorreu, ambos optaram por uma política de coalizão e não pleitearam uma ruptura com a bancada ruralista e oligarquias atrasadas que dominavam a política em várias regiões do país e o agronegócio. A não ruptura por parte dos governos petistas abriu espaço para a execução do “golpe de morte na reforma agrária” articulado por esses segmentos em conjunto com Michel Temer.

As Perspectivas da Reforma Agrária no contexto atual - Jair Bolsonaro (2019 – 2022)

(Governo Bolsonaro)

Ainda não é possível fazer uma leitura aprofundada do governo de Jair Bolsonaro por se tratar do primeiro ano de gestão. No entanto, no que se refere à reforma agrária, a gestão de Bolsonaro vem operando com desapropriações de terras ocupadas por camponeses, na paralisação da demarcação de terras indígenas e quilombolas incentivando o armamento dos grandes proprietários rurais.

Se a reforma agrária historicamente não aconteceu, no governo atual ela aparece fora de cogitação, percebe-se um retrocesso nas poucas conquistas dos movimentos em relação à distribuição de terra. Os dados apresentados pela Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF) afirma que “entre 2018 e 2019 o orçamento destinado à aquisição de imóveis rurais para a reforma agrária reduziu 50%, saindo de R\$ 83,7 milhões para R\$ 42 milhões” (Contraf, 2019).

Além disso, verifica-se uma paralisação na demarcação de territórios quilombolas, enquanto aguardam assinatura de decretos de homologação, e indígenas. Conforme a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (2019), no Brasil há 118 territórios em processo de demarcação, 74 em estágio avançado e outros 116 estão aguardando análise.

É cabível citar também que a ideia de não concretizar a reforma agrária está alinhada entre o poder executivo e boa parte do congresso elitista e ruralista que foram eleitos para representarem o povo brasileiro. Exemplo disso é a PEC Nº 80, em tramitação, apresentada em 21 de maio pelo senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), que atenta contra a reforma agrária ao alterar sua base conceitual e jurídica. Na ementa propõe modificar o artigo 186 da Constituição Federal, estabelecendo que o proprietário rural não precisa atender a todos os requisitos estabelecidos atualmente, mas apenas a um deles para



que a terra cumpra sua função social. Em suma o Artigo 186 da Constituição Federal passaria a vigorar com a seguinte redação:

***Art. 186.** A função social é cumprida quando a propriedade rural é utilizada sem ofensa a direitos de terceiros e atende, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, ao menos um dos seguintes requisitos: § 1º o descumprimento da função social de que trata o caput somente será declarado por ato do Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, ou por decisão judicial. § 2º A desapropriação por descumprimento da função social será feita pelo valor de mercado da propriedade rural. (Senado Federal, Proposta de Ementa à Constituição N° 80, 2019)*

Dito de outra forma, se o dono de uma fazenda produz na área, não precisa respeitar as leis trabalhistas ou se preocupar com o meio ambiente, por exemplo, pois já teria atendido uma das exigências da lei. Essa modificação, se concretizada, vai desrespeitar os direitos dos trabalhadores rurais, reafirmar a concentração fundiária e dificultar o acesso e permanência na terra pelos indígenas que, muitas vezes, têm suas terras griladas por fazendeiros locais ou estrangeiros.

Quando afirmamos que o governo atual vêm estimulando a violência no campo, é que segundo o levantamento da CPT o número de conflitos tem aumentado. A CPT afirma que em 2019 até agosto, o Brasil registrou 18 mortes em conflitos no campo e aumentou também o número de famílias expulsas de terras pela ação privada e pública.

Os discursos proferidos estimulam tais conflitos, pois é comum a narrativa de combater os movimentos sociais do campo, estimulando a criminalização dos movimentos sociais e das ONGs, como se fossem agentes de uma conspiração para internacionalizar o Brasil. Essa contradição denuncia, o jogo de interesses econômicos do latifúndio, nos quais os sem-terra, quilombolas, indígenas, as comunidades rurais e organizações sociais são alvos a serem destruídos. E, não deixando de salientar, é a segunda vez no ano que o órgão suspende a política de criação de novos assentamentos rurais.

Esse recorte nos atenta também para as vendas das terras aos estrangeiros, onde a CPT, em uma matéria publicada em janeiro de 2019, afirma que uma das principais reivindicações políticas do capital no Brasil é a aprovação do Projeto de Lei (PL) 2.963/2019, que possibilita a venda de terras no país para estrangeiros. (Senado, 2019). Se esse Projeto for aprovado como pretendem os ruralistas, será possível que estrangeiros comprem até 100 mil hectares de terra, e arrendar até 100 mil hectares, o que seria desfavorável ao processo de reforma agrária.



A falta de interesse pela reforma agrária é constatada também quando o presidente da República transfere o INCRA que é o responsável por executar a reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional da casa civil para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA comandado pela deputada Tereza Cristina defensora dos interesses ruralistas.

Partindo dessa análise podemos afirmar que não haverá espaço para a reforma agrária no governo Bolsonaro, nem mesmo para o moderno agronegócio. A hegemonia do campo nos próximos anos será sem dúvidas a dos “velhos coronéis”. Especialmente com a liberação do uso da arma de fogo com a Lei nº 13.870 de 17 de setembro de 2019, que para fins de posse de arma de fogo, considera que a residência ou domicílio compreende toda a extensão do imóvel rural aumentando o poder dos latifundiários e dando mais espaço aos conflitos no campo com ameaças e mortes.

Este é um retrato de um país que tenta construir uma nação, mas que tem uma elite no poder que condena parcelas da sociedade trabalhadora, esse retrocesso vem atingir aqueles que parecem invisíveis, objetivando a destruição das forças que compõem um povo, aqueles que trabalham e lutam. A esperança é de um novo governo que possa nos promover uma radical mudança fundiária no Brasil.

Considerações Finais

No Brasil, desde o processo de colonização até os dias atuais, a terra tem sido utilizada como sinônimo de poder político, em virtude disso, concentra-se nas mãos de alguns poucos proprietários que, em sua maioria, desempenham o papel de chefe político seja na instância local ou global é, justamente, por esse motivo que a reforma agrária, historicamente, não foi realizada no país.

O monopólio da propriedade da terra foi ao longo dos anos a gênese de diversos conflitos, pois o povo que trabalha na terra sempre resistiu ao modelo dominante. Todavia, o que acontece é que mesmo não atendendo a classe camponesa, os governantes camuflaram ao longo da história a questão agrária com a distribuição de terras.

Neste recorte, evidenciou-se que a reforma agrária apresentou chances de ser concretizada em alguns momentos históricos, mas acabou sendo freada pela elite dominante do país. Além disto, que a sonhada reforma agrária terá que esperar mais alguns anos para ser efetuada já que o Brasil está sendo governado por uma elite



política que condena parcelas da sociedade trabalhadora, de modo especial, aqueles que trabalham e lutam por um país com melhores condições de igualdade.

Em caráter conclusivo, percebe-se que a reforma agrária no Brasil só será possível mediante a uma modificação na correlação de forças políticas e diante de um novo projeto de país que enxergue a reforma agrária como uma questão urgente e necessária para o desenvolvimento nacional.

Referências

- Albuquerque. Valéria de Oliveira. (2006). Reforma Agrária no governo Lula: uma análise do II Plano Nacional de Reforma Agrária. Universidade Estadual Paulista - UNESP.
- Alcantara. A.C. (1976). Autoritarismo e populismo: bipolaridade no sistema político brasileiro. Dados, Rio de Janeiro, n. 2, p. 251-278, 1976.
- Alentejano. Paulo. Roberto. R. (2004). A política de Assentamento rurais do governo FHC e os desafios da reforma agrária no Brasil só século XXI. Agrária. N°1. PP. 2- 15.
- Alentejano. Paulo. Roberto. R. (2018). A Política Agrária do Governo Temer: a pá de cal na agonizante reforma agrária brasileira?, Revista OKARA: Geografia em debate, v.12, n.2, p. 308-325, 2018. ISSN: 1982-3878 João Pessoa, PB.
- Araújo. Telga. (1999). A e sua função social. In: Laranjeira, Raymundo. Direito agrário brasileiro. São Paulo.
- Borges. Paulo Torminn. (1991). Institutos básicos do direito agrário. 11 edição. São Paulo: Saraiva.
- Brasil. (1964). Lei N° 4504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm.
- Brasil. (2019). Senado Federal. Proposta de Ementa á Constituição N° 80. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702>
- Brasil. (2019). Senado Federal. Lei N° 13. 870, de 17 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137430>
- Cardia. Marcelo. (2003) A necessidade da Reforma Agrária. Disponível em: <https://bit.ly/3lvruf5>
- Castello Branco, C. (1975) Introdução à revolução de 1964. Tomos I e II. Rio de Janeiro: Artenova.
- Cavalcanti. Coutinho. (1959). "Um projeto de reforma agrária". Ministério da Educação e Cultura. Rio de Janeiro.



Contraf. (2019). Governo Bolsonaro volta a suspender a reforma agrária. Disponível em: <https://contrafbrasil.org.br/noticias/governo-bolsonaro-volta-a-suspender-a-reforma-agraria-8feb/>, acessado em 20/10/19.

Fernandes. Mançano Bernardo. (2003). O MST e os desafios para a realização da reforma agrária no governo Lula. Observatório de Social de America Latina. Año IV. no.11may-ago.

Funai (2019). Demarcação de Terras Indígenas. Disponível em: <https://bit.ly/3nwajfj>

Guerrero. Iris Cecilia Ordoñez e Bergamasco. Sônia Maria Pessoa Pereira (2014). A reforma agrária: dados do processo. Disponível em: <https://bit.ly/3luDj5a>

Hippolito. L. (1985). De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Lavareda. A. (1989). Governos, partidos e eleições segundo a opinião pública: o Brasil de 1989 comparado ao de 1964. Dados, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 155-170.

Lima. Rafael Augusto de Mendonça. (1997). Direito agrário. 2º ed. Rio de Janeiro: Renovar.

Magalhães, José Luiz Quadros de. (1988). Reforma agrária no Brasil. R.inf.Brasília. a.25. N100.

Martins, José de Souza. (2003). A reforma agrária no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Tempo Social - USP.

Mattei. Lauro Francisco. (2012). A reforma agrária brasileira: evolução do número de famílias assentadas no período pós- redemocratização do país. Estuda. Soc e agric. Rio de Janeiro. Vol 20. n 1. 301- 305

Mattei, Lauro. (2018). A Política Agrária e os Retrocessos do Governo Temer/ Revista OKARA: Geografia em debate, v.12, n.2, p. 293-307, 2018. ISSN: 1982-3878.

Miralha, Wagner Lauro. (2006). Questão agrária brasileira: origem, necessidade e perspectivas de reforma hoje. Revista Nera. Ano 09, n 8, 2006.

Moreira. Elaine Martins. (2018). Da carta dos brasileiros à ponte para o futuro: das promessas não cumpridas ao golpe de morte na reforma agrária. In: Moro, Maristela tal. Anais do 16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social.

Nobuaki Yamauti. Nilson. (2005). A questão da reforma agrária no governo João Goulart. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, vol. 27, núm. 1, 2005, pp. 69-86. Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Brasil.

Ribeiro, Carolina Silva e Oliveira, Gilca Garcia. (2014). Poder político e propriedade da terra no território do Velho Chico, Bahia. [online]. Disponível em



<http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n17/0103-3352-rbcpol-17-00179.pdf>. Acessado em 01.12.18 às 08h00min.

Santos, Marcio José dos. (2014). Reforma Agrária Popular: Tática Necessária para um Posicionamento Concreto na Atualidade da Questão Agrária Brasileira¹, Jornada de Estudos Agrários.

Senado (2019). Projeto de Lei nº 2963, de 2019.Regulamenta a aquisição, posse e o cadastro de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136853>. Acessado em 02.09.2019.

Tanajura, Grace Virgínia Ribeiro de Magalhães. (2000). Função Social da terra, com destaque para a terra no Brasil contemporâneo. São Paulo.



Evasão e permanência na reforma agrária: Um estudo de caso no estado do Rio de Janeiro¹

Gabriel Souza Bastos

Resumo

O presente artigo analisa por quais motivos os assentados do assentamento norte-fluminense Francisco Julião permanecem ou abandonam seus lotes, desistindo de serem beneficiários pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Para isso, damos uma especial atenção para os desdobramentos diretos de políticas públicas na vida dos assentados, nas relações de grupos familiares, indivíduos e atores presentes dentro do assentamento. Através de uma metodologia de observação participante ao longo dos anos de 2013 e 2014, constatamos a existência de dificuldades ocasionadas pela falta ou atraso de políticas públicas, abrindo margens para casos de evasão. Por outro lado, observamos relações de reciprocidade que operam como estratégias de permanência, a fim de contornar os problemas ocasionados pela ausência de políticas públicas.

Palavras-chave

Assentamento, reforma agrária, agricultura familiar, análise de políticas públicas, questão agrária.

Introdução

Com a redemocratização do Brasil, a partir de 1985, desde o início da realização de projetos de assentamentos rurais, encontra-se, através de matérias de grandes meios de comunicação, a constatação de que muitos assentados estariam constantemente abandonando seus lotes, levando-nos muitas vezes a concebermos a ideia de que a reforma agrária era inevitavelmente um projeto fadado ao fracasso, incompatível com a nossa realidade. Entre os argumentos levantados, os pontos centrais focavam-se em demonstrar que os projetos de assentamentos (PA) já implantados possuíam baixa qualidade, gerando um processo de favelização rural e que, além disso, a maioria das famílias beneficiárias não estariam vocacionadas para agricultura. Um exemplo disso é o editorial do jornal O Globo, do dia 3 de fevereiro de 2013, com o título de “A cada vez mais desnecessária reforma agrária”:

A modernização do campo, ao lado da inexorável tendência de urbanização da população, começou a reduzir a massa de manobra à disposição do MST. A ponto de a organização ter de recrutar “militantes” entre os desempregados em pequenas e médias



ciudades — sem vocação para a agricultura, é certo. O momento de pleno emprego na economia e a expansão dos programas sociais (Bolsa Família) puxaram de vez o tapete do MST. E nos assentamentos existentes, mostrou O GLOBO, a nova geração já busca ampliar a perspectiva de vida nas cidades — com razão².

Essa perspectiva midiática de inexorável evasão do campo não é original do jornal da família Marinho. Existem teóricos que seguem essa linha de raciocínio. Em um estudo sobre a mobilidade social no Brasil, Silva (1979) divide os estratos da sociedade brasileira em seis grupos ocupacionais, classificados pelas formas de trabalho (manual ou intelectual) e acesso a propriedades. Estes seis grupos são organizados hierarquicamente, onde o primeiro seria o mais baixo – com as piores condições de vida – e o sexto, por sua vez, com as melhores condições de vida, representaria o grupo ocupacional no maior patamar desse esquema: 1 – Trabalhadores rurais do campo, 2 – trabalhadores urbanos não qualificados, 3 – trabalhadores qualificados e semiquilificados, 4 – trabalhadores não manuais, profissionais de nível baixo e pequenos proprietários, 5 – profissionais de nível médio e médios proprietários, 6 – profissionais de nível superior e grandes proprietários.

Esta hierarquização chama atenção: Trabalhadores rurais são colocados como necessariamente um grupo ocupacional com condições de vida inferiores aos trabalhadores urbanos não qualificados. Levando esta caracterização até suas últimas consequências, portanto, o trabalhador rural supostamente teria melhores condições de vida por simplesmente migrar para a cidade.

Palmeira e Almeida (1977), ao analisarem textos sobre migração e êxodo, constatam que “as ocorrências empíricas de êxodo (...), são comumente classificadas de êxodo rural” (Palmeira e Almeida, 1977: 37), carregando, muitas vezes, a segunda expressão o mesmo significado da primeira. Não é muito difícil, constatam os autores, encontrar na bibliografia sobre o tema uma sinonímia entre esses dois termos. A representação do êxodo rural, portanto, no senso comum erudito, adquire um caráter de naturalidade, “sem que seja apagada ou modificada sua acepção enquanto ‘processo natural’, êxodo desempenha uma função de forma abreviada de êxodo rural” (Palmeira e Almeida, 1977: 37). Os autores constatam, na bibliografia por eles analisada, certo caráter de normalidade do fenômeno, muitas vezes descrito como um promissor indicador de progresso.



Entretanto, essas caracterizações – tanto por parte do jornal O Globo quanto pelo trabalho de Silva (1979) e dos textos analisados por Palmeira e Almeida – a respeito da essencialidade de melhores condições de vida e trabalho na cidade do que no campo não correspondem à narrativa construída pelos assentados do nosso estudo de caso, no Assentamento Francisco Julião, situado no norte do estado do Rio de Janeiro, no município de Cardoso Moreira. Ao contrário, a narrativa de vida de muitas famílias é marcada por uma mobilização máxima de esforços para permanecerem em seu lote de reforma agrária por diversas razões.

Diante de um debate que reconhecemos estar historicamente marcado por firmes posições políticas de setores hegemônicos da sociedade brasileira, pretendemos nos afastar do olhar “oficialmente” imposto da grande mídia. Para tal, este artigo pretende analisar quais são, por um lado, as causas de evasão na reforma agrária, e por outro, as estratégias de permanência através de um estudo de caso no assentamento Francisco Julião.

Fundamentação do problema

O Assentamento pesquisado tem suas origens através de uma ocupação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), no ano de 2006, na fazenda São José. Embora a desapropriação da fazenda tenha se dado em oito meses após a ocupação, um tempo curto em comparação a outras ocupações, a implementação do assentamento Francisco Julião encontrou dificuldades ocasionadas pelo atraso de sete anos da divisão dos lotes pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e suas consequências: atraso na implementação de políticas públicas e conflitos internos.

O perfil dos assentados do Francisco Julião é diverso: trabalhadores rurais e urbanos; assalariados do campo ou da cidade e também filhos de assentados de outras regiões do país.

Utilizando o mesmo método de cálculo de (Ribeiro *et al.*, 2011)³, calculamos o índice de evasão do assentamento Francisco Julião, resultando em 6,1%. Entretanto, trata-se de um cálculo que não expressa a realidade vivida pelos assentados, pois além dos casos de evasão documentados, há a incidência de mais três casos, cujos titulares ainda constam como “assentados” no RB⁴, não como “desistentes”.



De acordo com a literatura produzida sobre o tema, o termo “evasão” refere-se ao abandono, expulsão e venda do lote (Bruno e Medeiros, 2001), (Mello, 2006) “assim como também à venda ou troca de lotes, desde que o responsável pelo lote não resida no projeto” (Ribeiro *et al.*, 2011: 110).

Bruno e Medeiros (2001), em uma pesquisa abrangendo 59 assentamentos criados entre 1985 e 1995 em 22 estados, constata a porcentagem média de evasão de 27,9%, enquanto os princípios e diretrizes do Programa do Crédito Fundiário (Brasil *apud* Ribeiro *et al.*, 2011) levantam diferentes índices de evasão de acordo com seu período de criação: os assentamentos mais antigos com 35% e os recém criados de 0 a 20%. Em outro estudo, realizado por Mello (2006) em dois assentamentos do Rio Grande do Sul, foi encontrada uma média de 22%. Em outra pesquisa sobre dois assentamentos no estado de Tocantins (Ribeiro *et al.*, 2011: 110), encontra-se um índice de 71,4% em um e 80% em outro.

Estes estudos chegam a variadas conclusões a respeito dos motivos que levam um beneficiário a evadir. Em termos gerais, o quadro de infraestrutura nos assentamentos, analisados por Bruno e Medeiros (2001), é de enorme precariedade. Essas precárias condições foram as mais recorrentemente apontadas como as principais causas de evasão, entretanto, não como o maior motivo verbalizado para as saídas, mas questões que se relacionam ao “abandono do assentamento, a falta de incentivo do governo com a produção e comercialização dos produtos, a precariedade do acompanhamento técnico e (...) situações conflituosas derivadas de disputas com fazendeiros” (Bruno e Medeiros, 2001: 32).

Em outro estudo realizado no estado de Tocantins (Ribeiro *et al.*, 2011), buscou-se compreender as causas de evasão a partir de duas concepções diferentes de reforma agrária expressas em dois assentamentos. Um criado pelo INCRA via desapropriação de terras improdutivas e outro pelo programa de Crédito Fundiário, através de compra de terras pelo Banco da Terra. Ambos no município de Pium, a 120 km de Palmas. As principais causas de evasão no primeiro foram relacionadas às precárias condições de infraestrutura, enquanto no segundo foram atribuídas à origem não rural, ocasionadas por problemas na seleção, tal como o modelo imposto de organização produtiva coletiva.

Também foram levantados fatores relacionados à infraestrutura e baixa coesão social como responsáveis por evasão em dois assentamentos no Rio Grande do Sul (Mello, 2006). Este trabalho apresenta um amplo quadro estatístico relacionando 16 variáveis



com o percentual de evasão em assentamentos rurais espalhados pelo estado. Além da correlação com dados secundários e estatísticos, o aspecto mais interessante encontra-se nas suas reflexões com base no campo simbólico, analisados apenas em dois assentamentos escolhidos para uma etnografia.

Em síntese o ponto central da relação entre a dimensão simbólica e a reforma agrária, para o autor, refere-se ao fato de que, “nos assentamentos, à medida que a balança identitária pende para o ‘nós’, a perspectiva é o alcance de maior estabilidade e, com isso, uma menor evasão” (Mello, 2006: 596). Trata-se, portanto, de uma reflexão não muito distante de Bruno e Medeiros (2001), onde, ao constatar que na região Nordeste, onde os índices de evasão são mais baixos, são mais recorrentes em assentamentos cujos beneficiários são antigos posseiros ou moradores das áreas desapropriadas.

Percebemos, portanto, que os termos “evasão” e “permanência” são categorias que se referem à política pública de reforma agrária. Entretanto, é importante ressaltar outro caráter de constantes entradas e saídas no assentamento: o “trabalhar fora pra investir dentro”.

No Assentamento Francisco Julião, o “trabalhar fora” é inerente ao “trabalhar dentro” do assentamento, uma vez que o segundo depende do primeiro. Praticamente todas as famílias entrevistadas têm pelo menos um membro trabalhando fora e alegam que ou necessitam desse trabalho para viabilizar investimentos em seu lote, ou que a renda gerada por esse membro que trabalha fora (geralmente filhos jovens) serve para “ajudar” no orçamento familiar⁵.

Apesar de estarem constantemente circulando fora do assentamento para trabalhar, os assentados veem de forma muito pejorativa os “andorinhas”, isto é, titulares que mal frequentam seu lote, morando e trabalhando em espaços urbanos. Apesar de duramente criticados, nos questionamos se os andorinhas não seriam uma forma mais radicalizada da relação entre cidade e campo que os demais assentados estabelecem com suas relações de trabalho fora do assentamento? E os evadidos, por sua vez, não seriam uma forma mais radicalizada dos “andorinhas”, uma vez que eles simplesmente, ao invés de não mais estarem por lá fisicamente também não mais estão burocraticamente?

Diante dessas problemáticas, como podemos discutir o termo “evasão”? Mello (2006) compreende evasão enquanto uma categoria inerente à compreensão de uma política



pública, referindo-se à desistência de ser um beneficiário. Rotatividade, por outro lado, é colocada enquanto uma categoria conceitual operante também dentro do paradigma de uma política pública, pois se refere ou à saída definitiva desta – a evasão propriamente dita – ou a fenômenos relacionados à mobilidade dentro dos termos dessa política pública.

Compreendemos e utilizamo-nos dessas categorias de análise neste presente trabalho. Entretanto, pretendemos analisar a mobilidade para além destes termos. O constante “trabalhar fora” está intimamente ligado à permanência na política de reforma agrária e responde à perspectiva de que camponeses são, “além de produtores de alimentos, produtores também de migrantes. (...) A migração de camponeses não é apenas consequência da inviabilização de suas condições de existência, mas é parte integrante de suas próprias práticas de reprodução.” (Woortmann, 1990: 35). Nesses termos, pretendemos problematizar a discussão aqui para além da análise de uma política pública, a fim de demonstrarmos que lugar o assentamento, a evasão, a permanência, a rotatividade e a mobilidade têm na vida dessas pessoas.

Metodologia

A coleta de dados desta pesquisa foi feita através do empenho de se aproximar o máximo possível – dentro de nossas limitações temporais – do método descrito por Whyte (2005), como observação participante e com entrevistas semiestruturadas ao longo dos anos de 2013 e 2014, em três diferentes visitas ao assentamento, somando cerca de dois meses de convivência com os assentados em seu dia a dia. Nesse contexto, os esforços foram mobilizados para se adaptar uma ocasião formal de entrevista para uma visita informal, tentando nos aproximar ao máximo de relações informais com as pessoas a fim de se estabelecer o que Oliveira (1996) chama de “diálogo entre iguais”.

Foram entrevistadas ao todo 21 famílias em um universo de 42. Das 42 famílias, identificamos seis casos de evasão entre outubro de 2006, quando a fazenda foi desapropriada e o assentamento criado, até agosto de 2014, quando ocorreu o último trabalho de campo.

Uma entrevista de “uma família” consistiu na entrevista com os titulares do lote. Ou seja: o pai, a mãe ou ambos. Alguns foram previamente selecionados, por serem



lideranças essencialmente importantes para as questões que aqui levantamos. As outras foram selecionadas aleatoriamente.

Resultados e discussão

Diante de relatos, através de entrevistas e da convivência cotidiana dentro do espaço do assentamento, tivemos acesso às histórias das pessoas que desistiram de por lá continuar vivendo, ocasionando assim evasão da reforma agrária. Todos esses casos apresentam um denominador comum: dificuldades de se trabalhar na terra e falta de apoio por parte do poder público.

Uma das reclamações mais recorrentes diz respeito às dificuldades de irrigação. Os assentados que vivem em uma região de baixada disseram que em períodos de chuva há enchentes na área de produção, chegando algumas vezes a ficarem ilhados dentro de suas casas, perdendo boa parte do que haviam plantado.

Encontramos também recorrentes reclamações referentes aos atrasos de tratores da prefeitura nos serviços para o assentamento. De acordo com os assentados, quando a gestão da prefeitura foi trocada, dois tratores ficaram meses parados em Cardoso Moreira sem lhes atender. Além disso, algumas famílias das regiões mais montanhosas não recebem o trator em boa parte de seu lote. Dois entrevistados também relataram que os tratores, quando vêm, são para poucas famílias e que eles mesmos às vezes nem ficam sabendo.

Além disso, as famílias que escoam a produção para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)⁶ reclamam do enorme atraso para o pagamento que, apesar de melhor remunerado que outras formas de escoamento, causam prejuízo para a economia familiar.

Tanto as entrevistas quanto as conversas que tive no dia a dia, relatam um sentimento de abandono por parte das instituições públicas para com o assentamento. Foram sete anos de espera para que os lotes fossem divididos oficialmente pelo INCRA e, nesse meio tempo, receberam apenas o fomento inicial de crédito no valor de R\$3500,00. Consequência do atraso de sete anos do parcelamento por parte do INCRA, os créditos de habitação, alimentação e até mesmo o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) também atrasaram. Até outubro de 2014, esses três benefícios ainda não haviam sido liberados.



Diante de todos esses problemas, foram relatados casos de evasão e rotatividade das unidades de produção dos seguintes titulares: Gilmar, Denise, José “onça” e dona Tina.

O caso de Denise responde à dificuldade prática de estar solteira e, por isso, ter que trabalhar sozinha em seu lote. Esta dificuldade, combinada com as outras, comuns a todo o assentamento, foram os motivos que ocasionaram sua evasão. Uma vez sem condições de cuidar de seu lote e, ao mesmo tempo, de não conseguir dinheiro para investir em sua produção, ela optou pela evasão.

Os casos de Dona Tina e Gilmar são semelhantes. Dona Tina, casou-se com outro assentado, passando a morar no lote dele, deixando o seu próprio vago. Isso teria acontecido pouco antes do parcelamento feito pelo INCRA. Após isso, separou-se e, uma vez sem seu lote, viu-se apenas com a opção de deixar o assentamento. Gilmar, por sua vez, era um rapaz jovem, casado que posteriormente se separou. Entretanto, abandonou seu lote, posteriormente, ocupado por “Serrote”, que comprara suas terras. Alguns relatos apontam que, uma vez separado, havia desistido pelos mesmos motivos de Denise.

O caso de José “onça”, de acordo com as entrevistas, seu deu por “falta de apoio”. Seu lote era em uma área montanhosa, onde a maior parte de seu sítio não era contemplada pelo trator da prefeitura. Diante disso, José trocou seu lote com um assentado do assentamento Paz na Terra, que nunca apareceu. Após isso, seu lote havia sido ocupado por outra pessoa.

Curiosamente, os titulares dos quatro casos de evasão acima citados ainda constavam na relação de beneficiários como assentados em 2014. Além desses casos, tal documento revela mais uma desistência e uma transferência.

Mesmo diante de tantos problemas para se continuar vivendo no assentamento Francisco Julião e de um enorme quadro de insatisfação para com o poder público, apenas um entrevistado, Daniel, diz ter se arrependido de estar morando no assentamento. Por outro lado, todas as outras entrevistas revelam que a vida de fato melhorou após se tornarem beneficiários pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Essa postura paradoxal – um grande quadro de insatisfação, mas também de valorização da conquista de seu lote – é recorrente.



Diante das adversidades de se inserirem em circuitos de produção agrícola, tal como fazer a manutenção produtiva de seus lotes, os assentados, carentes de suficiente apoio do poder público, contam com o apoio uns dos outros. Estamos falando aqui de troca recíproca de trabalho; compartilhamento de terras para maior otimização da produção; mutirões de construções para diversos fins, tais como a construção de cercas, cisternas, trilhas e a comercialização interna. Essas relações são importantes porque constituem fatores decisivos para a viabilidade da reforma agrária no local.

Diante de uma situação de pobreza extrema e escassez alimentar entre pessoas sem terra, a produção de autoconsumo nos assentamentos do MST representa uma enorme vantagem, pois possibilita que não dependam de dinheiro para cobrir essa necessidade fundamental. Entretanto, os assentados ainda necessitam inserir-se no mercado “para satisfazer uma série de outras necessidades. Assim, em sua luta pela permanência na terra, os assentados do MST enfrentam um grande desafio: ter de criar mecanismos econômicos que gerem fontes seguras de renda”⁷ (Vergara-Camus, 2014: 194).

Renato e Joseane, por exemplo, moram em um lote próximo a uma área mais montanhosa. Eles plantam aipim, cana, mamão, banana e hortaliças. Entretanto, por estarem em um lote montanhoso, não conseguem plantar feijão em grande quantidade. Além da venda de sua produção, a família também conta com o trabalho da filha que é professora, cuja renda ajuda a família a se manter no lote.

Seu João, por sua vez, que mora apenas com sua esposa, vive em um lote mais plano e fresco. Como ambos são idosos e não vivem com os filhos, não conseguem aproveitar todo o potencial produtivo de suas terras. Portanto, para potencializarem sua capacidade produtiva, precisam de alguém para trabalhar junto, que é o caso de Renato e Josane.

Meu esposo também precisa. Porque aqui, nossa área é de morro. E lá é um lugar mais fresco, onde vai dar melhor a mercadoria pra gente. E no morro, aqui, se plantar um milho, já não vai dar um feijão. Aqui a gente até plantou, num pedacinho ali, mas é pouca coisa. Às vezes, se precisa de uma quantidade maior, trabalha junto (Entrevista com Josane, realizada em junho de 2014).

Além de trabalhar junto com Seu João, Renato também trabalha ocasionalmente junto de Adilson, outro assentado que, por viver sozinho, precisa também de ajuda para



otimizar sua produção. Com este, o casal divide às vezes 25% e outras vezes meio a meio.

Seu João, por sua vez, conta bastante com apoio vicinal para estar sempre produzindo. “Não dou conta de fazer isso sozinho”, ele conta. Além de Renato, também trabalha junto de outros assentados: Mariano, Daniel, Luís, Marcos e Anderson para diversos fins. Por exemplo, seu João reclama da dificuldade de falta de fornecimento de água, como muitos outros assentados. Para contornar esse problema, ele precisaria de uma cisterna para começar a produzir coco, conforme já planejava há bastante tempo. Para o tal, contou com a ajuda de Daniel, Renato, Mariano e Anderson.

Além disso, esse grupo opera em conjunto também para arrancar aipim, para plantação, limpar mato e erguer cercas. Seu João nos explica que eles administram esses serviços cobrando diária, ocasionalmente. Mas, na maioria das vezes, eles “não cobram nada”. Ao contrário, os vizinhos “pagam” seu trabalho uns aos outros com outros trabalhos. Nas palavras de Seu João, eles “trocaram serviço”. Tratam-se, portanto, de relações que se desenvolvem contornando adversidades para que seu circuito mercantil e produtivo continue operando.

Compreendemos aqui um longo processo de reciprocidade e solidariedade nascido através da luta pela terra e a posterior luta pela permanência nesta. Mais uma vez, voltamos à questão levantada por Mello (2006) onde o autor defende que laços comunitários e coesão social em um assentamento evitam que o fenômeno da evasão de um projeto de reforma agrária aconteça.

Considerações finais

É inegável a existência de inúmeras adversidades para que a reforma agrária se viabilizasse em um assentamento no período temporal estudado. Entretanto, essas adversidades – talvez, a discussão da reforma agrária como um todo – são apresentadas de forma simplificada pelos principais veículos de comunicação no Brasil. No início de 2015, o editorial do jornal O Estado de São Paulo nos deixa bem clara sua posição a respeito do tema:

Normas jurídicas cujo alcance é comprometido por princípios vagos e indeterminados como “função social”, seja que for, inibem investimentos, estimulam comportamentos oportunistas e alimentam movimentos sociais – como é o caso do Movimento dos Sem-Terra – que vivem à custa da violência predatória e da afronta à ordem.⁸



O “Estadão”, assim como o jornal “O Globo”, apresentam problematizações acerca da reforma agrária – principalmente no que diz respeito ao tema de evasão em assentamentos – de uma maneira simplista por conta de, no fundo, terem um posicionamento político contrário à reforma agrária em si?

A intenção deste trabalho foi de se afastar desse tipo de interpretação simplista, aprofundando-se e problematizando o tema no que diz respeito às categorias “evasão” e “permanência” em assentamentos rurais. Nossas entrevistas revelam não só que a maioria dos assentados não só não desejam abandonar seus lotes como também, muitas vezes, eles se referem à cidade como um espaço hostil para suas possibilidades de trabalho. Isso fica claro ao observarmos a escolaridade e experiências de trabalho dos entrevistados cujas trajetórias foram traçadas, conforme demonstrado no quadro 01:

	Escolaridade	Experiência com agricultura antes do assentamento?	Experiências anteriores com trabalhos não agrícolas?
Leila	Ensino fundamental incompleto.	Sim.	Sim.
Sandra	Ensino fundamental incompleto.	Sim.	Sim.
Seu Zeca	Ensino fundamental completo.	Sim.	Sim.
Renato	Ensino fundamental incompleto.	Sim.	Não.
Pepe	Ensino fundamental incompleto.	Não.	Sim.
Seu João	Ensino fundamental incompleto.	Sim.	Não.
Pedro	Ensino fundamental incompleto.	Sim.	Sim.

Quadro 1 Escolaridade e experiência com trabalhos agrícolas e não agrícolas no Assentamento Francisco Julião

Fonte: Dados colhidos em entrevistas realizadas na pesquisa de campo.

A tabela fala por si só. Tratam-se de pessoas com o ensino fundamental ou médio incompleto e, com exceção de um caso, experiência com agricultura antes de tornar-se um assentado. Esses dados demonstram como que essas pessoas, uma vez na cidade, encontrariam um mercado de trabalho hostil para um pequeno agricultor que sequer tem o ensino médio completo. Ainda que existam experiências anteriores com trabalhos não agrícolas, a dificuldade de conseguir empregos estáveis na cidade persiste.



Ao longo da elaboração deste estudo, constatamos que a compreensão das causas de evasão em um assentamento de reforma agrária é insuficiente para compreendermos esse processo se não buscássemos compreender como e por que as pessoas por lá permanecem. Para isso, nosso trabalho buscou compreender, a partir de uma visão mais aproximada dos beneficiários pela reforma agrária em um estudo de caso no assentamento Francisco Julião, qual significado o assentamento tem em suas vidas.

Discutimos que todas as famílias entrevistadas alegam a necessidade de algum tipo de renda extra, gerada fora do assentamento, para se continuar investindo no lote. Com exceção dos aposentados – que garantem essa renda extra com sua própria aposentadoria e também, ocasionalmente, com ajuda de parentes mais jovens –, todas as famílias às quais fizemos entrevistas têm, pelo menos um de seus membros sempre “trabalhando fora pra se investir dentro”. Esta constatação contraria o tipo ideal de assentado caracterizado pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) que prevê o crescimento da renda, do emprego e da produção agrícola dos assentados a partir da “geração de excedentes de renda familiar relativamente às necessidades básicas de consumo, e dos custos primários de produção”. (Brasil, 2003: 19). O que vimos em nosso estudo de caso foi o contrário desse pressuposto. Os custos primários de produção são garantidos através de trabalhos fora do assentamento, justamente com o objetivo de se atingir excedentes das necessidades básicas de consumo.

Há outros investimentos que não requerem ação orçamentária vinculatória, mas são imprescindíveis ao objetivo de geração de produção, renda e emprego no processo de Reforma Agrária. São eles que garantirão as condições para uma estratégia de longo prazo de viabilização econômica e de consolidação produtiva do assentamento (Brasil, 2003: 21).

Esta outra passagem demonstra que o PNRA pressupõe que as famílias contarão com “outros investimentos” que são “imprescindíveis ao objetivo de geração de produção, renda e emprego no processo da Reforma Agrária”. Ora, bem vimos que os beneficiários no Assentamento Francisco Julião, de fato, receberam o fomento inicial, para a compra de instrumentos de trabalho. Entretanto, não receberam apoio algum posteriormente, como previsto no PNRA, caracterizados como “imprescindíveis” para a geração de “produção, renda e emprego”. Para “tapar esse buraco”, vimos que os assentados buscam cooperar entre si através de relações de reciprocidade a fim de criar mecanismos econômicos capazes de gerar outras fontes de renda.



A respeito disso, importante de ressaltar aqui que o PNRA trabalha com diretrizes que pressupõem um tipo ideal de assentado que, uma vez tornando-se beneficiário pela Reforma Agrária, teria em mãos a “geração de emprego” proporcionada pelo programa. Entretanto, uma vez não beneficiados por esses investimentos posteriores à implementação do assentamento citados acima, os assentados necessitam estar constantemente circulando em trabalhos fora do assentamento.

O termo “evasão”, portanto, teria um caráter político, referindo-se à saída do assentado da política pública de reforma agrária (Mello, 2006). Este termo é constantemente utilizado pela mídia, aparentemente por razões políticas, com um fim bem claro: desvalorizar a reforma agrária, os assentamentos e os assentados, levando muitas vezes o leitor a concluir não só a essencialidade da migração definitiva do campo para a cidade como também o suposto essencial fracasso da reforma agrária em si.

De qualquer forma, é importante ressaltarmos que, mesmo com o advento da evasão, o evadido é substituído por alguém da mesma categoria social: um trabalhador rural demandante por terra em busca de melhores condições de vida, entrando no lugar de outro trabalhador rural que passou por uma experiência que melhorou suas condições de vida.

Mesmo diante desses problemas que existem na reforma agrária encontrados em nosso estudo de caso, existe também um enorme esforço feito pelos assentados de não abandonar seus lotes de forma alguma, dando um enorme valor à sua conquista.

Os meios encontrados por eles respondem a relações de reciprocidade vicinais feitas de diversas maneiras. Além disso, os assentados muitas vezes trocam esses serviços uns com os outros pagando seus semelhantes com outros serviços, através de relações não monetizadas de trabalho. Essas iniciativas são feitas para viabilizar a atividade produtiva no lote, pois sem estas, os assentados simplesmente não conseguiriam usufruir do lote da maneira pela qual ele é destinado através da reforma agrária.

Os assentados de nosso estudo, portanto, não só – em sua grande maioria – não têm a intenção de vender suas terras para supostamente melhorar de vida, como procuram, de todas as formas possíveis, se manter no assentamento justamente para não voltarem a uma condição pior.



Notas

¹ Versão resumida de artigo publicado na revista *Tempos Históricos*, Volume 23, nº1 (2019).

² Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/a-cada-vez-mais-desnecessaria-reforma-agraria-7470663> (acessado em 11-09-2018)

³ O cálculo foi feito da mesma forma descrita por Ribeiro et al: “baseada pelo cálculo da diferença entre os números de beneficiários inicial (R_{Bi}) e o número destes beneficiários remanescentes (R_{Br}), resultando no total de beneficiários que evadiram do projeto (RT_{Be}). Em seguida, pela aplicação da propriedade matemática da proporção obteve-se o percentual de famílias que evadiram (%E), conforme descrito nas equações: R_{Bi} – R_{Br} = RT_B e $\frac{\%E=RTBE*100}{RBI}$ (RIBEIRO *et al.*, 2011: 110)

⁴ Relação de Beneficiários. Trata-se de um documento do INCRA onde se encontra uma lista com os nomes de todos os titulares de determinado assentamento, tal como sua situação atual na reforma agrária.

⁵ Heredia (*et al.*, 2002) nos demonstra em um quadro mais amplo de assentamentos pelo Brasil: “do total da população maior de 14 anos nos projetos pesquisados, 79% trabalhavam somente no lote, 11% no lote e também fora dele, 1% somente fora do lote e 9% declararam não trabalhar. Ou seja, 90% dos assentados maiores de 14 anos trabalhavam ou ajudavam no lote, numa média de três pessoas por lote. Dos que faziam algum trabalho fora do lote (12% no total), 44% o faziam em caráter eventual, 24% em caráter temporário e 31% de modo permanente” (Heredia *et al.*, 2002: 93).

⁶ No dia 26 de outubro de 2016, por meio do Decreto 8889, o governo Temer extinguiu o Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor da Secretaria de Agricultura Familiar, que foi fundamental na criação e implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

⁷ Essa e todas as demais traduções do artigo são nossas: “to satisfy a variety of other needs. Hence, in their struggle to remain on the land, MST settlers are faced with a major challenge: having to create economic mechanisms that will generate secure sources of income.”

⁸ Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,riscos-de-uma-agenda-anacronica-imp-,1616427> (acessado em 12/11/2018).

Referências bibliográficas

Brasil. (2003). *II Plano Nacional de Reforma Agrária: Paz, Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural*. Brasília: Ministério de Desenvolvimento Agrário.



- Bruno, R., & Medeiros, L. (2001). Percentuais e causas de evasão nos assentamentos rurais. *Cadernos Da Terra*, (9).
- Heredia, B., Medeiros, L., Palmeira, M., Cintrão, R., & Leite, S. P. (2002). Análise dos impactos regionais da reforma agrária no Brasil. *Estudos Sociedade e Agricultura*, (18), 73–111.
- Mello, P. F. (2006). *Evasão e Rotatividade em Assentamentos Rurais no Rio Grande Do Sul* (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural/ufrgs, Porto Alegre.
- Oliveira, R. C. (1996). O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever. *Revista de Antropologia (USP)*, 39(1), 15–37.
- Palmeira, M., & Almeida, A. W. (1977). *A invenção da Migração*. In: *Projeto emprego e mudança sócio-econômica no Nordeste (Relatório de Pesquisa)*. Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ.
- Ribeiro, M. M., Neto, J. A., Dias, M., & Louise, F. A. (2011). Análise das Causas da Evasão em Assentamentos de Reforma Agrária no Estado do Tocantins. *Revista Extensão Rural*, (22), 103–132.
- Silva, N. do V. (1979). As Duas Faces da Mobilidade. *Dados - Revista de Ciências Sociais*, (21), 49–68.
- Vergara-Camus, L. (2014). *Land and Freedom: The MST, the zapatistas and the peasant alternative to neoliberalism*. London: Zed Books.
- Whyte, W. F. (2005). *Sociedade de Esquina*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Woortmann, K. (1990). Migração, Família e Campesinato. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 7(1), 35–53.



A questão agrária e o reacionarismo no Brasil: A desconstrução das políticas públicas do campo

Zaira Sabry Azar¹
Lenilde de Alencar Araújo²

Resumo

O artigo objetiva refletir criticamente sobre os impactos do avanço do reacionarismo no Brasil na questão agrária, tendo como referência o Programa de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, uma das políticas públicas responsáveis pelo enfrentamento desta questão. Metodologicamente, faz revisão bibliográfica, observando historicamente as determinações da questão agrária, caracterizada pelas relações estabelecidas no campo a partir da posse, uso e propriedade da terra. Destaca a Educação do Campo como expressão da organização e luta das famílias camponesas, cujos princípios filosóficos defendem a articulação entre educação e trabalho na perspectiva libertária. O PRONERA, como conquista do processo reivindicatório dos movimentos sociais do campo, em especial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, é considerado pelos atuais poderes institucionais, como “educação ideológica comunista”, e sofre investidas e ataques, com graves impactos na sua execução, principalmente no que se refere ao aspecto econômico, com profundos cortes orçamentários, e ao aspecto político, com a ingerência do Estado na educação, através de projetos que ferem a autonomia do educador; e reformas de ensino que afetam a construção do pensamento humano, como a proposta de exclusão ensino de filosofia. Conclui que tais iniciativas incidem diretamente na luta pela terra, implicando em tensões e conflitos, e provocando grandes desafios para as famílias camponesas

Palavras-chave

Questão agrária, reacionarismo, PRONERA, políticas públicas, Movimento Sem Terra

Astract

The article aims to critically reflect on the impacts of the advance of reactionism in Brazil in the agrarian issue, having as reference the Education in Agrarian Reform Program – PRONERA, one of the public politics responsible for the coping with this issue. Methodologically, it does a bibliographic review, historically observing the agrarian reform determinations, characterized by the relationships established on the field from the land's possession, use and property. It highlights the Field Education as an expression of the organization and fight of rural workers families, which philosophical



principles defend the **articulation** between education and work on the libertarian perspective. The PRONERA, as a win of the claiming process from rural social movements, especially from Landless Workers Movement – MST (Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra, in Portuguese), is considered by the actual institutional powers as an “ideological communist education” and suffers attacks with serious impacts on its execution, mainly in the economical aspect, with deep spending cuts, and in the political aspect, with the State interference on education, by making projects that hurts the educator autonomy and education reforms projects que affect the human thinking process, as the proposal of philosophy teaching exclusion. It concludes that those initiatives directly on the fight for land, implying in conflicts and tensions and resulting in great challenges to the rural families.

Keywords

Agrarian issue, Reacarianism, PRONERA, Public policies. Landless Movement.

Introdução

A formação da sociedade brasileira tem em suas bases a questão agrária, constituindo uma grande expressão da questão social. As desigualdades sociais, econômicas e políticas que caracterizam o país foram construídas historicamente com bases no acesso e ocupação das terras desde o período colonial. Isto significa que a estrutura agrária nacional, desde a organização da produção escravista, é notadamente concentrada. Atualmente, a concentração fundiária coloca o Brasil no patamar dos países mais desiguais do mundo.

Historicamente, também, as populações camponesas se organizam para ter acesso à terra e ao trabalho. Populações negras escravizadas já formavam os quilombos. Posseiros enfrentaram fazendeiros e fizeram a luta pela reforma agrária, a exemplo das Ligas Camponesas organizadas originalmente no Nordeste. A luta camponesa hoje tem importantes expressões, como a luta quilombola, a indígena e a dos sem terra, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

O processo político organizativo da sociedade brasileira na construção da democracia resultou em conquistas gerais importantes e particularmente para as populações camponesas, com a Constituição Federal de 1988, que garante a destinação de terras consideradas improdutivas para a reforma agrária. Tais direitos, no entanto, afrontam concepções de privilégios das classes burguesas que se articulam com os setores



internacionais mais conservadores para retomarem a hegemonia econômica e política no país. Neste sentido, desconstroem direitos legislados e desencadeiam uma crise sem precedentes, que se manifesta nas dimensões política, econômica, cultural, social e ambiental.

Estrategicamente, propõem “reformas”, que concretamente, desconstroem os direitos sociais. Ideologicamente, constituem contrarreformas que consolidam o pensamento antidemocrático, antipopular e antiprogressista.

No que se refere ao campo, as investidas são no sentido de controle das terras e manutenção de sua estrutura concentrada, com o fim de garantir a continuidade da hegemonia das classes burguesas no campo, seja na produção organizada pelo agronegócio, seja na manutenção de latifúndios improdutivos. Ataques ao direito à educação acontecem no sentido de manter estas populações na condição de subalternidade e exploração que vinha sendo superada com as lutas feitas por organizações do campo.

O avanço do conservadorismo reacionário expresso na vitória eleitoral do atual mandatário brasileiro aponta para o cenário de desmonte das políticas públicas, principalmente com a flexibilização das relações de trabalho impostas pela Reforma Trabalhista e pela destituição de direitos previdenciários proposta pela Reforma da Previdência, o que resulta em graves consequências para as populações que vivem no e do campo.

Este artigo faz reflexões acerca de como o conservadorismo reacionário tem impactado nas políticas públicas voltadas para o campo, na particularidade da Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária (PRONERA), enquanto uma das mais importantes políticas conquistas pela luta pela terra. Para isto, encontra-se estruturado em dois itens, além desta introdução e das considerações.

No primeiro, faz uma recuperação sócio histórica da questão agrária, demarcando o atual contexto, que se caracteriza pelo conservadorismo reacionário; enquanto no segundo apresenta a luta pela educação do campo, como proposição estratégica de organização das populações camponesas, destacando o PRONERA como a maior conquista desta luta. No terceiro e último item, reflete sobre os ataques a esta política constitui estratégia política da classe burguesa reacionária para desconstruir direitos. Por



fim, à guisa de considerações aponta-se que apesar dos retrocessos, a luta pela educação continua mobilizando as famílias camponesas.

A questão agrária no contexto reacionário do Brasil: algumas indicações

O conservadorismo sempre pautou e tem pautado questões fundamentais para a sociedade brasileira, porém, o Brasil, país, tradicionalmente conservador, vivenciou importantes avanços em sua pauta política, garantindo a populações e setores, historicamente negligenciados, direitos e o exercício de cidadania, ainda que em um contexto de complexidades e contradições.

A questão posta, não é apenas o conservadorismo em si ou do que poderia ser entendido como “conservadorismo clássico” (Netto, 2011), caracterizado pela “conservação da ordem entre ‘senhores’ e ‘subalternos’”, mas trata do conservadorismo que não permite qualquer reforma, que se contrapõe aos processos de mudança social, seja ela, reformista ou revolucionária.

Os grupos dominantes brasileiros seguem a perspectiva Burkeana da “continuidade do desenvolvimento econômico capitalista sem a ruptura com as instituições sociais pré-capitalistas (o privilégio da família, as corporações, o protagonismo público-temporal da Igreja, a hierarquia social cristalizada, etc)”, desejando o “o capitalismo sem a modernidade” (Netto, 2011, p. 45). Por outro lado, frente às dinâmicas próprias das contradições sociais, mediadas por lutas e enfrentamentos das classes subalternizadas, é mister que sejam efetivadas mudanças para que sejam mantidas as estruturas hierárquicas.

Neste sentido, para conferir estabilidade nos momentos de crise nacional, coube sempre às elites brasileiras a condução dos processos através de prática de discurso conservadores, fazendo com que todas as “mudanças” ou “imobilidades” sociais fossem definidas por forças e poderes “superiores”. O conservadorismo faz uso da “arbitragem entre os níveis de mudança e de continuidade a ser administrados nos variados compartimentos da vida pública e privada brasileira, sempre em manutenção do status quo em vigência a cada momento.” (Barbosa, 2016, s/p).

Com viés distinto, afora o interesse contrário à “ideia do progresso social”, o reacionarismo



... nos coloca na presença de um estamento patrimonialista, em boa medida composto por elites em decadência, cujo poderio não pode se reproduzir na presença do Estado Mínimo preconizado pelos neoliberais. Para estes estratos [...] a máquina pública não existe para servir de mera repassadora de interesses privados das parcelas mais dinâmicas do capitalismo. O Estado configura o próprio negócio. (Barbosa, 2016, s/p)

Ou seja, na dinâmica sócio histórica brasileira, os setores políticos econômicos hegemonicamente conservadores mantiveram o controle sobre a sociedade, inclusive aceitando e referendando governos considerados populares, apresentados com o viés de conciliação de classe. Mas, como em vários momentos da história, as mudanças ou o “progresso social” não tem oportunidade de se concretizar. Neste sentido, forças conservadoras no Brasil já provocaram o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954; levaram Jânio Quadro a renunciar, em 1961; articularam um golpe civil militar em 1964; e por último efetivaram um golpe civil judiciário e midiático contra Dilma Rousseff, em 2016.

Mas, o fracasso do projeto neoliberal e as crises especulativas provocaram reações conservadoras reacionárias pelo mundo, sendo que, como diz Bitencourt (2017), “a agenda reacionária de setores truculentos da direita ressurgiu com força corrosiva por todas as partes do mundo, ameaçando as conquistas democráticas efetivadas pelos governos comprometidos com o progresso social de suas populações. (p. 02)

Foi exatamente compondo esta onda truculenta do reacionarismo que o Brasil elegeu como seu mandatário uma das mais expressivas figuras da violência, da misoginia, da LGBTQIfobia, da intolerância religiosa, do desrespeito às diferenças étnico raciais, do descaso contra a educação e a ciência. Eleito com a defesa das populações brancas, de grupos empresariais, contra direitos e a favor de afrontas constitucionais, tal mandatário, de forma muito particular, articula-se com grupos religiosos que tomam por base dogmas religiosos, sem qualquer explicação lógica, defendendo com argumentos pseudobíblicos a intolerância e perseguição a diversos setores a exemplo de religiões de matriz africana e populações LGBTQI.

As ideias socialmente nefastas têm sido concretizadas através de instrumentos e ou legislações que dispõem contra direitos historicamente conquistados através de mobilizações e lutas populares. São nomeações de asseclas civis e militares para cargos estratégicos; promulgações de decretos e criação de projetos institucionais que põem em risco a soberania nacional, assim como a vida material e cultural de populações tradicionais.



No que se refere ao campo, há intenso recrudescimento das investidas do agronegócio, com a intensificação da violência, devido em especial, à defesa intransigente do mandatário à propriedade privada acima da vida e seu estímulo deliberado do confronto armado dos fazendeiros contra famílias sem terra. Neste sentido, populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, mas também as áreas de assentamento da reforma agrária, vêm sofrendo ameaças de perda de seus territórios, com sistemáticas investidas de fazendeiros, mas também de grandes grupos e corporações nacionais e estrangeiras.

A luta pela terra e pela reforma agrária tem sido alvo de processos de criminalização institucional, por parte do Judiciário, com apoio incondicional da grande mídia conservadora. O descompromisso governamental com a reforma agrária encontra-se manifesta na nomeação de um líder ruralista, pecuarista e presidente da União Democrática Ruralista (UDR³) para a criada Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que responde dentre outras questões, pelas atividades desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assim como a nomeação para o Ministério da Agricultura uma expoente da agricultura patronal brasileira.

Uma das mais dramáticas e nefastas ações do atual governo é a liberação deliberada de agrotóxicos, aceitando de forma assustadora o uso de produtos não aceitos em outros países. Esta concepção de agricultura tem na ministra da agricultura sua maior defensora. Em 2019 já foram liberados 290, não constituindo substâncias novas, sendo que 33% deles são proibidos na união Europeia.

Outra iniciativa que denota o obscurantismo atual é a drástica redução do orçamento destinado à reforma agrária. Em denúncia, muitos veículos de comunicação destacam que “Entre 2018 e 2019, o orçamento destinado à aquisição de imóveis rurais para a reforma agrária reduziu 50%, saindo de R\$ 83,7 milhões para R\$ 42 milhões. Em 2015, o valor destinado à aquisição de imóveis era de R\$ 800 milhões” (Camargos e Magalhães, 2019, s/p). Tal iniciativa resulta em graves consequências para as populações camponesas que demandam desapropriações de terra para a reforma agrária, dentre elas o desestímulo à organização e luta.

Com isto, demarca-se ofensivas dos setores reacionários contra famílias camponesas e populações tradicionais que vivem da terra e dependem da natureza para sobreviver. Mas, a luta pela terra no Brasil perpassa por várias dimensões, dentre elas a educação, considerada como luta particular na luta pela reforma agrária. De modo especial, a



Educação do Campo constitui estratégia de enfrentamento das famílias camponesas à questão agrária, sobre o que será tratado a seguir.

A educação do campo: Instrumento de enfrentamento da Questão Agrária

A Educação do Campo surge nos anos de 1990, e vem contrapor o paradigma da educação rural, ambos expressam dois polos antagônicos de desenvolvimento do campo no Brasil, identificados como agricultura camponesa, que se desenvolve com base na produção diversificada para alimentar a população, praticada por uma grande quantidade de pessoas que são os agricultores familiares e camponeses, e o fazem em uma relação de harmonia com a natureza, e no outro pólo, o agronegócio, cuja produção se dá em grande escala, com objetivo de produzir *commodities*, com base na utilização de agrotóxicos que envenenam a terra e todos os seres vivos, sem nenhuma preocupação com a preservação da natureza.

Sua origem está nos movimentos sociais, com destaque ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que luta por terra, por reforma agrária e justiça social. Como marcos históricos, uma ação de massa, de luta política que foi a Marcha Nacional por Reforma Agrária, realizada em 1997, por centenas de Sem Terra de todo país, que marchavam rumo à Brasília para denunciar o Massacre de Eldorado dos Carajás ocorrido em 1996, no estado do Pará, que deixou 19 mortos e centenas de feridos. Esta mobilização resultou na criação, em 1988, do Programa Nacional em Áreas de Reforma Agrária - PRONERA, que tem por objetivo fortalecer o campo enquanto espaço de produção reprodução da vida, considerando as dimensões econômicas, sociais, ambientais, políticas, culturais e educacionais.

Outro marco importante, também em 1997, é o I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras das Áreas de Reforma Agrária - I ENERA, realizado através de parceria entre Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, Organização das Nações Unidas para a educação, a Ciência e a Cultura - Unesco e a Universidade de Brasília - UNB, junto com organizações do campo, que teve por objetivo socializar as experiências que vinham sendo desenvolvidas nas áreas de assentamentos de todo o país, discutir a realidade da educação nessas áreas, denunciar a negação ao direito à educação para os povos do campo.



A Educação do Campo veio se contrapor ao paradigma da educação rural que, pautada em políticas compensatórias e na concepção de uma educação mínima para a população que vive no campo, concebia ao camponês apenas o direito de saber ler, escrever e fazer contas básicas. Caldart (2012) indica que a construção da educação do campo só pode ser entendida no contexto da “luta pela transformação da realidade educacional específica das áreas de Reforma Agrária”, afinal “não é por acaso que são os mesmos trabalhadores que estão lutando por terra, trabalho e território os que organizam esta luta por educação”. (p. 259).

A autora aprofunda o debate destacando a dimensão política de sua proposta, quando afirma que

Ainda que a Educação do Campo se mantenha no estrito espaço da luta por políticas públicas, suas relações constitutivas a vinculam estruturalmente ao movimento das contradições da QUESTÃO AGRÁRIA, de projetos de agricultura ou de produção no campo, de matriz tecnológica, de organização do trabalho no campo e na cidade... E as disputam se acirram ou se expõem ainda mais quando se adentra o debate de conteúdo da política, chegando ao terreno dos objetivos e da concepção de educação, de campo, de sociedade, de humanidade. (Caldart, 2012, p. 261)

Ou seja, a proposição educativa é para além do aspecto meramente escolar, posto que constitui-se no âmbito da questão agrária, entendida esta a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos no campo, tendo por base o uso, a posse e a propriedade da terra, conforme indica Stédile (2012, p. 17)). Neste sentido, este paradigma educacional considera as realidades e os sujeitos do campo. O campo, aqui entendido como território, no qual se encontram acampamentos e assentamentos da reforma agrária, onde são construídas relações de humanidade, na perspectiva de superação da ordem burguesa estabelecida.

Para tanto, no universo da EC têm sido organizados processos produtivos, cuja matriz tecnológica se pauta na agroecologia, que se contrapõe ao modelo produtivo do agronegócio. A produção é de alimentos e não de *commodities*. Questões como: o que produzir, como produzir e para quem produzir, orientam o processo organizativo da produção camponesa, sendo as escolas espaços privilegiados para a reflexão e ensinamentos sobre outras formas de produção que não a comercial, que se caracteriza por seu caráter destrutivo.



A concepção da EC se manifesta em seus princípios filosóficos, que norteiam as práticas educativas nas escolas do campo. Dentre estes princípios, destacamos, de acordo com MEC (2009): a educação para a transformação social, ou seja, os processos educativos devem estar vinculados à dinâmica social, observando os processos políticos, econômicos e culturais, na perspectiva de contribuir com a transformação da sociedade; educação para o trabalho e cooperação, na ideia de que sem trabalho não há vida e não há cultura, e que o mesmo deve estar vinculado à educação; educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, considerando que os sujeitos têm uma inserção social, participam de lutas, trazem consigo saberes, cultura, são parte de uma história que deve ser contada, rememorada.

E ainda, a educação com/para valores humanistas, na perspectiva de educação como prática de liberdade, educação para emancipação, num processo de formação humana, onde os sujeitos sejam motivados aos valores que nos constituem como humanos, em contraposição aos valores da sociedade capitalista que tendem a coisificar a humanidade; valorização dos diferentes saberes no processo educativo – considerando a realidade específica dos povos do campo, seus saberes e cultura, e a capacidade que os mesmos têm de pensar uma educação que traga como referência as suas especificidades; educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável – pensada na perspectiva de uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza na produção e reprodução de sua existência; vivência de processos democráticos e participativos, na ideia de que todos os sujeitos que fazem a educação, incluindo a comunidade, participem dos processos de decisão e de gestão da escola do campo.

Importante ressaltar que os princípios acima elencados, enquanto materialidade da luta pela terra no Brasil, são mediados pelas contradições e complexidades da dinâmica social em que o país se encontra, constituindo estratégia de resistência e luta da classe trabalhadora no campo, fazendo frente à histórica questão agrária nacional.

A maior expressão das conquistas da EC é o PRONERA, política pública do governo federal específica para jovens e adultos assentados da reforma agrária e que possibilita o acesso à educação pública às populações do campo, respeitando as realidades e particularidades dos territórios camponeses. Esta política tem o papel de possibilitar o acesso à educação para estas populações a quem, historicamente, tem sido negadas o direito à escola, porém,



... mais que acesso à educação, o Pronera vem buscando assegurar uma ampliação de direitos juntamente com o direito à terra, ao território, à produção e à vida; representa para os movimentos sociais e sindicais do campo um instrumento de luta para buscar melhores condições de vida no campo, e a educação contribui material e imaterialmente para o alcance deste objetivo. (MDA, 2015, p. 09)

E, como instrumento de resistência das famílias camponesas no enfrentamento da questão agrária, através da educação crítica, o PRONERA realizou projetos de educação desde alfabetização de jovens e adultos, como cursos de nível médio e de graduação nas mais diversas áreas. De acordo com o MDA (2015), desde a criação do PRONERA, em 1998, a 2011, foram realizados 320 cursos em 880 municípios em todo o país, atendendo 164.894 educandos. Daí resultaram 174 monografias sobre a Política, 260 dissertações de mestrado, 63 teses de doutorado, 51 livros, 10 coletâneas, 94 capítulos de livros e 459 artigos.

Pautada em princípios democráticos e de formação crítica, esta política tem sido afetada de forma sistemática pelas forças conservadoras, e em especial, pelo reacionarismo que se fortalece no país. Sobre estes ataques será tratado a seguir.

O desmonte das políticas públicas: o ataque ao PRONERA como estratégia do reacionarismo brasileiro

As ações de desmonte das políticas públicas têm recebido atenção especial do atual governo, que assumiu compromisso com os setores mais retrógrados da economia e da política nacional, a exemplo da já aprovada reforma trabalhista, ainda em 2018 e a reforma da Previdência, em trâmite no Congresso Nacional. Na área da educação, muitas são as iniciativas que desresponsabilizam o Estado e desconstruem o direito preconizado pela Constituição de 1988⁴.

A educação pública vem sendo sistematicamente atacada pelos governos, enquanto projeto político. O sucateamento de escolas e universidades federais articula-se com a ideia da privatização da educação, mas também, como estratégia de controle teórico ideológico da formação. Em um contínuo avanço reformas educacionais têm investido no não pensar, a exemplo da Reforma do Ensino Médio, aprovada em 2018, que dispensa do currículo disciplinas como geografia, história e filosofia.

No atual governo, o Ministério da Educação, de forma explícita, vem travando uma guerra ideológica contra o que denomina de “educação com viés ideológico”, sem muito



explicar o seu significado, mas que de forma pragmática, considera toda e qualquer educação crítica. Com tal concepção, tem vetado literatura que trate de gênero, tem feito cortes de recursos e contingenciamentos orçamentários de universidades que assumem perspectivas menos conservadoras, pressionando e constringendo de forma afrontosa corpo docente e administrativo.

O atual ministério ainda combate a pesquisa com o corte de bolsas tanto de ensino médio quanto de graduação e pós graduação em todas as áreas, comprometendo de forma incalculável o avanço tecnológico nos mais variados campos das ciências.

O caráter retrogrado do atual governo se expressa, também, com a criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, atentando de forma profunda contra o direito e as possibilidades de acesso à educação, tenta desresponsabilizar o Estado por esta função, com a polêmica proposta da Medida Provisória que permite a educação em casa, a famosa *homeschooling*, no que passa a ser da família toda a responsabilidade da educação dos filhos.

Há uma perseguição deliberada contra ícones da educação brasileira como o patrono da educação, o mundialmente reconhecido educador Paulo Freire, mas também com pensadores clássicos, como Karl Marx. Ideologicamente apontados de forma condenatória como “comunistas”, sendo combatidos de forma intensa e quem por eles se fundamentam, perseguidos como em tempos de censura.

O desmonte a que se encontra submetido o PRONERA se situa neste contexto. Reconhecido por sua formação crítica propositiva para o campo, provoca nas famílias camponesas a vontade e a certeza de serem sujeitos de sua própria história. A Educação do Campo desencadeia, a partir de suas práticas pedagógicas, processos de formação subjetivos e coletivos que apontam para outras sociabilidades que não a hegemônica pelo capital, despertando valores humanos regidos pela solidariedade e fraternidade.

Por estas razões, o reacionarismo que vem se implantando no país, delibera pelo confronto a esta educação. Declarando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, como inimigo, o atual mandatário trabalha por sua criminalização a todo custo. Para tanto, investe em várias iniciativas, como a reintegração de áreas de assentamentos por fazendeiros à suspensão de políticas e programa de reforma agrária.



No que diz respeito à educação do campo, o desconhecimento sobre as escolas do campo se expressa em discurso feito por Bolsonaro, ocasião da sua campanha eleitoral, afirmando em entrevista televisiva em 25 de outubro de 2018

Queremos pôr um ponto final nas escolinhas do MST. A bandeira que eles hasteiam não é a verde amarela, é a vermelha com uma foice e um martelo. Lá, eles não aprendem o Hino Nacional, eles aprendem a Internacional Socialista. Eles estão formando uma fábrica de guerrilheiros no Brasil

Este desconhecimento também pode ser observado na afirmativa do seu secretário especial de assuntos fundiários as trata como “escolas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos, que ensinam crianças a invadir e cometer crimes⁵”. Na mesma corrente de pensamento, o atual ministro da educação, para combater a “forte doutrinação ideológica” se manifesta dizendo ser necessário “cortar o combustível” desta educação. Importante destacar que a educação do campo já vinha sofrendo com ações que afetam a qualidade do ensino, o que se intensifica principalmente após o golpe de 2016. Dentre estas iniciativas encontra-se o desmonte do PRONERA, através, principalmente de cortes orçamentários, o que obviamente, afeta o conjunto das populações a serem atendidas.

Em 2016 foi aprovada uma Proposta de Emenda Constitucional - PEC, que estabelece teto de gastos para as políticas públicas por 20 anos, com cálculos que, ao invés de ampliar os serviços os reduzirão de forma que compromete o futuro das políticas sociais. Como consequência, a educação pública já apresenta sinais de falência em muitas universidades, sendo que a Educação do Campo, que já vinha sendo afetada com cortes profundos no seu orçamento agora vive situação de extrema dificuldade.

Em 2008, os recursos que foram repassados chegaram a 70 milhões de reais, enquanto que a “verba destinada ao Pronera foi reduzida de R\$ 30 milhões, em 2016, para pouco mais de R\$ 11 milhões em 2017. Neste ano, o orçamento liberado foi de R\$ 3 milhões” (UDIME, 2018), ou seja, uma queda para 4,2% do orçamento em apenas oito anos. Com isto, os estudantes novos a serem atendidos caiu de 34.781, em 2009, para apenas 210, em 2017, o que significa apenas 0,6% do número de estudantes a serem atendidos. Os números evidenciam o ataque frontal à EC e em especial ao PRONERA, comprometendo as possibilidades de continuidade desta política pública de educação.



Considerações

A Educação do Campo constitui importante instrumento de enfrentamento à questão agrária no Brasil. Questão que tem suas bases na estrutura agrária concentrada desde a vinda dos portugueses e a organização da produção no sistema *plantation*. Na atualidade, o MST sintetiza a luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade. As famílias camponesas, principalmente organizadas por este Movimento em acampamentos e assentamentos referenciam-se na educação como forma de luta pela terra, entendendo-a como elemento central para a reforma agrária.

Com proposições de uma educação libertária, a EC tem no PRONERA sua mais importante conquista, cujo *status* de política pública lhe confere poderes institucionais, autenticando, portanto, as ações dos movimentos sociais, em especial do MST. Com a retomada da política nacional por setores conservadores alinhados ao reacionarismo mundial, que se intensifica pós golpe de 2016, tem sido desencadeado processos de desconstrução e desmonte de direitos garantidos à população através de políticas públicas nas várias áreas de atuação do Estado.

No que se refere a educação, os ataques têm sido sistemáticos de forma a desestruturar a educação pública em todos seus níveis. Especificamente, os drásticos cortes nos recursos destinados à EC via PRONERA desencadeiam graves consequências para seu desenvolvimento, uma vez que inviabiliza ações centrais como a articulação dos sujeitos que lhes compõem: as instituições de ensino, os movimentos sociais e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão responsável por sua efetivação.

A redução orçamentária impossibilita o acesso de novos ingressantes em cursos, desestimula a luta pela educação e pela terra, reduz a perspectiva de construção de outro futuro para o conjunto de famílias do campo. Além de que afeta de forma grave a autoestima destas famílias, uma vez que vê as chances de estudo e das consequentes mudanças de vida diminuírem.

Considera-se que as proposições reacionárias têm se fortalecido na dinâmica política brasileira, mas destaca-se também que a luta tem sido uma constante junto aos movimentos e sociedade brasileira em geral, ainda que de forma complexa e cheia de desafios que caracteriza os processos reais.



Notas

1 Doutora em Políticas Públicas. Professora do Departamento de Serviço Social – Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Pesquisadora do Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço Social e Movimento Social (GSERMS).

2 Mestranda em Educação do Campo - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

3 União Democrática Ruralista (UDR) é uma entidade organizada por fazendeiros na década de 1980, com o fim explícito de combater o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem desde seu surgimento, a luta pela terra e pela reforma agrária. Como estratégia política, o MST denuncia e ocupa terras improdutivas. Como estratégia contra o MST, a UDR arrecada fundos entre fazendeiros para ações de violência e perseguição às famílias acampadas.

4 O protagonismo dos movimentos sociais na luta pela educação como um direito de todos e dever do Estado de forma constitucional, pós período ditatorial, fez retomar o debate e práticas do papel da educação na formação do sujeito crítico. Legislações na área da educação foram sendo criadas para dar conta de demandas e necessidades específicas de populações como indígenas, quilombolas, camponesas em geral, respeitando saberes e tradições culturais.

5 Afirmção feita Luiz Antônio Nabhan Garcia, Secretário Especial de Assuntos Fundiários, em entrevista à Revista Veja em 16 de janeiro de 2019.

Referências

Barbosa, M. (2016). A diferença entre conservadores e reacionários: o centro e a direita no Brasil. Disponível em <https://bit.ly/33R28CB>

Bitencourt, R. N. (2017). A onda reacionária e sua chancela ideológica na crise democrática. Disponível em <https://bit.ly/30RQQMo>

Camargos, D. e Magalhães, A. Governo <https://bit.ly/2SHtNiXBolsonaro> volta a suspender a reforma agrária no país. (2019). Disponível em

Caldart, R. S. Educação do Campo. In. CALDART, Roseli e outros (orgs). (2012) Dicionário da Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular

Ministério da Educação - MEC. (2009). Programa Escola Ativa - Orientações Pedagógicas para a formação de educadoras e educadores. Disponível em <https://bit.ly/3k0R4bH>

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. (2015) II Pesquisa Nacional sobre Educação na reforma Agrária - II PNERA. Disponível em <https://bit.ly/2Fg5zZM>



Netto, Leila Escorsim (2011). O conservadorismo clássico: elementos de caracterização e crítica, São Paulo, Brasil, Cortez.

Stédile, J. P. (2012). Introdução. In. Stédile, J. P (org). A questão agrária no Brasil: o debate na esquerda – 1960 – 1980, São Paulo, Brasil: Expressão Popular.

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - UDIME. Cortes orçamentários reduzem vagas para a educação do campo. 2018. Disponível em https://convivaeducacao.org.br/fique_atento/744.



Instrumentos de la agenda neoliberal del gobierno Temer desde las perspectivas agraria, ambiental y minera

Acácio Zuniga Leite¹
Caroline Buosi Molina²

Resumen

En el último período, la agenda agraria brasileña fue duramente atacada por el conservadurismo. Las enmiendas al Código Forestal, el Código de Minería, la ley agraria y la ley laboral han servido en gran medida a los intereses del agronegocio, de empresas del sector minero, de las corporaciones transnacionales y fracciones de la burguesía interna brasileña. Tales agresiones se ampliaron después de la ruptura democrática de 2016, cuando las fuerzas reaccionarias lograron pautar sus proyectos con mayor vehemencia en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo, desregulando la tenencia y el uso de la tierra en Brasil; destruyendo el aparato de cumplimiento de la función social de la tierra; buscando desnacionalizar los recursos estratégicos y las respectivas empresas del sector, como el petroquímico y el minero; profundizando las desigualdades sociales. En este artículo, buscamos presentar un rápido balance de los reveses ocurridos durante el gobierno de Michel Temer en esos temas.

Palabras clave

Reforma Agraria; Políticas Públicas; Conservadurismo; Golpe; Democracia.

Introducción

En esta segunda década del siglo XXI, las fuerzas conservadoras han podido guiar e implementar sus agendas regresivas. Las pautas centradas en las necesidades humanas fueron atacadas por aquellas que satisfacen los intereses del capital (Gomes Júnior y Pereira, 2013), a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Como ejemplo, se realizaron ataques a la protección del medio ambiente con cambios en el Código Forestal (França y Sauer, 2012; Brancalion et al, 2016), legislación agraria (Cunha, 2017; Leite, Castro y Sauer, 2018) y minerales (Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018; Lopes y Oliveira, 2018).

Bajo reserva por el esfuerzo de Delgado (2019) – parte III de su reciente libro que trata sobre el proceso de (des) regulación de la tierra, desde la Constitución Federal de 1988 hasta la actualidad – hay una brecha en la sistematización de los diversos mecanismos de entrega de activos de la naturaleza que forman parte del patrimonio brasileño. Del mismo modo, hay una laguna en la comprensión de que las diversas invertidas, sean



ambientales, agrarias o minerales, no fueron sectoriales sino que formaron parte de la política económica neoliberal del gobierno Temer.

En este documento, así, se enumeran los cambios en la legislación brasileña relacionados con cuestiones ambientales, agrarias y mineras, con el fin de presentar una lectura crítica sobre estos marcos.

Métodos y técnicas

Este artículo está centrado en el análisis documental de la legislación y de los proyectos de ley (PL) formulados y/o implementados durante la gestión Temer, vinculados a la agenda ambiental, agrario y mineral de Brasil. Fue considerado todo el período de la gestión, incluso lo de la transición, es decir, de mayo de 2016 a diciembre de 2018, También fueron analizados los decretos emitidos en el período.

La recopilación de información sobre los decretos y leyes sancionadas se realizó en el Portal de Legislación Federal (<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1>) mediante barradura dentro del período seleccionado. Con respecto a los PL en trámite, se sistematizó las informaciones a partir de entrevistas exploratorias.

Resultados y discusión

El gobierno Temer presentó un amplio intento de alteración de legislaciones, muchas de las cuales aún sin evaluación académica. Entre los análisis que se han convertido en publicaciones científicas, buena parte son sectorizados. Esto porque, a pesar de ubicar las presiones del capital como factor de impulsión y sustentación de las agendas agrarias, ambientales y mineras, las hacen sin una dimensión más ampliada sobre sus arreglos y desdoblamientos. Articularlas a partir de una misma mirada subvenciona la comprensión de la implementación de un proyecto neoliberal en el gobierno Temer y permite una mejor estimación de sus consecuencias en el mundo rural.

Martins (2018) presenta una síntesis de los proyectos de ley aprobados de 1996 a 2017 que violaron los derechos de los pueblos del campo. El autor identificó más de 150 PL, vinculados a diferentes temáticas, durante las dos décadas estudiadas. Cabe destacar el impresionante aumento en 2016, el año de la destitución, en el que se procesaron 49 PL.

El propósito de este artículo no es detallar cada uno de estos proyectos u otros actos normativos relacionados. Tenemos la intención de centrarnos en los más relevantes,



que han demostrado contar con el notable esfuerzo del Poder Ejecutivo para su aprobación.

La Tabla 01 resume los principales reveses en las agendas agrarias, ambientales y minerales en Brasil durante el gobierno Temer. Donde estén disponibles, también se anotan referencias (estudios, investigaciones, textos) que exploran estos cambios desde una perspectiva crítica.

Agenda Agraria	
Alteración	Tema
Medida Provisional (MP) 759/2016, convertida en Ley 13.465/2017; Decreto 9.311/2018.	Desregulación de la legislación agraria (Sauer y Leite, 2016; Leite, 2018).
MP 733/2016, convertida en Ley 13.340/2016.	Renegociaciones de deudas del agronegocio (Leite et al., 2018).
PL 9206/2017, convertido en Ley 13.606/2018.	
MP 793/2017 (expirada) y 803/2017 (aprobada), convertida en Ley 13.630/2018.	
Agenda Ambiental	
Alteración	Tema
Decreto 9.179/2017.	Permite la conversión indirecta de multas en servicios prestados.
MP 758/2017.	Cambia los límites de las Unidades de Conservación (Leite et al., 2018).
MP 724/2016 y Ley 13.295/2016. Decretos 9.257/2017 y 9.395/2018.	Posterga los plazos para adhesión al Registro Ambiental Rural (CAR, en portugués) y al Programa de Regularización Ambiental (PRA).
Decreto 9.640/2018.	Regula la Cuota de Reserva Ambiental - CRA.
Agenda Mineral	
Alteración	Tema
PL 4.567/2016, convertido en Ley 13.365/2016.	Revoca la participación obligatoria de Petrobras en la exploración del petróleo del estrato pre-sal.
MP 727/2016, convertida en Ley 13.334/2016.	Regula las privatizaciones y concesiones en varias ramas económicas.
MP 789/2017, convertida en Ley 13.540/2017.	Cambia el cobro de regalías de extracción mineral (Cardoso y Vieira, 2017; Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018).
MP 791/2017, convertida en Ley 13.575/2017. Decreto 9.406, de 12 de junio de 2018.	Crea la Agencia Nacional de Minería y extingue el Departamento Nacional de Producción Mineral (Lopes y Oliveira, 2018; Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018).
MP 795/2017, convertida en Ley 13.586/2017. Decreto 9.537/2018.	Establece regímenes fiscales que deshonran al sector petrolero, instituyendo beneficios fiscales para 2040.
Decreto 9.042/2017.	Revisa los criterios de cálculo para el pago de regalías.
MP 811/2017, convertida en Ley nº 13.679/2018.	Autoriza la creación de la empresa pública Pre-Sal Petróleo y la realización de una subasta a largo plazo para la refinación de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos de la Unión. (DIEESE, 2018).
Decreto 9.406/2018.	Apertura de reservas nacionales; apertura de áreas de monopolio, como la exploración de uranio; disminución de la cantidad de multas impuestas a las compañías mineras; inspección de presas de relaves mediante muestreo y aceleración en los procesos de expropiación de comunidades tradicionales e indígenas. (Lopes y Oliveira, 2018).
MP 727/2016, convertida en Ley nº 13.334/2016.	Crea el Programa de Colaboración de Inversión (PPI), que prevé, entre otros, la venta de los derechos mineros que están disponibles para la empresa brasileña de investigación minera <i>Companhia Brasileira de Pesquisa de Recursos Minerales (CPRM)</i> .

Tabla 1. Principales retrocesos en el período 2016-2018

Fuente: Prensa Nacional³.

Elaboración propia (2019).



Además de los actos consolidados, se hicieron varios intentos para profundizar la desregulación de estas agendas. La Tabla 2 enumera los principales proyectos que representan las agendas del capital que tuvieron un progreso significativo en el período, incluso si no se llevaron a cabo o perdieron efecto.

Agenda Agraria	
Proyecto	Síntesis
PL 4059/2012 – Adquisición de tierras por extranjeros.	PL que busca cambiar las reglas de adquisición de tierras por parte de extranjeros en Brasil, reemplazando la legislación actual considerada restrictiva. Puesto en varias ocasiones con urgencia en el Congreso en la última década, no obtuvo el consenso de la bancada ruralista y fue eliminado de la agenda.
PEC 215/2000.	Propuesta de enmienda constitucional que pretende delegar exclusivamente al Congreso Nacional el deber de demarcación de los territorios indígenas y quilombolas. Utilizada como instrumento de presión de la bancada ruralista.
PL 5.773/2013, 8.262/2017, 9.604/2018 y 10.372/2018.	Intento de criminalización de las luchas por la tierra.
PL 6.442/2016.	Precarización del trabajo rural. Su trámite se quedó paralizado por motivo de denuncias en la prensa debido al retroceso en la protección del trabajo que representaría.
Agenda Ambiental	
Proyecto	Síntesis
MP 867/2018. Expirada.	Aplaza los plazos para unirse al Registro Ambiental Rural (CAR, en portugués) y el Programa de Regularización Ambiental (PRA).
MP 756/2016. Vetada.	Cambia los límites de las Unidades de Conservación (Leite et al., 2018). Veto presidencial después de la presión ambientalista.
PL 3.729/2004.	Modifica la legislación sobre licencias ambientales.
Agenda Mineral	
Proyecto	Síntesis
PL 8.939/2017.	Fin del régimen compartido. (Doca, 2017). Posibilidad de asignar áreas de pre-sal a empresas extranjeras, en detrimento del uso de la estatal brasileña.
MP 790/2017. Expirada.	No fue votada por el Congreso a tiempo. Pero el Decreto 9.406/2018 prácticamente reprodujo los cambios previstos en la mencionada MP.
MP 868/2018. Expirada.	No fue aprobada por el Congreso. Pretendía cambiar el marco regulatorio sobre saneamiento básico, facilitando la privatización de las empresas públicas del sector.
Decretos 9.142 y 9.147/2017. Derogado por el Decreto 9.159/2017.	Extinción de la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados (RENCA). Cancelado después de las manifestaciones de la sociedad y repudio de los ambientalistas y comunidades afectadas.

Tabla 2. Principales proyectos en curso en el periodo 2016-2018

Fuente: Cámara de los diputados y Senado Federal⁴.

Elaboración propia (2019).

La cantidad de iniciativas llevadas a cabo a través de medidas provisionales (MP) retrata la ausencia de debate previo en las casas congresuales y con la sociedad civil organizada. El gobierno emitió 142 MP, sobre una variedad de temas, promediando una medida provisional publicada cada 6 días y medio, que representa el promedio histórico más alto desde 1995 (Barbiéri y Mazui, 2018).



En su concepción original, dicho dispositivo solo debe usarse en casos de relevancia y urgencia, cuando la normalización no puede esperar el procesamiento de un PL (que puede tardar varios años hasta su aprobación), ya que entra en vigor tan pronto que firmado por el presidente. La permanencia de su efecto está sujeta a aprobación dentro de 120 días por el Congreso. Las medidas provisionales fueron, por lo tanto, opciones rápidas para normatizar temas de interés para el gobierno Temer. El propio Congreso Nacional y la Corte Suprema Federal, que deberían expresar sus puntos de vista con respecto al cumplimiento de las prerrogativas para el tema de las medidas provisionales, no lo hicieron (Balera, 2009).

En las agendas agrarias y ambientales, verificamos los esfuerzos del gobierno para relativizar, a sus intereses, los criterios constitucionales establecidos en la función social de la propiedad rural. La amnistía de las deudas del agronegocio y los cambios en la legislación para la regularización de la tierra tuvieron éxito⁵. Se aumentaron los límites de detención de las áreas públicas sujetas a regularización y se flexibilizaron la protección de las tierras destinadas a la reforma agraria y las áreas protegidas, teniendo en cuenta los intereses del mercado. Se dilataron los plazos establecidos para el registro y la regularización ambiental.

A pesar de la presión de la bancada ruralista del Congreso, no hubo cambios en la legislación laboral rural específica. Esto solo no ocurrió como consecuencia, principalmente, de la repercusión negativa del PL 6.442 / 2016, de autoría del diputado federal Nilson Leitão, ex presidente del Frente Parlamentario Agropecuario. El propio parlamentario solicitó la retirada del proyecto que buscaba establecer, entre otros aspectos, el pago de cualquier especie por los servicios prestados⁶. Sin embargo, la reforma laboral aprobada por la Ley 13.467 / 2017 tiene impactos aún no medidos en el trabajo rural.

Estas iniciativas demuestran un alejamiento del espíritu contenido en la Constitución Ciudadana, especialmente la predicción de que la propiedad (urbana o rural) posee una función socioambiental, al tiempo que garantiza: I – aprovechamiento racional y apropiado; II - uso adecuado de los recursos naturales disponibles y preservación del medio ambiente; III – observancia de las disposiciones que rigen las relaciones laborales; IV - explotación que favorece el bienestar de propietarios y trabajadores.

La mayor capacidad de resistencia en el período estuvo vinculada a la agenda ambiental. Las votaciones sobre la extinción de la Reserva Nacional de Cobre y



Asociados (RENCA)⁷ y la alteración de los límites de las unidades de conservación lograron movilizar fracciones importantes de la sociedad brasileña y causar daños al gobierno, lo que no ocurrió en las agendas agrarias y minerales.

La agenda mineral fue la que tuvo la mayor inflexión en este intervalo de tiempo, tanto por la cantidad de cambios como por la calidad⁸. Milanez et al. (2017) resaltan que la estrategia del gobierno era abandonar el cambio estructurado en un nuevo código mineral (que estaba en discusión en el Congreso Nacional desde 2013), y cortar la agenda en varios frentes, también representada por la edición MP 789, 790 y 791/2017 (Cardoso y Vieira, 2017). El gobierno también modificó las leyes de uso de petróleo y pre-sal mediante la promulgación de la Ley 13.365 / 2016 y MP 795 y 811/2017. Aunque existen divergencias sobre el impacto fiscal de los incentivos a favor del mercado realizados (Silva y Silva, 2018), no hay duda de que las medidas fueron bien recibidas por el sector del petróleo y el gas.

Con respecto a la gestión de los bienes comunes de la nación, el gobierno realizó, en un corto período, alteraciones de gran magnitud en las competencias del Estado brasileño en un intento de formar un bloque de apoyo. Si en gobiernos anteriores la lógica era situar y fortalecer el Estado como protagonista en el sector ambiental y minero, en el gobierno Temer el comportamiento fue de ausencia y renuncia de responsabilidades. La transformación del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) en Agencia Nacional de Minería (ANM) y la entrega del pre-sal para explotación sin la necesidad de participación de Petrobras materializaran el giro político en el sector minero, consolidando el carácter protocolar del Estado en relación a los emprendimientos.

Los impactos sociales y ambientales son intrínsecos a la actividad minera. Ellos, sin embargo, pueden ser potencializados de acuerdo con determinadas posturas y decisiones gubernamentales. La intensificación de la extracción, añadida a la privación del debate público y democrático sobre el actual modelo de explotación minera, desencadenaron "nuevas presiones en la esfera pública y el espacio agrario brasileño, particularmente en las comunidades rurales" (Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018, p. 382). La coyuntura planteada e interpretada como "desregulación mineral" trajo consecuencias aún más dañinas para la Amazonía (incluso en lugares compuestos por un mosaico de áreas protegidas por veces superpuestas, como áreas protegidas, tierras indígenas, asentamientos de reforma agraria), elevando la presión política para



flexibilizar marcos de protección ambiental y de pueblos y comunidades tradicionales (Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018).

En los últimos años, hubo un boom de las commodities agrícolas y minerales y un aumento significativo en las exportaciones, que representan juntamente el 60% de la agenda brasileña (Cunha, 2017), lo que ayudó a crear el ambiente de "consenso de commodities" (Svampa, 2013). Debido a este peso económico, la influencia política de estos sectores es creciente, materializada a través del lobby (que incluye informes y negociaciones sobre cambios en las leyes y normativos en asuntos de su interés); financiamiento de elecciones⁹; y nombramiento de personas para puestos gubernamentales de nivel superior y medio con vínculos directos con los sectores productivos agrícolas y mineros (Gonçalves, Milanez y Wanderley, 2018). Son actores hegemónicos de la economía brasileña que imponen su fuerza, en diferentes medidas, a los gobiernos desde la redemocratización y que ganaron más espacio de incidencia en la gestión Temer (Cunha, 2017)¹⁰.

Este escenario de captura regulatoria por parte de los sectores agrícolas y mineros se constituyó en un contexto de concentración, financiarización y apropiación de la tierra, de transnacionalización del capital, intensificación de conflictos agrarios¹¹. Procesos similares de subordinación de la estructura agraria a intereses y presiones transnacionales ya asolaban a los países vecinos, culminando en la expulsión y la desterritorialización de los pueblos y comunidades tradicionales, los asentados de la reforma agraria y los agricultores familiares. Estos cambios, relacionados con el proceso de crisis del capitalismo que comenzó en 2008, constituyen un escenario de sobreexplotación de la naturaleza y del trabajo, en un intento de capturar niveles más altos de ingresos de la tierra y plus-valía social.

Consideraciones finales

Tierra, agua y subsuelo son elementos de disputa inseparables y que centralizan la cuestión agraria en el país. La sistematización realizada revela que el gobierno de Michel Temer, interesado en maximizar los resultados económicos generados por el agronegocio y por la minería (especialmente para satisfacer los intereses de las inversiones extranjeras), vinculó su actuación al modelo neoliberal. Temer actuó flexibilizando normativos del sector y delegando al mercado su regulación, siendo incapaz de conciliar la agenda de desarrollo económico con la de conservación ambiental y superación de desigualdades sociales. Por el contrario, la perspectiva



modernizadora y los impactos negativos de estas actividades productivas/extractivistas han causado daños más drásticos y perversos, sobretudo en poblaciones históricamente vulnerables.

Las mayores tragedias ambientales brasileñas, causadas por la ruptura de las presas de relaves de mineral en Mariana, en 2015 y Brumadinho, en 2019, corroboran las consecuencias nefastas de este modelo de "desarrollo" y la desproporcionalidad de los impactos generados (Lopes y Oliveira, 2018), cuyas consecuencias y riesgos ambientales y sociales recaen más en los pueblos y comunidades tradicionales y en los segmentos empobrecidos. Las normas que regulan el sector se han distanciado de garantizar los derechos a las poblaciones afectadas por la minería, lo que refuerza las críticas a la fuerte influencia de las empresas mineras en las acciones y aparatos públicos (Lopes y Oliveira, 2018).

A través de la estrategia de "corte legal", es decir, la pulverización de leyes, códigos y/o políticas en diversos instrumentos, existe una dificultad adicional en el control y la presión social de los grupos que están cada vez más apartados de los procesos de consulta y construcción de políticas públicas. Además, debe destacarse la estrategia adoptada por el gobierno Temer para promover el cambio a través de medidas provisionales.

Finalmente, considerando el carácter más descriptivo del texto, juzgamos oportuno que el levantamiento de la legislación pueda motivar más estudios complementares. Es necesario profundizar la comprensión de los aspectos específicos de cada iniciativa mencionada aquí, detallando los factores impulsores de posibles fallas o impedimentos en la tramitación.

Notas

¹ Estudiante de doctorado en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia (CDS / UnB). Correo electrónico: acacio_briozo@yahoo.com.br

² Máster en Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la Universidad de Brasilia (MADER / UnB). Correo electrónico: carolinemolina@gmail.com

³ www.in.gov.br

⁴ www.camara.gov.br; www.senado.gov.br

⁵ Para más detalles ver Sauer y Leite, 2017; Paulino, 2018; Leite et al., 2018.



⁶ El texto criaba, entre otras cosas, la posibilidad del trabajador de campo recibir el pago en forma de alimentos o vivienda en lugar de salario.

⁷ RENCA es un área de preservación de minerales en el noreste de la Amazonía, donde se encuentran minerales valiosos en el mercado internacional. Abarca nueve áreas protegidas y actúa como una especie de "escudo protector".

⁸ En una investigación realizada por Oliveira (2014), el autor identificó que en las elecciones de 2014 las empresas mineras contribuyeron con una gran cantidad de recursos a la campaña de diputados, que posteriormente, compusieron la Comisión Especial del Nuevo Código Minero. De los 27 miembros de la Comisión, solo 7 no recibieron donaciones de empresas relacionadas con la minería. Todos los demás recibieron, la mitad de ellos recibió 20% o más. El caso más alarmante fue un diputado de Sao Paulo que tenía el 77% de su campaña proveniente de ese segmento.

⁹ La base parlamentaria del gobierno de Temer tenía 207 diputados federales, 24 de ellos de la bancada minería; 35 de la bala; 208 representantes de la comunidad empresarial; y 196 diputados de los evangélicos (CPT, 2017).

¹⁰ Según CPT (2017), 2016 fue el año más violento en los últimos diez años en las zonas rurales de Brasil. Hubo 61 asesinatos y 74 intentos; 200 personas amenazadas de muerte, 571 trabajadores rurales agredidos físicamente y 228 detenidos.

¹¹ Según la sistematización de MOLINA (2019), en 2008, Paraguay poseía el 61% de su superficie cultivada de trigo y el 54% del maíz en manos de extranjeros. Los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, en la zona fronteriza con Brasil, representan la tendencia de extranjerización, con el 60.1% y el 55.2% de sus territorios, respectivamente, controlados por brasileños. La autora también presenta datos de 2014 de Uruguay, con el 43% del área productiva del país en posesión de personas jurídicas, especialmente extranjeras.

Bibliografía

Andrade, M. J. D. (2017, 03 de mayo). *A política mineral do governo Temer*. Recuperado de: <http://mamnacional.org.br/2017/05/03/a-politica-mineral-do-governo-temer/>.

Balera, F.P. (2009) Medida provisória: o controle dos requisitos constitucionais de relevância e urgência pelo congresso nacional e pelo STF. *Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 14*. p. 25-52.

Barbiéri, L.F.& Mazui, G. (2018, 31 de diciembre) *Temer conclui mandato com média de uma MP editada a cada 6 dias e meio, maior desde 1995*. Recuperado de:



<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/31/temer-conclui-mandato-com-media-de-uma-mp-editada-a-cada-6-dias-e-meio-maior-desde-fhc.ghtml>.

Brancalion, P. H. S., Garcia, L. C., Loyola, R., Rodrigues, R. R., Pillar, V. D., & Lewinsohn, T. M. (2016). Análise crítica da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (2012), que substituiu o antigo Código Florestal: atualizações e ações em curso. *Natureza & Conservação*, 14, e1-e16.

Cardoso, A., & Vieira, J. (2017, 20 de outubro). *Sete pontos para entender a MP 789 e o que está em jogo*. Recuperado de: <http://mamnacional.org.br/2017/10/20/conjuntura-no-pais-abre-possibilidade-de-discussao-sobre-qual-o-modelo-de-mineracao-que-queremos-e-qual-tributacao-e-necessaria-e-possivel/>.

Comissão Pastoral da Terra – CPT (2017). *Fim da Reforma Agrária e grilagem de terras legalizadas na Amazônia*. Goiânia.

Cunha, J. S. (2017). Governo Temer: relações do agronegócio com o capital especulativo financeiro e impactos sobre os camponeses e legislação agrária. *Caderno do CEAS*, n. 241, p. 301-326.

Delgado, G. C. (2019). *Terra, trabalho e dinheiro*. São Paulo: Editora Perseu Abramo/Edições Loyola.

Dieese (2018, julho). *Um novo cenário da indústria petroquímica brasileira está sendo desenhado*. Nota Técnica nº 196, de julho de 2018. Recuperado de: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2018/notaTec196petroquimica.html>.

Doca, G. (2017, 26 de outubro). *Governo apoia fim do regime de partilha no pré-sal*. Recuperado de: <https://glo.bo/3dk5KzR>

Gomes Junior N. N., & Pereira, P. A. P. (2013). *Necessidades do capital versus necessidades humanas no capitalismo contemporâneo: uma competição desigual*. *Argumentum*, 5 (1), 50-65

Gonçalves, R.J.A.F.; Milanez, B.; Wanderley, L. J. (2018). Neoextrativismo liberal-conservador: a política mineral e a questão agrária no Governo Temer. *Revista OKARA. Geografia em debate*, 12 (2), p. 348-395.

Leite, A. Z. (2018). *Decreto 9.311/2018: a legalização da especulação das terras carimbadas para a reforma agrária*. Florianópolis: Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, 2018 (Texto para Discussão).

Leite, A. Z., Castro, L. F. P., & Sauer, S. (2018). A questão agrária no momento político brasileiro: liberalização e mercantilização da terra no estado mínimo de Temer. *Revista Okara: geografia em debate*, 12 (2), 247-274.



- Lopes, V. M. C.; Oliveira, M. L. R. (2018). Novo marco legal para a mineração e suas implicações para a atividade minerária no Brasil sob a luz da justiça ambiental. *Polêmica*, 18 (3), p. 33-53.
- Martins, L.A. (2018). *Desdobramentos territoriais da agenda legislativa da bancada ruralista no golpe 2016-2018*. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal da Paraíba - UFB. 77 p.
- Milanez, B.; Coelho, T.P.; Wanderley, L.J. (2017). O projeto mineral no Governo Temer: menos Estado, mais mercado. *Versos – Textos para Discussão PoEMAS*, 1 (2), p.1-15.
- Molina, C.B. (2019) *Influências da Reunião Especializada da Agricultura Familiar (REAF) do MERCOSUL na construção de políticas públicas para as mulheres rurais no Paraguai e Uruguai*. (tesis de maestria). Universidade de Brasília - UnB, Brasil.
- Oliveira, C.R. (2015). *Quem é quem nas discussões do novo código da mineração. Comitê Nacional em Defesa dos Território Frente à Mineração*. Brasília. Recuperado de: https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/quem_e_quem_-_comite.pdf.
- Paulino, E. T. (2018). Para não dizer que não falei do crime de lesa pátria de Temer: os decretos 9.309, 9.310 e 9.311/2018. *Revista OKARA: Geografia em Debate*, Vol. 12, N. 2, p. 275-292.
- Sauer, S. e Leite, A. Z. (2017) Medida Provisória 759: descaminhos da reforma agrária e legalização da grilagem de terras no Brasil. *Retratos de assentamentos*, vol. 20, p. 14-40.
- Svampa, M. (2013). “*Consenso de los commodities*” y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad 244: 30-46.
- Silva, J. M.P.Q; Silva, A.N. (2018) Análise da tributação da exploração de petróleo e gás natural no regime brasileiro de partilha de produção sob a perspectiva do direito e da contabilidade tributária. *Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário*, Brasília, V. 13, nº 2, p. 103 – 140.
- Zanon, M. J. (2017, 10 de febrero). *O que está colocado para o código da mineração em 2017*. Recuperado de: <http://mamnacional.org.br/2017/02/10/artigo-o-que-esta-colocado-para-o-codigo-da-mineracao-em-2017/>.
- Zonta, M., Trocate, C. (2016). *Antes fosse mais leve a carga: reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton*. Marabá: Editorial iGuana.



Línea Temática 3.

Producción familiar, empleo y condiciones de vida en los mundos rurales



¿Haci dónde va la pequeña agricultura familiar?

el caso de la irrigación Majes

Alipio Montes Urday

Resumen

La pregunta que orienta este trabajo es “¿cuáles son las principales tendencias de cambio en la estructura de la propiedad agrícola? Tomando como caso la irrigación Majes en la región Arequipa, hemos querido dar respuesta a esta interrogante. La hipótesis que anima el trabajo sostiene que la emergencia de un mercado libre de tierras durante las dos últimas décadas, y la falta de apoyo del estado, están posibilitando que la pequeña propiedad se vaya escindiendo en dos grandes grupos: un grupo pequeño de unidades mayores a 10 hectáreas que tiene concentrada la mayor parte de la tierra agrícola y que son administradas empresarialmente, de un lado; y del otro, la proliferación de una gran cantidad de propiedades minifundiarias que cada día disponen de menos tierra.

Palabras Clave

Pequeña Agricultura, Diferenciación Campesina, Minifundio, Latifundio, Agricultura Familiar.

Introducción

El trabajo que se presenta, forma parte de un trabajo mayor que el autor viene realizando sobre la viabilidad de la pequeña agricultura familiar en la región Arequipa, con el fin de animar la discusión y debate sobre este tema, pues como se sabe, no obstante la emergencia del neo latifundio, la agricultura familiar aun representa más del 97% de las unidades agropecuarias (INEI,2012) la pregunta que orienta este trabajo es “¿cuáles son las principales tendencias de cambio en la estructura de la propiedad agrícola?. Tomando como caso la irrigación Majes en la región Arequipa hemos querido dar respuesta a esta interrogante.

Los resultados de este trabajo, basados principalmente en las estadísticas del IV CENAGRO, los anuarios estadísticos de la gerencia regional de agricultura, las observaciones de campo y padrón de adjudicatarios de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) demuestran que la pequeña propiedad agrícola familiar se viene escindiendo en dos grandes grupos: el primero que representa a un número reducido de propietarios que tienden a concentrar una proporción cada vez mayor de la tierra



agrícola; y un segundo, caracterizado por un alto grado de fragmentación y minifundización de la tierra, que cada día concentran una menor cantidad de la misma. Ello como consecuencia del desarrollo de un mercado libre de tierras que permite la compra y venta o el arriendo de la misma; y la inadecuada política agraria que abandono al pequeño agricultor. Como se verá en el trabajo, todas las unidades agropecuarias iniciaron con una misma dotación de tierra hace 20 años aproximadamente (5.5ha).

Este trabajo está organizado, en tres acápite, las conclusiones y la bibliografía correspondientes. En el primer acápite se da de manera sucinta los principales enfoques teóricos que explican los cambios a largo y mediano plazo en la pequeña agricultura familiar; en el segundo acápite, se desarrolla de manera muy breve la metodología utilizada en este trabajo de investigación; y en el tercero, se presentan los principales hallazgos de la estructura agraria, relevando las características de la pequeña agricultura familiar y las principales tendencias de cambio en la estructura de la propiedad en la irrigación majes, región Arequipa.

Tendencias de cambio en la pequeña agricultura familiar: la teoría

Enfoque marxista

Partiendo del supuesto de que la agricultura, una vez que se incorpora a la producción mercantil, está regida por las mismas leyes económicas de la industria capitalista: competencia, concentración, polarización, mecanización a gran escala, autores como Marx, Kautsky, Lenin y otros autores neo marxistas, sostienen que la pequeña agricultura está condenada a desaparecer, pues, es ley fundamental de la producción capitalista la competencia; y esta, exige a los agentes económicos la necesidad de realizar innovaciones tecnológicas permanentemente y para ello se requiere escalas de producción cada vez mayores; lo cual conduce a su vez a la polarización dando lugar, de un lado, a la concentración de tierras y medios de producción por un reducido sector de la población, y de otro, a la proletarianización de la mayoría de la población rural. (Lenin 1979).

En el proceso, la pequeña y mediana agricultura tiende a escindirse dando lugar a la coexistencia de dos grandes grupos de agricultura: de un lado, concentración de la mayor parte de la tierra en unas cuantas explotaciones medianas y grandes; y de otro, la proliferación de un gran número de explotaciones minifundistas que cada vez más se dividen y subdividen en más pequeñas.



La evidencia empírica pareciera contradecir parcialmente las predicciones de la teoría marxista en los países de mayor desarrollo relativo, pues la agricultura no ha seguido el único camino previsto; dando lugar a una estructura agraria heterogénea, basada en distintas formas de propiedad: grandes explotaciones agrícolas que concentran ingentes cantidades de tierra altamente tecnificadas y capitalizadas, que coexisten conjuntamente con miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares que han alcanzado altos niveles de tecnificación, capitalización y productividad de la tierra y el trabajo, articulada a organizaciones de productores o a grandes empresas privadas (Kervyn 1987).

La persistencia de la pequeña propiedad, según los neo marxistas ha de explicarse por el hecho de que esta resulta funcional a los intereses del capitalismo; es decir, las pequeña producción agrícola familiar termina articulándose a la gran producción capitalista, en calidad de proveedores de insumos o alimentos baratos, lo cual convierte al pequeño productor en una especie de asalariado a destajo, esto evidentemente sería un factor que permite la coexistencia de ambos tipos de propiedades.

Enfoque neoclásico

Como señala Kervyn (1987), diversos autores de orientación neoclásica como Mill, Marshall, Brewster, Owen y Lehmann, han demostrado fehacientemente de que la agricultura no sigue las mismas leyes de desarrollo de los demás sectores de la economía capitalista, por estar sometida a procesos biológicos que determinan condiciones particulares para la innovación tecnológica, al mismo tiempo de que existen distintos factores tecnológicos que requieren distintos tipos de economías de escala.

Tal característica de la agricultura, junto al hecho de que cada tipo de producto requiere particulares condiciones agroecológicas y economías de escala distintas, permite que en la agricultura se den distintos tipos de innovaciones tecnológicas. Hay algunos productos como la caña de azúcar y cereales (trigo y soya), que requieren grandes economías de escala, debiendo ser producidos en explotaciones gigantes, superiores a las 5000 ha, para alcanzar sus máximos niveles de rentabilidad; en el otro extremo, están los productos que requieren más bien pequeñas economías de escala (pequeñas explotaciones), para alcanzar sus niveles óptimos de productividad, tales como las hortalizas, las frutas de estación, las flores, entre otros; en el medio están productos que requieren medianas explotaciones para alcanzar los mayores niveles de rentabilidad, tales como productos frutícolas, tubérculos, producción de leche, etc.



De igual manera, no todos los factores tecnológicos requieren las mismas economías de escala; hay unos que requieren crecientes economías de escala, tales como: irrigación, comercialización, mecanización, crédito, gerencia, etc.; y otros que requieren economías neutras o que pueden ser fraccionados y sus rendimientos son los mismos independientemente de la escala de producción (fertilizantes y otros insumos) Montes (2000).

El desarrollo último de la tecnología (ingeniería genética, cultivos en invernadero, riego y fertilización automatizados, uso de los ordenadores en la agricultura, etc.), están permitiendo la rápida modernización de la agricultura, incluyendo la pequeña producción, dando lugar al incremento sustantivo de la productividad de la tierra y el trabajo, y con ello provocando la reducción sustancial en el uso de mano de obra asalariada, de suerte que la pequeña producción por sí misma no está condenada al retraso tecnológico, ni a desaparecer.

Todas estas condiciones permiten el desarrollo tecnológico de la agricultura y la coexistencia de distintos tamaños de propiedad, desde fundos muy pequeños hasta inmensas explotaciones agrícolas, pasando por una gran diversidad de estratos intermedios. Sin embargo, retomando las posturas marxistas, estas estructuras agrarias no son estáticas, sino por lo contrario son muy dinámicas, provocando una alta movilidad vertical del suelo. Como ya dijimos en las economías de países emergentes los procesos de concentración y minifundización de la tierra son totalmente complementarios entre sí y actúan de manera concomitante, especialmente en las zonas con mayor desarrollo de los mercados.

Enfoque de la agricultura familiar

Aun cuando este concepto comienza a utilizarse ya desde mediados del siglo pasado, es a partir del año 2000 que empieza a utilizarse con mayor intensidad tanto por académicos como agencias de desarrollo públicas y privadas.

Son numerosos los trabajos que defienden la vitalidad de la pequeña agricultura familiar, señalando que: La pequeña producción agrícola familiar persiste gracias a que es capaz de aprovechar mejor sus recursos productivos escasos, como tierra, fuerza de trabajo y capital, logrando mayores niveles de productividad, al mismo tiempo es capaz de reducir sus costos de producción gracias al uso de la fuerza de trabajo familiar, y evitar los altos costos de supervisión y control que demandan las grandes explotaciones.



Sin embargo, la viabilidad de la pequeña producción familiar requiere que esta desarrolle niveles de asociatividad capaces de aprovechar las economías de escala y las externalidades favorables existentes en los procesos económicos. En este sentido señalan: las organizaciones de los productores se generan a partir de la iniciativa de los agentes económicos individuales, con la intención de lograr la maximización de sus beneficios y utilidades económicas. La premisa de partida es que lograr estos beneficios y utilidades de manera individual es más difícil. Sostienen que con la ayuda de las organizaciones, los productores individuales buscan tener mayor capacidad para enfrentar las restricciones institucionales, tecnológicas, financieras y de articulación con los mercados, que ponen frenos al desarrollo individual.

Metodología de investigación

A fin de determinar las tendencias de cambio en la pequeña agricultura familiar, tomando como caso la Irrigación Majes, región Arequipa, se realiza este trabajo, por ser una zona de reciente colonización y con un alto desarrollo del mercado. Para ello nos basamos principalmente en el análisis de la información que nos ofrecen los padrones de adjudicación de tierras realizadas por la autoridad autónoma de Majes (AUTODEMA), a familias campesinas pobres, asalariados agrícolas, y algunos profesionales del sector agropecuario en las décadas de 1980 y 1990; la información que recoge el IV Censo Nacional agropecuario (CENAGRO); la información que ofrecen los anuarios estadísticos de la gerencia regional de agricultura; y la recogida por las observaciones de campo realizadas.

Para ver los cambios que se han dado en la estructura de la propiedad durante los últimos 30 años, se compara la información inicial ofrecida por el padrón de beneficiarios indicado y la estructura vigente en el año 2012 recogida en el Censo. Así mismo para medir el grado de diferenciación de la pequeña propiedad se organiza la información según estratos de productores, complementándola con la información que ofrece esta misma fuente sobre las formas de tenencia de la tierra y las formas de adquisición, llegando a la conclusión general que, de una estructura agraria homogénea con que empieza la irrigación se pasa a una estructura agraria totalmente heterogénea como producto de las fuerzas de mercado.



Resultados

Caracterización de la estructura agraria del país y de la región Arequipa

Una de las características fundamentales de la agricultura en el país y en la región Arequipa, es el predominio de la pequeña agricultura familiar, luego de los procesos de reforma y post reforma agraria que culminaron con la fragmentación de los latifundios semi feudales y capitalistas en el Perú, después de un corto periodo de formación del latifundio asociativo. Según datos del IV CENAGRO (INEI, 2012), el 81.8% son unidades agropecuarias que tienen menos de 5 ha de tierras de cultivo; es decir, unidades que podrían ser definidas como minifundios (Dávila y Rodríguez, 2015); asimismo, el 89.13% se definen como unidades de pequeña agricultura. De igual manera, casi la totalidad de las unidades agropecuarias del país podrían ser catalogadas como unidades de agricultura familiar, no solo por su tamaño reducido, sino también porque el protagonista principal del proceso productivo es la familia; es decir, el 99.36% de los productores se definen como personas naturales, que tienen la responsabilidad principal del proceso productivo. En términos promedios, cada productor dispone de 3.35 hectáreas de tierra agrícola, fragmentada en varias parcelas (INEI, 2012).

Teniendo en cuenta la superficie agrícola y la relación entre fuerza de trabajo familiar y trabajo asalariado, Ocampo y Vargas (2015) establecen que la pequeña agricultura familiar en el Perú representa alrededor del 90% de las unidades agropecuarias.

En el caso de la región Arequipa, históricamente la agricultura familiar fue predominante; sin embargo, con los procesos de reforma agraria y la creación de irrigaciones por el sector público hasta antes de los años 90, esta se fortaleció sustantivamente.

Sobre la base de la información del IV CENAGRO (INEI, 2012), y teniendo como base la superficie de tierras de cultivo y el papel de la familia en el proceso productivo, la pequeña agricultura familiar en la región representa alrededor de nueve décimas partes de las unidades agropecuarias, con un promedio de 2.94 ha de tierras de cultivo por unidad agropecuaria.

Empero, durante las dos últimas décadas esta situación tiende a cambiar sustantivamente, en el sentido de que las reformas neoliberales están permitiendo de un lado la reconcentración de la tierra agrícola en grandes explotaciones capitalistas en un extremo, y en otro la creciente minifundización de la misma.



Caracterización de la pequeña agricultura familiar en la irrigación Majes

La Irrigación Majes, ubicada en la región Arequipa a 150 km de la ciudad del mismo nombre, unida por una carretera de alto tránsito (panamericana) que le permite conectarse con las ciudades más importantes del país y los principales puertos para la exportación, es una de las zonas agrícolas con mayor desarrollo del mercado en el país. Se trata de una zona de reciente colonización, cuya frontera agrícola fue ganada como producto de las grandes obras hidráulicas realizadas por el estado peruano entre 1970 y 1990. Cuenta con una superficie aproximada de 15 000 hectáreas de tierras de cultivo, distribuidas aproximadamente a 2680 familias.

Se trata de una de las zonas agrícolas con mayor desarrollo relativo del país, que ha alcanzado altos niveles tecnológicos y de productividad, tanto del ganado lechero como en los diferentes productos agrícolas. La agricultura funciona en base a sistemas de riego presurizado (goteo, aspersión, microaspersión, etc.) y la ganadería es intensiva, dedicada a la producción de leche.

Gracias a las reformas neoliberales implementadas en el Perú en los años 90, los diferentes mercados tales como: de tierras, de productos, de mano de obra, de crédito, de servicios agropecuarios, etc. En la zona, funcionan con gran dinamismo.

De las poco más de 25 000 ha cosechadas en el 2015, alrededor del 53% está destinada a la producción de forrajes (alfalfa, avena y maíz forrajero) para la cría de ganado vacuno lechero; generando un valor bruto de la producción equivalente al 25.50% del mismo; le sigue en importancia los productos destinados al mercado externo, dentro de los que destacan el ají paprika, la alcachofa, la palta, la vid, la cebolla y la quinua, con un área cosechada de 23.33% y un valor bruto de la producción de 26.73%. En tercer lugar, se encuentran los productos de amplio consumo interno (papa, cebolla y diversas hortalizas y legumbres), ocupando un área cosechada de 21.78% y un valor bruto de 39.87%. En cuarto lugar, encontramos diversos frutales (melón, sandía, lúcumo, fresas, frutillas y vid) destinados al consumo nacional, con un área cosechada equivalente al 1.34% y un valor bruto de 7.90%.

Es importante indicar que, uno de los productos más importantes en la zona, es la cría de ganado vacuno para la producción de leche. Según datos del Anuario Estadístico de la Gerencia Regional de Agricultura Arequipa (2015), el valor bruto generado por el sector pecuario en la Irrigación Majes es de S/. 200 593 534, de los cuales, el 91%



corresponde a la producción de leche, el 7% a la producción de carne de vacuno y el 2% restante a carne de otras especies.

Creciente diferenciación de la pequeña agricultura familiar

Como se ha dicho, la Irrigación Majes es una zona de colonización agrícola implementada por el estado a partir de los años 80. El modelo de desarrollo agropecuario que se implementó, se basó en la pequeña propiedad familiar orientada a reducir el minifundio, de un lado, y del otro, evitar la concentración de tierras en formas de tenencia socialmente injustas (latifundio), que estuvieron vigentes hasta los años 60 en el Perú. Bajo este modelo, de acuerdo a la política de adjudicación de las tierras que se implementó, a cada familia colona se le adjudicó entre 5.3 y 5.5 ha de tierras agrícolas; de las cuales, 5.0 ha estarían dedicadas a la agricultura y la diferencia a las instalaciones de viviendas, establos, silos, etc. Sin embargo, a 20 años de implementación de la política de liberalización del mercado de tierras, como parte del modelo neoliberal que se implementa en el Perú desde los años 90, en la irrigación se viene dando un intenso proceso de diferenciación de la pequeña agricultura familiar, en los términos planteados por Lenin (1979), gracias a la compra venta de tierras y el alquiler; y de manera menos significativa a la herencia.

En este sentido, en Majes se vienen dando dos grandes tendencias, propias del capitalismo agrario, aparentemente contradictorias, pero en el fondo son completamente complementarias:

- a. Creciente concentración de tierras en pocas manos
- b. Fragmentación y minifundización de la pequeña propiedad

En la tabla siguiente, se puede ver que en términos promedio cada agricultor dispone de 5.29 ha de tierra, ligeramente inferior al promedio que recibieron por adjudicación; En la misma tabla, se pueden observar las dos tendencias claramente indicadas: de un lado, observamos la existencia de unidades agropecuarias con parcelas superiores al promedio que recibieron; y por el otro, vamos a encontrar un buen número de unidades agropecuarias con parcelas inferiores a este promedio.

Por razones conceptuales y operativas, el límite superior de la pequeña agricultura familiar se consideró en 10.6 ha. En la tabla indicada podemos ver que las unidades económicas que tiene una mayor cantidad de tierra a este límite, representan el 4.38%



de los productores y concentran el 25% de la superficie agrícola, sin considerar la única empresa grande, que adquirió tierras del Estado mediante subasta pública, con una superficie de 1000 hectáreas.

Tamaño de la tierra (ha)	Productores (%)	Superficie (%)	Ha/Productor
Menor de 1	13,40	1,17	0,46
De 1 a menos 3	14,43	5,05	1,85
De 3 a menos 5	18,08	15,00	4,39
De 5 a 10.60	49,71	53,76	5,72
De 10.61 a mas	4,38	25,02	30,26
Total	100,00	100,00	5,29
Total Absoluto	2605	13788,56	5,29

Tabla 1. Distribución de los productores agropecuarios y de la tierra de cultivo, según tamaño de la misma, irrigación Majes 2012.

Fuente. Elaboración Propia en base al IV CENAGRO - INEI 2012

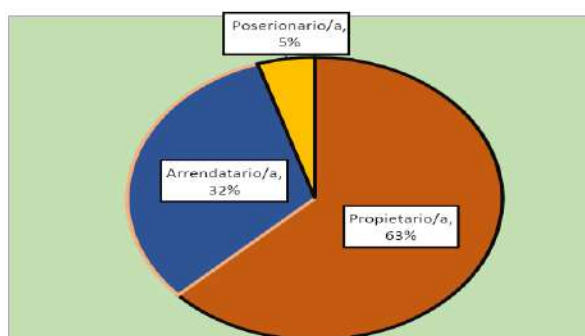
En el otro extremo, se observa el alto grado de parcelación y minifundización de la tierra que se viene dando en Majes, pues el 13.4% de los productores poseen superficies inferiores a 1 ha, concentrando únicamente el 1.17% de la superficie agrícola, a razón de 0.46 ha por productor. Evidentemente, se trata de un grupo que ya no vive de la agricultura como actividad principal, viéndose obligados a dedicarse a otras actividades fuera de la finca, como, trabajo asalariado agrícola, construcción civil, pequeño comercio, ejercicio de alguna carrera profesional, etc.

Si se toma, como minifundio a las unidades inferiores a 3 ha, es decir aquellas unidades que no permiten a la familia una adecuada reproducción biológica y social de su fuerza de trabajo, la proporción de agricultores minifundistas crece sustantivamente hasta el 28% del total de unidades agropecuarias, concentrando solo el 6.22% de la tierra de cultivo.

En otras palabras, nos encontramos ante un proceso de diferenciación de la pequeña producción agrícola, desarrollado por la teoría marxista, tal como lo vimos en el primer acápite, produciéndose dos grandes tendencias aparentemente contradictorias, pero al mismo tiempo perfectamente complementarias: de un lado la reconcentración de tierras en pocas explotaciones medianas y grandes, y de otro, la fragmentación del suelo en una gran cantidad de unidades agrícolas cada vez más pequeñas. Como ya se dijo todas las unidades agropecuarias estudiadas tuvieron como punto de partida un mismo tamaño de tierra, es decir, se pasó de una estructura agraria homogénea a una estructura agraria altamente heterogénea, gracias a las fuerzas del mercado.



Este proceso de polarización, se explica en gran parte por el funcionamiento de un mercado libre de tierras, y en menor medida por la herencia. Según la información del IV CENAGRO (INEI, 2012) que aparece en la gráfica 1, se tiene que, del total de las tierras de cultivo, solo el 63% son conducidas bajo la forma de propiedad; mientras que el resto (32%), es conducida bajo otras formas de contratación (arrendatario, aparcerero, posesionario, y otros). Al ser una zona en la que la tierra se entrega en un 100% bajo la forma de propiedad, era de esperar que esta forma sea mucho más alta a la registrada.



Gráfica 1. Distribución de la tierra de cultivo, por régimen de tenencia, irrigación Majes 2012. Elaboración propia en base al IV Cenagro - INEI 2012
Fuente. Elaboración Propia en base al Anuario Estadístico Agrícola 2015 - Gerencia Regional de Agricultura Arequipa.

A esta misma conclusión, se llega si se analiza la forma de adquisición de la tierra. En la Gráfica 2, se puede ver que, del total de las parcelas, la compra - venta representa casi un tercio de las mismas y la herencia solo un 4.34%, el resto corresponde a la forma de adjudicación (forma con que se entregó toda la tierra al inicio de la irrigación). El alto porcentaje de compra venta, ratifica la conclusión de que en la zona se está dando un mercado de tierras muy dinámico, que está generando la diferenciación de la pequeña producción agrícola familiar.

En este mismo sentido, contribuye la herencia, aunque en una proporción mucho menor.

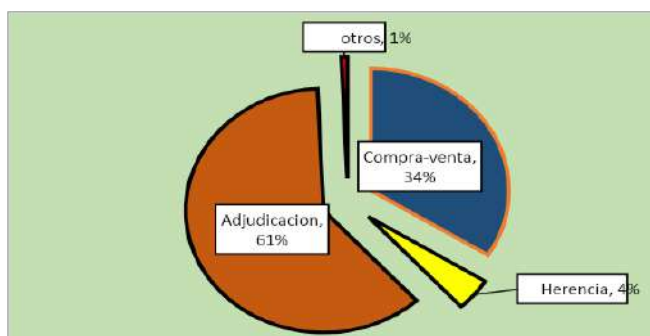


Gráfico 2. Distribución de la tierra de cultivo, por forma de adquisición, irrigación Majes 2012. Fuente: Elaboración propia en base al IV CENAGRO - INEI 2012



Conclusiones

Primera: La cédula de cultivo de la pequeña agricultura familiar de la Irrigación Majes, se caracteriza por su significativo grado de diversificación, pues casi la mitad del área cultivada se destina a una gran variedad de productos agrícolas y alrededor del 52% se destina a cultivos forrajeros para la cría de ganado vacuno lechero. La producción agrícola se destina cada vez más al mercado externo y a la producción de forrajes que no son la alfalfa, como maíz forrajero.

Segunda: En la zona se viene dando un intenso proceso de diferenciación de la pequeña producción agrícola familiar, que se expresa en el desarrollo de dos grandes tendencias: la concentración de la propiedad agrícola en pocas manos; pues solo el 4.38% de los productores concentran el 25% de la tierra, a razón de 30.26 hectáreas por unidad productiva; en el otro extremo se viene dando la minifundización y parcelación de las tierras pues, el 28% de los productores se encuentran en esta categoría concentrando solo el 6.22% de la tierra de cultivo.

Tercera: El principal factor de diferenciación, lo constituye la existencia de un mercado libre de tierras, muy dinámico que se expresa en las altas tasas del alquiler y/o la compra venta de tierras, pues el 38% es de conducción indirecta (arriendo, aparcería, etc.) y un tercio del total de las tierras fueron adquiridas por compra-venta, no obstante que en su origen todas fueron entregadas a conductores directos y en forma de propiedad. La herencia, aun no es muy dinámica (4.34%).

Bibliografía

- Cavero, M., & Díaz, R. (2015). Tipología de hogares de pequeña producción agropecuaria en Cusco y Arequipa. En SEPIA, *IV Censo Agropecuario: Resúmenes de investigaciones y experiencias y lecciones aprendidas* (págs. 43-76). Lima: SEPIA.
- Echenique, J., & Romero, J. (2009). *Evolución de la Agricultura Familiar en Chile en el periodo 1997-2007*. Santiago: FAO.
- Eguren, F. (2016). Desarrollo rural, agricultura familiar y comunidades campesinas en el siglo XXI. *Perú Hoy N° 29*, 50-69.
- Gerencia de Agricultura de Arequipa. (01 de 09 de 2016). Anuario Estadístico de la Gerencia de Agricultura de Arequipa 2015. Arequipa, Perú.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (29 de 08 de 2016). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Lima, Perú. Obtenido de <http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/>



- Kautsky, K. (1974). *La cuestión Agraria. Estudio de las tendencias de la agricultura moderna y de la política agraria de la socialdemocracia*. Barcelona: Laia.
- Kervyn, B. (1987). *La economía campesina en el Perú: teorías y políticas*. Lima: Centro de Estudio Rurales Andinos Bartolomé de las Casas.
- Lenin, V. (1979). *El Desarrollo del capitalismo en Rusia*. Madrid: Progreso
- Maletta, H. (2011). *Tendencias y perspectivas de la agricultura familiar en América Latina*. Santiago: RIMISP.
- Marx, K. (1973). *El Capital*. Buenos Aires: Cartago.
- Montes Urday, A. (2000). *Viabilidad de la pequeña agricultura en la Región Arequipa. Tesis de Maestría*. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.
- Ocampo, J., & Vargas, R. (2015). Tipología de la agricultura familiar en el Perú. En SEPIA, *IV Censo Nacional Agropecuario: Resúmenes de investigaciones, experiencias y lecciones aprendidas* (págs. 77-104). Lima: SEPIA.



Variáveis associadas ao crescimento da moradia citadina de agricultores: Características do fenômeno na Zona da Mata Mineira, Brasil¹

Angelina Alves Carvalho
Ana Louise de Carvalho Fiúza
Taís Azevedo de Lima

Resumo

A moradia citadina dos produtores rurais se constituía em um fenômeno restrito, basicamente, aos grandes proprietários. Contudo, a observação dos dados do Censo Agropecuário de 2006 e 2017, mostrou que este fenômeno tem se estendido, também, para produtores de menor porte. Em decorrência do crescimento deste fenômeno, os deslocamentos rotineiros entre a cidade e o campo têm se tornado mais frequentes na atualidade. Este artigo analisou o perfil socioeconômico dos proprietários rurais com moradia citadina, assim como as características produtivas de seus estabelecimentos. Para isso, foram utilizados os dados dos Censos Agropecuários de 2006 e 2017, realizados pelo IBGE. Os resultados mostraram que o *percentual de 'pessoas residindo na zona urbana'* e o *"IDH"* apresentavam uma correlação positiva com o fato do dirigente residir fora do estabelecimento. Por outro lado, o *tamanho populacional* e o *PIB Per Capta* do município não se mostraram relacionados com isso. Quanto às variáveis relativas ao estabelecimento, pôde-se verificar uma relação negativa entre o percentual de estabelecimentos rurais nos quais as atividades produtivas eram para o próprio consumo em relação ao percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural. Observou-se, que quanto maior era o percentual de famílias de produtores rurais que *exerciam atividades não agropecuárias* ou que as atividades não eram a principal fonte de renda mais expressivo era a moradia citadina. Todas estas características evidenciaram que os estabelecimentos com dirigentes residindo nas cidades eram mais produtivos, tendo uma importância significativa para o total da produção agropecuária do Brasil e, particularmente, de Minas Gerais e da Zona da Mata.

Palavras-chave

Moradia citadina, atividades não agrícolas, condições de vida rural, Zona da Mata Mineira/MG/Brasil.

Introdução

A abordagem da relação cidade-campo a partir das territorialidades advém do reconhecimento de que, na atualidade, os atores sociais presentes nesses espaços



vivenciam e produzem em diferentes escalas de ação (local/regional/global). Desta forma, as fronteiras entre campo e cidade e entre os próprios municípios vêm se diluindo de forma acentuada. Essa mobilidade e transitoriedade pelas diferentes escalas de ação foram possibilitadas pelo processo de interiorização de indústrias, serviços e a ampliação das políticas públicas, a partir de fins dos anos de 1990. Esta proliferação das ações em diferentes escalas do território tem ampliado o surgimento de espaços dotados de hibridez e inovação, resultantes da interação entre o modo de vida urbano e o rural (Santos, 1993; Sobarzo, 2006; Rua, 2006). Tudo isso se traduz numa crescente interconexão do local ao global, tanto em termos das condições materiais como virtuais. O presente artigo apresenta uma análise em relação aos dados dos Censos de 2006 e 2017 que apontam para o crescimento da moradia citadina de agricultores rurais residentes, até mesmo, em regiões agrícolas. No presente estudo analisa-se, de forma específica, o contexto da Zona da Mata Mineira, buscando identificar as características sociodemográficas e econômicas dos dez municípios de maior ocorrência de agricultores que não residem no estabelecimento rural em 2006 e 2017. Elencou-se dentre as variáveis analisadas o tamanho populacional, o IDH, o PIB, o tamanho médio dos estabelecimentos do município, o tipo de atividade econômica desenvolvida no estabelecimento e a ocorrência de dirigentes que residem fora do estabelecimento.

Fundamentação do Problema

O aumento do número de estradas pavimentadas entre o campo e a cidade, bem como a maior acessibilidade aos meios de transporte, públicos e particulares, como ônibus, moto e carro, também, contribuíram para tornar o deslocamento pendular entre estes espaços mais ágil. Por outro lado, os meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio, bem como as novas tecnologias da informação, como o celular e a internet, aumentaram, ainda mais, a proximidade entre os indivíduos independentemente dos lugares onde estejam. Assim, a distância entre campo e cidade vem se diluindo, ainda que de forma diferenciada ao longo do território brasileiro, ampliando as possibilidades de combinação de atividades agrícolas e não agrícolas nas famílias dos agricultores (Wanderley, 2009; Oliveira, 2016).

Com isso as atividades primárias ligadas à agricultura e à pecuária cedem espaço a uma maior diversificação produtiva, com crescente diferenciação social e econômica. Essa expansão da pluriatividade entre os agricultores familiares vem se constituindo em objeto de estudo de diversos estudos no Brasil, no Brasil e no mundo (Favareto, 2014; Sant'Ana, 2014; Fiúza et al., 2014; Nascimento et al., 2013; Carneiro, 2006; Schneider et



al., 2006; Campanhola & Silva, 2004; Ploeg, 1994; Marques, 1994; dentre tantos outros). Contudo, há uma nova faceta do fenômeno da pluriatividade, que ainda não tem sido muito estudada. Trata-se da moradia citadina de dirigentes de estabelecimento rural. Dentro da conformação de um campo mais ruralizado, era comum se observar os casarões que os grandes proprietários rurais mantinham na cidade. Estes casarões ficaram conhecidos na literatura como “sobrados”. Um arremedo do modelo da “Casa-Grande”, na cidade (Freire, 2004). Contudo, em um contexto territorial de crescimento da pluriatividade na agricultura, os dados relativos ao Censo (2006), os últimos disponíveis acerca desta temática, mostram um crescimento deste fenômeno para além dos grandes proprietários.

Todavia, pouco ainda se conhece sobre as características deste crescimento da moradia citadina entre diferentes tipos de proprietários rurais. Também pouco se tem pesquisado acerca do impacto desta moradia citadina sobre as atividades econômicas desenvolvidas nas propriedades rurais, bem como sobre a forma como estas vêm sendo administradas. Trabalhos como os de Gomes (2018) tangenciam este fenômeno da moradia citadina dos proprietários rurais, ao analisar o deslocamento pendular destes proprietários rurais entre o campo e a cidade, na região da Zona da Mata, em Minas. Fiúza et al. (2016), Gomes et al. (2018) mostraram que em pequenos municípios de economia agrícola, a proximidade entre o campo e a cidade, se constituiu como uma realidade, em função da maior acessibilidade aos meios de transporte motorizados, como motos e carros, assim como em função da melhoria da pavimentação das estradas e da fluidez do deslocamento face a ausência de congestionamentos.

Metodologia

Foram utilizados os dados do Censo Agropecuário de 2006 e 2017, por serem os mais recentes disponíveis sobre a temática e os únicos que possibilitariam a desagregação em nível municipal. Os dados foram obtidos por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), uma vez que o IBGE não fornece os microdados da sua base de dados por questões de confidencialidade dos respondentes. A principal variável oriunda desta base foi o “local de residência” dos dirigentes de estabelecimentos rurais. Para o ano de 2006, ainda era possível identificar se esse local era a zona urbana ou rural do município. Contudo, para o ano de 2017 a única informação disponível na divulgação preliminar dos dados era se o dirigente residia ou não no próprio estabelecimento agropecuário.



Para fins de comparação dos dois Censos optou-se por apresentar os dados somente de dirigentes que não residiam no estabelecimento rural, em função do objetivo da pesquisa se voltar, justamente, para identificar dirigentes que morassem na zona urbana do município. A partir desta variável identificou-se o percentual de dirigentes do município que não residiam no estabelecimento rural. Em um primeiro momento buscou-se, além de mostrar a tendência de mudanças entre as décadas nos diversos municípios da Zona da Mata, relacionar algumas características municipais com a ocorrência de dirigentes residentes fora do estabelecimento rural. Para isso foram utilizados indicadores de outras fontes de dados em nível municipal:

1. Percentual de população urbana: para o ano de 2006 foram utilizados os dados da Contagem Populacional de 2007 e para o ano de 2017, por não se dispor de dados mais recentes, utilizou-se os dados do Censo Demográfico 2010.
2. Tamanho da população do município: Foram utilizados os dados das Estimativas Populacionais publicadas pelo IBGE em 2006 e 2016, para o qual optou-se por mostrar todos os municípios da Zona da Mata, exceto aqueles relativos ao município sede da microrregião, tais como (Juiz de Fora, Muriaé, Ubá, Ponte Nova, Viçosa, Manhuaçu, Cataguases), em função destes municípios possuírem um tamanho populacional muito superior aos demais, não sendo possível a incorporação dos dados na mesma escala no gráfico.
3. IDH municipal: Utilizou-se os dados do Atlas de desenvolvimento de 2013 para se fazer uma análise de ambos os anos, 2006 e 2017, uma vez que não havia dados disponíveis em nível municipal para outros períodos de tempo.
4. Posteriormente, utilizou-se outras variáveis do Censo Agropecuário de 2006 e 2017 a fim de se estabelecer alguma relação entre as características dos estabelecimentos em nível municipal e a ocorrência de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural, quais foram:
5. Tamanho do estabelecimento: utilizou-se a Tabela 1109 para o ano de 2006 e a Tabela 6010 para o ano de 2017.
6. Atividade econômica fora do estabelecimento: utilizou-se para o ano de 2006 a Tabela 3398 e para o ano de 2017 a Tabela 6649.
7. Caráter familiar ou não do estabelecimento: utilizou-se para 2006 a TABELA 1109 e em relação a 2017 a TABELA 6649, que apresenta dados relativos à finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento.

Foi, então, realizada *regressão linear* a fim de se analisar como variava o percentual de



dirigentes citadinos (Y) em função das variáveis relativas ao município (X). Mensurou-se, também, o coeficiente de determinação (R^2) que mostrou como a variação da variável dependente, no caso, o percentual de dirigente citadinos era explicada pela variável independente, no caso: 1) o percentual da população urbana; 2) o tamanho populacional do município; 3) o IDH; 4) o PIB municipal; 5) o percentual de estabelecimento de agricultura familiar, que possuíam atividade econômica não agrícola; 6) o percentual de uso da terra, entre outros. Todas essas análises foram realizadas com os dados dos 142 municípios que compõe a Zona da Mata Mineira.

Resultados e Discussões

Ao se analisar o percentual de dirigentes de estabelecimentos rurais vivendo na cidade, observa-se que a sua distribuição nos 142 municípios da Zona da Mata Mineira apresenta-se bastante diferenciada entre os municípios da região. Em 2006 ocorria uma variação de 2,5% a 59,3%. Pode-se notar que a faixa com percentual compreendido entre 15% e 30% de dirigentes de estabelecimentos rurais vivendo na cidade é a que predominava. Menos de 10% dos municípios analisados apresentavam mais de 50% dos dirigentes rurais vivendo na cidade, mostrando que a ocorrência deste fenômeno ainda se apresentava concentrada em poucos municípios. Já em 2017, a distribuição de dirigentes rurais vivendo na cidade variou ainda mais do que em 2006, passando de 3,8 para aproximadamente 78%.

Ficou evidente o aumento do percentual de municípios que possuíam entre 40 e 50% dos dirigentes que não residiam nos estabelecimentos rurais. Aumentou, também, o percentual de municípios que apresentavam mais de 60% dos dirigentes dos estabelecimentos rurais residindo na cidade. Este passou para 10% dos municípios, o que representava 14 municípios.

Analisando o percentual de dirigentes de estabelecimentos rurais vivendo na cidade em 2006 e 2017 nota-se no GRAF.1 que houve um crescimento deste fenômeno em (76%) dos municípios, enquanto que somente 24% reduziram esse percentual. Entre os municípios que apresentaram uma redução, nota-se que Rio Pomba, Antônio Prado de Minas, Recreio, Sem-Peixe, Guarará e Faria Lemos foram aqueles que tiveram as maiores reduções. Por outro lado, Ponte Nova, Rio Novo e Juiz de Fora foram aqueles em que mais cresceu o percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento.

Anexo 1: Gráfico 1



Observando-se o ranking dos 10 municípios da ZM com maiores percentuais de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural, tanto em 2006 quanto 2017. Em 2006 todos estes dez municípios pertenciam somente a duas microrregiões: Juiz de Fora seguido de Cataguases. Em 2017, a microrregião de Cataguases passou a liderança como a microrregião que possuía maior número de municípios com elevado percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento, seguida de Juiz de fora e Ubá. Os dados mostram que dos dez municípios que compõem o ranking em 2017, oito não estavam em 2006.

Somente dois municípios se mantiveram nesse ranking: Pequeri localizado na microrregião de Juiz de Fora e Volta Grande, localizado na microrregião de Cataguases. Tanto em 2006 como em 2017, o percentual de dirigentes não residentes nos estabelecimentos rurais variava muito entre as microrregiões (TABELA 1). Quando se analisa os municípios com maior percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento, observa-se que no caso da microrregião de Juiz de Fora esse percentual ficou em torno de 60%, enquanto que nas microrregiões de Manhuaçu e Viçosa ficou em torno de 30%. Nas microrregiões que mantiveram municípios com maior percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento destacaram-se: Pequeri, Santana de Cataguases, Astolfo Dutra, Tombos, São Pedro dos Ferros, Santo Antônio do Grama.

Local	2006	Local	2017
Brasil	23,1	Brasil	27,4
Minas Gerais	24,1	Minas Gerais	32,6
Zona da Mata	26,2	Zona da Mata	39,6
Pequeri (JF)	64,0	Pequeri (JF)	77,6
Guarará (JF)	61,3	Santana de Cataguases (CA)	69,3
Santana de Cataguases (CA)	60,4	Chiador (JF)	68,8
Recreio (CA)	60,9	Astolfo Dutra (UB)	67,9
Faria Lemos (MU)	51,6	Palma (CA)	66,9
Tombos (MU)	50,9	Miraí (MU)	61,4
São Pedro dos Ferros (PN)	44,0	Rodeiro (UB)	58,5
Santo Antônio do Grama (PN)	40,6	Tombos (MU)	53,1
Astolfo Dutra (UB)	40,9	São Pedro dos Ferros (PN)	47,2
Tabuleiro (UB)	43,0	Santo Antônio do Grama (PN)	46,9
Alto Caparaó (MA)	35,2	Paula Cândido (VI)	42,4
Senhora de Oliveira (VI)	35,6	Alto Caparaó (MA)	41,2
Paula Cândido (VI)	30,2	Alto Jequitibá (MA)	36,4
Matipó (MA)	29,8	Viçosa (VI)	32,6

Tabela 1. Distribuição percentual dos dois municípios em cada microrregião com maior concentração de dirigentes residindo fora do estabelecimento, Zona da Mata Mineira, 2006 e 2017

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006 e 2017



Mas o que explicaria esta proeminência de dirigentes de propriedades rurais vivendo na cidade, nestes municípios? Quais fatores e características poderiam explicar a moradia e o deslocamento dos dirigentes de propriedades rurais da sede do município para o desenvolvimento de atividades produtivas no campo? Ao se analisar as características dos municípios e a ocorrência de produtores rurais residindo fora dos estabelecimentos, nota-se que existe uma forte associação positiva com o percentual da população que vive nas áreas urbanas do município. Observou-se que quanto maior a população urbana do município maiores eram os percentuais de estabelecimentos rurais que possuíam dirigentes morando fora deles, provavelmente, na sede do município. Em 2006 o percentual da população urbana explicava 43% da variação do percentual de dirigentes citadinos no município ($R^2=0,43$) e em 2017, 33%. Nota-se que a “população urbana” se constitui em uma variável muito importante para ocorrência de dirigentes rurais morando na sede do município. Já a diminuição do valor do R^2 de 2006 para 2017, pode estar relacionado ao fato de que se está utilizando os dados de percentual da população urbana de 2010, ou seja, podem estar subenumerados e contribuindo para que essa relação seja mais fraca.

Para além da análise da variável relativa à “população urbana”, outra variável que também poderia estar relacionada ao fenômeno da “moradia de dirigentes de estabelecimentos rurais nas cidades” é o “tamanho da população do município”. No entanto, os dados referentes a esta variável mostraram que a mesma não possuía quase nenhuma relação com o “local de residência dos produtores rurais”, em função da fraca inclinação negativa da relação do “tamanho populacional do município” com o “percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento”, assinalando para uma levíssima tendência da relação do pequeno “tamanho populacional” com o maior “percentual de dirigentes citadinos”. O poder de explicação do tamanho populacional para os anos de 2006 e 2017 quando analisado em relação a variação do local de moradia dos dirigentes foi praticamente zero ($R^2=0,02$ e $0,00$, respectivamente), indicando não haver diferenças entre morar em um município de pequeno ou grande população para haver a ocorrência da moradia urbana dos dirigentes rurais.

Já ao se analisar a correlação entre o “IDH municipal” e o “percentual de dirigentes residindo nas cidades” observou-se que esta era positiva para ambos os anos analisados (GRAF.2). Para 2006, nota-se que a mudança no IDH era responsável por quase 20% da variação do percentual de produtores residentes fora do estabelecimento nos municípios. Além disso, percebe-se claramente no gráfico que quanto mais alto era



o IDH e, conseqüentemente, a qualidade de vida no município, maiores eram as chances do produtor rural não estar residindo no estabelecimento rural. Em 2006, o município de *Bicas* na *microrregião de Juiz de Fora* pode ser considerado um bom representante desta relação. Em 2017, essa relação ficou ainda mais forte, com um R^2 de 26%. Pequeri, Chiador, Leopoldina podem ser tomados como bons representantes dessa relação, em que os melhores IDHs municipais acarretaram maior ocorrência deste fenômeno. Entretanto, Rio Novo, pode ser considerado como uma exceção, em virtude de apresentar alto IDH e não ter altos percentuais de dirigentes cidadão. No rol das exceções também constam municípios com baixo IDH e significativo percentual de produtores rurais residentes nas cidades.

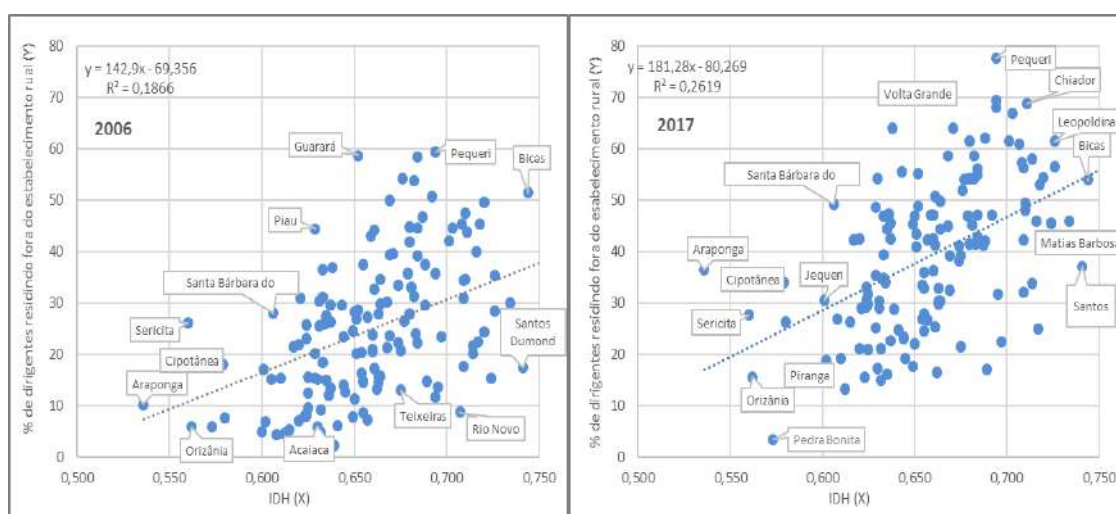


Gráfico 2. Relação entre IDH municipal com percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural, Municípios da Zona da Mata Mineira,

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017 e Atlas do desenvolvimento 2013

Se, por um lado, o IDH aparece com uma forte relação com o *percentual municipal de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural*, por outro lado, o valor do *PIB per capita do município* apresenta uma fraca correlação positiva com o mesmo. Não se observa praticamente relação entre as duas variáveis. Pode-se inferir com isso que esse fenômeno da moradia urbana de dirigentes de estabelecimentos rurais parece ter mais relação com os indicadores de qualidade de vida do município do que com os indicadores econômicos do mesmo.

Com relação às variáveis vinculadas aos estabelecimentos rurais nos municípios, nota-se que o *tamanho médio dos estabelecimentos*, também parece não ajudar a explicar o percentual de dirigentes residentes fora do estabelecimento. Nota-se que o poder de explicação desta variável é praticamente zero para ambos os anos analisados, apesar



da fraca correlação negativa. Já no que diz respeito à característica ligada à *pluriatividade dos estabelecimentos* ou a atividades paralelas que podem ser desenvolvidas no mesmo, observa-se no GRAF.3 que em 2006 o percentual de estabelecimento rurais no município que possuíam *atividades não agropecuárias* correlacionava-se intensa e positivamente com o percentual municipal de dirigente residindo na cidade ($r=0,62$ e $R^2=0,38$). Isto mostra que a variação no percentual de estabelecimentos com atividades não agrícolas é responsável por 38% das mudanças no percentual de dirigentes residentes fora do estabelecimento rural.

O mesmo acontece em 2017: quanto maior o percentual de estabelecimentos no município em que as “*atividades desenvolvidas no estabelecimento rural não se constituíam na principal fonte de renda do dirigente do estabelecimento maior era o percentual de dirigentes residentes fora do estabelecimento*. Tem-se como hipótese a ser melhor verificada, portanto, que estabelecimentos pluriativos, que combinam atividade agrícola com não agrícola apresentariam maior proporção de proprietários residindo fora do estabelecimento, possivelmente nas cidades, do que aqueles que não possuíam outras atividades não agrícolas ou que as atividades desenvolvidas ali são a principal fonte de renda. Possivelmente essas outras atividades demandam menor presença dos donos no estabelecimento e facilitam a moradia na cidade pelo dirigente.

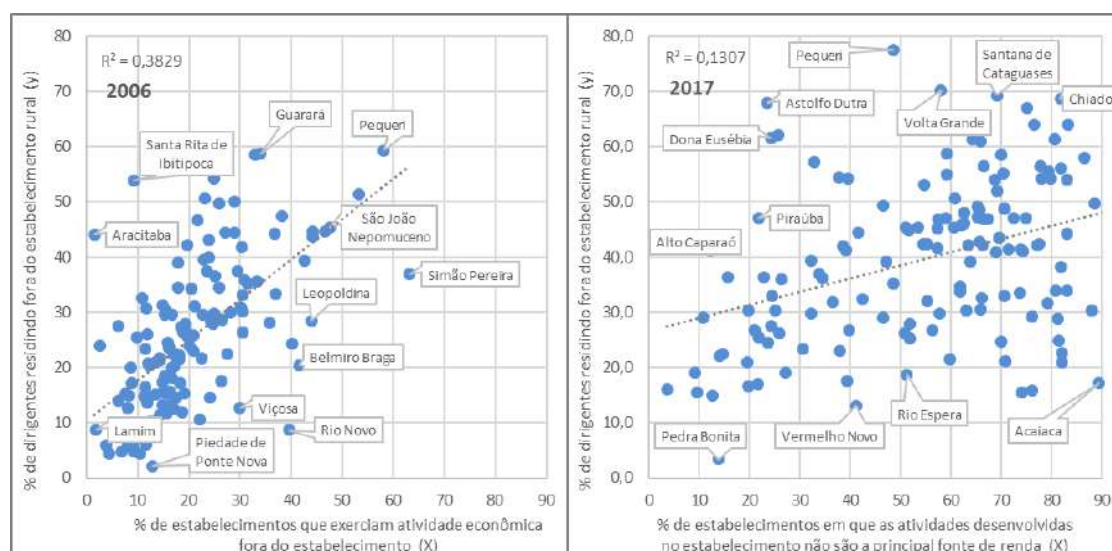


Gráfico 3. Relação entre percentual dos estabelecimentos rurais com atividade não agropecuária com o percentual de dirigentes de estabelecimentos rurais morando na cidade, Municípios da Zona da Mata Mineira, 2006

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017

Em contrapartida, é interessante notar que no Censo de 2006, o fenômeno de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural estava negativamente relacionado com o fato do



município ter um alto percentual de estabelecimentos rurais que eram do tipo *agricultura familiar*. Na falta da mesma informação para o ano de 2017, utilizou-se a variável *estabelecimentos em que a principal finalidade da produção é o próprio consumo ou familiar*, que também apresentou uma associação negativa. O poder de explicação desta variável foi de 30% na ocorrência de dirigentes residentes fora do estabelecimento em 2006 e de 9% em 2017.

Considerações Finais

A mobilidade cidade-campo tem se tornado cada vez mais comum na atualidade, e a importância deste fenômeno nos pequenos municípios torna-se ainda maior, pois é justamente nestas localidades em que em que essa condição é mais comumente adotada. Como pôde ser visto, o percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento é bem maior na Zona da Mata, composta basicamente por pequenos municípios, do que em Minas Gerais e no Brasil. Existem municípios, tais como Pequeri que em 2017 tinha quase 80% dos dirigentes residindo fora dos estabelecimentos rurais. Para a grande parte dos municípios teve-se uma aceleração deste processo, chegando a alguns a triplicar o percentual de dirigente não residentes no estabelecimento.

As variáveis relacionadas com as características dos municípios que mais estiveram relacionadas a este fenômeno foram o *percentual de pessoas residindo na zona urbana* e o *IDH*, ambos apresentando uma correlação positiva com o fato do dirigente residir fora do estabelecimento. Por outro lado, o tamanho populacional e o PIB *per capita* do município não se mostraram relacionados com isso. Quanto às variáveis relativas ao estabelecimento, pôde-se verificar uma relação negativa entre o percentual de estabelecimentos rurais nos quais as atividades produtivas eram para o próprio consumo em relação ao percentual de dirigentes residindo fora do estabelecimento rural. Observou-se, que quanto maior era o percentual de famílias de produtores rurais que *exerciam atividades não agropecuárias* ou que as atividades não eram a principal a principal fonte de renda mais expressivo era a moradia citadina.

Estas constatações levam a duas observações sobre o rural da Zona da Mata. 1ª) uma das condições da agricultura familiar ser pluriativa seria justamente pelo fato deste tipo de família, pluriativa, possuir membros mais qualificados que as famílias agrícolas, com nível de estudo e renda mais elevados, além de manterem uma interação mais frequente com a cidade. Por outro lado, observou-se que 2ª) a pluriatividade era típica de atividades agrícolas que se desenvolviam em cadeias produtivas não agrícolas de maior



valor agregado. Os dados encontrados sugerem a existência de estabelecimentos pluriativos também na agricultura patronal ou empresarial, os quais seriam propriedade pertence a pessoas ocupadas em outras atividades econômicas, como os profissionais liberais que residem no meio rural e trabalham nas imediações urbanas.

Também os agrônomos e outros profissionais formados na área de ciências agrárias (veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, dentre outros) podem ser proprietários de estabelecimentos rurais e possuem atividades econômicas nestas unidades, em geral utilizando força de trabalho contratada. Há ainda a possibilidade de que muitos destes estabelecimentos não familiares sejam, na verdade, sítios ou chácaras utilizados ao mesmo tempo para lazer e residência de pessoas que não são especificamente agricultores (os chamados “neorurais”), não constituindo necessariamente uma unidade de produção agropecuária pluriativa. Na maioria dos casos, de qualquer maneira, trata-se de uma nova função que o meio rural vem adquirindo, que é ser espaço de moradia e lazer, e também de negócios, por grupos sociais que não são agricultores familiares.

Notas

¹ As autoras agradecem o apoio financeiro do CNPq para a realização da presente pesquisa.

Referências Bibliográficas

- Alves, E. O que falaram os censos do IBGE? In: Seminários Temas Estratégicos. Brasília: Embrapa Estudos e Capacitação, 2012.
- Anlló, G.; Bisang, R. Da economia agrária à bioeconomia: repensando as abordagens para a análise das modernas agriculturas sul-americanas. In: Bühler, Cruz, Suenya Santos da. O fenômeno da pluriatividade no meio rural: atividade agrícola de base familiar. *Serv. Soc. Soc.*, São Paulo, n. 110, p. 241-269, jun. 2012. Disponível em <<https://bit.ly/3nBmbg2>>. acessos em 24 set. 2018. <https://bit.ly/2GQlPKT>
- Escher, F.; Schneider, S.; Scarton, L. M.; Conterato, M. A. (2014). Caracterização da pluriatividade e dos plurirrendimentos da agricultura brasileira a partir do Censo Agropecuário 2006. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 52(4), 643-668.
- Fiúza, A. L. DE C. et al. Os modos de vida dos agricultores pluriativos nas aldeias minhotas do noroeste de Portugal. *Ciência Rural*, v.44, n.12, p.2279-2285, 2014. Disponível em: <<https://bit.ly/2GN23qu>>. Acesso em 10 dez. 2017. doi:10.1590/0103-8478cr20131580.



Gomes, Nayhara Freitas Martins; Fiúza, Ana Louise de Carvalho; Pinto, Neide Maria Almeida; Remoaldo, Paula Cristina Almeida Cadima. Os rurais e a cidade: a mobilidade socioespacial dos habitantes do campo em pequenos municípios de economia agrícola. *RAEGA (UFPR)*, v. 44, p. 242-257, 2018.

Nascimento, P. F. et al. A nova dinâmica campo-cidade revelada pelo turismo Rural: o caso de Venda Nova do Imigrante – ES. *Revista de geografia agrária*, v. 8, n. 15, p. 1-21, fev., 2013.

RUA. J. Urbanidades no rural: o devir de novas territorialidades. *Revista de Geografia Agrária, Uberlândia*, v. 1, n. 1, p. 82-106, fev. 2006.

Santos, M. A urbanização brasileira. 2. Ed. São Paulo: Hucitec, 1993. 157 p.

Sakamoto, C. S.; Nascimento, C. A.; MAIA, A. G. (2016). As Famílias Pluriativas e Não Agrícolas no Rural Brasileiro: condicionantes e diferenciais de renda. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 54(3), 561-582.

Schneider, S.; Conterato, M. A.; KOPPE, L. R.; SILVA, C. C. A pluriatividade e as condições de vida dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. In: Schneider, S. (org.). *A Diversidade na Agricultura Familiar*. Porto Alegre: UFRGS, 2006.

Silveira, R. L. L.; Brandt, G. B.; Faccin, C. R. Fluxos pendulares e rede urbana na região do Vale do Rio Pardo/RS. *G&DR* v. 14, n. 2, p. 183-212, jan/2018 (ed. especial), Taubaté, SP, Brasil.

Sobarzo, O. O Urbano e o rural em Henri Lefebvre. IN: SPOSITO, M. E. B.; Whitacker, A. M. *Cidade e campo. Relações e contradições entre urbano e rural*. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2010.

Wanderley, M. N. B. O mundo rural brasileiro: acesso a bens e serviços e integração campo-cidade. *Estudos Sociedade e Agricultura e Sociedade*. Rio de Janeiro, UFRJ, v.17, n. 1, 2009a. Disponível em: <<https://bit.ly/34LCMoz>>. Acesso em: 15 dez. 2017.



Anexo 1

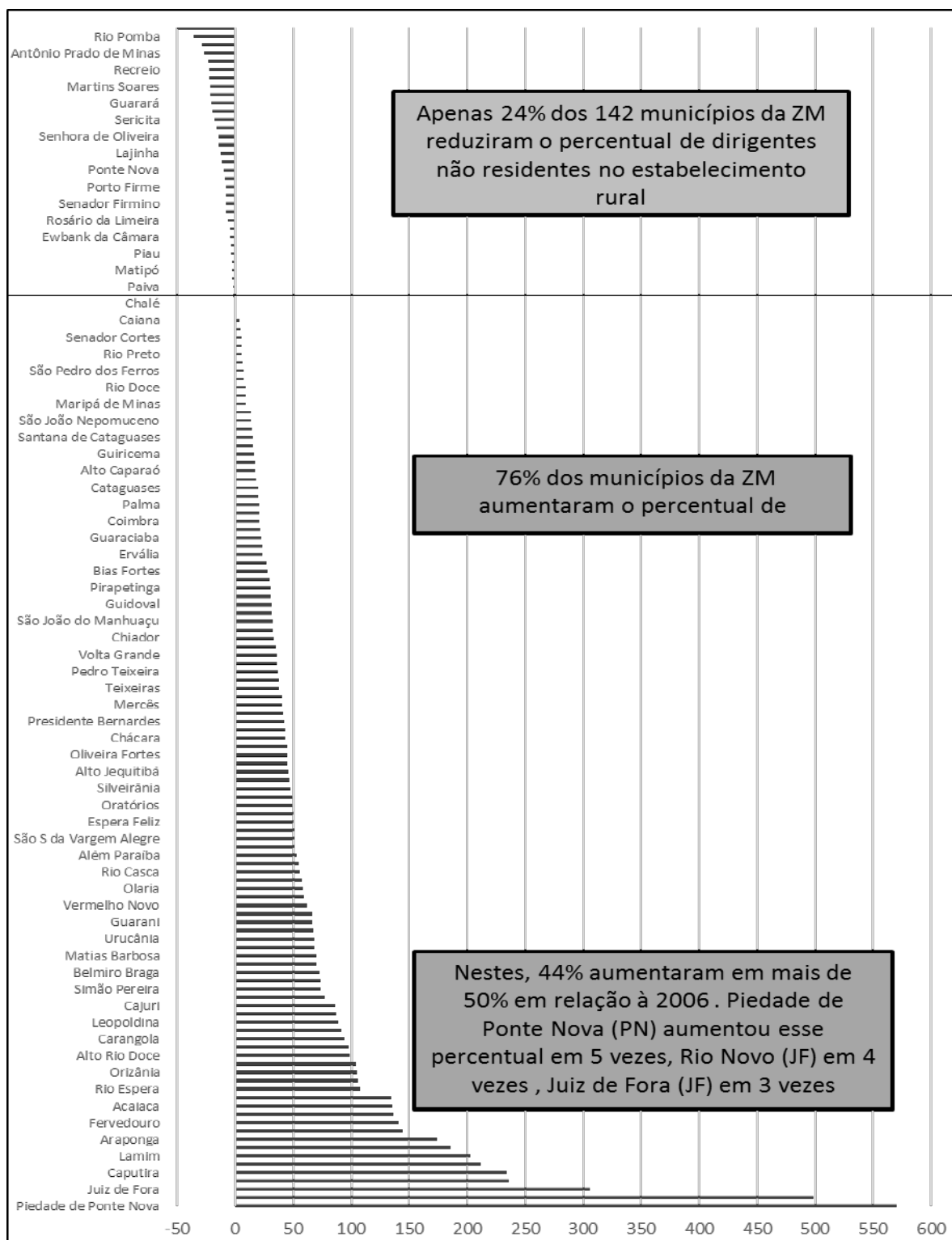


Gráfico 1. Percentual de mudança entre 2006 e 2017 do percentual de dirigentes não residentes no estabelecimento rurais, municípios da Zona da Mata Mineira.

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 201



Heterogeneidad y especificidades del agronegocio en México. Adaptación, agencia y retos para los pequeños productores¹

Héctor B. Fletes Ocón²
Hugo Pizaña Vidal³
Guadalupe Ocampo Guzmán⁴

Resumen

El agronegocio ha sido uno de los conceptos clave para el análisis social y agrario en América Latina. En México, se asume en ocasiones que la reforma agraria implementada a inicios del S. XX permitió un grado de acceso a la tierra, y ciertas prerrogativas estatales otorgadas a campesinos y pequeños productores, que mitigarían su penetración e impacto. Sin embargo, las desigualdades entre las corporaciones y estas poblaciones son notables, como el caso de sectores extractivos, minería o agrocombustibles. En esta comunicación se examina la especificidad y diversas modalidades que adquiere un núcleo de empresas agroalimentarias en una región maicera del sur de México en el estado de Chiapas (La Frailesca). Se destaca el proceso de largo plazo que conlleva el relativo dominio sobre los campesinos, pequeños productores y otros actores, así como la necesidad que tienen las corporaciones de establecer una serie de relaciones sociales, mecanismos de convencimiento y negociación con los actores del territorio, para estar en posibilidad de detentar una capacidad de control sobre los primeros. Sin embargo, para el pequeño productor el escenario es el de un cambio radical en las condiciones para la producción, así como en las redes y actores participantes en la producción, transformación y distribución que habían operado con presencia de los aparatos estatales hasta la década de los noventa.

Palabras clave

Agronegocio, cadenas agroalimentarias, pequeños productores

Introducción

Entre las más importantes transformaciones en la economía y sociedad global se encuentra el auge y/o consolidación del agronegocio, un grupo reducido de corporaciones transnacionales que concentran los procesos de producción, transformación y distribución de alimentos y subproductos agrícolas. El agronegocio se constituye en uno de los grupos ganadores de la más reciente crisis económica del capitalismo, tanto financiera como alimentaria. Para fines de la primera década del 2000, empresas del sector financiero, minerales, energía, farmacéuticas, habían acudido al



mercado de los alimentos, como un “efecto refugio” para sostener las utilidades, en gran parte derivadas del mercado de futuros y la especulación (Rubio, 2013).

En muchas regiones del mundo, el agronegocio se ha consolidado como un grupo de empresas con elevados niveles tecnológicos, una serie de estrategias de organización productiva, de inversión, gerencia, suministro y comerciales que los colocan como una industria moderna. Entre sus formas organizacionales y espacios de interés se encuentran Bigdata y la adaptación de lo que se conoce como Industry 4.0, superando con ello la localización sectorial de sus actividades, para convertirse en transectorial. No es casualidad que una de las ramas de la industria a la vanguardia en este aspecto sea el de la Biotecnología (Gras y Hernández, 2013; Lang y Heasman, 2015).

Como se sabe, existe un debate muy amplio sobre el agronegocio, sobre todo cuando se ve respecto a las condiciones de otros actores de la agricultura mundial y Latinoamericana, a saber, campesinos, pequeños productores y agricultura familiar. En la literatura se ha documentado el grado de control y dirección que ejerce el agronegocio sobre los otros actores, que se presentan como subordinados al núcleo empresarial. También se ha mencionado que, al establecer métodos de producción de agricultura intensiva (no solo la basada en tecnología biológica, sino en agrotóxicos) contribuye en la degradación ambiental de los territorios en donde se desarrolla, así como en la emisión de gases de efecto invernadero, como resultado de su relación con cadenas transnacionales de mercancías y uso de combustibles fósiles en su transporte al mercado. Finalmente, se señala la concentración económica y, por otro lado, el despojo que ejerce el agronegocio sobre los otros actores señalados. El agronegocio ha logrado la capacidad de influir y hasta determinar políticas públicas de fomento, investigación y desarrollo tecnológico, en colaboración con, o más allá de, los Estados.

En esta comunicación, se muestra un estudio de caso realizado en la región Frailesca - estado de Chiapas, al sur de México-, donde se intenta destacar el proceso de largo plazo que conlleva el relativo dominio sobre los campesinos, pequeños productores y otros actores, así como la necesidad que tienen las corporaciones de establecer una serie de relaciones sociales, mecanismos de convencimiento y negociación con los actores del territorio, para estar en posibilidad de detentar una capacidad de control sobre ellos. Esto asemeja más una perspectiva de Teoría del Actor-Red, en donde el poder es inestable, y se localiza más en la propia red (con la participación de agentes del Estado, y otras entidades privadas), que en un actor en específico (Wilkinson, 2006).



El caso de la Frailesca es relevante porque en la década de los setenta desplegó niveles de producción de maíz que le permitieron el mote de “el granero de Chiapas”, con una amplia participación estatal, pero una serie de factores llevaron a una reducción significativa en las superficies sembradas y en los volúmenes producidos, observándose una serie de cambios en las prácticas desarrolladas por los productores, así como en los actores participantes en las cadenas de producción de maíz. En este proceso surge y/o se consolida un núcleo de empresas del agronegocio. Sus orígenes, mecanismos e incluso formas de vincularse con el territorio son muy heterogéneas. En lo que sigue, se desea resaltar la heterogeneidad del agronegocio, las maneras específicas en que se consolida en un territorio, las posibles articulaciones y negociaciones con actores locales y la necesidad que tiene de afianzar permanente su capacidad de dominio sobre otros actores.

En la primera parte, se analiza los antecedentes y elementos constitutivos del agronegocio, como proceso vinculado a las tendencias de expansión del capitalismo en la era de la globalización. Después se examinan algunos de los rasgos principales del agronegocio en México, así como los actores principales operando en los sistemas alimentarios. Posteriormente, se revisa la forma en que se concreta el agronegocio en una región maicera del estado de Chiapas, al sur del país, en donde convergen distintos orígenes, lógicas y formas de relación con otros actores regionales. La comunicación ofrece unas reflexiones finales.

El agronegocio: el complejo empresarial y la lógica

Mientras en buena parte del siglo XX el tema de los alimentos fue tratado mundialmente como un asunto ordinario (por la disponibilidad existente de oferta), a fines de ese siglo comienzan a mostrarse una serie de problemas económicos, sociales y de productividad, que se sintetiza en el “fin del alimento barato” (McMahon, 2013). En este contexto es donde empresas del agronegocio global han reforzado su poder y dominio. Según Lang y Heasman (2015), el agronegocio controla el acceso al consumo de alimentos en el mundo. De este modo, en la actualidad “los principales conductores de la cadena de abastecimiento de alimentos son las fuerzas poderosas de procesadores, comerciantes, minoristas, restaurantes y especuladores financieros en agronegocios” (Lang y Heasman, 2015, p. 20).

En la industria alimentaria participan no solo empresas proveedoras de insumos sino de la producción de alimentos, transformación, distribución, bancos, producción de



maquinaria, seguros, financiamiento y tecnologías de información. Muchas de las que hoy son empresas líderes se encontraban ya entre las fundadoras del sistema moderno: Cargill, Deere, Unilever, Nestlé, McDonald's, Coca-Cola. No fue sino a partir de la década de 1980 que el desplazamiento hacia el capital financiero y las repercusiones de las biotecnologías condujeron a las fusiones y absorciones que desde entonces han cambiado rápida y radicalmente al sector (Chemnitz, Luig, Rehmer, Benning y Wiggerthale, 2018, p.11).

En el caso de las materias primas agrícolas más importantes en el comercio mundial (trigo, maíz y soya) solo cuatro empresas transnacionales dominan la importación y exportación. Éstas son Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y la Louis Dreyfus Company. Juntas son conocidas como el Grupo ABCD o, simplemente, como ABCD (McMahon, 2013; Chemnitz, et. al, 2018, p. 32).

Como parte de la dinámica de concentración económica en la industria alimentaria, tan solo en el último quinquenio se ha presentado un intenso proceso de adquisición/fusión de las empresas dominantes en diferentes subsectores de la industria alimentaria. En miles de millones de dólares (mmd) del año 2016, algunas de las fusiones más importantes han sido las siguientes. En alimentos, Heinz/Kraft (100 mmd); y en agroquímicos Dow/Dupont (130 mmd) y Bayer/Monsanto (66 mmd), apenas en el año 2018. Además, Chem China compró Syngenta. De la fusión de Dow y Dupont en el año 2017, surge Brevant, que sostiene el uso de la denominación comercial de semillas más conocida y globalmente expandida, "Pioneer", de amplio uso en México. De este modo, tres transnacionales llegan a controlar así más del 60 por ciento de los mercados de semillas comerciales y de agroquímicos (Chemnitz, et. al, 2018, p. 22). Una tendencia es la transición del agroquímico al control de la producción de semillas.

La capacidad que han logrado las transnacionales del agronegocio para apropiarse de una gran tajada del valor en las cadenas agroalimentarias y para controlar los procesos de producción y distribución en se ha basado en el apoyo de las políticas que establecieron los Estados desde la década de los ochenta, y principalmente en los noventa (Reig, 2004; Gras y Hernández, 2013)⁵. En el caso de Argentina, estas transformaciones políticas facilitaron la penetración del capital en amplios espacios rurales y cultivos, esencialmente la soya. La década de los noventa ha presenciado en este país la consolidación y ultra especialización organizacional, económica y tecnológica del agronegocio, constituyendo un complejo empresarial que ha modificado



las políticas y procedimientos en torno a la investigación agrícola que había estado coordinada previamente por organismos estatales.

Agronegocios en México

En este apartado, por falta de espacio, se presenta solo una caracterización muy general del agronegocio en México. Según Bautista, Díaz y Lastiri (2015, p. 4) el sistema agroalimentario mexicano está dominado por un pequeño grupo de Corporaciones Multinacionales (CMN) (de origen extranjero y nacional) que controlan la producción, almacenamiento, comercialización, créditos y apoyos públicos. El dominio abarca la oferta de insumos, maquinaria, producción, fijación de precios, canales de distribución, almacenamiento, medios de transporte, comercialización, etc.

Hay una concentración paralela a la que ocurre en la escala global. En el periodo 2006-2013, treinta y tres CMN destacan como las principales empresas agroindustriales en el mercado mexicano. Sus ventas durante el año 2013 fueron igual a \$1,831,616 mdp, representaron el 15.3% del total de las 500 principales empresas del país. De estas empresas, catorce son extranjeras: dos suizas, una francesa, una brasileña, una holandesa y una del Reino Unido con capital irlandés, y ocho provenientes de EUA.

En el caso de las semillas y agroquímicos, participan las tres CMN conocidas, Monsanto, Dupont y Syngenta, que en conjunto controlan el 50% de la comercialización de semillas patentadas en el mundo. En México son parte de la Asociación Mexicana de Semilleros. Por su parte, los mayores productores de agroquímicos, Bayer, Syngenta, Basf, Dow Agrosiences, Monsanto y Dupont formaron, en 1999, la Asociación Civil Agro Bio México como un grupo para implementar desarrollos tecnológicos en biotecnología (<http://www.agrobiomexico.org.mx/>). Este grupo de empresas domina la producción y comercialización de los paquetes tecnológicos en México (Bautista, et. al, 2015, p. 7,8).

En el país, respecto de las ventas totales a nivel nacional de los insumos fabricados, los porcentajes realizados por las 4 y 8 mayores empresas en cada uno de ellos, fueron: en los fertilizantes, 86.7% y 93.8%; en los pesticidas y otros agroquímicos, 54.3% y 71.8%; en los alimentos balanceados para animales, 31.4% y 44%; y en la maquinaria y equipo pecuario, 86.7% y 97% (COFECE, 2015, p. 8; con información de los Censos Económicos 2009). Poco más de 60% de las semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) han sido inscritas por tres solicitantes: Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. (Monsanto), el Instituto



Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y PHI México, S. A. de C.V. (Pioneer).

Los oferentes de plaguicidas incluyen compañías nacionales, así como empresas multinacionales grandes (Arysta Life Science, Basf, Bayer, Cheminova, Dow, Dupont, FMC, Monsanto, Summit Agro, Valent y Syngenta) y medianas o pequeñas. La oferta de maquinaria agropecuaria en México, particularmente de tractores, proviene de cinco empresas ensambladoras establecidas en el país: John Deere, CNH de México (Case IH y New Holland), AGCO de México (Massey Ferguson y Challenger), McCormick Tractores de México y Foton; además de la importación de tractores de otras marcas (COFECE, 2015, p. 9).

El segmento de alimentos procesados incluye a las CMN de procesamiento de maíz, harinas y alimentos quienes son las principales acaparadoras de granos en México. Este segmento es estratégico puesto que es uno de los principales abastecedores de alimentos para la población mexicana. Sólo seis CMN controlan a este nodo de la cadena, sus ventas representan el 15.9% y el 11.82% de las ventas totales de la muestra. De donde sólo dos empresas, *Grupo Bimbo* y *Gruma* (que controla a su subsidiaria *Grupo Industrial Maseca*), concentran el 87% de las ventas y el 85.7% de las utilidades del segmento. Las CMN *Cargill*, *Archer's Daniels Midland (ADM)* y *Bunge*, tienen una participación estratégica en la cadena agroindustrial, acaparan, procesan, distribuyen granos, oleaginosas (para consumo agropecuario y humano), entre otros productos agrícolas y financieros (Bautista, *et. al*, 2015, p. 9). También se encuentran nieles de concentración en industrias como la cerveza, los jugos envasados y la leche procesada (COFECE, 2015, p. 26).

Especificidad del agronegocio en Chiapas. Experiencias en la región Frailesca

Hay una gran heterogeneidad en las agriculturas en México, asociado con las condiciones naturales, la historia productiva de las regiones y los tipos de actores participantes. Mientras se ha resaltado que en el norte del país, y regiones como el Bajío (centro-norte), se concentra la agricultura empresarial e intensiva, igualmente otras áreas del país, en el sur, se integran en esta lógica. En el caso de Chiapas -al sur limítrofe con Guatemala- se encuentran al menos tres regiones de agricultura industrial (y polarizada), a saber, Soconusco, Comiteca y la Frailesca. En este apartado se examinan las modalidades que adquiere un grupo de empresas agroalimentarias en la última de estas regiones.



La Frailesca ha sido una región con una importancia histórica del maíz⁶, y donde la presencia y configuración del agronegocio representa un proceso de largo plazo. En 1971, se instaló Nestlé en el municipio Chiapa de Corzo (Álvarez, Barajas y Montaña, 1997). Desde su establecimiento, dicha empresa estableció una red de acopio de leche que le dio el control total sobre el mercado y los precios (Camacho-Vera, Vargas, Quinteros y Apan, 2018), acaparando porciones importantes del producto al interior de la región (Álvarez, *et. al*, 1997). Además, durante este tiempo (hasta 2016, cuando dejó de operar) influyó en las formas de organización de los productores locales, así como en los requerimientos de la calidad del producto y en las tecnologías empleadas, especialmente con la introducción de enfriadores en las décadas de ochenta y noventa, bajo ciertas reglas impuestas por la misma empresa.

Dos años antes, en 1969, se había creado el “Grupo Buenaventura”, una empresa de capital regional cuyo giro principal es la producción y venta de pollo y sus derivados (huevo, carnes, pollinaza) (Camacho, 2001). Su infraestructura, segmentada en múltiples plantas, le permite incubar sus propios animales, procesar las aves y aprovechar los residuos para producir alimentos. Además, la empresa ha logrado incursionar en la producción de porcinos y bovinos, y cuenta con explotaciones de maíz y sorgo (Notas de campo, 2018). Algunos de estos procesos los desarrolla en otros estados como Yucatán y Campeche (<http://buenaventura.mx/>).

Ambas empresas se establecieron y desarrollaron en la región en un contexto político en que la producción de básicos recibía amplios apoyos del Estado, como programas de comercialización, créditos, insumos, asesoría técnica, aseguradoras, y con ello, paquetes tecnológicos, que incluyen semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas sintéticos. Estos paquetes derivaron del programa Revolución Verde, que en México inicia en la década de 1940. Es al influjo de estas políticas agrícolas que la Frailesca se convirtió en la principal zona productora de maíz en Chiapas. En 1982, generó el 34% del grano en todo el estado (INEGI, 1985).

Hasta la década de 1980, los maiceros locales vendían sus granos a empresas del sector público como ANDSA y CONASUPO⁷, así como a comerciantes particulares que destinaban los productos al mercado nacional. La mayor parte del maíz era captado por las paraestatales, ya que ofrecían a los productores precios fijos y protegían el mercado nacional a través de la regulación de las importaciones de básicos. La agricultura de maíz se convirtió en proveedora de alimentos para el ganado, cuya leche era destinada



a la Nestlé. Por otro lado, al ser el maíz una materia prima fundamental de Buenaventura, los maiceros locales se convirtieron en sus principales proveedores.

Con la puesta en marcha de las políticas agrícolas neoliberales en México a mediados de los ochenta, cambió la configuración de la agroindustria regional del maíz y el papel del agronegocio. La estrategia de liberalización, apertura comercial y privatización, implicó el desmantelamiento paulatino del marco institucional que había sostenido la producción de granos. Hacia los años noventa se redujo la compra de granos por parte del sector público y los precios relativos del maíz decayeron (entrevista con ex funcionario de Conasupo, 2019). En la región Frailesca disminuyó la rentabilidad del maíz y los productores se vieron obligados a diversificar sus actividades o emigrar (Molinari, 2011). Muchos se desplazaron a la ganadería y se especializaron en ella, otros, la combinaron con el cultivo de maíz (bajo el sistema maíz-ganadería).

Pero los agronegocios proliferaron en el marco de esta crisis maicera, bajo modalidades claramente diferentes de acción. De hecho, a mediados de 1990, aparecen nuevos actores como Maseca, la compañía harinera más grande de México. Además, durante la década del 2000, crece la participación de comercializadoras privadas de granos, reemplazando algunas de las funciones que anteriormente cumplían las paraestatales en la compra, venta y procesamiento de granos.

Algunos autores mencionan que la Nestlé desempeñó un papel clave cuando se presentó la crisis agrícola en la Frailesca, “al representar la lechería una alternativa para atenuar los efectos adversos ante la caída de la rentabilidad de la producción de maíz” (Molinari, 2011, p. 29). A raíz de la baja en los precios del grano -explica Molinari- los productores optaron por la ganadería y la mayoría abasteció a la compañía. Según Barajas (1996) este cambio de maíz a ganadería fue, en parte, incentivado por la propia Nestlé al presentarse ante los productores como un comprador seguro y como la opción más viable al ofrecer créditos blandos, tecnología y asistencia técnica. De este modo, la empresa no sólo logró controlar la producción de leche y consolidar la red de recolección que había establecido décadas atrás, sino también influir y alterar la dinámica productiva de la región.

De acuerdo con Camacho-Vera *et al.* (2018, p. 78), Nestlé redujo su participación en la compra de leche al interior de la región desde 2010 y dejó de comprar en 2016. Frente al retiro de la trasnacional, aumentó la participación de pequeños y medianos productores de quesos, así como la de una empresa de capital local que procesa y



comercializa el líquido como es *Lácteos de Chiapas S.A. de C.V.* (PRADEL, su nombre comercial), que inició operaciones en 2003 (Camacho-Vera *et al.* 2018).

Por otro lado, la vinculación de Buenaventura con la producción de maíz regional en el marco de la apertura comercial ha sido limitada, ya que se abastece en mayor medida de importaciones. Camacho (2001) documentó que en 1996 dicha empresa cubrió sus requerimientos de maíz importando de Estados Unidos a través de CONASUPO. En su momento, los agentes de la empresa argumentaron la falta de instalaciones para conservar maíz y tenerlo en forma permanente durante todo el año, también buscaban evitar los riesgos que implicaba negociar los precios con los productores locales. *Hellin y Meijer (2006) reportaron una situación similar en 2005, año en que la empresa importó 83% del grano, y compró y cultivó el resto para abastecerse.* Los requerimientos de granos se satisfacen también por cuenta propia en parcelas que tiene en la región y en el estado de Campeche. De acuerdo con un productor local, tan sólo en Campeche la empresa cuenta con 500 hectáreas para los cultivos que necesita, ya sea sorgo o maíz (Notas de campo, 2019). En ocasiones recurre a la compra con particulares o con comercializadoras de granos que son las que acaparan la mayor parte de la producción. Algunas comercializadoras, señalaron que venden a la empresa, pero “depende mucho del precio que hay en el mercado regional” (comercializador 1 de grano en Villaflores, mayo, 2019) o de que sea una “temporada [en] que el grano escasea” (comercializador 2, Villaflores, mayo, 2019).

Una de las formas como Buenaventura se hace del maíz que se produce en la región es a través de contratos que, a través de ASERCA (organismo del Gobierno Federal enfocado en comercialización), realiza con los productores, en los que se acuerda en forma anticipada el precio de la compraventa. El objetivo de dicho programa, oficialmente denominado “agricultura por contrato”, pretende disminuir la incertidumbre que generan las variaciones de los precios internacionales del grano en el proceso de comercialización, tanto para los productores como para las empresas compradoras (Echánove, 2013). Algunos compradores ofrecen a los productores “paquetes tecnológicos” a crédito⁸. Esto es atractivo para aquellos agricultores que no tienen el suficiente capital para iniciar el ciclo agrícola. A cambio, comprometen su cosecha con la empresa⁹, que su vez les paga y otorga un subsidio como parte del mismo acuerdo.

Se ha observado que este programa no resulta atractivo a la mayoría de los agricultores. La razón, según agentes de comercialización es que “*el precio local generalmente*



supera el precio de la cobertura [es decir, el que se establece en el contrato]...” (comercializadora 1, Villaflores, mayo, 2019). Esta situación desalienta a los productores a establecer los acuerdos, ya que prefieren esperar a que el precio incremente durante la temporada de cosecha (de noviembre a febrero). Un productor del ejido Cuauhtémoc y trabajador de la empresa Buenaventura describió:

[Buenaventura] le da un precio al maíz, pero uno no quiere tener compromiso porque a lo mejor sube, no hay algo estable. Ellos no se comprometen a decir que si sube [el precio] te pago más. Ellos quieren que hagamos un compromiso, nos apoyan con un precio amarrado [fijo]. Por eso mucha gente no entra... [la empresa] consume maíz de Estados Unidos, y allá está [más barato] como a dos mil pesos. Ellos no pierden, Buenaventura no pierde... (Productor 1, Ejido Cuauhtémoc, Villaflores, 19 de diciembre, 2018).

Además de Buenaventura, dos empresas del mismo giro como Avimarca (empresa de la región) y Bachoco (originaria del estado de Sonora, al noroeste de México) se asentaron en la década del 2000 cerca de la Frailesca, en el municipio contiguo Ocozocoautla. La influencia regional de este conjunto de empresas no ha derivado tanto en el fomento de la producción sino en la generación de empleos, en su mayoría mal remunerados (Notas de campo, 2018)¹⁰. Importar es la constante en las operaciones de este tipo empresas. Narváez (2014) documentó que, aunque las *granjas avícolas y porcícolas locales se abastecen del maíz local, su compra sólo es estacional, en correspondencia con la principal temporada de cosecha. Durante el resto del año estas empresas suelen comprar a importadores de maíz, principalmente de EE. UU., como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).*

Hacia 1994, toma presencia Maseca, que se asentó en el municipio de Ocozocoautla con el propósito de abastecerse de la producción de maíz, tanto de la Frailesca como de otras zonas de Chiapas, para su transformación industrial en harina. En sus inicios, Maseca no se limitó a comprar el maíz regional, sino también promovió el cambio tecnológico a través de la formación de clubes de maíz (Camacho, 2001; Cadenas, 2004; Massieu y Lechuga, 2002). Dichos clubes consistían en la integración de grupos de productores vinculados a la empresa a través de despachos de asesoría técnica y proveedores de insumos, cuya finalidad era emplear paquetes tecnológicos para producir maíces híbridos con la calidad de molienda requerida por la industria (Cadenas, 2004). La aplicación de tales paquetes conllevó en el quehacer de los agricultores la



sustitución o reemplazo de variedades nativas por mejoradas, para aumentar los rendimientos del maíz, acorde a las necesidades de la empresa.

Fue a través de iniciativas que promovían este tipo de cambios técnicos, como Maseca logró establecer vínculos con los productores de la región, además de incidir y controlar el proceso productivo. Para reunir el maíz estableció un programa de compras en el que rentó a los ejidos las antiguas bodegas de Conasupo o espacios a la intemperie (Entrevista con ex trabajador de Conasupo, 2019; ver también Camacho, 2001, p. 130; Aguirre, 2015). De esta manera, la harinera compró directamente a los productores mediante sus diferentes centros de acopio. Narváez (2014) informó que para el año 2012, la empresa adquirió en Chiapas 53.4% del maíz que requería (procesando entonces 150,000 toneladas anuales), principalmente en la Frailesca y en otro municipio (Venustiano Carranza). El resto fue comprado en Sinaloa al norte del país (43.3%), Sudáfrica y Estados Unidos (3.3%).

La relación comercial entre Maseca y los maiceros de la región se modificó recientemente, cuando la empresa se retiró de las bodegas ejidales para importar la mayor parte del maíz o comprar directamente en su planta de Ocozocoautla. Esto último supone nuevos desafíos a los productores, ya que ven reducidas sus posibilidades para comercializar con la empresa al no contar con la capacidad para transportar las cosechas hasta las instalaciones, además de los riegos que suponen los descuentos que se aplican por la calidad del grano que exige Maseca. Dicha situación ha acentuado la dependencia más fuerte de los productores con los comerciantes particulares y con los comercializadores, que son las que actualmente controlan el mercado regional. Estos actores venden a Maseca, a las granjas o llevan a la frontera con Guatemala.

Reflexiones finales

En el análisis anterior, se puede observar que efectivamente el complejo de agronegocio ha expandido su participación en regiones productoras de cereales, en este caso de maíz en el estado de Chiapas, México. Éste ocupa espacios en muy diferentes segmentos de la producción, procesamiento y distribución de maíz, pero también en el suministro de insumos y tecnologías, muchas de las cuales son promocionadas e introducidas por los propios programas del Estado.

Si bien hay una presencia de empresas de origen local y regional, se deja ver que transnacionales como ADM ocupan un papel central en la distribución de escala global,



entregando producto conforme a las necesidades de calidad, volumen y temporalidad requeridos por las unidades empresariales regionales. Participan así, en las dinámicas de reestructuración regional y en las formas de relación entre productores, entidades privadas y agencias del Estado.

El complejo de agronegocio se configura de maneras específicas cuando se entrelaza con los actores territoriales. Dependiendo del segmento en que participan, le es necesario establecer un conjunto de relaciones sociales ya sea de manera directa o indirecta con los actores locales. Se entrelazan proyectos de ambos grupos de actores. Sin embargo, visto en el largo plazo, los espacios de maniobra para los pequeños productores y campesinos se ven limitados, porque han tenido que enfrentar no solo los efectos de las políticas “anticampesinas” por parte del Estado mexicano (al retirar subsidios, agencias de extensionismo, entidades de comercialización, y empresas paraestatales que acompañaban al pequeño productor en su relación con el mercado) sino también los impactos del cambio climático y el permanente deterioro de la agrobiodiversidad local.

Notas

¹ Ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología “Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida”, 1-6 de diciembre de 2019, Lima, Perú. Esta comunicación ofrece resultados preliminares de la investigación “Reconfiguración agroecológica: innovación social organizativa y tecnológica en la frailesca”, financiada por PAPIIT UNAM (Desarrollada por CIMSUR UNAM, CIESAS y UNACH); así como de la investigación de Tesis de Doctorado en Estudios Regionales del segundo autor “Exclusión socioterritorial de los pequeños productores agrícolas en dos municipios de La Frailesca, Chiapas. Un análisis en el marco de las políticas neoliberales”.

² Profesor de Tiempo Completo Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Facultad de Ciencias Sociales, México, correo electrónico: hector.fletes@unach.mx

³ Candidato a Doctor en Estudios Regionales, Universidad Autónoma de Chiapas, correo electrónico: hugoadrian_25@hotmail.com

⁴ Profesora de Tiempo Completo, UNACH, Facultad de Ciencias Sociales, correo electrónico: guzocamqua@hotmail.com

⁵ En el caso de las autoras Gras y Hernández, dejan muy en claro que más que un tipo de actor, el agronegocio se trata de un “modelo” o lógica de producción, que puede ser analizado en función de elementos como la “transectorialidad” (articulación horizontal



de una serie de actividades otras que la producción), la priorización del mercado global, el papel del capital en los procesos productivos, el acaparamiento de tierras y la estandarización de las tecnologías utilizadas (2013, p. 25,26).

⁶ Entre los años 2003 y 2017, la superficie sembrada de este cultivo, se redujo de 136,405 a 59,739 ha (en los municipios Ángel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y Villaflores), mientras que el volumen de producción cae de 389,401 a 193,381 ton en el mismo periodo.

⁷ Las empresas paraestatales se comenzaron a instalar en la región desde la década de los sesenta. Se tiene conocimiento de 30 puntos de acopio, de los cuales 10 eran a intemperie y 20 bodegas (Notas de campo, 2018).

⁸ Las marcas de semillas híbridas que se emplean con más frecuencia en la región son de las corporaciones Pioneer, Dekalb (Bayer-Monsanto) y Syngenta (también se emplean semillas *nativas*, ver Pizaña, *et al.*, 2019), seguidas de marcas de empresas nacionales como PROASE y PROSESO. En cuanto a agroquímicos, destacan activos para el control de plagas y malezas, de Bayer, Dow, Syngenta y FMC (Notas de campo).

⁹ Bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio (o fórmula para la determinación de éste) y condiciones de pago.

¹⁰ Un cargador de pollos, cuya función es seleccionar las aves y cargarlas al transporte, gana aproximadamente \$1000 pesos a la semana, trabajando largas jornadas laborales (más de ocho) (Entrevista con empleados de Buenaventura, diciembre, 2018). Muchos son trabajadores que han abandonado la agricultura, o bien, productores que han encontrado en las granjas una entrada complementaria a los ingresos que derivan de las parcelas. A pesar de los bajos salarios los trabajadores manifestaron que se encuentran agradecidos con la empresa, porque cuentan con ingresos seguros y estables para sus familias, además de algunas prestaciones a las que no podrían acceder si se dedicaran de tiempo completo al cultivo de maíz.

Bibliografía

Aguirre, J. (2015). *Innovación estratégica para la producción y comercialización de maíz en Chiapas* (Tesis de Maestría en Estrategia Agroempresarial). Universidad Autónoma de Chapingo, México.

Álvarez, A., Barajas, V., y Montaña, E. (1997). La reorganización del sistema lechero inducida por la Nestlé en La Fraylesca, Chiapas. *Comercio exterior*, 47 (12), 947-954.



Barajas, V. (1996). *Desarrollo regional en la Frailesca, Chiapas. La producción de leche como alternativa* (Tesis de Licenciatura en Economía). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Bautista, A., Díaz, I., y Lastiri, M. (2015). *El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México*. México: OXFAM.

Cadenas, P. (2004). *Actores, estrategias y dinámicas de organización en el agro de la Frailesca, Chiapas* (Tesis de Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural). Colegio de Postgraduados, México.

Camacho-Vera, J., Vargas, J., Quinteros, L., y Apan G. (2018). Evolución del sistema productivo de leche de bovino en la Frailesca, Chiapas. *Revista de Geografía* (61), 67-84.

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE, 2015). *Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. Resumen ejecutivo*. México.

Chemnitz, C., Luig, B., Rehmer, C., Benning, R., y Wiggerthale, M. (Eds.) (2018), *Atlas del Agronegocio, Datos y hechos sobre la industria agrícola y de alimentos*. Berlín: Fundación Böll Stiftung, Fundación Rosa Luxemburg, Amigos de la Tierra Alemania.

Echánove, F. (2013). *Apoyos del gobierno a la comercialización de granos: los programas de agricultura por contrato y coberturas de precios*. México: Subsidios al Campo. http://subsidiosalcampo.org.mx/wp-includes/textos_pdf/subsidios-pdf/7.Granos.pdf

Gras, C., y Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales. En *El Agro como Negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización* (17-46). Buenos Aires: Editorial Biblos, Sociedad.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). México en Cifras. Acceso el 19 de marzo de 2018. <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07>.

Lang, T., y Teasman, M. (2015), Introduction, The Food Wars thesis. En *Food wars. The global battle for mouths, minds and markets* (1-57). UK: Earthscan.

Massieu, Y., y Lechuga, L. (2002). "El maíz en México: biodiversidad y cambios en el consumo", *Análisis económico* (36), 281-303.

McMahon, P. (2013). On the Brink. En *Feeding Frenzy. The New Politics of Food* (25-46). London: Profile Books.

Molinari, C. (2012). *Región Frailesca. Hay maíz, hay frijol, pero dinero no hay*. México: UNICACH.



Narváez, T. (2014). *Análisis de la producción y de las cadenas productivas de maíz en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas* (Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural). El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019). *El sistema alimentario en México – Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible*. Ciudad de México.

Pizaña, H.; Fletes, H.; González, A. (2019), Agronegocios y campesinos maiceros en la Frailesca: vulnerabilidad y resistencias, *Eutopia, Revista de Desarrollo Económico Territorial* (15), 11-31

Reig, N. (2004). América Latina y la mundialización agroalimentaria. En María del Carmen del Valle Rivera (Coord.), *El desarrollo agrícola y rural del tercer mundo en el contexto de la mundialización* (23-54). México: Plaza y Valdez.

Rubio, B. (2013). La crisis alimentaria en el corazón de la crisis capitalista mundial. En Blanca Rubio (Coord.), *La crisis alimentaria mundial. Impacto sobre el campo mexicano* (11-51). México: UNAM, IIS, Miguel Ángel Porrúa.

Wilkinson, J. (2006). Network Theories and Political Economy: From Attrition to Convergence. En Marsden Terry y Jonathan Murdoch (Eds), *Between the Local and the Global. Confronting Complexity in the Contemporary Agri-Food Sector* (11-38). Oxford: Research in Rural Sociology and Development. Volumen 12, Elsevier.

Yúnez, A. (2003). The Dismantling of CONASUPO, a Mexican State Trader in Agriculture. *The World Economy* (26), 97-122.

Yúnez, A., y Barceinas, F. (2002). Lesson from NAFTA: The case of Mexico's Agricultural Sector. Reporte del Banco Mundial. Consultado en enero 2019 <https://bit.ly/3denE78>



La precariedad y la viabilidad de la pequeña producción en el transcurso del nuevo milenio

Humberto de Luna López¹

Resumen

Objetivo: exponer los procesos de reconfiguración de la sociedad campesina para enfrentar la precariedad y perpetuarse como segmento de población que presiona los salarios con tendencia a la baja al sumar al crecimiento de los excedentes de población, en una provincia del centro-norte de México llamado Zacatecas.

Problema: 4 de cada 10 zacatecanos viven en la zona rural; además en 2007 existían 124 861 pequeños productores y para el 2016 sumaban 255 236, principalmente ejidatarios y comuneros que producen para el autoconsumo en tierras de temporal y sin injerencia en los precios de mercado predominando un escenario de pobreza.

Metodología: se utilizó un cimientado respaldado por la estructura de tipo hipotético deductivo. A partir de la información disponible tanto de investigaciones ya realizadas sobre pequeños productores y datos oficiales, se contará con lo suficiente para comprender los procesos en los que se desenvuelven las actividades de los campesinos.

Resultados: La población campesina de Zacatecas vive en localidades menores a 2500 habitantes y para enfrentar la precariedad han fortalecido sus prácticas agropecuarias con el impulso de emprendimientos, con las escuelas para mujeres y jóvenes rurales y el acompañamiento a los productores impulsados desde el aparato gubernamental con el respaldo de la FAO. Discusión: la dinámica generada por los hombres y las mujeres campesinas fortalece la unidad socioeconómica campesina, permitiendo su subsistencia, pero sin transitar a la producción rentable y con ganancias.

Conclusiones: A pesar de las adversidades económico sociales de incertidumbre y precariedad los campesinos se mantienen.

Palabras clave

Precariedad, empleo, sociedad campesina, Zacatecas



Introducción

El presente trabajo, expone los procesos de reconfiguración de la sociedad campesina para enfrentar las condiciones de precariedad en las que se ven inmersos los integrantes de la unidad familiar o unidad socioeconómica campesina, de una provincia del centro-norte de México llamado Zacatecas. La relevancia del análisis tiene como telón de fondo el presagio de diversos autores que han trabajado sobre el tema en torno a la desaparición de esta forma productiva, conformada por campesinos en las postrimerías de la década de los setentas e inicios de los ochentas en México. La evidencia muestra que esta forma de producir persiste aun y en contra de esos presagios, y en contraposición de la forma de acumulación dominante actualmente dentro del modo de producción capitalista y en consonancia de la obtención de la máxima ganancia. A pesar de que este proceso ha generado condiciones adversas para esta unidad socioeconómica y sus integrantes, que implica vivir en condiciones de incertidumbre y precariedad, se mantiene mediante la utilización de una infinidad de estrategias de sobrevivencia utilizadas según el entorno natural, sociodemográfico, económico y cultural entre otros aspectos.

Problematización

El estado de Zacatecas está ubicado en el centro norte de México, además de tener una orografía accidentada, tres cuartas partes de sus tierras son semidesérticas, de fertilidad diversa. Los cambios económicos, sociales, políticos y culturales se explican por varios factores, como el agotamiento de la explotación minera en el siglo pasado y el impulso de esta actividad en la primera década del presente, al reactivarse por el descubrimiento de nuevos yacimientos. De igual forma, se destaca la política agraria y ganadera, empresarial y comercial en ese impulso. En base a fuentes oficiales se observa que la persistencia del campesinado en el Estado de Zacatecas sigue prevaleciendo, ya que actualmente 4 de cada 10 zacatecanos viven en la zona rural. Según el Censo General de Población y Vivienda 2010, el estado de Zacatecas tenía una población de un millón 477 915 habitantes, de los cuales 757 383 son mujeres y 720, 532 son varones. Al hacer una comparación, con respecto al año 2000, se observa un crecimiento en la población total de 7.27 por ciento. Es pertinente destacar que la población femenina sigue siendo mayor a la masculina. Cinco años después, según el INEGI, para 2015 en el Estado existía una población de un millón 579 209 habitantes de los cuales las mujeres alcanzaron la cifra de 808 mil 841 mujeres y 770 mil 368 hombres; es decir un crecimiento más acelerado de 1.37% de manera anualizada, superior a lo que



represento el crecimiento de 2000 a 2010 de 0.73%. En cuanto al número de productores agropecuarios la misma fuente señala que para 2007 existían 124 mil 861 pequeños productores de los cuales 106 mil 661 eran ejidatarios y comuneros. Esta cifra se dispara en 2016 al sumar 255 mil 236, principalmente ejidatarios y comuneros que producen para el autoconsumo en tierras de temporal y sin injerencia en los precios de mercado, predominando un escenario de pobreza ante la pulverización de la estructura de la tenencia de la tierra (INEGI, 2017).

Esta población establecida en el ámbito rural, destaca el número de mujeres, por encima de los hombres, dedicadas a diferentes actividades, cuyas formas específicas de producción se inscriben o no en una relación capital-trabajo. Además, se hace evidente que la migración sigue jugando un papel importante en el mantenimiento de la reproducción socioeconómica de la unidad campesina.

En esa zona, alejada de lo urbano, se realizan un sinnúmero de actividades como la producción de granos básicos, hortalizas, la cría de ganado de forma extensiva e intensiva y extracción de minerales. El Estado se destaca por ser productor prominente de frijoles claros, pintos y negros que aportan más del 50% al consumo nacional al igual que la producción de chile, zanahoria, cebolla y frutales como la guayaba, el durazno, uva y tuna entre otros (INFOSIAP-SAPARPA, 2017).

En cuanto a la cría de ganado se destaca un segundo lugar nacional en la producción de carne en canal de caprinos o cabritos. De igual forma se observa en la producción de ovinos con un quinto lugar en esa producción de carne; además del sexto lugar en la producción de leche de caprino (INEGI, 2013). Para el 2016 la situación se incrementa fundamentalmente en la producción de carne en canal de ese ganado, pero además se observa un claro repunte en la producción porcina y bovina, en la producción de leche y miel (INFOSIAP-SAPARPA, 2017). En cuanto a la producción minera destacan la producción de oro, plata, plomo, cobre y Zinc cuyo incremento entre 2006 a 2015 se ha disparado en 2 mil 07 %, 148, 290, 146 y 136 respectivamente (INEGI, 2017).

Metodología

Para el análisis se utilizó un soporte de tipo hipotético deductivo, porque a partir de la información disponible tanto de investigaciones ya realizadas sobre pequeños productores y datos oficiales, se infieren las condiciones de precariedad que se desprenden de este proceso.



Un pequeño productor o campesino es “un trabajador agrícola cuyo sustento depende básicamente de su acceso a la tierra, ya sea propia o rentada, y que usa principalmente su propio trabajo y el de su familia para trabajarla” (Akram-Lodhi et al., 2009: 3 en Noriero y Massieu, 2018: 182). Los pequeños productores han sido analizados desde diferentes perspectivas y enfoques principalmente entre las décadas de los 70s y 80s del siglo pasado. Estos pequeños productores o campesinos son entendidos como una unidad socioeconómica que funciona en sentido contrario al resto de la economía, porque produce para el autoconsumo, emplea mano de obra familiar, su producción es de temporal y recurre a otros trabajos para disponer de recursos suficientes para sobrevivir (Bartra, 2006). Para Herrera (2013) los campesinos son aquellas personas que articulan su trabajo agrícola de subsistencia en sus comunidades durante una parte del año con el que realizan como trabajadores fuera de la parcela. La óptica oficial los considera un sector social altamente vulnerable y sujeto de las políticas de asistencia social orientadas a superar la pobreza y prácticamente fuera de los programas de apoyo productivo (Orozco y López, 2007: 246). El destino de los campesinos era la proletarización y la destrucción de su economía de productores directos en el capitalismo, o si existían vías de existencia de la pequeña producción campesina familiar, considerando que ésta funciona de forma distinta a la relación capital-trabajo asalariado (Noriero y Massiu, 2018:183).

En base a esta conceptualización de los pequeños productores o campesinos se tomaron los resultados de una encuesta previa de un cuestionario que se aplicó en localidades menores de 2500 habitantes de Mazapil, Fresnillo, Francisco R. Murguía, Pinos, Vetagrande, Pánuco y Concepción del Oro, que fueron elegidos por la relación que se tenía con los porteros y la disposición de los pobladores mayores de 18 años, a compartir la información disponible en los tres años que duró el trabajo en campo. En estas comunidades se aplicaron 960 encuestas de pregunta cerrada y de opción múltiple, con un apartado de observaciones que permitió tomar aspectos que no se expresan verbalmente, pero son observables.

Con los datos de las 56 preguntas de la encuesta, se construyeron cuadros que sintetizan los temas contemplados, para conocer su relación con la economía. Las representaciones se construyeron a partir de las actividades dentro y fuera del predio de sus integrantes.



Resultados

A los pequeños productores se les encontró realizando diferentes actividades tanto en sus parcelas como en la calle, en algún jardín, en la escuela o en sus casas. Los resultados se muestran en cuatro variables relevantes cuyas aportaciones permiten derivar aspectos de la persistencia y precariedad de los pequeños productores o campesinos. Por sexo del total de personas encuestadas el 36.5% son hombres y el 62.95 son mujeres. Esta disparidad a favor de las mujeres se desprende de la hora de la aplicación de la encuesta (entre 10 am y 15 pm), ya que una parte importante de los barones se encontraban en las parcelas más retiradas del núcleo poblacional de la comunidad. Por estructura de edades muestra que el 13.2% corresponde a las personas que tienen entre 18 y 25 años de edad. El 11% les corresponde a las personas que tienen entre 26 y 30 años; el parámetro de mayor porcentaje corresponde a las personas que tienen entre 31 a 45 años con el 31.1%. En cambio, el porcentaje de menor representatividad lo tiene el 9% de la población encuestada; 12.5% corresponde a personas de 46 a 50 años y finalmente encontramos a las personas de 56 años a más con el 23.6%. En cuanto al nivel educativo se refiere, el de mayor representatividad corresponde a las personas que no tienen ningún nivel educativo con el 52.3%. Le siguen las personas que tienen terminada la secundaria con el 18.4%; posteriormente encontramos aquellos que tienen la secundaria terminada con el 8.3%. Encontramos porcentajes similares en aquellos que tienen primaria terminada y los que muestran estudios profesionales con 5.8%. Posterior a ellos encontramos a los que tienen la preparatoria terminada con el 4.3%, personas que tienen la secundaria inconclusa representan el 2.4%; 2.1 corresponden a otros estudios y finalmente encontramos a los que tienen la preparatoria inconclusa con el 1.4%.

Si agrupamos a la población por niveles escolarizados que corresponden a los que tienen preparatoria terminada, otro tipo de estudios y aquellos con estudios profesionales que pudieran acceder a un empleo en condiciones favorables, solamente llegan a representar el 12.2%; es decir, el porcentaje de mayor relevancia estaría distribuido en aquellos que no tienen ningún nivel de estudios representado por el 58% y el resto de ellos con el 29.8% que hacen un total de 87.8%. De ahí que la prevalencia de trabajos precarios que se desarrollan en actividades extraprediales está compuesto por actividades poco remuneradas y sin prestaciones de importancia, para respaldar los niveles de vida similares a satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población. Por ello encontramos una gran diversidad de actividades o trabajos realizadas por los pequeños productores o campesinos entre las que se encuentran los



jornaleros representados por el 4% de los encuestados; 2.5% son albañiles o peones de albañil, 2.3% están representados por obreros; 6.7% solamente se dedican a la parcela. 30.2% se dedican a otra actividad en la que sobresale hacer mandados, cuidar personas de edades infantiles o ancianas, fayuquero, llevar a las borregas a pastar entre otras actividades. El 3.4% está desempleado y el resto que representa el 50.9% es ama de casa o se dedica a realizar actividades domésticas.

Discusión

En Zacatecas alrededor del 86% de los productores tienen predios menores de cinco hectáreas; poco más del 10 por ciento mantiene condiciones favorables para incursionar al mercado externo o en su caso engrosar las filas de los campesinos que están inmersos en un proceso de proletarización y desaparición, para aumentar las filas del proletariado pauperizado y en ocasiones excluido de los procesos productivos formales de sus lugares de origen. El resto, alrededor del 4% están en condiciones de competir con el mercado externo (de Luna, 2010).

El incremento de productores campesinos y comuneros señalado de manera oficial (INEGI) hasta alcanzar poco más de 255 mil predios menores o igual a las cinco hectáreas en Zacatecas, pone de manifiesto algunas consideraciones. Por un lado, manifiesta que la mayoría de ejidatarios o comuneros tienen en posesión más de uno y hasta tres predios menores a las 5 hectáreas en terrenos separados; por el otro, muestra el nivel de pulverización que se ha gestado en la tenencia de la tierra producto de la repartición familiar después de la muerte del poseionario. Esta situación se presenta de manera más activa en este periodo, en la medida que una gran parte de los poseedores mantiene una edad promedio superior a los cincuenta años. Una encuesta aplicada a una muestra aleatoria de 900 campesinos de localidades seleccionadas en el estado de Zacatecas, muestra que el 94.44% de campesinos son de edades de entre 30, 50 y más años (50% de 30 a 49 años y 44.44% en 50 y más años (de Luna, 2018). En segundo lugar, la generación que se asume como nuevo poseedor mediante la herencia, antes de asumir la titularidad ya estaba inserto en el mercado laboral tanto de manera formal como informal. Esta nueva representación implicó compartir las actividades de manera itinerante fundamentalmente con los ciclos de la actividad agrícola en el predio y aquellas que, al no demandar actividades en el mismo o demandadas de manera escasa, permitían la inserción en otras actividades formales o no fuera de él, por las que se recibía una remuneración monetaria.



Los procesos a los que ha estado expuesto el sector de la economía campesina en las últimas cuatro décadas, se deriva de las formas que adquiere la estrategia del capital para buscar la maximización de los beneficios; proceso que ha puesto en entredicho la viabilidad de la pequeña producción, al mostrar signos de precariedad y exclusión de los procesos productivos formales. La presentación de la trayectoria de los productores campesinos zacatecanos hasta la actualidad en términos generales, emana de tres fases de relativa importancia y especificidad producto de la influencia del contexto internacional impulsado por la lógica de acumulación.

La modificación del patrón de acumulación a inicios de la década de los ochenta, marca el primer hito bajo el cual los campesinos quedaron expuestos a condiciones que trastocan el cimiento de su lógica de reproducción, donde las brechas tecnológicas entre productores de cualquier condición, obstruían de manera importante su participación en los diferentes mercados y ponían en entredicho su reproducción. La crisis de la deuda en 1982 dio impulso para que en el siguiente año se iniciara el proceso de transición hacia un nuevo esquema de desarrollo caracterizado por una menor intervención del Estado en las actividades productivas, la apertura comercial externa, la desregulación de la economía y el equilibrio en las cuentas públicas en el contexto de la globalización” (CEPAL, 1999: 9). De igual forma Orozco y López (2007) señalan que el contexto sociopolítico en el que se encuentra la economía campesina se configura a partir del proceso de integración económica mundial y las reformas estructurales operadas en la economía mexicana encaminadas a reducir la intervención estatal en el desarrollo económico (Orozco y López, 2007: 246). Otros autores señalan que el proceso de desarrollo ha propiciado un modelo polarizante que excluye las unidades de producción grandes o pequeñas que no pueden competir en el mercado y que propician la concentración de la producción (C de Grammont, 2010: 85); o la retirada del Estado desarrollista y la incursión del mercado como nuevo garante de la distribución de los beneficios propician el nuevo terreno en el que se desenvuelve la economía campesina con claros signos negativos de reproducción (Kay, 2016: 2; Noriero y Massieu, 2018:202; Ramisch et al: 130).

Un segundo aspecto que influyó en las condiciones de precariedad y exclusión de los campesinos tiene que ver con la modificación del artículo 27 Constitucional en 1991; la firma del TLC y la crisis de 1994 emanadas del accionar del sexenio de Carlos salinas de Gortari (CEPAL, 1999; C de Grammon, 2010; Arteaga, 2018). En cuanto a la modificación del Artículo 27 se puede inferir el objetivo que propone el patrón de



acumulación al incentivar el término de las aspiraciones a obtener una porción de tierra vía dotación, se dio impulso al fortalecimiento del PROCEDE para dar certidumbre individual como poseionario y con ello la posibilidad de fomentar la compraventa y una mayor concentración de la misma.

“El Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito por México, Estados Unidos y Canadá y cuya entrada en vigor se verificó en enero de 1994, no es sino la consolidación de este proceso marcado por la gran velocidad de la liberación – en comparación con otros países-, aún mayor que la exigida por las organizaciones financieras internacionales” (CEPAL, 1999). La crisis de 1994 redujo los salarios reales y provocó un lento crecimiento del empleo haciendo difícil la situación de las familias mexicanas en general y de las campesinas en particular. De igual forma la dualidad productiva preexistente es complementaria e inherente al desarrollo de una economía capitalista subdesarrollada, incapaz de ofertar los empleos necesarios y remunerados de manera satisfactoria para una vida decorosa (De Grammont, 2010: 85-87).

Finalmente lo que ha establecido la precariedad permanente en la población campesina se genera con mayor profundidad a partir de la crisis inmobiliaria que irrumpe en 2008 que como antecedente, muestra el declive de la hegemonía de EU ante potencias que poco a poco han tomado un lugar competitivo como China y la India, aunado al fenómeno de financiarización de la agricultura (donde los precios se establecen en función de las inversiones especulativas en las *commodities* alimentarias) para formar la triada crisis energética, financiera y alimentaria en la cual se manifiesta la ruptura de los mecanismos de control económico y militar de la gran potencia del norte (Rubio, 2008: 41). Ante esta situación de crisis agroalimentaria generada en las postrimerías de 2008, se observa que aquellos países que han fortalecido las agriculturas nativas con base en la pequeña producción familiar y en la búsqueda de la soberanía alimentaria, son los que serían beneficiados y reposicionados en esa fase de transición (en los que no está México). En cambio, los países que siguen impulsando el modelo agroexportador serán los más vulnerables en el ámbito estratégico de la alimentación (Rubio, 2011: 31). En México este proceso se expresa en cifras del Banco de México, en un mayor déficit primario de 18,076 millones de dólares en 2007 a 37,737 millones en 2013; cifra que no se ha reducido de manera importante hasta 2017 al mantener la cantidad de 28,318 millones de dólares como déficit en ese sector (Banco de México, 2018). La situación adversa en el sector implicó un proceso negativo de las condiciones de reproducción de la economía campesina.



Bajo este proceso, el radio de maniobra de la economía campesina se establece tomando en cuenta además del contexto específico, toda una multiplicidad de estrategias de carácter económico-social y cultural sintetizadas en condiciones pluriactivas de las actividades desarrolladas dentro de la unidad de producción campesina. Las vertientes de sostenimiento y reproducción de esta unidad socioeconómica, muestra aspectos relevantes en varias aristas. Por un lado, ante la imposibilidad de allegarse lo necesario para su reproducción implicó generar estrategias que descansan en la migración temporal y definitiva de por lo menos un miembro de la familia ya que las familias campesinas dependen cada vez menos de la agricultura. En segundo lugar, el aspecto de los subsidios públicos como parte del accionar del Estado como política pública, toma relevancia importante para respaldar los aspectos de reproducción campesina cuya importancia central descansa en las mujeres (Arias, 2013: 98-99).

Este fenómeno también se observa en otras latitudes de América en que la persistencia campesina se presenta apuntalada por acciones de carácter público como en el sur de la Argentina, en la medida que las fuerzas de la acumulación del capital inciden en los cambios productivos y laborales de los campesinos, éstos se valen de los subsidios públicos para enfrentar su desaparición y permanecer, aunque en condiciones de exclusión y precariedad (Bendini y Steimbregger, 2013: 29). Pero el proceso desplegado por el Estado para financiar la reproducción del campesinado al igual que otros grupos de población de excluidos del sistema, lo realiza mediante la implementación de políticas públicas de corte asistencial, en la medida que el modelo de acumulación adoptado “abandona el principio de bienestar al permitir leyes laborales que reproducen la pobreza y posteriormente, tratan de mitigarla con transferencias de recursos hacia poblaciones fuertemente excluidas y en desigualdad de condiciones de carácter precario mediante la política pública (Valdez, 2015). Además de estos aspectos de relevancia entre los subsidios públicos y la migración como alternativas de reproducción y sobrevivencia, los campesinos realizan una serie de actividades en función de su contexto territorial y su cultura, mediante la recolección de flora y fauna que encierran una gran variedad para allegarse los nutrientes necesarios que su condición corporal necesita hasta convertirse en forma de trabajo que puede entrar en un proceso productivo determinado de manera formal o no y recibiendo una determinada cantidad de recursos en especie o monetarios (de Luna, 2017(de la lumbre al fogón). En tercer lugar, es pertinente no dejar de lado que al interior de la lógica de la economía campesina se despliega de manera cultural su aversión al riesgo (Cáceres, 1994: 2-6). La experiencia que tienen



los campesinos en torno a los fracasos en algunas tareas realizadas para la obtención de una determinada finalidad específica como la cosecha, engorda de ganado, la introducción en la producción de algún producto nuevo entre otra infinidad de actividades, han servido para detectar la problemática que representa para la unidad campesina el tomar decisiones negativas a fortalecer la cohesión interna y ponerla al borde de la quiebra y en peligro de desaparición. Estos errores han servido de base para mantener su aversión al riesgo y toda aquella actividad que genere incertidumbre; por ello es de menester importancia mantener la lógica que gira en el autoconsumo. Finalmente, se sabe que los miembros de la economía campesina mantienen una facilidad de adaptación asombrosa en la heterogeneidad de territorios, donde tiene que ver el sexo y la edad de los integrantes para desplegar un sin fin de actividades de sobrevivencia y por ende de resistencia a desaparecer.

De esta forma, el proceso adoptado por la economía sustentada en el agronegocio como cimienta de la globalización, generó mecanismos de diferenciación importantes en la economía campesina presentándose una mayor explotación y precarización de sus integrantes en la medida que sus actividades son regularmente a destajo, no cuentan con la protección del Estado ni mantienen beneficios sociales en trabajos de la construcción, servicios domésticos y en la informalidad (Key, 2016: 15-16; Noriero y Massieu, 2018: 203). En ese sentido Ramisch et al destacan que lo que aparece como pluriactividad no es otra cosa que la precarización laboral; “La imposibilidad de insertarse productivamente en el mercado de trabajo y la imposibilidad de vivir exclusivamente en la actividad productiva, van configurando un escenario de subsistencia y precarización con un sesgo claramente pluriactivo (Ramisch, Ghione, Quiroga, Bilbao y Chávez (2013). Por lo tanto, los productores que producen en el minifundio temporalero son un testimonio vivo de la viabilidad del campesino en los tiempos presentes si bien con retos distintos a los planteados en la cuestión agraria clásica, la pluriactividad es una realidad en la que se insertan ese tipo de campesinos como parte de las estrategias de sobrevivencia y reproducción (Noriero y Massieu, 2018: 202). En ese sentido se retoman los resultados de la encuesta que nos muestra las actividades precarias en que se desenvuelve el campesino Zacatecano, que se insertan como peones de albañil, jornaleros, obreros y oficios varios como hacer mandados, cuidar personas, fayuqueros y pastores entre otras, derivado de las condiciones precarias de educación dado que el 58% de los encuestados no tiene ningún nivel de estudios.



Conclusiones

La economía campesina zacatecana al igual que en otras latitudes sobrevive al embate de la globalización cimentada en la apertura comercial. La diferencia en la estrategia utilizada estriba en las condiciones del contexto económico social aunado la especificidad territorial y cultural del momento.

Las estrategias de carácter externo de mayor utilización por los campesinos se remiten a la migración y las políticas de carácter asistencial emanadas del Estado como proceso de retención de los descontentos sociales en lo rural.

La pluriactividad no es otra cosa que la forma precaria de insertarse a un determinado proceso productivo sea remunerada o no. La forma que adquieren los trabajos en los que se insertan se distinguen por ser a tiempo parcial a destajo en ámbitos de la construcción y servicios domésticos, jornaleros o en el ámbito de la informalidad.

En Zacatecas los trabajos de mayor relevancia que realiza la población campesina además de la actividad de la parcela, esta determinada por los jornaleros, albañiles o peones de albañil, obreros en general, hacer mandados, cuidar personas de edades infantiles o ancianas, fayuquero, pastores entre otras actividades y realizar actividades domésticas.

Notas

¹Docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Bibliografía

Alva, Carlos, Lins, Gustavo y Mathews, Gordon (2015). La globalización desde abajo, México, Fondo de Cultura Económica-Colegio de México. En: <https://bit.ly/3jN4XtD>

Arias, Patricia. (2013). Migración, economía campesina y ciclo de desarrollo doméstico. Discusiones y estudios recientes. Estudios demográficos y urbanos, Vol. 28 Núm. 1 Pp. 93-121. México.

Banco de México. (2018). La balanza de pagos en el segundo trimestre de 2018. 24 de agosto de 2018.

Bendini, Mónica y Steimbregger, Norma (2013). Territorialidad campesina en el sur de Argentina. Cambios productivos y laborales como formas de resistencia. Rev. Utopía. Núm. 4. Septiembre PP 25-44.

INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. En: <https://bit.ly/3IBXuOv>



- C de Grammont, Humbert (2010). La evolución de la producción agropecuaria en el campo mexicano: concentración productiva, pobreza y pluriactividad. *Rev. Andamios*. Volúmen 7, Número 13. Mayo-agosto Pp.85-117
- Cáceres, Daniel (1994). Estrategias campesinas y riesgo. *Rev. Desarrollo agroforestal y comunidad campesina*, enero. Vol. 3. Pp. 3-13 B.A. Argentina.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1999). Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de la experiencia en México, Honduras y Nicaragua. 6 de julio. En: <https://bit.ly/3dg1Urr>
- De Luna, (2018). Migración y mujer campesina. En Hernández, José L. (coordinador): *Entrar en las agendas de política: investigaciones sobre migración, planeación del desarrollo, voluntariado, resistencia y género*, Plaza y Valdez editores, México
- Herrera, Fernando (2013). Migración: Vulnerabilidad, precariedad. Iztapalapa, *Revista de ciencias sociales y humanidades*, No. 75, Julio-diciembre. Pp. 5-14. México.
- INFOSIAP-SAPARPA (2017). Disponible en <https://bit.ly/319txxR> consultado el 10/10/2017 a las 12:45hrs.
- INEGI, Censo Ejidal 2007, cuadros 12 y 13 de tabulados básicos municipal y estatal. Consultado el 12/03/2012.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2016). Estadística de la Industria Minerometalúrgica. Datos de Zacatecas.
- INEGI, (2017). Anuario estadístico y geográfico de Zacatecas (México). En: <https://bit.ly/33MF2NI>
- Kay, Cristobal (2016). La transformación neoliberal del mundo rural: procesos de concentración de la tierra y del capital y la intensificación de la precariedad del trabajo. *Revista Latinoamericana de estudios rurales*. Núm. 1 Vol. 1. ALASRU. Pp. 1-26.
- Noriero, Lucio y Massieu Yolanda (2018). Campesinos maiceros en Tlaxcala: viabilidad, caracterización y respuestas ante el maíz transgénico. *Rev. Sociedad y ambiente*, año 6, Núm. 16 marzo-junio. Pp. 179-206. México.
- Orozco María E y López Diego. (2007). Estrategia de supervivencia familiar en una comunidad campesina del Estado de México. *Ciencia Ergo Sum*, Vol 14, Núm. 3 Nov-feb. Pp. 246-254. Universidad Autónoma del Estado de México. México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10414302>
- Ramisch Guillermo, Ghione Pablo, Quiroga Mariana, Bilbao Lucas y Chávez Florencia (2013). Un acercamiento al papel de las políticas sociales en la persistencia de pequeños productores pobres, el caso de Ancastrí, Catamarca, En: Ramilo Diego y Guido



Prividera (compiladores). La agricultura familiar en Argentina. Diferentes abordajes para su estudio. Ediciones INTA. Buenos Aires Argentina.

Rubio, Blanca (2009). De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impacto sobre el campo mexicano. Revista Argumentos. Nueva Época. Año 21, Número 57. UAM-X. México.

Rubio, Blanca (2011). La nueva fase de la crisis alimentaria mundial. Revista Mundo Siglo XXI, Número 24, Volumen VI Instituto Politécnico Nacional. Pp. 21-32. México.

Valdés, Ximena (2015). Feminización del empleo y trabajo precario en las agriculturas latinoamericanas globalizadas. Revista, Cuadernos de antropología social. Pp. 39-54. Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina.



Entre el campo y la urbe: Organización social y dinámicas de movilidad espacial en jóvenes universitarios provenientes de comunidades alpaqueras de Huancavelica – Perú

Lady Sihuay Castillo

Resumen

La movilidad espacial y migración es un eje fundamental para pensar alternativas sostenibles de desarrollo rural y los jóvenes de las zonas rurales son actores claves en los procesos que buscan transformar los escenarios de inequidad social indudables en las comunidades alpaqueras, en especial en las comunidades de Huancavelica.

La investigación profundiza la migración y movilidad espacial de las y los jóvenes universitarios provenientes de comunidades alpaqueras, tratado como un fenómeno que genera circuitos de actividades económicas diversas. Estas actividades los insertan como generadores de activos en un mercado laboral que combina unidades residenciales del campo y de la ciudad, sin que ninguno de estos espacios sea el predominante.

De lo anterior, nuestro interés se centra en identificar y analizar el impacto que esta continua movilidad espacial de los jóvenes universitarios ocasiona en la economía de las comunidades alpaqueras y su organización social.

Palabras claves

Juventud, comunidades alpaqueras, ruralidad, migración y movilidad espacial.

Problemática y metodología aplicada

El presente artículo centra su preocupación en los jóvenes universitarios y cómo su movilidad espacial y migración viene generando impactos en la organización y la economía comunal. Para ello se aplicó una metodología cualitativa que permitió reconstruir las experiencias de migración y movilidad de jóvenes estudiantes de Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica¹, para lo cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a los estudiantes y docentes investigadores vinculados a la producción alpaquera.



A lo largo de la investigación, presentamos las principales características de la movilidad espacial de las y los jóvenes universitarios, y cómo estas no se limitan a Huancavelica, sino, por el contrario, realizan una trayectoria de migración amplia y regida principalmente por la presión que el neoliberalismo y el mercado de la fibra ejerce sobre su acceso a activos y a derechos básicos como la educación.

De la misma forma, presentamos el contexto y las principales actividades de la crianza de camélidos en Huancavelica, así como los indicadores más relevantes que permitirán comprender la situación de las y los jóvenes de la región; además del estado de la cuestión de los trabajos desarrollados por geógrafos y etnohistoriadores, sobre la nueva ruralidad, como una forma de ampliar los conocimientos sobre el mundo andino-rural para la comprensión de fenómenos contemporáneos producto de la globalización.

Una finalidad de la presente investigación es generar información cualitativa que permita un mejor diseño de políticas públicas que fomenten el mejoramiento de la calidad de vida de las familias alpaqueras y que además colabore en una adecuada visibilización de su problemática.

La investigación apuesta por una metodología cualitativa, la cual responde a los cuestionamientos planteados y a la predisposición por descubrir nuevos elementos en relación de las dinámicas y los efectos de la movilidad en las zonas rurales.

Para la comprensión de las dinámicas de movilidad en jóvenes (15 a 29 años de edad), en este caso se realizaron seis (6) entrevistas semiestructuradas que permitieron la reconstrucción de las experiencias de movilidad y migración de los jóvenes universitarios provenientes de comunidades alpaqueras. Las dimensiones abordadas en las entrevistas fueron: i) contexto personal y familiar; ii) experiencias de migración y movilidad; iii) comunidad, organización y actividad alpaquera; y la iv) perspectiva personal de los jóvenes.

Contexto y estado de la cuestión

Desde la academia peruana, la movilidad espacial cotidiana ha sido una temática y problemática poco explorada. Esta producción, particularmente escasa, tiene raíces profundas en la forma en que el indigenismo planteó su mirada en las comunidades campesinas. Las percepciones e imágenes de las comunidades, y, por extensión a las comunidades alpaqueras, las presentan, en muchos casos, estacionadas en el tiempo y reacias a los cambios. Liberarse de estos estigmas ha resultado un proceso muy



complejo que nos invita, hasta hoy, a cuestionar y replantear nuestras formas de pensar el Ande como según las nuevas corrientes conceptuales la ruralidad.

Algunas investigaciones (Cotler, 2009 y Bourricaud, 2012) han dado cuenta de las dinámicas y cambios relevantes en los espacios regionales, más no ahonda en cómo la mejora de los medios, vías de comunicación y dinámicas de movilidad e intercambio han ido transformando también los espacios rurales y a la comunidad. Es decir, la movilidad y sus impactos en las comunidades no fueron consideradas como relevantes en las investigaciones de corte antropológico o sociológico, por ello, es necesario, regresar al gran tema de investigación de la antropología clásica para ampliar las miradas y evaluar las transformaciones en el presente.

Es necesario voltear nuestras miradas hacia las zonas rurales, que hoy son apremiadas por diversas problemáticas externas y poco controlables como la variación de las temperaturas y el cambio de estacionalidad de los fenómenos climáticos, que están afectando sus actividades productivas, haciendo necesario un despliegue de estrategias para adaptarse a contextos que cada vez se presentan más adversos.

En la actualidad se vienen desarrollando iniciativas para observar a la juventud de zonas rurales en América Latina. Aunque este importante esfuerzo centra su atención en mujeres jóvenes de las zonas rurales y sus estrategias de vida (Hernández; 2011), aun la movilidad en sí misma no es observada. Asimismo, es neurálgico hacer la distinción entre comunidades que desarrollan actividades agrícolas, agropastoriles y/o aquellas que son pastoriles.

Por otro lado, los estudios sobre la juventud en el país, cada vez se hacen más necesarios pues los hábitos de las y los jóvenes- aunque para referirse con mayor énfasis a los jóvenes de la ciudad de Lima- “son menos marcados por el pasado campesino que los de las generaciones anteriores. Han desarrollado comportamientos y formas de razonar sobre su existencia urbana, sobre los cuales la antropología hasta el momento no ha trabajado lo suficiente.” (León y Golte 2011, p.22).

Migración vs movilidad espacial: una falsa dicotomía

Los estudios sobre la migración en el Perú iniciaron en los años cuarenta cuando sucedió la dinamización de la migración de las provincias hacia la ciudad de Lima, surgiendo zonas denominadas “barriadas”. Todo este movimiento poblacional fue observado los científicos sociales de la época, quienes centraron su interés



en observar las grandes transformaciones en la ciudad y en los sujetos migrantes. Lamentablemente, este énfasis hizo que se dejarán de observar procesos importantes que estaban cambiando y reconfigurando las áreas rurales.

En los años 80, Marisol De la Cadena señaló que: “la presencia campesina en las ciudades no sólo se constata en la ciudad de Lima sino también en ciudades intermedias. Sin embargo, y quizás como consecuencia del centralismo, este fenómeno no haya sido suficientemente estudiado” (1988, p.5). Con su reflexión, la antropóloga, llamaba la atención sobre los procesos que transformaban y reconfiguraban aquellas ciudades intermedias en el interior del país, y en las que el entorno rural estaba bastante implicado.

Al respecto, Edmunte Alber (1998) precisa que las investigaciones sobre migración del campo a la ciudad presentan implícitamente una concepción particularmente problemática sobre las comunidades campesinas, pues las representan como sociedades cerradas que no se ven afectan por las relaciones externas ni por el entorno inmediato y donde las transformaciones a nivel regional y nacional no tendrían consecuencias en las dinámicas de éstas.

Por otro lado, el concepto de migración a través de su propia conceptualización dirigió la mirada hacia los movimientos poblacionales más estables y menos fluctuantes. Es así que “las investigaciones de las ciencias sociales en torno a movimientos poblacionales de índole muy diversa han sido subsumidas bajo el término migración, término que sugiere una uniformidad que no existe en la realidad.” (Alber; 1998:189), que finalmente derivó en la invisibilización de procesos de movilidad más cotidianos y frecuentes, ya sea en entornos rurales o urbanos.

En este proceso de reflexión y generación de conocimiento sobre los movimientos poblacionales fueron las comunidades alpaqueras las que menos atención tuvieron, siendo evidente al contrastar la producción académica referida a las comunidades campesinas dedicadas principalmente a la pequeña agricultura.

Juventud rural: ¿Resiliencia o condicionamiento estructural?

De acuerdo al último censo, en Perú existe un total de son 1,8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que habitan en zonas rurales. Tanto la definición de lo rural como el de juventud, son categorías que tienen definiciones que son funcionales en la aplicación



de los censos nacionales, sin embargo, no permiten la comprensión de las diferencias sociales y culturales que son reflejo de la diversidad que contiene el país.

Las discusiones sobre los indicadores que deberían considerar los censos para definir quiénes son los jóvenes y quiénes no lo son, es una discusión no resuelta. A ello, se incluye la variable cultura, que complejiza la tarea si es que se busca contar con indicadores homogéneos que sean funcionales para las mediciones o para ser usados como base de alguna política pública. Lo que podemos enunciar con certeza es que, de manera diferenciada y de acuerdo a propios patrones culturales, cada sociedad va añadiendo variables que trascienden el indicador de la edad para definir quiénes son los jóvenes para sus comunidades.

De otro lado, el limitado acceso a servicios básicos, como educación y salud, no son adecuadamente atendidos y gran parte de la población no accede a ello. La situación de los jóvenes de zonas rurales refleja años de abandono por parte del Estado, en la mayoría de casos el acceso a la educación primaria y sobre todo la secundaria los obligó a salir de sus comunidades puesto que no tenían escuelas cercanas.

En el caso de los jóvenes participantes en la investigación, podemos identificar algunas características similares. Por ejemplo, todos ellos tuvieron que migrar para acceder a los estudios secundarios, siendo su generación la primera en acceder a estudios superiores. Al respecto, finalizados sus estudios secundarios, debido a la falta de recursos, muchos de ellos laboraron alrededor de dos a tres años para acceder a la educación superior universitaria. En su preparación preuniversitaria combinaron sus estudios con trabajos de medio tiempo.

Los entrevistados indican la falta de ingresos familiares como un componente que marcó el inicio de sus experiencias laborales, usualmente acompañados de alguno de sus padres en la comunidad, en una ciudad intermedia o en la ciudad capital, entre los 8 y 12 años de edad. Los ingresos provenientes de la actividad alpaquera a lo largo de sus relatos resultaron insuficientes para costear los gastos familiares, es por ello, que los padres de estos jóvenes diversificaron sus actividades en sectores, como: minería, construcción civil, comercio, entre otros.

En algunos testimonios aparece la frustración por no contar con los recursos económicos suficientes para llevar su vida académica y familiar en mejores condiciones. Por ejemplo, una entrevistada relató la “rabia” que le da no poder asumir los gastos



familiares para que su madre pueda dejar de trabajar y también pueda costear de manera más holgada sus gastos en la universidad.

Así mismo, en todos los casos, los jóvenes comentaron el poco valor económico que reciben los criadores de camélidos, que no se condice con el trabajo y “sacrificio” que requiere dicha actividad. Los aspectos difíciles de la actividad alpaquera reconocida por estos jóvenes era principalmente los aspectos climáticos para lo cual no cuentan con tecnología ni herramientas que les permita palear dicha realidad.

Zonas altas: discursos y prácticas

La elección del programa de estudios para los jóvenes significó una situación complicada, la tensión entre las expectativas de los padres y el poco valor social que tiene la actividad alpaquera fueron aspectos gestionados por estos jóvenes en su elección por el programa de Zootecnia antes que una carrera profesional como Ingeniería Civil, Derecho y Medicina.

De acuerdo a la información recabada en campo, los programas de estudio que concentran la mayor cantidad de postulantes son: Ingeniería Civil, Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Ambiental, Enfermería, Administración, Contabilidad y Economía. En tanto que los programas que concentran el menor número de postulantes son Zootecnia y Educación; ambos programas desarrollan líneas de investigación que apuntan a resolver problemas regionales en sus respectivos campos.

Los sentidos y discursos respecto a las zonas altas impactan en la vida de las y los jóvenes y de sus familias. Incluso esa afectación es diferenciada entre las sociedades agrícolas y las pastoriles, siendo estas últimas las más afectadas, debido a la estigmatización que sufren, siendo relacionadas directamente con el atraso del país.

El historiador Jorge Lossio (2012) desarrolló aspectos que permiten comprender el surgimiento de las percepciones negativas que giraron en torno al poblador andino en la época republicana. Las elites criollas entendieron que el espacio ideal era la geografía costeña por su cercanía al mundo occidental y por su cercanía al mercado y aparecía en contraposición el Ande, las altas montañas y la altura se concibe con una traba. Mientras que, en la Colonia, la valoración respecto a la geografía y espacio andino no era negativa, el desarrollo económico centrado en la riqueza minería se concentraba en el Ande. Asimismo, nos muestra “cómo en el Perú se ha intentado usar el clima y la



región geográfica de altura para explicar fragmentaciones sociales, subdesarrollo y el fracaso de variados proyectos nacionales” (Lossio, 2012:12).

Una de las preguntas que se hace este historiador gira en torno al rol de la ciencia en la construcción de la percepción de los climas de altura como ambientes hostiles para la vida humana. En el desarrollo de sus argumentos aparece la hipoxia y sus consecuencias, las cuales se empiezan asociar con los problemas sociales y los traspiés en la historia del país. De lo expuesto por Lossio, se puede revelar que científicos contribuyeron en la construcción de sentidos negativos respecto a las poblaciones de altura. Es evidente que han desfilado por la trayectoria de estas comunidades un conjunto de sentidos y significados entre discriminadores y otros paternalistas.

Por último, en el 2017, se realizó la primera Encuesta Nacional: Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Uno de los resultados de la encuesta señala que el 59% de población quechua y aimara fue discriminada o muy discriminada sea por su lugar de procedencia, su forma de hablar, vestimenta, lengua que habla y vestimenta.

Análisis

Dinámicas de migración y movilidad de jóvenes

Las experiencias de movilidad y migración de los jóvenes participantes en la investigación, están estrechamente vinculadas a sus necesidades económicas y educativas, así como las decisiones sobre los movimientos y rutas que siguen desde pequeños, las cuales son tomadas por sus padres y posterior a los 18 años de edad son ellos mismos los responsables de definir hacia dónde se dirigen.

En la infancia de los jóvenes existe una primera experiencia de migración temporal o permanente para garantizar el acceso a la educación de nivel primario o para acceder a un trabajo, esto acompañado de alguno de los padres. Ya iniciada la secundaria, entre los 12 y 17 años de edad, las experiencias migratorias y de movilidad espacial se reducen. En el periodo preuniversitario se movilizan para acceder a otras posibles universidades para trabajar y solventar los estudios preuniversitarios, así como buscar otros circuitos de formación preuniversitaria de manera que puedan acceder a otras instituciones de preparación preuniversitarias.

La experiencia de movilidad espacial en la etapa universitaria se realiza principalmente motivado por la acumulación de conocimientos tanto prácticos como académicos. En



este aspecto los programas de movilidad estudiantil al extranjero promovido por la universidad posibilitaron que estudiantes del programa de Zootecnia sean beneficiados por ello.

Unidades residenciales: entre la estancia y la universidad

Los entrevistados identifican en sus testimonios las adversidades climáticas y geográficas de las zonas alto andinas, sin embargo, según los testimonios, priman los lazos familiares y el apoyo entre los individuos que componen las redes, como los abuelos, los padres e hijos.

El vínculo de las nuevas generaciones con las estancias y la actividad alpaquera-ganadera, se genera y estructura a partir de la participación activa de la generación anterior en la actividad y del nivel de involucramiento que los abuelos y padres puedan haber fomentado en ellos. El sentido de responsabilidad para la optimización de la actividad, puede estar estrechamente ligada a este involucramiento.

Sin embargo, existen hitos históricos como el conflicto armado, que, además de impactar en la reorganización social de la comunidad, tuvieron una gran incidencia en las trayectorias de vida de la generación intermedia, quienes ahora son padres de estos jóvenes universitarios. Por otro lado, la educación percibida por la nueva generación en las universidades e institutos, le construye una mirada distinta al campo, incita en ellos un sentimiento de retorno al campo y revalorización de la actividad alpaquera y la vida comunal que implica.

Organización social y la economía en las comunidades alpaqueras

La organización social de los grupos que componen a la comunidad se puede distinguir en tres niveles: familias comuneras con rebaño y tierras para pastar, familias comuneras que no poseen rebaños y pastores (algunos provenientes de otras comunidades y anexos) subcontratados para el cuidado del rebaño durante la ausencia de los alpaqueros. Como se observa, esta estructuración social de la comunidad está estrechamente vinculada a la distribución de las tierras y la propiedad, introduciéndose una forma de obtención de tierras llamada “parcelación”.

Así mismo, esta forma de organización social estructura el estatus social que cada grupo posee en la comunidad, siendo los pastores contratados, provenientes de comunidades menos accesibles y con menores recursos económicos, la población más vulnerable



debido a su carencia de propiedades, estatus y accesos al mejoramiento de su calidad de vida, además de sufrir la violencia ejercida por los dueños de la estancia, el abandono, la pobreza y la estigmatización.

Las estrategias para diversificación de fuentes de ingreso se vinculan estrechamente con las nuevas configuraciones en la organización social de la actividad, es así que en un primer momento cuando de manera individual las familias no lograban hacerse cargo de los rebaños alpaqueros, opera las familias extensas y la rotación de las mismas para el cuidado de los animales. Actualmente, el hecho de que el parentesco no sea la base de la organización social hizo que dicha responsabilidad se esté otorgando a un tercero, que no es familia y al que se le paga en dinero o con el uso de las zonas de pastoreo.

La privatización e individualización en la actividad alpaquera es un fenómeno que sigue creciendo, esto no solo por la presión que ejercen los intermediarios al acumular la mayor parte de las ganancias y dejar poco a los criadores de alpacas, sino también por las condiciones precarias en las que se desarrolla la actividad alpaquera que cada vez se torna menos atractiva para los y los jóvenes².

De otro lado, en la actualidad se viene produciendo el fenómeno la parcelación en las comunidades, con la finalidad de que esa parcelación que el comunero que va a finalizar por su edad la crianza de alpacas transfiera ese terreno a su hijo y el hijo pueda dedicarse a eso o que venda ese terreno.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, las y los jóvenes universitarios, participan en la actividad alpaquera poniendo su mano de obra a disposición de la organización social dispuesta en la comunidad o a nivel familiar. Su participación de concreta en la temporada de vacaciones (enero – marzo), periodo en el que la mano de obra es más requerida en las estancias alpaqueras. Adicionalmente, de acuerdo a sus posibilidades también asisten los fines de semana siempre y cuando no afecte el desarrollo de sus actividades académicas en la universidad o por alguna emergencia sucedida en las estancias.

En un contexto de formación académica, la estancia juega un rol central puesto que también es usada como un laboratorio de prácticas para los estudiantes, estableciendo una distinción clara entre los estudiantes que tienen estancias alpaqueras y los que no tienen. Si bien no hemos explorado la diferenciación en ambas situaciones y las ventajas que podría traer una sobre otra, es importante señalar que los estudiantes trasladan sus



conocimientos adquiridos en la universidad y los transfieren en sus propias estancias, este proceso no es fácil y usualmente encuentran algún nivel de resistencia, sin embargo, los padres o familiares a cargo del rebaño terminan por implementar de manera progresiva.

Es interesante encontrar en los testimonios información que indica que los profesionales provenientes de una comunidad, no aplican articuladamente los conocimientos adquiridos en la Universidad, sino muy por el contrario, existen disciplinas que conllevan el desvinculamiento del individuo respecto a la comunidad y la actividad alpaquera. Sin embargo, en las carreras relacionadas al manejo y mejora del ganado, existe un mayor sentido de pertenencia a la comunidad y la revalorización adicionando componentes de la modernidad, tales como la tecnología y la investigación científica adquiridas en pasantías e intercambios universitarios a nivel nacional e internacional.

Existe también en la nueva generación un sector que no pudo acceder a un sistema educativo superior, y que toma con reticencia los cambios introducidos por sus pares o por los estudiantes más jóvenes, proveniente de su nueva formación. Es decir, muchos de los alpaqueros que no han tenido acceso educación ni capacitaciones ven con desconfianza la introducción de nuevas herramientas y recursos técnicos, lo cual refleja las tensiones entre el manejo tradicional de la actividad y el manejo técnico, pero tras ello, se presentan puntos de encuentro que hacen sostenible dicha actividad.

Esta tensión antes mencionada se presenta en menor medida cuando se trata de propuestas provenientes del Estado u otro organismo externo que lleve profesionales externos a la región. Según un testimonio, ello puede estar relacionado a la percepción de lo comunal como responsabilidad del Estado más no de los individuos que componen a la comunidad.

Conclusiones

Las trayectorias de movilidad espacial y migración en los jóvenes son muy diversas y se fundamentan a partir de factores estructurales como la falta de acceso de recursos económicos provenientes de la actividad alpaquera.

El aporte de los jóvenes universitarios consiste en brindar mano de obra en los momentos que requiere un mayor esfuerzo y tareas en la estancia. Esto coincide con el periodo de vacaciones de los jóvenes.



La migración se realiza de manera progresiva, a ella le anteceden experiencias de movilidad espacial, ya sea para acceder a educación en el nivel primario, pero sobre todo para el nivel secundario. Posteriormente, ya en la etapa de educación superior por la naturaleza de los programas de estudio requieren mayor permanencia en la ciudad.

El acceso a empleos precarios es lo común en estos jóvenes, la minería informal es uno de los sectores en los que se vienen insertando algunos jóvenes sobre todo de zonas rurales que no concretan su experiencia educativa superior.

Los estudiantes están transfiriendo sus conocimientos en sus propias estancias con sus padres o los pastores contratados, sin embargo, este proceso no se encuentra exento de tensiones vinculadas a las formas de manejo del rebajo de manera tradicional que no incorpora estratégicamente algunos recursos para hacer sostenible dicha actividad.

Notas

¹ El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Huancavelica y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo colaboraron con esta investigación facilitando los aspectos logísticos para el desarrollo de las entrevistas, adicionalmente, nos facilitaron el contacto con los estudiantes participantes en la investigación.

² Cabe señalar, que la organización tradicional de la actividad alpaquera no incluye de manera temprana a los jóvenes ni promueve su participación, esto porque solo adquiere algún derecho cuando el pather familia haya fenecido y el hijo mayor pueda asumir el cargo de comunero.

Bibliografía

Alber, E. 1999 (1990) ¿Migración o movilidad en Huayopampa? Nuevos temas y tendencias en la discusión sobre la comunidad campesina en los andes. Lima, Perú: IEP.

Bourricaud, F. (2012). *Cambios en Puno, estudios de sociología andina*. Lima, Perú: Institut Francais d'Etudes Andines.

De la Cadena, M. (1988). "Comuneros en Huancayo. Migración campesina a ciudades serranas". Documento de trabajo N°26 en Serie Antropología N°8. Recuperado de: <http://archivo.iep.pe/textos/DDT/ddt26.pdf>.

Golte, J. y León, D. (2011) Polifacéticos: jóvenes limeños del siglo XXI. Lima, Perú: IEP. Carlos I. (ed.); Sendón, Pablo F. Y Sandoval, Pablo 2012 No hay país más diverso: compendio de antropología Peruana II (Lima, Perú: IEP).



Hernández, R. (2012). "El giro en las ciencias sociales peruanas. Balance de estudios sobre desarrollo, mundo rural y territorio". Ponencia de Balance Perú: el problema agrario en debate SEPIA XIV. Piura: SEPIA.

Instituto del Bien Común (IBC) y Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). (2016). Directorio de comunidades campesinas del Perú. Lima, Perú: Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM). Recuperado de <https://bit.ly/3nz9nXn>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Censos Nacionales 2017: XI de Población y Vivienda. Recuperado de: <https://bit.ly/3lvA6IU>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Perú: Perfil sociodemográfico. Informe Nacional. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://bit.ly/36SOBMy>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Encuesta demográfica y de Salud Familiar-ENDES. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://bit.ly/2GQQazC>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). Perú: Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population/>

Módenes, J. A. (2007). Movilidad espacial: uso temporal del territorio y poblaciones vinculadas. *Demografía*, 311, 1-34.

León, J. y Sugimaru, C. (2013). "Entre el estudio y el trabajo: las decisiones de los jóvenes peruanos después de concluir la educación básica regular". Avance de investigación: Educación y aprendizajes N° 11. Recuperado de: <https://bit.ly/3drRpBL>

PROMPERÚ (2016, 24 de octubre). Perú posee la cadena productiva más competitiva para la fibra de alpaca. Recuperado de <https://bit.ly/3jN89p7>.

Lossio, J. (2012). El peruano y su entorno. Aclimatándose a las alturas andinas. Lima, Perú: IEP.

OXFAM (2012) Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: Informe anual 2011 / 2012. Lima, Perú: Oxfam América.

Rodríguez, E. (1994). Entre el campo y la ciudad: estrategias migratorias frente a la crisis. Lima, Perú: CEDEP.

UNESCO. (1999) Ciudades intermedias y urbanización mundial. Recuperado de: <http://www.unesco.org/most/ciudades.pdf>.

Universidad Nacional de Huancavelica. (s.f). Presentación de la Escuela Profesional de Zootecnia. Huancavelica, Perú. Recuperado de <http://zootecnia.unh.edu.pe/>



Entre la reproducción cultural y la explotación infantil: características y percepciones sobre la participación infantil en la ganadería altoandina

Lady Sihuay Castillo

Resumen

El presente estudio cualitativo, fundamentalmente etnográfico, busca profundizar en las prácticas y percepciones que existen de las actividades que realizan niños, niñas y adolescentes en familias dedicadas a la ganadería en zonas altoandinas. Estas percepciones sirven de fundamento para la generación de intervenciones por actores estatales o cooperantes. Sin embargo, es importante destacar que, si bien existen investigaciones acerca del manejo y crianza de camélidos, u otras que buscan caracterizar la organización social en las comunidades dedicadas a este tipo de ganadería, son pocos los trabajos que detallan las actividades que realizan los niños, niñas y adolescentes. Las comunidades participantes en esta investigación fueron las comunidades de Pilpichaca y Choclococha, pertenecientes al corredor alpaquero de la región Huancavelica.

Palabras claves

Trabajo infantil, comunidades alpaqueras, pobreza, cultura y desarrollo rural.

Introducción

Marita,¹ de 10 años, se levanta todos los días a las cinco de la mañana. Entre sus tareas está la de traer agua a la estancia en donde trabaja de pastora: debe ir hasta el río y sumergir sus manos en aguas congeladas. De regreso, es probable que las dos galoneras que carga pesen casi tanto como la mitad de ella. En otras ocasiones debe colaborar con la vacunación y sanado de las alpacas, y eso implica sujetarlas fuertemente contra su cuerpo y exponerse a sus golpes y patadas. Algunos pastores de la edad de Marita son responsables, incluso, de la desparasitación de las alpacas, y eso los obliga a manipular, sin la protección adecuada (guantes o mascarillas), sustancias potencialmente nocivas para su salud. Tampoco es el caso de Marita, pero existe una población de niños pastores que han debido abandonar el colegio por dedicarse a estas actividades.

Y sin embargo, si uno le preguntase a Marita o a sus padres qué piensan de estas circunstancias y el trabajo que ella hace, la respuesta jamás sería de índole negativa. El



dinero que recibe Marita por las tareas que cumple como pastora es fundamental para la economía de su familia, que cuenta por todo el trabajo familiar en la estancia con un aproximado de 450 soles mensuales, es decir, unos 137 dólares. La familia de Marita, también dedicada a la crianza de alpacas (aunque con menos animales y más artesanalmente que el productor para el que ella trabaja), puede vender sus fibras por unos cuatro soles la libra (1,21 dólares). En cambio, los mayores productores de fibra de alpaca, los que se hallan asociados y mejor organizados, pueden recibir hasta unos tres dólares por libra de fibra. Según la Agencia Agraria Puno, en los Estados Unidos, Alemania o Japón, principales países compradores de esta fibra, el precio por libra puede alcanzar hasta los trescientos dólares. De hecho, la fibra de alpaca se considera, en estos mercados, un producto costoso y exclusivo. De la evidencia de esas desigualdades, y las contrastantes percepciones que generan, parte nuestro estudio.

El trabajo infantil en zonas urbanas ha sido ampliamente estudiado en sus diferentes sectores productivos. En contraste, las investigaciones sobre el trabajo infantil que los niños, niñas y adolescentes realizan en las comunidades campesinas del país tienen poco menos de una década. Este texto invita a adentrarse en la vida de niños, niñas y adolescentes de dos comunidades alpaqueras de Huancavelica y a las percepciones que se tiene respecto de lo que hacen. Esperamos que este estudio motive nuevas reflexiones e intervenciones alrededor del tema.

Las comunidades elegidas para realizar el trabajo de campo fueron las comunidades de Pilpichaca y Choclococha, pertenecientes al corredor alpaquero de la región Huancavelica. La elección de estos lugares respondió a la necesidad de observar la situación de los niños, niñas y adolescentes en dos sistemas productivos distintos, cuyo contraste tiene implicancias en la disposición de la mano de obra infantil utilizada por las familias dedicadas a la crianza de camélidos. Uno de ellos es aquel en el que los productores de camélidos se hacen cargo de toda la cadena productiva; y el otro, aquel en el que productores contratan a personas que, acompañadas de sus familias, se hacen cargo del pastoreo de su ganado.

Los focos de atención de esta investigación fueron dos: recoger detalladamente las actividades de los niños, niñas y adolescentes en las estancias (principalmente las de pastoreo), considerando siempre las diferencias de edades y género existentes en las comunidades estudiadas; e identificar y comprender las percepciones de los múltiples actores involucrados en la actividad de crianza de camélidos, entre los cuales se



incluyen niños, adolescentes, padres, dueños, comuneros, así como autoridades locales y provinciales.

Las técnicas empleadas en esta investigación fueron entrevistas en profundidad a los niños, niñas y adolescentes, a los padres y madres de familia, a los directores de centros educativos primarios y secundarios de ambas comunidades, y a las autoridades comunales. Además, se realizaron grupos focales con niños, niñas y adolescentes, y padres de familia, y un taller de multiactores con las autoridades de la provincia de Huancavelica, en el que participaron algunas del sector educativo y productivo, así como de otros sectores relacionados con la protección de la infancia en general. Finalmente, el equipo investigador observó y acompañó, en ambas zonas de estudio, las labores de los niños, niñas y adolescentes en su actividad cotidiana en estancias alpaqueras.

El trabajo de campo se realizó en los meses de febrero y agosto del 2016. Por ello, se pudo observar a los niños, niñas y adolescentes en la etapa de las vacaciones escolares, cuando su presencia y labores en las estancias se incrementan, y en la etapa escolar, cuando dicha presencia es menor y se combina, en algunos casos, con la escuela.

La diversificación productiva en esta comunidad viene transformando las dinámicas de crianza, que desde entonces ha sido asumida principalmente por las personas adultas mayores y por los niños, niñas y adolescentes.

Las comunidades bajo estudio se encuentran ubicadas en zonas sobre los 4000 metros de altitud, y las heladas de los meses de agosto han hecho que sean reiteradas veces declaradas en estado de emergencia.

El sector alpaquero en el Perú

En el Perú, la crianza de camélidos sudamericanos se desarrolla entre los 3800 y 4800 metros de altitud. En el 2006² el país tenía el 84% de las alpacas existentes en el mundo, seguido por Bolivia con un 11%, Australia con un 2%, Estados Unidos con un 1% y otros países con el restante 2%.

El último censo agrario (INEI, 2012b) indicaba que la región con mayor población de alpacas era Puno, con un total de 1 427 816 alpacas, seguido de Cusco con 517 965, Arequipa con 477 851 y, finalmente, Huancavelica con 302 609 alpacas.



Según cifras de PROMPERÚ, el Perú provee unas 7000 toneladas al mercado internacional. Su principal mercado se encuentra en los Estados Unidos, a donde se dirige el 49% de su producción de fibra de alpaca.

Se calcula que el monto de venta por exportaciones en el 2015 fue de 150 000 millones de soles, una cifra que, además de ser alta, se incrementa cada año. La región más beneficiada por este desarrollo ha sido Arequipa, en donde se transforma el 95% de la fibra exportada y en donde, además, es posible encontrar concentrada todo el ciclo de producción de la fibra: su extracción, selección y teñido, así como la confección de prendas con valor agregado. Con todo, solo el 25% de lo exportado sale del país con valor agregado.

Estas condiciones, potencialmente ventajosas en términos de competencia internacional, motivaron que, en el 2014, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lanzara, en coordinación con el sector privado de la industria alpaquera, la marca sectorial “Alpaca del Perú”. El objetivo de esta iniciativa era posicionar el producto en el mercado global, donde la fibra de alpaca ha ido ganando aprecio como un bien exclusivo entre las marcas de lujo. El Estado estima que unas 120 000 familias —involucradas en la producción, esquila, transformación y confección del fino insumo textil— se verían beneficiadas con esta medida.³

No obstante, el entusiasmo que presentan las cifras descritas y la atención que se ha otorgado al sector alpaquero como parte importante de la industria emergente del país, es necesario resaltar que estas medidas, orientadas a beneficiar el sector, tienen poco o nulo impacto en los pequeños y medianos productores. De hecho, el MINCETUR señala, entre los principales desafíos existentes, una mayor tecnificación de la selección de la fibra que tendría como objetivo incrementar su producción con mayor calidad. De hecho, la producción de este tipo de fibra hoy solo es posible en condiciones que posee exclusivamente el segmento mejor desarrollado y más reducido de productores. Daniel Aréstegui Otazú, gerente general de la AIA [Asociación Internacional de la Alpaca], indica que solo el 20% de la fibra que se obtiene es de la variedad Baby y Super Baby Alpaca (la más fina), pese a que el grueso de la demanda internacional se concentra en estas calidades.⁴

De lo anterior se desprende la pertinencia de evidenciar las condiciones que atraviesan los segmentos menos beneficiados del sector y de impulsar estrategias que, desde el mismo Estado, permitan incluirlos en la posible bonanza que podría atravesar este si



logra posicionarse con éxito en los mercados extranjeros. En la actualidad, son claras las brechas que existen entre el pequeño o mediano productor, y el que tiene la capacidad de ofrecer sus fibras como producto de exportación. Incluso si se descuenta el valor agregado, los precios son una medida reveladora de estas enormes desigualdades: de los tres dólares que pueden recibir en promedio por libra de fibra los pequeños y medianos productores a los trescientos dólares que puede llegar a alcanzar la misma cantidad en los mercados internacionales.

Ganadería en Huancavelica

Según el Plan de Desarrollo Local Concertado 2009-2021 (PDLC, 2009) existen puntos críticos en la forma en la que se realiza la actividad ganadera en Huancavelica, sobre todo en relación al mal manejo de tierras y pastos. Indica que es inadecuado, problema que atribuye a varios factores: (a) una deficiente administración y usufructo de la tierra y del suelo, (b) una ausencia total de linderos de las estancias y echaderos, (c) el desconocimiento del soporte de los pastos, (d) la escasez de agua en época de estiaje (mayo a noviembre), (e) la carencia de infraestructura de riego, (f) la ausencia de normas de uso de los pastos y (g) la falta de planificación para la rotación y descanso de las canchas (PDLC, 2009).

Según el documento citado, estos son los principales factores que han determinado el sobrepastoreo. Este ha deteriorado la calidad de los pastos y facilitado la preponderancia de pastos indeseables. Evidentemente, estas condiciones determinan una ganadería de bajos rendimientos en carne, fibra y lana, porque se logran productos de mala calidad que son muy pobremente valorados en los mercados. De este modo, la inversión realizada no se ve justificada y, más bien, afecta aspectos esenciales del desarrollo de las familias como la nutrición y la salud. Por ello, muchas familias complementan su actividad ganadera con la producción de artesanía, subproductos pecuarios y otros (PDLC, 2009).

Cadena productiva

En la cadena productiva y de comercialización de la fibra de alpaca participan varios actores. Entre ellos encontramos a productores, intermediarios, rescatistas, alcanzadores, minoristas y mayoristas, así como a instituciones como la Asociación de Productores de Alpaca (APROAL), entre otros. Según Buritika (2009: 18-24), estos son de diversos perfiles y características, tal como detallaremos en el cuadro 2.



La relación existente entre los productores e intermediarios puede ser sintomática de otros procesos. Los comuneros de Choclococha, por ejemplo, suelen hablar de la desunión o “falta de organización” entre las asociaciones. Al respecto, se debe recordar que esta comunidad vivió el proceso de violencia política (León, 2015), hecho que bien podría ser la causa de un debilitamiento del tejido social y, por lo tanto, explicaría las suspicacias existentes entre los distintos actores de la dinámica comercial. Hemos visto como, por el contrario, una mejor integración de los intereses puede fomentar un ciclo económico más saludable, tal como ocurre en otras provincias.

En el caso de la comercialización de la carne sucede algo similar: regularmente llega un intermediario que compra carne al peso y paga un precio muy inferior al que debería pagar. Se debe resaltar que Huancavelica tiene características diversas en comparación con otras regiones. La producción pecuaria en sus zonas altas se concentra en la crianza de alpacas, mientras que las llamas han disminuido notablemente y vienen desapareciendo progresivamente de los rebaños. En otras regiones, la presencia de llamas es similar a las alpacas, fundamentalmente porque, en el mercado de carne en otras regiones, la llama se hace pasar como alpaca y su demanda es muy superior a la de Huancavelica.

Los productores deberían poder comercializar la fibra, la carne, el estiércol, la piel y los reproductores (machos genéticamente mejorados). Generalmente, los productores llegan al mercado con fibra y, menos regularmente, con carne. Excepcionalmente, por su acceso al mercado, sus conocimientos y la cantidad de ganado, logran comercializar todos los subproductos de la alpaca y su ingreso anual definitivamente resulta más alto. Un reproductor puede costar entre 700 y 5000 nuevos soles aproximadamente, dependiendo de la calidad genética y de la finura de la fibra del reproductor. Definitivamente, hay posibilidades de mejorar el ingreso de las familias, pero es necesario que se planteen estrategias para mejorar su acceso al mercado y la calidad del rebaño.

Tenencia de tierras y organización del pastoreo

En las comunidades de pastores, la tenencia de las tierras de pastoreo y la propiedad del ganado generan un orden diverso respecto del estatus social y económico. Las formas de tenencia y propiedad permiten identificar tres actores relevantes en las formas de organización social y económica en las comunidades ganaderas de altura. Los tres actores son los siguientes: (a) los dueños del rebaño y de las áreas de pastoreo,



(b) los comuneros que poseen rebaño, pero no tierra y (c) los pastores que brindan servicio de cuidado de rebaño a los dueños y a los comuneros.

La contratación de pastores es una modalidad que se ha ido extendiendo, ya que permite a los dueños y comuneros acceder a otras fuentes de ingreso sin perder su rebaño y la posesión de sus tierras de pastoreo. Usualmente, el pastor es contratado por seis meses o un año para hacerse cargo del conjunto de animales que componen el rebaño (alpacas, llamas y ovejas) del dueño o comunero contratante.

Siempre es un contrato verbal y son los jefes de familia, generalmente hombres, tanto del contratado como del contratante, quienes negocian las condiciones del trabajo y el pago con el pastor o pastora (solo si esta fuese jefa de familia). El pago mensual regular para los pastores puede ser en efectivo, un monto que va desde los cuatrocientos hasta los quinientos nuevos soles, o con dos alpacas. En ambos casos, el dueño o comunero debe dar todos los alimentos requeridos mes a mes. El valor total de los víveres puede variar: algunos dueños de rebaños manifestaron que entregaban un valor de trescientos soles mensuales, pero ese monto no es constante ni regular en otras estancias.

Los pastores se trasladan desde su lugar de origen hasta la estancia donde trabajarán por el plazo acordado, usualmente con toda su familia nuclear. El pastoreo es una actividad familiar, ya sea que el dueño, comunero o pastor lo realice. En otras palabras, los miembros del hogar, presentes en la estancia, desarrollan alguna actividad en la crianza del rebaño.

Existen varias modalidades para contactar a los pastores. Se hace por intermedio de familiares que recomiendan a un pastor o a través de avisos en algunos puntos de la ciudad o comunidad para que él o la interesada se contacten con el dueño o comunero. Asimismo, los dueños y comuneros visitan comunidades en las que se sabe se puede conseguir pastores. Por ejemplo, la comunidad de Lillinta, perteneciente al distrito de Pilpichaca, es conocida por ser un lugar donde se puede conseguir pastores por el alto nivel de pobreza, la inexistencia de otras fuentes de ingreso y el bajo número de alpacas por rebaño (menos de cincuenta).

La relación pastores-dueños/pastores-comuneros no siempre es buena. Existen situaciones de explotación y abuso por parte de los dueños y comuneros hacia los pastores. Algunas veces, los montos que les pagan y la cantidad de alimentos que les entregan no son lo que normalmente debería ser. Además, existen casos de abuso



sexual tanto de mujeres adultas como de menores de edad en las estancias, hecho de los que resultan mujeres pastoras, víctimas de dueños o comuneros, con embarazos no deseados que no se denuncian ni reportan a la autoridad. Por su parte, los pastores también ocasionan algunos perjuicios a los dueños y comuneros, cuando dejan a los animales abandonados en la estancia o se roban las alpacas.

Trabajo infantil en Huancavelica

El Estado peruano ha suscrito todos los tratados y convenios internacionales acerca de la protección y erradicación del trabajo infantil. Además, ha impulsado acciones para la defensa de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y para su inserción en la educación y la mejora de su calidad de vida, tanto de ellos como de sus familias. En este sentido, ha firmado los convenios 138 (1979) y 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen la edad mínima de admisión al empleo y las peores formas de trabajo infantil, respectivamente.

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2011, en el Perú existen 1 659 000 niños, niñas y adolescentes que trabajan, cifra que representa el 23% del total del grupo etario en cuestión. El 59% de ellos se encuentra en el área rural y el 41%, en el área urbana. El 58,7% de niños y niñas trabajadores vive en zonas rurales y el 87% se dedica a actividades agrícolas y de pastoreo (MINCETUR, 2012).

El documento Perú: perfil del trabajo infantil al 2013, elaborado sobre la base de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), ofrece otras cifras importantes. Este documento señala que, del total de niños, niñas y adolescentes que trabajan, el 53,9% son niños/as de entre 5 y 13 años, y el 46,1%, adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. En el área urbana, se aprecia una menor participación de los niños y niñas que trabajan (37%) en comparación con la de los adolescentes (64%). Lo contrario se observa en el área rural, donde el 64% de los que trabajan son niños/as de entre 5 y 13 años y el 36%, adolescentes.

En el caso del trabajo infantil rural, la mayor participación de niños, niñas y adolescentes se encuentra en las labores de ayuda en la chacra y el pastoreo de animales, con un porcentaje del 85,8%. En el caso del trabajo infantil urbano, la mayor participación se encuentra en la ayuda de la casa o de un familiar, seguido del lavado de carros y el lustrado de botas y la colaboración en la chacra o el pastoreo de animales, en este orden.



Las últimas mediciones colocan a la región de Huancavelica en el primer lugar de incidencia de trabajo infantil, con un 79% de niños, niñas y adolescentes que realizan labores en la chacra y pastoreo de animales. A pesar de ello, aún no existen acciones directas para abordar la problemática del trabajo infantil en el sector ganadero. La incidencia de trabajo infantil rural supera en más de 80% al trabajo infantil urbano.

El trabajo infantil en la agricultura y ganadería tiene una base cultural con raíces históricas en el desarrollo de comunidades rurales e indígenas. La dimensión cultural en ambas actividades es reconocida por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Asimismo, reconocen la poca información existente para caracterizar los tipos de actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes en el sector ganadero y para conocer la magnitud de su participación y trazar la línea entre lo que pueda denominarse formativo y peligroso en las actividades de dicho sector.

Pastoreo con menores en Huancavelica

En lo que respecta a lo observado para la presente investigación, las actividades pueden parecer sencillas a primera vista, pues los pastores suelen pasar gran parte del día tejiendo y observando quietamente el rebaño. Sin embargo, una mirada más atenta puede dar cuenta de que existen actividades de las cuales los pastores están extremadamente pendientes. La experiencia les ha enseñado a identificar el nivel de seguridad de los animales: su estado de salud, la presencia de depredadores, el peligro de que se extravíen, etc. Además, sobre los propios cuidadores se ciernen ciertos peligros que se relacionan con el clima y las condiciones en las que ejecutan su trabajo. Si consideramos que gran parte de esta tarea es llevada a cabo por menores de edad, nos damos cuenta del grado de participación e importancia que cumplen los niños y niñas en este tipo de economía.

Las y los niños no se levantan de la cama a la misma hora. En los casos observados, las niñas se levantan más temprano. Ellas inician su jornada a la misma hora o poco después que sus madres. Entre las cinco y seis de la mañana, comienzan el día con la preparación de los alimentos. En las estancias se sirven tan solo dos comidas en dos momentos del día: la primera comida consiste en un desayuno tipo almuerzo, que se sirve en la mañana antes de salir a pastorear; y la otra comida se prepara al retorno del pastoreo y se sirve entre las seis y siete de la noche.



La preparación de alimentos es una actividad que demanda tiempo y no es sencilla en las condiciones de vida en las estancias. Una de las primeras tareas que supone es la provisión de agua en un lugar donde esta no es potable, ni entubada, y donde generalmente debe acarreararse desde una fuente cercana. En las estancias de Pilpichaca, por ejemplo, una fuente de agua estaba cerca y la otra bastante lejos de la vivienda, hecho que complicaba la labor. Además, las bajas temperaturas de las mañanas hacen dolorosa dicha tarea

La jornada del pastoreo inicia cuando se procede a “botar” o arrear a las alpacas fuera del corral donde pernoctan. Alrededor de las siete y ocho de la mañana, las alpacas son arreadas una o dos horas antes que las ovejas. Se debe remarcar que se describe a las alpacas como animales “tercos”, pues en algunos momentos se resisten a moverse y hay que espantarlas para que se muevan. Incluso hay momentos en el que las alpacas dan patadas y lastiman a los pastores, principalmente las hembras cuando se encuentran preñadas.

La pérdida de alpacas, ovejas o llamas es una situación permanente en el pastoreo. Los animales suelen irse a otras zonas o mezclarse con animales de otros rebaños. Con el fin de prevenir las pérdidas, los dueños o comuneros marcan a su ganado con aretes o cubren su lomo con pintura del color distintivo de su estancia. Encontrar a un animal extraviado demanda un gran esfuerzo físico, pero sobre todo emocional (preocupación, miedo, aflicción, etc.). En el caso de los niños o niñas, esto se torna más severo. Cuando pastorean solos, la responsabilidad de todo el ganado recae en ellos. E incluso, si los padres no les reclamasen, la presión sería latente: de ello depende el ingreso familiar: Durante la caminata de retorno, se debe contar el número de animales y estar atentos permanentemente de que no se pierda ni uno. Sin embargo, las consecuencias del extravío de uno o más miembros del rebaño es solo uno de los peligros a los que están expuestos los menores. Veremos estos con más detalle en el siguiente apartado.

Consecuencias del trabajo infantil en la ganadería

Riesgos de la actividad ganadera

En las zonas de estudio, la mano de obra infantil se utiliza con mayor intensidad en la niñez, a partir de los cinco y hasta los doce años de edad. El trabajo adolescente se realiza fuera de la comunidad, y eso implica una migración temporal de estos, ya sea solos o acompañados. En esta investigación, las ciudades de Ica, Huancavelica y Lima se reportaron como ciudades receptoras de mano de obra adolescente. El trabajo en la



ganadería se intensifica en el periodo de vacaciones escolares, pues no existe la posibilidad de otras actividades productivas o educativas.

Además, las actividades de cuidado de los animales en este trimestre requieren de mayor mano de obra. La ganadería como cualquier sector productivo presenta, en su ejecución, riesgos para aquellas personas que las realizan y mucho más cuando estos son niños, niñas o adolescentes:

...Los problemas de salud pueden ser el resultado de trabajar durante muchas horas en condiciones climáticas extremas, una higiene y un saneamiento deficientes, el uso de productos químicos como los desinfectantes, la inhalación de polvo de ganado y la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Los largos períodos de aislamiento, el miedo a los ladrones de ganado y los castigos impuestos por los empleadores o el abrumador sentido de responsabilidad por el capital familiar, pueden llegar a generar estrés psicológico, lo cual representa una grave amenaza para el bienestar de los niños. (FAO, 2013)

El pastoreo es una actividad que puede ocupar varias horas del día en la vida de los niños, niñas o adolescentes. Dichas horas pueden llegar a ser más de ocho y se desarrollan en condiciones de completa exposición a climas extremos: el calor, el frío, la lluvia, los rayos, la neblina y el deslizamiento de rocas, entre otros. Alguno de esos factores ha ocasionado hasta la muerte de niños, niñas y adolescentes que se encontraban pastoreando.

La convivencia con los animales es un aspecto poco señalado, pero que también debe considerarse como peligroso, sobre todo en aquellos niños que no tienen conciencia del riesgo e interactúan con los animales sin ninguna precaución. Recogimos varios casos en que los niños y niñas habían recibido una patada de alpacas como el caso de uno de ocho años

Existen factores externos que determinan la mayor vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en las zonas de estudio. En su grupo etario, los índices de desnutrición crónica en las zonas de estudio son altos, y el acceso a alimentos para una dieta balanceada en las estancias resulta muy complicado por la distancia y el costo. Se deber recordar que las familias ingieren tan solo dos comidas al día, que están compuestas principalmente de harinas.



Por otro lado, los hábitos de higiene son un tema pendiente y juegan en contra de la población; en muchos casos, la anemia no se puede combatir efectivamente por la presencia de parásitos en todos los miembros del hogar. El agua que se consume es extraída de río o riachuelos; se trata, pues, de aguas que no son tratadas y mucho menos aptas para el consumo directo. Finalmente, observamos estancias en las que no había silos o lugares de disposición de residuos sólidos.

Las familias no cuentan con indumentaria adecuada para soportar el frío, principalmente en los meses de las heladas. En este caso, los niños, niñas y adolescentes que observamos no contaban con la ropa suficiente para soportar el frío. Las bajas temperaturas provocan enfermedades respiratorias agudas que son causa de morbilidad y mortalidad infantil, sobre todo en los menores de cinco años. Usualmente usan el fogón para calentarse, pero las condiciones inadecuadas de construcción de estos ambientes hacen que inhalen todo el humo generado por la bosta seca. En este caso, toda la familia está expuesta al monóxido de carbono.

El relacionamiento de los niños y niñas con los animales debe ser un aspecto abordado, así como la transmisión de enfermedades por el contacto con ellos. Existen investigaciones para determinar los cuidados que se deben tener para no exponerse al contagio y sería importante tener este tipo de información en el caso de la ganadería con camélidos sudamericanos

El contacto con sustancias tóxicas es un peligro evidente, pues la mayoría de los niños, niñas y adolescentes consultados conocía las enfermedades frecuentes en las alpacas y los medicamentos necesarios para combatirlas, así como había participado en su aplicación. En la entrevista al responsable de la veterinaria de la APROAL, este nos comentó que todos los medicamentos para la sanidad de estos animales deben permanecer fuera del alcance de los menores y que los adultos a cargo de la aplicación deben contar con protección como los guantes y un tapabocas, pues son altamente tóxicos incluso para los adultos. En una estancia en Pilpichaca pudimos ser partícipes de la curación de alpacas recién nacidas. Y si bien el dueño del rebaño llegó para realizar la curación, fueron los dos niños y la niña de la familia de pastores quienes lo asistieron en ese proceso. El más pequeño (Warner, de 5 años) cuidaba de que las alpacas no se escaparan del corral, mientras que sus hermanos mayores (Edward, de 7 años, y Marita, de 9) se ocupaban de sujetar a los camélidos y llevarlos al lugar donde el dueño les aplicaba la medicina. Algunas alpacas se resistían a moverse. Marita y



Eduardo procedían, entonces, a levantar los entre ocho y diez kilos que pesan normalmente estos animales.

También existen casos de menores de edad que fueron víctimas de acoso y abuso sexual en las estancias mientras se encontraban solos, en el trayecto de la escuela a la estancia o cuando realizaban el pastoreo. Si bien estos casos no ocurrieron en las comunidades de estudio, sí se presentaron en comunidades cercanas.

Migración laboral infantil

La migración temporal o permanente hacia las comunidades en las que realizamos esta investigación está bastante extendida, pero el fenómeno inverso también se presenta. En otras palabras, tanto Pilpichaca como Choclococha son lugares de recepción y expulsión. En ambos casos, la posibilidad de un ingreso adicional es la razón principal de la salida y, en ambos casos, la migración laboral adulta provoca la migración laboral infantil. En el caso de los habitantes que salen de la comunidad, los puntos de llegada frecuente son ciudades de la costa, entre las cuales destacan Lima, Ica y Chincha.

Uno de los fenómenos que podemos apreciar en Lima durante los meses de vacaciones escolares es la presencia de familias, niños/as o adolescentes huancavelicanos que permanecen por lo menos tres meses en la ciudad. Generalmente, se insertan al comercio ambulatorio y luego retornan a sus comunidades con el dinero acumulado durante ese periodo. En el 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mostró interés por su situación e incluso, a través del programa Yachay, pudo conocer las experiencias de migración temporal de niños, niñas y adolescentes, y visitó las comunidades de origen de los menores para conocer las motivaciones de su movilidad. A partir de su intervención se remarcó la necesidad de poner mayor atención y vigilancia ante las posibles consecuencias de la migración en aspectos como la seguridad y educación de los menores involucrados:

La migración infantil también es un fenómeno presente en las comunidades de estudio y que no está solo vinculado a la migración de los adultos o de otros miembros de la familia. A veces, niños, niñas y adolescentes viajan solos a la ciudad y es allí donde se conectan con sus redes familiares para establecerse temporal o permanentemente. Usualmente, la motivación principal para viajar son los gastos escolares del mes de marzo y abril que tienen que afrontar⁵ Sin embargo, esta salida también representa la



posibilidad de acceder a otros bienes de consumo como los celulares, y la ropa de moda, entre otros:

La salida de uno de los miembros de la familia supone que sea la familia nuclear, y en ciertos casos la extensa, la que sostenga la práctica ganadera. Estas situaciones activan los sistemas de cooperación interfamiliar y comunal. La ausencia del jefe de familia cuando no se cuenta con familia extensa puede recargar cotidianamente las labores de los niños, niñas y adolescentes presentes en la estancia, puesto que hay menos personas para distribuir las labores.

Escuela y trabajo infantil

Las instituciones educativas del nivel secundario son escasas en las zonas altas. Esta es una gran desventaja para las y los estudiantes, porque deben dejar su comunidad o la estancia para poder mantenerse en la escuela. Por esta razón, otra residencia para las familias debe estar próxima a una escuela secundaria. Generalmente, estos centros de estudios se encuentran mucho más alejados, ya sea en la capital del distrito o en la capital de la región.

La inserción y permanencia en la escuela de niños y niñas pastoras puede representar una primera experiencia de desarraigo. Acostumbrados a socializar en el campo, van directo a un aula. Este encuentro con la escuela podría significar una primera experiencia desagradable. Según las autoridades locales, la discriminación a niños y niñas por hablar el quechua es un problema frecuente, sobre todo porque la educación bilingüe intercultural no es puesta en práctica.

La situación de los hijos e hijas de pastores contratados tiende a ser más irregular y complicada, ya que la familia se muda a una estancia y, si bien se negocia y se deja establecido tanto el pago como la temporalidad del acuerdo de trabajo de pastoreo, la accesibilidad a la escuela o la atención médica no son necesariamente prioridades. Si bien conocimos dueños de una estancia bastante preocupados por la educación de los hijos o hijas de los pastores —que incluso, en un caso, acompañaban a una pastora a matricular a los cinco hijos—, esta situación era bastante difícil de hallar.

En la etapa de vacaciones escolares, los niños, niñas y adolescentes permanecen en sus estancias, junto a sus padres. En esta temporada del año es cuando más se los requiere, por lo que las actividades de refuerzo escolar están ausentes. En la etapa escolar, son los fines de semana o feriados cuando los adolescentes se movilizan hacia



las estancias; los otros días de la semana viven en alguna casa alquilada y son responsables de preparar sus alimentos, lavar su ropa, hacer sus tareas y limpiar su vivienda. En Pilpichaca, les cobran cincuenta soles de alquiler mensual por una casa en la que pueden vivir tres estudiantes de una misma comunidad. De hecho, esta es la situación de la mayoría de estudiantes de la secundaria en Pilpichaca. En ambas comunidades, existen estudiantes que caminan varias horas para ir y regresar de la escuela a sus estancias. Caminan como máximo dos horas en el caso de las comunidades más lejanas y treinta minutos en el caso de las comunidades más cercanas. El Ministerio de Educación repartió veinte bicicletas para que los estudiantes que viven lejos, pero son insuficientes.

Los niños y las niñas del nivel primario en Pilpichaca no llevan tarea a casa porque según la autoridad educativa cuando van a la estancia olvidan hacer sus deberes escolares y la mochila la encuentran el lunes igual como la dejaron el viernes, antes de irse de la escuela. Por otro lado, no se deja tarea en esta escuela, pues los padres y madres no logran orientar bien a sus hijas e hijos por su propio grado de instrucción educativa.

Notas

¹ Todos los nombres usados en este documento para referirse a las personas entrevistadas y contactadas, cuyos testimonios de vida aquí se presentan, son seudónimos.

² InfoAlpacas (2016). País con más alpacas en el mundo: ¡Perú! Recuperado de <<http://infoalpacas.com.pe/pais-con-mas-alpacas-en-el-mundo-peru/>>.

³ PROMPERÚ (2016, 24 de octubre). Perú posee la cadena productiva más competitiva para la fibra de alpaca. Recuperado de <<https://bit.ly/33OCSNg>>.

⁴ *Ibíd.*

⁵ En el 2016, se puso en marcha un plan piloto a través de una alianza entre el proyecto Semilla y el programa Yachay. Su finalidad era capacitar a los adolescentes huancavelicanos encontrados en las calles de Lima y se ejecutó en sus lugares de origen. Esta experiencia se validó con setenta adolescentes y se consiguió que los involucrados generaran ingresos sin exponerse al peligro de las redes de trata y la deserción escolar, entre otros. Véase Mendoza 2015, 8 de marzo.

Bibliografía

Alber, E. 1999 (1990) ¿Migración o movilidad en Huayopampa? Nuevos temas y tendencias en la discusión sobre la comunidad campesina en los andes. Lima, Perú: IEP.



Bourricaud, F. (2012). *Cambios en Puno, estudios de sociología andina*. Lima, Perú: Institut Francais d'Etudes Andines.

De la Cadena, M. (1988). "Comuneros en Huancayo. Migración campesina a ciudades serranas". Documento de trabajo N°26 en Serie Antropología N°8. Recuperado de: <http://archivo.iep.pe/textos/DDT/ddt26.pdf>.

Golte, J. y León, D. (2011) *Polifacéticos: jóvenes limeños del siglo XXI*. Lima, Perú: IEP. Carlos I. (ed.); Sendón, Pablo F. Y Sandoval, Pablo 2012 *No hay país más diverso: compendio de antropología Peruana II* (Lima, Perú: IEP).

Hernández, R. (2012). "El giro en las ciencias sociales peruanas. Balance de estudios sobre desarrollo, mundo rural y territorio". Ponencia de Balance Perú: el problema agrario en debate SEPIA XIV. Piura: SEPIA.

Instituto del Bien Común (IBC) y Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). (2016). *Directorio de comunidades campesinas del Perú*. Lima, Perú: Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM). Recuperado de <http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2017/06/DIRECTORIO-DE-COMUNIDADES-CAMPESINAS-DEL-PERU-2016.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). *Censos Nacionales 2017: XI de Población y Vivienda*. Recuperado de: <https://bit.ly/3lui2Zt>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). *Perú: Perfil sociodemográfico. Informe Nacional*. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://bit.ly/36T0fXB>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). *Encuesta demográfica y de Salud Familiar-ENDES*. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://bit.ly/3IC3nez>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). *Perú: Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito*. Lima, Perú: INEI. Recuperado de <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population/>

Módenes, J. A. (2007). *Movilidad espacial: uso temporal del territorio y poblaciones vinculadas*. *Demografía*, 311, 1-34.

León, J. y Sugimaru, C. (2013). "Entre el estudio y el trabajo: las decisiones de los jóvenes peruanos después de concluir la educación básica regular". *Avance de investigación: Educación y aprendizajes* N° 11. Recuperado de: <https://bit.ly/3IAC6sW>
PROMPERÚ (2016, 24 de octubre). *Perú posee la cadena productiva más competitiva para la fibra de alpaca*. Recuperado de <https://bit.ly/34ldxnk>.

Lossio, J. (2012). *El peruano y su entorno. Aclimatándose a las alturas andinas*. Lima, Perú: IEP.



OXFAM (2012) Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: Informe anual 2011 / 2012. Lima, Perú: Oxfam América.

Rodríguez, E. (1994). Entre el campo y la ciudad: estrategias migratorias frente a la crisis. Lima, Perú: CEDEP.

UNESCO. (1999) Ciudades intermedias y urbanización mundial. Recuperado de: <http://www.unesco.org/most/ciudades.pdf>.

Universidad Nacional de Huancavelica. (s.f). Presentación de la Escuela Profesional de Zootecnia. Huancavelica, Perú. Recuperado de <http://zootecnia.unh.edu.pe/>



Cooperativa e Cooperativismo: Um paralelo entre as configurações brasileiras e maltesas

Rosemery Aparecida

Resumo

Esse trabalho é fruto parcial da pesquisa de doutorado em andamento. Parte dessa investigação foi realizada na Universidade de Malta em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) consistindo em um doutorado sanduíche. O objetivo deste trabalho é realizar um paralelo entre os princípios e concepções do cooperativismo no Brasil e na Europa, mais especificamente em Malta. Compreendemos que cooperativismo, autogestão, trabalho associado e Economia Solidária não são sinônimos. Mas, mesmo sendo conceitos distintos, todos estão implicados na discussão sobre a relação entre o trabalho e os trabalhadores em sociedade. Sendo assim, ao longo da pesquisa procuramos compreender quais as diferenças e as similaridades entre as experiências brasileiras e maltesas sobre o cooperativismo e os demais conceitos que permeiam essa forma de organização do trabalho, levando em conta o histórico do cooperativismo e como ela se adapta e se modifica dentro de diferentes contextos econômicos, políticos, sociais e culturais. O levantamento, de cunho qualitativo, utiliza a pesquisa documental e bibliográfica para definir conceitos e problematizar realidades. Recorremos a expoentes como Attard (2007); Scopinho (2007); RIOS (1989), Pinho (2003); Camargo (1960); Pimentel (2004); Santos (2001); Severino (2006); Singer (2000) dentre outros. Percebemos que os princípios do cooperativismo são os mesmos mas em sua aplicação a realidade cultural e de formação dos indivíduos fazem com que suas configurações se modifiquem mesmo sendo pertencentes às mesmas condições estruturais.

Palavras-chave

Cooperativismo. Cooperativismo no Brasil. Cooperativismo em Malta.

Introdução

O artigo trata do cooperativismo sendo analisado em dois distintos contextos. O objetivo é realizar um paralelo entre os princípios e concepções do cooperativismo no Brasil e na Europa, mais especificamente em Malta. Justifica-se a escolha dessas duas localidades, pois, esse trabalho é fruto parcial da pesquisa de doutorado em andamento, onde, parte da investigação foi realizada na Universidade de Malta em parceria com a



Universidade Federal de São Carlos(UFSCAR) consistindo em um doutorado sanduíche.

Compreendemos que cooperativismo, autogestão, trabalho associado e Economia Solidária não são sinônimos. Mas, mesmo sendo conceitos distintos, todos estão implicados na discussão sobre a relação entre o trabalho e os trabalhadores em sociedade. Ao longo da pesquisa procuramos compreender quais as diferenças e as similaridades entre as experiências brasileiras e maltesas sobre o cooperativismo e os demais conceitos que permeiam essa forma de organização do trabalho, levando em conta o histórico do cooperativismo e como ela se adapta e se modifica dentro de diferentes contextos econômicos, políticos, sociais e culturais.

Esse estudo, de cunho qualitativo, utiliza a pesquisa documental e bibliográfica para definir conceitos e problematizar realidades. Recorremos a expoentes como Attard (2007); Scopinho (2007); Rios(1989), Pinho(2003); Camargo(1960); Pimentel (2004); Santos (2001); Severino(2006); Singer (2000) dentre outros.

Percebemos que os princípios do cooperativismo são os mesmo, mas em sua aplicação a realidade cultural e de formação dos indivíduos fazem com que suas configurações se modifiquem mesmo sendo pertencentes aos mesmas condições estruturais.

Cooperativismo dentro de seu contexto histórico

Primeiramente é fundamental compreender as origens e o contexto de efetivação do cooperativismo, na tentativa de analisar suas características e proposições, assim como, perceber sua realidade atual e possíveis tendências.

O cooperativismo é marcado por uma tradição histórica e são inegáveis suas contribuições nos âmbito socioeconômico, mas, por vezes é delimitado apenas pelos seus aspectos doutrinários e idealizados ou ainda unicamente pelas lógicas da empresa privada.

Cada experiência de cooperativismo acaba delineando-se pelas suas condições históricas de seu tempo e espaço, de acordo com o regime econômico-político, pelas condições tecnológicas, capacidade organizativa e política do seu meio social e pela ação concreta dos sujeitos.



Costa(2007) apresenta autores como Klaes (2005) e Namorado(2005) para mostrar que o cooperativismo está em discussão há tempos verificado em sociedades muito antigas. Para Klaes(2005) ela pode ser vista desde a sociedade feudal ou ainda nas sociedades grega e romana. Namorando (2005) reconhece a existência do cooperativismo antes do século XIX, mas delimita o cooperativismo a partir do movimento operário do século XIX.

No entanto, experiências cooperativas e associativas nesses períodos antigos não podem ser definidas como práticas de cooperativismo como conhecemos hoje, apenas manifestações de sociabilidade inerentes aos grupos sociais. Isso porque,

o cooperativismo, enquanto doutrina, teoria, sistema ou movimento associativista de trabalhadores, é um fenômeno moderno oriundo da oposição operária às consequências do liberalismo econômico praticado na Inglaterra e na França do século XVIII e XIX. (Costa, 2007, p.58).

Percebemos que o ato de cooperação sempre esteve presente, mas não exatamente o cooperativismo. Afinal, cooperar relaciona-se com a postura de colaborar com outras pessoas e em sociedade e por cooperativismo entende-se “como um movimento social que procurou, através da associação, fugir de uma opressão social resultante de um determinado período histórico e de um determinado sistema, ou seja, o capitalismo concorrencial do século XIX”. (Costa, 2007, p.58).

Autores como Robert Owen e Karl Marx almejavam que a sociedade moderna elegesse o trabalho como fonte de riqueza. Estes destacavam como propostas

a consolidação da noção de auto-ajuda, já bastante presente entre os pobres; a criação de associações econômicas livres; a participação democrática dos associados na gestão; a supressão dos intermediários, ampliando os ganhos dos produtores; o estabelecimento de relações entre a agricultura e a indústria e entre a produção e o consumo; e que as idéias cooperativas precisam deixar o plano teórico para serem comprovadas por intermédio de ações práticas (Mladenatz, 2003, p. 34-35 apud Búrigo, 2006,p.46).

Vindo pela contramão do que até então a Europa do século XVI propunha, a nova concepção ocasionou significativas alterações na vida da sua população, tanto ao que diz respeito às formas de pensamento quanto nas relações econômicas e sociais.

Na Inglaterra, França, Alemanha houve experiências conhecidas como pré-cooperativas (Pinho, 1966). Mas, a experiência mais conhecida, por ser bem sucedida, foi a



Cooperativa de consumo do “*Pobros Pioneiros de Rochdale*”, constituída em 21 de dezembro de 1844, na cidade de Rochdale.

Esta cooperativa foi fruto da iniciativa de 28 operários do setor têxtil, que buscavam melhorar suas vidas. Então em 24 de outubro de 1844 foi fundada “Rochdale Society Equitable Pioneers Limited”. Em 21 de dezembro do mesmo ano começou a funcionar como armazém cooperativo. [...] A sociedade cresceu rapidamente. Em 1845 eram 80 associados, enquanto o capital atingia 180 libras. Em 1851 já contava com 630 associados. Em 1857 atingiu 1850 associados. Depois de dez anos atingiu um número impressionante de 5.300 associados. (Costa, 2007, p.60).

De acordo com Silva Filho (2001) “Rochdale” e seus valores são inspiração até hoje para o movimento cooperativista, graças a representantes como o economista Charles Gide (1847-1932), esses valores não foram esquecidos. Valores como “solidariedade, igualdade, fraternidade, democracia, equidade, responsabilidade social, transparência”, além de práticas como “adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, cooperação entre cooperativas, preocupação com a comunidade”.

Assim, o desenvolvimento do cooperativismo e o surgimento de cooperativas especializadas pelo mundo delinear-se como “uma alternativa dentro do sistema e não mais como uma alternativa ao sistema”. (Silva Filho, 2001, p.61).

Cooperativa e Cooperativismo: uma organização social

Enquanto ação social articulada, a cooperação se delineia por objetivos comuns na tentativa de solucionar problemas concretos que, Scopinho(2007, p.85) embasada em Bruni (2005) e Camargo(1960), delimita em dois momentos

(a) como ação-padrão, racionalmente construída à luz de um código e desenvolvida no interior de cooperativas por sujeitos inseridos numa certa divisão social do trabalho, os quais têm objetivos comuns e compartilham benefícios ou prejuízos de forma equitativa (por exemplo, o que se pratica de acordo com o regimento interno); (b) como ação espontânea inerente a determinados grupos e derivada de suas tradições e costumes, pré-existente às instituições, fundamentada na reciprocidade adiada – a retribuição é feita quando for possível ou conveniente – ou instantânea – a retribuição é imediata. (Scopinho, 2007, p.85).



A cooperativa seria, então, um conjunto de atividades unidas pela comunidade, ou seja, um grupo de pessoas com um objetivo em comum que os unem e que se constitui de forma democrática. Nesse sentido, para Camargo (1960, p.33), enquanto um grupo social constitui por “comunidade, a conformidade e a autoridade”.

Entende-se por comunidade a vida em comum desse grupo social que os aproxima enquanto identidade e que possibilita a interação. É importante ainda que haja “além de sentimentos comuns, uma comunidade de posse, um patrimônio comum, em sinal de unidade do grupo” (Camargo, 1960, p.33). Por conformidade a autora define como sendo a aceitação de regras de conduta em comum. Assim sendo, a sociabilidade se mediria pela predominância de condutas comuns.

São as regras costumeiras e jurídicas que tendem a imprimir em todos os indivíduos as mesmas opiniões e resoluções, a criar uma comunidade de espírito e alma. Assim sendo, a sociabilidade se mediria pela predominância do social sobre o pessoal e a socialização seria a padronização. [...] O uso repetido se transforma em costume e este quando se cristaliza, passa a ser lei. (Camargo, 1960, p.33).

Quanto à autoridade, refere-se ao poder criador e que assegura a conformidade, à medida que é construída a partir do consentimento comum do grupo. Camargo (1960, p.34), ainda acentua que, se de fato a autoridade predominante no grupo cooperativista “criasse e garantisse regras de conformidade organizadas, dirigidas e erigidas pelos usos e costumes”, a cooperação de fato preexistiria à cooperativa como instituição jurídica.

Para Rios (1989) cooperativa pode ser definida como sendo uma associação com fins econômicos constituídas por pessoas que desenvolvem as mesmas atividades e que tem como sua base organizacional a democracia.

Ao que diz respeito às relações de trabalho, a cooperação e a dinâmica de uma cooperativa representa o alargamento das possibilidades de capacidade de sobrevivência econômica com a ampliação de renda ocasionada pelo acréscimo da produtividade à medida que minimiza os custos de produção. Além da questão econômica, há que destacar sua preocupação com os aspectos solidários, sustentáveis e agroecológicos, as melhores condições de melhoria de infraestrutura produtiva, etc. No entanto, é verificado enquanto fragilidade, que na sua prática fica evidente “as divergências e a predominância dos valores individualistas e, na prática, não elimina as



desigualdades e as relações de subordinação típicas do trabalho heterogerido.” (Scopinho, 2007, p.84)

Ao que diz respeito ao mundo rural o trabalho, assim como os demais aspectos da vida cotidiana, há uma resistência à cooperativa como modelo organizacional, mas, é visível a importância que dão à cooperação como modo de organização da vida econômica e societária.

Ocorre a fuga da institucionalização, sob a alegação de que isto burocratiza e retira a autonomia, e a retomada das tradicionais formas de organização do trabalho baseadas na cooperação espontânea porque, de fato, cooperar é imprescindível para a sobrevivência desses trabalhadores. Porém, como o associativismo formal tem sido colocado pelo Estado como uma das condições para legalizar os assentamentos, geralmente, opta-se por organizar o que Schneider (1981, p. 31) chamou de “cooperativismo típico”, porque a cooperação entre os produtores não se dá no plano do processo de trabalho, mas da prestação de serviços necessários para produzir (assistência técnica, repasse de crédito, beneficiamento, comercialização), por delegação de responsabilidade dos associados à diretoria administrativa. (Scopinho, 2007, P.84-85).

Rios (1989) aponta o conhecido como cooperativismo doutrinário, para enfatizar seus dois intuitos. São eles: econômico, pois é rentável para os empresários e a questão política, pois é uma possibilidade real e alcançável para os grupos que não dispõem de capacidade competitiva individual. Apresenta-se assim como

como “tábua de salvação econômica” para os pobres, mas, equivocadamente, reflete a ideologia liberal clássica, porque pressupõe uma economia de pequenas e médias empresas que funcionam em regime de concorrência perfeita, o que nunca foi realidade no mundo e muito menos no Brasil, país cuja economia é dependente e condicionada pelo capital internacional. Esta ideologia, revestida de apelo igualitário e humanista, é funcional para remendar os graves problemas econômicos e sociais num momento histórico marcado pela presença de grandes corporações, pois trabalha com a idéia de que basta os pequenos se unirem para terem força. (Scopinho, 2007, p.86).

Cooperativismo no Brasil e Cooperativismo em Malta

Alguns autores indicam as nítidas discrepâncias que há sobre o histórico de surgimento do cooperativismo na Europa e no Brasil. Para Rios (1989) enquanto na Europa o cooperativismo é marcado por uma reação dos proletários às insatisfações



socioeconômicas advindos do capitalismo, no Brasil surge como algo pensado pelas elites econômico e políticas em uma realidade quase que exclusivamente agroexportadora.

A realidade brasileira é de um grupo que importou e adequou essa prática aos interesses das elites políticas e agrárias. Não vou um movimento das bases para pensar um modelo de superação das condições excludentes capitalistas. As ideias socialistas da época tentam justificar o início do cooperativismo no Brasil pelas motivações operárias, no entanto,

São ideias corporativas (facistas) que inspiram, por vezes, a prática e a legislação. Assim como o sindicalismo brasileiro está marcado nas suas origens e organização pelo Estado Novo getulista (da década de 30), o mesmo ocorreu na mesma época com o cooperativismo. (Rios, 1989, p.25)

Diferentemente da Europa, onde o cooperativismo é um movimento urbano, no Brasil, mesmo sendo um movimento de interesses de uma elite, é marcado por ocorrer no meio rural. Ainda assim, é um movimento cooperativo de serviços e não de produção, onde a instituição cooperativa presta auxílios aos produtores, mas de forma individual.

O aparente caráter reformador do movimento se esgota nas pretensões de modernização agrícola. Não troca, entretanto, no problema da propriedade da terra, dos trabalhadores rurais, questões que entrariam em conflito com os interesses das classes dominantes agrárias. [...] Trata-se de um modelo bem adequado à concentração da propriedade fundiária. (Rios, 1989, p.25).

Na América Latina como um todo, o cooperativismo tem seu desenvolvimento marcado pelo movimento cíclico onde se confunde em certa medida com suas crises econômicas e políticas ocasionadas pela sua economia dependente.

De acordo com Pinho (2003) o movimento cooperativista brasileiro teve incentivo institucional e jurídico no governo Vargas (1930-1945), na tentativa de impulsionar as cooperativas agrícolas de trigo e soja. As décadas de 1960 e 1970, essas associações tiveram um positivo destaque no mercado internacional da soja pelas facilidades de crédito que essa nova realidade comercial propunha. A Lei nº5.764 foi criada em 1971 e rege o funcionamento do cooperativismo brasileiro. Ela tem muitas limitações devido ao seu contexto de criação, oriundos do período da ditadura militar, e, mesmo



merecendo uma profunda revisão, devido às óbvias mudanças que nossa sociedade passou, ela que está em vigor até hoje.

Mesmo havendo uma lei geral que rege e protege o sistema cooperativo, a Constituição Federal de 1988 determina que as cooperativas tenham autonomia e independência em relação ao Estado. Ou seja, fica vedada a interferência de filiação de qualquer representação oficial de organismos externos, sejam eles estatais, paraestatais ou privados.

Na Europa, foi fundada por iniciativa de líderes cooperativistas inglesas, francesas e alemães a Aliança Cooperativa Internacional –ACI. Essa aliança foi fundada em 1895 no intuito de criar uma representação “que intensificasse o intercâmbio entre as cooperativas dos diversos países, nos campos doutrinários, educativo e técnico” (SALES, 2010, p.30).

Destaca que essa fundação dividiu-se em dois distintos interesses, ora defendida pela

“Hegemonia do Produtor”, proposta pelo grupo de Londres, os socialistas cristãos, liderados por Vansitartart Neale, que defendiam a participação como o principal critério rochdaleano de autenticidade cooperativista, e que pregavam a transformação social por intermédio das cooperativas de produção, que seria o instrumento de libertação do trabalhador assalariado, com a participação dos funcionários nos lucros das empresas e a da “Hegemonia do Consumidor”, defendida pelo grupo de Manchester, isto é, pelas organizações cooperativas “Wholesale” é apoiado pelas federações cooperativistas de consumo, que pregavam a transformação social pela organização das cooperativas de consumo, pois entendiam que todas as pessoas são consumidoras e nem todas são trabalhadoras, pôr isso as cooperativas de consumo são universais nos objetivos que defendiam, e portanto, atendiam aos interesses de todas as pessoas. (Sales, 2010, p.30).

Com a interferência de Charles Gide a ACI consentisse com a vertente da “Hegemonia do Consumo” em detrimento da “Emancipação do produtor”. Para Gide as cooperativas de produção (amparadas pelas cooperativas de crédito) esforçavam-se apenas para recompor o capital e o trabalho gerando a paz social.

No cenário contemporâneo, segundo Namorado (2003,p.3) na sua obra “A sociedade Cooperativa Europeia- Problemas e Perspectivas” a preocupação com o cooperativismo perpassa pelo intuito de constituir uma Europa onde os cidadãos transcendam a “construção de um mercado comum”. Um continente marcado pela “liberdade e



solidariedade realmente fraterna, aberta ao mundo, mas resistente a qualquer império que a queira subjugar.”.

Claro que Namorado (2003) nesta obra destaca a Sociedade Cooperativa Europeia, que é uma sociedade que surge na tentativa de minimizar impactos insuficientes do desenvolvimento cooperativo e suas desvantagens frente às sociedades comerciais. Por isso, é uma definição um tanto quanto atual e redefinida distinta da então pioneira ACI. No entanto, demonstra a real preocupação e importância que a Europa vislumbra no sistema cooperativo como possibilidade de alteração do sistema econômico europeu que por alguns anos apresentou-se em déficit.

No entanto, o que percebemos é que atualmente as cooperativas por si só perdem a essência de cooperação que, para além de melhorar a situação econômica das pessoas, necessário fomentarem a educação cooperativa para que esteja para além unicamente das questões econômicas.

Para Schneider (2003) é necessário uma educação doutrinária. Ele define esse tipo de educação como sendo aquela que abrange metodologias e práticas de cooperação em juntamente com os conteúdos educativos.

A educação doutrinária é fundamental, pois é ela que, por meio dos seus valores e princípios, dá sentido a todo o processo, que incentiva e direciona todas as atividades e práticas cooperativas em prol de maior bem estar e dignidade das pessoas que compõem a cooperativa. [...] A educação cooperativista investe esforços, tanto na formação do homem cooperativo, solidário, responsável e participativo, que opere e viva à luz de uma cultura cooperativa, quanto na formação e capacitação de um bom e competente produtor, prestador de serviços, consumidor e poupador. (Schneider, 2003, p.14-15).

Nesse sentido, percebemos uma distinção entre as realidades brasileiras (em sua grande maioria) e europeias, nesse momento falando do cooperativismo maltês. O Brasil, por seu contexto e atual realidade, tem um histórico que o caracteriza diferentemente, não sendo verificada uma cultura de luta pela cooperativa como uma possibilidade de mudança de qualidade de vida como um todo. Limita-se às questões financeiras.



Minha experiência empírica é em uma cooperativa agropecuária na microrregião mato-grossense no Brasil. A microrregião é denominada Vale do Arinos e essa cooperativa desenvolve atividades com a coleta de leite e um laticínio para a produção de muçarela.

Essa pesquisa empírica, fonte de pesquisa para o doutorado que está em andamento, percebemos que a instituição cooperativa não representa necessariamente um trabalho de cooperação. Não há naqueles indivíduos o sentimento de pertencimento, não compreendem os princípios que sustentam a cooperação, dessa forma a cooperativa se restringe às atividades comerciais.

Não queremos generalizar, mas essa cooperativa agropecuária em questão representa o grande número de cooperativas de pequenos produtores rurais brasileiros. Diferentemente de outros grupos que, historicamente, vem construindo uma história de produção baseada no associativismo, e que tem como princípio o processo de aprendizagem, que se inicia nos acampamentos e é passado de geração em geração, como por exemplo, o Movimento Sem Terra-MST, esses assentados da realidade do Vale do Arinos não comungam, na maioria das vezes, do sentimento de cooperar e trabalhar para legitimar um grupo que está à margem da sociedade, não internalizando assim, esse princípio político de luta.

Pude fazer um paralelo ao analisar, em pesquisa do doutorado sanduiche no país de Malta, que, em mesmas realidades as relações com o cooperativismo são distintas.

Malta faz parte da União Europeia desde o ano de 2004. Já no primeiro verifica-se a preocupação com a zona rural, estabelecendo o Plano de Desenvolvimento Rural (Development Plan for Malta-RDP) na tentativa de organizar medidas de capacidade de atuação e competição em vistas ao mercado econômico. Esse Plano duro de 2004 a 2006.

Já no ano de 2007 entrou em vigor o segundo Plano de Desenvolvimento Rural que almejou aperfeiçoar os ganhos do primeiro Plano e rever suas perdas. Nesse sentido,

It seeks to offer a more deliverable pro, gramme that IS well aware of the strengths of the rural sector while at the same time addressing relevant weaknesses in order to attain a more sustainable development of agriculture. The in, elusion of past, as well as recent experiences both from a technical and from an administrative point of view will strengthen the commitment in focusing on present and future needs of all stakeholders as well on current European and world trends. (Attard, 2007, p. 2).



Malta procurou se adequar às normas Europeias e de exigência de mercado, levando em conta suas especificidades e as organizações que já existiam. Isso porque, compreenderam e compreendem (tendo em vista que ainda está em processo de transformação) que a realidade atual é inadequada para atender às necessidades modernas.

A Medida 142 desse Plano sugere a cooperação entre os produtores, por entender que ao cooperarem e se reunirem como um corpo só, os “producer organisation has the objectives to improve the market efficiency of the agricultural sector by encouraging and supporting the setting up of producer groups.”(ATTARD, 2007, p. 4). O incentivo não fala especificamente da implementação de uma cooperativa, mas fala da necessidade de pequenos grupos e unirem, para que fortalecidos estejam à altura de competir no sistema econômico produtivo. Isso, conseqüentemente, fomentou o surgimento de cooperativas.

Sendo Attard (2007), a Portaria das Sociedades Cooperativas (Co-operative Societies Ordinance) entrou em vigor em 12 de dezembro de 1946, sendo a primeira forma de legislação que rege as cooperativas em Malta, sendo em sua maioria no setor agrícola enquanto prestadora de serviço aos seus membros.

O autor enfatiza que, como em muitos locais, inclusive no Brasil, houve falhas na administração dessas cooperativas principalmente ocasionadas pela fraca fiscalização e atuação realmente de cooperação no interior dos empreendimentos. Ainda há que considerar o perfil desses produtores. Como acentua Attard (2007, p. 5)

Further more, the Maltese farmer holds great pride describing himself as an entrepreneur talented to play the markets. This "master" feeling gives them a false sense of security as they perceive themselves as being market drivers, when in reality none are big enough to have any measurable effect on markets.

Pondera, dessa forma, que algumas atitudes conservadoras faz diminuir a participação e efetiva postura de cooperação, inerentes à esse formato de empreendimento.

Sabemos que historicamente, o sistema cooperativo é recente, e mais ainda se tratando de Malta, que, mesmo apresentando as primeiras organizações no ano de 1946, apenas em 2004 que procurou padronizar seus sistemas pela União Europeia e concorrer com



o sistema mundial de produção. Essa postura, tida por Attard (2007) como conservadora, impede, por exemplo, que a cooperação ocorra não apenas entre os principais atores, mas entre vários atores do setor produtivo rural. Além disso, é um problema quando se fala em fortalecimento da produção local e para registrar produtos como sendo típicos de Malta.

Nessa experiência pudemos notar que, o sistema cooperativo enfrenta alguns problemas que também são um entrave para a dinâmica no interior das cooperativas, e principalmente entre os cooperados. No entanto, Malta, ao fazer parte do sistema Europeu de cooperativas, tem um suporte e apoio maior ao que diz respeito aos padrões mínimos exigidos e sua efetivação de fato. Mesmo assim, reconhecem que há um longo caminho a percorrer para se tornar uma estrutura tida como ideal ao sistema cooperativo.

Considerações Finais

Mesmo sendo o cooperativismo transcorrido a mais de 150 anos, ainda verificamos a falta de compreensão sobre seus aspectos constituintes e reais intuitos. Em sua grande maioria, o cooperativismo é visto apenas pelo viés doutrinário, acarretando o desvirtuamento da prática cooperativista e dificultado entender o movimento que gerou uma organização socioeconômica em destaque nos dias atuais, a cooperativa. Isso, segundo Costa (2007), provocou uma roupagem diferente da esperada, vislumbrando as cooperativas como uma empresa privada como tantas outras, afastando-se cada vez mais dos princípios básicos do cooperativismo.

Concordamos com Pinho (1982) quando acentua que isso é consequência dos problemas resultantes da própria evolução da cooperativa, que não é mais uma simples associação mutualista, mas sim, uma complexa organização social.

Infelizmente, encontramos cada vez menos cooperativas que empregam seus princípios básicos, mas, pelo contrário reúne todos os problemas da empresa capitalista que conhecemos hoje.

Ao fazer o paralelo entre as realidades brasileiras (mais especificamente a Coopernonte) e maltesas, foco inicial deste trabalho, percebemos que há um distinto histórico de “luta”, mas que ao ser observada em seu interior apresenta problemas semelhantes, com poucas atitudes democráticas, solidariedade, autogestão, e uma numerosas técnicas burocráticas semelhantes ao setor privado, nos levando a crer que



esses grupos vislumbram o cooperativismo como meramente um meio para comercialização de seus produtos.

Referências

Attard, George. Challenges and Opportunities in the Rural Development Plan for Malta. PAC 2007-2013 e o seu impacto em Malta. 1-7, 2007. Disponível em: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/21850> . Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.

Camargo, L. C. Cooperação e cooperativismo. Vol. 4. Cadeira 20. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 1960.

Costa, Luciano de Souza. O Cooperativismo: uma reflexão teórica. Revista Ciências Sociais em Perspectiva. (6) 11 : 2º sem. 2007.

Namorado, Rui. A Sociedade Cooperativa Europeia- Problemas e Perspectivas. II Colóquio Ibérico de Cooperativismo e Economia Social. Valência, 2003.

Pinho, D. B. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. São Paulo: Saraiva, 2003.

Rios, G. S. L. O que é cooperativismo (2. ed.). São Paulo, SP: Brasiliense, (1989).

Sales, João Eder. Cooperativismo: Origens e evolução. Revista Brasileira de Gestão e Engenharia. Número I, 2010.

Scopinho, Rosimeire Aparecida. Sobre Cooperação e Cooperativas em Assentamentos rurais. Revista Psicologia & Sociedade; 19, Edição Especial 1: 84-94, 2007.



La producción del mezcal en México: Denominación de origen, internacionalización y la condición de vida en el mundo rural.

Ever Sánchez Osorio
María de Lourdes Flores López

Resumen

El trabajo se centra en la producción del mezcal en México, específicamente en Oaxaca. Su objetivo es comprender los cambios y las transformaciones sociales - locales a partir de la denominación de origen e internacionalización de la bebida. La demarcación de la producción del mezcal a través de la denominación de origen es un tema recurrente en el país y al interior del estado oaxaqueño, esto ha ocasionado cambios profundos y reconfiguraciones en las relaciones sociales de producción comunitarias. Sin duda, estos cambios se han visto favorecidos por la llegada de empresas mezcaleras quienes compran la bebida en las regiones productoras para después comercializarlas en el mercado nacional e internacional. A través de una revisión bibliográfica, como algunos acercamientos empíricos en comunidades productoras de mezcal se indaga sobre los cambios sociales, culturales y productivos en el contexto rural. La regulación y las modificaciones de la bebida ha logrado cambios profundos en el estado: por un lado, fueron desconocidas algunas regiones donde la producción del mezcal ha sido parte del día al día; los productores de mezcal se volvieron envasadores del líquido que antes apenas se comercializaba en el mercado local y ahora se cotiza en espacios de mucho prestigio. El significado cultural, simbólico y místico de la bebida se torna en un depósito con valor único en el mercado. El mundo rural en las regiones productoras de mezcal en Oaxaca ha tenido cambios a partir de la denominación de origen e internacionalización de la bebida perceptible en la vida del día a día.

Palabras clave

Mezcal, vida cotidiana, mundo rural, comercialización, México.

Introducción

A lo largo de la historia, la producción de bebidas ancestrales ha sufrido transformaciones debido a los cambios inevitables de la sociedad, y con éstos, las mutaciones de la naturaleza. Una de las bebidas más emblemáticas del estado de Oaxaca es el mezcal, que remonta a tradiciones culturales específicas y a paisajes azulados inigualables. Mezcal, en su sentido más amplio, significa maguey cocido y proviene de la palabra náhuatl mexcalli (Fournier y Mondragón, 2012), en referencia a



uno de los usos que tiene el maguey, en este caso para la elaboración de la bebida.

Por la diversidad en que se han desarrollado sus formas de extracción y producción, el mezcal y las batallas que rodean su Denominación de Origen (DO), hacen que ésta sea más que una forma de reconocimiento e inclusión privilegiada. La DO es un arma de doble filo para el que llamamos y reconocemos en este trabajo como 'mundo mezcal': vidas y haceres silenciados por las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales que la DO contiene.

Pero, ¿qué es la DO? La DO es un reconocimiento oficial administrado por el gobierno federal, que tienen como fundamento principal garantizar la procedencia y calidad del producto, para que en este sentido no pueda ser producido en otros lares, con otros elementos que no forman parte de su esencia original. Es a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que el gobierno mexicano asegura y controla dichas denominaciones, las cuales deben cubrir los siguientes tres requerimientos: "Un producto de características únicas o calidad especial que lo individualizan entre los productos de su misma especie; características o calidad especial derivadas exclusivamente de factores naturales y humanos; el producto es identificado o designado con el nombre del lugar en que se produce" (Secretaría de Economía, Gobierno de México, énfasis original). Las DO son acuerdos oficiales de distinción, esto es, "surgen como parte de las políticas de comercio para diferenciar productos con características peculiares relativas a la región, este distintivo se originó inicialmente para los vinos y bebidas espirituosas en Europa en los años 60" (Flores, L., Sánchez, O., et. Al., 2018: 33).

En este trabajo, la apuesta está en visibilizar las dos caras de la producción del mezcal a partir de la Denominación de Origen, el significado que este reconocimiento tiene para los maestros mezcaleros y las dinámicas de mercado que hacen de esta bebida una distinción para sus consumidores, a partir de los vacíos que dicha denominación trae consigo.

La denominación de origen, un arma de doble filo para el 'mundo mezcal' en Oaxaca.

"... es necesario desarrollar capital social para poder desarrollar capital natural y pensar que la calidad no sólo está en el producto, sino en las prácticas de producción y su relación con el ambiente" (Carrillo, 2007: 48-49).



Con el propósito de proteger saberes creativos y únicos plasmados en productos originarios, las DO apelan a las regiones dentro del país desde donde se produce un determinado producto para que éste pueda obtener la denominación, lo que implica referir a una demarcación geográfica que en sí misma contiene formas de vida muy particulares. En este sentido, las regiones productoras de mezcal quedan oficialmente reconocidas y protegidas para que en ningún otro lugar pueda elaborarse, como en este caso, la bebida espirituosa en el estado de Oaxaca. Los usos y costumbres que los pueblos originarios oaxaqueños han mantenido por mucho tiempo, concretamente respecto a la producción y significado del mezcal, se transforman en significados simbólicos que durante los modernos procesos industrializados quedan invisibilizados y silenciados o, mejor dicho, eliminados.

Lo artesanal de los procesos de producción se pueden observar a lo largo de estos. La cocción, molienda, fermentación y destilación del mezcal, se ejecutan (mayormente) en forma manual o, en su defecto, se apoyan en el uso de tecnologías rudimentarias tales como ollas de barro, hornos de tierra, piedras de río, etc. [...] Aunado a lo anterior, las condiciones socioeconómicas de los productores de mezcal, incorporados a la industria, son de alta y muy alta marginalidad [...]; ello, además de encontrarse en un contexto cultural específico donde prevalece una identidad arraigada que se transmite de generación en generación y una cultura en donde el mezcal permea de distintas maneras en la vida cotidiana de las comunidades mezcaleras. (Espinoza, Rivera y Maldonado, 2017: 8)

Esto se puede comprender mejor bajo la perspectiva y lógica del mercado internacional en donde las estrategias económicas de sobrevivencia, junto con las propias formas organizativas de producción de los pequeños productores, han quedado absorbidas por las grandes industrias. En otras, palabras, la nula correspondencia entre el valor simbólico y el plus económico que el valor simbólico le otorga al mezcal, genera incongruencias y poca justicia a las manos mezcaleras ante un mercado que es ya de talla internacional.

Se ha dicho que el mezcal producido en Oaxaca cuenta con la Denominación de Origen desde el año 1994; sin embargo, contradictoriamente el mezcal oaxaqueño producido en la Mixteca, la Cañada y la Costa, que son regiones del estado, para el año 2007 aún no contaban con dicho reconocimiento (Carrillo, 2007). En el 2018 aún varios municipios no estaban reconocidos con la DO, situación que desde aquellos años vislumbraba procesos de exclusión y marginación, y que en nuestra actualidad son procesos que



siguen vivos. A consecuencia de ello, las grandes industrias, por tanto, son las mayormente beneficiadas, inclusive por los apoyos tanto federales como estatales que se les otorgan (Flores, L., Sánchez, O., et. Al., 2018: 34). Vislumbramos así que, en el trasfondo de la DO, hay amplios intereses de sectores muy específicos y privilegiados dotados de poder. En este sentido, dicho poder —y las relaciones que emanan de éste— que se contiene dentro de la lógica de producción y comercialización de mezcal en Oaxaca es sumamente coercitivo y contradictorio.

La distinción otorgada al mezcal, desde el marco normativo, debe proporcionar legitimidad a los productores en tanto que se apoyan en procesos auténticos, desde ser parte de las regiones seleccionadas pues en éstas se encuentra de forma originaria el saber de la producción artesanal, la cosmovisión que rodea la forma de relacionarse con el cultivo, la creatividad que emana dentro del palenque, entre otras.

Sin embargo, durante el trabajo de campo realizado en regiones mezcaleras del estado, durante el cual nos acercamos a pequeños productores de mezcal, nos percatamos de las profundas incongruencias legales y económicas ante las cuales se enfrentan día a día. Un pequeño productor, incluida su familia, no produce más de 10 hectáreas de mezcal. Obtener la DO implica muchas veces mucho tiempo invertido en trámites burocráticos, y por supuesto, recursos económicos que por lo general rebasan sus posibilidades reales. Pardo y Sánchez (2016) lo explican de la siguiente manera:

Encontrarse en una escala familiar de producción con pocos recursos, generalmente implica, también, escaso capital social que permita integrarse efectivamente a una cadena productiva. Esto obliga a un análisis prospectivo con atención a escalas, observando al productor y los problemas que enfrenta para producir y subsistir, sus aspiraciones y posibilidades de cambio con base en sus conocimientos, prácticas y recursos, empleando un enfoque cultural- social, no economicista (Pardo y Sánchez, 2016: 32-33).

Una de las primeras contradicciones que mencionamos anteriormente es que hay regiones que de antaño son productoras de mezcal y que han quedado excluidas de la Denominación de Origen. “La denominada Región del Mezcal en Oaxaca se concentró en la Sierra Madre del Sur [...] segregando a varias regiones como la Cañada y la Región Mixteca donde el cultivo de la planta y la elaboración de la bebida ha sido fundamental para la economía de hombres y mujeres quienes ancestralmente la trabajan” (Flores, L., Sánchez, O., et. Al., 2018: 34). Esta exclusión ha estado teniendo



consecuencias en diferentes situaciones que afectan directa e internamente a la cadena productiva, a pesar de que Oaxaca produce el 93.7% del mezcal en el país (Vega y Pérez, 2017: 3).

Primeramente, observamos que, dada la exclusión, los productores de mezcal no tienen más opción que vender la bebida de manera prácticamente clandestina a un costo menor y propiciando que la bebida pueda ser alterada. Bajo esta circunstancia se generan las condiciones ideales para fortalecer un mercado injusto, ilegal e irregular que merma la calidad de vida de los productores y sus familias en tanto no reciben compensación justa a su propia economía. Como lo menciona Carrillo (2007) cuando refiere a la falta de cumplimiento en la regulación por los organismos oficiales:

... estos organismos no siempre cumplen con su cometido. En algunos casos existen intereses millonarios, como en la industria tequilera, lo cual hace difícil que un Consejo sea verdaderamente imparcial; en el caso del mezcal la certificación tiene un alto costo para los pequeños productores, lo que implica la posibilidad de volver al clandestinaje, a ser explotados nuevamente por la corrupción y el abuso, y convertirlos en productores de materia prima sin posibilidades de obtener un ingreso mayor por el agregado al valor que representa elaborar el destilado y comercializarlo, dejando el campo de las utilidades abierto a los empresarios (Carrillo, 2007: 42-43).

En una segunda instancia, los vacíos que tiene la DO fortalecen intereses políticos y económicos de los grandes monopolios (op. Cit) quienes son quienes propician ilegalidad en los procesos del comercio en la cadena productiva del mezcal. Dicho de otra manera, los pequeños productores de mezcal a los que referimos forman parte de un sector marginado y no reconocido, de tal manera que resulta imposible ubicar su producto en el mercado, pues “para ubicarlo dentro de una cadena es vía intermediarios que minimizarán su ganancia, lo que les deja, en realidad, fuera de la cadena” (Pardo y Sánchez, 2016: 32).

Aunado a lo anterior, el no ser reconocidos con la DO, los productores de mezcal tienen restringido el uso del nombre de la bebida, es decir, no pueden rotular la bebida con el nombre mezcal. De manera directa esto es uno de los factores para no poder comercializar el producto en términos de un comercio justo y leal, y por lo tanto terminan vendiéndolo a muy bajo costo en el mercado negro; esto conlleva a los maestros mezcaleros a etiquetar sus bebidas bajo el nombre “destilado de agave” (Cruz, 2016, párr. 10).



Al mismo tiempo, ante el hecho de no tener la posibilidad de llamar mezcal a su bebida, el gobierno ha propuesto utilizar el nombre Komil, para denominar así a todas aquellas bebidas destiladas de agave (mezcales) que no cuentan con la DO: “El gobierno mexicano quiere agregar uno nuevo a la lista: *komil*, para clasificar todas las bebidas a base de agave, que, por cuestiones legales, no pueden llamarse mezcales” (Cruz, 2016, párr. 1). De la misma manera, esto se sostiene con lo que mencionan Espinoza, Rivera y Maldonado (2017): “A pesar de sus características únicas, el mezcal ha enfrentado la dificultad, como gran parte de la producción de Oaxaca, de no estar certificado por la norma señalada. Por tal motivo, el producto no puede comercializarse como mezcal” (Espinoza, Rivera y Maldonado, 2017: 6-7).

Ahora bien, ¿qué sucede con los pequeños productores de mezcal, tengan o no la DO? Se han suscitado luchas de poder en tanto que los que tienen la DO (grandes empresarios y unos cuantos productores) no desean que los pequeños productores la obtengan pues perderán los jugosos beneficios con los que ya cuentan, fortaleciendo así las relaciones establecidas con las grandes destiladoras que cuentan con mayor capital económico. Asimismo, la venta a granel del brebaje en el extranjero y su envasado fuera de la región con DO promueven un futuro incierto para los productores de mezcal (Carrillo, 2007: 49).

El mezcal: ayer y hoy.

En el artículo *¿Qué deseas beber, komil o mezcal?*, Sánchez y Figueroa (2016) procuran realizar un acercamiento en el que se habla de los procesos de distinción que dota la DO a los consumidores. Si bien el mezcal es ahora una de las bebidas más reconocidas a nivel internacional como lo es el tequila (el tequila es un tipo de mezcal), anteriormente era una bebida para los menos, los pobres, los olvidados. Era una bebida de la gente que “no sabía” de bebidas destiladas refinadas. El mezcal ahora, en las grandes ciudades, no sólo de México, es una bebida exigida y pagada en altos costos, una bebida que dota de distinción a sus consumidores.

Decidir si beber komil o mezcal alude a diferentes situaciones. De entrada, la diferencia entre uno y otro tiene que ver con la denominación de origen (DO) y el campo legal que lo sostiene. Superficialmente puede referirnos a un gusto exclusivo de paladar (que no tiene mucho de estar de moda en nuestra sociedad), de una específica posibilidad económica para su consumo, de espacios sociales asignados para beberlo, así como también de festividades y comunalidad, de sistemas de producción, de leyes, de corrupción, de ecocidio, de historia, entre otras (Sánchez y Figueroa, 2016: 29).



Otro punto a mencionar muy importante para la producción de esta bebida espirituosa, es que anteriormente, las plantas de agave con las que la producían nuestros antepasados eran silvestres, pertenecían a un ecosistema particular. En la actualidad, con los procesos de transformación para la producción a un ritmo veloz, las plantas de agave son sembradas, las grandes empresas empeñadas en acelerar su proceso de crecimiento y madurez para lograr así satisfacer la dinámica de un mercado constantemente insatisfecho, pero que exige etiqueta y prestigio. Cabe señalar, por ejemplo, que para que una planta de agave esté lista de manera natural para ser cosechada y transformada, el tiempo ideal de vida es de 8 a 10 años.

A pesar de lo anterior, los pequeños productores cuidan mucho el cultivo del agave. Si bien difícilmente se obtienen plantas de manera natural en su propio ecosistema en la actualidad, estos saberes ancestrales cuidan aún hoy en día que las plantas sembradas no sean contaminadas con agroquímicos, utilizan fertilizantes naturales, para vigilar la calidad del mezcal. En el caso de los maestros mezcaleros en Oaxaca, tampoco utilizan agaves que no conocen o que no son de la región, pues no tienen las mismas características con las que ellos están familiarizados, y pueden resultar, por lo tanto, con una bebida que no satisface su creatividad ni su conocimiento.

... las prácticas tradicionales de producción y de la importancia de que dicha materia prima no utiliza químicos ha valorizado su costo. Los turistas se han interesado por conocer la forma en que se produce, rescatando que en la región Sierra Sur y en particular en los distritos de Sola de Vega y Miahuatlán donde aún se utilizan las ollas de barro, así como los alambiques de cobre, los molinos de piedra movidos por bestias (caballos, yunta, etc.), hornos de piedra, todos ellos como el principal atractivo turístico lo que conlleva a la venta del mezcal, elementos que siguen cobrando fuerza en estas regiones (Ruiz, 2019: 79).

Hoy en día, los maestros mezcaleros son invisibilizados, como anteriormente se mencionó. En esta lógica de mercado, toma mayor visibilidad el comerciante, pues es quien la mayor parte de las veces etiqueta (y de alguna manera se apropia) del mezcal. Así lo describen Espinoza, Rivera y Maldonado (2017) por los hallazgos de su investigación:

Un caso que ejemplifica cómo los mezcaleros ven amenazada su identidad se ve claramente reflejado en que el crédito de un “buen mezcal” no se le otorga al maestro



mezcalero (productor del mezcal), sino al comercializador, que en realidad es ajeno a la comunidad y que, en ocasiones, incluso desconoce los procesos de producción. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los comercializadores terminan siendo los dueños de la marca del mezcal; entre otras razones dado que estas personas pueden cubrir los costos que implica registrar la marca ante el CRM para obtener la certificación (2017: 14).

Reflexiones finales

“A pesar de sus características únicas, el mezcal ha enfrentado la dificultad, como gran parte de la producción de Oaxaca, de no estar certificado por la norma señalada” (Espinoza, Rivera y Maldonado, 2017: 6)

La producción de un mezcal artesanal implica mantener viva la producción de un sistema social y cultural que, por la lógica del mercado, queda prácticamente olvidado. Dejar de lado los costos de la vida cotidiana de los maestros mezcaleros y de sus familias, abre la posibilidad de que, en algún bar de prestigio en cualquier lugar del mundo, se sirva mezcal etiquetado como artesanal a un alto precio. Asimismo, el mezcal artesanal es sinónimo de un ecosistema que debe ser cuidado y vigilado para no perder la vida que aún emana de éste, y al mismo tiempo, continuar con la producción de esta bebida espirituosa.

Si bien es cierto que las regulaciones oficiales deben fungir como la instancia que garanticen legalidad y transparencia a los productores de mezcal para mantener vivo un sistema de producción único, la DO del mezcal provee de privilegios, pero no así a los pequeños productores, sino a las grandes empresas y a los consumidores que pueden pagarlo. En este sentido, resultan altamente cuestionable los intereses que hay detrás de las DO de cualquier producto hecho en México con este reconocimiento, especialmente del mezcal.

La Ruta del mezcal en Oaxaca ofrece, por ejemplo, un recorrido turístico para aquellos amantes del mezcal. Se ofrece la vista y visita de una sola cara de la moneda para conocer los procesos de producción, romantizando así el consumo de una bebida ancestral dotada de superficiales privilegios que dan distinción a sus consumidores; es decir, el mezcal es un producto que privilegia a algunos mientras que a otros los mantiene en el olvido.



Por otra parte, el significado simbólico del mezcal sigue conservándose en los mezcaleros, sus familiares y ancestros, dado que, al interior de sus cosmovisiones, el mezcal es más que una bebida exótica: es una bebida que ha formado parte de sus festividades, sus enfermedades, su estructura familiar, su vida comunitaria,

ecosistémica y, sobre todo, actualmente, una fuente de ingresos económicos para su vida cotidiana. Esto lo encuentran también Espinoza, Rivera y Maldonado (2017) en su trabajo de campo:

Un segundo aspecto característico de los palenques de mezcal derivado de su naturaleza familiar, está relacionado con los objetivos últimos que buscan. Mientras una empresa grande del mezcal tiene por objetivo principal el acumular riqueza, los palenques de mezcal tienen como finalidad fundamental la de generar ingresos diarios que permitan a la familia sobrevivir en el día a día (2017: 13)

Bibliografía

- Bautista, Juan Antonio, Orozco Cirilo, Sergio, & Terán Melchor, Edit. (2015). La disminución de la producción artesanal de mezcal en la Región del mezcal de Oaxaca, México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 6(6), 1291- 1305. [fecha de consulta 8 de septiembre de 2019] Disponible en: <https://bit.ly/3iKVT7d>
- Carrillo, T. Lauro A. (2007). Los destilados de agave en México y su denominación de origen. *CIENCIAS* 87, 40-49. [Fecha de consulta 5 de septiembre de 2019] Disponible en: <http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/12111>
- Cruz, M. (25 febrero 2016). 'Komial', la palabra que los amantes del mezcal no quieren oír. *Verne. El país*. [fecha de consulta 9 de septiembre de 2019] Disponible en: https://verne.elpais.com/verne/2016/02/25/mexico/1456362020_194480.htm
- Espinoza, M. David Eduardo, Rivera G. Gibrán, Maldonado, A. Blanca E. (2017) Caracterizando la producción y organización de los mezcaleros en Matatlán, México "Capital mundial del mezcal". *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo regional*, 50 (27). [fecha de consulta 7 de septiembre de 2019] Disponible en: <https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/465>
- Flores López, M. de L., Sánchez Osorio, E., Vázquez Elorza, A. y Pardo Nuñez, J. (2018). Las tensiones en la denominación de origen del mezcal en Oaxaca, México. *Tlamati*, 9(2), 32-36. [fecha de consulta 8 de septiembre de 2019] disponible en: <http://tlamati.uagro.mx/t92/t925.pdf>



Fournier García y Lourdes (2012). "Las bebidas mexicanas. Pulque, mezcal y tesgüino", *Arqueología Mexicana* núm. 114, pp. 52 - 59.

Pardo, N. Joaliné, Sánchez, O. Ever. (2016). El análisis prospectivo en la proyección de los mercados alternativos: Una posibilidad para los productores de pequeña escala. *Textual*. (68), 29-44. [fecha de consulta 7 de septiembre de 2019] Disponible en: <https://chapingo.mx/revistas/viewpdf/?id=MzQ5Mw==>

Ruiz, C. Ma. Del Sol. (2019). El mezcal artesanal, un elemento clave para el desarrollo rural en Mengolí de Morelos, Oaxaca. // *Congreso Virtual Internacional sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible*, febrero 2019. [fecha de consulta 7 de septiembre de 2019] Disponible en: <https://bit.ly/2SGeRI5>

Sánchez, O. Ever, Figueroa, Nashyeli. (2016). ¿Qué gustas beber, komil o mezcal? *Tecnoagave. Revista de la cadena del agave y sus derivados*, 41. 28-31. [fecha de consulta 8 de septiembre de 2019] Disponible en <https://bit.ly/3IC5fUD>

Secretaría De Economía, (s/f). Denominaciones de origen #OrgullodeMéxico. [fecha de consulta 5 de septiembre de 2019] Disponible en: <https://bit.ly/2SIbav7>

Vega, V. Nadia, Pérez A. Pablo. (2017). Oaxaca y sus regiones productoras de mezcal: Un análisis desde cadenas globales de valor. *Perspectivas Rurales*.

Nueva época, 29. 103-132. [fecha de consulta 6 de septiembre de 2019] Disponib en: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/9286>



El trabajo femenino en la agricultura familiar: Características descriptivas, departamento 25 de Mayo, de San Juan, Argentina

Clara Isabel de la Vega
Graciela de Cara Martín Riveros
Enzo Aciar Florencia Caif
Gabriela Tomsig Gabriela Carabaja

Resumen

Objetivos: Caracterizar la participación femenina en la agricultura familiar y en los pobladores originarios del departamento.

El estudio de la participación de la mujer en la agricultura ha quedado desdibujada y apartada del ámbito del análisis científico, descuidando así un aspecto de la realidad que ha ido creciendo, configurando actualmente un factor de desarrollo necesario y activo dentro de los procesos productivos en Latinoamérica, concentrado en el fenómeno de la AF.

Las mujeres que participan de la AF, constituyen un grupo invisibilizado y bastante difuso, sin embargo son en muchos casos, un conjunto de actores con un papel protagónico del fenómeno agrícola. "...son mujeres que desarrollan una actividad agropecuaria en forma remunerada o no remunerada, y que muchas veces se emplean también en otras fincas, o desarrollan trabajos no agrícolas. Además, son las que se encargan mayoritariamente de los trabajos domésticos y del cuidado de los otros miembros del hogar." (Mandar-Iraní, p101, 2014)

Los escasos estudios micro sobre AF, señalarían un aumento de mujeres como jefas de producciones agrícolas de tipo familiar, lo que puede deberse al sub-registro de los estudios macro. Las cuatro comunidades originarias residen en la localidad de Encón, del departamento 25 de Mayo, poseen personería jurídica impartida por el INAI. Son: HuarpeSawa, Talquenca, Guaquinchay y Pinkanta

Metodología: Es exploratorio-descriptiva mediante el uso de datos secundarios, ahondando en la teoría, en la descripción del departamento y de los grupos de pobladores originarios del mismo.

Palabras Claves

Agricultura familiar, género, pueblos originarios, estructura agraria, tareas productivas.



Introducción

Recientemente, dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, se comienza a estudiar la participación de la mujer en la Agricultura Familiar, “(...) al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma”, impulsados por la cuestión de género, que es una categoría social contemporánea que aporta una nueva significación a la teoría social actual y que permite: “(...) explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades” (Susana Gamboa, 2008).

De este modo se ofrece una nueva perspectiva para describir, comprender y analizar la situación de las mujeres en la sociedad, dentro de un contexto histórico y cultural determinado, dejando de lado la única identificación posible hasta este momento: lo humano como puramente masculino.

El interés por el trabajo femenino, particularmente en el sector rural, se vio impulsado con las luchas por los derechos de las mujeres, iniciada en la década del ‘70, a través de los movimientos feministas, que aún persisten en la actualidad. Durante mucho tiempo, se ha desconocido la importancia del aporte del trabajo femenino en la Agricultura Familiar, sin embargo cobran interés cuando la realidad presenta el ineludible aporte femenino, como factor de desarrollo en los procesos productivos en Latinoamérica, Argentina y por consiguiente en San Juan. En este estudio se trabajó con las mujeres de tres comunidades originarias: Huarpe Salvador Talquenca, Clara Rosa Guaquinchay y HuarpeSawa, habitantes de la localidad El Encón, emplazada en el departamento 25 de Mayo. Por ello se pretendió además, abordar el proceso de conceptualización de la identidad originaria y la significación de la identidad originaria en las mujeres.

Desarrollo

El protagonismo de la mujer en el agro

Es ya innegable el aporte de las mujeres como protagonistas del fenómeno agrícola, sin embargo por la escasez de estudios en este sentido, y el silencioso trabajo que éstas realizan, todavía su participación aparece desdibujada y difusa. Sin embargo, puede decirse conforme a los estudios realizados en el Departamento 25 de Mayo, en la Provincia de San Juan, que las mujeres en la Agricultura Familiar están a cargo de diversas actividades, por lo cual podrían definirse como multiactivas, registrándose en los últimos años un aumento de mujeres jefas de producciones agrícolas de tipo familiar.



Así según Mina Mandar-Iraní y otras (2014: 102) reconocen que: “En todos los países de la región, las mujeres contribuyen con su trabajo a la producción de alimentos, a la generación de bienestar, riqueza y desarrollo, y también a la conservación y resguardo del medioambiente”.

Si bien, la realidad muestra la trascendente participación de la mujer en la Agricultura Familiar, las políticas públicas no han terminado de reconocer su importancia, ni en sus actividades remuneradas como en las no remuneradas (complementarias, colaborativas y de cuidados familiares), siendo que constituyen el eje central de desarrollo familiar como unidad productiva a la vez que social, cultural e histórica, depositaria de costumbres y tradiciones ancestrales. Mina Mandar-Iraní y otras (2014: 103) señalan que: “Los tres atributos que caracterizan al universo de las mujeres de la AF: invisibilidad, inclasificación y crecimiento, constituyen un enorme desafío para las políticas públicas, por cuanto obliga a una mirada y acción integral, con una fuerte coordinación intersectorial”

Se ha podido comprobar el aumento del número de mujeres que participan de las actividades agrícolas, particularmente como mano de obra no remunerada, realizando un significativo aporte al sostenimiento de sus respectivas familias. Mina Mandar-Iraní y otras (2014: 115), indican que: “Sin embargo, las encuestas de uso del tiempo, muestran que más de la mitad de las mujeres rurales clasificadas como inactivas en la medición tradicional del empleo, efectivamente, sí trabaja, en particular en la producción de autoconsumo”. Mina Mandar-Iraní y otras, agregan que (2014: 116): “(...) las mujeres indígenas destinan más horas para las labores de autoconsumo que las mujeres no indígenas”

Las autoras mencionadas indican una tendencia a la feminización del campo, las causas de tal afirmación corresponde a diversos factores, entre ellos la migración del campo a la ciudad de una gran cantidad de hombres, la mujer como jefa de la explotación agrícola, como único sostén familiar, entre otras.

En las investigaciones realizadas para aportar a la visibilización del trabajo femenino, especialmente en el sector rural, se descubre una frecuente superposición entre la unidad productiva y doméstica, en las cuales los miembros familiares participan en una y otra de diverso modo; se reconoce la gestión masculina en muchas de las unidades productivas familiares, como así también en la toma de decisiones y administración de los recursos, quizás producto del carácter patriarcal de las sociedades



latinoamericanas. Sin embargo en los estudios realizados en el Departamento 25 de Mayo, de la Provincia de San Juan, son varias las mujeres que se presentan como jefas de la producción rural, tomadora de decisiones por sí mismas, trabajadoras por medio tiempo en actividades remuneradas fuera del predio, a cargo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Por otro lado, es dable destacar que las mujeres no dejan de cumplir dentro de la unidad productiva familiar, su función reproductiva, considerada como una de las más importantes, social y culturalmente.

Se ha podido determinar la existencia de ciertas cualidades requeridas por la agricultura, que se suponen tienen solamente las mujeres, como resultado del proceso de socialización que atraviesan. Entre ellas se destacan, según Chiape, Marta B. (2005: 5): “La capacidad de ejecutar tareas repetitivas y rutinarias; la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo (...); la posibilidad de asociar al trabajo sus responsabilidades en la esfera de la reproducción, trayendo a los hijos junto con ellas para la chacra o alejándose de sus residencias por poco tiempo; debido a las responsabilidades que tienen en la esfera doméstica, su disponibilidad para ejecutar (...) trabajos temporarios (...) u ocupando apenas algunos días de la semana o algunas horas durante el día; su mayor habilidad para la ejecución de algunas tareas que requieren prestar atención a los detalles; la permanencia en una posición incómoda (como trabajar agachada) por bastante tiempo; la aceptación de una remuneración relativamente inferior al pago que se le proporciona a los hombres (...); (...) mayor docilidad”

Así como ejemplo, se toma en consideración que para el caso bajo análisis, los trabajos repetitivos como soltar los animales a pastar, darles agua, tener el debido cuidado que regresen al atardecer, recolectar junquillo, preparar los atados para la venta, entre otras son tareas realizadas casi exclusivamente por mujeres ayudada por los hijos más pequeños (en edad escolar). En la división del trabajo familiar las características mencionadas anteriormente, están tan naturalizadas que impiden ser reconocidas y de este modo poder valorizar positivamente el trabajo femenino.

A partir del 2000 se ha tratado de mejorar las pautas internacionales de censado, para dar mayor claridad y precisión al trabajo rural femenino, teniendo en cuenta que son las propias mujeres las que al momento de autodefinirse se califican como trabajadoras del hogar y por tanto no se incluyen como parte de la PEA. (Población Económicamente Activa)



Según Chiape, Marta B. (2005: 29), se puede constatar que alrededor del 40% de las personas que trabajan en actividades agropecuarias, son mujeres, y de las actividades que realizan pueden describirse la productiva, reproductiva y comunitaria, quedando relegada a actividades del tipo tradicional, haciendo uso de habilidades y capacidades adquiridas a través del proceso de socialización, que no requieren de capacitación especializada, generalmente reservada sólo a los hombres, por una cuestión cultural, propia de sus costumbre. Sin embargo, son muchas las mujeres del departamento 25 de Mayo que se han adherido a propuestas de capacitación ofrecidas por programas de política pública y que les ha permitido mejorar los resultados productivos e incorporarse al circuito comercial de una manera más segura y efectiva, sin dejar de lado las actividades reproductivas, de mantenimiento del hogar y comunitarias.

No obstante, la participación creciente de las mujeres en el trabajo asalariado, “no ha permitido cambiar el sentido asimétrico de las relaciones de género, como tampoco ha logrado modificar la división sexual del trabajo, (...) estas trabajadoras siguen siendo responsables de realizar las tareas domésticas, y si no son ellas, son sus madres o sus hijas”, tal cual afirma Chiape, Marta B. (2005: 30).

Las mujeres en la Agricultura Familiar deben enfrentar al igual que los hombres, la precariedad en la tenencia de la tierra, y la utilización del agua en condiciones insuficientes para sus producciones agrícolas y ganaderas, como para su propia vida y la de su familia, esta situación es evidente en el departamento 25 de Mayo.

El INTA, en su documento “Somos la Tierra”, (2015: 16) sintetiza: “Según un estudio realizado por la Secretaria de Agricultura Familiar y la Universidad Nacional sobre la problemática de tierra (...) existen en Argentina más de **nueve millones de hectáreas** que están en conflicto, donde el agricultor familiar es la parte más vulnerable de esta situación, (...) por la carencia (...) de solución definitiva al viejo problema de la regularización de los títulos.” Particularmente, el problema es más grave cuando son las mujeres quienes reclaman por dichos títulos, o piden por agua para el riego y el uso familiar.

Breve descripción del departamento 25 de Mayo

El departamento 25 de Mayo se encuentra ubicado en el sureste de la provincia de San Juan, distanciado a 32 kilómetros aproximadamente, al este de la Ciudad Capital. Su superficie es de 4519 km², con una superficie cultivada de 16.141 ha. Posee como



característica destacada la aridez, las altas temperaturas en verano, y escasas precipitaciones. En la localidad del Encón, se localizan los agricultores familiares objeto de nuestro estudio.

Existen 8.616 ha cultivadas con agua superficial y el resto con agua subterránea, extraída mediante perforaciones particulares. En términos generales la actividad agropecuaria es el principal sustento de la economía departamental, siendo relevante para la mano de obra y para las distintas localidades en las que se desarrollan la actividad mencionada. Encontramos nuestro objeto de estudio, la agricultura familiar, en su máxima expresión particularmente en las zonas más desérticas, donde también se asienta la ganadería, destacándose especialmente la caprina.

Lo indígena

“Definir qué es considerado indígena se fundamenta en la necesidad de traspasar los análisis eurocéntricos, donde los pueblos nativos de América Latina eran concebidos como una población calificada como salvaje, primitiva o atrasada culturalmente; dadas sus diferentes costumbres, lengua, percepciones y creencias sobre el mundo. En este proceso de construcción de una definición (que no acabada aún) de lo que es considerado indígena, se busca -desde diferentes perspectivas sociales, políticas, antropológicas y sociológicas, entre otras- despojar a los pueblos originarios de esa mirada europeizada” (Tomsig: 2008; 29).

“El indígena no es una realidad definitiva sino una condición históricamente determinada y, por ello, es el heredero actual, modificado, del ciervo colonial. Es decir, hubo factores que convirtieron una realidad humana anterior -los nativos prehispánicos- en otra -los siervos coloniales- al dismantelar, destruir, sustituir, la organización socioeconómica de los pueblos originales y obligarlos a formar parte de otra forma de vida y de cultura dominante, la de los vencedores. El indígena del descubrimiento pasó a ser una hechura colonial que se prolonga, modificada, hasta el día de hoy, en las diversas sociedades en América Latina, en tanto aún se mantienen relaciones de explotación y dominación, también modificadas pero herederas perversas de aquella colonial. El Segundo Congreso Indigenista Interamericano (1949) consideró que “indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas, que tiene la misma consciencia social de su condición humana, así considerado por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lenguaje y en su tradición.” (Torres Rivas, 2001: 45).



Para la OIT, en su Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en su artículo 1, y como se adhiere desde el proyecto; sostiene que un pueblo es considerado indígena “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos” (Del Pópulo, López y Acuña, 2009: 41).

En las comunidades bajo estudio, encontramos mujeres que se identifican con ancestros originarios y quienes no forman parte de las comunidades constituidas legalmente pero si se identifican como PO. La mayoría de las mujeres se identifican como parte de las comunidades. Ejemplo de esto:

“Sí me siento identificada porque toda mi vida he vivido acá, mis abuelos han sido fundadores de acá. Pero no me inscribí, no me registré. Yo, no es que me sienta identificada con una, sino con las tres, porque yo soy descendiente de las tres, son Guaquinchay, Agüero, de las tres; yo soy descendiente de las tres comunidades. Yo me siento identificada con las tres y soy descendiente de las tres comunidades, y me siento orgullosa de serlo. Así que esa es una de las causas porque no me inscribí”. (Entrevista 2 - Huarpe)

Las mujeres en las comunidades

La categoría del género interpreta las relaciones entre hombres y mujeres como formulaciones culturales resultantes de la imposición de significados sociales sobre las identidades sexuales y denuncia la situación de inequidad existente entre hombres y mujeres. Al destacar esta desigualdad histórica, el concepto también llama la atención hacia otras importantes diferencias sociales que se traducen en desigualdad de oportunidades, tales como raza y clase, y cuestionan la relación entre estas dimensiones” (Rangel, M: 2004).

Entonces, “fue en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en 1975, donde los estados de la ONU, se comprometieron a realizar todos los esfuerzos para la incorporación plena de la mujer al desarrollo, que pasaba por la eliminación de las discriminaciones por género. Las mujeres indígenas y sus problemáticas prácticamente no existían en ese momento, hasta la realización de la IV Conferencia



Mundial de la Mujer. El programa, decía explícitamente... *'mejorar la condición de todas las mujeres y procurar prestar especial atención a los grupos de mujeres que se encuentran en situación de alto riesgo, como es el caso de las mujeres rurales, indígenas, discapacitadas, refugiadas y desplazadas'*. (Montalva y Velasco: 2005)

Por esto, a lo largo de los primeros años del siglo XXI se comenzaron a acentuar los procesos de conciencia de las comunidades sobre su identidad indígena. Por lo que "habría que agregar un cuarto y último elemento, que empieza ya a definir, cada vez más, la condición indígena, y es el que se refiere a la *creciente toma de conciencia* de los pueblos indígenas sobre su condición y, paralelamente, sobre su organización, la articulación de reivindicaciones y derechos. Las consecuencias de esa creciente presencia y de otras formas de presión colectiva, es el surgimiento de una opinión pública nacional e internacional sensible a la defensa de los derechos indígenas; por darle a los mismos una expresión jurídica, constitucional y regular, así como otras respuestas que suponen todas ellas el reconocimiento de la condición indígena". (Torres Rivas: 2001; 26).

"En estos momentos tenemos 50 familias. Aparte tenemos la personalidad jurídica (por la personería), sí estamos reconocidos a nivel nación estamos reconocidos, así es... Y bueno ahora el 26 de octubre vamos a cumplir 12, 13 años que se ha armado... y que está reconocida 7 u 8 años, seguro. Hay una comisión que la forma presidente, vicepresidente, tesorero y secretario como para... No es que la comisión es la que da órdenes, que opina, que hace. Viene el presidente y dice, como por ejemplo, como pasó con el proyecto de... Le dijeron al presidente, mire hay esta posibilidad, entonces el presidente reúne a todos y se trata este tema, miren está este proyecto que hacemos lo aceptamos, no lo aceptamos, y se decide entre toda la comunidad; y si hay algo malo que a la comunidad no le gusto: cómo trabajo el presidente, el vice, y se les dice esto..."
(Entrevista 1 - Salvador Talquenca)

Como se pudo leer en las entrevista y en acuerdo con Torres Rivas, "los pueblos indígenas, a lo largo de los siglos, han conservado pero también han modificado aspectos de sus culturas como estrategia de adaptación" y de permanencia. Ante esto "se habla de relación de poder por los contenidos de fuerza, oposición y contradicción violenta, por referencia a la forma de articularse de manera subyugada con "los otros", a los que llamamos la "etnia" mestiza (o como pueda llamarse a ese conjunto, también heterogéneo, que forma "lo no indígena"). Obviamente, se trata de una contradicción de múltiples aspectos, no sólo conceptual sino apoyada en numerosos factores históricos.



En estos aspectos ha habido un debate permanente, que se produce en torno al carácter de la sociedad colonial, la república liberal, el Estado democrático actual, sucesivamente, y sus relaciones con la población indígena.” (2001: 22).

Como se mencionó, los procesos actuales de reconocimiento legal de las comunidades originarias de los suelos argentinos, en particular, y de AL en general, han logrado la paulatina (pero inconclusa) visibilización de estos pueblos y especialmente, de los miembros femeninos y el rol que tienen en las comunidades. Con esto, se dio otro fenómeno: el de la autoidentificación y, concomitantemente, la unión legal de las comunidades, a través de personerías jurídicas que buscan o pretenden, al menos, alcanzar el reconocimiento de sus derechos y su lógico (re) conocimiento.

Desde hace más de una década, como resultado de los movimientos sociales que se venían suscitando a lo largo de AL, las comunidades de El Encón iniciaron el reconocimiento legal, que lograron. La participación de las comunidades y de cada uno de sus miembros es un proceso de integración y análisis inacabado. En cada grupo se dan procesos diferentes de participación y de los roles de sus miembros y, en especial, de las mujeres.

Estas organizaciones, como corolario de lo antes dicho y por los mismos movimientos que generan el reconocimiento de las mujeres actualmente, poseen en sus estructuras la presencia de féminas en lugares importantes:

“El presidente es hombre y de ahí los seguimos tres mujeres, la vicepresidente que soy yo, la secretaria es mujer, y la revisora de cuentas es mujer así que el único hombre es el presidente. En el trabajo de la comunidad las mujeres somos las que más intervenimos. (Entrevista 1 - Salvador Talquenca)

De acuerdo a lo que expresan las entrevistadas y en concordancia con los roles de las mujeres han cambiado en los últimos tiempos muchos valores y elementos de la cultura tradicional, hoy han sido desplazados por la asistencia a la escuela, el constante y experimentado vínculo con las ciudades, la castellanización etc. Resulta interesante entrecruzar las variables de género y etnicidad, porque permite visualizar entre otros los siguientes aspectos:

- Cambios en las relaciones entre hombres y mujeres indígenas: derivados tanto de la dinámica propia de toda cultura como de la promoción de los derechos humanos; un relativo aumento en el acceso a la educación, la participación



social y política, al trabajo remunerado y a los recursos por parte de las mujeres.

- Transformaciones en las relaciones interétnicas; incremento de los matrimonios interétnicos, más intercambios en espacios laborales, académicos, culturales y políticos entre personas de diferente origen étnico. Desarrollo de las mujeres indígenas en los ámbitos políticos, local y nacional: como resultado de procesos de formación, organización y acción política, que sin duda han ayudado a elevar su autoestima, tomar conciencia de su identidad y de sus derechos. (...)

Conclusiones/ reflexiones

Para concluir, puede decirse que se hace indispensable continuar con el camino recientemente iniciado referido a los estudios científico de la participación femenina en la Agricultura Familiar, ya que por mucho tiempo la mujer no ha sido tomada en cuenta dentro de la estructura productiva rural, siendo un factor de desarrollo indispensable y plenamente activo y por tanto un aporte invaluable.

Puede decirse que, las mujeres que participan de la Agricultura Familiar, forman un grupo invisibilizado, negado y difuso, sin embargo en muchos casos el papel protagónico de la mujer es ineludible, a cargo además de otras actividades que por costumbre y tradición son propias del elemento femenino como el trabajo doméstico, el cuidado de los miembros de la familia, entre otros.

En los últimos tiempos, y en base a escasos estudios realizados en Latinoamérica respecto al trabajo de la mujer en la Agricultura Familiar, señalarían un aumento de su participación como jefas de producciones agrícolas de tipo familiar. Hoy, el nuevo paradigma vigente referido a los estudios de la mujer y cuestiones de género, dentro de las Ciencias Sociales, ha permitido explicar de algún modo las desigualdades entre hombres y mujeres, destacando el carácter multiactivo, proactivo y protagónico de la tarea invisibilizada de éstas últimas, aún en algunos casos, por ellas mismas, producto quizás de su socialización y del lento despertar hacia “darse cuenta” de la significativa importancia que su aporte tiene en los procesos productivos rurales, en el mantenimiento de su familia y en las tareas propias del hogar.

Estas nuevas perspectivas en cuanto a los estudios sobre la situación laboral de las mujeres dentro de contextos socio-culturales e históricos concretos, permiten dejar de lado la identificación de lo humano como masculino exclusivamente.



Los movimientos en defensa de la mujer, iniciados en los años '70 y que continúan con más fuerza hasta hoy, han impulsado el interés por el trabajo femenino, sobre todo en el sector rural, tanto por el asalariado como por el no asalariado.

Coincidente con los estudios latinoamericanos respecto a la temática de la presente ponencia, en San Juan, Departamento 25 de Mayo, se observa un aumento de las mujeres jefas de producciones agrícolas de tipo familiar, con las características antes mencionadas, es decir son trabajadoras multiactivas, colaborativas, en algunos casos aportan recursos para el mantenimiento de la familia no sólo en las tareas no remunerativas dentro del predio, sino remunerativas fuera de ellos.

La importancia del trabajo de las mujeres en la Agricultura Familiar también se observa en la producción de alimentos, generación de bienestar, conservación y resguardo del ambiente, producto de algunas prácticas ancestrales, transmitidas de generación en generación, en armonía con la naturaleza y el entorno en el que se desarrollan.

Es ineludible reconocer la trascendente participación del trabajo femenino en la Agricultura Familiar, sin embargo las políticas públicas no han terminado de valorar, y si bien a través de ellas se han ofrecido programas productivos y capacitaciones en diferentes rubros, no hay continuidad y permanencia de los mismos, particularmente a causa de los cambios gubernamentales y su consecuente cambio en las decisiones políticas referidas a la Agricultura Familiar. Sin embargo, son muchas las mujeres del departamento 25 de Mayo que se han adherido a propuestas de capacitación ofrecidas por programas de política pública y que les han permitido mejorar los resultados productivos e incorporarse al circuito comercial de una manera más segura y efectiva.

Se observa conforme a las obras tomadas como referencia y a lo observado en campo, una tendencia a la feminización del campo, cuyo origen es multicausal.

En las investigaciones realizadas para contribuir a la visibilización del trabajo femenino, especialmente en el sector rural, se descubre una frecuente superposición entre la unidad productiva y doméstica, en las cuales los miembros familiares participan en una y otra de diverso modo, sin embargo en los estudios realizados en el Departamento 25 de Mayo, de la Provincia de San Juan, son varias las mujeres que se presentan como jefas de la producción rural, tomadora de decisiones, con actividades específicas en el predio y trabajadoras por medio tiempo en actividades remuneradas fuera del establecimiento productivo, a cargo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos,



sin dejar de cumplir con su función reproductiva, considerada patriarcalmente como la más importante.

Se ha podido identificar ciertas cualidades necesarias para la agricultura, que se suponen tienen solamente las mujeres, producto de su socialización, entre ellas la realización de tareas rutinarias y repetitivas; la realización de varias actividades al mismo tiempo; asociar a su trabajo predial las responsabilidades familiares, acompañadas por sus hijos, entre otras.

La actuación de la mujer en el trabajo rural descrita anteriormente, está tan naturalizada y arraigada a su vida cotidiana que dificulta su reconocimiento aún por parte de las mismas mujeres. Por tal motivo, alrededor del año 2000 se ha intentado mejorar pautas internacionales de censado, para obtener mayor precisión respecto del trabajo de la mujer en el ámbito rural, teniendo en cuenta que aproximadamente el 40 % de personas que trabajan en actividades referidas a lo rural, son mujeres.

Tanto mujeres como hombres en la Agricultura Familiar, deben enfrentar varias cuestiones que deberán ser resueltas a la brevedad, entre ellas la precariedad en la tenencia de la tierra, y la utilización del agua en condiciones suficientes y aptas para sus producciones agrícolas y ganaderas, como para el consumo familiar. En esta problemática se evidencia mayor vulnerabilidad y desprotección cuando el reclamo proviene de la/s mujer/es.

Las poblaciones indígenas de América Latina y en particular las comunidades sanjuaninas han logrado sobrevivir y adaptarse y, con ello, “el contradictorio reconocimiento del cambio / permanencia de rasgos culturales en su sentido genérico, antropológico, que identifican y diferencian al mismo tiempo a sus portadores...” (Torres Rivas, en Tomsig: 2008; 30).

A nivel regional, y considerando las particularidades con las cuales se desarrolló la historia para cada país de América Latina, los pueblos originarios han tenido en común varios rasgos identitarios, de los cuales se pueden señalar tres características que constituyen el punto de partida de la comprensión de la condición indígena. Tales características, según Torres Rivas (2001; 26), son:



En **primer** lugar, los indígenas son, en su mayoría, campesinos, dependiendo de manera diversa de la tierra, lo cual señala ya una manera de vivir, de reproducirse y de establecer las relaciones con la sociedad global.

“... en el tema de cabritos, cada uno tiene su puesto...Cada familia tiene individual, en la comunidad sí tenemos un apiario, que lo manejamos un grupo de personas y un vivero”. (Entrevista 1 - Salvador Talquenca)

La actividad agrícola es prácticamente imposible en las condiciones de aridez de la zona. Sólo abundan los montes naturales para el pastoreo de las cabras. Pero ésta no es la única actividad, ya que muchos hacen uso del cuero de las cabras, su leche así como el corte del junquillo para realizar manualidades variadas y comercializarla para su uso en escobas.

En **segundo** lugar, entre la población indígena aparecen los más bajos puntajes en todos los indicadores tradicionales que miden el bienestar social; en otras palabras, la pobreza es el rasgo dominante de toda la población indígena, pobreza extremadamente aguda y generalizada. Existe, en el interior de los pueblos indígenas, una activa diferenciación social, razón por la cual hay una minoría que se reconoce indígena.

En **tercer** lugar, el conjunto de la población indígena es objeto de permanentes y variadas formas de discriminación social y racial, de rechazo o desconocimiento de su condición humana, con toda la carga de consecuencias políticas, sociales y culturales que acompañan tales manifestaciones. Esta verdad puede relativizarse en sociedades donde el contacto cultural adquiere características marginales. Por ejemplo, algunos grupos tribales no son objeto de discriminación sino de olvido.

“Desde el barrio hasta acá y 5000 metros más o menos, donde está el control policial y otro par de casas hay agua, pero de ahí 5000 metros más allá donde estamos nosotros y está la sede, ya no llega”. (Entrev.1 - Talquenca)

Lo antes dicho se refleja en la localidad donde residen las comunidades bajo estudio, ya que se caracteriza por las escasas (casi nulas) condiciones de habitabilidad: la aridez del desierto, la falta de agua, de luz y de accesos a los servicios de educación y salud. En este contexto adverso permanecen las comunidades y se desarrollan, lidiando con él.

Tales rasgos identitarios condicionan la permanencia de las comunidades en sus tierras de origen pero no determinan su permanencia, ya que pese a los avatares del tiempo, de la desidia y de la ausencia de políticas directas y contundentes hacia los habitantes



originarios, viven, trabajan y se desarrollan en estos espacios. Estas políticas que en los últimos años han dejado de ser prioridad para el actual gobierno.

Bibliografía

Chiappe, M. (2005) "La situación de las mujeres rurales en la Agricultura Familiar de cinco países de América Latina", Montevideo, Uruguay:Edit.: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promocon. Montevideo, Uruguay.

Del Popolo; López, M. & Acuña, M. (2009). Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: inequidades sociodemográficas y desafíos de políticas. Madrid, España: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Organización Iberoamericana de Juventud.

Gamboa, S (2008) "Perspectiva de Género: ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género?, Mujeres en Red, El Periódico Feminista", artículo publicado en el "Diccionario de Estudios de Género y Feminismos" de la Editorial Biblos.

Namdar-Irani, M., Parada, S., & Rodríguez, K. (2014). Las mujeres en la agricultura familiar. Salcedo, S. y L. Guzmán, Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Santiago, Chile: FAO.

Montalva, M. C., & Velasco, L. F. (2005). Mujeres indígenas en América Latina: ¿brechas de género o de etnia?.Santiago de Chile: CEPAL Texto presentado en el Seminario Internacional Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas. •Santiago de Chile, CEPAL, abril, 27-29.

Rangel, M. (2004). "Género, etnicidad, pobreza y mercado de trabajo en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú". Valenzuela, María Elena y Marta Rangel, Desigualdades entrecruzadas. Pobreza, género, etnia y raza en América Latina, Santiago: OIT.

Somos la Tierra (2015) "Historia y Relatos de la Agricultura Familiar en Argentina", Argentina: INTA Ediciones.

Tomsig, G. (2018): "Los jóvenes huarpe sawa de las Lagunas de Huanacache: su situación social y económica actual y las estrategias de inserción y mantenimiento en el mercado de trabajo". España: Editorial Académica Española, ISBN 9786202251341.

Torres Rivas, E. (1996). "Consideraciones sobre la condición indígena en América Latina y los derechos humanos". San José: Institut interaméricain des droits de l'homme.



Capitalismo, agro y explotaciones familiares. El caso de Entre Ríos

Germán Andrés Orsini

Resumen

La pregunta que guía el presente trabajo es ¿cómo abordar la cuestión de la agricultura familiar en el agro moderno? Para esto nos planteamos como objetivo construir una categoría analítica de Familias Productoras Agropecuarias basada en los factores de producción y contrastar la factibilidad de esta categoría como herramienta metodológica válida. Durante el período analizado (1988-2008) no resulta sencillo identificar y mensurar a las formas de producción predominantes debido a la heterogeneidad que adquiere la estructura agraria en un nuevo contexto capitalista expansivo, dinámico y cambiante. En tal sentido seleccionamos a Entre Ríos por ser la provincia de la región Pampeana Argentina que presenta una mayor variedad de perfiles productivos y poseer una mayor proporción de explotaciones de tipo familiar. Como resultado encontramos que subsistir en el nuevo escenario, implica en las Familias Productoras cambios que modifican sustancialmente su perfil. Estos cambios adaptativos que sufrieron las familias productoras desafían las categorizaciones con que intentamos aprehender a esta forma social de producción. Una cuestión que atraviesa todo este trabajo es ¿Hasta cuándo podemos hablar de Familias productoras? ¿Hasta dónde podemos tensionar dicha categoría y cuando debemos comenzar a referirnos a estas de otra forma? Creemos que el nuevo modelo de desarrollo agrario pone en cuestión no sólo la persistencia de las familias productoras, sino también sus rasgos constitutivos. Paradójicamente, la capacidad de adaptación que les permite a las familias productoras persistir frente a las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales pone en jaque su continuidad como forma social de producción.

Palabras Clave

Explotaciones Familiares, Capitalismo, Entre Ríos.

Introducción

En los últimos años, el aumento del precio internacional de la soja y de los granos en general (maíz, trigo, etc.) ha producido un importante aumento de la renta diferencial del suelo en el sector agropecuario argentino, marcadamente al menos hasta el año 2008. Éste incremento en los precios internacionales de las *commodities* fueron impulsados entre otros factores por la demanda creciente de alimentos en los países asiáticos (principalmente China e India), el empleo de materias primas agrícolas para la



fabricación de biocombustibles y en gran proporción por la especulación en derivados financieros del sector agropecuario.

Esta situación, sumado a políticas públicas neoliberales en conjunto con los desarrollos científicos y tecnológicos vinculados a la agricultura, han afectado a la estructura social agraria y los sujetos que la componen, marcando de este modo una nueva etapa expansiva del capitalismo en el agro argentino.

La provincia de Entre Ríos, en la década del 90, no fue ajena a esta situación. En este sentido, durante los años mencionados y con posterioridad a la crisis de la convertibilidad y devaluación del tipo de cambio, se produjo en la provincia un notable y sostenido avance de la frontera agrícola, en base al uso del paquete tecnológico integral, que desplazó a la ganadería vacuna a tierras marginales, generando el desmonte de especies nativas y que marcó una tendencia sostenida de especialización ganarera sin la adecuada rotación en el uso del suelo y la consecuente degradación. (Domínguez & Orsini, 2009)

Para comenzar nuestra indagación debemos establecer que características definen a una explotación familiar diferenciándolas de otras formas sociales de producción presentes en la estructura agraria. Para eso fue preciso construir una categoría analítica de Familias Productoras Agropecuarias basada en los factores de producción (tierra, capital y trabajo).

Luego de repasar la bibliografía especializada observamos que son escasos los estudios sociales sobre la agricultura familiar en Entre Ríos, lo que contrasta con la relevancia que en los últimos tiempos la temática está teniendo en el plano de las acciones institucionales y de las políticas dirigidas a este sector, así como en la visibilidad que le han otorgado los medios de comunicación locales a la problemática, haciendo eco de reclamos de larga data de asociaciones intermedias (FAA Entre Ríos¹, Copaer², FARER³). Muchas de estas familias fueron protagonistas, junto a otros actores, de los conflictos del año 2008 derivados de las retenciones a las exportaciones al agro. Nuestra decisión de centrar la investigación en Entre Ríos se fundamenta, a su vez, en que se trata de la provincia de la región Pampeana con mayor proporción de explotaciones de tipo familiar (Pardías, 2013). Un 73% de las explotaciones agropecuarias de Entre Ríos corresponden a pequeños productores que ocupan un 23% de la superficie provincial, con una media de 94 hectáreas por establecimiento (Obschatko, Foti & Roman, 2007).



El recorte temporal que elegimos, busca dar cuenta del proceso de expansión agrícola en la región, tanto en superficie como en volúmenes cosechados en un contexto de retracción de la intervención estatal. Esta elección esta a su vez determinada por la disponibilidad de fuentes estadísticas que establecimos como límites temporales de esta investigación. Las fuentes secundarias de carácter estadístico que utilizamos para este trabajo surgen de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2008. Con el CNA de 1988 hubo que remitirse exclusivamente a la información éditada, ya que los datos no se encuentran digitalizados. Es necesario aclarar, a su vez, que el CNA 2008 se realizó en un contexto de fuerte conflicto agropecuario, lo que resintió el operativo censal. Este aspecto es sumamente importante, ya que resta validez a los datos, aunque permite aproximaciones interesantes. A fin de recuperar más información y poder efectuar el cruce de las dimensiones analizadas usamos las bases de datos de los CNA 2002 y 2008. Las bases de datos mencionadas *up supra* fueron procesadas utilizando el software estadístico SPSS⁴. En términos metodológicos se realizó un trabajo explicativo mediante la construcción de una matriz de datos⁵, la misma discriminó a las unidades productivas según la ubicación, su tamaño, la tenencia del suelo, la orientación productiva, el tipo de mano de obra, la forma de organización de las labores agrarias y la residencia de la familia en la explotación o no. A partir de este procesamiento abordamos esta matriz según el análisis de tablas bivariadas y multivariadas.

En el presente trabajo buscamos establecer si el cambio en el sub-régimen de acumulación del agro argentino en esta nueva etapa expansiva del capitalismo, modificó en particular el modo de producción social de los actores más frágiles de la estructura agraria entrerriana: las familias productoras (en adelante FP Agropecuarias)⁶

Consideraciones teóricas

Las primeras interpretaciones acerca de la figura del “agricultor familiar” se originan en la discusión europea de fines de siglo XIX y principios del XX centradas en el análisis de la expansión del capitalismo agrario y la consecuente desaparición o persistencia del “campesino” y su familia.

Gran parte de la teoría social, sobre todo desde el marxismo, esperaban que la producción familiar desapareciera a medida que el capitalismo fuese desarrollándose en el agro. Pero ya para fines del siglo XIX resultaba evidente que el capitalismo aún no había transformado las formas de producción agrarias de modo que predominase el



trabajo asalariado y las grandes unidades, como sí ya ocurría en amplias ramas de la industria.

El modelo de Marx de un agro típicamente capitalista tenía un carácter ideal no sólo por ubicarse en el país modelo del capitalismo desarrollado⁷, sino también porque cada sujeto social se identificaba con un recurso y un ingreso puros: el terrateniente recibía renta, el capitalista agrario, ganancia, y los asalariados rurales, un salario.

Las versiones de Lenin y Kautsky - autores que intentaron llenar el vacío teórico existente en la teoría marxista sobre el tema- y la polémica con Chayanov contienen en lo esencial los elementos básicos del llamado debate clásico sobre la especificidad de la acumulación de capital en el agro y el tipo de sujetos sociales allí imperantes (Caligaris & Miri, 2007). A continuación, haremos una breve reseña de los argumentos en juego.

Lenin (1976), preocupado por la inserción del agro en el capitalismo, señala que el agro está sujeto a las contradicciones propias de toda economía mercantil: la competencia, la lucha por la independencia económica, la expansión de la superficie trabajada a través de la compra o el arriendo, la concentración de la producción y, fundamentalmente, la proletarianización de amplios sectores del campesinado. Estas contradicciones impulsan el proceso de diferenciación social, cuya expresión es la "descampesinización"⁸, generando nuevos tipos de población en el campo insertos en la economía mercantil y la producción capitalista. El proceso de diferenciación merma los sectores de campesinos medios creando dos nuevos tipos de población rural: la burguesía rural, compuesta por propietarios independientes y dueños de empresas industriales y comerciales, y el proletariado rural (braceros, jornaleros, y peones) compuesto, mayoritariamente, por campesinos empobrecidos. Los sectores de campesinos medios estarían en una situación inestable ya que muchas veces ven amenazado su sostenimiento y, por ello, pueden contraer deudas o precisan buscar empleos complementarios. De este modo, Lenin concluye que el resultado de las transformaciones capitalistas es la constante expulsión de los sectores medios y el crecimiento de los extremos.

Lenin utiliza dos ejemplos históricos para explicitar las diferentes formas, alternativas al modelo inglés, en que el capitalismo se desenvuelve en el medio agrario. Por un lado, conceptualizó el desarrollo prusiano como "vía junker" o capitalismo desde arriba (Lenin, 1976), en el que los terratenientes de origen feudal asumían también el papel de capitalistas, conceptualización que será también analizada por Kautsky. Y por otro lado



analiza la vía farmer, o desarrollo capitalista desde abajo, típico del caso norteamericano (Lenin, 1960). En la vía farmer, la producción estaba a cargo de productores propietarios de tierra y de los medios de producción que basaban “el trabajo” en mano de obra familiar, pero que, a diferencia de los campesinos, tenían capacidad de acumulación. La vía farmer encuentra su explicación en las condiciones específicas de desarrollo del capitalismo en áreas donde la tierra no había sido apropiada anteriormente (caso E.E.U.U. y Argentino⁹). La dinámica capitalista intervendría luego diferenciando internamente a los farmers: algunos se transformarían en capitalistas y otros en asalariados. A pesar de que el análisis de Lenin lograba una aguda complejización de los trabajos de Marx sobre la producción agraria, la subsistencia de producciones no basadas en la acumulación normal de capital en estructuras agrarias contemporáneas a Lenin puso rápidamente de manifiesto las insuficiencias de su análisis (Caligaris & Miri, 2007).

La tesis leninista, que reafirma la tendencia general a la desaparición del campesinado, no se pregunta qué determina la subsistencia de producciones no basadas en la acumulación normal de capital. Sobre este punto avanzaba, contemporáneo a Lenin, el trabajo de Karl Kautsky “La cuestión agraria” (1983), llevado adelante con el objetivo de elaborar el programa político de la socialdemocracia alemana respecto al campesinado. Kautsky describe, a partir del caso prusiano, el desarrollo capitalista desde arriba, en el cual el terrateniente es también el capitalista. Este desarrollo transforma la economía campesina comunal que deviene en la conformación de los agricultores especializados en la producción de mercancías. Entiende que la penetración del capitalismo en el agro demuestra la superioridad técnica de la gran explotación¹⁰ y genera por ello la expulsión de los pequeños productores impulsando la proletarización y migración hacia las ciudades. No obstante, Kautsky encuentra que la existencia de una tendencia favorable al desarrollo de la gran propiedad en el modo de producción capitalista, no significa necesariamente la desaparición de la pequeña propiedad agrícola. Esto ocurre, por una parte, porque existen un conjunto de limitaciones a la introducción del capital en el agro, entre las cuales se destaca la que impone la base territorial, a través de la cual, a diferencia de lo que ocurre en la industria, la concentración del capital agrario necesita de la previa desaparición de las pequeñas propiedades, hecho que se hace más difícil allí donde los pequeños productores son al mismo tiempo propietarios. A ello se agrega que la pequeña producción tiene una serie de ventajas frente a la grande asociadas a la mayor explotación del trabajo¹¹. Punto sobre el que también se explayaría Chayanov.



Kautsky admite la posibilidad de que la pequeña y la gran propiedad convivan, pero no en términos de competencia, sino, en una suerte de “división de trabajo” entre las diferentes explotaciones agrícolas: las grandes, venden sus productos excedentes a las pequeñas, y estas últimas, a su vez, les venden el suyo, la fuerza de trabajo¹².

Por su originalidad y el alcance de su recepción, el trabajo del economista agrario Alexander Chayanov fue el más destacado en polemizar con los clásicos marxistas. En su obra “La organización de la unidad económica campesina”, el autor ruso analiza la actividad agrícola familiar con la intención de dar cuenta de su especificidad respecto de la empresa capitalista. Según Chayanov, en el análisis de las explotaciones de tipo familiar no caben las categorías y/o lógica “ganancia, renta y salario”, propias de la economía capitalista, por regir en ellas un tipo de racionalidad especial¹³. Ocurre que las motivaciones campesinas no se encuentran ligadas a la maximización de beneficios -como en cualquier explotación en donde existan las relaciones capitalistas de producción- sino relacionadas con la maximización del ingreso familiar, a partir del cual poder satisfacer las necesidades propias¹⁴ (Caligaris & Miri, 2007). Para Chayanov (1974), la posibilidad de persistencia de los sectores campesinos descansa sobre una racionalidad económica específica de estas unidades, basada en el equilibrio entre necesidades de consumo y el grado de autoexplotación de la fuerza de trabajo familiar para satisfacerlas.

El redescubrimiento de Kautsky por la sociología rural anglófona (su obra fue traducida al inglés recién en los años setenta), junto con la lectura de Chayanov y una menos explícita pero evidente presencia de las mencionadas obras de Lenin, dieron pie (en los años setenta y ochenta) a interesantes elaboraciones acerca del desarrollo agrario.

Recuperando a Chayanov, Galeski (1977) pone énfasis en el carácter familiar de la agricultura campesina y en las circunstancias por las cuales los miembros del hogar producen los alimentos que ellos mismos necesitan para consumir. Esto, sin embargo, no implica necesariamente que la unidad de producción coincida con la de consumo sino, más bien, que el punto de partida debe ser entender a la familia campesina como una familia que toma sus propias decisiones de producción tanto para el consumo familiar como para la producción para el mercado.

Ya entrando en el ámbito del trabajo, Galeski aporta la noción de familia como *workteam*, es decir, como un grupo internamente diferenciado y jerarquizado en el trabajo y enfatiza una dimensión fundamental: la subordinación del individuo frente al todo representado



por la familia. Por otro lado, le adjudica a la familia tanto funciones económicas como culturales ya que además de asegurar la subsistencia económica de los miembros, "la familia suministra el sustento moral y emocional de sus miembros" (Galeski, 1977, p. 108) Para Galeski (1977) no es suficiente sostener que el rasgo distintivo de la unidad de producción campesina es el empleo de trabajo familiar, ya que ello constituye una característica general de la producción en pequeña escala. Considera que la especificidad del modo de explotación campesina radica en "la fusión o (más exactamente) la identificación de la empresa (de la unidad de producción de mercancías) con la economía doméstica del hogar familiar".

La fusión implica que la familia es productora tanto de valores de uso -que son consumidos por la unidad doméstica-, como de valores de cambio. Estos productos pueden ser tratados según el destino que le otorgue la unidad familiar. Ello implica una decisión que se toma a posteriori del proceso productivo, y se realiza en función de una racionalidad de ganancia y de las necesidades de la familia. Las motivaciones y valoraciones que realizan los campesinos pueden ser de un tipo y/o de otro por la fusión-identificación constitutiva. Por tanto, en el seno de la explotación, van a estar coexistiendo dos principios diferentes y a veces contradictorios de funcionamiento, esto es, uno en base a una racionalidad capitalista y otro en base a una racionalidad "doméstica", es decir mercantil simple.

La "doble naturaleza" contradictoria distintiva de la explotación campesina también la encontramos en los trabajos de otro autor de origen polaco: Jerzy Tepicht. Tenaz defensor del cooperativismo en sus inicios, Tepicht, después de observar las desastrosas consecuencias del intento de introducir este sistema forzosamente desde arriba, cambió de opinión y consagra sus esfuerzos al estudio de la economía campesina y el lugar que la misma ocupa dentro de la economía nacional polaca combinando el enfoque marxista con el de Chayanov.

Tepicht (1984), para analizar los cambios al interior de la economía campesina, apunta al hecho de que la familia se encuentra en el interior de una cápsula con dos caras: el colectivismo interno y el fuerte "individualismo externo". Este encapsulamiento lo atribuye a la expansión de la economía de mercado que restringe cada vez más el patrimonio familiar en cuyo proceso se acentúa la subordinación de sus miembros a los intereses de la empresa familiar (en el plano de la economía, el prestigio, etc.). Tepicht interpreta como un indicador del declive de la economía campesina la desintegración de



aquél colectivismo interno, producto de los conflictos entre la generación de los menores de 30 años y sus padres que, dada la crisis interna de la familia, pueden verse sin herederos. Al igual que Galeski, Tepicht encuentra en la familia y en la explotación familiar la base de la comunidad o aldea con sus tradiciones y su función de control sobre el comportamiento de individuos y del propio grupo.

Una importante controversia surgió a partir de la tesis propuesta por Mann y Dickinson (1978) quienes, desde una perspectiva marxista, explican que la persistencia de las unidades familiares en el capitalismo no se debe ni a la capacidad de autoexplotación del trabajo familiar (Chayanov) ni tampoco a la aplicación de la tecnología per se (Kautsky), sino que “esta anomalía se explica por la lógica y por la naturaleza del propio capitalismo” (Mann y Dickinson, 1978, en Boltvinik, 2012). Ellos explican que en la agricultura no existe una identidad entre tiempo de producción y tiempo de trabajo debido a que en cada proceso de producción hay un período productivo sin utilización del trabajo humano. Esta dificultad de establecer límites entre el tiempo de trabajo y el de producción es lo que limita la apropiación del valor-trabajo, que solamente es generada cuando el trabajo vivo “entra en actividad” ya que la obtención del lucro está trabada por los tiempos de la naturaleza. Además, por otro lado, existe la dificultad de la transformación de lo producido en “mercancía” una vez que entra al circuito comercial.

Mann y Dickinson entienden que estas características de la actividad agrícola la tornan un emprendimiento de alto riesgo para el capital y, por estas razones, persisten las unidades familiares. “La persistencia de las formas familiares y “no capitalistas” de producción en la agricultura no se explican por su dependencia a formas más complejas de explotación sino por lo incapacidad del propio capitalismo para superar los límites naturales de la producción agrícola” (Mann, 1990, en Boltvinik, 2012).

Otro modelo de análisis de las unidades familiares con gran reconocimiento es el de los autores ingleses Errington y Gasson (1994), quienes entienden que para comprender la producción moderna se torna cada vez más indispensable entender los mecanismos comerciales y administrativos de las propiedades de cara a los complejos agroindustriales. Ellos encuentran central la combinación de propiedad comercial, control administrativo y fuerza de trabajo familiar para caracterizar este tipo de unidades. “El concepto de unidad familiar mercantil es mucho más amplio que el de unidad familiar de trabajo ya que, en esta nueva definición, la familia pasa a ser vista como una importante fuente de capital y de capacidad administrativa, así como es de trabajo”



(Errington y Gasson, 1994, en Neiman, 2008). De esta forma, no se presenta como crucial la ausencia de trabajo asalariado para definir a la unidad familiar sino el hecho de que buena parte de las relaciones de trabajo son también relaciones familiares. Así, la recurrencia al trabajo asalariado y otros fenómenos, como la pluriactividad, empiezan a depender de los ciclos familiares y lo definitorio de este tipo de unidades pasa a ser su comportamiento frente a distintas situaciones cotidianas, así como las decisiones tomadas en estrategias de largo plazo, que son diferentes a las de las explotaciones no familiares, ya que su objetivo primordial es siempre la reproducción de la familia.

Otra obra de gran impacto ha sido la de Harriet Friedmann, quien, a partir de un estudio histórico de la agricultura de las praderas norteamericanas en la primer etapa expansiva (Friedmann, 1978, en Balsa, 2009), elaboró una serie de conceptualizaciones teóricas muy fructíferas para pensar la relación entre la producción mercantil simple¹⁵ y el capitalismo en la agricultura. Friedmann se distancia de Kautsky y define que, a diferencia de la forma de producción capitalista donde hay un patrón y un asalariado, en la producción mercantil simple no se dan relaciones sociales de clase, pues el trabajo se organiza, más que por relaciones salariales, por vínculos de parentesco. La autora señala a la combinación de la propiedad con el trabajo familiar en la explotación como su característica principal y que tiene amplias consecuencias en su reproducción. Entre ellas, que en estas unidades el consumo personal o familiar y el productivo no son divididos y que los costos son menores y más flexibles. Por ello, no hay en estas pequeñas unidades orientadas al mercado una base estructural para la división del producto o del ingreso, o incluso necesidad de una plus-producción. Así, en contraste a las formas típicamente capitalistas, aquí no hay diferencia entre quienes trabajan en la unidad y los propietarios de los medios de producción, como tampoco – desprendiéndose de lo antedicho– hay una distinción tajante entre el presupuesto de consumo reproductivo y la reinversión productiva. Esto, sumado a que las explotaciones familiares incrementan la productividad del trabajo, según la autora, aporta ventajas a la producción mercantil simple frente a las netamente capitalistas.

En Latinoamérica se destaca la obra de un brasileño quien, tomando distancia de la perspectiva leninista, caracteriza al desarrollo agrario de los países centrales destacando la supervivencia de las unidades familiares (Abramovay, 1998). En “Paradigmas del Capitalismo Agrario en Cuestión”, Abramovay propone una ruptura con el paradigma leninista/kaustkiano y presenta una lectura en la que el desarrollo de la agricultura en los países capitalistas ricos alcanzó fases determinadas, donde la



agricultura de base familiar tuvo expresa participación y se consolidó y “el peso del trabajo asalariado en la agricultura es minoritario, y a veces irrisorio” (p. 255).

Abramovay afirma que la permanencia o el fin del campesinado es una cuestión coyuntural, porque depende de un cambio en la coyuntura socioeconómica determinada por el desarrollo del capitalismo. Según el autor, en una determinada fase, el capital crea relaciones mercantiles que aniquila un modo de vida que no se adecuaría al capitalismo. Entretanto, ocurre una metamorfosis y este modo de vida se vuelve una profesión. Luego, se entiende que el campesino por no ser un agricultor profesional, es asfixiado por el desarrollo y entonces, para sobrevivir, necesita convertirse en agricultor familiar. La integración plena al mercado define el proceso en que el campesino se adentra al mundo moderno del capital. De forma diferente al paradigma marxista en que el campesino es un sujeto subalterno que resiste al capital, Abramovay sugiere que el campesino es un objeto en su plenitud, a punto de sufrir una metamorfosis para adecuarse a la nueva realidad en formación. La adecuación, por medio de la conversión, del campesinado al capitalismo es condición para su existencia.

Metodología

La perspectiva metodológica es fundamentalmente exploratoria y cuantitativa, y pone la mirada sobre las transformaciones estructurales. El recorte temporal elegido comprende el período 1988-2008 y busca dar cuenta del proceso de expansión agrícola en la región, tanto en superficie como en volúmenes cosechados en un contexto de sustancial retracción de la intervención estatal. Esta elección está a su vez determinada por la existencia de fuentes estadísticas (Censos Agropecuarios 1988, 2002 y 2008) que se establecen como límites temporales de esta investigación. Podemos afirmar que este estudio aporta elementos que, a partir del caso entrerriano, ayudan a comprender por qué la familia productora agropecuaria sigue teniendo un peso preponderante dentro de la estructura social agropecuaria y constituye un actor clave, pese a los fuertes embates del capitalismo sobre el sector. Buscamos contribuir de esta manera al debate en torno a los cambios y continuidades que ha experimentado la producción familiar en el marco de los procesos de transformación agraria. Para identificar las familias productoras en el universo de productores agropecuarios de la provincia, entonces definimos los siguientes criterios discriminatorios tomando sólo tres variables claves (ver tabla 1).



Variables discriminantes	Familia productora agropecuaria	Otras formas sociales de producción
Tipo jurídico	Persona física, sociedad de hecho, sociedad accidental y SRL	Todos los otros
Tipo de trabajo	Trabajo familiar es mayor que el trabajo asalariado	No familiar
Gestión de la propiedad	Directa	Indirecta

Tabla 1. Criterios para identificar las familias productoras del total de productores.
Fuente: Elaboración propia

Resultados

Como se advierte en el Cuadro 2 las FP Agropecuarias son numéricamente mayoría dentro de la estructura agraria entrerriano, representando alrededor del 59% de las explotaciones según datos de los últimos dos CNA, dato similar al que publican otras investigaciones realizadas sobre el tema en Entre Ríos.

Forma social de producción	EAP	2002 % sobre el total de EAP	EAP	2008 % sobre el total de EAP
Familias productoras agropecuarias (FPA)	16.644	77%	10.740	59%
EAP no familiares	4.933	23%	7.541	41%
Total EAP	21.577	100,0%	18.281	100,0%

Tabla 2. Formas sociales de producción. Entre Ríos. 2002-2008.
Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNA 02 y 08

Como vemos en la última tabla las FPA en seis años dejaron de ocupar 883 mil ha, las FPA ocupan menos superficie que las explotaciones capitalistas y esto es un dato que no sorprende y se condice con fundamentos teóricos. Aun cuando la tendencia es hacia una gradual pero marcada disminución numérica, las FPA continúan representando una importante proporción del total de sujetos agrarios, siendo “un factor decisivo en el mantenimiento de formas de vida rural modernizada, pero con presencia local” (Barsky y Gelman, 2008, p. 102). Como antes mencionamos hay una fuerte concentración en la tenencia y uso del suelo. Como se aprecia y de validarse en el próximo CNA (2018), se produce una transformación de EAP familiares a capitalistas (480.000 ha) y desaparecen unas 400.500 ha. Como ya hemos mencionado esto



muestra claramente que los nuevos desafíos económicos y tecnológicos exigen ampliar la escala productiva, pareciera que solo algunos logran esta metamorfosis.

Forma social de producción	2002		2008	
	Superficie total en hectáreas	% sobre el total de superficie	Superficie total en hectáreas	% sobre el total de superficie
Familia productoras agropecuarias	2.249.730	35.4%	1.366.588	23%
EAP no familiares	4.101.783	64.6%	4.584.396	77%
Total EAP	6.351.513	100,0%	5.950.984	100,0%

Tabla 3. Formas sociales de producción. Superficie total ocupada. Entre Ríos. 2002-2008. Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNA 02 y 08

Conclusiones

Si bien parece ser un set muy acotado de indicadores, su implementación arrojó los resultados esperados, las Familias productoras agropecuarias (FPA), representaron el 77% del total de explotaciones agropecuarias censadas en 2002 (16.644) y el 59% del total de explotaciones censadas en 2008 (10.740). Como se aprecia en valor alcanzado en el CNA 2002 se condice con otros estudios realizados con criterios similares ya enunciados. Si tomamos como válido y representativo el último CNA (2008) estaríamos frente a una disminución importante de las FPA, aumentando las explotaciones del tipo no familiar. Por otro lado, los resultados obtenidos verifican una de las hipótesis planteadas en el trabajo, demostrando la importancia de este sujeto social dentro de la estructura social agraria entrerriana.

Entre las características más relevantes de las FPA, encontramos que tuvo lugar un importante proceso de concentración, de modo que las explotaciones fueron cada vez más grandes en extensión territorial. Lo cual, supone mayores inversiones de capital por unidad, tanto de bienes de capital como de insumos. La tendencia sería hacia explotaciones de mayor extensión y más capitalizadas, como se demuestra en el trabajo realizado, cuando esto ocurre se produce una mutación hacia otra forma social de producción ya no familiar sino parecido a una empresa agropecuaria con rasgos y perfiles en línea con lo que hoy denominamos “agronegocios”. En solo seis años (2002-2008) las Familias Productoras Agropecuarias (FPA) dejaron de ocupar 883.142 ha, las FPA ocupan menos superficie que las explotaciones capitalistas y esto es un dato que no sorprende y se condice con fundamentos teóricos. Aun cuando la tendencia es hacia una gradual pero marcada disminución numérica, las FPA continúan



representando una importante proporción del total de sujetos agrarios, siendo “un factor decisivo en el mantenimiento de formas de vida rural modernizada, pero con presencia local” (Barsky y Gelman, 2008, p. 102). Como antes mencionamos hay una fuerte concentración en la tenencia y uso del suelo. Como se aprecia y de validarse en el próximo CNA (2018), se produce una reasignación del uso del suelo desde EAP familiares a capitalistas (482.613 ha) y dejan de ser producidas por la FPA unas 400.521 ha.

Creemos que el nuevo modelo de desarrollo agrario pone en cuestión no sólo la persistencia de las familias productoras, sino también sus rasgos constitutivos. Paradójicamente, la capacidad de adaptación que les permite a las familias productoras persistir frente a las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales pone en jaque su continuidad como forma social de producción específica al diluir sus rasgos distintivos como equipo de trabajo, aunque siempre aún queda ese ligue “al valor simbólico de la tierra”.

La pérdida de esos rasgos distintivos “familiares” resulta un escollo difícil de superar a la hora de la medición empírica de la familia productora, como lo demuestra este trabajo y otros que han intentado “enjaular” dicha forma social. De continuar esta tendencia, el panorama pareciera ser el de un avance lento pero inexorable hacia un agro cada vez más capitalista de grandes empresas que arriendan y antiguos productores capitalizados que combinan propiedad y arrendamiento. En donde la mano de obra (escasa) sería asalariada o se contratarían todos los servicios. Este agro capitalista redundaría en un campo despoblado con escasísima mano de obra ocupada, y una baja circulación del capital que impactaría especialmente sobre las economías locales, aquellas que aseguran la sobrevivencia de las pequeñas localidades y ciudades intermedias que son numerosas en Entre Ríos.

Respondiendo a las hipótesis planteadas en esta tesis, podemos afirmar que las familias productoras agropecuarias, aunque debilitadas en su representatividad numérica aún permanecen como preponderantes dentro de la estructura agraria en la provincia de Entre Ríos. Estructura que sufrió en los últimos años los embates disolventes de una nueva etapa expansiva del capitalismo en el agro. Subsistir en el nuevo escenario implicó en las Familias Productoras cambios que han modificado sustancialmente su perfil. Estos cambios adaptativos que sufrieron las familias productoras desafían las categorizaciones con que intentamos aprehender a esta forma social de producción. Sin



embargo, creemos que la familia productora agropecuaria, independientemente de su localización espacial y su involucramiento en los trabajos productivos físicos, aún sigue siendo válida como unidad de análisis, ya que posee una característica central, en su gran mayoría son propietarias de la tierra, y este es un elemento estructural central que bloquea parcialmente el acceso de la lógica empresarial al no poder adquirir mayores escalas productivas. La propiedad de la tierra junto a lógicas de sustentabilidad familiar que describimos anteriormente son el factor que impide el desembarco de la empresa agropecuaria capitalista sobre el territorio, estas pequeñas unidades productivas se valen de su flexibilidad y adaptabilidad para subsistir a estos embates.

Notas

¹ Federación Agraria Entre Ríos

² Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos

³ Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

⁴ SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales.

⁵ “Una matriz de datos es una representación que reúne simultáneamente todos los casos y todos los valores. En historiografía los casos pueden ser, y frecuentemente lo son, los valores de las variables «en un determinado periodo de tiempo» -años, meses, reinados, siglos” (Aróstegui, 1995)

⁶En este sentido, se entiende por régimen de acumulación al esquema o modelo de crecimiento para una economía nacional en una época determinada. Así mismo en nuestro país existe una fuerte articulación del régimen de acumulación a escala global o macroeconómica y el sub-régimen de acumulación en el agro ya que es muy clara su influencia económica, política como impulsor de la dinámica económica de sistema.

⁷ El caso inglés, para Marx, era el ejemplo de un agro claramente capitalista, sin resabios campesinos.

⁸ “Dicho proceso representa la destrucción radical del viejo régimen patriarcal campesino y la formación de nuevos tipos de población del campo [...] Además de diferenciarse, el viejo campesinado se derrumba por completo, deja de existir, desplazado por tipos de población rural totalmente nuevos, por tipos que constituyen la base de la sociedad donde dominan la economía mercantil y la producción capitalista. Esos tipos son la burguesía rural (en su mayoría pequeña) y el proletariado del campo, la clase de los productores de mercancías en la agricultura y la clase de los obreros agrícolas asalariados” (Lenin, 1976, pp. 181 y 182)



⁹ En Argentina la “apropiación territorial” se efectuó entre otras, por la Ley de Enfiteusis durante la presidencia de Rivadavia en 1826, lo que permitió la distribución de grandes extensiones del suelo entre pocas personas a través del arrendamiento, los que se transformaron en propietarios conformándose así desde su génesis una estructura agraria con concentración de la propiedad de la tierra, del poder económico y político hasta los años ‘40. Asimismo la campaña del desierto en la presidencia de Roca durante 1870 permitió la expansión de la frontera agropecuaria, la concentración de la propiedad de la tierra en la zona pampeana en pocas manos y la eliminación de la población aborigen. La ley 947 de 1878 permitió garantizar empréstitos con la propiedad de las tierras fiscales, e incluso se realizaron remates de tierras en la embajada Argentina en Londres y París.

¹⁰ “Cuanto más la agricultura deviene capitalista tanto más se desarrolla una diferencia cualitativa -desde el punto de vista de la técnica- entre la grande y la pequeña explotación” (Kautsky, 1983, p. 115)

¹¹ “¿Qué puede oponer la pequeña explotación a las ventajas que ofrece la grande? Sólo una actividad mayor, cuidados más asiduos del trabajador, y la sobriedad del pequeño agricultor propietario, que supera a la del mismo operario asalariado” (Op. cit, p. 116)

¹² “(...) la gran hacienda y la pequeña no se excluyen, sino que se condicionan, al igual que el capitalista y el proletario, pero el pequeño agricultor asume aquí de un modo creciente la condición de proletario” (Kautsky, 1983, p. 175).

¹³ Karl Polanyi se aproxima implícitamente a esta idea en *La Gran Transformación* (2007), cuando introduce la idea de que los pequeños productores tienen una lógica económica distinta basada en la supervivencia, actuando esto como punto de inflexión.

¹⁴ “En el modelo teórico de Chayanov la única categoría económica visible es la remuneración del trabajo, equivalente al ingreso anual disponible para la familia después de deducir los gastos. No hay salarios imputables al trabajo familiar, ni ganancia (que no se busca, dado que el nivel de actividad se regula por la satisfacción de las necesidades familiares), ni la renta (en el sentido capitalista) [...] El producto bruto de la unidad se constituye mediante la sumatoria de todos los ingresos anuales de la misma [...] este será reconocido como satisfactorio o no por la evaluación subjetiva de las fatigas propias del trabajo que realice la familia campesina [...] Como se observa, en la unidad económica campesina de Chayanov sí existe la categoría “capital”, pero con leyes diferentes de las que lo rigen en una unidad capitalista. Su incremento, formación y renovación están sujetos al equilibrio básico de la unidad (intensidad de la fuerza de trabajo, satisfacción de las necesidades)” (Posada, 1996, pp. 3 y 4)



¹⁵ En términos de Friedmann, la diferencia entre las formas campesinas y la producción mercantil simple radica en que en su reproducción social no están involucradas en forma relevante relaciones de tipo comunal o colectivo. Estas podrían ejercer un freno en la penetración de los mercados (Friedmann, 1980 en Balsa, 2009).

Referencias bibliográficas

Abramovay, R (1998). Paradigmas do capitalism agrário em questão. Campinas: Editorial Hucitec – Editora da Unicamp.

Balsa, J. (2009). Agro, capitalismo y explotaciones familiares. Algunas reflexiones a partir de los casos del Midwest norteamericano y la pampa argentina. En Cerdá, J. M & Gutiérrez, T. V. (comp.). Trabajo agrícola. Experiencias y resignificación de las identidades en el campo argentino (págs. 59-86). Buenos Aires: CICCUS Ediciones.

Barsky, O. & Gelman, J. (2008). Historia del Agro Argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Caligaris, G. & Miri, G. (2007). Acumulación de capital y estructura social en el agro. Elementos para su análisis. Presentado en las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios, FCE-UBA, Buenos Aires.

Chayanov, A. (1974). La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.

Domínguez, N., & Orsini, G. (2009). Impactos en la Estructura Agraria por la Ampliación de la Frontera Agrícola en base a la expansión del Cultivo de Soja en la Región Pampeana: la Historia Reciente de Entre Ríos. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.

Errington, A. & Gasson, R (1994) "Labour use in the Farm Family Business", Sociologia Ruralis, Netherlands, V. 34

Friedmann, H. (1978). World market, State and Family Farm: Social bases of household production in the era of ware labor. Comparative Studies in Society and History, Vol. 20, 545-586.

Friedmann, H. (1980). Household Production and the National Economy: Concepts for the Analysis of Agrarian Formations. Journal of Peasant Studies, 7, 158-184.

Galeski, B. (1977). Sociología del Campesinado. Barcelona: Península.

Kautsky, K. (1983, 1899). La cuestión agraria. México: Siglo XXI.

Lenin, V. I. (1960, 1917). "Nuevos datos sobre las leyes de desarrollo del capitalismo en la agricultura, El capitalismo y la agricultura en los Estados Unidos de América", Obras Completas, T.XXII. Buenos Aires: Cartago.

Lenin, V. I. (1976, 1916) El desarrollo del capitalismo en Rusia. Madrid: Akal Editor.



Marx, K. (1983, 1867/1894). *El Capital*. Buenos Aires: Cartago.

Neiman, M. (2008). *La organización del trabajo en la agricultura familiar. Los hogares con trabajadores familiares remunerados en la región pampeana: el caso del Partido de Junín*. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Sociales Agrarios, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Obschatko, E., Foti, M., y Roman, M. (2007). *Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al CNA 2002*. Serie Estudios e Investigaciones, 10.

Pardías, S. (2013). "Es como que uno ya nace...". *Trabajo, herencia y transformaciones en las estrategias de reproducción social de unidades familiares tamberas en Entre Ríos*. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Sociales Agrarios, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Argentina, Buenos Aires.

Posada, M. (1996). *En torno a los campesinos argentinos: aportes críticos para su estudio y discusión*. en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Vol. 7, N° 2. Julio-diciembre, Universidad Nacional de Luján/FLACSO, Argentina.

Tepicht, J. (1984) "Las complejidades de la economía campesina", en *Investigación Económica*, Vol. 43, N° 167, México.



Agricultura Familiar e Circuitos curtos de proximidade: A conformação de um espaço de reciprocidade na Feira Agroecológica de Casa Forte, Recife – Pernambuco

Manuella Carolina Costa de Oliveira

Resumo

Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em sociologia, e tem como objetivo analisar a formação de sistemas de reciprocidade entre produtores e consumidores na feira Agroecológica de Casa Forte (FACS) – Recife – PE, os quais se fundam em ações voltadas para motivar e viabilizar trocas espontâneas que promovem a confiança mútua. Também constitui como fonte de interesse estudar as lógicas de ação (da reciprocidade e de troca mercantil) no contexto da feira agroecológica, que delimitam as regras do funcionamento das trocas entre produtor – consumidor urbano. Tal perspectiva se insere numa discussão sobre circuitos curtos e sistema de reciprocidade, e na importância das relações de proximidade, e de confiança estabelecidas entre produtores rurais e consumidores urbanos na comercialização de produtos orgânicos. Questiona-se: como se dá processo de construção da troca recíproca entre produtores e consumidores orgânicos no espaço da FACS? A abordagem metodológica qualitativa está sendo amparada por técnicas combinadas de coleta de dados, por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas a partir de um roteiro, além da observação de campo e pesquisa bibliográfica. Deste modo, o estudo vem evidenciando, que as feiras agroecológicas se revelam também como espaços de reciprocidade que permitem uma relação de maior proximidade entre os produtores e os consumidores a qual não se reduz a mera troca mercantil do tipo dar-pagar. Ao mesmo tempo, as feiras agroecológicas como um instrumento que apontam para novas perspectivas do rural no espaço urbano.

Palavras-chave

Feira Agroecológica; Circuitos Curtos de proximidade; Reciprocidade; produtor rural; Consumidor urbano

Introdução

Este trabalho faz parte da pesquisa em curso de doutorado em sociologia, e tem como objetivo analisar a formação e a reprodução do sistema de trocas envolvendo produtores, comerciantes e consumidores na Feira Agroecológica de Casa Forte –



Recife – PE. O pressuposto que orienta este estudo incide nas relações sociais nos espaços de feiras agroecológicas, que mesmo organizadas em torno de trocas econômicas, são também orientadas por outros tipos de vínculos, trocas não econômicas.

Tal pressuposto repousa no contexto do grande contingente de agricultores absorvidos nas feiras agroecológicas, consideradas uma inovação implementada pela agricultura familiar em Pernambuco, que tem atraído a atenção dos pesquisadores (Araújo, 2015). No âmbito desse debate, uma ênfase recai sobre a importância das relações de proximidade e reciprocidade, pois as relações entre os atores sociais participantes não se transformam apenas quando ocorrem mudanças estritamente relacionadas a aspecto estritamente econômicos (alterações de preços, oferta ou demanda de produtos), mas também quando a confiabilidade é afetada. Exemplo disso são as ameaças aos vínculos resultantes da venda de produtos convencionais em feiras agroecológicas¹. Dado que a confiabilidade emerge como ponto central na sobrevivência e manutenção das feiras agroecológicas, faz-se importante aprofundar as implicações na dinâmica² destas feiras.

O fortalecimento da globalização no que diz respeito à produção e distribuição de alimentos apresenta consequências em diversas formas. Como exemplos, podemos citar o aumento dos preços dos alimentos, as questões sobre a soberania e a segurança alimentar, a sanidade e a qualidade nutricional dos produtos, o consumo, a sociobiodiversidade, a preservação da natureza, a sobrevivência e a autonomia dos agricultores familiares e suas práticas, costumes e saberes tradicionais (NIERDELE, 2013; McMICHAEL, 2016). Simultaneamente nesse panorama de crise alimentar, questões para além da quantidade e qualidade adequadas dos alimentos, assim como das suas formas de distribuição e de apropriação, tem levado diferentes grupos sociais a promoverem mudanças e estratégias relevantes nos sistemas de produção e consumo alimentar. Uma das mudanças mais evidentes diz respeito ao constante crescimento das agriculturas de base ecológica, envolvendo um conjunto de formas de produção que se estruturam na agroecologia³.

É importante compreender que este contexto vem se traduzindo em uma preocupação crescente por parte dos consumidores, devido aos problemas relacionados com a sanidade e segurança alimentar, embora o antigo modelo de produção, distribuição e comercialização de massa ainda esteja presente e dominante, como sublinham alguns



autores como Ploeg (2008) e Raupp (2010). Sobre esta questão, Raupp (2010) chama a atenção para o fato de que, na atualidade, existem dois modelos principais no âmbito dos novos debates sobre o regime alimentar relacionados com a agricultura. O primeiro trata de um processo fortemente centralizado de industrialização e de produção e consumo que expressa a lógica da economia de mercado dominante a nível global. Tal lógica mercantil voltada prioritariamente para a busca de lucros crescentes incorpora a expansão dos organismos geneticamente modificados, introduzindo pressões sobre os sistemas locais que não estejam vinculados a esta lógica mercantil, mas a outras fundadas na agricultura familiar. O segundo modelo representa um contraponto aos efeitos homogeneizantes do primeiro modelo. Do mesmo modo está centrado nas novas formas de produção fundada em iniciativas alimentares alternativas, na segurança alimentar comunitária, nas formas de agricultura cívica e democrática, e com a produção agroecológica e orgânica. Raupp (2010:2) afirma que este segundo modelo “consiste na construção e reprodução de circuitos curtos e descentralizados, que ligam a produção, a agricultura e a sociedade em geral, mais especificadamente, a produção e o consumo” (Raupp, 2010:2).

É a partir desse contexto que o nosso objeto de estudo se pauta sobre um sistema de trocas existente na feira agroecológica de Casa Forte envolvendo os produtores, comerciantes e consumidores. Com base nisso, questiona-se como se dá o processo de construção de um campo de reciprocidade e comércio inspirado originalmente na Feira Agroecológica de Casa Forte envolvendo produtores, consumidores, e comerciantes no contexto em que as práticas de aproximação e confiança se sobrepõem as disputas baseadas meramente no interesse econômico? Para delinear esta investigação os temas abordados neste trabalho perpassam pelos circuitos curtos de proximidade agroecológicos, agroecologia e agricultura familiar orgânica sob a perspectiva da teoria da reciprocidade. Trata-se de um espaço que favorece o fortalecimento de um sistema de reciprocidade geral envolvendo os atores sociais desse ambiente, o que chamo de *espaço de reciprocidade*. A venda dos produtos orgânicos não pode ser confundida tão somente com o mercado de troca monetária devendo ser avaliada, na verdade, como o momento em que o produtor rural estabelece relações de reciprocidade por meio de valores como reputação e responsabilidade com o consumidor, os comerciantes e seus pares. A coisa material tem um valor simbólico na medida que atesta essa amizade e o prestígio do doador.



Agricultura Familiar e os circuitos curtos de proximidade: novas perspectivas

Com base na possibilidade de ações autônomas e personalizadas os mercados agroalimentares requerem um novo olhar de “construção dos mercados sociais” adequados à realidade dos agentes econômicos de pequena produção (Sabourin, 2009; 2011; Radomsky, 2009; 2012; Nierdele, 2013; Maluf, 2004). Ao se considerarem os mercados como resultados de construção social, ganha relevância elementos como os processos que levam à construção do próprio valor dos produtos. As relações são muitas vezes personalizadas e existe a instituição de formas associativas unindo produtores e demais envolvidos na produção e distribuição dos respectivos produtos (Maluf, 2004:305)

Assim sendo, as ações desenvolvidas pela agricultura familiar pautadas nos mercados de qualidade passaram a ser analisadas a partir da localidade e da relação pessoal entre compradores e vendedores. A percepção destes mercados particularistas baseados em nichos ou especificidades é de que eles são como construções realizadas através de relações socioculturais particulares. Para Nierdele (2009), tais construções estão associadas com a localidade, tradição, origem, natureza ou modo de produção, com os consumidores e suas novas formas de consumo. De acordo com Ploeg (et al, 2000), as novas práticas dessa agricultura apontam uma maior atenção com a administração da paisagem, com a conservação da natureza, com o turismo rural, a agricultura orgânica, com a produção de especialidades regionais, vendas diretas, etc. Este novo processo de desenvolvimento assume novos papéis e estabelece novas relações sociais com outras empresas e com os setores urbano. Sob esta perspectiva, os chamados *circuitos curtos de proximidade* possibilitam relações mais diretas entre consumidores urbanos e produtores e apontam para novas perspectivas de economias localizadas no Brasil⁴. A partir do final dos anos 1990 passaram a ganhar relevância as chamadas feiras agroecológicas (circuitos curtos de proximidade), nas quais são comercializados produtos que indicariam uma nova forma de produção rural dos alimentos, e de desenvolvimento rural (Araújo et al, 2015). Estes mercados representam uma tentativa de construção de arranjos sociais e econômicos alternativos para a produção em bases agroecológicas, nos direitos dos produtos e consumidores de alimentos sobre qualidade e variedade (Nierdele & Almeida, 2013). Isto é, as feiras agroecológicas se constituem também como uma possibilidade de construção da qualidade dos alimentos, pautada na produção de produtos orgânicos, revelando também a geração de relações de reciprocidade e sentidos partilhados. Esses elementos compõem orientação teórica deste trabalho, visto que envolve não somente



a produção de bens materiais, mas também a produção de sentimentos e valores humanos.

A questão da Reciprocidade: as contribuições de Dominique Temple

Identifica-se a relevância da reciprocidade para explicar tipos de relações sociais que não se fortalecem unicamente pela troca econômica, como, por exemplo, a “cara a cara”, centro das nossas atenções. A teoria da reciprocidade prevalece em nossos estudos porque é baseada também em valores como reputação, amizade e confiança.

Os estudos de Temple (2003) define a reciprocidade como o redobramento de qualquer ação ou prestação que permite reconhecer o outro e participar de uma comunidade humana. Desse ponto de vista, a teoria da reciprocidade de Temple fornece a base argumentativa para as questões trabalhadas nesta pesquisa – no que tange à formação de vínculos sociais nas feiras agroecológicas através do “oferecer” e “receber” onde os indivíduos são mobilizados por outros princípios de troca que não econômico, como o estabelecimento de um bom convívio comunitário. Com isso, D. Temple sistematizou as estruturas elementares de reciprocidade. Ele identificou alguns dos sentimentos e dos valores produzidos pelas relações humanas dentro de cada categoria dessas estruturas. A primeira, conhecida como a reciprocidade bilateral ou “cara a cara” é definida como uma relação de reciprocidade simples que gera um sentimento de humanidade e funciona como referência para *sí mismo* e para o outro. Nesta estrutura nasce o sentimento de amizade que gera em si um sentimento puro, uma efusão de liberdade, o que o autor também denomina de *gracia*⁵. A segunda estrutura é chamada de “compartilhar”, corresponde como uma outra forma da estrutura do tipo “cara a cara”, e passa a ser revelada quando a individualidade de cada um se enfrenta com a homogeneidade do grupo. O sentimento que surge neste momento é o de confiança ou de fé. Na estrutura de reciprocidade ternária unilateral na qual existe, quase que simultaneamente a reciprocidade bilateral, alguém recebe de um lado e do outro, ou seja, existem três pessoas, três contrapartes nesta estrutura. O sentimento gerado é o de responsabilidade. A última estrutura de reciprocidade definida por Temple é a reciprocidade ternária bilateral. Neste tipo de estrutura, o que é doado pode voltar, desta 55). maneira o dom vai por um lado e volta no mesmo caminho. O sentimento de responsabilidade que prevalece é o da justiça.



As contribuições da teoria da reciprocidade na agricultura familiar: Eric Sabourin

Alinhado à esta mesma concepção de Temple, Eric Sabourin (2009) dá continuidade aos estudos sobre a teoria da reciprocidade na agricultura camponesa. Sua principal contribuição é na percepção da dimensão e na importância das relações de reciprocidade nas comunidades e organizações de agricultores. A respeito disso tenta compreender a reprodução camponesa a partir da articulação dialética entre a troca mercantil e a reciprocidade: por um lado, o desenvolvimento da produção de valores materiais destinados a trocas mercantis e, por outro, a produção de valores afetivos (amizade e respeito) e éticos (confiança, justiça, equidade) (SABOURIN, 2009). Com efeito, a teoria da reciprocidade surge, não anuncia o fim da era do desenvolvimento pela troca ou pelo mercado e, portanto, o fim do crescimento econômico. Antes, procura outra leitura das relações econômicas e sociais que aquela por meio unicamente do princípio da troca e, portanto, abre propostas alternativas de economia humana em matéria de desenvolvimento, a partir de outra lógica social e econômica (Sabourin, 2011: 25). Deste ponto de vista, Sabourin (2011; 2009) sinaliza a comunidade doméstica rural, marcada pelo sistema de pertencimento e parentesco, mediada por relações recíprocas dentro das famílias camponesas ou agrícolas; nas inter-relações entre gerações e em nível de comunidades; prestações mútuas entre vizinhos; e nas inter-relações nos mercados com a venda direta, circuitos curtos de proximidade, e qualificação dos produtos.

A noção de *relações de reciprocidade* é utilizada por este autor para elucidar a capacidade do campesinato de se reproduzir na sociedade contemporânea. Esta capacidade ele define como a troca de responsabilidades mútuas geradoras de vínculos sociais mais amplos do que aqueles produzidos pelas trocas mercantis. Apesar disso, para Sabourin (2009), esse processo não seria uniforme e unilinear, e as sociedades camponesas se caracterizariam pela capacidade de articular relações de reciprocidade com as mercantis. Nesse sentido, se estabeleceu uma coexistência entre essas duas lógicas, sendo que a permanência de relações de reciprocidade seria um elemento-chave para entender a resistência da agricultura familiar no interior das relações e trocas mercantis (Sabourin, 2009). A abrangência da teoria da reciprocidade permite articular tanto os mecanismos comerciais que promovem a diversidade produtiva e a valorização local dos territórios onde é feita a produção agroalimentar, como ao mesmo tempo evidenciar a proximidade entre seus atores sociais e, desta forma, gerar vínculos sociais mais amplos que os mercantis, fortalecendo relações de reciprocidade.



O caminho percorrido: os procedimentos metodológicos.

Tomando por base tal referencial teórico, foi eleita uma metodologia qualitativa, cuja importância recai na compreensão e resposta a questões particulares que não podem ser objetos de quantificações (MINAYO, 2012). Nesta perspectiva, os métodos qualitativos contribuíram também para tratar as unidades sociais investigadas aqui. Eles possibilitaram descrever o evento da Feira Agroecológica de Casa Forte, assim como as visitas aos sítios dos agricultores familiares e nas entrevistas com os agricultores, consumidores, comerciantes e instituições. Para o levantamento de dados foi necessário o uso da técnica de amostragem *snowball*. Foi possível, através desta técnica, superar a heterogeneidade do público estudado (Vinuto, 2014), além de selecionar os entrevistados a partir das indicações realizadas pelos atores sociais que compõem aquele espaço. Desta forma, o quadro de contatos se constituiu, e o número de entrevistados foi suficiente quando percebi, a *priori*⁶, a saturação dos dados. A respeito do método utilizado, as entrevistas semiestruturadas ofereceram o suporte necessário para a coleta de dados. Coerente com o método usado, alguns recursos técnicos como gravador, máquina fotográfica e câmera filmadora foram significativos para a pesquisa.

A pesquisa exploratória de campo ocorreu com as primeiras visitas ao espaço da feira, nos meses de janeiro e maio de 2016⁷. Elas foram oportunas pois estabelecemos os primeiros contatos com os atores sociais, além de identificarmos os primeiros impactos da notícia dos “falsos orgânicos”. O primeiro encontro com este cenário por meio da observação e uma entrevista com um produtor permitiram a construção de marcadores sociais que posteriormente guiou nossas novas observações de campo, e a elaboração de perguntas para os roteiros das entrevistas. Em um segundo momento, nos meses de junho e julho de 2018, as observações de campo junto as entrevistas possibilitaram um olhar direcionado para a dinamicidade e funcionamento do espaço da Feira Agroecológica de Casa Forte assim como o entendimento das atividades e relações sociais presentes nela. Todas as observações foram registradas em diários de campo.

Foi possível observar um total de 36hs⁸ de funcionamento da feira, circular no espaço entre os atores sociais, além de ter acesso aos domicílios e espaços das instituições para a realização das entrevistas, e facilidade ao acesso de informações importantes para esta pesquisa. Neste contexto, o levantamento de dados compreendeu informações de 5 visitas a feira agroecológica de casa forte, realizadas aos sábados, dia em que a feira acontece; e 1 visita aos sítios de 2 produtores-feirantes no município



de Pombos (PE). Foram entrevistados 7 produtores da Associação dos Agricultores de Base Familiar e Cultivo Orgânico da Região do Mocotó; 7 comerciantes; 6 consumidores; 1 representante da Companhia de Serviços Urbanos do Recife (Csurb⁹ – Prefeitura do Recife); 1 representante do Centro Sabiá; 1 representante responsável pela produção e comercialização orgânica no Estado de Pernambuco, da Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Pernambuco (SFA-PE/MAPA), totalizando 23 entrevistas. Para dar conta dos grupos eleitos e suas particularidades foram elaborados 4 roteiros de entrevistas. Os roteiros foram elaborados a partir da pesquisa exploratória, em conversas informais durante as visitas e da análise de documentos oficiais.

A reciprocidade nos circuitos curtos de proximidade: a formação de vínculos sociais na Feira Agroecológica de Casa Forte

A Feira Agroecológica de Casa Forte se caracteriza como um espaço com especialidade, cheio de sons, cheiros, movimentos, coloridos e personagens que interagem com seu histórico e suas relações de identidade e afetividade. O que nos faz pensar a importância da feira e dos atores sociais que a frequentam. Estes indivíduos sejam os produtores-feirantes ou os comerciantes vem de variados destinos atravessando fronteiras municipais carregando seus produtos que serão vendidos na feira. Pessoas de todas as idades se mobilizam para mais um dia de feira, proporcionando vários encontros. Todo esse movimento induz a uma rotatividade

fazendo daquele espaço um local de constante mobilidade econômica, mas sobretudo humana. Sobre isso, Fantuzzi (2016) fala que as feiras livres compõem a paisagem das pequenas às grandes cidades. Além da importância sociocultural, uma vez que as mesmas são muito mais que apenas espaços de transações comerciais são espaços de interação entre pessoas e que ainda preservam a diversidade da nossa cultura e alimentar (Fantuzzi, 2016).

Quando a pesquisa teve início, um dos fatos que impulsionaram para estudar o sistema de trocas determinado por práticas de reciprocidade no espaço da feira, e igualmente, a conformação de um *espaço de reciprocidade*¹⁰ foi a existência de um grupo de comerciantes circunvizinhos a ela. No total, somam-se 60 bancas (dos comerciantes) distribuídas nos 4 quadrantes da praça de casa forte. O perfil de produto da feira é natural, a exemplo de queijos artesanais (coalho e francês), mel orgânico, plantas, geleia, produtos lacto vegetarianos, granola artesanal, serviço de massagem etc.



Contudo isso não exclui a participação de 3 bancas que vendem produtos da agricultura convencional (frutas e verduras). Os primeiros comerciantes chegaram na Feira Agroecológica de Casa Forte há 15 anos, junto aos primeiros produtores e, desde então, essa interação entre os atores sociais constituiu-se uma relação benéfica para ambos. Este cenário foi percebido pela Companhia de Serviços Urbanos do Recife – Csurb, que segundo sua fiscal conta a história do surgimento dos comerciantes na feira, a conformação do espaço físico e a parceria com o Instituto Agrônomo de Pernambuco - IPA para a organização das bancas e fiscalização dos produtos:

O comércio já existia naquela praça (de maneira informal). E já estavam começando meio que criar uma simbiose com a feira de orgânicos. Então nós tivemos esse start e fomos convidados pelo Instituto Agrônomo de Pernambuco - IPA para fazer parte desse processo de ordenamento em conjunto com eles. Existe um processo de ordenamento de uso e ocupação de solo que era feito sem uma ligação direta (entre os órgãos), e então essa parceria ela é muito importante. Por quê? Porque como a gente já comentou, eles é que tem os instrumentos de fiscalização para se saber se aquele produtor é orgânico ou não. Então a primeira coisa que nós fizemos que foi uma arrumação bem sutil porque de certa forma eles já se organizavam entre si naqueles dois núcleos da praça. Então aquela ruela central (na praça) tem 50 bancas nessa faixa. E eles (os produtores) ficam nesse núcleo aqui justamente dentro dessas duas porções da praça e as características de feira elas são bem notáveis. (Fiscal, 28 de junho de 2018).

Desde então, a praça de Casa Forte aos sábados tornou-se um verdadeiro evento que reúne em um único espaço produtos saudáveis, comprometidos com o meio ambiente, e o bem-estar dos envolvidos. A presença desses comerciantes corrobora para a conformação de um *espaço de reciprocidade* que incentiva e desenvolve elementos como o de confiança, amizade e cooperação entre os atores sociais. Estes elementos motivam os princípios que orientam não só o *layout* da feira, ou seja, nos arranjos das bancas e a condição de que produtores e comerciantes respeitem os espaços destinados a eles; como também na construção de suas relações sociais como é percebido na fala do comerciante Luiz presente na feira há 8 anos:

Imagina: todo mundo ali é pai de família, todo mundo é filho, a maior parte hoje são avós. Cada um veio de fora, de uma cidade diferente. Daí encontra com pessoas diferentes. No início ficou com uma certa cisma com a nova feira surgindo ao lado, mas depois todo mundo virou irmão. Aqui (praça de casa forte), por ser muito grande a gente se reúne em pequenos grupos e fazemos café da manhã. Eu tenho um projeto meu que é uma vez por ano fazer uma grande roda aqui e confraternizar (Comerciante, 16 de julho de 2018).



É percebido também na fala de uma consumidora que diz:

E aí tem essa coisa também de começar a conhecer pessoas na feira. Sabe, por conta da feira já teve tanto amigo que eu encontro, como também tem pessoas que eu comecei a me relacionar, assim de pelo menos ver na rua e já cumprimentar. Os próprios feirantes, e aí já vai tendo uma relação massa de chegar aqui, dar aquele bom dia, sei lá aquela coisa que acho que só feira livre tem, sabe?! (ConsumidoraA, 18 de julho de 2018).

Este cenário revela um *espaço de reciprocidade* em que as práticas de aproximação e confiança se sobrepõem as disputas baseadas meramente no interesse econômico. Repousa na existência de relações que são direcionadas para uma dimensão afetiva e de valores que resulta na obrigação mútua que emerge da interação social.

Dominique Temple (2003) afirma que a reciprocidade permite algo mais além da troca econômica e circulação de bens materiais e serviços, ela proporciona a criação de um sentimento, de um valor humano como a amizade (*philia*), o respeito e a confiança. São esses sentimentos que fortalecem e sedimentam um sistema de trocas que segundo Temple (2003) formam a base da economia humana que podem gerar abundância material e espiritual. Contudo, a existência de um campo de reciprocidade não anula a existência de conflitos e desconfiança observados no espaço da feira. Por exemplo, mesmo existindo a credibilidade do produto orgânico e com a presença da Organização de Controle Social (OCS)¹¹ expostas nas bancas, algumas situações observadas mostravam alguns consumidores desconfiados com o produto vendido. Estes consumidores ao chegarem na banca, pegavam a alface nas mãos, analisava e indagava o produtor se era de fato orgânica. Ou seja, se esteticamente esses produtos apresentam um aspecto “grande e bonito”, atributos normalmente não direcionados aos orgânicos, estes consumidores desconfiavam da sua procedência. Mas com a palavra do produtor afirmando que era um produto orgânico, o consumidor ficava satisfeito e comprava o produto. Dessa forma, a confiança e a transparência configuram-se como valores importantes na formação do *espaço de reciprocidade* pois realça a relação estreita entre produtores e consumidores. Nesse sentido, a compreensão da reciprocidade como um elemento essencial para a produção dos laços sociais no contexto da feira torna-se pertinente pois a mesma representa a capacidade de gerar a integração social e o produto, o qual Temple (2003:38) chama de “produto espiritual representado pelo prestígio”. É importante entender a reciprocidade não só como uma relação social estabelecida de maneira simétrica entre os atores para dar e receber. Ela também se configura como uma relação social entendida na obrigação moral de dar,



receber, devolver, que gera a confiança e amizade no outro e constitui o laço social que cria a humanidade (Temple, 2003). Através das primeiras análises, pode-se verificar a importância da Feira Agroecológica de Casa Forte no cotidiano da comunidade local, e como a relação com este espaço torna a feira um local de vivência único e diversificado em virtude dos diferentes objetivos que direcionam as pessoas para ela. Neste sentido, consumir o produto orgânico pode significar exclusivamente um vínculo de bem-estar ou produzir produtos limpos¹² (sem agrotóxico), como também estabelece um compromisso com espaço da feira por quem faz parte dele. Em entrevista a consumidora Maria relata:

[...] começou isso de começar a vir com amigas, aí depois a gente fazia café da manhã juntas e depois elas pararam de vir. Mas aí eu continuei porque eu comecei a realmente perceber uma diferença na minha alimentação e no meu cotidiano. Porque estava toda semana vindo, o que se tornou uma espécie de compromisso (consumidora, 6 de julho de 2018).

Esta relação criada com a feira pulsa a crença que o produtor e o consumidor possuem no produto orgânico, na sua qualidade e durabilidade. Atrelado a crença, ele representa os elementos de empatia, autocuidado, amizade, bem-estar que são importantes no processo da construção das relações de reciprocidade na feira. De tal modo, estes elementos que impulsionaram a sua ida a feira, ao mesmo tempo proporcionaram uma relação afetiva consigo mesma. No ato da compra, fatos que acontecem representam o nascimento e a conformação de relações de confiança entre produtores, por exemplo, quando algum consumidor chega na banca e não tem coentro, o produtor vai buscar na banca vizinha sem qualquer aviso ou pedido, mesmo com a ausência do colega na banca. Este ato representa a relação de confiança entre eles, que somente ao final da feira informam a quantidade pega e assim acertam o valor monetário. O ato da compra revela também o vínculo de parceria produtor-consumidor, como observado em conversas sobre a família, saúde e bem-estar que antecedem ou sucedem o ato da compra. Este vínculo revela ao mesmo tempo o sentimento de pertencimento e prazer ligada as idas aos sábados à feira. Isto fica representado na fala de Carlos, 72 anos, que frequenta a feira há 15 anos: “Eu gosto de ir para ali. Eu vou para a feira satisfeito, tranquilo. Venho aqui todos os sábados, há 15 anos” (consumidor, 5 de julho de 2018).

A reflexão que o ambiente da feira agroecológica provoca recaí também na (re) significação simbólica e afetiva com a feira, com a alimentação e dos atores sociais envolvidos nessa trama. Cassol e Schneider (2015) destacam a importância do



consumo de alimentos para compreender os modos de vida sustentáveis, as novas interações econômicas e novas ações dos indivíduos. Em entrevista Maria, que frequenta a feira há 3 anos conta sobre sua memória afetiva com a feira:

Eu na verdade como sou do interior eu já tenho de infância essa coisa de feira livre. Vim morar em Recife há dezesseis anos para estudar e tinha perdido um pouco mais dessa coisa da feira livre, mas em alguns ambiente. bairros onde eu morei eu cheguei a frequentar por exemplo, o Mercado da Madalena, Mercado de São José, então assim eu sempre tive em algum momento essa relação com a feira livre. Só que desses dois anos e meio para cá que eu comecei a frequentar essa feira (Casa Forte). [...] eu acho super emocionante que durante a semana quando eu estou comendo as coisas eu me lembro deles, e imagino poxa isso aqui foi plantado por eles (Consumidora, 6 de julho de 2018).

Na sua fala também é revelado o seu novo modo de vida atrelado ao consumo de orgânicos, assim como a frequência de idas a feira todos os sábados:

[...] realmente teve essa maturidade alimentar que foi acontecendo nesse tempo que eu moro aqui, e essa feira ajudou realmente a firmar isso, sabe? Que começou tanto de começar a vir com amigas, depois a gente fazia café da manhã juntas e depois elas pararam de vir. Mas eu continuei porque eu comecei a realmente perceber uma diferença na minha alimentação, porque estava toda semana vindo para cá, e que se tornou uma espécie de compromisso. E aí depois disso começou o lado afetivo também a se fortalecer porque sei lá eu comecei a criar uma relação de sexta-feira à noite, se eu não for dá aula no sábado (Consumidora, 6 de julho de 2018).

Considerações finais

Nos últimos tempos as feiras agroecológicas vêm fortalecendo as redes alternativas de comercialização que tem por foco a comunidade. Nestes espaços, para além da troca monetária os padrões de convivência baseados em valores afetivos e morais são estimulados conjuntamente entre produtores-feirantes e consumidores, assim como no caso da Feira Agroecológica de Casa Forte, os comerciantes de produtos naturais, que se beneficiam dessas redes por meio da troca de informações e experiências entre eles ajudando a construir esses laços de confiança mútua. Nesta mesma perspectiva, a contribuição de Renner (2008) torna-se relevante pois a transparência, a confiança e a participação configuram-se como elementos centrais na conformação desses espaços. O quadro teórico-metodológico apresentado tem permitido observar que a Feira Agroecológica de Casa Forte tem permitido observar a existência de um *espaço de reciprocidade* revelado nas práticas dos atores sociais envolvidos nessa trama.



Ademais, foi observado que através da feira é estabelecida uma estreita relação continuada entre os atores sociais envolvidos que trabalham juntos para manter a rede funcionando. Concretamente, a coisa material tem um valor simbólico (por exemplo, a crença que o produtor e o consumidor possuem no produto orgânico) na medida que atesta a amizade, a cooperação, a ajuda mútua, a lealdade, a confiança, a empatia e o prestígio do doador.

Toda a análise relatada só foi possível com base no quadro teórico-metodológico apresentado anteriormente. Tomando-o por base, tem sido possível observar que este espaço tem revelado um conjunto de ações impulsionadas por diferentes atores sociais, em várias esferas de atuação, que tem contribuído na prática para uma nova configuração das relações no espaço da feira. Ao mesmo tempo, abre espaço para outras esferas, como no caso da Feira Agroecológica de Casa Forte, a presença de comerciantes que vendem produtos naturais. Como a pesquisa tem apontado, de fato, este contexto não se reduz a mera troca mercantil do tipo dar-pagar, ele revela e proporciona a articulação entre a troca mercantil e a reciprocidade.

Notas

¹ Matéria enunciada no dia 31 de janeiro de 2016 pela TV Globo, a partir da venda de produtos convencionais em feiras agroecológicas no Brasil. Assistir em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/01/feirantes-vendem-produtos-com-agrotoxico-como-organicos.html>

² A dinamicidade da feira é entendida aqui como um local que ocorre as relações econômicas, sociais e culturais, tornando-a um lugar de construção de espaço e identidade, relacionados com todos os seus atores sociais partícipes.

³ A base agroecológica (re)surge como um paradigma em oposição a agricultura industrial ou moderna, do qual possibilita incorporar e integrar não apenas questões ambientais, mas sobretudo questões humanas.

⁴ Nas principais capitais do Brasil, a maioria dos consumidores de produtos orgânicos (72%) ainda compram em supermercados, mas boa parte já complementa suas compras em pequenos varejos: 42% recorrem a lojas especializadas e 35% a feiras do produtor (KLUTH et al., 2011). Já existem sinais de crescimento da comercialização em circuitos curtos no Brasil. Uma pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) identificou 140 feiras ecológicas certificadas em 22 das 27 capitais brasileiras. Em Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Palmas (TO) e São Luís (MA) nenhuma feira foi localizada. O Rio de Janeiro (RJ) é a cidade campeã,



com 25 feiras agroecológicas; Brasília (DF) é a segunda, com 20 feiras; seguida por Recife (PE) com 18; e Curitiba (PR) com 16. Cinco anos depois, este número cresceu para 500 feiras agroecológicas (IDEC, 2017). O estudo aponta que onde a agricultura familiar está presente as vendas diretas são mais pronunciadas. A mesma pesquisa mostra ainda que os consumidores comprariam mais alimentos ecológicos se houvesse um maior número de feiras próximas às suas residências.

⁵ Está *gracia* encontra sua expressão, seu rosto, nos traços do outro. No olhar do outro se vê uma luz, que significa a compreensão recíproca (TEMPLE, 2003: 55).

⁶ A priori, porque na medida em que as análises estão sendo realizadas podem surgir a necessidade de novos dados.

⁷ O intervalo de tempo que se teve entre o ano de 2016 e 2018 é justificado por questões pessoais, mudança de orientação e maturação da literatura utilizada nesta pesquisa.

⁸ É importante destacar que apenas uma parte das informações da pesquisa de campo e entrevistas foram usadas neste trabalho.

⁹ A CSURB é o órgão diretamente ligado a questão de ordenamento de mercados públicos e feiras livres. É uma Autarquia de serviços urbanos da cidade do Recife ligada diretamente a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano (SEMOC). Nesse caso específico de feiras de produtos orgânicos o órgão tem como objetivo o ordenamento dessas feiras localizadas em logradouro público.

¹⁰ O tema do campo de reciprocidade na confluência entre a tradição de Mauss, Temple e Boudieu será analisada mais adiante, na outra questão desta qualificação.

¹¹ As famílias agricultoras ou associações de produção orgânica se cadastram junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através de uma Organização de Controle Social – OCS, que nada mais é do que um grupo de agricultores que interage e se autorregula para garantir que sua produção é orgânica. Essa garantia também se baseia na relação de confiança entre quem vende e quem compra. Esses agricultores passam a constar em um cadastro nacional de produtores orgânicos, mas que não podem utilizar o selo de orgânicos nos seus produtos. Eles devem exibir na barraca o seu cadastro e ainda permitir que seus consumidores visitem sua propriedade para que possam verificar o que é produzido e de que forma. Também permitem a entrada dos órgãos de fiscalização sempre que preciso. Esse sistema é a regulação e aperfeiçoamento do sistema informal de confiança que sempre existiu nas feiras agroecológicas e que antecede a legislação.



¹² Os agrotóxicos revelam duas preocupações: a primeira por parte dos produtores em plantar o produto convencional prejudica o meio ambiente, a saúde dele, da sua família, e do consumidor. Motivos pelos quais motivaram a transição da produção convencional para a orgânica. A segunda por parte dos consumidores que relataram o mal que faz o “veneno” a sua saúde, a implicância na qualidade e no meio

Referências Bibliográficas

Araújo, Tarcisio Patrício. Feiras agroecológicas: institucionalidade, organização e importância para a composição da renda do agricultor familiar. Fortaleza: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho: Núcleo de Economia Solidária da Universidade Federal de Pernambuco, 2015.

Cassol, Abel., Schneider, Sergio. Produção e Consumo de Alimentos: Novas Redes e Atores. In: Lua Nova, São Paulo, n. 95, 143-177, 2015.

Fantuzzi, Davi. A importância das feiras agroecológicas para as cidades. Revista Carta Maior, 2016.

Maluf, Renato S. Mercados agroalimentares e a agricultura familiar no Brasil: agregação de valor, cadeias integradas e circuitos regionais. Ensaio FEE, Porto Alegre, v.25, n.1, abril, 2004.

Mc Michael, Philip. Regimes Alimentares e questões agrárias. 1 ed. São Paulo; Porto Alegre: Editora Unesp: Editora da UFRGS, 2016.

Minayo, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

Nierdele, Paulo André; Almeida, Luciano de. A Nova Arquitetura Dos Mercados Para Produtos Orgânicos: O Debate Da Convencionalização. In: Agroecologia: Práticas, mercados e política para uma nova agricultura. Org. Cutiritiba: Kairos, 2013.

Ploeg, Jan Dowe van der et al. Rural development: from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, v. 40, n. 4, p. 391-408, Oct. 2000.

Ploeg, Jan Dowwe Van der. Camponeses e Impérios Alimentares: Lutas por autonomia e sustentabilidade na era da Globalização, 2008.

Radomsky, Guilherme Francisco Waterloo. Práticas de certificação participativa na agricultura agroecológica: rede, selos e processos de inovação. In: Revista Ideias – Interfaces em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p. 133 – 164, jan/jun. 2009.



Raupp, André Kuhn. Transformações no Sistema Agroalimentar: novas e velhas possibilidades para a agricultura familiar. 4º Encontro da Rede de Estudos Rurais, julho, 2010.

Renner, Tegan. Sistemas Participativos de Garantia possibilitam certificação alternativa. In: Revista Agriculturas: experiências em agroecologia.v.5, nº 2, jun., 2008.

Sabourin, Eric. Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a reciprocidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

Sabourin, Eric. Sociedades e organizações camponesas: uma leitura através da reciprocidade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011.

Temple, D. Las estructuras elementales de la reciprocidad. In. Las estructuras elementales de la reciprocidade: jalones para una economia cualitativa en el tercer milênio. Dominique Temple; Félix layme; Jacqueline Michaux; Martha Gonzales y Edmundo blanco. Plural editores, 2003.

Vinuto, Juliana. A Amostragem Em Bola de Neve na Pesquisa Qualitativa: Um Debate em Aberto. Revista Temáticas, Campinas, 22, (44): 203-220, ago/dez. 2014.



Agronegocio del brócoli y agricultura campesina e indígena. El caso de la comuna de Yacubamba, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi

María Sol Fransoi

Resumen

Tras la reciente expansión del agronegocio vinculado a cultivos no tradicionales de exportación en la provincia de Cotopaxi, algunos estudios indican que la población local rural ha transitado hacia una desterritorialización, como consecuencia de su creciente proletarianización. En la presente ponencia nos proponemos complejizar esta interpretación, integrando al análisis una porción del territorio que ha permanecido sin explorar: la comuna indígena de Yacubamba, ubicada en las tierras de altura de la provincia. Para la elaboración de esta ponencia nos basamos en los resultados obtenidos en nuestra tesis de maestría, cuyo contenido fue elaborado en base a encuestas, observaciones y entrevistas en profundidad. A diferencia de lo que hasta el momento indica la literatura escrita, en esta comuna no se evidencia una desterritorialización, sino más bien de recampesinización a costa de una mayor explotación de la unidad doméstica. El trabajo en la parcela se mantiene, así como también las prácticas comunitarias asociadas a la agricultura. Adicionalmente, los ingresos son reinvertidos en la parcela, lo cual indica una continuidad con la lógica productiva preexistente. Mas allá de esto, las empresas brocoleras son las principales beneficiarias de esta estrategia de resistencia a la descampesinización, ya que el arraigo a la parcela obtura procesos de resistencia que cuestionen las condiciones de explotación y precarización laboral que promueve el agronegocio.

Palabras clave

Agronegocio del brócoli - economía indígena campesina - campesinización - precarización laboral - sierra central de Ecuador

Introducción

En las últimas dos décadas del siglo XX, con el advenimiento de una política económica neoliberal, la sierra central del Ecuador comienza a experimentar profundos cambios relativos a los patrones tradicionales de producción agropecuarios. Luego de un breve periodo dominado por los esfuerzos por constituir un modelo de desarrollo endógeno basado en la industrialización por sustitución de importaciones, hacia la década del '80, las presiones ejercidas por las clases dominantes vinculadas al sector agroexportador y



aquellas procedentes de los organismos financieros multilaterales en el marco de la crisis de la deuda, condujeron a la restauración de una política económica aperturista y al antiguo modelo de las “ventajas comparativas” característico de la región (North, 2006).

En el marco de la apertura de la economía al mercado mundial se implementaron numerosos incentivos a la agroexportación, tales como el otorgamiento de créditos y subsidios, y la ejecución de sucesivas reformas favorables al sector, entre las cuales se distinguen la reforma arancelaria, la del código de trabajo y la de la legislación agraria (Lucio Romero, 1996). Al calor de estos estímulos, se profundiza la orientación agroexportadora de la economía nacional, en sintonía con los procesos configurados a escala latinoamericana. Sin embargo, este patrón de inserción de América Latina en el mercado mundial como región proveedora de materias primas presenta algunos rasgos novedosos con relación a su forma tradicional de vinculación, entre los cuales se distingue el peso que adquirió la comercialización de productos no tradicionales de exportación (Kay y Vergara-Camus, 2018).

Es en este escenario que en la sierra central del Ecuador adquiere un creciente protagonismo el agronegocio vinculado a cultivos no tradicionales para la exportación, primero con la expansión de las florícolas y más recientemente del brócoli, actividades que desencadenaron progresivamente el desplazamiento de la ganadería lechera que otrora constituía el eje de la dinámica económica de la región (Martínez, 2014). Con respecto a la producción de brócoli, sobre el cual nos detendremos en esta presentación, su importancia creciente en el mercado mundial se asocia al advenimiento de un nuevo régimen agroalimentario mundial, signado por un cambio en la dieta de las clases medias y dominantes de los países del norte, lo cual configuró nichos de mercado que fueron abastecidos por los países del sur (Rubio, 2016). La producción de este cultivo se concentra prácticamente en su totalidad en la provincia de Cotopaxi, en la cual se produce aproximadamente el 80% del total de brócoli a nivel nacional (INEC, 2017).

A diferencia de otros cultivos no tradicionales, como la soja, la producción de brócoli se caracteriza por una mediana demanda de factor tierra respectivamente, con lo cual su expansión no condujo al despojo de las poblaciones locales de sus territorios. Antes bien, dado que se trata de una actividad de baja capitalización y de elevada demanda de fuerza de trabajo, la retención de la mano de obra en el territorio se convierte en un aspecto central para abastecer sus procesos productivos sin incurrir en gastos de



transporte y enganche (Martínez, 2015). La apertura de numerosas fuentes de empleo en una zona densamente poblada por hogares campesinos minifundistas precipita el proceso de subsunción real o directa del trabajo al capital que ya se encontraba vigente en la región como consecuencia de las políticas descampesinistas adoptadas por los sucesivos gobiernos desde el periodo de la reforma agraria, las cuales minaron la capacidad de autosubsistencia de las economías campesinas (Bretón, 1997).

En este marco, en las últimas dos décadas han sido numerosas las investigaciones realizadas en torno a las transformaciones suscitadas en los territorios como consecuencia de la creciente (semi)proletarización del campesinado en las distintas fases que integran los procesos productivos en torno a los cultivos no tradicionales. Sin embargo, estos estudios se han concentrado principalmente en torno a la actividad florícola de expansión más temprana y, geográficamente, en las provincias de Cayambe y Pichincha. En relación con la especificidad de los procesos configurados por la (semi)proletarización campesina en torno a la producción de brócoli han sido muy pocos los estudios que se han realizado hasta el momento (Martínez, 2015; Yumbra, 2014) y solamente uno de ellos analiza los cambios que bajo este nuevo escenario se configuran en las unidades domésticas y poblados campesinos de la provincia de Cotopaxi (Martínez, 2015). En el mismo, se afirma que el avance del agronegocio ha desatado un proceso de desterritorialización, el cual de acuerdo con Entrena Durán (2009) se encuentra signado por tres tipos de ruptura: entre agricultura y territorio, entre agricultura y alimentación, y con relación a los viejos patrones de consumo vinculados a la parcela. En suma, se trata del abandono de las dinámicas económicas y socioculturales previas y la adopción de nuevos patrones de comportamiento asociados a la urbanidad impuestos por la propia lógica del agronegocio y la (semi)proletarización.

En esta ponencia presentamos los resultados de la investigación que llevamos a cabo en el marco de la elaboración de nuestra tesis de maestría, la cual tuvo por interrogante principal cuáles han sido los procesos que se desencadenaron a partir de la (semi)proletarización de campesinos en tierras de altura habitadas por comunidades indígenas, territorios que no han sido explorados por los antecedentes mencionados, los cuales se concentraron en poblados campesinos mestizos de las zonas de bajo. ¿Se transita hacia una desterritorialización y descampesinización como en las tierras bajas?, ¿qué lugar ocupa para los hogares que se vinculan a las brocoleras el trabajo parcelario?, ¿se abandona o relega a un lugar secundario, o bien mantiene su lugar central?, ¿a qué destinan estos hogares los ingresos que reciben de las brocoleras?, ¿a



las actividades agropecuarias o al consumo de bienes durables y otros gastos desvinculados a la parcela?, ¿se mantiene la participación en actividades comunitarias como *prestamos*, intercambios y mingas, o se transita hacia su abandono?. Estas son algunas de las preguntas que han guiado la investigación y que desarrollaremos en las siguientes páginas.

Realizamos nuestro estudio en la comuna indígena de Yacubamba ubicada en las tierras de altura del sur de la provincia de Cotopaxi. Allí, tomamos como unidad de análisis los hogares semiproletarizados en las brocoleras, en los cuales examinamos tres aspectos específicos de su cotidianeidad: la dinámica del trabajo parcelario, el destino de los ingresos y el nivel de la participación en espacios o actividades comunitarias. Para la elaboración de esta investigación nos planteamos como estrategia metodológica la realización de encuestas por hogar, de entrevistas en profundidad y de observación con y sin participación.

Las características de la comuna y los hogares semiproletarizados en las brocoleras

La comuna de Yacubamba se encuentra ubicada en las tierras de altura de la parroquia La Matriz, en el cantón de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Se trata de un poblado integrado por unos 600 hogares, que se dedican a la pequeña y mediana agricultura y ganadería lechera y de engorde, y que en su totalidad pertenecen al pueblo indígena kichwa panzaleo. Con anterioridad al proceso de reforma agraria, estos hogares constituían una comunidad huasipunguera dentro de la hacienda Jatun Juigua, en la cual cada familia debía una renta en trabajo al hacendado a cambio del huasipungo o parcela dentro de su condominio.

En los albores del proceso reformista, los vecinos de la comunidad inician un proceso de compra de sus huasipungos, y fundan la comuna en el año 1966. Si bien, la reforma agraria puso punto final al régimen hacendatario basado en la explotación de la renta en trabajo de los huasipungueros, los campesinos se enfrentaron, a partir de entonces, a nuevas dificultades, debido a la ausencia de sólidas políticas que respalden y protejan las débiles economías campesinas ahora expuestas a los imperativos del mercado. A pesar de ello, a diferencia de otras comunas indígenas que iniciaron un proceso espiralado de éxodo del campo a la ciudad (Bretón, 1997), Yacubamba se caracteriza por un bajo índice de migración del campo a la ciudad, lo cual al parecer se relaciona tanto con las condiciones edafológicas relativamente más favorables para la producción



agropecuaria, como con la mayor disponibilidad relativa de tierras, ya que el proceso de compra de tierras a las ex haciendas que rodean la comuna se extiende hasta períodos recientes¹. En la actualidad se calcula que la comuna se extiende en un territorio de aproximadamente 10.000 hectáreas, las cuales se dividen en un sector de propiedades a título individual y otro de uso colectivo que pueden usufructuar para prácticas de pastoreo todos los miembros comuneros activos de la comuna, esto es el 90% de los hogares.

La agricultura y ganadería a pequeña y mediana escala constituyen el eje económico central en Yacubamba. Cada familia practica en su parcela la agricultura de cultivos de altura (principalmente papa y cebada) en base al trabajo familiar y durante los momentos de mayor demanda de fuerza de trabajo recurren al *prestamos*, que consiste en una práctica tradicional de la comuna basada en el trabajo no remunerado y recíproco entre familiares, vecinos o allegados de la comuna. A su vez, la gran mayoría de las familias practica la ganadería lechera a pequeña escala, actividad que encierra un carácter central en la economía de los hogares, ya que les asegura ingresos monetarios cotidianos. Adicionalmente, los hogares practican la ganadería de engorde, para lo cual disponen de tierras comunales que comienzan sobre los 3600 msnm, y sobre las cuales los comuneros activos tienen derecho al pastoreo. A esto hay que sumarle la crianza de animales menores destinados a la venta y al autoconsumo.

Todas estas actividades se realizan en diferentes medidas en función de la posición económica de cada una de las familias, ya que existe un marcado proceso de diferenciación socioeconómica que, según los testimonios de *los antiguos*, existía incluso antes de la reforma agraria, pero que se ha ido agudizando hasta la actualidad. De acuerdo con el muestreo realizado durante nuestro trabajo de campo, un puñado de familias posee actualmente propiedades que rondan las 30 hectáreas, y un segmento dramáticamente mayoritario lo integran hogares con menos de 2 hectáreas de usufructo individual. Debido a la escasez de tierra, la mayoría de los hogares de la comuna se reproduce en base a una economía pluriactiva. Además de la comercialización de los productos de su parcela en las ferias de Saquisilí, Pujilí, Latacunga, Ambato y Salcedo, algunos hogares obtienen sus ingresos por medio de la actividad comercial practicada en la propia comuna: poseen tiendas de abarrotes, talleres mecánicos (para las motos, que son el principal medio de transporte personal), gasolineras, cybers o panaderías. Pero en la gran mayoría de los casos, la única alternativa consiste en la venta de la



fuerza de trabajo de algún miembro del hogar, principalmente en la construcción (los hombres) y en las brocoleras (las mujeres).

Centrándonos específicamente en las características de los hogares que se vinculan al agronegocio del brócoli, estos alcanzan al 40% del total de la muestra, y su vinculación se realiza exclusivamente en la fase de la plantación. En su totalidad, los hogares de la comuna que venden su fuerza de trabajo a las brocoleras son familias minifundistas o campesinos sin tierra que viven *arrimados* o *apegados* en los hogares de sus padres por la falta de acceso a la tierra, o que han contraído créditos para poder *sobresalir* o superar esa situación, e iniciar, poco a poco, su propio emprendimiento agropecuario, “*apartados*” de sus padres.

Un rasgo distintivo común de estos hogares vinculados a las brocoleras es el bajo índice de miembros por familia que venden su fuerza de trabajo, en relación con otros territorios como la zona baja estudiada por Martínez (2015), donde predominan hogares con entre 2 y 3 miembros que venden su fuerza de trabajo en el agronegocio (p.41). En Yacubamba, predominan los hogares donde solamente uno de los miembros vende su fuerza de trabajo en las brocoleras, mientras que el resto de la familia permanece trabajando en la parcela. La excepción a esta norma son aquellos hogares recientemente constituidos que accedieron a sus tierras a costa del endeudamiento, lo cual obliga tanto al marido como a la mujer a vender durante un periodo de tiempo su fuerza de trabajo para hacer frente a la deuda. En estos casos, generalmente, la mujer se emplea en las brocoleras de manera permanente y el hombre en la construcción ocasionalmente (cuando hay obra), aunque también existen casos en que ambos se emplean de manera permanente en la plantación.

El 60% de los vecinos que se emplean en las brocoleras son mujeres. Esto no responde a una política empresarial segregacionista por sexo estrictamente hablando, ya que los hombres también son contratados para este empleo, como lo demuestra el 40% restante de los trabajadores². La mayoría de mujeres entre los trabajadores del brócoli de la comuna, se debe más bien, por un lado, a que es una de las únicas fuentes de empleo para las mujeres campesinas e indígenas, y por el otro, a que los hombres tienen en la construcción una alternativa más rentable y menos *matada* que le brócoli, por lo que prefieren insertarse en dicho sector.

La importancia de las brocoleras como fuente de empleo y de las mujeres como las proveedoras de los hogares, se configura por la pérdida de oportunidades laborales de



los hombres en los últimos años suscitada al calor de la oleada de migrantes venezolanos a las ciudades intermedias del Ecuador, cuya situación de vulnerabilidad extrema ha sido bien aprovechada por los empresarios del sector, reduciendo incluso a la mitad el salario ofertado. En este marco, algunos hombres, o bien se insertan en las brocoleras junto a su mujer, o bien permanecen en la parcela a la espera de ser llamados a trabajar en la construcción mientras sus esposas aseguran ingresos (en forma de salario o jornal) trabajando en las plantaciones de brócoli.

En la comuna, existen dos mecanismos de contratación para trabajar en las brocoleras, entre los cuales optan quienes allí venden su fuerza de trabajo: por un lado, el empleo directo con la empresa, y por el otro, el empleo intermediado por los contratistas, que son cuatro vecinos de la misma comuna. De acuerdo con los resultados de nuestra muestra, observamos que *i)* quienes se emplean de manera directa son, por lo general, los jóvenes fuertemente endeudados por el acceso a la tierra. Estos trabajan bajo registro de la relación laboral, en jornadas de 5 días a la semana, nueve horas diarias, una de ellas de descanso y para el almuerzo que les brinda la propia empresa. Se les paga un salario mínimo equivalente a 387 dólares americanos, además de contar con la porción indirecta del salario (doble aguinaldo, vacaciones, seguro médico, aportes, etc.). Los días no laborables se le paga el doble, en conformidad con la ley. En la comuna, se denomina a los vecinos que trabajan bajo esta modalidad *los de asegurado*; y *ii)* quienes se emplean por la vía del intermediario, son en general, hogares que ya poseen tierra, pero que requieren de ingresos monetarios para hacer frente a gastos como las “*colaciones*” de los hijos escolarizados o el pago de deudas, aunque éstas no suelen ser de la envergadura de aquellas que contraen los jóvenes para acceder a la tierra. Dentro de este segmento, se encuentran aquellos que forman parte de una cuadrilla fija de trabajo, y los que solo concurren a las faenas cuando el contratista demanda refuerzos a pedido del ingeniero que trabaja en la plantación (o jefe de campo). Estos trabajadores asisten a cambio de 10 dólares el jornal, no cuentan con seguro médico, ni ninguna de las compensaciones indirectas del salario. Se los denomina entre los vecinos de la comuna *los del apoyo* o *los del contrato*. Si bien, entre estos trabajadores existe conocimiento sobre los beneficios que reporta el empleo directo en comparación con el intermediado, la contratación por vía del contratista tiende a preferirse en tanto que esta modalidad desde el punto de vista de los vecinos tiende a asociarse a otros beneficios que no tienen que ver estrictamente con lo legal-normativo, sino con la dinámica agropecuaria de los hogares. En efecto, la flexibilidad subyacente



a esta modalidad, le permite ausentarse de la brocolera cuando el trabajo en la parcela *está apretado*.

Una característica de las trayectorias de los trabajadores de esta comuna que hemos logrado reconocer en las entrevistas en profundidad realizadas con trabajadores y ex trabajadores, consiste en la elevada movilidad que existe de una categoría a la otra: muchos comienzan trabajando como apoyo, pero para *avanzar* a pagar las deudas se ven obligados a trabajar de manera permanente como *vía* para obtener mayores ingresos; otros, trabajando de manera permanente, habiendo solventado las deudas, se *retiran* y asisten sólo como personal de apoyo, *cuando los granos están bajos* o si tienen alguna necesidad particular. Adicionalmente, es un lugar común en las trayectorias la práctica de *retirarse* definitivamente de las brocoleras toda vez que las deudas hayan sido canceladas. Todas estas características específicas que adquiere, en la comuna de Yacubamba, la vinculación laboral en las brocoleras, se tornan explicativas de los procesos particulares que allí se desencadenan a partir de la venta de la fuerza de trabajo en el agronegocio del brócoli, que van a adoptar una forma diferente de los que se registran en la zona del bajo por Martínez (2015), como expondremos en el siguiente apartado.

Trabajo en la parcela, hábitos de consumo y participación comunal

Como mencionamos al inicio, la pregunta principal que ha guiado la investigación y sobre la cual elaboramos esta ponencia ha sido: ¿cuáles fueron los procesos que se desencadenaron en esta comuna indígena a partir de la creciente semiproletarización de los vecinos en las plantaciones brocoleras? Existe un sólo antecedente de investigación que aborda esta problemática en la provincia de Cotopaxi, la cual concluye que a consecuencia de la creciente proletarización de los campesinos se ha configurado un proceso de desterritorialización caracterizado por: i) la desaparición o desplazamiento de las actividades agropecuarias a un lugar marginal, ii) la adopción de hábitos de consumo que significan una ruptura con la lógica productiva campesina preexistente, iii) el abandono de las relaciones comunitarias, sin ser reemplazadas por otros espacios o vínculos colectivos, como sindicatos (Martínez, 2015).

En la comuna de Yacubamba nos encontramos con procesos que difieren de los observados por Martínez (2015), lo cual consideramos que se relaciona principalmente a la mencionada relativa mejor posición en que se encuentra en términos de cantidad y calidad de tierras por familia: mientras en la zona analizada por este autor, prevalecen



hogares con menos de una hectárea y sin acceso a tierras comunales, en Yacubamba, la mayoría de los hogares que se vinculan a las brocoleras, poseen, de hecho³, entre 1 y 2 hectáreas de usufructo individual, además de acceso a tierras comunales para prácticas de pastoreo. A esto hay que agregar que Martínez (2015) estudia en zonas bajas donde el agua de regadío es fundamental para la producción agropecuaria y donde la gran mayoría de los hogares no dispone de dicho sistema. Al contrario, en las tierras de altura, si bien las condiciones geográficas (cangahuas, quebradas y pendientes) dificultan la actividad agropecuaria, disponen del agua de los páramos para sus cultivos que, de momento, posibilita obtener mejores rindes en sus parcelas, a pesar de que entre octubre y diciembre *la seca* suele golpear con crudeza sus cultivos, fenómeno que al parecer se ha venido agudizando. La posesión de más y mejor tierra, redundando en la construcción de vínculos laborales relativamente más débiles que se evidencian en la cantidad de miembros por hogar que se emplean y en la continuidad de la relación laboral. En lo que sigue presentaremos los resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo sobre las tres dimensiones que son indicativas de procesos de desterritorialización, a saber, la dinámica del trabajo en la parcela, los hábitos de consumo y el destino de los ingresos, y la participación en espacios comunitarios. Tomamos como unidad de análisis los hogares de la comuna que venden su fuerza de trabajo en las brocoleras.

i) El trabajo en la parcela. Los hogares que venden su fuerza de trabajo en las brocoleras despliegan diferentes estrategias para lograr sostener el trabajo en la parcela a pesar de la reducción de la fuerza de trabajo familiar que se suscita en el marco del empleo de alguno de los miembros del hogar en la plantación de brócoli. En tanto que, como mencionamos, se trata de hogares en los cuales, por lo general, solamente un miembro baja a trabajar en el brócoli, no se genera un abandono de la actividad agropecuaria. Incluso aquellos hogares jóvenes en los cuales tanto el marido como la mujer venden su fuerza de trabajo, se busca la manera de no abandonar la agricultura. Identificamos las siguientes estrategias familiares para mantener el trabajo en la parcela: *i)* redoblar la jornada de trabajo, yendo a atender animales y cultivos en las madrugadas y los fines de semana; *ii)* delegación del trabajo al / a la cónyuge o hijos/as, en el caso de que ya sean mayores a los 15 años; y *iii)* delegar el trabajo a familiares cercanos generalmente los padres o los hermanos. En los últimos dos casos, no existe una ruptura completa entre quien trabaja en las brocoleras y la parcela, ya que los fines de semanas o incluso a veces en las madrugadas, se dedican a la agricultura y ganadería. En los hogares en los cuales la venta de la fuerza de trabajo se realiza por medio de un intermediario, las



dificultades para mantener ambos trabajos son menores, debido a la posibilidad de faltar la plantación cuando el trabajo en la parcela *está apretado*.

ii) Los hábitos de consumo. Estudiando la estructura de gastos del último mes, observamos que un 75% de los hogares han reinvertido sus ingresos procedentes del trabajo en brocoleras en insumos para la agricultura y la ganadería, lo cual contrasta con la inexistencia de gastos asociados a la adquisición de bienes de consumo durable (celulares, vehículos, electrodomésticos) entre estas familias. Estas cifras son todavía más sugerentes si las comparamos con las obtenidas por Martínez (2015) en las tierras del bajo, donde la reinversión en la parcela se realiza sólo en el 1% de los hogares y los gastos relativos al consumo de bienes durables se realizan en el 19% de los hogares. Además, la centralidad que adquiere la economía campesina en la estructura de gastos de los hogares (semi)proletarizados de Yacubamba, emerge si atendemos el comportamiento de la deuda. En efecto, un 81% de los casos destinan sus ingresos al pago de deudas, y si atendemos el destino de la deuda de estos hogares, observamos que un 53,4% de éstos han sido destinados a la compra de tierra, un 17% a gastos para la agricultura y la ganadería, otro 17% a la construcción de vivienda y el 12,5% a la adquisición de bienes para cubrir las necesidades básicas. Estos porcentajes refuerzan nuestro argumento sobre la centralidad que conserva la actividad agropecuaria en estos hogares, algo que contrasta con los procesos que la proletarización en el agronegocio genera en la zona del bajo, donde el pago de deudas se presenta apenas en el 11% de los hogares, siendo destinada solamente en un 17,5% al rubro “compra de tierra y animales” y un 27,5% a la compra de electrodomésticos, celulares y vehículos/motos (Martínez, 2015, p 84), estos últimos prácticamente inexistentes en Yacubamba.

iii) La participación en espacios comunitarios. Este constituye otro de los indicadores sobre la desterritorialización que aborda Martínez (2015) en la zona del bajo. De acuerdo con nuestra muestra, los hogares semiproletarizados en las brocoleras de Yacubamba mantienen un alto nivel de participación en espacios o prácticas comunitarias, lo cual es facilitado por el bajo índice de participación por familia en el mercado de trabajo (generalmente un miembro por familia) que, a su vez, posibilita distribuirse las tareas entre quienes *bajan* a trabajar y quienes permanecen en la parcela. Desagregando por práctica, obtenemos que un 81% de estos hogares practican el *prestamano* con vecinos o allegados, un 70% realiza intercambio de productos con vecinos de la propia comuna, y un 75% también participa en las mingas. Las primeras dos prácticas se encuentran estrechamente relacionadas a la actividad agrícola, por lo



que su importante presencia entre estos hogares también indica indirectamente la centralidad de la agricultura en la economía de los hogares semiproletarizados. En contraste con estas cifras, en la zona del bajo solamente un 33% realiza *prestamos* y un 15% intercambia productos, siendo la minga la única actividad con alta participación, de un 80%, debido a que la misma se vuelca a obras de infraestructura y ya no al trabajo en la agricultura (Martínez, 2015, p 94).

Para lograr los niveles de participación que observamos en la comuna, al igual que lo que acontece con el trabajo en la parcela, las familias semiproletarizadas despliegan estrategias de distribución de roles entre quienes trabajan en las brocoleras y quienes permanecen en la comuna, lo cual presenta mayores dificultades entre aquellos hogares donde tanto el marido como la mujer se emplean permanentemente en las brocoleras, y menores para aquellos que se vinculan a esta actividad lo hace por medio de intermediarios, ya que pueden ausentarse con mayor facilidad del trabajo.

Si atendemos de manera conjunta los resultados obtenidos en la comuna de Yacubamba, observamos que en este territorio particular los procesos que se desencadenan por la semiproletarización de sus miembros en las plantaciones brocoleras, no remite a un proceso de desterritorialización, como sí acontece en otras áreas subsumidas a la lógica del agronegocio. En primer lugar, al mantener el trabajo en la parcela a costa de una mayor explotación del trabajo del grupo familiar, no se configura una ruptura entre agricultura y alimentación; en segunda instancia, al reinvertirse el grueso de sus ingresos en las parcelas tampoco se desencadena una ruptura con los patrones de consumo preexistentes vinculados a la agricultura y la ganadería, y tercero, al reproducirse las prácticas comunitarias dentro de la comuna, como el *prestamos*, el intercambio de productos y las mingas, tampoco se desata una ruptura entre agricultura y territorio.

Reflexiones finales

La expansión del agronegocio ha sido asociada, en algunos casos, al despojo de los campesinos de sus medios de producción, mientras que, en otros, a su desterritorialización, proceso de descampesinización que tiene por particularidad el hecho de que se configura en el propio espacio de residencia a partir de la (semi)proletarización en el agronegocio. La particularidad del caso de Yacubamba radica en que no se ajusta a ninguno de estos dos procesos. Lo que observamos es que, en la comuna, las actividades agropecuarias continúan siendo centrales, algo que



se evidencia en el mantenimiento del trabajo en la parcela a costa de una mayor explotación, en la inversión de los ingresos en la parcela o acceso a la tierra, y en mantenimiento de prácticas comunitarias relacionadas con la agricultura, como el *prestamano* y los intercambios de productos. En este sentido, no se configura en esa comuna ni una descampesinización por la vía de la desterritorialización.

Observamos que la respuesta de los campesinos a la expansión del cultivo de brócoli ha sido la de aprovechar la coyuntura de oferta de empleo para *sobresalir* y recomponer su empresa campesina, desviando los ingresos obtenidos en este trabajo a la unidad de producción doméstica. Esto tiene su correlato tanto en los horizontes que construyen los actuales trabajadores que ponen de manifiesto un fuerte arraigo a la parcela y a las actividades agropecuarias, como en la temporalidad del vínculo laboral que establecen con las brocoleras, vinculado al pago de la deuda que siempre tiene como punto final el *retirarse* y volver a la parcela con sus animales y cultivos. En este sentido, nos encontramos frente a un escenario en el cual el agronegocio en tanto que generador de fuentes de empleo, escasas en el periodo previo, se convierte en la base de una tímida recampesinización, en tanto que permite obtener ingresos para acceder a porciones reducidas tierras (no posibilita salir de la condición minifundista), o bien para adquirir animales y otros insumos agropecuarios.

No obstante, cabe destacar que los principales beneficiarios de este vínculo laboral son las empresas brocoleras, ya que, si bien la temporalidad del vínculo laboral resultante de las recurrentes *retiradas* y las elevadas tasas de deserción laboral, pueden generar ciertas “turbulencias” en el funcionamiento del mercado de trabajo, también reporta sus beneficios al capital. En efecto, el arraigo a la parcela y a la economía campesina obstaculizan la gestación de una resistencia obrera a las precarias condiciones laborales que las empresas brocoleras imponen a los trabajadores. Con excepción de solamente un caso aislado en otros cantones de la provincia, no se registra la presencia de sindicatos, ni de ningún otro tipo de organización que represente al colectivo de trabajadores, vele por sus derechos y luche por sus reivindicaciones. La cuestión laboral tampoco ha tenido lugar en las agendas de las organizaciones campesinas en sus diferentes niveles, las cuales redundan en temas agrarios y de reconocimiento identitario. Durante nuestra instancia de campo, el único conflicto que registramos entre campesinos y brocoleras se relacionó con la prolongación de “la seca” que los campesinos asocian al disparo de nubes ejercido por las brocoleras, es decir, a una disputa que no se relaciona con las condiciones de trabajo sino con la preservación de



la economía campesina. Si bien este es un aspecto que planteamos abordar en investigaciones futuras, hasta el momento nos interesa subrayar la facilidad que tienen las brocoleras para explotar y precarizar la fuerza de trabajo dado el fuerte arraigo a la parcela y la ausencia de una “conciencia obrera” que plantee una disputa frente al capital.

Notas

¹ La última compra, fue la del cerro Morourco en el año 2012, transacción para la cual se constituyó una asociación de 201 familias comuneras, las cuales accedieron a 2 hectáreas de usufructo individual y a una vasta extensión de tierras comunitarias

² Es en la fase del procesamiento donde en base al esquema de división sexual del trabajo se demanda mayoritariamente fuerza de trabajo femenina, aunque también se contratan hombres para las labores asociadas con estereotipos de género masculino, esto es, tareas de fuerza y de manejo de maquinaria (Guarderas y Herrera 2013, Yumbra 2014). En la fase de la plantación, las labores son realizadas en cuadrillas mixtas, aunque también existen algunos trabajos exclusivamente masculinos, como el riego y el manejo de maquinaria (Yumbra 2014).

³ Incluimos a los arrimados que todavía viven en los hogares de sus padres pero que ya accedieron a la tierra a través del endeudamiento.

Bibliografía

- Bretón, V. (1997). Capitalismo, reforma agraria y organización comunal en los Andes: Una introducción al caso ecuatoriano. Barcelona: Universitat de Lleida
- Entrena Durán, F. (2009). “La desterritorialización de las comunidades locales rurales y su creciente consideración como unidades de desarrollo”, en *Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario* (3), 29-42
- Guarderas, C. y Herrera, A. (2013). “Análisis de los efectos en la industria el brócoli por la no renovación del ATPDEA, y una propuesta de exportación a un mercado alternativo. Caso Ecofroz”, tesis para obtener el título en Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE
- INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2017. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2017 <https://bit.ly/36SjwbG>
- Kay, C. y Vergara-Camus L. (2018). La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocios y neodesarrollismo. Buenos Aires: CLACSO



Lucio Romero, R. (1996). "Significados del ajuste estructural en el Ecuador", en Ecuador Debate (37), 82-103

Martínez, L. (2014). "De la hacienda al agronegocio: agricultura y capitalismo en Ecuador", en Capitalismo: Tierra y Poder en América Latina (1982-2012) Vol 2, Guillermo Almeyra et al comps, Buenos Aires: Ediciones Continente, 123-158.

Martínez, L. (2015). Asalariados rurales en territorios del agronegocio: flores y brócoli en Cotopaxi, Quito: FLACSO Ecuador

North, L. (2006). "Militares y Estado en Ecuador: ¿construcción militar y desmantelamiento civil?", en Iconos (26), 85-95

Rubio, B. (2016). "La fase de transición mundial y el dominio agroalimentario de Estados Unidos: una visión histórico-estructural", en ReLaER. Revista Latinoamericana de Estudios Rurales (2):1, 137-158

Yumbra, M. (2014). "Fuerza de trabajo femenina en la agricultura de exportación de brócoli en Cotopaxi", tesis para la obtención del título de maestría en Desarrollo Territorial Rural, FLACSO-Ecuador



Economías domésticas y factores que influyen en su desarrollo: Caso Urcurume – Cutervo

Nicolás Agustín Torres Castro¹

Resumen

Hablar de economía doméstica es hablar de un microentorno en donde las familias ahorran, invierten, gastan, comercian y (muchas veces) pierden. Estos aspectos que de una forma u otra inciden en la economía de una casa está liderado por una mujer, de quien depende disponer el dinero, invertirlo, y por supuesto gastarlo.

Por lo tanto, nuestro análisis se centrará en la dinámica que han impreso los pobladores de Urcurume (Caserío de Cutervo), describiendo y explicando las relaciones entre la unidad doméstica y la fuerzas externas que inciden sobre ella, haciendo hincapié en forma tanto sustantiva como formalista en las relaciones económicas culturalmente construidas, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o “pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú (primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica.

El objetivo central en la presente investigación es la de definir características de los pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que imposibilitan su desarrollo integral falta de capital, débil acceso a la tecnología, ausencia de integración a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica de desenvolvimiento propios de su dimensión social.

Palabras clave

Economías domésticas, Desarrollo, ruralidad.

Introducción

Debemos precisar que economía doméstica es el conjunto de medidas que permiten ordenar y administrar la economía en un hogar. Por lo tanto, este tipo de economía regula, controla, provee y satisface a cada uno de los miembros de la familia de recursos suficientes para alcanzar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, asumir y llevar a cabo éste proceso es una responsabilidad de todos los miembros que forman el núcleo familiar, los cuales deben conocer todos los componentes de dicha economía (el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro).



La economía doméstica hoy en día es muy importante ya que satisface a los miembros de la familia, y en la zona rural aún más, ya que se cuenta con una economía muchas veces de subsistencia, en una agricultura de autoconsumo o de alcance al mercado local.

La cada vez más cambiante realidad implica definir mejor los procesos productivos en las zonas agrícolas dentro de los ámbitos social, económico y cultural que se están produciendo actualmente en el mundo rural, refuerzan la necesidad de revisar objetiva y críticamente las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas desde las cuales se planifican e implementan iniciativas de desarrollo rural. En efecto, las formas tradicionales de organización de la producción doméstica en general y en particular de su fuerza de trabajo, evidencian profundas transformaciones derivadas principalmente de su mayor dependencia del acceso a mercados de trabajo locales y regionales (Ortiz, 2002²). Incluso entre aquellos grupos domésticos que mantienen su rol de productores primarios en el campo, el “proyecto productivo” de estas unidades ha dejado de construirse exclusivamente en base a actividades netamente agrícolas o rurales, especialmente en relación a los grupos de edad más jóvenes, este fenómeno no tan nuevo se configura como “nueva ruralidad”, cuyas actividades se desarrollan en el mundo rural con actividades diferentes a las tradicionales agropecuarias.

En base a este análisis, podemos decir que el dinámico y cada vez más cambiante mundo rural actual, éste “proyecto productivo doméstico” también evidencia fuertes transformaciones, incorporando prácticas no agrarias en su vinculación con mercados de trabajo extra productivos, así como estableciendo relaciones de diversa índole con instituciones de desarrollo (fundaciones, ongs, etc.). Este nuevo conjunto de prácticas y relaciones permite incluso fortalecer el componente productivo predial del proyecto doméstico, accediendo a recursos materiales y simbólicos de importancia. Sin embargo, debemos remarcar que ésta nueva forma de relación productiva, no se realiza al margen de situaciones de conflicto. Por el contrario, en estos casos el conflicto se estructura en base a formas de oposición fundamentales de las que dimos cuenta en el desarrollo de este trabajo. Cabe enfatizar a aquella que se establece entre el trabajo asignado a tareas productivas tradicionales y extra productivas, que era parcialmente resuelto recurriendo a la pluriactividad de sus miembros.

En el aspecto teórico de la investigación, podemos afirmar que los procesos globalizantes han cambiado vertiginosamente la manera de percibir y entender los



elementos centrales de la ruralidad; procesos locales y globales (antes separados) hoy se vuelven inseparables, este entrelazamiento cada vez más complejo, nos hace ver que factores de desarrollo rural, como la división del trabajo, factores productivos, etc. tienen como elemento interviniente los procesos agrícolas como eje fundamental de desarrollo (o supervivencia) de los pueblos. Esto implica abandonar las clásicas dicotomías que entendían “lo rural” y “lo urbano” como totalidades sociales asimilables a sistemas cerrados, incorporándola compleja dinámica de sus interrelaciones, donde las economías domésticas³ juegan un rol preponderante.

Comprender cómo los diversos modos de constitución de estos “pequeños productores” en Urcurume, la afrontan en este escenario de economías domésticas, tan dinámico como complejo, por lo que, necesitamos hacer una descripción objetiva y veraz de estos procesos, insistiendo siempre en el carácter multidimensional y hasta cierta veces conflictivo, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o “pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú (primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica.

Otra de las interrogantes que se plantean en la presente investigación son las de definir características de los pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que imposibilitan su desarrollo integral (falta de capital, débil acceso a la tecnología, ausencia de integración a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica de desenvolvimiento propios de su dimensión social.

Finalmente podemos señalar que los factores externos (lineamientos de política agraria del MINAGRI, por ejemplo) en la productividad de la economía doméstica de Urcurume, no influyen o no son tomados en cuenta en este microentorno, ya que se trata fundamentalmente en una economía doméstica de autoconsumo, con una débil relación con el mercado local (Cutervo).

Planteamiento del Problema

La globalización ha cambiado vertiginosamente la manera de percibir y entender los elementos centrales de la ruralidad; procesos locales y globales (antes separados) hoy se vuelven inseparables, este entrelazamiento cada vez más complejo, nos hace ver que factores de desarrollo rural, como la división del trabajo, factores productivos, etc. tienen como elemento interviniente los procesos agrícolas como eje fundamental de



desarrollo (o supervivencia) de los pueblos. Esta nueva forma de ver y debatir este nuevo escenario en América Latina, se propone dar cuenta de este proceso, poniendo en cuestión las conceptualizaciones tradicionalmente empleadas para referir al mundo rural.

Esto implica abandonar las clásicas dicotomías que entendían “lo rural” y “lo urbano” como totalidades sociales asimilables a sistemas cerrados, incorporándola compleja dinámica de sus interrelaciones, donde las economías domésticas³ juegan un rol preponderante.

Nuestro análisis se centrará en la dinámica que han impreso los pobladores de Urcurume (Caserío de Cutervo), describiendo y explicando las relaciones entre la unidad doméstica y la fuerzas externas que inciden sobre ella, haciendo hincapié en forma tanto sustantiva como formalista en las relaciones económicas culturalmente construidas.

Comprender cómo los diversos modos de constitución de estos “pequeños productores” en Urcurume, la afrontan en este escenario de economías domésticas, tan dinámico como complejo, por lo que, necesitamos hacer una descripción objetiva y veraz de estos procesos, insistiendo siempre en el carácter multidimensional y hasta cierta veces conflictivo, focalizando adecuadamente a: “agricultores”, “pequeños agricultores” o “pobladores rurales pobres” en tanto potenciales beneficiarios de sus propias acciones de desarrollo, teniendo en cuenta la economía de mercado imperante en el Perú (primario exportador y utilitarista) propia de la economía clásica.

Otra de las interrogantes que se plantean en la presente investigación son las de definir características de los pequeños campesinos identificando en ellos sus carencias que imposibilitan su desarrollo integral (falta de capital, débil acceso a la tecnología, ausencia de integración a mercados consolidados, entre otros), además de incluir su propia lógica de desenvolvimiento propios de su dimensión social.

Así tenemos que los problemas a enfrentar serán construidos priorizando dimensiones tecnológicas, agrícolas, económicas y sociales. En virtud de esas consideraciones no planteamos el siguiente problema de investigación:

¿Qué características tiene la economía doméstica de Urcurume y cuáles son los factores que la influyen?



La importancia central de la investigación radica en describir realmente el sistema productivo del caserío Urcurume en un ámbito de economía doméstica de carácter no mercantil, asumiendo como el trabajo rural como el único factor productivo que los pobladores de Urcurume pueden controlar directamente. Es por eso la importancia de describir detalladamente la dinámica socio – productiva de esta zona, para no caer en desnaturalizaciones, que conciben a las fuerzas productivas como elementos externos de la dinámica demográfica, económica y social de Urcurume. Asimismo, se realiza para superar las limitaciones en la comprensión de los procesos de transformación de la producción propia del lugar y de su correspondiente trabajo en estas estructuras agrarias locales.

El conocimiento objetivo de la naturaleza de los medios de producción tiene que ser entendidas como las claves de la “resiliencia” de los pobladores de Urcurume frente a las transformaciones asociadas a la globalización en materia agrícola, lo cual permitiría explicar su persistencia como sistema socio–económico.

En el área de desarrollo rural, se evidencia un creciente reconocimiento de estos procesos, esto no se ha traducido en la generación de alternativas concretas en cuanto a las metodologías de intervención. Aun cuando sean ejecutados en base a metodologías participativas, la implementación de proyectos focalizados, sigue estructurándose en base al supuesto relativo al control doméstico de la fuerza de trabajo, ya que constituye la única “garantía” respecto del cumplimiento de las acciones previstas. Mantener esta dimensión al margen de los procesos de cambio, tanto estructurales como coyunturales, en los cuales estas unidades domésticas están involucradas, representa un oxímoron que contribuye a disminuir el nivel de incertidumbre respecto del logro de los resultados previstos en el proyecto (aumentando por ende las chances de ser financiado).

Material y métodos

Ubicación del estudio y tiempo de duración

La provincia de Cutervo se encuentra ubicada en la parte central del espacio geográfico del Departamento de Cajamarca, en la Cadena central del sector de los Andes Norteños del Perú. Sus coordenadas son: entre los 5° 40´ 39” en su extremo septentrional, formado por la confluencia de los ríos Chamaya y Marañón, en la Jayua, a orillas del río Chotano, distrito de Cutervo. Latitud Oeste: Entre los meridianos 78° 10´ 36”, en sus extremos occidentales, en el cerro Capitán del distrito de Querocotillo.



Tiene una extensión superficial de 3 028.46 km² que representa el 0,2% de la superficie total del país.

Metodología experimental

La ubicación del área de estudio es en la provincia de Cutervo, específicamente en el caserío de Urcurume.

La provincia de Cutervo tiene una población de 138 213 habitantes ubicándose en el cuarto lugar de las provincias más pobladas del departamento de Cajamarca. Alberga el 11% de la población con respecto al total departamental: La Población Urbana es del 19.00 % y la Rural el 81%.

La muestra de representativa recogida para esta investigación fue de 115 habitantes de la población total, y fue elegida en forma aleatoria en el caserío de Urcurume.

Técnicas

Encuesta: Se aplicará un cuestionario de encuesta a pobladores de la ciudad de Cutervo, la misma que se aplicó al azar.

Observación: Técnica que se utilizó en forma continua en el proceso mismo de la investigación, se tomara notas de campo.

Fichaje: Técnica que permitirá construir el marco teórico, conceptual y referencial.

Instrumentos

Elaborados a partir de la operacionalización de las variables de estudio, entre los instrumentos de investigación tenemos: Cuestionario de Encuesta y entrevista, Guía de Observación y Fichas Bibliográficas de Resumen.

Análisis estadístico de los datos

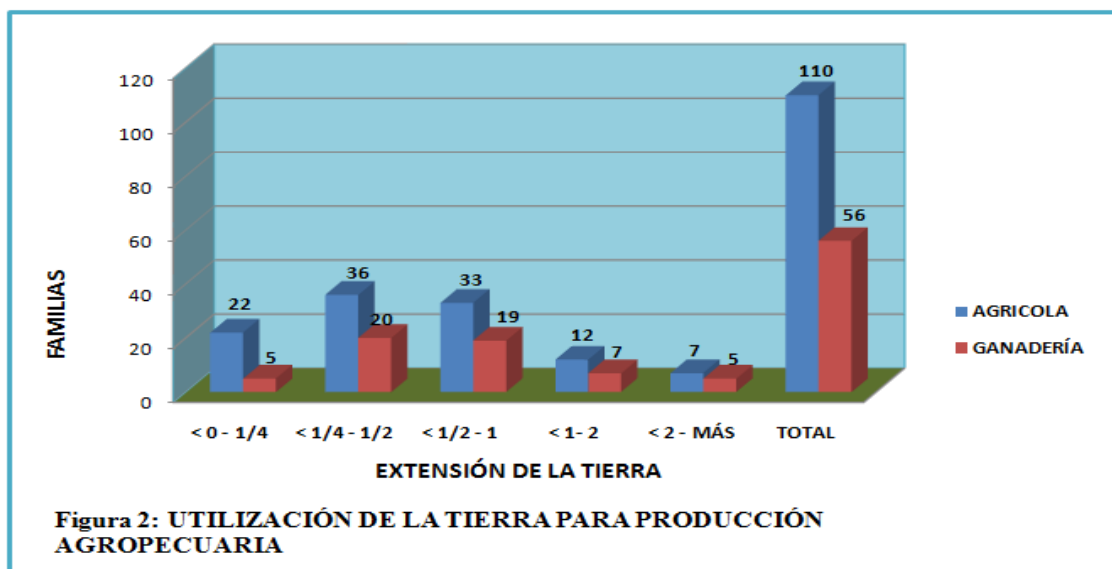
1. Evaluar y realzar la calidad de los datos
2. Describir la población de estudio y su relación con alguna supuesta
3. Evaluar la posibilidad de sesgos (p.ej., no-respuesta, negativa a contestar, y desaparición de sujetos, grupos de comparación)
4. Estimar las medidas de frecuencia y extensión (prevalencia, incidencia, media, mediana)
5. Estimar medidas de fuerza de asociación o efecto



6. Evaluar el grado de incertidumbre a partir del azar (“ruido”)
7. Controlar y analizar los efectos de otros factores relevantes
8. Buscar una mayor comprensión de las relaciones observadas o no observadas
9. Evaluar el impacto o importancia

Resultados

La unidad doméstica⁴ en Urcurume es difícil entenderla, a pesar de su cercanía con el distrito de Cutervo, sino que, penetrar en la privacidad del poblador de Urcurume para comprender los procesos económicos es compleja, ya sea por su desconfianza o por el abuso de promesas incumplidas por el gobierno local, regional o nacional. La economía doméstica tiene un peso significativo en la economía global del país por la magnitud de la fuerza de trabajo que ocupa y las necesidades básicas de la población que satisface, es por ello que este tipo de economía se constituye en el factor interno de desarrollo. En ella se realiza habitualmente una importante cantidad de trabajo productivo y se efectúa una insustituible contribución al desarrollo. De ella se han ocupado muy poco los economistas debido a que las familias suelen ser consideradas como unidades de consumo, y no de producción de bienes y servicios y de reproducción de factores económicos. Pero en las ciencias sociales, y en especial en la sociología rural, cobra inmenso interés ya que de ello se desprende el sustento básico de las familias como unidades de desarrollo y punto de partida para el establecimiento de relaciones sociales.



Esta “invisibilidad”⁵ del trabajo doméstico autónomo, lo que se explica básicamente porque su producción no tiene expresión monetaria (mucho de ello se da en intercambio



con semillas, productos o fuerza de trabajo) y, por ello, la dificultad para cuantificarlo y apreciar su magnitud. Históricamente se ha tratado de dar valor a este esfuerzo traducido en trabajo familiar no remunerado o economías domésticas a través del trabajo de la mujer en el hogar y en función de reivindicar ciertos derechos asociados a dicho trabajo.

En la valoración del aporte de la economía doméstica de Urcurume al desarrollo del proceso de producción de las familias, gran parte de los ingresos de ellas es destinado, a través de los gastos de alimentación, salud, educación, cultura (festividades culturales)⁶ y recreación y de los valores de integración social y comunitaria.

La mejor manera de interactuar con estas personas e ir allá donde trabajan; es decir, visitarlas en sus “chacras” y ser testigos no sólo de la información que nos proporcionan sino que a la vez somos parte de ese proyecto de vida que ansían compartir. Los pobladores de Urcurume dedican los suficientes insumos del trabajo para sus actividades agrícolas, para obtener sus cosechas que mayormente son para el autoconsumo.

Otra posibilidad es el desarrollo de una educación que vuelva a preocuparse por las necesidades de conocimiento y formación requerida por la economía y producción doméstica. Pero lo más importante es la necesidad de un cambio cultural que permita descubrir las potencialidades de realización humana implicados en la recuperación de las familias como comunidades de trabajo y vida, integradas en barrios y comunidades dinámicas y en desarrollo.

A continuación unos cuadros que resumen las características de la economía doméstica de Urcurume y que demuestran su naturaleza de autoconsumo, trabajo familiar no remunerado y la utilización de tecnologías tradicionales transmitidas de generación en generación.

Discusión

La investigación pretende aportar a la discusión sobre la economía doméstica de Urcurume y como factores como: política agraria nacional, economía de mercado, etc. Influyen decididamente en su desarrollo como eje fundamental en la supervivencia de las familias.



La economía doméstica en Urcurume tiene características bastantes sencillas de entender, algunas de ellas son:

Se lleva a cabo a nivel del hogar. La desarrolla el esposo, aunque se ha visto el papel preponderante de la esposa.

Se logra llevando un presupuesto realista de los gastos que tiene la familia, como es la compra o la obtención de semillas, fertilizantes, mano de obra (peones) y otros insumos propios de la agricultura.

Todos en la familia tienen la responsabilidad de ayudar en la economía doméstica, se desarrolla principalmente un trabajo familiar y de compadrazgo.

La disciplina y organización son básicas para mantener la economía en la familia y la comunidad, prácticas como las mingas siguen siendo una forma de mano de obra en las unidades agrícolas.

La educación de los hijos deben ser parte del presupuesto.

Conclusiones

De los resultados expuestos y en base a las condiciones que primaron en la presente investigación, podemos concluir que:

La economía doméstica es muy importante y es la que se inculca en casa, ya que a partir de ella se puede trabajar sobre la economía local en sus diversas modalidades

Se ha demostrado que mantener una buena economía familiar le da tranquilidad y menos estrés a los encargados de la familia, sea este el padre o la madre.

La economía familiar es el sustento económico primario, que permite a las familias invertir en educación en las nuevas generaciones (Hijos, nietos, sobrinos y otros)

Finalmente, este tipo de economía familiar en la zona rural es el sustento del tipo de la agricultura nacional, que es mayoritariamente una agricultura de subsistencia, sin (o débil) acceso a créditos, capacitación, tecnología, etc.

Recomendaciones

Articular la política regional agraria con la naturaleza de este tipo de economía familiar.

Fortalecer mecanismos de asociatividad entre los pequeños productores de Urcurume y las demás asociaciones de productores.



Ampliar programas de fortalecimiento agrario, como es el caso del Programa Sembrando futuro de la Municipalidad Provincial de Cutervo, que permita a los productores de Urcurume sacar la mayor rentabilidad de sus productos.

Notas

¹ Docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación. Dirección de Sociología. Email: ntorresca@unprg.edu.pe.

² Ortiz, Sutti. "Laboring in the factories and in the fields". *Annual Reviews in Anthropology*. 2002; 31: 395-415.

³ Compuestas por las personas, solas o agrupadas en familias, que realizan, desde el punto de vista económico, dos funciones principalmente: Demandar bienes y servicios: los consumidores compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades en función básicamente de sus preferencias y de sus ingresos y Ofrecer factores productivos: las familias ofrecen a las empresas su trabajo a cambio de unos ingresos (salario), lo que les permitirá hacer frente al consumo de los mencionados bienes y servicios. No obstante, las economías domésticas también pueden ofrecer a las empresas los otros dos factores productivos: recursos naturales (por ejemplo, pueden alquilar a una empresa un terreno) y capital procedente de sus ahorros

⁴ Unidad doméstica o economía doméstica se usarán indistintamente, ya que ellas significan unidad económica producto de la presente investigación.

⁵ La economía doméstica no es tan pequeña como aparece en las estadísticas y cuentas nacionales, pues una parte relevante de su producción está orientada al autoconsumo o se distribuye por los canales de la llamada "economía informal" que no deja registros susceptibles de su apropiada cuantificación. Es por esa falta de reconocimiento que podemos hablar de la "invisibilidad".

⁶ De ello hablamos en un trabajo anterior denominado "Influencia de costumbres y creencias en la integración de los pobladores de la ciudad de Cutervo 2012". Resolución N° 0110-2012-CISE – FACHSE.

Referencias bibliográficas

Arrestegui, S. (1996). *Desarrollo Rural*. Lima, Perú: Concytec.

Berstein, B. (1989). *Clases, códigos y control*. Madrid, España: Ediciones AKAL.

Bourdieu, P. (2008). *El oficio de sociólogo*. Buenos aires, Argentina: Siglo XXI.



Escobal, J., Zegarra, E., & Fort, R. (2015). *Agricultura peruana: nuevas miradas desde el*

Censo Agropecuario. Lima, Perú: GRADE.

Manrique, N. (2004). *Sociedad*. Lima, Perú: El Comercio.

Matos Mar, J. (1984). *Desborde Popular y Crisis del Estado*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos .

MINAGRI. (2006). <http://www.minagri.gob.pe>. Recuperado el 18 de Octubre de 2017, de MINAGRI: <http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/lineamientos-pagraria-viceministro.pdf>

Rofman, A. B. (2006). *Modernización productiva y exclusión social en las economías regionales*. Buenos Aires, Argentina: Instituto argentino para el desarrollo económico.

Weber, M. (1977). *Economía y Sociedad*. Madrid, España: S.L. Fondo de Cultura Económica de España.



Transformaciones en la transmisión del conocimiento tradicional de los artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca

M.D. Elvira Iveth Pérez López¹
Dra. Elia María del Carmen Méndez García²

Resumen

Las comunidades indígenas se han transformado de acuerdo a las dinámicas de la modernidad capitalista, pero al mismo tiempo han sabido conservar características del México prehispánico. El objetivo del presente trabajo es analizar las transformaciones de una comunidad artesana tradicional alfarera surgida de la cultura prehispánica zapoteca en Oaxaca y con el paso del tiempo su territorio se ha ido urbanizando. El trabajo alfarero ha formado parte de los modos de vida de las familias artesanas de Santa María Atzompa, Oaxaca, sin embargo, con el tiempo ha disminuido el número de artesanas y artesanos. La investigación realizada es de tipo cualitativa, etnográfica y con técnicas de investigación acción participativa. Se realizó una observación participativa, cinco entrevistas a profundidad y un taller con 77 de los 110 socios del mercado La Asunción, localizado en la cabecera municipal. Los resultados permiten observar que el trabajo alfarero es importante, pero no el único que les provee recursos para su sobrevivencia, por lo que se constata la pluriactividad de las familias alfareras. Los artesanos exponen las tensiones subjetivas sobre la continuidad de la transmisión de conocimientos sobre alfarería porque se documentó el deseo y la necesidad de las generaciones adultas por transmitir el conocimiento tradicional alfarero, sin embargo, manifiestan también tener un respeto por las decisiones de las generaciones jóvenes al continuar o no con el trabajo alfarero. Se puede concluir que las familias alfareras sienten amor por el trabajo alfarero, pero está en tensión con las imposiciones de la modernidad capitalista.

Palabras clave

Transformaciones, Pluriactividad, Transmisión de conocimientos tradicionales, alfarería, Modos de vida.

Introducción

Las sociedades indígenas campesinas mexicanas están inmersas en grandes transformaciones, luchas y resistencias provocadas por los diversos cercamientos de las elites del poder. Desde la conquista española estas elites han querido someterlos. Sin embargo, la cosmogonía indígena sobrevive de una u otra forma en los territorios.



Esta investigación considera que dentro de las sociedades indígenas campesinas se encuentran la gran mayoría de los artesanos mexicanos.

Bajo esa perspectiva se construyó el objetivo de investigación, el cual es dar cuenta de la pluriactividad y la transmisión de los conocimientos tradicionales alfareros de los artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. El análisis se realiza a partir de la nueva ruralidad que ha adaptado la comunidad de Santa María Atzompa como consecuencia del crecimiento urbano de la Ciudad capital del Estado hacia esta comunidad. El trabajo está estructurado en cinco apartados, Santa María Atzompa, Tejido teórico, Planeación metodológica, resultados y discusiones, y conclusiones.

El primer apartado describe las transformaciones territoriales de la comunidad de estudio. En la segunda parte se aborda la construcción del tejido teórico como apoyo para interpretar y reconstruir la imagen de las familias artesanas tradicionales de Santa María Atzompa. El tercer apartado corresponde a la planeación metodológica de la investigación, que de acuerdo al objetivo se propone de tipo cualitativa combinando tres métodos el etnográfico, la hermenéutica y la investigación acción participativa. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos las observaciones participantes, entrevistas a profundidad y la aplicación de talleres.

El apartado de resultados y discusiones contiene el informe de los datos obtenidos y analizados en el trabajo de campo. El análisis se realizó con una visión crítica entendiendo que no existen realidades absolutas y que lo que se hace como investigadores es un acercamiento a la realidad. En el último apartado se intenta reconstruir la imagen del artesano actual de Santa María Atzompa bajo un tejido teórico crítico y la recopilación de las pruebas empíricas mostradas en esta investigación.

El panorama de transformaciones. Santa María Atzompa, Oaxaca

Origen, localización y constitución

La comunidad cuenta con un museo comunitario donde se exhiben piezas que los antiguos zapotecas elaboraban con fines religiosos y utilitarios. Se localiza la zona arqueológica prehispánica que denota la importancia de Santa María Atzompa como ciudad Satélite de Monte Albán, ahí se encontraron los vestigios de un horno de leña. El nombre se compone de dos partes: La primera corresponde a la virgen María, patrona de la comunidad. La segunda parte por los topónimos naualt, “Atl” y “Tzontle”, que significan “en la cumbre del agua” (INAFED, 2017). El municipio se localiza a 7 km al



noroeste de la Ciudad capital. El Plan Municipal de Santa María Atzompa (2014) reporta que el municipio está constituido por la cabecera municipal, las cuatro agencias y 28 colonias. Antes sólo estaba constituido por la cabecera municipal y las cuatro agencias. En 2001, se expropiaron 71 hectáreas de terreno para obras de urbanización y venta de lotes para la construcción de casas – habitación (DOF, 2001). En la zona centro de la cabecera municipal se localizan dos mercados exclusivos para venta de artesanías, La Asunción y el Señor del Coro. Las 40 escuelas públicas con las que cuenta la comunidad se distribuyen en las 33 colonias (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 2014). A los alrededores de la cabecera municipal se observan casas de adobe o lámina cercadas con carrizo y en los patios animales de traspatio.

Lo jurídico, político y económico

La comunidad se rige por un sistema normativo interno, así las autoridades municipales son elegidas a través de la asamblea comunitaria. Debido a la intervención de partidos políticos, en el periodo 2011-2013 la comunidad no logró ponerse de acuerdo en la elección de autoridades y hubo la necesidad, por parte del Estado, de enviar a un administrador municipal (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 2011). Las actividades económicas están diversificadas. La agricultura dejó de ser la principal actividad. INEGI (2010) reportó que la población económicamente activa se dedicaba en un 50.51% a los servicios, 24.29% al sector secundario, 20.31% al comercio y sólo el 2.16% al sector primario. El comercio se diversifica en venta de alimentos, abarrotes, materiales de construcción, artesanías, entre otros. La comunidad está adscrita a la Ruta Mágica de las Artesanías (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 2011).

La alfarería

Esta actividad se ha venido heredando generación tras generación como complemento de la agricultura que podía dejar o no ingresos económicos. Servía para autoconsumo o trueque. La cocción de la loza se hacía en hornos de leña. Cuando la alfarería se empezó a producir con fines comerciales se elaboraban cazuelas grandes (conocidas como apazles), ollas, comales en general loza utilitaria de color verde vidriado (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 2011). Actualmente los diseños, tamaños y colores de las piezas se han diversificado. Se utilizan hornos de leña y de gas para la cocción (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 2014).

En número de Unidades Productoras Familiares (UPF) ha variado con el tiempo, en 1998 existían 500 UPF, en 2003 disminuyeron a 400 UPF, para el 2008, se reportaron 500



UPF, en 2015 el dato fue de 400 UPF (INEGI, 2015). Pero en 2017 el presidente de la Unión de Artesanos y Alfareros del mercado La Asunción reportó 200 UPF. Aunque el último dato no es tan alentador, el trabajo sigue vivo y es valorado por quienes aún lo practican. Santa María Atzompa es una comunidad que ha venido matizado su estructura indígena – rural a una estructura urbana. La primera se niega a ser olvidada. Entre luchas y resistencias sobreviven las familias artesanas en esta nueva ruralidad.

Tejido teórico

Para esta investigación el territorio no puede considerarse sólo como una porción de tierra delimitada por ámbitos jurídicos y administrativos (Giménez, 1996). Bonfil (1990, p.74) afirmó que “Un primer factor de la diversidad cultural es el territorio”. Esta diversidad también la advierte Sosa (2012) al señalar que cada territorio está construido por una dimensión económica, social, política, ecológica y cultural muy particular; lo cual, lo dota de una alta densidad simbólica de acuerdo con cada grupo social que lo habita (Giménez, 1996). A diferentes escalas, los territorios mexicanos han sufrido cambios con base en la explosión demográfica, por un lado, y por otro, al desarrollo del modelo capitalista.

Nueva ruralidad

Desde el análisis de Arias (2005, p. 128), existen dos modalidades de nueva ruralidad. La primera responde a la diversificación y especialización endógena de economías y espacios anteriormente asociados a actividades agropecuarias derivado de la crisis campesina. La segunda responde a las transformaciones socioespaciales desencadenadas por el proceso de metropolización. Al respecto, Méndez (2005) afirma que la vida en las grandes urbes es cuestionada por la notable degradación en las condiciones de vida, “hecho que llega a transformar el ritmo de vida de las poblaciones rurales” (Méndez, 2005, p. 98).

En el caso de México, el aumento de la crisis económica de la década de 1980 y la reforma agraria de 1992 (Fuente, 2009), provocaron en el campesinado indígena graves problemas económicos, sociales y culturales. El campesinado migro a las ciudades, lo que provocó el despoblamiento en las zonas rurales. Posteriormente la explosión demográfica de las zonas urbanas ha estado invadiendo territorios rurales. Los límites entre zonas rurales y urbanas se hacen cada vez más difusos.



Méndez (2005) afirma que los territorios que antes se reconocían como rurales están siendo alcanzados por “la mancha urbana”. Este hecho sin duda transforma el ritmo y modo de vida de las poblaciones rurales. Las percepciones de la vida cotidiana de los habitantes rurales son transformadas por el desdibujamiento de límites entre lo rural y urbano, y por los encuentros cotidianos entre actores representativos de cada parte. Esto puede suscitar dos fenómenos 1) que el núcleo rural sucumba a las presiones o intereses externos o 2) que se consolide la identidad local.

Estrategias de reproducción de la vida indígena

Quijano (2000) advierte, desde su categoría la colonialidad del poder, una dominación de las sociedades occidentales hacia las sociedades de oriente. Pero el México Profundo (Bonfil, 1989) está vivo y reactualizándose. No hay una completa dominación de las comunidades indígenas campesinas por parte del capital. Al respecto Méndez (2017, p. 69) afirma que, si bien es cierto que la atención de las nuevas generaciones está desvinculada del pasado, éste sigue vivo de una u otra forma a través de la escucha de padres, madres, abuelas, abuelos o señores mayores.

Hernández y Martínez (2016) afirman que aunque los grupos domésticos rurales están condicionados por las estructuras sociales, es decir, por sus posibilidades y limitaciones en el campo social; también “tienen un margen de opción y de elección sobre lo que hacen y por qué lo hacen, fundamentado en su experiencia” (Hernández y Martínez, 2016, p. 6). Muestra de esto es que en pleno siglo XXI existe los artesanos, quienes en su mayoría son personas que realizan un trabajo casi manual, con poca actualización tecnológica, sin horarios fijos para iniciar o terminar su jornada de trabajo, no llevan una minuciosa administración del negocio, trabajan sin una seguridad social (Novelo, 2008).

Esto no significa que no estén inscritos en las lógicas del capital, la diferencia es que en sus modos de vida priorizan el valor de uso sobre el valor de cambio, atreviéndose a parodiar a la burguesía Echeverría (2008). Dentro de la nueva ruralidad las comunidades indígenas han establecido diversas estrategias de reproducción social, estas están vinculadas con el territorio. Hernández y Fernández (2016) explican que las estrategias de reproducción social aluden a un conjunto de actividades desarrolladas por el grupo doméstico campesino con el fin de contrarrestar su posición desventajosa frente al capital.

La pluriactividad como estrategia de reproducción indígena

Las transformaciones del mundo rural no van en sentido de afianzar las actividades



agrícolas, están a favor de la diversificación ocupacional en actividades del sector secundario (manufactura y talleres) y terciario (servicios). De ahí la importancia del tema de la pluriactividad como estrategia central de las familias rurales en el siglo XXI (Grammont y Martínez, 2009). Schneider (2009) afirma que la pluriactividad presupone la combinación de por lo menos dos actividades, siendo una de ellas la agricultura. Kay (2009) considera que la pluriactividad es la combinación de actividades que pueden ser agrícolas o no agrícolas, y esto no implica necesariamente dejar de residir en el medio rural.

La diversidad de actividades realizadas por los integrantes del grupo doméstico (los cuales pueden o no compartir el mismo espacio de residencia y trabajo) son diversas y heterogéneas dependen de cada territorio y de factores internos y externos de cada familia. Los primeros están constituidos por: el género, posición jerárquica, grado de escolaridad, el tamaño de tierra disponible para la producción agrícola, el número de miembros y el acceso a los ingresos de cada integrante de la familia. Los segundos están conformados por el contexto (social y económico) donde ocurre la pluriactividad; por ejemplo el mercado de trabajo y la infraestructura disponible (Schneider, 2009).

Transmisión del conocimiento tradicional

Valladares y Olivé (2015) afirman que los conocimientos tradicionales están basados en la práctica y no se puede separar de los seres humanos, porque es resultado de las experiencias e interacciones que hay entre ellos. La diversidad de conocimientos tradicionales mexicanos está relacionada con el territorio de cada comunidad indígena. Para Olivé (2012) los conocimientos tradicionales son dinámicos, porque están inmersos en modificaciones o innovaciones que han realizado las personas que los portan en “artefactos, sistemas, procesos o servicios que permitan la resolución de problemas de acuerdo con los valores y fines” (Olivé, 2012, p. 14).

La transmisión de éstos es a través de la participación y el aprender haciendo, por eso no todo el conocimiento puede ser explicado a través de símbolos formales o lenguaje escrito como lo afirma la perspectiva occidental. Toledo (1991) afirma que se hace a través del lenguaje oral, no echa mano de la escritura y es mnemónico. La transmisión de los conocimientos tradicionales requiere de la memoria individual y colectiva de los integrantes de una comunidad para que permanezcan o se preserven. La transmisión de los conocimientos tradicionales les es útil a las comunidades indígenas tradicionales para tomar decisiones en aspectos fundamentales de la vida cotidiana (Olivé, 2012).



Planeación metodológica

El diseño metodológico se estructuró de acuerdo a lo planteado por Denzin y Lincoln (2011), quienes afirman que una investigación cualitativa no debe estar limitada a la indagación de una cierta teoría con su sistema de hipótesis a ser operacionalizadas en variables para su comprobación o refutación como sucede en las investigaciones cuantitativas. En el trabajo de campo se utilizaron el método etnográfico, la hermenéutica y la investigación acción participativa. De acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1999) la diversidad de métodos le permite al investigador tener una visión más global y holística del objeto de estudio.

El método etnográfico requiere de la observación participante, esta técnica involucra al investigador con la vida cotidiana de la población, lo que garantiza la confiabilidad de los datos recogidos (Guber, 2012). También se emplearon las entrevistas a profundidad. Éstas permiten establecer relaciones personales y profundas, además tienen la intención de que el entrevistado reflexione sobre el fenómeno que está siendo investigado (Ríos, 2012). Méndez (2017) afirma que los recuerdos y olvidos son experiencias de vida que están latentes en cada persona. Éstos se potencian y cobran significado cuando se comparten y reflexionan entre los individuos.

La ventaja de las entrevistas a profundidad es que también puede utilizarse en el método hermenéutico (Martínez, 2011). El contenido de las entrevistas a profundidad puede ser analizado a través de la técnica análisis del discurso. Tagle, Caldera y Fuente (2019) afirman que ésta permite establecer relaciones particulares entre la construcción teórica y la operación empírica. Es decir, las representaciones discursivas deben analizarse a la luz de las categorías que el investigador considere pertinente plantear (Sayago, 2014). Colmenares (2012) afirma que la investigación acción participativa es una metodología integradora del conocimiento y de la acción. La manera de abordar el análisis de un problema o fenómeno es a través del involucramiento de los actores sociales que intervienen en él. Para la investigación participativa se utilizó la aplicación de talleres. El trabajo de campo inició con las observaciones participantes realizadas a partir de noviembre de 2017. Se participó en la celebración anual de la Virgen de la Asunción, patrona de la comunidad realizada los días 14, 15 y 16 de agosto de 2018. De enero a septiembre de 2018, se realizaron cinco entrevistas a profundidad. Los participantes fueron tres alfareras y dos a alfareros, todos socios de la Unión de Artesanos y Alfareros del mercado La Asunción. Se omiten los nombres de los entrevistados a solicitud de ellos.



Los talleres se realizaron en el mes de octubre de 2018 y los participantes se seleccionaron con base a su disposición de participación. En el mes de septiembre se entablaron 2 reuniones con las autoridades de la Unión de Artesanos y Alfareros del mercado La Asunción. Se les planteó los objetivos de los talleres y accedieron a la realización. Las fechas, horarios y lugar fueron seleccionados por las autoridades. Participaron 77 de un total de 110 socios. Fue en las instalaciones del mercado La Asunción donde se llevaron a cabo tres talleres. En el primero asistieron 26 socios, en el segundo 21 socios y en el tercero 30 socios.

Cada taller estuvo dividido en tres fases. La primera actividad sirvió para la presentación (investigadoras-artesano) e integración grupal. La segunda, los artesanos reflexionaron de manera individual sobre las actividades que realizan para subsistir. La tercera, los artesanos reflexionaron en forma grupal sobre las formas de transmisión de los conocimientos artesanales y las subjetividades sobre la reproducción simbólica de la actividad como herencia y como trabajo.

Resultados y discusiones

Las transformaciones del municipio se deben en parte por la explosión demográfica del territorio urbano hacia el territorio de Santa María Atzompa. El presidente municipal, que además es artesano comentó

*La gente como yo trabajábamos desde niños en la alfarería, nuestros padres nos ponían desde pequeños a colar. Las señoras que se observan actualmente, son las que de niñas aprendieron el oficio así como yo...yo considero que la escuela **influye** para que los jóvenes **no quieran seguir en la alfarería** (Isauro Enríquez, presidente municipal de Atzompa, 2017).*

En este discurso se hace latente que el conocimiento occidental se posiciona sobre el tradicional (Valladares y Olivé, 2015). Otra situación que se puede es la desvalorización del conocimiento tradicional por parte de la educación escolar.

La resistencia continúa

El núcleo rural, integrado por generaciones adultas y actuales alfareros, no ha sucumbido totalmente a las presiones de la urbanización, se mantienen organizados y preocupados. Muestra de ello es la celebración de la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción. Los socios del mercado La Asunción participan cada año, la participación la hacen gusto y cariño, así lo mencionan las artesanas, porque a la Virgen se le pide que



las ventas sean buenas para el resto del año. El 15 de Agosto de 2018, las artesanas socias del mercado fueron madrinas de flores, esto consiste en llevar grandes canastas de flores sobre sus cabezas, y acompañaron al comité de festejos a las visitas de las casas de las autoridades municipales. Al final del recorrido, las flores son ofrecidas a la Virgen de la Asunción y se colocan en el Altar mayor de la iglesia. El sacerdote las bendijo y pidió por que las ventas de los artesanos mejoraran. Esa cosmogonía de pedir a un ser supremo por “buenas ventas” son aspectos que dejan claro que parte del México Profundo está presente.

*...hemos **sobrevivido** por muchas generaciones aunque ahora me **preocupa**, la sobrepoblación está invadiendo los terrenos de bancos de barro y si esto se acaba qué vamos hacer, esto es un trabajo hermoso gracias a esto vienen turistas y dejan una derrama económica para todos (Alfarera de 44 años, entrevista 2018).*

*“...ya no es como antes, que nosotros solos resolvíamos nuestros asuntos, ahora **todos quieren sacar partido** [aprovecharse de los votantes durante elecciones estatales y nacionales] de nosotros... (Alfarero de 76 años, entrevista 2018).*

Los artesanos del mercado La Asunción

Los socios del mercado La Asunción fueron caracterizados por tres aspectos: edad, sexo y escolaridad

- 1) La edad promedio de los artesanos es de 49 años,
- 2) El 79% son mujeres y el 21% son hombres,
- 3) En cuanto a la escolaridad, el 3% es analfabeta, 46% tiene primaria, 28% secundaria, 17% bachillerato y 8% licenciatura.

Estrategias de reproducción de los alfareros de Santa María Atzompa

Pese a la situación de desventaja estructural que presentan los alfareros de Santa María Atzompa han demostrado su capacidad para generar estrategias de reproducción de la vida material y simbólica. La pluriactividad y la transmisión de conocimientos forman parte importante de estas estrategias.

Con respecto a la pluriactividad el 100% de socios del mercado La Asunción producen y venden artesanías hechas de barro. A pesar de haber comentado que en algunas temporadas del año las ventas son insuficientes el 38% de los 77 socios afirmaron obtener ingresos sólo del trabajo alfarero. Contrastando esta información con las reglas



de operación de algunos programas gubernamentales y ONG's una de las principales condiciones es que los artesanos manifiesten dedicarse únicamente a la producción de artesanías. Del 62% que afirmó tener otro tipo de ingresos o complementar el trabajo alfarero con algún otro se obtuvo la lista de actividades a) trabajo en el molino, b) venta de leña, crianza y venta de animales, c) venta de artículos diversos, d) trabajo en el transporte público, e) sueldo de los hijos o esposo, f) remesas y g) apoyos de programas gubernamentales.

La transmisión de conocimientos tradicionales alfareros como estrategia de reproducción de la vida en las familias artesanas del mercado La Asunción ha sido muy importante. Les permite estar al pendiente de sus hijos, les ayuda en la economía familiar, les provoca placer y forma parte de la herencia de sus antepasados. Los alfareros adultos muestran cierta conciencia sobre los trabajos asalariados que no siempre son la solución a sus problemas económicos.

Soy alfarera desde que yo era muy joven...mi hijo terminó sus estudios [bachillerato] y trabaja en la capital...es mesero. Pero su mujer no trabajay ya le estoy enseñando...ya hace jarros. Es algo muy bonito trabajar el barro, también es una ayuda, por si se enfadan de su trabajo [los jóvenes si se enfadan de trabajar de manera asalariada] ya saben trabajar el lodo y sí deja la venta de las artesanías. Mi esposo tiene a sus animales, él los cuida y los vende, pero también me ayuda con la quema [proceso de cocción de la loza] (Artesana de 48 años, entrevista 2018).

Estos resultados dialogan con los hallazgos de Del Carpio y Freitag (2013, p. 96) quienes aseguran que los artesanos transmiten sus conocimientos por una necesidad cultural y porque la actividad tiene un sentido tradicional. Además se debe visualizar lo que en palabras de Echeverría (2008) es nombrado como la crisis de la modernidad capitalista, presente desde hace más de 100 años. Esta modernidad capitalista no ha logrado mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, al contrario ha acrecentado la pobreza.

Conclusiones

Los artesanos de Santa María Atzompa coexisten bajo una nueva ruralidad que se ha ido dibujando por los siguientes aspectos. La intervención de actores internos, como los partidos políticos, en la toma de decisiones, la movilidad escolar, la migración a la capital u a otros países y la explosión demográfica de la capital. Con creatividad e innovaciones en los conocimientos técnicos, cada generación de artesanos ha logrado posicionar a la



alfarería en el mercado comercial. Pero no sólo conocimientos técnicos se transmiten, también valores y experiencias de éxito con respecto al trabajo alfarero.

Las tensiones de la nueva ruralidad ha provocado que las expectativas de jóvenes y adultos alfareros se modifiquen, por ejemplo, los jóvenes muestran mayor interés por la movilidad escolar, los padres muestran respeto a las decisiones de los hijos. Sin embargo, se reconoce que el trabajo alfarero es una estrategia muy importante para la reproducción de la vida material y simbólica. Porque aunque sea poco el dinero que obtiene esto se recompensado con el tiempo que le dedican a sus actividades hogareñas. Además la transmisión de conocimientos tradicionales no es la única estrategia de reproducción, también la pluriactividad forma parte importante de los alfareros. Esta pluriactividad en muchas familias ya no incluye la actividad agrícola.

Notas

¹ Estudiante del programa Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Instituto

Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca

² Profesora – Investigadora, Instituto Politécnico Nacional/ CIIDIR unidad Oaxaca

Referencias bibliográficas

Arias, P. (2005). Nueva Ruralidad: Antropólogos y Geógrafos frente al campo de hoy. En S. H. Ávila, *Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?* (págs. 123-159). Cuernavaca, Morelos: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/UNAM CRIM.

Bonfil, B. G. (1989). *México profundo una civilización negada*. México, D.F: Grijalbo. Recuperado el 2018, de <https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2012/07/mexico-profundo-guillermo-bonfil-batalla.pdf>

Bonfil, B. G. (1990). *México Profundo. Una civilización negada*. En B. G. Bonfil, *Lo indio desindianizado* (págs. 73-95). México: CONACULTA.

Colmenares, E. A. (2012). Investigación acción-participativa: Una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 102-115.

Del Carpio-Oavand, P., & Freitag, V. (2013). *Motivos para seguir haciendo artesanía en México: Convergencias y diferencias del contexto artesanal de Chiapas y Jalisco*. *Ra Xaimhai*, 79-98.



Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y como práctica. En N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, *El campo de la investigación cualitativa. Manual de investigación cualitativa* (págs. 43-101). Barcelona: Gedisa.

DOF. (20 de Febrero de 2001). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=770233&fecha=20/02/2001

Echeverría, B. (2008). El ethos barroco y los indios. *Revista de filosofía Sophia*, 1- 11.

Fuente, C. M. (2009). Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad: contribuciones al campo emergente de la economía ecológica. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 41-55.

Giménez, G. (1996). Territorio y cultura. Estudio sobre las culturas contemporaneas [en línea], 9-30.

Grammont, H., & Martínez, V. L. (2009). Introducción. En H. Grammont, & V. L. Martínez, *La pluriactividad en el campo latinoamericano* (págs. 9-18). Ecuador: Flacson.

Guber, R. (2012). La etnografía: Método, campo y reflexividad. En R. Guber, *La etnografía: Método, campo y reflexividad* (págs. 58-62). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa. (2011). Plan Municipal de Desarrollo Santa María Atzompa. Plan Municipal de Desarrollo Santa María Atzompa. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México: Gobierno del Estado.

H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa. (2014). Plan Municipal de Desarrollo. Plan Municipal de Desarrollo. Oaxaca de Juárez, México: Gobierno del Estado.

Hernández, F. J., & Martínez, C. B. (2016). Reproducción campesina y conocimiento local en contexto de fragilidad social y ambiental. Estrategias familiares y comunitarias en la cordillera del Tentzo, México. *Mundo Agrario*.

INAFED. (2017). OAXACA-Santa María Atzompa. Obtenido de OAXACA-Santa María Atzompa: <https://bit.ly/30U6EhE>

INEGI.(2015). Encuesta intercensal Obtenido de <https://bit.ly/3dg2e9A>

Kay, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de glogalización neoliberal: ¿Una nueva ruralidad? *Revista mexicana de sociología* , 608-645.

Martínez, R. J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. *Silogismo*, 1-33.

Méndez, G. E. (2017). *De relámpagos y recuerdos...minería y tradición de lucha serrana por lo común* (Primera ed.). Guadalajara: Ciesas-Occidente, Grafisma editores.



Méndez, S. M. (2005). Contradicciones, complementariedad e hibridación en las relaciones entre lo rural y lo urbano. En S. H. Ávila, *Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?* (págs. 87-121). Cuernavaca, Morelos: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/UNAM CRIM.

Novelo, O. V. (2008). La fuerza de trabajo artesanal mexicana, protagonista ¿permanente? de la industria. *Alteridades*, 117-126.

Olivé, L. (2012). Sociedades del conocimiento justas, democráticas y plurales en América Latina. *Pensamiento y Cultura*, 5-19.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En A. Quijano, *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina* (págs. 201- 246). Argentina: Centro de Investigaciones sociales (CIES), Lima.

Ríos, E. M. (2012). Metodología de las Ciencias Sociales y perspectiva de género. En G. N. Blazquez, P. F. Flores, & E. M. Ríos, *Investigación feminista. Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales* (págs. 179-195). México: Colección debate y reflexión.

Schneider, S. (2009). La pluriactividad en el medio rural brasileño: características y perspectivas para la investigación. En H. C. Grammont, & V. L. Martínez, *La pluriactividad en el campo latinoamericano* (págs. 207-242). Ecuador: Flacso.

SEDESOL. (2017). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Obtenido de Oaxaca_399.pdf: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Oaxaca_399.pdf

Sosa, V. M. (2012). *¿Cómo entender al territorio?* Guatemala: Cara Parens.

Tagle, Z. D., & Caldera, O. A. (2019). Normatividad, gestión pública del agua y ambientalismo de mercado en México: un análisis desde los proyectos políticos (2012-2018). *Tecnología y Ciencia del Agua*, 5-34.

alladares, L., & Olivé, L. (2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes epistemológicos para la interculturalidad. *Cultura y representaciones sociales*, 61-101.



Tradição e racionalização nas estratégias econômicas de produtores familiares no Assentamento Reunidas, em Promissão-SP

*José Geraldo Alberto Bertoncini. Poker
Mirian Claudia Lourenção Simonetti*

Resumo

Parte-se do pressuposto de que a tradição nomeada como agricultura camponesa ainda influencia o cotidiano de famílias em assentamentos de Reforma Agrária. Trata-se de uma visão de mundo desdobrado em projetos de vida, que resultam em maneiras específicas de inserção econômica dos assentados no mercado. Por agricultura camponesa entende-se a produção de subsistência, autonomia e gestão familiar da terra e dos instrumentos de trabalho. Em muitas pesquisas sobre o assunto, esta tem sido apontada como uma das causas de insucessos nos assentamentos, por ser uma lógica que não visa lucratividade na atividade agrícola. A pesquisa ora apresentada teve como objetivo analisar a possibilidade e as formas pelas quais esta referência tradicional pode ser evocada como lógica para construir e organizar planos econômicos racionais de produção e inserção competitiva no mercado. Para tanto, tomou-se como tipo ideal para análise os casos de produtores do Assentamento Reunidas, em Promissão-SP, que conseguiram transformar os lotes em empreendimentos econômicos lucrativos o suficiente para poderem concretizar o ideal de vida boa previsto pela tradição camponesa.

Palavras-chave

Tradição, racionalidade, produção familiar, assentamento, Reforma Agrária.

Introdução

Agricultura camponesa continua sendo um conceito bastante explorado nas pesquisas sobre ruralidade. Em geral, por agricultura camponesa entende-se uma modalidade de produção regulada pela tradição, cujas características são: a economia de subsistência, o ideal de autonomia e a gestão familiar/individual da terra e dos instrumentos de trabalho. A economia de subsistência tipifica esta produção tradicional como forma de produção não capitalista, porque não é uma economia calculada, não visa eficiência ou controle de custos, tampouco a otimização dos recursos e a lucratividade do empreendimento. Autonomia significa a condição efetiva de autodeterminação na tomada de decisões que envolvem o processo produtivo. O agricultor chamado camponês pretende o domínio completo sobre todos os aspectos da atividade agrícola.



Por isto, o agricultor camponês repele qualquer atitude que ele interprete como ameaça ao seu poder de decisão no trabalho e na terra.

A gestão individual/familiar da terra acompanha a pretensão da autonomia: a família, geralmente comandada por homens, é a unidade de produção e de consumo. A terra é pensada como propriedade da família; sobre a sua terra, a família tem domínio absoluto.

Estes traços da cultura que fundamentam o modo de vida camponês, os assentados trazem consigo na memória, como tradição. Mesmo aqueles assentados que passaram por experiências de trabalho urbano carregam em maior ou menor grau as influências da tradição a que estiveram submetidos na infância. Em alguns casos, observa-se que as experiências de trabalho assalariado realizado sob o enfoque da racionalidade empresarial, não elimina a pretensão da autonomia, mas provoca a sua reconstrução conceitual. Não raro, nos depoimentos de assentados nos quais eles avaliam a vida na cidade e as experiências de trabalho, observa-se a autonomia definida como o ideal de poder trabalhar sem estar subordinado a alguém; trabalhar sem ter patrão. Isso explica a tentativa de retorno a terra pela via do assentamento, porque somente nessa situação pode-se reviver os ideais tradicionais rurais da memória, atualizados e reforçados pelo contato com a modernidade urbana.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também enfrenta a força das tradições trazidas pelos assentados. A rejeição às propostas de cooperação do MST, é interpretada como ameaça ao projeto de vida original, porque em qualquer situação desse tipo há a necessidade de submeter determinados aspectos da produção e gestão a decisões grupais. Não raro, o grupo constituído por associados ou cooperados toma a forma do patrão aos olhos do agricultor participante. A despeito de nas associações e cooperativas as decisões coletivas poderem ser tomadas mediante o consenso entre todos os envolvidos, isso não disfarça a intromissão do grupo em assuntos e decisões restritos a unidade familiar, o que se constitui numa ofensa à tradição. Por isto mesmo que, na interpretação do MST, de técnicos do Estado e de estudos acadêmicos, a tradição camponesa constitui os fatores de irracionalidade que devem ser combatidos para que se consiga viabilizar economicamente os assentamentos, mediante a inserção competitiva dos assentados no mercado.

Fundamentação do problema

As primeiras pesquisas realizadas no Brasil para avaliar o potencial econômico e a geração de renda dos assentados foram realizadas no final da década de 1980, cujos



resultados tornaram-se conhecidos mediante a publicação no início da década de 1990, com o que começou um intenso debate.

O debate ocorreu não apenas nas produções tipicamente acadêmicas, como dissertações, teses ou papers publicados em periódicos científicos. Para debater a problemática econômica dos assentamentos foram utilizados também os grandes jornais da época, que se interessaram em transformar os assentamentos em notícia. Pesquisadores e estudiosos dos assentamentos escreviam e publicavam suas análises nos grandes jornais paulistas, e volta e meia suas análises eram contestadas ou apoiadas por representantes do MST ou da extinta União Democrática Ruralista (UDR), entidade criada na segunda metade da década de 1980, para defender os interesses da grande propriedade e da agricultura empresarial no Brasil.

Dentre os aspectos mais apontados nas pesquisas feitas em assentamentos nas décadas de 1980 e 1990, figura a constatação da considerável diferenciação econômica, que rapidamente se instaura entre os assentados na maioria dos projetos executados, cuja causa é em geral creditada a diferentes graus de integração com o mercado, o que por sua vez determina escolhas acertadas ou equivocadas na gestão da terra, resultando, enfim, na disparidade entre os rendimentos obtidos por cada família nos assentamentos.

Algumas pesquisas nesse âmbito tornaram-se famosas e causaram polêmica entre os envolvidos com a área. Dentre os estudos feitos sobre a viabilidade dos assentamentos, destaca-se a princípio a tese de doutorado de Márcio Henrique de Castro (1992), elaborada a partir do levantamento de dados do BNDES, feito com 1517 assentados, que receberam terra antes de 1985. Muitas das objeções à realização de uma Reforma Agrária como política pública distributivista de renda podem encontrar respaldo nesta pesquisa.

A investigação de Castro constatou que, dos assentados acima especificados, apenas 11,9% tinham renda monetária média acima de 6 salários mínimos, 58% obtinham até dois salários e 36% não possuíam sequer 1 salário de renda. A pesquisa concluiu: do total de assentados, apenas 20% deles conseguem se transformar em agricultores profissionais. Para Castro (1992, p. 55), a razão disso seria o arcaísmo da maior parte das unidades produtivas, que são “estéreis ao processo de modernização”, o que tornaria inócuo o investimento do Estado na reforma agrária, sendo mais viável que, ao contrário disso, o Estado gastasse em investimentos nas pequenas e médias cidades do interior, como forma de propiciar ocupação, e assim conter o êxodo rural.



Em oposição à tese da inviabilidade da Reforma Agrária pela insustentabilidade da produção derivada da agricultura familiar, em 1992 foi divulgada uma pesquisa, promovida pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e coordenada por Carlos Guanzirolli, que analisou 44 projetos de reforma agrária, realizados durante a época da Nova República, apresentando resultados diferentes daqueles que subsidiavam as teses defendidas por Castro em sua pesquisa. A pesquisa da FAO mediu a renda dos assentados, compreendendo-a como conjunto de cinco elementos, a saber: renda agrícola líquida, renda animal líquida, renda de consumo, renda de outros trabalhos e outras receitas.

Dividindo o país por regiões, a pesquisa constatou que os assentamentos produziam anualmente 240 mil toneladas de milho, 310 mil toneladas de mandioca e 80 mil toneladas de feijão, quantidade suficiente para alimentar 1,5 milhão de famílias pelo período de um ano.

Naquela pesquisa, os assentamentos do sul foram apresentados como os mais rentáveis, onde cada família obtinha em média 5,62 salários mínimos mensais, seguidos pelos assentamentos do norte, com 4,18 salários/mês/família; do sudeste, com 4,13; do centro-oeste, com 3,85; e por fim, do nordeste, onde cada família possuía em média uma renda de 2,33 salários mínimos mensais. A renda média dos assentamentos no Brasil ficou em 3,70 salários por família, ressaltando que, mesmo no nordeste, lugar de menor renda nos assentamentos, a obtida pelas famílias assentadas superava a média de renda do setor rural daquela região, superando também a renda de 53% dos brasileiros naquela época. Os resultados apontaram ainda que a maioria dos assentamentos possuíam renda que os elevava acima da linha de pobreza, que corresponderia a um quarto de salário mínimo per capita, na zona rural. (FAO, 1992, p. 23)

Com base nestes dados, a FAO classificou os assentados em três categorias: os assentados que se mantinham abaixo da linha de pobreza (de onde provém a maior parte dos desistentes – 22%); um setor intermediário, com rendas entre um e três salários mensais (setor em vias de integração); e o grupo dos agricultores integrados ao mercado, com rendas acima de três salários mínimos mensais.

Conhecendo as dificuldades que circundam a viabilização dos assentamentos em todos os sentidos, durante a década de 1980 a direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) dedicou-se a elaborar um projeto próprio de agricultura familiar, diferente do modelo empresarial, mas igualmente distinto das formas de agricultura familiar



praticadas, fossem elas comerciais ou camponesas, e identificadas pelas pesquisas rurais no Brasil. Trata-se de uma modalidade de produção nomeada como agricultura familiar cooperativada, a ser implantada sob a forma do SCA, que é a sigla do Sistema Cooperativista dos Assentados, criado em 1989, a partir das experiências de associativismo e coletivização, empreendidas nos acampamentos e assentamentos pelo MST desde sua origem, em 1979.

No entanto, a proposta de cooperação tem sido recusada por grande parte dos assentados, que preferem se aventurar sozinhos pelas dificuldades da agricultura familiar a se associar a outros assentados para adquirir a força necessária na luta por espaços no mercado.

Metodologia

O que se pretende apresentar aqui consiste em explorar a possibilidade de assentados conseguirem a inserção no mercado e viabilizarem-se economicamente tendo como elementos de racionalização da produção os pontos fundamentais da tradição camponesa, contrariando o postulado da racionalidade única, supostamente contida nas práticas de associativismo e cooperação.

Para demonstrar a possibilidade de racionalização da produção a partir da reinvenção de elementos da tradição, recorreu-se ao estudo do caso de um assentado na Fazenda Reunidas, localizada no município de Promissão-SP. Este assentamento se destaca por ser o maior do Estado de São Paulo, com cerca de 17.000 ha e 634 famílias distribuídas em 10 agrovilas. O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) distribuiu as famílias de acordo com a cidade ou região de destino, a saber: Agrovila Central: 98 famílias; Agrovila 44: 101 famílias; Agrovila Birigui: 78 famílias; Agrovila Bonifácio: 80 famílias; Agrovila Campinas: 79 famílias; Agrovila Penápolis: 83 famílias; Agrovila São João ou Promissão 30 famílias; Agrovila Cintra ou Promissão: 31 famílias; Agrovila do trevo ou São João: 42 famílias; Grupo dos 12: 12 famílias. Totalizando 634 famílias assentadas.

O Assentamento decorreu de um movimento social que teve início em 1983 e resultou na desapropriação da fazenda, em 1986, pelo Governo Federal. Em 1987 começaram os primeiros assentamentos das famílias nos lotes.

Cada grupo de assentados possui características próprias, pois ao lado daqueles que participaram da luta pela terra mediante a organização política (acampamentos, confrontos com os proprietários e com o Estado), estão aqueles que ao serem



cadastrados pelo Estado (como forma de minimizar os conflitos de terra na região), tiveram acesso à terra. Atualmente, conta com assentados provenientes de 17 municípios da região de Promissão mais o grupo oriundo da região de Campinas. É um dos primeiros assentamentos realizados a partir do 1º Plano Nacional de Desenvolvimento e Reforma Agrária (1º PNRA) realizado no país, e sua escolha, para a execução do trabalho de campo, deve-se ao fato de ser possível verificar ali várias práticas e estratégias simultâneas relativas a reprodução social dos assentados.

A pesquisa, cujos resultados agora são apresentados, foi realizada conjugando a observação participante com a coleta de depoimentos de dois assentados da Agrovila de Campinas, no Assentamento Reunidas. Salienta-se ainda que os dados foram coletados e analisados utilizando a mediação da perspectiva metodológica da reconstrução racional, tal como proposta por J. Habermas. Segundo Poker (2013, p. 221), trata-se esta de uma metodologia que visa interpretar e compreender os fundamentos racionais da argumentação, explicitando os conhecimentos implícitos nos proferimentos, e destacando sobretudo as formas pelas quais as tradições são evocadas de forma estabelecer os fundamentos de correção, verdade e sinceridade nas proposições.

Conforme já fora mencionado, os dois assentados escolhidos para fundamentar esta demonstração, o foram por causa da forma pela qual administram seus lotes. Administrar, no contexto deste estudo, implica o conjunto de ações mediante as quais os assentados, atuando como agentes autônomos, interpretam as situações e tomam decisões que envolvem a gestão da terra e do trabalho, o que abrange escolher o que, quando e como plantar, o quanto trabalhar e a melhor maneira de comercializar o produto obtido pelo trabalho, considerando que se trata de um tipo de produção agrícola inserido no modelo da agricultura familiar. Para efeitos de tornar mais fácil a narrativa, eles serão nomeados como “B1” e “B2”, inclusive porque, de verdade, os nomes deles começam com a mesma letra “B”.

Resultados e discussões

Mediante pesquisa baseada em coleta de depoimentos pessoais e história de vida, constatamos que é impossível pensar os trabalhadores assentados como um conjunto, pois, cada grupo de famílias, ou mesmo cada família, tem uma história de vida diferente.

A trajetória dos dois assentados pesquisados é bastante parecida. Tratam-se de dois filhos de agricultores, com baixa escolaridade, que migraram para a cidade a procura



de melhores condições de vida no começo da década de 1970. Na cidade, trabalharam como assalariados em grandes empresas na região de Campinas-SP, e se envolveram na luta pela terra em meados da década de 1980 devido à participação numa Comunidade Eclesial de Base (CEB) que atuava na paróquia que ambos freqüentavam. Por causa disto, tornaram-se amigos e compadres, vindo ambos a compor o conhecido grupo de Campinas, que à sombra da bandeira do MST, acampou às margens do km 145 da BR 153 no final de 1987, reivindicando o assentamento na Fazenda Reunidas, recém desapropriada.

Os dois assentados também se assemelham bastante quanto a maneira pela qual justificam o ingresso na luta pela terra. Na época em que se envolveram com a CEB e com o MST, eles tinham bons empregos na cidade, mas isso não era suficiente para se satisfazerem em termos de ideais de vida boa. Para eles, o retorno a terra seria a única possibilidade de conquistarem a condição necessária para a aquisição da autonomia na condução da própria vida. Isto sim significava andar para frente, no dizer de um deles, que corresponderia a não trabalhar de empregado, no dizer de outro.

Ambos os assentados também viveram juntos os conflitos que levaram à dissolução da COPAJOTA, uma cooperativa de produção fundada em 1992 dissolvida em 1994 e a fundação da Associação dos Pequenos Produtores da Nova Reunidas (APRONOR), que também foi extinta pouco tempo depois. A partir daquele momento, começaram a trabalhar em parceria para produzir, mas cada um em seu lote. A parceria durou até que um deles teve problemas com a esposa, e a crise no casamento também decretou o fim da parceria. Mas os dois assentados continuam amigos e compadres.

O que de fato chama a atenção na forma como os dois assentados administram os lotes se refere à racionalidade que empregam para fazer as escolhas necessárias e inerentes à gestão da terra e do trabalho.

A começar pela decisão do que plantar, tudo deve ser calculado, e assim, avaliado em termos de viabilidade econômica tendo como referência os limites e possibilidades da força de trabalho doméstica, essencialmente. Isso significa que a decisão sobre o que plantar não pode ser tomada com base nos costumes ou no apreço afetivo por esta ou aquela planta. Mesmo que haja alguma preferência afetiva por algum tipo específico de agricultura, a possibilidade de concretizar a vontade de plantar alguma coisa está subordinada à avaliação realizada a partir de critérios bastante racionais, como a estimativa de rentabilidade a ser obtida, a quantidade de força de trabalho exigida e os



recursos financeiros e infra-estruturais disponíveis para o investimento. Foi raciocinando desta forma que os dois assentados resistiram desde o início do assentamento a enveredar pelo plantio de milho e pela pecuária de leite e corte, práticas estas que atraíram a maioria dos assentados, e que foi a escolha de produção tão logo muitos deles conseguiram seus lotes de terra.

Quando perguntado sobre a forma como escolhe o que plantar, B1 deu dois exemplos para demonstrar a forma como avalia e projeta estimativas. Ele se referiu à escolha de muitos assentados de plantar quiabos no assentamento, que havia ocorrido tempos atrás. Para justificar a razão de não ter seguido a opção da maioria dos assentados, ele disse que observou estar faltando sementes de quiabo para a venda no momento do plantio, e que isso seria um sinal de que muitos agricultores iriam plantar, o que por sua vez geraria uma grande produção, tendo como consequência o preço baixo pago pelos compradores, incidindo na perda de ganho dos produtores.

Ou outro exemplo se referiu à atração que B1 sentiu um tempo atrás para investir na produção de uvas, depois que participou de uma palestra oferecida por um agrônomo. Disse o assentado que a uva era uma cultura bastante rentável, e que para ser produzida no lote não seria muito difícil em termos de infra-estrutura. No entanto, ele preferiu não investir nesta atividade porque a força de trabalho familiar disponível não seria suficiente para a execução das tarefas necessárias ao cultivo. Na época, os dois filhos do casal estavam para se casar, e o assentado ficou receoso de que ele e a esposa ficariam sozinhos no lote, o que acabou não acontecendo.

A racionalidade empregada na tomada de decisões econômicas também pode ser observada claramente na maneira pela qual ambos os assentados se especializaram na produção de determinadas hortaliças. Os dois optaram pelo plantio intensivo de tomates, pimentões e pepinos em estufas, o que ocupa uma pequena área dos lotes, algo em torno de três hectares de terra.

Pela insistência de B1, que há algum tempo percebeu a rentabilidade disso, e resolveu investir também na aquisição de veículos apropriados para este fim, a produção é transportada e comercializada diretamente no CEAGESP, em São José do Rio Preto. Atualmente, quem se ocupa de levar a produção para ser vendida é um dos dois filhos de B1.



Para a satisfação dos pais, os dois filhos do casal se casaram, mas permaneceram por ali. O filho, ao se casar, construiu sua casa em frente à casa dos pais. A filha preferiu morar no lote dos pais do marido. São os dois filhos que agora administram a produção das estufas e se encarregam da comercialização. Eles possuem um caminhão, com o que levam a produção a São José do Rio Preto, e também coletam a produção de outros assentados, que embarcam junto para comercializar tudo na CEAGESP.

Com relação aos filhos, B2 não teve a mesma sorte. Ele tem duas filhas. A mais velha, fruto do primeiro casamento, mora fora do assentamento, e não se interessa por aquilo que o pai faz. A filha mais nova, proveniente do segundo casamento, é uma adolescente que já avisou aos pais que tem outros planos, e isso significa que não quer continuar morando no lote no futuro.

As estufas foram construídas em volta das casas de moradia, de forma que não há perda de tempo em deslocamento. Um dos assentados utiliza o restante da terra disponível para o cultivo de pastagem, e obtém rendimento alugando o pasto para assentados que investiram na pecuária. Nenhum dos dois se dedica a criar galinhas, porcos, vacas, ou a plantar qualquer coisa para a subsistência, para o auto consumo da família. Dizem eles que o custo deste tipo de atividade é muito alto, e que ocorrem desperdícios, porque nem sempre a família consome tudo o que é produzido. Diante disso, dizem eles, é mais vantajoso comprar o que se quer ou precisa de outros assentados ou no supermercado, quando vão à cidade. Assim ocorre com a aquisição de alimentos, como carne, leite, ovos, frutas etc.

Para eles, o plantio ou criação de gado, aves e porcos para subsistência equivaleria a um hobby, uma distração apenas, o que não se enquadra e tampouco seria algo permitido como atividade na terra. Por mais que possam se sentir atraídos por plantarem a própria comida e criarem ali mesmo seus bichos, como demanda a tradição, eles mesmos recusam isso por causa das exigências do cálculo racional.

Outro sinal da racionalidade aplicada na administração do lote pode ser observado na prática compartilhada por B1 e B2 de tratarem a rentabilidade obtida na produção. Os dois afirmam a necessidade de destinar os ganhos para finalidades pré-estabelecidas num planejamento de gastos. Dentre as finalidades, dizem, é preciso destinar parte dos ganhos para re-investir na produção, para a manutenção da casa e alimentação e vestuário da família. Estas são as prioridades.



Os gastos com conforto doméstico e carros são considerados supérfluos, e ficam em segundo plano. Foi assim que os dois assentados conseguiram aproveitar os poucos recursos vindos do Estado, por meio do extinto PROCERA (Programa Especial de Crédito para Reforma Agrária). Sobre o crédito de quatro mil reais que todos os assentados receberam até 1999, B1 e B2 contaram que a maioria dos assentados gastou o dinheiro para quitar dívidas, comprar utensílios domésticos e motocicletas, que muitos ainda usam para ir trabalhar como empregados na cidade, em Promissão. Não sobrou recurso para a produção, e por isso precisam ganhar dinheiro fora do assentamento, disseram os dois entrevistados.

Uma parte dos ganhos é destinada para algo que eles classificam ser de muita importância, e vai para a manutenção do que eles chamam fundo de reserva. Trata-se isto de uma quantia em dinheiro que deve ser guardada todo mês, e que serve para prover o sustento da família nas situações de dificuldade, como quebra de safra, doenças ou danos a infra-estrutura provocadas por fatores inesperados, como tempestades, ventanias, granizos etc.

É desta maneira que as famílias de B1 e B2 vivem desde quando chegaram ao assentamento, o que foi fonte de problemas na convivência com outros assentados, sobretudo nas associações criadas, e depois na cooperativa. A racionalidade empregada por ambos na tomada de decisões contraria a lógica tradicional/afetiva empregada por parte significativa dos assentados na administração dos lotes. Por isso, ambos preferiram seguir sozinhos seus próprios caminhos.

Perguntados sobre como e por que agiam dessa forma, calculando as ações, B1 respondeu que aprendeu a calcular as decisões desde quando era jovem, trabalhava como empregado na cidade e tinha de viver com o salário do mês. B2, por sua vez, disse que aprendeu a calcular e a administrar racionalmente mediante a convivência com B1. Os dois descartam que a aquisição daquela forma de agir tenha sido provocada por influência do MST, no tempo em que participavam do movimento. Ou ainda que a racionalidade na condução da vida tenha sido produto de um aprendizado resultante das experiências obtidas nas associações ou na COPAJOTA, das quais eles também fizeram parte.

Atualmente, B1 está aposentado devido a problemas de saúde, que lhe afetam a locomoção. No momento em que concedia o depoimento, havia acabado de receber seu novo carro, zero quilômetro. Em sua casa, espaçosa e construída em alvenaria,



encontram-se todas as comodidades urbanas, como energia elétrica, água encanada, esgoto, acesso a internet, telefone celular e televisão. Rodeando a casa, estão as estufas, as casas do filho e da sogra, e um barracão, onde o filho guarda o próprio carro e um caminhão pequeno. O caminhão grande fica ao relento.

B2 vive de maneira parecida, mas não está aposentado, embora já tenha idade para isso. É ele mesmo quem cuida do próprio lote, com a ajuda da segunda esposa. Também mora numa boa casa de alvenaria, bastante espaçosa e com todas as comodidades, junto com a esposa e a filha adolescente. Ele também tem um carro novo e um pequeno trator, com o que executa as tarefas rotineiras no lote. Ao redor da casa, há as estufas, a casa da mãe, e quando se anda um pouco mais adiante, encontra-se um pequeno lago, no qual B2 cria tilápias, que eventualmente são pescadas para serem comidas ou para servir como distração para a família e visitas.

O projeto atual de B2 é o investimento em aprendizado para a produção orgânica de hortaliças. Com esta modalidade de agricultura, ele não busca apenas aumentar a lucratividade da produção. Segundo ele, a razão de mudar de forma de produzir convencional para a orgânica se refere à tentativa de encontrar solução para o problema do uso de agrotóxicos nas estufas, que tem lhe preocupado bastante ultimamente. Ele diz que se sente incomodado em utilizar produtos químicos que podem causar doenças tanto nele, como na esposa e nos consumidores.

No entanto, apesar de seus cálculos justificarem o entusiasmo diante da potencialidade apresentada pela agricultura orgânica, tanto em produção quanto em rentabilidade, cautelosamente ele prefere referir-se ao estágio em que se encontra como em adaptação à nova modalidade de produção. Isto porque ele ainda não conseguiu incorporar as técnicas, os cuidados e os insumos para atender a todas as exigências que caracterizam uma produção orgânica das hortaliças em estufas.

Nas experiências que fez nesse sentido, ele plantou tomates seguindo estritamente as recomendações da agricultura orgânica. Os resultados, segundo declarou ele, foram até bons do ponto de vista da produtividade, mas ele lamentou que os frutos, quase todos, foram danificados por insetos, e por isso mesmo não poderiam ser comercializados.

Por fim, quando questionados se tanta disciplina e rigor nos cálculos não lhes incomodava de alguma forma, B1 e B2 responderam de maneira muito parecida. Para ambos, esta é a condição de viabilizar economicamente e de permanecer no lote, sendo



portanto a única maneira pela qual conseguem concretizar continuamente o sonho antigo de voltar à terra, para nela trabalharem com suas famílias, produzirem e viverem com autonomia, isto é, sem ter patrão. Para reforçar o argumento, aproveitando a visita de um outro assentado no momento em que concedia este depoimento, B1 apontou para o visitante e disse que a sua forma de administrar o lote não é assim tão difícil, e que tem conquistado seguidores no assentamento, referindo-se ao fato de que aquele visitante também começou a produzir de maneira calculada.

Conclusões

A pesquisa feita com assentados economicamente bem-sucedidos mostrou que eles adotam estratégias de produção agrícola baseadas na tradição camponesa, que, reinventada se torna princípios para racionalização econômica, mediante a qual os assentados conseguem competir com seus produtos no mercado. Nesse sentido, a emancipação do camponês-assentado contém a satisfação de reviver projetos e utopias inscritos na memória. É uma emancipação que, consumada, contraria razões e desconstrói preceitos lógicos de teorias diversas.

Na reinvenção da tradição camponesa, despreza-se a produção para subsistência, incorporando cálculos econômicos e a ênfase na geração de excedentes mediante a venda de mercadorias. No entanto, permanece, mas de forma sobrevalorizada os conceitos tradicionais de autonomia e gestão familiar/individual da terra, que são os elementos empregados na orientação de escolhas, definição de estratégias, tomadas de decisão e de tudo o mais que cerca a administração racional de uma empresa qualquer.

Notas

¹ Estudante del programa Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Instituto Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca

² Profesora – Investigadora, Instituto Politécnico Nacional/ CIIDIR unidad Oaxaca

Referências bibliográficas

Abramovay, R. (1992) Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo, Brasil: Hucitec.

Castro, M. H. (1992) Reforma Agrária e pequena produção. (Tese de Doutorado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). Campinas, Brasil: UNICAMP.



FAO/PNUD-Mara. (1992) Principais indicadores sócio econômicos dos Assentamentos de Reforma Agrária. Projeto BRA 87/022. Brasília, Brasil: Governo Federal.

Poker, J.G.A.B. (1999) Reinventando a vida. Uma análise da metodologia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para implantar formas de cooperação nos assentamentos de Reforma Agrária. (Tese de Doutorado). São Paulo, Brasil: FFLCH-USP.

_____ (2013) Os sentidos da compreensão nas teorias de Weber e Habermas. Revista Trans/form/ação. vol. 36, p. 221 - 243.

Stedile, J. P. (1997) A questão agrária no Brasil (6ª ed). São Paulo, Brasil: Atual.

Wanderley, M. N. B. (1996) Origens históricas do campesinato brasileiro. XX Reunião Anual da ANPOCS. Caxambu, Brasil: ANPOCS.

Wanderley, M. N. B. (1998) Trajetória social e projetos de autonomia: os produtores familiares de algodão da região de Campinas. Campinas, Brasil: Cadernos IFCH/UNICAMP.



“Lá se vive como aqui”: Reflexões sobre a construção de fronteiras sociais e identidades étnicas de comunidades quilombolas no contexto regional do Baixo Amazonas, Santarém-PA¹

Diego Pérez Ojeda del Arco

Resumo

Considerando os distintos processos identitários étnicos protagonizados por grupos sociais que orientam as suas ações em prol do autorreconhecimento enquanto comunidades remanescentes de quilombo na região do Baixo Amazonas brasileiro, o objetivo geral deste trabalho é analisar a produção da etnicidade partindo do entendimento de que ela não decorre de descontinuidades culturais empiricamente observáveis. Cientes de sua variação, destacamos as complexas relações existentes entre etnicidade e cultura por meio de uma etnografia dos processos políticos de reconhecimento territorial como quilombo feita com base na análise situacional realizada na comunidade quilombola de Surubiu-Açú, última associação comunitária a acionar a categoria étnica na Federação das Organizações Quilombolas de Santarém-FOQS. Assim, levando em conta diferentes escalas de análise, daremos ênfase aos contextos de interação onde a identidade étnica é manifestada, seja na interação social com outras comunidades vizinhas ou com o próprio Estado, na reivindicação de direitos. Com isso, as similitudes presentes nos modos de fazer, criar e viver observadas entre as comunidades quilombolas e “ribeirinhas”, serão comparadas contrastivamente aos diferentes processos de distintividade cultural. É justamente por meio desses processos que sinais diacríticos são eleitos e se tornam relevantes tanto na interação intercomunitária, quanto na configuração de identidades étnicas e políticas. Finalmente, para compreendermos as redes locais interétnicas e intercomunitárias, fundamentadas no parentesco e em outras formas comuns de organização social, será proposta a utilização do conceito de campesinato como instrumento analítico para abordar as formas de organização social dos grupos étnicos, os quais muitas vezes terminam sendo essencializados pelo senso comum.

Palavras-chave

Comunidades quilombolas; identidade étnica; Baixo Amazonas.

Introdução

A partir da constituição brasileira de 1988, que em seu artigo nº 68 dos Atos das



Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT outorga direitos territoriais aos *remanescentes de quilombos* que estejam ocupando as suas terras, vários grupos sociais começaram a orientar as suas ações para acionar dito artigo constitucional, dando início aos seus respectivos processos de auto-reconhecimento, reafirmando dessa maneira suas identidades étnicas como comunidades quilombolas².

A região norte do país não foi estranha a esses processos, e no município de Santarém, localizado na região do Baixo Amazonas, no Oeste do estado do Pará, se tem registro que desde o ano de 2002 algumas comunidades começaram a debater sobre a possibilidade de formar uma Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo³. Dentro desse contexto, e se valendo da publicação de Decretos mais específicos que regulamentavam os processos de titulação dos territórios quilombolas, no dia 10 de março de 2006 foi formalmente criada a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém-FOQS, em torno da qual passaram a se organizar as associações das comunidades quilombolas do referido município⁴.

Com o tempo várias outras comunidades da região também passaram a se auto-reconhecer como quilombolas, se incorporando posteriormente à FOQS. Hoje em dia a Federação está conformada pelas associações de doze comunidades quilombolas distribuídas entre a terra firme, no chamado “planalto” santareno, e a várzea, tanto nas margens do rio Ituqui como do rio Amazonas⁵.

Porém, é importante destacar que a grande maioria das comunidades do Baixo Amazonas não acionou nenhuma identidade étnica propriamente dita, por mais do que nestas, conforme ouvimos em diversas comunidades quilombolas, “se vive da mesma forma do que aqui”. Dessa forma os nossos interlocutores apontaram a existência de grandes semelhanças entre as suas comunidades (auto-reconhecidas como quilombolas) e as outras comunidades vizinhas; isto no que diz respeito à realização de atividades socioeconômicas relacionadas à agropecuária, à pesca, assim como também a outras manifestações culturais, como a participação em campeonatos de futebol intercomunitários, festas de santo, casamentos intercomunitários, etc.

Desta forma, o presente artigo pretende analisar, em primeiro lugar, a conformação da identidade étnica das comunidades quilombolas do Baixo Amazonas, a qual é frequentemente construída a partir da presunção de uma origem comum compartilhada que toma como referência distintos processos históricos presentes na memória social. Por sua vez, se dará ênfase também aos distintos contextos de interação onde a referida



identidade é manifestada, já seja na interação social com outras comunidades vizinhas ou com o próprio Estado.

Em segundo lugar, e de acordo ao material etnográfico coletado, se indagará sobre como as diferenças étnicas entre as comunidades quilombolas e as comunidades “ribeirinhas” da região não se traduzem necessariamente em diferenças culturais significativas entre as mesmas. Assim sendo, e para o melhor entendimento da situação social aqui apresentada, será proposta a utilização do conceito de campesinato como categoria analítica para que possa auxiliar às categorias étnicas atualmente utilizadas que, como podemos observar, às vezes terminam essencializando a certos grupos.

Finalmente, e levando em conta essa escassa distintividade cultural antes mencionada, se questionara o porquê dos direitos das comunidades ribeirinhas e das demais populações tradicionais parecem ser mais vulneráveis do que aqueles que resguardam os interesses de comunidades etnicamente diferenciadas. A maneira de ilustração se comentará sobre a atual discussão que gira em torno da aplicabilidade ou não às populações e comunidades tradicionais do direito à Consulta Prévia, Livre e Informada contemplada na Convenção nº169 da OIT.

O componente étnico das comunidades quilombolas

Para entender o viés da etnicidade por meio da qual o Estado brasileiro passou a reconhecer às comunidades remanescentes de quilombo considero que não cabe agora fazer uma revisão histórica nem do período da escravidão nem da gênese do conceito quilombola, temas sobre os quais se tem discutido arduamente em diversas outras publicações (Funes, 1996; O’Dwyer, 2002; Oliveira, 2016; Salles, 1971). Interessa sim destacar como a partir da promulgação da Lei Áurea em 1888, deixaram de fazer sentido, pelo menos para as classes políticas dominantes, aqueles Quilombos ou Mocambos estabelecidos por negros escravizados que fugiam do controle do regime escravocrata. Como consequência disso, durante o período republicano se constatou “um silêncio nos textos constitucionais sobre a relação entre os ex-escravos e a terra” (Almeida, 2002, p.53); o qual, como assinalado anteriormente, só chegou a ser interrompido 100 anos depois com a constituição democrática de 1988 que, em seu artigo nº 68 dos ADCT, outorgou direitos territoriais aos *remanescentes de quilombos* que estejam ocupando as suas terras, sendo-lhes garantida a titulação definitiva.



A partir daí se fez necessário pensar também na efetiva regulamentação do referido artigo constitucional, o que abriu espaços para amplos debates acadêmicos que levaram a reconfigurar o conceito de “quilombo”. O mesmo ficou permeado por uma nova gama de significações que o libertaram das definições historiográficas e escravocratas às quais tinha estado fortemente ligado no passado. Vale destacar que nesses debates a disciplina antropológica ocupou um lugar central, tendo uma participação importante por meio da Associação Brasileira de Antropologia-ABA.

Passaram então a ser questionadas formas de identificação e classificação estranhas aos próprios grupos, muitas das quais estavam baseadas em critérios puramente “historiográficos”, “arqueológicos”, “raciais” e/ou “culturais”, em busca do “sentido” considerado “correto”, “puro” e “verdadeiro” (O’Dwyer, 2010, p.14).

Precisamente, um dos resultados mais importantes dessas discussões foi o consenso estabelecido que sugeria pensar às comunidades *remanescentes de quilombo* a partir do seu componente étnico. Sian Jones sintetiza aos grupos étnicos como qualquer grupo de pessoas que se diferenciam ou se separam de outros grupos, com os quais interagem ou coexistem, com base nas suas percepções de diferenciação cultural e/ou descendência comum (Jones, 1997). Ainda sobre a descendência comum, é importante frisar que esta seria uma crença subjetiva, “sendo indiferente a relação de sangue efetiva” (Weber, 2000, p.270).

Por sua vez, levando em conta os aportes teóricos de Fredrik Barth, a prevalência destes grupos étnicos não radicaria na manutenção dos seus traços culturais (os quais evidentemente poderiam mudar), mas sim na criação de *fronteiras* criadas e mantidas pelos mesmos. Por isso, dito autor assinala a necessidade de tornar como foco central das investigações as fronteiras étnicas que definem os grupos, e não ao conteúdo cultural por eles delimitado (Barth, 2000, p.32). Dessa forma a auto-identificação passou a ocupar um lugar de destaque no reconhecimento étnico, sendo esse o processo mediante ao qual os integrantes do grupo criam seus próprios critérios de pertencimento, definidos pelo antropólogo norueguês como sinais diacríticos.

Assim, o destaque ao auto-reconhecimento ficou evidente tanto no cenário nacional como internacional. No Brasil proliferaram as publicações de Decretos, que diziam respeito à regulamentação dos processos de titulação de territórios quilombolas, nos quais se levava em conta o caráter auto-identitário destes grupos. Veja-se por exemplo o Decreto nº 4887/2003, que define às comunidades quilombolas com “grupos étnico-



raciais, segundo critérios de autoatribuição⁶; ou o Decreto n° 6.040/2007, que tem como um dos seus objetivos “reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais”⁷. Já no cenário global, foi a Convenção n°169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT⁸, da qual Brasil é signatário⁹, a que outorgou um arcabouço jurídico internacional ao auto-reconhecimento, sendo este considerado como “critério fundamental para a identificação dos grupos”¹⁰. Dessa maneira, os processos de auto- reconhecimento poderiam ser realizados sem a necessidade de um observador externo que os identifique e autorize. Pratica esta que no passado foi exercida tanto por representantes dos governos, como também por antropólogos e demais cientistas sociais, que, por muito tempo, foram considerados “peritos especializados” nessas discussões.

Alguns poderiam argumentar que pese a isso o trabalho do antropólogo ainda continua sendo requerido ao se tratar de grupos étnicos, como evidentemente acontece com o INCRA, a autarquia a quem cabe a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Dentro das Instruções Normativas publicadas pelo INCRA, as quais regulamentam os procedimentos de titulação, se encontra efetivamente estipulada a realização de Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação-RTID¹¹, os quais incluem, dentre outros, os estudos e relatórios antropológicos, popularmente conhecidos como “laudos antropológicos”.

Mas é importante destacar que os mesmos nem sempre foram aceitos, precisamente porque se temia que estes pudessem deslegitimar o auto-reconhecimento dos grupos. Por sua parte, a ABA se posicionou rapidamente argumentando que “a auto- definição utilizada pelos próprios atores sociais não prescinde da realização de estudos técnicos especializados que venham a descrever e interpretar a formação de identidades étnicas” (O’Dwyer, 2010, 32). Nesse sentido, os laudos antropológicos poderiam fornecer elementos, à luz duma disciplina já institucionalizada e legitimada no país, com os quais seria possível defender os direitos diferenciados destes grupos inclusive em instancias judiciais. O que de fato ocorreu no 2004, quando o Decreto n° 4887/2003 e o próprio

direito à autoidentificação das comunidades quilombolas foram questionado pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), ao interpor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN n°3.236) perante o Supremo Tribunal Federal-STF¹². A partir daí a perspectiva da ABA passou a vigorar, sendo aprovada pelo INCRA, no ano



de 2005, uma portaria que previa a elaboração dos estudos e relatórios antropológicos já antes mencionados¹³.

Em vista disso, e frente à atual conjuntura de instabilidade política que abre espaço para posicionamentos que deslegitimam o reconhecimento étnico de comunidades quilombolas, inclusive do planalto santareno.¹⁴ vale mencionar mais uma vez que os laudos antropológicos sérios em nenhum momento visam questionar a auto-identificação dos atores sociais, posto que:

O antropólogo não deve revestir-se de uma autoridade acadêmica que supostamente o capacita a informar ou mesmo negar a identidade de grupos étnicos (...), pois indubitavelmente, em última análise, cabe aos próprios membros dos grupos étnicos se autoidentificarem e elaborarem seus próprios critérios de pertencimento e exclusão, mapeando situacionalmente as suas fronteiras étnicas. (...). Ao antropólogo cabe, pois, o papel de identificar a estruturação interna do grupo e os seus processos sociais interativos, isto é, não definir, mas contextualizar o grupo, utilizando como parâmetro as classificações e categorias nativas de autoidentificação. (Brasileiro; Sampaio, 2002, p. 91,92).

A origem comum compartilhada

No contexto regional do Baixo Amazonas, as comunidades remanescentes de quilombo hoje vinculadas à FOQS acionaram seus direitos constitucionais diferenciados por meio do estabelecimento, como sinal diacrítico de pertencimento, de uma descendência comum presumida com os escravos fugidos que tempo atrás habitaram essa mesma região.

Além disso, a relativa diversidade fenotípica presente nas comunidades quilombolas (as quais são recorrentemente pensadas como sendo de exclusividade negra baixo preceitos ligados a categorias estritamente raciais já bastante ultrapassadas nas ciências sociais) foi por eles mesmos relacionada a diversos acontecimentos históricos ocorridos na região (O'Dwyer, 2011). Um destes fazia referência direta à Cabanagem, revolta popular e social ocorrida na antiga Província do Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840, e que teve como uma das suas características precisamente a grande diversificação encontrada entre seus integrantes, denominados como cabanos, que envolvia indivíduos considerados “brancos”, de origem europeia, “negros”, de origem africana e trazidos como escravos, indígenas, e outros considerados “ mestiços”, “ caboclos”, “cafuzos”, “mulatos”.



No livro *O Negro no Pará* (1971), Vicente Salles aponta que a miscigenação se fez intensamente presente na Amazônia e na capitania do Pará, onde a massa da população escrava não foi exclusivamente negra (com exceção dos chamados africanos “natos”), apresentando o “crioulo” múltiplas combinações étnicas, passando todas estas a compor a chamada “população de cor”, que foi igualmente escravizada. Ainda, de acordo com Vicente Salles, na Cabanagem “o negro que até então fugia para os mocambos distantes, aderiu em massa ao movimento, pretendendo alcançar a liberdade” (Salles, 1971, p.212); mas esta não lhe foi concedida, e após a Cabanagem os quilombos se multiplicaram em quase toda a Amazônia, como pode-se comprovar por meio de diversas fontes escritas da segunda metade do século XIX.

Nesse sentido pode-se trazer aqui, a maneira de exemplo, o caso da comunidade quilombola de Surubiu-Açú, cujos membros legitimam a sua origem comum presumida naquele acontecimento histórico ainda bastante presente na memória coletiva da população local, como o evidenciam muitos dos depoimentos coletados em campo:

No verão, quando seca e a restinga é grande, tem pessoas que já tem pegado vasilha de barro aqui na comunidade. Também em Cabeça D’Onça (comunidade vizinha) tem se encontrado muita coisa, já acharam crucifixo, corrente, acham muita coisa lá. De menino me contaram que lá acharam uma corrente muito grossa enterrada na terra. Isso tudo é da época dos cabanos. (Sr. Aldo Ernesto dos Santos Menezes, comunidade quilombola de Surubiu-Açú, Santarém, 18 de junho de 2018).

Outro depoimento fala também sobre mais objetos materiais achados:

Antes nós tínhamos um trabalho lá embaixo, e na saída existia muito pedaço de material de porcelana, barro, coisas feitas com o dedo. Aí, um dia meu irmão estava andando e me disse “rapaz não acredito!”. E ele pegou um crucifixo de ouro! Ele guardou, ainda ele tem, 3 gramas e oito décimos, ouro mesmo. Também é possível encontrar muita capsula de rifle, projeteis achatados. Não sei se ainda dá para ver, mas tinha vasilha de toda espécie, vasilhas de porcelana, vasilha de prata com desenhos; também há muitos anos eu achei umas pedrinhas, umas bolinhas enterradas, parecia metal. Tudo foi achado na mesma área daqui, mas na outra comunidade, em Cabeça D’Onça, lá embaixo, na boca do rio chamada Patucu, bem perto. (Sra. Maria Domingas dos Santos Menezes, comunidade quilombola de Surubiu-Açú, Santarém, 18 de junho de 2018).

Não é de surpreender que dentro da área da comunidade quilombola de Surubiu- Açú não se tenham encontrado muitos objetos materiais, e isto devido a que antigamente



não existia o território atualmente ocupado pela comunidade, tendo este surgido há 60 anos pelo fenômeno das “terras crescidas”¹⁵. De qualquer forma, vale mencionar que o fato de que os objetos materiais não tenham sido encontrados exatamente dentro do território reivindicado como quilombola não deslegitima a memória social do grupo. O que realmente importa são as histórias às quais estão ligados esses objetos mencionados nas falas, os quais por si mesmos comprovam a existência de comércio e intensa mobilidade naquela região. Além do mais, vale lembrar que antigamente todo fazia parte de uma mesma grande área, já que foi só com o transcorrer dos anos que as comunidades foram sendo criadas e desmembradas de conjuntos territoriais maiores, em muitos casos obedecendo a questões meramente administrativas.

Esse é o caso da região de Aritapera, uma vasta extensão territorial que hoje em dia agrupa à comunidade quilombola de Surubiu-Açú e a outras treze comunidades ribeirinhas¹⁶. O interessante daquela região é que, pese a compartilhar uma mesm

história, somente uma comunidade chegou a se auto-reconhecer como remanescente de quilombo.

Partindo daquele caso empírico, não se indagará aqui nem sobre os possíveis motivos que levaram ao autoreconhecimento étnico da comunidade quilombola em questão, nem sobre o porquê das outras comunidades ribeirinhas não terem acionado a identidade quilombola para si. O que se tentara, a partir desse caso, é compreender a existência de diferenças étnicas entre as comunidades da várzea sem que estas se traduzam necessariamente em diferenças culturais significativas entre as mesmas.

Lá se vive como aqui, da mesma forma que aqui

Numa das visitas realizadas à comunidade quilombola de Surubiu-Açú aconteceu uma situação específica que terminou sendo bastante reveladora. Esta surgiu a partir da pergunta, realizada por simples curiosidade, sobre a existência, ou não, de algum tipo de relação entre eles e a comunidade ribeirinha de Surubi-Mirim, devido a que ambas apresentam nomes bastante similares. Em Surubiu-Açú nos responderam que Surubi-Mirim ficava “um pouco mais para lá”, e que não pertencia mais ao município de Santarém e sim ao município de Alenquer, que se localiza a uma distância bastante próxima da comunidade, literalmente do outro lado do rio. Se perguntou então se é que lá se levava uma vida similar à que eles levavam, ao que responderam que “não muito”, isto devido a que, segundo nos indicaram, em Surubi-Mirim se plantava pouco, sendo



naquela comunidade a criação de gado e a pesca as principais fontes de renda.

Levando em conta essa primeira resposta, se passou a perguntar então quais eram as atividades que se realizavam em Surubiu-Açú, nos respondendo que ali se plantava, se pescava e também se criavam gado; quer dizer, nos foi indicado que realizavam exatamente as mesmas atividades que na outra comunidade, tendo uma diferenciação no grau de intensidade da atividade agropecuária, que eles diziam trabalhar mais. As indagações nesse sentido continuaram de nossa parte, e por meio das respostas que nos brindaram foi possível perceber como, mesmo não sendo totalmente aceitas num primeiro momento, posteriormente as semelhanças entre ambas comunidades foram reconhecidas pelos próprios moradores da comunidade quilombola de Surubiu-Açú, que inclusive chegaram a assinalar um “parecido” no modo de viver mantido com todas as outras

Água Preta e Ilha do São Miguel. Todas as comunidades fazem parte do Conselho regional de Aritapera, uma das regiões do Município de Santarém, PA.

comunidades da região, terminando por nós disser que, “lá se vive como aqui, da mesma forma que aqui”.

Estas semelhanças assinaladas transbordavam à realização de atividades puramente econômicas, sendo posta em evidencia uma similaridade que poderia ser denominada como cultural, posto que abrange as relações sociais como um todo. Hipóteses esta que se reforça levando em conta as festas de padroeiro realizadas nas distintas comunidades, as quais contam com a presença de comunitários de toda a região; os casamentos entre comunidades, jocosamente chamados por eles de “roubos” como categoria nativa; a atuação da igreja católica por meio da Dioceses, que coloca um coordenador para todas as comunidades da região, sendo estas quilombolas ou não; os campeonatos de futebol intercomunitários, que conta com a participação de “jogadores quilombolas” no chamado “campeonato ribeirinho”, entre outros.

Desta maneira, o contexto etnográfico aqui mencionado permite assinalar que, enquanto a identidade étnica das comunidades quilombolas do Baixo Amazonas é frequentemente construída a partir da noção de ancestralidade comum que toma como referência à Cabanagem e/ou a outros processos históricos presentes na memória coletiva, as práticas culturais referem-se a representações, costumes e normas que são comuns a todas as demais comunidades da região. Assim, as observações sugerem que podem



haver diferenças étnicas no que se refere à origem comum e ao parentesco presumido, principalmente com relação a outras comunidades ribeirinhas, sem que isso implique em diferenças culturais significativas entre elas (Eidheim, 1969; Eriksen, 1991).

Por isto, e na procura de um melhor entendimento da situação social até aqui apresentada, será proposta a utilização do conceito de campesinato como categoria analítica para que este possa auxiliar às categorias étnicas atualmente utilizadas que, como podemos observar, às vezes terminam essencializando a certos grupos que, ao igual que seus grupos vizinhos, compartilham os mesmos “modos de criar, fazer e viver”¹⁷. Dessa forma, e em concordância com o antropólogo Fabio Murra¹⁸, pretendemos chamar a atenção para a importância de entender aos grupos etnicamente diferenciados, antes que nada, como grupos domésticos que se relacionam e organizam politicamente a nível local.

Temos consciência de que o campesinato hoje em dia pode ser entendido como uma “noção problemática” (Velho, 2007, p.15), principalmente quando se tenta utilizar o

conceito para fazer referência a grupos étnicos. Evidentemente não é o intuito do presente trabalho trazer de volta aquela noção de “Campesinato histórico”, consolidada a partir da segunda metade do século XX, que entendia ao campesinato a partir da sua identidade de classe (por mais que dito conceito classista ainda seja reivindicado por diversos coletivos políticos¹⁹). Tampouco se pretende relegar às distintas identidades étnicas a uma posição subordinada como sendo simplesmente “vertentes distintas de um bloco amazônico camponês”²⁰.

Muito pelo contrário, respeitamos, defendemos e acreditamos nas reivindicações identitárias dos grupos étnicos, assim como na importante pauta que marcam na agenda política do país e do continente. Porém, entendemos que a utilização do campesinato, como conceito e não como categoria política, fornece um outro enfoque por meio do qual também é possível estudar às comunidades quilombolas do Baixo Amazonas, cujos moradores, assim como a grande maioria dos moradores da região, fazem parte dum “campesinato polivalente”²¹ (Castro, 1998, p.7) ao exercer distintas atividades socioeconômicas²².

Por conseguinte, as formas de organização social das comunidades quilombolas não deveriam ser analisadas exclusivamente à luz das teorias da etnicidade, sob o risco de se ter uma compreensão menos abrangente das mesmas. Frente a isso, a utilização de



teorias que tratam sobre as particularidades da unidade econômica camponesa tem auxiliado muito no melhor entendimento da organização e da dinâmica das distintas comunidades da região, sejam estas tanto quilombolas quanto ribeirinhas. Desse modo, as unidades de produção familiar comumente presentes em ditas comunidades podem passar a ser pesquisadas mediante enfoques teóricos clássicos do campesinato, como os trazidos por Chayanov, que evidenciam, mediante o estudo dos “sistemas econômicos não capitalistas”, uma lógica de produção familiar própria que não se baseia no trabalho assalariado, mas sim na denominada “auto-exploração familiar”²³ (Chayanov, 1981).

Agora, que a lógica de produção dos grupos domésticos estudados seja diferente à lógica de produção capitalista não equivale a dizer que os mesmos se encontram à margem do sistema econômico no qual evidentemente estão inseridos, como muitos críticos de Chayanov afirmaram erroneamente (Pérez, 1983, p.66). De igual maneira, afirmar que o movimento da circulação de mercadorias na produção camponesa é distinto ao da produção capitalista por prevalecer a produção de *valores de uso* por sobre os de *valores de troca* (Oliveira, 2001, p.52; Silva, 2009, p.55)²⁴ tampouco pode ser entendido como um intento por relegar a essas populações para fora do *Sistema Mundial* contemporâneo.



Figura 1. Grupo familiar da comunidade quilombola de Surubiu-Açú composto por Rosilete Menezes Cardoso, Trinidad Correa de Souza (que naquele momento se encontrava pescando), e os dois filhos do casal que permaneceram na comunidade, Rosivam e Rivaldo. Na foto encontram-se arrumando os produtos que serão comercializados na feira da cidade de Alenquer. Dentre os produtos podem-se encontrar “cachos de banana grande”, jerimum, cheiro verde, pimentinha, mandioca e diversas espécies de peixe. Data: 25 de outubro de 2018.

Fonte: Acervo pessoal



O que sim vale a pena assinalar é que, na região do Baixo Amazonas, as comunidades quilombolas e ribeirinhas, as quais foram aqui apresentadas como pertencendo a um mesmo tipo de “campesinato de várzea”, são por sua vez compreendidas baixo a categoria mais ampla de “povos tradicionais”²⁵. Nesse sentido, mesmo não sendo colocadas à margem ou fora do sistema econômico, as comunidades chamadas de tradicionais, ao igual que o foram historicamente as distintas realidades camponesas, são comumente entendidas como contrastivas ou como obstáculos à mudança e a modernidade (Grynszpan, 2002, p.129; O’Dwyer, 2013, p.123; Ploeg, 2008, p.35).

Frente a isso, cabe questionar porquê, pese as grandes semelhanças nos modos de vida e a escassa distintividade cultural, como se evidenciou no caso aqui apresentado, as comunidades ribeirinhas e grande parte das demais populações tradicionais parecem encontrar-se em desvantagem, no que diz respeito à defesa dos seus direitos e interesses, frente a aquelas comunidades que acionaram alguma categoria étnica de grupo.

A aplicabilidade da Consulta Prévia, Livre e Informada

Sobre a terra coletiva, eu entendo que o quilombola e o indígena têm apoio, diferente a nós que ficamos no coletivo e não temos apoio; se a gente vai ao banco não temos financiamento porque a nossa área não tem documento como garantia. Nosso problema não é só o coletivo, se o coletivo tivesse apoio beleza, mas o problema é que não temos apoio em nada. (Sr. Jose Paulino, comunidade ribeirinha de Acutireça, Lago Grande do Curuai, Santarém, 15 de junho de 2018).

A fala aqui transcrita de uma liderança ribeirinha do município de Santarém traz o sentir de boa parte dos moradores das comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas ao expor um certo sentimento de abandono por conta da ausência do Estado. É verdade que essa percepção de ausência estatal é bastante recorrente e evidentemente não se cerne só as comunidades ribeirinhas de várzea; porém, o interessante das declarações do nosso interlocutor é que, ao comparar a sua própria realidade com a realidade das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas vizinhas, sente que a sua comunidade não conta com o apoio que essas outras comunidades etnicamente diferenciadas sim recebem, tal vez fazendo referência implicitamente à interlocução que as mesmas mantem junto com a Fundação Cultural Palmares- FCP e a Fundação Nacional do Índio- FUNAI, respetivamente.

Do mesmo modo, um outro caso que ajuda a pensar dita situação é o debate que gira em torno da aplicabilidade ou não do direito à Consulta Prévia, Livre e Informada,



contemplada na Convenção nº169 da OIT, às populações e comunidades tradicionais; o que evidencia a disparidade de condições com as quais distintas comunidades visam a defender seus direitos.

A diferença de outros países da região, que além de ratificar a Convenção nº 169 da OIT investiram também na regularização da consulta prévia por meio da criação de leis específicas que assegurassem seu cumprimento, no Brasil a consulta não chegou a ser regulamentada. No ano de 2012 inclusive se chegou a instituir, por meio da Portaria Interministerial nº35, um Grupo de Trabalho Interministerial que tinha a finalidade de “estudar, avaliar e apresentar propostas de regulamentação da Convenção nº 169 da OIT no que tange aos procedimentos de consulta prévia dos povos indígenas e tribais”²⁶. Porém, o Grupo de Trabalho Interministerial fracassou na sua tentativa de regulamentar a consulta, em grande parte devido à saída do movimento indígena do processo de diálogo, como consta na Carta Pública emitida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil- APIB, encaminhada em julho de 2013, onde, entre outras coisas, se justifica a saída do processo alegando-se a inexistência de boa-fé por parte do Governo²⁷.

É importante assinalar que os representantes do movimento quilombola que participavam do Grupo de Trabalho decidiram não se retirar daquele processo de diálogo posto que, a diferença das populações indígenas, eles não tiveram desde sempre assegurado o seu direito à consulta. Assim, “o Governo brasileiro somente passou a reconhecer às comunidades quilombolas enquanto povos tribais a partir de 2008” (Rojas; Magami; Magalhães, 2016, p. 17), quando as incluiu pela primeira vez nos relatórios anuais enviados a uma comissão de especialistas da OIT. Já as demais chamadas populações tradicionais, por sua parte, não receberam ainda um reconhecimento semelhante por parte do Estado, fato pelo qual o seu direito a serem consultados corre o risco de ser questionado.

De qualquer forma, a falta da regulamentação da consulta prévia no Brasil não foi, como poder-se-ia pensar, prejudicial, posto que, em primeiro lugar, a ausência de uma regulação específica não afetou a obrigatoriedade da aplicação da consulta, já que a Convenção nº 169 da OIT, ao dispor sobre os direitos humanos, foi incorporada à legislação brasileira na qualidade de norma supralegal, possuindo assim aplicabilidade imediata. Em segundo lugar, porque as experiências de regulamentação da consulta prévia em países vizinhos do continente sul-americano têm-se mostrado, na maioria dos casos, contraproducentes.



Veja-se, a título de exemplo, a regulamentação da consulta prévia realizada no Peru, onde no ano de 2011 se aprovou a "Lei do direito a consulta prévia aos povos indígenas originários, reconhecido na convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT"; a mesma rapidamente evidenciou uma série de incongruências, sendo, por citar algumas destas, não exatamente uma lei de consulta prévia e sim de “consulta posterior”, posto que o Estado determinou que a consulta às populações seja feita antes do início das atividades de extração de recursos ou implantação de projetos, mas depois da assinatura dos contratos.²⁸

Tal vez seja por isso que a regulamentação da consulta prévia no Brasil deixou de ser uma das pautas levantadas tanto pelos povos indígenas como pelos povos tradicionais em geral, posto que, na atual conjuntura nacional, qualquer regulamentação da consulta correria o risco de terminar sendo extremamente restritiva e excludente. Frente a isso, o meio que estas populações têm encontrado para poder garantir efetivamente o direito à consulta tem sido a individualização e judicialização dos casos, aos quais a Justiça tem se mostrado favoravelmente em razão dos demandantes, inclusive quando se trata de comunidades tradicionais.

Precisamente isso foi o que aconteceu em Santarém no ano de 2016, quando foi apresentada, em conjunto pelo MPF/PA e o MPE/PA, uma Ação Civil Pública com pedido de liminar que visava à suspensão do licenciamento ambiental do projeto de construção do chamado “Porto de Maicá”, até que seja realizada a consulta prévia, livre e informada das comunidades quilombolas e demais populações tradicionais da região que iriam se ver diretamente afetadas pela instalação do referido empreendimento portuário²⁹.

Considerações finais

Partindo de uma detalhada revisão do auto reconhecimento étnico das comunidades quilombolas de Santarém, as quais hoje em dia conformam a FOQS, foi possível assinalar a escassa contrastividade cultural entre estas e as comunidades ribeirinhas vizinhas, podendo assim ser comprovadas empiricamente teorias da etnicidade que assinalavam a possibilidade de existir diferenças étnicas entre grupos sem que isso se traduza necessariamente em diferenças culturais expressivas entre os mesmos.

Por sua vez, e levando em conta esses primeiros resultados que baseados no material de campo evidenciaram uma similaridade na realização de atividades econômicas e



sociais, foi proposta a utilização do campesinato como categoria analítica para fazer referência igualmente a ambos grupos, também considerados como “povos tradicionais”. Coincidentemente, tanto os povos tradicionais como as chamadas sociedades camponesas, as quais cada vez se encontram mais ausentes nos trabalhos de viés antropológico, foram igualmente vistos, sem distinção, como contrastivo à modernidade.

Pese a isso, foi possível observar diferenças na luta pelo cumprimento de direitos destes distintos tipos de povos tradicionais posto que, enquanto as comunidades quilombolas tem legalmente reconhecido seu direito à Consulta Prévia, Livre e Informada contemplada na convenção nº 169 da OIT e contam com organismos oficiais do Estado que teoricamente seriam os encarregados de velar pelos seus interesses; as comunidades ribeirinhas não tem nem assegurado o reconhecimento oficial do direito à Consulta Prévia, nem nenhum órgão estatal designado para que possa velar pelos seus interesses específicos, o que faz com que se sentam completamente abandonadas.

Notas

¹ Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho n.5, no **XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019**, realizada entre os dias 01 e 06 de dezembro de 2019, Lima, Peru.

² Entenda-se como comunidades ao termo localmente utilizado para se referir a grupos de unidades residenciais reunidas numa mesma localidade, onde são estabelecidos critérios próprios que, entre outras coisas, regulamentam a utilização de recursos em um território de uso comum. Para uma revisão mais minuciosa sobre a história de dito termo, revisar Wiggers, R; Ratier, H & Rodrigues, C. (org.). 2012. *Comunidades Rurais: organização, associações e lideranças*. Manaus, AM: Editora da UFAM.

³ O'Dwyer, E. C. 2005. A construção da Várzea como problema social na Região do Baixo Amazonas, in *Diversidade socioambiental nas Várzeas dos rios Amazonas e Solimões: Perspectivas para o desenvolvimento da sustentabilidade*. Lima, D. (Org.). Manaus: IBAMA/ProVárzea.

⁴ Veja-se por exemplo o Decreto nº 4887/2003 (20/11/2003) que regulamenta o procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 dos ADCT. Esta regulamentação, por sua parte, vem sendo realizada atualmente conforme a Instrução Normativa nº 57/2009 do INCRA, na qual se faz uso de vários outros fundamentos legais, entre os quais destacam os artigos 215 e 216 da



Constituição Federal; o Decreto nº 6.040 (07/02/2007); e a Convenção nº169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT.

⁵ Segundo assinala Deborah Lima (Lima, 2005, p.11), ao longo dos 3.000km de extensão dos rios Solimões e Amazonas, em terras brasileiras, podem-se encontrar dois tipos de ambientes: a várzea, como é chamada a área de planície inundada anualmente, e a terra firme, terras altas que consistem em extensões do platô do período terciário que alcançam as bordas do rio.

⁶ Decreto nº 4887/2003, art.2º: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.

⁷ Decreto nº 6.040/2007, art.3º, inciso VI: “reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos”.

⁸ Em 1989 a OIT apresentou a Convenção nº 169, “sobre povos indígenas e tribais”, a qual substituiu à antiga Convenção nº 107.

⁹ No Brasil o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção nº 169 da OIT, por meio do Decreto Legislativo nº 143, no dia 20 de junho de 2002. O Governo brasileiro passou a ratificar a convenção no dia 25 de julho de 2002, a qual entrou plenamente em vigor só um ano depois, em 25 de julho de 2003.

¹⁰ Convenção nº 169 da OIT, art.1º, inciso II: “A autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção”.

¹¹ ORTID aborda informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas. Regularização de território quilombola, perguntas e respostas. INCRA. <<https://bit.ly/3nCJara>>. Acesso: 21/05/18.

¹² Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal-STF declarou a validade do Decreto 4.887/2003, garantindo, com isso, a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas. A decisão foi tomada na sessão da quinta-feira 08 de fevereiro de 2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIN nº.3.236, julgada improcedente por oito ministros.<<https://bit.ly/30SfKLD>>. Acesso: 29/05/18.



¹³ "O INCRA aprova a Instrução Normativa nº 20, de 19 de setembro de 2005, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. (...) A identificação será feita a partir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de estudos técnicos e científicos, inclusive relatórios antropológicos". <<https://bit.ly/30RiBET>>. Acesso: 29/05/18.

¹⁴ "Declaração e Nota Pública do Antropólogo Edward Luz sobre o Reconhecimento do INCRA do suposto Quilombo do Tingu". Jornal O Estadonet, Santarém. 16/10/2018.

¹⁵ As chamadas "terras caídas" e "terras crescidas" são fenômenos naturais que se encontram em estreita relação com as estações climáticas conhecidas como o "verão" e o "inverno" amazônico. É no período do "verão", quando o nível das águas começa a descer, que as margens dos rios começam a ficar expostas a uma velocidade muito rápida, ficando assim cada vez mais pronunciadas as distâncias que passam a separar a terra firme do nível do rio. Estas distâncias, que pode variar de 1 a 2 metros de altura, fazem com que as bases expostas das margens dos rios fiquem cada vez mais instáveis por causa da correnteza. Pouco a pouco a terra vai cedendo até que grandes pedaços de terra se desmoronam por completo, terminando depositados tanto no fundo como em margens opostas do rio, fazendo assim "cair" e "surgir" grandes pedaços de terra.

¹⁶ As 14 comunidades da região de Aritapera são a comunidade quilombola de Surubiu-Açú, Centro do Surubiu-Açú, Praia do Surubiu-Açú, Ponta do Surubiu-Açú, Cabeça D'Onça, Santa Terezinha, Enseada do Aritapera, Centro do Aritapera, Costa do Aritapera, Boca de cima do Aritapera, Mato Alto, Carapanatuba,

¹⁷ Art. 216º, inc. II. Da Constituição Federal de 1988.

¹⁸ Seminário *Laudos & Direitos Humanos: Antropologia em Ação*; Mesa Redonda 2: *Demandas por Laudos e possibilidades de ação*. Belém, PA, 26 jun. 2018.

¹⁹ Trocate, C. (org.). 2017. Ideias para o pensamento político da Via Campesina na Amazônia 2004-2013, In: *Quando as armas falam as musas calam?* Marabá: Editorial iGuana.

²⁰ Trocate, C. (org.). 2017. Assembleia dos movimentos sociais da Amazônia, In: *Quando as armas falam as musas calam?* Marabá: Editorial iGuana.

²¹ Agricultores, agro-extrativistas, seringueiros, pescadores, coletores e caçadores, garimpeiros, castanheiros, quebradeiras de coco, entre outras.



²² Segundo Klaas Woorman (Woorman, 1967, p.212), é notória a pulsação das atividades agrícolas de subsistência em decorrência das variações da atividade extrativa (...). Ampliando-se esta última, a agricultura de subsistência tende-se a retrair, acontecendo o inverso na situação contrária.

²³ “O grau de Auto-exploração familiar é determinado por um equilíbrio específico entre a satisfação da procura familiar e a fadiga devida ao trabalho” (Chayanov, 1981).

²⁴ Segundo os autores, a lógica de produção camponesa seria a de *valores de uso*, quer dizer, uma produção voltada para o autoconsumo onde o excedente produtivo entra na esfera monetária como sendo parte de uma forma de circulação simples das mercadorias. Durante a pesquisa etnografia realizada nas comunidades quilombolas do Baixo Amazonas era comum ouvir depoimentos como o seguinte: “Tudo mundo planta aqui, banana, mandioca, macaxeira, milho, feijão, hortaliça, tomate, jerimum, várias coisas. O roçado é só para o consumo mesmo, mas também dá para vender”. (Sr. Manuel Trindade Correa de Souza, comunidade quilombola de Surubiu-Açú, 24 de outubro de 2018).

²⁵ “A expressão “povos tradicionais”, como categoria inclusiva, compreende grupos indígenas, remanescentes de quilombos, os chamados ribeirinhos, seringueiros, entre outras designações que assumem significados descritivos e analíticos (...)”. (O’Dwyer, 2005, p.123).

²⁶ <https://bit.ly/3lrmcAB> Acesso:01/12/17.

²⁷ <https://bit.ly/34MCTQK> Acesso:01/12/17.

²⁸ Chirif, A. "Los 20 años del convenio 169. ¿Algo que celebrar?". In Revista *Ideele*. [online]. Lima n.250. mayo, 2015. <https://www.servindi.org/actualidad/128507>. Acesso em: 02/10/2018.

²⁹ Para mais informação sobre o projeto de construção do porto de Maicá e as comunidades quilombolas de Santarém consultar Pérez, D. 2017. *As comunidades quilombolas de Santarém/PA e o Porto de Maicá: os efeitos sociais de um empreendimento anunciado*. Trabalho de Conclusão de Curso. UFF: Niterói.

Referências Bibliográficas:

Almeida, A. W. B. 2002. Os Quilombos e as novas etnias, In: *Quilombos: identidade étnica e territorialidade*. Rio de Janeiro: FGV.

Barth, F. 2000. Os grupos étnicos e suas fronteiras, In: *O guru, o iniciador e outras variações antropológicas*. Lask, T. (org.). Rio de Janeiro: Contra Capa.



- _____. 2005. Etnicidade e o Conceito de Cultura. *Antropolítica*. 19(2):15-30.
- Brasileiro, S. ;Sampaio, J. 2002. Sacutiaba e Riacho de Sacutiaba: uma comunidade negra rural no oeste baiano, In *Quilombos: identidade étnica e territorialidade*. O'Dwyer, E. C. (Org.). Rio de Janeiro: Editora FGV.
- Castro, E. 1998. Território, biodiversidade e saberes de populações tradicionais. Papers NAEA.
- Chayanov, A. V. 1974. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Nueva Visión.
- _____. 1981. Sobre a teoria dos sistemas econômicos não capitalistas, In: Graziano da Silva, J.; Stolcke, V (org.). *A questão agrária*. São Paulo: Brasiliense.
- Eidheim, H. 1969. When ethnic identity becomes a social stigma, In *Ethnic groups and boundaries*. (ed.) F. Barth. Oslo: Norwegian Univ. Press.
- Eriksen, T. H. 1991. The cultural contexts of ethnic differences. *Man*. 26(2): 127-144, mar.
- _____. 2010. *Ethnicity and nationalism*. London: Pluto Press.
- Funes, E. A. 1996. "Nasci nas matas, nunca tive senhor"- História e memória dos mocambos do Baixo Amazonas", In: *Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil*. Reis, J. J.; Gomes, F. (org.). São Paulo: Companhia das Letras.
- Grynszpan, M. 2002. Da barbárie à terra prometida: o campo e as lutas sociais na história da República, In: *A República no Brasil*. Gomes, Â; Pandolfi, D. & Alberti, V. (orgs.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Jones, S. 1997. *The Archaeology of Ethnicity*. Londres: Routledge.
- Lima, D. 2005. Introdução: Apresentação do estudo, In: *Diversidade socioambiental nas Várzeas dos rios Amazonas e Solimões: Perspectivas para o desenvolvimento da sustentabilidade*. LIMA, Deborah (Org.). Manaus: IBAMA/ProVárzea.
- O'Dwyer, E. C. 2002. Os Quilombos e as práticas profissionais dos antropólogos, In: *Quilombos: identidade étnica e territorialidade*. Rio de Janeiro: FGV.
- _____. 2005. A construção da Várzea como problema social na Região do Baixo Amazonas, In: *Diversidade socioambiental nas Várzeas dos rios Amazonas e Solimões: Perspectivas para o desenvolvimento da sustentabilidade*. Lima, D. (Org.). Manaus: IBAMA/ProVárzea
- _____. 2010. *O papel social do antropólogo*. Rio de Janeiro: E-papers.



_____. et al. 2011. *Relatório Antropológico de Identificação e Delimitação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Território Maria Valentina*. Santarém: INCRA.

_____. 2013. Desenvolvimento e povos tradicionais, In: *Dicionário temático desenvolvimento e questão social: 81 problemáticas contemporâneas*. São Paulo: Anna Blume.

Oliveira, A. U. 2001. *A Agricultura Camponesa*. São Paulo: Contexto.

Oliveira, O. M. (org.). 2016. *Direitos quilombolas & dever do Estado em 25 anos da constituição federal de 1988*. Rio de Janeiro: ABA.

Pérez, E. 1983. Las concepciones de economía campesina, In: *Agricultura y capitalismo. Análisis de la pequeña producción campesina*. Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias.

Pérez, D. 2017. *As comunidades quilombolas de Santarém/PA e o Porto de Maicá: os efeitos sociais de um empreendimento anunciado*. Trabalho de Conclusão de Curso. UFF: Niterói.

Ploeg, J. V. D. 2008. O que é, então, campesinato?, In: *Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização*. Porto Alegre: UFRGS.

Rojas, B.; Magami, E. & Magalhães, R. 2016. *Direto a consulta e consentimento de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais*. São Paulo.

Salles, V. 1971. *O negro no Pará sob o regime da escravidão*. Coleção Amazônica. Serie José Veríssimo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Serv. de publicações UFPA.

Silva, P. A. 2009. A unidade de produção familiar e os enfoques teóricos clássicos. *Campo-Território: revista de geografia agraria*, 8(4): 52-66.

Trocate, C. (org.). 2017. *Quando as armas falam as musas calam?* Marabá: Editorial iGuana.

Velho, O. 2007. Marabá, régua e compasso, In: Dialogo com Otávio Velho. *Humanitas* 23(1):13-32.

Weber, M. 2000. Relações comunitárias étnicas, In: *Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva*. Volume 1. Brasília DF: Editora da UnB.

Wiggers, R; Ratier, H & Rodrigues, C. (org.). 2012. *Comunidades Rurais: organização, associações e lideranças*. Manaus, AM: Editora da UFAM

Woortmann, K. 1967. *Grupo doméstico e parentesco num vale da Amazônia*. Separata da Revista do museu paulista, volume XVII. São Paulo.



Alternativas productivas en la Provincia de Buenos Aires Las experiencias agroecológicas de Guaminí y Saladillo

María de la Paz Acosta

Resumen

A partir de mediados de 1990 la nueva conformación del modelo agrario en la Argentina generó transformaciones productivas, laborales, tecnológicas e ideológicas, con consecuencias inimaginables años atrás. Este modelo denominado “agronegocio”, predominante en la región pampeana, logró expandirse por el territorio nacional. En paralelo, hace algunos años se difunde la noción de “alternativas productivas” y la agroecología está adquiriendo mayor visibilidad. Para este trabajo se han seleccionado dos experiencias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a los Municipios de Guaminí y Saladillo. La elección se fundamenta en que allí encontramos ciertas respuestas a los impactos socioambientales que genera el modelo hegemónico en territorios localizados en la provincia núcleo del paradigma industrial de producción de alimentos. El relevamiento se realizó mediante fuentes secundarias de información, encuentros y entrevistas en profundidad a productores e informantes clave.

Palabras clave

Agronegocio, consecuencias negativas, alternativas productivas, provincia de Buenos Aires.

Introducción

La agricultura argentina ha desarrollado cambios radicales en las formas de producción, tipos de productos, superficies utilizadas, usos del suelo y actores involucrados. Estas transformaciones están ligadas al modelo hegemónico que diversos autores han conceptualizado como “agronegocio” (Giarracca & Teubal, 2005, 2008, 2013; Girbal-Blacha, 2013; Gras & Hernández, 2009, 2013; Hocsman, 2014; Svampa & Viale, 2014). En particular, la Provincia de Buenos Aires ha sido pionera en el desarrollo de estas transformaciones, intentando desplegar una única forma de hacer agricultura. Durante la última década se observan diferentes consecuencias del modelo: ambientales, laborales, en la salud de las poblaciones lindantes a los campos, en la concentración de la tierra, por nombrar sólo algunas. En contraposición a este enfoque, han surgido “experiencias alternativas” que intentan producir alimentos desde otra perspectiva, respetando los ciclos naturales y ecológicos de los territorios, cuestionando y desafiando



el modelo actual. Dentro de las experiencias relevadas, me interesa focalizar en dos casos que se despliegan en la Provincia de Buenos Aires: los partidos de Guaminí y Saladillo. Estas experiencias se enmarcan dentro de la corriente agroecológica y su desarrollo –en cada caso– tiene determinadas características que hacen relevante su estudio (Imagen 1).



Imagen 1. Mapa de la Provincia de Buenos Aires y ubicación de los partidos seleccionados

Por lo tanto, en esta ponencia analizo a los productores que viraron hacia modelos alternativos como la agroecología para caracterizarlos, es decir, definir quiénes son los sujetos que se encuentran detrás de estas producciones y cuáles son los motivos que los hacen transformar sus prácticas productivas. Luego reconstruyo la relación entre los productores y los municipios, cuáles son los marcos normativos de fomento hacia las alternativas productivas, las particularidades de cada caso y sus similitudes –si las hubiera. Por último, planteo algunas conclusiones.

Fundamentación del problema

A partir de la década de los noventa, la nueva conformación del modelo agrario en la Argentina generó grandes transformaciones productivas, laborales, tecnológicas e ideológicas, las cuales provocaron consecuencias inimaginables cuarenta años atrás. El modelo del “agronegocio” se desplegó con mayor fuerza en la región pampeana y



luego logró expandirse –paquete tecnológico mediante– a otras regiones. Cabe aclarar que este paradigma productivo reemplaza al modelo agroindustrial, que comenzó su período de declinación a mediados de los setenta, desarticulado finalmente con el Decreto de Desregulación Económica de 1991 por el gobierno de Carlos Menem (Giarracca & Teubal, 2005, 2008).

Hay que destacar que este modelo se caracteriza por ser un régimen global. Primero, las grandes plataformas productivas especializadas en limitados cultivos se ven subsumidas a requerimientos y políticas elaboradas en otras zonas del mundo. Segundo, los protagonistas del modelo son actores globales tales como empresas transnacionales, el capital financiero especulativo y organismos multilaterales (Gras & Hernández, 2015).

Carla Gras y Valeria Hernández (2013) definen el agronegocio a partir de cuatro pilares básicos: 1) el pilar tecnológico, que suma el conjunto de innovaciones en biotecnología, información y comunicación; 2) el pilar financiero, que permite la entrada de capitales especulativos en el proceso productivo; 3) el pilar productivo de la tierra y el trabajo, que modificó la tenencia de la tierra –propiciando el acaparamiento y el arrendamiento– y la tercerización del trabajo; y 4) el pilar organizacional, que incluye los cambios en las prácticas productivas, políticas y sociales de los actores.

Dentro del modelo adquiere primacía el cultivo de la soja, caracterizado hoy como el principal grano que se cosecha en la Argentina. Éste comenzó a ser sembrado a gran escala en los setenta. De la mano de la Revolución Verde, los cultivos de cereales y oleaginosas incrementaron su productividad resistiendo diversas condiciones climáticas y plagas mediante el uso de plaguicidas y fertilizantes. Más adelante, la Revolución Biotecnológica propició el desarrollo de semillas modificadas genéticamente en laboratorio. En 1996 la Argentina autorizó, mediante un decreto, el uso de la semilla transgénica de la soja, la cual fue promocionada como la “salida” a la crisis que atravesaba el campo. En la actualidad el cultivo extensivo de esta oleaginosa se realiza a través de la aplicación de un paquete tecnológico: semillas transgénicas, siembra directa y uso de insumos químicos –entre ellos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas.

Sin embargo, a la par del desarrollo de este modelo, hace años que también se han registrado impactos socio-ambientales de diferentes magnitudes. Entre otros, se destacan las desapariciones de explotaciones agropecuarias, los desplazamientos de poblaciones indígenas y campesinas, la erosión de suelos por monocultivo y las



denuncias de contaminación por la aplicación de agroquímicos (Butinof, y otros, 2017; Carrasco, 2011; GER, 2004; Paganelli, Gnazzo, Acosta, & López, 2010; Palmisano, 2016; Pengue, 2016; Percíncula, y otros, 2012; Teubal & Palmisano, 2010; 2013).

En contraposición a este enfoque, las “agriculturas alternativas” son entendidas como aquellas prácticas o sistemas “...que intentan proporcionar un medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad del suelo sostenidos y control natural de plagas, mediante el diseño de agroecosistemas diversificados y el empleo de tecnologías de bajos insumos” (Altieri, 2009, pág. 70). Dentro de esta perspectiva podemos encontrar diversas corrientes que suelen complementarse, aunque tengan sus diferencias, tales como la agroecología, la agricultura orgánica o ecológica, la agricultura biodinámica y la permacultura. Vale aclarar que el enfoque agroecológico se destaca por sobre los otros paradigmas.

El término “agroecología” fue elaborado en 1930 por Basil Bensing, un agrónomo ruso que llamó la atención sobre la utilización indiscriminada de los insumos químicos que comenzaron a implementarse en los cultivos luego de la Primera Guerra Mundial (Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod, & David, 2009). Años más tarde, durante la década de 1960 y principios de 1970, en diferentes regiones del mundo surgieron planteos similares a los de Bensing.

Estas nuevas miradas ya no pertenecían al viejo continente, sino que Latinoamérica comenzaba a posicionarse sobre los agroecosistemas y la agricultura ecológica. En la Argentina, a mediados de la década de 1980, varias agrupaciones agrarias comenzaron a pensar en la agroecología. Este paradigma resurgió recién a comienzos de la década de 2010, reivindicado por diferentes actores de los mundos rurales.

Miguel Altieri, un destacado ingeniero agrónomo y reconocido investigador sobre la disciplina, propone definirla del siguiente modo:

... un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de una manera interdisciplinaria. El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y analizados como un todo. (Altieri, 2009, pág. 69)

Por su parte, Eduardo Sevilla Guzmán entiende a la agroecología “como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que



presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria” (2011, pág. 13). Esta dimensión política exige considerar tanto a los actores y sistemas de conocimiento implicados – local, campesino o indígena– como las relaciones que operan en las diversas escalas – finca, comunidad, comarca, sociedad local y mayor– (Palmisano, 2018). En la riqueza de este conjunto se indagan las herramientas para fomentar la biodiversidad ecológica y sociocultural en pos de lograr sociedades sostenibles (Sevilla Guzmán, 2011).

Según los ingenieros agrónomos Santiago Sarandón y Claudia Flores, la agroecología puede entenderse como “un nuevo campo de conocimientos”:

... un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistemática y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. (Sarandón & Flores, 2014, pág. 58)

En la Argentina la agroecología se vincula con dos vertientes asociadas entre sí: una de origen práctico, ligada a movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales; y otra académica y científica, con destacados autores que han desarrollado la disciplina como “bandera de lucha” (Cittadini, 2014).

Metodología

Para la presente investigación realicé encuentros y entrevistas en profundidad a productores e informantes claves. En general, la entrevista se utiliza cuando se busca acceder a la perspectiva de los actores y conocer cómo ellos interpretan sus experiencias (Piovani, 2018). Al tratarse de los primeros trabajos de campo y no conocer en profundidad el territorio, recurrí a la técnica “bola de nieve”: a partir de unos pocos contactos iniciales, y haciendo uso de sus redes personales, busqué ampliar de forma progresiva el grupo de potenciales entrevistados (Piovani, 2018). El trabajo se complementó con el uso de fuentes secundarias de información, que sirvieron para caracterizar y fundamentar el problema abordado.

Para Robert Stake (1999), los estudios de casos se utilizan para abarcar la complejidad de un caso en singular y cuando éstos presentan intereses especiales en sí mismos. Es decir, exploramos el detalle de la interacción con sus contextos en profundidad. En definitiva, el trabajo real del estudio de caso es la particularización y no la generalización.



Se toma un caso y se trata de conocerlo bien, para ver qué es y qué hace, destacando su unicidad (Stake, 1999).

Seleccioné las experiencias de Guaminí y Saladillo ya que resultan paradigmáticas para analizar cómo se despliega el modelo hegemónico de agricultura industrial y cuáles son las alternativas que surgen a partir del impulso de productores, organizaciones y municipios que reclaman mejores condiciones, no sólo productivas sino también ambientales.

El municipio de Guaminí se encuentra en el partido que le da su nombre, ubicado al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con una superficie de 4.840 km² y una población de 11.826 habitantes (INDEC, 2010). El distrito se conforma por las localidades de Guaminí, Casbas, Laguna Alsina (Bonifacio), Garré, Arroyo Venado y los parajes de Fatraló y La Nevada. Dentro del territorio se encuentra parte del sistema de encadenadas del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires compuestas por la Laguna Cochicó, Laguna del Monte y Laguna Alsina. Respecto a lo productivo, se caracteriza por ser una zona semihúmeda a semiárida.

Su principal actividad económica es la agrícola ganadera; a partir del 2011 también tuvo un fuerte crecimiento del turismo (Partido de Guaminí-Provincia de Buenos Aires, s/d; Schwerdt & Cerdá, 2015). Las lagunas se presentan como divisorias de territorios: hacia el sur, es una zona triguera y ganadera, mientras que hacia el norte empieza a verse la soja y el maíz. Actualmente, a unos kilómetros de Guaminí, se encuentra instalada una subsidiaria de la empresa Los Grobo, uno de los exponentes del modelo de agronegocios en nuestro país. Su sede central está ubicada en Carlos Casares, a 234 kilómetros.

Por su parte, la localidad de Saladillo, cabecera del Partido que le da su nombre, se encuentra ubicada en el centro-norte de la Provincia, ocupa una superficie de 2.731 km² y cuenta con una población de 32.103 habitantes (INDEC, 2010). Las demás localidades y parajes que compone el Partido son Del Carril, Polvaredas, Cazón, Álvarez de Toledo, Juan José Blaquier, El Mangrullo, La Barrancosa, La Campana, La Mascota, La Razón, La Margarita, Esther, Emiliano Reynoso, Saladillo Norte, José Ramón Sojo, San Blas, Gobernador Ortíz de Rosas y San Benito (Municipalidad de Saladillo, s/d). La principal actividad económica es la ganadería junto con la agricultura.



En la localidad, durante la década de los noventa, estuvo instalada la empresa El Tejar, otro ícono del modelo de agronegocio en la Argentina. La empresa actualmente se encuentra radicada en Brasil –donde produce la mayor cantidad de cultivos–, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En el partido llegó a sembrar el 70 % de su superficie, dejando posicionada la lógica del modelo.

Resultados y discusión

A partir de un proyecto impulsado por el Municipio de Guaminí en el 2014, un grupo de productores comenzó la transición hacia la agroecología con el fin de demostrar otra forma de producir. El proyecto se originó dos años antes en la Dirección de Medio Ambiente del Municipio y Recursos Hídricos, por entonces a cargo del Dr. Marcelo Schwerdt. Dado que reiteradamente recibían denuncias de vecinos linderos de los campos o de escuelas rurales que estaban siendo fumigados, comenzaron a elaborar “planes de educación” que derivaron, más tarde, en la actual Ordenanza N° 13/2016 “Regulación sobre agroquímicos: de protección a la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola”. Esta Ordenanza tiene como finalidad ordenar el territorio y establecer limitaciones a la práctica de la fumigación tanto terrestres como aéreas en los campos destinados a los cultivos del modelo hegemónico, ya sea para la protección humana como del medio ambiente, y generar “buenas prácticas agrícolas”, determinando además penas a los responsables por violar esta normativa.

Antes de su promulgación, el proyecto fue presentado en el 2012 en el espacio “Mesa agropecuaria” que tiene el distrito, donde participan todas las entidades relacionadas con el medio rural. En principio se encontraron con obstáculos debido a la sensibilidad del tema discutido y a las limitaciones que hallaban en cuanto a los recursos y profesionales locales a su alcance. De este modo, generaron un ciclo de conferencias a cargo de los profesionales que conformaban la Mesa y ajenos a ella. Asimismo, se realizó un trabajo con las escuelas secundarias del distrito, las cuales, por medio de encuestas, comenzaron a ver los diagnósticos respecto al conocimiento de la población sobre la problemática abordada, y concluyeron que el distrito se encontraba informado.

Entre los profesionales que conformaron las conferencias, el ingeniero agropecuario Eduardo Cerdá, al disertar sobre alternativas al modelo convencional, relata su experiencia como asesor en un campo ubicado en el distrito de Benito Juárez de la Provincia de Buenos Aires, “La Aurora”, propiedad del productor Juan Kiehr. Este campo de 650 hectáreas (ha) manejado bajo el paradigma de la agroecología demostraba que



había una alternativa al modelo del agronegocio y, a partir de su ejemplo, algunos productores comenzaron la transición. A medida que se desarrollaba el proyecto, conocieron la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ubicada en la localidad de Barrow, que también trabaja con manejos agroecológicos. Por último, viajaron a Santa Fe y conocieron el campo de 200 ha “Naturaleza Viva”, administrado por quince familias que producen alimentos agroecológicos para alrededor de diez mil personas.

Con la información recabada y luego de cuatro años de discusiones, la Ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante por unanimidad, a partir de la construcción de consensos. En simultáneo se promulgó la Ordenanza N° 32/2015 “En Apoyo a la Agricultura Familiar y producciones agroecológicas”, mediante la cual se estableció un marco de certificación participativa de productos de la agricultura familiar.

El grupo que se conformó en esas conferencias era de ocho productores, casi todos de la localidad, excepto una productora oriunda de la localidad de Coronel Suárez, que se integró ya comenzado el proyecto. Siempre estuvieron vinculados a los mundos rurales como trabajadores, explotadores de sus propias unidades o porque sus familias eran dueñas de tierras. La tierra es todo para ellos y esa es su premisa: no podían seguir produciendo de la manera convencional, pero no sabían por dónde empezar ni cuánto arriesgar. En principio comenzaron produciendo 100 ha que cada productor designó para el proyecto. Actualmente llevan trabajadas 4.000 en combinación de cultivos y ganadería. La producción principal es harina de trigo integral, para la cual logran reactivar el molino harinero que antiguamente tenía el distrito y de este modo generar producciones locales, alimentos sanos y empleo genuino para la localidad. Dentro del proyecto se encuentra el vivero municipal con huerta agroecológica y una futura granja, con tambo y producción porcina.

A diferencia de lo que ocurre en Guaminí, en el Municipio de Saladillo las demandas hacia alternativas son impulsadas por organizaciones, en su mayoría productores que practican la agroecología. La organización denominada “ECOS de Saladillo”, nacida en el 2004, surgió para agrupar a vecinos que venían trabajando la temática ambiental de manera individual (CaLiSA Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, 2018) y de este modo, denunciar las consecuencias del agronegocio.

Durante estos años han llevado adelante varias iniciativas para demostrar que el modelo contamina y excluye a los pequeños productores. La gran mayoría de sus integrantes



son pequeños productores que defienden otra posibilidad de producir: la agroecología. Cuentan con un espacio propio en una de las plazas de la localidad y cada sábado realizan una feria donde comercializan sus productos: hortalizas, frutas, lácteos, conservas, dulces, licores, entre otros, a la que se acercan a comprar muchos vecinos.

Una de las iniciativas más importantes que lograron fue haber presentado en el 2017 un proyecto de ordenanza municipal para incentivar la producción agroecológica. En respuesta, el Municipio redactó un proyecto de “Promoción de la Producción Agropecuaria Sustentable” muy distinto de la iniciativa presentada por la agrupación, ya que muchos aspectos no quedaban claros y se incluía a la agroecología como una producción más. Luego de varias reuniones y discusiones, donde la agrupación reclamaba por una ordenanza seria y fundamentada, el 23 de octubre de 2018 el Honorable Concejo Deliberante del Municipio estableció por unanimidad la Ordenanza N° 135/2018 “Programa de la Promoción Agropecuaria Sustentable”.

Conclusiones

Los casos relevados para esta investigación resultan paradigmáticos para ilustrar la existencia de alternativas productivas, precisamente agroecológicas, dentro de la Provincia de Buenos Aires, ícono del modelo del agronegocio.

El caso de Guaminí se presenta como ejemplar, porque es el propio Municipio el que impulsa el proyecto con un gran apoyo a los productores y comienza a fomentar la agroecología como política de Estado local. Si bien el proyecto no crece en cantidad de productores locales que viran hacia la agroecología, éste sí logra expandirse en el contagio hacia otros distritos tanto de la provincia como de otras regiones del país — incluso la localidad de Canelones en el país de Uruguay— a partir de la Red de Municipios que Fomentan la Agroecología (RENAMA). Si bien se trata de un proyecto ambicioso, ya que incluye otras aristas, aún deben resolver la comercialización de los productos. La debilidad que encontramos reside en el mercado —a pesar de comercializar la harina de trigo integral—, donde el mayor volumen de las cosechas termina en las actuales vías de acopio y comercialización, mezclándose con otros del modelo convencional. De esta forma, se pierde el valor y el trabajo de la producción agroecológica.

En Saladillo la organización y la lucha que lleva a cabo la agrupación ECOS se muestra indispensable para seguir reclamando por regulaciones de las actuales formas de



producción desplegadas en el Partido e insistir en el fomento hacia la agroecología. A diferencia de Guaminí, el escaso acompañamiento del Municipio se presenta como un doble desafío para los productores que reclaman mejores condiciones no solo productivas sino de vida. Por su parte, el apoyo que reciben de vecinos que se acercan a su espacio de comercialización, es un canal vital para demostrar que los alimentos que producen no solo son libres de agroquímicos sino que establecen un precio justo tanto para los productores como para los consumidores, ya que solo intervienen unos pocos actores en la cadena de comercialización.

La inclinación en Argentina –incrementada por el actual gobierno– es profundizar el modelo agrario basado en una agricultura de insumos para la producción de *commodities*. Sin embargo, las experiencias abordadas, tanto de los productores basadas en la agricultura alternativa como de las organizaciones que denuncian las consecuencias negativas del agronegocio y demandan a los municipios por regulaciones y formas de producir en armonía con la naturaleza, nos esperan a pensar en otros modelos productivos, respetando la biodiversidad, produciendo alimentos sanos para la población, con el retorno de campesinos y chacareros al campo. De este modo, se lograría un equilibrio entre naturaleza y actividades antrópicas.

Notas

¹ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. lolopez@uaaan.edu.mx

² AROPE, es la abreviatura de la expresión At Risk of Poverty and/or Exclusion.

³ Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista.

Bibliografía

Altieri, M. A. (2009). *Vertientes del pensamiento agroecológico: fundamentos y aplicaciones* Medellín: Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología.

Butinof, M., Fernández, R., Muñoz, S., Lerda, D., Blanco, M., Lantieri, M. J., y otros. (2017). Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de Argentina y su potencial impacto sobre la salud. *Rev. argent. salud pública*, 8(33).

CaLiSA Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. (2018). *Cuadernos para la Soberanía Alimentaria #4*. Argentina: mónadamonada ediciones.

Carrasco, A. (2011). El glifosato: ¿es parte de un modelo eugenésico? *Salud Colectiva*, 7(2), 129-133.



- Cittadini, R. (2014). Limitaciones y potencialidades de la agroecología: enseñanzas de una experiencia en gran escala basada en los principios de la agroecología, el ProHuerta en Argentina. En V. Hernández, F. Goulet, D. Magda, & N. Girard, *La agroecología en Argentina y en Francia. Miradas cruzadas* (págs. 117-132). Buenos Aires: INTA.
- GER. (2004). Desalojos y arrinconamientos de campesinos y comunidades indígenas en la Argentina". *Realidad Económica*(203), 111-120.
- Giarracca, N., & Teubal, M. (2005). *El campo argentino en la encrucijada: estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*. Buenos Aires: Alianza.
- Giarracca, N., & Teubal, M. (2008). Del desarrollo agroindustrial a la expansión del "agronegocio": el caso argentino. En B. Mançano Fernandes, *Campesinato e agronegocio na América Latina: a questao agraria atual* (pág. 432). San Pablo: Expressao Popular.
- Giarracca, N., & Teubal, M. (2013). *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- Girbal-Blacha, N. M. (2013). El poder de la tierra en la Argentina. De la cultura agrícola al agronegocio. *Estudios Rurales*, 3(4), 103-115.
- Gras, C., & Hernández, V. (2009). *La Argentina Rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C., & Hernández, V. (2013). *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Buenos Aires: Biblos.
- Gras, C., & Hernández, V. (2015). Negocios, biotecnología y desarrollo en el agro argentino. En M. Svampa, *El desarrollo en disputa: actores, conflictos y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea* (pág. 416). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Hocsman, L. D. (2014). Tierra, capital y producción agroalimentaria: despojo y resistencias en Argentina (1982 - 2012). En G. Almeyra, L. Concheiro, Bórquez, J. M. Mendes Pereira, & C. W. Porto-Gonçalves, *Capitalismo, terra e poder na América Latina*. Río de Janeiro: CLACSO Ediciones Continente.
- INDEC. (2010). *Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda*. Buenos Aires.
- Municipalidad de Saladillo. (s/d de s/d de s/d). <https://www.saladillo.gob.ar/>. Recuperado el 30 de julio de 2019, de <https://www.saladillo.gob.ar/>: <https://www.saladillo.gob.ar/>
- Paganelli, A., Gnazzo, V., Acosta, H., & López, S. (2010). Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. *Chemical Research in Toxicology*, 23, 1586 -1595.



- Palmisano, T. (2016). El agronegocio sojero en Argentina: modelo extractivo en los mundos rurales. *Revista Economía*, 68(107), 13-33.
- Palmisano, T. (2018). Las agriculturas alternativas en el contexto del agronegocio. Experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 28(51), 00-00.
- Partido de Guaminí-Provincia de Buenos Aires. (s/d de s/d de s/d). <http://www.guamini.gob.ar/index.php/eldistrito.html>. Recuperado el 29 de julio de 2019, de <http://www.guamini.gob.ar/index.php/eldistrito.html>
- Pengue, W. (2016). *Cultivos transgénicos, ¿Hacia dónde fuimos? Veinte años después: La soja en Argentina 1996–2016*. Buenos Aires-Santiago de Chile: Fundación Heinrich BöllStiftung.
- Percíncula, A., Jorge, A., Calvo, C., Mariotti, D., Domínguez, D., Estrada, M., y otros. (2012). La Violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del despojo. *Revista NERA*, 8-23.
- Piovani, J. i. (2018). La entrevista en profundidad. En A. Marradi, N. Archenti, & J. I. Piovani, *Manual de metodología de las ciencias sociales* (pág. 496). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Sarandón, S. J., & Flores, C. C. (2014). La Agroecología: un paradigma emergente para el logro de un Desarrollo Rural Sustentable. En V. Hernández, F. Goulet, D. Magda, & N. Girard, *La agroecología en Argentina y en Francia. Miradas cruzadas* (págs. 53-70). Buenos Aires: INTA.
- Schwerdt, M., & Cerdá, E. (2015). Desarrollo de las primeras experiencias en cultivos agroecológicos extensivos impulsadas desde el estado municipal de Guaminí, provincia de Buenos Aires. *Congreso Latinoamericano de Agroecología*. La Plata.
- Sevilla Guzmán, E. (2011). *Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento marxista y libertario*. La Paz: Plural.
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata.
- Svampa, M., & Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Kats.
- Taddei, E. (2013). El Agronegocio: De la República de la Soja a los Desiertos Verdes. En J. Seoane, E. Taddei, & C. Algranati, *Extractivismo, Despojo y Crisis Climática. Desafíos para los Movimientos Sociales y los Proyectos Emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Herramienta, El Colectivo.



Teubal, M., & Palmisano, T. (2010). El conflicto agrario: características y proyecciones. En N. Giarracca, & M. Teubal, *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates* (pág. 416). Buenos Aires: Antropofagia.

Teubal, M., & Palmisano, T. (2013). Crisis alimentaria y crisis global: la Argentina de 2001/2002 y después. *Realidad Económica*(279), 47-74.

Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. *Agronomy Journal*, 29(4), 503-515.



Línea Temática 4.

Soberanía alimentaria y políticas públicas



Percepção do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) No Município de alta Floresta Mato Grosso - Brasil

Roboredo Delmonte

Resumo

O Governo Federal como forma de reconhecimento da importância da agricultura familiar criou várias políticas públicas visando o fortalecimento desta importante categoria social promulgando a lei 11.947/2009 que criou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Apesar dessa lei enfatizar que pelo menos 30% dos recursos destinados a compra de gêneros alimentícios seja diretamente da agricultura familiar e/ou de suas organizações, no município de Alta Floresta- Mato Grosso essa porcentagem está em torno de 22,5%. A presente pesquisa em andamento tem por objetivo avaliar os pontos que obstaculizam a acessibilidade dos agricultores familiares ao PNAE na ótica dos atores dos agricultores e de suas organizações, bem como dos atores públicos de Educação envolvidos no processo no município de Alta Floresta. Para tanto, adotar-se-á a pesquisa qualitativa através de entrevistas semi estruturadas empregando um questionário contendo perguntas fechadas e guiadoras para captar a visão dos entrevistados sobre a (in)acessibilidade ao PNAE. As informações contidas neste trabalho são oriundas de dados preliminares obtidas via pesquisa exploratória. Depreende-se pelas informações preliminares que a baixa participação dos agricultores no programa deve-se a i) falta de crédito do Executivo municipal devido o pagamento da produção entregue pelos agricultores com atraso de até 4 meses em 2017, bem como a ii) burocracia para acesso ao programa, iii) falta de orientação para os agricultores e iv) desorganização dos agricultores. Vale ressaltar que em 2019 os pagamentos aos agricultores dos produtos entregues para merenda escolar estão em dia.

Palavras-Chave

Políticas Públicas, Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural, Sustentabilidade, Extensão Rural.

Introdução

Em Alta Floresta - MT dois são os gestores públicos que fazem a aquisição da merenda escolar com recursos provenientes do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, cujos



recursos destinados à merenda são repassados diretamente para o executivo municipal que providencia todo processo para aquisição dos gêneros alimentícios destinados às 17 escolas municipais. O outro gestor é a Assessoria Pedagógica de Alta Floresta da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que gestiona 16 unidades escolares estaduais. Neste último caso os recursos destinados à merenda escolar são repassados diretamente para cada unidade escolar.

A Lei 11.947 (Brasil, 2009) no seu artigo 14 destaca que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo FNDE deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente dos agricultores familiares enquadrados segundo a lei 11.326 (Brasil, 2006) e/ou de suas organizações.

Todavia, um pequeno número de agricultores familiares (45) é beneficiado no município de Alta Floresta pelo PNAE conforme informação verbal repassada pelas entidades ligadas diretamente ao programa (Secretaria Municipal de Educação, Seduc e Cooperativa Mista Ouro Verde) em 2014, 2015 e também em 2016, conforme informação do Sr. Antonio Favarin (Presidente da Cooperativa Agrícola Mista Ouro Verde - COMOV). Portanto, esse número representa 2,7% se comparado com o total de 1.663 famílias de agricultores familiares (IBGE, 2006).

Outro aspecto importante que está em desacordo com a proposta do PNAE refere-se ao atraso de pagamento aos agricultores em anos anteriores, mais especificamente, nos anos 2014 a 2016, conforme informação verbal do Presidente da Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV) que comercializa a produção de 40 agricultores para merenda escolar. Fato este reiterado pelo jovem agricultor Jonas (Comunidade Nossa Senhora da Salete), que também declarou insatisfação com o programa porque estava havendo atraso de até três meses no pagamento dos produtos entregues a Prefeitura Municipal.

Este assunto foi apresentado na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável na última reunião ocorrida em 09/09/2016. Estas ocorrências têm deixados os agricultores desanimados, chegando inclusive a dizerem que estavam na iminência de suspenderem a entrega da produção. Descontentes e desanimados, havendo caso de desistirem de fornecerem produtos para merenda escolar do município, como é o caso dos agricultores da Aspoaf (Associação de Produtores Orgânicos de Alta Floresta).

O PNAE constitui importante programa do Governo Federal que objetiva incentivar a agricultura familiar valorizando a produção familiar, ao pagar o preço médio vigente no



mercado, ou seja, este programa busca mitigar em parte um dos principais gargalos da agricultura familiar que é a comercialização dos seus produtos. Posto que, via de regra, estes agricultores ficam a mercê dos intermediários, que na maioria das vezes, os exploram pagando preços que não cobrem os custos de produção.

Além disso, o PNAE constitui um programa de elevada relevância social, que também envolve elevadas montas de recursos financeiros, sendo de fundamental importância para a sociedade a avaliação desse programa no sentido de verificar seus sucessos e obstáculos para que sejam melhorados e aprimorados e assim cumprirem

de forma eficiente seus objetivos.

Esta pesquisa reveste-se de suma importância, sendo imprescindível para estudar a acessibilidade dos agricultores ao PNAE, identificando os gargalos que obstaculizam sua completa operacionalidade, de tal forma, que em todas as unidades escolares consumam pelo menos 30% dos gêneros alimentícios da agricultura familiar conforme Lei 11.947 (Brasil, 2009).

Obviamente, entende-se, que na identificação dos gargalos apontados pelos diferentes atores sociais envolvidos (agricultores, gestores públicos, cooperativas, associações, Câmara de Negócios de Alimentação Escolar, comércio local, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, entre outros) se faz necessário construir caminhos para superação dos obstáculos e ampliar a participação dos agricultores neste programa. Este, se bem aplicado contribuirá expressivamente para fixação do homem no campo, abrandando, conseqüentemente, o forte êxodo rural que há em Alta Floresta, pois segundo o IBGE (2010) somente 13,1% da população do município se encontra na zona rural.

Esta investigação é fundamental, pois o olhar qualitativo respaldado em Minayo (2008) e Richardson (2012), irá contribuir cientificamente para entender a funcionalidade do PNAE em Alta Floresta na ótica dos atores sociais envolvidos, tendo em vista que a metodologia empregada será a construtivista fundamentada nos princípios freireanos, onde os diferentes sujeitos do processo participarão ativamente sugerindo caminhos para solução dos problemas que obstaculizam a otimização do fenômeno pesquisado.

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a (in)acessibilidade ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Alta Floresta-MT através da percepção

dos diversos atores sociais (agricultores, diretores de associações/Cooperativas, Conselho de Alimentação Escolar e gestores públicos)

envolvidos diretamente com o programa, visando identificar, sobretudo os problemas que obstaculizam a operacionalização do PNAE no município, bem como encontrar caminhos para superá-los na expectativa de consolidar o PNAE como importante mercado institucional para os agricultores familiares.

Metodologia

A pesquisa está sendo realizada no município de Alta Floresta-MT (Figura 1), localizada no território Portal da Amazônia formado por uma área de 8.976 km² com uma população de 49.164 habitantes, sendo que 86,9% residem na zona urbana e 13,1% na área rural (IBGE, 2010).



Figura 1. Localização do município de Alta Floresta – Mato Grosso - Brasil

Esta pesquisa foi aprovada pelo Parecer nº 3.204.229 do Comitê de Ética e Pesquisa da UNEMAT cujo grupo de pesquisa multidisciplinar é composto por professores/pesquisadores de diferentes áreas (Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola, Estatística e Extensão Rural) e quatro bolsistas de iniciação científica.

Em virtude de ainda não se ter informações das escolas estaduais os dados apresentados neste trabalho são inerentes apenas as escolas do município de Alta Floresta cujo gestor do recurso é a Prefeitura Municipal.



Este trabalho tem como base a pesquisa exploratória que ocorre quando a pesquisa se encontra na fase preliminar e tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-52)

Portanto, este trabalho está baseado nas informações extraídas em relatórios, leis, monografias e artigos relacionados ao PNAE, dados extraídos do portal do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (licitação).

Adotar-se-á o princípio da pesquisa qualitativa inspirado em Minayo (2008, p. 35), onde ressalta que “uma boa amostragem é aquela que possibilite abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões”.

Os dados primários serão obtidos por intermédio de entrevistas semi-estruturadas, por meio de questionário constituído com questões fechadas e abertas (Richardson et al., 2012), como também respaldo do olhar qualitativo de Minayo (2008) buscando compreender a (in)acessibilidade ao PNAE no município. Outro viés da pesquisa será identificar os impactos que o PNAE desencadeia ou pode desencadear na vida dos agricultores, bem como na economia do município.

Portanto, nesse trabalho, busca-se-á captar as percepções dos sujeitos envolvidos diretamente com o PNAE na expectativa de contribuir para otimização do programa e, conseqüentemente, sua contribuição para o desenvolvimento rural de Alta Floresta.

Segundo Richardson (2012), em uma pesquisa social tem-se a necessidade de compreender o outro, suas motivações e entendimentos em determinadas situações. Esse processo pode ser conduzido ao se tentar colocar no lugar do outro e imaginar como e porque o outro reage e age de determinada forma.

Inicialmente serão ouvidos os representantes das Associações de agricultores e Cooperativas realizando uma pesquisa não estruturada empregando perguntas guiadoras sobre a percepção dos diretores quanto ao programa como, por exemplo: 1) O PNAE houve o incentivou o agricultor a se organizar e planejar a produção?; 2) Quais



as Dificuldades para participar do PNAE?; 3) O PNAE contribui para a fixação do homem no campo?; 4) Quais os pontos positivos e negativos do PNAE?.

Concluída essa etapa serão entrevistados os agricultores utilizando um questionário com perguntas fechadas com intuito de identificar o perfil dos agricultores (idade, escolaridade, tamanho da propriedade, sistemas de cultivo, etc.), enquanto que as perguntas abertas permitirão captar a visão crítica dos entrevistados quanto a (in)acessibilidade ao PNAE. Essas perguntas convergirão, a princípio sobre: 1) Quais as principais dificuldades/barreiras existentes no Programa?; 2) O PNAE promove a permanência do agricultor no campo?; 3) Esse Programa pode promover o desenvolvimento do município?; 4) O que pode ser melhorado para otimizar esse Programa no município?; entre outras questões.

E, por último, também serão realizadas entrevistas não estruturadas com os representantes dos órgãos públicos (Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura,) e os Conselhos (Municipal da Merenda Escolar e a Câmara de Negócios de Alimentação Escolar), aos quais pretende-se indagar sobre: 1) Número de agricultores envolvidos até o momento?; 2) Valores gastos na compra de alimentos para a Alimentação Escolar e os beneficiários?; 3) O programa contribui para a manutenção da família no meio rural?; 4) Quais as dificuldades para ampliar o nº de agricultores beneficiados no município?; entre outras perguntas.

Durante as diferentes etapas do projeto se adotará o registro visual por intermédio de fotografias e filmagens do universo pesquisado. Utilizar-se-á também o registro oral com gravador (Whitaker, 2002) digital para facilitar a obtenção dos dados e ampliar a garantia das informações obtidas, principalmente no que tange às frases empregadas pelos entrevistados para expressar suas (in)satisfações. Ressalta-se que todas as gravações serão efetuadas com a devida autorização dos entrevistados (Whitaker, 2002; Meihy & Ribeiro, 2011).

Vales ressaltar que uma das premissas desta pesquisa é de que ela não fique apenas na constatação, mas que possa contribuir para melhoria desta importante política pública. Para tanto a equipe recorre a Freire (1996, p. 77) quando escreve “... meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. [...] constato não para me adaptar mas para mudar.”



Com este pensamento serão adotados métodos grupais para conhecermos o funcionamento do PNAE no município. Para tanto será utilizado a ferramenta FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para conhecer o cenário do PNAE no município, Matriz de Priorização de Problemas (Verdejo, 2007), que permitirá de maneira fácil priorizar os problemas identificados, segundo sua importância e/ou urgência. Também se aplicará o Diagrama de Venn para levantar o grau de proximidade ou distanciamento que há entre os atores sociais externos e os agricultores.

Análise dos Dados

Os dados obtidos serão inicialmente analisados pela estatística descritiva, por meio de medidas de posição e dispersão, com o intuito de descrever o comportamento das variáveis pesquisadas. Num segundo momento, haverá a definição das variáveis

que serão utilizadas para a aplicação da análise estatística multivariada, por meio da análise de componentes principais utilizando o software estatístico R. O método de análise multivariada tem como objetivo otimizar a interpretação de grandes conjuntos de dados. Assim, será adotado este método para análise de resultados, em especial, para verificar o impacto do PNAE na qualidade de vida dos agricultores, bem como na economia do município.

Resultados e Discussão

No município se aplica duas modalidades para compra da merenda escolar: Chamada Pública (CP) e Pregão Presencial (PP). A Chamada pública é destinada aos agricultores familiares e/ou suas organizações (cooperativas e associações), enquanto que a PP é destinado para as empresas comerciais, cooperativas e associações. Nesta modalidade (PP) não há a obrigatoriedade da compra dos gêneros alimentícios contidos no processo licitatório, só ocorre a compra caso seja necessário.

Segundo Brasil (2015, p.3) a chamada pública não é um procedimento licitatório mas sim um “procedimento administrativo para a compra de alimentos voltado à seleção da melhor proposta para aquisição de produtos de beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras ...”, enquanto que o Pregão Presencial trata-se de uma “modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, com a presença dos interessados, por meio de propostas escritas e lances verbais (Brasil, 2015, p.5).



Conforme a lei 11.947/2009 (Brasil, 2009) no seu artigo 14, § 1º, pode-se dispensar o procedimento licitatório na compra de gêneros alimentícios para merenda escolar “desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.”

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Brasil, 2015) em seu manual de procedimento para aquisição de bens destaca que a dispensa de licitação e o emprego da chamada pública pode ocorrer para a aquisição dos gêneros alimentícios produzidos pelos familiares, suas organizações econômicas e demais beneficiários da Lei 11.326/2006, conforme regulamento. Todavia, para tanto, precisa ser atendida as seguintes exigências:

I – os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, aferidos e definidos segundo metodologia definida na Resolução GGPA 50/2012;

II – os beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras comprovem a sua qualificação;

III – seja respeitado o valor máximo anual de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aquisição de alimentos, por unidade familiar, por órgão comprador; e IV- os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários fornecedores e cumpram os controles de qualidade das normas vigentes. (BRASIL, 2015, p.17).

Número de agricultores familiares que tem participado do PNAE e Alguns Gargalos

Com os dados preliminares levantados junto aos diversos setores (Departamento de Licitação, Compra e Secretaria Municipal de Educação), bem como junto às entidades organizativas dos agricultores familiares (COMOV e Aspoaf), depreende-se uma baixa participação de agricultores familiares no fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, atingindo uma média de 17 agricultores, como se pode ver na Tabela 1. Esse número de agricultores equivale a 1,02 % do universo populacional de agricultores familiares no município de Alta Floresta (1.663) conforme Tabela 3.628 do censo agropecuário (IBGE, 2006).



Anos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nº de Agricultores	19	19	15	15	13	23	16	19

Tabela 1. Nº de agricultores familiares que tem participado das Chamadas Públicas e/ou Pregão Presencial para venda de gêneros alimentícios para merenda. Alta Floresta-MT.

Este é um dos pontos principais que a pesquisa quer levantar para identificar os porquês de tão pouco agricultores familiares participarem das chamadas públicas? Porque alguns desistem? Respostas a estas indagações temos após a realização das entrevistas.

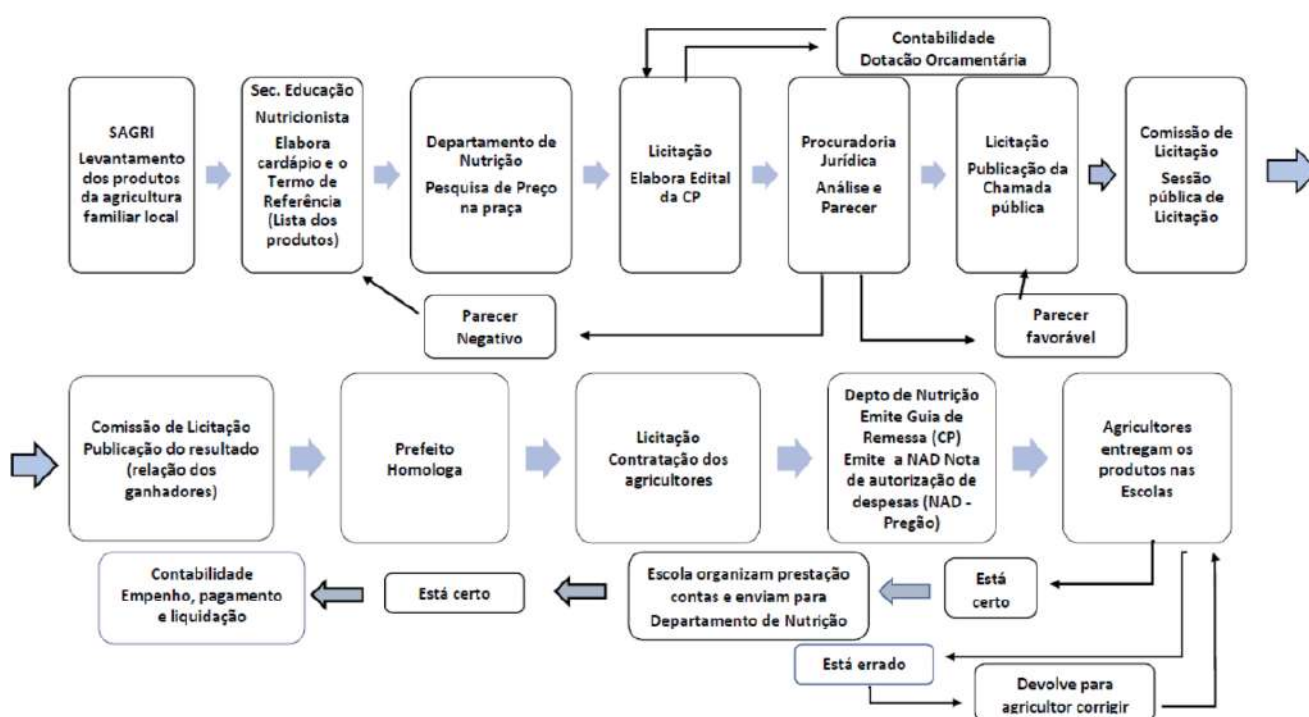


Figura 2. Fluxograma da Chamada Pública para compra dos gêneros alimentícios para merenda escolar. Alta Floresta-MT.

Legenda: SAGRI = secretaria Municipal de Agricultura; CP= Chamada Pública; NAO = Nata de autorização de despesas (ocorre no Pregão Presencial)

Fonte: Os autores.

Na expectativa de apresentar melhor visibilidade do processo burocrático para compra da merenda escolar dos agricultores familiares por intermédio das Chamadas Públicas foi elaborado o fluxograma (Figura 2) com a contribuição de funcionários do

setor de Licitação e do Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação. Segundo os servidores entre o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Agricultura dos produtos que a agricultura familiar pode oferecer e a emissão da Guia



de Remessa pelo Departamento de Nutrição se gasta de 3 a 5 meses, aproximadamente.

O representante da COMOV no dia 10/08/2017, conforme informação verbal, estava muito desanimado com o processo para venda dos gêneros alimentícios dos seus cooperados conforme ele relata:

“Os produtores da agricultura familiar não tem conseguido vender sua produção da maneira que gostariam ou tem condições de vender [pois a] inércia das pessoas ou do sistema que realiza e organiza as chamadas públicas pra aquisição dos produtos pra merenda escolar não dá esta condição, pois realizam as chamadas já quase no meio do ano [e neste caso é] “por um período de seis meses apenas, isso não dá uma segurança de se planejar com a produção. Daí então o município faz a compra dos alimentos nas redes de supermercado.

[prosegue o agricultor] infelizmente isso ainda acontece por incompetência ou falta de disposição pra fazer a coisa funcionar. Isso acontece no nosso município.”

Para mitigar esse problema no ano passado (2018) ocorreu uma brilhante ação do Sebrae de Alta Floresta que através do consultor, Luis Cesar, articulou e moderou toda uma discussão com os diferentes atores sociais (Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria de Educação, Departamento de Compras, Empaer, Conselho de Alimentação Escolar) envolvidos no processo da aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar realizando o “Planejamento da Ação do PNAE em Alta Floresta”.

Esta ação buscou otimizar o processo de chamada pública na expectativa de que em 2019 a chamada pública ocorresse em janeiro para a entrega da merenda em fevereiro ou março. Tal empenho resultou positivamente na realização do Pregão Presencial nº 008/2019 no dia 19/02/2019 e da Chamada Pública nº 001/2019 em 28/02/2019. Portanto, foi um grande avanço.

Todavia cabe aqui destacar a importante contribuição da representante do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) que destacou na reunião entre os diferentes atores sociais que o fortalecimento do PNAE depende de “sensibilizar os chefes maiores”, ou seja, se faz necessários que os servidores públicos abracem a causa dos agricultores familiares, com destaque para os representantes da Secretaria Municipal de Educação (nascido do processo), Licitação, Compras, Procuradoria Jurídica, entre outros.



O (Des)Cumprimento da Lei 11.947/2009

O Art. 14 da lei 11.947/2009 (Brasil, 2009, p.2), ressalta que

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

Contudo, ao pesquisar os dados dos valores liberados pelo FNDE e os valores efetivamente pagos pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, depreende-se pela Tabela 2 que os valores empregados na compra dos produtos oriundos da agricultura familiar estão abaixo do recomendado pela Lei 11.947/2009, atingindo o índice mais baixo em 2016 (16,7%).

Entende-se que é possível sim, ultrapassar o percentual (30%) preconizado pela supramencionada lei, como tem ocorrido em alguns municípios vizinhos: Paranaíta e Colíder. Este último já chegou a tingir o patamar de 61%. Essas informações foram repassadas hoje (15/09/2019) por integrantes do grupo “PNAE Mato Grosso – PAA” criado no whatsapp para debater tão importante tema. Portanto, atingir e/ou ultrapassar os 30% acredita-se que é uma decisão política dos gestores do executivo municipal.

Anos	Comércio*	Agricultura Familiar *	Total Gasto	% AF	Valor Liberado pelo FNDE**	30% Lei 11.947	Nº AF Beneficiados
2015	552.591,59	119.017,34	671.608,93	17,72%	637.704,00	18,66%	15
2016	655.165,98	101.392,25	756.558,23	13,40%	604.620,00	16,77%	13
2017	515.629,83	180.742,94	696.372,77	25,95%	637.992,40	28,33%	23
2018	456.985,96	145.701,65	602.687,61	24,18%	552.456,00	26,37%	16

A tabela 2. Valores gastos pela Prefeitura Municipal de Alta na Compra de gêneros alimentícios para merenda escolar e valores liberados pelo FNDE.

FNDE = Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; AF = Agricultura Familiar.

**Fonte: Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT.*

***Disponível em <https://bit.ly/3jSQixg>*

Considerações Finais

Com base nos dados obtidos na pesquisa exploratória se faz necessário uma ação integrada, adotando o princípio freireano, onde todos os atores sociais envolvidos direta e indiretamente na compra da merenda escolar se coloquem como sujeitos do processo apresentando as sugestões necessárias para que amplie significativamente os valores



gastos na compra da merenda escolar provenientes das famílias dos agricultores familiares.

Outro ponto que precisa ser metamorfoseado é o número de agricultores familiares, pois é inconcebível que somente 1,02% (17) dessa categoria social entregue seus produtos para a merenda escolar. Para tanto, se faz necessário a sensibilização dos gestores públicas responsáveis por essa área, bem como um forte trabalho de incentivo e orientação dos agricultores familiares e/ou suas organizações (cooperativas e associações).

Referências Bibliográficas

Brasil. (2015). Manual de procedimentos para aquisição de bens e contratação de serviços. Brasília: Ministério de Desenvolvimento Social.

Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2010). População: informações completas. Disponível: <https://bit.ly/3dipofP>

IBGE. (2006). Nº de agricultores familiares, censo de 2006 no município de Alta Floresta-MT. Tabela 3628. Disponível: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3628>.

Lei n.11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Diário Oficial da União. Brasília: DF, n. 113.

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Dispõe sobre a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar. Diário Oficial da União. Brasília: DF, n. 141.

Meihs, J. C. S. B., & Ribeiro, S. L. S. (2011). Guia prático de história oral: para empresas, universidades, comunidades, famílias. São Paulo: Contexto.

Minayo, M. C., Deslandes, S., & Gomes R. (2008). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes.

Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. D. (2013). Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Novo Hamburgo: Universidade Freevale. Disponível: <https://bit.ly/3lDdcch>

Richardson, R. J., Peres, J. A. de S., Wanderley, J. C. V., Correia, L. M., & Peres, M. H. de M. (2012). Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas.

Verdejo, M. E. (2007). Diagnóstico Rural participativo: guia prático. Brasília: Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Whitaker, D. C. A. (2002). Sociologia rural: questões metodológicas emergentes. (Cap 2, pp. 22-97).



Diversidade produtiva e soberania alimentar no quilombo Charco, São

Vicente Férrer – MA, Brasil

Roberta Maria Batista de Figueiredo Lima¹

Evaristo José de Lima Neto²

Júlia Letícia Pereira Ferreira³

Resumo

As comunidades quilombolas dentre o rol das chamadas comunidades tradicionais são as que menos têm tido acesso às políticas públicas voltadas para produção agrícola. Programas governamentais voltados para o campesinato brasileiro, tais como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER tem baixa ou nenhuma penetração nas 713 Comunidades Quilombolas Certificadas pela Fundação Cultural Palmares no estado do Maranhão até o ano de 2018. O estudo em tela buscou realizar levantamento da diversidade produtiva no território do quilombo Charco, situado na Baixada Maranhense - Brasil, a partir da identificação das espécies vegetais cultivadas e extrativas e seus usos: alimentar, medicinal ou ritual, registrando os saberes e fazeres que giram em torno das práticas alimentares, formas tradicionais de cultivo e técnicas de preparo e uso dos produtos cultivados e extrativos. A pesquisa revelou que no Quilombo Charco maioria das famílias praticam as técnicas tradicionais de corte e queima para a implantação das lavouras, utilizam “sementes crioulas” de milho, arroz, mandioca e feijão, ou seja, sementes mentidas e selecionadas por décadas ano a ano. A pesquisa aponta que ações governamentais tem propiciado a introdução de cultivares geneticamente modificados e/ou biofortificados, por meio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, essa introdução tem se dado por meio de uma forma particular de organização que envolve majoritariamente jovens, e tem implicado ainda na introdução de novas técnicas de cultivo, muitas vezes essa introdução implica também na necessidade aplicação de agrotóxicos (venenos).

Palavras-Chave

Diversidade produtiva, soberania alimentar, quilombo, Maranhão, Brasil

Introdução

Historicamente no Brasil, as comunidades quilombolas dentre o rol das chamadas comunidades tradicionais, são as que menos têm tido acesso às políticas públicas voltadas para produção agrícola. Vide a série de Programas governamentais voltados



para o campesinato brasileiro, implementados nos anos recentes tais como: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, o que se observa ao analisar os acessos a estes programas é a baixa ou nenhuma penetração destas políticas. Como bem ilustra o caso das 713 Comunidades Quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares no estado do Maranhão até o ano de 2018.

Mesmo quando acessam as principais Políticas Públicas disponíveis, as comunidades quilombolas geralmente enfrentam um segundo nível de dificuldades, resultante do confronto entre o modelo produtivo que orienta boa parte destas políticas - o chamado paradigma da Revolução Verde- e suas formas tradicionais de produzir, pautadas em saberes ancestrais. Neste sentido, o estudo em tela buscou deslindar os principais elementos dissonantes entre o paradigma orientador das políticas públicas destinadas ao campesinato brasileiro e as formas tradicionais de produção acionadas pelas comunidades quilombolas, através do levantamento da diversidade produtiva no território do quilombo Charco, situado na Baixada Maranhense – Brasil. Neste contexto realizou-se um trabalho de identificação das espécies vegetais cultivadas e extrativas e seus usos alimentares, registrando os saberes e fazeres que giram em torno das práticas alimentares, formas de cultivo e técnicas de preparo e uso dos produtos plantados e extrativos. A pesquisa revelou que o modelo produtivo predominante no Quilombo Charco se assenta em técnicas tradicionais de corte e queima para a implantação das lavouras, utilização de “sementes crioulas” de milho, arroz, mandioca e feijão, ou seja, sementes mantidas e selecionadas por gerações ano a ano.

Como produto da primeira etapa do projeto de pesquisa “Diversidade Produtiva e Sementes Crioulas”, financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), este trabalho está dividido em três seções: a primeira é uma breve revisão de literatura em torno dos paradigma da Revolução Verde e da Segurança e Soberania Alimentar; a segunda seção aponta, a partir de dados oficiais, como a segurança e a soberania alimentar dos povos e comunidades tradicionais é extremamente delicada pela não redistribuição de seus direitos em detrimento do avanço das políticas neoliberais e, por fim, apresentamos como a comunidade quilombola Charco no município de São Vicente Férrer – MA tem reconstruído a soberania alimentar mesmo com investidas da revolução verde no



território através de políticas públicas, articulando as políticas públicas disponíveis com os seus saberes tradicionais.

A Revolução Verde no Brasil X Segurança e Soberania Alimentar

Ao fim da 2ª Grande Guerra, de acordo com Machado (2014), havia milhões de famintos na África, Ásia e América Latina, sendo que na década de 1940, o México vivia uma grave crise econômica afetando o abastecimento alimentar.

A modernização e mecanização da agricultura, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para um tipo de desenvolvimento voltado principalmente ao mercado, período conhecido como Revolução Verde. Além da maquinaria, também se passou a fazer uso de produtos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos. Essa modernização era apontada pelos governos como forma de contribuir para a redução da miséria da população. (Nobre, 2014)

Nesta oportunidade, a Fundação Rockefeller, norte-americana, financiou o trabalho de um grupo de “quatro jovens norte-americanos, dirigidos pelo Dr. George Harrar, quem, mais tarde, seria o presidente dessa fundação, para exportar a revolução agrícola dos Estados Unidos ao México (Brown, 1970 apud Machado 2014).

Este era então o cenário propício para a chamada “Revolução Verde”, revolução esta pautada no argumento da erradicação da fome no planeta, mas que por outro lado criou um mercado muito fértil das sementes geneticamente modificadas, fertilizantes, máquinas e demais insumos agrícolas, além do mercado da água.

Ao longo dos anos o mercado da Revolução Verde foi tornando-se uma das vias mais importantes para a reprodução do capital no campo. No Brasil, inúmeros projetos com apoio do governo federal foram sendo criados, além da abertura de linhas de crédito rural, a exemplo do Sistema de Extensão Rural e, posteriormente, o Sistema ABCAR – Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ainda segundo Machado (2014).

O Sistema ABCAR, através das associações estaduais, levou a assistência técnica gratuita aos produtores agrícolas nacionais, por meio dos “pacotes tecnológicos”, que nada mais eram do que receitas a serem aplicadas nas diversas regiões do país, nos cultivos e nas criações. Só recebiam o benefício do crédito agrícola, altamente subsidiado, os agricultores que estivessem enquadrados no programa oficial. Se o produtor quisesse aplicar os recursos fora do “programa” não tinha acesso ao crédito rural subsidiado. Por exemplo, o uso de MO era considerado um atraso e os projetos



com crédito privilegiado não podiam ter qualquer item que contemplasse financiamento de produção com matéria orgânica. (Machado, 2014. p. 55).

A partir do Golpe Militar de 1964, a revolução verde torna-se política de Estado. Instituições de pesquisas agropecuárias são criadas, financiamentos para a “modernização da agricultura” e mais todo o aparato necessário de infraestrutura para a expansão da fronteira agrícola foram avançando ao longo das décadas seguintes. A abertura de estradas, construção de portos, crédito rural, e um dos pontos, senão o ponto mais importante e grave, a concentração fundiária acompanhou o ritmo de crescimento.

Novas frentes para a expansão das empresas capitalistas se abriram, por meio da ação do Estado que, com estímulos fiscais e concessão de terras públicas, atraiu capitais para a região amazônica e para os cerrados, áreas que até então se caracterizavam por uma ocupação esparsa, por povos indígenas e posseiros. Com isso, os conflitos por terra se expandiram e se acirraram, em especial tendo em vista a velocidade do processo de apropriação fundiária. (Medeiros, p. 343-344, 2013)

Quadro 1. Dinâmica populacional Urbana-Rural de 1960 a 2010						
	1960	2000	2010	1960(%)	2000(%)	2010(%)
População Total	70.992.343	169.590.693	190.755.799	100%	100%	100%
População Urbana	32.004.817	137.755.550	160.925.792	45,08%	81,22%	84,36%
População Rural	38.987.526	31.835.143	29.830.007	54,91%	18,77%	15,63%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2019.

O decréscimo na população rural se dá pela onda modernizadora do campo, que trouxe consigo, antes dos incrementos tecnológicos, a grilagem de terras tradicionalmente ocupadas. Empurrando os povos originários para mais um período de dispersão e processos de perda de suas identidades, assim como as comunidades tradicionais. A partir dos anos 2000, temos um período de reconhecimento de direitos territoriais para povos e comunidades tradicionais. Garantido pela Constituição de 1988, tal reconhecimento se dá pela força da luta reivindicatória dos povos e de maneira lenta e



incompleta por parte do Estado, reforçado por assegurados por acordos internacionais, a exemplo da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

As décadas de 1980 a 1990 foram marcadas pelo crescimento econômico exponencial das ocupações e acampamentos, recolocando no espaço público a questão da terra, com base quer em argumentos econômicos (a importância de produção de alimentos), quer em justificativas morais (necessidade de eliminar a enorme injustiça social que marcava o campo brasileiro). À medida em que essas iniciativas eram bem sucedidas, mais famílias se mobilizavam, provocando (...) “espiral das ocupações de terra”. (Medeiros, p. 348, 2015).

O sentido da luta pela “reforma agrária” toma novos contornos ao longo dos anos. O entendimento sobre preservação ambiental e direitos de Povos e Comunidades Tradicionais, por exemplo, vão sendo incorporados por fazerem parte do debate sobre a garantia da existência dos povos. Neste contexto, muitas comunidades rurais lograram resistir ao processo de expropriação fundiária, por meio da regularização de suas posses, fosse através de projetos de assentamento, titulação de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas, pois os termos pelos quais se realizava o modelo da Revolução Verde, dificultavam e, até mesmo, inviabilizavam sua reprodução social, econômica e cultural, o que ressaltou a necessidade de se reforçar ou mesmo buscar modelos produtivos alternativos.

Além dessas questões, a pauta da soberania alimentar surge em meados da década de 1990 (Meneses, 2001). Ao mesmo tempo, o grande mercado da Revolução Verde continuou crescendo e adentrando os países latino-americanos como Brasil e Argentina. Além da produção de sementes e insumos, a eliminação de espécies e modos de fazer tradicionais foram pondo em risco a soberania nacional, de acordo com Meneses (2001), o que ainda gera debates em torno da soberania alimentar, entendida como pré-condição para a soberania política (Machado, 2014).

Por soberania alimentar entende-se o “direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental [...]” (Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar. Havana (Cuba), 2001).



A grande dependência das áreas urbanas dos produtos advindos de agriculturas cada vez mais artificiais tem implicado no aumento dos casos de câncer em razão do consumo de alimentos com baixo teor nutritivo e altos índices de agrotóxicos, segundo Costa (2017), e o aparecimento de muitas doenças e alergias que historicamente nós não tínhamos, pois havia uma produção muito mais limpa. De acordo com a análise de amostras realizada pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Anvisa (2011) *in* Dossiê Abrasco (2015), um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos. Nos 26 estados brasileiros analisados, a distribuição de veneno encontra-se em: (91,8%) pimentão, (63,4%) morango, (57,4%) pepino, (54,2%) alface, além de outras culturas contaminadas.

É preciso destacar que esse sistema da agricultura capitalista também é sustentado por um modelo ideal de alimento construído no imaginário dos consumidores através da mídia. O que gera insegurança com relação à diminuição da diversidade de alimentos disponíveis de acordo com essa padronização dos cultivares que, por uma necessidade de inserção, competitividade no mercado e até mesmo a tentativa de “reduzir o trabalho” com os cultivos, leva os camponeses a também usarem produtos químicos e sementes melhoradas artificialmente e outros produtos obtidos por meio de sindicatos, prefeituras ou comprados no mercado agropecuário.

Os pequenos agricultores e suas famílias não conseguiram competir com as grandes empresas. O conhecimento e a prática tradicional destes trabalhadores foram apontados como “atrasados”, sendo descartados ou ainda apropriados pelas grandes empresas sem que estes tivessem direito de reivindicar aqueles saberes como seus. (Nobre, p. 9, 2014)

Essas profundas mudanças na economia política internacional da alimentação afetaram as formas de trabalho e o modus vivendi cotidiano das pessoas. O que as pessoas fazem para conseguir alimento, como o preparam e o dividem, o que elas comem, quando e com quem, tudo isso é influenciado por alterações na cadeia alimentar. (Friedmann, p. 88, 2002)

Esses fatores são os principais responsáveis pelo desaparecimento de inúmeras espécies e marginalização dos *modos de fazer*. Dessa maneira observa-se a existência de uma rede agroindustrial que cria relações de dominação sutis ou explícitas que travam muitas comunidades tradicionais, mas que também esbarra nas estratégias de resistência que esses povos organizam.



Da vulnerabilidade à autonomia: governança territorial como estratégia de construção da segurança e soberania alimentar

As áreas de reprodução social da agricultura familiar vêm cada vez mais sendo invadidas pelos grandes empreendimentos voltados ao agronegócio, e este avanço da produção de *commodities* e culturas mais genéricas, gera uma série de conflitos que atingem diretamente os Povos e Comunidades Tradicionais (PCT).

A mais recente inserção do capital no campo promoveu profundas transformações na estrutura fundiária do espaço agrário brasileiro, onde grandes áreas são dedicadas ao agronegócio e, essa prática cada vez mais se transforma em política de Estado. No Maranhão uma nova configuração territorial foi estabelecida resultante de um processo contraditório, demarcado pelos interesses dominantes desde o início da colonização do Brasil.

Da divisão em sesmarias às ocupações por fazendas de cana de açúcar e algodão, da promulgação da Lei de Terras de 1850 (Lei nº 601/1850) até a “Lei Sarney de Terras do Maranhão” (Lei Estadual n.º 2.979/1969); o Maranhão construiu uma história de desigualdade no campo. Com a Lei de Terras de 1850, o Estado condicionou as ocupações das terras devolutas àqueles que poderiam pagar pelas mesmas, e posteriormente quem podia agredi-las desmatando-as, o que resultou num verdadeiro reboliço dominial, pois muitas terras puderam ser adquiridas junto ao Estado e registradas em cartórios sem o pleno controle de suas reais dimensões, com isso, abriu-se uma grande brecha para a intensificação da grilagem de terras, que perdura até hoje. Por outro lado, impediu-se que muitos ocupantes de parte dessas terras pudessem acessá-las formalmente, alimentando assim o processo de exploração no campo e o fortalecimento dos conflitos agrários.

Apesar de a alimentação adequada⁴ ser um direito humano, dentro do modo de produção capitalista é preciso enfrentar duas questões para garantir o acesso a esse direito: o emprego ou a terra. No caso dos povos a principal questão é o acesso ao direito à terra e ao território, sabendo que estes são condição de sua existência. De acordo com o caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 2018 foram registrados no Brasil 1.489 conflitos no campo, sendo 1.124 envolvendo a questão da terra e, destes 199 somente no estado do Maranhão.

O mapeamento de Insegurança Alimentar no Brasil publicado em 2018 com base nos dados de 2016 aponta que no Maranhão, dos 217 municípios, 211 tem níveis de



vulnerabilidade variando entre médio, alto e muito alto (MDS, 2018). Ao por o filtro da microrregião da Baixada Maranhense nesses dados todos os 21 municípios da microrregião estão vulneráveis a insegurança alimentar, sendo que 9 registram situação de conflito envolvendo terra e/ou água, segundo a CPT (2018).

Portanto, a partir dos dados e do conhecimento que já se tem em torno da situação dos PCTs no Brasil, reafirma-se a importância da garantia da terra e do território a esses grupos, além da (r)existência de políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e das Comissões que cuidam da Segurança Alimentar Nutricional.

O caso do território quilombola de Charco é uma grande referência quando se busca compreender a passagem de uma situação de vulnerabilidade para uma situação de autonomia alimentar. Esta comunidade vivenciou um dos mais emblemáticos conflitos por terra e território na região da Baixada Maranhense. A perda de uma liderança, o enfrentamento ao Estado cobrando agilidade dos processos de identificação, certificação e titulação do território quilombola, além da exigência jurídica de punição aos mandantes e executores de Flaviano Pinto Neto, são características fundamentais da luta das duas comunidades que compõem o território: Charco e Juçaral.

Apesar de as comunidades de Charco e Juçaral serem ocupadas, majoritariamente, por descendentes de pessoas que foram escravizadas nas fazendas de algodão e cana-de-açúcar na microrregião da Baixada Maranhense, as terras foram reivindicadas pelo grileiro Gentil Gomes Matos. Até o ano de 2008 as famílias quilombolas de Charco e Juçaral pagavam o pagar o foro⁵ para poder implantar seus roçados na terra tradicional, além de serem obrigados a plantar capim nas áreas aforadas após a colheita para a implantação de pastagem. Com o passar do tempo, os quilombolas conscientizaram-se de que as áreas para o cultivo de alimentos tinham sido muito reduzidas, assim como seus espaços de reprodução familiar foram sendo pelo acentuado desmatamento para a implantação de pastagem pelo grileiro. Muitas famílias foram expulsas do território para o povoado Santa Rita I, localizado à margem da rodovia estadual (MA-014) que passa próximo ao território. Essa situação implicou na diminuição da renda das famílias e na vulnerabilidade alimentar dos quilombolas.

Muitas mudanças no território ocorreram em consequência do desmatamento para produção de pastagem e a mesma ação levou a diminuição ou extinção de muitas árvores frutíferas que faziam parte da alimentação das pessoas, como o bacuri,

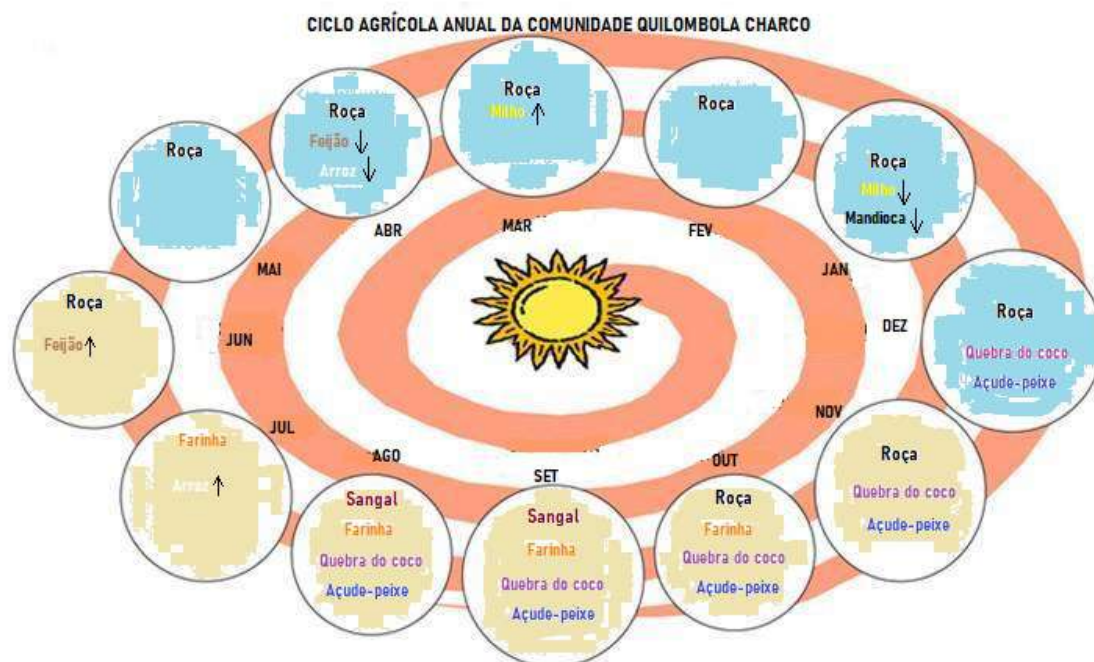


cupuaçu, carambola e juçara, além de árvores de madeira de lei e muito importantes para a comunidade. Com a retirada da mata nativa, muitos animais também ficaram sem alimento e foram desaparecendo do território, influenciando também na alteração das rotas de caça e alimentação das pessoas.

Com o objetivo de não ser afetado pela reforma agrária, o grileiro dividiu o território de Charco em quatro fazendas (Juçara, Noeli, São Joaquim e Santa Rita) e doou-as a seus filhos e netos. Porém, a organização dos quilombolas em torno de uma associação fortaleceu-lhes no sentido de possibilitar uma primeira ação no campo jurídico requerendo a desapropriação da fazenda Juçara no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. O laudo favorável à comunidade foi emitido em 2010.

Em função da lentidão no processo de desapropriação e titulação a comunidade resolveu retomar parte do território, ocupando a curral da fazenda e impedindo que os empregados do grileiro permanecessem nas terras. Instalaram um acampamento onde passaram a viver até o dia da assinatura do decreto de desapropriação do território, que só fora efetivada em junho de 2015, após uma ação de ocupação da superintendência do INCRA/MA marcada por uma greve de fome que perdurou por nove dias, fruto de mobilização do Movimento Quilombola do Maranhão - MOQUIBOM.

A assinatura da desapropriação trouxe aos quilombolas de Charco certa segurança, para organizarem e retomarem suas atividades produtivas, que tinham sido inviabilizadas pela situação de conflito com o latifundiário, a exemplo do plantio de suas culturas tradicionais (mandioca e batata-doce). Com a liberação dos recursos para a desapropriação, os quilombolas puderam captar recursos de diversas ordens para sua reorganização produtiva, agora sem a ingerência do pretense proprietário das terras. Esse processo de autonomia territorial tem como destaque o protagonismo das mulheres quilombolas pelo desenvolvimento da atividade da quebra do coco babaçu para a produção do azeite. Em 2018, as mulheres de Charco conseguiram o apoio financeiro da Fundação Ford para a construção de uma usina de beneficiamento do azeite de coco babaçu, ao acessarem o “Fundo Babaçu”, fundo este administrado pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). Além do trabalho com o coco babaçu há outras atividades que estão apontadas no calendário agrícola que segue:



A liberdade para usufruir da terra e do território sem a obrigação de pagamento de foro constitui um importante passo para o alcance da autonomia produtiva e da soberania alimentar das famílias. Após sete anos do fim das grandes derrubadas para a implantação de pastagens, as áreas de capoeira estão em processo de reconstituição o que tem permitido o reaparecimento de animais silvestres. A retomada das atividades produtivas segue em sua grande medida as formas tradicionais de plantio, tais como os roçados consorciados de mandioca, milho, arroz e feijão, com baixo emprego de insumos externos ao território.

Em paralelo as atividades de cultivo e criação tradicionalmente desenvolvidas pelas famílias no quilombo Charco, tais como os roçados, extrativismo do babaçu, pequena criação de animais de grande, médio e pequeno porte, criação de peixes, etc, a partir de 2018 um grupo de jovens se articulou em torno na implantação de uma horta.

Durante o início na implantação da horta o grupo de jovens passou a receber assistência técnica da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural – AGERP, que passou a receber acompanhamento de um técnico agrícola, bem como cursos de formação em hidroponia, empreendedorismo, e gestão de negócio agrícola. Tal acompanhamento tem resultado na introdução de técnicas de cultivo bastante distintas daquelas tradicionais, bem como na introdução de insumos externos, tais como instrumentos de irrigação, adubos químicos e orgânicos, assim como agrotóxicos para controle de pragas.



As novas formas de produzir têm conduzido grupo de jovens à realização de empréstimos bancários para aquisição de insumos e implementos. Além das vendas diretas a consumidores locais e aos estabelecimentos de vendas de hortifrutigranjeiros na sede do município mais próximo, os jovens envolvidos no projeto da horta têm tido acesso aos programas municipais de aquisição de alimentação escolar, que garante mercado para parte significativa da produção do grupo.

Considerações finais

A reconquista formal do território com o decreto de desapropriação publicado em 2015 não garantiu por completo a superação das dificuldades da reprodução da vida material no quilombo Charco, mas trouxe sem dúvida significativa tranquilidade para as famílias. Decisões autônomas do que produzir, como produzir e onde produzir são sem dúvida as mais significativas para comunidades camponesas em geral, assim como para comunidade quilombolas, que praticam via de regra apropriação comum das terras e território. Assim, para a comunidade do Charco poder planejar o futuro constitui uma das grandes conquistas.

O estudo revelou que na contramão do modelo da revolução verde, cuja tendência é a homogeneização dos agroecossistemas, o quilombo Charco caminha na manutenção diversidade produtiva e recuperação das áreas degradadas pelo grileiro que controlou as terras durante anos. A reprodução da vida material desde grupo está profundamente vinculada aos saberes e fazeres adquiridos ancestralmente, tanto no que se refere às técnicas de cultivo, como nas relações sociais tradicionalmente instituídas, tais como mutirão, troca de dias, etc. Foi possível identificar ainda novas estratégias produtivas sendo implementadas por jovens, que muitas das vezes não se sentem atraídos pelas pelos sistemas tradicionais de produção, mas que também reconhecem a importância de sua permanência no território para a garantia da manutenção dos direitos territoriais a sua comunidade. O processo rumo a plena gestão autônoma ainda não é considerado completo pela comunidade, há espaços ainda a serem conquistado. Os esforços atuais tem sido a busca da implantação de uma escola na comunidade que atenda os estudantes como educação quilombola, pois os estabelecimentos de ensino frequentados pelas crianças e jovens da comunidade não é considerado adequado para formação dos mesmo.



Notas

¹ Geógrafa e professora do Departamento de Geociências, da Universidade Federal do Maranhão.

² Sociólogo e professor do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão.

³ Concluinte do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão

⁴ LEÃO, Marília. O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional - Brasil ABRANDH, 2013

⁵ Foro ou aforamento constitui uma espécie de aluguel anual ou semestral pago ao proprietário do imóvel pelo uso da terra.

Referências

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social – MDS. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN. Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na Desnutrição a partir da análise do Cadastro Único, do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). 2018.

CAISAN, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional; MDS, Ministério de Desenvolvimento Social. Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na Desnutrição a partir da análise do Cadastro Único, do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) 2016. Brasília, DF: [s. n.], 2018. 131 p. Disponível em: <<https://bit.ly/3ICzzyz>>. Acesso em: 22 nov. 2018.

Carneiro, Fernando Ferreira (Org.) Dossiê Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde / Organização de Fernando Ferreira Carneiro, Lia Giraldo da Silva Augusto, Raquel Maria Rigotto, Karen Friedrich e André Campos Búrigo. – Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015.

Costa, Vanessa Índio do Brasil da; Mello, Márcia Sarpa de Campos de and Friedrich, Karen. Exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos e o linfoma não-Hodgkin, 2017. Vol. 41, n.112, pp.49-62. ISSN 0103-1104.

CPT, Comissão Pastoral da Terra. Conflitos no campo. Caderno de Conflitos 2018, Goiânia - GO, 30 nov. 2019

Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar. Declaração do Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar. CECANE PARANÁ, 2001. Disponível em: <<https://bit.ly/36VvJwi>> Acesso em: 20/05/2019.



Friedmann, Harrietin: *Economia Feminista* / Nalu Faria e Miriam Nobre (orgs.). São Paulo: SOF, 2002. 104 p. (Coleção Sempreviva).

IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.

Leão, Marília. O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional - Brasil ABRANDH, 2013.

Machado, Luiz Carlos Pinheiro. *Dialética da Agroecologia*, 1. Ed. – São Paulo : Expressão Popular, 2014.

Menezes, Francisco. *Segurança Alimentar*: um conceito em disputa e construção. Rio de Janeiro: IBASE, 2001.

Nobre, Miriam Nobre Pacheco; Miguel, Maysa Mourão; Moreno, Renata e Freitas, Taís Viudes de. *Economia feminista e soberania alimentar: avanços e desafios*, 2014. f. 33. Sempreviva Organização Feminista – SOF.



La propiedad intelectual y la ocupación de las tradiciones cognitivas locales: El caso de la ley de Semillas en Costa Rica

María José Murillo Chaves¹

Resumen

Las formas de ocupación modernas por parte de la racionalidad dominante que impulsa el modelo de agro industria en Costa Rica, implican a nivel local y comunitario, el cambio de las dinámicas sociales, ecológicas y productivas. Los mecanismos jurídicos (proyecto de Ley 21.087) y productivos (biopiratería, semilla de calidad, paquete tecnológico, patentes) son los operacionalizados para producir la no existencia de comunidades rurales, indígenas y campesinas, y la ocupación a nivel cognitivo de las practicas humanas.

Palabras clave

Ocupación epistemológica, biopiratería, propiedad intelectual, patentes, conocimientos locales

A modo de introducción

La presente ponencia se plantea para la comprensión de las dinámicas de colonialismo moderno por parte del Estado colonial -y su mecanismo jurídico- y de la industria semillera internacional -racionalidad productiva- y nacional, por medio de la propiedad intelectual y la patentización de organismos vivos, sobre las tradiciones y conocimientos de las comunidades rurales y agro productoras de Costa Rica con la imposición de la Ley 21.087 y el registro de las variedades de semillas para el comercio.

En la presente se hace referencia específica a las afectaciones que, a partir de la observación participante y experiencia personal en un proyecto de extensión y comunicación social de la UNA, se presentan ante el contexto y condiciones de la comunidad sobre las relaciones de producción y de validación de conocimientos.

La ponencia se desarrolla con base en la teoría de la Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias de Boaventura de Sousa Santos (2006) y sobre ecofeminismos de Vandana Shiva. Con base en ello, se problematiza las dinámicas de ocupación, la cual se traduce en violencia física, ideológica, simbólica, cultural y biológica; es el resultado de la transgresión del principio de igualdad esencial. Según Vasilachis, (2011), los procesos discriminatorios contribuyen, también, con el



afianzamiento de esa diferencia, esencializándola, en desmedro del reconocimiento de la común dignidad.

La complicidad estatal e imposición al sector agrícola

Fundamento del problema

En Costa Rica, en noviembre de 2018, el proyecto de ley 21.087 fue presentado por la fracción del Partido Liberación Nacional PLN por la diputada Paola Alexander Valladares Rosado, entre otras y otros ante el Plenario Legislativo; sin embargo, se han presentado anteriormente versiones que apuntan al mismo fin: controlar el comercio, producción y uso de las semillas “de calidad”. En la presente nos referimos a su última versión.

La finalidad del proyecto de Ley 21 087 vigente, es desarrollar la actividad comercial de semillas, es aplicable a su producción, comercio y uso; supone facilitar el registro, certificación, patentización y control de las semillas comerciales, consideradas como “de calidad”, es decir, las que cumplan con los estándares de calidad establecidos para el fortalecimiento de la actividad semillera industrial, cuyas características genéticas deben ser: nuevas, homogéneas, estables y distinguibles. Supone “una sana, justa y equitativa competencia”. La libre circulación e intercambio de las semillas por parte de comunidades o personas que no estén registrada ni que cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos a nivel nacional e internacional, serán criminalizadas, sancionadas y hasta decomisadas.

De acuerdo con Catherine Walsh (2005) la promoción de este tipo de proyectos de ley representa lo que en la geopolítica dominante se entiende como concepción única, globalizada y universal del mundo, gobernada por la primacía total del mercado y de la cosmovisión (neo) liberal y como parte de ella, por un orden político, económico y social, un orden también del conocimiento.

Lo que se entiende por colonialidad del saber es: la negación de formas de producción del conocimiento que no sean blancas, europeas o “científicas” en el sentido cartesiano y newtoniano. En el entendido de que no es solo la elevación de la perspectiva eurocéntrica del conocimiento como perspectiva única, sino también la autoridad que esta hegemonía tiene en determinar qué es conocimiento, y quiénes lo producen (Walsh, 2005).

El ordenamiento del conocimiento se operacionaliza por la aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual, por medio de las leyes de patentes contenidas en, según nos



compete problematizar en la presente ponencia, el proyecto de ley 21.087. Este responde al Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido por su acrónimo en inglés como ADPIC) del *GATT/OMC*. En este se plantea la creación de un registro en el cual se inscriben las variedades comerciales, objeto de comercialización en el país y cubiertas por el ámbito de aplicación de la Ley y sus reglamentaciones. Esto implica la certificación de la semilla de "calidad" por parte del Servicio Nacional de Semillas SENASEM a la persona física o jurídica que presenta la variedad. En este sentido, es que se pueden patentar los organismos vivos obtenidos genética y bioquímicamente, ejemplo de ello son las semillas de calidad u organismos genéticamente modificados OGM².

La biopiratería se entiende como el mecanismo de ocupación³ y permanencia del colonialismo sobre la biodiversidad y los conocimientos situados. Este se refiere al empleo de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad privada y el control exclusivos de los recursos biológicos, de productos y procesos biológicos que se han utilizado durante siglos en las culturas no industrializadas. Las solicitudes de patentes sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales que se basan en la innovación, la creatividad y el ingenio de la gente del Tercer Mundo son actos de biopiratería (Shiva, 2003). Este tipo de ocupación ataca la vida y la identidad de las comunidades que desarrollan sus procesos de socialización en entornos naturales y espirituales más complejos, que la racionalidad de Occidente.

Este paradigma de la biopiratería tiene sus cimientos en la descorporeidad y descontextualización del conocimiento⁴. El "cercado" de biodiversidad y conocimientos es la etapa final de una serie de cercados que se iniciaron con la ascensión del colonialismo. (Shiva, 2003)⁵

Los derechos de propiedad intelectual DPI comprenden un conjunto de leyes que conceden derechos monopólicos a aquellas personas que crean ideas y conocimiento, pretende proteger a las personas inventoras contra la pérdida de control sobre sus creaciones. Según Vandana Shiva:

A la larga, cabe que un sistema de DPI fuerte se traduzca en discriminaciones de precios y en numerosas prácticas para distorsionar el mercado, como la agrupación de patentes, las ventas acordadas, la explotación mutua de derechos de patente y negarse a conceder una licencia. (Shiva, 2003, p. 11)



Las patentes se entienden como:

Las patentes conceden al titular el derecho exclusivo a su invención que abarca la creación, aparición, uso, venta o distribución del artículo o sustancia patentados, así como la utilización y el uso del método o proceso de fabricación patentados de un artículo o sustancia. En el caso de las patentes sobre la vida, esto significa que un titular de patente puede impedir que otros elaboren o utilicen semillas, plantas y animales patentados. Como los recursos vivos y los seres vivos "se hacen" a sí mismos y los agricultores siempre han guardado sus semillas y conservado sus terneros, el derecho de patentes occidental considera que guardar e intercambiar semillas es un "robo contra la propiedad intelectual". (Shiva, 2003, p. 12).

¿Cómo comprender las dinámicas de ocupación?

A partir de lo ya expuesto, se referencia la teoría de la *Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias* de Boaventura de Sousa Santos (2006) para dar cuenta del tipo de relaciones establecidas entre las diversas finalidades de pensamiento, sus normas, medios y sus fines.

Para comprender la realidad, la sociología de las ausencias trata de "una investigación que intenta demostrar que lo que no existe es, en verdad, activamente producido como no existente, esto es, como una alternativa no creíble a lo que existe." (De Sousa Santos, 2006, p. 74. Según el autor (De Sousa Santos, 2006) es una versión amplia del realismo, que incluye las realidades ausentes por la vía del silenciamiento, de la supresión y de la marginalización, esto es, las realidades que son activamente producidas como no existentes⁶. La sociología de las emergencias consiste en proceder a una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y agentes de modo que se identifique en ellos las tendencias de futuro. (De Sousa Santos, 2006).

Las racionalidades que dan pie a la materialización de los constructos ideológicos que subordinan a grupos humanos por sus características étnicas, regionales, culturales, de sexo o identitarias son: la razón metonímica, que, según De Sousa Santos (2006) se reivindica como la única forma de racionalidad y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros tipos de racionalidad o, si lo hace, es solo para convertirlas en materia primas; y la razón proléptica, que no tiende a pensar el futuro porque juzga que lo sabe todo de él y lo concibe como una superación lineal, automática e infinita del presente: progreso, desarrollo, globalización, etc. La razón metonímica (la parte tomada por el todo) y razón proléptica (el dominio del futuro bajo la forma de planificación de la historia y del dominio de la naturaleza).



La razón metonímica se afirma como una razón exhaustiva, exclusiva y completa, aunque sea solo una de las lógicas de racionalidad que existen en el mundo y sea solo dominante en los estratos del mundo comprendidos por la modernidad occidental. (De Sousa Santos, 2006, P. 70)

Estas se imponen por la eficacia de su imposición. Esa eficacia se manifiesta por la doble vía del *pensamiento productivo* y del *pensamiento legislativo*; así, en vez de la razonabilidad de los argumentos y del consenso que tal doble vía hace posible, priman la productividad y la coerción legítima. (De Sousa Santos, 2006). En este sentido es que se refiere al Proyecto de Ley 21.087 y al modo de producción capitalista de la industria agrícola y el papel de la propiedad privada en las comunidades y sus tradiciones cognitivas locales- compartidas públicamente.

Aunado a lo anterior es que se referencia a Franz Hinkelammert y Henry Mora (2005) en su explicación sobre la teoría de la división social del trabajo y la lógica que operacionaliza los medios de producción y reproducción social. Los autores (2005) refieren a la racionalidad instrumental y la racionalidad con arreglo a valores:

...los agentes o sujetos sociales buscan alcanzar, antes que los fines inmediatos mismos, determinadas finalidades, las cuales describen el horizonte de sentido de la acción social, y sirven como ámbito de determinación de los fines o metas concretas. En el marco de estas finalidades, se deducen normas que permitan a través de juicios de valor, definir fines concretos, y después de esto, los medios para alcanzarlos. (Hinkelammert y Mora 2005. p. 132-133)

Los medios se pueden derivar mediante criterios formales y racionalmente determinados, la relación entre medios y fines es una relación técnica (racionalidad instrumental), y la relación entre fines concretos y finalidades es de supeditación o de libre voluntad (racionalidad con arreglo a valores). (Hinkelammert y Mora, 2005)

En este sentido es que se determina la finalidad de la ganancia, con base en la aplicación del cálculo económico en cuanto que comportamiento maximizador; haciendo desaparecer la distinción entre la economía y las otras esferas de la sociedad. Su fin: la monopolización de las dinámicas de comercio, uso y producción de semillas, Los medios pueden ser varios: los DPI, las patentes y la cosificación de la biodiversidad, las semillas y sus elementos genéticos y bioquímicos.



La observación participante

Para comprender una realidad ajena la a mía y que desde la sociología como disciplina es limitado observar, se referencia la *Ecología de los Saberes* (De Sousa Santos, 2006) que refiere a la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan creíblemente en contextos y prácticas sociales declarados como no existentes por la razón dominante.

Durante el 2019, fui participe de una iniciativa estudiantil desde el Proyecto de Alfabetización Crítica⁷ del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica y que es parte del proyecto Epistemologías del Sur, adscrito a la Escuela de Sociología de la UNA. La iniciativa fue llamada Proyecto Semillas. Esta propuesta fue expuesta a las Asociaciones Culturales Dwalk, Ditsokkata y Awapa de la comunidad bribri de Kcha' bli en el territorio indígena y rural de Talamanca, Limón, cuyo proceso se dio en conjunto con quienes participaron durante los talleres y actividades. El objetivo planteado desde quienes propusieron el Proyecto Semillas a la comunidad fue: acompañar el proceso de resistencia comunitario en Kcha' bli, con relación a la problemática del control del uso de las semillas de "calidad" en Costa Rica, ante la vigencia del proyecto de Ley N° 21.087 (Ley sobre la Producción y Control de la Calidad en el Comercio de Semillas) durante el 2019.

Con base en ello se gestionaron diversas actividades (talleres, cine foros, proyecciones de videos, de manualidades, de intercambios, de dialogo, etc.) en conjunto para reflexionar y dialogar desde las diversas epistemes, sobre las implicaciones o beneficios del modelo de producción agroindustrial y de la imposición geopolítica de las leyes en contra de la seguridad y soberanía alimentaria, de la autonomía indígena y de las relaciones de comercio justo con la comunidad.

A partir de mi experiencia de dialogo e intercambio con las personas participantes del proyecto, tanto de la comunidad como con mis compañeros facilitadores, como mujer, estudiante y facilitadora del proceso, realice la observación participante lo cual se presenta en la ponencia como metodología. A partir de ello es que se pretende aportar a la discusión sobre las implicaciones epistemológicas, ecosistémicas y materiales sobre los conocimientos locales, comunitarios y ancestrales y sobre la biodiversidad, que esta lógica metonímica, por medio de los mecanismos jurídicos y productivos, tiene y podrán tener las familias de la comunidad.



La ocupación de los conocimientos comunitarios

Tal como ya se ha expuesto, la Propiedad intelectual implica, además de la biopiratería y la cosificación de la naturaleza, el deterioro de los conocimientos que resisten a las diversas formas del colonialismo histórico y que han sido adquiridos por las prácticas familiares y comunitarias que se realizan según el entorno rural y la concepción de la naturaleza.

La ocupación del modelo de producción agrícola de la industria semillera, entendidas a su vez como no indígenas, sobre las formas propias de producción y trabajo en la comunidad bribri tiene implicaciones en las dimensiones socio culturales, espirituales y ecológicas. En la presente se hará referencia únicamente al ámbito de las implicaciones en las formas de organización socio productivas, la educación comunitaria y la concepción de naturaleza que se ven amenazadas ante la imposición del modelo neoliberal del control sobre el comercio, intercambio y uso de semillas en Costa Rica.

El control del comercio de semillas *per se* no es mala propuesta, sin embargo, la lógica bajo la cual se plantean hoy día niega los derechos comunitarios y el respeto por la naturaleza. El control del uso, producción y comercio de semillas implica su registro, cumpliendo las características de homogeneidad, estabilidad, distinción y nuevas, esto solo lo cumplen las semillas producidas por el monstruo de la industria agrícola, mientras que las semillas locales se caracterizan por su diversidad genética y productiva, por su proceso natural de desarrollo e intercambio biológico. Además de ser parte importante de la cosmovisión y cultura bribri sobre las formas de relacionarse con la biodiversidad. En este sentido son certificadas y patentadas por la industria o empresa semillera.

Las patentes implican licencias y pago de montos altos por su uso, que no podrían ser costeadas por las personas de la comunidad, en razón de que en su contexto, las relaciones de comercio entre pequeña/o productor y la empresa son desiguales, en tanto que la fuerza de trabajo es mano de obra explotada por los intereses del mercado de banano, plátano y cacao. La mano de obra no es remunerada por los mediadores ni por las empresas, el precio de la venta de banano es miserable.

Talamanca es conocida por la producción de cacao, banano y plátano orgánico, de muy buena calidad y de diversas variedades. Sin embargo, el pago por los productos orgánicos es miserable: se compra el racimo de banano a 2000 colones, el embolsado (que se produjo usando bolsas que contenían compuestos químicos para acelerar su crecimiento -paquete tecnológico-) en 3000 mil colones. Mientras que el racimo de



banano orgánico se compra en 1300 colones. El racimo de banano puede pesar 30kg. La fuerza de trabajo no se paga. Los intermediarios de la venta de banano y plátano a las empresas ganan a costilla de las familias productoras de Talamanca, es decir, la competencia es completamente desleal por parte de mediadores y empresas; además de que, ante otras alternativas de compra y venta más justas, las personas se ven amenazadas y hostigadas por los mismos mediadores y empresas.

Por otro lado, las patentes de semillas y las semillas de “calidad” vienen acompañadas de paquetes tecnológicos (fertilizantes, herbicidas y pesticidas) con sus respectivas licencias, de los cuales depende la cosecha, pero que no asegura su producción real; además de que sus componentes son altamente peligrosos para la biodiversidad, el agua y la tierra. Implican su contaminación y, que, para toda la comunidad indígena rural de Talamanca, implica la contaminación de su espacio, de las montañas y ríos sagrados desde su cosmovisión.

La comprensión del uso de paquetes tecnológicos es nula o poca por parte de las mujeres y hombres agroproductores que participaron en el proceso del Proyecto de Semillas, en el sentido de que son conocimientos técnicos, occidentales y ajenos al conocimiento y contexto bribri, ya que es producido desde la industria de la biotecnología y que además, implica la ocupación de las formas en que se concibe la naturaleza desde el pensamiento de las familias que viven allí para imponérseles la lógica ecocida del capitalismo por medio del uso de semillas de calidad y paquetes tecnológicos, en respuesta a la satisfacción de las necesidades humanas (servicios: educación, electricidad, transporte, salud, vestimenta, herramientas, tecnología, etc.). Las personas de la región que saben que el uso de agroquímicos afecta y contamina la tierra y el agua, ante la necesidad de sustento, los usan sin control ni conocimiento total de sus implicaciones. Esto es culpa de la imposición de la razón metonímica, específicamente, de la lógica del saber y la lógica productivista capitalista a contextos locales y ricos en tradiciones.

El consumo de los productos y semillas que vienen de afuera, han generado padecimientos y el aumento de casos de personas que padecen colesterol o anemia. Además de la contaminación por los agroquímicos.

A nivel familiar, se ven amenazadas las costumbres y prácticas de siembra particulares para cada semilla, explicadas en el idioma bribri y que han sido heredadas por las y los mayores de la comunidad en idioma bribri y que son las/los niños quienes aprenden de



sus madres y padres, por medio del acompañamiento y participación activa del proceso de siembra en las fincas. Estos son conocimientos que se aprenden para la siembra: época de la luna, estado de la tierra, sobre plagas naturales y su manejo, sobre la conjunción de la cosmovisión con las técnicas de siembra.

Reflexiones finales

Con la pérdida de la semilla, se pierde el idioma, las tradiciones, el control de la producción y el sustento, se pierde la autonomía de los pueblos. La imposición por medio de la legislación y el modelo de producción de la razón metonímica sobre las prácticas y saberes locales, niega sistemáticamente el proyecto de interculturalidad. En este sentido, el Estado es cómplice de la perpetuación de las relaciones de explotación, racismo y discriminación social.

Se evidencia que el Estado costarricense es productor y reproductor de la lógica de la colonialidad del poder aportada por Walter Mignolo y que según Walsh (2005), refiere al uso de raza como criterio fundamental para la distribución de la población en rangos, lugares y roles sociales, y con una ligazón estructural a la división del trabajo.

La estructura de producción capitalista y el Estado colonial moderno, niegan al proyecto ético-político de la interculturalidad, cuyo principio ideológico apunta a la transformación de las actuales estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad, con miras hacia la conformación de poderes locales alternativos, el Estado plurinacional y una sociedad distinta a la colonialidad del saber y la geopolítica dominante del conocimiento (Walsh, 2005).

Las comunidades indígenas, campesinas, activistas y ecologistas en Costa Rica luchan desde 1999 para impedir la imposición del modelo de producción agroindustrial por la imposición de la ley- y de la patentización de los conocimientos de las comunidades rurales e indígenas. Se debe recordar que la obtención de los conocimientos por parte de las y los científicos sobre los procesos, beneficios y recursos que da la biodiversidad y su compleja composición, surgen de la experiencia de interacción y transformación socio ambiental de las comunidades indígenas y campesinas. Es decir, el conocimiento patentado es robado del acervo de conocimiento comunitario.

La perpetuación de las dinámicas de colonialidad toman formas complejas e innovadoras. El capitalismo criba en todas las formas de producción pública a beneficio de los intereses del sector privado.



Notas

¹ Estudiante de Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional

² Los OGM son producto de la Revolución Verde, esta vez en forma de ingeniería genética: la manipulación y modificación genética de seres vivos. En este sentido, para que patentar seres vivos resulte menos polémico, la biodiversidad ha sido redefinida como "invenciones biotecnológicas" y "construcciones genéticas". (Shiva, 2003, p. 44)
La Revolución Verde fue un controvertido estilo de investigación agrícola y estrategia de producción impulsada por la Fundación Rockefeller que, a comienzos de la década del 60, fue desarrollado en gran escala con el fin de aumentar la producción de granos alimenticios en el Sur por medio de la creación de semillas transgénicas resistentes a plaguicidas, fertilizantes y al cambio climático. Además, de asegurar tanto el monopolio de producción semillera y agrícola de las industrias, como la mano de obra campesina e indígena.

³ Lo que hace posible a las diversas formas de ocupación -desde la física a la simbólica, ideológica, cultural, entre otras- es la presencia de una serie de presupuestos, sean éstos éticos, cognitivos, teóricos, filosóficos, fácticos, políticos, cuando no jurídicos, que justifican esa ocupación, que la permiten, que la validan, que la admiten, que la promueven. Esos presupuestos se fundan en un orden que jerarquiza unas por sobre otras diferencias, y que consagra la prioridad de algunas de ellas respecto de las demás." (Vasilachis, 2011, p. 2)

⁴ " las formas de conocimiento, los sistemas de clasificación, las tecnologías y los códigos de vida social de los indígenas de Asia, de América, del Pacífico y de África se empezaron a registrar con algún detalle en el siglo XVII; sin embargo, la ciencia occidental los introdujo como "nuevos conocimientos". (Tuhiwai, 2016, p. 94.) "Las técnicas del detalle se desarrollaron para mantener la disciplina sobre el cuerpo. La colonización del Otro a través de la disciplina tiene distintos significados, y se desarrollaron distintas maneras de usar el conocimiento para disciplinar a los colonizadores. Las formas más obvias de disciplinar fueron la exclusión, la marginación y la negación particularmente de los saberes indígenas". (Tuhiwai, 2016, p 104)

⁵ Los siglos XVIII y XIX también constituyeron una era de "recolección" altamente competitiva. Muchos pueblos indígenas podrían referirse a este proceso como "robo" en lugar de "recolección, pues incluía la acumulación de territorios de nuevas especies de flora y fauna, de recursos minerales y de culturas. (Tuhiwai, 2016)



⁶ Según De Sousa Santos (2006, p. 75-77) son cinco las lógicas o modos de producción de la no existencia: 1) monocultura del saber y del rigor del saber: Consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética, respectivamente. La no existencia asume aquí la forma de ignorancia o de incultura; 2) monocultura del tiempo lineal: Esta lógica declara atrasado todo lo que, según la norma temporal, es asimétrico en relación a lo que es declarado avanzado; 3) lógica de la clasificación social: distribución de las poblaciones por categorías que naturalizan jerarquías; 4) lógica de la escala dominante: Se privilegian las entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo y que, al hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales; 5) lógica productivista: se asienta en la monocultura de los criterios de productividad capitalista. La no existencia es producida bajo la forma de lo improductivo, la cual, aplicada a la naturaleza, es esterilidad y, aplicada al trabajo, es pereza o descualificación profesional.

⁷ Desde hace más de 10 años el proyecto Alfabetización Crítica de la Universidad Nacional ha apostado por estimular espacios para las experiencias interculturales educativas. A partir de ello es que “Destacaremos el aporte de esta actividad académica de extensión, investigación, docencia y producción a la formación de profesores/as de Enseñanza de filosofía en la universidad antes citada.” (Gómez, 2018, p. 84)

Referencias bibliográficas

- De Sousa Santos, B. (2006) *Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria. Capítulo 3. Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias*. P. 65-103. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales • UNMSM. Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global. Perú.
- Gómez, Torres J. (2019) *La interculturalidad en la formación de profesores de enseñanza de la filosofía: Un encuentro con la comunidad de Kcha´ bli*. Revista Ensayos Pedagógicos. Edición Especial •83-101, ISSN 1659-0104. UNA, Costa Rica.
- Hinkelammert, F., Mora, Jiménez H. (2005) *Hacia una Economía para la Vida. Capítulo VI La racionalidad medio-fin y la irracionalidad de lo racionalizado*. P. 129-141. Editorial Departamento Ecuménico de Investigación (DEI). San José, Costa Rica.
- Shiva, Vandana (2003) *¿Proteger o expoliar? Los derechos de Propiedad Intelectual*. Intermon Oxfam. Barcelona, España.
- Tuhiwai, Smith L. (2016) *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas*. Editorial Cultura y Sociedad | Ciencias sociales y Humanas. Santiago, Chile



Vasilachis, de Gialdino, I. (2011) *Nuevas formas de conocer, de representar y de incluir: el paso de la ocupación al diálogo*. *Discurso & Sociedad*, Vol. 5(1) 2011, 132-159. ISSN 1887-4606.

Walsh, C. (2005) *Interculturalidad, colonialidad y educación*. Artículo. Ponencia en el *Primer Seminario Internacional "(Etno) educación, multiculturalismo e interculturalidad"*, Bogotá, Colombia. Documento PDF.

Marcos jurídicos

Proyecto de Ley N° 21 087 Ley sobre la *Producción y Control de la Calidad en el Comercio de Semillas*. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.



Feira da agricultura familiar e circuitos curtos de produção: O caso de XAXIM/SC

Idiane Mânica Radaelli
Daiane Pegoraro Bochi
Cristiano Nunes Nesi
Idiane Mânica Radaelli

Resumo

A crescente busca por alimentos mais naturais, livres de conservantes e outros aditivos químicos, além de evidências dos males causados pelos alimentos ultra processados vêm mudando o padrão de consumo da sociedade. Neste sentido, a comercialização em feiras livres fornece alimentos de melhor qualidade, estabelece uma relação de confiança entre produtores rurais e consumidores, permitem interação entre produtores rurais e comunidade, o que estabelece uma relação de confiança e favorece a comercialização em circuitos curtos. Neste novo paradigma, a “Feira da Agricultura Familiar”, no município de Xaxim, na região Oeste do estado de Santa Catarina, conta com consumidores buscando esse novo perfil de consumo natural, o que abre espaço para os agricultores familiares do município diversificarem suas produções, comercializar diretamente seus produtos e, com isso, aumentar a renda familiar. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é caracterizar os aspectos socioeconômicos e culturais dos produtores/feirantes e consumidores da feira do município. Com base em entrevistas realizadas com os produtores/feirantes, consumidores e análise de documentos, elaborou-se o histórico da feira, o perfil cultural dos produtores/feirantes e dos consumidores. Além disso, dimensionou-se a relação social e os elos que existem entre os consumidores e os produtores/feirantes. A feira promove o desenvolvimento da agricultura familiar no município, especialmente nos aspectos econômicos e culturais e fortalece a relação entre produtores/feirantes e consumidores. Observa-se um ajuste nos produtos oferecidos pelos feirantes/produtores visando atender aspectos culturais dos consumidores.

Palavras-chave

Alimentos naturais, Comercialização, Feiras agrícolas, Agricultura familiar, Perfil do consumidor.

Introdução

A crescente busca por alimentos mais naturais, livres de conservantes e outros aditivos químicos, além de evidências dos males causados pelos alimentos ultra processados, vêm mudando o padrão de consumo da sociedade. Neste sentido, os produtos



comercializados em feiras livres permitem interação entre produtores rurais e comunidade, o que favorece a comercialização em circuitos curtos, fornece alimentos de melhor qualidade e estabelece uma relação de confiança entre produtores e consumidores. De acordo com o Ministério do Distrito Federal e Territórios (MPDFT, 2011), a feira livre é considerada o espelho da cultura local, onde visitantes e feirantes podem expressar seus hábitos e valores, obter lazer e entretenimento, além de ser uma fonte de renda e emprego. Para Almeida e Pena (2011), a feira municipal é um local de aproximação de pessoas, fortalecimento de laços de afeto e lugar de sociabilidades. Quando esse espaço é usado por produtores rurais e comunidade, essa interação cidade campo se concretiza. A feira livre é um fenômeno social, econômico, político e cultural. No Brasil, segundo o mapeamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, 6.450 mil feiras, sendo que 5.119 são feiras livres e 1.331 são feiras agroecológicas ou de produção orgânica (SNA, 2015).

Martinez (2006) afirma que os motivos que levam os consumidores a procurar as feiras são a qualidade (produto fresco e sem veneno), o preço (mais barato), e a oportunidade da conversa, do "bate-papo", da solidariedade. Frente a isto, conhecer melhor os consumidores, particularmente os de produtos orgânicos pode resultar em significativas mudanças nas instituições ligadas à organização da produção e do consumo que, por sua vez, se reflete na organização de comunidades mais sustentáveis nas dimensões 'organização social', 'organização da reprodução material' e na 'conservação da base de sustentação' (Trevizan e Casemiro, 2009). Para Fontana (2018) a industrialização, modernização e tecnologia instigaram uma mudança na sociedade, com isso, as feiras livres deixaram de ser o ponto principal de consumo, tornando-se, então, secundárias e em alguns lugares as feiras foram extintas. Porém, as feiras livres regressaram, passando a ser locais mais atrativos do que propriamente locais básicos, que possuíam alimentos para a sobrevivência. As feiras livres, quanto a sua forma de comercialização, situam-se como cadeias curtas de abastecimento. Esse enquadramento se dá pela proximidade que há entre produtores e consumidores (Scarabelot; Schneider, 2012). As feiras podem ser consideradas um espaço tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, pois demonstram o quanto são lugares de resistência, considerando todo o processo de contribuições para a soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) que proporcionam. A políticas de SSAN têm como propósito despertar a importância de uma alimentação saudável, baseada em práticas sustentáveis de produzir os alimentos, mas também de transformá-los para o consumo (Fontana, 2018).



A contribuição da agricultura familiar para produção de alimentos e a superação da insegurança alimentar é fato que tem sido amplamente reconhecido nos anos recentes no Brasil (Scarabelot e Schneider, 2012). Neste novo paradigma, a “Feira da Agricultura Familiar”, no município de Xaxim, na região Oeste do estado de Santa Catarina, conta com consumidores buscando esse perfil de consumo natural, o que abre espaço para os agricultores familiares do município aumentarem suas produções, comercializarem diretamente seus produtos e, com isso, aumentarem a renda familiar. Assim, caracterizar a feira como espaço público permite entender o contexto socioeconômico da população do município. Entretanto, para a venda de produtos de origem animal como (derivados de carne, laticínios e ovos), produtos típicos da região e com características que lhe garantem uma identidade própria, singularidades que a diferenciam de outras regiões do País, ainda há barreiras sanitárias.

Diante do apresentado, o objetivo deste estudo é caracterizar os aspectos socioeconômicos e culturais dos produtores/feirantes e consumidores da feira do município.

Metodologia

A Feira Municipal do Produtor Rural “Feira da agricultura familiar de Xaxim” ocorre uma vez na semana (aos sábados de manhã), e fica localizada no município de Xaxim, no Oeste do estado de Santa Catarina, à Rua Francisco Bertaso, nº 1056, no centro da cidade. Inicialmente, fez-se um levantamento de informações documentais (atas, declarações) e diálogos com os coordenadores da feira. Elaborou-se um questionário com questões abertas e de múltipla escolha, aplicados aos consumidores durante suas compras na feira. O questionário foi aplicado no dia 18 de maio de 2019 a 22 consumidores presentes no local da feira entre 6 e 10 horas da manhã. Os consumidores foram aleatoriamente escolhidos e sua participação ocorreu de forma voluntária. Na sequência, foram entrevistados os feirantes e feito um levantamento dos principais produtos comercializados. Após aplicados os questionários os dados foram digitados e submetidos a análise descritiva e exploratória, com auxílio de planilha Excel.

Resultados e Discussão

Segundo o censo parcial do IBGE (2018) o município de Xaxim conta hoje com 28.424 mil habitantes. A população urbana do município em 2010 era de 20,967 mil habitantes, já a população rural no mesmo ano era de 4,746 mil habitantes. Dentre a população



rural do município cerca de 50,31% são mulheres. A medida do IDH do município é de 0,752.

No município de Xaxim a feira municipal está em atividade a aproximadamente 15 anos. Todavia, somente em 2010 ela foi reconhecida e denominada como “Feira da agricultura familiar de Xaxim” com o apoio da prefeitura e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina Epagri. Em agosto de 2018 um grupo de 18 famílias de agricultores familiares, começaram a reorganizar a feira, com o intuito de vender sua produção e com isso atender a demanda dos consumidores do espaço urbano, e aumentar a renda das famílias envolvidas. A reorganização da feira dá visibilidade e credibilidade para a comunidade local. Os feirantes são sócios da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Xaxim-Coafax. Um espaço importante para a sua organização, é através da Coafax, onde encaminham um projeto público para a construção do espaço físico da feira. O projeto foi aprovado por um programa do governo do estado de Santa Catarina, denominado SC RURAL, onde conseguiram o valor de R\$300.000,00, e o poder municipal doou o terreno o que viabilizou a construção da estrutura física para a feira.

Esta organização faz com que os produtores tenham um espaço próprio com aproximadamente 200m² de área. Atualmente, a Coafax contribui com a organização da feira e dos produtores, mas cada feirante tem autonomia na venda do seu produto. Os integrantes da feira são agricultores familiares, a feira é considerada convencional, sem ênfase na venda de produtos agroecológicos.

Foram entrevistados no total 11 produtores que comercializam produtos na feira, e concluímos que a grande maioria possui pequenas áreas de plantio e diversificam a produção nestas mesmas áreas para atender os consumidores. Constatamos através das entrevistas que 90,9% dos produtores tem idade acima de 45 anos e que aposentados somam 63,33%, e a mão de obra para se produzir é predominantemente familiar, que é um fator limitante da produção e expansão mencionados pelos mesmos. Sobre o nível e escolaridade dos entrevistados 63,6% possuem o ensino fundamental incompleto, os indivíduos que completaram o ensino médio são 27,3% e pessoas graduadas somam 9,1%. Quando questionados sobre a forma de produção, os que produzem de forma orgânica foram 63,6% e os que praticam a agricultura convencional somaram 36,4%.



Estes mesmos produtores ainda se deparam com uma grande incógnita, que é a sucessão familiar da propriedade, 54,5% declararam que ainda não definiram qual vai ser o sucessor, apenas 45,5% afirmaram que a pessoa que irá continuar a produção na propriedade foi encontrada.

Foram entrevistados 44 consumidores, sendo 65,9% masculinos e 34,1% femininos. Os entrevistados declararam ser residentes na zona urbana do município de Xaxim, sendo 77,3% brasileiros e 22,7% de nacionalidade haitiana. Todos os entrevistados declararam idade acima dos 18 anos, com 6,8% entre 18 e 25 anos, 18,2%

de 25-33 anos, 25% entre 33-45 anos, acima de 45 anos 34,1% e mais que 60 anos 15,9%. A maioria dos consumidores (68,3%) compram há mais de 1 ano na feira, sendo que apenas 31,7% deles declararam comprar há menos de 1 ano. Houve relatos de pessoas que são clientes desde o início da feira, na qual era realizada em outro local no centro da cidade.

Um dos objetivos da pesquisa é auxiliar os feirantes com relação à satisfação dos consumidores. Assim, 42,9% dos consumidores se declararam satisfeitos com a forma como a feira se apresenta atualmente. Sugestões como maiores quantidades dos produtos oferecidos, venda de produtos de origem animal não processados, foi mencionado por 14,3% dos entrevistados.

Quando indagados sobre a opção por comprar na feira, 66,7% declararam que preferem a feira pois priorizam a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar e 4,8% por conhecer os feirantes, isso demonstra que a agricultura familiar no oeste de Santa Catarina ainda é uma prática que influencia na decisão de compra, consumidores ocasionais foram declarados em 28,5% das respostas.

relação aos principais produtos que os consumidores buscam, 90,9% compram frutas, 63,6% panificados, 59,1% legumes e raízes, 31,8% lácteos, 13,6% grãos e 9,1% embutidos. Ao serem perguntados sobre o preço dos produtos, em comparação aos supermercados, os valores foram definidos como excelentes em 59,1% das respostas e razoáveis em 40,9% delas, estes produtos disponíveis para venda sofrem variação de época e disponibilidade, acompanhando as médias de preços que se emprega nos supermercados do município. Ressalta-se que todas as transações são realizadas em dinheiro e à vista, não existindo qualquer outra forma de pagamento.



A necessidade de oferecer uma maior variedade de produtos foi relatada em 19% das entrevistas. A qualidade dos produtos oferecidos foi dita ser excelente em 81,8% dos entrevistados e 18,2% razoável. Sobre a higiene da feira, 86,4% declararam ser excelente enquanto 13,6% razoável. Neste sentido, também 86,4% dos consumidores declararam ser excelente o atendimento, enquanto 9,5% declararam ser razoável.

Neste trabalho de pesquisa com os consumidores, os mesmos levantaram uma questão, que era a baixa oferta de produtos processador e de origem animal, e a partir dos resultados buscou-se saber quais são as principais dificuldades para a comercialização de produtos de origem animal. As pessoas que formam a feira de agricultores familiares de Xaxim encontram como desafio o processo de regulamentação da produção e comercialização, através da obrigatoriedade do cumprimento da legislação sanitária, fiscal e ambiental de operação dos empreendimentos agroindustriais. Cumpre observar que a inspeção sanitária de produtos de origem animal passou a ser realizada pelos Estados e Municípios, tal como a vigilância sanitária dos alimentos e medicamentos (MIOR, 2005). A Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, determina que um produto licenciado pelo Serviço de Inspeção Municipal só pode ser comercializado no próprio município, ocorrendo o mesmo com o licenciamento do Serviço de Inspeção Estadual. Para comercializar em todo o território nacional é necessária a obtenção da licença do Serviço de Inspeção Federal (SIF) (Brasil, 1989).

O enquadramento das agroindústrias familiares nas regras da vigilância sanitária, exigem a padronização do produto para sua legalização, o que impõe que o mesmo não apresente variação de suas características, isso implica no uso de procedimentos técnicos, o que acaba fazendo perder o caráter artesanal, e conseqüentemente, a sua diferenciação. A forma artesanal de produção inerente à agricultura familiar, bem como as características de produtos coloniais, são exatamente o diferencial, onde o que conta é a arte e não a técnica padronizada. A padronização exigida muda a arte do “como fazer”, muitas vezes passada de geração a geração (Silveira; Heintz, 2005).

Segundo Vieira (1998), para a agroindústria familiar existe uma série de problemas que interferem no seu processo produtivo e na qualidade de seus produtos. São eles qualidade das matérias-primas, dimensionamento geral da produção, racionalização dos processos, higiene das pessoas e das instalações, consistência e uniformidade dos produtos, dificuldades para aquisição de insumos e embalagens por causa de sua baixa escala de produção. Para Raupp (2005), o principal entrave para a aquisição do registro



é a implantação das instalações para a elaboração do produto. Essas instalações são de tamanho padrão para todos os empreendimentos e para qualquer quantidade de volume produzido na agroindústria. Deste modo, as exigências para com as qualidades sanitárias e ambientais são, na maioria dos casos, difíceis de serem alcançadas pelo pequeno agricultor. Além disso, o custo para a aquisição das licenças é outro entrave para a implantação da agroindústria. É importante perceber que o aumento dos custos fixos e variáveis pressiona o agricultor a aumentar a escala de produção e para superação do padrão de produção sazonal, que é uma das características da agroindústria familiar que processa excedentes da safra.

Com os resultados observados estão de acordo com Ploeg et al. (2000), que descrevem que em tempos de uma forte tendência à homogeneização alimentar e a praticidade das compras nos supermercados, as feiras permanecem e os consumidores continuam a valorizá-las. Os consumidores atuam como importantes sujeitos para sua perpetuação, e isso ocorre porque os motivos são aqueles para além da compra dos produtos. Os consumidores buscam alimentos de qualidade, que consideram superiores aos encontrados nos mercados, mais saudáveis, com preços mais justos, mas também buscam de identidade, de resgate afetivo, do prazer de circular pela feira, aspectos que estão diretamente conectados ao capital simbólico.





Conclusões

A pesquisa determinou que os consumidores estão satisfeitos com os serviços da feira prestados a comunidade, porém ressaltam a importância de produtos de origem animal que fomentem as características regionais e culturais do município, para que a feira se torne um local completo, no quesito satisfação de consumo. Neste sentido, os feirantes terão um longo caminho a percorrer para disponibilizar estes produtos.

Agradecimentos

Os autores agradecem aos feirantes e consumidores da feira dos agricultores familiares de Xaxim que contribuíram para este trabalho, além da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, Xanxerê pela concessão de bolsa através do artigo 170 – UNIEDU.

Referências Bibliográficas

Almeida, M. D.; Pena, P. G. L. Feira livre e risco de contaminação alimentar: estudo de abordagem etnográfica em Santo Amaro, Bahia. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 35, p. 110-127, 2011. Disponível em: <<https://bit.ly/3dmh9zh>> acessado em 02 de abril de 2019.



Goldberg, D. Poder de compra e política antitruste. São Paulo: Singular, 2006. 309 p. disponível em: <<https://bit.ly/2FpH3FO>> Acessado em 02 de abril de 2019.

Portela, Carmen Beatriz Miranda. "O Marketing e o Comportamento do Consumidor". Acesso em 01 de abril de 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3IDgwnL>>.

Trevizan, S.D.P.; Casemiro, A.D. (2009). Consumidores de produtos orgânicos em Vitória da Conquista, BA. Anais do International Workshop Advances in Cleaner Production, São Paulo, SP, Brasil, 2.

Martinez, E. Os limites do planejamento de produção e comercialização para o abastecimento de feiras agroecológicas o caso de Chapecó (SC). Lovato, P.E.; Schmidt, W.(orgs.) Agroecologia e sustentabilidade no meio rural: experiências e reflexões de agentes de desenvolvimento local. Chapecó: ARGOS; 2006. p.101-112.

Brasil (. Lei/11326. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/lei/11326>. Acesso em 22 out, 2017

IBGE (2018). Portal do governo brasileiro. Cidades: Xaxim. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/xaxim/panorama>> acessado em 20 de maio de 2019.

IBGE (2010). Xaxim em números: Municípios catarinenses. Disponível em: <<https://bit.ly/33Q29X4>> acessado em 20 de maio de 2019.

Fontana, Ana Paula Cavali. Tecendo relações: a feira da agricultura familiar como espaço para além da comercialização de alimentos. Dissertação (mestrado profissional), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Marechal Cândido Rondon, Centro de Ciências Agrárias 2018.

Ploeg, J. D. V. D.; Renting, H. Brunori, G.; Knickel, K.; Mannion, J.; Marsden, T.; Roest, K. DE; Sevilla-Guzmán, E.; Ventura, F. Rural

Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, v. 40, n. 4, p. 391-408, out. 2000. Disponível em:<<https://bit.ly/2FlxM1m>>. Acesso em: 20 de maio. 2018.

Scarabelot, M.; Schneider, S. As cadeias agroalimentares curtas e desenvolvimento local – um estudo de caso no município de Nova Veneza/sc. Periódicos UFGRS, v. 15, n. 20, p. 101-130, jan/jun. 2012.

Sociedade Nacional de Agricultura (SNA).Mapeamento do MDS identificação em torno de 64 mil feiras livres e agroecológico de todo o país.2015. Disponível em: <http://sna.agr.br/mapeamento-do-mds-identificacao-em-torno-de-mil-feiras-livres-e-agroecologicas-em-todo-pais/>.Acesso em 14 jul.2016.



Retiere, Morgane Isabelle Hélène. Agricultores inseridos em circuitos curtos de comercialização: modalidade de venda e adaptação dos sistemas agrícolas. Dissertação de (Mestrado)- Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Centro de energia nuclear na agricultura. Piracicaba 2014



Huertas de montaña: Mecanismo de soberanía agroecológica

Carla Marchant
Nicolás Fuentes
Graciela Castet

Resumen

La huerta como espacio productivo, tanto para la economía familiar como para la generación de excedentes económicos, es característico de la agricultura familiar. Lo cual conlleva un conjunto de prácticas y conocimientos empíricos de cada territorio, generados, entre otros, por las condiciones ambientales y geográficas locales. Este trabajo busca determinar cuáles son las principales prácticas agrícolas, con enfoque agroecológico y contenedoras del conocimiento local, ligadas a huertas familiares de las comunas de Curarrehue y Melipeuco, región de La Araucanía. El reconocimiento de prácticas agroecológicas en la agricultura familiar, con un patrón común en diferentes comunas, evidencia la posibilidad de implementar un desarrollo agroecológico como motor productivo de la agricultura familiar. En este sentido la agricultura familiar permitiría la soberanía alimentaria de territorios aislados como es los sectores montañosos de la región de la Araucanía. El estudio es de corte cuantitativo, se aplicaron 60 entrevistas semiestructuradas a campesinos, donde se indagó sobre los tipos de prácticas realizadas en la huerta, además de los conocimientos ecológicos locales que poseían sobre este tema. Los resultados obtenidos dan cuenta que las prácticas de manejo de cultivos realizadas son una mixtura entre prácticas agroecológicas ampliamente extendidas como la realización de asociaciones de cultivos o el uso de fases lunares para la siembra, las cuales se vinculan al conocimiento ecológico local y otras vinculadas al enfoque convencional. Los avances en el reconocimiento de estas prácticas son escasos, lo que dificulta la posibilidad de implementar una política pública adecuada al respecto.

Palabras clave

Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Familiar. Política Rural

Introducción

La agricultura familiar es definida por Wymann von Dach et al. (2013) como “una forma de organizar la producción agrícola y silvícola, la pesca, el pastoreo y la acuicultura, mediante la gestión y mano de obra familiar”. A nivel mundial, existen cerca de 500 millones de predios relacionados con agricultura familiar, los que desempeñan un



importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Las huertas familiares, como expresiones de la agricultura familiar, proveen una cantidad importante de alimentos y pueden ser consideradas como una de las bases fundamentales para lograr modelos sustentables de desarrollo territorial rural (Landon-Lane, C, 2005). Entre los papeles más relevantes que cumplen las huertas familiares están la diversificación de cultivos, la seguridad alimentaria y económica en poblaciones indígenas, el intercambio de conocimientos y la cohesión de la comunidad (Krishnamurthy, L., S. Krishnamurthy, Rajagopal y Peralta, 2017). A ello se añade que las huertas contribuyen a una alimentación saludable, a la conservación de la biodiversidad agrícola mundial, a acabar con la pobreza alimentaria y garantizar el acceso a alimentos nutritivos.

El enfoque de trabajo a emplear en la huerta familiar es una decisión influida por diversos factores. Estos factores no son solamente físicos, sino que también, socioculturales y políticos (e.g. políticas públicas, mercado, acceso a la tierra, religión, etc.). Lo anterior cobra especial relevancia para la agricultura de montaña la cual, a nivel mundial, es principalmente de tipo familiar. Por ejemplo, en zonas de montaña como los Andes, este tipo de agricultura es desarrollada por campesinos indígenas y no indígenas. Estos campesinos de montaña deben enfrentar limitantes como la escasez de tierras cultivables, el aislamiento físico y la lejanía a centros de abastecimiento (Wymann von Dach et al., 2013). De acuerdo con Toledo (2005), estas comunidades interactúan con sus ecosistemas generando una compleja y amplia gama de conocimientos específicos de cada lugar, los cuales deben ser rescatados por el aporte que realizan a la diversidad biocultural propia de la agricultura familiar. Debido a la fragilidad de su entorno, las comunidades rurales andinas tienen la necesidad de desarrollar una agricultura limpia y de bajo impacto, que utilice insumos de bajo costo y fácil acceso (IICA, 1997). Asimismo, la actividad agrícola debe ser territorialmente pertinente, es decir que valore y respete las tradiciones culturales de las comunidades. Para enfrentar estos desafíos, el enfoque agroecológico se posiciona como una alternativa por sobre el enfoque agrícola convencional. Una de las características principales del enfoque agroecológico es que éste reconoce y valora el papel del conocimiento local en los procesos de funcionamiento y aprovechamiento del agroecosistema desde una perspectiva holística, propiciando además la soberanía alimentaria. Para este estudio, el enfoque agroecológico será entendido según lo propuesto por Gliessman et al. (2007), como el enfoque donde se aplican principios ecológicos al diseño y manejo de sistemas alimentarios sostenibles (SAS). Estos principios incluyen la optimización del flujo de



nutrientes, manejo de materia orgánica para asegurar condiciones favorables del suelo, minimización de pérdidas energéticas a través del control de la cobertura del suelo, diversificación de especies, diversificación genética del agroecosistema, aumento de interacciones sinérgicas entre especies y promoción de procesos ecológicos claves. A lo anterior se añade lo propuesto por Ericksen (2007), quien define un SAS como un sistema que genera resultados positivos en términos de seguridad alimentaria y nutrición, además de bienestar social y medioambiental tanto de productores como consumidores. Altieri y Nicholls (2007), refiriéndose a los principios fundamentales de la agroecología, señalan que para el óptimo funcionamiento de un agroecosistema bajo este enfoque se debe considerar el diseño espacial y temporal de este. El diseño debe promover sinergias entre los componentes de la biodiversidad arriba y abajo del suelo, las cuales condicionan procesos ecológicos claves como la regulación biótica, el ciclaje de nutrientes y la productividad. A lo anterior, Altieri y Toledo (2011) añaden que los principios ecológicos en el enfoque agroecológico se manifiestan en prácticas como el uso de semillas y razas de animales locales, la rotación y asociación de cultivos, el empleo de fertilizantes y controladores de plagas orgánicos y la realización de un manejo del predio a modo de policultivo. A estas prácticas se añade una segunda dimensión relevante de este enfoque, esto es, la valoración de los conocimientos ecológicos locales de los campesinos. Estos conocimientos son definidos por Toledo (2005) como “una gama de conocimientos de carácter empírico, los que son transmitidos oralmente y son propios de las formas no industriales de apropiación de la naturaleza”. Finalmente, a este enfoque se debe añadir su carácter multidisciplinario, el cual permite analizar el agroecosistema desde sus dimensiones culturales, ambientales, ecológicas y sociales. Por su parte, el enfoque agrícola convencional, promovido por la agricultura moderna, será entendido como aquel que considera prácticas vinculadas a la revolución verde y que buscan la maximización de rendimientos de la unidad predial sin considerar los daños colaterales al medio ambiente. Entre las prácticas más utilizadas destacan el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, semillas híbridas comerciales y monocultivos (Ortega, 2009.). El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las principales prácticas agrícolas con enfoque agroecológico que se realizan en huertas familiares en dos comunas de montaña en la zona andina de la Región de La Araucanía, Chile. Si bien las dos comunas comparten muchas similitudes territoriales y culturales, el proceso de transformación desde el enfoque convencional a la adopción de prácticas agroecológicas ha sido gradual. Marasas et al. (2015) explican su gradualidad debido a que los factores que lo desencadenan pueden ser asociados a distintas variables (e.g.



acceso a la información, tipo de extensionismo, entre otros). Los objetivos específicos de este trabajo son: (i) establecer semejanzas y diferencias en las prácticas de manejo de cultivos en las huertas familiares de Curarrehue y Melipeuco y (ii) describir los conocimientos ecológicos locales asociados a las prácticas de manejo.

La Araucanía andina: agricultura de montaña en el sur de Chile

El estudio se realizó entre los meses de abril de 2015 y enero de 2017 en las comunas de Curarrehue y Melipeuco, Región de La Araucanía, Chile. Las comunas seleccionadas (Fig. 1) pertenecen a la zona agrícola de la Cordillera de los Andes (Rounet, Romero y Demanet, 1988). Esta zona, que en la Región de La Araucanía se inicia desde los 900 metros sobre el nivel del mar (msnm), presenta un bajo potencial agrícola debido principalmente a sus condiciones climáticas. A ello se añade que los suelos poseen bajos niveles de fósforo y potasio. Por otra parte, la topografía escarpada, con cajones cordilleranos, serranías y valles limitan las superficies arables, predominando las praderas para uso ganadero. Existe además un alto grado de vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático (e.g. mayor recurrencia de eventos extremos, tales como sequías prolongadas), los que se manifiestan de manera más latente en tierras altas (Borsdorf, 2014 y Parraguez-Vergara, Barton y Raposo-Quintana, 2016). Desde el punto de vista histórico y cultural, Curarrehue y Melipeuco forman parte del área andina del *Wallmapu*, territorio ancestral del pueblo mapuche, el cual posee una significancia que trasciende los límites de lo físico. Los distintos modos de vida y prácticas sociales, culturales y agrícolas, propias de los territorios de montaña, son parte fundamental de la identidad mapuche pewenche (Marchant, 2015). Desde la colonización española, este territorio se ha visto marcado por la imposición de un modelo de desarrollo occidental ejercido por la Colonia y más tarde por el Estado de Chile, con consecuencias sobre el territorio y los modos de vida tradicionales (Bengoa, 2017). Esta imposición se manifiesta, en el ámbito de la agricultura, en el fuerte extensionismo estatal ejercido por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Desde su creación en la década de los sesenta, el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), dependientes de INDAP, han promovido continuamente la aplicación de paquetes tecnológicos convencionales con el fin de maximizar la productividad agrícola. Este enfoque de agricultura convencional ha generado consecuencias como las mencionadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2017), quienes señalan que la incorporación de químicos y tecnología en la producción agrícola mapuche ha significado la pérdida de cultivos tradicionales. Ante este

paradigma predominante, el desarrollo de prácticas agroecológicas vinculadas a saberes ancestrales y basadas en las condiciones propias de cada lugar, representa una forma de resistencia al modelo agrícola imperante (Fuentes, N. y C. Marchant, 2016.).

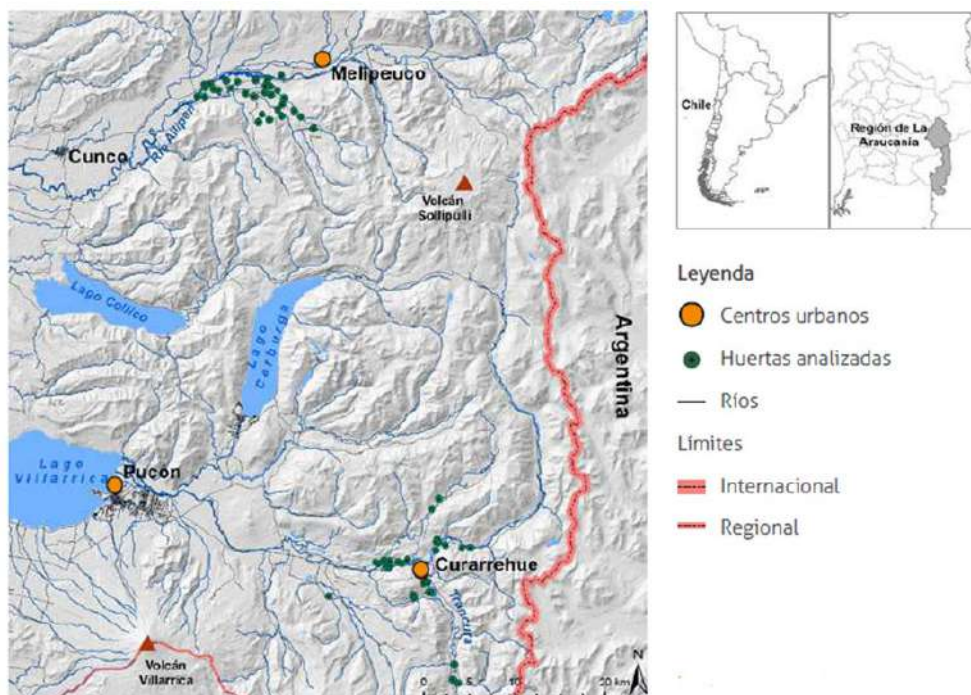


Figura 1. Mapa con la ubicación de las comunas de Melipeuco y Curarrehue, y las 60 huertas analizadas

Metodología

Se diseñó y aplicó una entrevista estructurada a personas que tuvieran huertas. Los entrevistados fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico utilizando la técnica de “bola de nieve”. Se aplicaron 60 entrevistas (30 por comuna) a campesinos encargados de la huerta que estuvieran disponibles al momento de la entrevista (Tabla 1). Se indagó sobre los tipos de prácticas realizadas en la huerta, además de los conocimientos ecológicos locales que poseían sobre este tema (Tabla 2). Este método se basó en la utilización de categorías previamente definidas para posteriormente comparar el número de huertas en donde se implementaba cada práctica. Paralelamente se caracterizó la estructura de la huerta a través de una ficha de campo, en la que se evaluó el tamaño, número de especies cultivadas y tecnología existente, entre otros aspectos. Finalmente, se consultaron las razones por las cuales los entrevistados elegían un tipo de práctica por sobre otras, con la finalidad de evidenciar la predominancia de un tipo de enfoque (agroecológico v/s convencional).



Las prácticas identificadas en cada huerta (Tabla 2) se establecieron considerando los siete principios agroecológicos propuestos por Altieri (1987). Se consideró además una variable económica para vislumbrar las posibilidades de mercado que los productos de la huerta poseían.

Resultados y discusión

Las huertas analizadas tuvieron una superficie promedio de 2 ha (mínimo 0,5 ha y máximo 5 ha) y tuvieron mayoritariamente especies comestibles como hortalizas y leguminosas, contabilizándose en total 16 especies (Tabla 3). Con respecto a las prácticas agrícolas analizadas, los resultados obtenidos muestran diferencias en las prácticas predominantes identificadas en cada comuna (Fig. 2). Por una parte, existieron algunas prácticas ampliamente utilizadas tanto en Curarrehue como en Melipeuco. Un ejemplo de estas prácticas fue el uso de abonos orgánicos para la fertilización de los suelos (87% del total, en ambas comunas). Entre los más utilizados destacaron el uso de abono animal (estiércol de rumiantes), material orgánico compostado, humus y abonos verdes (compuesto principalmente de leguminosas incorporadas al suelo), entre otros. Más del 50% de los entrevistados en cada comuna señalaron que el uso de abonos orgánicos es una práctica desarrollada tradicionalmente en sus familias.

Comuna	Género	Promedio de edad (años)	Rango de edad (años)	Pertenencia a pueblo indígena (declarada)	Años de residencia en el lugar (promedio)	Rango de años de Residencia
Curarrehue	24 femenino 6 masculino	50,7	29-69	18 de 30	39	2-73
Melipeuco	23 femenino 7 masculino	46,3	23-71	14 de 30	34	1-69

Tabla 1. Perfil de los campesinos encargados de la huerta entrevistados en este estudio.



Práctica	Objetivos de la práctica	Forma de medirla
----------	--------------------------	------------------

Fertilización del suelo

Consiste en restituir o elevar el potencial productivo de un suelo determinado, y no solo aportar los nutrientes para un cultivo en específico.	El aporte de materia orgánica es completo y equilibrado, lo que supone un aporte de nutrientes a disposición de la planta de manera gradual.	Identificación de tipo de abono utilizado: material orgánico (Abono animal, humus, compost) o fertilizantes químicos (e.g. superfosfato triple).
---	--	--

Asociación de cultivos

Corresponde a la utilización de dos o más especies vegetales que se complementan sinérgicamente.	Disminuir probabilidades de desarrollo de enfermedades y plagas. Mejorar aprovechamiento de nutrientes del suelo.	Identificación de asociaciones utilizadas (N° y composición) y fundamentos.
--	---	---

Rotación de cultivos

Consiste en la incorporación de leguminosas en una de las rotaciones para fomentar la incorporación de nitrógeno o en la intercalación de cultivos que posean distintos sistemas radiculares y necesidades nutricionales.	Evitar el agotamiento de los nutrientes del suelo.	Se evaluó si se realiza rotación y la forma en que se realiza.
---	--	--

Uso de fases lunares para sembrar

Práctica utilizada para aprovechar las fases lunares, las cuales, de acuerdo con el conocimiento local, afectarían directamente el crecimiento, desarrollo vertical y cantidad de savia de las plantas.	Sembrar en menguante permitiría mantener la mayor cantidad de nutrientes bajo tierra para que sean más productivos (desarrollo radicular), versus plantar en creciente en donde los nutrientes se dirigirían hacia las hojas (desarrollo foliar).	Se evaluó si se consideraba el uso de las fases lunares para sembrar y las especies asociadas a cada fase.
---	---	--

Mecanismos de control de plagas

Consiste en la toma de medidas eficaces para la prevención y protección de los cultivos. Es un proceso crucial para asegurar una buena producción.	De acuerdo con los principios agroecológicos, existen distintos mecanismos de control orgánicos, los que poseen un impacto reducido en la producción agrícola y en el agroecosistema.	Se evaluó si el control se realizaba por mecanismos convencionales (plaguicidas o pesticidas químicos) o naturales (remoción manual, control biológico o biopreparados).
--	---	--

Uso de biopreparados

Corresponde al uso de abonos o controladores de plagas líquidos de origen vegetal, animal o mineral ricos en microorganismos benéficos y minerales entre otros compuestos orgánicos.	Los biopreparados pueden mejorar la fertilidad natural del suelo, permitir la nutrición de las plantas o actuar como controladores de plagas y/o enfermedades.	Se evaluó su utilización en la huerta y el tipo de biopreparado empleado.
--	--	---

Tipo de semillas utilizadas

Semilla es todo grano, tubérculo, bulbo y, en general, todo material de plantación o estructura vegetal destinado a la reproducción de una especie botánica.	En el enfoque agroecológico, se considera que el uso de semillas locales genera una mayor resiliencia de las plantas frente a eventos climáticos adversos. Es además una forma de asegurar la soberanía alimentaria de las familias y naciones.	Se evaluó el tipo de semilla utilizada: comercial híbrida o semilla producida en el mismo predio.
--	---	---



Labranza del suelo

Es la práctica utilizada para preparar	Busca cuidar el suelo de la erosión ya que se considera como un sustrato vivo, rico en microorganismos. Por ende, generar el menor impacto a través de mecanismos alternativos de labranza permite mantener una mayor cantidad de microorganismos vivos.	Se evaluó el tipo de labranza realizada: labranza tradicional, manual, motocultivador o animal.
--	--	---

Tipo de riego

Consiste en la elección de un método para el suministro de las cantidades necesarias de agua según requerimientos de cada especie	La utilización de tecnologías de riego permite utilizar más eficientemente el agua, considerando la alta vulnerabilidad a la escasez hídrica presente en la zona.	Se evaluó el tipo de riego utilizado: vertiente sin tecnificar, tecnificada, pozo, agua lluvia, sin riego.
---	---	--

Comercialización de productos de la huerta

Práctica desarrollada en la agricultura familiar, una vez cubiertas las necesidades de autoconsumo familiar.	Permite generar ingresos extra en caso de existir excedentes.	Se identificaron los canales de comercialización utilizados: venta en predio, venta en feria libre.
--	---	---

Tabla 2. Descripción de las prácticas identificadas en huertas familiares de la zona andina de la Región de La Araucanía, Chile.

En ambas comunas, prácticas como la asociación y rotación de cultivos son realizadas con frecuencia (Fig. 2). Las asociaciones de cultivos más frecuentemente nombradas por los campesinos fueron (de mayor a menor frecuencia): (1°) arveja/maíz, (2°) poroto/maíz, (3°) lechuga/betarraga y (4°) albahaca/tomate. Estas asociaciones son un acervo cultural que se traspa oralmente entre campesinos y es un tipo de conocimiento basado en la experiencia práctica. Estas asociaciones se utilizan principalmente para la optimización del espacio a cultivar y también para prevenir plagas. El uso de fases lunares para calendarizar las siembras es también una práctica ampliamente utilizada en ambas comunas (>60%). Esta práctica, heredada de una cultura mapuche-campesina, ha permanecido hasta la actualidad. De acuerdo con Pozo y Canio (20), los elementos visibles del cielo poseen interacciones con el entorno. La luna o *kuyen* influye en la organización de los trabajos cotidianos -como la siembra- y en materias climáticas. Al respecto, los entrevistados señalaron que la siembra en menguante (en mapuzungun *menkuante*) es una “buena luna” y que los frutos crecen de mayor tamaño en comparación a sembrar con luna creciente, donde crecen mayormente las hojas y los frutos quedan pequeños. Esto fue explicado para el caso de las zanahorias (*D. carota*), donde la siembra en creciente aumenta el crecimiento de las hojas y no de la raíz, a diferencia del cilantro (*C. sativum*), donde la siembra en creciente fomentaría un rápido crecimiento de la planta adelantando la fecha de cosecha. Otro



ejemplo mencionado correspondió al caso de tubérculos como las papas, donde la siembra en menguante ayuda al crecimiento de las raíces de la planta, lo que permite una cosecha abundante.

Especie	Curarrehue	Melipeuco
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	80%	90%
Maíz (<i>Zea mays</i>)	50%	60%
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	70%	80%
Poroto (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	90%	100%
Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	0%	5%
Zapallo (<i>Cucurbita maxima</i>)	30%	40%
Repollo (<i>Brassica oleracea</i>)	50%	60%
Acelga (<i>Beta vulgaris</i>)	90%	100%
Puerro (<i>Allium porrum</i>)	70%	60%
Arveja sinhila (<i>Pisum sativum</i>)	80%	50%
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	25%	50%
Cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>)	90%	100%
Zanahoria (<i>Daucus carota</i>)	90%	90%
Haba (<i>Vicia faba</i>)	20%	50%
Rábano (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	30%	20%
Zapallo italiano (<i>Curcubita pepo</i>)	70%	80%

Tabla 3. Listado de especies encontradas en las huertas de montaña y porcentaje de huertas en las cuales se encontró

En cuanto al control de plagas, existieron diferencias entre Curarrehue y Melipeuco. En Curarrehue un 81% de los entrevistados declaró realizar control natural frente a un 53% en Melipeuco, siendo en ambos casos los mecanismos de remoción manual y control biológico los más utilizados. En la misma línea, el uso de biopreparados no fue reportado como una práctica ampliamente utilizada; aun así, en Curarrehue fue ligeramente superior a Melipeuco (20% v/s 13% respectivamente). Entre los biopreparados más utilizados se señalaron en orden de mayor a menor frecuencia: (1°) cocciones de ají con ajo, (2°) agua de tabaco y (3°) agua de ajeno. Se observó que no existe un biopreparado predominante y que su uso es principalmente preventivo. Los campesinos recordaron su existencia y los asociaron a prácticas realizadas por sus madres o abuelas, pero no necesariamente los emplean debido a que requieren de mayor constancia en la aplicación para su efectividad. Lo anterior puede ser considerado un factor que propicia el uso de fertilizantes y pesticidas comerciales, ya que generalmente, solo necesitan de una aplicación por temporada.

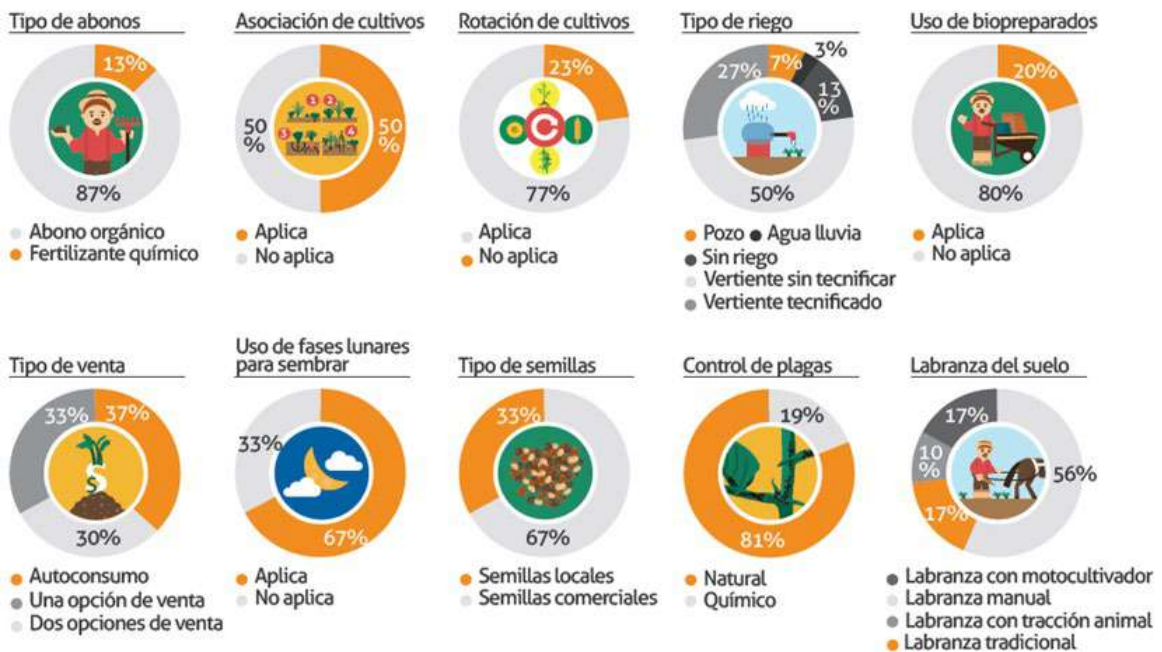
Con respecto al uso de semillas, en ambas comunas predominó el uso de variedades comerciales de tipo híbrido (>60%), lo cual puede ser interpretado de distintas maneras.



Por una parte, se puede atribuir a la facilidad de encontrar semillas de este tipo en el comercio, evitando de esta forma el proceso de selección y guarda de un año para otro. Por otra parte, puede deberse al fomento de uso de semillas comerciales, las cuales son facilitadas por los extensionistas de INDAP como parte del paquete tecnológico que se entrega a cada campesino.

Esto puede ser considerado como un factor que aumenta la dependencia a insumos externos. Debido a la baja germinación de las semillas híbridas, los campesinos se ven obligados a comprar semillas año a año, lo cual implica costos y se transforma en una barrera para alcanzar la soberanía alimentaria de las familias.

Prácticas Curarrehue





Prácticas Melipeuco

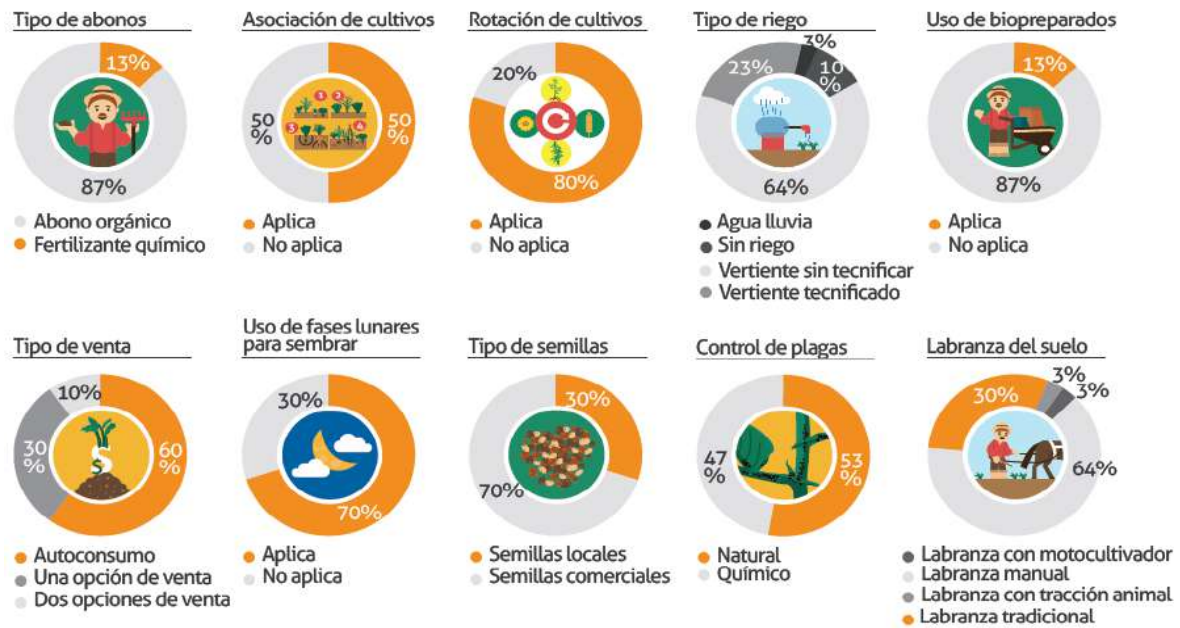


Figura 2. Prácticas agrícolas utilizadas en las comunas de Curarrehue y Melipeuco.

En relación con la forma en que se desarrolla la labranza del suelo, se evidenció la relevancia del componente manual (>50% en ambas comunas). Ésta es una característica de la agricultura de bajo impacto debido a las dificultades para mecanizar las actividades por la topografía montañosa escarpada y por el alto costo de las maquinarias involucradas. Un hecho preocupante identificado en ambas comunas fue el ineficiente manejo del agua que se observó en las huertas visitadas. Las vertientes sin tecnificar son la principal forma de realizar el riego en ambos casos (>50%). Este es un factor que condiciona la producción y amenaza de manera más fuerte a la agricultura familiar, debido a la mayor vulnerabilidad de ésta a los impactos negativos del cambio climático (Borsdorf et al, 2014 y Parraguez-Vergara, Barton y Raposo-Quintana, 2016). Con respecto a las oportunidades de comercialización de excedentes de la huerta familiar, en Curarrehue existe una mayor cantidad de canales de comercialización. En esta comuna, un 30% de los entrevistados cuenta con dos opciones de comercialización (feria libre y venta directa), un 33% cuenta con una sola opción y un 37% solo destina la producción al autoconsumo. Por su parte, en Melipeuco la producción es básicamente de autoconsumo (60%), el 30% cuenta con una opción de comercialización y el 10% dos opciones (feria libre y venta directa). En el caso de Curarrehue, se realiza una feria semanal para la venta de productos, además de ferias específicas en verano organizadas por los técnicos del PDTI. Además, su cercanía a la ciudad de Pucón



otorgaría más posibilidades de mercado a los campesinos para la venta en feria libre. Con respecto a las razones que llevan a las personas a realizar prácticas con enfoque agroecológico, más del 70% de los entrevistados en ambas comunas señalaron realizarlas por aspectos entre los que destacan (en orden de frecuencia): (1°) cuidado del medio ambiente, (2°) alimentación sana e (3°) importancia de rescatar productos locales con identidad. Por otra parte, los resultados mostraron también la importancia de la transmisión oral del conocimiento práctico para el trabajo en la huerta, el cual proviene principalmente de la familia. Un porcentaje superior al 90% de los campesinos entrevistados reconocían a madres y abuelas como las fuentes de los conocimientos que utilizaban en su trabajo. Esto es concordante con lo mencionado por Quilaqueo y Quintriqueo (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010), quienes señalan que la cultura y tradición mapuche se caracteriza por transmitir oralmente sus saberes y conocimientos; esto junto al arraigo cultural, son elementos claves que han permitido la prevalencia de éstas en el tiempo (Montalba et al, 2013).

Reflexiones finales

Los resultados obtenidos indicaron que las huertas de montaña se orientan principalmente al cultivo de especies comestibles orientadas al grupo familiar. Las prácticas observadas dan cuenta de una combinación de prácticas agroecológicas con prácticas de la agricultura convencional. Las prácticas agroecológicas utilizadas estuvieron basadas en el conocimiento ecológico local (e.g. asociaciones de cultivos) y en aspectos relacionados a la cosmovisión mapuche (e.g. uso de fases lunares para la siembra). Por otro lado, las prácticas vinculadas al enfoque convencional (e.g. uso de fertilizantes químicos, utilización de semillas comerciales híbridas) vinieron principalmente de los paquetes tecnológicos entregados por INDAP. Lo anterior permite señalar que las comunas en estudio se encuentran en distintas fases de implementación del enfoque agroecológico.

En Curarrehue se observó un mayor número de prácticas realizadas bajo el enfoque agroecológico, mientras que en Melipeuco éste se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Tal como plantean Marasas et al. (2015), la transición agroecológica es un proceso complejo en el que se articulan distintas escalas y que se ve afectada por factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y ecológicos. Por lo mismo, esta transición se desarrollará con distintas velocidades y se propagará a partir de diversas estrategias. En las comunas estudiadas, se observó la influencia del enfoque promovido por los extensionistas de INDAP sobre las prácticas adoptadas por



los campesinos. En Curarrehue existen técnicos capacitados en el enfoque agroecológico y que están apostando por revitalizar prácticas tradicionales. De igual manera, el actual auge y valorización de la alimentación sana y de productos producidos de manera limpia y ambientalmente sustentable pareciera alentar a los campesinos a cultivar de manera agroecológica. Asimismo, la transmisión oral de las experiencias que dan buenos resultados da cuenta de la importancia que el componente empírico tiene para la agroecología. El aprendizaje colectivo, el enfoque campesino a campesino y el traspaso de saberes entre distintas generaciones son mecanismos claves y, a su vez, deben ser considerados como herramientas transformadoras de la agricultura familiar. Las prácticas agroecológicas contribuyen a propiciar una agricultura sustentable que comprende el agroecosistema como un sistema holístico donde la práctica agrícola y la productividad son parte del proceso y no su objetivo final. Esta visión permite a los campesinos reforzar la necesidad de conservar variedades locales, disminuir el uso de plaguicidas y fomentar el uso de fertilizantes orgánicos. Lo anterior ha comenzado a ser valorado y considerado desde las políticas sectoriales de INDAP. Desde el año 2017, INDAP ha impulsado un cambio de paradigma, orientando sus líneas programáticas a este enfoque para el sector de la agricultura familiar (INDAP, 2017). Finalmente, es importante señalar que históricamente y a nivel mundial, la revolución verde ha generado impactos negativos sobre la agricultura familiar, provocando una diversidad de problemas ambientales (e.g. deterioro de los suelos y contaminación de las aguas) y sociales (e.g. dependencia y pérdidas de prácticas tradicionales). Creemos que solo por medio del rescate de prácticas basadas en conocimientos ecológicos locales es posible generar modelos alternativos al paradigma convencional que domina la producción agraria mundial.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por CONICYT a través del proyecto FONDECYT de iniciación 11140493. El proceso de recolección de información cumplió los estándares de ética solicitados por CONICYT y la Universidad Austral de Chile para el trabajo con personas, el cual consistió en la firma de consentimientos informados por parte de los participantes previa explicación de la finalidad del estudio y la confidencialidad de los datos entregados.



Bibliografía

- Altieri, M. & C. Nicholls. 2007. Conversión agroecológica de sistemas convencionales de producción: teoría, estrategias y evaluación. *Ecosistemas* 16(1):3-12.
- Altieri, M. & V. Toledo. 2011. The agroecological revolution of Latin America: rescuing nature, securing food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies* 20(36):587-612.
- Altieri, M. 1987. *Agroecology, the scientific basis of alternative agriculture*. Westview Press, Boulder, USA.
- Bengoa, J. La pobreza de los modernos. *Temas Sociales*. Disponible en <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=111> (visitado en diciembre 20, 2017).
- Borsdorf, A., J. Stötter, G. Grabherr, O. Bender, C. Marchant & R. Sánchez. 2014. Impact of global changes on mountains: responses and adaptation. En Grover, V., A. Borsdorf, J. Breuste, C. Tiwari & P. Witkowski (Eds). *Impacts and risks of global change*. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Ratón, USA. Pp. 33-76.
- Diagnóstico de desarrollo cultural del pueblo mapuche. Disponible en <http://www.cultura.gob.cl/estudios/observatoriodiagnosticodedesarrolloculturaldelpueblomapuche.htm> (visitado en diciembre 20, 2017).
- Ericksen, P. J. 2007. Conceptualizing food systems for global environmental change research. *Global Environmental Change* 18(1):234-245.
- Fuentes, N. & C. Marchant. 2016. ¿Contribuyen las prácticas agroecológicas a la sustentabilidad de la agricultura familiar? El caso de Curarrehue, Región de la Araucanía, Chile. *Cuadernos de Desarrollo Rural* 13(78):35-66.
- Gliessman, S. R., F. J. Rosado-May, C. Guadarrama-Zugasti, J. Jedlicka, A. Cohn, V. E. Mendez, R. Cohen, L. Trujillo, C. Bacon & R. Jaffe. 2007. *Agroecología: promoviendo una transición hacia la sostenibilidad*. *Ecosistemas* 16(1):13-23.
- INDAP. 2017. realiza primer simposio nacional de agroecología para la agricultura familiar. Disponible en: <https://bit.ly/2FqmHwa> (visitado en diciembre 20, 2017).
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 1997. *Situación y perspectivas de la Agricultura Andina*. IICA, Lima, Perú.
- Krishnamurthy, L., S. Krishnamurthy, I. Rajagopal & A. Peralta. 2017. Agricultura familiar para el desarrollo rural incluyente. *Terra Latinoamericana* 35(2):135-147.
- Landon-Lane, C. 2005. Los medios de vida crecen en los huertos. Diversificación de los ingresos rurales mediante las huertas familiares. FAO, Roma, Italia.



- Marasas, M., M. L. Blandi, N. Dubrovsky & V. Fernández. 2015. Transición agroecológica: características, criterios y estrategias. Dos casos emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. *Agroecología* 10(1):49-60.
- Marchant, C. 2015. Prácticas de agroecología en comunas de montaña de la región de La Araucanía/Chile: estrategias de acción para el desarrollo sustentable y de adaptación al cambio global. *Memorias Programa Científico XV Encuentro de Geógrafos de América Latina*. La Habana, Cuba. Pp. 839-851.
- Montalba, R., M. García, M. Altieri, F. Fonseca & L. Vieli. 2013. Utilización del Índice Holístico de Riesgo (IHR) como medida de resiliencia socioecológica a condiciones de escasez de recursos hídricos. Aplicación en comunidades campesinas e indígenas de La Araucanía, Chile. *Agroecología y Cambio Climático* 8(1):63-70.
- Ortega, G. 2009. Agroecología vs. Agricultura Convencional. Documento de Trabajo N° 128b. Base Investigaciones Sociales, Asunción, Paraguay.
- Parraguez-Vergara, E., J. Barton & G. Raposo-Quintana. 2016. Impacts of climate change in the andean foothills of Chile: economic and cultural vulnerability of Indigenous Mapuche livelihoods. *Journal of Developing Societies* 32(4):454-483.
- Pozo, G. & M. Canio. 2014. Wenumapu astronomía y cosmología mapuche. Editorial 8 libros, Santiago, Chile.
- Quilaqueo, R. & S. Quintriqueo. 2010. Saberes educativos mapuches: un análisis desde la perspectiva de los kimches. *Polis* 9(26):337-360.
- Rounet J., O. Romero & R. Demanet. 1988. Áreas agroecológicas en la IX Región: Descripción. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. *Investigación y Progreso Agropecuario IPA Carillanca* 7(1):18-23.
- Toledo, V. 2005. La memoria tradicional: la importancia agroecológica de los saberes locales. *LEISA Revista de Agroecología* 20(4):16-19.
- Wymann von Dach, S., R. Romeo, A. Vita, M. Wurzinger & T. Kohler. 2013. La Agricultura de montaña es agricultura familiar: una contribución de las zonas de montaña al Año Internacional de la Agricultura Familiar. FAO, CDE, BOKU, Roma, Italia.



Influência da Cooperativa Agropecuária Mista Ouro Verde (COMOV) Na produção leiteira do setor sul de Alta Flores TA/MT

Roboredo Delmonte

Resumo

As cooperativas de leite se veem muitas vezes diante de conflitos internos de difícil resolução, entre ter que atender os anseios dos cooperados e se enquadrar às demandas de mercado, posto que os cooperados são proprietários e clientes ao mesmo tempo da cooperativa (David, 2009). Neste caso a COMOV se vê com desafios de trabalhar com dois grupos diferentes de cooperados, os que entregam e não entregam leite, sendo que o último produz outras culturas, mas também produzem o leite e não são clientes da cooperativa. O objetivo deste trabalho busca entender como essa organização social influencia de maneira mais significativa a vida desses dois grupos distintos de agricultores. Trata-se de uma análise quantitativa com aplicação de questionários. As entrevistas foram feitas em dois grupos envolvidos com a cooperativa sendo 24 cooperados que entregam leite para o laticínio, 29 que não entregam leite para o laticínio. Os grupos estudados possuem peculiaridades diferentes, a cooperativa contribui de certo modo para o fortalecimento do agricultor cooperado, e de forma mais intensiva para os que entregam o leite para a instituição, pois estes estão a mais tempo trabalhando com o leite e apresentam vantagens a sucessão familiar. Mas os agricultores que não entregam leite possuem uma maior autonomia, apresentando menos necessidades de recursos externos a propriedade sendo o principal fator significativo ao fortalecimento destas famílias, porém esta autonomia está mais ligada ao estilo de vida praticado por este do que com questões relacionadas a COMOV.

Palavras-chave: Agricultura, Resistência, Reinvenção, Estratégias, Desafios.

Resumo

As cooperativas de leite se veem muitas vezes diante de conflitos internos de difícil resolução, entre ter que atender os anseios dos cooperados e se enquadrar às demandas de mercado, posto que os cooperados são proprietários e clientes ao mesmo tempo da cooperativa (David, 2009). Neste caso a COMOV se vê com desafios de trabalhar com dois grupos diferentes de cooperados, os que entregam e não entregam leite, sendo que o último produz outras culturas, mas também produzem o leite e não são clientes da cooperativa. O objetivo deste trabalho busca entender como essa



organização social influencia de maneira mais significativa a vida desses dois grupos distintos de agricultores. Trata-se de uma análise quantitativa com aplicação de questionários. As entrevistas foram feitas em dois grupos envolvidos com a cooperativa sendo 24 cooperados que entregam leite para o laticínio, 29 que não entregam leite para o laticínio. Os grupos estudados possuem peculiaridades diferentes, a cooperativa contribui de certo modo para o fortalecimento do agricultor cooperado, e de forma mais intensiva para os que entregam o leite para a instituição, pois estes estão a mais tempo trabalhando com o leite e apresentam vantagens a sucessão familiar. Mas os agricultores que não entregam leite possuem uma maior autonomia, apresentando menos necessidades de recursos externos a propriedade

sendo o principal fator significativo ao fortalecimento destas famílias, porém esta autonomia está mais ligada ao estilo de vida praticado por este do que com questões relacionadas a COMOV.

Palavras-chave

Agricultura, Resistência, Reinvenção, Estratégias, Desafios.

Introdução

Segundo Olival (2016) organizações locais são importantes elementos de transformação e referência para os agricultores no Norte do Mato Grosso, as comunidades “vivas” e “fortes” eram comunidades que possuíam formas de organização específicas, formais ou não. O enfraquecimento das organizações locais e a perda de práticas comunitárias provocam uma mudança negativa para as comunidades e esse fato tem se tornado frequente nos anos 2000. Um exemplo de organização que se mantém ativa no município de Alta Floresta é a Cooperativa Agropecuária Mista Ouro Verde (COMOV), através da qual os agricultores familiares podem barganhar preços na hora da compra dos insumos e reunirem sua produção para o beneficiamento e comercialização via supermercados, atacadistas e os “mercados institucionais”. Atualmente a principal atividade dos cooperados é o leite, beneficiado no laticínio que está em atividade há 13 anos.

Roboredo (2014), diagnosticou que este território se encontra degradado socialmente devido à falta da união e organização das famílias, bem como a falta de apoio aos agricultores familiares. A COMOV apesar de estar inserida em um contexto



semelhante pode representar uma ótima alternativa para que os agricultores se tornem fortalecidos e, dessa forma, contribuir para a redução do êxodo rural.

Houve uma mudança da base produtiva para gado de corte ou leite, isto devido a desvalorização dos produtos químicos, as dificuldades de comercialização e a oferta de financiamentos públicos exclusivos para aquisição de gado partir de 1996 (Olival, 2016). Paralelo a isto o Clube de Mães da Comunidade Ouro Verde, onde se situa a sede da cooperativa, levantou a demanda de um mini laticínio para beneficiamento do leite. A partir deste ponto o Clube de Mães construiu o prédio inicial do laticínio que posteriormente devido a necessidades de capital social o laticínio passou a ser uma luta do setor através da COMOV. O laticínio Ouro vida surgiu em 2006, e até hoje está situado na sede da cooperativa.

Este trabalho buscou entender como essa organização social influencia a vida de dois grupos distintos de agricultores, os que entregam o leite e não entregam leite para a cooperativa, e assim assimilar elementos avaliados ao fortalecimento destas famílias, além de verificar a atual participação e contribuição dos grupos para processo cooperativista bem como o reconhecimento dos cooperados sobre as questões que influenciam suas vidas.

Justificativa

Durante os anos 2000, segundo Olival (2016), ocorreu o fechamento de várias organizações rurais “formais ou não formais” na região. Todavia, a COMOV, apesar das dificuldades enfrentadas vem conseguindo superá-las, mantendo o atendimento mínimo aos seus cooperados, bem como vem se estruturando a cada ano que passa para melhor atender as famílias que a integram.

Os benefícios trazidos pela COMOV podem ter influência na vida dos seus cooperados principalmente no seu modo de vida, organização do trabalho, renda e conseqüente permanência no campo. Deste modo, entende-se que o cooperativismo possa ser um mecanismo que contribui para o fortalecimento das famílias que integram a instituição. Portanto, entende-se que é de suma importância a realização de uma pesquisa que analisa qualitativamente parâmetros importantes deste processo, adotando o enfoque sistêmico para entender melhor as interações das diversas facetas que compõem a complexidade do espaço rural e, por sua vez, avaliar fortalecimento e melhoria da qualidade de vida das famílias cooperadas.



Metodologia

O município de Alta Floresta está localizado no norte do estado de Mato Grosso no bioma Amazônico, a 820 km da capital Cuiabá. As principais economias do município são agricultura, pecuária, indústria, turismo e comércio, com população em torno de 49.164 pessoas (IBGE, 2010). A principal bacia hidrográfica é a do Rio Telles Pires. Alta Floresta surgiu em 1976 através da colonizadora Indeco S.A (Integração Desenvolvimento e Colonização). A área dos estabelecimentos agropecuários é de 731.065,021 ha, onde residem 5.232 pessoas (IBGE, 2017), ou seja, no espaço rural há apenas 10,6%, enquanto que 89,4% estão na cidade.

Esta pesquisa faz parte do diagnóstico realizado na cadeia do leite no projeto Redes Socioprodutivas¹ que além desta também trabalha com as cadeias da castanha, babaçu, hortifrutigranjeiros, cacau e café. As entrevistas foram com cooperados da COMOV composta de um total de 53 cooperados. A pesquisa se iniciou em Julho de 2018, até o momento avaliou dois grupos: 24 cooperados que entregam leite para o laticínio e 29 cooperados que não entregam leite para o laticínio, destes 13 produzem leite e entregam para laticínios particulares da região, os demais produzem em sua maioria culturas perenes sendo que os que possuem café comercializam pela cooperativa. Os 24 entrevistados que entregam leite foram escolhidos de acordo com a distribuição uniforme dos mesmos no setor Ouro verde, onde estão os 60 produtores totais que entregam leite para a cooperativa. Para os cooperados que não entregam leite a escolha foi por sorteio.

A pesquisa trata-se de uma análise quantitativa através de entrevistas. Parte desta constitui-se do protocolo comum para pesquisas envolvidas com o projeto “Resiliência da Agricultura Familiar da Amazônia”², sendo que as perguntas encontram-se em anexo. As entrevistas foram feitas com o apoio do Instituto Centro de Vida (ICV) com suporte de técnicos e com o fornecimento do software survey do programa arcgis. Os dados foram tabulados no software Excel em seguida, as variáveis contínuas foram

Resultados e Discussão

A quantidade de residentes por propriedade não se diferencia (Tabela 1). Esses valores da média de moradores não inclui o entrevistado, o que nos leva a conclusão de que são três moradores por residência, provavelmente pai, mãe e filho (a), não apresentando diferença significativas entre os dois grupos.



Quanto às pessoas que contribuem para a renda (Tabela 1), a diferença pode estar ligada a percepção sobre a contribuição, como o número de trabalhos externos é maior para os “cooperados que não entregam leite” estes consideram mais contribuições ao passo que os que entregam leite, não consideram que as pessoas que trabalham na propriedade contribuem.

Para Matte e Machado (2016) são vários os fatores e fatos que podem levar um jovem a decidir não permanecer no campo, entre eles a não inclusão dos filhos nas tomadas de decisões relacionadas a propriedade. Incluí-los nas decisões mesmo que não trabalhem ou residam na propriedade é um ponto positivo para a diminuição da falta de sucessão familiar, visto que em alguns casos os filhos podem retornar às atividades, dado que alguns trabalham até mesmo em outras propriedades.

Do grupo dos cooperados que não entregam leite 27,59% tomam decisões entre a família e 41,38% entre o casal (Figura 1). Existe um número menor de famílias que tomam a decisão em conjunto com os filhos, estando assim mais propícios a uma não sucessão familiar. Os produtores de leite do Norte de Mato Grosso possuem desafios a sucessão familiar (IMEA, 2018).

Cada grupo tem em média uma renda agrícola por propriedade, trabalhando apenas com leite, ou apenas com café, ou apenas com gado de corte (Tabela 1), no caso dos cooperados que entregam leite é a principal atividade geradora de renda. Ao compararmos as rendas não agrícolas deparamos com uma variação significativa entre os dois grupos. O grupo que entrega leite possui em média menos rendas não agrícolas do que o grupo que não entrega leite (Tabela 1).

Discriminação	Entrega leite	Não entrega leite
Média moradores	2,40	2,30
Significância	0,283 ^{ns}	
Média de pessoas que contribuem para renda	1,44	2,04
Significância	0,019*	
Porcentagem de pessoas que contribuem para renda	66,73%	91,07%
Significância	0,004*	
Acessa PAA/PNAE	95,83%	33,33%
Não acessa PAA/PNAE	8,33%	66,66%
Significância	0,000*	
Possui resfriador	87,5%	38,46%
Significância	0,001*	
Horas /dia no leite	4h43	2h53
Significância	0,007*	



Anos que trabalha com leite	21,17	13,23
Significância		0,050*
Comércio conjunto	100%	51,85%
Significância		0,000*
Concorda com o preço do leite	58,83%	32%
Significância		0,050*
Guarda sementes	8,33%	77,77%
Significância		0,000*
Usa remédios caseiros	62,5%	85,18%
Significância		0,041*
Mais que 25% dos alimentos vem da propriedade	50%	70,37%
Significância		0,087 ^{ns}

Tabela 1. Atributos comparados entre os agricultores que entregam leite e não entregam leite para a COMOV, Alta Floresta-MT.

*Teste T Significativo. NSteste T Não Significativo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

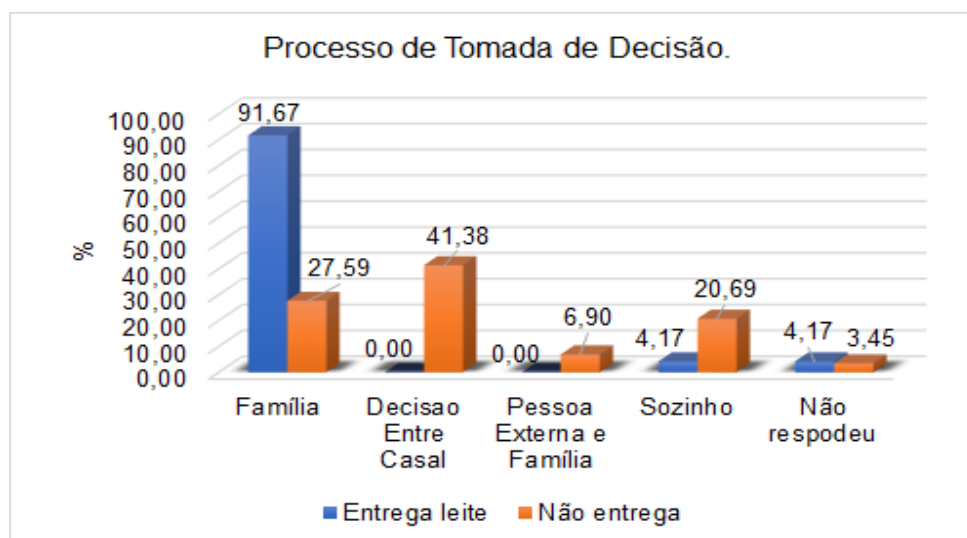


Figura 1. Processo de tomada de decisão apresentado pelo grupo de entrevistados que entregam leite e não entregam leite a COMOV, Alta Floresta-MT.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Das propriedades que não entregam leite consultadas 37,93% recebem algum tipo de benefício como aposentadoria ou bolsa família e 13,79% exercem trabalhos exteriores sendo fixos ou periódicos³. Por outro lado, das propriedades que produzem leite para a COMOV apenas 12,5% recebem benefício (aposentadoria) e 4,16% exerce algum tipo de serviço exterior.

As rendas agrícolas se apresentam sem diversificação nítida, podemos avaliar isso como um risco para o fortalecimento da agricultura familiar, pois o ideal são estruturas agrárias diversificadas que trazem maior segurança para a geração de renda e



segurança alimentar. Paralelo a isto temos uma renda não agrícola com presença significativa para os grupos que não entregam leite, o que está ligada a falta de uma renda mensal e de serviço dentro da propriedade nas entressafras e também a falta de recursos para investimentos, há então uma necessidade pela busca de alternativas, e estes trabalhos externos permitem diferentes percepções sobre a contribuição para renda para os dois grupos, pois se alguém trabalha para fora tem um dinheiro a mais entrando, e além disso os que permanecem na propriedade geralmente lidam sozinhos com as atividades, e portanto para o grupo que não entrega leite esta percepção é maior. Analisando que a produção de leite que não inclui custos de transporte e o preço para a alimentação do gado é menor do que no mercado convencional, visto que a cooperativa busca a matéria prima e oferece incentivo na compra dos insumos por ela fornecidos, este cooperado possui menos trabalho empregado em sua produção. Além disso para estes agricultores existe a garantia de venda do produto e, recentemente, acesso a programas como o Rural Sustentável e as Redes Socioprodutivas que facilitam os investimentos e a melhorias no produto.

O acesso ao PNAE e PAA apresentou diferença significativa entre os cooperados que entregam e os que não entregam leite (Tabela 1). A criação de mercados institucionais pelas políticas públicas representou importantes mudanças, pois a criação e implementação do PAA garantiu o apoio a produção para consumo e a permissão da venda dos excedente, e com a implementação do PRONAF que garantiu estabilidade da receita agrícola, essas oportunidades representam elevação geral dos preços de comercialização de comercialização dos produtos (Salgado, Teixeira & Cunha, 2016).

Um fator que está ligado a menores rendas não agrícolas apresentada pelos agricultores que não entregam leite é que estes não acessam ao PAA e PNAE, portanto não possuem uma renda agrícola a mais contribuindo. Como o acesso a estas políticas é por meio da cooperativa, podemos supor que a comunicação é mais frequente com o grupo que entrega leite que é um dos fatores que influenciam a sua maior participação nos programas do governo. Isso apresenta um fator de fortalecimento dos cooperados que entregam leite por possuírem dois benefícios da cooperativa que pode vir a ser um incentivo a diversificação da propriedade.

Os agricultores que não entregam alegam que o acesso aos programas do governo intermediados pela cooperativa deveria ser mais fáceis, provavelmente esta indagação pode estar ligada a comunicação ou organização dos produtores que querem acessar



o PNAE e PAA, que aparentemente é maior com o grupo de cooperados que entrega leite. Mas pode também estar ligada as burocracias existentes para o acesso em si, como por exemplo possuir a DAP. Porém uma queixa existes é a organização da entrega nos pontos de coleta dos produtos comercializados como escolas e lar dos idosos, da qual a cooperativa enfrenta dificuldades por serem vários produtores diferente e falta de veículo para a entrega.

Os agricultores que entregam leite a cooperativa trabalham mais horas com a atividade do leite devido esta ser sua atividade principal, o grupo que não entrega leite se dedica mais às outras atividades, que são as principais da propriedade. Os “cooperados que entregam leite” estão a mais anos dentro da atividade leiteira o que se apresenta como uma vantagem pois a cooperativa garante a permanência destes produtores no mercado. Este é ponto importante pois em cenários de dificuldades, a entrega do produto a cooperativa pode garantir uma permanência na atividade se caracterizando como um ponto positivo estes agricultores.

O resfriador utilizado para armazenar e resfriar o leite dentro da propriedade é particular para maioria dos cooperados que entregam leite, sendo que quase metade do grupo que não entrega leite para a cooperativa não possuem resfriador particular (Figura 8). Estes agricultores que não possuem resfriadores alugam dos laticínios que entregam o leite, cujo aluguel é cobrado por litro de leite, em torno de cinco centavos ou mais por litro. Nero, Viçosa e Pereira (2009) apresenta que o método mais significativo utilizado para manter a qualidade do leite é o resfriamento, que se constitui de uma importante ferramenta desde que utilizada adequadamente. Caso a temperatura não seja mantida em níveis corretos a probabilidade da multiplicação das bactérias é maior. Um grupo se destaca do outro com relação aos resfriadores particulares, neste caso os que entregam leite. Este quesito de não possuir resfriador se apresenta como limitante para que os cooperados que não entregam leite possam passar a entregar a cooperativa, visto que a mesma ainda não possui recursos e nem mecanismos para facilitar a disposição destes resfriadores a estes cooperados.

Apesar de a maioria dos dois grupos apresentarem duas ordenhas diárias, a porcentagem de uma ordenha diária ainda é significativa o que Nero, Viçosa e Pereira (2009) atribuem como um indicativo de baixa produtividade.

O tipo de ordenha utilizada pela maioria dos cooperados que entregam leite é de mecânica balde ao pé, os cooperados que não entregam leite possuem uma variação



entre os três tipos de ordenha (Figura 7). A tendência é que em locais onde as ordenhas são manuais a prática seja realizada apenas uma vez ao dia, ao passo que em propriedades em que se tem maiores investimentos em sistemas mecanizados a ordenha seja realizada duas vezes ao dia, o que culmina para uma maior produção diária total por rebanho e por vaca (Braga et al., 2015

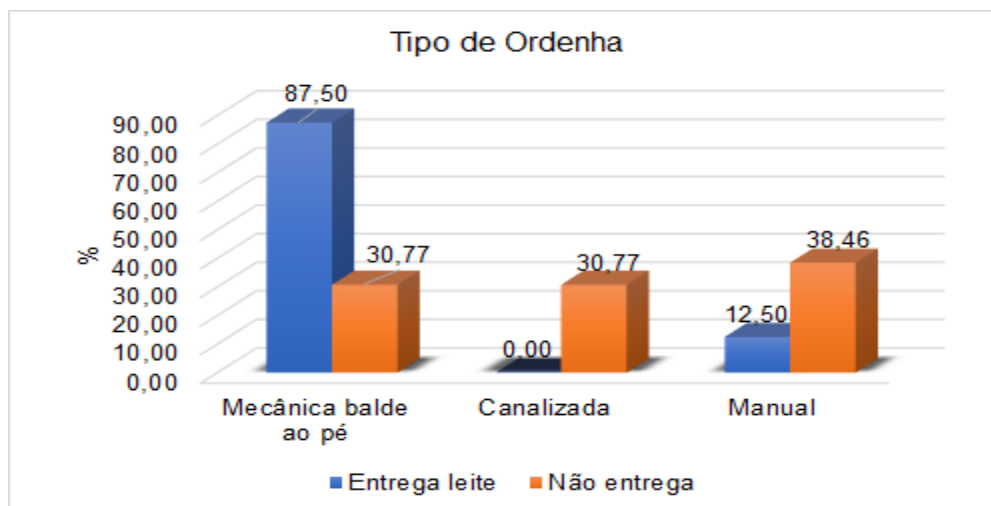


Figura 7. Tipo de ordenha utilizada por quem entrega leite e não entrega leite para a cooperativa a COMOV, Alta Floresta-MT.

Fonte: Elaborada pelo autor



Figura 8. Tipo de resfriador utilizado por quem entrega leite e não entrega leite para a cooperativa a COMOV, Alta Floresta-MT

Fonte: Elaborada pelo autor.

Deduz-se que a principal motivação dos cooperados está na comercialização em



conjunto por parte dos agricultores que entregam o leite, afinal todos comercializam sua matéria prima com a COMOV (Figura 14). O que chama a atenção é que apesar de os agricultores que não entregam leite para a cooperativa acessarem de maneira bem menos significativa as políticas públicas (PNAE e o PAA), foi o grupo que apresentou maior porcentagem quanto ao objetivo de participar de uma cooperativa com fins de acesso a programas do governo, o que indica que existe o anseio de participar desses programas é que a cooperativa deve se atentar a este fato.

Alguns dos “cooperados que não entregam leite” para a cooperativa comentam que não aceitam o preço pago pela COMOV, por isso apresentam porcentagem menor a essa questão (Tabela 1). Recentemente após a coleta das informações um dos cooperados que entregava leite passou a entregar para outro laticínio. Os gestores da instituição afirmam que a bacia leiteira do setor Intersul (região onde fica a COMOV) é fortalecida devido a presença do seu laticínio o que faz com que outros laticínios paguem mais caro aos produtores desta localidade do que o preço pago em outras regiões do município.

Os demais laticínios da região são os que compram o leite dos “cooperados que não entregam leite a cooperativa” sendo que 21,42% entrega para o lactvit, 28,57% para o Marajoara, 7,85% beneficiam na propriedade e 42,85% entregavam para a própria COMOV mas atualmente estão com zero de produção. Em 2011 a quantidade litros produzidos em Alta Floresta foi de 18.802.000, em 2014 foram 14.063.000 litros, em 2016 foram 11.009.000 litros e em 2017 foram 11.076.000 litros (IBGE, 2017). Os valores recebidos por litro pelos laticínios particulares vão de R\$0,98 a R\$1,20, enquanto que “os que entregam leite a cooperativa” recebem de R\$0,98 a R\$1,17 da COMOV. Os que recebem R\$0,98 dos laticínios particulares são os que alugam o resfriador. Em 2011 o preço pago em Alta Floresta era de R\$0,62, em 2014 R\$0,79, em 2016 R\$0,85 e em 2017 R\$0,97 (IBGE, 2017).

Ou seja no município houve uma diminuição da produção e aumento do preço nos últimos anos, e o fato de entregar o leite para a cooperativa não foi o suficiente para os agricultores continuarem na atividade, esses que possuem zero de produção atualmente alegam que não estava sendo compensatório devida a baixa produção e a necessidade de investimentos que não tinham condições de realizar.

Segundo conselho administrativo da cooperativa até mesmo os produtores de leite que não são sócios são bem remunerados quanto ao preço do leite, devido aos pagos por outros laticínios serem maiores que os pagos em regiões onde a cooperativa não faz

coleta. Os cooperados têm outros benefícios como o uso do trator com a hora de serviço menor que o preço de terceiros que custa em torno de R\$180 e os cooperados pagam R\$140 no da cooperativa. Para os que entregam leite quando o trator é utilizado para plantio, corte e ensilagem de milho o preço cobrado é de R\$130.

No início de 2018 o laticínio recuperou o SISE (Serviço de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal), ampliou e melhorou a infraestrutura da indústria e que culmina na busca de novas rotas de leite. Os cooperados que entregam leite possuem incentivo no preço da ração e na hora do trator para a produção de silagem, além da participação em projetos de parceiros como o Rural Sustentável e Redes Socioprodutivas que trabalha tanto na cadeia do leite como na do café. Além disso a cooperativa tenta se adequar ao pagamento por qualidade do leite forçado pela Instrução Normativa Número 62 (MAPA, 2011), que regulamenta a produção e transporte de leite. Hoje além do comércio de café e beneficiamento do leite a mesma trabalha com revenda de milho, quirera e suplementação animal através da fábrica de ração que fornece alimentação para os rebanhos de cooperados e não cooperados.

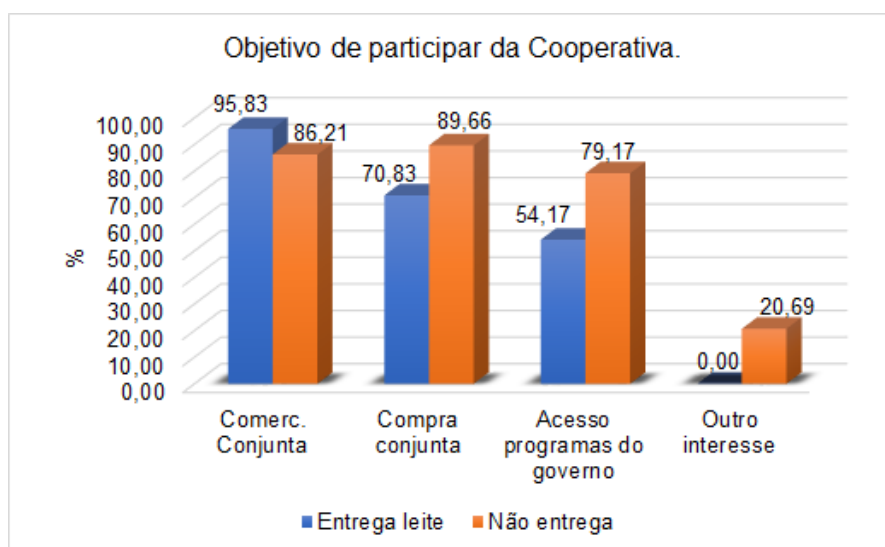


Figura 14. Objetivos em participar de uma cooperativa dos agricultores que entregam leite e não entregam leite a COMOVI, Alta Floresta-MT.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Cerca de metade dos agricultores dos dois grupos consideram que usam mais produtos químicos do que antes. Para as sementes crioulas, a maioria dos “cooperados que entregam leite” não realiza o armazenamento e os “cooperados que entregam leite” não armazenam sementes, bem como usam menos remédios caseiros (Tabela 1).

Apesar de a maioria dos dois grupos possuírem alguma porcentagem dos alimentos que



vai para a mesa -produzidos na propriedade - o grupo de produtores que entrega leite possuem em sua maioria 25% dos alimentos que vão para a mesa oriundos da própria propriedade, enquanto que o grupo que não entrega leite possuem em sua maioria 50% dos alimentos que vão para a mesa vindos da própria propriedade, ou seja este último grupo apresenta uma diversificação maior de produtos e conseqüentemente compram menos produtos externos para a alimentação. Essa maior diversificação dos alimentos produzidos pode estar relacionada a porcentagem de sementes guardadas serem maior para o grupo que não entrega leite (Figura 18).

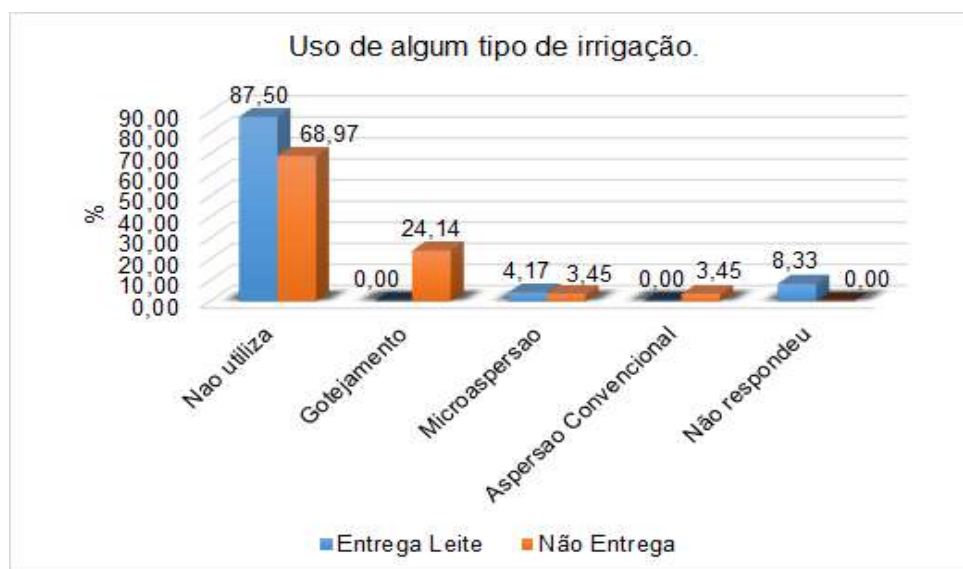


Figura 17. Tipos de irrigação utilizados pelo grupo que entrega leite e não entrega leite a COMOV, Alta Floresta-MT.

Fonte: Elaborada pelo autor.

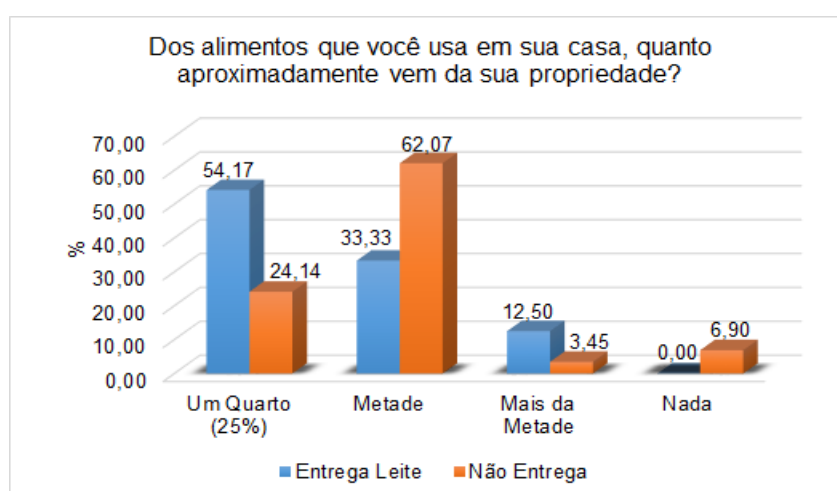


Figura 18. Autoconsumo do grupo que entrega leite e não entrega leite a COMOV, Alta Floresta-MT.

Fonte: Elaborada pelo autor.



Conclusões

Pela observação dos aspectos mencionados nota-se que os grupos estudados possuem peculiaridades diferentes. Dentre os aspectos que mais se destacam está a sucessão familiar, que apesar de os dois grupos apresentarem por sua maioria o desejo de que os filhos permaneçam na propriedade, o grupo que entrega leite apresenta maior inclusão dos filhos nas tomadas de decisão o que se apresenta como uma vantagem e algo que possa vir a fortalecer estas famílias, pois pode influir na decisão dos mesmos pela permanência na unidade produtiva.

A cooperativa contribui de certo modo para o fortalecimento do agricultor cooperado, e de forma mais intensiva para os que entregam o leite para a instituição, pois estes estão a mais tempo trabalhando com o leite e apresentam vantagens a sucessão familiar. Mas os agricultores que não entregam leite possuem uma maior autonomia, apresentando menos necessidades de recursos externos a propriedade sendo o principal fator significativo ao fortalecimento destas famílias, porém esta autonomia está mais ligada ao estilo de vida praticado por este do que com questões relacionadas a COMOV.

Notas

¹ O projeto é uma iniciativa do Instituto Centro de Vida apoiado pelo Fundo Amazônia/BNDES, que iniciou em Janeiro de 2018 com previsão de 30 meses de duração. O projeto atua diretamente com associações e cooperativas de agricultores familiares distribuídos nos municípios do Norte de Mato Grosso (Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Colniza).

² Programa baseado em uma visão sistêmica sobre a agricultura familiar. Articula ações de pesquisa interdisciplinar com formação e extensão, envolvendo universidades, organizações não governamentais e grupos de agricultores familiares. Abrange dez municípios nas regiões Norte e Noroeste do estado do Mato Grosso, todos pertencentes à área da Amazônia Legal. submetidas diretamente ao teste t (Oliveira, 2008). Este método estatístico avalia o nível de significância a 5% e o desvio padrão entre as médias apresentadas pelos dois grupos estudados, enquanto que as variáveis dicotômicas foram submetidas ao teste de Qui-Quadrado, para tanto foi utilizado o software livre R, por meio do comando *chisq.test* (R Development Core Team, 2015).

³ Apenas em períodos em que não tem tanta renda ou serviços na propriedade como na época da estiagem como em outras propriedades, na própria cooperativa, como serventes ou pedreiros e nas escolas.



Referências Bibliográficas

- Braga, B. G. (2015). Caracterização dos sistemas de criação de bovinos com atividade reprodutiva na região Centro-Sul do Brasil. *Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci*, 52(3), 217- 225.
- David, A. (2009). Competitividade das cooperativas do Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar - SISCLAF. Monografia (Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de cooperativismo solidário), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, PR, Brasil.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2010). População: informações completas. Disponível: <https://bit.ly/310o0cD>
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística). (2017). Brasil em síntese - Mato Grosso. Rio de Janeiro. Disponível: <https://bit.ly/3IGs1uy>
- IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária). (2018). Boletim mensal do leite, setembro de 2018. IMEA, Cuiabá, MT.
- MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). (2011). Instrução Normativa n. 62, de 29 de dezembro. Diário Oficial Da União, Seção 1. Disponível: <https://www.apcbrh.com.br/files/IN62.pdf>
- Matte, A., & Machado, D. A. J. (2016). Tomada de decisão e a sucessão na agricultura familiar no sul do Brasil., Cuiabá-MT, 18(37).
- Nero, L. A., Viçosa, N. G., & Pereira, V. E. F. (2009). Qualidade microbiológica do leite determinada por características de produção. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, 29(2), 386-390.
- Olival, A. A. (2016). A resiliência em assentamentos rurais: uma experiência na região Norte de Mato Grosso. *Sustentabilidade em Debate*, 7(1), 90-103.
- Oliveira, A. F. G. (2008). Testes estatísticos para comparação de médias. *Revista Eletrônica Nutritime*, 5(6), 777-788.
- R Development Core Team. (2013). A language and environment for statistical computing. Disponível: <http://www.R-project.org>
- Roboredo, D. (2014). Percepção e lógicas dos agricultores na recuperação da Microbacia Hidrográfica Mariana, no município de Alta Floresta/MT. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil.
- Salgado, F. S. J. R., Teixeira, C. E., & Cunha, A. W. (2016). Contribuição dos programas de compra institucional (PAA e PNAE) para estabilização dos preços agrícolas em minas gerais. *Revista de Estudos Sociais*, 37, 18(37), 22-41.



Heterogeneidad y especificidades del agronegocio en México. Adaptación, agencia y retos para los pequeños productores¹

Héctor B. Fletes Ocón²
Hugo Pizaña Vidal³
Guadalupe Ocampo Guzmán⁴

Resumen

El agronegocio ha sido uno de los conceptos clave para el análisis social y agrario en América Latina. En México, se asume en ocasiones que la reforma agraria implementada a inicios del S. XX permitió un grado de acceso a la tierra, y ciertas prerrogativas estatales otorgadas a campesinos y pequeños productores, que mitigarían su penetración e impacto. Sin embargo, las desigualdades entre las corporaciones y estas poblaciones son notables, como el caso de sectores extractivos, minería o agrocombustibles. En esta comunicación se examina la especificidad y diversas modalidades que adquiere un núcleo de empresas agroalimentarias en una región maicera del sur de México en el estado de Chiapas (La Frailesca). Se destaca el proceso de largo plazo que conlleva el relativo dominio sobre los campesinos, pequeños productores y otros actores, así como la necesidad que tienen las corporaciones de establecer una serie de relaciones sociales, mecanismos de convencimiento y negociación con los actores del territorio, para estar en posibilidad de detentar una capacidad de control sobre los primeros. Sin embargo, para el pequeño productor el escenario es el de un cambio radical en las condiciones para la producción, así como en las redes y actores participantes en la producción, transformación y distribución que habían operado con presencia de los aparatos estatales hasta la década de los noventa.

Palabras clave

Agronegocio; cadenas agroalimentarias; pequeños productores.

Introducción

Entre las más importantes transformaciones en la economía y sociedad global se encuentra el auge y/o consolidación del agronegocio, un grupo reducido de corporaciones transnacionales que concentran los procesos de producción, transformación y distribución de alimentos y subproductos agrícolas. El agronegocio se constituye en uno de los grupos ganadores de la más reciente crisis económica del capitalismo, tanto financiera como alimentaria. Para fines de la primera década del 2000, empresas del sector financiero, minerales, energía, farmacéuticas, habían acudido al



mercado de los alimentos, como un “efecto refugio” para sostener las utilidades, en gran parte derivadas del mercado de futuros y la especulación (Rubio, 2013).

En muchas regiones del mundo, el agronegocio se ha consolidado como un grupo de empresas con elevados niveles tecnológicos, una serie de estrategias de organización productiva, de inversión, gerencia, suministro y comerciales que los colocan como una industria moderna. Entre sus formas organizacionales y espacios de interés se encuentran Bigdata y la adaptación de lo que se conoce como Industry 4.0, superando con ello la localización sectorial de sus actividades, para convertirse en transectorial. No es casualidad que una de las ramas de la industria a la vanguardia en este aspecto sea el de la Biotecnología (Gras y Hernández, 2013; Lang y Heasman, 2015).

Como se sabe, existe un debate muy amplio sobre el agronegocio, sobre todo cuando se ve respecto a las condiciones de otros actores de la agricultura mundial y Latinoamericana, a saber, campesinos, pequeños productores y agricultura familiar. En la literatura se ha documentado el grado de control y dirección que ejerce el agronegocio sobre los otros actores, que se presentan como subordinados al núcleo empresarial. También se ha mencionado que, al establecer métodos de producción de agricultura intensiva (no solo la basada en tecnología biológica, sino en agrotóxicos) contribuye en la degradación ambiental de los territorios en donde se desarrolla, así como en la emisión de gases de efecto invernadero, como resultado de su relación con cadenas transnacionales de mercancías y uso de combustibles fósiles en su transporte al mercado. Finalmente, se señala la concentración económica y, por otro lado, el despojo que ejerce el agronegocio sobre los otros actores señalados. El agronegocio ha logrado la capacidad de influir y hasta determinar políticas públicas de fomento, investigación y desarrollo tecnológico, en colaboración con, o más allá de, los Estados.

En esta comunicación, se muestra un estudio de caso realizado en la región Frailesca - estado de Chiapas, al sur de México-, donde se intenta destacar el proceso de largo plazo que conlleva el relativo dominio sobre los campesinos, pequeños productores y otros actores, así como la necesidad que tienen las corporaciones de establecer una serie de relaciones sociales, mecanismos de convencimiento y negociación con los actores del territorio, para estar en posibilidad de detentar una capacidad de control sobre ellos. Esto asemeja más una perspectiva de Teoría del Actor-Red, en donde el poder es inestable, y se localiza más en la propia red (con la participación de agentes del Estado, y otras entidades privadas), que en un actor en específico (Wilkinson, 2006).



El caso de la Frailesca es relevante porque en la década de los setenta desplegó niveles de producción de maíz que le permitieron el mote de “el granero de Chiapas”, con una amplia participación estatal, pero una serie de factores llevaron a una reducción significativa en las superficies sembradas y en los volúmenes producidos, observándose una serie de cambios en las prácticas desarrolladas por los productores, así como en los actores participantes en las cadenas de producción de maíz. En este proceso surge y/o se consolida un núcleo de empresas del agronegocio. Sus orígenes, mecanismos e incluso formas de vincularse con el territorio son muy heterogéneas. En lo que sigue, se desea resaltar la heterogeneidad del agronegocio, las maneras específicas en que se consolida en un territorio, las posibles articulaciones y negociaciones con actores locales y la necesidad que tiene de afianzar permanente su capacidad de dominio sobre otros actores.

En la primera parte, se analiza los antecedentes y elementos constitutivos del agronegocio, como proceso vinculado a las tendencias de expansión del capitalismo en la era de la globalización. Después se examinan algunos de los rasgos principales del agronegocio en México, así como los actores principales operando en los sistemas alimentarios. Posteriormente, se revisa la forma en que se concreta el agronegocio en una región maicera del estado de Chiapas, al sur del país, en donde convergen distintos orígenes, lógicas y formas de relación con otros actores regionales. La comunicación ofrece unas reflexiones finales.

El agronegocio: el complejo empresarial y la lógica

Mientras en buena parte del siglo XX el tema de los alimentos fue tratado mundialmente como un asunto ordinario (por la disponibilidad existente de oferta), a fines de ese siglo comienzan a mostrarse una serie de problemas económicos, sociales y de productividad, que se sintetiza en el “fin del alimento barato” (McMahon, 2013). En este contexto es donde empresas del agronegocio global han reforzado su poder y dominio. Según Lang y Heasman (2015), el agronegocio controla el acceso al consumo de alimentos en el mundo. De este modo, en la actualidad “los principales conductores de la cadena de abastecimiento de alimentos son las fuerzas poderosas de procesadores, comerciantes, minoristas, restaurantes y especuladores financieros en agronegocios” (Lang y Heasman, 2015, p. 20).

En la industria alimentaria participan no solo empresas proveedoras de insumos sino de la producción de alimentos, transformación, distribución, bancos, producción de



maquinaria, seguros, financiamiento y tecnologías de información. Muchas de las que hoy son empresas líderes se encontraban ya entre las fundadoras del sistema moderno: Cargill, Deere, Unilever, Nestlé, McDonald's, Coca-Cola. No fue sino a partir de la década de 1980 que el desplazamiento hacia el capital financiero y las repercusiones de las biotecnologías condujeron a las fusiones y absorciones que desde entonces han cambiado rápida y radicalmente al sector (Chemnitz, Luig, Rehmer, Benning y Wiggerthale, 2018, p.11).

En el caso de las materias primas agrícolas más importantes en el comercio mundial (trigo, maíz y soya) solo cuatro empresas transnacionales dominan la importación y exportación. Éstas son Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y la Louis Dreyfus Company. Juntas son conocidas como el Grupo ABCD o, simplemente, como ABCD (McMahon, 2013; Chemnitz, et. al, 2018, p. 32).

Como parte de la dinámica de concentración económica en la industria alimentaria, tan solo en el último quinquenio se ha presentado un intenso proceso de adquisición/fusión de las empresas dominantes en diferentes subsectores de la industria alimentaria. En miles de millones de dólares (mmd) del año 2016, algunas de las fusiones más importantes han sido las siguientes. En alimentos, Heinz/Kraft (100 mmd); y en agroquímicos Dow/Dupont (130 mmd) y Bayer/Monsanto (66 mmd), apenas en el año 2018. Además, Chem China compró Syngenta. De la fusión de Dow y Dupont en el año 2017, surge Brevant, que sostiene el uso de la denominación comercial de semillas más conocida y globalmente expandida, "Pioneer", de amplio uso en México. De este modo, tres transnacionales llegan a controlar así más del 60 por ciento de los mercados de semillas comerciales y de agroquímicos (Chemnitz, et. al, 2018, p. 22). Una tendencia es la transición del agroquímico al control de la producción de semillas.

La capacidad que han logrado las transnacionales del agronegocio para apropiarse de una gran tajada del valor en las cadenas agroalimentarias y para controlar los procesos de producción y distribución en se ha basado en el apoyo de las políticas que establecieron los Estados desde la década de los ochenta, y principalmente en los noventa (Reig, 2004; Gras y Hernández, 2013)⁵. En el caso de Argentina, estas transformaciones políticas facilitaron la penetración del capital en amplios espacios rurales y cultivos, esencialmente la soya. La década de los noventa ha presenciado en este país la consolidación y ultra especialización organizacional, económica y tecnológica del agronegocio, constituyendo un complejo empresarial que ha modificado



las políticas y procedimientos en torno a la investigación agrícola que había estado coordinada previamente por organismos estatales.

Agronegocios en México

En este apartado, por falta de espacio, se presenta solo una caracterización muy general del agronegocio en México. Según Bautista, Díaz y Lastiri (2015, p. 4) el sistema agroalimentario mexicano está dominado por un pequeño grupo de Corporaciones Multinacionales (CMN) (de origen extranjero y nacional) que controlan la producción, almacenamiento, comercialización, créditos y apoyos públicos. El dominio abarca la oferta de insumos, maquinaria, producción, fijación de precios, canales de distribución, almacenamiento, medios de transporte, comercialización, etc.

Hay una concentración paralela a la que ocurre en la escala global. En el periodo 2006-2013, treinta y tres CMN destacan como las principales empresas agroindustriales en el mercado mexicano. Sus ventas durante el año 2013 fueron igual a \$1,831,616 mdp, representaron el 15.3% del total de las 500 principales empresas del país. De estas empresas, catorce son extranjeras: dos suizas, una francesa, una brasileña, una holandesa y una del Reino Unido con capital irlandés, y ocho provenientes de EUA.

En el caso de las semillas y agroquímicos, participan las tres CMN conocidas, Monsanto, Dupont y Syngenta, que en conjunto controlan el 50% de la comercialización de semillas patentadas en el mundo. En México son parte de la Asociación Mexicana de Semilleros. Por su parte, los mayores productores de agroquímicos, Bayer, Syngenta, Basf, Dow Agrosciences, Monsanto y Dupont formaron, en 1999, la Asociación Civil Agro Bio México como un grupo para implementar desarrollos tecnológicos en biotecnología (<http://www.agrobiomexico.org.mx/>). Este grupo de empresas domina la producción y comercialización de los paquetes tecnológicos en México (Bautista, et. al, 2015, p. 7,8).

En el país, respecto de las ventas totales a nivel nacional de los insumos fabricados, los porcentajes realizados por las 4 y 8 mayores empresas en cada uno de ellos, fueron: en los fertilizantes, 86.7% y 93.8%; en los pesticidas y otros agroquímicos, 54.3% y 71.8%; en los alimentos balanceados para animales, 31.4% y 44%; y en la maquinaria y equipo pecuario, 86.7% y 97% (COFECE, 2015, p. 8; con información de los Censos Económicos 2009). Poco más de 60% de las semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) han sido inscritas por tres solicitantes: Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. (Monsanto), el Instituto



Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y PHI México, S. A. de C.V. (Pioneer).

Los oferentes de plaguicidas incluyen compañías nacionales, así como empresas multinacionales grandes (Arysta Life Science, Basf, Bayer, Cheminova, Dow, Dupont, FMC, Monsanto, Summit Agro, Valent y Syngenta) y medianas o pequeñas. La oferta de maquinaria agropecuaria en México, particularmente de tractores, proviene de cinco empresas ensambladoras establecidas en el país: John Deere, CNH de México (Case IH y New Holland), AGCO de México (Massey Ferguson y Challenger), McCormick Tractores de México y Foton; además de la importación de tractores de otras marcas (COFECE, 2015, p. 9).

El segmento de alimentos procesados incluye a las CMN de procesamiento de maíz, harinas y alimentos quienes son las principales acaparadoras de granos en México. Este segmento es estratégico puesto que es uno de los principales abastecedores de alimentos para la población mexicana. Sólo seis CMN controlan a este nodo de la cadena, sus ventas representan el 15.9% y el 11.82% de las ventas totales de la muestra. De donde sólo dos empresas, *Grupo Bimbo* y *Gruma* (que controla a su subsidiaria *Grupo Industrial Maseca*), concentran el 87% de las ventas y el 85.7% de las utilidades del segmento. Las CMN *Cargill*, *Archer's Daniels Midland (ADM)* y *Bunge*, tienen una participación estratégica en la cadena agroindustrial, acaparan, procesan, distribuyen granos, oleaginosas (para consumo agropecuario y humano), entre otros productos agrícolas y financieros (Bautista, *et. al*, 2015, p. 9). También se encuentran nieles de concentración en industrias como la cerveza, los jugos envasados y la leche procesada (COFECE, 2015, p. 26).

Especificidad del agronegocio en Chiapas. Experiencias en la región Frailesca

Hay una gran heterogeneidad en las agriculturas en México, asociado con las condiciones naturales, la historia productiva de las regiones y los tipos de actores participantes. Mientras se ha resaltado que en el norte del país, y regiones como el Bajío (centro-norte), se concentra la agricultura empresarial e intensiva, igualmente otras áreas del país, en el sur, se integran en esta lógica. En el caso de Chiapas -al sur limítrofe con Guatemala- se encuentran al menos tres regiones de agricultura industrial (y polarizada), a saber, Soconusco, Comitaca y la Frailesca. En este apartado se examinan las modalidades que adquiere un grupo de empresas agroalimentarias en la última de estas regiones.



La Frailesca ha sido una región con una importancia histórica del maíz⁶, y donde la presencia y configuración del agronegocio representa un proceso de largo plazo. En 1971, se instaló Nestlé en el municipio Chiapa de Corzo (Álvarez, Barajas y Montaña, 1997). Desde su establecimiento, dicha empresa estableció una red de acopio de leche que le dio el control total sobre el mercado y los precios (Camacho-Vera, Vargas, Quinteros y Apan, 2018), acaparando porciones importantes del producto al interior de la región (Álvarez, et. al, 1997). Además, durante este tiempo (hasta 2016, cuando dejó de operar) influyó en las formas de organización de los productores locales, así como en los requerimientos de la calidad del producto y en las tecnologías empleadas, especialmente con la introducción de enfriadores en las décadas de ochenta y noventa, bajo ciertas reglas impuestas por la misma empresa.

Dos años antes, en 1969, se había creado el “Grupo Buenaventura”, una empresa de capital regional cuyo giro principal es la producción y venta de pollo y sus derivados (huevo, carnes, pollinaza) (Camacho, 2001). Su infraestructura, segmentada en múltiples plantas, le permite incubar sus propios animales, procesar las aves y aprovechar los residuos para producir alimentos. Además, la empresa ha logrado incursionar en la producción de porcinos y bovinos, y cuenta con explotaciones de maíz y sorgo (Notas de campo, 2018). Algunos de estos procesos los desarrolla en otros estados como Yucatán y Campeche (<http://buenaventura.mx/>).

Ambas empresas se establecieron y desarrollaron en la región en un contexto político en que la producción de básicos recibía amplios apoyos del Estado, como programas de comercialización, créditos, insumos, asesoría técnica, aseguradoras, y con ello, paquetes tecnológicos, que incluyen semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas sintéticos. Estos paquetes derivaron del programa Revolución Verde, que en México inicia en la década de 1940. Es al influjo de estas políticas agrícolas que la Frailesca se convirtió en la principal zona productora de maíz en Chiapas. En 1982, generó el 34% del grano en todo el estado (INEGI, 1985).

Hasta la década de 1980, los maiceros locales vendían sus granos a empresas del sector público como ANDSA y CONASUPO⁷, así como a comerciantes particulares que destinaban los productos al mercado nacional. La mayor parte del maíz era captado por las paraestatales, ya que ofrecían a los productores precios fijos y protegían el mercado nacional a través de la regulación de las importaciones de básicos. La agricultura de maíz se convirtió en proveedora de alimentos para el ganado, cuya leche era destinada



a la Nestlé. Por otro lado, al ser el maíz una materia prima fundamental de Buenaventura, los maiceros locales se convirtieron en sus principales proveedores.

Con la puesta en marcha de las políticas agrícolas neoliberales en México a mediados de los ochenta, cambió la configuración de la agroindustria regional del maíz y el papel del agronegocio. La estrategia de liberalización, apertura comercial y privatización, implicó el desmantelamiento paulatino del marco institucional que había sostenido la producción de granos. Hacia los años noventa se redujo la compra de granos por parte del sector público y los precios relativos del maíz decayeron (entrevista con ex funcionario de Conasupo, 2019). En la región Frailesca disminuyó la rentabilidad del maíz y los productores se vieron obligados a diversificar sus actividades o emigrar (Molinari, 2011). Muchos se desplazaron a la ganadería y se especializaron en ella, otros, la combinaron con el cultivo de maíz (bajo el sistema maíz-ganadería).

Pero los agronegocios proliferaron en el marco de esta crisis maicera, bajo modalidades claramente diferentes de acción. De hecho, a mediados de 1990, aparecen nuevos actores como Maseca, la compañía harinera más grande de México. Además, durante la década del 2000, crece la participación de comercializadoras privadas de granos, reemplazando algunas de las funciones que anteriormente cumplían las paraestatales en la compra, venta y procesamiento de granos.

Algunos autores mencionan que la Nestlé desempeñó un papel clave cuando se presentó la crisis agrícola en la Frailesca, “al representar la lechería una alternativa para atenuar los efectos adversos ante la caída de la rentabilidad de la producción de maíz” (Molinari, 2011, p. 29). A raíz de la baja en los precios del grano -explica Molinari- los productores optaron por la ganadería y la mayoría abasteció a la compañía. Según Barajas (1996) este cambio de maíz a ganadería fue, en parte, incentivado por la propia Nestlé al presentarse ante los productores como un comprador seguro y como la opción más viable al ofrecer créditos blandos, tecnología y asistencia técnica. De este modo, la empresa no sólo logró controlar la producción de leche y consolidar la red de recolección que había establecido décadas atrás, sino también influir y alterar la dinámica productiva de la región.

De acuerdo con Camacho-Vera et al. (2018, p. 78), Nestlé redujo su participación en la compra de leche al interior de la región desde 2010 y dejó de comprar en 2016. Frente al retiro de la trasnacional, aumentó la participación de pequeños y medianos productores de quesos, así como la de una empresa de capital local que procesa y



comercializa el líquido como es Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. (PRADEL, su nombre comercial), que inició operaciones en 2003 (Camacho-Vera et al. 2018).

Por otro lado, la vinculación de Buenaventura con la producción de maíz regional en el marco de la apertura comercial ha sido limitada, ya que se abastece en mayor medida de importaciones. Camacho (2001) documentó que en 1996 dicha empresa cubrió sus requerimientos de maíz importando de Estados Unidos a través de CONASUPO. En su momento, los agentes de la empresa argumentaron la falta de instalaciones para conservar maíz y tenerlo en forma permanente durante todo el año, también buscaban evitar los riesgos que implicaba negociar los precios con los productores locales. *Hellin y Meijer (2006) reportaron una situación similar en 2005, año en que la empresa importó 83% del grano, y compró y cultivó el resto para abastecerse.* Los requerimientos de granos se satisfacen también por cuenta propia en parcelas que tiene en la región y en el estado de Campeche. De acuerdo con un productor local, tan sólo en Campeche la empresa cuenta con 500 hectáreas para los cultivos que necesita, ya sea sorgo o maíz (Notas de campo, 2019). En ocasiones recurre a la compra con particulares o con comercializadoras de granos que son las que acaparan la mayor parte de la producción. Algunas comercializadoras, señalaron que venden a la empresa, pero “depende mucho del precio que hay en el mercado regional” (comercializador 1 de grano en Villaflores, mayo, 2019) o de que sea una “temporada [en] que el grano escasea” (comercializador 2, Villaflores, mayo, 2019).

Una de las formas como Buenaventura se hace del maíz que se produce en la región es a través de contratos que, a través de ASERCA (organismo del Gobierno Federal enfocado en comercialización), *realiza con los productores, en los que se acuerda en forma anticipada el precio de la compraventa. El objetivo de dicho programa, oficialmente denominado “agricultura por contrato”, pretende disminuir la incertidumbre que generan las variaciones de los precios internacionales del grano en el proceso de comercialización, tanto para los productores como para las empresas compradoras (Echánove, 2013). Algunos compradores ofrecen a los productores “paquetes tecnológicos” a crédito⁸. Esto es atractivo para aquellos agricultores que no tienen el suficiente capital para iniciar el ciclo agrícola. A cambio, comprometen su cosecha con la empresa⁹, que su vez les paga y otorga un subsidio como parte del mismo acuerdo.*

Se ha observado que este programa no resulta atractivo a la mayoría de los agricultores. La razón, según agentes de comercialización es que “el precio local generalmente



supera el precio de la cobertura [es decir, el que se establece en el contrato]...” (comercializadora 1, Villaflores, mayo, 2019). Esta situación desalienta a los productores a establecer los acuerdos, ya que prefieren esperar a que el precio incremente durante la temporada de cosecha (de noviembre a febrero). *Un productor del ejido Cuauhtémoc y trabajador de la empresa Buenaventura describió:*

[Buenaventura] le da un precio al maíz, pero uno no quiere tener compromiso porque a lo mejor sube, no hay algo estable. Ellos no se comprometen a decir que si sube [el precio] te pago más. Ellos quieren que hagamos un compromiso, nos apoyan con un precio amarrado [fijo]. Por eso mucha gente no entra... [la empresa] consume maíz de Estados Unidos, y allá está [más barato] como a dos mil pesos. Ellos no pierden, Buenaventura no pierde... (Productor 1, Ejido Cuauhtémoc, Villaflores, 19 de diciembre, 2018).

Además de Buenaventura, dos empresas del mismo giro como Avimarca (empresa de la región) y Bachoco (originaria del estado de Sonora, al noroeste de México) se asentaron en la década del 2000 cerca de la Frailesca, en el municipio contiguo Ocozocoautla. La influencia regional de este conjunto de empresas no ha derivado tanto en el fomento de la producción sino en la generación de empleos, en su mayoría mal remunerados (Notas de campo, 2018)¹⁰. Importar es la constante en las operaciones de este tipo empresas. Narváez (2014) documentó que, aunque las granjas avícolas y porcícolas locales se abastecen del maíz local, su compra sólo es estacional, en correspondencia con la principal temporada de cosecha. Durante el resto del año estas empresas suelen comprar a importadores de maíz, principalmente de EE. UU., como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).

Hacia 1994, toma presencia Maseca, que se asentó en el municipio de Ocozocoautla con el propósito de abastecerse de la producción de maíz, tanto de la Frailesca como de otras zonas de Chiapas, para su transformación industrial en harina. En sus inicios, Maseca no se limitó a comprar el maíz regional, sino también promovió el cambio tecnológico a través de la formación de clubes de maíz (Camacho, 2001; Cadenas, 2004; Massieu y Lechuga, 2002). Dichos clubes consistían en la integración de grupos de productores vinculados a la empresa a través de despachos de asesoría técnica y proveedores de insumos, cuya finalidad era emplear paquetes tecnológicos para producir maíces híbridos con la calidad de molienda requerida por la industria (Cadenas, 2004). *La aplicación de tales paquetes conllevó en el quehacer de los agricultores la*



sustitución o reemplazo de variedades nativas por mejoradas, para aumentar los rendimientos del maíz, acorde a las necesidades de la empresa.

Fue a través de iniciativas que promovían este tipo de cambios técnicos, como Maseca logró establecer vínculos con los productores de la región, además de incidir y controlar el proceso productivo. Para reunir el maíz estableció un programa de compras en el que rentó a los ejidos las antiguas bodegas de Conasupo o espacios a la intemperie (Entrevista con ex trabajador de Conasupo, 2019; ver también Camacho, 2001, p. 130; Aguirre, 2015). De esta manera, la harinera compró directamente a los productores mediante sus diferentes centros de acopio. Narváez (2014) informó que para el año 2012, la empresa adquirió en Chiapas 53.4% del maíz que requería (procesando entonces 150,000 toneladas anuales), principalmente en la Frailesca y en otro municipio (Venustiano Carranza). El resto fue comprado en Sinaloa al norte del país (43.3%), Sudáfrica y Estados Unidos (3.3%).

La relación comercial entre Maseca y los maiceros de la región se modificó recientemente, cuando la empresa se retiró de las bodegas ejidales para importar la mayor parte del maíz o comprar directamente en su planta de Ocozocoautla. Esto último supone nuevos desafíos a los productores, ya que ven reducidas sus posibilidades para comercializar con la empresa al no contar con la capacidad para transportar las cosechas hasta las instalaciones, además de los riegos que suponen los descuentos que se aplican por la calidad del grano que exige Maseca. Dicha situación ha acentuado la dependencia más fuerte de los productores con los comerciantes particulares y con los comercializadores, que son las que actualmente controlan el mercado regional. Estos actores venden a Maseca, a las granjas o llevan a la frontera con Guatemala.

Reflexiones finales

En el análisis anterior, se puede observar que efectivamente el complejo de agronegocio ha expandido su participación en regiones productoras de cereales, en este caso de maíz en el estado de Chiapas, México. Éste ocupa espacios en muy diferentes segmentos de la producción, procesamiento y distribución de maíz, pero también en el suministro de insumos y tecnologías, muchas de las cuales son promocionadas e introducidas por los propios programas del Estado.

Si bien hay una presencia de empresas de origen local y regional, se deja ver que transnacionales como ADM ocupan un papel central en la distribución de escala global,



entregando producto conforme a las necesidades de calidad, volumen y temporalidad requeridos por las unidades empresariales regionales. Participan así, en las dinámicas de reestructuración regional y en las formas de relación entre productores, entidades privadas y agencias del Estado.

El complejo de agronegocio se configura de maneras específicas cuando se entrelaza con los actores territoriales. Dependiendo del segmento en que participan, le es necesario establecer un conjunto de relaciones sociales ya sea de manera directa o indirecta con los actores locales. Se entrelazan proyectos de ambos grupos de actores. Sin embargo, visto en el largo plazo, los espacios de maniobra para los pequeños productores y campesinos se ven limitados, porque han tenido que enfrentar no solo los efectos de las políticas “anticampesinas” por parte del Estado mexicano (al retirar subsidios, agencias de extensionismo, entidades de comercialización, y empresas paraestatales que acompañaban al pequeño productor en su relación con el mercado) sino también los impactos del cambio climático y el permanente deterioro de la agrobiodiversidad local.

Notas

¹ Ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología “Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida”, 1-6 de diciembre de 2019, Lima, Perú. Esta comunicación ofrece resultados preliminares de la investigación “Reconfiguración agroecológica: innovación social organizativa y tecnológica en la frailesca”, financiada por PAPIIT UNAM (Desarrollada por CIMSUR UNAM, CIESAS y UNACH); así como de la investigación de Tesis de Doctorado en Estudios Regionales del segundo autor “Exclusión socioterritorial de los pequeños productores agrícolas en dos municipios de La Frailesca, Chiapas. Un análisis en el marco de las políticas neoliberales”.

² Profesor de Tiempo Completo Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Facultad de Ciencias Sociales, México, correo electrónico: hector.fletes@unach.mx

³ Candidato a Doctor en Estudios Regionales, Universidad Autónoma de Chiapas, correo electrónico: hugoadrian_25@hotmail.com

⁴ Profesora de Tiempo Completo, UNACH, Facultad de Ciencias Sociales, correo electrónico: guzocamqua@hotmail.com

⁵ En el caso de las autoras Gras y Hernández, dejan muy en claro que más que un tipo de actor, el agronegocio se trata de un “modelo” o lógica de producción, que puede ser analizado en función de elementos como la “transectorialidad” (articulación horizontal



de una serie de actividades otras que la producción), la priorización del mercado global, el papel del capital en los procesos productivos, el acaparamiento de tierras y la estandarización de las tecnologías utilizadas (2013, p. 25,26).

⁶ Entre los años 2003 y 2017, la superficie sembrada de este cultivo, se redujo de 136,405 a 59,739 ha (en los municipios Ángel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y Villaflores), mientras que el volumen de producción cae de 389,401 a 193,381 ton en el mismo periodo.

⁷ Las empresas paraestatales se comenzaron a instalar en la región desde la década de los sesenta. Se tiene conocimiento de 30 puntos de acopio, de los cuales 10 eran a intemperie y 20 bodegas (Notas de campo, 2018).

⁸ Las marcas de semillas híbridas que se emplean con más frecuencia en la región son de las corporaciones Pioneer, Dekalb (Bayer-Monsanto) y Syngenta (también se emplean semillas *nativas*, ver Pizaña, *et al.*, 2019), seguidas de marcas de empresas nacionales como PROASE y PROSESO. En cuanto a agroquímicos, destacan activos para el control de plagas y malezas, de Bayer, Dow, Syngenta y FMC (Notas de campo).

⁹ Bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio (o fórmula para la determinación de éste) y condiciones de pago.

¹⁰ Un cargador de pollos, cuya función es seleccionar las aves y cargarlas al transporte, gana aproximadamente \$1000 pesos a la semana, trabajando largas jornadas laborales (más de ocho) (Entrevista con empleados de Buenaventura, diciembre, 2018). Muchos son trabajadores que han abandonado la agricultura, o bien, productores que han encontrado en las granjas una entrada complementaria a los ingresos que derivan de las parcelas. A pesar de los bajos salarios los trabajadores manifestaron que se encuentran agradecidos con la empresa, porque cuentan con ingresos seguros y estables para sus familias, además de algunas prestaciones a las que no podrían acceder si se dedicaran de tiempo completo al cultivo de maíz.

Bibliografía

Aguirre, J. (2015). *Innovación estratégica para la producción y comercialización de maíz en Chiapas* (Tesis de Maestría en Estrategia Agroempresarial). Universidad Autónoma de Chapingo, México.

Álvarez, A., Barajas, V., y Montaña, E. (1997). La reorganización del sistema lechero inducida por la Nestlé en La Fraylesca, Chiapas. *Comercio exterior*, 47 (12), 947-954.



Barajas, V. (1996). *Desarrollo regional en la Frailesca, Chiapas. La producción de leche como alternativa* (Tesis de Licenciatura en Economía). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Bautista, A., Díaz, I., y Lastiri, M. (2015). *El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México*. México: OXFAM.

Cadenas, P. (2004). *Actores, estrategias y dinámicas de organización en el agro de la Frailesca, Chiapas* (Tesis de Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural). Colegio de Postgraduados, México.

Camacho-Vera, J., Vargas, J., Quinteros, L., y Apan G. (2018). Evolución del sistema productivo de leche de bovino en la Frailesca, Chiapas. *Revista de Geografía* (61), 67-84.

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE, 2015). *Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. Resumen ejecutivo*. México.

Chemnitz, C., Luig, B., Rehmer, C., Benning, R., y Wiggerthale, M. (Eds.) (2018), *Atlas del Agronegocio, Datos y hechos sobre la industria agrícola y de alimentos*. Berlín: Fundación Böll Stiftung, Fundación Rosa Luxemburg, Amigos de la Tierra Alemania.

Echánove, F. (2013). *Apoyos del gobierno a la comercialización de granos: los programas de agricultura por contrato y coberturas de precios*. México: Subsidios al Campo. http://subsidiosalcampo.org.mx/wp-includes/textos_pdf/subsidios-pdf/7.Granos.pdf

Gras, C., y Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales. En *El Agro como Negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización* (17-46). Buenos Aires: Editorial Biblos, Sociedad.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). México en Cifras. Acceso el 19 de marzo de 2018. <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07>.

Lang, T., y Teasman, M. (2015), Introduction, The Food Wars thesis. En *Food wars. The global battle for mouths, minds and markets* (1-57). UK: Earthscan.

Massieu, Y., y Lechuga, L. (2002). "El maíz en México: biodiversidad y cambios en el consumo", *Análisis económico* (36), 281-303.

McMahon, P. (2013). On the Brink. En *Feeding Frenzy. The New Politics of Food* (25-46). London: Profile Books.

Molinari, C. (2012). *Región Frailesca. Hay maíz, hay frijol, pero dinero no hay*. México: UNICACH.



Narváez, T. (2014). *Análisis de la producción y de las cadenas productivas de maíz en Ocozacoautla de Espinosa, Chiapas* (Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural). El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019). *El sistema alimentario en México – Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible*. Ciudad de México.

Pizaña, H.; Fletes, H.; González, A. (2019), Agronegocios y campesinos maiceros en la Frailesca: vulnerabilidad y resistencias, *Eutopia, Revista de Desarrollo Económico Territorial* (15), 11-31

Reig, N. (2004). América Latina y la mundialización agroalimentaria. En María del Carmen del Valle Rivera (Coord.), *El desarrollo agrícola y rural del tercer mundo en el contexto de la mundialización* (23-54). México: Plaza y Valdez.

Rubio, B. (2013). La crisis alimentaria en el corazón de la crisis capitalista mundial. En Blanca Rubio (Coord.), *La crisis alimentaria mundial. Impacto sobre el campo mexicano* (11-51). México: UNAM, IIS, Miguel Ángel Porrúa.

Wilkinson, J. (2006). Network Theories and Political Economy: From Attrition to Convergence. En Marsden Terry y Jonathan Murdoch (Eds), *Between the Local and the Global. Confronting Complexity in the Contemporary Agri-Food Sector* (11-38). Oxford: Research in Rural Sociology and Development. Volumen 12, Elsevier.

Yúnez, A. (2003). The Dismantling of CONASUPO, a Mexican State Trader in Agriculture. *The World Economy* (26), 97-122.

Yúnez, A., y Barceinas, F. (2002). Lesson from NAFTA: The case of Mexico's Agricultural Sector. Reporte del Banco Mundial. Consultado en enero 2019 http://web.worldbank.org/archive/website00955A/WEB/PDF/YUNEZ_TE.PDF



Análisis del contexto internacional del mercado de la miel

Karen Tonantzi Ramirez Mijangos
María Isabel Palacios Rangel
Jorge Gustavo Ocampo Ledesma
Jorge Aguilar Ávila

Resumen

En este trabajo se realizó un análisis descriptivo en el cual se construyen algunos indicadores de comercio internacional para el estudio del mercado mundial de la miel en el periodo 2007-2016, la información se obtuvo de las bases estadísticas de FAO ESTAT. El trabajo tiene como objetivo analizar las tendencias productivas y comerciales de las principales potencias en el mercado internacional de la miel, así como establecer las relaciones entre ellas y su función en la cadena comercial de miel.

El análisis se enfocó en el estudio del comportamiento de las 10 principales potencias productoras, exportadoras e importadoras de miel en el mundo, con apoyo de indicadores de comercio exterior. Los indicadores calculados fueron Tasas de crecimiento, Tasas medias de crecimiento anual, Coeficientes de exportación, Índice de transabilidad y Grado de apertura, el cálculo de indicadores basados en valores se realizó en términos de precios constantes. El estudio muestra un crecimiento en la producción y comercialización de miel, así como el nacimiento de nuevas potencias productoras, los índices de transabilidad muestran que los países productores no son consumidores y los países consumidores tienen una producción insuficiente, estas condiciones permiten que exista un mayor dinamismo dentro de la comercialización y que los países exportadores que no son consumidores sigan generando divisas.

Palabras clave

Mercado, cadena de valor, producción, miel.

Introducción

La apicultura es una actividad productiva que se desarrolla en todo el mundo por los múltiples beneficios que ofrece para el consumo y para la polinización de cultivos, esta actividad puede complementarse con otras actividades agrícolas y ganaderas, sin embargo, el principal objetivo de quienes la realizan, es la producción de miel para autoconsumo o para su comercialización. En el 2016 la producción mundial fue de 1,859,228 toneladas, donde la mitad de la producción se concentra en solo seis países: China, Turquía, Estados Unidos, Ucrania y Argentina. El mercado en el que se



comercializa se trata de un oligopsonio debido a que el consumo de la miel se da entre consumidores de ingresos alto y medios provenientes de países desarrollados como es el caso de Estados Unidos, Alemania y Japón. El mercado de la miel es de gran apertura dado que los principales consumidores tienen una producción ineficiente para satisfacer su demanda interna y los principales productores tienen un bajo consumo per capita, por lo tanto, hay dependencia entre los países exportadores y los consumidores. El grado en que una nación logre la inserción y permanencia sus productos al mercado internacional será reflejo de su competitividad (Magaña, Sanginés García, Lara y Lara, De Lourdes Salazar Barrientos, & Morales, 2017), en la que influye la productividad, diferenciación y la capacidad de satisfacer el consumo nacional. Para medir la competitividad se pueden utilizar indicadores directos e indirectos. Los indirectos se refieren a comparación de costos entre regiones o países y los segundos se refieren al grado de participación en el mercado, su ventaja comparativa o su grado de apertura (Pat-Fernández, Caamal-Cauich, Caamal-Pat, & Jerónimo-Ascencio, 2016), para cumplir con el objetivo en este trabajo se analizaron indicadores indirectos.

Con el fin de contribuir al estudio del mercado internacional de la miel en el periodo 2007-2016 y su caracterización, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar en forma cuantitativa las tendencias en producción y comercialización del mercado internacional de la miel frente a la oferta y demanda de las principales potencias productoras, exportadoras e importadoras, así como establecer las relaciones entre ellas y su función en la cadena comercial de miel.

Fundamentación del problema

La producción de productos de bajo consumo per capita obliga al país con excedentes, a la exportación, caso contrario un país con un alto consumo per capita pero baja producción, se obliga a la importación, la realización de estas transacciones es el comercio internacional, el cuál por tener una gran numero de participantes con diferentes requerimientos, se vuelve cambiante e inestable, si bien no puede ser predecido con exactitud el rumbo que tomará, se puede analizar tendencias y patrones que de alguna manera permitan tomar previsiones.

Metodología

Para cumplir con la finalidad planteada, se realizaron series de tiempo, cálculo de tasas de crecimiento, Tasas Medias de Crecimiento Anual y tres índices de comercio exterior en un periodo de 10 años. Estos indicadores cumplen la función de facilitar la



comparación de variables entre diferentes países en diferentes años, cada uno señala el comportamiento en la producción, exportación e importación en el mercado internacional y la relación que existe entre estas variables. La información utilizada en la estimación de estos indicadores se obtuvo de la base de datos de FAOESTAT, se consideraron los diez años más recientes con información disponible, este periodo abarca del 2007 al 2016. Los indicadores mencionados se describen a continuación:

1. Tasa de crecimiento: Este indicador es útil para observar el incremento o disminución que tuvo una variable, cuando pasa de un valor inicial (VI) a un valor final (VF), para el cálculo de esta variable se tomó como año base el 2007. La expresión del indicador es:

$$TC = \left[\left(\frac{VF}{VI} \right) - 1 \right] \times 100$$

2. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA): Este indicador representa una medida de aumento o disminución promedio de una variable que pasó de un valor inicial (VI) a un valor final (VF) en un determinado periodo de tiempo (t). La expresión del indicador es:

$$TMCA = \left[\left(\frac{Vf}{Vi} \right)^{\frac{1}{t}} \right] - 1$$

3. Coeficiente de exportación (CE): Es la relación que se establece entre el valor de las exportaciones (E) y el valor de la producción (VP) durante un periodo de tiempo. Mide el porcentaje de la producción que se exporta (Velin & Paúl, 2011): La expresión del indicador es:

$$CE_t^i = \frac{E_t^i}{VP_t^i} \times 100$$

4. Índice de transabilidad: Es la relación entre el valor de la balanza comercial y el valor del consumo aparente. Mide la capacidad de generar excedentes netos en relación con el consumo interno (Velin & Paúl, 2011). La expresión del indicador es:

$$IT_t^i = \frac{E_t^i - I_t^i}{VP_t^i + I - E_t^i} \times 100$$

Dónde E= Valor de las exportaciones; I= valor de las importaciones; VP= Valor de la producción. Bajo el supuesto de que el consumo aparente es mayor a cero, $VP + I - E > 0$, se puede decir lo siguiente: Si el indicador es mayor que cero se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta $E - I > 0$. Si el indicador es menor que cero, es un producto importable dado que existe un exceso de demanda $E - I < 0$.

5. Grado de apertura: Es la relación entre el valor de las exportaciones (E) e importaciones (I) y el valor de la producción (VP). Se trata de un indicador cuyo uso permite evaluar la apertura de un país hacia el exterior y mide la influencia que tiene el resto del mundo en un sector de la economía del país (Velin & Paúl, 2011).

$$GA_t^i = \frac{E_t^i - I_t^i}{VP_t^i} \times 100$$

Resultados y discusión

La organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), informa que en el periodo 2007- 2016 en promedio hubo una producción anual de 1,646,693 toneladas de miel en el mundo. El 63% de la producción es aportada por 10 países, siendo China el número uno con el 27% de la producción mundial, México ocupa el lugar número 9 como productor de miel (Figura 1).

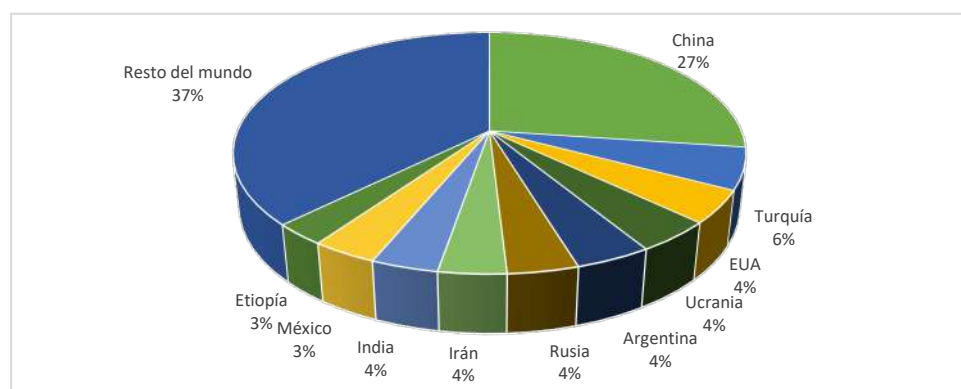


Figura 4. Principales países productores de miel, 2007-2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)

La producción de miel presenta una tendencia hacia el alza en el periodo 2007-2016, no obstante, el crecimiento no ha sido constante en todos los países. Irán es quien reporta la mayor tasa de crecimiento en 2014 con un 65.53% respecto al año base 2007, China por su lado manifestó un crecimiento del 57.57% en 2016 respecto a su año base en 2007. Países que inicialmente reportaban bajos niveles de producción ahora destacan como principales productores, en esta situación se encuentran Turquía, Irán e India. Por lo que respecta a México su crecimiento ha sido conservador reportando la mayor tasa



en 2015 con un 11.58% (Figura 2). China se posiciona como principal productor debido a la variedad de cultivos que tiene en extensas superficies, en dónde las colmenas son utilizadas además de la producción para la polinización. Turquía por su parte tiene un 75% de flora conocida para producción de miel y se caracteriza por tener la mayor producción de miel de pino.

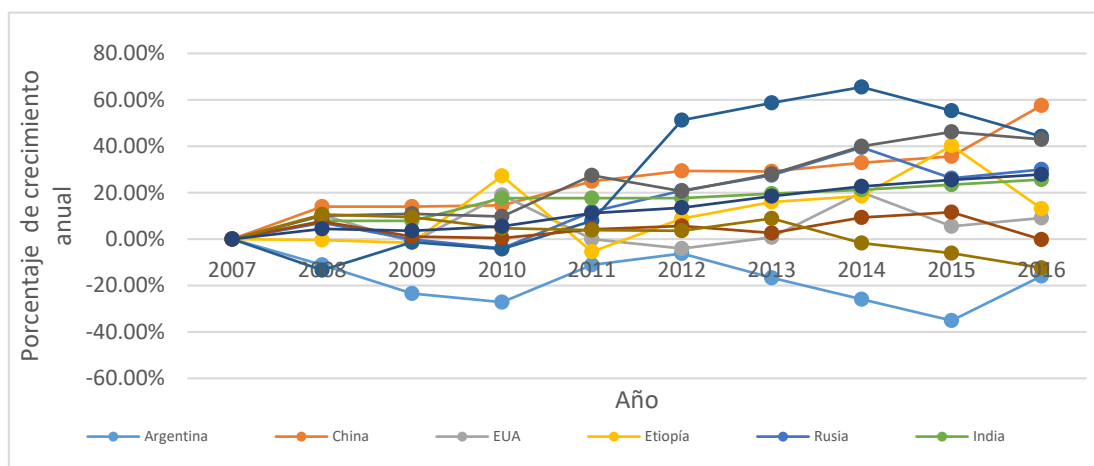


Figura 5. Tasas de crecimiento anual de los principales países productores de miel, año base 2007.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)

En el periodo 2007-2016 se reportó una tasa de crecimiento media anual (TMCA) en la producción, del 2.8% a nivel mundial. China, Irán y Turquía registraron un importante crecimiento en sus volúmenes de producción, registrando TMCA del 5.2%, 4.2% y 4.1% respectivamente; mientras que Argentina y Ucrania registraron tasas de crecimiento anual negativas de -1.9% y -1.5% respectivamente. En el caso de México, presentó una tasa de crecimiento cero durante el periodo analizado (Figura 3).

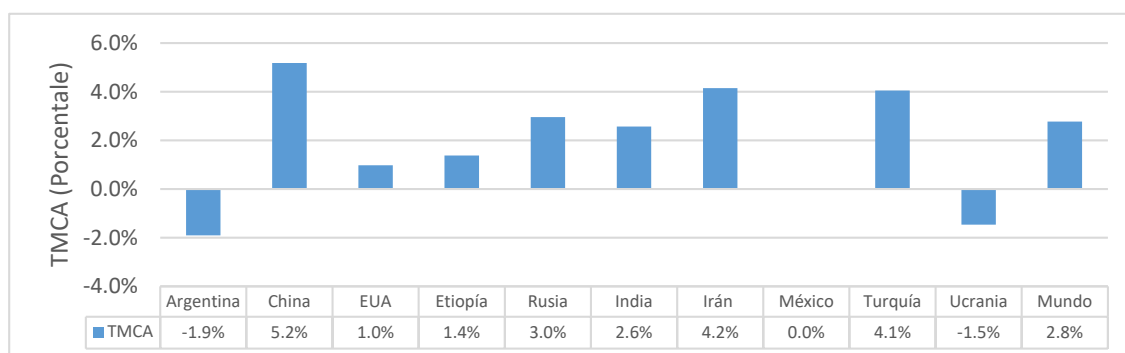


Figura 6. Tasas de crecimiento media anual de los principales países productores de miel, 2007-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)



En el periodo 2007-2016 se reportó en promedio una población de 82,207,535 de colmenas en el mundo. India encabeza la lista de los países con mayor población de colmenas con el 14% de la población total, seguido por China y Turquía con el 11% y 8% respectivamente. Irán y Turquía reportaron un importante crecimiento en su número de colmenas manifestando TMCA del 7.5% y el 5.3% respectivamente. Es importante señalar que, aunque la India es quien tiene la mayor cantidad de colmenas no se encuentran entre los principales productores, lo mismo ocurre con Tanzania y España (Figura 4).

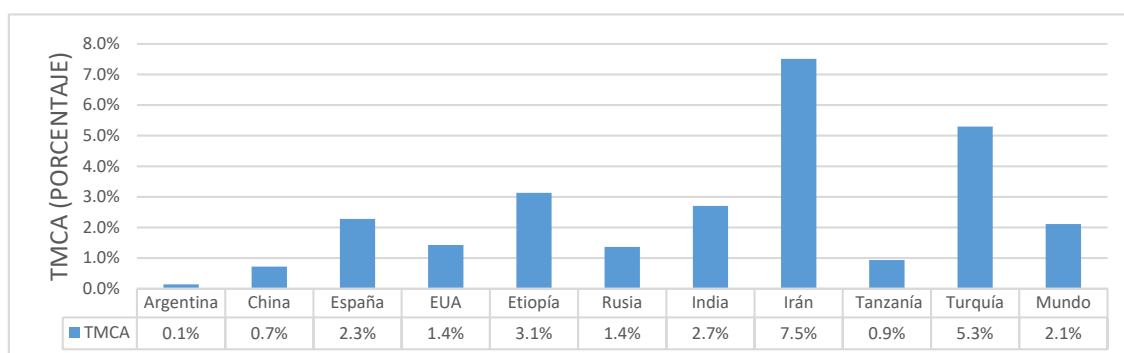


Figura 7. Tasas de crecimiento media anual de los países con mayor población de colmenas, 2007-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)

Comercialización

Las exportaciones mundiales durante el periodo 2007-2016 ascendieron de 410,081 a 650,479 toneladas, el 68% son realizadas por 10 países. Los mayores porcentajes los tienen, China con el 21% equivalente a 109,760 t en promedio, Argentina con el 12% equivalente a 65 838 t en promedio, México con el 6% equivalente a 31,685 t en promedio y Alemania con el 4% equivalente a 22, 505 t en promedio. China se posiciona como el principal exportador por los precios relativamente bajos que ofrece, sin embargo, los países importadores manifiestan que la miel proveniente de este país carece de inocuidad y trazabilidad. Por lo que respecta a Argentina y México el consumo de miel per capita es mínimo, por lo que el destino de la producción es la exportación de la miel a granel. En la Figura 5 se aprecia que en el periodo 2007-2016 China y Argentina reportan la mayor participación en las exportaciones tanto en volumen como en su valor, las exportaciones de México en cantidad son mayores que las de Alemania, pero en valor son menores, lo mismo sucede con la India que figura como el cuarto exportador a nivel mundial pero como el octavo respecto al valor de sus exportaciones. Vietnam, España, Brasil, Ucrania y Hungría se encuentran dentro de los países con más



exportaciones de miel, no obstante, no figuran como los principales productores. El valor de las exportaciones de miel en el 2016 fue de 2,045 millones de dólares, en este mismo año China registró exportaciones por un valor de 286 millones de USD, seguido por Nueva Zelanda que registró 206 millones de USD, la situación de Nueva Zelanda es interesante porque es el segundo país con mayor valor de exportaciones en 2017 y cuarto en el periodo 2007-2017, sin embargo, por lo que respecta a volumen no figura entre los principales exportadores, esto se explica por el grado de diferenciación de su producto, el cual no se comercializa a granel y tiene uno de los valores más altos en el mundo.

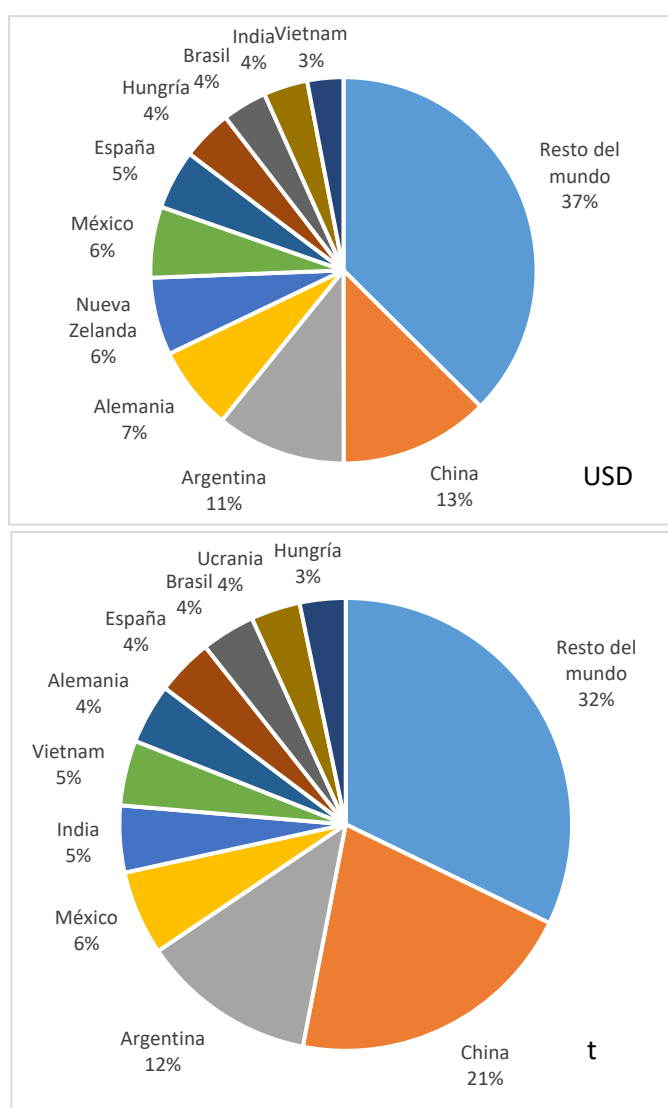


Figura 8. Principales países exportadores de miel, 2007-2016 (En toneladas y dólares).
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)



Analizando las TMCA de los principales países exportadores en el periodo 2007-2016, se observa que Ucrania reporto el más alto nivel en el incremento del volumen exportado con una TMCA del 33.9%, aunque contribuye con un bajo porcentaje al total de las exportaciones, pero seguir con esta tendencia, en algunos años tendrá un mejor posicionamiento. Países como México y Hungría reportaron tasas medias de crecimiento negativas en la cantidad exportada, siendo del -0.7% y -3.5% respectivamente, lo cual indica que sus exportaciones han crecido poco o se han estancado en los últimos años. Países como Alemania y Argentina no reportan un crecimiento en la cantidad de sus exportaciones (Figura 6).

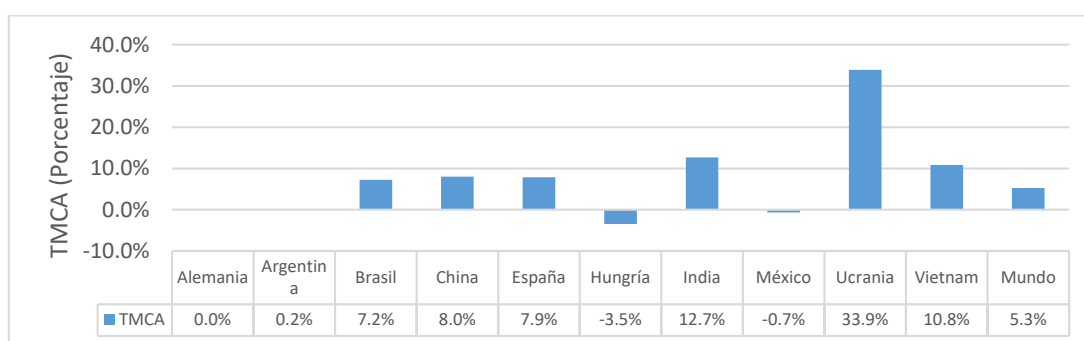


Figura 9. Tasas de crecimiento media anual en la cantidad exportada por los principales países exportadores de miel, 2007-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)

Respecto a las TMCA del valor de las exportaciones, Nueva Zelanda es líder, con una TMCA del 20%, esto indica que la apreciación y valor que se da a su miel va aumentando, aunque las cantidades producidas no incremente en la misma proporción. En segundo y tercer lugar están Brasil con una tasa del 17.7% e India con una tasa 13.5%, esto es congruente con un incremento en su cantidad producida. En el caso particular de México, aunque reporta una tasa de crecimiento negativa en la cantidad exportada, registra un crecimiento del 5.8% en el valor de sus exportaciones (Figura 7).

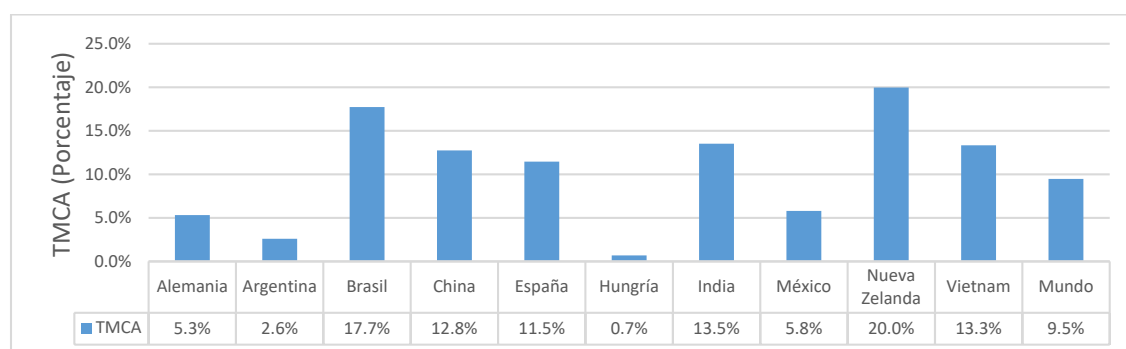


Figura 10. Tasas de crecimiento media anual en el valor exportado por los principales países exportadores de miel, 2007-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)



En el periodo 2007-2016 las importaciones ascendieron de 420,550 t a 636,175 t, el mayor importador es Estados Unidos, en este periodo registró 135,198 t equivalente al 25% de las importaciones mundiales, en 2016 su volumen importado fue de 166,477 t de miel con un valor de 422 millones de dólares. Estados Unidos es un productor importante de miel, no obstante, también es consumidor, así que para poder satisfacer su demanda interna complementa su producción con importaciones. Alemania se encuentra en segundo lugar con el 16% de las importaciones, en el 2016 su volumen registrado fue de 83,927 t de miel con un valor de 278 millones de dólares, su situación es diferente a la de Estados Unidos ya que Alemania se caracteriza por importar miel a granel para reexportarla envasada, sus principales clientes son Francia, Arabia Saudita y Países Bajos. México no figura entre los importadores, debido a que el consumo per cápita es muy bajo y con la producción es más que suficiente para satisfacerla (Figura 8).

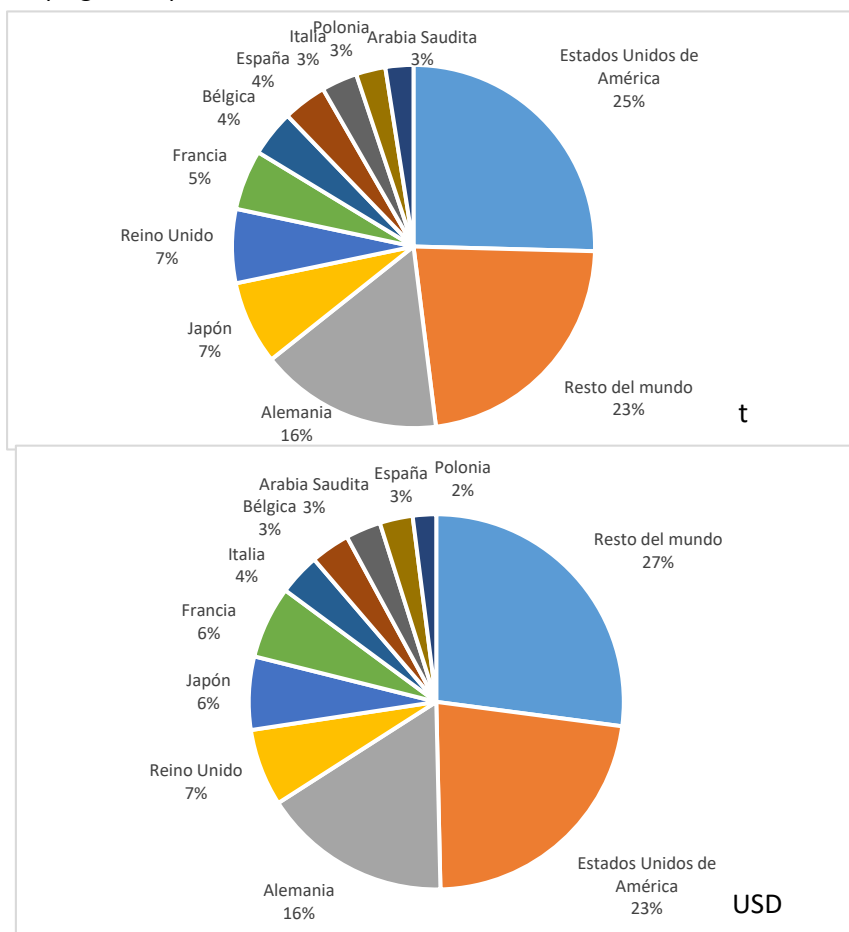


Figura 8 . Principales países exportadores de miel, 2007-2016 (En toneladas y dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)



En el periodo 2007-2016, Polonia, Bélgica y España reportaron las mayores TMCA en las cantidades importadas con valores del 24.6%, 13.3% y 10.3% respectivamente, estos países tienen en común ser europeos y aunque cuenta con la tecnología para mejorar su producción, esta no es suficiente para satisfacer su demanda interna. Alemania reporta una tasa negativa de -1.3%, lo cual indica que, aunque es de los mayores importadores de miel, el volumen importa no ha variado a través de los años (Figura 9). Por lo que respecta al crecimiento del valor de las importaciones, todos los países registran un incremento en sus TMCA, esto se debe al aumento del precio de la miel y al aumento en la cantidad importada.

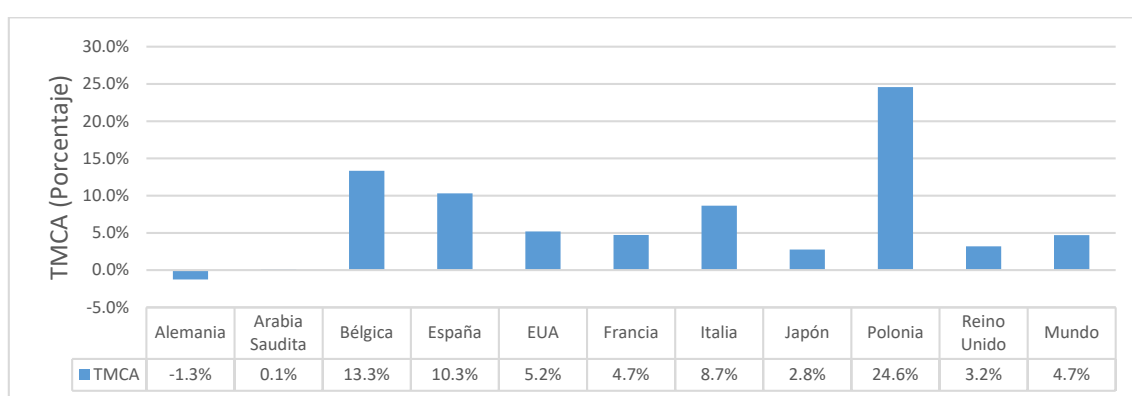


Figura 11. Tasas de crecimiento media anual en la cantidad importada por los principales países exportadores de miel, 2007-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018)

En el tema de los precios al productor, existe una amplia diferencia entre países respecto al precio por un mismo producto en un mismo año, Turquía e Irán son los que registran los mejores precios al productor en el periodo 2007- 2016. Turquía registro su precio más bajo en 2016 el equivalente a 7,844.50 USD/t y el más alto en 2010 el equivalente a 11,710 USD/t; Irán registró en 2012 su precio más alto por un valor de \$15,588.90 USD/t y el más bajo en 2007 por un valor de 4,733.90 USD/t; China es el país que registra los precios más bajos pagados a los productores con un promedio de \$1,832 USD/t, lo cual lo posiciona como el más competitivo en función del precio; Por lo que concierne a México, también reporta bajos precios pagados a los productores con un promedio de \$2,471 USD/t.

En términos generales el desarrollo del mercado internacional de la miel, se caracteriza por la predominancia del mercado interno de los países, complementada por el comercio internacional (Sanchez, Castignani, & Rabaglio, 2018), y en términos particulares



existen países exclusivamente productores y países exclusivamente consumidores (Figura 10).

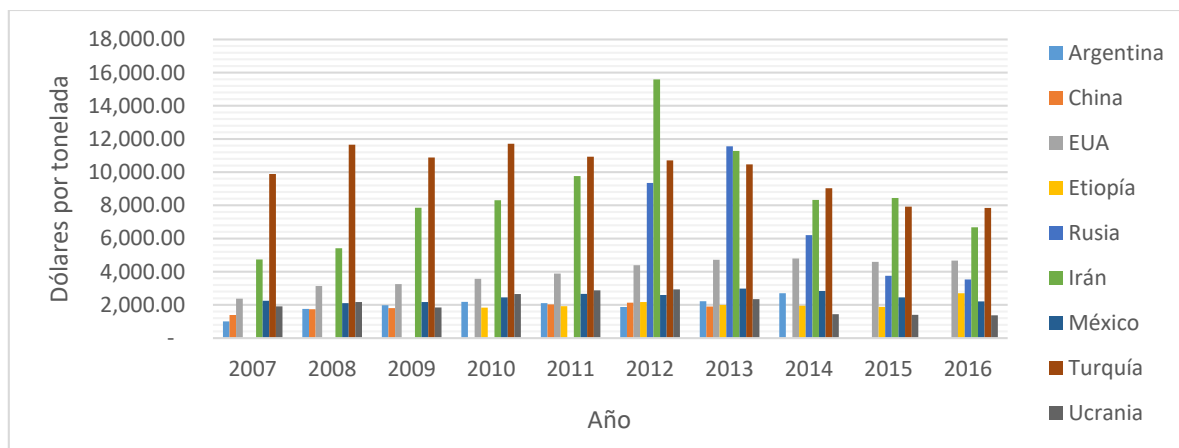


Figura 12. Comportamiento de los precios internacionales pagados al productor en el periodo 2007-2017 (USD/t)

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018).

El coeficiente de exportación mide el porcentaje de la producción que se exporta (Fernández, 2012), el mayor coeficiente de exportación en el periodo 2007-2017, lo tiene Alemania con un coeficiente de 112%, esto indica que su cantidad exportada es mucho mayor a la cantidad producida; Argentina reporta un coeficiente de exportación del 98%, casi toda su producción es exportada; México y España reportan coeficientes de exportación del 55 % y 67% respectivamente, esto indica que más de la mitad de su producción se exporta; Por lo que respecta a China a pesar de ser el principal productor y exportador en el mundo, solo el 25% de la producción es exportada. Turquía el segundo productor de miel en el mundo tiene un coeficiente de exportación del 3%, exporta una parte mínima de su producción; lo mismo sucede con Estados Unidos y Japón con coeficientes de exportación de 9% y 3% respectivamente, su producción es esencialmente para el consumo interno (Cuadro 1).

Pais	Coefficiente de exportación	Indice de transabilidad	Grado de apertura
Alemania	112	-76	-319
Argentina	98	5143	98
China	25	28	22
España	67	2	2
EUA	9	-64	-181
Japón	3	-93	-1428
México	55	121	55
Turquía	3	3	3

Cuadro 2. Indicadores de comercio exterior 2007-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO - FAOSTAT (2018).



El índice de trazabilidad permite medir la capacidad de generar excedentes netos exportables con relación al consumo interno (Fernández, 2012), de acuerdo con los valores de este índice, Argentina se posiciona como el principal exportador de miel por arriba de China quien maneja los mayores volúmenes de exportación, Argentina exporta el 98% de su producción y su disponibilidad de excedentes es 62 veces el volumen de su consumo nacional aparente (CNA); México es un exportador competitivo con un índice de 121%, exporta el 55% de su producción, su competitividad se atribuye a la disponibilidad de recursos naturales y al bajo consumo interno de miel. Alemania, Estados Unidos y Japón tienen un excedente de demanda, su producción es insuficiente para satisfacerla, por lo que realizan importaciones de miel. En el caso de España y Turquía tienen un índice de transabilidad del 2% y 3% respectivamente, esto indica bajos excedentes para la exportación y un alto consumo interno (Cuadro 1).

Por lo que respecta al grado de apertura, Alemania, Estados Unidos y Japón registraron valores negativos de -319%, -181% y -1428%, esto indica que el valor de sus importaciones es mucho mayor a sus exportaciones, son países dependientes de la producción internacional para satisfacer su demanda interna. Argentina, China y México tienen un grado de apertura positivo, con tasas del 98%, 22% y 55% , esto indica que una buena parte de su producción es destinada al comercio internacional, sin embargo, en el caso de Argentina y México indica una alta dependencia del mercado internacional y por lo tanto son más sensibles a los cambios en la curva de demanda (Cuadro 1).

Conclusión

El mercado internacional de la miel en los últimos 10 años reportados ha visto diversos cambios, como la incursión de nuevas potencias productoras, tal es el caso de Irán y Turquía, la caída en los niveles de producción de Argentina o el crecimiento acelerado de las exportaciones de Ucrania, esto demuestra un mercado dinámico y codependiente. Estados Unidos y Europa necesitan de la producción de otros países para satisfacer su consumo interno y por otro lado Argentina y México tienen un bajo consumo nacional por lo que necesitan exportar sus excedentes para obtener divisas que beneficien a sus productores.

Otra característica importante es el valor agregado y diferenciación que le otorgan algunos países a la miel, esto queda claro en el valor de sus exportaciones respecto a las cantidades exportadas, tal es el caso de Nueva Zelanda que, aunque maneja bajos volúmenes de producción y exportación percibe los valores más altos por su miel



exportada. Alemania por su parte es un re exportador, la producción que tiene no es suficiente para satisfacer su demanda interna, por lo que recurre a la importación de miel, reexportando los excedentes con un valor agregado, pasando del granel al envasado.

A nivel internacional México tiene una importante participación en la producción y comercialización de miel, puesto que se encuentra entre los 10 principales productores y exportadores en el mundo. México es un exportador neto de miel, casi toda su producción es llevada a la exportación, no obstante, la miel se comercializa a granel, lo que lo vuelve vulnerable a los gustos y preferencias de la demanda y la volatilidad de los precios. México es altamente competitivo por las condiciones ambientales para el desarrollo de la actividad y por el bajo consumo per cápita, sin embargo, se debe trabajar en la diferenciación y valor agregado de su producto, para no verse disminuido por la aparición de nuevos competidores.

Bibliografía

- FAO - FAOSTAT. (2018). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Retrieved October 8, 2018, from <https://bit.ly/33Nx3zw>
- Fernández, D. G. (2012). Indicadores de Comercio Exterior y Dinamismo Comercial Aplicación para Uruguay en el período 1997 al 2012 1. Retrieved from http://www.ccee.edu.uy/jacad/2013/file/ECONOMIA/Indicadores_CE_fernandez_2013.pdf
- Magaña, M. Á. M., Sanginés García, J. R., Lara y Lara, P. E., De Lourdes Salazar Barrientos, L., & Morales, C. E. L. (2017). Competitividad y participación de la miel mexicana en el mercado mundial. *Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias*, 8(1), 43–52. <https://doi.org/10.22319/rmcp.v8i1.4304>
- Pat-Fernández, V. G., Caamal-Cauich, I., Caamal-Pat, Z. H., & Jerónimo-Ascencio, F. (2016). Análisis de los indicadores de competitividad del cultivo de la fresa de México en el mercado mundial. *Textual*, (68), 45–63. <https://doi.org/10.5154/r.textual.2016.68.004>
- Sanchez, C., Castignani, H., & Rabaglio, M. (2018). El Mercado Apícola Internacional. *Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria*, 23. Retrieved from
- Velin, M., & Paúl, M. (2011). Cálculo y análisis de indicadores sectoriales de comercio exterior para el caso ecuatoriano. *Revista de Analisis Estadístico*, 2(2), 7–33. Retrieved from <https://bit.ly/3iRk1Fv>



Sobre los Sistemas Alimentarios Indígenas, el ejemplo del Pueblo Rapa Nui, Chile. Fortalecimiento y contribuciones en la seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático

Javier Lastra Bravo

Resumen

La siguiente exposición se centrará en presentar la importancia que poseen los Sistemas Alimentarios Indígenas (SAI) a nivel mundial, destacando como ejemplo la situación del pueblo *Rapa Nui* en Isla de Pascua.

Por medio de la exposición se tratará de dar a conocer la importancia que poseen los sistemas Alimentarios Indígenas, analizando su evolución y transformaciones en el tiempo, demostrando que son portadoras de conocimientos ancestrales que ha prevalecido por muchos siglos, dicho conocimiento está compuesto por un sin número de habilidades de producción y saberes que permiten el desarrollo sustentable y la gestión sostenible de los recursos naturales del territorio. Es así, por ejemplo, como las prácticas agrícolas, se han ido modificando, y adaptando en el tiempo, subsistiendo en condiciones extremas, demostrando una gran capacidad de resistencia y resiliencia a través de los siglos, permitiendo que en la actualidad posean aún, un gran valor en cuanto a la conservación, y adaptación de los recursos genéticos y el mantenimiento de la biodiversidad agrícola en sus diversas áreas; genes, especies, ecosistemas y paisajes. Se analiza también los factores de riesgo que afectan a los SAI, tales como el calentamiento global.

Por último, se realiza un análisis sobre el desarrollo y los cambios en cuanto a los SAI, el marco regulativo de derecho indígena actual y las políticas públicas que permitan impulsar los sistemas alimentarios indígenas de acuerdo a las políticas de carácter internacionales como la FAO. Desde el punto de vista económico, muchos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan Chile se constituyen como pobres, sumado a que viven en entornos rurales marginados, de difícil acceso y expuesto a riesgos. Las economías indígenas, se basan principalmente en la economía de subsistencia, lo que se agrava aún más, puesto que se encuentran en muchos casos con un limitado acceso a la tierra y a los recursos naturales.



Palabras clave

Sistemas Alimentarios Indígenas; Pueblos Indígenas; Etnicidad; Soberanía Alimentaria; Modos de producción.

Introducción y fundamentación del problema

En la actualidad, la producción de alimentos, es uno de los problemas más importantes a nivel mundial, sobre el cual se han creado diversas políticas internacionales que dirijan el curso mundial de la producción de alimento, una de estas es la llamada reforma contra el hambre cero.

La *FAO*, en conjunto con el *Fondo Indígena Internacional*, han reconocido que los *Sistemas Alimentarios Indígenas* son un factor clave en la lucha mundial contra el hambre, reconociendo también que estos sistemas alimentarios forman parte sustantiva de la cosmovisión y forma de vida de los pueblos indígenas del mundo, representando formas de gestión integrales del territorio, en donde confluyen distintos elementos culturales, materiales y simbólicos.

En los últimos años, los pueblos indígenas han logrado una mayor visibilidad, lo cual se ve reflejado en la adquisición de nuevos derechos colectivos y territoriales, lo que ha generado la incorporación de la temática indígena en diversos programas internacionales. como por ejemplo la Organización Mundial de Agricultura *FAO*. De esta misma manera, el conjunto de prácticas y conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas se han ido estableciendo en la actualidad, como una respuesta alternativa a los patrones mundiales de producción y consumo de alimentos, generando una opción de producción más amigable con el medio ambiente. En este sentido, es importante mencionar que el 53% de los cultivos a nivel mundial es realizado por pequeños agricultores, de los cuales un gran porcentaje son indígenas, así mismo, los territorios indígenas tradicionales abarcan, el 22% de la superficie terrestre a nivel mundial, encontrándose en estos territorios el 80 % de la biodiversidad del planeta.

Sin embargo, los *Sistemas Alimentarios Indígenas* (SIE) se encuentran constantemente amenazados por la expansión de prácticas extractivas en la región, así como también la creciente industrialización de la agricultura y la expansión de monocultivos; lo cual no significa solamente la amenaza a los SIE, sino que a las formas de vida, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas en el mundo.



Otro factor de amenaza a los SIE y que ha ido en aumento en los últimos años es el cambio climático, que como ha señalado el *Banco Mundial*, actúa como *multiplicador de las vulnerabilidades existentes* (OIT, 2017, pág. 7). Dentro de estas vulnerabilidades podemos mencionar, la creciente pobreza presente en las comunidades indígenas, la vulneración de derechos, problemas sociales, económicos y ambientales en general. Es necesario poner énfasis a lo que señala la *Organización Mundial del trabajo (OIT)*, en cuanto a que los pueblos indígenas están más propensos y vulnerables a los riesgos producidos por el cambio climático, que el resto de los grupos sociales, lo cual compromete enormemente la integridad y subsistencia de estos mecanismos tradicionales de producción de alimentos, lo que ha ido afectando a las comunidades a un aumento de la *Inseguridad Alimentaria*.

Por otra parte, según un estudio reciente del *Banco Mundial*, el cambio climático y la falta de alimentos podría volver a sumir en la pobreza a aproximadamente 100 millones de personas en el año 2030, es decir, en diez años más, lo cual es una gran amenaza a los logros realizados en los últimos decenios.

Es por esta razón, que se hace necesario fomentar y proteger estos sistemas de producción de alimentos, así como también la promoción y preservación de los conocimientos tradicionales y especializados de los pueblos indígenas, los cuales pueden aportar importantes soluciones regionales a la *Seguridad Alimentaria*, la *Soberanía Alimentaria* y la vulnerabilidad climática de la población.

Marco Conceptual

Comunidades indígenas y sistemas alimentarios, relevancia, significado actual

Los Sistemas Alimentarios Indígenas (SAI) se pueden definir como un conjunto de subsistemas, que engloban en sus análisis, diferentes aspectos de la vida de las comunidades indígenas, tales como las diversas formas de producción de alimentos, la distribución, comercio, consumo, las relaciones con el medio ambiente, los factores de calidad de vida, la cultura y los conocimientos tradicionales.

Investigaciones realizadas en el siglo XX por Leroi-Gourhan, nos demuestran que el estudio de los alimentos se encuentra fuertemente relacionado a la cultura material de los pueblos. Malinowski (1977) (2001), hace lo propio con su estudio sobre las huertas alimentarias de los *trobirandeses*, analizando el fuerte sentido social en la producción de alimentos. Levi-Strauss (1968) (2010), por su parte nos señala el valor cultural que



poseen los alimentos en las sociedades. Ahora, en los estudios contemporáneos podemos encontrar investigaciones como la de Poulain (2002) quien señala que los sistemas alimentarios actuales deben ser entendidos desde la lógica de la mundialización y los movimientos de deslocalización de mercados, los procesos de industrialización y el riesgo, como el cambio climático.

El paso del tiempo, la modernización y la globalización han contribuido a que los aspectos culturales de los *Sistemas Alimentarios Indígenas*, vayan sufriendo adaptaciones o acomodaciones, mediante la introducción de nuevos elementos, el abandono de otros, o bien la fusión de elementos nuevos y antiguos. Uno de los aspectos o elementos culturales en los cuales esto queda de manifiesto es la alimentación.

Existen también otros factores que ponen en riesgo a los *Sistemas Alimentarios Indígenas*, tales como la presión demográfica, los cambios climáticos, la pérdida o cambios en los recursos naturales disponibles en los territorios indígenas, procesos de urbanización y los conflictos socio-territoriales.

Por otra parte, los *Sistemas Alimentarios Indígenas*, poseen una gran importancia, puesto que contribuyen a la mantención y protección de casi un 80% de la biodiversidad del planeta, lo cual demuestra su relevancia en el estudio y el manejo y conservación adecuada de estos sistemas.

Las principales características de los *Sistemas Alimentarios Indígenas* las he dividido en tres grandes grupos para una mejor comprensión:

Sistemas Alimentarios Indígenas		
Socio Cultural: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Tradicional de Conocimientos • Espiritualidad y Cosmovisión • Cultura y Tradiciones • Identidad Social 	Producción: <ul style="list-style-type: none"> • Diversificación de cultivos • Producción de alimentos en condiciones ambientales extremas. • Técnicas de producción y obtención de alimentos 	Medio Ambiente <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación al cambio climático • Sustentabilidad y resiliencia de los sistemas alimentarios • Simbiosis con el entorno • Manejo de recursos y energías

Los sistemas tradicionales de conocimiento indígena, representados en los *SAI* están enfocados en la protección de los ecosistemas; se han adaptado a nivel local a los cambios climáticos y al paso del tiempo, se vinculan estrechamente con la naturaleza; se centran en el respeto y la protección de los recursos naturales, así como también en



su conservación, restauración y el respeto a los ciclos naturales de producción de alimento. Además, las prácticas tradicionales se han desarrollado históricamente como resilientes al cambio climático.

Por otra parte, los alimentos de producción indígena amplían y diversifican la base actual alimentaria de la región, produciendo además seguridad alimentaria, y entregando alimentos altamente nutritivos en zonas amenazadas por el clima; en este caso podemos encontrar los “*súper alimentos*” como la *Quínoa* y la *Moringa*, alimentos que proceden de una base de productividad indígena.

Según datos de la FAO (2018), en los bosques de la amazonia, los ecosistemas que han pasado a manos y administración de los pueblos indígenas han mejorado y aumentado su biodiversidad. En las montañas los pueblos indígenas, han diseñado sistemas agrícolas que protegen el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y revierten el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades indígenas pastoriles gestionan el pastoreo del ganado y el cultivo en forma sostenible lo que permite la conservación de la biodiversidad de los pastizales. Estos son ejemplos del buen manejo medio ambiental que producen los pueblos indígenas junto a sus respectivos Sistemas Alimentarios.

Metodología

En función de los objetivos presentes en este estudio y la forma en que se quiso abordar el objeto de estudio, la investigación se fundamentó bajo un diseño metodológico de carácter cualitativo.

Para el levantamiento de datos, en primer lugar, se utilizó el método de investigación etnográfico, en su variante de investigación participante, para recabar información en los trabajos de campo. Posteriormente se utilizaron entrevistas semi-estructuradas a personas de interés y relevantes en el tema.

Análisis y discusión de datos

Los Sistemas Alimentarios Indígenas (SAI) actuales en Rapa Nui, un ejemplo de estudio

En la región Polinésica y en Rapa Nui específicamente, la alimentación se ha basado históricamente en el cultivo y recolección de tubérculos, frutas, y la pesca. Dentro de los cultivos más tradicionales e importantes podemos encontrar el *Uru* (*Arthocarpus altilis*) o árbol del pan, el camote o *kumara* (*Ipomoea batatas*), el *ñame* o *Uhi* (*Dioscorea*



sp.), el taro (*Colocasia antiquorum*) y plátano o *maika* (*Musa sapientum*). En la actualidad, en Rapa Nui, aún se pueden encontrar cultivos de dichos productos, los cuales además han ido complementando la dieta de los habitantes de la isla con otros productos agrícolas importados, principalmente desde Chile y en segundo lugar desde Tahiti.



Hoy Rapa Nui vive un proceso de revitalización de su cultura, a través del realce depp sus elementos culturales, de esta manera las formas de alimentación y los sistemas alimentarios indígenas, se demuestran como un objeto más, que está presente en el mercado turístico de la isla.

Ahora bien, el *Sistema Alimentario Indígena de Rapa Nui*, está sustentado en diversos elementos culturales que han ido trascendiendo y transformándose en el tiempo. Estos elementos centrales de su cultura, han sobrevivido al paso del tiempo y la historia, dando lugar a distintas formas de producción, de acuerdo a las características propias de la



isla y su clima tan especial, así como también a elementos tradicionales de preparación y consumo de alimentos.

Un aspecto importante que evidenciamos en la investigación, es la creciente influencia del proceso de globalización en la sociedad Rapa Nui, lo cual ha modificado enormemente la gama de alimentos que los locales consumen. De esta misma manera este proceso ha contribuido a que la importación de bienes, y específicamente la importación de comida, genere un proceso en la isla en donde la producción de alimentos es escasa, dejando a la isla en un complicado panorama de “*insustentabilidad alimenticia*”. Sin embargo, Rapa Nui, en su condición de isla posee históricamente una tradición de auto sustentación -la cual puede ser verificada en los relatos y escritos de exploradores- en donde era tradición que existieran abundancia de huertos (*Manavai*) y jardines (*Pu Oka*), así como también la producción de animales domésticos, sin mencionar la pesca, actividad que se realiza hasta estos días de manera intensificada.

Como hemos señalado la globalización, la urbanización y el creciente proceso de comercialización e importación de mercaderías y productos alimenticios, han ido desplazando las actividades agrícolas en la isla, encontrándose en la actualidad solo muy poca población dedicada a la producción agrícola, la que está centrada principalmente en el cultivo de hortalizas, tubérculos y frutales, siendo en este último tiempo la piña, uno de los cultivos más populares en la isla.

En Rapa Nui existen diversos procesos y tipos de agricultura, tales como el monocultivo de piñas, la agricultura intensiva con maquinarias pesada, la agricultura de auto consumo y por último la agricultura tradicional, es esta última en la cual nos enfocaremos en tanto a *Sistema Alimentario Indígena*.

La Agricultura Tradicional en Mana vai y Pu Oka o Jardines de Piedra

Como se ha mencionado anteriormente, en la isla de Rapa Nui se está viviendo un proceso de rescate cultural en cuanto a los sistemas de producción alimentaria indígena tradicional, para lo cual se ha puesto el énfasis en dos sistemas de producción agrícola tradicional, los *Manavai* y los *Pu Oka* o Jardines de Piedra.

Esta revaloración y rescate cultural está siendo dirigido por diversos actores de la comunidad; para este caso pondremos en consideración dos ejemplos, el del *Centro Cultural TOKI* y el del *Liceo Aldea Educativa Hoŋa’a o te Mana*. Se trata de un largo proceso de revitalización de las prácticas ancestrales de producción, específicamente



en cuanto a la agricultura, con la utilización de tecnologías ancestrales, plantas endémicas, medicinales y la recuperación etnobotánica de especies en riesgo de extinción como la *Sophora Toromiro*.

Manavai

Los *Manavai*, corresponden a estructuras cilíndricas construidas con piedras de diversos tamaños y formas. Estas estructuras agrícolas fueron desarrolladas como mecanismos de producción agrícola utilizando solamente piedras, las que conforman uno de los elementos centrales de la cultura Rapa Nui. Podemos suponer bajo la base arqueológica, que la creación de estas estructuras respondió a un mecanismo de adaptación a las condiciones climáticas cambiantes en Rapa Nui, además de su característica de total aislamiento.

Los *Manavai* están formados por distintos tipos de rocas colocadas unas sobre otras hasta crear muros, los cuales alcanzan la altura de entre 1 a 1,5 metros y un diámetro de entre 3 a 9 metros. Dentro se rellena con grava fina en donde posteriormente serán incorporados los cultivos. Estos *Manavai* pueden ser encontrados con facilidad esparcidos por la isla, algunas veces de manera solitaria y en otros casos agrupados hasta en cuarenta de ellos. Muchas de estas estructuras han sido destruidas con el paso del tiempo. Actualmente los isleños han realizado variados proyectos para la recuperación de los *Manavai* y la etnobotánica de la isla.



*Manavai en el Cetro Cultural Toki.
Foto Propia 2019.*



Hoy su finalidad tecnológica es reconocida en cuanto a:

- 1) Mecanismo de protección de los cultivos contra el viento, el cual puede alcanzar en ciertos sectores sobre los 90km/h.
- 2) Mecanismo de protección contra la salinidad del ambiente isleño, la cual afecta negativamente a los cultivos, el sistema *Manavai* permite que la salinidad del ambiente se adhiera a las piedras y no afecte negativamente a las plantas y cultivos.
- 3) Conservador de la humedad, las piedras contribuyen a la preservación de la humedad después de las lluvias.
- 4) Protector de la erosión del suelo, permitiendo estabilidad en los cultivos.

En definitiva, estas estructuras permiten la configuración de condiciones especiales ambientales, generando una especie de microclima que fortalece la producción agrícola. Los *Manavai* representan entonces una importante fuente cultural-histórica para Rapa Nui, puesto que fue una de las principales tecnologías de producción de alimentos en la antigüedad, permitiendo la supervivencia de la población en la isla. En la actualidad los *Manavai* representan una alternativa a los problemas de soberanía y sustentabilidad alimentaria de la isla, puesto que este sistema agrícola entrega una opción a la agricultura moderna, adaptándose aún más a las condiciones especiales tanto climáticas como geográficas de la isla.

Jardines de Piedra Pu Oka

Los *Pu Oka*, corresponden a un *Sistema Alimentario Indígena* ancestral de los Rapa Nui, de características bastantes sencillas, pero con eficientes resultados. Este sistema se basa principalmente en la construcción de un paño agrícola en donde el sustento y sustrato son las piedras y rocas. El proceso de construcción de estos jardines de piedra consistía en primer lugar en la limpieza de una extensión de terreno determinada, el cual posteriormente era recubierto con una capa delgada de piedras pequeñas y sobre ellas piedras de mayor tamaño.



*Jardin de Piedra en el Cetro Cultural Toki.
Fotografía propia 2019*



*Jardin de piedra abandonado.
Fotografía propia 2019.*

El objetivo de generar este sustrato agrícola de piedras es que previene el proceso de percolación y erosión de la tierra, además de generar protección a los cultivos contra el agua, la erosión y el viento. Los cultivos que se desarrollan en los jardines de piedra son más resistentes a las condiciones climáticas de la isla, como las inundaciones, las sequías, los fuertes vientos, grandes problemas producidos como resultados del cambio climático. Es así como las piedras permiten que el proceso de evaporación del agua se vea reducido y se mantenga una, humedad de consideración en las piedras, humedad muy beneficiosa para los cultivos, además de proporcionar temperaturas estables.



Estos cultivos los podríamos comparar con los *bonsai*, ya que siguen el mismo principio general. Es decir, la piedra entrega minerales que enriquecen las plantas, las que crecen pequeñas, pero con alta calidad nutritiva.

Revalorización cultural de los Sistemas Alimentarios Indígenas en Rapa Nui

Un hecho importante, es el proceso de revaloración cultural que se está generando por variados actores en la isla Rapa Nui, la idea es re significar la importancia histórica y cultural que estos sistemas han tenido, pero también reformular estos sistemas alimentarios pensando el importante rol que poseen en la actualidad tanto como un sustento cultural, como también la entrega de valor alimentario a las comunidades Rapa Nui.

Como ya hemos mencionado, Los *Manavai* y Jardines de Piedra o *Pu Oka*, se han configurado como elementos históricos de adaptación de los ancestros Rapa nui al medio ambiente hostil de la isla y al aislamiento, elemento fundamental de la isla.

Proyectos como el de *TOKI* han optado por tecnologizar los Sistemas Alimentarios Indígenas, valiéndose de los conocimientos ancestrales como fundamento, pero incluyendo tecnología y técnicas modernas que permitan un mejoramiento de estos sistemas, conservando su esencia, pero mejorando la producción de alimentos. Es así como el proyecto *TOKI*, ha innovado en la producción de alimentos que antes era muy difícil de cultivar en la isla.

Otro aspecto importante es la labor de difusión y educación que se está realizando en la isla. Proceso que ha sido llevado a cabo por el Liceo Aldea Ecológica y el Centro Cultural TOKI. Ellos se han centrado en vincular a los jóvenes y niños en el conocimiento ancestral de los *Sistemas Alimentarios Indígenas* de la Isla, proceso por el cual se refuerza la identidad cultural de los jóvenes, así como también el desarrollo de conocimientos ancestrales que en generaciones anteriores se habían perdido. Este proceso de difusión ha permitido que muchos jóvenes realicen estos cultivos en muchos casos revitalizando y reutilizando antiguos *Manavai* y *Pu Oka* presentes en sus hogares, pero que hace muchos años habían estado sin uso.



Fotografía Aldea Ecológica.

En este mismo sentido, la arqueóloga Rapa Nui, Dra. Sonia Haoa señala: *“Lo más importante es educar a los niños, empezar con ellos a educar lo que significan estos mecanismos de producción, que de la piedra se pueden obtener alimentos. Que hay que cuidar la erosión, que las piedras cuidan la erosión, que retienen el agua, el suelo, le dan temperatura, le da humedad al suelo. Eso para mí es lo más importante.”*

Con la investigación hemos evidenciado, que la isla se configura como un espacio territorial de gran complejidad, pero a su vez muy frágil en cuanto a las transformaciones mundiales del cambio climático, transformaciones que se ven manifestadas en la isla, como las corrientes frías en el mar, aumento en las marejadas, aumento de residuos plásticos en el océano y en particular para la investigación un significativo aumento en la erosión del suelo y la sequía.

Desde el año 2010, existe una baja en las precipitaciones en la isla, provocando sequía y problemas para la producción agrícola. Es en este sentido, que la revaloración de los Sistemas Alimentarios Indígenas resuena actualmente en el sistema internacional como



una respuesta a los cambios climáticos. Por ejemplo, en el caso particular de la isla, los *Manavai* pueden ser una solución en la producción alimentaria, manteniendo la productividad agrícola incluso ante las adversidades climáticas, puesto que funciona como mecanismo contra la erosión de los suelos, protegiendo los cultivos, además de mantener la humedad los que sería un factor de resistencia contra las sequías.

Estos sistemas alimentarios han ayudado también a producir alimentos propios en la isla, generando una red económica interna que en la actualidad se encuentra muy débil. Además, la producción de los alimentos de carácter “indígenas” ha permitido conservar la base genética propia de la isla y permitir la llegada de los alimentos tradicionales a la mesa de los Rapa nui y al mercado turístico, ampliando y diversificando su espectro de consumo alimentario.

Conclusiones

Como hemos podido evidenciar los *Sistemas Alimentarios Indígenas*, corresponden a una respuesta ancestral indígena a los cambios históricos, con un gran componente de resiliencia, además de ser excelentes herramientas de gestión del medio ambiente.

En la actualidad los *Sistemas Alimentarios Indígenas*, son un componente fundamental en la lucha contra el hambre y la pobreza, además de ser promovedores de prácticas agrícolas sostenibles, que garantizan la soberanía alimentaria de estas comunidades indígenas.

Por otra parte, estos sistemas, se configuran como una fuente importante en el proceso de reproducción cultural de las comunidades indígenas, permitiendo que antiguas tradiciones y formas de producción de alimentos se mantengan vigentes. Es en este sentido, que el poner poco énfasis en la conservación, apoyo y comprensión de estos sistemas, significa en el futuro la pérdida de estos conocimientos ancestrales. Desapareciendo con esto un aspecto importante de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas.

Por lo tanto, uno de los mayores retos presentes en la actualidad, es resguardar estos conocimientos y prácticas de producción ancestrales, generando procesos *intra* y *extra* comunitarios, en que se puedan entregar estas prácticas a las futuras generaciones indígenas, manteniendo y preservando su cultura. Pero también es relevante fortalecer y vincular dichos conocimientos con tecnologías que permitan un mejoramiento de estos sistemas, para que sean provechosos en la actualidad como un mecanismo que ayude a combatir el hambre mundial. En este sentido, la Dra. Sonia Haoa señala, “*Sin duda es*



muy importante revitalizar estos modelos, porque son importantes en la producción de alimentos para la Isla, pero yo creo que no les han sacado provecho a estos, podría servir para ayudar a cualquier lugar del mundo donde pudieran ser adaptados y producir alimentos.”

Es necesario destacar que los proyectos de revalorización de estos sistemas alimentarios impulsados por el centro cultural TOKI y el Liceo Aldea Ecológica, se presentan como dos proyectos de vital importancia en la isla, puesto que son organizaciones de difusión cultural y educativa, entregando el conocimiento ancestral de estos sistemas alimentarios a las nuevas generaciones, permitiendo su preservación y reproducción cultural.

Por último, específicamente con el caso de estudio, podemos mencionar como conclusión que los *Sistemas Alimentarios Rapa nui*, se han configurado como un elemento de resiliencia y adaptación al medio de la isla, en donde los ancestros buscaron en la piedra una respuesta a las necesidades alimentarias de su tiempo. De igual manera, los sistemas de *Manavai* y *Apu Oka*, se presentan actualmente como una respuesta a la débil capacidad productiva de la isla, asegurando de alguna forma la soberanía y sustentabilidad alimentaria que la isla Rapa Nui necesita.

Referencias

- FAO. (2018). *Indigenous Peoples can feed the world*. FAO.
- Levi-Strauss, C. (1968). El triangulo culinario. In C. Levi-Strauss, B. Pingaud, & L. Heusch, *Estructuralismo y Dialectica* (pp. 39-57). Paidós.
- Levi-Strauss, C. (2010). *Mitologías. Lo crudo y lo cocido*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Malinowski, B. (1977). *El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Trobriand*. Editorial Labor.
- Malinowski, B. (2001). *Los argonautas del Pacífico Occidental*. Ediciones Península.
- OIT. (2017). *Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes de cambio*. Ginebra: OIT.
- Poulain, J.-P. (2002). *Sociologías de l'alimentation*. París: PUF.
- Sonderstrom, J. (1937). Some notes on Poi and other preserved vegetables in the Pacific. *Ethnos. The Ethnographical Museum of Sweden*, 235-242.
- Stevenson, C., Wozniak, J., & Haoa, S. (1999). Prehistoric Agricultural Production on Rapanui. *Antiquity*, 801-8012.



Línea Temática 5.

Territorialidades, movimientos sociales y resistencias



Conflitos socioambientais no sapê do norte

Wander Luiz Pereira dos Santos

Resumo

No cenário político e econômico brasileiro pouca atenção é dada às condições de funcionamento das agroindústrias monoculturas, papel e celulose e sucroalcooleira, além de outras atividades econômicas que impactam comunidades tradicionais. Nesse ínterim, inclui-se as comunidades do Sapê do Norte, região etnicamente diferenciada localizada ao norte do Espírito Santo (Brasil), tais comunidades sofrem há décadas com as consequências dos projetos de desenvolvimento, principalmente o plantio de eucalipto, cana de açúcar, seringueira, petróleo e gás que produziram uma série de consequências negativas para essas comunidades: a perda de grande parte do seu território, a violação dos direitos humanos ligados ao acesso aos recursos naturais para manutenção e desenvolvimento de seus modos de vida. A situação que levou a uma série de reações dessa população que, atualmente, luta pela retomada de suas terras e pela garantia dos direitos étnicos e sociais.

Palavras-chave

Projetos de Desenvolvimento Econômico, Comunidades Quilombolas, Conflitos socioambientais territoriais.

Introdução

As narrativas da expansão europeia apresentam uma determinada leitura da ação dos países colonizadores no trabalho “civilizacional” das nominadas *terras selvagens*. Mesmo que o processo colonizar não se tenha dado, necessariamente, contra os nativos, mas também, com os nativos (Russell-Wood, 1999), essas narrativas silenciaram as perspectivas “nativas” dos povos submetidos a esse processo civilizador, processo esse que encontra ecos na política, na economia, na religião e nas ciências, principalmente, nas ciências humanas. O evolucionismo cultural, a economia clássica, o positivismo, e outras formas eurocêntricas de pensamento cindiram o mundo em “contemporâneos” e “atrasados”, Primeiro Mundo e Terceiro Mundo, Norte e Sul; cuja missão dos últimos era perseguir criteriosamente o caminho já percorrido pela Europa ou, no dizer de W. W. Rostow (1961), as etapas de desenvolvimento¹. Essas narrativas homogêneas elidiram a própria condição da Europa como ficção, como afirma Aníbal Quijano (2005) a Europa se auto inventa, inventando a América, sendo a América



concebida como extensão da própria Europa. Na contramão desse pensamento Eurocêntrico e criticando àquilo que pode ser nomeado de Racismo Epistêmico (Quijano) outras narrativas, outras vozes se levantam para pensar e repensar a América Latina, África e Ásia. Outras epistemologias se levantam, calcadas em narrativas polifônicas que incorporando categorias, mitologias e cosmologias, resoluções de conflito, *ethos*, sistemas econômicos, sistemas de pensamento nativos, superam o fundamentalismo das concepções sobre o mundo periférico e apontam novas abordagens, apontam para pressupostos das rebeldias intelectuais nas Américas (Pimental e Santos, 2017).

O trabalho apresenta dados parciais da pesquisa que está andamento na região, que trata dos conflitos socioambientais nas comunidades tradicionais do Território do Sapê do Norte, que consideraremos dentro de uma macro região que definiremos, nesse trabalho, como um território etnicamente diferenciado que se situa no norte do Espírito Santo (Brasil). Essas comunidades sofrem há décadas com os projetos de desenvolvimento econômico, principalmente o plantio de eucalipto, cana-de-açúcar e seringueira, que produziram uma série de graves problemas, por exemplo a perda de grande parte de suas terras, a contaminação do solo e da água, perda da biodiversidade, a violação dos direitos humanos ligados ao acesso aos recursos naturais, o que, por sua vez, dificulta a manutenção e desenvolvimento dos modos de vida dessas comunidades. Como afirma Jó Klanovicz (2013, p. 295), é “preciso levar em conta as dimensões socioeconômicas e culturais dos problemas ambientais, uma vez que as mudanças climáticas ou a poluição, as inundações ou as secas não afetam pessoas, animais e plantas da mesma forma (...) todos têm experiências diferentes no coletivo de humanos e não humanos” .

Um longo e violento processo de espoliação levou essas comunidades a uma série de reações visando a retomada de suas terras e reivindicar seus direitos étnicos e sociais garantidos pelos instrumentos legais². Estamos, portanto, diante de um problema que nasce da intervenção econômica na região, de certa medida gerida pelo Estado, com graves consequências ambientais e territoriais que se complexificam através de uma cadeia de consequências econômicas, fundiárias e culturais sobre grupos que há séculos ocupam a região. Acreditamos que a análise desse cenário possa nos ajudar a perceber as formas como essas dimensões estão imbricadas e como se retroalimentam. Da mesma forma que projetos econômicos alteram a paisagem com o plantio de eucalipto, por exemplo, podemos dizer que as consequências dessa intervenção no plano das formas de vida (*livelihood*) e da coesão étnica dos grupos locais, ao



desagregá-los, acentuam tais consequências ambientais pois interferem em um manejo tradicional do território. Se em um extremo a desterritorialização destes grupos na forma de ausência produz um resultado negativo sobre a sustentabilidade da região a longo prazo, reivindicações territoriais por parte desses mesmos grupos (bem ou mal sucedidas) podem indicar caminhos de recuperação do equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a capacidade de sustentação do mesmo.

Direitos de cidadania e conflitos socioambientais

As mudanças ambientais promovidas pelos Projetos de Desenvolvimento Econômico (PDE) no território do Sapê do Norte³ e sua imbricação com as transformações nas formas de ocupação tradicional das terras pelos grupos identificados como quilombolas, implicam em graus de alterações em sua *livelihood*, práticas e condutas culturais.

No processo de formação da região a maioria das comunidades quilombolas passou por um processo de acampesamento (Almeida, 2002), dedicando-se à agricultura familiar⁴ ao mesmo tempo em que preservaram boa parte dos biomas que ocupam, transformaram suas terras em reservas estratégicas de recursos naturais que viraram, conseqüentemente, alvos da especulação imobiliária. Considerando que a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais passa necessariamente pelo acesso adequado à terra, aos meios de produção e, principalmente, aos recursos naturais, compreendendo que esses não são *commodities*, mas elementos complexos do Patrimônio Cultural que consiste nas formas de manejo e produção das comunidades locais e sua relação com a natureza. Ao compor sistemas de vida, tais recursos naturais extrapolam o valor econômico sendo constitutivos, portanto, de um direito humano (Santos Jr; Santos e Silva, 2018), nesse ínterim a ONU em 28/07/2010 declarou que o acesso a água limpa e adequada ao consumo humano é garantido como Direito Humano fundamental.

Pierre Bourdieu nos mostra que as ações do Estado são permeadas por interesses de Estado (Bourdieu, 2008) que se constituem pela necessidade de criar capital político (retroalimentação de controle e poder), mas também pela necessidade de tutelar grupos diversos (seja devido à sua fragilidade social ou pela necessidade de controlá-los), ou de promover o “desenvolvimento” (para responder às demandas públicas), entre outros. Esses interesses repercutem na formatação das políticas públicas que tem sob seu espectro atores e territorialidades diversas.



Nos Territórios encontramos atores do agronegócio e da indústria que a ele se conecta (fertilizantes, agroquímicos, papel e celulose, açúcar e álcool, etc.); os povos e as comunidades tradicionais (índios, quilombolas, marisqueiros, pescadores, etc.). As políticas públicas inseridas no âmbito das correlações de força nesse ambiente promoverão um reordenamento territorial e socioambiental que determinarão a forma como esses atores se apropriarão do recurso natural e das terras.

Comunidades tradicionais e a territorialidade enquanto a construção da identidade através da identificação com o território

O processo de formação do Brasil com um Estado e seus Governos⁵ através dos ciclos econômicos, se deu, como afirma Arjun Appadurai (2009, pp. 14-15), depois de “exaustivas regras de uniformização educacional e linguística e da subordinação de milhares de tradições locais e regionais”, como na construção de todos os estados nacionais. Contudo, nas fronteiras, nos rincões, nas chapadas, nas matas, nos fundos de pastos, nas encostas, nos manguezais – onde outras dinâmicas sociais operaram, outros atores sociais se constituíram, outras memórias foram acumuladas, outras relações territoriais foram surgindo, enquanto terras eram ocupadas fora dos ciclos de especulação e espoliação, antes que se transformassem em mercadoria. Assim, pescadores tradicionais, marisqueiros, catadores de caranguejo, quebradeiras de coco de babaçu, quilombolas, indígenas, dentro muitos outros grupos, constituíram/constituem sujeitos coletivos que durante séculos foram ignorados e/ou se utilizaram de estratégias de invisibilidade.

Após as lutas, no período de redemocratização, começaram a ganhar visibilidade e espaço nas arenas políticas sob a categoria sociojurídica de *Povos e Comunidades Tradicionais* (Constituição Federal 1988 e Decreto n.º 6.040/07), a legislação é garantidora dos direitos culturais dos povos e comunidades culturalmente diferenciados, pois entende que eles compõem parte significativa do patrimônio material e imaterial brasileiro. Essa categoria é importante pois permite analisar regimes de propriedade, produção e manejo, sentidos de pertencimento, práticas culturais (Little, 2002).

Outro avanço se dá no âmbito do reconhecimento das comunidades negras rurais e urbanas, denominadas remanescentes de quilombos às quais são garantidas a posse coletiva da terra. Desde 2009 as comunidades quilombolas lutam pelo reconhecimento de seus territórios almejando o emissão dos devidos títulos de posse.



No Sapê do Norte o processo da construção de uma identidade/identificação quilombola se dá a partir das lutas sociais que essas comunidades travam desde o período escravocrata, uma memória de escravização, de conflitos e de fugas ainda é viva nas narrativas dos anciãos; nesse contexto é importante salientar que encontramos outros coletivos que compartilham de um passado escravista na América Latina e que atualmente buscam reconhecimento e equidade, como os Cimarrones, Palenques e Garífunas, dentre outros.

As categorias quilombo/quilombola extrapolam a ancestralidade, já que elas fazem parte daquilo que João Pacheco de Oliveira (1998) denomina de processos de emergência de novas identidades étnicas, que é uma categoria de luta política ou, como afirma Frederik Barth (2000, p. 27), “categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores”. Assim são tipos organizacionais, onde o mais interessante é deslocar o olhar para as fronteiras étnicas. Wilson Oliveira (2012, p. 659) complementa dizendo que os quilombos são constituídos com “base em práticas cotidianas de resistência que configurou modos de vida particulares e a existência de uma território próprio”.

A identificação Quilombola é um instrumento político e jurídico na luta dessas comunidades pelos direitos territoriais e culturais. Trata-se de uma luta contra um essencialismo que perpassa o conceito ligado imediata e unicamente ao passado colonial, e contra os estigmas do racismo e do preconceito e contra aquilo que Kabenguele Munanga (1996, p. 215) qualifica de “ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente em seus objetivos” a perpassar as relações sociais no Brasil: o racismo cordial. A identidade quilombola se faz no presente das lutas, concatenando o passado e futuro das comunidades, como afirma Eliane O’Dwyer (2002, p. 14) “qualquer invocação do passado deve corresponder a uma forma atual de existência capaz de realizar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num universo social determinado”.

A resistência é um elemento presente nessas comunidades e a luta pelo reconhecimento se torna ferramenta de superação de opressões, lugar da aurora do empoderamento e da capacidade de reagir. A luta por reivindicação de direitos se dá através de processos de auto-reconhecimento.

Usando a categorização de Almeida (2010a, p. 114), os territórios quilombolas no Sapê do Norte foram formados a partir das Terras de Preto, que “compreende aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem formalização jurídica, por



famílias de ex-escravizados”. Ilka Boaventura (1990, p. 08) explica que “a posse da terra, independentemente de suas origens patrimoniais, se efetiva pelas comunidades negras enquanto sujeito coletivo configurado como grupo étnico. A apropriação coletiva é feita por negros organizados etnicamente como sujeito social”. Para Lúcia Andrade e Girolamo Treccani (2000, p. 596), “o direito dos quilombolas à terra está associado ao direito à preservação de sua cultura e organização social específica. Isso significa que, ao proceder a titulação, o Poder Público deverá fazê-lo respeitando as formas próprias que o grupo utiliza para ocupar a sua terra” conforme preconiza a convenção 169 da OIT.

Desenvolvimento econômico da região através PDEs governo, políticas públicas, empresas.

No cenário político e econômico brasileiro, pouca atenção é dada às condições de funcionamento das agroindústrias monoculturas, caracterizado por um processo predatório que atinge povos e comunidades tradicionais. Essas empresas utilizando-se de Agroestratégias (Almeida, 2010b), entre as quais a promoção de uma ideologia pela qual propalam a visão triunfalista do agronegócio, onde o estoque infinito de terras agricultáveis, e sua capacidade a solucionar todos os problemas de abastecimento de gêneros alimentícios além de melhorar os indicadores da balança comercial e gerar emprego e renda. Segundo Bezerra e Acselrad (2010) trata-se de “um novo modo de funcionamento do sistema [econômico], caracterizado por estratégias territoriais de capitais dotados de mobilidade potencial acrescida”, com poder de chantagem territorial àqueles que se opuserem a esses interesses, *internalizando uma capacidade de desorganizar a sociedade*, evitando a resistência. Essa estratégia ideológica é imbricada no que David Harvey (2013) denomina de acumulação por despossessão ou por espoliação. O autor afirma que os mesmos mecanismos da acumulação original estão presentes, historicamente, em todas as etapas capitalismo. Assim, as ações de desapropriação de terras para o projeto encabeçado pelo Estado utiliza-se do instituto do “Interesse Social”, que acaba entregando-os ao capital internacional. Ou seja, por mais local que seja a luta dos quilombolas e a sua constituição enquanto sujeito coletivo através da luta pela terra e pela preservação de seus recursos naturais, são questões locais situadas em um complexo de ações concatenadas em escala global.

O desenvolvimento, apregoado pelos grandes projetos, antes de ser um conceito é uma mitologia (Latouche, 1998). A construção da ideia de desenvolvimento se confunde com



a própria história do progresso das nações, consubstanciado nas revoluções técnicas e na emergência da ideia de progresso (metafísica ocidental). Nesse sentido, dialeticamente, o desenvolvimento aparece criando o não-desenvolvido e, ainda, o progresso traz consigo a noção de perigo que vai de encontro ao bem-estar. É com essa ascensão da noção de desenvolvimento econômico que emerge a ideia de planejamento, de programação. Surgem assim as doutrinas do desenvolver, a intenção de desenvolver vinculada às agências de Estado.

Gustavo Lins Ribeiro (2008, p. 110) situa o desenvolvimento no campo⁶ do poder, “o campo do desenvolvimento é constituído por atores que representam vários segmentos de populações locais; empresários privados, funcionários e políticos em todos os níveis de governo; pessoal de corporações nacionais, internacionais e transnacionais; e pessoal de organizações internacionais de desenvolvimento”. Os projetos de desenvolvimento econômicos (PDE), ou projetos em grande escala (PGE), são as expressões extremas do desenvolvimento, devido ao tamanho, terras, capital, pessoas envolvidas. Para Andreia Zhouri e Raquel Oliveira (2007, P. 121) “as assimetrias na apropriação social da natureza são geradoras de um má distribuição ecológica e, portanto, originam conflitos ambientais, na medida em que a utilização de um espaço ambiental ocorra em detrimento do uso que outros seguimentos sociais possam fazer uso de seu território”, em um cenário de expansão das fronteiras do desenvolvimento econômico em áreas ocupadas por comunidades tradicionais.

Isso evidencia que, a despeito dos direitos territoriais que os povos e comunidades tradicionais conquistaram no Brasil, novas estratégias de expropriação têm sido engendradas com vista à reestruturação do mercado de terras, tornando-as disponíveis para a especulação no mercado. Essas estratégias não só colidem contra a diversidade dos povos, como também ameaçam a diversidade de espécies animais e vegetais, num processo danoso de monogenetização das espécies e exaurem a fertilidade do solo, expropriam água potável, indiretamente exportada nos produtos (Virtual Water), e assim atentam contra a dignidade dos trabalhadores. São Dramas Desenvolvimentistas (Ribeiro, 2008), tipos complexos de encontros que juntam atores e instituições locais a *outsiders*.

Esse cenário denuncia que essas comunidades estão submetidas a um Colonialismo Interno (Porto-Gonçalo, 2002; Casanova, 2007), definido como uma forma de colonialismo que se dá no terreno econômico, político, social e cultural; uma



ressignificação da lógica colonial e neocolonial que submete populações subalternizadas dentro dos próprios Estados-Nação.

Metodologia

O tema é de caráter interdisciplinar, assim abre a possibilidade de interlocução entre várias correntes teóricas e metodológicas, buscando uma compreensão da natureza sociológica dos conflitos e das disputas por recursos naturais. Quanto à natureza, a pesquisa é do tipo quanti-qualitativa. Segundo nível de interpretação, a pesquisa proposta incorpora aspectos, exploratórios e descritivos, pois envolve etapas de identificação, mensuração e descrição dos fenômenos, em suas múltiplas relações, mas, também, qualifica-se enquanto pesquisa explicativa, pois busca, a partir das evidências apuradas, apresentar contribuições a respeito da forma de organização, ação e reação dos atores sociais necessária para a compreensão da dinâmica social envolvida (GIL, 2008). A pesquisa foi desenvolvida em etapas, cada etapa incorporando recursos e técnicas específicas e distintas, que estão sumarizadas na Tabela 1.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS/ INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS
1) Pesquisa documental para fins de Mapeamento dos atores da pesquisa: das comunidades quilombolas e análise dos; projetos econômicos de expansão econômica com vistas a identificar os conflitos socioambientais que eles (potencialmente) acarretam e a comparar as conjunturas de Estado (ES e União) na distribuição socioespacial desses projetos.	Coleta de informações junto ao INCRA e Fundação Palmares, leitura dos Relatórios Técnicos de Delimitação e Identificação (RTID), EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental)
2) Levantamento do perfil de ocupação de cada um dos territórios quilombolas, buscando perceber congruências e disparidades entre eles.	Etnografia multiator e cartografia social.
3) Identificação e categorização dos atores em disputa/concertação, com vistas a examinar os conflitos pela disputa de recursos hídricos.	Análise das atas de audiências públicas e das Denúncias e Termos de Ajuste de Conduta do Ministério Público. Análise estrutural de redes sociais.

Tabela 1. Etapas e procedimentos de pesquisa

Resultados e discussão

O território do Sapê do Norte possui 35 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares e outras não certificadas dentre as certificadas nenhuma possui o título definitivo de posse coletiva da terra. Essas comunidades somam mais de 3.000 pessoas de se autodeclaram quilombolas, a região é drenada por duas bacias hidrográficas: 1) Bacia do Rio São Mateus; e 2) Bacia do Rio Itaúnas, O interesse capitalista na região se dá a partir da década de 1960⁷ com a lei 5106/1966 que previa



incentivos fiscais para empreendimentos de reflorestamento⁸ e com o decreto-lei 880/1969, editado pelo governador Dias Lopes, que abriu linhas de crédito e incentivos fiscais dando condições para a implantação dos grandes projeto no Espírito Santo, dentre esses a Aracruz Florestal S/A⁸. O critério de escolha dos locais para as florestas plantadas foi informado pela ideologia dos espaços vazios (Martins, 2011) considerava-se que as regiões de Aracruz (sede do empreendimento), São Mateus e Conceição da Barra, como vazios demográficos, o que denota a invisibilidade social das populações ali residentes, consistindo de: indígenas, pescadores artesanais, extrativistas, camponeses, sendo alguns, hoje, autoidentificados como quilombolas. No afã industrialista a ocupação dos espaços vazios se confundia com uma missão civilizadora das “terras selvagens”, nesse mesmo outras ocupações causaram grandes impactos, como a implantação do polo sucroalcooleiro, a construção da BR⁹ 101, e a implantação do parque Petrolífero.

Temos de um lado o interesse empresarial na região e do outro lado os interesses das comunidades quilombolas; na intermediação desses interesses temos o Estado e sua *expertise* agindo de forma ambígua. Para o interesse empresarial há uma diversidade de formas de financiamentos, isenções fiscais, celeridade nos procedimentos de ocupação, para as comunidades a morosidade nos processos de reconhecimento e emissão de títulos, falta de financiamento para a agricultura familiar, falta de acesso às comunidades. A partir deste cenário constatamos na região Conflitos Ambientais Territoriais pois há sobreposição de reivindicações dos diferentes agentes sociais (Laschefski; Zhouri, 2017), essa é a modalidade de conflito é a que mais impacta as comunidades vulnerabilizadas no processo e cujas soluções/mitigações extrapolam os mecanismo da modernização ecológica, do importe de tecnologias, da justiça ambiental ou na melhoria da distribuição dos recursos. Nesse tipo de conflito a resolução passa por todos os anteriores, mas fundamentalmente pela capacidade de organização, resistência e enfrentamento das comunidades frente aos interesses do capital e da ingerência do Estado.



Projeto Econômico	Consequências para as comunidades
Silvicultura (eucalipto e seringa)	disputa por terras, planificação do solo, aterramento de lagos, lagoas e olhos d'água impactando na bacia dos rios São Mateus e Itaúnas, eutrofização, perda da biodiversidade, intoxicação com agrotóxicos.
Sucroalcooleiro	disputa por terras, planificação do solo, aterramento de lagos, lagoas e olhos d'água impactando na bacia dos rios São Mateus e Itaúnas, eutrofização, perda da biodiversidade, intoxicação com agrotóxicos.
Petróleo e Gás	impedimento de plantio e produção de farinha no trajeto do gasoduto Cacimbas-Catu
Logístico (BR 101)	alteração na dinâmica cotidiana das comunidades, Desapropriações e reassentamentos

Tabela 2. Conflitos Ambientais Territoriais no Sapê do Norte

Assim, a falta e consenso o descompasso entre a lógica desenvolvimentista empresarial e a lógica de produção camponesa das comunidades locais, impulsiona o conflito entre os interesses do capital social das empresas e do capital social dos grupos marginalizados (Laschefski; Zhouri, 2019).

Considerações finais

Mesmo em relação desigual, a resistência é um elemento presente nas comunidades do Sapê do Norte. Organizar-se e resistir são elementos de autoafirmação da identidade quilombola e de conquista de um lugar-no-mundo, pois se trata de defender a reprodução de modos tradicionais de vida. Seja por ações no Ministério Público, denúncias nos meios de comunicação, retomadas de terras, protestos, obstrução de vias, dentre outras formas, as comunidades buscam se fazer ouvir. Resistir é tentar garantir identidade, cultura, e territórios, como afirma Zhouri e Oliveira (2007, p. 128) “a dinâmica de defesa do território torna-se, assim, elemento unificador do grupo que articula, então um discurso onde se apresenta como coletividade através da construção do “nós”, categoria pronominal enfatizada” que une e motiva a lutar.

Notas

¹ 5 etapas que tirariam qualquer economia do atraso.

² Constituição Federal de 1988, Convenção 169 OIT, Decreto 6040/2007, dentre outros.

³ A região abarca os municípios de São Mateus e Conceição da Barra no Norte do Espírito Santo, Brasil.



⁴ Produção que é comercializada para as prefeituras da região no escopo do Programa de Alimentação Escola (PAE), no comércio local e para atravessadores.

⁵ O conceito de Governo está pautado não unicamente ao império da lei, mas sim aos dispositivos de saber-poder que são instituídos, uma governamentalidade (Foucault, 2008)

⁶ Conceito de Campo em Bourdieu

⁷ Segundo Zorzal e Silva (2004) e Santos Jr (2013), a partir de 1960 há reestruturação do setor produtivo nos governos militares que resultou em: 1) ampliação da infraestrutura, ampliação das BR 101 e 262, portos de UBU, Tubarão e Barra do Riacho, hidrelétricas Rio Bonito e Suissa; 2) Grandes empresas: COFAVI, CST, Samarco Mineração, Aracruz Florestal S/A, dentre outros.

⁸ Florestas plantadas utilizando Eucalipto, espécie exótica advinda da Austrália.

⁹ Rodovias federais que conectam vários Estados, o transporte terrestre é o principal modal logístico de deslocamento de cargas e pessoas no Brasil.

Referências Bibliográficas

Acselrad, Henri e Bezerra, Gustavo das Neves, (2010) Desregulação, Deslocalização e conflito ambiental: considerações sobre o controle das demandas sociais in *Capitalismo Globalizado e Recursos Naturais*. Rio de Janeiro, ed. Lamparina

Almeida, A. W. B. (2010b) Agroestratégias e desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas dos agronegócios. in *Capitalismo Globalizado e Recursos Naturais*, Rio de Janeiro, ed. Lamparina.

Almeida, A. W. B. De (2010a). Terras tradicionalmente ocupadas: processos de territorialização, movimentos sociais e uso comum. In *Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Brasil rural em debate: coletânea de artigos/ coord. de Nelson Giordano Delgado*. Brasília: CONDRAF/MDA

Andrade, Lúcia, Treccani, Girolamo. (2000) Terras de Quilombo. In: Laranjeira, Raimundo (coord.). *Direito Agrário Brasileiro*. São Paulo: LTR. pp. 595-656.

Appadurai, Arjun. (2009) O medo ao pequeno número : ensaio sobre a geografia da raiva. São Paulo: Iluminuras.

Barth, Fredrik. (1998) Grupos Étnicos e suas fronteiras. In: Poutignat, P. *Teorias da etnicidade*. Tradução de Elcio Fernandes. São Paulo: UNESP.



Bourdieu, Pierre. (2008) Razões práticas sobre a teoria da ação. 9 ed. São Paulo: Papirus, 2008

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988, 05 outubro) Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, recuperado a partir de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Brasil. Decreto n. o 6.040 (2007, 7 fevereiro) Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2007. recuperado a partir de: <https://bit.ly/33SyUTH>

Brasil. Secretaria de Direitos Humanos. Comissão especial de monitoramento de violações do direito humano à alimentação adequada. Relatório Anual da Comissão Especial de Monitoramento de Violação do Direito Humano à Alimentação Adequada (2011 novembro). Brasília, Relatório anual. Brasília. recuperado a partir de: <https://bit.ly/2SOwU8I>

Casanova, Pablo González . Colonialismo interno (uma redefinição). In : *A teoria marxista hoje. Problemas e perspectivas* Boron, Atilio A.; Amadeo, Javier; Gonzalez, Sabrina. 2007 ISBN 978987118367-8

Gil, Antonio Carlos (2008). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas. Harvey, David (2013). Os limites do capital. São Paulo: Boitempo.

Klanovicz, Jó (2013) História ambiental e desastres: encontros entre política, tecnologia e sociedade. História Unisinos, 17(3):293-302, Setembro-Dezembro.

Laschefski, K., Zhouri, A. (2019) Povos indígenas, comunidades tradicionais e meio ambiente, ENANPUR, 2019. mimeo. Recuperado a partir de: <https://bit.ly/3IFf58p>

Latouche, S. (1998) Contribution à l'histoire du concept de développement, Paris, L'harmattan, pp. 41-60.

Leite, Ilka Boaventura. (1990). Terra e territórios de negros no Brasil. Textos e Debates. Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas – USFC ano I, nº 2.

Little, Paul Elliot. (2002) Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. Série Antropologia n.º 2002. Brasília: DAN/UNB, 2002. recuperado a partir de: <http://www.unb.br/ics/dan/Serie322empdf.pdf>.

Munanga, Kabengele. (1996) As facetas de um racismo silencioso. In: Schuwarcz, Lilia Moritz; Queiroz, Renato da Silva (Orgs.). *Raça e diversidade*. São Paulo: Edusp. p. 213-229.

O'dwyer, Eliane Cantarino. (2002) Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro : Editora FGV

Oliveira, João Pacheco de (1998). Uma etnologia dos índios misturados. Revista Mana, v. 4, n.1.



Oliveira, Wilson. (2012) Desigualdades Étnico-raciais: formulações identitárias e lutas por reconhecimento. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*. Vol 21. n 4,. p. 653-676

Quijano, Aníbal. (2009) Colonialidade do poder e classificação social. In: Santos, Boaventura de Sousa; meneses, Maria Paula (Orgs.). *Epistemologias do sul*. Coimbra: Almedina

Ribeiro, Gustavo Lins. (2008) Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento. *NOVOS ESTUDOS CEBRAP* 80. pp. 109-125

Rostow, Walt Whitman (1961). *Etapas do desenvolvimento econômico : um manifesto não comunista*. Rio de Janeiro: Zahar.

Zhour, Andréa, Oliveira, Raquel. (2007) Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas. *Ambiente & Sociedade*. Campinas. V X, n. 2. p. 119-135. jul.-dez.

Zhour, Andréa; Oliveira, Raquel. (2017) Quando o lugar resiste ao espaço: colonialidade, modernidade e processos de territorialização. In: Zhour, Andréa; Laschefski, Klemens (orgs.). *Desenvolvimento e conflitos ambientais*. Belo Horizonte, Editora UFMG.



A definição do espaço rural como local para o desenvolvimento territorial¹

Daltro Cella²

Paula Regina de Jesus Pinsetta Pavarina³

Oriowaldo Queda⁴

Resumen

El desarrollo rural depende de la interacción de la agricultura con otras actividades económicas, como la industria, el comercio, la artesanía y los servicios. Por lo tanto, la agricultura tiene que estar inserta en el contexto del territorio, pues involucra trabajo, preservación de los recursos naturales paisajísticos y del medio ambiente. Así, el territorio es el lugar de interacción entre los actores y sectores proactivos de la economía y donde ocurre la mezcla de actividades económicas, hábitos y culturas. Algunos autores consideran el espacio rural como sinónimo de agricultura o producción primaria, caracterizado por un área de privaciones y de escasez de recursos. Esta imagen simplista contrasta con lo urbano, asociado al desarrollo, al progreso y mejor calidad de vida. No hay una definición universal sobre lo que es rural, ya que el dinamismo de las actividades económicas y la intensidad de la vida social no se concentran solamente en las ciudades. Este trabajo objetiva presentar, basado en la literatura específica, y discutir las diferentes concepciones acerca del concepto de rural en los países de América Latina y de las eventuales consecuencias para la definición de políticas públicas destinadas a la promoción del desarrollo territorial, presentando sus limitaciones. La clasificación de los territorios en rurales y urbanos sigue siendo una importante definición necesaria para describir la geografía de los países y subsidiar a los elaboradores de políticas públicas para las necesidades del local y para orientar a la sociedad en acciones específicas en aquel territorio.

Palabras clave

Territorialidades; desarrollo territorial; desarrollo rural; ruralidades.

Introdução

O objetivo deste trabalho é compreender o que caracteriza o espaço para contribuir a implantação de políticas públicas que levem ao desenvolvimento desse território. Para isso, este estudo buscou na literatura quais são os critérios adotados pelos países e organizações para determinar o que qualifica um espaço territorial como rural e uma área como urbana. Posteriormente discutiu-se a problemática econômica e social



relacionada a este meio no Brasil e no mundo sob as condições de desenvolvimento do território.

O espaço territorial rural é o local onde ocorre a mescla de atividades econômicas, hábitos e culturas. Até o século XX, o espaço rural era tido como sinônimo de agricultura ou produção primária, caracterizado por uma área de privações e de escassez de recursos. Essa imagem contrastava com o urbano, que era associado ao desenvolvimento, ao progresso e a uma melhor qualidade de vida. Essa era uma visão simplista a respeito do conceito de rural, considerando-o apenas como oposto ao modo de vida urbano.

O desenvolvimento rural depende da interação da agricultura com outras atividades econômicas, como a indústria, o comércio, o artesanato, e os serviços. Portanto, a agricultura tem que estar inserida no contexto do território, pois envolve trabalho, preservação dos recursos naturais paisagísticos e do meio ambiente. Assim, o território é o local de interação entre os atores e setores proativos da economia.

De acordo com Kageyama (2008), os critérios mais utilizados para definir área rural são o tamanho da população e a sua densidade. Mas há muitas controvérsias sobre esses critérios simplificados da definição do que é rural. Os aspectos demográficos são necessários, mas não suficientes para essa definição, uma vez que muda muito entre regiões mais densamente povoadas para regiões menos povoadas. Além dos aspectos demográficos devem-se considerar também os elementos econômicos, sociais e culturais.

A menor densidade populacional permite, segundo Abramovay (2000) aos habitantes do território reduzir o sentimento de solidão causado pelo anonimato da vida metropolitana, melhorando e recuperando as relações familiares, comunitárias e de vizinhança. Ou seja, há um aumento no sentimento de pertencimento daquele território. Para Abramovay (2000, p.13) estes valores podem “transformar-se em fontes de desenvolvimento e a geração de renda vai depender tanto da organização dos habitantes e das instituições rurais, como, sobretudo, do tipo de relação que conseguem estabelecer com as cidades”.

Os elementos que definem o que é rural, segundo Kageyama (2008), foram se adaptando com a evolução da sociedade e com a maior ocupação dos territórios pelas propriedades rurais de diferentes tamanhos. A modernização da agricultura por meio da



adoção da tecnologia nos sistemas de produção, associado ao atendimento das demandas da indústria de processamento da produção primária, possibilitou uma maior aproximação cultural entre os habitantes do campo e das cidades, ampliando o entendimento do que é o território rural e urbano. Essa aproximação explica o aumento da interdependência das atividades produtivas e de serviços entre o campo e as cidades.

Em seu trabalho para o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), Abramovay (2000), questiona como a questão demográfica, econômica, política e cultural do meio rural brasileiro seleciona quem nele permanece. Confronta com o que ocorreu nos países capitalistas centrais, onde o meio rural teve participação ativa no desenvolvimento econômico e social destas nações e, seu dinamismo não foi obstáculo à criação de novas vagas de trabalho. Diferentemente do Brasil em que as áreas rurais são aquelas que se encontram fora do limite das cidades e são vistas por parte da sociedade brasileira como um local de atraso nas condições de desenvolvimento. Na América Latina o que deve ocorrer é um esforço procurando entender as relações entre as regiões rurais e as cidades de que dependem, sem considerar o desenvolvimento como algo exclusivo das regiões urbanizadas. A ruralidade é um conceito de natureza territorial e multisetorial onde se devem levar em consideração as economias regionais e a densidade populacional.

Para Kageyama (2004), o espaço rural envolve pluriatividades e multifuncionalidade (funções produtiva, ambiental ecológica e social); e, não há isolamento entre os espaços rurais e urbanos, pois há uma rede que envolve os espaços rurais e urbanos por meio de atividades comerciais, sociais e institucionais.

Segundo Abramovay (2000), o espaço rural é uma forma das pessoas aumentarem sua relação com a natureza; habitar em áreas menos povoadas; e, também um local que pode apresentar uma maior inserção nas dinâmicas urbanas.

Nesse contexto, a agricultura desempenha um papel importante nas dinâmicas regionais aumentando a relação cidade-campo, mercado interno e externo. Assim, o importante é compreender a dinâmica de desenvolvimento de uma região, sem que ocorra um afastamento das interações com as aglomerações urbanas.



As diferentes formas de definir o espaço rural no mundo

Não há uma única forma de definir o que é o espaço rural no mundo, pois os conceitos de rural e urbano são multidimensionais. Às vezes, a densidade populacional é a preocupação determinante, em outros casos é o isolamento geográfico. Outras vezes, o pequeno tamanho da população caracteriza um lugar rural, mas o quão pequeno é o rural?

Analisando a literatura a respeito da densidade populacional e seus impactos nas relações sociais nos Estados Unidos e na França, Abramovay (2000), concluiu que em locais de maior dispersão populacional há limites no aproveitamento de oportunidades e de desenvolvimento. Isso ocorre devido aos baixos indicadores sociais e situações geográficas preocupantes, tais como o envelhecimento da população e a masculinização do território rural. Esta situação de envelhecimento e predominância masculina, também foi observada no Brasil por meio da análise do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, há uma tendência, especialmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, de uma intensificação da migração de famílias de média e alta renda e com maior nível de escolaridade, saírem de centros urbanos para áreas não tão densamente povoadas onde encontram mais segurança e menos transtornos do que em áreas metropolitanas.

Ao analisar o emprego rural não agrícola e a diversidade rural na América Latina, Dirven (2004, p.51), apresenta cinco definições do que é rural: baseada na população máxima da localidade em torno de 2.000 pessoas, que é utilizada pela maioria dos países; pelo número de habitações contíguas (Peru); pelas definições legais (Brasil, Equador, Guatemala, Uruguai); por encontrar-se fora da “cabeceira municipal” (Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Paraguai); e, baseada em “características não rurais” (Costa Rica e Haiti). Nenhum país usa a mesma definição para o que é rural. Segundo Kageyama (2008) todas as definições apresentam a ideia de que rural é uma área de baixa densidade populacional e de grandes distâncias dos núcleos mais urbanizados.

Pesquisando na literatura internacional indicadores para as regiões rurais, Abramovay (2000) levantou que há diferentes maneiras de classificar o espaço rural no mundo: pode ser pela simples delimitação administrativa, sendo urbanas as sedes dos municípios e distritos (Brasil, Equador, Guatemala, El Salvador e República Dominicana); outros países utilizam o critério de ocupação da mão de obra na agricultura como definição do



que é rural, como ocorre no Chile, em Israel e na França; ou, pelo número de habitantes nas sedes municipais (Espanha, Portugal, Itália, Grécia - onde é rural assentamentos humanos contíguos com menos de 10 mil habitantes e tem certo distanciamentos dos centros metropolitanos; e, Argentina, Bolívia, México, Venezuela, Honduras, Nicarágua e Panamá – onde o limite que determina o que é rural varia entre 1.000 e 2.500 habitantes).

Para os europeus, segundo Abramovay (2000), o conceito de ruralidade está cada vez mais ligado à questão da preservação do meio natural, uma vez que, há uma intensificação das políticas e práticas produtivas voltadas à exploração sustentável da biodiversidade. O *Istituto Nazionale di Sociologia Rurale* (INSOR), citado por Storti (2000), classificou o território italiano com base no percentual da “superfície verde” sobre o total da superfície das *comunas* italianas. Este estudo partiu do pressuposto de que o rural se identifica com um ambiente natural em que a “superfície verde” predomina sobre aquela edificada. Além da “superfície verde”, somaram-se as informações sobre densidade populacional para reagrupar as *comunas* italianas em ruralíssimas, rurais, intermediárias e urbanas. Segundo essa nova tipologia de classificação, foi possível concluir que as *comunas* rurais e ruralíssimas cobriam 82,9% das áreas de terras e respondiam por 37,5% da população italiana. Assim, o meio rural deixa de ser um simples espaço produtivo e passa a ter uma importância social cada vez maior do ponto de vista ambiental, recreativo e residencial. Ou seja, há uma redefinição do que é rural, integrando a agricultura e outras atividades econômicas (artesanato, turismo, pequena empresa de fabricação). Para Cazella, Bonnal e Maluf (2009), o espaço rural italiano adquiriu um estilo de desenvolvimento que não se reduz somente as atividades agrícolas, mas a um território plurissetorial estruturado por redes produtivas familiares e profissionais.

Ao realizar um estudo sobre a organização espacial e a densidade populacional das regiões rurais do sul da Ásia, Qadeer (2000) encontrou locais com densidades populacionais comparáveis as áreas metropolitanas ocidentais. Chamou estes locais de alta densidade populacional de “*ruralopolises*”, ou seja, uma fusão de sistemas econômicos e sociais com organizações espaciais metropolitanas. Este trabalho nos fornece uma referência internacionalmente aceita de que se considera área urbana quando se tem uma densidade igual ou superior a 400 hab/Km².



Ocaña-Riola e Sánchez-Cantelejo (2005) buscaram uma definição operacional para área rural por meio da construção de um índice de ruralidade para a Espanha, que não fosse baseado somente no tamanho da população e na densidade demográfica. As variáveis utilizadas para cada município espanhol foram: a densidade populacional; o número de pessoas com mais de 65 anos por 100 habitantes; número de pessoas com idade entre 0-14 anos por 100 habitantes; número de economicamente inativos por 100 pessoas em idade ativa; número de aposentados por 100 habitantes; número de pessoas que trabalham na agricultura, na criação de gado ou pesca por 100 trabalhadores; número de casas em mau estado ou total ruína por 100 casas.

A seleção dessas variáveis por parte de Ocaña-Riola e Sánchez-Cantelejo (2005), foi justificado por serem representativas do conceito de ruralidade na Espanha. Também porque podem ser medidas, quantificadas, serem de fácil acesso e de atualização imediata. O índice foi construído a partir de uma análise fatorial de componentes principais, dando origem a um único fator que está correlacionado ao envelhecimento da população, dependência econômica, agricultura, pecuária ou pesca, habitabilidade de habitação e densidade populacional. O envelhecimento da população e a percentagem de menores de 14 anos foram as variáveis que apresentaram um alto grau de correlação com o fator ruralidade.

Segundo Ocaña-Riola e Sánchez-Cantelejo (2005), na Espanha e na União Européia, a ligação entre rural e agrícola está perdendo terreno para um novo conceito de rural relacionado com as atividades de relaxamento, lazer e ao ar livre. Ao longo dos últimos anos, a proteção do ambiente, o desenvolvimento das zonas naturais e a promoção do turismo rural levaram a sociedade a considerar as zonas rurais como um espaço recreativo e ambiental. Esta nova percepção da área rural como destino turístico e de lazer está trazendo recuperação demográfica, econômica e social em áreas que sofreram severo declínio populacional durante o êxodo rural espanhol da década de 1960.

Todas essas delimitações arbitrárias internacionais do que é rural acabam por refletir tradições históricas e geográficas. Isto dificulta a comparação das informações entre os diferentes países devido à falta de homogeneidade nos critérios de definição do que é rural, especialmente se for considerado o simples critério populacional para essa delimitação, conforme pode ser observado nos trabalho de Veiga (2004) para o Brasil.



Para Veiga (2004), o Brasil é menos urbano do que o IBGE apresenta se levarmos em consideração as recentes metodologias adotadas no primeiro mundo e se avaliarmos os indicadores disponíveis sobre o que é rural para as sociedades mais desenvolvidas. No Brasil, para Veiga (2002), não deveria ser considerado urbano os municípios com menos de 20 mil habitantes. É um critério de classificação simples e objetivo, mas que falha ao determinar como rural os municípios com grande densidade demográfica situados nas grandes regiões metropolitanas do país. Ao levar em consideração esse critério, Veiga (2002) verificou que dentre os 5.507 municípios existentes no Brasil no ano de 2000, 4.024 municípios seriam considerados rurais.

Kageyama (2008, p.39) discorda dessa classificação simplificada realizada por Veiga (2002). Para Kageyama (2008), o ideal é a combinação de critérios envolvendo população e densidade demográfica, como foi feito por uma pesquisa conjunta entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2002) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Segundo Kageyama (2008), com base nos dados do IBGE, IEA e Unicamp, Veiga (2002) classifica de forma equivocada como “urbanos” apenas 455 municípios brasileiros (aglomerações metropolitanas, outras aglomerações e centros urbanos). São classificados como municípios de pequeno porte aqueles que possuem menos de 50 mil habitantes e menos de 80 habitantes por quilômetro quadrado (hab/Km²). Médio porte são aqueles municípios que possuem entre 50 e 100 mil habitantes e mais de 80 hab/Km². Juntos esses dois grupos totalizam 567 municípios, que adicionados aos 455 anteriores totalizam 1.022 municípios urbanos no Brasil.

Critérios predominantes entre os países para a definição de áreas rurais e urbanas

Para os países em desenvolvimento, as áreas rurais são classificadas por Wiggins e Proctor (2001, p. 432) em cinco tipos baseadas em duas variáveis que permitem generalizações úteis a respeito das áreas rurais: abundância de capital natural e pelos custos mais elevados de deslocamentos dos bens e das pessoas. Os custos de movimentações estão diretamente relacionados com a distância da área rural em relação aos centros urbanos. As regiões mais próximas apresentam uma interação mais intensa entre a zona urbana e a rural (zona peri-urbana), permitindo o deslocamento diário das pessoas de uma zona para outra. As áreas rurais mais distantes (rural remoto) não apresentam infraestrutura adequada, há dificuldades nos deslocamentos e conseqüentemente os custos para os fluxos de pessoas e bens são mais elevados. Outra forma de diferenciar as áreas rurais em países em desenvolvimento é a



quantidade e qualidade de seus recursos naturais, que podem estimular o desenvolvimento e/ou atraso da área rural. Normalmente, a dotação dos recursos naturais disponíveis trazem vantagens comparativas para o crescimento econômico da região.

A maioria dos países latino americanos utiliza-se de dois critérios: divisão política-administrativa e tamanho da população. A divisão-política administrativa é um critério legal porque o perímetro urbano é delimitado por meio da legislação, e por exclusão do território urbano determina-se o espaço rural, como é o caso brasileiro. O outro critério classificatório utilizado é o tamanho da população de uma localidade, que aparece em países como a Argentina e o México (IBGE, 2017).

Outros países adotam mais de um critério para definição do que é área rural ou urbana, como é o caso da Austrália (utiliza a densidade demográfica, a oferta de serviços e aglomerações de habitações); Chile (tamanho da população e participação da agricultura); Cuba, Honduras, Nicarágua e Panamá (se valem do tamanho da população e oferta de serviços); e, Uruguai (utiliza a oferta de serviços e a divisão administrativa). Somente o Chile utiliza a participação da agricultura como critério para a definição do território em urbano ou rural (IBGE, 2017).

Os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Europeia costumam usar a densidade demográfica como critério para classificar as áreas rurais e urbanas. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2011), classificou o território de seus países membros em regiões predominantemente rurais, intermediárias e predominantemente urbanas com base na porcentagem de população que vive em unidades rurais locais. A base de dados metropolitana identificou a existência de 1.200 áreas urbanas (com uma população de 50.000 ou mais habitantes) em mais de 30 países da OCDE⁵. Em 2014, dois terços da população urbana da OCDE viviam em cidades com mais de 50.000 habitantes⁶. Quase metade da população total da OCDE (48,2%) vivia em regiões predominantemente urbanas, o que representava cerca de 6% da área total. Foram consideradas localidades rurais aquelas que apresentam uma densidade populacional inferior a 150 hab/Km² (exceto o Japão e Coréia que é de 500 hab/Km²). Dessa forma, em 2014, as regiões rurais representavam um quarto (25,1%) da população da OCDE e viviam em espaços rurais que cobrem 83% da área terrestre⁷.



O quarto restante da população da OCDE (26%) vive nas regiões de categoria intermediária que são chamadas de significativamente ou relativamente rurais. Em todas as três tipos de regiões (urbana, intermediária, rural) encontram-se comunidades rurais e urbanas, só que em diferentes graus. Dessa forma, a OCDE (2011) utiliza uma tricotomia a nível microrregional formada por áreas essencialmente urbanas, essencialmente rurais e uma área ambivalente ou intermediária.

A principal característica da metodologia proposta pela OCDE (2011) é que ela cobre todos os territórios dos países estudados e não apenas suas áreas rurais. Essa metodologia de classificação permite organizar os dados em dois níveis hierárquicos: em unidades locais e a nível regional. Ao realizar essa classificação, é possível estabelecer um critério do que é rural e urbano e assim, ampliam-se as condições de analisar a dimensão territorial do desenvolvimento e suas consequências sobre as políticas públicas.

Para a OCDE (2011), localmente as pequenas unidades administrativas podem ser urbanas ou rurais de acordo com sua densidade populacional. Sendo rural quando a densidade populacional for inferior a 150 hab/Km². O critério de densidade demográfica apresenta como vantagens: a sua fácil operacionalização e compreensão; as áreas rurais sempre serão caracterizadas por apresentar menor densidade habitacional; a densidade populacional é um critério neutro desvinculando a ruralidade da pobreza e do despovoamento.

Regionalmente, segundo a OCDE (2011), basta agregar as unidades locais e classificar a região como predominantemente urbana, intermediária ou predominantemente rural usando a porcentagem da população que vive em unidades locais rurais. Dessa forma, as regiões são classificadas em: predominantemente urbanas (se a participação da população que vive em unidades locais rurais for inferior a 15%); intermediárias (se a participação da população que vive em unidades locais rurais estiver entre 15% e 50%); predominantemente rural (se a participação da população que vive em unidades locais rurais é superior a 50%).

A OCDE (2011) também realiza uma classificação secundária das regiões levando em consideração a presença ou não de centros urbanos. Uma região predominantemente rural torna-se intermediária se contiver um centro urbano de mais de 200.000 habitantes (500.000 para o Japão e a Coréia) representando pelo menos 25% da população regional. Uma região intermediária torna-se predominantemente urbana se contiver um



centro urbano com mais de 500.000 habitantes (1.000.000 para o Japão e a Coréia) representando pelo menos 25% da população regional.

O trabalho da OCDE (2011) apresenta uma preocupação recorrente para todos aqueles que lidam com o planejamento do território, que é criar uma definição de rural e urbano por meio de critérios ou indicadores (demográficos e sociais) que permitam analisar diferentes espaços em bases homogêneas.

De acordo com o IBGE (2017), houve um esforço nas últimas décadas para o estabelecimento de critérios padrões para a delimitação de áreas rurais e urbanas em escala global e regional. Mas não foi possível essa homogeneização devido à falta de informações a respeito dos territórios dos diferentes países do mundo.

O que é rural ou urbano para o Brasil

Para determinar o que é rural e urbano no Brasil, Veiga (2004), utilizou-se das estatísticas demográficas e procurou entender porque ainda existe essa contradição urbano-rural no Brasil no início do século XXI. Os indicadores demográficos que mais confirmam a atualidade da dicotomia rural e urbano é o número de homens serem persistentemente maior ao número de mulheres e a fertilidade entre as mulheres ser superior nas regiões rurais do Brasil. No entanto, para Veiga (2004) a maior fertilidade entre as mulheres e a predominância masculina não são razões suficientes para se pensar que esta seja a principal fronteira espacial entre o urbano e o rural.

Segundo Veiga (2004), o conceito brasileiro de urbano como sendo toda a área sede município (cidade) e de distrito (vila), independente de suas características estruturais ou funcionais, é uma forma simples e equivocada de classificação que deixa o Brasil com 81,2% de urbanização. Para o autor, devem ser estabelecidos critérios mais objetivos e assertivos de classificação em urbano e rural. Um critério seria adotar o número de habitantes, a densidade demográfica e a localização do município analisado, que pode ser próximo a regiões metropolitanas e outras aglomerações urbanas regionais.

Partindo desses critérios (população, densidade e localização) o desafio foi classificar a população dos 5.507 municípios brasileiros pesquisados pelo Censo de 2000. Como apoio para seu trabalho, Veiga (2004) adotou como urbana a população da pesquisa apresentada na *Série Caracterização e Tendência da Rede Urbana do Brasil (1999 e 2002)* desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Instituto



Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)/ Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional (Nesur) onde foram identificados 455 municípios (12 aglomerações metropolitanas, 37 demais aglomerações e 77 centros urbanos) urbanos e que representavam 57% da população do Brasil no ano de 2000.

O desafio era classificar os 5.052 municípios que não foram englobados pelas aglomerações urbanas da *Série Caracterização e Tendência da Rede Urbana do Brasil (1999 e 2002)*. Para resolver este problema, Veiga (2004) utilizou como critério decisivo a densidade demográfica⁸. Veiga (2004) estabeleceu que uma densidade de 80 hab/Km² como o limite em que um território deixaria de pertencer a categoria rural e passaria a categoria de urbano. Essa densidade de 80 hab/Km² justifica-se pela observação da evolução da densidade demográfica conforme diminui o tamanho da população do município. Segundo Veiga (2004),

enquanto nos municípios com mais de 100 mil habitantes, considerados centros urbanos pela citada pesquisa Ipea/IBGE//Unicamp, a densidade média é superior a 80 hab/Km², na classe imediatamente inferior (entre 75 e 100 mil habitantes) ela desaba para menos de 20 hab/km². Fenômeno semelhante ocorre entre as classes superior e inferior a 50 mil habitantes (50-75 mil e 20-50 mil), quando a densidade média torna a cair, desta vez para 10 hab/Km². (Veiga, p. 79, 2004).

Assim, Veiga (2004) considerou município de pequeno porte os municípios que apresentaram menos que 50.000 habitantes e menos que 80 hab/Km²; e de médio porte aqueles municípios entre 50 e 100 mil habitantes cuja densidade seja maior que 80 hab/Km², mesmo que tenham uma população inferior a 50 mil habitantes.

Por meio da análise desses resultados foi que Veiga (2004) concluiu que o Brasil rural é formado por 80% dos municípios brasileiros, nos quais reside 30% da população brasileira. Também foi possível constatar que 13% da população brasileira que vive em 10% dos municípios não se enquadra como essencialmente urbano e nem essencialmente rural. Portanto, o Brasil urbano é constituído por 455 municípios. Os demais 4.485 municípios do Brasil rural são vilarejos e as sedes dos 567 municípios intermédios são vilas, que poderão se transformar em cidades.

Dessa forma, Veiga (2004) separou os municípios brasileiros em cinco grupos: três grupos (aglomerações metropolitanas; demais aglomerações; centros urbanos) constituintes da rede urbana do Ipea/IBGE/Unicamp e os outros municípios foram



separados em dois grupos pelos critérios de localização, tamanho e densidade em “ambivalentes” e “rurais”. Por meio desse critério, Veiga (2004) estimou que em média 4.502 sedes de municípios brasileiros são “cidades imaginárias”⁹, por não apresentarem indicadores de serviços urbanos, alguns essenciais.

Outro critério utilizado por Veiga (2004) foi à análise da distribuição populacional das microrregiões. Para tanto, utilizou-se o critério da densidade demográfica (80 hab/Km²) para classificar as microrregiões de governo brasileiras. Constatou que das 558 microrregiões brasileiras: 388 apresentam menos que 80 hab/Km² e 32 apresentam mais de 80 hab/Km². As demais microrregiões foram classificadas em metropolitanas (22) e não-metropolitanas (41). As 32 microrregiões com mais de 80 hab/Km² apresentam um significativo grau de urbanização, mesmo sem a presença de um município com mais de 100 mil habitantes como se utilizou o Ipea/IBGE/Nesur-IE/Unicamp para definir o que é um centro urbano.

Para refinar mais ainda o que é rural e o que é urbano no Brasil, Veiga (2004), agrupou os cinco tipos de microrregiões em três grandes categorias: microrregiões marcadas por aglomerações urbanas (metropolitanas e não-metropolitanas); microrregiões significativamente urbanizadas (com centros urbanos ou com mais de 80 hab/Km²); e, microrregiões predominantemente rurais (sem aglomerações, sem centro urbano e com menos de 80 hab/Km²). Das 558 microrregiões brasileiras: 388 apresentaram-se como predominantemente rurais (30,9% da população brasileira); 107 como significativamente urbanizadas (20,1% da população brasileira); e, 63 marcadas por aglomerações (63% da população brasileira).

Assim, Veiga (2004) conclui que o peso relativo da população rural no Brasil, no ano de 2000, era de aproximadamente 30% ou o equivalente aos 4.500 municípios que não dispõem de funções que indicam grau de urbanização. Ficou demonstrado pelas duas metodologias, a de análise municipal e pela de microrregiões, que o Brasil apresenta 30% de sua população rural.

Por meio de suas observações e configurações, Veiga (2004) comprovou que no Brasil 50% da população brasileira é urbana; 20% é ambivalente; e, 30% é rural. E, o mundo rural brasileiro está constituído por aproximadamente 80% dos municípios, 70% das microrregiões, 60% do território nacional e por 30% da população do país.



Considerações Finais

Por meio da revisão realizada por este trabalho foi possível apresentar quais os critérios o mundo e o Brasil utiliza para definir o que é o território rural. Os trabalhos da OCDE (2011) procurou pensar o espaço rural como um local para o desenvolvimento social. Em todos esses estudos houve a preocupação em elaborar uma definição espacial para o que é rural e urbano e não apenas setorial. Os resultados desses trabalhos mostram que há uma preocupação em detalhar melhor os espaços e, isso resultou numa reclassificação do rural nos EUA, na França e em alguns países membros da OCDE. Esses trabalhos destacam a importância das cidades rurais e a integração dos diferentes setores econômicos para o desenvolvimento do território. Também se torna difícil estabelecer um padrão de classificação para o que é rural, devido à grande diversidade que é característica desse espaço territorial.

O desenvolvimento rural tem que ser concebido de forma mais intensa no espaço territorial por meio de uma maior integração entre a agricultura e as atividades econômicas urbanas (indústria, comércio, serviços). Devem-se criar condições para que os habitantes daquele espaço territorial passem a valorizar mais a diversidade de atividades e mercados possíveis de serem constituídos de forma integrada. Para que isso aconteça, pressupõe-se a aprovação de políticas públicas que estimulem projetos que valorizam o local dentro de um processo de desenvolvimento econômico e social. Nos EUA, Itália e França e nos países desenvolvidos da OCDE, os empregos agrícolas estão em declínio, mas quando analisados os domicílios rurais constatou-se que mais de 90% dos domicílios não são unidades de produção agropecuária. Ou seja, a maioria dos empregos de quem mora no meio rural está em outros setores da economia, como o industrial e de serviços (OCDE,

2011).

Na maioria dos países pobres e/ou em desenvolvimento, as estatísticas nacionais definem o rural como oposição, complemento ou resíduo do urbano. Para o Brasil, o problema de classificação do que é rural e urbano sofre influências desde 1938, onde se definiu “cidade” como a sede do município, e, ainda possibilita-se aos municípios determinar o que é rural e urbano pela Lei do Perímetro Urbano Municipal. A consequência de a liberdade dos municípios determinarem o que é urbano causou um exagero sobre o grau de urbanização dos territórios, sendo considerados urbanas todas as sedes municipais, distritos e vilas (Kageyama, 2008).



O Brasil é uma nação em que tantas pessoas vivem em áreas que não são claramente rurais ou urbanas. Mudanças aparentemente pequenas na forma como as áreas rurais são definidas podem ter grandes impactos sobre quem e o que são considerados rurais. Os pesquisadores e os formuladores de políticas públicas compartilham a tarefa de escolher adequadamente entre as definições rurais alternativas atualmente disponíveis ou criar suas próprias definições do que é rural e não rural, para assim, obterem uma melhor eficácia nas políticas públicas de desenvolvimento do território (Veiga, 2004).

O crescimento dos centros urbanos não leva necessariamente a uma melhor distribuição de renda e a redução do nível de pobreza da população que neles vivem. Nesse aspecto, o espaço rural permite uma série de oportunidades de geração de renda (produção primária, processamento dos produtos, serviços e comércio) capazes de promover uma maior integração das populações e a um custo de investimento menor que o setor industrial. Transformar essa possibilidade de melhorias nas condições de vida das pessoas desse espaço territorial em realidade passa pelo processo de valorização do meio rural através de políticas públicas que favoreçam a um maior entrelaçamento do rural com o urbano (Abramovay, 1999).

Notas

¹ Version anterior de: Cella, D.; Queda, O.; Ferrante, V.L.S.B. (2019). A definição do espaço rural como local para o desenvolvimento territorial. *Revista Retratos de Assentamentos*, 22 (1), 69-91.

² Doctor en Desarrollo Territorial y Medio Ambiente en la Universidad de Araraquara (Uniará) y profesor en la Facultad de Tecnología de Catanduva/SP. E-mail: daltro_cella@yahoo.com.br

³ PhD Profesor del curso de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal Paulista (Unesp - Campus de Franca/SP). E-mail: paula_pavarina@yahoo.com.br

⁴ PhD Profesor de PPG en Desarrollo Territorial y Medio Ambiente en la Universidad de Araraquara (Uniará). E-mail: oqueda@usp.br

⁵ Países membros da OCDE em 2011: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República da Eslováquia, República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia.



⁶ No entanto, a experiência urbana é muito diferente de país para país. Na Coreia, 83% da população nacional estavam concentradas nas cidades (mais de 45 milhões de pessoas).

⁷Essas participações variam conforme o país considerado. Na Irlanda, Finlândia e Eslovênia, a participação da população nacional nas regiões rurais foi duas vezes maior que a média da OCDE.

⁸ Segundo Veiga (2004), a densidade demográfica é o melhor indicador para demonstrar as modificações promovidas pelo homem no ambiente natural. Ou seja, a “pressão antrópica” e o grau de artificialização dos ecossistemas.

⁹ Veiga (2004) classificou 4.502 sedes de municípios como “cidades imaginárias” por não disporem das seguintes funções urbanas: sem serviço de esgotamento sanitário terceirizado; sem manutenção e estradas e vias terceirizadas; sem varredura de ruas e limpeza terceirizada; sem museu; sem plano diretor; sem guarda municipal; sem teatro ou casa de espetáculo; sem IPTU progressivo; sem instituição de ensino superior; sem estação de Rádio AM; sem coleta de lixo domiciliar terceirizada; sem provedor de internet; sem lei de zoneamento ou equivalente; sem página na internet.

Referências

Abramovay, R. (1999). Agricultura familiar e desenvolvimento territorial. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária. 28 (1), 1-21.

Abramovay, R. (2000). Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento contemporâneo. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 702 (1), 1-37.

Cazella, A. A.; Bonnal, P.; Maluf, R.S. (2009). Multifuncionalidade da agricultura familiar no Brasil e o enfoque da pesquisa. Rio de Janeiro: Mauad.

Dirven, M. (2004). El empleo rural no agrícola y la diversidad rural en América Latina. Revista de la CEPAL. 83, 49-69.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2010). Atlas do Censo Demográfico de 2010. Recuperado em 12 outubro, 2017, de <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2017). Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil: uma primeira aproximação. Recuperado em 15 setembro, 2019, de https://www.ibge.gov.br/apps/rural_urbano/

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). (2002). Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil. Recuperado em 15 de setembro, 2019, de <https://bit.ly/3IBIVf6>



Kageyama, A. (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, 21 (3), 379-408.

Kageyama, A. (2008). *Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro*. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

Ocaña-Riola, R.; Sánchez-Cantelejo, C. (2005). Rurality Index for small áreas in Spain. *Social Indicators Research*, 73, 247-266.

Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE). (2011). OCDE regional typology. Directorate for Public Governance and Territorial Development. Recuperado em 2 outubro, 2017, de <https://bit.ly/2SU7Lcx>

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). Territorial Grids of OECD Member Countries. Directorate of Public Governance and Territorial Development. Recuperado em 2 outubro, 2017, de <https://bit.ly/2GPjsyY>

Qadeer, M. A. (2000). Ruralopolises: The Spatial Organization and Residential Land Economy of High-density Rural Regions in South Asia. *Urban Studies*, 37 (9), 1583-1603.

Storti, D. (2000). Tipologie di aree rural in Italia. Roma: Studi & Ricerche Istituto Nazionale di Economia Agrária (INEA). 1, 1-175.

Veiga, J.E. (2002). *Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula*. Campinas: Autores Associados.

Veiga, J.E. (2004). A dimensão rural do Brasil. *Estudos Sociedade e Agricultura*, 12 (1), 71-94.

Wiggins, S.; Proctor, S. (2001). How special are rural áreas? The economic implications of location for rural. *Development Policy Review*, 19 (4), 427-436.



Capitalismo en el Istmo de Tehuantepec: Vulnerabilidad social y sustitución forzada

Agustín Raymundo Vázquez García

Resumen

La transición energética en México, tomando como caso de estudio, la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, está convirtiendo los usos del territorio a la lógica del capital. Esto se explica en parte porque la toma de decisiones de la población de la región es realizada en un marco de crisis del campo, y choques de la naturaleza (fenómeno del niño, sismos, y sequías) que generan incertidumbre en la capacidad de generar excedente. Esa elección interpretada como una sustitución forzada por parte de los pobladores de la región involucrados en los contratos, ha implicado la contracción del uso del territorio con el criterio de la comunidad. Todo el proceso que ocurre en la región desde el 2006, año de la construcción del primer parque eólico, y la recién propuesta del mega proyecto “corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, hecha por el actual gobierno de la autodenominada 4T, es interpretado en los términos de expansión de la economía restringida, mientras la resistencia como parte de la persistencia de la economía general. Dicha diada fue formulada por G. Bataille.

Palabras claves

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, territorio, excedente, vulnerabilidad social, Bataille.

Introducción

Este documento tiene por objeto de análisis el territorio del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, receptáculo desde el año 2006 de inversiones capitalistas que marcan la transición energética en México, pero también de algunos de los efectos del cambio climático global, resultado de la concepción capitalista sobre la naturaleza y los ritmos de su explotación.

Postulamos que fenómenos en la región como “El niño” y las prolongadas sequías, reducen la capacidad de generación del excedente, a partir de las prácticas no capitalistas que prevalecen en la región, alterando con ello, el marco de elección de los pobladores, forzándolos a conceder parte de su territorio a través de la figura contractual del arrendamiento con quienes utilizan la lógica de acumular excedentes de energía



para aumentar el excedente global apropiado, y generado en el conjunto del circuito económico, en las condiciones de explotación laboral.

Retomando el análisis de Bataille, planteo que la transición energética, tal y como opera con el respaldo legal del Estado mexicano y expresado en la reforma energética, está ampliando el territorio de la región concebido con el criterio de la economía restringida, que convierte a la decisión individual y colectiva con el paraguas de la utilidad obtenido por medio del cálculo costo-beneficio, lo que implica la reducción del potencial de la economía general, que usa el excedente para hacer persistir y ampliar la noción de comunidad.

El documento está organizado de la siguiente manera. En la primera sección, presentamos una breve historia de la categoría excedente cuyos usos representan para Bataille la configuración de la economía restringida *versus* la economía general con el correlato respecto a la soberanía, analizada ésta desde el ámbito individual, y no así la convencional que la discute en términos de los estados-nación. En la segunda sección, condenso los principales aspectos de la transición energética operada por el capital, así como las variadas respuestas de los pobladores, que en su mayoría hacen parte de la civilización mesoamericana. En la tercera sección se encuentran las reflexiones finales.

Excedente

El excedente es la categoría fundante de la reina de las ciencias sociales: la economía. El descubrimiento de tal categoría, data del siglo XIX, y se encuentra presente en todo el cuerpo teórico de las obras de autores como Adam Smith y David Ricardo, quienes con ella y desde ella, ofrecen marcos explicativos de la generación de riqueza, y la distribución del excedente entre las distintas clases sociales.

Sin embargo, el ascenso del marginalismo al interior de la práctica de los economistas, nombrados en la actualidad como neoclásicos, ocurrido a finales del siglo XIX, desplazó el enfoque teórico de los padres fundadores de la disciplina, poniendo en su lugar el criterio de asignación óptima de los recursos a través de la igualdad de la unidad adicional producida con el costo adicional como el precio de equilibrio; y lo mismo en el caso del pago de los factores productivos, diluyendo de esa manera al excedente como categoría central del análisis de las condiciones de reproducción material de las sociedades.



Una de las principales implicaciones de tal suceso, consistió en explicar el funcionamiento de la economía, partiendo de la decisión del individuo, quien es representado asistiendo al mercado para obtener lo más que puede alcanzar acorde a su restricción presupuestaria. Si cada uno toma decisiones respetando esa regla, el resultado social consiste en la asignación óptima de los recursos, proyectándose de esa manera la armonía social.

Esta idea fue utilizada para desmontar la macroeconomía keynesiana en la década de los setenta. Sobre todo, la denominada escuela de Chicago, encabezada por Milton Friedman y Gary Becker, iniciarán la micro-fundamentación de la macroeconomía, descartando de esa manera la legitimidad de la existencia independiente de la dimensión macroeconómica.

Ahora impera en el razonamiento la prevalencia de la escasez relativa, y no la escasez o abundancia absoluta, desechándose de esa manera, el conflicto social, que surge con las formas de generar y distribuir el excedente, por lo que la ocurrencia de tal conflictividad es interpretada como una desviación o anormalidad en la reproducción de la sociedad.

Una de las posibles explicaciones de la expulsión de la categoría fundante de la economía como disciplina científica, posiblemente es la dificultad de cuantificar el excedente. Al menos eso es posible inferir cuando seguimos a quienes desde una vertiente marxista, intentaron posicionar dicha categoría en el centro del análisis, aplicándolo como exposición del proceso económico, social y político, surgido con la II Guerra Mundial. Destacan los nombres de Paul Baran, Paul Sweezy, y Charles Bettelheim, autores principales de tal proyecto de investigación, y activos participantes de los debates y acontecimientos de la historia, sobre todo de la década de los sesenta del siglo XX.

En una veta distinta, pero reconociendo tal dificultad, el antropólogo Harry Pearson (1976), explica que el excedente como categoría de análisis social y del desarrollo como faro de las sociedades, resulta problemático, ya que su definición implica consensuar las necesidades de reproducción de los miembros de la sociedad. Plantea que existen al menos dos criterios para cuantificar las necesidades.

El primer criterio corresponde al uso de las calorías mínimas que requiere un ser humano para reproducirse. Es un criterio de carácter fisiológico que denota la existencia



de un excedente cuantitativo en términos absolutos, pero que desplaza a la historia. El segundo criterio, incorpora el componente moral-histórico de las necesidades, presentada de manera actualizada desde el punto de vista temporal, aunque relativiza espacialmente tal categoría.

Si bien el criterio para medir las necesidades con base en el componente moral-histórico resulta superior a la medida fisiológica, representa al mismo tiempo un desafío o problema para quienes perfilan el desarrollo como una medida cuantitativa de carácter universal.

Por ello, el antropólogo expresa que el excedente como tal no existe, ya que utilizar el segundo de los criterios es consistente con el carácter histórico de las ciencias sociales, pero resulta al mismo tiempo en la pérdida de univocidad del criterio para exponer la relación subdesarrollo-desarrollo.

Desde una matriz de pensamiento distinta, el intelectual francés George Bataille, hace muchas décadas, justo cuando se estaba desechando la categoría del excedente como parte de la práctica teórica de los economistas, expuso en algunas de sus principales obras, como *La parte maldita* y *Lo que entiendo por soberanía*, la importancia para el análisis social de estudiar los usos que la sociedad le otorga al excedente generado.

A partir de ese posicionamiento, revela los cortes profundos que han existido dentro de la larga historia de la humanidad, la distinción entre lo sagrado y lo profano, y asimismo la corriente subterránea que acompaña a la humanidad vista desde lo inútil y el derroche, o simplemente el goce.

El destino del excedente es el centro neurálgico de su postura para identificar las prácticas históricas y espaciales de la reproducción social. Concibe a las sociedades antiguas (tomando como ejemplo aquella civilización azteca durante su época de resplandor) como fuente de dilapidación del excedente en la que encuentra con los actos de sacrificio, reconocimiento a los dioses por proveer las posibilidades de obtener dicho excedente.

Hay en esa práctica teórica, un engarce con aquella auscultación de la historia realizada desde los modos de intercambio, aproximando a las sociedades antiguas, como la civilización Azteca, al modo de intercambio basado en la reciprocidad, como parte de la tipología más amplia donde el intercambio además está regido por el criterio de la



redistribución y/o del mercado; visión presente en la obra de Mauss, y expuesta también por Karl Polanyi, llegando hasta nuestros días como fundamento de la construcción de una sociología no utilitarista. (Caillé: 2010)

Este reconocimiento de prácticas variadas registradas a lo largo de la historia de la humanidad, como resultado del estudio de los usos del excedente, conlleva a la perspectiva de existencia de una especie de economía general, en la que Bataille resulta ser un promotor de la contra economía (Campillo: 2010); combate aquella economía, cuyo excedente es destinado hacia la acumulación, y con la conformación social pleno de un mecanismo, deriva en la permanente búsqueda de expansión y acumulación del excedente en la totalidad.

Sabemos que Marx expone el origen del excedente, a partir del trabajo impago apropiado por el propietario de los medios de producción, luego reinvertido una gran proporción de este trabajo, una vez realizado en forma de ganancia, con el objetivo de proseguir acrecentando el excedente generado.

Si bien Bataille, no dice mucho respecto a los modos de generar el excedente, sí es relevante aquella reflexión en la que el uso del excedente le permite expresar el surgimiento del capitalismo, adquiriendo en sus propios términos, o haciendo de la economía, un campo restringido, lo que habrá de marcar la operación del poder sobre la experiencia de vida de quienes se encuentran inmersos en las relaciones sociales capitalistas.

Visto de esa manera, el capitalismo organiza una economía restringida, ya que acota la elección de los miembros de la sociedad, a conducirse bajo el faro de alcanzar la máxima utilidad en cada transacción, en cada encuentro, en cada toma de decisiones, definida por el diferencial entre el beneficio y el costo, y concibiendo todo excedente para los fines de la acumulación.

La penetración de tal criterio en las decisiones cotidianas del ser humano, es concebido como el basamento del surgimiento del capitalismo. Y si bien Bataille (1987) cita a Max Weber, reconocido sociólogo por su exposición del origen del capitalismo a partir de la orientación de las prácticas contenidas en los valores que subyacen a las diferentes religiones, permitiéndole localizar el origen del capitalismo en las regiones protestantes, la explicación del francés resulta secular por el contraste que resalta entre aquellas prácticas de las sociedades antiguas en relación al uso del excedente.



De este aspecto, desprende una interpretación alternativa de la soberanía, tratada en los manuales de economía restringida, como la elección libre de interferencia, en la que se maximiza la utilidad y ganancia a través del cálculo costo-beneficio, con el correlato de identificar que cualquier expresión de organización colectiva, incluyendo el Estado como operador del reconocimiento de lo común, representa una fuente de violación de la soberanía del individuo.

Por el contrario, Bataille (1996) pensó que la soberanía del individuo, resulta perdida, cuando las decisiones son tomadas con el criterio costo-beneficio intertemporal, ya que además de posponer el goce de la vida situado en el presente, conlleva a desechar a la comunidad como horizonte en la toma de decisiones realizadas a nivel individual. El individuo es un ser que asume su infinitud a través de la búsqueda de acumulación de riqueza, mientras la comunidad desaparece del horizonte; lo colectivo es concebido como una fuente maldita.

Así, el campo social que el neoliberalismo construye, desecha la comunidad, niega la existencia del bien común, proponiendo un marco institucional, en el que subyace como única fuente de la libertad, la libertad individual en términos de la participación en el mercado.

Una de las principales implicaciones de tal suceso, consistió en explicar el funcionamiento de la economía, partiendo de la decisión del individuo, quien es representado asistiendo al mercado para obtener lo más que puede alcanzar acorde a su restricción presupuestaria. Si cada uno toma decisiones respetando esa regla, el resultado social consiste en la asignación óptima de los recursos, proyectándose de esa manera la armonía social.

Esta idea fue utilizada para desmontar la macroeconomía keynesiana en la década de los setenta. Sobre todo, la denominada escuela de Chicago, encabezada por Milton Friedman y Gary Becker, iniciarán la micro-fundamentación de la macroeconomía, descartando de esa manera la legitimidad de la existencia independiente de la dimensión macroeconómica.

Ahora impera en el razonamiento la prevalencia de la escasez relativa, y no la escasez o abundancia absoluta, desechándose de esa manera, el conflicto social, que surge con las formas de generar y distribuir el excedente, por lo que la ocurrencia de tal



conflictividad es interpretada como una desviación o anomalía en la reproducción de la sociedad.

Una de las posibles explicaciones de la expulsión de la categoría fundante de la economía como disciplina científica, posiblemente es la dificultad de cuantificar el excedente. Al menos eso es posible inferir cuando seguimos a quienes desde una vertiente marxista, intentaron posicionar dicha categoría en el centro del análisis, aplicándolo como exposición del proceso económico, social y político, surgido con la II Guerra Mundial. Destacan los nombres de Paul Baran, Paul Sweezy, y Charles Bettelheim, autores principales de tal proyecto de investigación, y activos participantes de los debates y acontecimientos de la historia, sobre todo de la década de los sesenta del siglo XX.

En una veta distinta, pero reconociendo tal dificultad, el antropólogo Harry Pearson (1976), explica que el excedente como categoría de análisis social y del desarrollo como faro de las sociedades, resulta problemático, ya que su definición implica consensuar las necesidades de reproducción de los miembros de la sociedad. Plantea que existen al menos dos criterios para cuantificar las necesidades.

El primer criterio corresponde al uso de las calorías mínimas que requiere un ser humano para reproducirse. Es un criterio de carácter fisiológico que denota la existencia de un excedente cuantitativo en términos absolutos, pero que desplaza a la historia. El segundo criterio, incorpora el componente moral-histórico de las necesidades, presentada de manera actualizada desde el punto de vista temporal, aunque relativiza espacialmente tal categoría.

Si bien el criterio para medir las necesidades con base en el componente moral-histórico resulta superior a la medida fisiológica, representa al mismo tiempo un desafío o problema para quienes perfilan el desarrollo como una medida cuantitativa de carácter universal.

Por ello, el antropólogo expresa que el excedente como tal no existe, ya que utilizar el segundo de los criterios es consistente con el carácter histórico de las ciencias sociales, pero resulta al mismo tiempo en la pérdida de univocidad del criterio para exponer la relación subdesarrollo-desarrollo.



Desde una matriz de pensamiento distinta, el intelectual francés George Bataille, hace muchas décadas, justo cuando se estaba desechando la categoría del excedente como parte de la práctica teórica de los economistas, expuso en algunas de sus principales obras, como *La parte maldita* y *Lo que entiendo por soberanía*, la importancia para el análisis social de estudiar los usos que la sociedad le otorga al excedente generado.

A partir de ese posicionamiento, revela los cortes profundos que han existido dentro de la larga historia de la humanidad, la distinción entre lo sagrado y lo profano, y asimismo la corriente subterránea que acompaña a la humanidad vista desde lo inútil y el derroche, o simplemente el goce.

El destino del excedente es el centro neurálgico de su postura para identificar las prácticas históricas y espaciales de la reproducción social. Concibe a las sociedades antiguas (tomando como ejemplo aquella civilización azteca durante su época de resplandor) como fuente de dilapidación del excedente en la que encuentra con los actos de sacrificio, reconocimiento a los dioses por proveer las posibilidades de obtener dicho excedente.

Hay en esa práctica teórica, un engarce con aquella auscultación de la historia realizada desde los modos de intercambio, aproximando a las sociedades antiguas, como la civilización Azteca, al modo de intercambio basado en la reciprocidad, como parte de la tipología más amplia donde el intercambio además está regido por el criterio de la redistribución y/o del mercado; visión presente en la obra de Mauss, y expuesta también por Karl Polanyi, llegando hasta nuestros días como fundamento de la construcción de una sociología no utilitarista. (Caillé: 2010)

Este reconocimiento de prácticas variadas registradas a lo largo de la historia de la humanidad, como resultado del estudio de los usos del excedente, conlleva a la perspectiva de existencia de una especie de economía general, en la que Bataille resulta ser un promotor de la contra economía (Campillo: 2010); combate aquella economía, cuyo excedente es destinado hacia la acumulación, y con la conformación social pleno de un mecanismo, deriva en la permanente búsqueda de expansión y acumulación del excedente en la totalidad.

Sabemos que Marx expone el origen del excedente, a partir del trabajo impago apropiado por el propietario de los medios de producción, luego reinvertido una gran



proporción de este trabajo, una vez realizado en forma de ganancia, con el objetivo de proseguir acrecentando el excedente generado.

Si bien Bataille, no dice mucho respecto a los modos de generar el excedente, sí es relevante aquella reflexión en la que el uso del excedente le permite expresar el surgimiento del capitalismo, adquiriendo en sus propios términos, o haciendo de la economía, un campo restringido, lo que habrá de marcar la operación del poder sobre la experiencia de vida de quienes se encuentran inmersos en las relaciones sociales capitalistas.

Visto de esa manera, el capitalismo organiza una economía restringida, ya que acota la elección de los miembros de la sociedad, a conducirse bajo el faro de alcanzar la máxima utilidad en cada transacción, en cada encuentro, en cada toma de decisiones, definida por el diferencial entre el beneficio y el costo, y concibiendo todo excedente para los fines de la acumulación.

La penetración de tal criterio en las decisiones cotidianas del ser humano, es concebido como el basamento del surgimiento del capitalismo. Y si bien Bataille (1987) cita a Max Weber, reconocido sociólogo por su exposición del origen del capitalismo a partir de la orientación de las prácticas contenidas en los valores que subyacen a las diferentes religiones, permitiéndole localizar el origen del capitalismo en las regiones protestantes, la explicación del francés resulta secular por el contraste que resalta entre aquellas prácticas de las sociedades antiguas en relación al uso del excedente.

De este aspecto, desprende una interpretación alternativa de la soberanía, tratada en los manuales de economía restringida, como la elección libre de interferencia, en la que se maximiza la utilidad y ganancia a través del cálculo costo-beneficio, con el correlato de identificar que cualquier expresión de organización colectiva, incluyendo el Estado como operador del reconocimiento de lo común, representa una fuente de violación de la soberanía del individuo.

Por el contrario, Bataille (1996) pensó que la soberanía del individuo, resulta perdida, cuando las decisiones son tomadas con el criterio costo-beneficio intertemporal, ya que además de posponer el goce de la vida situado en el presente, conlleva a desechar a la comunidad como horizonte en la toma de decisiones realizadas a nivel individual. El individuo es un ser que asume su infinitud a través de la búsqueda de acumulación de



riqueza, mientras la comunidad desaparece del horizonte; lo colectivo es concebido como una fuente maldita.

Así, el campo social que el neoliberalismo construye, desecha la comunidad, niega la existencia del bien común, proponiendo un marco institucional, en el que subyace como única fuente de la libertad, la libertad individual en términos de la participación en el mercado.

De esa manera, la exposición que Bataille realiza del uso del excedente, revela otra perspectiva que viene a coligar la libertad con la comunidad, sin que ello implique desechar al individuo, ya que, respecto a éste último, la crítica que realizó al socialismo realmente existente, consistió en que el productivismo comandado por la propiedad estatal, anuló al individuo, descartándose de esa manera que representase tal régimen de organización de la sociedad, alternativa al capitalismo. Así, el uso del excedente, representa una propuesta para identificar si nos aproximamos o alejamos de la noción de comunidad.

Consecuente con esa postura, participó en el debate sobre el plan Marshall, cuya finalidad fue organizar el concierto internacional de convivencia entre los países con el objetivo de garantizar la paz perpetua. Por ello propuso, alcanzar un equilibrio comercial a nivel mundial, implicando distribuir el excedente obtenido durante el intercambio comercial por aquellos países ganadores hacía aquellos países perdedores, lo que significa una especie de destrucción del excedente. (Bataille: 1987)

Si bien Bataille fue un autor marginal en vida, y *post-mortem*, lo sigue siendo, algunos autores en la latitud latinoamericana, han utilizado dicho enfoque para explicar acontecimientos y sucesos dentro de la región. Entre ellos, destaca la lectura que realiza Luis Tapia (2008) sobre el surgimiento de una coalición popular que llevó a Evo Morales a ganar las elecciones presidenciales en Bolivia, y que en principio posibilitó la construcción de un Estado plurinacional, aunque más tarde desechado cuando se impone como criterio de desarrollo en el gobierno encabezado por Evo Morales, la inversión de megaproyectos, de facto entierra las posibilidades de un ejercicio plurinacional del poder.

En otra dimensión del análisis, Alexandre Roig (2016), explica la imposibilidad de consolidar una moneda en Argentina que resulte estable, y garantice al mismo tiempo, el bienestar social de las clases populares; nación que ha atravesado de manera



recurrente por crisis monetarias, cuyo intento de resolución, fue plasmada con la convertibilidad de la moneda, haciendo de ésta expresión de la economía restringida.

Si bien se trata de autores vivos en el campo de las ciencias sociales, debe decirse que la perspectiva sociológica del literato mexicano, y premio Nobel de literatura, Octavio Paz, es interpretada en línea con el pensamiento de aquellos autores que hicieron parte del efímero *Colegio de Sociología Sagrada*, cuyo promotor y creador fue Bataille. (Kozlarek: 2014)

A continuación, describo e interpreto la transición energética, tal y como se presenta en el Istmo de Tehuantepec, considerada la región con el mayor potencial en la generación de electricidad por medio de la energía renovable viento; región formada a lo largo de varios siglos con la práctica de distintos grupos étnicos que hacen parte de la civilización mesoamericana, y todas ellas con una definida (y evidente) forma de organizar y practicar la economía, en la que año con año, recrean los vínculos con el mundo sagrado, a través de las fiestas.

Istmo de Tehuantepec: disputa sobre los usos del territorio

Desde el año 2006, fecha de construcción del primer parque eólico, no ha cesado la inversión capitalista en la región en materia de infraestructura generadora de electricidad por medio del viento. Este recurso, considerado renovable e inagotable, por ende, infinito, proporciona electricidad que es destinada en un altísimo porcentaje del total generado en la región con ese insumo renovable, al autoabastecimiento de los principales inversionistas, cuyo capital social es clasificado dentro de la estructura empresarial corporativa de carácter trans y multinacional.

Esas corporaciones han aprovechado la apertura del sector eléctrico promovido por los últimos tres gobiernos de la república que hicieron permisible la participación del sector privado, desechándose aquella perspectiva de monopolio del Estado en el circuito de la electricidad, la cual es parte de la constitución de la época del nacionalismo revolucionario.

La renta que surge con esas actividades productivas que utilizan bienes no reproducibles, es ahora compartida con el sector privado, sobre todo debido a que en la fase de generación se ha expandido la participación del sector privado.



La transición energética que está marcada en México por la aprobación de leyes inspiradas en la ideología neoliberal, conlleva a otra transición que está ocurriendo sobre el territorio de la región, ya que no es una región vacía, sino ocupada con prácticas ancestrales de los habitantes indígenas de la región.

Una representación de un mapa mental sencillo del territorio del Istmo de Tehuantepec, antes y después del año 2006, fecha de construcción del primer parque eólico, proyecta la expansión de la lógica que promueve el uso del excedente para acumularlo, con el propósito de acrecentar aún más el excedente, logrado en el proceso de integración de cada fase del circuito de la economía, en donde se conjuga la operación del trabajo impago y el despojo de medios de producción no reproducibles.

Generación de excedente de trabajo, y apropiación del excedente de energía arrojado en esa región del país, legalizado por las leyes de la propiedad privada, convirtiendo al viento en una mercancía que por su carácter infinito, resulta para sus propietarios, en una fuente de ganancias extraordinarias en el presente y futuro; más aún, cuando la renta proveniente del viento resulta en esa región más elevada por tratarse de la región que exhibe las mejores condiciones en el país para generar electricidad por medio del viento.

La genealogía de la transición energética, que además implica la transición hacia otros usos del territorio, ajenos a la práctica de la economía de las comunidades, ocurre con el antecedente de la crisis del campo mexicano, de la que no resulta ajena la población campesina de esa región, y que cuenta con un alto porcentaje de su territorio organizado bajo la propiedad social (ejidal y comunal), desmontada con aquella reforma agraria promovida y firmada en los albores del neoliberalismo mexicano durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La crisis del campo mexicano ha expuesto a los campesinos de la región a participar en procesos de arrendamiento de la tierra con esas grandes corporaciones en la que la valuación de la tierra es considerada una parte ínfima de la actividad realizada por parte de las grandes corporaciones. La negociación suele ser bilateral, de ahí que no exista criterio de homologación al interior de la región respecto al proceso de negociación del monto de la renta de la tierra, así como de aquellas participaciones en especie que oferta la corporación hacia el pueblo de los ejidatarios y/o comuneros como táctica de aceptación de concesión de la tierra.



Asimismo, debe decirse que es una región en la que existen expresiones del cambio climático global, como el fenómeno de “El niño”, y la prolongación de las sequías (Briones:2008), cuya conjunción expresa el marco de la toma de decisiones de los hogares de la región, en el encuentro con aquellos que vienen del exterior con la inversión eólica.

Debe mencionarse, en septiembre del 2017, la región, sobre todo la parte de los pueblos del Sur, fue impactada con un sismo de 7.2 grados que afectó la infraestructura rural y urbana de los hogares y escuelas de la región, así como las vías de comunicación interregionales, lo que trajo consigo una oleada de procesos micro organizados de solidaridad por parte de la sociedad civil, y la activación de protocolos de seguridad del Estado mexicano durante esas contingencias.

Contingencias que en su conjunto afectan la capacidad de generación de excedente de los pobladores, y que los coloca en un escenario de incertidumbre, lo cual influye en la toma de decisiones ante el arribo de los capitalistas que buscan en la región prospectivas de ganancias a través del excedente de energía.

A lo largo de estos trece años desde que se construyó el primer parque eólico, sólo un caso de rechazo a la concesión del territorio ha ocurrido en la región. Un rechazo logrado en la zona pesquera de la región, en el que se pretendía, y pretende aún, construir un parque eólico tipo *offshore*, y que a juicio de los pescadores de esa población, San Dionisio del Mar, y delegación Álvaro Obregón del municipio de Juchitán, acabaría con su medio principal de reproducción, lo que en los términos expuestos en la primera sección, significa la extinción del excedente proveniente de los recursos del mar, afectándose con ello, el flujo de bienes para el resto de los hogares de la región, ya que el consumo de alimentos del mar, proviene de esa zona de la región.

También se ha planteado en una comunidad de la región, la propuesta de instalar un parque eólico de tipo comunitario. Ha sido rechazada la propuesta por el Estado mexicano, a pesar de que se trata de una iniciativa encauzado en el marco institucional, y cuyos promotores no cuestionan la presencia de los parques eólicos de la iniciativa privada. Sólo aspiran a participar como comunidad en el flujo del viento con el objetivo de autoabastecerse; aunque debe decirse que algunas voces plantean participar en el mercado con la venta de electricidad lograda comunitariamente.



Si bien la mayor frecuencia de la respuesta de los pobladores ha sido sí al arrendamiento de la tierra de la región a los capitalistas, dando lugar a la ejecución de la transición energética en México, pero también de los usos del territorio de la región, debe explicarse que la decisión ocurre en el marco de la vulnerabilidad social, resultado de causas que el propio capitalismo ha provocado a través de la liberalización comercial y de la producción capitalista que contraría las leyes de la esfera de la naturaleza, desatando algunos de los efectos del cambio climático global en la región.

En ese sentido, la elección realizada por los pobladores es una elección forzada, ya que los choques o contingencias reducen la capacidad de generación del excedente logrado a partir del uso no capitalista del territorio, cuya conjunción con el retiro de las funciones sociales del gobierno, en particular aquellas relacionadas con los programas que daban certidumbre a la actividad agropecuaria, exponen a los hogares a un proceso de negociación con las corporaciones en franca asimetría.

No es posible decir de manera contundente que hay una penetración de la utilidad como criterio de la toma de decisiones de los pobladores, más bien se trata de una elección forzada, en la que sin duda no es descartable la disputa entre criterios propios de la región, y aquél que proviene del exterior llamado capitalista, sin afirmar que ahora en la región existe un *homo economicus* que hace del individuo un ser infinito, y de la comunidad y del bien común un valor desechable.

Lo paradójico, es que la extensión de ocupación del territorio por parte del capital, y que utiliza el criterio de acumular el excedente para acrecentar el excedente generado con el viento como insumo, y con ello ampliando la apropiación del excedente general por parte de las grandes corporaciones, al mismo tiempo, representa una sustracción del tamaño del territorio destinado a utilizar el excedente con la finalidad de persistir y ampliar la comunidad; latente aún en esta región del país.

De esa manera, la transición energética en México, está ejecutándose, generando al mismo tiempo, una transición del territorio del Istmo de Tehuantepec, en la que resulta ampliada la infraestructura de la economía restringida, mientras se contrae la capacidad de realización de la economía general que hace finito al individuo, pero infinito a la comunidad, aunque la existencia del rechazo mencionado con anterioridad, representa un ejemplo de que aún persiste en la región posturas que buscan persistir en el marco de la economía general.



Reflexiones finales

El caso del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en relación a la implantación de la organización capitalista de la transición energética, revela la operación de la economía restringida, que además de promover la decisión con base en el cálculo costo-beneficio, convierte al viento en un recurso escaso para quienes no resultan partícipes con inversión, es decir, los pobladores de la región, quienes debe decirse se encuentran con los capitalistas en condiciones de incertidumbre provocadas por el retiro del Estado en las actividades agropecuarias, la liberalización comercial, y los efectos del cambio climático global que se presentan en la región.

A pesar de ello, el caso de rechazo a la construcción de un parque eólico, expone la posibilidad de que aún subyace resistencia, y con ello que existe la búsqueda de un horizonte de reproducción social signado por los usos del excedente a partir de lo comunitario.

Si bien no es generalizable que la comunidad que ha rechazado el proyecto eólico se encuentre en términos globales de su reproducción en condiciones de excedente, el rechazo manifiesto denota que con la penetración del capital en su territorio, transitarán hacia la condición de infra-subsistencia, por lo que la disputa del territorio refleja la capacidad de generación y los usos del excedente, que en los términos de Bataille, consiste en la confrontación entre economía restringida *versus* economía general.

Ahora con el nuevo gobierno encabezado por AMLO, quien discursivamente plantea la cuarta transformación en la historia de México, la propuesta de su gobierno es ampliar la perspectiva de la economía restringida, a través de construir un canal de comunicación interoceánica que uniría dos puertos, modernización de las vías férreas, instalar fibra óptica en el polígono elegido para el megaproyecto, extender más permisos de construcción de parques eólicos, y la instalación de diez parques industriales.

Todo lo anterior, atrayendo inversión nacional y extranjera, a través de declarar a la región como una zona “libre”; libre de impuestos al capital, libre de garantía de signar contratos laborales con reconocimiento de derechos laborales; la muerte de la comunidad tiene permiso desde el gobierno de AMLO con la bandera de la 4T al igual que con los gobiernos anteriores. La senda neoliberal continua, y con ello, la de la economía restringida.



Bibliografía

Bataille George (1987), *La parte maldita*, editorial Icaria.

Bataille George (1996), *Lo que entiendo por soberanía*, Paidós Ibérica, primera edición.

Briones Gamboa Fernando (2008) "Clima y vulnerabilidad social: conflictos políticos y repartición de riesgos en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), en *Aires y llluvias. Antropología del clima en México*, Annamária Lammel, Marina Goloubinoff, Esther Katz (dirección), ediciones Ciesas-IDR, pp. 615-638.

Caillé Alain (2010), *Teoría anti-utilitarista de la acción*, Waldhuter editores.

Campillo Antonio (2001), *Contra la economía*, editorial Comares.

Kozlarek Oliver (2014), *Modernidad como conciencia del mundo*, editorial Siglo XXI y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Pearson Harry (1976), "La economía sin excedente: crítica de una teoría del desarrollo", en *Comercio y mercado en los imperios antiguos*, Karl Polanyi, Conrad Arensberg, y Harry Pearson (editores), Labor, Barcelona.

Roig Alexandre (2016), *La moneda imposible. La convertibilidad argentina de 1991*, FCE, Argentina.

Tapia Luis (2008), "El movimiento de la parte maldita", en *Política Salvaje*, CLACSO-Muela del Diablo editores-Comuna, pp. 25-52.



Tierra y Cafe: Un Estudio Exploratorio para Entender la Resistencia Campesina en Colombia

Aura Angelica Hernandez Cardenas

Resumen

Frecuentemente se asume que el campesinado es un actor político y social que siempre ha salido vencido en el desarrollo de la sociedad moderna. De esta manera, hay una idea común de que las transformaciones contemporáneas se dieron con procesos urbanos, y el campo quedo representada como algo estático y como el lado tradicional de la sociedad. Sin embargo, diferentes autores han mostrado que las áreas rurales tienen su propia dinámica y que los campesinos tienen su propia historia (Scott 1985; Smith 1989; Guha 1985). Mi ponencia tiene como objetivo presentar un proceso de exploración histórica sobre la resistencia campesina en Colombia, como la respuesta que esta población ha dado a los cambios que vivió el Latinoamérica y el país. De esta manera, quiero explorar formas en las cuales el campesinado ha actuado mostrando Resistencia frente a las transformaciones e imposiciones que el devenir histórico le pone. Leeré con ojos de resistencia el proceso de producción cafetera campesina en pequeñas propiedades y la relación entre campesinado y propiedad rural, durante las primeras tres décadas del siglo XX, analizando la forma en la cual estos procesos configuraron la historia económica y política de Colombia durante todo el siglo pasado.

Palabras clave

resistencia campesina, produccion cafetera, propiedad rural, exploracion historica.

Dentro de diferentes análisis sociológicos se asume que el campesinado es un actor social y político que ha sido vencido en el desarrollo de la sociedad moderna, así mismo, hay una idea común que nos dice que las transformaciones contemporáneas son transformaciones que suceden en el ámbito urbano, y las áreas rurales representan algo estático y el lado tradicional de la sociedad. Desde el punto de vista marxista, el campesinado es más un actor reaccionario que revolucionario. Sin embargo, el desarrollo de la historia ha mostrado que en diferentes lugares del mundo, el campesinado ha jugado un rol central movilizando cambios sociales, particularmente en ese llamado “sur global” en el cual ésta población ha sido y es un actor central cambiando muchas realidad de opresión. Es así como, el debate acerca de la posición del campesinado en diferente países del mundo se ha convertido en una idea central para poder entender la sociedad contemporánea, en donde existe un proceso



significativo de urbanización, una expansión del capitalismo neoliberal y el desarrollo de inequidades cada vez más latentes. En este contexto, se hace relevante entender la resistencia campesina como una respuesta a estas realidades de opresión. El objetivo de esta ponencia es analizar el papel del campesinado en la historia de la producción colombiana de café, explorando la forma en la cual los “aparceros” o también conocidos como arrendatarios, se convirtieron en uno de los actores centrales que impulsaron el desarrollo de esta economía agrícola, que a diferencia de países como Brasil en donde la hacienda cafetera fue central, en el caso de Colombia, los minifundios fueron la principal fuente de esta producción.

De esta manera, mi hipótesis gira en torno al reconocimiento del papel de los aparceros - arrendatarios, en el proceso de producción de café durante la primera mitad del siglo veinte en Colombia. La forma en la cual se establecieron contratos de mano para la producción cafetera permitió que el campesinado ligado a estos contratos, comenzará hacer posesión de una tierra a producir alimentos para su sostenimiento diario, a obtener dinero líquido para sus necesidades, y a evitar de forma significativa que crisis económicas como la de 1929 tocara significativamente su economía. Es así como, para mi la aparcería es una de las formas cotidianas de resistencia

campesina en el proceso de producción cafetero que en el largo plazo impacto en las leyes de tierras en el país, en la formación del movimiento campesino y obrero de la década de los treinta en Colombia y en la creación de instituciones para la formalización de la propiedad de la tierra.

Esta ponencia se dividirá en tres partes, en una primera, explicaré qué entiendo por formas de resistencia campesina teniendo en cuenta la teoría de la subalternidad, así mismo como John Scott y Gavin Smith. Posterior a esto, explicaré el desarrollo de la producción

cafetera en Colombia a finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte, analizando la participación de cada uno de los actores presentes en este proceso, más que todo el papel de los aparceros aquí. Como tercer punto, explicaré el ejemplo de la hacienda cafetera La Aurora, que desarrolló un sistema de aparcería, y finalmente llego a la conclusión analizando como, el rol cotidiano de los aparceros, fue fundamental para la producción cafetera en Colombia, pero más que todo, significó para ellos la obtención de ganancias a largo plazo.



Un Análisis Teórico sobre la Resistencia Cotidiana

La resistencia campesina se ha estudiado desde diferentes disciplinas, teniendo como un foco central en los estudios agrarios, muchos autores resaltan la importancia de los momentos en los cuales el campesinado ha desafiado el poder estatal dominante, las relaciones de dominación en su contexto en particular o el orden internacional (Scott, 1976, 1985, 1998; Smith 1989). Es así como desde los estudios subalternos se han analizado esta dinámica y desde historia y antropología se han hecho diferentes acercamientos al tema. En esta ponencia yo me centraré en estos acercamientos teóricos, hechos por James Scott (1985) y los estudios subalternos de Ranajit Guha (1983), así mismo como Gavin Smith (1989) y sus análisis sobre formas en las cuales la gente utiliza sus medios de subsistencia como formas de expresiones políticas.

Comenzado por James Scott (1985), el es uno de los primeros autores que resalta la importancia de analizar los actos cotidianos del campesinado. De esta manera, el propone el concepto de formas cotidianas de resistencia campesina para entender esas acciones diarias que el campesinado desarrolla para responder a los procesos de opresión que están viviendo. Es así como Scott define esta resistencia como

una prosaico pero constante lucha entre el campesinado y aquellos que buscan extraer fuerza de trabajo, comida, impuestos, rentas, e intereses de ellos. La mayoría de estas formas de lucha van muchos más allá de un desafío colectivo. En este punto, tengo en mente las herramientas ordinarias de grupos poblaciones que tienen menos poder: falta de eficiencia en el trabajo, disimulo, falsa obediencia, robo, ignorancia fingida, calumnia, incendios provocados, sabotaje, etc. Estas formas brechtianas de lucha de clases tienen ciertas características en común, pues requieren poca o ninguna coordinación o planeación. Puede ser que a menudo representan una forma individual de ayuda, y generalmente evitan cualquier confrontación simbólica directa con la autoridad o con las normas de la élite. Comprender estas formas comunes de resistencia es comprender que hace gran parte del campesinado en ese tiempo “entre revueltas”, para defender sus intereses lo mejor que pueden. (Scott 1985, p. 29)¹

Scott (1976) enfatiza que se pueden ver dos formas particulares de resistencia: una como resistencia cotidiana en la cual es posible analizar acciones ordinarias que requieren muy poca o ninguna coordinación. Por el otro lado, se puede observar un abierto desafío en el cual aparecen acciones directas y organizadas como huelgas, protestas, y demás en las cuales se desafía de manera directa el estamento. Scott se



centra primero que todo, en esas acciones que se presentan como no violentas en relación con un conflicto violento.

Para Scott, esta clase de acciones tienen un impacto a largo plazo en la dinámica total de la sociedad, de esta manera, al momento en que el campesinado hace esto ellos crean barreras a los logros que tienen las clases dominantes. Es así como este autor subraya que estas luchas no son solo en contra de la propiedad, del trabajo, del dinero, de derechos, es también la lucha en contra de la apropiación de símbolos, identidades, y significados. En este caso, las clases dominantes tienen el poder de imponer su pensamiento sobre las clases dominadas, en este caso el campesinado, y es casi imposible que se haga al revés, sin embargo, Scott resalta que las sanciones simbólicas como los chismes, rumores, burlas, mentiras, difamaciones son formas válidas de reaccionar contra los procesos de dominación. Es así cómo estas formas cotidianas de resistencia no tienen casi que ninguna organización, ningún plan y no hay una confrontación directa. Scott (1985) reconoce entonces, que, las clases dominante no ven la confrontación directa por parte de estos grupos subalternos, porque si las vieran significa que, abiertamente, aceptarían contienda. Y aunque Scott reconoce que hay momentos en que el campesinado se organiza y genera movilizaciones, protestas, confrontaciones, muchas veces estas terminan en masacres, con negativos resultados para el movimiento campesino.

De esta manera, aunque estas movilizaciones, y confrontaciones directas, suceden, son raras, y es más bien, en la cotidianidad en donde se presentan los desafíos a esa dominación.

En este punto es interesante resaltar el trabajo de la teoría de la subalternidad, que analiza proceso de población rural en India. Teniendo en cuenta los conceptos de hegemonía y dominación de Gramsci los estudios subalternos analizan esta dominación sin hegemonía (Raj, 1997) en la cual persuasión supera la coerción pero sin eliminarse entre sí. En este caso, Guha (1997) analiza cómo es importante entender la tensión entre estado y sociedad civil, particularmente el campesinado dentro de esta sociedad civil. En este punto, se resalta que el campesinado no es una masa homogénea y, más bien, desarrollan diferentes estrategias para el alcance de sus objetivos. Aquí no se puede olvidar que la organización de estos grupos subalternos crea patrones en el desarrollo de estas revueltas, de esta manera, el objetivo es reconocer las acciones de estas comunidades subalternas, para entender los procesos que desde allí se generan.



Todo esto pasa en un contexto de expansión capitalista y liberal en el sur global, dentro de un proceso de postcolonialidad en donde estructuras e ideologías liberales, capitalistas no erradican construcciones propias comunitarias. Estos autores subalternos analizan cómo la burguesía y el contexto colonial y postcolonial aprenden a convivir juntos y encuentran la manera de coexistir y reproducir las relaciones de poder. Es así como autores como Guha (1997) analizan como esta burguesía falló en el proceso de universalización de su proyecto en muchos territorios, y la cultural subalterna no se integró completamente a ese discurso modernizador y buscaron otras formas de hacer política que persisten actualmente.

Para Guha (1983) no es posible decir que la organización política de estas comunidades son premodernas, porque tienen muchas características modernas. Sin embargo para él, la conciencia política campesina no es la misma que la de la clase obrera occidental, entonces no es posible hacer un análisis similar de dos realidades diferentes. Entonces, para entender el contexto particular de la lucha campesina es necesario entender cómo se organizan y qué herramientas usan para actuar. Para este autor, el análisis de las relaciones de dominación del campesinado Hindú ayudan a definir su identidad y a construir y reconocer sus luchas en contra de la clase dominante.

Siguiendo este mismo análisis, Gavin Smith (1989) examina cómo estos procesos de resistencia pueden estar ligados a los procesos diarios de subsistencia del campesinado relacionados con sus condiciones políticas y económicas. Todo esto sin olvidar la heterogeneidad del campesinado en sus diferentes momentos históricos y locales, y las relaciones con el modo de producción capitalista. Es así como, Smith afirma que los elementos culturales son importantes para entender cómo el campesinado, por un lado construye un identidad en una condición de dominación y resistencia y por el otro, este análisis de la cultural es útil para entender su heterogeneidad. Es así cómo estos puntos ayudan a analizar el rol del liderazgo, la construcción de comunidad, su unidad y su rebelión.

Smith (1989) analiza el caso de Perú y la resistencia del campesinado a la institución de la Hacienda. El autor resalta como una pequeña comunidad, de Huasincanchinos, lucha de diversas maneras por obtener el reconocimiento territorial legal, que le había sido negado por la expansión de la hacienda, desde la época de la colonia. Es así como, este antropólogo analiza la relación existente entre el desarrollo de políticas públicas, leyes y resistencia, que a largo plazo demuestran el impacto del desarrollo de iniciativas



locales del campesinado. El autor enfatiza en la necesidad de entender la resistencia desde una relación entre el ámbito económico, cultural y político, de esta manera, examinar el proceso de la mano de obra es útil para entender las conexiones entre cultura y clase, entendiendo desde los medios de subsistencia la lucha política.

Es así como, Smith analiza esta sociedad campesina, entendiendo sus medios de subsistencia para ver los procesos de explotación y dominación, entonces, enfatiza que “(...) debemos ser sensibles a las formas en las cuales la resistencia política es expresada así sea a través de una cultura de oposición, o a través de una consciencia de clase. (p. 15)². Es así como, el proceso de expansión capitalista tiene respuestas no capitalistas por parte del campesinado. Un ejemplo de esto es los usos que le dan al trabajo del hogar en las fincas, para bajar los gastos innecesarios, de esta manera, la familia en su totalidad participa en la producción. Es entonces como la actividad económica del campesino tiene una implicación política y se ve como una resistencia frente a la dominación. Sin embargo, este autor nos invita a no olvidar la heterogeneidad del campesinado que impacta directamente en el tipo de acciones políticas que genera. Construyendo diferentes solidaridades. En el largo aliento, los procesos cotidianos de resistencia, ligados su subsistencia, generan que esta comunidad obtenga nuevamente la propiedad legal de sus tierras, pero casi después de un siglo de lucha continua.

Teniendo en cuenta el análisis hecho por estos autores, es posible ver cómo las acciones del campesinado son respuestas a los cambios sociales que desafían sus realidades. De esta manera, ver al campesinado como un actor pasivo en la historia es eliminar todo esto que está escondido dentro de la historia dominante. De esta manera, revelar estas historias del campesinado, nos permiten ver más allá de estas historias de derrota, y más bien reconstruir los procesos de larga duración en los cuales impacta las luchas de las sociedades subalternas. ES así como, yo defino resistencia campesina como los actos persistentes y cotidianos que el campesinado lleva a cabo, como respuesta al contexto de dominación. Y aunque algunas veces estas acciones no están políticamente organizadas, con la realización continua de estas aparece la organización política como una forma de solidaridad en la lucha. De esta manera, es posible ver al campesinado como un grupo heterogéneo el cual es construido como una entidad social, compartiendo intereses comunes y una consciencia política particular.

Tierra y Cafe. La Historia de la Producción Cafetera en Colombia

En esta ponencia, me estoy centrando principalmente en el periodo de finales del siglo



diecinueve e inicios del veinte, tiempo en el cual se expandió la economía cafetera en todo el Colombia. Estas décadas se caracterizaron por una expansión de las relaciones económicas de tipo capitalista, el incremento de los recursos del estado, los cambios en las relaciones entre el gobierno central y local, las transformaciones del mundo agrario y el nacimiento de movimientos obreros. Además de esto, este periodo está marcado por una guerra civil de inicios de siglo, llamada la guerra de los mil días (1899 - 1903), que enfrentó al partido liberal y conservador, quienes tenían posiciones diferentes frente a su relación con la iglesia y a la apertura económica. A partir de 1886 se vive la época conocida como la Hegemonía Conservadora, la cual tuvo en el poder al partido conservador hasta el año 1930 cuando entró el partido liberal al gobierno.

Durante esta época, nació una nueva constitución que rigió Colombia por más de 100 años, se vivió un importante crecimiento urbano, el nacimiento de una pequeña clase burguesa muy ligadas a esta expansión capitalista, y el crecimiento de la producción cafetera y bananera en el país. De esta manera, durante esta época se observa un importante crecimiento económico caracterizado por la expansión del comercio y la exportación del café, la producción bananera, y el lento crecimiento de la industria local.

Pasando a la producción de café que es el tema para explorar en esta ponencia, el cultivo del café comenzó en el siglo diecinueve en Colombia, pero fue solo, hasta después de 1860, con el incremento de los precios internacionales de este producto, se expandió la producción y comercialización en diferentes regiones del país. De esta manera, Jorge Orlando Melo (2017) analiza cómo la producción de café pasó de 5% a 60% durante estos años (p. 179), lo que llevó a que hubiera un cambio los asentamientos de muchos territorios del país, diferentes personas comenzaron a migrar a las regiones cafeteras del país, poblando territorios que antes eran la frontera agrícola. Al respecto, el historiador Charles Bergquist (1986) afirma que el “cultivo del café se expandió, primero, por las laderas de las montañas que estaban poco desarrolladas, entre los valles de ríos tropicales y tierras templadas. Algunas de estas tierras estaban bajo de propiedad del estado, es decir eran públicas, y podrían ser adjudicadas³ (p. 27). Fue así como, en estos territorios de producción se dió un proceso de poblamiento, que en la historiografía colombiana se conoce como la Colonización antioqueña. Aquí es posible empezar a ver en este proceso como se dió la colonización de la frontera agrícola en donde el campesinado se mueve hacia altitudes pequeñas y medias de la montaña con el propósito de cultivar café (Legrand 1986)



Es significativo resaltar que la producción de café se desarrolló de forma heterogénea en diferentes lugares del país. Marco Palacios (2009) afirma que la expansión del cultivo y la comercialización del café produjo diferente clase de sociedades a lo largo de toda Colombia, hubo diferentes regímenes agrarios, diferente tipo de préstamos y sistemas mercantiles, diferentes tipos de apropiación de tierra, y diferentes tipos de hacienda y su uso de mano de obra en ella para la producción (p. 30). A este respecto, Palacios (1980) enfatiza que el campesinado alterna la producción y comercialización de café, con grandes propietarios y hombre de negocios de la época.

En este contexto, Palacios (2009) analiza que desde 1850 a 1900 prevalece de manera significativa el cultivo en haciendas, pero ya entre 1900 a 1955 la producción se da en minifundios campesinos (p. 32). Esta transformación, de la hacienda cafetera a la producción en minifundios se da por múltiples factores entre ellos la necesidad de retener mano de obra en las haciendas y con ellos la expansión de minifundios, la baja en el precio internacional del café y el impacto de la guerra de los mil días.

El cultivo de café, se dio primero en el departamento de Santander, pero poco a poco fue migrando hacia los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Antioquia, en donde se dieron diferentes tipos de cultivo y producción. Comenzó, entonces, en grandes haciendas, con grandes propietarios, en su mayoría burgueses, emprendedores urbanos, que vieron una gran oportunidad de negocio con el café, estos grandes propietarios empezaron a usar mano de obra temporal, pero así mismo, mediante el sistema de enganchamiento, empezaron a retener esa mano de obra, dándoles a los campesinos porciones de tierra para su cuidado, en las cuales podían cultivar café y tener cultivos de pancoger. Se realizan así, contratos más que todo orales (Palacios 1986), en los cuales se afirmaba que ellos se convertían en trabajadores permanentes de la hacienda, recibían algunas ganancias de la producción de café, podían vender sus cultivos de pancoger, y tenían una casa para vivir. “Este sistema, que tenía un incentivo monetario (y que algunas veces estaba acompañado de coerción) fue ofrecido a diferentes trabajadores, para motivarlos a viajar de zonas frías y muy pobladas, hacia zonas más cálidas, durante la cosecha de café, o para abrir nuevas tierras para esta producción cafetera (Bergquist 1988, p. 28). De esta manera, los grandes propietarios e inversores en el cultivo de café, firmaron diferente tipo de contratos para poder garantizar mano de obra en los cultivos, lo que muestra es que estos grandes propietarios tenían poco capital líquido para cultivar y obtener ganancias de la



producción de café. Esto hacía que engancharan a diferentes campesinos, mediante la tierra, lo que hacía que estos se fueran convirtiendo poco a poco en tenedores (p.30). Es así como, la hacienda de producción de café, cambió significativamente al inicio del siglo veinte. Primero, debido a la caída del precio internacional del café, que pasó de \$15.7 centavos por libra en 1896 a 8,5 centavos por libra en 1899, debido a que hubo un incremento masivo de las exportaciones brasileñas (Bergquist 1988). El segundo factor fue la guerra de los mil días, entre los partidos liberal y conservador. Esta guerra hizo muy vulnerable a los grandes terratenientes debido a que, primero hubo un vacío de trabajadores, porque se fueron a la guerra, así mismo, como una falta de dinero para comercializar el producto. En este contexto, la hacienda fue muy frágil desde el punto de vista social y corporativo, impulsando el minifundio y con ellos los campesinos que desarrollaban la producción allí.

Para poder entender este proceso de relación entre café resistencia y tierra, es necesario diferenciar los tipos de actores que podemos encontrar en sociedades agrarias, y la forma en la cual la mano de obra campesina sea encuentra distribuida en diferentes sociedades. Para el caso de la economía cafetera, cuenta con diferentes actores que sirven para entender la dinámica de esta producción. Por un lado tenemos los grandes hacendados, grandes terratenientes que en el caso del café, podemos hablar de pequeña burguesía que al ver la posibilidad de negocio e este producto que empezó a invertir en tierra para comenzar el cultivo. Se observa en este caso, muchos propietarios ausentistas que adquirieron largas extensiones de tierras, y establecieron la producción cafetera allí, como su mismo nombre lo indica, el ausentismo se caracteriza porque estos mismos grandes propietarios no vivían en las haciendas, sino que establecía un sistema de producción que les permitiera a ellos vivir en la ciudad (Palacios 1986), de esta manera, estos grandes propietarios contrataron administradores que pudieran la producción mientras ellos estaban ausentes. Los administradores eran contratados de forma permanente para manejar la hacienda, se encargaban de contratar a los demás trabajadores, organizar la comercialización del producto y demás necesidades de la hacienda.

En cuanto a mano de obra contratada, existían dos formas de contratación. Por un lado se tenía la mano de obra temporal, que era una categoría de trabajadores que son objeto de disposición temporal de los hacendados, administradores, arrendatarios o aparceros, que es contratada como fuerza de trabajo individual por un jornal fijo al día o a destajo (Ramirez Bacca 2008, p. 33). Por otro lado, se tienen a los trabajadores permanentes



que son aparceros, también denominados arrendatarios, tabloneros, contratista, partijero o agregado dependiendo del contexto. Este aparcerero se caracteriza por tener un convenio principalmente la administración de tierras, cría de ganados u otro tipo de cultivos. Según el historiador Ramírez Bacca (2008) el contrato con el aparcerero incluye dos formas de participación en la producción o beneficios obtenidos por la granjería,

“la primera se da, por ejemplo, cuando el dueño del campo le ofrece la tierra en arriendo al colono, no por una retribución en dinero sino por una parte de los frutos que se cojan, y la segunda se presenta cuando los beneficios se distribuyen no por una parte alicuanta, que consiste en cierta medida determinada como diez fanegadas o arrobas, sino por una parte alicuota, como la mitad, la tercera o la cuarta del total de la producción. En cualesquiera de los dos casos hay aparcería, una relación que en la práctica se convierte en una especie de compañía o sociedad.” (P. 31)

De esta manera, por la necesidad de contratar mano de obra, el gran hacendado, en esta caso ausentistas, se ve en la necesidad de ceder, así sea de manera simbólica y a través de un contrato oral, la propiedad de su tierra, dándole las herramientas a un campesino y a su familia para que la trabaje, así, en el largo aliento, y como se verá históricamente muchos de estos aparceros obtuvieron la propiedad legal de la tierra.

Hacienda La Aurora

Uno de los ejemplos que voy a usar para entender esta relación entre café, formas cotidianas de resistencia y tierra, es el caso de la finca La Aurora. Una finca ubicada en el municipio del Líbano, en el departamento del Tolima. Han habido diferentes autores que ha investigado sobre este hacienda (Ramírez Bacca, 2008, Machado 1976, Arango 1982, Meertens 1985). Esta hacienda comenzó con la producción cafetera en el 1882 y por casi un siglo mantuvo este cultivo. Una de las características más importantes es que se le conoce como una “hacienda de aparcería” y se ha teorizado de diferentes formas su modo de producción, desde análisis de economía precapitalista, o completamente fuera de esta forma de producción capitalista. Se puede observar cómo en esta hacienda se da de forma relevante la conexión entre el trabajo de hombres sin tierra y empresarios urbanos, en donde se estableció una conexión de estructuras agrarias administrativos laborales particulares.

Después de la guerra de los mil días, la hacienda La Aurora es una de las haciendas mejores organizadas del sur del municipio del Líbano, los administradores y propietarios, al ver una escasez de fuerza laboral, viajan a diferentes lugares de Colombia para poder



enganchar a trabajadores que fueran a apoyar la producción cafetera, es así como, la hacienda atrae a

campesinos desarrollando el sistema de “tabloneros”, similar al método laboral de, “enganche” que ya se había desarrollado en la colonia. Los administradores y mayordomos buscaban atraer a trabajadores ofreciéndoles comida, transporte, tierras y posibilidad de cultivar su comida allí (Ramirez Bacca, p. 70).

Aproximadamente para 1910, se estableció el método de tablón, con arrendatarios o tabloneros, a los cuales se les ofreció disposición sobre la tierra y los cafetales que allí había, también la posibilidad de contratar mano de obra para trabajar en esta tierra y en la cosecha. El administrador dividió la hacienda en secciones, que denominó tablonos, y cada sección fue adjudicada, mediante un contrato oral, a un núcleo familiar, el cual se encargaba de administrarlo, cuidar la producción del cafetal, recoger la cosecha y cultivar lo necesario para el sostenimiento de la familia. La hacienda se dividió, aproximadamente en 40 familias, y aunque el hacendado contaba con el monopolio de la compra del grano, los tabloneros tenían cierta autonomía en las tierras que le habían sido asignadas, tenían la posibilidad de hacer mejoras en ellas, y podían recibir retribución por estas. Había una remuneración de la fuerza laboral familiar a través de la venta del café a la hacienda, remuneración monetaria por los jornales individuales que los tabloneros hacían al adquirir la obligación de trabajar para el hacendado, así mismo, recibían retribución en dinero por la mejoras que le hicieran a la tierra. Este sistema tuvo un gran beneficio para la hacienda, puesto que logró un crecimiento significativo en la producción cafetera que duró hasta inicios de la década del treinta, cuando las disposiciones de relación laboral comenzaron a cambiar. El uso de la fuerza laboral familiar, permitió que este sistema continuara desarrollando formas tradicionales de producción que beneficiaban significativamente a los campesinos, los hijos y la madre tenían una labor y rol dentro de la producción cafetera, que aunque beneficiaba las ganancias generales de la hacienda, tenía un impacto directo en la economía campesina familiar.

Teniendo en cuenta esta forma en la cual se reclutó mano de obra para la producción cafetera, se puede observar como el campesinado vio en la aparcería una posibilidad para poder adquirir la tenencia de una tierra, que siempre, legalmente les fue negada. El éxito productivo que tuvo este sistema de enganchamiento laboral, hizo que el gobierno reconociera la necesidad de una distribución de la tierra, que permitiera



potencializar la producción cafetera, que le estaba trayendo importantes réditos económicos al país. Aunque ya se habían hecho leyes agrarias a finales del siglo diecinueve, durante la década de 1930 se crean otras serie de leyes que responden a las necesidades de distribución territorial, tratando de darle beneficios a los aparceros. También, los aparceros comenzaron a reconocer más sus derechos, formando movimientos de arrendatarios para luchar por sus derechos. Y aunque muchas veces, al intentar pelear por los derechos de la tenencia de la tierra, perdieron sus derechos, la mayoría de las veces pudieron negociar las mejoras de las tierras asignadas, logrando un reconocimiento monetario a su labor.

Conclusiones

Como se puede observar en el desarrollo de la hacienda cafetera, la falta de mano de obra para la producción llevó a que fueren contratados trabajadores permanentes, como los aparceros, los cuales al tener una disposición sobre la producción, la tierra, los medios de producción y su relación con el propietarios del predio particular, lograron obtener una tenencia de la tierra, que a largo aliento permitió que muchos de estos se convirtieran en propietarios. La viabilidad de la aparcería, según Donny Meertens se dio gracias al aislamiento geográfico de muchos territorios cafeteros, el bajo nivel tecnológico de las haciendas, entre otros elementos. Esto permitió que los aparceros aprovecharán esta oportunidad obtuvieran ganancias que antes se les había negado. Y aunque es posible encontrar procesos de contrarreforma después de la década de 1930, el conflicto social se vió cada vez más atizado por esa nueva consciencia de propiedad territorial, laboral y productiva que el campesinado comenzó a tener. Es importante ver cómo, la colonización espontánea de territorios en la frontera agrícola colombiana, vio la posibilidad en la producción cafetera un posibilidad de sostenibilidad económica en el tiempo.

La organización de esa resistencia cotidiana, que inició con un proceso de apropiación de mano de obra permanente, que los campesinos aprovecharon como una herramienta para sacarle fruto a la tenencia de la tierra, permite el nacimiento de diferentes movimientos, como el movimiento de arrendatarios, movimiento de obreros campesinos, y el reconocimiento de todos estos procesos por parte de leyes gubernamentales que pretendían regular los problemas de tenencia de la tierra.

De esta manera, a diferencia del Brasil, la producción cafetera en Colombia, durante su periodo de expansión y boom, fue desarrollada por pequeños minifundios, la necesidad



d mano de obra que ellos ofrecían, y su conexión con la tierra, permitían que a lo largo del tiempo propiedad. Esto se puede ver, analizando el impacto de la producción cafetera durante los primeros 50 años del siglo veinte y las leyes que fueron promulgadas para poder organizar esta nueva tenencia de la tierra, que traía muchos beneficios para la producción. Aquí se puede resaltar, por ejemplo, la ley 200 de 1936, la ley 100 de 1944 y la ley 135 de 1961, en donde se creó, entre otras, instituciones como el Incora -Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - y se le dio algunos beneficios a estos arrendatarios, sin embargo, es importante resaltar aquí, el proceso de contrarreforma que también minaron este proceso en años posteriores, y generaron una gran conflictividad social posterior a esto. Es importante aclarar que no todo el campesinado obtuvo estos beneficios de la producción cafetera; solo estos aparceros arrendatarios, el resto quedó relegado a ser simple mano de obra temporal, proletariado rural.

De esta manera, estos minifundios, dentro de esta gran hacienda campesina, se convirtieron en los puntos centrales de producción cafetera en Colombia, este modo de producción pudo sobrellevar diferentes problemas sociales del país. El trabajo familiar ayudó a tener dinero líquido, para contratar trabajadores en estas pequeñas propiedades.

Estos campesinos aparceros no tenían nada que perder y muchos vieron a este tipo de trabajo permanente como una oportunidad. De esta manera, mi conclusión es que leer estas acciones de apropiación de tierra y producción cafetera, como un acto cotidiano y continuo que impactó directamente la producción y el mercado cafetero. Haciendo que el gobierno implementara leyes para regular estos procesos laborales y de tenencia de la tierra. Así mismo, esto permitió a estos aparceros crear esferas comunitarias que impactaron directamente en la economía colombiana. Es posible, entonces, decir aquí que esta economía de aparcería del café generó un proceso de resistencia a los intereses de la élite en aquel momento.

Notas

¹ Traducción propia.

² Traducción propia.

³ Traducción propia.



Biografía

Arango Gaviria, Oscar Ed. 1998. *Café, Medio Ambiente y Desarrollo Social*. Comité Departamental de Cafeteros. Pereira - Risaralda - Colombia.

Bejarano, Jesús Antonio. 1980. "Los Estudios Sobre la Historia del Café en Colombia." Cuadernos de Economía, Volumen 1, Número 2, p. 115-140. Universidad Nacional de Colombia.

_____. 1983. "Campesinado, Luchas Agrarias, e Historia Social: Notas para un Balance Historiográfico". In *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*.

Universidad Nacional de Colombia, No. II.

Estrada, Fernando. 2011. "The Paths of Coffee: A Brief Economic History of Coffee in Colombia." Universidad Externado de Colombia. Facultad de Finanzas. Bogotá - Colombia.

Fajardo, Dario. 1983. *Haciendas, Campesinos, Políticas Agrarias en Colombia, 1920 - 1980*. Editorial Oveja Negra. Quito - Ecuador.

Legrand, Catherine. 1986. *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia 1850-1936*. Albuquerque: University New Mexico Press.

Machado, Absalon. 1988. *El Café de la Aparcería al Capitalismo*. Tercer Mundo Editores. Bogotá - Colombia.

_____. 2001. *El café en Colombia a principios del siglo XX*. En *Desarrollo económico y social en Colombia siglo xx* (pp. 77-97). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

alacios, Marcos 1980. *Coffee in Colombia: An Economic, Social, and Political History, 1850-1970*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ramirez Bacca, Renzo. 2004. *Formación y Transformación de la Cultura Laboral Cafetera en el Siglo XX*. Ministerio de Cultura. La Carreta Editores. Medellín - Colombia.

_____. 2008. *Historia Laboral de una Hacienda Cafetera: La Aurora, 1882 - 1982*. Universidad Nacional de Colombia. La Carreta Editores. Medellín-Colombia.

_____. 2010. "Estudios e historiografía del café en Colombia, 1970-2008. Una revisión crítica". *Cuadernos de Desarrollo Rural*, vol. 7, núm. 64. pp. 13-3. Pontificia

Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia

_____. 2010. "Trabajo y agro en Colombia. Historia de la consolidación



socio-laboral y productiva del café" Vida Del Diario Acontecer. Todos Somos Historia v 1. ,

p.303 - 320. Universidad De Antioquia. Medellin - Colombia.

Scott,James. 1976. Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Heaven, CT: Yale University Press.

_____. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Heaven, CT: Yale University Press.



Defensa del territorio habitado por parte de campesinos indígenas ante la posible implementación de megaproyectos. Una etnografía de las comunidades totonacas de Tuxtla y Zongozotla en la Sierra Norte de Puebla

Citlaly Casalez Linares

Resumen

El avance de la globalización en el mundo, que va de la mano con el capitalismo, ha acelerado e impuesto el desarrollo de procesos de producción, explotación y consumo en todo el mundo, lo que ha tenido fuertes consecuencias tanto sociales como culturales a nivel mundial que se han desarrollado en diferentes contextos. Todo esto es antecedente para el nacimiento del neoliberalismo, a principios de la década de los ochentas en México. Para que pueda desarrollarse una mayor producción que se expanda el mercado capitalista neoliberal, tiene que existir un elemento para explotar: los recursos naturales que se anclan a ciertos territorios. Lo anterior se expone a lo largo de este texto aterrizado en contextos mexicanos, más aún delimitado al estado de Puebla, en la región Sierra Norte de Puebla; en la comunidad de Tuxtla perteneciente al municipio de Zapotitlán de Méndez y la cabecera municipal de Zongozotla, ambas poblaciones totonacas.

Palabras clave

Territorio, nuevas ruralidades, campesinos indígenas, defensa

En las comunidades identificadas desde hace más de siete años, se supo que se otorgaron concesiones para explorar la zona, a empresas canadienses como Almaden Minerals; para el caso de la cabecera de Zongozotla se pretende realizar una mina en un cielo abierto sobre el cerro sagrado llamado Cozotl, En la comunidad de Tuxtla se planea realizar una hidroeléctrica sobre el río Zempoala, esta alimentación de la construcción de la minera, al ser establecido en la comunidad ante los mecanismos de respuesta de resistencia y defensa del territorio que han generado las comunidades se plantea un estudio de corte antropológico que aporte a la defensa del territorio desde la perspectiva de las nuevas ruralidades donde vemos el campo agrícola en procesos de continuidad y de adaptación a los estudios del campesinado. Desde la perspectiva de las nuevas ruralidades que Mara Rosas Baño define como:



Al cambiar las exigencias que en América Latina el sector industrial hacía a lo rural, y considerando el regreso de la dinámica económica globalizadora que ha modificado la estructura productiva y su base material en los últimos treinta años, es menester considerar también las nuevas exigencias y formas de vinculación entre ambos espacios. La Nueva Ruralidad se propone el estudio precisamente de esa nueva relación y sus efectos en el territorio rural: efectos socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de productos al mercado y movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía (Rosas, 2013, pág.3)

Desde este enfoque es que se analiza los procesos de defensa de territorio que llevan los campesinos indígenas de estas comunidades totonacas, es importante resaltar que es desde su propia perspectiva que se asumen como campesinos por trabajar el campo e indígenas por pertenecer a la etnia totonaca. La riqueza en biodiversidad y recursos naturales en México es inmensa pues cuenta con una variedad de especies, animales terrestres y acuáticos así como diversidad de plantas, tierra fértil y mineral. Tal es el caso de la Sierra Norte que se encuentra ubicada en el noreste de la entidad poblana, colindando con el estado de Veracruz al norte y con los estados de Hidalgo y Tlaxcala al Oeste.

Los recursos naturales de la Sierra Norte de Puebla son objeto de interés para la población local pertenecientes a la etnia nahua y totonaca, debido a que existe una relación de reciprocidad con los mismos, además de que forman parte de su cosmovisión y son elementos importantes de su hábitat; para los turistas provenientes de diferentes lugares que llegan a visitar los pueblos mágicos de esta región caracterizados por sus atractivos turísticos: ríos, cascadas, aguas termales, espacios para acampar y realizar actividades extremas al aire libre, y para empresas transnacionales que buscan explotar los recursos naturales existentes en la zona. Las últimas han generado diferentes movilizaciones desde hace más de 10 años en la Sierra Norte debido a que con los proyectos que mantienen sobre la zona, buscan trabajar sobre los recursos naturales ahí existentes.

Los pobladores de ambas comunidades se dedican a la siembra de maíz de temporal, café, chile, calabaza, y frijol, más del 50% de población de ambas comunidades dependen de una economía basada en la agricultura, apoyándose de la tierra y el agua de sus comunidades.



Como se puede dar cuenta las prácticas de la vida cotidiana de los habitantes de estas dos comunidades y de la Sierra Norte de Puebla giran alrededor de la tierra y el agua. Sobre estos recursos, particularmente el suelo y el agua es que la fase neoliberalista del capitalismo, se expresa en su manifestación de empresa trasnacional.

En las comunidades mencionadas desde hace más de siete años atrás, se supo que el estado había otorgado–concesiones para explorar la zona, a empresas canadienses como *Almaden Minerals* de estos megaproyectos en las comunidades.

Almaden Minerals busca implementar la minera a cielo abierto para extraer oro y plata encontrados en la zona, explotar los recursos como el agua para la construcción de la hidroeléctrica en el río Zempoala para producir energía eléctrica que beneficie los trabajos de la construcción en la mina. Los anteriores únicamente buscan obtener ingresos económicos contradiciendo las dinámicas significativas de los habitantes locales.

Para el caso del municipio de Zongozotla se pretende realizar una minera a cielo abierto sobre el cerro sagrado llamado Cozotl. En la elevación, en la parte baja y en el asentamiento poblacional de Zongozotla se encontró oro y plata, lo que implicaría el despojo, la movilidad de la población y el trastoque a sus referentes identitarios, sociales y culturales, en la comunidad de Zongozotla se estará realizado una exterminio total de la población y de los recursos naturales como el agua, suelo y aire que resultarían contaminados así como la flora y la fauna que se esfumarían. En la comunidad de Tuxtla se planea realizar una hidroeléctrica sobre el río Zempoala, esta alimentará la construcción de la minera, al ser establecida, la comunidad se verá afectada en términos simbólicos por el valor que tiene de su territorio desde las prácticas rituales –ofrendas a la tierra, fiestas patronales, el trato a la tierra por las cosechas que se tienen- que realizan, además de que presentaría carestía de agua para el uso doméstico y la agricultura.

En este tenor se generaron mecanismos de respuesta para evitar la entrada de personal perteneciente a la minera canadiense en la cabecera de Zongozotla, lo que ha traído alianzas con comunidades vecinas, así como entablar formas organizativas políticas que tienen sus antecedentes en la OIT (Organización Independiente Totonaca) conformada por campesinos indígenas habitantes de las comunidades de la Sierra Norte. La OIT nació a principios de la década de los ochentas apelando siempre por los derechos indígenas, actualmente por el derecho a la vida debido a los diferentes megaproyectos



en la sierra norte, tiene la función de dar lineamiento político a las movilizaciones en las diferentes comunidades y a entablar lazos con toda la región y el estado.

En la cabecera de Zongozotla y la comunidad de Tuxtla se realizaron diferentes actividades hace más de dos años, para llevar a cabo el proceso de defensa del territorio, en Zongozotla se encuentra la radio comunitaria conducida por cuatro hombres campesinos indígenas de habla totonaca y español la radio se sintoniza en las comunidades de alrededor del municipio, en Tuxtla realizaron asambleas comunitarias.

Se idearon formas de organización comunitaria y discursos que resaltan su adscripción étnica, por ejemplo la alianza entre comunidades indígenas que se encuentran en la misma zona como estrategia ante cualquier invasión a cualquier territorio de las comunidades, de dicha alianza surgen actividades de manifestaciones en los municipios más concurridos de la Sierra Norte como Cuetzalan, Xochitlán de Vicente Suárez, Ixtacaxtitlán y en la capital del estado. Otra acción en la que resaltan su adscripción étnica es directamente en el discurso hablado y escrito dirigido a población ajena a sus comunidades y a los tres niveles de gobierno cuando entregan documentos en rechazo a los megaproyectos. Entre otras actividades y acciones que realizan en el proceso de defensa de su territorio realzan su cultura étnica y campesina. Además de la organización por comités y la implementación de una radio comunitaria.

Estas actividades se ejercieron constantemente del año 2014 al 2015, cuando en la comunidad de Tuxtla llegó personal a excavar sobre el río Zempoala, se dice que era para ya iniciar la construcción de la hidroeléctrica, la comunidad y las personas integrantes del comité de defensa del territorio encargadas de organizar y llevar a cabo asambleas informativas llamo a reunirse en el punto del río Zempoala donde se ubicaban las personas trabajando, el pueblo se armó de armas blancas como machetes, palos y piedras para sacar a las personas, sin embargo el proceso de acción de ese momento se dividió en dos grupos, el primer grupo estaba conformado por dos señores del comité más tres personas de la comunidad, se adelantaron y lograron dialogar con las personas que estaban trabajando, al darse cuenta de que solo eran trabajadores y no estaba el dueño ni representante legal, dejaron ir a los trabajadores, evitando un enfrentamiento, cuando el grupo dos que estaba conformado por casi todo el pueblo llegó al punto de referencia ya quienes para ese momento se conocieron como trabajadores de la empresa, se habían ido del lugar.



Desde ese momento se inició un proceso legal por parte del comité de la comunidad de Tuxtla, integrado por personas adultas de entre 45-50 años, de las cuales por seguridad y petición suya, se omite su nombre. Desde ese momento hasta por los siguientes seis meses se vieron inmersos en una serie de asuntos legales para dar cuenta de que la empresa no tenía el permiso para iniciar los procesos de construcción de la hidroeléctrica además de que no había mencionado la existencia de la comunidad tan cerca del área a trabajar.

Se logró tener un amparo para la comunidad de Tuxtla y así evitar la construcción de cualquier megaproyecto, mientras que en Zongozotla en ningún momento se presentó una acción de ya empezar a trabajar, solo se sabe de la existencia del oro y plata y la existencia del proyecto minero.

A partir de que no se siguieron mostrando sucesos como el de Tuxtla, las actividades de reuniones y asambleas comunitarias se suspendieron en ambas comunidades sin embargo los pobladores de ambos espacios están en la postura de que si vuelven en algún momento con intención de construir el proyecto el pueblo entero se levantara para defender a su territorio.

Este hecho puede dar cuenta del movimiento esporádico que surge cuando el territorio de estas comunidades se ve amenazado en cierto tiempo y espacio, aunque no es un movimiento que resulte en constante organización y realización de actividades para la defensa del territorio, es importante dar cuenta del proceso de continuidad y organización inmediata que llevan a cabo los actores en caso de que se les presenten acciones amenazantes para su territorio habitado.

Como investigadora de la disciplina antropológica es importante replantearse la investigación sobre la defensa del territorio habitado ante la implementación de megaproyectos (minera e hidroeléctrica), buscando dar visibilidad a la complejidad de la sociedad rural, desde las prácticas sociales al interior y al exterior de las comunidades mencionadas ligadas a su cultura pero también envueltas políticamente a partir de lo que señalamos anteriormente.

Se da cuenta de cómo es que existe una relación entre el territorio con los habitantes que además de ser simbólica es material debido a que existe una concepción sagrada sobre el territorio en la misma medida que se presenta el uso del territorio para facilitar la sobrevivencia de estas dos comunidades. Son ambas concepciones las que mueven



la defensa del territorio y motivan a estar al pendiente de las amenazas que surjan sobre su territorio.

Como investigadores de las ciencias sociales es nuestra responsabilidad generar vínculos entre la producción académica y los procesos de movimientos sociales que se generan no solo en las sociedades rurales sino en todas las existentes, si como investigadores es posible dar cuenta y visibilidad de estos movimientos en otros espacios como este, es toda nuestra responsabilidad tomar una postura política en favor de las sociedades que ejercen día con día estos movimientos sociales.

Bibliografía

Rosas, Baños, Mara. (2013, 11 de junio). Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía Ecológica. *Polis Revista Latinoamericana*. Recuperado de: <https://bit.ly/357S47E>



As “ocupações” como estratégia de reivindicação do Direito a Terra no Brasil

Clarissa Machado de Azevedo Vaz¹

João Vitor Martins Lemes²

Resumo

A intensa conflituosidade da luta pela terra no Brasil dada por condições históricas que levam à permanência da concentração da terra característico dos latifúndios. Desde a independência formal do Brasil de Portugal (1822), e o fim das sesmarias, após 28 anos, a instituição da primeira Lei de terras (Lei n. 601/1850), promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos e abrindo caminho para o “trabalho livre”, estabeleceu-se que, o acesso à terra só se daria mediante a compra, a legislação fechava as portas para dois grandes grupos sociais que iam surgindo naquele período histórico, os escravos libertos e seus descendentes e os imigrantes pobres vindos da Europa para trabalhar nas grandes lavouras, consolidando os latifúndios. Em 1964 no período de golpe militar, que termina somente com a redemocratização do país, que culminou na atual Constituição de 1988.

A base das políticas públicas se assentam no controle burocrático do Estado para dirimir o conflito agrário com a espera da desapropriação de latifúndios improdutivos para projetos de assentamentos. Em todos os momentos históricos, houve a presença de movimentos organizados para reivindicar direitos. Nas décadas de 1950 e 1960 as Ligas Camponesas organizavam-se e ocupavam os territórios reivindicados. Na década de 1980, o movimento camponês ganha outras características, mas também utilizam a ocupação de terras como forma de reivindicação de direito. O objetivo desse artigo é analisar qual a dinâmica e o saldo que as ocupações de terras trouxeram para o movimento camponês, em especial o MST.

Palavras-Chave

Ocupação; Reforma Agrária; Resistencia; MST; Direito a Terra.

Resumen

El intenso conflicto entre la lucha por la tierra en Brasil, dada por las condiciones históricas que conducen a la permanencia de la concentración de la tierra característica de los propietarios.



Desde la independencia formal de Brasil de Portugal (1822) y el final de sesmarias, después de 28 años, el establecimiento de la primera Ley de Tierras (Ley N ° 601/1850), promulgación de la Ley Eusébio de Queiroz, que prohíbe la trata de esclavos y allanando el camino para la "mano de obra libre", se estableció que el acceso a la tierra solo sería por compra, la legislación cerró la puerta a dos grandes grupos sociales que estaban surgiendo en ese período histórico, los esclavos liberados y sus descendientes y los inmigrantes pobres de Europa para trabajar en los grandes campos, consolidando las fincas. En 1964 en el período de golpe militar, que solo termina con la redemocratización del país, que culminó en la actual Constitución de 1988.

La base de las políticas públicas se basa en el control burocrático del estado para resolver el conflicto agrario al esperar la expropiación de propietarios improductivos para proyectos de asentamiento. En todos los momentos históricos, hubo presencia de movimientos organizados para reclamar derechos. En las décadas de 1950 y 1960, las ligas campesinas organizaron y ocuparon los territorios reclamados. En la década de 1980, el movimiento campesino adquirió otras características, pero también utilizó la ocupación de la tierra como una forma de reclamar derechos. El propósito de este trabajo es analizar la dinámica y el equilibrio que las ocupaciones de la tierra aportaron al movimiento campesino, especialmente el MST.

Palabras clave

Ocupación; Reforma agraria; Resistencia; MST; Derecho a la tierra

Introdução

No final do século XIX até os anos 1960, aproximadamente, os movimentos sociais, em sua maioria, possuíam caráter revolucionário dado o momento histórico de polarização mundial entre o desenvolvimento do capitalismo – imperialismo e o projeto revolucionário de sociedade (socialismo).

Os movimentos sociais estão intimamente ligados a alguma demanda social, podendo ser de toda uma classe ou apenas parte dela. Lutando por problemas específicos, como o direito a ser enterrado em um caixão, ou acesso dos doentes a remédios, surgem as Ligas Camponesas, que mais adiante trava um intensa luta contra a expropriação dos camponeses do engenho da Galileia³, que já não conseguiam cumprir o pagamento do foro, eram expulsos do local.



Com a resistência dos camponeses organizados na Liga Camponesa, a pressão sofrida pelo Governador fez com que ele desapropriasse o engenho, realizando a justa distribuição das terras. A história das Ligas Camponesas é marcada por uma luta radicalizada e de bastante resistência, como se observa na entrevista dada por Julião ao jornal Diário de Pernambuco, à época em 30 de outubro de 1959: “As Ligas concentrarão todos os seus eletivos para o primeiro banho de sangue do governo do Sr. Cid Sampaio, caso se consume nova injustiça contra os moradores da Galiléia” (Azevedo, 1982, p. 69).

Outras declarações de líderes das Ligas Camponesas:

*Essa luta não será interrompida. O exemplo de Cuba é aqui. Nós queremos uma solução pacífica para seus problemas, mas se não conseguirmos, nos viremos aqui e convocaremos vocês a pegarem as armas e fazerem a revolução. Os grandes proprietários com o apoio do imperialismo dos Estados Unidos estão sugando nosso sangue.*⁴

Para concluir, Morais (2006, p. 71) assim explica o caráter revolucionário das Ligas Camponesas: “não se pode negar o importante papel que desempenhou em favor da reforma agrária. Foi, também, o movimento precursor, no Brasil, da insurreição armada camponesa, baseada nos postulados da preparação da guerrilha”.

Em seguida o Brasil vive um período de ditadura civil-militar, a partir do golpe em 1964, que termina somente com a chamada redemocratização do país, que culminou na atual Constituição de 1988.

A redemocratização do país também foi marcada por muitas lutas para garantias de direitos, principalmente na Constituição de 1988, onde muitas questões sociais foram contempladas.

Atualmente o principal movimento de luta pela terra é o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, fundado em 1984 no seu primeiro congresso realizado na cidade de Cascavel-PR. E soube se adaptar e evoluir, até chegar na formação atual.

Aspectos histórico do Brasil

O começo do século XX, a partir da década de 1930⁵ o Brasil ficou marcado pelo fenômeno conhecido como *êxodo rural*, em que a população do campo migrou para as



ciudades. “O designado como *êxodo rural* é anterior à modernização da agricultura, tanto em termos de fluxos objetivos, como a simples leitura dos dados censitários sugere, quanto em termos de sua percepção pela sociedade como um *problema*” (Palmeira, p. 89).

É na passagem dos anos 1940 para 1950 que emergem as migrações, tanto para as áreas rurais, como é o caso da Amazônia, como para centros urbanos, como é o caso de São Paulo, isso por dois fatores, os resquícios do ciclo da borracha no Norte, e a construção de rodovias que aumentaram a possibilidade de fluxo no Sul, Norte e Nordeste, “tais são, no conjunto, os ingredientes necessários para fazer da proletarização com ampliação do campesinato o núcleo da nova qualidade do binômio latifúndio-minifúndio, e este, o núcleo da estruturação da nova fase de modernização latifundista” (Moreira. 1986, p.13).

Esse não foi um processo homogêneo, aconteceu com diferentes intensidades e formas. Não era somente o deslocamento do campo para as cidades, mas também entre cidades médias. Diferente também no tempo, como por exemplo, os registros dos anos de 1960 mostraram uma queda no fluxo das migrações entre campo e cidade, e já na década de 70 voltou a crescer o fluxo de migrações rurais (Fibge, 1979, p. 24 apud Palmeira, 1989, p. 88; Martine, 1984, p. 88 apud Palmeira, 1989, p. 88).

Palmeira (1989, p. 88), analisando os dados do IBGE, explica que:

As migrações internas foram as grandes responsáveis pelo crescimento urbano e o IBGE estima que, em 1970, de 30 milhões de migrantes, total acumulado de residentes em municípios distintos daqueles em que nasceram, 21 milhões “se dirigiram para áreas urbanas” (FIBGE, 1979, P. 23). George Martine, levando em consideração também a migração rural-urbana intramunicipal estima que 7.299.000 migrantes se deslocaram do campo para a cidade na década de 60 e 11.003.00 nos anos 70 (Martine, 1984, p. 203).

Ressalta-se, contudo, que essa terminologia (*êxodo rural*) não deixa claro o que realmente se passa no campo brasileiro, dando entender que, as pessoas não querendo mais residirem no campo, se mudavam para as cidades. Para tanto, Moacir Palmeira assinala que a expropriação está intimamente ligada às relações sociais do camponês, visto que este já não era proprietário dos meios de produção. E, em períodos anteriores, quando se rompia uma relação (contrato tradicional), esta poderia ser reestabelecida em outra propriedade. Nesse período, o camponês ficava sem opção, a única saída era



a migração (Palmeira, 1989, p. 89). Na prática, os camponeses estavam sendo expulsos das terras em que viveram e trabalharam por anos.

Modelos de Reforma Agrária

Laureano ao citar Pinto Ferreira aponta três definições de reforma agrária, todas de cunho ideológico, senão a primeira chamada de “assistencialismo agrário”, a segunda “radicalismo rural” e a terceira reforma agrária gradualista”. Porém, nenhuma das três definições comporta a proposta de reforma agrária defendida pelo MST. Nesse sentido, a reforma agrária proposta pelo MST vai muito além da simples modificação na estrutura fundiária brasileira, de modo que “talvez a melhor maneira seja afirmar que a modificação da estrutura fundiária é apenas o começo de uma mudança social muito mais profunda” (Laureano, 2007, p. 127).

Reforma agrária do tipo clássico

O primeiro tipo de reforma agrária vem do modelo clássico do desenvolvimento capitalista. Conforme já explicado no capítulo II, na crise do feudalismo existe a necessidade de se dividir as terras, para que o camponês, então, possa se tornar proprietário produtor e desenvolver – se. Possibilitando ao pequeno produtor acumular riquezas. Nesse sentido:

Três são as características principais neste primeiro conceito proposto. A primeira característica configura-se pelo fato de essas primeiras reformas agrárias terem sido feitas de forma massiva e de terem atingido todas as grandes propriedades. A segunda característica é que limitaram a concentração de terras na medida em que determinaram o tamanho máximo da propriedade. Finalmente, foram feitas de forma rápida, já que em dois ou três anos modificaram radicalmente a estrutura fundiária existente. (Laureano, 2007, p. 128)

Ainda que, esse modelo tenha se efetivado, é um modelo aplicado em outros países, em outro século, de outra estrutura societária, devendo ser utilizado apenas, como fonte histórica da experiência de reforma agrária.

Reforma agrária através da política de assentamentos

Esse conceito se limita ao simples fato de distribuir terras, sem se preocupar com a mudança na situação fundiária do país, apenas assenta famílias. Laureano (2007) afirma que “o que se está fazendo no Brasil, por meio da pressão nas áreas de conflitos, é uma política de assentamentos e não reforma agrária”.



Além de só assentar (quando o fazem), também utilizam essa “maneira de reforma agrária” como política de colonização, muito utilizada no período de governo autoritário, conforme exemplificamos no início desse capítulo ao tratarmos dos surgimento do MST. Isso trouxe impactos desastrosos para o meio ambiente, populações tradicionais invisibilizadas, desequilíbrios, obrigando os camponeses a deixar sua cultura, família, origens, raízes. Outro aspecto mais atual, não menos importante está relacionado com a política aplicada pelo banco mundial, bem expressado por Laureano:

Uma outra crítica a esse modelo, que prioriza os assentamentos e a colonização, dirige-se à chamada “reforma agrária de mercado”. Neste sentido, autores como Marcelo Resende criticam a política implementada pelo Banco Mundial em cerca de 30 países empobrecidos. Esse modelo tem por base o fomento da venda de terras por parte dos latifundiários para os trabalhadores com pouca ou sem-terra. Podemos citar no Brasil a “Cédula da Terra”, o “Banco da Terra” e o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza e o Programa de Consolidação dos Assentamentos de Reforma Agrária – PAC. Essas experiências apontam para problemas como o aumento da pobreza e contrapõem às propostas e lutas históricas dos movimentos sociais rurais por uma reforma agrária ampla e profunda. Ao substituir a desapropriação por interesse social pela compra de terras, o Estado deixa de cumprir sua obrigação constitucional. (Laureano, 2007, p. 129)

Conforme foi exposto no segundo capítulo da presente pesquisa, esse modelo de Reforma agrária se adéqua ao que o Estatuto da Terra vem praticando.

Reforma agrária por meio da massiva desapropriação

Este não é um conceito de reforma agrária, mas sim uma necessidade, que vem de uma constatação prática. No item anterior mostrou-se que, a reforma agrária realizada no Brasil não passa de uma política de assentamentos que, na prática, não supera o modelo de latifúndio.

É nesse sentido que o MST vem propor uma nova modalidade de reforma agrária mas, que, para se alcança-la é necessária passar por uma desapropriação que realmente coloque fim ao sistema de latifúndio, e não que contribua para a sua manutenção. Dessa forma, Laureano (2007, p. 131) explica:

Essa, então, a principal característica do terceiro conceito de reforma agrária defendida pelo MST: a necessária realização de um amplo programa de desapropriação de terra, de forma rápida, regionalizada, para distribuí-la a todas as famílias sem-terra, que são, segundo Stedile, no momento atual, 4,5 milhões em todo o Brasil. A partir dessas



medidas e sob a perspectiva do desenvolvimento da dignidade de significativa parcela da população brasileira que quer “fazer da terra seu lugar de reprodução”, a reforma agrária será considerada “uma das faces de luta contra a desigualdade econômica e social e, portanto, uma das ferramentas da construção de uma efetiva democracia, baseada na possibilidade de contínua expansão e criação de direitos”.

Dessa forma, após a justa distribuição de terras, colocando fim ao latifúndio há de se continuar uma política de reforma nos assentamentos, para dar continuidade a ações emancipadoras, como o desenvolvimento da agroecologia, formas de comercialização da produção, o cuidado com a educação no campo, entre outro.

O Estatuto da Terra não previu uma desapropriação em massa, mas sim, uma transformação gradativa no binômio minifúndio-latifúndio, o que tornaria, a reforma agrária inviável. Porém, de acordo com a teoria do pluralismo jurídico, não se pode desconsiderar os ganhos alcançados pelas leis, mesmo que tenham sido construídas por um Estado monista.

Positivização monísta da Reforma Agrária: reforma agrária brasileira

O Estatuto da Terra é o instrumento histórico utilizado para conduzir gradualmente à extinção do minifúndio-latifúndio. Em sua sistemática veio dividido em quatro grandes partes, sendo introduz o caráter ideológico de seus elaboradores sobre a questão agrária no Brasil, nesse sentido:

O estatuto da terra te uma gestação que ultrapassa esses nove meses. Na forma em que veio a ser aprovado, é a síntese sob a conjuntura do regime militar de um processo cujo início remonta aos anos finais da década de 50, mas cujo momento de configuração são os primeiros anos da década de 60 (1961 – 1963), nos quais a pressão organizada do campesinato por uma reforma agraria ganha nova amplitude com a criação do MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra), em 1961, da LCB (Liga Camponesa do Brasil), em 1963, e da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), em 1963. (Moreira. 1986, p. 10).

Construído e aprovado no contexto de ditadura trouxe em seu texto quatro títulos, separando a Reforma Agrária da Política Agrícola. Nesse sentido, podem-se extrair três conclusões da lei: 1. a vinculação do uso social da terra ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento econômico, 2. a definição da empresa rural como objetivo a ser atingido com a “gradual extinção do minifúndio e do latifúndio”, 3. O referenciamento geral da questão do campo à industrialização do país” (Moreira, 1986, p. 10).



Outro destaque do estatuto foi a divisão do significado de latifúndio, passando a classificá-lo utilizando os critérios de dimensão e de exploração, o que torna a empresa rural um paradigma para se conseguir classificar um imóvel rural como latifúndio.

Essa concepção de imóvel rural, módulo rural e empresa rural, está diretamente ligada com a manutenção do modelo fundiário, e isso pode ser observado concretamente quando se analisa a espacialidade das regiões tidas como “homogêneas”, sendo elas: 1. regiões críticas, 2. regiões em estado avançado de desenvolvimento social econômico; 3. regiões já economicamente ocupadas; 4. regiões ainda em fase de ocupação econômica (Moreira, 1986, p. 11).

Portanto, o modelo estabelecido pelo Estatuto da Terra, para se chegar ao fim gradual do minifúndio-latifúndio, é um modelo que vai servir ao capital, permitindo ações diversas conforme a característica da sua espacialidade.

Segundo o censo agropecuário do Brasil de 1980 (FIBGE), treze anos após a edição do Estatuto da Terra é elevado o índice de concentração monopolista da terra. Tal estatística é muito agravante, uma vez que, é ela quem vai determinar os resultados em todas as outras áreas que dizem respeito ao campo, como a quantidade de trabalhadores empregados nas empresas rurais, o tipo de produção para consumo interno, e a quantidade de consumo de elementos determinantes para a análise da modernização:

Os estabelecimentos com até 100 há correspondem a 89,6% do total dos estabelecimentos rurais e detêm não mais que 20% das terras, enquanto os estabelecimentos com mais de 1.000 há correspondem a menos de 1,0% do total dos estabelecimentos e detêm 45,0% das terras. (Moreira. 1986, p. 11)

Associando a desigualdade de desenvolvimento espacial à aos dados de uso da terra, obtém-se uma realidade ainda mais esdrúxula; isso porque, dentro da divisão interna da propriedade, quanto maior sua extensão, maior é o tamanho da margem sem utilização efetiva, nesse sentido explica Moreira:

(...) a utilização efetiva cresce proporcionalmente com o tamanho do estabelecimento: 12,2% nos estabelecimentos de até 10 há, atingindo 48,8%, nos estabelecimentos com mais de 10.00 há. Em relação ao uso efetivo com lavoura, temos uma relação inversa: 64,6% nos estabelecimentos de até 10 há e chegando a cair para apenas 1,5% nos estabelecimento com mais de 10.00 há. (Moreira. 1986, p. 12)



Analisando a utilização através do trabalho efetivo na terra, a realidade é mais alarmante, pois demonstra quão falacioso é o discurso de que a modernização da grande propriedade pode gerar empregos, colocando em contradição também a própria ideia de função social trazida pelo Estatuto da Terra. As estatísticas mostram que nas propriedades com até 100ha correspondentes a 20% das terras, totalizam 90% das propriedades (estabelecimentos) são responsáveis por 78,6% do emprego rural, sendo que nos estabelecimentos com mais de 1.00 ha, responsáveis por 45% das terras, não chegam há 1% das propriedades (estabelecimentos) são responsáveis por 1,5% do emprego rural (Moreira, 1986, p. 12).

Aproximando os números temos 19% de todo o emprego rural responsável por 15% da produção de abastecimento alimentício de todo o país, porém sem distribuir renda, pois, segundo as estatísticas, 20% da renda da produção de abastecimento alimentício são apropriados por 1% dos mais ricos. Não distribuição de renda, nem modificação do binômio minifúndio-latifúndio.

A “modernização do campo”, na prática, mantém a existência do binômio minifúndio-latifúndio, obrigando o minifúndio a cumprir com toda a obrigação de produzir os alimentos consumidos internamente, nas cidades, indústrias e até mesmo nos latifúndios, a baixos custos, e, também, nos latifúndios. Essa prática deixa o latifúndio livre para se inserir no mercado internacional, e produzir o que lhe for determinado, e ainda, sustenta a demanda urbano-industrial, momento em que há migração do proletariado do campo para a cidade.

A modernização latifundista apresenta alguns aspectos, primeiro a “fronteira em movimento” que deve ser vista não apenas pelo seu aspecto geográfico, mas também como responsável pela incorporação da agricultura ao circuito mercantil, contribuindo para ampliar a escala de produção da pequena propriedade camponesa autônoma.

O segundo aspecto é o “crescimento demográfico rural” podendo ser entendido como a proletarização do camponês que foi expulso de suas terras com o fim da subsunção formal. Ou seja, a expulsão do campesinato dominial das terras de sua vinculação, aumentando o número do proletariado camponês, sem-terra para trabalhar e sem trabalho assalariado. O terceiro aspecto é a “importação” de tecnologia, que será utilizada na produção de monocultura.



O tripé de sustentação da capitalização do campo pela via da modernização, foi garantido pelo Estatuto da Terra com o tratamento diferenciado da Reforma Agrária e da Política Agrícola. Observa-se assim, que, na região Amazônica, por exemplo, houve colonização como política agrícola e Reforma Agrária, ao mesmo tempo. Na prática, serviu apenas para a remoção dos camponeses.

Assim, a elevação do cenário econômico-social do Brasil e sua inserção no quadro da divisão internacional do trabalho, determinará qual o peso específico das determinantes “terra e trabalho”, e a sua influência na modernização do campo. Porém, é a divisão internacional do trabalho, o espaço de origem das forças produtivas, que solidificará o processo interno do desenvolvimento do capitalismo, tornando-se uma nova forma de realização do imperialismo. Nesse sentido, explica Moreira (1986, p. 12):

E, assim, só com a entrada do desenvolvimento do capitalismo no Brasil na fase da bidepartmentalização do sistema fabril, e a partir daí ampliando-se para abarcar o sistema econômico nacional no seu todo, bidepartmentalização esta que é uma internalização da divisão internacional do trabalho do pós Segunda Guerra, que teremos o binômio latifúndio-minifúndio molecular entrando em decomposição e a nova qualidade emergindo.

A contradição interna gerada pela existência do binômio latifúndio – minifúndio continua existindo, porém de forma mais aguda, uma vez que o campesinato dominial deixou de existir, o campesinato autônomo acumula as tarefas de produção e abastecimento da indústria urbana, tarefa menos rentável no campo, e facilmente liberada pelo latifúndio.

A relação do capital com a produção da pequena propriedade acontece de duas formas, sendo que, a primeira se encontra no período de subsunção formal, é feita com o minifúndio dominial, aqui o capital age despojando o camponês de sua vinculação com a terra, utilizando formas pré-capitalistas de acumulação. A segunda forma está centrada já na fase da subsunção real, onde o minifúndio é autônomo, aqui a relação de exploração é predominante da “subsunção da renda em termos que se assemelham a subsunção do trabalho, assumindo a renda as formas capitalistas da renda diferencial e/ou absoluta” (Moreira, 1986, p. 15).

Os objetivos do Estatuto da Terra era eliminar o binômio minifúndio-latifúndio, de maneira gradual, a fim de se instituir a empresa rural. Aqui, no início, criou-se a figura do imóvel rural, o que possibilita a valoração do imóvel e a intervenção do Estado na sua relação com o homem. Outro fator que se observa, também já mencionado, é a



separação da Reforma Agrária da Política Agrícola, sendo que, o próprio artigo primeiro, em seus parágrafos seguintes determinam qual a definição de Reforma Agrária:

Parágrafo primeiro – considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.

Também a definição de Política Agrícola:

Parágrafo segundo – entende-se por Política Agrícola o conjunto de providencias de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do País.

Não houve apenas a separação da Reforma Agrária da Política Agrícola, mas sim uma orientação para a “industrialização do País”, que não pratica apenas promoveu a “modernização do campo”, ao mesmo tempo em que, se estabelece a garantia de pleno emprego.

Para que haja a possibilidade de se destinar um imóvel rural para a realização do Projeto de Reforma Agrária, é necessário que esse imóvel não esteja cumprindo a função social da terra, nos limites orientados pelo artigo segundo do Estatuto da terra.

Porém, há que se ressaltar que o Estatuto trouxe mudanças em relação a antiga Lei de terras (601/1850), uma vez que trouxe princípios de proteção à terra e novas modalidades da aquisição além da compra e venda estabelecidas na antiga

Assim, da análise que se faz em relação à reforma agrária é que a Lei estabelece relações entre o homem e a propriedade. Uma vez que, na época de sua elaboração, havia o entendimento de que, para solucionar a questão agrária no Brasil era necessário adequar à política econômica, ou seja, o fato de o trabalhador rural não ser proprietário, e nesse sentido, de existir latifúndios, não era um problema para o país.

Atualmente, o tamanho da propriedade familiar, que é utilizada como parâmetro para se estabelecer o que é o minifúndio (extensão), é estabelecido pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), de acordo com a Lei nº 11.326, de 2006 (Lei da “Agricultura Familiar”). Deixou de existir a figura do latifúndio por extensão, uma vez que houve alteração da legislação do Estatuto da Terra, e a exclusão da medida de módulo rural. Isso trouxe outro impacto para a realidade fundiária, porquanto “o fato de tal parâmetro



ter deixado de existir na lei significa que, a rigor, não impende qualquer obstrução legal a que um único proprietário possa adquirir toda a terra agricultável de um município” (IPEA).

Mesmo que se garanta a função social da propriedade, o seu urso racional passa por uma distribuição mais igualitária e, nesse sentido, o reconhecimento do latifúndio por extensão é primordial para sua realização.

Na década de 1980, discutiu-se a redemocratização do país, com diversas manifestações acerca da nova Constituição que seria construída. O Movimento Camponês ainda reivindicava a reforma agrária, uma vez que as alterações no campo, estabelecidas pelo Estatuto da Terra, não trouxeram mudanças em relação aos milhares de camponeses pobres sem-terras do país.

Em 1988, a Constituição da República de 1988 foi promulgada. O Capítulo III – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária – do Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira - proporcionou à Reforma Agrária figurar no patamar mais elevado dentro do ordenamento jurídico do Brasil.

Por se tratar de um período de redemocratização, houve a participação de diversos setores da sociedade civil na construção do texto constitucional, mas, ainda assim, o texto ficou sujeito à crítica. Isso porque os mecanismos de interpretação da Constituição também foram reelaborados, trazendo no resultado final dificuldades para a interpretação e, conseqüentemente, realização da Reforma Agrária. Nesse sentido citamos a posição do professor Carlos Frederico Marés (2003, p. 118):

A primeira providencia dos latifundiários, chamados de ruralistas, foi introduzir um vírus de ineficácia em cada afirmação. Assim, onde a Constituição diz como se cumpre a função social, se lhe acrescenta que haverá de ter uma lei (outra lei, inferior) que estabeleça “graus e exigências”, com isso, dizem os Tribunais, já não se pode aplicar a Constituição sem uma lei menor que comande a sua execução.

Assim como o Estatuto da Terra foi construído dentro de um momento histórico em que o mundo passava por mudanças no seu modelo econômico, a Constituição da República de 1988 não conseguiu romper com os aspectos do Estado-Nacional e com a utilização do Direito positivado para a manutenção da propriedade privada. Dessa forma, a interpretação da Constituição em relação à Reforma Agrária tornou-a mais difícil, como é o caso do artigo 185, que permite uma interpretação que privilegia a propriedade



privada absoluta em detrimento da distribuição “a leitura literal do artigo 185 que conclui que uma propriedade rural que produza riqueza e de lucro, seja insuscetível de desapropriação e de qualquer outra restrição legal, independentemente de exercer sua função social”. (Marés. 2003, p. 119).

Para Marés, essa interpretação que se faz do artigo 185 da Constituição Federal de 1988, reflete em outros artigos, como é o caso do artigo 186 que estabelece os critérios que devem ser observados para que se cumpra a função social da propriedade, que deveriam ser analisados em conjunto, ou seja, uma propriedade que descumprisse um de seus requisitos já deveria ser passível de desapropriação para fins de reforma agrária, e não o contrário. (Marés. 2003, p. 120).

Outro aspecto, também levanta pelo professor Marés, está no reflexo que essa interpretação trouxe sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estabelecidos no artigo 3º da Constituição, “torna inaplicável e inócuo os propósitos de erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidaria e garantir o desenvolvimento nacional”. (Marés. 2003, p. 120).

Por mais que, desde a colonização houvesse legislações referentes a formação fundiária do Brasil, a Reforma Agrária entra para o cenário de discussões a partir dos anos 50 e, sua positivação acontece em 1964. Mesmo com isso uma legislação, os movimentos sociais de luta pela terra continuaram as suas reivindicações por Reforma Agrária. E, mesmo com a garantia constitucional, observa-se que a interpretação que se faz ainda privilegia a propriedade privada absoluta da terra.

Sobre a acumulação de terras apresentamos a constatação encontrada no relatório do IPEA (2015, p. 362):

Em 1960, os estabelecimentos agropecuários de mais de 1 mil hectares correspondiam a apenas 0,97% do número total e concentravam 44,15% da área, dominando uma estrutura de distribuição da propriedade da terra cujo índice de Gini¹⁹ chegava a 0,84; em 2006, os estabelecimentos com mais de 1 mil hectares somavam 0,92% do total e concentravam 45% da área, e a desigualdade da distribuição se expressava em um índice de Gini de 0,85.

Mesmo depois de todo o caminho que a Reforma Agrária percorreu até chegar a sua positivação, e após 50 anos da promulgação do Estatuto da Terra, já transcorridos 28 anos da instituição da garantia constitucional da Reforma Agrária (com a promulgação



da Constituição Federal), a legislação não conseguiu romper com a concentração de terras, necessitando, ainda, da existência do movimento camponês, para que se exija a realização da Reforma Agrária.

Conclusão

Observa-se que, mesmo com a garantia da reforma agrária como direito positivado, sua efetivação foge do que é desejado e necessário para os sujeitos coletivos de direito.

Em outros tempos, como mencionado no início, as Ligas Camponesas traziam uma reivindicação radical do que acreditava ser a reforma agrária sob a insígnia “Reforma agrária na Lei ou na Marra”.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, inicia seu percurso ainda com uma herança das Ligas Camponesas, porém, atualmente, não declara ou utiliza as ocupações de terras como forma de reivindicação da própria terra. Restringindo essa tática apenas para casos pontuais, como é o exemplo da ocupação da sede da fazenda do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, ou de seu histórico e permanente caso da fazenda Araupel (antiga Giacomet Morandi).

Entretanto, em 1990 um outro movimento camponês se desenvolve no Brasil, em especial, no norte do país. É o caso da Liga dos Camponeses Pobres, que declara esse nome para fazer o resgate histórico radical das Ligas Camponesas. Nas suas reivindicações por terra sob a insígnia de “Terra para quem nela vive e trabalha” desenvolve o caráter revolucionário das tomadas de terras através das ocupações.

Notas

¹ Professora de Direito da Universidade Federal do Tocantins - UFT. Doutoranda em Direito da Universidade de Brasília – UNB. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás – UFG. Advogada Popular da Associação Brasileira dos Advogados do Povo – ABRAPO.

² Professor de Direito da Universidade Federal do Tocantins - UFT. Doutorando em Antropologia e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás – UFG.

³ Situada no município de Vitória do Santo Antão em Pernambuco, eram um engenho de fogo morto que sobrevivia da produção e do foro pago pelos camponeses. Seu proprietário conseguiu na justiça uma reintegração de posse para a retirada de todos que devesse o foro.



⁴ Trecho de falas líderes camponeses recolhidas pelo jornalista Tad Szulc, em matéria publicada no jornal The New York Times de 31 de outubro de 1960 sob o título “Pobreza no nordeste do Brasil gera ameaça de revolta” (Montenegro, 2003, p. 262).

⁵ Alfredo Wagner Berno de Almeida, analisando a literatura que, entre 1930 e 1972, tratou do “êxodo rural”, assinala que o marco temporal adotado pelos autores é de 1930.

Referências bibliográficas

Guimarães, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 6. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

Harvey, David. Los Límites del capitalismo y la teoría marxista. Mexico: fundo de cultura econômica, 1990, pp. 352-360.

Herkenhoff, João Batista. Movimentos sociais e Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

Marques, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

Martins, José de Souza. O cativo da terra. 9. Ed. São Paulo: Editora Contexto, 2010.
_____. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira. In: Tempo Social. Ver. Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-70, maio de 1996.

Marx, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro Primeiro. O processo de produção do capital. Volume II. Parte quinta. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

Moreira, Ruy. O plano nacional de reforma agrária em questão. Revista Terra Livre. Rio de Janeiro: AGB, 1986.

Panini, Carmela. Reforma agrária dentro e fora da lei. 500 anos de história inacabada. São Paulo: Paulinas, 1990.

Souza Filho, Carlos Frederico Marés. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.

Sousa JR., José Geraldo de. Direito como Liberdade: O Direito Achado na Rua. Experiências populares emancipatórias de criação do Direito. 2008. 338 p. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília.

_____. Movimentos sociais: emergência de novos sujeitos: o sujeito coletivo de direito. In: arruda JR., Edmundo Lima de (Org). Lições de direito alternativo. V. 1. São Paulo: Acadêmica, 1991.

_____; molina, Mônica Castagna; Tourinho Neto, Fernando da Costa (Orgs.). Introdução crítica ao direito agrário. Série O Direito Achado na Rua, vol. 3. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002



La lucha del conflicto armado, después de las armas: El caso del ETCR

Urías Rondón

Diego Alejandro Álvarez Pinzón

Resumen

Después del proceso de paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el año 2016, se crearon las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que luego se transformaron en los ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) para la desmovilización de los integrantes de este grupo armado. La importancia de estos espacios radica en la nueva oportunidad que le brindan a los ex combatientes para su reincorporación a la sociedad civil con nuevas funciones, pero ¿qué papel juegan estos lugares para la continuación de la paz en los territorios y cómo se articulan a las propuestas por las cuales luchaban en el conflicto armado? Esta ponencia pretende, responder a estos interrogantes o al menos acercarse a la visión de la comunidad del ETCR Urías Rondón en la vereda Playa Rica, del municipio de San Vicente del Caguán.

La metodología llevada a cabo tendrá un componente cualitativo- hermenéutico; en 3 visitas al ETCR durante el año 2019 en las que se realizarán algunas entrevistas semi estructuradas y grupos focales que permitan un diálogo organizado entre los propios integrantes de la comunidad y el investigador. Al finalizar, con estas aplicaciones se sistematizará la información en categorías que representen el interés de la mayoría de participantes, y desde donde se obtendrán los resultados a las preguntas planteadas.

Palabras clave

ETCR, FARC-EP, conflicto armado, reincorporación, paz.

Introducción

Luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, surgen innumerables estudios alrededor de la aplicación de lo establecido en los Acuerdos de Paz, muchos de estos estudios hacen parte de una comprensión de cómo se está llevando a cabo estos procesos en los territorios más afectados en Colombia, que en su mayoría son zonas rurales. Este seguimiento académico ha permitido conocer espacios en los que se desarrollan diferentes alternativas de paz a las establecidas en el Acuerdo, lo que ha generado un interés por desarrollar estudios y propuestas con enfoques territoriales, que no sean descripciones



de lo que sucede en las regiones, sino que permitan desde la voz de los habitantes construir nuevas lecturas de sus situaciones luego de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC, voces que también incluyen a los ex guerrilleros que han transformado su rol dentro de la sociedad, para asumir con compromiso la reincorporación y la construcción de paz.

Uno de los puntos (3.2.2) pactados en el Acuerdo de Paz por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC – EP, enuncia el proceso para la reincorporación económica de las personas pertenecientes a este grupo. Para conseguir esto, se plantearon diferentes estrategias de sostenimiento económico, entre estas los proyectos productivos, que tendrían lugar en los 24 ETCR (Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación), los cuales se encuentran en diferentes regiones de Colombia, donde las FARC tenían presencia militar. Para esta investigación nos centramos en el ETCR Urías Rondón, ubicado en el municipio La Macarena, perteneciente al departamento del Meta.

Se presentará así una contextualización de este punto en los Acuerdos de Paz, los proyectos productivos, el territorio en el cual nos centramos y cómo esta propuesta ha consolidado una alternativa en la construcción de paz territorial por parte de los ex guerrilleros de las FARC – EP, quienes en muchos casos por iniciativa propia han empezado a desarrollar trabajos en conjunto con las comunidades aledañas, nacionales e internacionales. Esta ponencia será un relato de lo que sucede en el ETCR Urías Rondón mucho más allá de lo que está establecido en los documentos oficiales.

El punto 3.2.2.6 del Acuerdo de Paz final que busca la “Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social” (2016, p.74) establece en 3 apartados la forma en la que los proyectos productivos funcionarán, iniciando en una fase de un censo socioeconómico realizado a los ex guerrilleros de las FARC – EP que estarán reunidos en las ZVTN (Zonas Veredales de Transición y Normalización, posteriores ETCR). Al obtener y analizar los resultados de este censo, el gobierno identificará los programas y proyectos más viables para la vinculación laboral del mayor número posible de hombres y mujeres que pertenecieron a dicha guerrilla. Se establece en este punto que para el desarrollo y la ejecución de los programas o proyectos productivos sostenibles se le brindará por única vez a cada ex guerrillero que tenga una idea emprendedora individual o colectiva, un sustento de 8 millones de pesos, en donde



ECOMÚN será el fondo destinado para la ejecución de proyectos productivos y servicios en el marco de la reincorporación económica y social.

En este punto del Acuerdo de Paz se habla todavía de las ZVTN (Zonas Veredales Transitorias de Normalización); pero la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI, que se encuentra conformada por representantes del Gobierno Nacional y las FARC – EP, realizaron un comunicado el 29 de mayo de 2017 en el cual se establecía la conversión de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en un periodo de transición entre el 1 de junio y el 1 de agosto del 2017. En el documento también se establecen las condiciones del cambio y las políticas que lo acogerán, además se hace explícito que los ETCR funcionarán como espacios para capacitar a los integrantes de las FARC – EP en diferentes labores que les permitirá una reincorporación efectiva a la vida civil, además de atender la formación técnica y la gestión de los proyectos productivos de los ex guerrilleros; sumado a esto, los ETCR también funcionaron como la posibilidad de vincular a las comunidades aledañas, con el fin de crear un modelo de reincorporación colectivo (ARN, 2019).

Así, se consolidaron en Colombia 24 ETCR en las diferentes regiones del país donde la guerrilla de las FARC - EP tenía presencia; los proyectos productivos que se asignaron a cada ETCR o que se presentaron por parte del gobierno, están en su mayoría diseñados desde las características presentes en la economía de cada región a la que el ETCR pertenezca, buscando que la posibilidad de surgimiento de estos proyectos o programas sea eficaz, no sólo en su aplicación, sino en la participación dentro del mercado local y/o nacional.

Para el caso del ETCR Urías Rondón, la ARN (Agencia de Reincorporación y Normalización) determinó que la línea productiva debía ser la ganadería, y el proyecto de autoconsumo estaría ligado a la piscicultura y producción de alimentos de consumo animal. Para conseguir esto, quienes quisieran participar deberían recibir capacitaciones en producción agropecuaria, adecuación de módulos de ganadería, piscicultura y porcicultura. Así mismo, se propusieron diferentes programas dirigidos a la innovación en comunidades de paz, que tendrían que ver con un énfasis en el desarrollo ambiental de la región.



Fundamentación del problema

Son pocos los estudios que se han realizado sobre los proyectos productivos de las FARC y cómo estos están aportando a la construcción de paz territorial. Si bien existen diferentes documentos bibliográficos que hablan acerca de proyectos productivos con víctimas del conflicto armado y ex paramilitares, es necesario comprender las necesidades de la antigua guerrilla de las FARC, para diseñar proyectos específicos a esta población y no caer en el facilismo de aplicar un modelo usado con otras comunidades, pues esto podría representar problemas para los ex guerrilleros, ya que sus necesidades de reincorporación económica, social y política, resultan ser distintos de los demás grupos armados y comunidades afectadas por la violencia.

El cambio de figuras jurídicas de los espacios donde están asentados los ex guerrilleros, ha representado un problema en las garantías de la aplicación de los Acuerdos de Paz, y ha reforzado el poco apoyo estatal denunciado por la propia población perteneciente a estos espacios, por algunas instituciones gubernamentales y la sociedad civil en general.

Conocer y visibilizar en qué proceso va la reincorporación de estas personas, sus apuestas por la paz y la realidad de los territorios, es una labor que no sólo concierne a la academia sino a todos los colombianos, de ahí la necesidad de promover un relato acerca de lo que pasa en uno de estos ETCR.

Un ETCR al que poco ha llegado la ayuda estatal, la cual se ha manifestado a través de la presencia en el espacio de delegados de la ARN, pero que no muestran un compromiso serio con la aplicación de lo acordado dentro del Acuerdo de Paz, sumado a esto, el cambio de las figuras jurídicas que se da por el cumplimiento de los términos legales de estos espacios, ha permitido que se contemple la idea de mover geográficamente este espacio, propuesta en la que la comunidad perteneciente a este se opone, pues su interpretación del asunto es que buscan sacarlos para permitir el ingreso de multinacionales a la región para explotar los recursos naturales y mineros de la zona. Aunque estas personas ya no se encuentren armadas, aún poseen legitimidad (pues existen casos donde solicitan la ayuda del ETCR) ante los habitantes de la región quienes también se oponen a que el ETCR sea trasladado.

La resistencia de estos ex guerrilleros dentro del ETCR y el territorio donde se encuentran luego de la firma del Acuerdo de Paz, es muestra de su compromiso con la reincorporación y la paz del país, por eso, es necesario apoyar la voz de quienes por



distintas circunstancias no pueden o no son escuchados en otros ámbitos diferentes a los de su comunidad.

Metodología

La metodología de esta investigación tuvo un carácter cualitativo-hermeneúico, desde la cual se aplicó como principal técnica de recolección de información las entrevistas, y la observación participativa. Pues las dinámicas del territorio no posibilitan un método riguroso, por eso, basados en el enfoque territorial son los mismos ex guerrilleros quienes nos dieron las pautas a seguir, dirigiendo hacia donde querían que se desarrollara la investigación y su voz fuera visibilizada, así el investigador se convierte en un acompañante en los procesos llevados a cabo en el ETCR sin imponer su visión, dándole paso a otros conocimientos.

La población con la que se trabajó para la investigación pertenece al ETCR Urías Rondón, donde se encuentran en su mayoría hombres y mujeres ex guerrilleros de las FARC – EP, muchos de ellos pertenecientes al extinto Bloque Oriental. Este ETCR se encuentra ubicado en el departamento del Meta, y su población es heterogénea en términos de proveniencia, pues no todos pertenecen al departamento en el cual están asentados, muchos de ellos son del Tolima, Putumayo y Caquetá; se vinculó a la investigación a aquellos ex guerrilleros que hacen parte de los proyectos productivos, ya sea desde su coordinación o planeación, hasta la participación como empleados o ayudantes, con el fin, de que desde su voz y experiencia trazaran la ruta para realizar y concluir la investigación.

En el periodo de noviembre de 2018 a mayo del 2019 se realizaron 3 visitas al ETCR Urías Rondón en las cuales se aplicaron entrevistas a ex guerrilleros (que posteriormente se sistematizaron), personas de la comunidad de la vereda Playa Rica (es la comunidad más cercana al ETCR), y personas que llevan diferentes procesos sociales en San Vicente del Caguán. Estos acercamientos permitieron recolectar información acerca de los proyectos productivos propuestos por el Estado, y los que han surgido como iniciativa propia de la comunidad del ETCR.

No hay que ignorar el hecho de que la comunidad del ETCR vinculó activamente al investigador en su diario vivir, lo que permitió comprender de mejor manera la situación de los proyectos productivos y la articulación con las personas que trabajan en ellos, el territorio y las condiciones en el cual se desarrolla.



Resultados y discusión

Los resultados de la investigación que pudieron obtenerse ponen a la luz la situación real de un ETCR olvidado por la gestión efectiva del Estado, pero que con la fuerza de resistencia de las personas que están en él ha salido adelante como un nuevo espacio que sigue construyendo paz en el territorio desde diferentes actividades y proyectos que serán expuestos a continuación.

Como se mencionó en apartados anteriores, los proyectos productivos que se debían desarrollar en el ETCR Urías Rondón tenían que ver con la línea productiva de la ganadería, la adecuación de módulos de ganadería, la producción agropecuaria, la piscicultura y la porcicultura. Sin embargo, este plan propuesto por la ARN no se consolidó en la realidad, pues se presentaron diversos problemas con la aplicación y gestión de estos proyectos productivos, problemas que provienen desde la incompetencia de las empresas a quienes son entregados los proyectos para dirigirlos, hasta el mismo gobierno, quien en innumerables procesos burocráticos termina por reducir los presupuestos para los proyectos, el tiempo de aplicación, o en su peor caso, cancelarlos o cambiarlos, ignorando las condiciones materiales del territorio; aspecto importante para cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo en la zona.

Otro gran problema para el desarrollo eficaz de los proyectos productivos, tiene que ver con la ubicación geográfica del ETCR (este problema también se evidencia en otros ETCR de Colombia), pues están ubicados a largas horas de distancia con los centros urbanos o de distribución, lo que dificulta la comercialización de los productos que se generen de estos proyectos, impidiendo una participación favorable en los mercados locales.

Además de estas condiciones materiales, los ex guerrilleros expresan su inconformidad con el personal designado por el gobierno para consolidar y organizar los proyectos productivos, pues en muchas ocasiones se les entrega los proyectos a cooperativas o empresas que buscan un lucro económico, y no realmente favorecer la reincorporación económica de los ex guerrilleros. Esta falta de compromiso de parte de quienes deberían hacer cumplir lo que se encuentra establecidos en los Acuerdos, ha imposibilitado crear planes de trabajo en conjunto con el gobierno colombiano para solucionar las necesidades de las personas que habitan los espacios de reincorporación.

El único proyecto que terminó en marcha y que fue desarrollado con el gobierno colombiano, es una plantación de caña, que permite a la comunidad del ETCR producir



panela y miel, y a su vez vincularse con la comunidad de las veredas aledañas, pues este espacio, es uno de los pocos que cuenta con un trapiche en la zona para procesar la caña. Por esta razón, personas que también cuentan con cultivos de este tipo, empezaron a acercarse al ETCR, para formular acuerdos en conjunto que permitieron que estas personas también hicieran uso de las instalaciones.

Sin embargo, a pesar de las dificultades que se han presentado en el ETCR Urías Rondón para la planeación y ejecución de los proyectos productivos, las personas que habitan en él, que no son sólo ex guerrilleros, sino también familias que lograron reunirse después de la firma del Acuerdo de Paz, empezaron a organizarse y por iniciativa propia construir proyectos que los beneficiaran a corto y largo plazo en diferentes economías.

Los principales proyectos que vienen siendo desarrollados por los ex guerrilleros tienen lugar dentro del ETCR y en una antigua finca que fue construida para ser un colegio Fariano en la antigua zona de distensión del Caguán; al término de estos acuerdos de paz fallidos en el gobierno de Andrés Pastrana, el predio fue confiscado, y para el proceso de paz con el gobierno de Santos fue puesto a disposición de los desmovilizados de las FARC para trabajar y desarrollar proyectos productivos que pertenecieran al proceso de reincorporación, proyectos que nunca llegaron, y la comunidad tuvo que empezar a gestionar con recursos propios nuevas alternativas.

La producción en esta finca es de yuca, plátano, arroz, maíz, entre otros alimentos que son cultivados de manera voluntaria por ex guerrilleros pertenecientes al ETCR, ya que estos alimentos son para consumo propio y el auto sostenimiento del espacio territorial. Existen pocas labores que sí son remuneradas económicamente, depende del tipo de trabajo y la capacidad física o intelectual que requiera, pero queriendo extender esta remuneración a todos los participantes, la comunidad del ETCR se ha propuesto planificar nuevos proyectos.

Así, por la sumatoria de diferentes voluntades, ex guerrilleros, sus familiares, comunidades cercanas y entidades extranjeras emprendieron un nuevo proceso que ha tomado fuerza en los últimos meses: la creación de una empresa turística, que se posicione como una empresa de calidad, no sólo reconocida en el Meta, sino a nivel nacional e internacional, con una apuesta de memoria y cuidado del medio ambiente.

Los ex guerrilleros durante décadas recorrieron la selva amazónica, conociendo sus animales, plantas y ecosistemas que se desarrollan en ella. Los cientos de kilómetros



que se usaban como senderos de guerra, ahora se presentan como senderos de paz, que resignifican con nuevas actividades el territorio y su papel en la vida civil.

Debido a esto en un trabajo en conjunto con el SENA realizaron un técnico en guías turísticos, para certificarse y poder ejercer dicha actividad, con la cual buscan no sólo vincularse económicamente en un mercado, sino trabajar comunitariamente con las veredas aledañas para incentivar al turismo responsable en el departamento del Meta, que ha sido víctima de la deforestación masiva y de la explotación minera y ganadera.

El departamento del Meta cuenta con una gran variedad de paisajes naturales a los que antes no se tenía acceso por ser consideradas zonas rojas dentro del conflicto armado del país, pero que ahora en el proceso de reincorporación de los ex guerrilleros, se presenta como una oportunidad para seguir construyendo lazos de paz entre estos y la sociedad colombiana, “las perspectivas del turismo en el país invitan a pensar en una fructífera relación simbiótica entre turismo y paz durante los años en que tenga que desarrollarse esta nueva etapa de posconflicto en Colombia”, (Menchero, 2018)

Maribel, mujer perteneciente al ETCR y actual líder del proyecto turístico nos cuenta:

La ruta del Yará que es memoria histórica y reincorporación ambiental, es que en esta ruta se explica más que todo lo que fue las FARC, porque empezamos en lo que es casa roja, que es la casa del camarada Jorge Briceño, se empezaría ahí la ruta, contando, diciendo cual fue o cuál era el propósito de iniciar un ejército, o porque lo iniciaron de esa manera, cuál fue su ideología para hacerlo y hasta donde lo llevó, hasta el día de su muerte, entonces así se sigue por cada uno de los campamentos de acá, explicando cada uno, quién fue su comandante, qué relevancia tuvo dentro de las fuerzas armadas, entonces todo ese tipo de cosas, digamos llega uno también al espacio territorial se muestra un poco el museo, el pequeño museo que hay, se muestran los proyectos productivos que hay, que realmente se salió de las armas pero que la gente quiere trabajar, que la gente no solo quiere un retribución económica que se está dando, sino que realmente es cambiar la historia de un país que fue tan golpeado por la violencia y que queremos que sea diferente, que queremos que no se vuelva a repetir la historia y con esto vea, los incumplimientos que ha tenido el gobierno, nosotros ante ellos todavía estamos demostrando que no queremos volver a lo mismo de antes. (8 de abril)

Maribel también nos expone su preocupación en cuanto al medio ambiente:

Ese enfoque que teníamos que era el medio ambiente la naturaleza que para nosotros es algo muy importante y que siempre se ha querido conservar, si por ejemplo



ahorita con estas cifras tan altas que tenemos de deforestación en la serranía de la Macarena que son realmente alarmantes, nosotros estuvimos en un taller en San José del Guaviare hace 20 días, somos solo jóvenes del sur-oriente colombiano y nos tocó hacer las verdaderas cifras que afecta al sur-oriente colombiano y encontramos que en la serranía de la Macarena va un 17% de deforestación entonces realmente es una cifra demasiado alta, es o sea, uno dice la serranía, entonces igual empezábamos a hacer las cifras a partir de en qué año se empezó a hacer ese tipo de deforestación y nos damos cuenta que es a partir del 2016 cuando realmente se firman los diálogos de paz, entonces nosotros decimos, las FARC si eran protectoras de que se cuidara y se conservará el medio ambiente. (8 de abril)

Y seguido a esto, evidencia cómo este proyecto turístico aportará a esta problemática:

Nosotros tenemos acá un pequeño bosque, que realmente es muy pequeño acá dentro del espacio territorial, pues hemos querido y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para conservarlo, para volver a reforestar los lugares que se han visto más afectados donde han habido mucha tala de árboles y pues en realidad esto es un proyecto productivo, esto empieza desde un corredor turístico que se tiene sobre esta zona, el recorrido turístico se llama Yari Recorrido de Paz, esto incluye cuatro rutas, todas son ecológicas, entonces es un proyecto que queremos que el mundo mire

que como exguerrilleros estamos cuidando el medio ambiente, que no lo queremos destruir que eso también es como una fichita más para el ajedrez, para el juego de cartas que le estamos apostando a la paz, que no queremos volver a la guerra que no queremos volver a tomar las armas y mucho menos tener que volver a dispararlas sino que antes el mundo venga y conozca, que se den cuenta que hubo un grupo armado que estuvo en guerra 53 años, pero que dio un paso a la paz y que en ese proceso hay personas que ahora le están mostrando al mundo un turismo, que le están mostrando que se puede hacer paz dentro de una montaña, que no hay que tener miedo, que no les va a pasar nada, sino que vengan a conocer todos estos territorios que son tan ricos de flora y de fauna (9 de abril)

Este proyecto es claramente una apuesta para la reincorporación económica de los ex guerrilleros, pero que ellos proponen también sea una fuente de recursos para los habitantes de la zona, pues dentro de los recorridos planeados están incluidas algunas fincas donde se consumirían los productos que la esta produzca, creando una red de trabajo conjunto y de economías solidarias.

Esta articulación laboral entre las diferentes partes del territorio es importante ya que: “El trabajo se incorpora a las políticas de construcción de paz como elemento de



ciudadanía social de víctimas y excombatientes, al tiempo que constituye factor fundamental de no reincidencia de los últimos para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos que enmarcan la finalización del conflicto”. (Herrera, 2016, P. 107).

Pero al igual que cualquier proceso tiene sus obstáculos, como el competir con multinacionales turísticas que quieren adueñarse de estos senderos y a las que se les facilita en mayor medida cumplir con los requerimientos para obtenerlos. Ante estos monopolios, las comunidades de las veredas aledañas al ETCR han apoyado este proyecto, se han unido a él, proporcionando otros espacios para los senderos y el respaldo a los ex guerrilleros para que en la región se creen turismos ecológicos, pero de carácter comunitario. En cuanto a las entidades gubernamentales que se han involucrado en el proyecto Maribel referencia a el Consejo Noruego, el Consejo Británico y las Naciones Unidas.

Pero no todo es trabajo, también el ETCR hace parte del programa COOMUNARTE, (cooperativa de arte y cultura de las FARC), que en el espacio territorial está liderado por Rubiela, ex guerrillera que pertenece al ETCR y quien actualmente es la delegada por la cooperativa en este espacio para promover el arte, la cultura, el teatro, la danza, pintura, y todas aquellas propuestas que los participantes del ETCR propongan para sus espacios de culturales y de ocio. Así mismo, se resalta como una fortaleza el trabajo de género que realizan desde este programa.

Conclusiones o reflexiones finales

Los proyectos productivos son entre muchas otras estrategias, un aporte a la consolidación de una paz fuerte, estable y duradera, que no sólo se basa en un plano económico, sino que logran beneficiar y potencializar a las comunidades y los territorios en los que se desarrollan.

La comunidad del ETCR Urías Rondón, a pesar de las diferentes adversidades y obstáculos presentados, continúan combatiendo en conjunto por la paz, y por reincorporarse a la vida civil de manera óptima y comprometida. Esta comunidad representa la resistencia, una resistencia ambiental, territorial y comunitaria no armada, que sigue luchando.

Es necesario así seguir trabajando desde los enfoques territoriales, que permiten conocer las dinámicas específicas de cada territorio, y las voces de las personas que lo habitan, y que son quienes pueden y deben proponer sobre él, en este caso la



comunidad del ETCR Urías Rondón nos ayuda a seguir construyendo el concepto de construcción de paz territorial, pues “la necesidad de enmarcar la construcción de paz en un proceso de integración territorial que ayude a superar la histórica fragmentación del país y generar una dinámica constructiva desde las regiones con el apoyo de las comunidades” (Gutierrez, 2018, P.194) es lo que desde sus apuestas económicas y sociales, evidencian cómo trabajan por la paz, y el vínculo con las comunidades aledañas a ellos.

El compromiso de esta construcción de paz territorial no se basa sólo en las dos partes que firmaron el Acuerdo de Paz, la paz es un compromiso de todos los colombianos y habitantes del territorio colombiano. La paz desde nuestros territorios es la respuesta y la resistencia ante un gobierno que poco compromiso ha mostrado con la reincorporación a la vida civil de los ex guerrilleros, y del conflicto armado en general aún presente.

Bajo nuestro compromiso y aporte, podemos consumir los productos que los ex guerrilleros generan, como un acto de apoyo a su reincorporación económica y social. Además de estar participando todo el tiempo en la construcción de paz en nuestro territorio, y la visibilización de estos procesos en otros sitios. Esto, acompañado de la presión al gobierno para que cumpla lo pactado en el Acuerdo.

No se puede terminar el documento sin antes agradecer a quienes abrieron las puertas de sus espacios para permitir conocer su realidad y compartir con total respeto y cordialidad de los sitios comunes, a toda la comunidad del ETCR Urías Rondón un enorme agradecimiento y un apoyo fraternal a su resistencia por la paz.

Al término de este escrito más de 120 ex guerrilleros en proceso de reincorporación han sido asesinados, y los ETCR como figura jurídica desaparecieron el 15 de agosto de 2019, lo que sigue creando problemas con la implementación del Acuerdo de Paz.

Referencias bibliográficas

ARN. Espacios de Capacitación y Reincorporación. Obtenido de: <https://bit.ly/2SWdkrh>
Herrera, V. J. R., & Jaramillo, J. I. D. (2016). *El trabajo como elemento de construcción de paz y democracia en el marco del pos conflicto colombiano*. Recuperado de
Gutiérrez, S. F. (Ed.). (2018). *¿qué hacer con el tierrero? : Tierra, territorio y paz sostenible*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com>



Menchero, M. (2018). Colombia en posconflicto: ¿turismo para la paz o paz para el turismo?. Araucaria. (39). Pp. 415-438.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y Duradera. (2016). Colombia. Recuperado de: <https://bit.ly/2SXnxn7>



Relações internacionais e Questão Agrária: Neoliberalismo, transnacionalismo e agronegócio na nova fronteira agrícola do cerrado brasileiro

Fabiana Scoleso¹

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo apontar a configuração do neoliberalismo e do transnacionalismo contextualizando na história e no atual contexto o modelo de agronegócio instituído no Brasil e seus impactos no campo e no campesinato. Desta forma procurasse demonstrar a nova lógica governamental assumida pelo país a partir da sua integração no novo modelo global a partir de Fernando Collor de Melo que reestruturou o Estado e consolidou também a reestruturação produtiva importantes para a consolidação de um capital financeirizado e rentista. Suas repercussões no campo promoveram uma nova engenharia do agronegócio abrindo grande espaço para a atuação das empresas transnacionais no mosaico de atividades que compõem o setor. A nova lógica produtiva do campo submeteu e submete o mundo trabalho a uma nova lógica laboral onde a tecnologia (TIC'S) assume protagonismo. No cerrado brasileiro a expansão da fronteira agrícola atende as perspectivas do avanço das commodities no mercado internacional e subverte o direito à terra à logica produtivista tirando dos camponeses e povos tradicionais suas formas básicas de existência.

Palavras-chave

Neoliberalismo; transnacionalismo; agronegócio; fronteira agrícola; cerrado;

Abstract

This research aims to point out the configuration of neoliberalism and transnationalism contextualizing in history and in the current context the agribusiness model established in Brazil and its impacts on the field and Campesinato. Thus, it sought to demonstrate the new governmental logic assumed by the country from its integration in the new global model from Fernando Collor de Melo that restructured the state and also consolidated the productive restructuring important for the Consolidation of a financialized and rentist capital. Its repercussions in the field promoted a new engineering of agribusiness, opening great space for the performance of transnational companies in the mosaic of activities that compose the sector. The new productive logic of the field submitted and submits the world work to a new working logic where technology (TIC's) assumes



prominence. In the Brazilian Cerrado the expansion of the agricultural frontier meets the prospects of the advancement of commodities in the international market and subverts the right to land to the Productivist Logica taking from the peasants and traditional peoples their basic forms of existence.

Keywords

Neoliberalism; Transnationalism Agribusiness Agricultural frontier; Cerrado

Ao longo de três décadas neoliberais na América Latina, o capital financeirizado caracterizado em sua forma rentista foi responsável por movimentos e transformações que, inexoravelmente, tornaram os grandes grupos transnacionais, suas formas ideológicas e políticas, capazes de pressionar e construir uma nova lógica governamental, influenciando não somente na ordem política e econômica, como também deixando profundas marcas na ordem social e institucional. As frequentes crises do capital e o abalo sistêmico causado pelas denúncias de corrupção nada mais são do que manifestações endêmicas, cumulativas, crônicas e permanentes, conforme apontou Meszáros:

“Compreensivelmente, a atual crise estrutural do capital afeta em profundidade todas as instituições do Estado e os métodos organizacionais correspondentes. Junto com esta crise vem a crise política geral, sob todos os seus aspectos, e não somente sob os diretamente preocupados com a legitimação ideológica de qualquer sistema particular de Estado. Em sua modalidade histórica específica, o Estado moderno passa a existir, acima de tudo, para poder exercer controle abrangente sobre as forças centrífugas insubmissas que emanam de unidades produtivas isoladas do capital, um sistema reprodutivo social antagonicamente estruturado”².

Os atuais padrões de crescimento global e os processos de transformação produtiva fazem parte de uma política de reequilíbrio internacional baseados na reversão das nacionalizações do Pós II Guerra Mundial, na crescente tendência à desregulamentação das atividades econômicas e sociais pelo Estado e na substancial alteração dos padrões universais de proteção social. Desde a década de 1970, o neoliberalismo apresentou inúmeras variações. Seu enraizamento se deu tanto pelo seu projeto inicial, quanto pela sua atuação nos diversos campos da imperfeição do capital. Novos atores políticos e econômicos (as *think tanks*, as grandes empresas transnacionais) dinamizaram os governos, a produção da realidade sinalizando uma modificação latente do regime de acumulação global.



Os modos renovados e ampliados de exploração e extração de valor pluralizaram as questões em torno trabalho, permitindo com que o Estado elaborasse uma nova morfologia laboral e o distanciamento entre trabalho cognitivo, imaterial e informacional³, o que provocou grande impacto no Mundo do Trabalho, em especial no que se refere à eliminação dos dispositivos de direitos e na precarização, enraizando as forças da economia neoliberal também na economia informal. Por este motivo é evidente que a forma política estatal na era neoliberal é fundamental à reprodução da sociabilidade do capitalismo, ainda que por vezes o Estado possa se opor a determinadas relações econômicas com ele.

Nos quinze últimos anos da era neoliberal latino-americana o capital financeiro conduziu e submeteu países e populações a um processo de endividamento massivo. As finanças tomaram conta das sociedades revelando a ambivalência do neoliberalismo e sua capacidade de se metamorfosear. O novo diagrama neoliberal alcançado e as novas formas de acumulação do capital por meio da inserção subordinada dos países da América Latina no mercado global neste período precisam ser analisados pelo campo dos governos progressistas em ascensão a partir de 1998, assim como a partir do seu conseqüente declínio a partir de 2016⁴. A guinada à direita e sua articulação com o fascismo, racismo, sexismo e classismo têm perpetrado uma dinâmica imanente sobre os territórios e sobre os modos de vida, o que determina uma nova racionalidade social. De acordo com os estudos sobre sociologia da globalização de Saskia Sassen, a dinâmica do capitalismo global e as exigências do mercado são incorporadas na institucionalidade estatal formando uma nova ordem institucional privada ligada à economia global⁵.

Dentro da atualização do neoliberalismo, a globalização e a mundialização do capital adquiriram também elemento novo: as chamadas conexões transnacionais que vão além das formas de produção e circulação de mercadorias. Seu potencial também é expresso na presença migrante e na organização de suas dinâmicas coletivas, o que contribui com uma transformação ainda mais ampla do mundo do trabalho porque são formas vinculadas à cadeia de valor transnacional. O transnacionalismo é um conceito bastante complexo e pode ser compreendido por meio de vários tipos de abordagens, vertentes e subtemáticas. Entretanto é no aspecto jurídico que assentamos as análises e interfaces. Como em qualquer das suas fases o neoliberalismo sempre atua como um conjunto combinado de estratégias e regras econômicas que se estruturam de acordo com a hierarquia geopolítica sendo o transnacionalismo um elemento que contribui com



as políticas multilaterais e com a construção de zonas privilegiadas de comércio, como o Mercosul (Mercado Comum do Sul) e os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) mantendo a soberania regional e a identidade extranacional. Neste sentido o transnacionalismo pode fomentar uma espécie de competição pela hegemonia, sofisticando esta nova fase do desenvolvimento e desempenhando papel decisivo para a internacionalização de um modelo político e gestão do Estado, para a construção da cooperação internacional e também da chamada “soberania inclusiva”⁶.

As políticas transnacionais e sua estrutura organizacional também são pressupostos para que as forças sociais que vivem do trabalho constituam força de resistência capazes de reordenar o movimento dos trabalhadores e suas dinâmicas de contestação contra o capital global, em especial dos setores onde o volume de políticas, representantes no parlamento e investimentos criam novas condições de submissão e opressão⁷. Ao pensarmos a América Latina e suas condições socio-históricas é certo que estas pesam e marcam a genealogia das disputas e lutas sociais fundamentalmente no que se diz respeito à atividade econômica oriunda do extrativismo exportador, sua organização, problemas e problemáticas históricas que foram inúmeras vezes denunciadas pelos movimentos sociais. No extrativismo contemporâneo de cariz neoliberal, financista e transnacional, as consequências são ainda maiores porque foram também empenhadas e representadas não apenas por governos de matriz conservadora como também pelos governos progressistas na região caracterizando uma conciliação ou uma resignação reformista como aponta Maria Orlanda Pinassi. A autora também destaca que mesmo neste cenário,

“(...) toda uma nova geração de movimentos sociais de massa com centralidade no trabalho emerge na América Latina em função das complexas adversidades enfrentadas. Pensamos no zapatistas, no México; piqueteros, na Argentina; indígenas cocaleros, na Bolívia, no Equador; Farc, na Colômbia; MIR, no Peru, nas fábricas recuperadas, desde a Venezuela, Argentina, Brasil. Dentre todos, destaca-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Brasil. (...) Formadas à margem da tutela do Estado e fincadas no plano das mediações de segunda ordem do capital, a ampliação do potencial dessas alternativas vai depender da processualidade histórica constituída e das suas possibilidades de ampliar o leque das decisões necessárias”⁸.

Na América Latina o neoliberalismo foi impulsionado pela crise fiscal dos Estados e pela crise da industrialização substitutiva de importações. Estes elementos acentuaram as análises sobre a situação da região, em especial as realizadas pelo Fundo Monetário



Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial que passou a atuar como organização multilateral, estabelecendo uma agenda de ajustes estruturais de reformas políticas, econômicas e sociais da região. Os ajustes macroeconômicos e a reestruturação institucional e econômica exerceram grande influência no ajuste estrutural em relação às novas condições da economia política internacional em especial através do receituário conhecido como Consenso de Washington que era a convergência do *mainstream* neoclássico, das proposituras do governo norte-americano e dos interesses financeiros de Wall Street. O Consenso se tornou um paradigma transnacional centrado na desregulação econômica e na desnacionalização. Os projetos políticos vitoriosos na América Latina no final da década de 1980 se comprometeram e viabilizaram a agenda neoliberal e com a política da “boa governança”. Para João Marcio Mendes Pereira, a “boa governança” defendida pelo Banco Mundial e pelo FMI,

“estava atrelada à promoção de “democracias de mercado”. Empurrada pelo governo americano, tal categoria logo se converteu em condição de reconhecimento e parâmetro de avaliação da qualidade do regime político e da engenharia institucional dos países pobres e em desenvolvimento. Ironicamente, enquanto grande parte da literatura sobre transição democrática na América Latina exaltava a restrição das atribuições do Poder Executivo em favor do Legislativo e do Judiciário, a construção das “democracias de mercado” exigia alto grau de concentração do poder (insulation) na cúpula governamental e em órgãos estratégicos do Estado. Para o Banco, o manejo da liberalização econômica e da privatização devia estar sob a responsabilidade de uma equipe técnica blindada política e juridicamente contra pressões sindicais, político-partidárias e corporativas (protecionistas) do empresariado doméstico. Já no âmbito das políticas sociais, o Banco pregava a colaboração entre Estado, setor privado, ONGs e instituições multilaterais”⁹.

Embora para grande parte dos países latino-americanos o final da década de 1980 representasse a “superação” de suas ditaduras e a alavancada das chamadas democracias representativas, da cidadania e justiça social, seus princípios foram rapidamente estrangidos pelo caráter, político, abrangente e intrusivo do Banco Mundial e FMI dificultando uma agenda de alargamento dos direitos sociais e, conseqüentemente, a expressão radical dos direitos humanos. Outro aspecto que merece destaque é que o otimismo existente no princípio se tornou dúvida na virada de década. Países como a Venezuela e o Peru enfrentavam sérios problemas políticos em 1991. A crise mexicana de 1994 revelou debilidades na aplicação do *confidence building*



e a Argentina enfrentou dificuldades quanto ao desemprego e a desvalorização do peso, revelando a necessidade de se pensar em uma política cambial mais eficiente¹⁰.

No caso do Brasil a Constituição cidadã de 1988 foi vetor de acesso a direitos e marco de uma nova possibilidade de cidadania e democracia, ainda que dentro dos marcos burgueses. A reconfiguração do papel e das instituições do Estado, impulsionados pela ofensiva do mercado mundial, pressionava para a criação de políticas econômicas que possibilitassem uma nova integração internacional. A democracia representativa se transformou em ponto estratégico da impulsividade do capital no Brasil e suas bases legais permitiram a ampliação e as conexões neoliberais, ainda que acenasse para a possibilidade de uma integração social via políticas públicas¹¹.

Na primeira fase da Nova República os empresários novamente se posicionaram como classe expressiva, como na década anterior, mas acrescida de forças com entidades de cúpulas renovada como é o caso da Fiesp¹² (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e associações comerciais presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outras. Em suas mãos ficaram ministérios como o da Fazenda (Dilson Funaro) e vários empresários disputando cargos no executivo e legislativo nas eleições de 1986. Fiesp, Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e UBE (União Brasileira de Empresários) ações sistemáticas forma empenhadas a fim de impedir a aprovação de dispositivos constitucionais relacionados aos direitos trabalhistas e sociais. Eli Diniz chama a atenção para a diversidade de entidades e organizações corporativas que surgem nesta época: Abdib (Associação Brasileira das Indústrias de Base), Abinee (Associação Brasileira da Indústria Eletrônica), o Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), o PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais e os Institutos Liberais¹³.

Das instâncias internacionais destaca-se papel articulador da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico¹⁴) que se tornou fundamental para a intensificação do processo de acumulação do capital e consequente financeirização no investimento em capital fictício assim como na busca pela quebra de barreiras de contenção da evasão fiscal. Um passo a mais dado pelo Brasil na neoliberalização que passou a ter relações estreitadas com países emergentes (África do Sul, China, Índia e Indonésia), os chamados de Key Partners e também participação em inúmeras instâncias da Organização como associado, participante ou convidado. A riqueza financeira da década de 1990 também se concentrou nos títulos de dívidas públicos e



privados e nas debêntures¹⁵, tornando a economia mundial em permanente desequilíbrio. A reestruturação do estado e a reestruturação produtiva cumpriram o papel de regularizar os fluxos internacionais de capitais tornando-os árbitros da lógica financeira. A lógica dos Estados Nacionais foi amplamente atravessada pela lógica dos capitais globais em sua configuração transnacional:

“A ascensão do capital financeiro foi seguida pelo ressurgimento das formas mais agressivas e brutais de procurar aumentar a produtividade do capital em nível microeconômico, a começar pela produtividade do trabalho. Tal aumento baseia-se no recurso combinado às modalidades clássicas de apropriação da mais-valia, tanto a absoluta quanto a relativa, utilizadas sem nenhuma preocupação com as consequências sobre o nível de emprego, ou seja, o aumento brutal do desemprego, ou com os mecanismos viciosos da conjuntura ditadas pelas altas taxas de juros. Todas as virtudes atribuídas ao ‘toyotismo’ estão dirigidas a obter a máxima intensidade do trabalho e o máximo rendimento de uma mão-de-obra totalmente flexível, a qual se volta a contestar, cada vez mais (até nos relatórios do Banco Mundial), o direito de organização sindical”¹⁶.

O Toyotismo e o *just-in-time* se colocam como representação da lógica financeira na década de 1990 que também foi atualizado nos últimos 15 anos pela industrialização e agricultura de precisão nos termos da Indústria, Fábrica e da Agricultura 4.0 e seus Sistemas Cyber-Físicos que torna a produção cada vez mais eficiente, autônoma e customizável. A reformulação da sociedade global através das relações internacionais, da geopolítica e da geoeconomia contribuíram para uma nova dinâmica produtiva e um novo regionalismo permitindo maior eficiência na circulação e na construção de novas escalas de valor. A integração pretendida também apareceu com doses idealistas de equilíbrio, harmonia e modernização. Entretanto as diferenças entre as nações dominantes, centrais e periféricas, suas diversidades e desigualdades, elementos fundantes da mundialização do capital e de suas crises sistêmicas, reforçaram o caráter da integração subordinada pela condição de desigualdade e pela forma como se relacionam com as instituições internacionais e suas agências de serviços:

“A função reguladora das instituições internacionais, exercendo pressão sobre os Estados, quando se trata da colaboração e competição entre eles, não esgota evidentemente toda a história. O critério da sua utilidade para os Estados sugere que, em sentido mais amplo, as organizações internacionais devem ser concebidas como agências de serviços. Podem ser consideradas como canais por meio dos quais os Estados prestam-se serviços mutuamente; ou como corpos burocráticos criados e mantidos pelos Estados para prover de serviços os seus membros (...) Os Estados mais



desenvolvidos apoiam-se nos serviços internacionais para facilitar a conduta da sua diplomacia e do seu comércio internacional; e os menos desenvolvidos esperam das agências internacionais mobilização da assistência sem a qual não poderiam sobreviver. As organizações internacionais são elementos suplementares do sistema mundial, designados a fazer pelos Estados algumas das coisas que estes não podem realizar por si mesmos”¹⁷

Desta forma é fundamental compreender o papel e o significado das organizações regionais e internacionais de todo tipo porque desempenham papel relevante na configuração, regulação e manutenção dos critérios de integração promovendo diretrizes específicas no processo da mundialização¹⁸. Em 1973, Samuel Huntington, influente nos círculos políticos conservadores norte-americanos, escreveu em seu livro *Transnational Organizations in World Politics*, sobre as confluências do sistema, padrões e instituições do capitalismo e ocidentalismo, demonstrando o papel hegemônico das mais influentes nações na recomposição do sistema através das diretrizes que orientaram as novas formas de domínio por novas formas de integração:

“A expansão das organizações transnacionais e simultânea multiplicação de governos nacionais são, ambas, em certo sentido, respostas às tendências de modernização social, econômica e tecnológica que estão varrendo o mundo. Os novos desenvolvimentos da economia, tecnologia e administração tornaram possível que organizações funcionais específicas, tais como corporação ou serviço militar, operassem em âmbito global (...) transnacionalismo é o modo norte-americano de expansão. Significa ‘liberdade de ação’ antes do que ‘poder de controle’. A expansão dos Estados Unidos tem sido uma expansão pluralística, na qual uma variedade de organizações, governamentais e não-governamentais, procura realizar os objetivos importantes para eles no território de outras sociedades (...) A penetração norte-americana em outras sociedades era geralmente justificada (...) na base da superioridade tecnológica e econômica, o que deu a grupos norte americanos o direito presumido – até mesmo o dever – de realizar certas funções especializadas em outras sociedades”¹⁹

A tendência de integração e modernização mundial tornou-se cada vez mais sofisticada na medida que determinou, ao longo do seu processo de aprimoramento, as dinâmicas das realidades sociais em nível local, nacional, regional e mundial. Determinou, também, as orientações dos múltiplos atores que assumiram as referências normativas de uma prática de “modernização” e “globalismo”²⁰.



No caso brasileiro vale considerar suas formas de integração e subordinação que incluiu o país no mapa deste novo sistema a partir do cumprimento de uma agenda definida pelo FMI e Banco Mundial que foram significativamente consideradas nos governos de Fernando Collor de Melo e de forma aprofundada no de Fernando Henrique Cardoso que será tratado abaixo

Os compromissos com a estabilidade monetária têm um ciclo importante com a implementação do Plano Real em 1994 pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. Vislumbrando uma maior abertura comercial e financeira, as políticas de ajustes seguiram com FHC, agora, presidente da República. Privatizações e rígidas políticas monetárias e fiscal, além de altas taxas de juros, criaram um cenário de desequilíbrio das contas nacionais. Apesar da paridade do dólar com o real, que estimulou as exportações e o controle dos preços, as políticas provocaram desequilíbrios que foram compensados pela atração de capital especulativo, principalmente para adquirir ativos nacionais. De acordo com Leda Paulani,

“A piora estrutural das contas externas do Brasil é certamente uma das mais perversas heranças legadas pelo governo FHC. A abertura externa exacerbada, além de elevar a dependência do país em setores estratégicos como os de insumos básicos e bens de capital, produziu um substantivo estoque de capital privado nacional bom e barato que foi para as mãos do capital estrangeiro. O processo de privatização das estatais produtoras de serviços industriais de utilidade pública impôs a elas o mesmo destino. Como resultado, a balança de serviços é hoje muito mais pesada, por conta do déficit na balança de rendas, resultado inescapável da duplicação do passivo externo líquido do país. Além disso, agora muito mais do que antes, o crescimento do produto depende das importações”²¹.

O mecanismo adotado acelerou o a transferência de riqueza nacional para as empresas transnacionais e seus circuitos financeiros internacionais. No segundo governo de FHC foi negociada junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), na lógica do ajuste estrutural, a lei de responsabilidade fiscal cuja hierarquia dos gastos orçamentários tinha como prioridade máxima os credores financeiros. O Plano Real, programa anti-inflacionário, foi instrumento para consolidar a transição brasileira ao neoliberalismo e seu sistema de acumulação. Também ficou marcado em seu segundo mandato a chamada Reforma Agrária de Mercado estabelecendo as bases concretas que alavancaram as commodities e o “novo” sistema de acumulação. O Estado reposiciona sua política tomando como prática a anulação de títulos irregulares e de protagonizar a



redistribuição de terra concentrada, além de regular e assegurar o direito de propriedade com a adoção de dois modelos: a agricultura familiar e o agronegócio.

A política agrária de Fernando Henrique Cardoso começou de fato quando Raul Jungmann foi nomeado para o Ministério Extraordinário da Reforma Agrária (MRA) no ano de 1996. A criação do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária independente em relação ao Ministério da Agricultura configura a consolidação de um gestor político autônomo que se sobrepunha ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Em 1995 e 1996 dois grandes conflitos revelaram o tom das lutas, disputas e as tensões por terras no estado de Rondônia e Pará. Os massacres de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás demonstraram que o avanço do agronegócio e o aprofundamento da miséria no campo intensificaram conflitos e a violação de direitos revelando a lógica destrutiva da nova conformação do capital que conta também com a marginalização e criminalização das lutas sociais²².

Um dos importantes elementos da Reforma Agrária praticada a partir do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso é o Market-Assisted Land Reform (Reforma Agrária Assistida pelo Mercado). Inscrita nos marcos dos relatórios elaborados pelo Banco Mundial, tal reforma previa concessão de financiamento para que camponeses pobres comprassem terras de maneira voluntária e direta dos proprietários. Além disso, a intensidade e a extensão dos conflitos naquela fase do capitalismo neoliberal passaram a gerar preocupação. O documento elaborado pelo Banco Mundial revelava os conflitos agrários, o aumento das ocupações e a importância do governo brasileiro em abandonar a reforma agrária desapropriacionista indicando o rumo político a ser adotado:

“Para o governo brasileiro, a reforma agrária assistida pelo mercado proporciona uma oportunidade de responder às pressões dos trabalhadores sem terra de uma maneira menos conflituosa do que abordagens administrativas”. (BM, 1997e: 7).

A Colômbia foi o primeiro país a institucionalizar este modelo de reforma agrária em oposição ao modelo redistributivo baseado na desapropriação das terras privadas. O ajuste da política agrária baseado na política neoliberal cumpriu importante agenda neste país. De acordo com José Márcio Mendes Pereira o primeiro projeto considerando este novo modelo ocorreu no Ceará em 1996, durante o governo de Tasso Jereissati do PSDB e recebeu o nome de “Reforma Agrária Solidária”:



“O governo criou em 1996 um fundo estadual e nele aportou cerca de R\$ 4 milhões, acrescidos de um empréstimo do BM de R\$ 6 milhões. Financiou-se a compra de 44 imóveis por 694 famílias, totalizando 23.622 hectares. A iniciativa estimulou a elevação do preço da terra onde foi implantada (Brandão, 2000). Dessa pequena experiência nasceu o projeto-piloto Cédula da Terra (PCT), estendido para os outros quatro estados (BA, MA, PE e norte de MG) por meio de novo empréstimo aprovado pelo BM em abril de 1997 no valor de US\$ 90 milhões. O PCT financiaria a compra de terras por 15 mil famílias em 4 anos, mas esperava-se posteriormente financiar um milhão de famílias em até seis anos (BM, 1997). O projeto financiava a compra de qualquer imóvel rural, mesmo os passíveis de desapropriação”²³.

A política de comércio exterior ao longo do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso era a de gerar saldos. Com a reengenharia política no contexto da agricultura capitalista, o agronegócio volta a ter papel importante na agenda do governo na sua estratégia macroeconômica externa. O Plano Plurianual do governo que versava sobre o período 1998-2002 tornava os eixos territoriais de desenvolvimento prioritários visando uma sincronia de interesses somados aos ajustes na política agrária.

O boom das commodities é iniciado pelas circunstâncias cambiais de 1999 que permitem a expansão rápida de itens como carne de boi e frango, soja, milho, açúcar e celulose²⁴. Nos anos subsequentes tais produtos passarão a dominar a pauta das exportações brasileiras. É a processo de reprimarização do comércio exterior indicada pelo aumento da participação brasileira no comércio mundial de produtos agrícolas. Os mercados nacionais de terras e arrendamentos tendo o Estado como regulador e reestruturado por meio de um conjunto de políticas públicas também precisa ser compreendido como estratégico neste período. São processos independentes, porém convergentes que configuram uma estratégia público/privada para o domínio comercial, financeiro e agrícola desempenhado pelas empresas transnacionais do agronegócio. Como explica Guilherme Delgado:

“Mas a dinâmica da expansão da renda fundiária para novos e antigos territórios não é estritamente mercantil, a menos que se considere a terra como uma mercadoria como outra qualquer, e sua oferta, um caso particular de expansão econômica. Mas, como não são teoricamente consistentes essas hipóteses, porque a terra é recurso natural não produzido pelo homem, e sua propriedade privada caracteriza-se como monopólio de recurso natural juridicamente regulado, a renda oriunda da posse ou propriedade é claramente uma arbitragem público-privada de captura da renda social, sob regulação prévia do regime de propriedade”²⁵.



A política agrícola e financeira proposta no período operam na obtenção das chamadas rendas extraordinárias e das rendas diferenciais. A elevação do crédito rural, a recomposição da dívida agrária, regulação dos preços, taxas de câmbio favoráveis foram as condições necessárias para reestruturar a política agrícola e implantar as bases para a reengenharia e recomposição dos complexos agroindustriais que se rearticulam doméstica e internacionalmente constituindo grandes empresas transnacionais que dominam e exerce poder de pressão nas políticas de Estado e que se organizando dentro e fora do parlamento com seus grupos e bancadas.

A territorialidade do agronegócio e seu capital atrofico-destrutivo se constituem desta forma. O estado brasileiro forjou as condições jurídicas e econômicas para esta nova etapa da acumulação capitalista, permitindo, também, a emancipação de municípios o que se constituiu em uma nova divisão regional do trabalho. A pressão do mercado internacional por tais mudanças se reflete nas políticas públicas adotadas pela União, Estados e Municípios. Dados da CPT, do Anuário Estatístico do Crédito Rural e do IBGE atestam e evidenciam a escalada das commodities no Brasil. A lógica neoliberal que pressiona e altera as relações entre mercado mundial, estados e municípios é a mesma que produz uma real sujeição dos camponeses que são obrigados a arrendar terras, a se organizar em cooperativas e associações para captar recursos e se submeter a uma nova e precária morfologia laboral, o que desencadeia novas violências no campo.

O volume crescente de conflitos agrários no contexto neoliberal aponta os antagonismos existentes na política de reforma agrária de mercado agindo em especial contra as ocupações de terras e criminalizando os movimentos sociais. A política constituída pelo Banco Mundial e assumida pelo governo atuava contra a maior democratização das terras.

O que há é uma nova cadeia de produção de valor no campo e uma relação decisiva entre os novos fluxos produtivos e as empresas transnacionais que têm o poder em estabelecer e controlar os elos débeis entre o Brasil e o mercado internacional. As novas relações internacionais no campo trazem aquilo que é próprio do modelo neoliberal e suas forma de acumulação: especulação imobiliária, mudanças jurídicas, fusões e aquisições, rentismo, privatização de rodovias, controle do transporte modal por empresas transnacionais e das empresas de abastecimento de água, criação de linhas de crédito agrícola e bancos especializados neste tipo de negócios (Banco da Amazônia) e as constantes pressões advindas dos constantes relatórios emitidos pelo



Banco Mundial e que sugerem significativas alterações legais para a expansão do capital. Os impactos desta nova conformação na territorialidade acentuaram as condições dos conflitos territoriais.

“A resposta do governo Fernando Henrique Cardoso ao incremento dos conflitos foi o aumento da repressão policial. Este governo entra para a história marcado por um tipo de violência que ainda não ocorrera de forma explícita no Brasil: quem passou a matar os camponeses em luta pela terra foram as forças policiais dos Estados. Os massacres de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás são exemplos ocorridos no governo FHC. Ambos os massacres representam a posição das elites fundiárias brasileiras em não ceder um milímetro sequer em relação à questão da terra e da reforma agrária. O apoio dos ruralistas à base de sustentação política do governo FHC tem tido como contrapartida duas práticas governamentais: a primeira, posição repressiva aos movimentos sociais; a segunda, no plano econômico, prorrogação – não se sabe até quando – das dívidas destes latifundiários, que não as saldaram”²⁶.

O neoliberalismo instituído no Brasil a partir da Constituição de 1988 e do Governo de Fernando Collor de Mello foi fator multiplicador dos eixos de dominação capitalista que força e demanda maior complexidade da ação política emancipatória por parte dos movimentos sociais. A democracia participativa instituiu instrumentos plurais que abarcavam as múltiplas desigualdades sociais vinculadas aos valores da liberdade e da igualdade dentro da institucionalidade. A coerção exercida pelo Estado somados aos mecanismos de dominação da sociedade capitalista, firma uma nova configuração do capitalismo e de seus mecanismos de regulação, comando, desempenho e controle social. É um novo conjunto de relações domésticas, internacionais e de comércio exterior que modela o sistema econômico e suas múltiplas dimensões. A mundialização do capital faz ressurgir aspectos como extrema centralização, concentração de capitais e a interpenetração finança/indústria/agronegócio, pressupostos contraditórios à carta constitucional de 1988.

A acumulação, que é dada sob diversas formas, tem nos títulos de dívida pública, nas ações e nos empréstimos uma nova forma de rentabilidade. A produção de riqueza agora passa também por uma dinâmica específica da esfera financeira que tem no capital monetário e sua conseqüente “liquidez” seu mais novo fetichismo. As instituições financeiras internacionais e as maiores potências do globo saem em defesa dos seus privilégios, constituindo o que chamamos de “Corporate Governace”.



A nova fronteira agrícola no cerrado brasileiro é um tema bastante controverso. Essa história começa a ser escrita a partir da ditadura civil-militar brasileira e tem seus maiores desdobramentos sob a era neoliberal.

O ingresso da agricultura brasileira na era global constrói um novo polo da questão agrícola e agrária a partir de excedentes estruturais do nosso capitalismo. Há de se compreender, sem dúvida, que a história da questão agrária e dos regramentos políticos exerceram fundamental papel na reestruturação do modelo no país.

O processo de modernização da agricultura e particularmente do cerrado brasileiro é algo que se correlaciona com a sua atual configuração porque criou as bases de expansão e crescimento intensivo e extensivo do desenvolvimento das fronteiras agrícolas nacionais. Dentro do contexto de um novo capitalismo a modernização da agricultura brasileira se insere na perspectiva da Revolução Verde, idealizado pelo grupo Rockfeller, no início da década de 1940 e vai de encontro com as políticas estabelecidas no governo Vargas com o Projeto de Colonização dos Cerrados, das colônias agrícolas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e em Ceres, em Goiás. Programas governamentais como estes permitiram aporte creditício e suporte técnico para implementar a chamada “produção do solo”.

Nas décadas subsequentes, em especial no governo de Juscelino Kubitschek na década de 1950, a agricultura alcança novo status e se insere no novo contexto de modernização e desenvolvimento do país, impulsionado pelo Plano de Metas.

Porém, é na ditadura civil-militar que a agricultura alcança novo patamar. Já em 1966 a lei 5.016 que versava sobre reflorestamento abriu caminhos na concessão de incentivos fiscais a empreendimentos florestais permitindo avanço no cultivo de pinus e eucaliptus. As condições planas dos terrenos do cerrado colaboraram com uma maior mecanização, modificando muito rapidamente não apenas a paisagem através da quase total retirada da cobertura vegetal natural do solo como também sobre a organização e a relação do trabalho e do trabalhador camponês.

Na ditadura, em especial no período correspondente ao “milagre econômico”²⁷ as multinacionais passaram a exercer maior influência na produção de alimentos. Grandes complexos agroindustriais, agropecuários, agroquímicos e madeireiros, associados a uma burguesia rural, exerceram influência na estratégia brasileira de crescimento das fronteiras agrícolas. As terras eram vistas não apenas como bens de capital, como



também capazes de novos ganhos produtivos: ganho de capital e fator de produção. No início da década de 1970 os gaúchos foram atraídos tanto pelo baixo preço das terras quanto pelas novas condições de acumulação. A melhoria dos preços internacionais dos produtos agrícolas juntamente com a influência das multinacionais permitiu a consolidação de um complexo agroindustrial, que formaram um verdadeiro monopólio capitalista e que passou a constituir força suficiente para exercer pressão contra uma política que julgavam antiagrícola: exportações de produtos agrícolas *in natura* estavam sujeitas a elevada tributação indireta e transformavam a agricultura em setor supertributado, com mecanismos fiscais e extrafiscais que lhe extraíam renda.

“O Brasil agrário é paradoxal porque 74% dos agricultores recebem somente 15% do crédito agrícola, possuem apenas 24% da área agricultável, mas produzem 38% do valor bruto. É pouca terra e muita gente que recebe pouco crédito e divide o resto da riqueza produzida, ou seja, a parte que o capital permitiu que ficasse com o campesinato. Do outro lado o agronegócio fica com 85% do crédito agrícola, controla 76% da área agricultável, produz 62% do valor bruto e emprega cerca de 26% das pessoas. É muita terra e pouca gente que fica com a maior parte da riqueza produzida, inclusive a parte da riqueza produzida pelo campesinato, através da renda capitalizada da terra, pois é o agronegócio que comercializa a maior parte da produção camponesa”²⁸.

A política de desenvolvimento regional no Brasil na ditadura militar estava subordinada ao I e II PND e foi pensada para viabilizar a modernização e expansão da agricultura e sua inserção internacional, adotando novos paradigmas, saindo de uma abordagem *top-down* para *bottom-up*²⁹. Entre eles destacam-se:

- O I PND (1970-1974): Prodoest e PIN (Transamazônica);
- O II PND (1975-1979): Poloamazônia, Polonoroeste, Polocentro, Prodecer, Região Geoeconômica de Brasília, Pantanal Matogrossense (Prodeoan), Região do Grande Dourados (Prodegran);

O cultivo de commodities em larga escala permitiu que recursos financeiros de ordem nacional e internacional criassem uma lógica monocultora e exportadora que, na década de 1970 colaborou com a expansão do cultivo de arroz e das pastagens e, na década seguinte, com a expansão da soja. O Programa para o Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO) foi até 1982 o caminho para esta efetivação e consolidação. E o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) foi aplicado em fases e se tornou um marco na cooperação internacional.



Com ele inúmeros instrumentos de crédito supervisionado, empréstimo fundiário, financiamento de despesas operacionais e assistência ao colono foram aplicados e a alta na demanda internacional por alimentos, permitiu que novos instrumentos e convênios consolidassem a perspectiva do seguimento agroindustrial no Brasil. No final da década de 1980 foi elaborado o Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), que atendia devedores e inadimplentes do setor.

Não em contrapartida, mas em complemento ao modelo, a reforma agrária conduzida pelo Estatuto da Terra em 1964 arrematou um conjunto de medidas que visavam promover uma melhor distribuição da terra através da modificação do regime de posse e uso como forma de aumentar a produtividade e atender aos princípios da justiça social. Entretanto a essência do Estatuto foi alterada pelos representantes das grandes oligarquias rurais que estavam diretamente ligadas à ditadura. De acordo com Mançano, Welch e Gonçalves,

“Temendo a sua utilização por parte dos camponeses, os ruralistas no congresso articularam para alterar a linguagem e os objetivos do Estatuto da Terra, de modo que o apoio estatal ficou restrito à modernização da agricultura em larga escala, consolidando a agroindústria nacional”³⁰.

O modelo de agricultura e agronegócio construído, que pressiona a governança da terra no Brasil se inscreve na década de 1990 e no século XXI sob uma nova dinâmica do capitalismo contemporâneo, a finança capitalista³¹, mas traz consigo as relações historicamente constituídas que subornam qualquer possibilidade de uma efetiva democracia na questão da terra no país. Neste sentido que os conflitos em torno da terra ganham potência e desencadeiam novas formas de confrontos e violências. Os movimentos sociais circunscritos na órbita das relações políticas e econômicas da década neoliberal são conduzidos a novas formas de enfrentamentos e exclusão em uma tentativa voraz de criminalizar suas ações que os pressionam a adotar novas formas de lutas com novas estratégias e avanços em suas formações políticas.

O agronegócio ganha potência no governo de Fernando Henrique Cardoso, assim como os movimentos de luta pela terra se potencializam na medida em que as novas formas de miserabilidade vão se reestruturando. As exigências do neoliberalismo, da inserção competitiva e das políticas propostas pelo Banco Mundial refletiram sobremaneira no modelo nacional de desenvolvimento e no conjunto de suas formas, tomando como exemplo a reforma agrária de mercado que engendrou uma nova configuração da



disputa territorial em nível internacional. Isso garantiu que, do ponto de vista da geoestratégia, dos atores globais ligados ao capital financeiro, empresas agroindustriais e países que demandavam *commodities*, reestruturassem suas relações com o campo no Brasil e entrassem em nova rota de colisão com camponeses sem terra, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinho e tantas outras comunidades tradicionais.

Em tempos mais recentes o decreto 8.447 de 06/06/2015 instituiu o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba -PDA Matopiba, que seria formado por 73 milhões de hectares distribuídos pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, reposicionando o Brasil no mapa da produção agrícola e consolidando sua posição de nova fronteira agrícola. De acordo com dados da CONAB³² (Companhia Nacional de Abastecimento), em 2015 a região já englobava 337 municípios distribuídos em 73 milhões de hectares. O projeto territorial de desenvolvimento econômico estratégico é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica assinado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a EMBRAPA³³ (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) por meio do GITE (Grupo de Inteligência Territorial Estratégica) em 2014. As análises cartográficas e as imagens por satélites colaboraram para o futuro planejamento e a modelagem integrada de políticas públicas e privadas para a região. A análise implementada na região permitiu diversos sobrecortes territoriais (bacias, microrregiões geográficas, municípios, biomas etc.), conforme a necessidade operacional dos diversos órgãos que a utilizarem.

A criação desses pólos agrícolas modernos tem por objetivo estabelecer uma nova dinâmica socioeconômica e fundiária que foram condicionados por uma série de investimentos públicos diversificados no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de empreendimentos privados.

Foram estudadas e analisadas pelos órgãos as interseções territoriais entre os estados, as microrregiões e o bioma Cerrado, com o apoio de dados orbitais, bem como os limites cartográficos decorrentes. Obteve-se uma primeira qualificação territorial e a indicação da localização de vetores de expansão territorial da intensificação no uso agropecuário das terras. Essas análises territoriais foram confrontadas e qualificadas com dados sobre a concentração e a dinâmica da produção agropecuária nas microrregiões graças ao uso das informações estruturadas sobre esses fenômenos realizadas e disponíveis na base de dados Agrotec desenvolvida na EMBRAPA/SGE³⁴.



Dentro do quadro de desenvolvimento técnico e tecnológico sabemos que a região se enquadra na chama agricultura de precisão conhecida como Agricultura 4.0. A delimitação territorial do MATOPIBA no que se refere ao Tocantins, demonstra também a reengenharia da produção agropecuária na região e a submissão a população aos novos componentes da produção de alta performance. Jalapão, Rio Formoso, Dianópolis, Miracema do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Porto Nacional e a região do Bico do Papagaio, compreendendo 8 microrregiões, 139 municípios que compreende 27.772.052 habitantes. No projeto MATOPIBA, o Estado do Tocantins se destaca tanto pelo número de municípios envolvidos quanto na densidade populacional.

O Estado do Tocantins contribuiria com cerca de 24,7% da área territorial, seguidos do Maranhão com 23,7%, Bahia com 17,5% e Piauí com 9,9%. Analisados os quadros político e natural é preciso pontar as articulações do projeto e suas contradições.

Compreendendo uma área de inúmeras terras indígenas, quilombolas e assentamentos camponeses, a lógica da criação do MATOPIBA só poderia submeter as comunidades tradicionais e populações a inúmeros constrangimentos produzidos pelo capital e pelas empresas transnacionais que adentraram seus territórios impondo um modelo de agronegócio que integra pela submissão, controlando sistemas de águas e energia, transportes e formas específicas de compra e arrendamento de terras para o plantio de milho, soja e arroz. O processo de valorização do agronegócio é acompanhada de toda uma engenharia de negócios (mecânica e bioquímica) com aditivos e componentes fiscais e creditícios, que farão das relações econômicas e dos conflitos sociais o termômetro das novas exclusões, da precarização do trabalho e da miséria de parcela significativa da população do campo e da cidade. A lógica do desenvolvimento capitalista moderno se faz de forma contraditória e desigual, segundo destaca Ariovaldo Umbelino de Oliveira,

“(…), penso que o capital trabalha com o movimento contraditório da desigualdade no processo de seu desenvolvimento. No caso brasileiro, o capitalismo atua desenvolvendo simultaneamente, na direção da implantação do trabalho assalariado, no campo em várias culturas e diferentes áreas do país, coo ocorre, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, da laranja, da soja, etc. Por outro lado, este mesmo capital desenvolve de forma articulada e contraditória a produção camponesa. (...). Outro pressuposto teórico importante a ser ressaltado inicialmente, refere-se ao caráter rentista do capitalismo no Brasil. Isto quer dizer que, no Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista de produção



*se faz principalmente pela fusão, em uma mesma pessoa, do capitalista e do proprietário de terra*³⁵.

Ainda que o MATOPIBA não seja uma questão resolvida, há uma nova cadeia produtiva no campo e uma relação decisiva entre os novos fluxos produtivos e as empresas transnacionais que têm o poder de controlar os elos débeis entre o Brasil e o mercado internacional. No que concerne a questão agrária é fundamental analisar as complexas disputas entre o agronegócio, campesinato em torno do território e o papel do Estado no marco do neoliberalismo, das relações internacionais e de seus impactos no Brasil e América Latina. O mercado atuou fortemente em setores estratégicos do país, articulado sempre pelos relatórios promovidos pelo Bando Mundial. A concentração do mercado do agronegócio adquiriu também novas condições na década de 1990 e enorme projeção no início dos anos 2000. As formas como esses mercados se organizaram internacionalmente dá profunda visão da pressão, organização, formas políticas, interesses transnacionais que permitiram ao agronegócio alavancar seus negócios e amplificar sua renda.

Exemplo mais atual disso foi o processo de fusão e aquisição da Monsanto pela Bayer elevando a concentração do mercado do agronegócio a um novo patamar. Bayer e Monsanto controlavam 25% do mercado mundial de pesticidas e de 30% das sementes agrícolas, tanto as geneticamente modificadas como as tradicionais. O grupo alemão Bayer concluiu em 2018 a compra da Monsanto, empresa multinacional com sede nos Estados Unidos, após negociação de 63 milhões de dólares. A empresa Monsanto de 117 anos colecionava denúncias e os movimentos populares contra ela elegeram o dia 23 de maio como o Dia Mundial contra a Monsanto. De acordo com Gabriel Fernandes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

*“A Monsanto foi a empresa que produziu o agente laranja usado na guerra do Vietnã; a empresa que produziu as dioxinas [pesticida altamente tóxico]; o hormônio bovino transgênico; as sementes transgênicas; o aspartame e o RoundUp [herbicida altamente tóxico]. Ela tem um histórico de desenvolver produtos impactantes para o meio ambiente para a saúde*³⁶.

As relações sociais de poder que se construíram através das fusões e aquisições e conseqüentemente das novas ofensivas do capital e sua força política, nos leva a pensar as novas configurações territoriais e a procurar compreender como os movimentos



sociais e populares se reestruturaram organizacional e politicamente a partir desta dinâmica no Brasil.

O controle da produção de alimentos no mundo está basicamente ligada a quatro empresas: ADM (Archer Daniels Midland Company – Estados Unidos), a Cargill Incorporated (Estados Unidos), a Bunge Limited (Holanda) e a Louis Dreyfus Group (França). Suas plantas industriais e atividades estão espalhadas pelo mundo e, por meio de investimentos diretos, fusões e aquisições se associam ou controlam diretamente a produção. Na maior bolsa de mercadorias e futuro regulador dos preços das commodities é a Bolsa de Chicago. Nela os preços de grãos como milho, soja, trigo, álcool, leite, carne bovina, entre outros, são definidos e assim, controlam o mercado internacional, territorializam os monopólios e monopolizam o território³⁷.

Considera-se também aspecto fundamental todos os setores de expansão que aliam forças ao setor do agronegócio. O Setor sucroenergético, celulose, papel e madeira, agricultura, grãos e fibras, setor lácteo, café, carne bovina, dentre outros. É uma verdadeira engenharia política, econômica que potencializa a produção e, conseqüentemente, a acumulação.

Pesquisa divulgada pela USDA³⁸ (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) previu que até o segundo semestre de 2018 o Brasil se tornaria o maior produtor de soja do mundo, superando os EUA que atingiram a maturidade das áreas cultivadas e, portanto, não têm mais como alargar e aumentar sua produtividade ou estender suas fronteiras agrícolas³⁹. Assim a soja entra para a lista dos produtos em que o Brasil é líder de exportação: café, suco de laranja, açúcar e carne bovina. A China tem se destacado como o país que mais compra a soja brasileira in natura. A demanda por soja faz o agronegócio no Tocantins se expandir com enorme velocidade.

A Agrotins (Feira Agropecuária do Tocantins), que acontece anualmente no Estado, é a evidente prova da expansão da produção na região. O volume de negócios realizado por sua ocasião, reflete não apenas a expansão, seu potencial financeiro de acumulação, mas também o nível de tensão que o agronegócio tem criado no Estado. Na primeira Agrotins, ocorrida em 2001, o volume de negócios girou em torno dos 7 milhões de reais, em 2017 esse número atingiu a incrível marca dos 650 milhões⁴⁰. Desde suas fronteiras com o Pará e Maranhão, especialmente na região do Bico do Papagaio até o extremo sul do Estado, inúmeros conflitos foram registrados nos últimos anos pela Comissão Pastoral da Terra. Só em 2014 a CPT registrou 21 conflitos por



terra envolvendo 1456 famílias no Tocantins, sendo que 332 famílias foram despejadas, uma tentativa de assassinato e 6 pessoas foram ameaçadas de morte⁴¹. Os números se intensificam na mesma proporção da escalada do agronegócio, evidenciando o modelo que, legitimado pelo Estado, domina e subordina o campo e os camponeses e investe sobre ambos para a criminalização das lutas sociais no Brasil. São certas as contradições, os conflitos e as violações. Assassinatos, represálias, trabalho escravo e profundos impactos sociais. Essa têm sido a tônica da expansão do modelo de agronegócio que “moderniza” excluindo e condena camponeses e povos tradicionais os impossibilitando de efetivar suas vidas e tradições porque são constantemente violados e destituídos das suas necessidades sendo incorporados a uma lógica que subverte e subordina suas existências.

Notas

¹ Doutora em História Social pela PUC-SP e professora adjunta do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Tocantins. Coordenadora do Observatório dos Movimentos Sociais e Comunidades Tradicionais do Tocantins e pesquisadora do NURBA (Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários da UFT).

² Meszáros, István. Para além do capital. Boitempo Editorial: São Paulo, 2006. pp. 106-7.

³ Moulier-Boutang, Yann. Le Capitalisme Cognitif: La nouvelle grande transformation. Paris: Éditions Amsterdam, 2007.

⁴ Santos, Fabio Luiz Barbosa dos. Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016). Elefante Editora: São Paulo, 2018.

⁵ Sassen, Saskia. Sociologia da globalização. Porto Alegre. Editora ARTMED. 2010.

⁶ De acordo com Ulrich Beck, “soberania inclusiva” significa: “a renúncia aos direitos de soberania implica a conquista do poder de conformação política fundamentado na cooperação transnacional. Contudo, isso só poderá acontecer se a globalização for concebida e compreendida como um projeto político. Apenas deste modo serão viáveis o crescimento local e transnacional da arrecadação, dos empregos, do entendimento e das liberdades políticas. Neste sentido a Europa tornou-se um laboratório para a soberania inclusiva”. BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo resposta à Globalização. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1999. p. 237.

⁷ Bülow, Marisa von. A batalha do livre comércio: a construção de redes transnacionais da sociedade civil nas Américas. Unesp: São Paulo, 2014.



⁸ Pinassl, Maria Orlanda. Da miséria ideológica à crise do capital: uma reconciliação histórica. Boitempo: São Paulo, 2009. pp. 78-9.

⁹ Pereira, João Marcio Mendes. Banco Mundial, reformas dos Estados e ajuste das políticas sociais na América Latina. Revista Ciência e saúde coletiva. 23 Jul, 2018

¹⁰ Bresser-Pereira, Luiz Carlos. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil: para uma nova interpretação da América Latina. Editora 34: São Paulo, 1996. p. 30.

¹¹ Para mais ver Diniz, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sob o novo paradigma. Revista do Serviço Público, ano 47, volume 120, n° 2, maio-ago, 1996.

¹² Para entender melhor o papel da Fiesp nas décadas de 1980 e 1990 ver. Bianchi, Alvaro. Um ministério dos industriais: a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na crise das décadas de 1980 e 1990.

¹³ Para entender melhor o papel da Fiesp nas décadas de 1980 e 1990 ver. Bianchi, Alvaro. Um ministério dos industriais: a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na crise das décadas de 1980 e 1990.

¹⁴ Diniz, Eli. Globalização, reformas econômicas e elites empresariais. Editora da FGV: Rio de Janeiro, 2000.

¹⁵ A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou Económico é uma organização internacional de 36 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas económicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. A maioria dos membros da OCDE é composta por economias com um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos.

¹⁶ Debêntures são títulos que se ajustam às necessidades de captação das empresas e por serem flexíveis é hoje o mais importante instrumento para se obter recursos que as companhias brasileiras possuem. É como um investimento em ações só que possui uma data certa para se converter as debêntures em dinheiro e ela são seguras pois a empresa que emite a debênture tem que garantir com patrimônio os títulos emitidos. Desta forma as debêntures satisfazem de forma mais econômica as necessidades financeiras das sociedades por ações e elas não correm o risco de ficar a mercê das operações de curto prazo oferecidas pelo mercado financeiro e que possuem tantos riscos de perdas.

¹⁷ Chesnais, François. A mundialização do capital. Xamã: São Paulo, 1996. pp. 16-7.



¹⁸ Ianni apud Claude JR. *State and the Global System (Politics, Law and Organization)*, MacMillan Press, 1988, p. 129.

¹⁹ Murphy, Craig N. *Organização Internacional e mudança industrial: governança global desde 1850*. UNESP: São Paulo, 2014.

²⁰ Ianni apud Huntington. Samuel P. *Transnacional Organizations in world politics*. *World Politics*, vol. XXV, nº 3, 1973, pp. 344-346.

²¹ Segundo estudos de Ulrich Beck em seu livro “O que é globalização? Equívocos do globalismo respostas à globalização”, o globalismo é uma ideologia que compreende a globalização reduzida à dimensão econômica. Baseada nela a globalização impõe uma integração dos Estados Nacionais a fim de facilitar e consolidar a fluência dos agentes econômicos.

²² Paulani, Leda. *Brasil delivery*. Boitempo: São Paulo, 2008. pp. 22-3.

²³ Scoleso, Fabiana. Os movimentos sociais na era da mundialização do capital e da precarização do mundo do trabalho: neoliberalismo e transnacionalização. *Revista de História Comparada: UFRJ, Rio de Janeiro*, v.11, n.1, p. 195-225, 2017.

Pereira, João Márcio Mendes. Estado e mercado na reforma agrária brasileira (1988-2002). *Estudos Históricos, Rio de Janeiro*, vol. 28, no 56, p. 385-404, julho-dezembro 2015. p. 395.

²⁴ De acordo com Gonçalves, participação do Brasil no comércio mundial de produtos agrícolas aumentou de 2,43% em para 2,92%. Para mais ver: Gonçalves, Reinaldo. *O Brasil e o comércio internacional: transformações e perspectivas*. Contexto: São Paulo, 2003.

²⁵ Delgado, Guilherme. Reestruturação da economia do agronegócio – Anos 2000. In: Stedile, João Pedro (org). *A questão agrária no Brasil: o debate na década de 2000*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. pp. 71-2.

²⁶ Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e reforma agrária. In: STEDILE, João Pedro (org). *A questão agrária no Brasil: interpretações sobre o camponês e o campesinato*. São Paulo: Expressão Popular, 2016. pp. 349.

²⁷ Ianni, Octavio. *A ditadura do grande capital*. São Paulo: Expressão Popular, 2019.

Singer, Paul. *A Crise do Milagre*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 19

²⁸ Fernandes, Bernardo Mançano, Welch, Clifford Andrew, Gonçalves, Elienai Constantino. *Os usos da terra no Brasil: debates sobre políticas fundiárias*. São Paulo: Unesp/Cultura Acadêmica, 2014.



²⁹ Top-down e Bottom-up são estratégias de processamento de informações e ordenação do conhecimento muitas vezes utilizado na gestão e organização sistêmica de processos produtivos. Ambas abordagens podem ser encontradas na organização de Estado, envolvendo decisões políticas. Na abordagem bottom-up que mencionamos acima, ministérios e entidades subordinadas, as decisões são elaboradas por especialistas que definem, a partir de seus conhecimentos, as melhores políticas a serem aplicadas. Um dos grandes exemplos desta abordagem é a Alemanha que é uma das mais puras abordagens Bottom-up. Para mais ver: Bresser-Pereira, Luiz Carlos, Maravall, José María, Przeworski, Adam. *Economic reforms in new democracies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

³⁰ Fernandes, Bernardo Mançano, WELCH, Clifford Andrew, Gonçalves, Elienai Constantino. *Os usos da terra no Brasil*. UNESO/ Cultura Acadêmica Editora: São Paulo, 2014.

³¹ Chesnais, François. A proeminência da finança no seio do “capital em general”, o capital fictício e o movimento contemporâneo de mundialização do capital. In: BRUNHOFF, Suzanne [et al.]. *A finança capitalista*. Alameda: São Paulo, 2010, p. 95-182.

³² Para mais ver <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/10/matopiba-se-consolida-como-nova-fronteira-agricola-do-pais>

³³ Para mais ver <https://www.embrapa.br/gite/>

³⁴ Nota técnica 1. Proposta de Delimitação Territorial do MATOPIBA. Evaristo Eduardo de Miranda; Lucíola Alves Magalhães; Carlos Alberto de Carvalho; Campinas, São Paulo, Maio, 2013.

³⁵ Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e reforma agrária. In: Stedile, João Pedro (org). *A questão agrária no Brasil: interpretações sobre o camponês e o campesinato* 9. São Paulo: Expressão Popular, 2016. pp. 329-359.

³⁶ Multinacional do agronegócio deixa de existir formalmente, mas práticas criminosas continuam. Reportagem de Rute Pina, *Brasil de Fato*, 07 de junho de 2018.

³⁷ Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. A mundialização da agricultura brasileira. In: Oliveira, Ariovaldo Umbelino de et al. *Território em conflito, terra e poder*. Goiânia: Kelps, 2014.

³⁸ Relatórios disponíveis em www.usdabrazil.org.br/pt-br/

³⁹ <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/brasil-assume-lideranca-mundial-na-producao-de-soja-segundo-eua.shtml>



⁴⁰ Para mais dados ver <https://agrotins.to.gov.br/noticia/2018/4/13/governo-lanca-agrotins-2018-nesta-segunda-feira-no-palacio-araguaia/>

⁴¹ Para mais ver <https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/2562-movimentos-sociais-repudiam-onda-de-violencia-no-campo-em-tocantins>

Referências

Antunes, Ricardo. A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula). São Paulo: Autores Associados, 2004.

Antunes, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

Basualdo, Eduardo M. y Arceo, Enrique. (orgs). Neoliberalismo y sectores dominantes: tendencias globales y experiencias nacionales. Buenos Aires: CLACSO, 2006.

Braverman, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. 3 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

Beluzzo, Luiz Gonzaga. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Unesp, 2013.

Bittar, Ingrid Mara Bicalho. Modernização do cerrado brasileiro e desenvolvimento sustentável: revendo a história. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. Mossoró – Rio Grande do Norte, v. 6, n. 1, pp. 26-38, jan/mar 2011.

Caldart, Roseli Salete, Alentejano, Paulo (orgs). MST, universidade e pesquisa. São Paulo: Expressão Popular, 2014.

Castelo, Rodrigo (org). Encruzilhadas da América Latina no século XXI. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010.

Chesnais, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.

CPT. Cadernos Conflitos no Campo. Período de 2001 a 2015.

Fernandes, Bernardo, Welch, Clifford Andrew, Gonçalves, Elienai Constantino. Os usos da terra no Brasil. São Paulo: UNESP/ Cultura Acadêmica Editora, 2014.

Fiori, José Luís. O poder Global. São Paulo: Boitempo, 2007.

Gentili, Pablo (org). Globalização excludente: desigualdades, exclusão e democracia na nova ordem mundial. 4 ed. Petrópolis: Vozes/ Clacso/ LPP, 2002.

Humphrey, John. Fazendo o “milagre”: controle capitalista e luta operária na indústria automobilística brasileira. Petrópolis: Vozes/CEBRAP, 1982

Ianni, Octávio. Teorias da Globalização. 16 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.



Lira, Eliseu Ribeiro, Santos, Roberto de Souza (orgs). *Fonteira, território e cidades no cerrado: discussões e reflexões socioterritoriais*. Goiânia: Kelps, 2017.

Miguel, Luis Felipe. *Dominação e resistência: desafios para uma política emancipatória*. São Paulo: Boitempo, 2018.

Oliveira, Francisco de. *Crítica à razão dualista: o ornitorrinco*. São Paulo: Boitempo, 2006.

Oliveira, Ariovaldo Umbelino de, LIRA, Eliseu Ribeiro, Cabral, José Pedro Cabrera, Santos, Roberto de Souza. *Território em conflito, terra e poder*. Goiânia: Kelps, 2014.

Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. *Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o agronegócio no Brasil*. In: Stedile, João Pedro (org). *A questão agrária no Brasil 7: o debate na década de 2000*. São Paulo: Expressão Popular, 2016.

Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. *A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e reforma agrária*. In: Stedile, João Pedro (org). *A questão agrária no Brasil 9: interpretações sobre o camponês e o campesinato*. São Paulo: Expressão Popular, 2016.

Paulanl, Leda. *Brasil delivery*. São Paulo: Boitempo, 2008



Marcha Carnaval em Defesa da Água, Vida e Território: Resistência camponesa diante do megaprojeto mineiro “La Colosa” em Cajamarca, Tolima

Maria Carolina Bitu Lira Cavalcante

Resumo

A Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio é uma mobilização social convocada pelo esforço coletivo de camponeses de Cajamarca (Tolima, Colômbia) para manifestar sua oposição ao megaprojeto “La Colosa”, da multinacional Anglo Gold Ashanti, que pretende impor neste território uma mina a céu aberto para exploração aurífera. Este evento surge a partir da necessidade de reorganizar criativamente as práticas e discursos dos movimentos sociais para assegurar o direito legítimo de reunião e protesto em um contexto de conflito armado marcado pela repressão das manifestações populares e sua estigmatização pela associação com supostos grupos guerrilheiros. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio para o campesinato de Cajamarca em seu processo de defesa da soberania territorial e resistência contra a instalação deste projeto mineiro-extrativista. Ante a criminalização do movimento socioambiental por parte das forças repressivas do poder público e dos meios de comunicação, pretendo examinar a apropriação do carnaval como ferramenta de luta política, considerando-o uma alternativa de manifestação popular não-violenta, bem como cenário de participação política e liberdade de expressão autorizada. Deste modo, busco verificar a apropriação dos significados construídos socialmente ao redor das representações coletivas sobre o carnaval, no sentido de identificar de que forma os camponeses de Cajamarca se apropriam deste universo simbólico para exigir o cumprimento de seus direitos humanos fundamentais, dentre eles, o direito de manifestar pacífica e publicamente suas reivindicações sem represálias, assim como o direito a um meio ambiente saudável.

Palabras clave

Territorialidades; Ação coletiva; Direitos Humanos; Extrativismo; Soberania.

Introdução

Esta apresentação é fruto de um trabalho de conclusão de curso realizado com o objetivo central de analisar a importância da *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la*



Vida y el Territorio como alternativa de mobilização social não-violenta para o movimento socioambiental de Cajamarca (Tolima, Colômbia) em seu processo de defesa territorial e resistência contra a instalação do megaprojeto mineiro-extrativista

“La Colosa” da multinacional sul-africana Anglogold Ashanti, que pretende impor neste território uma mina a céu aberto para exploração aurífera. Em um contexto de conflito armado marcado pela violência sistemática contra a oposição política (Rodríguez, 2015), a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* se apresenta como um protesto pacífico convocado a partir da necessidade de reorganizar criativamente as práticas e discursos dos movimentos sociais para assegurar o direito fundamental de reunião e liberdade de expressão. Diante disto, este trabalho busca analisar a apropriação do carnaval enquanto ato simbólico que sob formas lúdicas revela as tensões latentes do conflito socioambiental vivido em Cajamarca. Tomando como ponto de partida uma revisão bibliográfica sobre o tema da violência estrutural na Colômbia, pretendo investigar de que forma os significados do imaginário construído coletivamente ao redor do carnaval são apropriados pelos opositores do projeto “La Colosa” para a execução de uma mobilização social organizada em torno do princípio da não violência ante a criminalização da luta popular e sua estigmatização pela suposta associação com grupos guerrilheiros.

Metodologia

O interesse pelo tema é resultado de uma experiência de três semestres de mobilidade acadêmica com a Universidad Nacional de Colombia, através da qual pude conhecer o território de Cajamarca durante uma saída de campo, onde estivemos discutindo com os membros do coletivo *Conciencia Campesina* os problemas sociais enfrentados pela população de Cajamarca desde a chegada da empresa ao território. Logo depois, retornei à Cajamarca para participar da 11ª edição da Marcha Carnaval, em junho 2018, em Ibagué, capital do departamento do Tolima. Em seguida, de agosto de 2018 a janeiro de 2019, participei da Escuela Campesina organizada pelo Coletivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA) com o apoio da organização Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna. A escola itinerante tinha como proposta um encontro por mês em alguma vereda de Cajamarca para refletir coletivamente sobre o território, sua identidade e as formas de defendê-lo frente às ameaças extrativistas. Desta forma, a partir de discussões temáticas buscava-se o fortalecimento da ação política e capacidade organizativa das lideranças sociais de Cajamarca a partir de seus conhecimentos e experiências como defensores do território. Nos seis encontros



realizados, foram discutidos temas como o modelo extrativista e a disputa pela terra, lutas agrárias, ordenamento ambiental do território, direitos das mulheres camponeses, soberania alimentaria, participação popular e direitos humanos. Sendo assim, este trabalho busca condensar o aprendizado construído neste espaço coletivo de diálogo com o campesinato de Cajamarca.

Fundamentação do problema

Cajamarca é um município rural de aproximadamente 21.000 habitantes, localizado a 1.814 metros acima do nível do mar, na vertente central da Cordilheira dos Andes colombianos. Possui 520 km² de extensão total, dos quais 79% se encontram dentro da Zona de Reserva Forestal Central (ZRFC), protegida por lei desde 1959. É um território rico em recursos hídricos, banhado por três rios principais

– Anaime, Vermellón e Toche – e diversos afluentes. Possui ainda uma zona de páramo, ecossistema de altitudes elevadas caracterizado por sua capacidade de retenção de água, onde nascem cerca de 25 rios que abastecem o departamento do Tolima. O centro urbano municipal se encontra construído sobre uma meseta formada pela última grande erupção do Cerro Machín, vulcão responsável pela característica fertilidade dos solos, mas a maior parte da população habita sobre os 354 km² de área rural, divididos entre 39 veredas e o corregimiento de Anaime (Alcaldía de Cajamarca, 2012).

Beneficiada tanto pela abundante oferta de recursos hídricos quanto pela variedade de pisos térmicos proporcionada pelo relevo andino, a agricultura familiar é a base da economia local e fornece diariamente toneladas de alimentos para os mercados de grandes capitais colombianas, dentre as quais Cali, Bogotá e Medellín. Nas ladeiras da cordilheira se cultiva café, feijão, ervilha, milho e frutas, enquanto nas partes mais altas a atividade principal é a pecuária. O alimento mais representativo da agricultura cajamarcuna é a mandioquinha, sendo a primeira produtora a nível nacional deste tubérculo. Por estas razões, Cajamarca recebe o título de despensa agrícola da Colômbia (BM Colombia Solidarity Campaign, 2013).

Situada entre duas capitais departamentais, a 37 km de Ibagué (Tolima) e a 43 km de Armenia (Quindío), Cajamarca é atravessada pela Via Nacional, estrada que conecta a região central de ocidente a oriente, interligando o mais importante porto da Colômbia, no litoral de Buenaventura, e a capital do país, Bogotá. Além disso, devido a sua localização no alto da Cordilheira Central, possui uma posição estratégica entre dois



vales interandinos, Vale do Rio Cauca e Vale do Rio Magdalena, servindo também como corredor tático para a mobilidade de norte a sul através das montanhas. Estas características geográficas estiveram à serviço de interesses militares de grupos armados, especificamente das FARC-EP, do começo dos anos 2000 até a desmobilização desta guerrilha após o último acordo de paz.

A biodiversidade que sustenta a vocação agrícola de Cajamarca encontra-se ameaçada por um megaprojeto extrativista da empresa sul-africana AngloGold Ashanti (AGA), que busca impor neste território uma mina à céu aberto para exploração de ouro em grande escala. O empreendimento, que seria a maior jazida aurífera de toda Colômbia, recebe o mesmo nome da montanha onde está localizado: La Colosa. Tornou-se público no final de 2007 através de um pronunciamento do então presidente Álvaro Uribe Vélez transmitido por televisão em rede nacional, embora viesse realizando pesquisas exploratórias no território desde anos atrás, sem o consentimento da comunidade. A partir de então, a comunidade de Cajamarca começou a organizar-se no sentido de buscar informações sobre os impactos da atividade aurífera no território, assessorados sobretudo por professores e estudantes da Universidad del Tolima (BM Colombia Solidarity Campaign, 2013).

A implementação deste projeto representa um grave problema ambiental, uma vez que está circunscrito em Zona de Reserva Forestal Central (ZRFC), parte de um ecossistema fundamental para a preservação da biodiversidade e reserva de fontes hídricas que alimentam não só Cajamarca, como diversos outros municípios da região. Isto porque a área onde se pretende executar La Colosa compreende a bacia maior do Rio Coello e da chamada “Estrela Hídrica do Tolima”, onde nasce o córrego homônimo ao projeto e outros 150 afluentes que abastecem aquedutos para consumo humano e atividades agropecuárias de pelo menos sete municípios do departamento, incluindo a capital, Ibagué (García, 2017).

Por outro lado, a atividade mineira à grande escala requer a remoção diária de milhões de litros de água a serem mescladas com cianeto para extrair ouro das rochas através do mecanismo de lixiviação. A mineração também gera resíduos tóxicos que expostos às chuvas contaminam os mananciais de água subterrânea com metais pesados, pondo em risco a qualidade da água necessária para a atividade agrícola e, por conseguinte, a segurança alimentar do território. Outro risco diz respeito à geomorfologia particularmente acidentada da Cordilheira dos Andes e, no caso de Cajamarca,



agravada pela alta atividade sísmica do vulcão Machín, situado a 8 km de distância de La Colosa, o que poderia resultar em catástrofes contaminantes, como por exemplo a ruptura de piscinas de drenagem e o derramamento de água cianurada em caso de terremotos ou irrupções vulcânicas (fiero et al, 2016).

Ademais, a exploração mineira à céu aberto requer também a destruição de toda a capa vegetal do terreno com o uso de explosivos, dado que é necessário remover aproximadamente 600 toneladas de terra por dia para ter acesso às rochas em profundidade. O resultado disto é a formação de um deserto criado artificialmente pela escavação e devastação sucessiva do solo, o que quer dizer, no lugar da montanha originária, um grande vazio à céu aberto. Além dos impactos sobre a qualidade da água e do solo, são conhecidos também os efeitos tóxicos da atividade mineira sobre o ar, contaminados por resíduos utilizados durante o processo de extração de metais preciosos, como o cianeto (Arango, 2014)

Em um território cuja maior parte da população depende diretamente do campo para existir, os efeitos negativos do impacto ambiental são igualmente sociais, pois põe em risco direto a economia e a cultura tradicional de seus habitantes. A introdução de uma nova dinâmica socioeconômica no território teve como consequência uma deficiência na mão de obra do setor agrícola, dado que os salários prometidos pela empresa superam o que o trabalho no campo é capaz de oferecer. Murillo (2018) aponta que desde a chegada da empresa a Cajamarca, houve um incremento no custo de vida, com um disparo dos preços de alugueis no centro urbano e nos produtos alimentícios da cesta básica. Logo, há uma intensificação de problemas sociais como prostituição e abuso de drogas, sobretudo na parte urbana do município, afetada pelo aumento da pobreza e da criminalidade. Para mais, a execução do projeto também implica o desalojo da comunidade assentada sobre a área a ser explorada, com o incremento da militarização e da violência à serviço de interesses particulares. Nesse sentido, AngloGold Ashanti se beneficiava do contexto de conflito armado para sensibilizar os camponeses a venderem seus terrenos a bons preços e estes, diante da necessidade, terminavam cedendo. Muitos dos que resistiram sofreram os efeitos da violência e do deslocamento forçado pelas forças paramilitares (Murillo, 2018). Em contrapartida, AngloGold Ashanti promete a geração de empregos com salários mais elevados. No entanto, sendo a mineração à céu aberto uma atividade altamente mecanizada, as oportunidades de trabalho seriam temporárias, concentradas na fase inicial de construção da mina, gerando em seguida o desemprego em massa. Da mesma



maneira, a pesar da empregabilidade em outras áreas secundárias associadas à presença da mina, como comércio e prestação de serviços, considerando que a maior parte da população de Cajamarca é formada por camponeses, os cargos que exigem formação especializada seriam ocupados por profissionais qualificados provenientes de regiões distintas.

Enquanto AngloGold Ashanti afirma que La Colosa poderia chegar a ser a maior mina de ouro à céu aberto da América do Sul, fornecendo toneladas de ouro, progresso e capital, camponeses de Cajamarca afirmam que para eles a verdadeira riqueza está na terra e na vida que brota dela a partir de seu trabalho, e não incrustado em suas camadas mais profundas na forma de metais preciosos. A grande maioria dos trabalhadores rurais de Cajamarca prefere a tradição agropecuária sobre a atividade mineira e enxerga nos modelos extrativistas uma clara oposição ao seu modo de vida. Por estas razões, La Colosa representa para Cajamarca uma catástrofe tanto ambiental quanto social, uma vez que suas ações devastariam o ecossistema local, contaminando recursos naturais fundamentais para que estes agricultores e pecuaristas possam seguir vivendo sua cultura e exercendo seu trabalho.

Diante disto, a socialização do projeto marcou o início de uma polarização da população entre defensores e opositores da atividade mineira em Cajamarca. Sobretudo entre 2009 e 2011, houve uma explosão de processos de organização comunitária com focos diferentes, mas com o objetivo comum de defender o território, os recursos naturais e a segurança alimentar. A resistência ao projeto conduzia a um processo autônomo de pedagogia rural e urbana, tendo em vista a capacitação e sensibilização da população em torno dos impactos socioeconômicos e ecológicos da mineração sobre o território (García, 2017).

De acordo com Corredor (2014), este movimento contou com o apoio da comunidade acadêmica da Universidad del Tolima, comprometida tanto com o assessoramento jurídico quanto com pesquisas científicas realizadas em Cajamarca, sobretudo nas áreas de estudos biológicos, geológicos e socioeconômicos. A partir deste grupo de professores e estudantes opositores ao projeto, foi criado em 2010 o *Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV)*, como coordenadora de diferentes movimentos e organizações de caráter socioambiental, coletivos estudantis, camponeses e indígenas, meios de comunicação alternativa e pessoas autônomas sem filiação articuladas em um amplo processo comunitário que tem como objetivo impulsionar ações públicas em



defesa dos recursos naturais e do direito coletivo a um ambiente saudável. Esta plataforma de trabalho coletivo surgiu à princípio em Ibagué e em seguida foi replicada em diversos outros municípios igualmente afetados pelo modelo econômico extrativista, conformando em 2013 a *Red de Comités Ambientales del Departamento de Tolima (Red de CAT)*, com o objetivo de realizar campanhas regionais de formação e mobilização em torno da defesa do território, da água e da vida (Quintana, 2016; Castillo, 2016)

As lideranças sociais do movimento socioambiental de Cajamarca estiveram no centro de uma campanha de difamação articulada pela multinacional junto aos meios de comunicação e outros representantes do poder. O departamento do Tolima carrega o estigma social de ser o lugar de nascimento das FARC-EP e outros movimentos populares de autodefesas camponesas, razão pela qual tem sido alvo da atividade militar do Estado frente ao conflito armado. Desde que começou a organizar-se, circula em direção contrária ao movimento socioambiental de Cajamarca rumores de que grupos armados estariam à frente da oposição ao megaprojeto La Colosa. Por essa razão, camponeses cajamarcunos vêm sendo alvo de ataques sistemáticos que envolvem difamações, intimidações, perseguições e inclusive assassinatos. As ameaças são feitas através de panfletos, e-mails, telefonemas e mensagens de texto anônimas, que acusam os integrantes do movimento socioambiental de Cajamarca de terroristas, guerrilheiros, anti-progresso, anti-desenvolvimento, etc.

No dia 26 de abril de 2017, é realizada a consulta popular vinculante de Cajamarca, com a seguinte interrogação: “Está você de acordo, sim ou não, com que no município de Cajamarca se executem projetos e atividades mineiras?”. O não ganhou por 97,9% dos votos, de um total de 6.296 participantes. Com este resultado, o movimento socioambiental de Cajamarca conquistou uma vitória histórica sobre os interesses privados, conseguindo suspender o projeto mineiro de AngloGold Ashanti sobre o território. A partir de então, a luta é para que o esquema de ordenamento territorial de Cajamarca vete toda possibilidade de exploração de metais preciosos a céu aberto e que o município seja legalmente considerado livre de atividades mineiras a grande escala (García, 2017).

A consulta popular de iniciativa cidadã serviu de modelo para outras comunidades em resistência interessadas em realizar o mesmo exercício vinculante, de modo que hoje o movimento socioambiental de Cajamarca acompanha e presta apoio a demais localidades ameaçadas pelo capital transnacional extrativista. Para além dos



mecanismos jurídicos e institucionais, nesta caminhada histórica em torno da agenda de defesa do território e dos recursos naturais, surgiu outra forma de ação política, fundamental para o triunfo do movimento socioambiental do Tolima: a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* (Quintana, 2016).

Resultados

Há um aspecto institucionalizado da criminalização da luta popular, que são as normas constitucionais à serviço de uma elite que domina tanto o poder político quanto os meios de comunicação (PALAU, 2009; KOROL, 2009). No caso da Colômbia, a guerra é um agravante deste cenário, pois devido às políticas institucionais contrainsurgentes a expressão de inconformidades no cenário público é assimilada a ideais revolucionários. O resultado é a penalização do direito à manifestação, no sentido de neutralizar os movimentos sociais que se levantam contra a ação do Estado e dos interesses privados. Logo, são tratados como terroristas e, conseqüentemente, criminosos os defensores de aspectos tão essenciais para a sobrevivência humana como o direito a uma vida em condições de dignidade, com acesso a um meio ambiente saudável, água e alimento (Sánchez, 1997; Rodriguez, 2015).

Em um contexto de conflito armado e violência, a estigmatização tolhe a possibilidade de mobilização social com liberdade de expressão em condições de segurança, pondo em risco a vida dessas pessoas injustamente acusadas de serem membros infiltrados da insurgência armada. A caracterização dos opositores do projeto como “guerrilheiros” desqualifica o movimento socioambiental de Cajamarca ante a opinião pública, assim como viola os direitos humanos de seus líderes sociais e os põe em situação de vulnerabilidade, chegando ao ponto de, como consequência disto, serem declarados objetivo militar por parte do grupo paramilitar Águilas Negras. Por esta razão, os opositores do projeto temiam manifestar-se publicamente contra a multinacional e sofrerem com as respostas repressivas da força pública e da imprensa que os estigmatizavam. Ainda assim, a pesar dos temores e tensões constantes, continuavam buscando formas de fazer valer seus direitos civis fundamentais de reunião e protesto como parte do exercício democrático.

É neste contexto que surge a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio*, convocada pelo Comité Ambiental e financiada pelo esforço coletivo da própria comunidade organizada autonomamente para manifestar sua inconformidade frente às atividades da empresa Anglo Gold Ashanti em seu território. A mobilização



organizada em torno do princípio da não-violência aparece em resposta à grande repressão enfrentada por camponeses e camponesas de Cajamarca em suas primeiras tentativas de manifestações públicas contra o projeto La Colosa. Diante a necessidade de recriar as práticas e discursos dos movimentos sociais para assegurar o direito legítimo de reunião e protesto, a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* aparece como uma manifestação popular que busca resolver os conflitos socioambientais a partir da arte e da ciência, em uma reconfiguração das múltiplas formas de ação coletiva. Deste modo, se apresenta como uma mobilização social pacífica caracterizada pela criatividade para exigir o cumprimento de direitos constitucionais elementares, sobretudo a participação política (Quintana, 2016).

O ambiente de criminalização das organizações e das mobilizações populares opositoras ao projeto fez com que os cajamarcunos e cajamarcunas buscassem no Carnaval uma forma de protestar pacificamente e assim exercer resistência frente à violação de seus direitos humanos. Através de uma manifestação artística e cultural, a comunidade exige a saída da multinacional de seu território e pede ao governo que respeite sua autonomia territorial e soberania alimentaria, freie a locomotora minero-energética e invista em outras alternativas de desenvolvimento que não degradem o patrimônio ambiental das gerações presentes e futuras.

Realizada no dia 3 de junho de 2011, a primeira edição da *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* conseguiu reunir aproximadamente doze mil participantes entorno de uma mobilização que tinha como princípio a arte e a alegria característica da festa carnavalesca para proteger os recursos naturais e os direitos humanos, bem como ratificar totalmente a negativa do povo frente aos projetos extrativistas (Corredor, 2014). Desde então, a Marcha Carnaval vem sendo anualmente realizada no marco das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, como mobilização social que se apropria do imaginário ao redor do Carnaval, enquanto festa e manifestação popular, como ferramenta de luta e resistência política.

Desta maneira, todos os anos camponeses e camponesas de Cajamarca marcham rumo à capital do Tolima, onde se reúnem com estudantes universitários e secundaristas de Ibagué, professores, ambientalistas e delegações de outros municípios do departamento, bem como pessoas independentes que se opõem à execução do projeto. Os atores sociais que conformam a marcha atualmente são bastante heterogêneos, incluindo entre eles coletivos LGBTs, artistas circenses, bandas marciais, o coletivo



Revolución Vinotinto de torcedores organizados do Deportivo Tolima, membros da Guardia Indígena del Tolima, grupos religiosos como Hare Krisnas e membros da Iglesia Menonita de Colombia, etc.

As “armas”, que em mais de uma ocasião os camponeses foram acusados de empunhar, não são outras senão os alimentos produzidos em Cajamarca, ao lado de cartazes, instrumentos musicais e símbolos da cultura campesina tolimense, refletidos no vestuário tradicional do campo colombiano composto por poncho ou ruana, *sombrero* e *machete*. Os acompanham também uma dezena de camionetes modelo *Jeep Willys*, consagrados no campo por fazer o transporte diário de passageiros entre o centro urbano e as *veredas*. Chamados de “carrales”, estes veículos são decorados com produtos agrícolas doados pela comunidade, que ao final da marcha são vendidos para financiar os próprios custos do transporte até o evento.

A apropriação do Carnaval pelo movimento socioambiental como forma de mobilização política pacífica dialoga com o que o antropólogo James Scott denomina estratégias de resistência dos dominados. As atividades ou pessoas insurgentes que parecem questionar a realidade oficial são estigmatizadas pelo poder e apontados como criminosos, delinquentes e terroristas, com o fim de desviar a atenção de suas verdadeiras exigências políticas. Em razão disto, a luta dos grupos subordinados por necessidade se faz prudente, tendo em vista corresponder aparentemente às expectativas dos grupos dominantes e assim evitar uma possível confrontação pública em um ambiente de censura. Mas embora os grupos dominantes imponham as aparências que os grupos subordinados devem adotar, isto não impede que estes as usem como instrumento de resistência e evasão, mantendo-se dentro dos limites da lei para transmitir sua mensagem, de modo que as autoridades estejam obrigadas a tolerar ou pelo menos não impedir a sua expressão (Scott, 2000; Palau, 2009).

O Carnaval tem suas origens em celebrações que nos remetem a antigos cultos pagãos de exaltação da fertilidade, decorrentes de um processo de deificação do reino vegetal que ocorre paralelamente ao desenvolvimento da agricultura. Realizadas nos períodos de plantios, eram cerimônias que marcavam o ciclo anual da vida social conforme as estações do ano e a produção de alimentos. Nestas reuniões, os participantes tinham o costume de beber, comer, dançar e celebrar coletivamente com o objetivo reconciliar os seres humanos com o meio natural, representado por divindades agrárias, para assim garantir boas colheitas. Além do despertar da natureza, estas festividades cíclicas



dramatizavam também o tema da vida e da morte, pois representavam um breve e intenso intervalo de euforia e liberação diante do longo e metódico tempo de resignação e disciplina a ser vivido no restante do ano. Desta forma, estas celebrações simbolizavam uma renovação, um renascimento, um processo de recriação, como um ritual de passagem (Sebe, 1989).

De acordo com Van Gennep (1978), os ritos de passagem podem ser entendidos como sequências cerimoniais que acompanham a transição de uma determinada situação a outra, assim como de um mundo (cósmico ou social) a outro. Para o autor, os ciclos cósmicos e as passagens da vida humana estão intimamente relacionados, de modo que “viver é continuamente desagregar-se e reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e renascer” (p. 157). Essa transição entre estados pode ser analisada conforme um esquema dividido em três momentos: separação, liminariedade e agregação ou reintegração. Todos os rituais são ferramentas de modificação do espaço-tempo regular, pois produzem uma mudança de posições que por sua vez proporciona uma liberdade autorizada para dar vazão a comportamentos outrora reprimidos dentro da norma vigente. A análise de Turner (2013) enfatiza e aprofunda a fase liminal dos rituais de passagem, isto é, o período de margem que comporta um momento de ruptura com o cotidiano, suspensão da vida comum e inversão da ordem normal, ocasionado pela irrupção do sagrado na cotidianidade. Como uma dramatização dos ciclos da vida em um plano extraordinário, as imagens de morte e renascimento proliferam a liminariedade, que por esta razão cumpre também uma função purificadora para o grupo social.

Mais do que apenas uma transformação da cotidianidade, os dias de carnaval permitem uma subversão da norma social e uma oposição à ordem, ainda que temporária. A abolição provisória das distinções de classe e fusão das diferenças em uma só massa crítica, satírica e burlesca representa o momento oportuno para expressar ideias com uma liberdade que em outras circunstâncias não seria possível, assim como para através deste exercício alcançar mudanças na sociedade. Deste modo, a pausa na vida cotidiana e no trabalho alienado altera a razão e a individualidade, permitindo que tensões latentes venham à tona sob formas lúdicas.

Segundo Scott (2000), em situações de censura e repressão qualquer manifestação de oposição direta resulta consideravelmente perigosa. Logo, por razões de segurança se disfarça, se silencia e se oculta a resistência ideológica, criando técnicas específicas



por meio das quais os grupos subordinados introduzem no discurso público a sua dissidência. Assim, busca-se transmitir sua mensagem dentro dos limites da lei, usando o disfarce como forma de proteção, de modo que as autoridades sejam obrigadas a tolerar a manifestação ou pelo menos não possam impedir violentamente que elas aconteçam.

Há uma relação histórica entre carnavais e rebeliões, pois a reunião anônima de centenas de participantes, assim como o uso de máscaras durante o período festivo, oferecem uma proteção legítima do discurso público e conformam uma ameaça em potência ao poder dominante. O anonimato propiciado pela reunião multitudinária e a licença para o uso de máscaras transforma o Carnaval em ocasião ideal para rituais de inversão, sátira, paródia e suspensão geral das normas sociais. Por conseguinte, enquanto evento extraordinário que autoriza os disfarces, bem como a linguagem e a conduta explícita, o Carnaval se apresenta como forma institucionalizada de disfarce político (Scott, 2000).

Simbolizando o mundo da sátira e do riso generalizado, o Carnaval propõe a possibilidade da denúncia crítica através da arte, do humor e da imaginação à serviço da liberdade de expressão do povo. Como um ato lúdico, permite que os indivíduos se afastem temporariamente das obrigações impostas pelo trabalho e pela sociedade para imaginar e recriar uma ordem social diferente desejada, uma “segunda vida”, um “outro eu”. Além disso, corresponde a uma necessidade adaptativa do ser humano às suas condições materiais de existência, cumprindo uma função social vital, que é a distração, o divertimento e o ócio criativo (Rey Sinning, 2000).

Para além da atividade lúdica, a preparação da festa, bem como sua celebração, é motivo de reunião e convocação de uma coletividade, seja ela grande ou pequena. Há um momento em que o lúdico dá lugar ao político, pois a brincadeira pode degenerar uma crítica, mesmo que velada, aos detentores do poder. O Carnaval também reúne seus participantes ao redor de uma identidade comum, extrapolando a simples recreação e formando uma coletividade com laços de solidariedade em relação ao grupo, assim como a organização popular em movimentos sociais se dá em torno de uma identidade coletiva a partir da luta por uma causa imediata em comum. Deste modo, a festa é organizada e celebrada por uma coletividade específica, unida por vínculos que tendem a ser de solidariedade, o que produz coesão social e reforça os laços identitários deste grupo (Buelvas, 2001).



Ademais, enquanto ritual de passagem, o Carnaval abrange um momento de reflexividade, no qual os participantes refletem sobre si mesmos e sobre seu grupo social. São eventos capazes de “criar” a sociedade ao tornar explícita a ordem social enquanto modelo ideal e não só enquanto realidade. Isto posto, a festa pode ser analisada como um fenômeno de caráter modelar que através do rito constrói a vida coletiva (Van Gennep, 1978).

Portanto, as festas carnavalescas possuem um duplo propósito enquanto atividades ao mesmo tempo integradoras e subversivas, devido tanto a sua capacidade de materializar aspirações coletivas de uma toma de consciência comum quanto de mobilizar comunidades a partir da liberdade de expressão de diferenças políticas. Sendo assim, há dimensões particulares das sociedades nas quais as celebrações se produzem que dialogam com as reivindicações específicas de cada grupo social. Neste estudo de caso em particular, vinculando a apropriação dos imaginários da festa pelos atores de Cajamarca ante a necessidade de organizar criativamente alternativas de manifestações não-violentas no sentido de frear a criminalização do movimento e sua estigmatização como terroristas.

Discussão

Para Palau (2009), o cerne da estigmatização dos atores sociais que questionam a realidade oficial é desviar a atenção de suas verdadeiras exigências políticas, criando no senso comum uma opinião negativa sobre as mobilizações, de modo a evitar que surjam ações de solidariedade ante as ações repressivas das forças do Estado. Esta negação dos direitos fundamentais de participação, associação e manifestação tem como fim isolar, disciplinar e desmobilizar os movimentos sociais que vão contra os interesses hegemônicos da lógica do grande capital.

De acordo com Scott (2000), na busca por meios de reformulação do discurso público ante a criminalização da luta popular, o carnaval aparece como forma institucionalizada de disfarce político. Por ser um espaço-tempo extraordinário, o carnaval cria a possibilidade momentânea de inversão da ordem, período em que grupos subordinados podem expressar com uma certa liberdade suas ideias e inconformidades frente à ameaça implícita de violência do Estado para com as manifestações populares de dissidência no cenário público.



Segundo Bakhtin (1987), o carnaval é o lugar mais evidente da expressão de discursos não-hegemônicos, excluídos do mundo da hierarquia, pois o anonimato propiciado pela reunião de multidões durante a festa protege a identidade dos manifestantes, tirando proveito deste espaço-tempo de liberação momentânea da constante vigilância oficial para expressar através do disfarce do discurso uma crítica direta às estruturas de poder dominante.

Esta é uma dimensão estratégica da conduta dos grupos subordinados, cujo discurso público está sujeito a formas refinadas e sistemáticas de subordinação frente às elites governantes. Com esta prudência tática os grupos subordinados buscam rebelar-se recorrendo a formas mais seguras de expressar a dissidência política no espaço público através do disfarce do discurso. Sendo assim, estas formas de manifestar inconformidades e demandas evadem a confrontação direta e aberta com as estruturas de autoridade representadas pelas forças repressivas do Estado com o interesse prático de minimizar respostas ofensivas (Scott, 2000).

Conclusões

Neste trabalho buscou-se analisar de que modo a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* contribui para o movimento socioambiental de Cajamarca em seu processo de resistência contra a instalação do megaprojeto mineiro-extrativista “La Colosa”. A *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* é uma mobilização social que se apropria da representação do carnaval como uma festa alegre enquanto símbolo para assegurar o direito ao protesto em condições mínimas de segurança em um contexto de violência generalizada e repressão aos movimentos sociais ocasionada por uma política de institucionalizada de guerra preventiva contra o terrorismo e as guerrilhas.

Na América Latina, o modelo de produção capitalista orientado a mercados globais mercantiliza bens comuns através da especialização produtiva baseada na extração de recursos naturais não-renováveis. O campo é um reduto de múltiplas riquezas vitais e os camponeses, por sua vez, enquanto agentes da transformação social, possuem um estilo de vida alternativo a este que é imposto pela produção em grande escala orientada a mercados globais. Assim sendo, as reivindicações do movimento socioambiental de Cajamarca e do movimento campesino em geral vão historicamente contra os pilares básicos do modelo extrativista neoliberal de capital transnacional.



No caso da Colômbia, o assédio do modelo extrativista neoliberal encontra ressonância na relação estreita entre o conflito armado e zonas rurais altamente biodiversas ameaçadas por disputas territoriais. Perante a ausência do Estado, estes territórios sofrem com a consequente expansão tanto de atores paraestatais armados quanto de grandes indústrias multinacionais sobre estes territórios ricos em minerais, fauna e flora. Por conseguinte, a guerra se torna o plano de fundo comum para o avanço de interesses privados sobre estas regiões abundantes em recursos naturais e distanciadas dos grandes centros de poder.

Os grupos subordinados buscam maneiras de expressar opiniões dissidentes a través de sua vida cultural, codificando com sentido político símbolos da atividade cotidiana para manifestar-se contra o governo de modo que este discurso dificilmente possa ser reprimido. Assim, a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio*, que compõe o repertório de luta do movimento socioambiental de Cajamarca, se apresenta como veículo de expressão popular, revelando o discurso público através da arte (Scott, 2000). Deste modo, o movimento socioambiental de Cajamarca recorre ao carnaval, enquanto ato comunicativo, para expressar sem maiores repressões sua inconformidade com a exploração de atividades mineiras em seu território, em um protesto social organizado em torno da construção de paz a partir da arte.

Além disto, a organização das comunidades em torno do carnaval também permite a construção da identidade cultural de modo a potencializar o sentido de pertencimento a um grupo social específico. Logo, a participação na *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* também contribui para o fortalecimento da coesão social entre os envolvidos em sua gestão, reforçando a identidade campesina, pois enquanto ato ritual manifesta uma representação de si e de sociedade ideal imaginada, além de confraternizar com símbolos da cultura local e regional.

Portanto, como ferramenta de luta contra a criminalização, o movimento socioambiental de Cajamarca se apodera do carnaval, enquanto símbolo de vida e alegria, para explicitar as relações entre o território e seus habitantes com o fim de apresentar a importância da defesa da água, da vida e da terra para a população camponesa. Desta forma, a *Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio* se apresenta como cenário pacífico de reivindicação da soberania territorial e alimentaria, que busca frear a repressão das forças estatais fazendo valer o direito fundamental de participação política, reunião e protesto no espaço público, através de uma mobilização social



organizada em torno da arte. Sendo assim, representa uma das múltiplas estratégias criativas construídas pelos movimentos sociais para manifestar no espaço público suas reivindicações políticas, por questões de segurança disfarçadas através do carnaval e da expressão do protesto social sob formas rituais.

Referências bibliográficas

Alcaldía de Cajamarca, 2012. “Plan de desarrollo para volver a crecer. 2012-2015”. Disponível em: <https://bit.ly/3lJwk8y>

Archila, Mauricio. “Los movimientos sociales y las paradojas de la democracia en Colombia”. Controversia, No 186, jun./2006, Bogotá : CINEP, 2006.

Bakhtin, Mikhail. “A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais”. São Paulo: Editora Hucitec, 1987.

BM Colombia Solidarity Campaign. “La Colosa: Una Muerte Anunciada. Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia”. Noviembre, 2013.

BM Colombia Solidarity Campaign. “La Colosa: La búsqueda de El Dorado en Cajamarca, Colombia”. Junio, 2011.

Buelvas, Mirta. “Por Mandato del Rey Momo”. Las Voces de la Memoria: conversatorios sobre fiestas populares de Colombia. Bogotá: Fundación BAT, 2001. BURKE, Peter. “Cultura popular na Idade Moderna”. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Castillo, Martha Nataly Quintana. “Organización de los movimientos sociales frente a la minería a gran escala en Colombia: el caso de la red de comités del Tolima”. Trabalho de Conclusão do Mestrado em Ação Pública e Desenvolvimento Social. Universidad del Colegio de la Frontera Norte. Ciudad Juárez, 2016.

Clavel, Celine (Coord.). “Comunidades en resistencia no violenta ante conflictos generados por proyectos extractivos: sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú”, Pax Christi Internacional, 2015.

Corredor, Diana Cristina. “Estrategias de control ciudadano: una aproximación a la intervención megaminera en Cajamarca, Tolima. 2007-2013. Revista Opera, Nº 14, ene.-jun./2014. pp. 71-94.

Cosajuca; Catapa; Fundación para la Defensa de la Madre Tierra (FUNMATI). “La Inconquistable”. 2018.

Fierro, Julio et al. “Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales de una mina de oro a cielo abierto: Caso de estudio La Colosa, Cajamarca (Tolima)”. Informe elaborado por el Grupo de Investigación Geoambiental Terrae. Febrero, 2016. Disponível



em: <https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Amenazas-Colosa-final.pdf>

García, Diana Patricia Sánchez. Minería, el caso del hallazgo aurífero “La Colosa” en el municipio de Cajamarca 2000-2013. Trabalho de Conclusão de Mestrado em Geografia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2013.

Korol, Claudia e Longo, Roxana. “Criminalización de la pobreza y de la protesta social”. Buenos Aires: El Colectivo, América Libre, 2009.

Murillo, Norma Patricia Vela. “Geografías de acumulación y conflicto territorial: el caso de Cajamarca (Colombia), 2002-2016”. Revista Nómadas, N° 48, abril/2018.

Palau, Marielle (org.). “Criminalización a la lucha campesina”. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo, 2009.

Quintana, Nataly Castillo (2016). “Organización de los movimientos sociales frente a la minería a gran escala en Colombia: el caso de la Red de Comités Ambientales del Tolima”. Tesis de Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 169 pp.

Quintero, Claudia Alexandra. Londoño, Luisa Fernanada. Londoño, Anyela Andrea Henao. “Conflictos socioambientales: entre la legitimidad normativa y las legitimidades sociales. Caso Mina La Colosa, Cajamarca. Luna Azul, N° 44, ene.- jun./2017.

Rey Sinning, Edgar. “El Carnaval: la segunda vida del pueblo”. Bogotá: Plaza & Janos Editores, 2000.

Rodriguez, Edwin Cruz (2013). “La reforma de la educación superior y las protestas estudiantiles en Colombia”. Revista de Reflexión y Análisis Político, V. 18, N° 1, pp. 51-71.

Rodriguez, Edwin Cruz. “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico, No 42, jul.-dic./2015, pp. 47-69.

Rodrigales, Javier. “Aesthesis del Carnaval de Negros y Blancos”. Pasto: Graficolor, 2017.

Palau, Marielle (org.). “Criminalización a la lucha campesina”. Fundación Rosa Luxemburgo e base Investigaciones Sociales. Asunción, 2009.

Scott, James. “Los dominados y el arte de la resistencia”. Ciudad de Mexico: Ediciones Era, 2000.

Sebe, José Carlos. “Carnaval, carnavais”. São Paulo: Ed. Ática, 1986.

Turner, Victor. “O processo ritual: estrutura e anti-estrutura”. Petrópolis: Vozes, 2013.

Van Gennep, Arnold. “Os ritos de passagem”. Petrópolis: Vozes, 1978.



Mujeres en Junta por el reconocimiento de la mujer en la ruralidad colombiana: Resistir desde lo vital, caso Comité de Mujeres de la ACIT

María Paula Jiménez Gómez

Resumen

En el municipio Inzá, departamento del Cauca, un grupo de mujeres campesinas se organizaron en junta para reconocerse, pensarse y fortalecerse a través de la experiencia colectiva. Aquella iniciativa que se consolidó dentro de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro- ACIT- en el 2001. Esta organización surgió en respuesta a las problemáticas agrarias y la violación de derechos humanos en las que ha estado sujeto el campesinado colombiano, en especial en esta zona del país. Así mismo, en una organización campesina donde la agenda política y organizacional gira entorno a las problemáticas más inmediatas de la vida política y cotidiana, es importante cuestionarse por el rol que juegan las mujeres y cómo ellas logran, al interior de este comité ligado a una comunidad, visibilizar y posicionar su ejercicio de territorialidad, construcción de sujetas, y problematización de la violencia que atraviesan cotidianamente como mujeres.

Es por ello, que a través de la revisión bibliográfica de campañas, cartillas, algunas conversaciones informales, y textos académicos -de estas mujeres y sobre estas mujeres- que se han publicado, se aproxima a cómo se gesta la convergencia de estas mujeres, cómo sus relatos, cercanos y propios, de la vida cotidiana al ser compartidos y escuchados posibilita la organización y las acción colectiva de ellas. Más adelante, a raíz de entrevistas y un ejercicio de etnografía se relata cómo al reunirse y nombrar lo que cuentan, encauzan sus procesos a cuestionar sus experiencias privadas e intocables, algo público que pueden ir tejiendo, problematizando y solucionando a través del movimiento y la solidarización, pues, es una vivencia que las reúne como sujetas que han pasado por múltiples violencias. Finalmente, se plantea una reflexión del impacto que pudo generar este tipo de reuniones comunitarias, en acciones pequeñas, que podrían considerarse como vitales y de bajo impacto, como las huertas, las tiendas comunitarias, los fondos de ahorro, entre otros, pero que así mismo, este proceso condujo a consolidar una forma de resistencia y empoderamiento de las mujeres de la región que se ha trascendido y ha ubicado el tema como uno de los aspectos centrales de la ACIT.

**Palabras clave**

Comité de mujeres, mujeres en junta, violencias cotidianas, redes de bajo impacto, resistencia.

Fundamentos del problema

Este trabajo nace de la experiencia que tuve con la universidad en Inzá- Tierradentro en el año 2018, en ese entonces iba con la intención de conocer en la praxis, qué era aquello de la Soberanía Alimentaria, pues, la ACIT (Asociación de Campesinos de Inzá Tierradentro) dentro de sus lineamientos políticos la tiene como una de sus bandera. No obstante, el acercamiento que tuve con la organización política fue directamente con el Comité de Mujeres de dicha asociación, unas mujeres que me sorprendieron y que empoderadas hablaban de su importancia dentro de la comunidad, sus familias, la política y el desarrollo rural. Lo que más llamó mi atención fue el que esas palabras las evocaban desde su práctica, desde los procesos comunitarios que ellas han consolidado, conforme han pasado los años, que son propuestas muy sólidas dentro de la comunidad y en van encaminadas a la defensa de la vida conociéndose ellas, tomando las palabras dentro de sus familias, contextos y eliminando las violencias que ellas como mujeres han vivido.

Dichos aprendizajes en Inzá, las charlas con las mujeres del Comité, las visitas a las familias y el ver materializada en sus vida cotidiana las juntanzas de estas mujeres, como le escuché a la líder campesina Alix Morales, les ha permitido sembrar sembrándose, como mujeres, como Comité y como sujetas que se resignifican lideresas fundamentales para la comunidad, en la producción, la educación, el liderazgo y la política, esferas donde han sido discriminadas y violentadas desde los ámbitos más privados. Dicho proceso en que han tejido un empoderamiento no se ha limitado a acciones individuales, sino que unas de sus banderas es la movilización, la agencia y el entrelazar redes, es por ello por lo que las vemos yendo de vereda en vereda, en talleres que amplíen el conocimiento y la participación de otras mujeres del municipio, el departamento y hasta la conexión

Introducción

En la década de los noventa mientras se planteaba el debate internacional sobre las bases que cimentarían la propuesta de la soberanía alimentaria, en Colombia se diseñaba la nueva constitución política del país. La nueva carta magna se fundamentó, como lo plantea Uprimny (2004), en un proyecto de nación gravitado en la inclusión de



la dignidad humana como valor supremo. Por ende, teniendo como uno de los principales intereses el reconocimiento de la autonomía de las minorías étnicas y culturales que se venían manifestando y resistiendo a las dinámicas internas del país, se instauró el principio del pluralismo en el desarrollo de la nación. Esta idea del pluralismo se fundamentó en tres aspectos: el ordenamiento territorial; la apertura de espacios políticos y sociales de participación a grupos antes relegados; y el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de Colombia (Londoño, 2002).

Ante esta imagen de nación que se proyectaba se dejaba por sentado una victoria de las minorías étnicas y culturales del país, ya que desde entonces podrían disponer de un reconocimiento como sujetos políticos, en razón, esto posibilitaba el acceso de los derechos establecidos en la ley, la constitución de figuras jurídicas y administrativas propias, el respeto autonomías y el diseño de políticas públicas diferenciales. No obstante, se dejó por fuera a unos de los actores que más importancia a tenido en la historia de Colombia: EL CAMPESINADO. Agentes sociales que junto a los indígenas y los afrodescendientes marcaron una tensionaste lucha por la tierra, por reivindicación de los derechos ancestrales y la búsqueda del reconocimiento Estatal de sus derechos políticos (Molano, 2012).

Simultáneamente, la consolidación de la constitución de 1991 trajo consigo una apertura neoliberal de los mercados, que asimismo potenció las pugnas entre los intereses desarrollistas del exterior y los intereses propios de la sociedad civil, en especial de estas “minorías” ahora reconocidas y también invisibilizadas (como lo fue el campesinado). Esta apertura económica, permitió introducir a Colombia en las lógicas del comercio globalizado, propiciando así la suscripción de tratados internacionales de libre mercado y dinámicas propias de la economía neoliberal mundial.

Estos dos elementos contextuales han derivado que las comunidades rurales del país permanezcan y antes incrementen las condiciones de vulnerabilidad económica, política, cultural y social a las que son sometidas diariamente en el país. Aunque se reconoce una supuesta autonomía de las comunidades, las prácticas del mercado se contraponen y frenan estos procesos. En la medida que, determinan condiciones desiguales en la producción, distribución y consumo, priorizan los intereses financieros y se confinan los locales (un ejemplo las concesiones de los territorios a megaproyectos extractivos), generan procesos de despojo de la tierra y la memoria, en síntesis, un



atropello constante de la población rural en cuanto a su cultura, su cosmovisión, autonomía, su ejercicio político y sus modos de producción.

En consonancia a lo establecido previamente, resulta pertinente preguntarse por las formas en que estas comunidades, especialmente el campesinado, han resistido y les han hecho frente a estas políticas neoliberales del país que reproducen una dinámica global de la idea de desarrollo, modelo que están en contra y buscan en últimas la desaparición de la alteridad, como lo es el campesinado que ha persistido junto a su economía productiva pese a las diversas ofensivas a lo largo de la historia. En consecuencia, es preciso traer a colación la propuesta de la soberanía alimentaria, si bien parte del tratamiento integral del problema de la producción agrícola enmarca en sí una propuesta política de empoderamiento y poder del campesinado a nivel mundial, que se contrapone a todas estas dinámicas neoliberales y prioriza los patrimonios del campesinado y los indígenas en torno al derecho a la producción de alimentos y a la alimentación.

Es, por tanto, en este texto tenemos como pregunta orientadora ¿cómo por medio de la propuesta de la soberanía alimentaria el campesinado en Colombia ha generado prácticas de resistencia al modelo neoliberal? Para responder esto, teniendo en cuenta que una solución adecuada a la cuestión requeriría completar una tesis, queremos responder específicamente desde la experiencia que conocimos de las mujeres caucanas del Comité de Mujeres de la ACIT en el municipio de Inzá ¿cómo la propuesta de soberanía alimentaria las ha empoderado como sujetas políticas y ha mejorado sus condiciones de vida?

Para el desarrollo del texto, en un primer instante sentaremos el por qué consideramos que la seguridad alimentaria es una propuesta producto del modelo neoliberal y el pensamiento desarrollista que tanto a perjudicado a las economías campesinas, posterior estableceremos los motivos que nos llevan a la tesis de que la propuesta de la soberanía alimentaria va más allá y es contraria al enfoque de la seguridad alimentaria. Finalmente ejemplificaremos cómo esto es materializado y llevado a la práctica por el Comité de Mujeres de Inzá y paralelamente los beneficios y resistencias que ha generado esta propuesta.



Soberanía alimentaria una propuesta en oposición a la seguridad alimentaria

En 1798 Thomas Malthus predijo un problema que en el siglo XX sería de gran preocupación internacional: el aumento acelerado de la población llevará proporcionalmente a la acelerada demanda alimenticia y por tanto se correrá el riesgo de no poder satisfacerla dicha demanda. Tal predicción ha sido interpretada y debatida en épocas más recientes para crear un plan de alimentación mundial que reduzca y le haga frente a dicha situación.

En primer lugar, el informe sobre “*nutrición y salud pública*” de 1935 visualizó una problemática primordial: la hambruna que atravesaba a los países pobres alrededor del mundo. Esto proporcionó un debate sobre las políticas de nutrición y la manera como estas debían gestionarse. La sociedad de naciones coincidió en que la solución a dicha problemática residía únicamente en el aumento de la producción de alimentos para satisfacer esta necesidad humana, a su vez este medio repercutiría en un beneficio a la industria lo cual era una ventaja porque ayudaba a la expansión de la economía mundial (Simón, G.A. 2009)

Posteriormente, terminada la segunda guerra mundial los diferentes países involucrados ligados a la idea que surgía sobre el desarrollo, deciden aumentar sus niveles de producción agrícola a causa de la crisis alimentaria generada por los estragos de la guerra. En 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce formalmente que la solución al problema de abastecimiento de alimentos iba de la mano con el progreso económico de los países en desarrollo, sumado a que debía fomentar estrategias para aprovechar los excedentes de producción agrícola y de esa forma poder proveer a los países con condiciones de vulnerabilidad nutricional. Bajo esta lógica, como Pachón (2013) señala, se impulsa el modelo agrícola desde el enfoque de la revolución verde con el fin de incrementar la producción de alimentos de una manera mucho más eficiente. Más adelante, la revolución verde como punta de lanza del programa de seguridad alimentaria generará técnicas y tecnologías para lograr su objetivo aumentando considerablemente la producción de productos agrícolas de primer orden como trigo, maíz y soja.

La FAO en 1974 define el concepto de seguridad alimentaria como “*la disponibilidad en todo momento de suministro mundial adecuado de alimentos básicos para sostener una expansión constante del consumo de alimentos*”. Claramente se puede evidenciar que se plantea este problema exclusivamente en términos de disponibilidad. Sin embargo,



esta lectura no dimensiona otros factores de la vulnerabilidad alimenticia y por tanto no representa una solución integral, lo anterior se evidenció años después cuando pese a que los indicadores de producción aumentaron en un 50 %, 780 millones de personas siguieron padeciendo hambruna crónica en el mundo (2009). Es en 1996 cuando se conceptualiza el término de seguridad alimentaria como es actualmente aceptado: *“todas las personas en todo momento tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades alimentarias y preferencias para una vida activa y saludable”*. Con base en esta tesis se analiza el concepto desde 4 dimensiones. La primera, se cimienta en suficiente cantidad de alimentos; aspecto que ha tenido más relevancia y que incluso se ha dimensionado como causa del problema de la inseguridad alimentaria, esta relevancia a llegado a considerar a la seguridad alimentaria como sinónimo de disponibilidad de alimentos. En segunda instancia está la dimensión de acceso, siendo esta a la que menos importancia le dan, se fundamenta en el acceso físico de quienes requieren los alimentos, el acceso económico relacionado a que las personas que necesiten de los alimentos tengan los recursos para adquirirlos y un acceso social en donde no existan barreras o exclusión social para poder conseguirlos. Otra dimensión es la referida al uso, en la medida que el adecuado aprovechamiento de los alimentos provoque una mayor eficiencia en la nutrición del individuo, familia o comunidad. Finalmente, la dimensión de la estabilidad que básicamente es la disponibilidad de alimentos constante en el tiempo.

Si bien se han dado estas pautas de análisis y se ha introducido al debate es cada vez más evidente que la seguridad alimentaria va dirigida por las dinámicas económicas neoliberales de los mercados internacionales. La producción a gran escala que configura tras de sí relaciones de producción injustas y desiguales es la que genera mayores índices de vulnerabilidad alimenticia. Por un lado, como muestra Pachón (2013), son los países industrializados -que producen a gran escala- los principales beneficiarios de los subsidios y subvenciones, por ende, disminuyen tanto sus costos de producción y los aranceles. Esto produce relaciones en la comercialización y la producción muy desiguales puesto que es casi imposible entrar a competir con estos mercados en un escenario mundial y local por la diferencia en los costos de producción. A demás van destruyendo y acabando a través del dumping las economías campesinas y de pequeños agricultores de los países “en vía de desarrollo”, generando un problema económico mayor en estos países que impide en muchos sectores el acceso a los alimentos y termina estableciendo dependencias económicas.



Siguiendo esta lógica, la seguridad alimentaria como plan de acción del sistema capitalista neoliberal fracasó en el objetivo de mitigar el hambre a escala global. En la medida que, como se expuso esta dinámica económica, solo se enfoca en la disponibilidad de alimentos, y deja olvidado que la inequidad en la distribución de la riqueza afecta en gran medida a estos productos, es decir, se condiciona el acceso a la capacidad de adquisición monetaria de la persona. Como resultado de esta configuración se observa contrariedad como que en países de mayores ingresos per cápita, existe el problema de salud pública opuesto a la hambruna: el sobrepeso, lo anterior es un claro ejemplo que el problema de la hambruna está ligado también a la distribución de los recursos, puesto que evidencia que este modelo beneficia a quienes los medios económicos para adquirir los alimentos. Siguiendo esta relación de cerca, cabe mencionar que el problema de la nutrición no está siendo combatido bajo estas lógicas de la seguridad alimentaria, puesto que no es importante dentro de este el origen, las condiciones en las que se produjeron, las consecuencias y daños que provocaron el cultivo de estos alimentos.

Por tanto, es fundamental unir este fenómeno con las consecuencias que tiene en sí el modelo neoliberal sobre la producción agraria y el desarrollo rural. Teniendo en cuenta que este modelo no ha cumplido con los objetivos que el mismo plantea, se hace necesario abrir el debate en torno a las posibles y nuevas alternativas que deben tomarse para proporcionar a la población y comunidades como la campesina una propuesta de progreso que dimensione los aspectos y los verdaderos puntos a trabajar para lograr que estas circunstancias vayan dejándose paulatinamente.

Dicho lo anterior, durante los años noventa diferentes estamentos. ONG's y organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a cuestionarse por un nuevo modelo que cumpliera con el objetivo común de erradicar el hambre. Los puntos centrales giraron en torno a un modelo basado en la descentralización de la riqueza y el poder, puesto que el modelo actual representaba una amenaza para la diversidad cultural y los ecosistemas que sustentan la vida (ONG y OSC 1996). No obstante, la propuesta política que se contrapone de frente al concepto de la seguridad alimentaria, nace en el seno de la organización campesina e indígena del mundo, de la necesidad de exigir sus derechos a la libre autodeterminación y protección de sus prácticas culturales y productivas.



Como concepto político la soberanía alimentaria es definido por la Vía Campesina en la declaración del Foro para la Soberanía Alimentaria en Nyéléni como el *“derecho de los pueblos para definir con autonomía su política alimentaria y agraria, la necesidad de asegurar la satisfacción interna de la demanda de alimentos con producción nacional y el papel protagónico de los campesinos y campesinas en la producción de los alimentos”* (2007) En consecuencia, la soberanía alimentaria como propuesta se opone al modelo neoliberal imperante, y se proyecta como el derecho y el empoderamiento de los pueblos a regular su sistema alimentario incluyendo sistemas de producción, mercados, cultura y entorno alimentario (Bernstein, 2013). En este enfoque reivindica la agricultura campesina, que como menciona Van der Ploeg (2014) en muchos casos termina siendo más productiva y eficiente que la agricultura industrial o de precisión, porque hay una mejor utilización de los suelos, se conoce y se plantean estrategias de producción basadas en la vocación de los suelos, el mantenimiento de los ecosistemas y la diversificación de las técnicas de producción. De este modo, se establece una correlación y transformación conjunta entre la naturaleza viva y el ser humano en el ejercicio de sus prácticas ancestrales y tradicionales para el beneficio del derecho a la producción de alimentos (2014). Prosiguiendo con nuestro análisis, la soberanía alimentaria, como lo detalla Pachón (2013) constituyó como pilares:

1. El acceso a los recursos: Implica un control sobre recursos del territorio, como las semillas la tierra o el agua.
2. Los modos de producción: consistiendo esto en la búsqueda de diversificación y aumento de producción local bajo un modelo tradicional que sea sostenible cultural, ambiental y socialmente.
3. La transformación y comercialización: Partiendo del derecho a vender sus productos en los mercados locales en condiciones justas y equitativas.
4. El derecho al consumo de alimentos: Saber qué están consumiendo, productos sanos con características nutricionales y la independencia en el uso del alimento.
5. Políticas agrícolas: En cuanto el campesino tiene *“derecho a conocer, participar y decidir sobre políticas públicas relacionadas con la alimentación, la reforma agraria, los beneficios gubernamentales, las organizaciones sociales y los derechos humanos”* (Pachón, 2013, p. 365).

Los anteriores elementos fundamentales están sustentados en cuatro principios fundamentales: El derecho de la alimentación y el acceso a los recursos productivos; la



promoción de una producción agroecológica; la protección y promoción de los mercados locales y; el cambio de las reglas del mercado internacional (Vía Campesina, 2017). Conjuntamente esta propuesta se preocupa y establece como valor una la visión interseccional, por tanto, es primordial el *“reconocimiento y respeto de los roles de las mujeres y sus derechos, incluidas las decisiones relacionadas con sus cuerpos”* (Pachón, 2013, p.) más adelante con la experiencia del Comité de Mujeres de Inzá profundizaremos en por qué es vital este aspecto para el funcionamiento de esta propuesta política del campesinado a nivel global.

El planteamiento anterior, demuestra la tácita y rotunda oposición que existe de estos procesos organizativos encaminados al reconocimiento de la soberanía alimentaria, porque deja en claro una posición: el dar el poder absoluto al campesinado sobre su sobre sus patrimonios material, natural y espiritual (Pachón, 2013) es por esto por lo que la soberanía alimentaria se presenta como la propuesta política, social y de vida del campesinado a nivel internacional, dibujando claramente que la nueva forma de vida rural que se está pensando está en tensión con el modelo neoliberal que se ha venido implantando jerárquica y indiscriminadamente en el mundo. Es preciso señalar que el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que está en constante construcción y que es desde las experiencias endógena de las y los sujetos políticos campesinos que se podrán ir dejando paulatinamente las contradicciones interiores.

La ACIT y el Comité de Mujeres de Inzá

Para hablar del proceso de que han llevado las mujeres de Inzá con la soberanía alimentaria, es fundamental ubicar contextualmente desde dónde nació la iniciativa.

El Comité de Mujeres de la ACIT nace en un municipio del oriente del departamento del Cauca llamado Inzá, específicamente ubicado en la región de Tierradentro. Este territorio es geográficamente estratégico gracias a la amplia oferta del recurso hídrico y la variedad de pisos térmicos, lo que a su vez posibilita un variado sistema de producción. Está localizada en la cordillera oriental, hace parte de la cuenca alta del río Magdalena y la subcuenca del río Páez, cuenta con cinco microcuencas y 14 afluentes que se derivan de estas. En cuanto a las conexiones, limita con los municipios Páez, Puracé, Totoró (Cauca) y con el municipio La Plata del Departamento del Huila, lo cual posibilita una interconexión por estos ejes viales. Sin embargo, es en esta dimensión donde se eleva el costo de producción para la comercialización entre localidades teniendo en cuenta las limitaciones de infraestructura vial, la geografía montañosa y la falta de integración del transporte. Por otro lado, la extensión de este municipio oscila



entre 87.581 ha de las cuales el 99,2 % corresponde a zona rural (84 veredas) y 0,79% a la cabecera municipal (8 barrios), es importante mencionar que dentro de esta región existen 6 resguardos y 2 cabildos constituidos y pertenecientes al pueblo Nasa. Respecto a la dinámica demográfica, la población de Inzá oscila entre 30.803 habitantes, según las proyecciones del DANE para el 2015, de los cuales el 41% son indígenas y 59% son campesinos.

Caracterizando brevemente el territorio de Inzá, es importante también hablar del papel del campesinado en este municipio, que al igual que todas y todos los campesinos del país, viven a diario una situación de discriminación política, económica, social y cultural. Por un lado, la problemática de la tenencia de la tierra no es ajena en este territorio, el 95% de las familias poseen microfundios.

Las condiciones en relación con el acceso de los servicios básicos son preocupantes. Los servicios de acueducto y saneamiento solo cubren el 10% del área rural sumado a que la calidad del agua no es suficientemente tratada, lo que genera problemas de salud pública. En términos de educación la deserción es alta, solo el 64% de las y los jóvenes en edad escolar pueden acceder; muchos de los jóvenes que no asisten trabajan ya que los ingresos mensuales de sus hogares son muy bajos, cabe indicar que la gran mayoría de estos hogares tienen una jefatura femenina. Y en razón con la variable de calidad hay un déficit de docentes respecto a estudiantes, los docentes de los centros educativos son impermanentes y muchas veces no cuentan con la preparación profesional suficiente; el diseño curricular de las escuelas se rige bajo un modelo de educación para la ciudad, cada vez más se presentan cierres de escuelas rurales.

Por otro lado, pese a que la actividad productiva es la principal, se presentan altos índices de desnutrición en niños, niñas y adultos mayores, ligado a la poca producción de alimentos por el acceso a la tierra y la imposición de la primacía del cultivo de café. El monocultivo de café en la región responde a las dinámicas externas de la economía mundial y un sistema colonial heredado, donde se ha fomentado en el interior del país la extracción de recursos y cultivo de alimentos (monocultivos) para la exportación a cambio de productos industriales o de consumo inmediato, esto ha generado dependencia económica, aumenta las brechas de desigualdad y específicamente en la región ha causado el daño de suelos por el uso de fertilizantes y agroquímicos que desgastan y desequilibra la composición del suelo y la disponibilidad de nutrientes, sumado a la baja rotación que genera poca o nula disponibilidad de otros cultivos. Para



concluir el diagnóstico, también se presentan problemas que afectan la vida y la dignidad de las mujeres de Inzá, como la violencia intrafamiliar, la infantilización y la estigmatización de la mujer en los espacios políticos, la dependencia económica y los bajos ingresos económicos mensuales. Frente a esta carencia de la intervención estatal para mejorar sus condiciones de vida, los y las campesinas, indígenas se ha organizado para plantear alternativas de solución a sus necesidades y lucha por sus derechos. Los indígenas están asociados en la Asociación de cabildos indígenas Juan Tama bajo las directrices generales del CRIC y la población campesina está agrupada en la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro. Esta última se constituyó inicialmente en la verdad de Turmina en el año 1997 estableciendo cuáles eran las problemáticas de la comunidad, lo cual sintetizaron en un principio como la *“falta de tierras aptas para la agricultura y ausencia de recursos económicos y técnicos que permitieran mejorar los cultivos, y en general, las condiciones de vida de todos los campesinos, así como falta de reconocimiento por parte de las instituciones”* (Arias, 2014, p. 45) A partir de establecer estas dificultades, se erigen cinco principios fundamentales para la organización, con los cuales han orientado el trabajo, la movilización social, la formación y el quehacer político, jurídico y social hasta la actualidad, estos son:

Poder Popular: Son los pueblos los únicos dueños del poder y la democracia es un medio representativo.

Fortalecimiento Organizativo: La soberanía se construye desde el territorio y las bases, por tanto, se debe procurar empoderar y fortalecer más la comunidades y los procesos colectivos para materializar sus iniciativas de acción y transformación. (Arias, 2014)

Soberanía alimentaria: Se acogen a la definición de la Vía Campesina, enfatizando en la participación de las comunidades y a la localización del territorio.

Autonomía: Libertad de *“decidir sobre su forma de gobierno y organización política, sobre su modelo de desarrollo, sobre su lengua, religión, cultura, etc.”* (p.56) como apuesta para romper el papel de subordinación y de dependencia que se le ha asignado al campesinado históricamente.

Identidad: Elementos que constituyen la identidad campesina de los pobladores y su territorio.



Hay que mencionar, que el principio de la soberanía alimentaria ha jugado un papel fundamental dentro de la organización en la medida que ha sido una apuesta política abordada y trabajada en varios frentes de trabajo, el educativo, el identitario, el productivo, el de salud y el de género. Lo cual ha generado fuertes procesos de resistencia y cohesión social comunitaria en el territorio, como más adelante profundizaremos.

Contiguo a estos principios crea una estructura organizativa dividida en varios comités de trabajo; uno de estos es el Comité de Mujeres el cual se crea en el año 2000 en medio de una contienda política que buscaba la ampliación y creación de instancias de participación política de la mujeres en el Concejo Municipal (2013) para lograr tener incidencia y posicionar las problemáticas que tenía las mujeres de Inzá. Aunque la aspiración de estas mujeres al entrar al ámbito político era igual al de los hombres (mejorar las condiciones de vida de sus familias y su comunidad), se encontraron con varios obstáculos con la realidad de la cultura machista y patriarcal, en la que estamos inmersas; se encontraron con chiste machistas y acciones que dificultan desempeñarse y demostrar sus capacidades. Sin embargo, ya cuando tienen una conciencia para sí estas mujeres entienden que su objetivo no se va lograr únicamente en estas instancias de participación y comienzan a construir redes de solidaridad y “complicidad” en la veredas para posicionar *“las problemáticas y los sueños de sus hogares, sus familias y la comunidad”* (2013, p.36). Esto último potenció el poder de convocatoria de estos procesos generando a su vez mayor legitimidad tanto en el territorio como en la agenda de la ACIT.

Para llevar a cabo un programa coherente y articulado, como punto de partida se realizó un diagnóstico para conocer ¿cómo vivían las mujeres de este municipio? Una de las conclusiones a las que se llegó con este ejercicio fue que la mujer inzeña vivía en un desconocimiento sobre los derechos humanos y los derechos de las mujeres, no había una conciencia de que estaban siendo maltratadas psicológica y físicamente ni que estaban en una relación de dependencia económica en sus hogares, fue a partir de las reuniones entre ellas, el compartir sus perspectivas y experiencias lo que propició la discusión de género dentro de la comunidad. En esa medida la línea de trabajo que permitió articular los objetivos del comité fue la apuesta por la soberanía alimentaria, proceso que llevó consigo toda una línea de ejecución de proyectos y propuestas que llevaron a su empoderamiento como mujeres dentro de la comunidad ya que fue desde



la identificación más inmediata de su cotidianidad que comenzaron a pensarse alternativas.

Como cuenta la lideresa campesina Alix Morales que fue en 2001 cuando las mujeres del CM se sientan a conversar sobre la deficiencia de alimentos en sus hogares, y concluyen, después de compartir experiencias, que este fenómeno se daba a raíz de la implantación de los monocultivos de café en todo el municipio. En este instante, es cuando ellas apuestan, se acogen y deciden liderar la propuesta por la soberanía alimentaria buscando superar el déficit de alimentos, la necesidad de independencia económica (ya que la dependencia económica es una de las causas de la violencia intrafamiliar), la necesidad de empoderamiento político de ellas entorno al derecho a cultivar, y finalmente mejorar la salud y la nutrición de sus familias.

Doña Lucina define el trabajo del comité en cuanto a la soberanía alimentaria como: la resistencia desde el territorio y las prácticas de cultivo y siembra; defender los modos de producción propios, las costumbres la identidad campesina, los derechos del campesinado; donde a su vez, es esencial el papel de las mujeres como sujetas políticas y transformadoras de su comunidad:

“Nosotras aquí todo lo que hacemos va encaminado a defender nuestro territorio y nuestros productos. Desde mantener el terreno, producir y consumir lo nuestro, son acciones de soberanía alimentaria, hacemos resistencia a los productos industrializados que traen tanto químico, mantenemos las familias unidas y la organización sale adelante, aquí las mujeres somos importantes por hacer lo que hacemos” (Morales, 2013, p.333).

No obstante, ¿por qué el CM se acogen a la propuesta de la soberanía alimentaria y no a la de seguridad alimentaria? Retomando a Morales, desde la organización de mujeres analizan que la propuesta de la seguridad alimentaria, como lo mencionamos anteriormente, no toca temas estructurales como la desigualdad del poder, las relaciones de dominación y dependencia, la falta de acceso a los insumos básicos para el cultivo y el consumo, entre otros; para ellas las alternativas que ofrecen los gobiernos no son efectivas pues si las políticas lo fueran en Inzá no habría insuficiencia de alimentos por falta de interconexión vial y de adquisición monetaria. Morales apunta *“la deficiencia de alimentos en una zona campesina es una circunstancia irónica”* (2011, p.330) empero es una de las consecuencias de las dinámicas de producción global que ha marginalizado y posicionado la economía campesina en el último eslabón de la cadena, es por eso por lo que las políticas de la seguridad alimentaria han obligado a



esta organización “a tomar posición, desde nuestra vida privada hasta en lo público frente a las políticas impuestas por el gobierno, con los acuerdos de libre mercado y la política de apertura económica” (p.339)

Conforme a estos visones, el trabajo de estas mujeres se ha enfocado en cualificación colectiva a través de la investigación, los talleres, las escuelas de formación, los ejercicios prácticos en las huertas, la cocina, los restaurantes escolares con otras mujeres, sus hijos y la comunidad en general. Esto ha permitido crear espacios para compartir saberes, recuperar costumbres, facilitar la participación de toda la comunidad y robustecer las redes de apoyo en todas las veredas, los espacios locales nacionales e internacionales con los que tienen trabajo en conjunto.

El trabajo político de estas mujeres, con la apuesta de la soberanía alimentaria, ha construido canales de sustento para la gestión de iniciativas productivas, fomentado el empoderamiento de muchas mujeres en diferentes veredas ya que les otorga un papel importante dentro de la comunidad no sólo como miembros sino agentes en la construcción de esta, las reconoce como sujetas de derechos y por tanto fortalece otras líneas de trabajo en contra de la violencia de género e intrafamiliar, les ha permitido en muchos casos liberarse de los yugos de dependencia económica de sus esposos y problematizar las actitudes y construcciones machistas dentro de sus familias y la sociedad campesina.

En consonancia con la anterior es vital para ejemplificar la importancia de la soberanía alimentaria dentro de esta comunidad, especificar cuáles son las actividades en concreto que han desarrollado estas mujeres. El trabajo ha sido esencialmente en la construcción de huertas, tanto individuales como colectivas; el cuidado, la recuperación y la preservación de las semillas, por medio de una despensa viva de semillas (se llama despensa en vez de banco de semillas porque la primera alude al cajón que tienen las abuelas y donde conservan toda la memoria), en este ejercicio hay una transmisión de saberes generacional, al respecto una de las lideresas campesinas cuenta:

“Cuando cultivo dejo los mejores granos para volver a sembrar: el sistema para mantener las semillas es muy sencillo, yo siempre acostumbro a echar los granos seleccionados en un tarro o un frasco con tapa, les echo aceite para que no les caiga polilla. Desde niña veía a mi abuela y mi mamá hacer todo este proceso. Desde ellas tengo semillas nativas, muy buenas, por eso dan cosechas abundantes” (p.336)



En cuanto a la construcción de huertas este espacio no es solo productivo, sino se ha convertido en espacio de socialización comunitaria en donde se *“construyen, comparte saberes para soñar y tejer redes de solidaridad”* (p.335) A partir de esto muchas mujeres ganaron el espacio de la huerta en su casa y comenzaron a crear nuevas formas de preparación de los alimentos para aumentar los valores nutricionales y cambiar las prácticas de consumo de sus familias, comenzaron a cultivarse chachafruto, bore y el gandul. Así mismo se organizaron grandes ferias agroalimentarias de intercambio de alimentos (esta iniciativa logró convocar aproximadamente 700 mujeres en Turminá). Ligado a lo anterior, veíamos también que en este espacio convergen modos y prácticas de producción autóctonas y sostenibles características de la economía campesina como lo son: Abono por medio del lombricultivo el cual iban alimentando con los mismos desechos y desmalezados que tenía en la huerta, ellas tienen un sistema de policultivo basadas en relaciones alelopatía como: cultivos de lechuga con arveja, frijol-maíz, asociaciones muy tradicionales básicas en la agricultura campesina e indígena.

El bagazo o el residuo de la molienda de la caña se utiliza para elaborar abonos nutritivos para la huerta de ellas. Miel u otros productos.

Proceso de restauración de la tierra, por medio de un proceso de abonado de compostaje tradicional con ceniza y barbecho (quemar parte del bosque para recuperar unos nutrientes y desde ahí utilizar esa tierra para sembrar). Se estaba recuperando el terreno por porque la tierra había sido usada para un monocultivo de café, entonces esta parcela había trabajada fertilizante y agroquímicos.

Recuperación cocheras y la construcción de galpones, la crianza de curies y conejos

Todas estas actividades demuestran una pluriactividad y multifuncionalidad de las campesinas de Inzá y es por ello por lo que a pesar de que la actividad productiva principal es la agricultura no es la única y tienen diferentes formas de diversificar los productos. Paralelo a estas propuestas se han desarrollado planes de economías alternativas como las panaderías comunitarias, huertas colectivas, huertas individuales, tiendas comunitarias, fondo de crédito con préstamos al 1% y grupos de ahorro en todas las veredas para reactivar las reactivar iniciativas productivas. (2013).

Cabe destacar la realización de una escuela política de soberanía alimentaria liderada por las mujeres del comité entre los años 20003 a 2005 surgió principalmente por la



preocupación de hacer desde su acción resistencias a la política de globalización, porque cuentan que:

“los discursos y las decisiones de quienes ostentan el poder finalmente se encarnan, tiene implicaciones directas sobre sus cuerpos y se reflejan en sus vidas. Por eso denuncian el sistema de Libre Mercado y la competencia salvaje que subsiste a fuerza de someter sus cuerpos recursos y territorios al capital convirtiendo a las personas en simples clientes, sus territorios en despensas de recursos transables en los mercados financieros y sus derechos en servicio cuyo acceso depende de la capacidad de pago de cada cliente” (2013, p.46)

Dentro de esta escuela se llegaron a varias conclusiones. Una de ellas, es que el concepto de la soberanía alimentaria es una respuesta local que reafirma la autonomía y la supervivencia de las comunidades campesinas, ha generado la recuperación de la identidad campesina, un mejor manejo de los recursos propios, los naturales y los suelos; fortalecer los lazos de familia consientes del papel de la mujer. Igualmente, *“ha permitido que las mujeres desde su ámbito familiar y local puedan ejercer mecanismos de resistencia y defensa de la tierra y de sus familias al evitar el uso de agroquímicos y semillas transgénicas en las siembras”* (Morales, 2011, p.340) de esa misma forma, decidir desde su soberanía popular qué cultivar y cómo hacerlo.

Como mujeres la soberanía alimentaria les ha otorgado un conocimiento sobre sus cuerpos, su territorio y por tanto *“este conocimiento nos ha hecho sujetas de derecho”* (p.341). visibilizándolas, dándoles una capacidad de negociación e incidencia política a nivel regional y nacional. Esta propuesta política proposición política *“ha tenido como objetivo fundamental el logro de las transformaciones sociales en relación con la discriminación y las violencias cotidianas que afrontan y la búsqueda de su apoderamiento de la equidad de género la permanencia en el territorio y el mejoramiento de la calidad de vida para sus familiares y comunidades”* (p.337) y conforme estos procesos van sucediendo, estas mujeres son cada vez más conscientes de las discriminaciones a las que son sujetas, la apropiación de su cuerpo y su agencia, y la resistencia que como mujeres hacen los la defensa del territorio. Finalmente, para concluir este texto es pertinente dejar en una cita la importancia de soberanía alimentaria como propuesta a favor de la vida, del empoderamiento del campesinado, porque este contempla un mundo más allá del factor económico, porque liga en su propuesta de poder que la solución y el desarrollo rural se construye de forma endógena



desde el territorio, y dicen en este apartado las mujeres inzaeñas: el territorio es proyección de nuestro cuerpo.

“El territorio... es nuestro cuerpo, es el lugar donde habitamos, con el que nos identificamos. Es donde están nuestros recuerdos, donde construimos presente y proyectamos nuestros sueños, es el lugar en que se comparte, se cultiva, se saca el alimento, se trabaja de acuerdo a nuestras costumbres campesinas, es el lugar que protegemos, donde está nuestra familia, el que nos despierta emociones y sentimientos, donde construimos relaciones con la naturaleza con la comunidad y conmigo misma: Porque el territorio es memoria y la memoria soy yo”(Morales, 2011, p.332)

A modo de conclusión

“Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un programa de desarrollo dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida” (Güell, 1998)

El desarrollo rural es una apuesta que pone como objetivo primordial la satisfacción de necesidades que varían con respecto al territorio, la diversidad étnica y cultural incluyendo, también la sostenibilidad ambiental y el mantenimiento de las tradiciones de la identidad campesina. De esta forma podemos de acuerdo con lo narrado la estrecha relación con la propuesta de la soberanía alimentaria. Las mujeres comunidad de Inzá que el valor fundamental del desarrollo es la solidaridad y el trabajo comunitario y cómo articularon esto bajo la propuesta de la soberanía alimentaria para empoderarse y convertirse en sujetas políticas con “la capacidad de discernir sobre las políticas del Estado y los programas sociales nacionales ejecutados por el municipio” que son contrarios a la defensa de los derechos y la autonomía. Es por ello que la seguridad alimentaria se presenta como contraria a su visión de territorio, en medida que esta originaria dentro del discurso neoliberal, donde se pone como pilar para el supuesto progreso, la competencia y el crecimiento económico.

La soberanía alimentaria al ser una construcción colectiva surgida desde las necesidades y respuestas propias al interior de las comunidades no acepta al mercado como eje fundamental de su accionar político pues éste toma al ser humano como una herramienta o máquina para impulsar el desarrollo que para este caso se restringe a lo económico. El desarrollo y las apuestas políticas se construyen desde el territorio, desde las redes de solidaridad y de afecto y por tanto el Estado es el que debe dar solución a



los problemas rurales, reconociendo y empoderando a los y las campesinas como sujetos y sujetas de política, agencia y derechos.

Bibliografía

Arias, Jairo. (2014). *Educación rural y saberes campesinos en Tierradentro Cauca: Estudio del proceso organizativo de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT). 2004 a 2012*. Tesis de grado.

Bernstein, H. (2014). Food sovereignty via the 'peasant way': a sceptical view. *Journal of Peasant Studies*, 41(6), 1031-1063.

Ediciones Lanzas y letras. (2013) *Los feminismos también de aquí. Lucha y movilización de las mujeres campesinas de Inzá-Cauca*. En revista Las mujeres, el poder y las resistencias

FAO. 1996. *Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación*. Recuperado de: George André Simon (2009) concepto y gobernanza internacional de la seguridad alimentaria: de donde venimos y hacia a dónde vamos. En Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros.

Londoño, B. (2002). La Constitución de 1991 y los Indígenas: Nuevos espacios de participación política. *Credencial Historia*, 146.

Morales, A. (2011). *Soberanía alimentaria. Experiencia de resistencia de las mujeres campesinas de Inzá, Cauca, Colombia*. In Du grain à moudre. Genre, développement rural et alimentation. p. 331-340.

ONG y OSC. (1996). Declaración "Beneficios para unos o alimentos para todos". Cumbre mundial sobre la alimentación. Roma.

Patel, Rajeev. (2012). *Soberanía alimentaria: poder, género y el derecho a la alimentación*. En Library of Science, Volumen.

Pachón, Fabio. (2013). *Food sovereignty and rural development: beyond food security*. En revista Agronomía Colombia, volumen XXI.

Robledo, J. E. (2007). La globalización neoliberal niega la democracia. G. Hoyo Vásquez, *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía*, CLASCO Libros, Buenos Aires.

Uprimny, R., & García, M. (2004). Corte Constitucional y emancipación social en Colombia. *Emancipación social y violencia en Colombia*, 463-514.

Van der Ploeg, J. D. (2014). Crecimiento agrícola dirigido por el campesinado y la soberanía alimentaria. *Libro Soberanía alimentaria: en diálogo crítico*, 13-26.



Estrategias de sobrevivencia de pequeños productores campesinos en Chiapas

María Guadalupe Ocampo Guzmán¹
Héctor B. Fletes Ocón²

Resumen

En Chiapas, las condiciones de inequidad y la concentración del ingreso han provocado una fuerte disparidad regional aglutinando la pobreza en algunas zonas geográficas como ocurre en la región Altos, Selva y Norte, donde la población presenta condiciones productivas y alimentarias muy severas. En el 2015, Chiapas se registró como la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria, con un 46.99 por ciento de su población. Uno de cada dos hogares en el estado es pobre. Este hecho se combina con una mayor intensidad de la pobreza en estos hogares, lo que en la práctica les impide disponer de los recursos económicos necesarios para satisfacer una dieta mínima que garantice la reproducción biológica. Así mismo, dos terceras partes de la población de la entidad continúan dependiendo de las actividades primarias, principalmente, a pequeña escala, de temporal, con trabajo manual barato, de escaso financiamiento y asistencia técnica, con bajos rendimientos productivos, que genera productos de poco valor agregado y de autoconsumo. Además, la superficie sembrada de alimentos básicos (maíz y frijol) ha ido disminuyendo en la entidad, mientras que, un reducido grupo de productores con agricultura empresarial, ha ido incrementando la superficie sembrada de pastos, caña de azúcar, plátano, mango, palma de aceite (africana), papaya, jitomate, cacao y hule hevea. Y en lo que concierne a la comercialización ésta se realiza en condiciones de desventaja y dependiente de intermediarios, con desconocimiento de mercados e inexistencia de planes de comercialización. En este contexto los pequeños productores campesinos de Chiapas han tratado de adecuarse a sus condiciones adversas reivindicando sus prácticas y formas de subsistencia. Por ello, el objetivo de esta ponencia es explicar las condiciones productivas y de vida de los pequeños productores rurales en la región Altos de Chiapas y las formas en que diversifican sus estrategias de subsistencia para hacer frente a la crisis agroalimentaria, mismas que adquieren matices territoriales específicos determinados por la articulación, cooperación, negociación, resistencias y acomodos de los actores locales.

Palabras clave

Estrategias, sobrevivencia, pequeños productores, diversificación.



Territorio y pequeños productores

En las últimas décadas el concepto de territorio ha rebasado los límites fronterizos del pensamiento geográfico, para adquirir cada vez una mayor relevancia al interior de otras disciplinas de las ciencias sociales, tal como ha venido aconteciendo en la sociología, la antropología o la economía. Esta apropiación del concepto forma parte de los cambios teóricos y conceptuales que ocurren en las ciencias sociales, los cuales buscan explicar la complejidad de los procesos sociales que ocurren en la actualidad en un contexto de mundialización de la economía, la cultura y la política (Llanos, 2010).

El enfoque territorial permite observar mejor el rol de los actores rurales, los movimientos sociales, las organizaciones, los poderes del Estado, los municipios, el capital, los mercados, en fin todos los actores del desarrollo y de la vida social. El enfoque conduce a una representación del escenario en el que los diversos actores plantean y afirman sus discursos, relatos, intereses y posiciones, remueven sus memorias, demandan mejores perspectivas para su futuro y se enfrentan, no pocas veces, con fuerza y lamentablemente también con violencia.

Este anclaje territorial es, entre otras, una consecuencia de los impactos causados por las políticas neoliberales en los ámbitos económico, político, ambiental y cultural, tanto en la escala global como en cada territorio nacional. Muchos actores y movimientos han optado por una ocupación y/o (re)apropiación de espacios territoriales, experimentando y rescatando formas de vivir, de producir, de autogobernar y/o autogestionar que les permitan preservar y (re)construir su identidad territorial, basándose en la reivindicación de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

El territorio es un espacio de poder, de gestión, y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales. Es una construcción social y el conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiarse del territorio es desigual, de ahí que en el espacio se sobreponen distintas territorialidades (locales, regionales, nacionales y mundiales) con intereses, percepciones, valoraciones y actitudes territoriales distintos que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. Además, el territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y requiere permanentemente de nuevas formas de organización territorial (Montañez y Delgado, 1998).



Según Raffestin (2013), el territorio se define como aquella manifestación espacial del poder fundamentada en las relaciones sociales determinadas por la presencia de energías (acciones y estructuras concretas), y de información (acciones y estructuras simbólicas síntesis). Agrega, que el territorio se genera a partir del espacio, es el resultado de la acción de los distintos agentes sobre éste, desde el Estado hasta los individuos, pasando por todas las organizaciones que actúan en el mismo. En el proceso de apropiación y transformación del espacio, los distintos agentes producen el territorio, lo que implica el establecimiento de límites en términos administrativos, de competencias, de patrimonio y de identidad local, lo que determina el grado de originalidad del territorio.

El concepto de territorio en cuanto producto de las prácticas de diferenciación propias del poder, no se reduce a la soberanía propia del Estado. Es el marco por excelencia de las prácticas espaciales de los agentes sociales, en todas sus escalas, que dan lugar a los espacios empíricos, físicos, que se identifican también como espacio geográfico. Representa el espacio empírico construido de forma voluntaria por las sociedades humanas. No hay poder sin territorio. Prácticas y procesos territoriales tienen un carácter delimitador y de gobierno o administración. Delimitan ámbitos de intervención, establecen espacios de competencia o responsabilidades y definen espacios potenciales de desarrollo (Ortega, 2000).

El territorio se construye a partir de la diferencia esencial de las prácticas y relaciones sociales que crea un área propia, un espacio de pertenencia. Se traduce en una división y fragmentación de la superficie terrestre en áreas de poder o soberanía, en espacios de ejercicio de este poder. Representa el espacio empírico construido de forma voluntaria por las sociedades humanas y constituye el principal marco de las prácticas sociales que dan lugar a los diversos espacios empíricos, físicos, que se identifica también como espacio geográfico. El territorio expresa la relación entre poder y espacio. No hay poder sin territorio. Prácticas y procesos territoriales tienen un carácter delimitador y de gobierno o administración. Delimitan ámbitos de intervención, establecen espacios de competencia o responsabilidad y definen espacios potenciales de desarrollo (Ortega, 2000).

El enfoque territorial, a partir de su carácter de multi dimensión, multi escala y multi actores, permite describir y analizar la relación entre el desarrollo económico y social localizado en territorios específicos y su capacidad de acción para responder ante



problemáticas actuales. Por tanto, el concepto de territorio en la investigación de los procesos que realizan los pequeños productores rurales caracterizados por múltiples relaciones de poder y formas específicas de dominación y resistencia, facilita una visión más integral de sus procesos organizativos y toma en cuenta la intencionalidad, las percepciones y experiencias de los actores sociales en contextos espaciales dinámicos en los que responden de diversa forma a problemas específicos del territorio. Es decir, permite observar mejor el rol de los diversos actores del desarrollo rural y de la vida social (movimientos, organizaciones, estado, mercado, etc.), y comprender los profundos procesos de cambio que está experimentando la población rural a partir de las expresiones del sistema capitalista global.

Al interior de los territorios rurales participan un conjunto de actores que toman y ejecutan decisiones, tales como; productores, empresas, instituciones, asociaciones, poderes públicos, locales, entre otros. Asimismo, se utilizan elementos materiales como empresas, infraestructura y equipamiento, y elementos inmateriales como el saber hacer, las formas seculares de organización y las pautas de comportamiento colectivo. Por tanto, los procesos de desarrollo de los territorios rurales contienen nociones de aprendizaje y de saber hacer, y la cultura de organización local constituye su núcleo fundamental.

Ante la diversidad de contextos históricos, culturales, geográficos y sociales en los que se desenvuelve la agricultura en el mundo, así como las distintas prácticas, cultivos y tecnologías que se emplean, los pequeños productores rurales, sus formas de actuar y definirlos, suelen ser diversos también.

De esta manera, según la FAO los pequeños agricultores son granjeros menores, pastores, cuidadores de bosques o pescadores que manejan parcelas de hasta 10 hectáreas. Caracterizan a estos agricultores motivaciones eminentemente familiares: la búsqueda de la estabilidad del sistema de la granja; el recurso a una mano de obra sobre todo familiar para llevar a cabo la producción, y el autoconsumo por el hogar de una parte de los productos cosechados (FAO, 2013).

Para Yúnez, et al. (2000), los pequeños productores rurales son el componente mayoritario de las unidades agropecuarias de México, éstos producen alimentos básicos y constituyen una parte importante de la oferta de trabajo nacional. Los pequeños productores forman parte de los más pobres del país y muchos de ellos poseen y explotan una considerable porción de los recursos naturales. Los pequeños productores



son unidades familiares de producción y consumo con fuentes de sustento e ingresos diversificados.

Algunos rasgos que caracterizan a los pequeños productores en México, es el uso mayoritario de mano de obra familiar, acceso limitado a recursos productivos, dependencia de otros actores para la compra de insumos, la organización de la producción y la venta de sus productos. De igual manera, los pequeños productores agrícolas de hoy se caracterizan por su enorme heterogeneidad, multidimensionalidad y dinamismo, así como por las diversas y en ocasiones novedosas formas de adscripción, identidad y relación con el mercado (Macías, 2013). En este sentido, los pequeños productores en Chiapas, México, se caracterizan por sus condiciones precarias de vida y producción, por el abandono paulatino de la intervención del Estado y la exclusión de los mercados de productos y servicios, razón por la que cobra importancia el concepto de pequeño productor para la descripción y análisis de las estrategias de sobrevivencia que actualmente realizan dichos productores en los ámbitos rurales.

Características del sector agroalimentario en Chiapas

En México, desde la implementación de las políticas de ajuste estructural de carácter neoliberal, que transformaron la estructura y las condiciones de producción del sector agropecuario, la agricultura ha tenido un crecimiento lento y con grandes diferencias entre productos y productores. Por un lado existe en el país un reducido grupo de agro productores especializados que producen en condiciones altamente tecnificadas, cuya producción se orienta a la exportación, con productos como aguacate, jitomate, berries, chile, carne de bovino, azúcar, cerveza y tequila (SIAP, 2017), y por otro lado, existe también un gran número de pequeños productores campesinos que viven en pobreza y con problemas para producir y generar ingresos, cuya producción se orienta al cultivo de granos básicos como maíz y frijol, y salvo algunas ocasiones, inducidos por los programas de reconversión productiva del gobierno, producen a pequeña escala algún producto para el mercado como café, palma africana, mango, plátano, papaya, melón, limón, flores, entre otros, dependiendo de la región y el clima.

En este sentido Sánchez (2014), señala que en México muchos productores, campesinos e indígenas, tienen dos opciones frente a las incidencias del mercado, participar en forma asociativa para competir de manera desigual con el gran capital, o refugiarse en la comunidad rural, en sus grupos domésticos campesinos adoptando



medidas básicas de reproducción social. De esta manera, al ser excluidos del mercado se refugian en la economía de auto subsistencia, o bien acuden a la migración nacional e internacional con el propósito de generar mayores ingresos e incrementar sus posibilidades de vida. Por tanto, los procesos provocados por la globalización ejercen un efecto devastador sobre muchas organizaciones de productores rurales por el predominio de empresas transnacionales que han resultado favorecidas con las políticas de libre mercado promovidas por los gobiernos neoliberales.

Ahora bien, para el caso de Chiapas, entidad situada en la parte sureste de la República Mexicana, colinda al oeste con Oaxaca, al noroeste con Veracruz, al norte con Tabasco, al sur con el Océano Pacífico y al sudeste con la República de Guatemala. Su superficie es de 73,681 kilómetros cuadrados, la cual representa 3.8 por ciento del territorio nacional, en donde el 74.2 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que la ubica en la entidad más pobre del país (Coneval, 2014).

La estructura y dinámica social que presenta el estado es de carácter excluyente, con identidades y actores fragmentados, cuestión que limita la capacidad de decisión y diseño de estrategias de la mayor parte de la población. Así mismo, la economía chiapaneca descansa básicamente en la agricultura de autoconsumo, maíz y frijol, la producción comercial del café y ganado y el sector público.

El sector agrícola está conformado por dos sistemas productivos: el empresarial que involucra procesos intensivos en capital y el campesino que involucra procesos intensivos en mano de obra. La agricultura empresarial o mercantil, integrada por un reducido número de grandes productores, se encuentra ligada a la explotación de cultivos de maíz grano, pastos, café, caña de azúcar, plátano, mango, frijol, palma de aceite (africana), papaya, tomate rojo (jitomate), cacao y hule hevea. Doce de estos cultivos aportan el 91 por ciento del valor total de la producción agrícola. De ellos el maíz es el principal, aportando el 26.5 por ciento (CEIEG, 2017). Mientras que la agricultura campesina, integrada por un gran número de pequeños productores ejidatarios y comunales, es de temporal, a pequeña escala, se produce para el autoconsumo familiar y está más ligada al abasto interno de alimentos (maíz, frijol, hortalizas y frutales). En términos generales, Chiapas se caracteriza por ser todavía un estado principalmente rural, donde el 37,7% de la población ocupada está en el sector primario (CEIEG, 2015), y dos terceras partes de la población de la entidad continúan dependiendo de las actividades primarias. El sector agrícola depende del trabajo manual barato, la



concentración en productos de poco valor agregado y la prioridad dada a los productos de exportación tradicionales sobre los de consumo local (Martínez, 2011; Martínez y Flores, 2006). El estado aun presenta severos problemas de pobreza y de alimentación en su población. Los cultivos tradicionales de granos básicos se han ido reemplazando por monocultivos, considerados más rentables por su demanda en el mercado, como la palma africana y la caña de azúcar.

De la producción y sobrevivencia de los pequeños productores en Chiapas

Los constantes cambios que acontecen a nivel global que influyen a nivel local, han condicionado a los pequeños productores a quedar en una situación de desventaja en las diferentes fases de las cadenas productivas, esto los ha obligado a generar estrategias que les permitan tener ciertas ventajas a raíz de su actividad. Una de estas estrategias que han seguido, es la exploración de diversos esquemas de organización para emprender algunas acciones productivas de manera conjunta, como una forma de incrementar sus posibilidades para resolver sus problemas y para desarrollar e implementar estrategias que les permitan mejorar sus condiciones de vida actuales.

Las organizaciones de pequeños productores representan la formación de redes de cooperación que constituyen una base para la acción colectiva. La acción colectiva puede ayudar a lograr objetivos comunes y atender diversas necesidades y problemas.

Si bien, se presentan relaciones de cooperación entre los diversos integrantes de las organizaciones de pequeños productores. No obstante, estas formas de colaboración se realizan de manera más frecuente cuando los involucrados son familiares debido a la cercanía y la confianza preexistente entre ellos. La cooperación y colaboración entre la familia para ciertas labores culturales, es uno de los reflejos del capital social (Flores y Rello, 2001), sin duda esto también fortalece la base social de la organización porque mejoran los niveles de cooperación a nivel comunitario.

Los pequeños productores campesinos de Chiapas afrontan desde hace varias décadas un empeoramiento severo de sus condiciones agrícolas, que se refleja tanto en el acceso a la tierra y agua, como en las condiciones de la producción y comercialización de sus productos.

Por ello, en este apartado se tratan de explicar dos formas en que los pequeños productores de Chiapas intentan superar sus condiciones de vida precarias, formas que se asocian a procesos organizativos sociales y familiares desde los cuales realizan



diversas actividades para atender varias problemáticas relacionadas con la producción y la subsistencia.

La información que se presenta es el resultado de una investigación en curso que se realiza a partir de una metodología participativa a través observación participante, recorridos de campo y entrevistas semi estructuradas con pequeños productores de diversas regiones del estado de Chiapas.

Pequeños productores integrados a organizaciones sociales

La crisis del sector agropecuario en Chiapas que se presenta como un problema multidimensional cuyo impacto ha sido más visible en la población más pobre y vulnerable que habita en el sector rural, quienes se encuentran en una constante búsqueda e implementación de estrategias para asegurar su sobrevivencia frente a la disminución de la producción agropecuaria, el incremento de precios de los productos básicos, la caída constante del poder adquisitivo de las familias y el desempleo.

Por ello, muchos pequeños productores buscan el amparo de las organizaciones campesinas para atender diversos problemas de su vida cotidiana. En este sentido destaca la vigencia de muchas organizaciones campesinas, sin embargo, aquí solo se retoma el trabajo que realiza la Organización Campesina Emiliano Zapata, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Histórica) en Chiapas.

Las organizaciones se caracterizan por integrar productores campesinos con unidades de producción pequeñas, donde llevan a cabo una producción de temporal, con escasa inversión, bajos niveles de tecnificación, usan principalmente la mano de obra familiar y producen para el auto consumo y algún producto para el mercado y se insertan al mercado local y regional en condiciones de desventaja (en términos de volúmenes, calidad, capacidad de negociación y permanencia en el mercado), frente a los productos que oferta la agroempresa nacional e internacional que circulan por canales comerciales altamente especializados y controlados.

Las organizaciones han establecido diversas líneas de acción para atender el problema de la producción local, mismas que se describen a continuación.



Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA)

La OCEZ-CNPA comenzó sus actividades organizacionales en los ochenta e integra a más de 8,000 afiliados, mayoritariamente indígenas campesinos hombres y mujeres (jóvenes y adultos), pequeños productores que se dedican a la producción agropecuaria. Tiene presencia en las regiones Meseta Comiteca, Sierra, Selva, Altos y Soconusco de Chiapas. Es una organización de carácter social de tipo local o estatal. Opera bajo principios de independencia y autonomía frente al gobierno así como ante los partidos políticos de derecha. Se guían por los principios de dirección colectiva, movilización-negociación-difusión, alianzas, independencia y autonomía frente a los partidos políticos y el gobierno.

Actualmente la *OCEZ* trabaja en cinco ejes estratégicos de desarrollo: educación y cultura, poder popular, economía local, hábitat saludable y soberanía alimentaria. En términos de producción, ésta se asume como una resistencia desde la tierra para la sobrevivencia, es decir, buscan garantizar que desde la tierra se puedan producir alimentos sanos, con calidad y cantidad suficiente, que implica que los campesinos ejerzan el derecho de producir sus propios alimentos. Actualmente trabajan en la recuperación del patrón local alimentario de los productores campesinos, a través de cinco acciones: rescate de semillas nativas, rescate del sistema milpa, impulso de la producción de traspatio (hortalizas, árboles frutales, aves y animales de traspatio, etc.), diversificación de cultivos en las unidades productivas y proyectos productivos comunitarios, para las que han realizado talleres de capacitación, tianguis comunitarios, trueque y ferias del maíz, de las semillas criollas y de alimentos campesinos (OCEZ-CNPA, 2015).

De esta forma, y como resultado de los acuerdos de la asamblea plenaria, en el 2013 se planteó como meta que cada familia debía destinar parte de sus tierras a la producción de alimentos para el consumo familiar. A partir de lo anterior existe ya un grupo de productores que han dejado de producir con agroquímicos (considerado veneno para la tierra), y han aprendido a producir sus propios abonos orgánicos, conscientes de que la producción orgánica implica mayor tiempo y costos que la producción convencional. Dentro de las unidades productivas se puede observar una gran cantidad de productos agropecuarios como maíz, frijol, café, zanahoria, repollo, cebolla, acelga, brócoli, cilantro, chiles, rábano, betabel, tomate, brócoli, plátano, naranja, limón, toronja, mandarina, lima, chico zapote, tamarindo, guayaba, mango, calabaza, papaya, plantas medicinales, chaya, chipilín, yuca, tzul, caña, aguacate,



carambola, guanábana, etcétera; animales de traspatio como gallinas, puercos, conejos, borregos, guajolotes y patos, ganadería extensiva y apicultura, productos que se orientan principalmente al consumo familiar (Recorrido de campo, 2018).

Dadas las condiciones productivas de los campesinos es complicado producir todos los alimentos que se consumen en la familia, por ello realizan trueque para conseguir parte de los alimentos que no producen, por ejemplo, intercambian verduras, frutas o granos por huevos, miel o café, evitando así, en parte, la compra en el mercado donde los precios de los alimentos están en constante aumento. La organización ha logrado importantes avances en el fomento de la producción familiar y local para garantizar la alimentación diaria.

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)

La CIOAC, es una organización de cobertura nacional que tiene presencia en Chiapas desde 1977. Llegó a la entidad para reforzar la lucha por los derechos básicos, por la tierra, el reconocimiento como ejidatarios y la integración sindical de peones acasillados. La principal demanda era la tierra, seguida por la modernización de las relaciones de producción y el pago justo del trabajo, proyectos productivos y libertad política (Camacho, 2007). Actualmente integra a 53 mil afiliados en la entidad y tiene una fuerte presencia en las regiones Norte, Meseta Comiteca, Sierra, Soconusco, Selva, Frailesca y Centro de la entidad (CIOAC, 2010 y 2018).

En Chiapas, la CIOAC trabaja en el fortalecimiento organizacional y productivo a fin de que los pequeños productores puedan incorporar valor a sus productos, y mediante compras consolidadas disminuir sus costos de producción. Incentiva proyectos encaminados a la producción de alimentos procurando disminuir la dependencia del mercado externo y desarrolla empresas y sociedades encaminadas a mejorar los niveles de gestión y puesta en marcha de proyectos comunitarios para garantizar su continuidad, sumando y generando nuevas habilidades y capacidades (CIOAC, 2018). En el 2007 la CIOAC creó cuatro empresas (Proveedora Agropecuaria El Núcu, El Mayab, Bancioac y Fundación CIOAC) para apoyar la proveeduría de insumos agrícolas, financieros y servicios que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos a través de generar más y mejores empleos, uso de mejor tecnología en el campo e incremento de la productividad del sector primario (CIOAC, 2010). De esta forma las empresas se encargan de integrar y gestionar las propuestas



de desarrollo, mismas que se traducen en proyectos alternativos de transcendencia municipal y regional.

La organización ha establecido dos líneas productivas: una agro empresarial y otra de fortalecimiento a la producción familiar. La línea agro empresarial integra actividades productivas dirigidas a los diversos mercados (local, estatal y nacional), destacan actividades agrícolas como la producción de maíz², sandía y la red de invernaderos de productores de jitomate y chile. La organización tiene dos procesadoras de fertilizante orgánico, que contribuyen a la disminución de la utilización de los químicos entre los productores. La producción apícola es otra actividad que desde hace quince años ha tomado gran importancia en la organización, y alrededor de 600 pequeños productores se dedican a ésta, generando miel, abejas reinas y colmenas; además la organización cuenta con talleres (carpinterías) para la fabricación de los insumos de la actividad apícola, y con un centro de acopio de la miel que distribuye en los mercados local, estatal y nacional.

Dentro de la línea productiva dirigida al fortalecimiento a la producción familiar, destacan actividades como la acuacultura rural (producción de mojarra tilapia en estanques), la ovinocultura (producción de borregos en pequeños establos), y los proyectos de traspatio avícolas (producción de pollos), para lo que la organización ha instalado una incubadora y se ha convertido en proveedora de pollitos. Estas actividades contribuyen a la alimentación familiar y al suministro de los mercados locales.

En términos generales, la *CIOAC*, mediante una visión empresarial, la capacitación, el crédito y alianzas con las instituciones públicas, fortalece la estructura productiva que contribuye a la producción de alimentos no sólo para el consumo familiar, sino para los mercados locales y estatales. El fortalecimiento de la estructura productiva genera ingresos que permite a las familias un mejoramiento de sus condiciones de vida.

Grupos de trabajo familiar

Otra estrategia importante que realizan los pequeños productores, es la integración de grupos de trabajo familiar con la intención de fortalecer los procesos de la agricultura familiar. Grupos que se encuentran en las comunidades de Yiblejoj, Pechiquil, La Esperanza y Yaxgemel del Municipio de Chenalhó, Chiapas. Comunidades que cuentan con una población de 250 a 1,300 habitantes, hablantes de la lengua Tsotsil, son comunidades con muy alta marginación (SEDESOL, 2013) y su principal actividad



económica es la agricultura familiar de autoconsumo, cultivando maíz, frijol, hortalizas, frutales y café.

En dichas comunidades, la producción se organiza de manera familiar y se basa principalmente en el sistema milpa tradicional. En sus unidades de producción se utilizan herramientas tradicionales (azadón y machete) e indispensables para el desarrollo de las actividades que requiere el cultivo. Estas unidades conservan conocimientos y saberes sobre el uso y manejo de los recursos naturales. En promedio, las familias, cuentan con dos hectáreas de terreno que se va fraccionando cuando los hijos se casan y forman su familia.

Sin embargo, la producción que obtienen no es suficiente para satisfacer la demanda de alimentos que requiere la familia para todo el año, debido a problemas relacionados con la escasez de recursos y tecnologías para la producción y el cambio climático vigente. El desabasto repercute principalmente en la salud de los niños que presentan cuadros de desnutrición por no contar con una alimentación adecuada para su desarrollo. Asimismo, las familias no logran obtener los ingresos necesarios para adquirir alimentos, y tienen dificultades para obtenerlos en los mercados locales por su lejanía y acceso a éstos (Vázquez, 2016).

Dada esta situación, a partir del año 2000 han venido siendo objeto de diversas intervenciones de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a través de varias estrategias y alternativas que apoyan la producción local para garantizar la alimentación y mejorar las condiciones de vida familiar.

La intervención se ha orientado a la unidad productiva familiar a través de la organización de grupos familiares integrados por varias unidades de producción familiar, para poder ejecutar proyectos de producción como; micro-túneles e invernaderos para la producción de hortalizas, frutales, huertos de herbolaria y hortalizas, producción de hongos setas, módulos de lombri- composta, granjas de aves de corral, sistemas de captación pluvial y estufas ahorradoras de leña, que contribuyen a la producción de alimentos y a la economía familiar. De esta forma, existen cinco grupos familiares que se integran por 106 unidades de producción familiar mismas que se articulan a través de la organización para la producción (Vázquez, 2016).

La implementación y ejecución de proyectos comenzó, con mayor intensidad, en el año 2006 con la producción de hongos setas, siembra de árboles frutales, producción de



hortalizas en micro-túneles e invernaderos (tómate, chile habanero y hortalizas), y más recientemente con proyectos de huertos familiares y producción de aves de corral. Todo lo anterior, con el acompañamiento del personal de la Fundación León XIII, que brinda asistencia técnica y capacitación y se encarga de la búsqueda de financiamiento para los proyectos de las comunidades, realizando gestiones ante instituciones como Philip Morris, Kellogg, SAGARPA, INCA-RURAL, Sedesol Federal, Caritas, Nutrí Vida y ONG'S.

La introducción de los nuevos cultivos, formas de trabajo y producción no ha desplazado a la producción de maíz, frijol y café. Cultivos que representan el principal sustento de alimentación para las familias de las comunidades. Sin embargo, las prácticas de la agricultura familiar de la región se han ido adaptando a nuevas formas de trabajo y producción, por ejemplo, se han integrado en grupos familiares para trabajar de manera colectiva en la producción de cultivos no tradicionales. Los procesos de transformación que se han generado desde la implementación de estrategias y/o alternativas (nuevas prácticas y sistemas de producción) en la producción para el autoconsumo familiar en las comunidades de Chenalhó, han tomado importancia porque están influyendo en las pequeñas unidades de producción familiar, desarrollando dinámicas a nivel local para fortalecer la economía, la organización, el cuidado del medio ambiente y la obtención de alimentos durante todo el año, que complementan la dieta alimentaria de las familias.

Así mismo, las actividades agrícolas se complementan con actividades como la apicultura, elaboración de artesanías textiles por parte de las mujeres, empleos temporales por parte de los hombres como jornaleros agrícolas, albañiles y peones de obra. Así mismo, han logrado integrar cajas de ahorro comunitarias que tiene como propósito crear el hábito del ahorro y el acceso al crédito cuando surgen emergencias familiares, productivas, de salud, entre otras.

La integración de los grupos familiares en las comunidades ha significado para los pequeños productores un nuevo proceso de aprendizaje en la forma de organización y producción. Se requiere mucho esfuerzo para lograr resultados y sobre todo coordinación entre los integrantes, ya que si uno de los miembros deja de hacer las actividades que le corresponde durante el ciclo de producción se rompe la cadena del proceso de cultivo y puede significar la obtención de rendimientos muy bajos e inclusive la pérdida de la cosecha. Además, ello ha permitido la inserción a procesos de capacitación relacionados con las actividades que están llevando a cabo (producción



orgánica de hortalizas en huertos, crianza de aves de corral, producción en invernadero, preparación de alimentos con la producción obtenida y capacitación para el manejo de cajas de ahorro) (Vázquez. 2016).

Los productores están aprendiendo a diversificar sus cultivos, se han organizado más allá de la unidad productiva familiar para realizar actividades productivas, comerciales y de ahorro, han aceptado cargos que requieren un alto sentido de la responsabilidad, han extendidos sus vínculos con otros actores sociales que apoyan el fortalecimiento de la economía local, las mujeres cuentan con un comité para la elaboración de alimentos para atender a los técnicos de Fundación León XIII cuando hacen las visitas de seguimiento y asistencia técnica, obtienen alimentos cercanos, libres de agroquímicos, y afirman que anteriormente solo se conocía el cultivo de la milpa y ahora tienen mayor variedad de cultivos y de alimentos (Vázquez, 2016).

Los procesos de diversificación productiva que han realizado en la unidad productiva familiar han incrementado sus posibilidades de alimentos e ingresos. Sí de la milpa no se obtiene mucha producción, pueden vender café, frutas y hortalizas. Pero no dejan de cultivar la milpa porque forma parte del modo de vida de los campesinos.

En términos generales estos procesos no solo han cambiado el patrón de cultivo en las unidades de producción familiar, si no también, han ido planteando nuevos escenarios productivos que generan otras formas de organización y cooperación para el desarrollo de las nuevas actividades.

Conclusión

En un contexto de crisis con grandes limitantes para los pequeños productores campesinos, éstos adoptan estrategias heterogéneas y complejas que se mueven entre la subsistencia y el mercado, que los convierten en sujetos activos que establecen múltiples interacciones en diferentes escalas territoriales y niveles institucionales para tratar de asegurar su reproducción social.

Indudablemente los pequeños productores campesinos en Chiapas han transitado por importantes procesos sociales y económicos a partir de la implementación de nuevas dinámicas productivas, mediante la adopción de diversas alternativas que involucran la participación de actores internos y externos que inciden en las condiciones de vida de la población y dinámicas territoriales.



Ante sus severas condiciones de producción y de vida los pequeños productores impulsan el fortalecimiento de los procesos organizativos y productivos a nivel local y familiar a través de la cooperación, solidaridad, confianza y ayuda mutua, que han generado sinergias entre los campesinos y ha permitido un mejor aprovechamiento de sus recursos para atender los problemas socioeconómicos y ambientales que prevalecen en el campo. La organización se ha convertido en un espacio para la reflexión y comprensión de la realidad del campo que ha permitido atender problemáticas de diversa índole que hoy en día enfrentan los campesinos.

En este sentido, es urgente revalorar el papel que desempeñan los pequeños productores en la producción de alimentos y gestión del medio ambiente. Así como el diseño de políticas agroalimentarias incluyentes con enfoque territorial, instituciones sólidas y eficaces, funcionarios honestos y una infraestructura adecuada que atiendan las necesidades específicas de los pequeños productores a nivel regional y local para potenciar sus conocimientos, prácticas, recursos y diversidad de actividades. Que los reconozca y posicione como actores fundamentales en la sostenibilidad social y ambiental de cada territorio.

Notas

^{1; 2} Profesores de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctores. Integrantes del Cuerpo Académico Estudios Regionales. Trabajan las Líneas de Investigación Procesos de Cambio Territorial y Globalización Agroalimentaria.

Bibliografía

Camacho Velázquez, Dolores (2007). Chiapas movilizado. Las organizaciones campesinas y el EZLN. En Miranda Ocampo, Raúl y Espinosa Cortés, Luz María (Editores). Chiapas: la paz en la guerra. UNAM, ECOSUR, Editorial Comuna. México.

Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG) (2017). "Chiapas. Información Agrícola 2016". Recuperado en: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wpcontent/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/Publicaciones CEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.pdf

Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG) (2015). "Perfiles municipales". Subsecretaría de Planeación Dirección de Información Geográfica y Estadística. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Recuperado en: <https://bit.ly/354YTGX>



CIOAC (2010). Manual organizacional. Centro de innovación e inteligencia organizacional. A.C., Chiapas.

CIOAC (2010). Programa de Lucha. XII Congreso Nacional Ordinario. Oaxtepec, Morelos. CIOAC (2018). Padrón de afiliados en Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014). Pobreza Estatal. Recuperado en: <http://www.coneval.org.mx/coordinación/entidades/Chiapas/Paginas/pobreza-2014.aspx>

FAO (2013). "Agricultores pequeños y familiares". Vías de la sostenibilidad. Recuperado en: www.fao.org/nr/water/docs/Enduring_Farms.pdf

Flores, Margarita y Rello, Fernando (2001). Capital social: Virtudes y limitaciones, Ponencia presentada en la Conferencia Regional sobre Capital Social y Pobreza, CEPAL y Universidad del Estado de Michigan, Santiago de Chile.

Llanos Hernández, Luis (2000). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales.

Universidad Autónoma de Chapingo. México.

Macías, Alejandro (2013). "Introducción. Los pequeños productores agrícolas de México". Carta Económica Regional, año 25, número 5. Enero-diciembre, 2013.

Martínez, Julieta (2011). "Desagrarización del campo chiapaneco". Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales II, n°1, 2011, pp. 106-128.

Martínez, Otto y Flores, María (2006). Estudios Territoriales de la OCDE. La Región Mesoamericana: Sureste de México y América Central. OCDE. BCIE. Tegucigalpa, Honduras

Montañez Gómez, Gustavo y Delgado Mahecha, Ovidio (1998). "Espacio, territorio y región. Conceptos básicos para un proyecto nacional". Cuadernos de Geografía. Vol. VII, No. 1-2. Colombia. Pp. 119-134.

OCEZ-CNPA (2015). Reseña Histórica. Tríptico. Comitán, Chiapas

Ortega Valcárcel, José (2000). Los Horizontes de la geografía. Teoría de la geografía. Ariel.

Barcelona

Raffestin Claude (2013). "¿Qué es el territorio?". En Por una geografía del poder. El Colegio de Michoacán, Zamora, 173-194



Sánchez, A. (2014). "Movimiento Campesino Transnacional. El caso de La Vía Campesina en México", en Lutz, Bruno y Chávez, Carlos (Coords.). Acción colectiva y organizaciones rurales en México, UNAM-FCPyS, UAM, EDICIONES DEL LIBRO, México, pp. 353- 405.

Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) (2013). Informes de pobreza en Municipios de Chiapas Consultado En: <https://bit.ly/343v0rk>

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (2017). "Infografía agroalimentaria, 2017. Chiapas". Recuperado en: <http://www.gob.mx/siap/>

Vázquez Pérez, Elsa Patricia (2016). Procesos de transformación de la agricultura familiar en Chenalhó, Chiapas. Universidad Autónoma de Chiapas. México

Yúnez-Naude, Antonio; Taylor, J. Edward y Becerril, Javier (2000). "Los pequeños productores rurales: características y análisis de impacto". En Yúnez-Naude, Antonio (compilador). Los pequeños productores rurales en México: las reformas y las opciones. El Colegio de México. Centro de Estudios Económicos. Fundación Konrad y Adenauer y PRECESAM. México, D. F. pp.101-141



Terra e liberdade: A educação como “passaporte” para a reivindicação de direitos de cidadania no Brasil contemporâneo

Matteo Gigante

Resumo

A falta de uma política que priorize a redistribuição de terras é um exemplo da desigualdade social que aflige o Brasil desde a época colonial. Os latifúndios concentrados nas mãos de poucos e a especulação do agronegócio, principalmente na região amazônica, são consequências de um debate sobre a reforma agrária que tem sido adiado por muito tempo. Por outro lado, num país com altas taxas de analfabetismo, o movimento dos seringueiros e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) assumiram a educação como um desafio-chave na criação da cidadania. Assim, inspirando-se na proposta pedagógica de Paulo Freire, o MST implementou projetos educativos em que os educandos estão envolvidos ativamente no próprio processo de aprendizagem. A participação comunitária é um imperativo deste processo, especialmente voltado à conscientização democrática e à melhoria da condição de vida dos camponeses. Nesta apresentação, através de uma pesquisa bibliográfica que abrange ensaios divulgativos e acadêmicos, da área das Ciências Sociais, compararemos esta inovação de perspectiva no âmbito da educação do campo aos progressos advindos na educação indígena. Enfatizando a implementação de percursos de participação comunitária, constatamos que a educação indígena e intercultural do século XXI propõe-se como instrumento de desenvolvimento da inteira comunidade. Assim, são ensinadas também disciplinas ligadas à terra, à pesca e às profissões locais, chegando até cursos de medicina tradicional. Portanto, retomando as culturas ancestrais, estas escolas têm o objetivo de formar cidadãos, construindo um futuro ao alcance das exigências destes povos.

Palavras Chaves

Questão Agrária; Brasil; Paulo Freire; Educação Indígena, Educação Rural.

Introdução

A luta pela terra, uma luta pela vida

Imprescindível ao sustento dos seus habitantes, a terra brasileira transformou-se, paulatinamente, em razão de luta e conflitos. A colonização, a divisão da terra em latifúndios, a escravidão e a progressiva expansão agrícola foram a raiz de uma



sociedade edificada em cima de desigualdades de difícil extirpação. Como afirmado por Serena Romagnoli, Claudia Fanti e Marinella Coreggia (2014, p. 13), a questão da terra começa no período colonial em que os indígenas foram subjugados e massacrados, sendo a terra dividida em capitanias hereditárias. Nestas terras trabalhavam numerosos escravizados que após a abolição da escravidão foram parcialmente substituídos por emigrantes assalariados de origem europeia. Poucos, entre eles, conseguiram chegar a possuir uma terra, ocupada pelas oligarquias.

Quando os europeus chegaram a Pindorama, as populações ameríndias eram estimadas em cinco milhões de habitantes, dizimados até hoje a uma minoria. Embora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ateste atualmente uma população total superior aos 210 milhões, o censo de 2010 (IBGE, 2010), divulgado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI, 2010), revela que os brasileiros autodeclarados indígenas eram 896 mil pessoas, apesar disso: “572 mil ou 63,8 %, viviam na área rural e 517 mil, ou 57,5 %, moravam em Terras Indígenas oficialmente reconhecidas”.

Como sublinhado por João Pedro Stédile, um dos fundadores do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enquanto nos países do ‘Norte do mundo’ a expansão do capitalismo impôs uma distribuição da terra, no Brasil a reforma agrária é ainda hoje um tema complicado (Romagnoli et al., 2014, p. 14). Num contexto em que a metade das terras produtivas, destinadas à monocultura, são controladas por 1 % dos proprietários, estes são capazes de impor condições de trabalho insalubres e salários baixos para competir no mercado global das exportações (Romagnoli et al., 2014, p. 14).

Porém, esta situação antiga não se traduz numa realidade estática, a história brasileira está repleta de tentativas de reapropriação do solo por parte dos indígenas e das camadas oprimidas. Como refere Ademar Bogo (2003, pp. 24-25), entre 1610 e 1738, os jesuítas apoiaram grupos de ameríndios na reconquista de terras presentes no Sul do Brasil e no Paraguai, fundando uma república guarani. Enquanto esta tentativa sucumbiu frente aos ataques dos exércitos franceses e espanhóis, os escravizados fugitivos protagonizaram rebeliões caracterizadas pela criação de Quilombos. Perpassando séculos de história, como salientado por Bogo (2003, p. 27), desde 1954, surgiram as “Ligas Camponesas”. Em 1964, momento em que o movimento começou a obter respostas por parte do governo, um golpe destituiu o governo instalando uma ditadura militar que reprimiu qualquer reivindicação.



A política dos militares, delineada através do “estatuto da terra”, favoreceu os interesses de grandes grupos industriais encorajados a adquirir novos latifúndios. Alguns camponeses sem terra, provenientes das regiões semiáridas do Nordeste, foram incentivados a instalar-se nas regiões amazônicas” (Romagnoli et al., 2014, p. 17). A Amazônia, desabitada segundo o regime dos militares, foi considerada como área estratégica, tendo estes implementado um desflorestamento destinado a empobrecer um solo distante dos mercados e sem infraestruturas. Declarando a vontade de deslocar “homens sem terra para uma terra sem homens” (Romagnoli et al., 2014, p. 17, tradução nossa), o Presidente Gen. Emílio Garrastazu Médici declarou então guerra aos povos nativos, novamente martirizados pela especulação.

Como anteriormente descrito por Romagnoli et al. (2014, p. 17), a região amazônica não estava preparada para enfrentar esta migração e muitos camponeses nordestinos foram obrigados a vender as terras a empresários do Sul, voltando, outra vez, à condição de assalariados. Na sociologia, como refere Mauro William Barbosa de Almeida (2007, p. 162), estes camponeses foram chamados “camponeses de fronteira” e foram vistos por alguns, como José de Sousa Martins (1979-1980), citado por Almeida (2007, p. 162), como uma “barreira para a acumulação capitalista”. Enquanto para outros, como Otávio Guilherme Velho (1972, 1976), parafraseado por Almeida (2007, p. 162), eram considerados como meios para “esvaziar as tensões causadas pela concentração da terra, convertendo-se em seguida ou em proletários, ou em classes medias [...] reforçando o capitalismo autoritário em vez de erodi-lo”.

Esta situação, referem Romagnoli et al. (2014, p. 17), provocou resistências aos projetos dos militares, em particular no Rio Grande do Sul, onde os camponeses se recusaram a deixar as próprias terras para se deslocarem para a Amazônia. Muitas famílias desta região preferiram emigrar para o Paraguai, país onde as terras eram mais baratas. Em contrapartida, outros decidiram ocupar a reserva indígena de Nonoai, cujos habitantes manifestaram indignação às autoridades. A falta de respostas políticas levou os ameríndios a declararem guerra aos invasores, queimando escolas, confiscando a colheita e expulsando os inimigos. Na História do Brasil, o 4 de maio de 1978 foi um dia como os outros, resultado de uma guerra entre pobres, característica da ausência de políticas sociais concretas (Romagnoli et al., 2014, p. 17). Das famílias expulsas da reserva de Nonoai, 700 decidiram transferir-se para a Terranova num projeto de colonização do Mato Grosso enquanto as outras 350 ficaram abandonadas. Estas famílias começaram a reunir-se semanalmente, convocadas por Padre Arnildo Fritzen,



membro da “Comissão Pastoral da Terra”. Estas reuniões clandestinas, acompanhadas por João Pedro Stédile, incentivaram a criação de um novo movimento camponês (Romagnoli et al., 2014, p. 18).

Através de um percurso longo e complexo, destaca Almeida (2007, p. 160) tentou-se uma convergência entre dois grandes grupos: o campesinato antigo, formado por agricultores integrados no sistema rural e o neocampesinato, constituído pelos que trabalhavam no sistema agrário das “plantations” – latifúndios destinados à exportação. Neste último grupo, como descrito por Almeida (2007, p. 160) encontravam-se os “camponeses assalariados”, uma forma de proletariado emergente na realidade rural. Os “camponeses rendeiros” e os “camponeses autônomos” (Almeida, 2007, p. 160), pertencentes ao “campesinato antigo” tiveram de relacionar-se com este novo panorama na procura de uma solução coletiva.

Os indígenas e o campesinato: duas caras da mesma luta

No contexto social de uma ditadura militar, que, como vimos, procurava contrapor os “grupos sociais” mais fracos – os índios e os camponeses – segundo a lei do *divide et impera*, os latifundiários viviam sossegados, contando com o apoio incondicionado das forças repressivas do Estado.

As famílias camponesas, expulsas da reserva de Nonoai em 1978, atribuíam aos índios a culpa da própria miséria, resistindo precariamente às insídias do inverno. Então um discurso interno ao movimento tentou encorajar os camponeses a refletir sobre a própria condição para encontrar uma solução:

Esqueçam os índios. Essa aí é a terra deles. Agora, não significa que no Brasil não tenha mais terra. Tem, sim. Como o governo quis levar vocês para Mato Grosso, vocês não quiseram e decidiram ficar no Rio Grande, vamos procurar terra aqui (Stédile & Fernandes, 2012, p. 28).

Como descrito por Romagnoli et al. (2014, p. 20), sob indicação de Stédile, que trabalhava no Secretariado da agricultura do Rio Grande do Sul, os camponeses decidiram ocupar a fazenda Macali, uma terra confiscada em 1962. Adquirida por donos que tinham falsificado os títulos de propriedade, este espaço foi o primeiro lugar de uma resistência que estava prestes a estender-se por todo o Brasil.



O secretariado da agricultura tinha enviado Stédile para pacificar a revolta. O emissário, no entanto, tinha convidado os ocupantes a resistir e, quando chegou a polícia, as mulheres e as crianças defenderam o direito à terra com a ‘arma do corpo’.

Assim sendo, em 1980, o governador do Rio Grande do Sul concedeu Macali aos ocupantes (Romagnoli et al., 2014, p. 20). Este pronunciamento, somado à ineficácia das políticas migratórias em Mato Grosso, provocaram outros casos de ocupação na mesma região (Romagnoli et al., 2014, p. 21).

Esta luta pela terra e pela justiça social interligava-se, então, a outra luta mais periférica, mas de grande relevância. Como visto, a partir das últimas décadas do século XIX, a Amazônia transformou-se em lugar de esperança para um conspícuo número de migrantes nordestinos. Alguns deles começaram a trabalhar como seringueiros, na extração da borracha para a produção do látex. Como salientado por Mary Allegretti (2008, p. 43), a borracha converteu-se num negócio importante para a economia brasileira. Apesar disso, a importação das sementes para a Indochina e o controlo do mercado borracheiro por parte dos japoneses levaram o Brasil, principal exportador, a perder competitividade nesse setor, obrigando os brasileiros a assinar um acordo com os EUA. O acordo promovia o monopólio estatal da borracha com uma proteção do preço vigente até aos anos 60 do século XX. Porém, este mercado sustentava-se num sistema de exploração em que os trabalhadores trocavam a borracha por bens de consumo, ficando permanentemente endividados com os donos das plantações. Estas crises criaram, na região, uma classe de nordestinos sem recursos para voltar ao Nordeste, integrados com a população indígena. Assim, como destacado por Allegretti (2014, p. 44), esta classe protagonizará, na década de 70, um movimento com a intenção de denunciar estas situações a nível mundial.

Segundo Almeida (2007, p. 165), as realidades indígenas e dos seringueiros foram consideradas marginais no panorama de estudo sobre os camponeses. Na *Formação econômica do Brasil* de Celso Furtado, citada por Almeida (2007, p. 165), os problemas dos seringueiros são mencionados, “como subprodutos de mais um ciclo abortado de crescimento económico”. Uma questão regional ligada a uma repentina concentração de habitantes, arrastados pelo “progresso” do capital. Por outro lado, a precária situação dos antigos seringueiros, emigrados nas áreas metropolitanas, precisava de um apoio concreto por parte das instituições.



Como descrito por Allegretti (2008, p. 45), estes trabalhadores encontraram o apoio das Comunidades Eclesiásticas de Base e do recém-nascido Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sob a pressão destas lutas, o governo começou a pagar uma indenização aos trabalhadores expulsos. Porém, esta indenização não era suficiente para viver na cidade. Por estas razões, em 1976, um grupo de seringueiros, liderados por Wilson Pinheiro, presidente do STR de Brasília, percebeu que a indenização não era a solução. Efetivamente, os antigos seringueiros não conseguiam viver privados da floresta que estava a ser derrubada por especuladores.

Por isso, apoiados pela Contag, os insurgentes decidiram parar as motosserras para impedir o desmatamento da região: “Essa ação mudou o caráter dos conflitos, por várias razões: mostrou a força da organização, evidenciou as *conseqüências* sociais da derrubada da floresta e forçou o fazendeiro a dividir parte da área que havia comprado” (Allegretti, 2008, p. 45). As condições socioeconômicas e a crise ambiental, profundamente interligadas nesta luta, preocuparam, então, as classes dirigentes que intensificaram a repressão da revolta. Em julho de 1980, como descrito por Allegretti (2008, pp. 45-46) foi assassinado o líder sindical Wilson Pinheiro, enquanto Chico Mendes e o futuro presidente brasileiro Lula foram enquadrados pela Lei de Segurança Nacional. O recém-nascido Partido dos Trabalhadores foi fortemente reprimido, provocando a intervenção das forças policiais, junto dos mercenários, ao serviço dos grandes proprietários.

De facto, o movimento dos seringueiros, tinha encontrado em Chico Mendes um líder carismático perigoso para o sistema. Eleito vereador de Brasília em 1977, Chico desafiou o projeto de desmatamento da região usando a arma da cultura.

Implementando uma política de alfabetização de adultos, Chico trabalhou para que os seringueiros se reunissem em cooperativas, contrastando as especulações das empresas paulistas (Allegretti, 2008, p. 46). Assim, coordenou pela primeira vez uma ação conjunta de ONG's, sindicatos, Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário e grupos indígenas. Assim, os seringueiros proclamaram-se “defensores da floresta” (Allegretti, 2008, p. 47), formulando uma proposta de reforma agrária baseada na proteção do solo seringueiro. Em 1985, o novo movimento convocou em Brasília um primeiro encontro, criando o Conselho Nacional dos Seringueiros, lutando para melhorar as condições de vida dos seringueiros e encontrando instrumentos da sabedoria indígena para escrever a própria ideia de futuro. Tencionando usufruir das recentes



inovações tecnológicas como ferramenta para melhorar as próprias condições de vida, os povos da amazônia procuraram começar a escrever o próprio futuro enquanto coletividade (Allegretti, 2008, p. 47).

Esta “União dos Povos da Floresta” estava destinada a imprimir-se nas primeiras páginas de importantes revistas, tornando o “pulmão do mundo” um argumento de debate internacional (Zanchetta et al. , 2008, p. 265). Uma conquista histórica, vista a participação de representantes dos povos indígenas, antes considerados incapazes de se constituírem como sujeitos políticos.

Efetivamente, como explicado por Bruce Albert (2000, p. 241), estes povos, diferentes entre eles por cultura e tradições, eram divididos em fações contrapostas e, por vezes, antagônicas até àquele período.

Na transição democrática, Mendes continuou a lutar, encontrando convergências com movimentos ecologistas na necessidade de salvaguardar o território, alcançando direitos para os seus habitantes. Porém, em 1988 Chico foi assassinado, deixando uma marca da sua coragem nas páginas da história e no espírito daqueles que lutam até hoje conciliando a justiça social e a salvaguarda do planeta (Allegretti, 2008, p. 48).

Metodologia

Como visto, baseando-se metodologicamente numa pesquisa bibliográfica o estudo analisa textos divulgativos e académicos, da área das Ciências Sociais.

Discussão: A educação como ferramenta para reconquistar a terra

Como visto, a cultura é uma importante ferramenta de emancipação da população. Na identificação de um percurso, que vê como objetivos a criação de serviços e o progresso económico, a alfabetização é considerada uma importante tarefa para a consciencialização do povo na reivindicação dos próprios direitos.

O analfabetismo é um drama que aflige ainda hoje uma parte considerável da população brasileira. Segundo refere Gama (2014), citando um estudo do IBGE, divulgado em 2013, o número de analfabetos com mais de 15 anos localiza-se em torno dos 13 milhões de pessoas, 8% dos habitantes do país.

Embora alguns governos tenham incentivado projetos de alfabetização e letramento, o caminho a seguir é ainda impérvio. Citando vários dados daquela altura, Stédile, numa



entrevista de 2006 a Gallas, salientava que uma grande parte da população brasileira, especialmente no Nordeste do país, sofria uma falta de acesso à educação pública. Portanto, refere Stédile, entrevistado por Gallas (2006), que não adianta apenas dar a terra aos camponeses:

A educação também é nossa bandeira. Só distribuir a terra, só garantir que os pobre [sic] trabalhem para si, isso não resolve nem o problema da pobreza, nem o problema da desigualdade. É por isso que o MST defende como bandeira que os camponeses tenham direito à terra, acesso a escola – que é o que libertá-los, levá-los ao conhecimento e torná-los cidadãos. Você pode dar a um camponês só a terra, mas ele vai continuar sendo ignorante e manipulado. (parágrafos 10 e 11).

Efetivamente, o MST considera a educação como uma questão imprescindível que abrange vários setores da sociedade, desde os sem-terrinhas (os meninos) até aos mais idosos. Nos assentamentos dos sem-terra, espalhados em todo o país, os professores têm um papel de fundamental importância para toda a comunidade. O trabalho do educador é de criar uma geração de cidadãos conscientes que possam continuar a cuidar das terras “sendo mais felizes e mais cultos mesmo continuando a morar no campo” (Romagnoli et al., 2014, p. 105, tradução nossa).

Todas as escolas, explicam Romagnoli et al. (2014, p.107, tradução nossa), possuem um jardim e uma horta enfatizando o vínculo entre a natureza, uma “alimentação saudável” e uma “dimensão lúdica”. Além disso, os alunos têm a possibilidade de questionar e dialogar, participando na construção do próprio percurso de aprendizagem. Para atingir este fim, os professores planificam o trabalho junto da comunidade representando o território e as suas necessidades educativas.

As escolas são feitas para que cada um se sinta parte de uma experiência educativa coletiva incentivando uma gestão democrática dos espaços. Por isso, os educadores experimentam vários meios de difusão cultural como a música, a dança e o teatro, saindo dos recintos da didática tradicional. Como explicado por Romagnoli et al. (2014), este método educativo, inspirado na linha pedagógica de Paulo Freire, pretende introduzir a educação no universo empírico do educando com o intuito de lhe proporcionar “um poder de intervenção sobre a realidade” (p. 108, tradução nossa).

O ensino da matemática, por exemplo, como salientam Romagnoli et al. (2014, p. 108, tradução nossa), baseia-se em experiências práticas e concretas, evitando “cálculos abstratos”, enquanto a história está voltada para a reconstrução da micro-história da



própria coletividade. Partindo da história da própria família, as crianças conseguem reproduzir aquilo que vivem, e que viveram, incentivando uma participação ativa na própria educação e na criação do futuro.

No desejo de reapropriação dos próprios espaços e da própria cultura, constata-se uma ligação essencial entre o modelo educativo implementado pelos sem-terra e a educação indígena. A partir dos anos 1980 e 1990, referem Aldo Zanchetta et al. (2008, p. 115), em linha com as reivindicações dos povos indígenas, pensou-se num tipo de escola que desconstruísse os métodos tradicionais, promovendo uma educação diferenciada, intercultural e comunitária. Este propósito revolucionou o sistema de ensino pondo a escola ao serviço das comunidades indígenas (Zanchetta et al., 2008, p. 118).

Na vanguarda deste processo, nasceu o Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, criado em 1996 pelos povos indígenas do estado da Roraima com o intuito de formar os futuros professores das escolas indígenas e especialistas de profissões ligadas à terra, à agricultura e à gestão ambiental (Zanchetta et al., 2008, pp. 116, 269). O projeto, sublinham Zanchetta et al. (2008, p. 116), respondeu à necessidade de promover a cultura local nas terras retomadas de num estado em que a educação era promovida, pelo governo local, através de professores externos, como instrumento de desestruturação comunitária.

Segundo referem Fábio Almeida de Carvalho e Isabel Maria Fonseca, numa coletânea organizada por Maxim Repetto, Isabel Maria Fonseca, Fábio Almeida de Carvalho, Jovina Mafra dos Santos e Fabíola Carvalho (2008, p. 31), numa escala comparativa, Roraima é o estado brasileiro com a maior presença de comunidades indígenas, que alcançam vinte por cento da população. Mesmo assim, como referem os mesmos autores (2008, p. 32), a educação tradicional, de cariz assimilacionista, desconsiderava e desvalorizava a realidade intercultural desta região, provocando fenómenos de “menosprezo” das culturas indígenas ou de “soberba étnica” que podem ser encarados numa perspetiva educativa intercultural.

Como referem Zanchetta et al. (2008, p.116), esta foi a primeira etapa de um percurso seguido por outras comunidades indígenas que edificaram escolas, seguindo este modelo. No estado do Acre, nas beiras do Rio Amónia, criou-se uma escola que se propõe difundir práticas de gestão sustentável dos recursos da região do Rio Juruá, uma das áreas mais biodiversificadas do planeta. Através desta escola, pretende-se salvaguardar o conhecimento dos *Ashaninka* em relação às sementes e às plantas



curativas, promovendo o estudo da medicina tradicional e educando a respeitar a floresta. Com os mesmos objetivos, nas terras retomadas do Mato Grosso do Sul, começou o projeto de reconquista educativa dos povos *Guarani- Kaiowa*. Lutando para reconquistar a terra dos próprios antepassados, este povo aprende hoje, através dos xamanes, as danças típicas bem como as cerimónias de iniciação.

Portanto, desde os primórdios do século XX, nasceu um debate concernente à criação de um *currículum* indígena e intercultural. Alguns professores como Maria de Lourdes, Diretora do Instituto *Guarani – Kaiowa*, refletiram sobre a construção de uma escola verdadeiramente indígena com professores índios que falassem as línguas dos respetivos povos e que participassem na vida da comunidade, incluindo atividades como a pesca, a participação nas festas e nos trabalhos coletivos (Zanchetta et al., 2008, p. 117). Uma educação indígena vista como a realização dos sonhos dos próprios antepassados, de verem escritos e transmitidos os mitos, as histórias e os valores do próprio povo, para que possam deixar às novas gerações o testemunho das palavras de quem antes não tinha voz. Por isso, é fundamental dar voz e dignidade às experiências destes povos, facilitando um diálogo com saberes provenientes de outras realidades culturais e com os assim chamados “saberes universais” (Zanchetta et al., 2008, p. 118, tradução nossa).

Realiza-se, assim, nas línguas indígenas, uma releitura da história contada não só nas páginas dos livros, mas através dos contos dos mais idosos, bibliotecas viventes, depositários da história e da cultura destes povos. Portanto, define-se o desafio de uma escola dos povos indígenas na construção de uma “antropologia de si e do próprio povo” (Zanchetta et al., 2008, p. 118, tradução nossa).

Paulatinamente, estas experiências, refere Zanchetta et al. (2008, p. 118), evidenciaram a exigência de criar centros universitários indígenas destinados a formar os docentes das escolas. A partir destas instâncias, incentivou-se a realização do “Projeto Tucum” na Universidade Federal do Mato Grosso. Então, começou um debate acerca da possibilidade de estruturar estas instituições como entidades separadas. Nos últimos anos, de facto, algumas universidades brasileiras abriram as portas para o acesso às culturas indígenas nos próprios percursos didáticos, abrindo o caminho para uma afirmação concreta de uma didática realmente intercultural e plural.

Assim, como descrito por Carvalho e Fonseca in Repetto et al. (2008, pp. 29, 32-33), em Roraima, onde existe a maior rede de escolas indígenas do Brasil e o Núcleo



Insikiran de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima/ UFRR, a interculturalidade cruza-se com a exigência de criar um currículo de competências empiricamente aplicáveis ao universo dos educandos que se conjugue com a necessidade do letramento, ou seja a capacidade de ler os livros e o mundo, chegando a refletir criticamente sobre a realidade.

Conclusões

Como relatado por Zanchetta et al. (2008, p. 104), estes projetos educativos foram inspirados pelo trabalho e pelo pensamento do grande pedagogo brasileiro Paulo Freire. Analisando a evolução das políticas neoliberais que subfinanciaram a educação pública, alguns movimentos organizaram-se, reconhecendo a importância estratégica desta ferramenta pela emancipação dos povos. Dessarte, começou a desenvolver-se uma crítica ao sistema educativo antidialógico, promovido pelo sistema, influenciando uma filosofia educativa chamada “pedagogia crítica”.

A visão pedagógica de Freire estruturou-se, então, como “dialógica”, num processo educativo em que o discente descobre e conquista, através de um caminho, a consciência do próprio ser e da própria condição (Zanchetta et al., 2008, p. 104).

Face a um sistema que promove o egoísmo dos indivíduos, esta linha pedagógica não podia consolidar-se apenas como uma união dos oprimidos, unidos segundo uma impostação ideológica, baseada em slogan. Uma verdadeira libertação frente aos modelos sociais e educativos impostos não é uma proposta de adesão passiva a um modelo alternativo, mas sim a criação desta alternativa através da análise das razões e das circunstâncias pelas quais o sistema vigente provoca e legitima a desigualdade e a miséria (Zanchetta et al., 2008, p. 104). Como sublinhado por Zanchetta et al. (2008, p. 105), o modelo educativo tradicional e antidialógico não pode, porém, ser enfrentado apenas através da autogestão do ensino.

Portanto, é preciso também operar uma “descolonização” do pensamento. É difícil descrever, em poucas palavras, o processo de “colonização” do pensamento, mas podemos constatar que este foi atuado durante cinco séculos pelos colonizadores antes e pelos “herdeiros nacionais” depois (Zanchetta et al., 2008, p. 105, tradução nossa). Este processo, afirma Edgardo Lander (2005) citado por Zanchetta et al. (2008, p. 106), estendeu-se através das ‘missões civilizadoras’ do saber eurocêntrico, que impôs a hegemonia da ‘cultura ocidental’ que, por sua vez, julgou as outras a partir do próprio ponto de vista, considerando-se como o patamar mais ambicionado de um progresso ainda inatingido pelas outras sociedades.



Esta visão colonizadora, particularmente interiorizada na mentalidade europeia, transparece nas relações de “cooperação” e de “solidariedade” que originam o que Lander (2005), citado por Zanchetta et al. (2008, 106), define como “invasão cultural”, culminando no perigo que Freire, na Pedagogia do Oprimido, atribui às ações assistencialistas. Segundo Freire, citado por Zanchetta et al. (2008, p. 106), desviando as massas dos problemas sociais e da procura de soluções concretas, estas ações funcionam como uma anestesia dos povos, na esperança de receber mais apoio. Nesta ação, o invasor apresenta-se como aliado, dominando econômica e culturalmente o “invadido”. Por isso, sublinha Freire, os “grupos oligárquicos” aceitam a intrusão de instituições “humanitárias” nos próprios espaços, até quando estes grupos não tentam consciencializar o oprimido sobre a causa da sua opressão (Zanchetta et al., 2008, p. 106). Nesta ótica, é pertinente uma análise do que foi feito até agora para destruir as bases da identidade cultural e da visão do mundo indígenas, cujos valores foram postos profundamente em crise (Zanchetta et al., 2008, p. 107).

Segundo Eduardo Viveiros de Castro (2002, p. 195), “as sociedades que perderam sua tradição não têm volta”. Por isso, é necessário esperar uma emergência de um “simulacro inautêntico” (Castro, 2002, p. 195), para que os indígenas possam fazer novamente as contas com a própria cultura. A tradição dos índios foi, efetivamente, recriada ao longo dos tempos por estereótipos, fruto da invenção dos próprios colonizadores, consolidando uma visão mítica e simbólica, aproveitada, no caso brasileiro, na criação da própria cultura e narrativa nacional.

Constatada nas mesmas análises de alguns povos indígenas esta crise manifesta-se num descontentamento social consequente, também, à exclusão dos indígenas nas decisões políticas do estado. Perante isso, existe a necessidade de uma recriação de culturas indígenas sufocadas por uma história de dominação, processo que precisa de uma maturação lenta. Esta recriação, no entanto, não pode prescindir do que aconteceu até agora, projetando-se como “um impossível regresso ao passado”, mas, segundo Zanchetta et al. (2008, p. 107, tradução nossa), deve partir da consciência de que a integração dos índios como cidadãos é uma tarefa árdua numa civilização que exclui os que são considerados diferentes e ‘minorias’.

Por isso, a sociedade deve redescobrir e reconhecer o valor da diversidade cultural. Como delineado pela já citada coletânea de Repetto et al. (2008, pp. 17-19), a cidadania indígena antecede a existência dos estados nacionais que, por outro lado, subjugarão os indígenas e os afrodescendentes, negando-lhes direitos e instrumentos de participação. Assim, continua Repetto et al. (2008, p. 71), os indígenas podem inserir-se num processo de participação política, apenas conhecendo a própria cultura e tendo, por sua vez, a própria cultura reconhecida, de



facto, por um estado que valorize a diversidade. Dessarte, na mesma coletânea, Fabíola Carvalho sublinha a necessidade de uma escola que saiba produzir conhecimento, dialogando com a comunidade, lidando com as exigências do território e moldando a sua ação educativa inspirando-se na realidade vivenciada pelos alunos (Repetto et al. 2008, pp. 77, 88).

Efetivamente, como salientado por Almeida (2007, p. 159), a cultura, ligando as pessoas à terra, torna-se imprescindível para converter os indivíduos em grupos portadores de direitos, em “identidades étnicas” que podem ser usadas como “passaportes” para ganharem direitos de cidadania. Através destas ferramentas, estes grupos podem enfrentar-se com outros, hegemonicamente mais fortes. Unindo-se numa luta pela redistribuição do espaço natural-humano, os camponeses e os indígenas constituem hoje um movimento plural, que pretende valorizar e recuperar a própria diversidade social e política. Como sublinhado por Almeida (2007, p. 180), esta aliança envolve, também, outros movimentos cujas instâncias se cruzam, por exemplo movimentos ambientalistas e pela liberdade de informação. O objetivo é reconquistar os espaços físicos e de ação política para construir um modelo social igualitário e plural, defendendo a terra e combatendo a especulação de transnacionais interessadas num controlo predatório e monopolístico sobre a terra e a agricultura.

Agradecimentos

Este texto é dedicado à memória da minha eterna Professora Serena Romagnoli. Pedagoga Freireana que na sua marcante passagem por essa terra, entre a Itália e o Brasil, espalhou, com carinho, paixão e sabedoria, muitas sementes, dedicando a sua existência à escola pública e à construção de um mundo melhor. Agradeço também à minha orientadora, a Professora Alva Martínez Teixeira, pela revisão deste texto e pelo constante incentivo e a Miguel Ângelo Cunha Velho pela revisão deste texto. Além disso, agradeço à Faculdade de Letras e à Universidade de Lisboa pelo apoio financeiro à minha pesquisa de Doutoramento, realizado através do programa de Bolsas de Doutoramento BD 2017.

Notas

¹ Profesores de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctores. Integrantes del Cuerpo Académico Estudios Regionales. Trabajan las Líneas de Investigación Procesos de Cambio Territorial y Globalización Agroalimentaria.



² Actualmente se encuentran en la construcción de un centro de acopio y procesamiento del maíz, a fin de poder convertirse en distribuidores de masa de maíz para tortillas, apropiando así del valor agregado del maíz y generando mejores precios para sus productores.

Bibliografía

Albert, B. (2000). O Ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da natureza (Yanomami). In, Albert, B., & Ramos, A.R. (Eds.), *Pacificando o branco: cosmologias do contato no Norte-Amazônico* (pp. 239-274). São Paulo, Brasil: UNESP.

Allegretti, M. (2008). A construção social de políticas públicas. Chico Mendes e o movimento dos seringueiros, *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, (18), 39-59. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/13423/9048>

Almeida, M. W. B. D. (2007). Narrativas Agrárias e morte do campesinato, *Ruris*, 1(2), 157-186. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://bit.ly/3iXIFEh>

Bogo, A. (2003). *Arquitetos de sonhos*, São Paulo, Brasil: Editora Expressão Popular. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://bit.ly/3k1KAJz>

Castro, E. V. D. (2002). *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*, São Paulo, Brasil: Cosac & Naify.

Funai. (2010). O Brasil Indígena (IBGE). Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-ibge#>

Gallas, D., & Stédile J.P. (2006). *Líder do MST quer ver universalização da educação*. BBC Brasil. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://bbc.in/31cnt7v>

Gama, A. (2014). *Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais*, UOL. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://bit.ly/2SUBthK>

Ibge. (2019). Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>

Repetto, M., Fonseca, I. M., Carvalho, F. A. D., Santos, J. M. D., & Carvalho, F. (Eds.). (2008). *Propostas educativas em cidadania intercultural*. Boa Vista, Brasil: Editora da UFRR.

Romagnoli, S., Fanti, C., & Coreggia M. (2014). *La lunga marcia dei senza terra - dal Brasile al mondo*, Bologna, Itália: Emi.



Stédile, J. P., & Fernandes, B. M. (2012). *Brava Gente: A trajetoria do MST e a luta pela terra no Brasil*. São Paulo, Brasil: Editora Fundação Perseu Abramo. Recuperado a 10 de setembro 2019 de: <https://bit.ly/3nRBWzr>

Zanchetta, A. (Ed.). (2008). *América Latina- l'avanzata de los de abajo, movimenti sociali e popoli indigeni*, Bolsena, Itália: Massari Editore.



Reconfiguración de múltiples formas de resistencia al gran capital. Audiencias públicas, tractorazos y “frutazo” en la Patagonia norte

Norma Beatriz Andrade

Resumen

La propuesta se focaliza en los sujetos sociales a nivel regional (Alto Valle de Río Negro y Neuquén) y a nivel local (área agrícola de la localidad de Centenario ubicada en la región frutícola de exportación en el norte de la Patagonia).

Los valles frutícolas de la cuenca del río Negro comprenden el tradicional Alto Valle del río Negro, los valles medios de los ríos Negro y Neuquén y el valle inferior del río Limay; situados en el Norte de la región Patagonia de Argentina.

Las dimensiones iniciales atienden los procesos de intensificación del capital, las tensiones entre lo global y lo local en la reconfiguración social del territorio y los impactos que producen esas mutuas determinaciones.

Este trabajo, desde el relato de experiencias de los propios agricultores familiares en audiencias públicas y en manifestaciones sociales, reúne testimonios que dan cuenta cómo, desde ruralidades en contexto, irrumpen sujetos políticos e institucionales en defensa del territorio y la soberanía alimentaria, poniendo en relieve el rol tradicional del pequeño productor en la organización social del trabajo familiar de la región.

La metodología utiliza fuentes primarias, y fuentes secundarias. Las primeras, bajo la forma de entrevistas no dirigidas; y las segundas, constituyen un corpus periodístico de los principales medios de la región.

En el plano político, las audiencias públicas y los tractorazos en Colonia Centenario, son un valioso medio para visibilizar las luchas libradas por movimientos sociales y grupos históricamente subalternizados: los productores familiares, no sin resistencias e iniciativas por el resguardo de tierras y recursos.

Palabras Clave

Audiencias públicas; tractorazos; organización social del trabajo familiar; intensificación del capital; Alto Valle de Río Negro y Neuquén



Introducción

En las últimas tres décadas se transita por un proceso de reestructuración productiva en las áreas rurales que se caracteriza, entre otros, por una creciente globalización del capital y del consumo, por la redefinición de actores sociales agrarios, por la movilidad territorial de la población y por la reconfiguración de los territorios rurales.

En relación a esta tensión entre el contexto de la sociedad local y el marco de la mundialización, los estudios previos del Grupo de Estudios Sociales Agrarios abordan tanto las dimensiones macro estructurales de los procesos sociales agrarios del norte de la Patagonia como el nivel microsocial a partir de la identificación y caracterización de los actores sociales individuales -trabajadores, productores familiares y empresas-, y colectivos e institucionales que también construyen el territorio, diferenciando espacios productivos, dinámicas sociales y modalidades de organización de la agricultura en zonas de regadío.

En el caso de la producción frutícola, la zona tradicional es la denominada Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aunque éste área en particular está siendo afectada por la actividad del fracking, en los últimos años, en dos sentidos: en el área en general, la competencia por el uso del agua va en aumento generando conflictos por el acceso a los recursos, situación que se manifiesta a lo largo de todo el río Neuquén, afectando las “colonias” de producción de frutas de pepita de Colonia Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar. Mientras que en el valle rionegrino, las localidades de Fernández Oro y Allen, ya han cambiado chacras por explotación de petróleo, no obstante Colonia Centenario y Villa Regina persisten como zonas exportadoras de peras y manzanas.

Desde la década del '90, la intensificación del capital concentrado tiene una incidencia importante en las estrategias de los pequeños productores de la región, sobre todo con el impacto del desguace del ferrocarril y la privatización de YPF. Esto estimuló el aumento de las empresas del agronegocio, pero también en invertir en otros “recursos” que le interesan explotar al sector privado, esto es, hidrocarburos, minería, negocio inmobiliario en vinculación a las demandas turístico-recreativas y a las necesidades habitacionales que “justifican” la promoción de venta de tierras fiscales bajo ordenanzas por vía de excepción.



Metodología

El diseño de investigación es cualitativo. En el mismo se combinan datos provenientes de fuentes primarias, recabados en sucesivas entrevistas principalmente a productores agrícolas en la localidad de Centenario, y de fuentes secundarias. Para el relevamiento de datos primarios, se recurrió a entrevistas en profundidad con bajo nivel de estructuración. También, para el registro de datos de primera mano, se utiliza la técnica de observación no participante en dos audiencias públicas realizadas en la localidad en los años 2012 y 2015. Por último, la interpretación de los datos se completa con fuentes secundarias: registros documentales y periodísticos (diarios regionales y locales, ordenanzas del municipio local).

El entrecruzamiento del testimonio y la utilización de fuentes secundarias mencionadas me permiten acceder a una mejor comprensión de las acciones colectivas, lógicas de pensamiento y decisiones tomadas por los sujetos/as rurales en un tiempo y espacio concreto.

Discusión y resultados

Acciones directas de los actores sociales a nivel regional y local

A las acciones directas denominadas cortes de ruta y tractorazos, que cobran fuerza a fines de los '90 y a principios del siglo XXI, se suman en la actualidad las **audiencias públicas** y el reciente “frutazo” que expresan las consecuencias del impacto diferenciador de la modernización productiva de la actividad frutícola en su conjunto, por parte de los históricos sujetos sociales: los productores familiares de la región.

Al respecto, Aiziczon (2012) explora procesos de gestación, construcción y transmisión de culturas políticas específicas y su relación con las acciones de protesta social en la región. A la vez, se ocupa de describir en profundidad la “cultura de la protesta” neuquina durante la década del '90 “hablar de la construcción de una cultura política implica analizar en perspectiva histórica un conjunto de actitudes, prácticas, normas y creencias compartidas por un grupo de actores en conflicto¹” (Aiziczon, 2012: 22).

Para señalar la conformación de esta cultura de la protesta, Aiziczon analiza los factores políticos, económicos, sociales y culturales que incidieron en la constitución de un específico campo de protesta en la provincia de Neuquén durante la década del '90 y explora el activismo político en tanto estrategias que despliegan los actores sociales específicos para producir, mantener y hacer posible la acción colectiva de protesta ante



el avance de políticas neoliberales que ahogan y oprimen las economías regionales y desplazan la actividad de la fruticultura que dio origen a la creación del valle

Las primeras acciones colectivas: Tractorazos, cortes de rutas y derrame de fruta en la región.

Es a mediados de los años '80, en el contexto de ingreso de las fases evolutivas del sistema frutícola a la etapa de concentración y transnacionalización, cuando la resistencia en forma de acción directa comienza a adoptar distintas modalidades. Ya en los '80, los productores llevaron esporádicamente sus tractores y maquinarias agrícolas a plazas públicas con el propósito de llamar la atención de sus problemas de endeudamiento. Pero, es a comienzos de los '90 cuando esas manifestaciones adquieren el carácter de acción colectiva asociada a tácticas del conjunto de los integrantes del sistema y son denominadas "tractorazos".

En este tópico, el análisis de la resistencia se centra en las acciones colectivas de los pequeños y medianos productores; y en el alcance de los movimientos y alianzas entre los distintos sectores sociales que integran el circuito y el resto de la sociedad local, en el caso de uno de los conflictos recurrentes conocidos en la región valletana como: "Tractorazos" (Bendini y Pescio, 1996: 210), ocurridos entre 1993 y 1994, 2001, 2010, 2012, 2015².

Entretanto el tractorazo³ y los cortes de ruta propiciados en el 2001 conformaron no sólo un mensaje de alerta y reclamo por parte del sector primario de la región ligado al futuro de la actividad, sino también *"fue una reproducción silenciosa de todo lo que sucedía en la chacra. Y lo manifestaron sacando sus maquinarias viejas a la ruta"* (Diario Río Negro, 16/12/02).

El mensaje de los productores en dicha protesta fue unánime y dirigido no sólo a los sectores políticos y aquella gente vinculada directamente con la problemática, sino que *"fue dirigido a toda la sociedad: 'si nos caemos nosotros, la base de la economía de esta región, se caen todos' decían"*, se expresó (Diario Río Negro, 16/12/02).

Estas acciones expresan las consecuencias del impacto diferenciador de la modernización productiva de la fruticultura como actividad en su conjunto. Esto es así más allá que el contenido manifiesto continúe siendo el endeudamiento bancario y la caída de la rentabilidad (Bendini y Steimbregger, 2003).



Los pequeños y medianos productores, como lo han sido históricamente, son los actores principales de la resistencia y sus denuncias se dirigen fundamentalmente al modelo económico vigente; son los más interesados en forjar la alianza ante la amenaza creciente de devaluación territorial que los perjudique, en la tensión entre el capital inmóvil y el capital transnacional (Harvey, 1990 en Bendini y Pescio, 1997).

Además, estas acciones directas, para la sociedad en su conjunto, materializan una dramática expresión en las interrupciones de tránsito por las principales rutas regionales llevadas adelante por grupos de productores de cámaras locales.

En los hallazgos de este repaso de la bibliografía resulta interesante mencionar cómo a partir de éste fenómeno, los productores que participaron de forma activa en movimientos sociales, cortes de ruta y tractorazos a fines de los '90 y a principios del siglo XXI, identifican momentos clave de los conflictos protagonizados con aspectos relacionados a su vida familiar y acervo cultural.

En la rememoración que realizan a la hora de armar su relato sobre un conflicto, reafirman que *“ser chacarero determina una identidad, un sentido de pertenencia, una manera de concebir la familia y la producción agropecuaria, una especial relación con la tierra, una determinada categoría política”* (Muzlera, 2009: 135) y su vinculación era natural y espontánea. En ese sentido, citamos:

“Para nosotros, hay una constante reafirmación de la familia como empresa individual y única propietaria de sus tierras siendo a la vez nuestro mayor capital cultural” (productor y presidente Cámara de productores).

“Defendemos la actividad primaria que dio lugar a la construcción del valle. Como chacareros hemos sabido diseñar una estructura productiva basada en la agricultura familiar con incorporación de mano de obra de la familia y también asalariada. Esta organización social -al interior de nuestras unidades productivas- se refleja en una particular relación con los demás participantes del ámbito rural (productora local).

En ese sentido, *“los pequeños productores durante décadas han conservado ciertos rasgos básicos que históricamente los definieron: fuerte vínculo con la tierra, mano de obra familiar como principal fuerza de trabajo y capacidad de acumulación. Sin embargo, los profundos cambios acaecidos en la última década del siglo XX afectaron esos rasgos, en alguna medida, de forma sustantiva”* (Muzlera, 2009: 136).



No obstante, si bien varios chacareros de la región se reconocen como un sector subalternizado, paulatinamente desplazado de la actividad primaria, se reorganizan y recurren a las protestas colectivas como medio para visibilizar las luchas que emprenden en defensa de la producción primaria y del territorio. En el acápite “Disconformes, productores salieron a la calle”, un medio de prensa argumenta:

La “falta de rentabilidad” la “grave crisis del sector que afecta a chacareros y empresas”, el “incumplimiento” de las “promesas del gobierno nacional” productores de toda la región salieron a expresar su malestar en la rutas. Los destinatarios de los mayores reclamos fue el gobierno nacional y la poca consistencia de los anuncios realizados (Diario Río Negro 30/12/2010, sección Regionales).

En esa manifestación, las leyendas en carteles colgados en viejos tractores y maquinarias rurales, expresaban: *“Usted paga \$8 el kg de manzanas, pero quien la produce no cobra ni 80 centavos después de un año de trabajo”*.

En el año 2010, la estrategia de sacar las viejas maquinarias a las calles y rutas en la ciudad de Centenario se complementa, en paralelo, con la participación del conjunto de productores en las audiencias públicas convocadas por los gobiernos locales, con la anuencia del estado provincial, para avanzar sobre las tierras productivas.

Las audiencias públicas, la participación de los productores familiares

La audiencia pública es un mecanismo que habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos ciudadanos que puedan sentirse afectados por una decisión de la Administración Pública, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual o colectiva en relación a la medida que pretende adoptarse. Se trata de un procedimiento que otorga a los interesados la garantía de manifestarse de forma previa al dictado de una providencia que puede afectar sus derechos.

Las audiencias públicas se realizaron en un contexto de fuerte tensión política y de intereses opuestos dando lugar a una mayor asimetría entre los actores sociales de la localidad de Centenario.

En este caso, los pequeños productores se auto convocaron a nivel local y regional para participar de la audiencia pública dispuesta para el tratamiento de una ordenanza del municipio de Colonia Centenario que promovía desafectar 811 hectáreas de exclusivo



uso rural, y destinarlo a un corredor de servicios turísticos, comerciales y de negocios inmobiliarios a la vera de la multitrocha, ruta provincial N° 7. Es así, que en el año 2012 esa normativa local

" (...) tuvo una primera lectura en junio de ese año y se llevó con polémica -por las férreas posturas antagónicas e insultos subidos de tono al finalizar- la audiencia pública que exige la Carta Orgánica municipal para hacer un cambio drástico en la disposición del uso de una importante porción de la zona productiva de esta localidad" (Diario Río Negro 25/07/2012).

Al fuerte y duro debate de posiciones antagónicas y a favor de la medida en el interior del recinto del Consejo Deliberante se le sumó, en paralelo, una masiva e intensa manifestación de chacareros que se apostaron con sus maquinarias viejas rodeando la manzana en la que se ubica el Consejo Deliberante de esa ciudad. Las filas de tractores y vehículos cubrían calles principales, adyacentes, accesos secundarios y la ruta provincial N° 7 en la que se ubica el conflicto de intereses por el uso del suelo: uso agrícola versus uso turístico-recreativo, versus uso inmobiliario, versus exploración petrolífera.

La postura de los oradores en representación de los pequeños y medianos productores estuvo cargada de argumentos y voces en contra de la urbanización de la zona de chacras que se pretendía llevar adelante, por lo que diputados provinciales que presenciaron la acalorada audiencia decidieron *"ingresar a la Cámara un proyecto de declaración para "instar al municipio local a que revise la medida"* (diputado provincial, 2012).

No obstante, evaluaron a la audiencia como "interesante", donde en un tema tan sensible se pueda manifestar toda la comunidad.

"Nos quedó en claro que todos coincidieron en preservar las áreas cultivables y con infraestructura para la producción, (...) el proyecto mereció un debate y apunta a que se blanquee la situación actual para se preserve la otra zona" (diputado provincial opositor).

Destacamos las siguientes declaraciones:

"Defendemos nuestras chacras desde la sostenibilidad de las personas y la naturaleza. Pues para nosotras comprende una recuperación del reconocimiento de que la naturaleza es el soporte de nuestras vidas y subsistencias, es la fuente primaria del sustento" (productora y docente de la localidad)



“Sostener la naturaleza implica mantener la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza” (productora tradicional, chacra heredada de abuelos y padres).

“La dimensión sustentable de la agricultura permite la prosperidad de la “economía de la gente” o economía de sustento en la que se encuentran inmersas las necesidades de subsistencia y nutrición. La economía de la gente incluye los diversos costos y beneficios tanto materiales como financieros que nuestras comunidades agrícolas debieran obtener de la agricultura” (productora y licenciada en turismo).

Los argumentos en defensa del área productiva que llevaban los productores familiares en su conjunto, fueron contundentes, quienes,

“históricamente sostienen una resistencia a la urbanización en las chacras y advierten - en una solicitada publicada en este mismo soporte gráfico- que la actual administración municipal se había comprometido a no invadir el sector productivo” (Diario Río Negro, 11/03/2009).

Ante este contexto, se infiere que el papel del pequeño productor familiar adquiere una mayor relevancia social y que sus discursos -ante procesos de concentración y transnacionalización materializados en el surgimiento de empresas inversoras globalizadas que impactan en el mercado de trabajo regional-, comienzan a ser considerados por los municipios locales por sentirse forzados para su “legitimación política a generar políticas compensatorias que hasta ahora no alcanzan a superar su carácter mitigador” (Bendini, Steimbregger; 2003).

Se trata de espacios agrarios creados por la confluencia de intereses inmobiliarios, empresariales, políticos que buscan llevar la modernidad a zonas agrícolas no tradicionales como nuevos mecanismos de acumulación,

“es el lugar en donde se desarrollan las estrategias del poder. Por el hecho de que toda acción social requiere un soporte físico- el espacio-; conocer y dominar el espacio es importante tanto para quienes quieren mantener su dominio, como para quienes quieren modificarlo” (Sanchez, 1991:224 en Bendini, Steimbregger y Radonich, 2003: 36).

Los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en Plaza de Mayo

En relación a otras formas de protestas por parte de los productores regionales, es la reciente movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde tuvo lugar el “frutazo” en el simbólico escenario de Plaza de Mayo, con numerosas repercusiones en medios nacionales y regionales.



“Bajo el lema ‘por la rentabilidad de los productores primarios’ regalamos a modo de protesta más de 20.000 kilos de peras y manzanas, en reclamo de promesas de ayuda incumplidas. El gobierno nacional debe cumplir con lo que prometió hace ya tiempo... dar un marco de rentabilidad para la actividad” (secretario de la Federación de Productores en Diario Río Negro 23/04/2019).

Con estas medidas lograron timbrar la atención de los habitantes de la localidad y del gran cordón de Buenos Aires quienes acudieron a recibir gratis kilos de frutas de pepita. En el intercambio con cada ciudadano los chacareros contaron y explicaron las razones por las que llevaban adelante esas estrategias de resistencia. Los productores consideran que fue un esfuerzo “cara a cara” exitoso al estimar que los relatos, acerca de las dificultades y obstáculos que tienen para llevar adelante sus producciones, resonaron en los habitantes de la ciudad más grande de Argentina.

“Fue un esfuerzo enorme. Una decisión que nos llevó mucho tiempo en reuniones, en gestionar los micros, en organizar el transporte de las peras y manzanas, en respetar los acuerdos y condiciones que se discutieron entre los productores/as que participamos en las asambleas” (comisión directiva de productores de fruta de la región).

Con las medidas del “frutazo” buscaron llamar la atención del gobierno nacional ante la crisis que está atravesando la actividad. Consideran que hay falta de visibilidad del sector a nivel nacional desde hace mucho tiempo, *“por ello realizamos un frutazo, para visibilizar la dura situación económica que atravesamos”* (presidente de la Federación de Productores del Alto Valle), manifiesta el funcionario ante una economía regional en descomposición.

Los productores del Valle reclaman al gobierno el *“pago de un aporte no reintegrable de \$ 1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha, dado que la rentabilidad se ve afectada ante la falta de un precio. Otro de los pedidos es la creación de un Plan Sanitario con asistencia por 10 años”* (www.perfil.com).

También exigen la postergación del cobro de créditos tomados oportunamente y políticas que permitan dar sustentabilidad a una actividad que todavía no encontró su piso en esta crisis.

La situación para el productor primario es crítica, aun así siguen implementando estrategias productivas para la persistencia en el sistema. Registros periodísticos dan cuenta de esta realidad, *“de los más de 5.000 chacareros que existían en la década de*



los 90 hoy solo sobreviven, con una buena producción, algo menos de 1.000 productores y no se encuentran integrados" (Lojo, 2019 en Diario Río Negro).

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, los protagonistas del reclamo, pide *"una política de regulación que garantice una distribución justa de las ganancias"* y *"plantean al Gobierno nacional que cree un programa de comercialización directa, del productor al consumidor"*.

Los productores del Valle de la Norpatagonia señalaron tres puntos de la cadena de valor de las manzanas y las peras:

- a) Un kilo de manzanas cuesta 70 pesos en la verdulería y tiene un costo de producción de 11 pesos con 18 centavos. Mientras, el productor percibe menos: 6 pesos con 30 centavos por kilo.
- b) Por un kilo de peras el consumidor paga 50 pesos. Su costo de producción es de 11 pesos con 18 centavos, pero el productor sólo percibe 5 pesos con 18 centavos. Hace más de diez años que venimos trabajando por debajo de los costos.

En los mejores de los casos se estaba pagando por kilo de fruta de pepita aproximadamente US\$ 0,15, cuando el costo de producción está en US\$ 0,28 o US\$ 0,32". En valores de cambio actuales del \$ 60/ 1 US\$ se corresponden a \$ 9 por kg de fruta versus \$ 16,80 o 19,20 de costo de producción por cada kilo de peras y manzanas producido. *"Esta es la temporada con mayor distancia que se recuerde entre el costo de producción y precio de venta"*, según la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

- c) "un sueldo del sector es de 19 mil pesos pero con las cargas impositivas hacen que el empleador tenga un costo mayor". Por otro lado, la legislación actual "lleva a que la actividad tenga mucha informalidad".

Los productores de manzanas y peras de Río Negro y Neuquén denuncian que si bien la crisis de producción de frutas de pepita "lleva 12 años" es agravada por la gestión del gobierno actual,

"De un lado, tenemos cargas impositivas muy altas de parte del Estado; del otro, la distorsión en la comercialización es enorme. Nos están llevando a la desaparición, hace doce años éramos 10 mil productores de manzanas y peras y hoy quedamos 1700."



Porque mientras nos fundíamos, la producción se concentró con la entrada de empresas multinacionales, que compraron grandes extensiones de tierra, aunque también ellas están trabajando al mínimo, porque los números no dan para ninguno" (Diario Página 12, 23/04/2019).

Con esta fuerte manifestación de los productores a las puertas de Casa Rosada, una vez más los Estados nacional y provincial, quienes debieran ser sus aliados estratégicos, no escuchan sus reclamos y los abandonan. Si bien los productores esperaban poder conseguir el apoyo de senadores y diputados nacionales, estuvo más pendiente el público que los funcionarios del Gobierno. La manifestación de reclamo, también se trasladó al Congreso y al Ministerio de Producción y Trabajo: *"nunca nos reciben, no quieren discutir los problemas que tenemos. Cuando dijimos que íbamos a hacer el frutazo se enojaron, y esa fue la última instancia que agotamos"* (presidente Federación de productores, 2019).

Fundamentalmente, el "frutazo" fue en protesta de lo que denominan 'una descomposición de la industria alimenticia regional', porque *"en las chacras se cobra menos de lo que se invierte"*, alertaban los pequeños productores en los medios de prensa.

El propósito fue *"visibilizar a todo el país la grave situación que atraviesan los pocos productores frutícolas que aún resisten en el Alto Valle"*. En las últimas dos décadas las políticas nacionales fueron de total inacción: apostaron a que el tiempo acomode las cosas. A la vez, en ese mismo período los gobiernos anclaron el dólar para frenar la inercia inflacionaria provocando un retraso cambiario que eliminó cualquier posibilidad de competir en el exterior. En este contexto, el eslabón más débil del sistema, los productores independientes, fueron obligados a absorber la mayor parte del costo de las malas políticas económicas.

Conclusiones

El problema del "acceso a los recursos" continúa en ascenso y puja en la actualidad con entidades extranjeras extractivistas, sobre todo en la característica de explotación de la mano de obra, afectando las condiciones de vida de los territorios.

Finalmente, los medios de prensa, nacionales y regionales denuncia:

"Veinte años atrás, en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el 80% de la producción era forjada en manos de 9000 hombres y mujeres que, lentamente, fueron acorralados"



por multinacionales como Expofrut y Moño Azul. Hoy el 50% de la tierra está en manos de 32 empresas que concentran cada vez más tierra y determinan el negocio y definen los precios.

Mientras tanto 1800 personas con 10 ó 15 hectáreas organizadas en la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, continúan resistiendo al avance del capital en territorio de la Patagonia norte.

Ante este fenómeno de acompasada pero progresiva desagrarización, nos encontramos ante

“sujetos dinámicos que han experimentado numerosas y permanentes transformaciones en sus niveles tecnológicos, en los modos de organizar sus explotaciones y en el tipo de organización familiar. Su carácter dinámico ha sido resaltado por la historiografía (Flichman, 1977; Sabato, 1989; Barsky y Gelman, 2001). Esos chacareros son los mismos que hoy luchan por sostener su condición, lo cual implica entre otras cosas adaptaciones permanentes, (...) con suertes diversas, resultados heterogéneos y tensiones múltiples” (Muzlera, 2009: 138).

La resistencia de los productores familiares adopta la forma de estrategias productivas, demandas sectoriales y acciones directas en diversos contextos de alianzas tácticas.

Notas

¹ Para comprender el fenómeno de protestas, el autor, se remonta a actores y hechos previos a la década del '90 como el Choconazo, las Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle, el movimiento de desocupados, pasando por el Cutralcazo, la huelga de ATEN de 1999, la experiencia de Zanón; y las *acciones colectivas de los pequeños y medianos productores en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén*.

² Tuvieron lugar entre 1993 y 1994 varios movimientos de protesta: salida de vehículos, camionetas, tractores, autoelevadores, incendios intencionales de bins, toma de la sede de la Subsecretaría de Fruticultura, corte de rutas, arrojado de fruta en las calles, marchas, con amplia participación de los productores-chacareros acompañados de sectores de sectores de la estructura agrario industrial. Los elementos detonantes al conflicto son: la privatización de los servicios de riego y la llamada “guerra de frutas” por ingreso de manzanas chilenas al mercado argentino (Bendini y Pescio, 1997 en Bendini y Tsakoumagkos, 2003: 46).



³ Entre las medidas del reclamo, en ese año, se encuentra el precio sostén de \$ 0,30 centavos por kilo de fruta. A modo de protesta los chacareros vendían en las rutas sus manzanas a ese precio.

Referencias bibliográficas

Aiziczon, F. (2012). *La construcción de una cultura política de protesta en Neuquén durante la década de los '90*. Tesis de doctorado en historia. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades.

Bendini, Mónica. (2014). Ampliación de fronteras agrícolas en Argentina: Interrelaciones entre el capital concentrado y la producción familiar. *Revista ALASRU. Análisis Latinoamericano del Medio Rural*. Nueva Época N° 10. Universidad de Chapingo.

Diario La Mañana del Neuquén. 14 de enero de 2009. Sección Regional. Disponible en <https://www.lmneuquen.com/una-audiencia-publica-sera-clave-definir-un-loteo-chacras-centenario-n15831>

Diario Río Negro, 11 de marzo de 2009. Edición impresa. Sección Municipales, pp18. Disponible en <http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/03/11/1236739221135.php>

Diario Río Negro. Disponible en <https://bit.ly/2IAgWx6>

Diario Página 12. Disponible en <https://bit.ly/3798n6x>

Muzlera, José. (2009) Transformaciones, continuidades y tensiones en el mundo chacarero. La herencia en la pampa gringa. En Gras, Carla y Hernández, Valeria (coordinadoras) *La Argentina rural De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Editorial Biblos Sociedad.

Otras fuentes consultadas

Diario Perfil. Disponible en

<https://www.perfil.com/noticias/sociedad/frutazo-plaza-mayo-regalan-30000-kilos-frutas-para-protestar-crisis-argentina.phtml>

<http://supercampo.perfil.com/2019/04/fruticultores-del-alto-valle-de-rio-negro-hacen-un-nuevo-frutazo/>



Miradas de Gênero: A participação das mulheres no movimento sindical rural de Sergipe/Brasil

Magaly Nunes de Góis
Márcia Santana Tavares

Resumo

Desde os anos 1960, tem se intensificado o surgimento de lutas, resistências e mobilizações protagonizadas por novos sujeitos sociais, que inauguram bandeiras de luta, estratégias e articulações no processo de organização da classe trabalhadora. Os movimentos de mulheres do campo contestam a naturalização das diferenças entre os homens e as mulheres, tanto no público como no privado, que reproduzem desigualdades de gênero e as afastam das lutas e movimentos sindicais ou as inserem em funções de menor prestígio e poder. A Marcha das Margaridas constitui uma ação estratégica das mulheres do campo e da floresta, sob a coordenação do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, para que as mulheres sejam vistas como trabalhadoras e lideranças capazes de participar da gestão dos sindicatos e tenham suas demandas reconhecidas. Nosso objetivo é refletir sobre a participação das mulheres no movimento sindical rural, a partir de uma perspectiva de gênero, apontando avanços, tensões e perspectivas de mulheres trabalhadoras rurais, no cenário brasileiro contemporâneo, que sinaliza para retrocesso de direitos conquistados e repressão às lutas e movimentos sociais. Como percurso metodológico, realizamos revisão de literatura, pesquisa documental nos arquivos das entidades sindicais rurais, entrevistas com mulheres que exercem ou exerceram posições de liderança nos sindicatos e na Marcha das Margaridas. Os resultados apontam um avanço da participação das mulheres no movimento sindical, materializado por presença destas na gestão dos sindicatos, formações e material didático- pedagógico sobre gênero e criação de coordenação de mulheres nos sindicatos, na Federação e na Confederação Nacional de Trabalhadoras Rurais.

Palavras-chave

Movimento de mulheres; marcha das margaridas; movimento sindical; gênero; políticas públicas.

Organização da plantação - introdução

A participação das mulheres rurais nos movimentos sociais e sindicais do campo e suas lutas contra a naturalização das diferenças entre homens e mulheres, tanto no público



como no privado, que reproduzem desigualdades de gênero e as afastam das lutas e movimentos sindicais ou as inserem em funções de menor prestígio e poder e, posteriormente, pela construção de um mundo com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e sem violência constituem o solo de nosso plantio. Refletir sobre a participação das mulheres no movimento sindical rural, a partir de uma perspectiva de gênero e apontar avanços, tensões e perspectivas de mulheres trabalhadoras rurais, no cenário brasileiro contemporâneo, que sinaliza para retrocesso de direitos conquistados e repressão às lutas e movimentos sociais e sindicais são, ao mesmo tempo, as sementes plantadas e nossas intencionalidades.

Para semear o solo e as sementes e colher os frutos, utilizamos os seguintes tratamentos culturais, denominados no mundo acadêmico de percurso metodológico: revisão de literatura, pesquisa documental nos arquivos das entidades sindicais rurais do Brasil – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) - e de Sergipe – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE) e Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) - e, entrevistas com quatro mulheres que exercem ou exerceram posições de liderança no movimento sindical e na Marcha das Margaridas.

Com vistas a apresentarmos os resultados do nosso plantio – a colheita e os frutos -, adotamos os seguintes passos: 1) solo, sementes - movimento social, movimento sindical e participação das mulheres; 2) plantação, colheita, frutos - as mulheres no movimento sindical em Sergipe; 3) últimos frutos, novas sementes – breves considerações e por fim, a adubação – as referências bibliográficas e as entrevistas com as mulheres protagonistas das lutas e do movimento sindical rural.

Solo, sementes - movimento social, movimento sindical e participação das mulheres

Os movimentos sociais e sindicais constituem o solo e as sementes que geram e produzem os movimentos de mulheres urbanas e rurais, a exemplo do: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR-NE), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Marcha Mundial de Mulheres (MMM), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), Mulheres Catadoras de Mangaba, Mulheres Pescadoras e Marisqueiras, Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), Marcha das Vadias e Marcha das Margaridas.



Estes se configuram como uma dinâmica gerada pela classe trabalhadora que se orienta para defesa de interesses específicos, cuja ação se dirige para o questionamento das estruturas de dominação e de exploração inerentes ao modo de produção, ao Estado e à sociedade capitalista, bem como para a transformação parcial ou total das condições econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais vigentes. Eles expressam as tensões e a correlação de forças entre as classes e as frações de classe, cuja luta é construída por meio de “[...] formação política, organização popular e mobilização de grupos sociais que reivindicam direitos que lhes foram negados, ela origina e mantém vivo os direitos humanos [...]”. (Táboas, 2018, p.19).

As lutas e movimentos sociais e sindicais por melhores condições de vida e de trabalho no campo incluem em seus bandeiras/repertórios o acesso à terra, água, crédito, assistência técnica e extensão rural, formação/capacitação, alternativas de comercialização, saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, assistência social, previdência social, bem como a construção e implementação de políticas públicas que considerem e assegurem as características, especificidades, conhecimentos e sabedorias dos povos do campo e sejam socialmente referenciadas na realidade de quem produz e se reproduz no campo; elas têm que ser do campo, se fazerem presentes no campo e irem ao encontro das demandas, desejos e sonhos das/os trabalhadoras/es rurais.

O mundo rural é um solo fértil para a produção de movimentos sociais e as mulheres e os homens rurais são as sementes que frutificam e dão sentido aos mesmos. As mulheres geram vidas e lutas não somente em função da exploração de classe, mas, e talvez prioritariamente, pelas condições desiguais e opressão de gênero que vivenciam no cotidiano.

A divisão sexual do trabalho e as desigualdades de gênero nas famílias é um exemplo, as jornadas de trabalho e o tempo dedicado pelas mulheres aos fazeres domésticos espelham exatamente tais desigualdades. A sobrecarga de trabalho cumprida por elas, ao se responsabilizarem por suas famílias e exercerem outras atividades, além das domésticas e de cuidados, é exaustiva e revela a permanência de desigualdades de gênero [...] a desigualdade permeia as relações entre homens e mulheres no nosso país e se reflete na esfera privada (família), como nos espaços públicos (na política, no movimento sindical, nos partidos políticos, no trabalho, etc) [...] (Contag, 2019a, p. 16).



O cotidiano das mulheres, em especial das rurais e pobres, é marcado pela invisibilidade de seu trabalho e da contribuição para “a criação das condições de reprodução da família e, assim, da reprodução da força de trabalho necessária às atividades produtivas propriamente ditas” (Silva & Portella, 2006, p. 134) e, destas representarem 51,6% da população do Brasil (Brasil, 2017). As mulheres rurais desenvolvem além das tarefas reprodutivas - cuidados com a casa e a família -, atividades produtivas ligadas ao plantio, tratos culturais, colheita, cuidados com os animais e produção de alimentos, todas vistas e concebidas como “ajuda” e não como trabalho, “[...] termo que tende a ser entendido como subtração do valor do trabalho realizado nas tarefas domésticas [...]” (Menezes e Almeida, 2013, p. 132), assim como das demais tarefas realizadas pelas mulheres nas cercanias das casas.

Neste sentido, o trabalho no campo é fortemente marcado pela divisão sexual e por relações de trabalho desiguais entre mulheres e homens que são respaldadas por:

leis, pela cultura, por instituições públicas e privadas que silenciam as vozes camponesas, escondem suas histórias, omitem as duras jornadas de trabalho feminino no campo e negam os direitos mais básicos às mulheres camponesas [...] Reproduzindo os valores sociais, culturais e políticos de toda a sociedade brasileira atual, as relações humanas no campo são construídas de maneira a naturalizar a exploração do trabalho feminino, a violência doméstica e familiar e as opressões e discriminações de gênero [...] (Táboas, 2018, p. 81-83).

O movimento de mulheres, solo de construção do presente artigo, é um movimento atravessado por classe, gênero e raça, cujas mulheres estão na condição de protagonistas de uma série de ações sócio-políticas. Um dado interessante e instigante é que apesar da forte presença de mulheres nos movimentos e organizações ainda há pouca visibilidade de suas lutas e atuações. Segundo Vasconcelos e Mota (2016, p. 127-128),

[...] Os movimentos sociais do campo e da cidade, especialmente de mulheres, vêm tentando construir e reconstruir uma história que pouco foi contada. Os movimentos de mulheres em suas lutas, pautam espaços e direitos negados pela sociedade, que, historicamente, afirma que os grandes feitos foram protagonizados por figuras masculinas. Essa condição silencia a participação e a resistência feminina.

Essa invisibilidade é decorrente de múltiplos fatores produzidos pela sociedade e pelo Estado: a histórica exclusão das mulheres do espaço público; confinamento no espaço



privado; ocupação de posição subordinada na família; divisão sexual do trabalho que estabelece papéis e lugares sociais distintos para homens e mulheres: para os homens, o trabalho produtivo e de valor no mercado, para as mulheres, o trabalho improdutivo, teoricamente, não gerador de renda; para as mulheres, o que resulta na submissão destas à lógica e poder masculino; pouco ou nenhum acesso às esferas de poder e às políticas públicas; a persistência do patriarcalismo, dentre outros. (Gois, 2012; Chimini, 2016; Deere, 2004; Hora, 2018).

Apesar da submissão imposta historicamente às mulheres, estas têm questionado tanto as relações na esfera doméstica e familiar, como na esfera pública, mais especificamente no mundo e mercado do trabalho, em uma constante busca por respeito, reconhecimento, visibilidade, direitos, condições de vida, fim da violência, liberdade e autonomia.

Quando a gente percebeu que nós mulheres somos sujeitos de direito do campo, a gente também percebeu a necessidade de buscar e viabilizar condição de viver. A gente lutou para conquistar o crédito no Pronaf Mulher, que passa a ser uma política pública por uma pressão muito forte dos movimentos camponeses [...] A gente luta também por acesso à água porque a gente sabe que o gerenciamento da água do quintal da casa é das mulheres na produção de alimentos saudáveis. [...] A gente lutou muito na Marcha das Margaridas por uma política integral da Saúde da mulher, que vai desde a sua mente até os outros membros do corpo. E, sobretudo, o enfrentamento à violência contra a mulher no campo, nos lares familiares. [...] Essa questão que perpassa, sobretudo, pelo empoderamento financeiro e econômico da mulher... (Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais).

Com a intencionalidade de problematizar, enfrentar e superar a desigualdade de gênero, as mulheres que produzem e reproduzem suas vidas no campo, iniciaram na década de 1980 uma caminhada, que teve como principais passos: inclusão nas diretorias dos sindicatos rurais; ampliação da participação nas lutas empreendidas pelos sindicatos e movimentos sociais populares; inserção da discussão sobre a desigualdade de gênero na pauta do I Encontro Nacional dos Assentados, realizado em 1986, momento em que se discutiu e aprovou a resolução *Posicionamento sobre a questão da mulher assentada*, “apresentada como um primeiro passo na direção de tornar orgânicos os esforços para a construção das transformações necessárias para a dissolução das desigualdades de gênero que se reproduziam no interior do MST” (Gohn, 2003a, p. 121).



A organização e luta dos movimentos de mulheres para romper com a invisibilidade, a participação nos espaços decisórios e sua contribuição nos processos produtivos geradores da riqueza não são novas, uma vez que “pesquisas têm destacado o papel das mulheres desde sociedades antigas e primitivas” (Gohn, 2008, p. 136) e, particularmente desde o século XVIII as mulheres têm se engajado na luta igualdade de direitos e de oportunidades e pela construção de outra organização de sociedade e Estado para além do capitalismo.

Nessas lutas as mulheres rurais também criaram movimentos, coletivos, comissões e coordenações de âmbito nacional, fomentaram a publicação pelo MST de resoluções e coletâneas sobre a temática de gênero, além de organizarem encontros, que resultaram na criação da Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ANMTR). (Táboas, 2018; Deere, 2004; Hora, 2018). Nesse período, segundo Táboas (2018), também foram promovidos cursos de formação política/ideológica, formulados materiais pedagógicos como cartilhas, cartazes, panfletos e folhetos centrados nas discussões de gênero e classe.

Nos anos 2000, as mulheres rurais criaram Coletivos/Coordenações Estaduais de Mulheres nas Federações Estaduais de Trabalhadores Rurais, a Rede de Mulheres Trabalhadoras do Nordeste, o Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco, setor de Gênero no MST e no MPA, secretaria de Mulheres na Contag e na Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Brasil (Contraf) e a Marcha das Margaridas. “Ao ingressar nos movimentos, as mulheres rurais criam possibilidades de se afirmarem como portadoras de um saber-poder no campo da política que lhes proporcione também repensar seu cotidiano”. (Sales, 2007, p. 438).

Apesar de estas representarem 48% da população rural do Brasil, 36% da população economicamente ativa do mercado rural e serem responsáveis pela produção de 30% dos alimentos básicos do País, elas se envolvem mais nos afazeres domésticos e nos cuidados com as pessoas – atividades denominadas de improdutivas e não geradoras de renda – ocupando 18,1% enquanto os homens dedicam 10,5% das horas semanais nessas atividades; quando desenvolvem atividades produtivas têm rendimentos mensais inferiores aos homens – mulheres recebem em média R\$ 1.764,00 e homens R\$ 2.306,00, portanto, as mulheres recebem em média 23,51% a menos do que os homens; ocupam menos cargos gerenciais e de maior poder do que os homens: mulheres 39,1% e homens 60,9% e tem baixa representação política, considerando que



apenas 11,3% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres: 16% no Senado e 10,5% na Câmara, mesmo em tempo de cotas mínimas para participação de mulheres (Brasil, 2018).

Quando o assunto é participação política as mulheres sofrem mais violência e desrespeito. Muitas sofrem assédio, desqualificação e até violência física, principalmente quando começam a exercer um cargo com mais poder ou despontar como lideranças, seja nos movimentos mistos, sindicatos, partidos ou no parlamento [...] (Contag, 2019b, p. 13).

Nesta caminhada as mulheres organizam marchas, que se constituem em grandes manifestações públicas com o objetivo de produzir “visibilidade através da mídia e efeitos simbólicos para os próprios manifestantes (no sentido político pedagógico) e para a sociedade em geral, como uma forma de pressão política das mais expressivas no espaço público contemporâneo” (Scherrer-Warren, 2006, p. 112), a exemplo da Marcha das Margaridas.

A Marcha das Margaridas é uma ação coletiva sócio-política e uma atividade em adesão à Marcha Mundial de Mulheres - mobilização organizada em todo o mundo contra os modelos políticos e econômicos que não têm se preocupado com a igualdade de direitos e equidade de gênero - de caráter formativo, de denúncia e pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação política com o Estado, organizada pelas mulheres do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR), com o lema *Mulheres Contra a Fome, Pobreza e Violência Sexista*. É coordenada pela Contag com intensa participação de um conjunto de movimentos sociais e ONGs rurais e urbanas de mulheres e/ou com coordenações e coletivos de mulheres nacionais e internacionais. Desde a primeira edição, a Marcha das Margaridas - já foram realizadas seis edições da Marcha nos anos 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019 - traz reivindicações das mulheres do campo, das florestas e das águas no tocante à “[...] reforma agrária, defesa das terras indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais, luta por soberania alimentar, pelo fim da violência contra as mulheres e por autonomia econômica”. (SOF, 2015, p. 1).

A realização das Marchas das Margaridas possibilita às mulheres do campo: a) participação na elaboração e negociação coletivas de reivindicações específicas das mulheres e de questões de interesse geral da categoria trabalhadora rural; b) ampliação da presença nas direções da confederação, federações estaduais e STTR; c) assumirem posições contundentes no enfrentamento dos grandes desafios colocados



para a construção de um Brasil verdadeiramente soberano, justo e solidário, com garantia dos direitos e cidadania plena das mulheres do campo, das florestas e das águas, de todas as raças, etnias e geração (idade).

Plantação, colheita, frutos - as mulheres no movimento sindical em Sergipe

Uma das particularidades da formação sociohistórica do Brasil é o protagonismo dos movimentos sociais e sindicais. Como nascemos rurais e permanecemos com uma área rural extensa e com um percentual significativo de municípios rurais (60,4%), cuja população corresponde a 17% da população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio realizada em 2017 (BRASIL, 2017), os movimentos sociais e sindicais do campo continuam presentes e com forte capacidade de luta, de enfrentamento e de construção de um outro projeto de campo, de sociedade e de Estado. (Gohn, 2003b; Gois, 2012).

Scherer-Warren (1993) e Gohn (2003b) ao analisarem os movimentos sociais no campo ocorridos no século XX - décadas de 40, 50 e 60 - identificaram lutas protagonizadas por posseiros/as e camponeses/as. Lutas que resultaram na organização do movimento sindical rural e no surgimento da Contag. Nos anos de 1970 e 1980 surgem novos movimentos, a exemplo do Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), MST, Movimentos de Mulheres Agricultoras, Movimento Indígena e dos Movimentos das/os Seringueiras/os. Também nesses períodos se intensificam as lutas das mulheres e, nesta caminhada, “a mulher assumiu-se como militante nos movimentos, partidos e sindicatos e deixou os departamentos femininos como capítulos de uma história do passado” (Gohn, 2008, p. 141). Departamentos criados nos anos 1950, 1960 e 1970 nas estruturas dos movimentos e sindicatos comandados, hegemonicamente por homens.

No âmbito do movimento sindical do campo a inserção das mulheres ocorre a partir dos anos 60 e 70 do século XX com a finalidade de reconhecimento destas como trabalhadoras, materializado pelo acesso à terra com a titularidade em nome das mulheres e, aos benefícios e serviços da previdência social, mas também o direito de se sindicalizar. (Lima, 2006).

A inserção das mulheres no movimento sindical surge na década de 60 para 70 sobre uma reivindicação das mulheres em lutar pela terra [...] Logo no início a luta das mulheres era pelo direito previdenciário, mas surgiu principalmente pelo direito à terra, o ter condição de se manter no campo com dignidade, e produzir o alimento. Tanto é que na



história foram as mulheres que descobriram a agricultura familiar, cuidando dos afazeres domésticos, com o resto dos alimentos jogava sementes no quintal da casa e lá a gente descobriu que a semente germinava que aquilo era forma da gente reproduzir o alimento do dia-a-dia. Com a ampliação das conquistas dentro do movimento sindical - e aí, voltado na luta das mulheres para se garantir na Constituição Federal e seremos reconhecidas como profissionais trabalhadoras - foi a luta pelo direito a aposentadoria rural. De lá para cá a gente tem trazido a vida das mulheres e o contexto social como pautas que o movimento sindical defende. A gente começou com a luta pela terra foi até o direito previdenciário, mas a gente percebeu que não são só essas faltas que dá conta e que as mulheres buscam em seu empoderamento e que saíam das amarras sob o jugo do machismo. (Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais).

A luta das mulheres rurais tem gerado alguns frutos, para além da sindicalização, pois muitas mulheres estão ocupando cargos de direção dentro da Contag – seis dos 12 cargos (Contag, 2019c) -, das federações estaduais, dos polos sindicais e dos sindicatos. A ampliação da presença das mulheres nas gestões das entidades sindicais rurais deve-se à conquista da paridade de gênero nos espaços deliberativos a partir dos anos 1990. A paridade de gênero na política sindical é concebida pelas mulheres rurais como um instrumento político e jurídico que determina que:

Mulheres e homens devem ter as mesmas condições de participar politicamente, de ocupar espaços de poder [...] significa possibilitar que homens e mulheres tenham oportunidade de aprender, crescer e se formar nos estudos e debates políticos, nas instâncias de decisão do movimento sindical [...] (Contag, 2019a, p. 34).

No caso de Sergipe, campo empírico de nossa pesquisa, dos 12 cargos que compõem a atual diretoria executiva da federação estadual, sete são ocupados por mulheres, correspondendo a 58,3% e 3 dos 6 membros do conselho fiscal são mulheres; 41 (56,9%) dos 72 STTR existentes em Sergipe são presididos por mulheres e 45 (62,5%) contam com mulheres na função de tesoureira, cargos de grande poder de influência e de decisão historicamente ocupados por homens. (Fetase, 2019a). Os cinco polos sindicais contam com presença majoritária de mulheres em suas coordenações compostas por três pessoas: Polos Sindicais Baixo São Francisco, Cotinguiba e Sertão são coordenados exclusivamente por mulheres; Polos Centro Sul e Sul têm duas mulheres em suas coordenações. (Fetase, 2019b).

Essa não é a realidade de todas os estados, mas consequência da coragem das mulheres sergipanos de fazerem valer a obrigatoriedade da presença da mulher nas



direções dos sindicatos, as denominadas cotas, conquistadas arduamente pelas mulheres, e do exemplo de outras mulheres que passaram pelas diretorias da federação e de alguns sindicatos.

A organização das mulheres ganhou força na época até a gente chegar num congresso mais adiante com a cota mínima de mulheres nas direções dos sindicatos e das federações e, em consequência, também na própria Contag. De lá para cá a gente conquistou a paridade de gênero. Hoje para um processo eleitoral de sindicato ser validado a gente precisa garantir que 50% do gênero feminino esteja como candidatas na chapa. Aqui em Sergipe é diferente. A gente conseguiu esse diferencial por conta do processo histórico. Hoje 80% das direções dos sindicatos e na federação a gente vê isso. 80% estão [sic] mulheres: presidentes, tesoureiras, secretárias-gerais, secretárias de juventude e o próprio cargo de coordenadora de mulheres. (Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais).

Importante ressaltar que as mulheres também continuam ocupando as secretárias executivas – 64 (88%) dos sindicatos -, cargo historicamente ocupado pelas mulheres - . (Fetase, 2019a) e que a maior presença de mulheres nas secretarias executivas é ainda decorrente da concepção de que as atividades inerentes a este cargo são burocráticas e mais afeitas às mulheres – atendimento a sindicalizadas/os, acolhimento, orientação, organização do espaço para reunião e formação, elaboração de editais, atas e ofícios – e, principalmente, por não ser um cargo de comando.

A inserção das mulheres no movimento sindical, seja na condição de associadas ou de ocupantes de cargos de diretoria, representa uma grande conquista por possibilitar: acesso à informação, conhecimento e formação política; ouvir outras mulheres e ser ouvidas por elas; incentivar as mulheres a se engajarem no movimento sindical; ampliação da visão de mundo, incluindo o cotidiano familiar; participar da construção de políticas públicas e; a inserção na luta por visibilidade, direitos, autonomia e liberdade.

É a liberdade de você pensar e dizer o que pensa em alguns espaços e ajudar alguém. Você pensando em tanta liberdade de pensar, de ajudar e orientar [...] Todas as mulheres que eu conversei enquanto coordenadora de mulheres, enquanto diretora da terceira idade quem mais se abria com a gente eram as mulheres [...] Pelo menos dar coragem. Tem mulheres desencorajadas. A gente encontra mulheres vivas-mortas. A gente sabe que é viva, mas por dentro mortas por que não têm como viver por dentro. Você se acha que não vale nada. Primeiro por ser mulher, porque já traz isso impregnado... E quando você dá uma condição de ela enxergar, se ela sentir que é capaz de alguma coisa, isso



não tem preço. (Ex-presidenta da Fetase).

Na caminhada de luta para inserção no movimento sindical as mulheres enfrentam desafios no âmbito da esfera privada – a família - e da esfera pública

- as entidades sindicais-. Todos os desafios têm intrínseca relação com o machismo e com a desigualdade de gênero. A resistência dos companheiros/maridos configura o maior desafio na esfera privada, conforme fala:

A primeira questão é que os companheiros não entendem que vida é essa porque o movimento social é doação [...] Então você começa a aparecer, você cria um nome, você não é só mais a mulher de fulano: você passa a ser a pessoa do sindicato e ele é quem passa a ser o marido de fulana de tal [...] O que incomoda mais não é a independência financeira, porque muitas vezes a gente não ganha tanto, mas a independência de você dizer assim: 'eu sou mais eu e eu posso viver. Sou sua esposa; não sua propriedade'. (Presidenta do STTR de Nossa Senhora de Aparecida).

Na esfera pública os maiores desafios são a aceitação da presença da mulher nas diretorias, em especial, quando estas ocupam cargos diretivos, portanto, com poder de decisão, e a visão de que as mulheres estão tomando o espaço dos homens, não têm competência e estão nos cargos, única e exclusivamente, em função da exigência da paridade sindical, conquistada pela adoção do sistema de cotas de gênero e o diálogo com todas as mulheres, seja do campo ou da cidade, e com a sociedade.

[...] O nosso grande desafio é dialogar com a sociedade [...] É mulher? Pode ser rica, pobre, negra, quilombola, indígena, branca: ela sofre na sua condição de ser mulher. Então esse sentimento de buscar as mulheres para se libertarem dessa condição, superar essa situação, perpassa pela organização política [...] É dialogar sobre o que a gente tinha, sobre o que a gente tem, sobre o que a gente quer. É reconstruir um Brasil com soberania com democracia sem violência, que promova a oportunidade das mulheres, mas também que reconheça que não é só promover oportunidade, mas a gente precisa estar nos cargos de decisão e de poder, desde a esfera privada até a esfera pública. (Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais).

Os desafios e os limites enfrentados pelas mulheres rurais para se inserirem e se manterem no movimento sindical e nas demais lutas e movimentos sociais não as impedem de enxergar e de colher alguns frutos que contribuem para a resistência e permanência na luta. Conforme falas das presidentas dos sindicatos de Feira Nova e de



Nossa Senhora de Aparecida, respectivamente.

O que eu acho uma grande conquista é o conhecimento. É uma riqueza que ninguém toma. Então para mim poder conhecer mais um pouquinho da nossa história e poder fazer aquele trabalho de formiguinha, de transmitir para outras companheiras [...] (Presidenta do STTR de Feira Nova).

Eu digo que a nossa caminhada é exemplo de várias pessoas que me fizeram assim e a gente tem nossa autonomia, nosso respeito, gostar de si próprio, saber que a gente é tão grande. As pessoas dizem que a mulher é o sexo frágil, mas a gente é tão grande, a gente consegue ser mãe, consegue ser mulher, consegue ser militante, tanta coisa ao mesmo tempo e a gente consegue agarrar tudo. A gente tem tempo para tudo e tem hora que não tem tempo para si própria [...] (Presidenta do STTR de Nossa Senhora de Aparecida).

Últimos frutos, novas sementes – breves considerações

A participação das mulheres rurais nos movimentos sociais e no movimento sindical constituiu uma trilha na luta por autonomia econômica, trabalho e renda; políticas públicas universais, estatais, de qualidade e socialmente referenciadas nas realidades dos povos do campo; igualdade; justiça; uma vida livre de violência, sem racismo e sexismo e; por liberdade. Essa participação construída, desconstruída e reconstruída na esfera privada e pública proporcionou a gestação de uma diversidade de frutos e o surgimento de novas sementes que para frutificarem é essencial ultrapassar o limite da intensa resistência das mulheres e do reconhecimento de sua capacidade organizativa.

Para tanto, se faz necessário o envolvimento de toda classe trabalhadora, sem perder de vista o protagonismo das mulheres do campo, das florestas, das águas e das cidades, na construção de uma nova sociedade e de um novo Estado em que:

- Todas expressões e formas de trabalho sejam reconhecidas e valorizadas, processo que exige “[...] em um primeiro momento, compreender como a sobrecarga com o trabalho doméstico e de cuidados resulta em desigualdades entre mulheres e homens [...]” (Contag, 2019d, p. 14) e em seguida, construir e implementar alternativas que contribuam para a superação da divisão sexual do trabalho.
- As mulheres tenham garantia de acesso à terra, à água, as sementes, a assistência técnica social e ambiental e todos os meios necessários a realização de suas atividades produtivas – agricultura, criação de animais,



extrativismo, pesca, bem como o artesanato, englobando produção e comercialização.

- As mulheres tenham acesso a políticas públicas diferenciadas que reconheçam, valorizem, apoiem o desenvolvimento de projetos concebidos por elas e a partir dos desejos e sonhos delas que favoreçam a criação de atividades produtivas individuais e/ou coletivas protagonizadas pelas próprias mulheres.
- As mulheres entendam a força da auto-organização enquanto espaço para a formação das mulheres a partir de suas experiências e aprendizados concretos, de construção coletiva de novos sujeitos políticos e de uma agenda política. Espaço privilegiado para construir e desenvolver ações e atividades que questionem de forma radical e contundente a sociedade capitalista, patriarcal, e na era do “bolsonarismo”, mais machista, mais racista, mais sexista, mais misógina e de forte disseminação do ódio contra as mulheres, as negras, as/os LGBTI, os pobres e a classe trabalhadora, pois como Táboas (2018, p. 42),

O processo de libertação das mulheres das relações de violência, dominação e exploração passa pelo processo de formação de consciência que é articulado pelo tripé formação política, organização popular e luta, e é desenvolvido de forma a envolver as dimensões individual e coletiva. Por fim, que as mulheres rurais continuem com a cabeça – a razão – e o coração – a emoção – na luta para plantar e colher frutos e sementes que fortaleçam os movimentos sociais e sindicais de mulheres que resistem, questionam e enfrentam as desigualdades de classe, gênero e raça inerentes à sociedade e Estado capitalistas e, aprofundadas na era do capitalismo ultraliberal.

Adubação - referências

Bibliográficas

Brasil (2017). *Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 2017*. Brasília: IBGE.

Brasil. (2018). *Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil*. Brasília: IBGE. Recuperado de <https://bit.ly/3nXm9z2>

Chimini, L. (2016). A opressão contra a mulher não é o mundo que a gente quer: enfrentamento a partir do MPA do Rio Grande do Sul. Em: Tavares, J; Costa, J & Fagundes, M. (orgs). *Diversidade produtiva das mulheres do MPA*. São Paulo: Expressão Popular. p.167-172.

Contag. (2019a). Cadernos de debates: desenvolvimento sustentável na perspectiva das mulheres do campo, da floresta e das águas. *Caderno 1 – Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência, por*



democracia com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres. Brasília: Contag/Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras familiares.

Contag. (2019b). Cadernos de debates: desenvolvimento sustentável na perspectiva das mulheres do campo, da floresta e das águas. *Caderno 4 – Por uma vida livre de todas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo, pela autonomia e liberdade das mulheres sobre seu corpo e sua sexualidade.* Brasília: Contag/Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras familiares.

Contag. (2019c). *Quem somos – diretoria.* Recuperado de www.contag.org.br. Em 27 de julho de 2019.

Contag. (2019d). Cadernos de debates: desenvolvimento sustentável na perspectiva das mulheres do campo, da floresta e das águas. *Caderno 3 – Por autonomia econômica, trabalho e renda, por terra, água e agroecologia.* Brasília: Contag/Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras familiares.

Deere, C. D. (2004). Os direitos da mulher á terra e os movimentos sociais rurais na reforma agrária brasileira. *Estudos feministas*, Florianópolis, 12[1]: 360, janeiro-abril, 2004. p. 175-204.

Fetase. (2019a). Arquivo. Aracaju: Fetase.

Fetase. (2019b). *Quem somos - diretoria.* Recuperado de <http://fetase.org.br/>. Em 17 de maio 2019.

Gohn, M. da G. (org). (2003a). *Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores sociais.* Petrópolis, RJ: Vozes.

Gohn, M. da G. (2003b). *História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros.* 3ª ed. São Paulo: Edições Loyola.

Gohn, M. da G. (2008). *Novas teorias dos movimentos sociais.* São Paulo: Edições Loyola.

Gois, M. N. (2012). Marcha das Margaridas: mulheres trabalhadoras rurais construindo igualdade de direitos, políticas públicas e cidadania. *XX Seminário Latino Americano de Escuela de Trabajo Social.* Argentina: ALAEITS, p. 1-12.

Hora, K. E. R. (2018). Ubuntu: eu sou porque nós somos – desafios para a luta das mulheres rurais por políticas públicas pós-golpe 2016. *Okara: Geografia em debate*, v. 12, n.2, p. 434-466. Recuperado de <http://www.okara.ufpb.br>. Em 20 de junho de 2019.

Lima, M. do S. A. (2006). As mulheres no sindicalismo rural. Em Scott, P. & Cordeiro, R. (orgs). *Agricultura familiar e gênero: práticas, movimentos e políticas públicas.* Recife: Ed. Universitária da UFPE. p. 101-122.



Menezes, S. de S. M.; Almeida, M. G. de. (2013). Reorientações produtivas na divisão familiar do trabalho: o papel das mulheres do sertão do São Francisco (Sergipe) na produção de queijo coalho. Em: Neves, D. P. & Medeiros, L. S. (orgs.). *Mulheres camponesas: trabalho produtivo e engajamentos políticos*. Niterói: Alternativa. p. 129-146.

Sales, C. de M. V. *Mulheres rurais: tecendo novas relações e reconhecendo direitos*. Recuperado de <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view>. Em 17 maio 2019.

Scherrer-Warren, I. (1993). *Redes de movimentos sociais*. São Paulo: Edições Loyola.

Scherrer-Warren, I. (2006). Das mobilizações às redes de movimentos sociais.

Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n.1, p. 109-130, jan./abr.

Silva, C. & Portella, Ana P. (2006). Divisão sexual do trabalho em áreas rurais no nordeste brasileiro. Em Scott, P. & Cordeiro, R. (orgs.). *Agricultura familiar e gênero: práticas, movimentos e políticas públicas*. Recife: Ed. Universitária da UFPE. p. 127-144.

SOF. (2015). *Marcha das Margaridas se encerra com novas conquistas e mostra a força das mulheres organizadas*. Recuperado de www.sof.org.br/2015/08/15. Em 24 de maio de 2019.

Táboas, Ísis Menezes. (2018). *É luta! Feminismo camponês popular e enfrentamento a violência*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Vasconcelos, E. B. de & Mota, R. M. (2016). Espaços de resistência feminina no alto sertão sergipano: a experiência de mulheres camponesas da comunidade Garrote do Emiliano em Poço Redondo. Em: Tavares, J; Costa, J & Fagundes, M. (orgs.). *Diversidade produtiva das mulheres do MPA*. São Paulo: Expressão Popular. p. 127-136.

Entrevistas

Maria Aires Oliveira Nascimento – Fetase - Secretária de Mulheres Trabalhadora Rural.

Maria Lúcia Santos Moura – STTR de São Cristovão – secretária de finanças, ex-presidenta da Fetase e da Secretaria Nacional da Terceira Idade da Contag.

Ana Paula Oliveira – STTR de Nossa Senhora de Aparecida – presidenta. Luciana dos Reis Santos – STTR de Feira Nova – presidenta.



Representaciones socioculturales y memoria histórica del ferrocarril en el Distrito de Peralta de Turrialba: Abordaje explicativo en el contexto de la crisis del cierre del ferrocarril desde la década de los noventa al presente

Karen Liseth Orozco Sánchez

Resumen

En esta investigación se pretende discutir cómo las representaciones sociales y la memoria histórica jugaron un papel trascendental dentro de las dinámicas de desarrollo económico, social y cultural de esta comunidad alrededor del ferrocarril que operaba en ese espacio geográfico, que a su vez, radicó en la supervivencia de sus pobladores ante situaciones, hechos y circunstancias que se fueron sumando en los años previos dando como resultado la crisis del sistema ferroviario nacional suscitado en el cese de operaciones ferroviarias en el año 1990, cinco años antes del cierre técnico de operaciones a escala nacional en el año 1995.

Sin embargo, pese a que este medio de transporte se encuentra fuera de servicio, forma parte tanto en la memoria tanto individual como colectiva de los vecinos de Peralta de Turrialba. Es importante señalar que esta investigación es un acercamiento a la población anteriormente descrita en miras de llevar a cabo el proyecto final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Sociología, por cuanto es un avance acerca de esta propuesta de carácter investigativo.

Palabras clave

Representaciones Sociales, memoria histórica, ferrocarril, Peralta de Turrialba, Costa Rica, Crisis ferroviaria.

Fundamentación del problema

El ferrocarril, más allá de ser un común medio de transporte, fue un proveedor económico, cultural y social de esa comunidad, situación en la cual sus pobladores se vieron sumidos en una crisis económica que los llevó a elegir entre dos caminos: abandonar Peralta hasta convertirlo en un pueblo en estado de abandono o amalgamar las fuerzas vivas de cada uno de los miembros de la comunidad para sobrevivir ante esa situación.

Es importante replantear la idea de lo que se entiende como crisis del ferrocarril y que a la postre llevó al cierre técnico. La crisis del sistema ferroviario es producto de la suma



de episodios, momentos históricos y deficitaria administración público-gubernamental en la proyección del ferrocarril a mediano plazo luego de ser heredado por una parte de la empresa privada en el Sector Atlántico aunado a la crisis directa que venía arrastrando el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. La conjunción de los citados factores en macro generó el cierre técnico a nivel nacional en 1995, Peralta había tenido impacto de cierre desde 1990.

La elaboración de esta ponencia se sustenta en dos teorías base, como las siguientes: Teoría de las Representaciones Sociales de Sergei Moscovici y el de la Sociología de la Memoria de Paolo Montesperelli.

Metodología

Reflexión teórica sobre las representaciones sociales

En lo que concierne a la Teoría de la Representaciones Sociales, según Jodelet (1986), señala que:

[...] siempre es la representación de un objeto; tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder de intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto; tiene un carácter simbólico y signifiante; tiene un carácter constructivo: tiene un carácter autónomo y creativo. (p. 478).

De acuerdo con lo anterior, se apoyarán para demostrar que la visión de mundo del ferrocarril en la comunidad de Peralta de Turrialba se presenta en una forma delimitada, que, a su vez, desde una perspectiva sociológica las representaciones sociales no necesariamente tienen que reflejarse a nivel macro.

Reflexión teórica sobre la memoria histórica

Por otra parte, Montesperelli (2004), en su teoría de la sociología de la memoria, explica que la memoria se trata de una definición amplia: “[...] Como el abanico de argumentos que le otorgan una función estratégica: los criterios de plausibilidad, relevancia y clasificación, representaciones del tiempo y espacio, las relaciones que el individuo mantiene con la memoria de los demás miembros del mismo ambiente social” (p. 7).

Además, señala que la memoria cumple con tres funciones, según se considera como objeto, como límite y como recurso. En la primera hace referencia a que permite recodar en cómo realizar funciones básicas que realiza el ser humano, y de no ser por ello, el ser humano pierde toda inhibición por cuanto la supervivencia de la sociedad se vería en grave peligro, y citando a Locke, “sin la memoria nada puede funcionar” (p. 11).



En el segundo, el autor citando a Rampazi, Grande y Jedlowski, hace un señalamiento sobre una perspectiva no determinista sino interaccionista, en donde *“concibe la memoria colectiva como fruto de mediaciones, como punto de cruce e integración de distintas memorias por cuanto el individuo desarrolla un papel activo a través de la relación con los demás”* (p. 76). En el último, Montesperelli, citando a Ricoeur (1956), la memoria se transforma en un instrumento de interpretación y por consiguiente constituye un recurso hermenéutico: todo problema de significado plantea una cuestión hermenéutica. (p. 119).

Metodología

Para desarrollar el tema, se requiere al menos visualizar en primera instancia el enfoque investigativo del mismo, con el fin de determinar las técnicas pertinentes y por ende, realizar los hallazgos, y la validación de la tesis planteada a través de observación documental, aplicación de cuestionarios de historias de vida y demás.

En este caso, se procederá en tres etapas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

- a) En la primera etapa, se ejecutará la delimitación del problema de investigación, formulación de objetivos y revisión documental para argumentar la justificación del tema, antecedentes y marco teórico.
- b) En la segunda etapa, se realizó una visita al sitio de investigación con carácter de análisis previo sobre el contexto tal y como ya se ha tenido un primer acercamiento. Posteriormente se diseña el instrumento acorde con el marco teórico y las primeras experiencias dentro del trabajo de campo.
- c) Y en la tercera etapa se concatenará tanto el desarrollo teórico como el apartado de hallazgos realizados en trabajo de campo, para establecer el cumplimiento de los objetivos de investigación, así como las conclusiones analizadas desde un punto de vista sociológico.

Con base en el último punto, es importante señalar cuales son las técnicas por utilizar para la recolección de los datos requeridos para desarrollar esta investigación, las cuales son las siguientes:

- Observación documental: En este tipo de técnica permitirá elaborar un panorama de corte teórico – analítico previo al trabajo de campo el cual se requiere realizar. La observación de fuentes bibliográficas es fundamental para



la construcción de los objetivos de estudio para la ejecución de este proyecto de carácter investigativo.

- Observación descriptiva: Esta técnica de recolección de datos clave, se utilizará con el fin de descifrar conductas en los pobladores en torno a la cultura ferroviaria, delimitado en el sector poblacional a observar para determinar comportamientos, actitudes y caracteres que permitan describir su dinámica social y cultural.
- Historia de vida: Esto con el fin de aplicar una guía de preguntas a los dirigentes actuales de Peralta y que además tienen una larga trayectoria en participación comunal, así en lo particular, en el contexto del desarrollo histórico del ferrocarril, desde su apogeo hasta su desaparición.
- Trabajo con grupos focales: Se elaboró una guía de trabajo en donde se incursionará preguntas clave para desarrollar la discusión del tema, dirigido al grupo de los miembros de la comunidad, así como dirigentes de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta.

Resultados y discusión

Resultados obtenidos en trabajo de campo

Durante el recorrido por la comunidad de Peralta de Turrialba, se ejecutó dos herramientas de campo las cuales consistieron en las siguientes: Guía de episodios para aplicarlo al grupo focal y el cuestionario bajo el formato “Historia de vida”. El primero era para conocer de primera mano las similitudes y diferencias manifestadas por los y las participantes en el grupo focal con el fin de determinar hasta qué punto la memoria colectiva se desarrolló durante la época ferrocarrilera hasta el presente, así como su vigencia en la actualidad. En el segundo instrumento, se utilizó una guía para desarrollar las historias de vida, con el fin de analizar la vida personal del vecino o vecina de la comunidad en relación con la actividad del ferrocarril y sus memoranzas, lo que recuerda individualmente respecto al ferrocarril desde su percepción hasta la actualidad, es decir su memoria individual. A continuación, estos fueron los resultados obtenidos durante el trabajo de campo.

Análisis general de resultados obtenidos con Grupo focal y entrevistas individuales realizado con los integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta

Se contó con la participación de seis personas de la comunidad, todos y todas miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta para efectos de la aplicación del grupo



focal, así de la participación de Pedro Matarrita, Marielos Brenes y Beatriz Rojas, estos por parte de la entrevista individual.

Dentro de los resultados obtenidos en estos dos instrumentos aplicados, relataron el “Peralta de antaño”: un pueblo que contaba con una población muy numerosa, un teatro, grandes y extensas fincas que eran explotadas tanto para la ganadería de engorde como para la agricultura de subsistencia y de producción para comercio (siembra de caña de azúcar, café cacao y banano principalmente), además del establecimiento de haciendas “Pinto” y “El Seis”, que se dedicaban a la siembra de caña de azúcar como monocultivo y al proceso de la miel de caña por medio de los “trapiches”¹.

Cuando el ferrocarril operaba para esa época, había un próspero movimiento económico, social y cultural. En lo económico dado a la vinculación de hombres, pero principalmente mujeres con las ventas de comidas en los vagones de pasajeros cuando estos hacían parada en las estaciones y apartaderos ubicados en el centro del pueblo; cabe destacar que las comidas que las “Venteras” y que a la fecha los entrevistados las consideran como “comidas tradicionales a la cultura ferrocarrilera” y que dicho sea de paso se convirtió en una representación sociocultural fueron la “Gallina achiotada”, tortillas de maíz, tortas de huevo grandes e incluso productos agrícolas que allí mismo producían como ayotes y elotes.

Una de las personas que los y las participantes asocian con el ferrocarril es el señor Miguel Granados (QepD), Ramona Portuguez y Estela Alfaro eran los venteros más populares y destacados entre las personas que se vinculaban con esta actividad económica derivada alrededor de este medio de transporte. Otras manifestaciones culturales que recuerdan fue el paso de la Imagen del Sagrado Corazón de Jesús que se llevaban a cabo en junio de cada año y que en cada estación que se encontraban en el trayecto de la ruta ferroviaria del Atlántico habían un altar con esa imagen y en el marco de estas celebraciones la empresa administradora del ferrocarril regalaban los tickets para viajar en tren tanto a empleados de la Northern Railway como a los particulares para que fueran a participar de estas actividades religiosas y el pito del tren que anunciaban su llegada, en donde cuentan que los perros y los niños actuaban eufóricos con el sonido de la “pitoreta” aun antes de que el tren llegara a la estación principal de la comunidad².

Una vez que llega el anuncio a los vecinos de la comunidad de Peralta sobre la noticia del cierre técnico del ferrocarril, según audio del conversatorio Oscar Ramos, Presidente



de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta argumenta que llegó un ferrobús identificado con el #28 cargado de Policías y de Jerarcas del INCOFER advirtiéndoles que el siguiente día, dicho servicio se suspendía en forma definitiva, pero a su vez estos funcionarios les prometieron a los dirigentes de la comunidad que en vista de que no existían vías terrestres para el acceso de vehículos, dispondrían al servicio de la comunidad un ferrobús que realizaría recorridos entre Siquirres y Turrialba pasando por Peralta, el cual llegó a presentar problemas mecánicos desencadenando un malestar por parte de los afectados dado a la poca eficiencia de este nuevo medio de transporte³.

Esta situación generó una serie de manifestaciones contra el mismo INCOFER y el Gobierno quienes decretaron el cierre técnico del ferrocarril y por la falta de acuerdos en las negociaciones para restablecer el servicio, e incluso se evidenció medidas de represión policial esto en el primer día del anuncio de esta decisión alegando que en apariencia los vecinos de Peralta retuvieron un vagón cargado de turistas, punto en el cual Ramos acota que fue totalmente falso. Estas luchas tuvieron una duración de semanas, meses e incluso años cargados de movilizaciones organizadas en busca de medidas para mitigar los efectos del cierre técnico y protestas contra los altos jerarcas del gobierno que en la objeción Ramos los dejaron en el abandono, ya que ellos “dependían de esa vaca (ferrocarril) y esa vaca se murió”. Con la desaparición del ferrocarril se vino la migración de familias, en donde según los entrevistados se iban en promedio de tres a cuatro familias por semana quienes se vieron afectadas con el desempleo de los ex trabajadores del ferrocarril, además del quiebre de las cooperativas y haciendas cafetaleras que una vez beneficiaban a los habitantes, debido a que tanto la producción de caña de azúcar y café bajaron de forma abrupta⁴.

Posterior a la crisis, los vecinos y dirigentes de la comunidad afirmaron que “Peralta no muere” a pesar de las dificultades que se han enfrentado a nivel grupal, como comunidad y como familias consolidadas. Durante las últimas dos décadas han tenido que replantear proyectos para subsistir económicamente y no disminuir la población, por ejemplo Oscar Ramos afirmó que la Hacienda Pinto fue adquirida mediante el Instituto de Desarrollo Agrario para luego ser repartida a 30 familias quienes no contaban con un terreno para construir sus propias viviendas y al mismo tiempo obtener un provecho económico mediante la agricultura o la ganadería, con esto la solución llega: la afluencia migratoria disminuye y por ende la potencialidad económica de la comunidad empieza a resurgir paulatinamente en donde más tarde conformarían la Cooperativa de Producción de Queso en donde funcionaría como un centro de acopio de leche



proveniente de estas fincas pertenecientes a las familias beneficiarias de estas fincas gestionadas por el IDA, paralelo a estos acontecimientos, lograron remodelar la escuela de Peralta, la construcción de puentes y la apertura de la nueva carretera que comunicaría Peralta con Turrialba y otros poblados aledaños⁵.

Por otra parte, los vecinos mantienen la costumbre conmemorar cada año el aniversario de la fundación de la comunidad, en donde estos espacios permiten rescatar muchas tradiciones relacionadas con el recuerdo del ferrocarril, tales como las comidas típicas de la zona y que tuvieron vínculo con las venteras dentro de la actividad ferrocarrilera y el reencuentro de muchos ex trabajadores de Costa Rica Railway Company espacio en los cuales les permiten rememorar aquellos años de apogeo y añoranzas alrededor de este medio de transporte. Por último, Oscar Ramos, al igual que sus compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral como Beatriz Rojas y Pedro Matarrita afirma que con la partida del ferrocarril es como si se hubiese muerto un miembro de la familia y por tal razón consideran que la comunidad viven de los recuerdos vividos con este medio de transporte y en caso de que algún miembro de la comunidad desconoce acerca de la historia de Peralta, sosteniendo que “el que se le ha olvidado el que viene de afuera se lo recuerda” según lo afirma Ramos (2015), dado a que hoy por hoy se siguen autoproclamando como una “comunidad ferrocarrilera” y que en la actualidad esa memoria tanto colectiva como individual se mantiene con más fuerza⁶.

Conclusiones

Se logra comprobar la existencia de la memoria histórica a nivel individual y colectiva y la representación social que se le asigna al recordado ferrocarril en los pobladores de Peralta, así también los procesos existentes de lucha contra el cierre técnico acontecido hace casi treinta años y de resistencia en cuanto a la permanencia y sostenibilidad económica, cultural y social de la comunidad una vez decretado el cierre del ferrocarril en 1990.

De esta manera se puede vincular estos resultados con el eje temático en propuesta, dado a que los procesos detectados en estos relatos obtenidos, son parte de los movimientos sociales desarrollados en las comunidades rurales costarricenses en contraposición con las pugnas de poder por parte de los gobiernos de turno, por cuanto es importante hacer lectura de estos episodios históricos llevados a cabo en Peralta de Turrialba y a su vez, mediante la memoria histórica (individual y colectiva), y prácticas



colectivas, son producto de esas luchas emprendidas por parte las fuerzas vivas de esa localidad en mención y que hoy en día siguen vigentes.

De esta manera se afirma la existencia de procesos y episodios donde tanto la memoria histórica y la representación sociocultural del ferrocarril, en definitiva permitieron mitigar la crisis del cierre de este medio de transporte en la comunidad de Peralta de Turrialba, ya que gracias a ello resolvieron mantener esa esperanza de resurgir luego de la crisis al que tuvieron que afrontar y por consiguiente ratificar la existencia del pueblo como tal, orientado en la búsqueda de nuevas formas de subsistencia económica, mejoramiento en la situación social y cultural de Peralta de Turrialba.

Notas

Información tomada por parte de los participantes en el grupo focal realizado en la comunidad de Peralta de Turrialba. Agosto del 2015.

² Información tomada por parte de los participantes en el grupo focal realizado en la comunidad de Peralta de Turrialba. Agosto del 2015.

³ Información tomada por parte del señor Oscar Ramos Herra en su participación en el grupo focal realizado en la comunidad de Peralta de Turrialba. Agosto del 2015.

⁴ Ibdn., 2015.

⁵ Tomado del señor Oscar Ramos Herra, en su participación en el grupo focal realizado en la comunidad de Peralta de Turrialba. Agosto del 2015.

⁶ Información tomada por parte de los participantes en el grupo focal realizado en la comunidad de Peralta de Turrialba. Agosto del 2015.

Referencias bibliográficas

Artículos y monografías

Aguilar, N. (21 de noviembre de 1990). El tren dice adiós a la región atlántica. *Periódico La Nación*. p. (5 A).

Briones, G. (s.f.). *Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales*. Programa especializado en teoría, métodos y técnicas de investigación social. (Material fotocopiado).

Corella, R. (2010). *Rieles de este a oeste*. *Diario La Nación Digital*. Recuperado de http://www.nacion.com/archivo/Rieles-oeste_0_1138086237.html

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (s.f.). Historia de la Institución. Recuperado de http://www.incofer.go.cr/media/posts/historia_del_incofer.pdf



Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos (2013). Área en kilómetros cuadrados, según provincia, cantón y distrito administrativo. Recuperado de <https://bit.ly/31cwNbE>

Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos (2011). Costa Rica Población total por sexo, total de viviendas por ocupación y promedio de ocupantes según provincia, cantón y distrito. Recuperado de <http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx#>

Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos (2013) .Población total por sexo, total de viviendas por ocupación y promedio de ocupantes según provincia, cantón y distrito. Recuperado de <http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx>

Montesperelli, P. (2004) *Sociología de la memoria* (1° ed.). Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Moscovici, S., Billing, M., Deconchy, J., Farr, R., Gilly, M., [...], & Rouquette, M. (1986). *Psicología Social* (Vol. II). Barcelona, España: Editorial Paidós.

Museo Patrimonio Histórico y Tecnológico del Grupo ICE (N° 1 1993). *Entre chispas y rieles. El ferrocarril al Pacífico: Su dinámica socioeconómica y su rol en el proceso de electrificación en Costa Rica (1897 - 1995)*. Revista patrimonio y futuro. Recuperado de http://www.grupoice.com/esp/cencon/gral/proyeccion/museo_rev_pat_fut_htm

Rodríguez, P. (2015). Raíces de Limón: Exposición fotográfica. (1° ed). San José, Costa Rica: Museo Nacional de Costa Rica.

Entrevistas

Orozco, K. (2015). Grupo focal – entrevista a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta de Turrialba. Peralta de Turrialba (Versión audio).

Matarrita, P. (2015). Entrevista individual a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta de Turrialba. Peralta de Turrialba (Versión audio).

Rojas, B. (2015). Entrevista individual a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta de Turrialba. Peralta de Turrialba (Versión audio).

Brenes, M. (2015). Entrevista individual a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta de Turrialba. Peralta de Turrialba (Versión audio).



Desdobramentos violentos dos conflitos no campo: Desvendando resistências e enfrentamentos no estado da Bahia de 2006-2018¹

Rayane Lucia Rocha Nunes
Gilca Garcia de Oliveira

Resumo

Este estudo tem como objetivo diagnosticar e espacializar os desdobramentos violentos dos conflitos no campo, para o estado da Bahia, assim como desvendar as ações de resistência e enfrentamento ligadas às comunidades tradicionais e ao mundo do campesinato em geral. Buscou-se, a partir da sistematização e mapeamento dos dados presentes nos Cadernos de Conflitos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), identificar por meio das categorias ameaças, tentativas de assassinato e assassinatos, os principais sujeitos envolvidos em violências no campo baiano bem como espacializar essas violências buscando identificar territórios de violência. A partir do entendimento de que o Estado age em defesa dos interesses das classes hegemônicas o estudo apresenta os principais determinantes da violência material e imaterial que torna o pobre do campo subalternizado. Ações de resistência e enfrentamento, através do sentimento coletivo demonstram, neste contexto, a força capaz de criar uma contra hegemonia da ordem vigente.

Palavras Chaves

Resistência. Enfrentamento. Violência. Campo. Estado.

Introdução

O tema da concentração de terras no Brasil é um fato histórico, que culmina numa estrutura fundiária extremamente desigual. Ainda que este seja um problema presente no território nacional, desde a colonização, visualiza-se uma tendência crescente dessa concentração nos tempos recentes. O curso da história demonstra que as condições sociais que conformam o espaço agrário brasileiro, alicerçam esta estrutura fundiária concentrada e concebem um ambiente hostil a camponeses e comunidades tradicionais.

Observa-se, atualmente, a constituição de “formações predatórias”, uma união entre capacidade sistêmica e elites que conduzem a uma concentração extrema no topo (Sassen, 2016), causando, através da violência e da desigualdade, a expulsão de camponeses de suas terras, principal meio de produção e de reprodução da vida. Estes



aspectos são fundamentais para decifrar a estrutura e a dinâmica dos conflitos no campo.

A concentração de terras é um poderoso indicador da desigualdade que impera no campo brasileiro. De acordo com o Censo Agropecuário, nos últimos 11 anos a estrutura fundiária brasileira se concentrou ainda mais. Tem-se que, as propriedades rurais de até 50 hectares representam 81,3% do total de estabelecimentos agropecuários, mais de 4,1 milhões de estabelecimentos. Juntas, ocupam 44,8 milhões de hectares e correspondem a, apenas, 12,8% do total da área produtiva do país. Em contrapartida, 2,4 mil estabelecimentos com mais de 10 mil hectares, que correspondem a apenas 0,04% das propriedades rurais do país, ocupam 51,8 milhões de hectares, equivalente a 14,8% da área produtiva do campo brasileiro (IBGE, 2017).

Para o Estado da Bahia os indicadores não são diferentes, as propriedades rurais de até 50 ha correspondem, aproximadamente, a 680.365 estabelecimentos, 89% do total. Juntas somam 6.089.743 ha e correspondem a 21,74% do total da área ocupada do Estado. Em contrapartida, 3.176 estabelecimentos com mais de 1.000 ha, 0,41% das propriedades rurais do estado, ocupam 10.696.971 ha, equivalente a 38,17% da área produtiva do campo baiano (IBGE, 2017).

De acordo com o Índice de Gini-Terra a concentração de terras tem se mantido bastante elevada, ocorrendo, inclusive, crescimento ao longo dos anos. A partir de 1975 atinge a casa de 0,8 chegando a alcançar um leve crescimento de 0,838, em 2006, segundo dados do Censo Agropecuário/IBGE. A alta concentração da propriedade expressa uma situação de vulnerabilidade a conflitos pelo uso e contaminação da terra e da água e; superexploração do trabalho, materializada no trabalho análogo ao de escravo.

Tendo em vista tal contexto social, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde 1985, divulga informações de conflitos no campo brasileiro envolvendo terra, água, questões trabalhistas, condições análogas à escravidão e violência.

O que se pretende com este estudo é sistematizar e mapear os desdobramentos violentos dos conflitos no campo baiano por meio das categorias de violência utilizadas pela CPT. Além de identificar os territórios em disputa onde a violência ocorre; os principais sujeitos afetados nesses territórios; o papel do Estado na dinâmica dos conflitos e da violência e as ações de resistência e enfrentamento utilizadas pelos povos do campo para reivindicar o direito à vida digna.



Contextualizando a discussão: conflito, conflitualidade e violência

Conflito e conflitualidade

O paradigma da questão agrária tem como eixo principal de debate o processo de diferenciação, destruição e recriação do campesinato como resultado do desenvolvimento desproporcional do capitalismo no campo. A conflitualidade aparece como o conjunto de conflitos que é inerente ao processo de desigualdade do desenvolvimento e, por isso, o capitalismo gera tal conflitualidade e a fomenta (Fernandes, 2009).

A ideia de que o conflito e a conflitualidade são geradores de desenvolvimento pode causar certo estranhamento. Como é possível que um evento que compreende diferentes tipos de violência e pode findar com a eliminação física dos sujeitos envolvidos, pode conter no seu âmago uma dimensão que confira à sociedade algum tipo de desenvolvimento? Para tanto Porto-Gonçalves e Chagas (2017) trazem à luz uma definição sobre conflitos que cabe ser exposta

O conflito é um fenômeno empiricamente verificável e, como conceito, capta um momento privilegiado do ponto de vista epistemológico, pois nos indica que sobre um determinado problema que está sendo objeto de questionamento existem, no mínimo, duas ou mais visões ou leituras distintas. Além disso, o conflito nos mostra de modo prático as contradições da sociedade em um determinado momento e lugar e, assim, nos libera de análises que se reivindicam dialéticas, mas que ignoram as contradições tal e como os próprios interessados as manifestam [...] É através do conflito que as contradições da sociedade vêm à luz, vêm a público. Embora se possa dizer que toda sociedade se faz conformando consensos, esses consensos se forjam a partir de conflitos que sinalizam suas contradições e, assim, o dissenso é fundamental para que se construa um consenso denso, que possamos chamar verdadeiro. (Porto-Gonçalves; Chagas, 2017, p.10)

Os autores fazem uma analogia dos conflitos com a dor para o corpo humano. Quando a dor aparece ela é um sintoma do qual pode-se buscar a origem de uma doença, é através da identificação dessa dor que a cura pode ser obtida. Assim, o conflito é essencial para a sociedade “se ignoramos o conflito ignoramos as dores da sociedade. O conflito nos mostra os gritos daqueles que, assim, expõem suas dores. É, portanto, um momento de tensão e luz” (Porto-Gonçalves; Chagas, 2017, p.11).

A CPT entende que os conflitos no campo são ações de resistência e enfrentamento que ocorrem em contextos sociais diferentes e, no âmbito rural, envolvendo a luta pelo



direito à água, à terra, pelos meios de trabalho e produção. Tais conflitos ocorrem entre classes, entre os próprios trabalhadores ou por conta da má gestão ou ausência de políticas públicas.

Dentro dessas contribuições teóricas o conflito surge da necessidade de contestar o controle social promovido pelo modo de produção capitalista, se origina de uma reação a esse controle e se estrutura através da criação de espaços de resistência com o objetivo de transformação da realidade que não está sob o manejo do capital (Fernandes, 2009).

Dessa forma ocupações, acampamentos e até mesmo a manutenção da forma de vida de camponeses e comunidades tradicionais são estratégias de resistência e enfrentamento advindos dos conflitos. Neste sentido, “a conflitualidade apresenta-se como o processo de enfrentamento perene que explicita o paradoxo das contradições e as desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a necessidade do debate permanente, nos planos teóricos e práticos, a respeito do controle político e de modelos de desenvolvimento” (Fernandes, p 6, 2008).

Os diferentes tipos de violência

A violência surge nesse contexto como ferramenta de dominação, apropriação, expulsão das populações vulneráveis e é utilizada tanto pelas estruturas de Estado quanto por agentes privados, de forma direta e indireta, passivas ou ativas. Além disso, podem resultar na destruição moral e física dos sujeitos.

Osório (2017) define o Estado como um conflito de relações² entre classes que se expressa através do poder político e da dominação. Assim, o Estado aparece como uma condensação dos diversos interesses de classe e possui uma dimensão que confere à sociedade um “sentido de comunidade ilusória”. É através desse sentimento de comunidade que um projeto de desenvolvimento da classe hegemônica é amplamente aceito pela sociedade como se fosse um projeto de interesse de todos. Entretanto, segundo Osório (2017) as relações de classe que fazem parte do Estado possuem eixos específicos de concentração.

O Estado é a condensação das correlações de forças. Se diversas classes sociais (e outros grupos) atuam e se desenvolvem na sociedade, todas elas buscam alcançar seus interesses. Em diversos graus, o Estado tem a particularidade de assumir demandas e posições de todas as classes, frações e setores. Porém, assume-as com a condição de



que há classes que detêm o poder político e outras não. Desta forma, muitos interesses sociais adquirem expressão na vida em comum, mas com limitações estabelecidas pelos interesses dos grupos sociais dominantes. (Osório, 2017, p. 27)

É a partir dessa conceituação do Estado que se entende que a violência no Brasil ocorre de forma estrutural. Em todos os aspectos da organização social são pautadas disputas de interesses e poder, estando as classes dominantes sempre em vantagem em detrimento dos mais vulneráveis. A formação da sociedade brasileira, desde a colonização, confirma a perspectiva de que os interesses das classes não-hegemônicas são desconsiderados, ultrapassam o campo material e têm no Estado um agente de violência. Segundo Osório (2017), “o Estado é violência e está atravessado por ela. Mas essa violência se condensa em leis, em espaços que ameaçam seu exercício, quando não se apresenta como uma prática aberta e visível” (Osório, 2017, p. 26).

Uma violência material e imaterial, onipresente, visível nos índices de pobreza, de concentração de renda, de mortalidade infantil, entre tantos outros índices que confirmam o fato de que estruturalmente a violência é, antes de tudo, exercida pela própria conformação das relações sociais nesse País.

Na violência direta e ativa, o Estado age principalmente com os despejos judiciais, com o uso da força policial no cumprimento de ordens de despejo e na dissipação de manifestações, através da ação política e repressiva, o que tem como consequência mortes e ferimentos (Girardl, 2008). A passividade em relação à violência ocorre quando o Estado se omite ao constatar violência praticada por particulares contra camponeses e comunidades tradicionais assim como a violência indireta quando, o Estado, através de políticas públicas e programas de desenvolvimento que, ao ir de encontro aos interesses camponeses, vão permitir a formação de um cenário propício à violência direta, praticada por fazendeiros e capitalistas de grandes empreendimentos. A título de exemplo pode ser citada a formação de lobbies e a existência da bancada ruralista pautando os seus interesses e intencionalidades nas casas legislativas.

A violência física é utilizada, pelo Estado ou por agentes privados, quando a ordem social hegemônica está ameaçada. As reivindicações e enfrentamentos das classes não-hegemônicas constituem-se numa reação, por parte dos sujeitos subalternizados, à violência estrutural. É através dessas ações de enfrentamento que os “de baixo” perturbam a hegemonia da classe no poder.



De diversas maneiras manifesta-se a violência no campo. Indo desde a manutenção de práticas ilegais nas relações trabalhistas, até aquelas manifestadas pelo trabalho análogo ao de escravo, passando pelo cerceamento dos espaços de produção e reprodução da vida das comunidades, até a eliminação física dos mais vulneráveis, de lideranças e agentes que apoiem e contribuam para o processo organizacional e a estruturação de demandas das comunidades. As múltiplas possibilidades de se tratar a violência apontam para a existência de uma raiz comum a todas elas, que está relacionada com a questão agrária.

No caso dos cerceamentos e da desterritorialização das comunidades tradicionais, são inúmeros os casos em que agentes privados, apreendem e matam os animais, impedem o abastecimento de água, constroem cercas ao redor das áreas das comunidades a fim de impedir o acesso ao território, estradas, cidades próximas, atendimento de saúde entre outros. Essas ações estão pautadas sempre nos interesses e vontades dos pretensos “proprietários” de terra que, segundo Medeiros (1996), utilizam desses meios para demonstrar força, amedrontar e fazer cumprir seus propósitos.

Diante deste cenário de numerosos conflitos e violências, direcionadas a agentes específicos, por parte de agentes privados e públicos, surge o questionamento: Qual tem sido a reação das numerosas organizações sociais, que lutam pelo direito à vida digna de camponeses e comunidades tradicionais? Quais são as ações de enfrentamento realizadas no estado da Bahia, que se manifestam contra a injustiça e a violência? Para responder a essas questões, foram utilizados dados dos Cadernos de Conflitos da CPT referentes à categoria “manifestações”.

Resistências e enfrentamentos

Andrade (2015) entende que a resistência se constrói primeiramente no sujeito. Assim, o próprio modo de vida do camponês, com suas práticas de convívio com a natureza, a despeito de suas próprias contradições é, em parte, a materialização da sua resistência. Um processo intrínseco à ação do sujeito, individualmente ou em família, mas que pode ser fortalecida e ampliada por via da construção política do “sujeito coletivo”.

Zibechi (2015) traz que os territórios “dos de baixo” é composto essencialmente pela diversidade como um sinal de sua identidade. Dessa forma nos territórios do mundo do campesinato e comunidades tradicionais, existem formas de vida não mercantis que surgem nos intervalos e falhas da dominação capitalista e constituem-se em territórios



de esperança. “[...] a esperança de uma mudança radical anticapitalista, porque ali existem relações sociais que podem ser a base para a reconstrução da sociedade” (Zibechi, 2015, p. 157).

Nesse sentido, a resistência se constrói a partir do aprofundamento das diferenças entre os modos de vida dos dominados e dos dominantes. Camponeses e comunidades tradicionais sustentam suas formas de vida heterogêneas através dos laços comunitários, da particular relação com a natureza, da solidariedade e da reciprocidade, princípios que caracterizam a forma de vida destes setores populares.

Assim, a resistência é a base para se entender o conceito de enfrentamento. Scott (1990) reforça essa perspectiva enfatizando que é nessa resistência diária, em pequena escala e muitas vezes informal dos camponeses, que residem elementos práticos de uma contra hegemonia da ordem dominante.

O enfrentamento é aqui entendido como a ação de resistência construída e realizada coletivamente a partir dos espaços de “socialização da política”. Assim, o enfrentamento engloba e suplanta a noção de resistência, sendo ele (o enfrentamento) a consolidação da resistência agora com o sujeito coletivo centralizado nesta dinâmica (ANDRADE, 2015).

Resultados

A violência no campo baiano

De acordo com os dados apresentados pela CPT para o Brasil, o estado da Bahia, no ano de 2017, encontra-se como terceiro colocado entre os estados mais violentos no campo, com 14,08% dos assassinatos ocorridos no País (Gráfico 1).

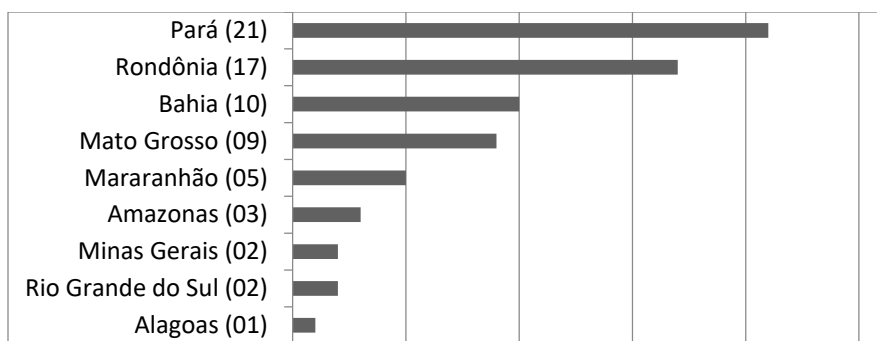


Gráfico 1 - Ranking: Estados mais violentos no campo. Brasil, 2017
Fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino-CPT



De acordo com o Quadro 1, observa-se que a violência no campo é uma constante e acentua-se em momentos políticos decisivos e/ou permissivos. Para o período de análise, 2006 a 2018, foram 84 ameaças, 33 tentativas de assassinato e 37 assassinatos. O ano de 2017 foi aquele com o maior número de assassinatos, na Bahia, dez, num total de 37 em todo o período de análise.

Ano	Ameaças	Tentativa de Assassinato	Assassinato
2006	3		
2007	3	1	1
2008	2	1	3
2009	10	1	1
2010	4	6	2
2011	13		3
2012	7	3	1
2013	9	3	6
2014	8	3	3
2015	10	12	1
2016	1	2	4
2017	6	1	10
2018	8	1	2
Total	84	33	37

Quadro 1. Violência no Campo: Ameaças, Tentativas de Assassinatos e Assassinatos, Bahia, pessoas atingidas, 2006-2018

Fonte: Cadernos de conflitos CPT. Elaboração própria, 2019

Dos 154 casos de violência, 52 (34%) foram direcionados às lideranças que, historicamente, estão ligadas às ações de resistência e enfrentamento perante o avanço do Capital no campo. O Quadro 2 identifica a proporção de lideranças envolvidas em casos de violência no período, categorizando-as.

Categoria	Nº de violência	Lideranças	% de lideranças dentro da categoria	% do total de lideranças
Indígenas	42	15	36	29
Quilombola	36	20	56	38
Assentado	11	5	45	10
Outros	65	12	18	23
TOTAL	154	52		100

Quadro 2. Categorização e Proporção de Lideranças Vítimas de Violência, Bahia, 2006-2018
Fonte: Conflitos no Campo 2006-2018. Elaboração própria, 2019.

No grupo dos indígenas, dentre as 42 pessoas vítimas de violência, 15 eram lideranças, ou seja, 36% dos indígenas vitimados, do total de lideranças vitimadas no período os indígenas corresponderam a 29%. Dentre os 36 quilombolas, 20 eram lideranças, que foram 56% dos quilombolas vitimados e 38% do total de lideranças. Entre os 11



assentados, cinco eram lideranças, equivalente a 45% das vítimas dessa categoria e a 10% do total de lideranças. Na categoria outros observou-se 65 casos de violências das quais 12 foram direcionadas às lideranças correspondendo a 18% da categoria e a 23% do total de lideranças vitimadas.

No período de 2006 a 2018 os municípios onde ocorreram maior número de assassinatos foram: Lençóis, Ilhéus e Monte Santo.

Analisando os dados a partir dos territórios de identidades, observa-se as regiões de maiores tensionamentos nos conflitos, podendo-se estabelecer conexões entre as práticas da violência em determinados espaços e reconhecer territórios de violência. Neste sentido, os Mapas 1, 2 e 3 inserem uma dimensão espacial à análise, permitindo a visualização das violências a partir da espacialização dos casos.

Dentre os Territórios de Identidade destacam-se: Litoral Sul, Extremo Sul, Bacia do Rio Corrente, Velho Chico e Piemonte do Itapicuru. O primeiro colocado, em relação aos casos de violência, é o Território de Identidade Litoral Sul com 32 casos de violência, sendo eles 14 ameaças de morte, nove tentativas de assassinato e nove assassinatos. Os grupos mais afetados nesse território são os indígenas, dentre os 32 casos de violência 27 foram direcionados a esse grupo. Há um destaque para os indígenas da Serra do Padeiro/Povo Tupinambá que dos 32 conflitos, 19, ou seja, 59% deles foram direcionados especificamente a esse povo e a aliados na luta de reconhecimento e regularização do direito a suas terras ocupadas tradicionalmente. Dentre os casos de violência no Território de Identidade encontram-se ainda indígenas do Povo Pataxó Hã-Hã-Hãe com oito casos e lideranças de comunidades sem-terra, com cinco casos.

Anexo 1: Mapa 1

Anexo 2: Mapa 2

Anexo 3: Mapa 3

Utilizando a categoria “manifestações”, presente nos cadernos de conflitos da CPT, foi possível observar um panorama das ações de enfrentamento, materializadas em atos públicos de manifestação, no estado da Bahia, entre os anos de 2006 e 2018 (Quadro 3).



Ano	Manifestações	Manifestações/ violência
2006	52	2
2007	53	1
2008	41	4
2009	33	3
2010	49	5
2011	54	3
2012	56	5
2013	70	12
2014	40	5
2015	50	6
2016	102	15
2017	98	10
2018	82	30
Total	780	101

Quadro 3. Enfrentamentos do tipo manifestações, Bahia, 2006 a 2018
 Fonte: Conflitos no Campo Brasil 2006-2017. Formulação própria, 2019

O Quadro 3 apresenta quantitativamente o total das manifestações ocorridas no período estudado e quanto dessas manifestações que foram voltadas a denunciar e contestar casos de violências.

Do ano de 2006 ao ano de 2018, das 780 manifestações ocorridas no estado da Bahia, documentadas pela CPT, 101 foram referentes a conflitos violentos que envolviam ameaças, assassinatos e/ou tentativa de assassinatos. Dentre elas a “Vigília em memória do Martírio de Fabio Santos Silva/ Fazenda Lagedo”, liderança do MST morto com 15 tiros na presença de sua família numa emboscada no ano de 2013, no município de Iguai. Ocorreram diversas manifestações em vários municípios do Estado.

Considerações finais

A estrutura fundiária brasileira é historicamente concentrada. As grandes propriedades correspondem em número a menos de 1% das propriedades rurais do país e ocupam cerca de 51,8 milhões de hectares. Enquanto as pequenas propriedades representam 81,3 % das propriedades rurais do país e ocupam 44,8 milhões de hectares.

A alta concentração da propriedade expressa uma situação de vulnerabilidade a conflitos pelo uso da terra, da água e da biodiversidade que geram em seus desdobramentos, diversos tipos de violências exercidas pelos poderes privado e público. O Estado surge neste contexto como agente mantenedor e criador de uma capacidade sistêmica, que facilita a permanência das velhas e novas formas de



violência contra comunidades tradicionais e camponeses, através do seu aparato, atuam a favor dos interesses das classes hegemônicas.

Neste cenário, o conflito surge da necessidade de contestar o controle social promovido pelo modo de produção capitalista, se origina de uma reação a esse controle e se estrutura através da criação de territórios de resistência com o objetivo de transformação da realidade buscando não se inserir na dinâmica do capital.

Dessa forma, ocupações, acampamentos, manifestações e até mesmo a manutenção da forma de vida dos camponeses e comunidades tradicionais são estratégias de resistência e enfrentamento advindos dos conflitos e da violência.

A violência se apresenta primeiro estruturalmente, na própria formação da sociedade e na dinâmica das relações de classe, é utilizada pelos poderes público e privado de forma direta como estratégia de eliminação dos conflitos que ameaçam sua hegemonia.

Notas

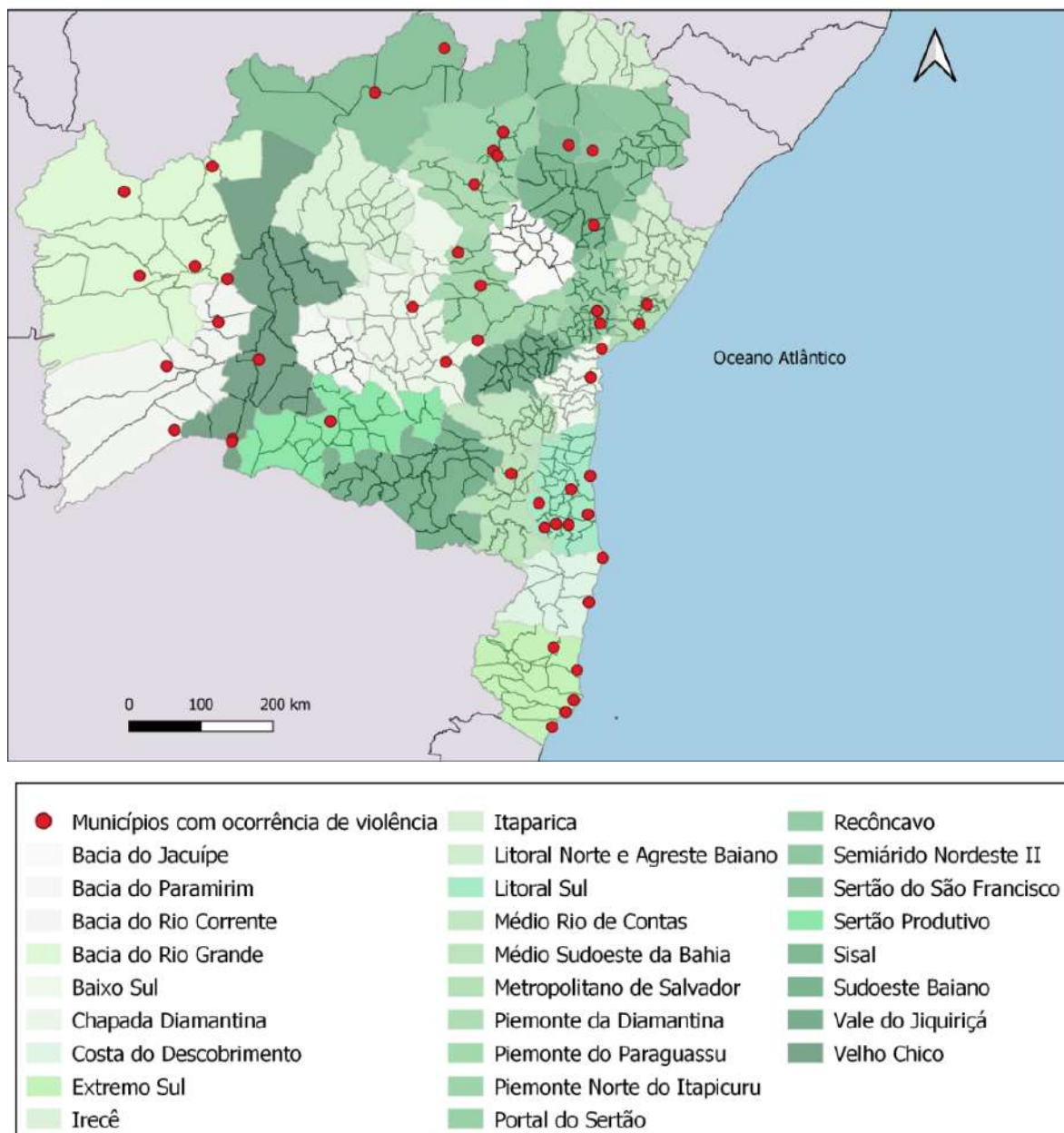
¹ Este estudo foi apoiado pelo CNPq através do programa de bolsas PIBIC.

² Relações que são fundamentalmente de classe mas que não são descoladas das dimensões de raça e gênero

Anexos



Anexo 1

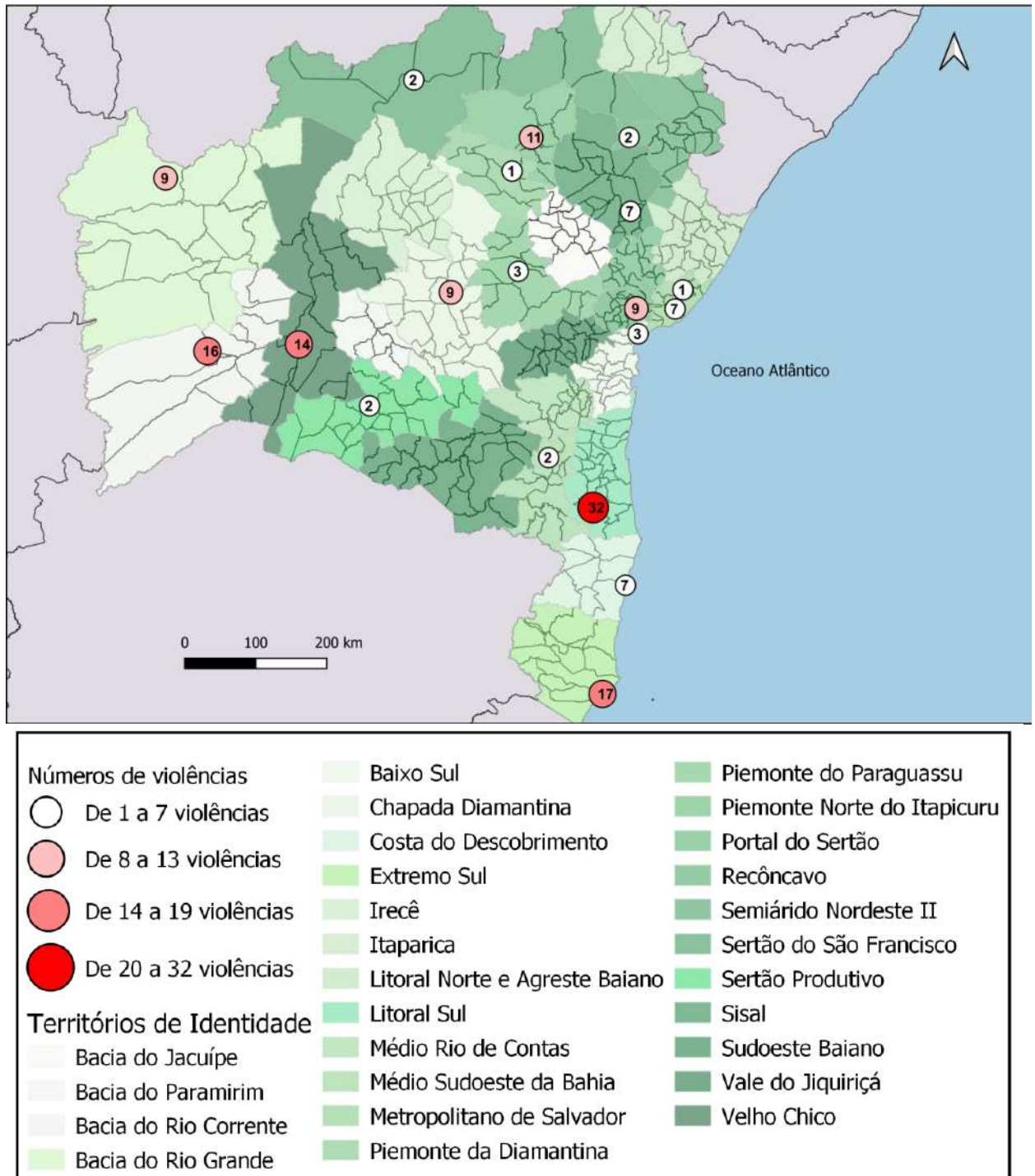


Mapa 1 - Ocorrência de violência, Município, Bahia, 2006 a 2018

Fonte: SEI/ IBGE; Base de Dados: CPT; Elaboração: Rayane Nunes, Projeto GeografAr, 2019.



Anexo 2

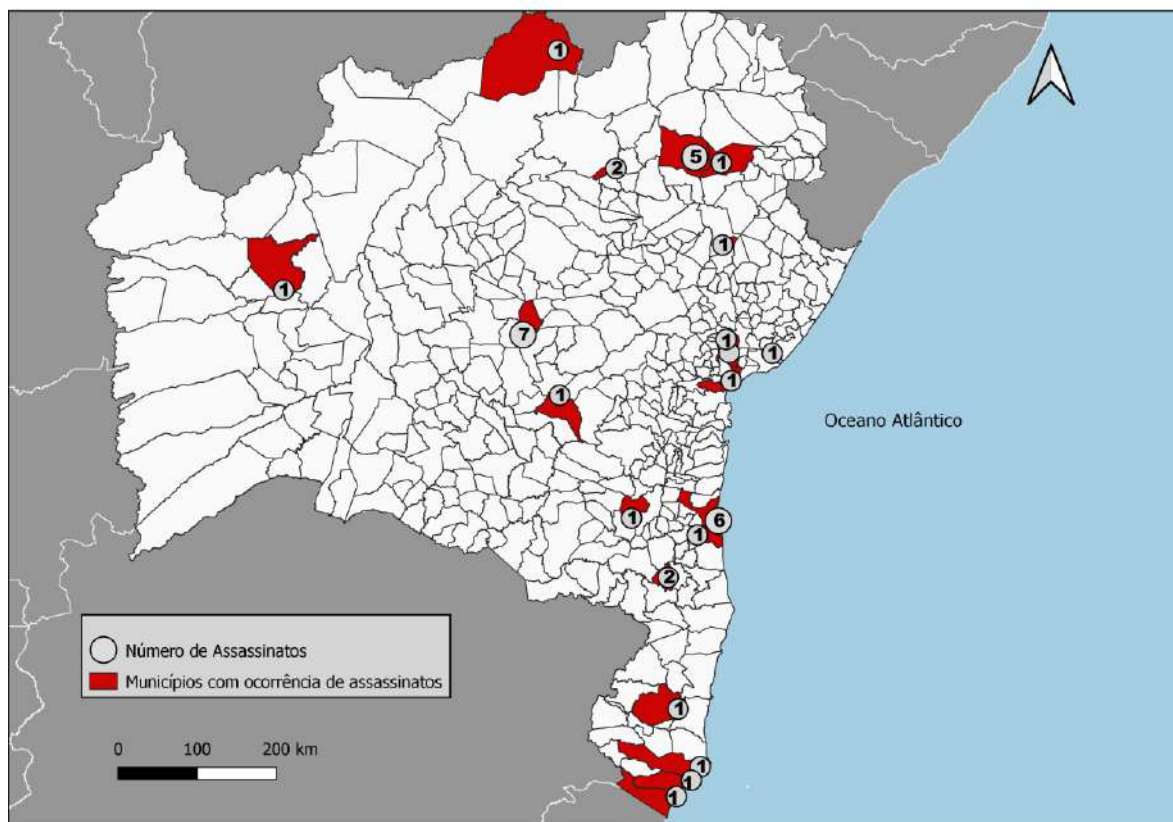


Mapa 2. Ocorrência de violência, Território de Identidade, Bahia, 2006 a 2018

Fonte: SEI/ IBGE; Base de Dados: CPT; Elaboração: Rayane Nunes, Projeto GeografAr, 2019



Anexo 3



Mapa 3 - Municípios com ocorrência de assassinatos, Bahia, 2006 a 2018
 Fonte: SEI/ IBGE; Base de Dados: CPT; Elaboração: Rayane Nunes, Projeto GeografAr, 2019

Referências

- Andrade, M. L. A monocultura do eucalipto: conflitos socioambientais, resistências e enfrentamentos na região do sudoeste baiano. 2015. Dissertação – (Programa de Pós-Graduação em Geografia: Mestrado em Geografia) – IGEO, UFBA, Salvador: 2015
- Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT. Violência contra a pessoa: ranking dos estados brasileiros, [s.n], [s.l]: 2017
- Comissão Pastoral da Terra. Conflitos no campo Brasil. Goiânia: [S.n.], 2006-2018.
- Fernandes, B. M.; Martim, Jean Yves. Movimento socioterritorial e “globalização”: algumas reflexões a partir do caso do MST. Lutas Sociais. São Paulo, v. 12, 2004.
- Fernandes, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. Revista Nera. Presidente Prudente, n.6, p.24-34, jan/jun. 2005.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. [S.l.]: [S.n.], 2017.



Medeiros, Leonildes Servolo de. Dimensões políticas da violência no campo. Revista Tempo. Rio de Janeiro, v.1, p. 126-141, 1996.

Osorio, J. Estado, biopoder, exclusión: análisis desde la lógica del capital. Barcelona: Anthropos/UAM, 2012.

_____. Sobre o Estado, o poder político e o Estado dependente. Temporalis. Brasília (DF), v. 17, n. 34, jul./dez. 2017.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter; CHAGAS, Samuel Brito das. Os pivôs da discórdia e a digna raiva: uma análise dos conflitos por terra, água e território em Correntina – BA. Bom Jesus da Lapa, BA: Gráfica e Editora Bom Jesus, 2017

Sassen, Saskia. Expulsões: Brutalidade e complexidade na economia global. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2016.

Scott, J. C. Los dominados y el arte de la resistencia: discursos ocultos. [S.I.]: Ediciones Era, 1990. (Colección Problemas de México).

Zibechi, Raúl. Territórios em resistência: cartografia políticas das periferias urbanas latino americana. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2015



Neoliberalismo en el campo colombiano: EL caso del Parque Nacional Natural Los Picachos, Caquetá- Meta 2016- 2018¹

Sandra Milena Polo Buitrago²

Resumen

Este escrito se propone demostrar que luego de la firma de los acuerdos de Paz, entre la guerrilla de las FARC y el estado colombiano, bajo el mandato de Juan Manuel Santos en 2016, se inaugura una forma de neoliberalismo en el campo colombiano que se caracteriza por el uso de la violencia como forma de despojo a las comunidades campesinas que habitan la región amazónica, dicha violencia se ha justificado bajo la idea de que los campesinos colonos que habitan los Parques Nacionales Naturales han cometido delitos contra el Medio Ambiente.

No obstante, debe anotarse que los campesinos se constituyen en un obstáculo para el desarrollo de proyectos de explotación de hidrocarburos, construcción de infraestructura y provisión de servicios ecosistémicos ligados a los intereses transnacionales defendidos por el gobierno colombiano. Así, se ha dado inicio a una nueva etapa del capitalismo neoliberal que, en Colombia, no se había desarrollado a plenitud, en buena parte, porque la insurgencia armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, se constituía en una fuerza que se oponía, y que ralentizaba el desarrollo pleno de la acción estatal en la región amazónica, específicamente en el nororiente del Caquetá, puerta de entrada a la región amazónica desde la región andina. Pero, una vez se ha firmado el acuerdo de Paz con la insurgencia, los ataques directos del gobierno hacia la población campesina se han incrementado, adquiriendo variadas formas entre las que están la judicialización, el agobio económico y la expropiación ganadera; acciones que se proponen hacer imposible la actividad ganadera campesina en Parques Nacionales, afectando de forma directa la supervivencia de las comunidades.

Palabra clave

Colonos, conflicto socio ambiental, posconflicto, FARC.

Introducción

El llamado proceso de Paz en Colombia significó la eliminación de uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo del extractivismo colombiano, proyectado desde el



centro del país, a saber: la violencia insurgente organizada desde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El caso del Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos, se convierte en un caso paradigmático a la hora de pensar a la insurgencia armada de las FARC como contenedor de la expansión del neoliberalismo que encarna los intereses del capital transnacional; pues, hasta antes del acuerdo, el gobierno no había enfrentado a las comunidades campesinas de este Parque. Pero, una vez se firmó el acuerdo, las comunidades campesinas quedaron a merced del dominio avasallante del “progreso neoliberal”, cuestión que se evidencia, en el llamado periodo de posconflicto, donde las acciones violentas del estado contra las comunidades Campesinas en la llamada “operación Picachos” de octubre de 2018, demostraron que los intereses nacionales y transnacionales del gran capitalismo extractivista de hidrocarburos, y del llamado capitalismo verde, eran el factor dominante a la hora de pensar en un nuevo orden imperante en el territorio.

Fundamentación Del Problema: Neoliberalismo, Campesinos y Amazonia en el Posconflicto

Cuando se suele hablar de neoliberalismo, en especial, como un modelo alejado del Keynesianismo u opuesto a él, parece que de fondo se quiere hacer creer, no sólo que existe una diferencia profunda con el modelo keynesiano, el efecto consiste en que los dos modelos, al ser vistos como opuestos, suelen ocultar la matriz capitalista que los envuelve. (Puello-Socarrás, 2008) No obstante, es importante precisar que se trata de dos modelos igualmente capitalistas que buscan en el campesinado cuestiones diferentes, en tanto, cada una de ellos corresponde a una fase diferente de la acumulación capitalista y por tanto comprenden el papel del campesinado de manera diversa.

Por ello, sin desconocer la matriz capitalista que subyace a los dos modelos, podemos comprender el neoliberalismo como la forma del capitalismo que, en su fase financiera, se caracteriza por excluir al campesinado de los países periféricos del proceso de reproducción del capital, en especial, porque este campesinado se constituye en una amenaza para la agroindustria transnacional de base biotecnológica, la cual, al tener un aumento exponencial de su productividad, los requiere cada vez con menor intensidad, incluso, más radicalmente, ya no los requiere.

La incursión del modelo neoliberal se puede ubicar, entre finales de la década de los ochenta e inicios de la década de los noventa, cuando el declive del fordismo, que



definía la acumulación de capital vía industrialización, fue cediendo a una nueva forma de acumulación flexible, sustentada en nuevas formas de explotación del trabajo y de exclusión del campesinado, que ya no será el principal productor de las materias primas para la industria nacional, ni el productor de alimentos básicos para la población a nivel nacional, como lo fue en el modelo sustitutivo. Se puede decir entonces, que la explotación campesina propia del modelo Sustitutivo, muta hacia un modelo, que realmente llega a prescindir de la producción campesina, dejando la provisión de alimentos a las grandes compañías transnacionales, renuncia a un proceso de industrialización y, por tanto, ya no requiere materias primas y los alimentos del campo, producidos por las economías campesinas.

El cambio fundamental para el campesinado latinoamericano, en esta fase del capitalismo, como lo señala Blanca Rubio, se puede sintetizar en el cambio de una explotación incluyente, característica del modelo de sustitución de importaciones, por una explotación excluyente que se marca desde finales de los ochenta e inicios de los noventa; en este sentido, el régimen de explotación del campesinado se transforma, al cambiar la forma de acumulación capitalista y, con él, las formas de explotación del trabajo. (Rubio, 2012, pág. 51)

Afirma Rubio que, durante el modelo de sustitución de importaciones, los capitalistas subordinaban a los campesinos considerándolos agentes retardatarios del capital comercial y usurero, es decir, les interesaba la producción agraria en tanto pudieran convertirse en prestamistas y comerciantes que vivieran del trabajo campesino, así éste no estuviera tecnificado. Esta situación cambió a finales de los ochenta e inicios de los noventa, pues el cambio del capitalismo hacia la producción agraria transnacional hizo que el campesino ya no ocupe un papel central para el capitalista, sino que, bajo el dominio de la agroindustria multinacional, que impulsa cultivos muy rentables con una elevada tecnología y una fuerte concentración de capital, considera que el grueso de los productores es un estorbo para este tipo de cultivos. Es decir, el campesino pasa de explotado por el capital comercial y usurero a excluido por el capital agroindustrial de alta tecnología. (Rubio, 2012, pág. 92)

Pero el neoliberalismo abre no sólo una nueva etapa en la definición de la relación entre campesinado e industria, ahora transnacional, sino una nueva relación entre las burguesías latinoamericanas y las burguesías transnacionales, ésta relación suscita cambios no sólo en el campesinado, sino en la apropiación de la tierra y los recursos en



los países donde se desarrolla el capitalismo dependiente, pues estos recursos ahora se encuentran en disputa, especialmente porque los países del capitalismo avanzado deben generar mecanismos compensatorios, para frenar el fenómeno de la tendencia decreciente de su cuota de ganancia; uno de estos mecanismos es la acumulación por despojo, que busca aprovechar la renta diferencial necesaria para compensar la tendencia decreciente de la cuota de ganancia a nivel mundial. Así las cosas, la renta de la tierra vuelve a ser un factor clave en el capitalismo actual, y lejos de haber desaparecido como tema central la lucha misma por la posesión de la tierra, que otorga el derecho sobre el control de sus recursos, entra a ser un tema determinante en las formas de acumulación de capital en la fase actual del capitalismo.

En este sentido, América Latina puede producir cierto tipo de bienes que provienen de la renta diferencial de la tierra, es decir, de una cierta ganancia extraordinaria, que surge de una característica natural no reproducible, y que puede generar mayores niveles de ganancia, se puede pensar por caso el petróleo, el agua dulce, los bosques naturales. La ganancia que se genera en este tipo de bienes no proviene sino de su propiedad, es decir, su condición de ganancia extraordinaria que no es producida por el dueño de la tierra, pero si ostentada por él, por su simple condición de ser propietario, este sería un rentista de la tierra. En el caso latinoamericano, se observa además un fenómeno especial, que los sujetos beneficiarios de la apropiación de la plusvalía que circula primariamente bajo la renta de la tierra son las economías nacionales que se han caracterizado por contraer deudas públicas externas con capitales acreedores, que provienen de los mismos países compradores de las mercancías portadoras de la renta de la tierra (Carrera, 2017). Cuando se considera esta condición del rentismo, en el capitalismo contemporáneo, se impone la idea de los recursos naturales y su dominación, se abren paso mercados que consideran la naturaleza misma como posible fuente de ganancia extraordinaria.

En el caso colombiano, tal como lo han manifestado los gobiernos de los últimos 20 años, es posible pensar en que esta riqueza sea vista como una nueva fuente de ganancias para el capital no sólo privado, sino en alianza con el estado que ostenta la propiedad de estos recursos por mor de su potestad jurídica, para asignarlos en propiedad o para determinar su usufructo, lo cual incluye los bienes del subsuelo (petróleo), o vía consideración de tierras baldías del estado que pueden vender bienes de conservación; no sobra decirlo, muy del lado del despliegue del capitalismo verde, que no considera el daño ecológico como una externalidad, sino como una internalidad,



por eso en vez de generar el problema y pagar los costos, se vende el medio ambiente y su conservación como mercancía.

Por supuesto, la situación se hace conflictiva cuando existen grupos humanos que se encuentran en las zonas que ahora entran en la codicia del gran capital nacional y transnacional, no está demás decir que, existen actores involucrados que van a ser directamente afectados en las zonas, otros que definitivamente no podrían estar en los mismos lugares donde se explotan los recursos, que bien van a poder ser convencidos de que no hay nada mejor para sus vidas que explotar los recursos para alcanzar el bienestar.

Esta explotación sería posible, si y sólo si en esas zonas susceptibles de ser vendidas, no hubiera influencia de grupos que impidan dicha explotación, por ejemplo, la guerrilla de las FARC en el caso colombiano; de lo anterior es posible pensar que ésta haya sido una de las razones que condujo al proceso de negociación, conocido como Acuerdo de Paz en Colombia en 2016. Otro factor que conduce a esta explicación, es el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos, sostuvo que se negociaba todo menos el modelo económico y político. (Rebollo, 2012); por otra parte, y no menos importante, los proyectos de la Paz que se refieren al desarrollo territorial se estructuran a partir de la iniciativa privada internacional y con financiamiento de Banco Mundial a fin de generar confianza inversionista, es decir condiciones para la inversión. (Juaneda, 2018), también existen intereses, en especial de inversión China, para la extracción de petróleo y gas que aumentan la presión sobre la construcción de infraestructura adecuada para conectar la subregión andino amazónica a la región del pacífico, lo cual explica la necesidad del Acuerdo con la guerrilla. (Porto-Goncalves, 2018).

Así que el llamado pos conflicto es un periodo para el cual el gobierno nacional ha venido preparándose, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz y su objetivo era negociarlo para ingresar a una fase donde la insurgencia no sea el obstáculo para el desarrollo de un proyecto económico transnacional, básicamente porque entregaba las armas, pero en lo que respecta a la Proyección Económica de la Paz, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que los cambios del modelo económico y político debían alcanzarse en las urnas, no en el Acuerdo. (Rebollo, 2012) Por ésta razón, se desarrollaron leyes que hacían posible la radicalización del neoliberalismo agrario como la ley ZIDRES, así como la construcción de infraestructura que pasa por la Amazonía (tramo colombiano de la marginal de la Selva) (ANI, 2015); por el otro lado, un renovado interés en la



Amazonia y sus recursos que no significa otra cosa que expansión espacial del capital que ve en la Amazonía un lugar de desarrollo, situación a la que se ve enfrentada no sólo la Amazonía colombiana, sino todos los estados nacionales que tienen injerencia en ella: Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana donde la Amazonía es catalogada como reservorio natural, e incluso como fuente inagotable del capitalismo en expansión que la determina como un reservorio de recursos naturales inagotables.

Esta clave de lectura conservacionista, supone además una interpretación “ecológica” que busca la creación de áreas protegidas: Parques Nacionales y Reservas ecológicas que fue propia de las perspectivas conservacionistas con fuerte influencia de los Estados Unidos y las industrias relacionadas con la ingeniería genética y los nuevos materiales, que se constituyen en inversiones de nuevas commodities que son de particular interés para el capital financiero (Porto-Goncalves, 2018). En el caso de las commodities se trata de especulación de mercancías potenciales, más que de su explotación directa, como sucedía en la fase del capitalismo industrial, que buscaba directamente depredar las materias primas, se trata más bien de especular y conservar, no de extraer hasta agotar el suelo. Para otros sectores del capital transnacional importará más la explotación del subsuelo (hidrocarburos). Se puede decir, que con respecto a los recursos y su potencial explotación confluyen por lo menos tres tipos de intereses capitalistas: 1) ligado a la generación de infraestructura para el desarrollo de otras regiones económicas y para la salida de productos al extranjero 2) el del capital financiero que busca el potencial industrial futuro commodities para la generación de germoplasma y patentes y 3) el interés conservacionista en función del capitalismo verde, venta de bonos de carbono, por ejemplo.

Metodología: Investigación Histórica y Ordenamiento Jurídico, formas de develar los intereses en conflicto en el Parque Nacional Natural Los Picachos

Esta investigación se ha desarrollado teóricamente teniendo en cuenta el marco general del conflicto agrario colombiano, en especial su desenvolvimiento en las zonas de colonización, que representan el punto límite de la expansión de la frontera agraria colombiana, en este orden de ideas, las regiones de colonización analizadas desde sus referentes históricos muestran cómo se ha dado resolución a los conflictos agrarios por parte del estado colombiano y la forma como dicha resolución conduce a la marginación y el desplazamiento de las comunidades. Por ello, las comunidades y su devenir en la región de estudio plasman de manera concreta una evidencia de todo el conflicto agrario colombiano a lo largo del siglo XX y XXI.

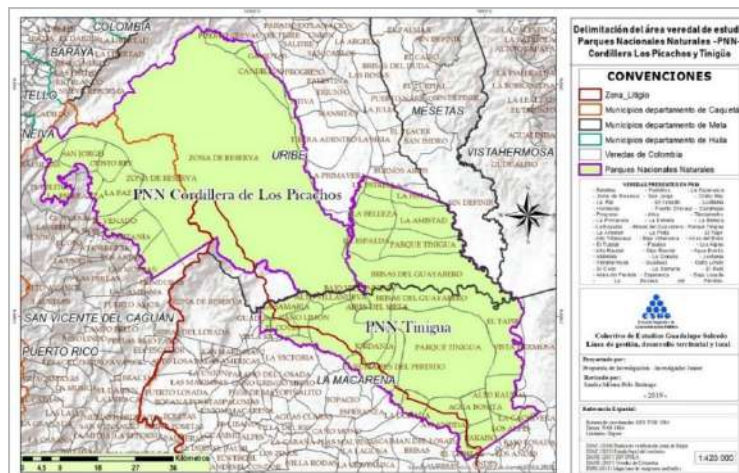


En ésta metodología, se busca desde un análisis histórico-estructural el registro de los elementos constitutivos del desarrollo agrario colombiano, marcando las formas en que se desenvuelve, los métodos utilizados por el estado para su resolución y cómo estos son los factores detonantes de mayor conflictividad. Por otra parte, se considera que ésta conflictividad se exagera cuando se ejercen acciones violentas amparadas jurídicamente donde las comunidades se encuentran limitadas en su defensa.

Al ser este un estudio en una región que no ha tenido antecedentes en investigación, es decir, no se ha explorado el problema de los campesinos colonos ganaderos de los Parques Nacionales Naturales, se ha recurrido a la realización de un trabajo de campo exploratorio, que ha organizado temas sobre la tenencia de la tierra y el uso del suelo a fin de establecer como se ha estructurado el problema en este lugar y periodo. Las formas de análisis se extraen de un hecho de reciente: el operativo militar conocido como operación Picachos y desde él se ha inducido su correlación con el marco teórico general.

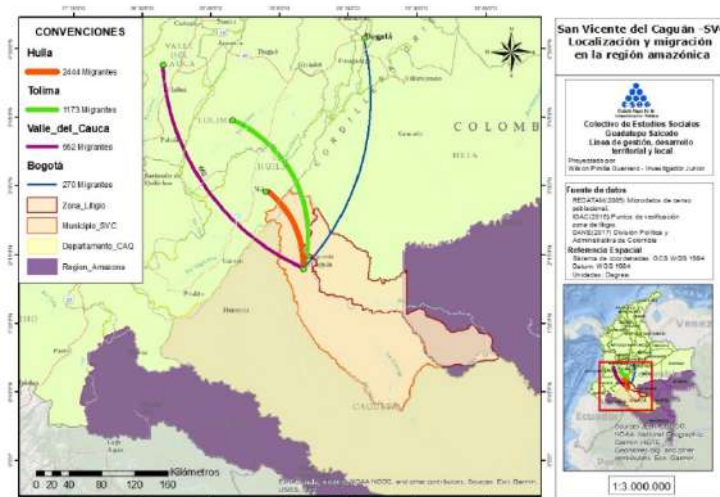
Resultados: El neoliberalismo en el Parque Nacional natural Los Picachos en el Pos conflicto

El Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos fue declarado Parque Nacional Natural, mediante el Acuerdo 018 del 2 de mayo de 1977, acuerdo expedido por el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA). Este Parque cuenta con 286.000 hectáreas aproximadamente, según el mencionado acuerdo, y se ubica en la región Amazónica Colombiana (Mapa 1). Desde su declaración quedaban prohibidas las actividades diferentes a las de conservación, investigación recreación, educación, cultura y en especial la adjudicación de baldíos, mientras que se declaraba explícitamente la intención de conservación de la naturaleza, y los recursos.





En el momento en que fue declarado Parque esta área ya se encontraba ocupada por colonos, toda vez que en el Acuerdo se reconoce la potestad de hacer expropiaciones por parte del INDERENA cuando sea necesario, a fin de cumplir con los fines de administración y manejo del Parque. (INDERENA, 1977). Esta declaratoria de Parque, pretendía incorporar el área como parte de la zona de especial protección, imponiendo así una visión conservacionista y proteccionista que parte de dos supuestos que es necesario considerar: el primero de ellos es la idea de la naturaleza prístina que ha de conservarse de esta manera, donde los habitantes del territorio son vistos de forma permanente como agresores de la naturaleza y depredadores de recursos. Esto quiere decir que a la vez que se escogen lugares para conservar, se consideran personas que habitan en Parques que inmediatamente quedan calificadas de agresores de lo que ha de conservarse: la naturaleza prístina. El segundo elemento, es que la relación hombre naturaleza se distorsiona como una relación históricamente construida, por lo cual, los Parques se consideran lugares sin presencia humana, desconociendo que realmente los actualmente llamados Parques Nacionales Naturales son lugares que ya han sido habitados desde antes de la expansión del estado territorial (Martinez-Allier, 2009). En este orden de ideas, podemos decir que los Parques son más bien imposiciones de un estado territorial que despliega sus intereses sobre los territorios y su ocupación en este sentido lo permitido y prohibido en Parques, viene trazado por los intereses que en dicho estado se expresan. Cuando se revisa el proceso histórico, es claro que los poblamientos en Parques Nacionales Naturales en la región del Caquetá correspondieron a procesos de desplazamiento campesino permitido por parte del Estado, para no afectar la gran propiedad rural. Esta tendencia no es exclusivamente colombiana, pues el proceso de colonización como anti-reformista agrario, se ha presentado en Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. (Porto-Goncalves, 2018). A ese proceso se le conoce como colonización que en el caso colombiano tuvo un periodo de auge posterior a la violencia de mediados del siglo XX y para la región nororiental de Caquetá, a la que se refiere este análisis, pone de presente que las migraciones provenían de la expulsión de campesinos de regiones donde se consolidaba la propiedad terrateniente, como en el departamento del Huila. (J. Jaramillo, L. Mora y F. Cubides, 1987) Igualmente, las poblaciones desplazadas provenían de la consolidación latifundista del Sur del Tolima e incluso de Bogotá, como se puede observar en el Mapa 2.



Mapa 2. Migraciones región amazónica y municipio san vicente del caguán.

De esta manera el estado colombiano aceptó procesos de migración interna, para luego intentar un control del territorio y las colonizaciones desde la década de los setenta del siglo XX, conocidas bajo los proyectos de colonización dirigida Caquetá 1 (1963-1971) y Caquetá 2 (1971-1976). Pero dichos proyectos sirvieron en realidad para acentuar los rasgos latifundistas de las regiones de origen, así las cosas, el estado terminó asignando latifundios, con proyectos ganaderos mientras que las familias de colonos, sin apoyo estatal se dedicaron a la quema y la tala de bosques, para vivir a la orilla del río, por lo cual, estos colonos crearon economías de subsistencia como formas de operación de las primeras colonizaciones. (J. Jaramillo, L. Mora y F. Cubides, 1987, pág. 137). Este proceso colonizador llevado a cabo por comunidades campesinas consolidó formas específicas de producción y consumo basadas en una economía campesina que funcionaba de la siguiente manera: La pudrición del bosque devastado podía durar hasta 3 o 4 años, luego por la dificultad de sacar los productos, se hicieron cultivos de pan coger y se vendieron pieles de animales, que eran rentables, en especial porque eran bien pagas por comerciantes. (tigrillos, tigres, tortugas). Igualmente, los comerciantes ayudaban a atraer familias que más tarde serían futuros clientes de sus negocios, que subsistían por la traída de mercancías; además del comercio, la ganadería era vista como una actividad rentable, pues resistía el agotamiento del suelo amazónico, luego de los cultivos de subsistencia. Igualmente, el hacha y el machete fueron los instrumentos que caracterizan el modelo tecnológico del colono del Caguán en los setentas, en las fincas predominaba el trabajo familiar, poco trabajo asalariado y más trueque de trabajo a vuelta de mano, es decir, aquel trabajo donde unos colonos



ayudaban a los otros a partir de hacer trueque de trabajo, “tú me ayudas, yo te ayudo”. Tal como se ha descrito, se trató de una colonización más bien de subsistencia, forma inestable de la colonización que dio como resultado la fácil inserción de economías ilegales como la coca. (J. Jaramillo, L. Mora y F. Cubides, 1987, pág. 140)

La coca dinamizaba la economía del Bajo y medio Caguán, desde inicios de la década de los ochenta, situación que se proyectó hasta inicios de los noventa, lo cual generó inicialmente la represión por parte del Estado como medida extrema para controlar el territorio, además de la fumigación con glifosato con miras a detener la expansión del cultivo, la respuesta de las comunidades fueron las marchas cocaleras, de 1996, que llevaron al gobierno a probar otra fórmula, que financiada por el Banco Mundial, llevaría a un control de la población sin represión: la creación de las zonas de reserva campesina, una de ellas fue implementada en la zona del Pato-Balsillas, al nororiente del departamento de Caquetá, el fin era frenar el proceso colonizador de la Amazonía, cerrando la frontera agraria. La propuesta del gobierno se materializó a través del INCORA que compró y parceló la hacienda Avisinia para instalar una Zona de 145.000 has. en las que vivieron aproximadamente 7.500 campesinos, la otra perspectiva fue titular tierras (vía sustracciones) en la Zona del Parque Nacional Natural Los Picachos (Fajardo, 2018) para fijar otro modelo de colonización, distinta a la cocalera. De hecho se puede sostener que la colonización cocalera no fructificó bajo ésta figura de la Zona de Reserva Campesina, pero donde no se implementó, el auge de la economía ilegal de la coca aún continúa. La otra ventaja de la zona, nororiental del Caquetá, es que se encuentra más cerca de las vías de acceso, lo cual facilita la comercialización de productos, igual las condiciones del suelo son mejores, al ubicarse en el piedemonte amazónico, condición de la que no gozan el medio y bajo Caguán.

Teniendo en cuenta el proceso anteriormente descrito, se puede afirmar que las hoy denominadas zonas de frontera son espacios que han sido ocupados por poblaciones desplazadas por la violencia y en este orden de ideas la región amazónica y en especial el departamento del Caquetá, el municipio de San Vicente del Caguán ha sido receptor de diversos núcleos de población que son resultado de un proceso de migraciones internas derivadas del conflicto y los movimientos anti-reformistas agrarios. Esto ha traído como consecuencia una dinámica de poblamiento estructurado desde las determinaciones del conflicto armado, dicho poblamiento ha intentado ser controlado por el estado a través de diversas medidas represivas, no represivas o una combinación de las dos.



Otra forma de control territorial del Estado han sido las llamadas políticas de Conservación en los Parques Nacionales Naturales en Colombia diseñadas para recobrar el control territorial, lo cual explica su elaboración desde un conocimiento técnico que excluye y no reconoce las circunstancias particulares de las comunidades locales que viven dentro o alrededor de los PNN (Durán, 2009, pág. 60). Vista de manera exclusiva como forma de control territorial la Política Pública de los PNN pueden llegar a tener efectos trágicos en sus poblaciones como de hecho está sucediendo en este momento con los habitantes campesinos del PNN cordillera Los Picachos, que son el eje de estudio de la presente investigación.

En síntesis, la estrategia conservacionista de Parques Nacionales Naturales en Colombia que se ejecuta bajo la idea de una naturaleza prístina, pone estas áreas como una especie de “museos in situ”, en los cuales los científicos podrían estudiar y preservar una naturaleza originaria, no intervenida por la mano del hombre, perspectiva que se encuentra bastante alejada de la realidad colombiana, que tiene en la colonización una salida efectiva para que el control de la propiedad rural anclado en la gran concentración territorial.

A este problema se suma la interpretación, aceptada tácitamente por el mismo estado, -a la hora de permitir la colonización espontánea- de la existencia de tierras baldías en estas zonas, pues un bien baldío sería susceptible de ser asignado por el estado en propiedad. La contradicción es evidente, el estado permite la expansión de la frontera agraria en la práctica, pero en el derecho se penalizan las conductas de ocupación territorial. Esta contradicción ejerce un “efecto dramático” (Durán, 2009) sobre las vidas de los campesinos colonos de estas tierras y se convierte en el caldo de cultivo de la conflictividad actual. En el caso que nos ocupa se han encontrado préstamos bancarios, cartas de colonos, distribución de esquemas de vacunación de ganado, que confirman que se aceptaba un proceso de asentamiento campesino, que hoy no se quiere reconocer.

Una vez llegados a este punto, cuando la conflictividad con las comunidades campesinas en Parques se hace evidente en términos de la planeación del territorio, la resolución es represión combinada con estrategias de aparente planeación participativa que se materializa en el diseño mismo de la política pública donde a pesar de declararse públicamente que la participación sería su nota distintiva, ésta se manifiesta sólo de forma circunstancial, no vinculante y sometida al saber técnico.³ (Díaz, 2018).



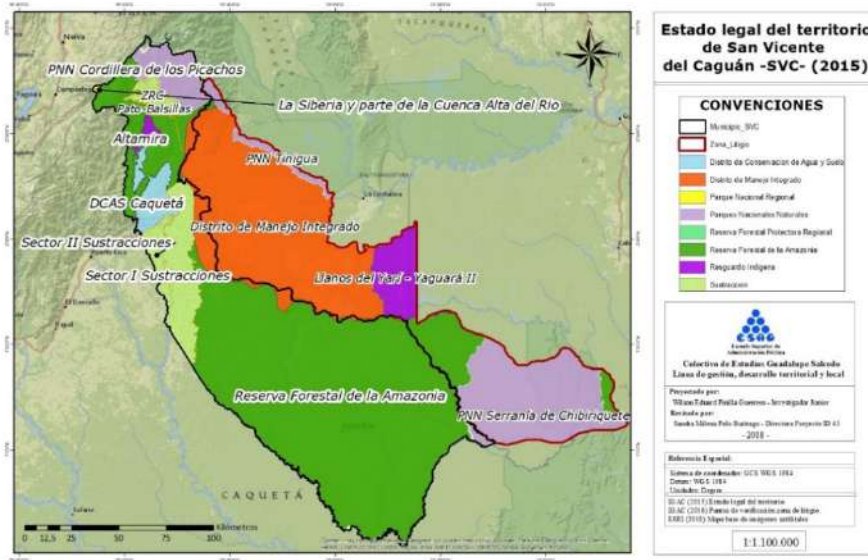
En el caso que nos ocupa que es el de los PNN Picachos, este se delimitó como zona de protección forestal en 1977, pero antes de la delimitación y de ser declarado PNN, estaban ocupado por familias y no se tuvo en cuenta la presencia de colonos al momento de planear esta zona, más que como sujetos de indemnización vía mejoras en las tierras (Acuerdo 018 , 1977), esto no quiere decir, que a posteriori no hayan sido ocupados de facto, pues de nuevo la presión de la violencia volvió a poblar éstas zonas “selva adentro” y si bien es cierto el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, considera estas zonas, como zonas de protección con influencia rural compartida con campesinos, también se indica que este espacio sólo será compartido hasta dirimir la zona de conflicto con el municipio de la Macarena, es decir que hasta que no se solucione el conflicto de los límites entre el departamento de Caquetá y el Meta no se podrán tomar decisiones sobre el territorio.

Esto pone en riesgo a la población y genera afectación a los campesinos que fruto de la inseguridad jurídica se arriesgan a las acciones de desalojo y extinción de dominio de los colonos habitantes del lugar, proceso que históricamente ha sido una forma clásica del campo colombiano donde el colono abre frontera, para que más tarde el terrateniente haga apropiación de la tierra, al menos así se dio en la Costa Atlántica colombiana, lo curioso es que aunque esto no haya sido planificado así, en la actualidad con el desplazamiento de campesinos colonos ganaderos en el Parque Nacional Natural Los Picachos, el proceso parece repetirse con características similares.

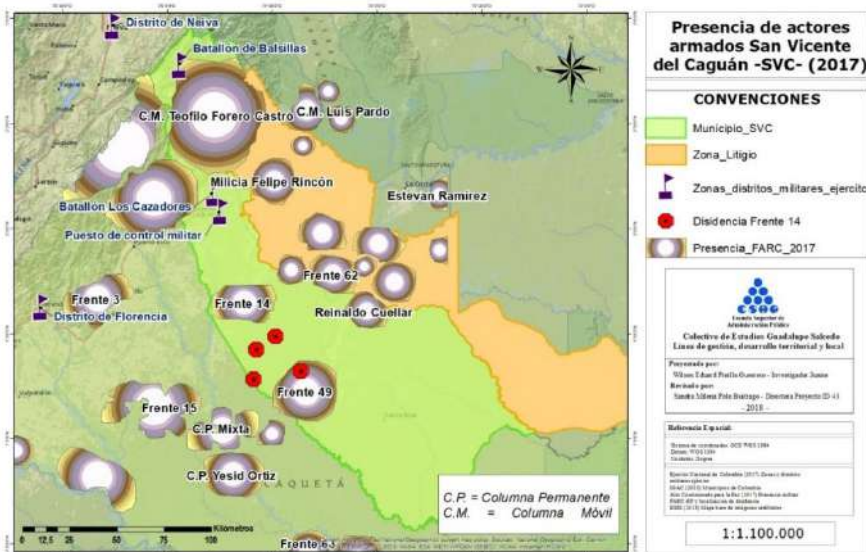
El proceso de las comunidades en este parque a la luz de la expansión del neoliberalismo, incorpora nuevos ingredientes que explican, en primer lugar, por qué no se ha detenido la expansión de la Frontera Agraria en dicho Parque. En primer lugar, es importante mencionar que el Parque se encuentra al oriente de la zona de reserva campesina declarada como tal en 1996 y que como ya se indicó debía evitar, o al menos controlar, el proceso de expansión de la frontera agraria. Si hemos mencionado que los campesinos han continuado “abriendo selva” hacia la región de la Macarena, es porque indudablemente este es un proceso histórico, que se genera por el crecimiento de la población, es decir, por el crecimiento de la economía campesina que encuentra en la tierra una forma de solucionar el crecimiento poblacional, los hijos de campesinos continúan abriendo monte para solventar el crecimiento natural de sus familias, proceso que no pueden evitar los campesinos ya establecidos como propietarios en la zona de reserva campesina del Pato-Balsillas, por eso de entrada resulta absurdo suponer, al menos para esta zona un cierre de la Frontera Agraria por vía del autocontrol campesino.



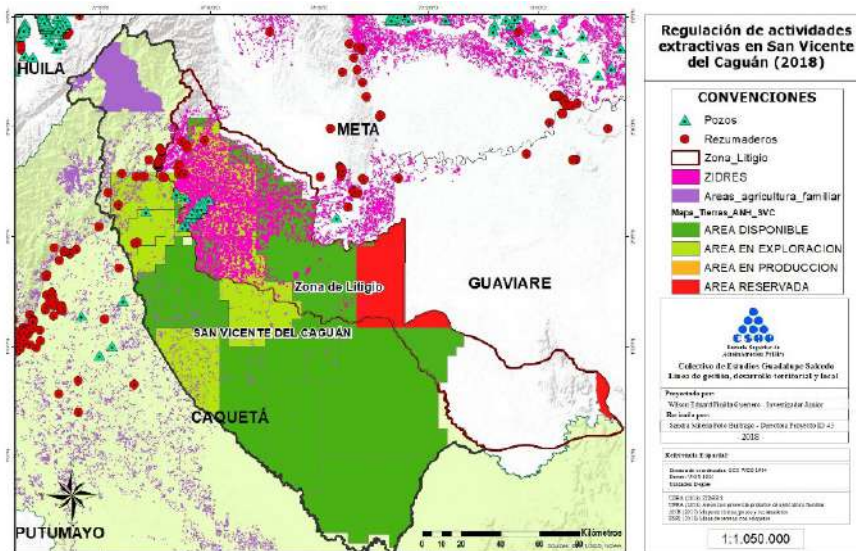
En el mapa se muestra la ubicación de la ZRC y el Parque Nacional Natural Los Picachos, solo para poner en evidencia que la expansión no puede ser controlada por los campesinos habitantes de la ZRC del Pato- Balsillas. (Mapa 3)



Otra situación que se ha generado es que con el auge del neoliberalismo, dicho modelo pugna por la expansión de la frontera agraria produciendo la aceleración de los procesos de deforestación pues el mercado internacional, solicita a la amazonia para la extracción de materias primas y de hidrocarburos, poniendo en contradicción los intereses de las comunidades que han habitado los Parques Nacionales Naturales con actividades ganaderas y los intereses de las multinacionales de hidrocarburos, y nuevos intereses capitalistas mineros transnacionales ligados al estado colombiano. Estos intereses se pueden clasificar por lo menos en tres grupos: por un lado, está la construcción de la vía marginal de la selva que pasará en una de sus tramos por el Parque Nacional Natural Picachos, a fin de dar salida a los productos de las llamadas zonas de Interés y desarrollo rural económico y social ZIDRES, que son proyectos de agronegocios financiados por medio de la inversión de gran capital nacional y transnacional (Polo, 2016), estas zonas son proyectadas por la Unidad de Planeación Rural en la zona limítrofe de los departamentos del Meta y el Caquetá (mapa 5); en segundo lugar, el interés del estado por recuperar la zona de antigua influencia de la guerrilla de las FARC (en especial con la Columna Móvil Teófilo Forero y el Frente 14 de las FARC, que conforman hoy una parte de la llamada disidencia) (mapa 4) y un tercer interés tiene que ver con la conservación de Picachos como zona exclusiva de conservación (capitalismo verde). (Mapa 5)



Mapa 4. Presencia de grupos Armados.



Mapa 5. Intereses económicos en la zona de PNN Tinigüa y Picachos.

El último factor que hay que mencionar, es que en las comunidades campesinas que habitan en el Parque Nacional Natural Los Picachos, han establecido actividades predominantemente ganaderas, propias de la región del piedemonte caquetense desde finales de la década de los ochenta, con una indefinición en la propiedad de la tierra, que da como resultado que varias de estas familias sean tenedoras de ganado, y necesitan alquilar tierras para mantenerlo, o viceversa, tiene tierra pero no ganado, lo cual da lugar a una expansión ganadera que se sostiene con formas de producción de ganado extensivas, pero que no necesariamente son propiedades ganaderas gran terratenientes donde las cabezas de ganado y la propiedad de la tierra son de un mismo tenedor, más bien se trata de formas intermedias de la economía campesina, similar al



trabajo de vuelta de mano, que consiste en una forma de ayuda mutua, un fincarío pone su finca y otro el dinero para invertir en ganado. (SVC, 2018). Son estas formas las que fueron atacadas el pasado 26 de octubre de 2018, en la llamada operación Picachos que consistió en un operativo que se ejecutó a pesar de que la comunidad se encontraba en procesos de negociación con las autoridades de Parques Nacionales Naturales, la secuencia de hechos fue la siguiente: El 14 de septiembre, líderes campesinos de la zona del Parque Nacional Natural los Picachos se habían reunido con Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, para reactivar una mesa de diálogo que habría de buscar soluciones al problema de los campesinos que se encuentran habitando en el Parque Nacional Los Picachos. No obstante, a pesar de encontrarse abierta la negociación, no se volvió a convocar una reunión; al contrario, los campesinos fueron víctimas de un operativo efectuado el 26 de octubre de 2018: aproximadamente 1.000 hombres pertenecientes al ejército Nacional, Policía Nacional y el ESMAD, ingresaron al Parque a fin de dar cumplimiento a una diligencia judicial que buscaba procesar a campesinos colonos que son considerados como invasores. En dicho operativo, fueron capturadas y judicializadas cinco personas, acusadas como presuntas responsables de invasión, deforestación y ganadería extensiva al interior del Parque. En el operativo se causaron daños en las casas de los colonos y en los establos donde tenían el ganado. En esta zona habitan, desde hace más de veinte y treinta años, familias completas, situación que no fue considerada al momento de la operación, incluso se utilizaron artefactos explosivos para desarrollar el operativo; también se produjo, intencionadamente, maltrato animal al dejar entre 40 y 50 terneros que no fueron ingresados en las camionetas del decomiso, pero tampoco se les dejó con vacas lecheras ya que esos animales no podrán sobrevivir sin amamantar, los campesinos advirtieron de esta situación al comandante del operativo, quien, burlándose de ellos, hizo caso omiso. Es importante anotar que se decomisaron aproximadamente 800 semovientes, que se encontraban en las propiedades de 5 tenedores (fincarios), los semovientes fueron subastados y llevados al municipio de Acacías en el departamento del Meta. Luego del operativo, se había acordado una nueva reunión con la directora de Parques Nacionales, para el 12 de diciembre, pero la reunión, nuevamente fue cancelada. Los campesinos colonos de la zona ocupada en Parque Natural Nacional Los Picachos, afirman que allí se encuentran entre 300 y 400 familias; dicha situación amerita más una solución negociada entre el gobierno nacional y las comunidades y no una solución de fuerza, ya que esto agravaría la situación de derechos humanos en la zona, pues atentaría contra la sobrevivencia de los campesinos colonos y sus familias.



La solicitud de los campesinos es que cesen los operativos y lograr una conciliación, en una Mesa de Concertación, que permita una solución digna, concertada y voluntaria, teniendo en cuenta que son comunidades, no personas individuales.

Reflexiones finales

Las comunidades campesinas habitantes de los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera Los Picachos, dicen llevar habitando estos territorios aproximadamente treinta años o incluso más. Actualmente, estas comunidades han sido objeto de iniciación de un proceso de desalojo por parte del Estado colombiano, representado en la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, adscrita al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y también por la Fiscalía General de la Nación. El argumento básico para este desalojo es la ilicitud de la presencia de las comunidades en los parques dada la prioridad del uso del suelo aparentemente para la Conservación (Miranda, 2019). El Estado pretende desalojar a estos campesinos en el contexto del desarrollo de políticas neoliberales que tienen varios intereses que ya han sido mencionados a lo largo de este escrito: por un lado, la construcción de infraestructura vial desde el municipio de Colombia en el Huila, hasta el municipio de la Uribe en el Meta, para facilitar la salida de productos a través de proyectos ZIDRES, la explotación de hidrocarburos, la reserva forestal para efectos de conservación con miras a la implementación de mercados de futuro el capitalismo verde (Betancourt, M; Hurtado, L; & Porto-Goncalves, C. , 2015, págs. 30-31); de alguna manera, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, ha hecho que esta zona de antigua influencia de las FARC sea ahora más vulnerable a este avasallamiento neoliberal. Los campesinos que hoy pueblan estas regiones ya habían sido objeto de un desplazamiento anterior, hace más de treinta años, en el contexto de la violencia política de medio siglo XX (Vásquez, 2015, pág. 50), es decir, el contexto del desarrollo del modelo de sustitución de importaciones. Llegaron de otras regiones a colonizar el Caquetá. El proceso de desarrollo del nuevo modelo económico, el neoliberalismo, requiere, para su mejor arraigo, varias condiciones en el agro, entre ellas la extinción de las FARC; pues el nuevo horizonte económico, dictado por el capital transnacional, requiere el desarrollo de infraestructura, carreteras, proyectos agroindustriales y explotación de hidrocarburos en estas antes ignotas regiones. Logrado el cometido político de sacar a las FARC del escenario de este territorio, ahora codiciado por el capital neoliberal, el otro movimiento del Estado, del ministerio del medio ambiente en concreto, ha sido el de expulsar, por segunda vez, a estos campesinos de los territorios



de los parques. El argumento inmediato, para justificar estas acciones, es la condición de ilegalidad de los campesinos; sin embargo, el Estado mismo, que ahora los expulsa de los parques, parece olvidar que él fomentó esa colonización, a través de sus agencias de entonces, el INCORA y la Caja Agraria, otorgando créditos e incluso otorgando cartas de colonos. Los ha reconocido, pero repentinamente, en un acto de contricción, se arrepiente y comienza su expulsión.

Toda la anterior situación implica, de forma directa, una condición de desarraigo de unas comunidades campesinas a lo largo de, al menos, dos generaciones. Para la sustitución de importaciones, estos campesinos no tenían cabida en las regiones del centro; y en el proceso de apropiación primaria, fueron expulsados hacia la periferia de la frontera agraria. La apropiación primaria no termina aún y, por tanto, para el neoliberalismo se hace necesaria una segunda expulsión.

El estado sostiene entonces que hay dos actividades ilegales, que a pesar de haberse estructurado históricamente por las difíciles circunstancias que rodean a las economías de los campesinos colonos, ahora resulta que el estado las persigue, no sólo por ser abyectas, sino porque su abyección se da con respeto a los intereses capitalistas imperantes en este nuevo periodo neoliberal sin defensa de las FARC. Por último, frente a la opinión pública el proceso histórico se desconoce por completo, y el estado presenta a través de los medios de comunicación a los campesinos como aquel tipo de comunidad que se ha dedicado sistemáticamente a depredar el medio ambiente, a atacar a los defensores de aquella selva prístina, pulmón del mundo, patrimonio de la humanidad que hoy padece por culpa de las comunidades campesinas que sin piedad destrozan el medio ambiente, sin duda aquí se cuenta sólo la mitad de la historia, la mitad que conviene el neoliberalismo en su fase actual, en el marco del pos conflicto colombiano, que dejó de declararle la guerra a las FARC, para declarársela a los Campesinos colonos del parque Nacional Natural Los Picachos.

Notas

¹ Este artículo Forma parte del estado del Arte de la tesis doctoral Titulada: Neoliberalismo en el campo colombiano: ser campesino (colono) en el siglo XXI. El caso de las comunidades campesinas de los parques Nacionales Naturales Tinigüa y Picachos en el marco del Posconflicto.



² Estudiante del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro del Grupo de Investigación Vivencias del mismo doctorado.

³ Este es el caso del actual Programa de Parques con gente, que hasta ahora no ha intentado una negociación con las comunidades campesinas del Parque Nacional Natural cordillera Los Picachos. Negociaciones que se rompen o incumplen constantemente para dar paso a la represión como se verá más adelante.

Bibliografía

Acuerdo 018 . (1977). INCORA .

ANI. (26 de 11 de 2015). *Agencia Nacional de Infraestructura ANI*. Obtenido de <https://www.ani.gov.co/article/plan-maestro-de-transporte-2015-2035-el-horizonte-de-colombia-vargas-lleras-21832>

Betancourt, M; Hurtado, L; & Porto-Goncalves, C. . (2015). *Tensiones Territoriales y Políticas Públicas de Desarrollo en la Amazonía*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO.

Carrera, I. (2017). *La Renta de La tierra. Formas, Fuentes* . Buenos Aires : Imago Mundi.

INDERENA. (1977). Acuerdo 018 de 1977. Bogotá, Colombia.

J. Jaramillo, L. Mora y F. Cubides. (1987). *Colonización, Coca y Guerrilla*. Bogotá: Alianza Editorial Nacional.

Juaneda, C. (abril de 2018). El Banco Mundial y el Financiamiento de la Política de Desarrollo Territorial de Colombia. ¿De quién es la tierra, de todos modos? Wasington D.C. : Centro de Información del Banco Mundial.

Martinez-Allier, J. (2009). *El Ecologismo de los Pobres*. Barcelona : Icaria.

Miranda, J. (14 de Enero de 2019). Intento por recuperar parques naturales puso al descubierto un gravísimo conflicto de tierras. *Informe Especial: Operación Picachos* . (M. Pulido, Entrevistador) Caracol. San Vicente del Caguán. Obtenido de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/intento-por-recuperar-parques-naturales-puso-al-descubierto-un-gravisimo-conflicto-de-tierras>

Polo, S. (2016). Las Decisiones del estado a Favor del Gran Capital: el problema agrario en colombia siglos XX y XXI. *Nova et vetera* , 31-42.

Porto-Goncalves, C. (2018). *Amazonía: Encrucijada Civilizatoria. Tensiones Territoriales en Curso*. La Paz : CIDES-UMSA.

Puello-Socarrás, F. (2008). *La Nueva gramática del neo-liberalismo: Itinerario teóricos, trayectorias intelectuale, claves ideológicas* . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.



Rebollo, E. (16 de 11 de 2012). Santos: El Modelo Económico y Político no está en Discusión con las FARC. Bogotá, Colombia. Recuperado el 30 de 08 de 2019, de <https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3>

Rubio, B. (2012). *Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. México D.F: Plaza y Valdés.

RUNAP. (5 de agosto de 2019). Obtenido de <http://runap.parquesnacionales.gov.co/acerca>

Salgado, H. (2012). *El Campesinado de la Amazonía colombiana: construcción territorial, colonización forzada y resistencias. Tesis de Doctorado*. Montreal: Facultad de Estudios Superiores y Postdoctorales. Universidad de Montrael.

SVC, V. (15 de septiembre de 2018). (A. Julio, Entrevistador)

Vásquez, T. (2015). *Territorios, Conflicto Armado y Política en el Caquetá: 1900-2010*. Bogotá, D.C. : Ediciones UNIANDES.

Villareal, C. (1999). Conflictos en forestería comunitaria en América del Sur. . En O. P. (editor), *Comunidades y Conflictos Socio Ambientales. Experiencia y Desafíos en América Latina*. (págs. 123-140). Quito : Abya-Yala.



Escuchando al otro (Exguerrilleros de las FARC- EP): Desafíos de la educación en la construcción de la paz y territorio

Luz Maritza Sierra Fandiño¹
Marian Lorena Morales Vega²
Maria Angelica Molina Albarracin³

Resumen

Este trabajo surge de la reflexión de la práctica pedagógica integral, propuesta en la Línea de Investigación Pensamiento Crítico Política y Currículo del Programa de Licenciatura de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, consistió en una intervención en el campamento Mariana Páez, en el ETCR (Espacio Territorial de Reincorporación) ubicado en Mesetas-Meta, la cual buscaba reconocer las experiencias, dificultades y temores de los ex combatientes de las FARC-EP, quienes en su mayoría son de origen campesino, pobres y/o indígenas, y quienes además, en muchos casos sufrieron la violencia y/o desplazamiento, generó falta de oportunidades y dificultad de acceso a la educación, lo cual tuvo como consecuencia; que, en muchos casos, tomaran la decisión de hacer parte de este movimiento, aumentando el número de integrantes de la guerrilla.

Se problematizan los procesos y estrategias educativas, que se evidenciaron en el ETCR, como son: becas en Cuba, cursos de escoltas, desminado, procesos de validación; formación que en todo caso no aborda varias de las problemáticas de origen; en tanto persiste una perspectiva desterritorializada que invisibiliza los saberes y las prácticas culturales de las comunidades de origen perpetuando así, la problemática inicial. Es importante señalar que los integrantes de este grupo por muchos años se movilizaban por campos, selvas y montañas generando identidad y apropiación por la defensa del territorio, hoy en día el problema de la deforestación en Colombia es evidente toda vez que varios actores se quieren apropiarse de espacios que en el pasado tuvo presencia el grupo guerrillero de las FARC- EP.

Palabras clave

Territorio, excombatientes FARC-EP, identidad, deforestación

Introducción

El origen del conflicto en Colombia es complejo y tiene profundas raíces, (Fajardo, s.f., p.67). menciona que una de las principales causas del conflicto en Colombia y el origen de las guerrillas, se suscitó por la concentración de la propiedad agraria, la lucha por la



tierra, la desigualdad; que se manifiesta en el empobrecimiento de los sectores sociales más débiles, lo que a su vez generó el desplazamiento de la población más vulnerable del país. Otros autores como (Aguilera, 2010, p.9). resaltan que en respuesta a esta situación en 1964 oficialmente se conforman las FARC –EP como grupo guerrillero, integrado principalmente por campesinos, muchos de ellos, provenían de zonas en las que la presencia del estado era escasa. Luego de cerca de 50 años de guerra, el 24 agosto del 2016 se firma el acuerdo de paz, después 4 años de dialogo; los cuales iniciaron en el 2012. Ante este escenario, algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional comprometidos con el país, proponen y desarrollan proyectos con la comunidad de ex guerrilleros, contribuyendo de esta manera a los procesos que permitieran aportar a incorporación con la sociedad; contribuyendo de esta manera, al reconocimiento y formalización de los acuerdos de paz, a los que se acogieron algunas personas de que hacían parte de la guerrilla; para lo cual fue necesario, que la maestra en formación se desplazara hasta el territorio, identificando el contexto y desarrollando un dialogo abierto con los integrantes de esta comunidad, reconociendo de esta manera los saberes, intereses, sueños, que estas personas y sus familias expresaban en la cotidianidad, esta propuesta pedagógica fue poco convencional, ya que amplió la perspectiva de posibles escenarios en los que también se puede realizar propuestas entorno a las situaciones que se suscitan en el territorio nacional, en los que hay un reconocimiento de los saberes de las comunidades, aprendiendo del otro, desde la escucha de sus vivencias, con el propósito de contribuir en sus procesos de formación con los integrantes de la comunidad, los cuales han sufrido de primera mano, el horror de la guerra.

Finalmente, es importante resaltar que aún queda mucho para que el acuerdo pactado se cumpla y sea exitoso, evidenciando que además del compromiso de los excombatientes, requiere del compromiso real de todos los actores de la sociedad.

Fundamentación del problema

El Programa Curricular de Licenciatura en Biología PCLB, establece la realización de la práctica pedagógica, la cual realizan los profesores en formación, cuando cursan 7° y 8° semestre, ésta pretende de acuerdo con el Proyecto Curricular DBI (2010) “generar procesos de interacción dialógica constructiva con sus educandos y grupos poblacionales con los cuales se relacionen” (p. 27).



Imagen 1. Ubicación del Municipio Mesetas Meta - Colombia.

Adaptado por Sierra, M. de <https://igac.gov.co/noticias/mesetas-uno-de-los-municipios-del-meta-en-los-que-renacera-la-paz>

Sin embargo, sigue siendo común que esta se desarrolle en colegios, eventualmente se diversifican escenarios, muchas veces por el interés que algunos estudiantes muestran ante situaciones emergentes, como ocurre en esta experiencia, la cual se realizó en el campamento Mariana Páez, en el ETCR (Espacio Territorial de Reincorporación) ubicado en Mesetas-Meta, con excombatientes de las FARC- EP (Imagen1), siendo este un contexto, en el que se encuentra una comunidad poco convencional al escenario de practica que se realiza en la formación de educadores.

Se propuso un ejercicio que buscaba reconocer la visión que esta población tiene acerca de la naturaleza el interés por esta temática se origina en razón a que la mayoría de los excombatientes tienen origen rural (campesinos, indígenas, estudiantes e intelectuales) lo cual hace que el conocimiento por su territorio fuese profundo, para lo anterior fue necesario incluir la escucha como parte fundamental del proceso de comunicación, construir diálogos desde la cotidianidad, reconociendo a los excombatientes, desde su experiencia, sentir y proyección lo que facilitó la comprensión de las situaciones que narraban.

Es importante mencionar que durante la época en la que se encontraban vinculados con el grupo guerrillero, caminaron y habitaron lugares rodeados de naturaleza, entre montañas y senderos, siendo esta la razón por la que ellos conocen el territorio nacional,



incluyendo muchos lugares en los que aun hoy en día, la presencia del estado es reducida, esta coyuntura, generó que algunos lugares del territorio nacional en el hoy se evidencia interés económico, no pudiesen entrar terratenientes y hacer explotación de los recursos naturales que en estas zonas se hallan, sin embargo, resulta contradictorio que durante la época en que se encontraban activos como grupo guerrillero, se presentaron voladura de oleoductos, que a su vez acarrea derrame de petróleo, además de la siembra de cultivos ilícitos lo que ocasiono consecuencias graves para el ambiente, en el 2015, la revista semana expone la ambivalencia que se refleja ante esta situación.

En este punto es importante recordar que la conformación de las FARC-EP se originó por la disputa por la tierra entre hacendados y campesinos, este tema fue fundamental en la firma de los acuerdos de paz, por lo que desde la academia y otros sectores surgen inquietudes acerca de cómo se materializarán los compromisos allí referidos (Morales, Sierra y Molina 2018, p.129). refieren “En la actualidad, se evidencia la quema incontrolada de grandes extensiones de tierra para su posterior uso agropecuario, además del interés que algunos actores por aumentar las áreas de los cultivos ilícitos”. Situación que resulta incongruente después de la firma del acuerdo de paz.

Finalmente son muchas las relaciones que los integrantes de este grupo han tenido y mantienen con la naturaleza y el territorio, lo que suscita interés en la comunidad académica, ya que es una oportunidad de comprometerse y aprender con los integrantes de esta comunidad.

Metodología

La propuesta se enmarcó en la realización de una práctica integral con la comunidad de ex combatientes los cuales se encontraban ubicados en la una ETCR (Espacios territoriales de capacitación y reincorporación - Mariana Páez, (Foto 1) esta se desarrolló durante tres meses, y se evidencia tres fases las cuales se explican a continuación.

Fase inicial: Reconocimiento del contexto.

Se realiza un valoración del contexto en el cual se tuvo en cuenta el entorno y los habitantes de la ETCR, allí se evidenció que no había uniformidad en cuanto a los niveles de escolarización de los participantes, inclusive algunos de ellos mencionaron que hacía más de 20 años que no se encontraban vinculados con instituciones de educación formal, no obstante, recién se firma el acuerdo se presenta interés de varias

organizaciones e instituciones que buscaban brindar a los excombatientes, facilidades en la participación de cursos y diplomados; ayudas, que no se hicieron efectivas, ocasionando desilusión entre los excombatientes.

Fase de avance: Diseño e implementación de estrategias.

En respuesta a esta situación se plantearon estrategias que le apostaron a la realización de procesos formativos entorno a la visión de naturaleza y de territorio, todo esto consecuente con la realidad encontrada, fue entonces necesario que las actividades planteadas tuviesen cierta flexibilidad ya que se presentaron varias dificultades, entre las que se puede mencionar, en algunas oportunidades el número de participantes se reducía ante las ocupaciones derivadas del quehacer cotidiano, y los compromisos procedentes de los procesos de formación que aunque se realizaron, se enfocaron principalmente en la capacitación como escoltas y desminado, además de la formación enfocada a algunos procesos productivos que iban en contra de sus intereses, como lo era la siembra de transgénicos, lo que en definitiva no generaba un cambio sustancial en la vida de ellos y sus familias, otra dificultad, sumada a la variedad encontrada en los niveles de educación es que tampoco había infraestructura que facilitara los espacios de encuentro. Así las cosas el reto fue mucho más grande para la maestra en formación, quien a pesar de las dificultades, logró establecer un espacio dinámico; en ocasiones, se abordaron charlas desde el quehacer diario, por ejemplo cuando se preparaban alimentos, cuando se compartía en salidas al territorio, en los que observó el asombro y la admiración que la comunidad manifestó por la naturaleza, evidenciando que la existe mucha sensibilidad por el entorno aunque en el pasado habían caminado por senderos similares.



Foto 1. Entrada al ECTR antes ZVTN. Tomada por Morales, M. (2017)



Durante el desarrollo de la experiencia fue necesario aprender a escuchar como eje fundamental de los procesos educativos, esto permitió una aproximación que se reflejaba en la franqueza que se entretecía entre la comunidad y la maestra en formación, durante el desarrollo de los diálogos, se evocó la memoria que los ex combatientes tenían frente a algunos momentos del pasado, los cuales en algunas narraciones se conjugaban con las proyecciones, anhelos situaciones que habían vivido lo que coincide con lo que expresan Becerra, A., Infante, R., Cortes. R., (2012).

“La memoria se constituye en una materia para la interpretación del presente y de los proyectos de futuro, es una dimensión que debe buscar ser activada a favor de la consolidación de las memorias colectivas que permiten re-elaborar el actual conflicto político colombiano y contribuir a su solución”. (p. 298).

Esto originó que se tuviesen más argumentos para interpretar las realidades que los integrantes manifestaban, toda vez que hay miradas de la historia del conflicto que en ocasiones se desconocen, lo cual puede incidir en que en algunos momentos solo se conozca algunas dimensiones de los hechos ocurridos y se olvide la complejidad de estos, Al respecto (Halbwachs, 2002) enuncia

“Recurrimos a los testimonios para fortalecer o para invalidar, pero también para completar lo que sabemos acerca de un acontecimiento del que estamos informados de algún modo cuando, sin embargo, no conocemos bien muchas de las circunstancias que lo rodean.” (p.25).

Así mismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), realiza un análisis acerca del choque que ocurre en la sociedad cuando se ve en el espejo, ante las realidades crudas que ocurren en la guerra, evitando el dolor del recuerdo y la memoria, enfocándose más en la proyección de futuro. En este documento se expresa que

“la comprensión histórica a la que propendemos nace no solo de la revisión de archivos escritos oficiales, sino también de fuentes expresadas en distintos lenguajes que dan cuenta de las fuerzas sociales que también van configurando una trayectoria”. (p.11).

Adicionalmente, en algunos momentos de los diálogos se generaron algunos silencios los cuales resultaban cómplices y/o incómodos, desvelaban el recuerdo de un momento doloroso entre los participantes, al respecto, Alizarralde (2012) cita a Le Breton (2007), quien expresa:



“el silencio carece por sí mismo de significación, y se dota de esta significación según las políticas de su uso: de consentimiento y complicidad, mutismo con la intención de ocultar, de indiferencia, como acción de oposición, como respuesta por el desconocimiento o la ignorancia, o también como manifestación de censura.” (p 25).

Comprender la comunidad y el entorno fue clave para superar las dificultades que se presentaron durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sus formas de expresión, el uso de modismos, gestos y los silencios los cuales en su conjunto respondían a su sentir, reconocer estos aspectos es fundamental para los procesos de formación

Resultados y discusión

La comunicación asertiva es eje fundamental de la enseñanza, éste permite que se configure nuevas formas de comprensión de las realidades del otro, entendiendo que este, puede realizarse a partir de diferentes formas de expresión, lo que permite reconocer al otro, desde la diversidad, comprender y evitar la estigmatización la cual muchas veces ocurre por desconocimiento, muchos de los miembros de estas comunidades originariamente fueron campesinos y/o indígenas, personas que se vieron abocados a tomar las armas, por la violencia misma que había en su entorno, ocasionado por el maltrato y sometimiento que algunos terratenientes ejercían, esto originó que se organizaran, en las FARC – EP , siendo éste uno de los principales idearios de su conformación, “tierra para el que la trabaja”, el hecho de que varios integrantes de esta comunidad desde su infancia y algunos desde la adolescencia, se identificaran con la naturaleza y con su territorio, implica la comprensión de las dinámicas sociales, culturales y económicas; que se producen por la práctica del trabajo diario con la tierra, reconociendo que de ella se obtiene el alimento, que es la tierra la que provee, lo que hace que el territorio se deba conocer y defender, entendiendo entonces que la tierra es eje fundamental para la organización de la vida; lo cual establece una relación estrecha y cercana entre el sujeto, la comunidad y el territorio.

Resulta complejo abordar escenarios poco convencionales, en los que muy probablemente se encuentran sujetos con diferentes: edades, visiones, vivencias a no sería responsable ni profesional, pensar que solo en las aulas se puede enseñar y aprender, la Universidad Pedagógica Nacional, la educadora de educadores de Colombia, debe incentivar este tipo de estudios e investigaciones, es claro que se tiene un compromiso con la sociedad y son estos los retos en donde se debe procurar contribuir en la construcción de país, aunque esto implique un esfuerzo enorme.



Conclusiones

Los desafíos de educar en contextos no convencionales, son evidentes no solamente por la falta de infraestructura, o las diferencias en los niveles educativos, en algunos integrantes de la comunidad se presentaron momentos en los que se evidenciaba la desmotivación, frente a las realidades que emprendían, esto complejizó mucho más la enseñanza. La incertidumbre se evidencia hoy más que nunca, ya que algunos dirigentes de las antiguas FARC- EP que habían ayudado a la redacción del acuerdo y que además hacían parte del nuevo partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) han vuelto a tomar las armas, esto en muy buena parte es resultado de la falta de cumplimiento de las garantías, en este sentido surgen cuestionamientos entre la comunidad de exguerrilleros y de la población general colombiana, ¿qué pasará ahora con el acuerdo de paz, será que aún es viable?; en la actualidad se está evaluando la opción de rehacer un nuevo acuerdo en el que todos los actores estén involucrados, la paz en Colombia no es un asunto que se resuelva solo con el fin del conflicto armado, esto se evidencio con el acuerdo de paz.

Las personas que se acogieron al acuerdo de paz, llevan a costas el estigma que los medios de comunicación masivos se han encargado de difundir, donde las luchas políticas y sociales se han desdibujado y a su paso se creó una imagen de guerra indiscriminada y cruel, como todas las guerras, para que este panorama se transforme se requiere un compromiso de todos los integrantes de la sociedad, lo cual se posibilita cuando se conocen las circunstancias que los miembros de esta comunidad han vivido.

En la actualidad la deforestación en el país se ha incrementado, en algunos casos para la siembra de cultivos ilícitos, ganadería y otras veces para cultivos legales, así mismo se aumentó el interés de multinacionales por la búsqueda de minerales de interés económico, lo cual ha agudizado la crisis en los territorios y con las comunidades que los habitan, donde aún hoy en día hay poca presencia del legal estado.

Hace pocos días se dio el anuncio que algunos dirigentes de las FARC –EP volvían a las armas confirmando que para conseguir la paz no solamente se requiere del fin del conflicto armado, también se requiere más equidad, disposición de diferentes actores para eliminar la desigualdad; era un momento importante para el país, pero la persecución, la estigmatización, el incumplimiento hizo que se desconfiara, haciendo que no solo los excombatientes, también el pueblo colombiano dudara de la posibilidad de paz. No por esto hay que decir que ya no hay nada que hacer, es el momento de



ayudar con más tenacidad a esta comunidad y acogerlos para evitar que más vuelvan a la lucha armada.

La responsabilidad, aunque en primera instancia es del gobierno también es de la sociedad por esta razón es un tema que debe convocar a todas las instituciones, colectivos, gremios, a todas las universidades, aunque en perspectiva resulta difícil considerar que esta situación tenga un cambio, por lo que resulta conveniente divulgar las situaciones, en la actualidad hay mucho dolor e incertidumbre frente al futuro del país.

Notas

¹ Universidad Pedagógica Nacional I msierra@pedagogica.edu.co

² Universidad Pedagógica Nacional dbj_mlmoralesv433@pedagogica.edu.co

³ Universidad Pedagógica Nacional mamolina@pedagogica.edu.co

Bibliografía

Aguilera, M. (2010) *Las FARC: La guerrilla campesina, 1949- 2010. ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?* Recuperado en agosto 9 de 2019 de <https://bit.ly/3IRBBel>

Becerra, A., Infante, R., Cortes. R., (2012). *Escuela, memoria y conflicto en Colombia. Un ejercicio del estado del arte de la temática.* Revista Colombiana de educación (2012) .Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <https://bit.ly/342e3gF>

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), *Los caminos de la memoria histórica*, Bogotá, CNMH. Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <https://bit.ly/3IRrSow>

Fajardo, M. (s.f.) *El conflicto armado y su proyección en el campo.* Recuperado en agosto 9 de 2019 de <http://www.plagios.org/wp-content/uploads/2016/08/Anexo-4.-El-conflicto-armado-en-Colombia.-Fajardo-2004.pdf>

Halbwachs, M. (2002). *La memoria colectiva.* Traducción Inés Sancho. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza pdf Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <https://bit.ly/3lQR52h>

Lizarralde, M. (2012) *Ambientes educativos y territorios del miedo en medio del conflicto armado: estudio sobre escuelas del Bajo y Medio Putumayo.* Revista Colombiana de educación (2012) N° 62. Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/1621/1570>

Morales M., Sierra, L., Molina, A., *DE LAS ARMAS A LA POLÍTICA, DE LA PROTECCIÓN A LA DEVASTACIÓN. Reflexión en torno a la visión de la naturaleza de los ex guerrilleros de las FARC- EP y sus retos en el pos acuerdo* (III Congreso Sobre



Conflictos Ambientales, 3 y 4, octubre, Veracruz – México) Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <http://www.redcolca.org/colca-2018/>: Domínguez, N. 2018 p. 129

Revista semana 2015 *La ambivalencia ambiental de las FARC* Recuperado en septiembre 11 de 2019 de <https://bit.ly/2GUfWna>

Universidad Pedagógica Nacional (2010) Proyecto Curricular de Biología.



Construcción de capital social a partir de experiencias de asociatividad en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Estudios de caso en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, y Nariño

Sonia Bibiana Rojas Wilches¹
Carlos Arturo Romero Huertas²

Resumen

La necesidad de reconocer el medio rural, no solo como espacio de abastecimiento sino como una parte integrante de las dinámicas de cambio social, es considerado un tema vital en el conjunto de discursos y construcción de diálogos sociológicos latinoamericanos. En ese contexto, el objetivo de la investigación cuyos resultados presentamos en esta ponencia, fue el de caracterizar procesos de construcción de capital social a partir de experiencias de asociatividad en territorios afectados por el conflicto armado en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, y Nariño, en Colombia. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo de investigación, a través del estudio de casos como diseño metodológico. El estudio evidenció cómo la construcción de redes sociales se constituye en el principal insumo en tanto para movilizar ciertas propuestas colectivas, en donde se relevan temas como la soberanía alimentaria, el trabajo en defensa del medio ambiente y la cocina tradicional y el empoderamiento de la mujer rural.

Palabras clave

Asociatividad, capital social, territorio, desarrollo rural.

Introducción

En Colombia, históricamente las zonas rurales han sido escenario de las mayores desigualdades sociales y económicas, situación que sigue vigente. A pesar de la estrecha relación entre la problemática rural y los grandes conflictos sociales y políticos que ha sufrido el país durante los últimos 60 años, los temas del desarrollo rural y de la tierra como acceso, tenencia, distribución y uso, no han tenido un papel significativo en las agendas políticas de los gobiernos de las últimas décadas.

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario –CNA– (2014), muestran algunas problemáticas persistentes en el medio rural: elevados niveles de pobreza (44.7%), concentración e informalidad en la propiedad de la tierra (el 69,9% de la población tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 5% del área censada, mientras que terrenos de



más de 500 hectáreas están en manos del 0,4% de los propietarios y representa el 41,1% de las 113 millones hectáreas censadas); el analfabetismo alcanza el 11,5 % en mayores de 15 años, mientras que el 20% de niños de 5 a 16 años no asistió a ninguna institución.

A esto se suma la afectación por el conflicto armado, que ha dejado sustanciales costos sociales, económicos, políticos, ambientales y humanos. Al menos en principio, los acuerdos de paz firmados entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, deberían contribuir a solucionar cuestiones como la propiedad de la tierra, su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, entre otras (Vargas, & Hurtado, 2017).

Sin embargo, la superación de estas problemáticas requiere compromiso estatal y la permanente movilización de las organizaciones sociales para que la implementación de dicho acuerdo corresponda con sus reclamaciones y reivindicaciones históricas. Así, la recomposición del capital social es fundamental en un país donde el conflicto armado ha debilitado la asociatividad, dado que miles de líderes campesinos han sido asesinados o desplazados de sus comunidades, y muchas organizaciones sociales fueron coaccionadas, debilitadas o destruidas.

Pese a que existen valiosas experiencias en ese sentido, y a pesar del potencial que tienen los procesos de asociatividad y generación de capital social en el medio rural, no han sido suficientemente visibilizadas. Por tanto, se hace urgente adelantar investigaciones que saquen a la luz casos significativos que puedan aportar a la consecución de la paz y el desarrollo rural. Hacia ese propósito se orientó esta investigación, la cual tuvo como objetivo caracterizar procesos de construcción de capital social a partir de experiencias de asociatividad en territorios afectados por el conflicto armado en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, y Nariño, a través del estudio de casos.

Algunos referentes teóricos

La investigación se ha sustentado teóricamente en los aportes más recientes de la *sociología rural*, que, desde el enfoque territorial, examina la existencia de múltiples actividades asociadas a lo rural, estilos de vida diversos, e incontables conexiones urbano-rurales (Baigorri, 1995; Lambi y Pérez, 2007). En esa línea de pensamiento, la constatación del flujo continuo de personas, bienes y servicios entre las zonas rurales y



urbanas fue, en parte, lo que condujo a poner más énfasis en el territorio, destacando así la convergencia y articulación entre estos dos espacios (Matijasevic & Silva, 2013).

Desde esta mirada se propone una visión multidimensional y multiescalar del *territorio*, el cual es comprendido como una construcción social, proceso en el que tienen lugar acciones individuales y colectivas, con intereses distintos que generan relaciones tanto de confrontación como de reciprocidad (Capel, 2017). Es un escenario de poder, gestión y dominio por parte del Estado, pero también de individuos y grupos de la sociedad civil; asimismo, es un espacio de configuración de identidades que aseguran su reproducción.

Así, “son precisamente los actores sociales quienes construyen un territorio, para lo cual deben cooperar a fin de implementar proyectos colectivos y apropiarse de los recursos no solo naturales, sino también culturales (identitarios) y sociales existentes en el espacio” (Martínez, 2012, p. 13), para generar alternativas de desarrollo rural, muchas veces distintas e incluso contrapuestas a las que proponen el Estado y el mercado.

Por tanto, “la noción de territorio incluye la dimensión social como un espacio en que los actores construyen procesos sociales que permiten a su vez cuestionar determinadas relaciones de poder” (Martínez, 2012, p. 13). De ahí que las nuevas concepciones de *desarrollo rural* incorporen perspectivas de equidad de género, así como la nutrida participación presente y constante de los actores sociales, lo que implica un empoderamiento de las comunidades, para que las organizaciones sociales y campesinas se fortalezcan (Pérez y Farah, 2002; Roper, 2016).

En ese contexto, la *asociatividad* se convierte en una estrategia de participación social, especialmente de comunidades vulnerables que apuestan por el trabajo colaborativo para la solución de problemáticas en su territorio. En este sentido, cuando hablamos de asociación nos referimos a un proceso de trabajo comunitario o colectivo voluntario, con fines sociales y económicos. De manera que “la asociatividad, como fenómeno nacido de procesos comunitarios por superar fragilidades o resolver necesidades, es el que hace la diferencia entre la concepción de capital social desde la lógica capitalista (en la que dicho capital se asume como elemento constitutivo en las pretensiones de dominio del mercado) y el capital social visto desde la construcción y sostenibilidad de las comunidades populares” (Arboleda, Ghiso & Quiroz, 2008, p. 83).

En suma, los procesos asociativos de las familias y las comunidades rurales no se resumen en la producción de capital económico, sino que su acción colectiva tiene un



impacto político, sociocultural y ambiental; genera capital social, a partir de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales.

Bourdieu (2001) define el *capital social* como el “agregado de los recursos reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (p. 241). Putman (2000), propone tres formas de generación y gestión de capital social: 1) *Bonding* o la creación de lazos sociales fuertes dentro de una comunidad para desarrollar proyectos autónomos o alternativos; 2) *Bridging*, implica generar sinergia entre grupos disímiles; 3) *Linking*, generar y gestionar ligazones de comunidades organizadas con agentes externos.

Estas formas de generación de capital social fueron identificadas en tres contextos de acción colectiva de las asociaciones que participaron en la investigación:

- *Organizativo*: caracteriza la estructura organizacional, y los mecanismos para la generación de solidaridad, confianza y resolución de conflictos.
- *Familiar*: indaga sobre el papel de la mujer y la familia en los procesos de asociatividad y los beneficios que éstos les genera.
- *Comunitario*: identifica las maneras como la asociación contribuye al fortalecimiento de los vínculos comunitarios y a la construcción de redes de carácter local, regional o nacional.

Metodología

El estudio se orientó desde un *paradigma interpretativo*, el cual intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados, utilizando como herramienta el acuerdo intersubjetivo (Perea, 2008).

En consecuencia, se utilizó un *enfoque metodológico cualitativo*, en el que predomina la observación, se considera el contexto y la subjetividad en la experiencia investigativa, conformando una propuesta exploratoria, inductiva y descriptiva. En el marco de este enfoque se realizaron *estudios de caso*, con el propósito de comprender procesos y particularidades territoriales.



Fases del proceso investigativo

La investigación se desarrolló en tres momentos, a saber:

Fase 1 - Planificación de la investigación. Se definieron los criterios de selección de los casos a estudiar, y se presentó el proyecto a las asociaciones con el fin de motivar su participación. Asimismo, se hizo un reconocimiento previo del área de trabajo, a través de la elaboración de un perfil territorial que consideró las dimensiones social, económica, geográfica y medioambiental.

Fase 2 - Caracterización de experiencias de asociatividad y generación de capital social. Se utilizaron las siguientes técnicas cualitativas de investigación: 1. Entrevista a profundidad, realizada a dos miembros de cada asociación, un líder comunitario y un actor institucional. 2. Cartografía social: se elaboraron mapas del presente, como estrategia de visualización de la situación actual de las asociaciones y sus territorios, su participación en redes sociales y los aportes a la construcción de capital social. 3. Grupo focal sobre el papel de la mujer y la familia en la asociación.

Fase 3 - Sistematización y análisis de la información. El análisis de la información cualitativa se realizó a través de los siguientes pasos: 1. Transcripción del material audiovisual; 2. Categorización; 3. Clasificación y ordenación; 4. Descripción de los hallazgos aislados; 5. Triangulación interpretativa; 6. Elaboración del informe de resultados.

Estudios de caso

Se seleccionó un caso de estudio por cada departamento, privilegiando asociatividades rurales, a partir de los siguientes criterios: 1. Que constituyan iniciativas de los mismos pobladores del territorio, no resultado de alguna entidad pública o privada. 2. Que incluyan familias campesinas, con un liderazgo importante de la mujer. 3. Exitosas en el fortalecimiento del capital social más que empresarial. 4. Que desarrollen sus actividades en territorios directa o indirectamente afectados por el conflicto armado.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados más relevantes a partir del caso de estudio en cada departamento. Además del contexto territorial se definieron tres ejes de análisis que permitieran comprender la configuración del capital social, a saber: la organización, la familia y la comunidad.

**Nariño: Asociación productora de cuyes - ASOCURY.****Perfil territorial**

La Asociación Productora de Cuyes - ASOCURY, tiene presencia en el corregimiento José María Hernández, que forma parte del municipio de Pupiales, en el Departamento de Nariño, ubicado al suroccidente del país, zona limítrofe con la República del Ecuador. Por su ubicación en la cordillera de los Andes, José María Hernández se encuentra a una altitud de 3.014 msnm, con unas condiciones agro-climáticas que favorecen la producción agropecuaria. La economía se sustenta en cultivos de papa, arveja, maíz y hortalizas, así como en la explotación ganadera (bovina, porcina y de especies menores).

El corregimiento cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes. La organización social y productiva se define bajo la figura de la economía campesina (de subsistencia), es decir, la pequeña producción rural sustentada primordialmente en el trabajo familiar.

En relación con las dinámicas del conflicto armado en el territorio, hay que decir que la ubicación geoestratégica del departamento, ha hecho que su control sea objetivo de diferentes grupos armados al margen de la ley; guerrillas de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional - ELN, grupos reconstituidos de paramilitares y estructuras armadas del narcotráfico. En el año 2007, Nariño ocupó el primer lugar en extensión de cultivos de uso ilícito (coca y amapola) con 20.259 hectáreas sembradas. En este departamento existen 431.526 víctimas del conflicto, de las cuales el 82% corresponde a desplazamiento forzado (Plan de Desarrollo Municipal de Pupiales, 2016).

El corregimiento José María Hernández fue corredor territorial de estos grupos armados, lo que ocasionó situaciones de “negociaciones” o vacunas comerciantes, ganaderos y agricultores. Sin embargo, no se reportaron casos de reclutamiento o desplazamiento forzado de población.

Caracterización del capital social**Organización**

ASOCURY surge en el año 2005 como iniciativa comunitaria para reivindicar el trabajo de la mujer campesina, responsable principal del cuidado de especies menores, este caso: “cuyes”. En el 2009 la asociación se constituye legalmente. La idea de agremiarse se planteó como una posibilidad para incrementar los ingresos familiares y a la vez



visibilizar una tradición alimentaria, especialmente arraigada en la región. Por tanto, podría considerarse como una asociación productiva con fuerte énfasis comunitario.

La asociación congrega a 35 familias que se comprometen en diferentes áreas: administrativa, logística, cultural, mercadeo, bienestar y medio ambiente. Esta asociación se caracteriza porque ha generado procesos de participación efectiva: la junta directiva socializa las iniciativas ante la asamblea y de manera colectiva se toman las decisiones estratégicas.

Familia

ASOCURY, desde su creación, ha tenido como fundamento la reivindicación de la familia rural y, en particular, de la mujer. Por ello, resignificó la cría de cuyes como un elemento identitario de las familias campesinas del occidente nariñense, además de constituir una fuente adicional de ingresos. La asociación destaca el rol de la mujer como cuidadora y garante de la reproducción de tradiciones y prácticas culturales; precisamente, en esta dimensión cabe destacar la religiosidad como un elemento que contribuye a la cohesión social.

En ASOCURY El papel de la familia es fundamental. Más allá de la finalidad productiva de la asociación, el bienestar integral de las familias es el aspecto que motiva la asociatividad y el trabajo colaborativo.

Comunidad

ASOCURY, dadas las condiciones de vecindad y amistad de sus asociadas, ha contribuido al fortalecimiento de lazos comunitarios, donde la cooperación y la solidaridad son valores que se ponen en práctica. Por ejemplo, cuando a una persona asociada o su familia se le presenta una dificultad económica o de otra índole, desde la asociación se le brinda colaboración, además del apoyo espontáneo que pueda recibir. En términos de relacionamiento externo, ASOCURY ha facilitado el establecimiento de vínculos e interacciones con otros actores locales, instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. De esta manera han accedido a capacitaciones y a recursos para el desarrollo de proyectos que además benefician al territorio.



Cundinamarca: Asociación manos unidas

Perfil territorial

Esta asociación tiene su accionar en el municipio de Madrid (Provincia Sabana Occidente - Departamento de Cundinamarca), ubicado a 21 km de distancia de Bogotá, la capital del país. El municipio se caracteriza por un fuerte desarrollo industrial y del sector de la floricultura, del cual dependen alrededor de 30.000 puestos de trabajo.

La Sabana Occidente, y en particular el municipio de Madrid se ha convertido en una zona de interés por su ubicación estratégica para el comercio internacional. Esto ha conducido a generar cambios en el uso del suelo, enfocando este uso hacia la expansión urbanística con proyectos residenciales y logísticos (construcción de bodegas), lo que ha motivado la transformación en la vocación productiva de la región, que en las últimas décadas ha desplazado la producción de alimentos.

Por otra parte, aunque el conflicto armado no se manifestó de manera directa en este territorio, las consecuencias derivadas del mismo generaron fenómenos como: asentamiento de población desplazada, amenazas de grupos armados ilegales, y aumento del crimen organizado alrededor del narcotráfico. Estos fenómenos se relacionan tanto con las dinámicas migratorias del país, en las que Bogotá y la Sabana han sido históricamente grandes receptores de población de diversas regiones, como consecuencia de la falta de oportunidades, el conflicto armado, y la concentración de la actividad económica.

Caracterización del capital social

Organización

Manos Unidas se conformó en el año 2000 con el propósito de incentivar la cocina tradicional como mecanismo para la búsqueda de una soberanía alimentaria en el territorio y la producción limpia de alimentos a través de huertas familiares. Esto ha permitido la recuperación de prácticas como el intercambio de productos a través de iniciativas de agricultura urbana. Actualmente, está conformada por 8 mujeres adultas mayores.

Una de sus acciones más importantes ha sido la organización del Festival del Maíz, que ya cuenta con 12 versiones, en donde las asociadas preparan, exhiben, comercializan y comparten diferentes platos elaborados a base del maíz, y otros alimentos tradicionales de la región. Este espacio ha acogido a diferentes organizaciones



campesinas, de mujeres y jóvenes, que no solo venden sus productos, sino que además colaboran con manifestaciones artísticas y pedagógicas, que buscan generar conciencia sobre los problemas de la Sabana y el municipio, enfatizando aquellos que han originado una pérdida de soberanía alimentaria en el territorio.

La asociación cuenta con personería jurídica, y la toma de decisiones se realiza a través de reuniones periódicas en las que las asociadas planean y organizan sus proyectos de gestión social. Los lazos de solidaridad son muy fuertes; las asociadas se apoyan mutuamente cuando se encuentran en problemas económicos, familiares, o personales, a partir de un criterio de sororidad.

Familiar

La vinculación de todos los miembros de la familia a las actividades de la asociación es vital, pues permite generar conciencia en ellos sobre la importancia de la soberanía alimentaria y sobre el papel histórico que han jugado las mujeres, en la subsistencia y el bienestar de la sociedad. En el caso del festival del maíz, familiares de las asociadas se vinculan con alimentos para la venta, y participan en las actividades comunitarias y de capacitación que estas mujeres realizan.

Gracias a su participación en la Red Popular de Mujeres de la Sabana, las asociadas se han empoderado a través de acciones pedagógicas como “Mi trabajo en casa también vale” que reconoce el aporte social y económico del trabajo doméstico. A través de su trabajo, las mujeres de Manos Unidas han ganado visibilización y representación: han hecho parte del consejo consultivo de mujeres, del consejo territorial de planeación, del consejo de cultura, entre otros espacios, que les ha permitido aportar a la dignificación de la mujer, de su trabajo, de los alimentos ancestrales y de la cultura campesina.

Comunidad

Manos Unidas es una de las asociaciones pioneras en la defensa de la soberanía alimentaria en el municipio. Su proceso inspiró el surgimiento de otras iniciativas que en el 2009 se articularon en un proceso organizativo más amplio llamado Red por la Soberanía Alimentaria “Raíces de la Sabana”, desde la cual se promueven los mercados campesinos y el intercambio de semillas.

Estos procesos han permitido que manos unidas fortalezcan sus vínculos con la administración municipal, universidades y ONG’s locales.



Cauca: Asociación de Familias Agropecuarias de ASNAZÚ - ASOFAFRUN

Perfil territorial

La asociación se encuentra ubicada en el municipio de Suárez - Cauca, específicamente en el corregimiento de Asnazú. El 90% de la población es afrodescendiente. La producción agropecuaria es la actividad económica más importante del municipio, seguida de la minería, la piscicultura, avicultura y ganadería. Como parte del corredor del Pacífico, este territorio ha sido atractivo para grupos que comercializan armas y drogas. De ahí que, durante décadas, han hecho presencia diversos grupos armados, tanto guerrilleros, como paramilitares. Esa disposición histórica se mantiene hasta hoy, pues tras la desmovilización de las FARC, diferentes organizaciones criminales se disputan el control territorial.

Caracterización del capital social

Organización

La asociación cuenta con 32 asociados en su mayoría mujeres, que extienden las actividades, deberes y beneficios a sus familias. Entre las asociadas hay madres cabeza de familia, desplazadas y trabajadoras independientes, víctimas de diversas violencias (intrafamiliar, sexual, económica, bélica). La actividad económica de la asociación es el cultivo de la sábila y la producción de yogurt de sábila, la cual se realiza desde un fuerte compromiso con las tradiciones ancestrales, que se evidencia, en su apuesta por la producción libre de químicos.

Internamente, la asociación cuenta con una junta directiva, un comité de trabajo y un comité de ventas, en donde las decisiones tomadas por la presidenta son siempre socializadas con el resto de los miembros, especialmente las directivas. Una de las adversidades más frecuentes que enfrentan como asociación es la inestabilidad económica, la cual les impide asociar a más trabajadoras, puesto que no pueden asegurarles una remuneración fija.

El conducto regular para solución de conflictos es convocar a las directivas, y si en ese espacio no se logra el cometido, entonces el caso trasciende a una asamblea general.

Familia

Hay un vínculo directo entre la vida laboral y familiar. Es imposible desligar estos dos ámbitos, ya que muchas mujeres se ven obligadas a llevar a sus hijos a su espacio laboral. Esto genera lazos de afecto y compromiso de las familias con la asociación, que



a su vez responde con oportunidades de empleo y capacitación para la población juvenil. Así, las jóvenes desde temprana edad empiezan a normalizar el ser partícipe de proyectos que les permiten ser independientes y hacer valer sus derechos.

Comunidad

La asociación ha generado procesos de relacionamiento con otras asociaciones del municipio como la Asociación Agroindustrial y Minera Afrodescendiente Yolombó-Gelima (ASOYOGÉ) con la que ha recibido capacitación conjunta por parte de la administración municipal, sobre el cultivo de sábila y procesos administrativos. También han obtenido capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y apoyo de agencias de cooperación internacional como la Fundación Plan International y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.

Frente a la reconstrucción del tejido social fracturado por el conflicto armado es importante anotar que, si bien este es un proyecto productivo, resultó convertirse en un paliativo para los efectos colaterales -psicológicos y sociales- del conflicto armado en sus asociadas.

Conclusiones

En Colombia, históricamente las zonas rurales han padecido, en alguna medida, tanto del abandono estatal como de los efectos del conflicto armado interno. En los casos de los departamentos de Cundinamarca, Cauca y Nariño, el escalamiento de la violencia ha presentado variaciones significativas, pero, también coincidencias, especialmente, en lo relacionado con la población campesina que, dada su vulnerabilidad social, se ha convertido en el rostro visible de desplazamiento, reclutamiento, pobreza y exclusión. En este sentido, los procesos de asociatividad campesina se han presentado como posibilidades de resiliencia, memoria y arraigo territorial.

Las asociaciones consideradas como estudio de caso, más que el alcance de metas económicas, han contribuido significativamente a la generación de capital social en los territorios. Este factor es fundamental para la reconstrucción del tejido social y comunitario fracturado como consecuencia del conflicto armado, paso indispensable para la consolidación de la paz territorial. Este logro es el resultado de acciones orientadas a la defensa del territorio, de los recursos naturales, de la soberanía alimentaria, entre otros.



Respecto a la dimensión organizativa se destaca la densidad de los vínculos y las relaciones entre las personas asociadas, constituyendo verdaderas comunidades emocionales, en donde la confianza, se convierte en valor central. Esta condición ha permitido generar procesos de resiliencia frente a las múltiples violencias que han afectado los territorios y ha posibilitado espacios horizontales de participación y toma de decisiones.

El papel de la mujer en estas asociaciones es un factor fundamental, en tanto su creación es producto de su propia iniciativa, con el propósito de contribuir a la generación de ingresos adicionales para la familia. Sin embargo, con el tiempo las oportunidades se ampliaron, inclusive para vincular a familiares y otras personas de la comunidad, generando impactos positivos para el territorio. Cabe destacar que una particularidad de estas asociatividades es la apuesta por resignificar actividades de cuidado y reproducción que tradicionalmente han sido asumidas por mujeres, pero, desde la perspectiva del empoderamiento.

Hacer viable un modelo de desarrollo rural -con enfoque territorial- ha implicado que estas asociaciones apuesten por la construcción de relaciones y la articulación a redes sociales más amplias, que se configuran como espacios en los que confluyen distintos colectivos, en aras de la discusión política y la puesta en marcha de iniciativas comunitarias. Se trata de modalidades de vinculación para movilizar ciertas propuestas colectivas, de autogestión y formación, que se materializan en escenarios de comunicación y afectación recíproca que propician la construcción de solidaridades afectivas.

Notas

¹ Socióloga, magíster en Estudios Culturales. Docente - investigadora del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia. sonia.rojas@unad.edu.co

² Sociólogo, magíster en Desarrollo Rural Territorial. Docente - investigador Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia. arturo.romero@unad.edu.co



Referencias

- Alcaldía de Pupiales (2016). Plan de desarrollo Municipal 2016-2019. <http://www.pupiales-narino.gov.co/documentos-sobre-el-municipio/plan-de-desarrollo-municipal-2016--2019>
- Álvarez, O.; Ghiso, A. & Quiroz, E. (2008). Capital social: revisión del concepto y propuesta para su reelaboración. En *Semestre Económico*, volumen. 11, número. 21, enero-junio, Leer: p. 75-90. Recuperado de: <https://bit.ly/3nU8k4q>
- Baigorri, A. (1995). "De lo Rural a lo Urbano: Hipótesis sobre las dificultades de mantener la separación epistemológica entre Sociología Rural y Sociología Urbana en el marco del actual proceso de urbanización global". *V Congreso Español de Sociología - Granada*, 1995. Recuperado <https://bit.ly/3dxNMda>
- Bourdieu, 2001. *El capital social: apuntes provisionales*. *Zona Abierta*, 94/95:83-87.
- Lambi, L. & Pérez, E. (2007). Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana. *Cuadernos de Desarrollo Rural* No. 4 (59), p. 37-61. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11759002>
- Martínez, L. (2012). *Apuntes para pensar el territorio desde una dimensión social*. En *Revista Ciencias Sociais Unisinos*. Vol. 48, Nº 1, Enero-Marzo, Sao Leopoldo, Brasil, Leer: p. 12-18. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93823702003>
- Matijasevic, M. T., & Silva, A. R. (2013). *La construcción social de lo rural*. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, (5), 24-41. Recuperado de <http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/60>
- Perea, C. (2008). *Módulo del Curso Paradigmas de la Investigación Social*. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
- Pérez, E., & Farah, M. (2002). Los modelos de desarrollo y las funciones del medio rural en Colombia. *Cuadernos de desarrollo rural* No. 49, p. 9 – 27. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11704902>
- Putnam, R. *"Bowling alone. The collapse and revival of American Community"*. *Simon and Schuster Paperback, New York, 2000*.
- Ropero, S. (2016). Desarrollo Rural en Colombia: Entre la realidad y la oportunidad en el posconflicto. *Perspectivas Rurales*. Nueva época, Año 14, No. 27, p. 13 – 35.
- Vargas, G. & Hurtado, R. (2017). Los retos de la "paz territorial". Universidad de Los Andes, Bogotá. Disponible en: <https://bit.ly/2SUYi4S>

Páginas web consultadas

- Alcaldía de Madrid, Cundinamarca: <http://www.madrid-cundinamarca.gov.co/>
- Alcaldía de Suárez, Cauca: <http://www.suarez-cauca.gov.co/>



Contradicciones de los emprendimientos de la economía solidaria que producen commodities en el noreste brasileño: Planta Catende

Victoria Puntriano Zuniga Melo ¹
Angela Maria Carneiro Araújo ²

Resumen

En la división internacional del trabajo los países del sur históricamente realizan la producción de las materias primas para exportación y los países del norte las industrializan o las importan. En este contexto la investigación tiene como objeto el Ingenio a Planta Catende, una empresa fundada en la *plantation* azucarera en 1890 en el estado de Pernambuco, región noreste de Brasil, que ante un contexto de dificultades se fue a la quiebra y sus trabajadores emprendieron una lucha por su recuperación desde 1995 y posteriormente pasaron a identificarse como del campo (Bourdieu, 2003) de la economía solidaria. El objetivo es mostrar las contradicciones que el sistema de *commodities* provoca en los emprendimientos de la economía solidaria. La cuestión planteada es: ¿Cómo pensar relaciones solidarias en un escenario dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional? La metodología utilizada fue de carácter cualitativo y cuantitativo, utilizando la investigación bibliográfica y documental, también una investigación de campo con los principales actores: trabajadores agrícolas, fabriles y agricultores familiares, miembros del consejo gestor, asesores y colaboradores. Los resultados muestran que se trató de una experiencia de resistencia que obtuvo avances: el enfrentamiento al hambre, al analfabetismo, a la participación representativa de los trabajadores en la gestión, la desapropiación colectiva de las tierras y la ampliación de la renta mediante el apoyo de políticas públicas. Sin embargo, la estructura del mercado internacional crea y recrea las asimetrías entre los países del norte y del sur, poniendo en riesgo la supervivencia de los trabajadores/agricultores debido a sus fluctuaciones.

Palabras clave

Economía solidaria; *Commodities*; Emprendimientos Económicos Solidarios; Noreste brasileño; Planta Catende.

Introducción

Este trabajo contextualiza en la perspectiva sociológica el caso de una Empresa Recuperada por los Trabajadores (ERT) del ámbito de la economía solidaria observando las condicionantes históricas y estructurales en la división internacional del trabajo entre países del norte y del sur. Estos últimos como productores de materia prima,



principalmente agrícolas y minerales que van perdiendo valor y los países del sur con el proceso de industrialización de la materia prima que es más valorizado y produce las mejores ganancias.

Desde el tiempo de las colonias hasta los días actuales este contexto no se ha alterado significativamente ni en el orden económico, político ni ideológico. Las actividades extractivistas en América Latina a pesar de promover crecimiento económico, continúan generando asimetrías, conflictos sociales, ambientales y políticos (Svampa, 2015)

Con el surgimiento de los commodities, principalmente agrícolas³, se dio un nuevo ropaje a la remuneración del capital financiero con la intensificación del modelo de acumulación capitalista que evidencia la reprimarización de las economías y la consecuente desindustrialización⁴, los impactos negativos en la soberanía alimentaria manteniendo y generando nuevas formas de dependencia y dominación (Antunes, 2013; Svampa, 2012).

El estudio de caso presentado se desarrolló en un contexto "Plantation", el sistema agrario latifundista, pautado por el monocultivo y agro exportación con mano de obra explotada en un ambiente de dominación y violencia. Se trata de una planta azucarera denominada Catende, localizada en la región boscosa (zona da mata) de Pernambuco, un estado localizado en la región noreste de Brasil.

Esta planta azucarera fue fundada en 1890 con capital inglés y desde entonces fue expandida y recibió incentivos gubernamentales y préstamos a bajos intereses como parte de la política proteccionista como el Programa Nacional do Álcool (Pró-álcool)⁵.

Llegó a su auge bajo la administración de "Seu Tenente", un ex-militar que con estilo de gestión autoritaria y emprendedora, entre los años 1920 a 1950 condujo a la empresa a una alta productividad desde el punto de vista del capital agroexportador.

Sin embargo en los años 1970, la actividad azucarera de la región noreste estaba perdiendo en productividad frente a las regiones sur y sureste, en consecuencia de la mecanización adoptada en esas regiones. (Scopinho; Vian; Silva, 1999). En los años 1990, con la adopción de política neoliberal y la apertura de los mercados para los productos extranjeros, exacerbó la competencia con las empresas nacionales llevándolas en muchos casos a la quiebra.



En el caso específico de la Planta Catende, además de ese entorno negativo, el traspaso de la compañía a sus herederos afectó negativamente su funcionamiento lo que hizo que ocurrieran diversas adquisiciones de la empresa por grupos empresariales. De forma que, la gestión de la Planta se quedó comprometida, además de las deudas acumuladas con los préstamos lo que condujo a la quiebra.

Fundamentación del problema

En 1993, continuando la Planta Catende en crisis, realizó el despido de 2.300 trabajadores rurales, sin el pago de sus derechos laborales y desalojándolos de sus precarias viviendas y este despido masivo tendría un gran impacto en la región.

En consecuencia de un proceso de redemocratización de la sociedad ocurrido en los años 1980, había activismo de los movimientos sociales y en ese escenario se produjo una reacción conjunta de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), de la Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE), de la iglesia católica, y otras Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) por la lucha de los derechos laborales de los trabajadores y la permanencia de sus familias en esas tierras.

Hubo diversos intentos de acuerdos en la justicia para realizar el pago de los derechos laborales de los despedidos y del atraso del pago de los salarios de los trabajadores aún en actividad, sin éxito. Al final del año 1994 los trabajadores no habían recibido ni el pago referente al mes de diciembre, ni el aguinaldo navideño y, en consecuencia, estaban pasando necesidades.

Sin embargo, llegó al conocimiento de los trabajadores que una de las familias del grupo empresarial había realizado una gran fiesta de año nuevo que fue noticiada por los periódicos en Recife, la capital, y además alquilaron una avión para ir a la pose del presidente en Brasilia.

Esta situación de injusticia generó una reacción en todos los trabajadores uniendo el campo y la fábrica. Esta alianza entre categorías de trabajadores consideradas históricamente rivales, en torno de un objetivo común es comprendida en (Gluckmann, 2011) que analizó el papel del conflicto en la manutención de la cohesión social.

Esos trabajadores decretaron una huelga que duró 19 días al inicio de 1995 y con los trabajadores despedidos impidieron el ingreso de los dueños a las instalaciones de la



planta y su salida de forma temporal. Ante esa situación los dueños requirieron la quiebra y enseguida los trabajadores lo solicitaron en su nombre.

Schäfers (2007) comenta, con la articulación de la FETAPE, los sindicatos, el gobierno de Pernambuco la justicia concedió la quiebra favorable a los trabajadores junto a los acreedores designó como primer síndico al Banco do Brasil.

Así se dió inicio a una co-gestión entendida por Faria (2009) como una administración conjunta compartida con los trabajadores que estaban representados formalmente por los STR's de los cinco municipios (Catende, Palmares, Jaqueira, Xexeú e Água Preta) y el síndico.

Vale resaltar que, en 1995, la Planta Catende tenía un porte considerable ya que involucraba a más de 4.000 familias en 26.000 hectáreas distribuidos en cinco municipios de la Zona de la Mata Sur del Estado de Pernambuco (Kleiman, 2008).

A pesar de los avances que significaba emprender una co-gestión ,la Planta Catende había heredado problemas sociales, económicos, de infraestructura de la gestión de la dueños.

Nascimento (2004) menciona los mayores desafíos que en ese momento se enfrentaba: la recuperación de la estructura productiva que no había tenido manutención, levantamientos informales indicaban 90% del analfabetismo en la región, además del hambre que se producía en los períodos de entre zafra del ciclo productivo de la caña de azúcar, y la búsqueda por caminos que viabilizaran la producción y la co-gestión establecida en el emprendimiento.

Lo que inicialmente fue una lucha por los derechos laborales y por la permanencia en la tierra y que representaba un desafío importante del cual el grupo gestor aún no tenía referencias, se fue transformando en 1999, cuando a través del sindicato descubrieron a la economía solidaria y las experiencias de las ERT que ocurrían en otros lugares del Brasil y del mundo.

La identificación con la economía solidaria ocurrió a partir de la visión de Paul Singer que fue dirigente de la Secretaria Nacional da Economia Solidária (SENAES), que tuvo gran influencia en el desarrollo conceptual y empírico de la economía solidaria y sus experiencias en los más diversos ámbitos: desde las cooperativas en el ámbito



productivo a los Fondos Rotativos Solidarios (FRS) y bancos comunitarios en las finanzas solidarias.

Conceptualmente Singer (2002) señala que la economía solidaria a partir de la producción de bienes o la prestación de servicio se podría generar renta teniendo como las principales características: el trabajo asociado a partir de la propiedad colectiva de los medios de producción, promoviendo la igualdad entre los participantes pautado en los valores de cooperación y solidaridad con decisiones colectivas y las sobras distribuidas equitativamente.

El trabajo asociado con vínculos solidarios se muestra difícil de realizar en una sociedad movida por la competitividad. Tauile et al., (2005) realizó un estudio con las ERT e identificó las siguientes variables de estructura: gestión, mercado, crédito, tecnología, forma de propiedad y la relación con el sindicato y su participación institucional como forma de comprender esos emprendimientos.

En este sentido destacamos el mercado, dado que es uno de los aspectos más complejos de superar, ya que es un aspecto externo al emprendimiento. En esta investigación se trata de un mercado competitivo regido por la volatilidad de la bolsa de valores en relación al commodity azúcar que puede poner en riesgo la viabilidad económica de la Planta Catende.

La cuestión problema propuesta es ¿Cómo pensar relaciones solidarias en un escenario dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional?. Ante tal tiene el objetivo de mostrar las contradicciones que el sistema de *commodities* provoca en los emprendimientos de la economía solidaria.

Metodología

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo porque se realizó una reconstrucción histórica de la trayectoria de esta Planta como una experiencia de Economía Solidaria. También es caracterizada como bibliográfica, documental y de campo con los principales actores: trabajadores agrícolas, fabriles y agricultores familiares, miembros del consejo gestor, asesores y colaboradores.

Para el análisis sociológico del proyecto Catende remito a las categorías de Bourdieu: campo y *habitus*.



Los campos se presentan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones (o puestos) cuyas propiedades dependen de las posiciones en estos espacios y pueden analizarse independientemente de las características de sus ocupantes” [...]” para que un campo funcione, debe haber objetos de disputa y personas listas para jugar, dotadas de habitus que impliquen el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes de los objetos de disputa, juegos, etc” [...] La estructura del campo es un estado de fortaleza entre los agentes o instituciones involucradas en la lucha. (Bourdieu, 2003, p. 119-120).

Y *habitus* Bourdieu (2005, p.20,) define como:

... sistema de separaciones diferenciales, que define las diferentes posiciones en los principales sistemas del espacio social, corresponde a un sistema de separaciones diferenciales en las propiedades de los agentes (o clases constituidas como agentes), es decir, en sus prácticas y en los bienes que poseen.

Ambas categorías fueron utilizadas para interpretar los comportamientos incorporados y reproducidos por los individuos en el campo de la investigación y de las estructuras heredadas de la empresa capitalista y del mercado de *commodities*.

Resultados y discusiones

Los logros a nivel educacional se describen a seguir hubo una significativa reducción de 82% del analfabetismo entre los adultos en un intervalo de 7 años desde 1995 a 2002 resultantes de las acciones de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) (Nascimento, 2004).

Diversas acciones educativas fueron impartidas de un proyecto denominado “Catendão”, el cual incluía tanto cursos de especialización como de elevación de escolaridad y EJA con el apoyo de la ANTEAG y otras ONG’s (Kleiman, 2008).

Posteriormente se creó un equipo de formación de carácter permanente denominado de *Equipe Harmonia* conformada por técnicos educacionales, educadores del campo. La mayoría de ellos diplomados en la región y descendientes de los trabajadores del campo y de la industria. Esa proximidad entre familias favoreció la adhesión de los alumnos a los proyectos educacionales que condujeron a que este equipo pasase a formar parte del consejo gestor en 2004.

Por otro lado, la asociación con las universidades de la región UFPB, UFPE y UFRPE contribuyó para la mejoría de la educación, incluyendo la educación de los niños, así



como programas de prevención para la salud de la mujer y contra la violencia doméstica sufrida por las mujeres, *con el Centro de Mulheres do Cabo*.

Algunos cursos de formación fueron apoyados por la iglesia católica holandesa, eran realizados en una de las casas grandes, en la forma de seminarios tanto para los trabajadores del campo como de la industria (Nascimento, 2004).

Los cursos de formación, en especial aquellos facilitados por el grupo de Educación de Jóvenes de Adultos (EJA) y Educación del campo fueron estructurados en los ejes temáticos descritos a seguir:

- I - Agricultura familiar: cultura, identidade, gênero e etnia;*
 - II - Sistemas de produção e processos de trabalho no campo;*
 - III – Cidadania, organização social e políticas públicas;*
 - IV – Economia solidária;*
 - V – Desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque territorial.*
- (Ministério da educação, saberes da terra, 2010)*

Todos estos ejes definidos en la matriz curricular estaban basados en la propuesta de la educación popular y de lo que se supone sería el cotidiano de los alumnos, agricultores familiares y trabajadores del campo en general. Los conocimientos que les serían necesarios, entre ellos constando la economía solidaria.

Todavía según Melo Neto; Lima (2010) la educación popular pasó por algunas etapas en la Usina Catende: Entre 1999 a 2000 se buscó promover cursos en el área de educación para la autogestión y economía solidaria (dado que la conocieron y recibieron la colaboración de la ANTEAG, inicialmente). De 2001 en adelante, se pasó por un momento de educación sistematizada, como la educación ambiental para niños y adolescentes, cursos de formación para la producción de técnicas y producción agrícola y curso técnico en producción en la industria azucarera, de gestión del proyecto Caña del Habitante, entre otros.

Posteriormente esos proyectos fueron ampliándose buscando las transformaciones sociales. En el caso de la EJA se propició la alfabetización con un carácter de educación popular y solidaria, articulando el conocimiento formal con los conocimientos locales para la producción. Y en la seguridad alimentaria (piscicultura y agricultura de supervivencia) produjeron cambios en la cultura alimentaria, pero también tuvieron un papel pedagógico siguiendo la misma línea de la educación popular con adhesión de



los trabajadores y sus familias, así como de los viveros en las escuelas y una de las actividades que posibilitó también la participación femenina.

Debemos considerar como factor positivo la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias, principalmente a través del Programa "Caña del Habitante" que articula la producción colectiva y la familiar, que se desarrolla en el campo económico y político por los acuerdos necesarios para la distribución de la tierra para los trabajadores o sus descendientes. La renta que es generada a partir de este proyecto que posibilita, inclusive, que familias opten por no tener más vínculo laboral con la usina y dedicarse integralmente a la agricultura produciendo caña de azúcar para la misma.

Las políticas públicas direccionadas a la Agricultura Familiar como el *Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)* y el Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) en las cuales los agricultores vendían el azúcar en el ámbito del programa "Hambre Cero".

También ocurrieron mejorías en las condiciones de trabajo: como fue relatado por (Iqueño, *ex-presidente de la cooperativa Catende Harmonia, entrevistado en feb/2017*):

- 1) *A primeira coisa foi que nenhum administrador andasse armado, trocaram por rádio que era para se comunicar um com outro.*
- 2) *Que o trabalhador não podia passar de meio dia para a tarde ficar para ele para fazer outras coisas para ele, trabalhar para ele, plantar, já foi cedido já a terra para ele trabalhar (cana ou lavoura), não importava o cultivo;*
- 3) *O trabalhador precisava sair hoje, ele avisava ao administrador, o administrador apontava o dia dele, para ele não perder o remunerado e quando o administrador precisasse ai ele ia final de semana que era pagar esse dia que estava devendo que era justamente para ele não perder o dia. A diferença é que antes incentivava para perder, depois incentivava para ele não perder.*

Las mejorías de las condiciones de vida de los trabajadores del campo ocurrieron de forma significativa, no obstante, lo mismo no sucedió con los trabajadores fabriles que continuaron cumpliendo con la misma jornada de trabajo y bajo las mismas condiciones de organización. Tauile et al. (2005, p. 70) citan específicamente la Planta Catende en su investigación de las tipologías de las ERT's:

El proyecto Catende, por lo que ya ha realizado en términos de cambiar las relaciones laborales y la cultura política, va mucho más allá de la simple recuperación de los



negocios en bancarrota, ya que alcanza la dimensión de un proyecto alternativo de desarrollo económico, social, cultural y político para la región de la Zona Boscosa del Sur de Pernambuco.

Aunque justamente por ese motivo, por ser un proyecto alternativo enfrentaba a la elite social, económica y política de la región. Durante trece años existió la lucha por la tenencia de la tierra y de la parte fabril, sin embargo el órgano encargado de hacerlo tenía una visión muy tradicional y apoyó la desapropiación en esos moldes. Como relatar Ribero (2010, p. 60):

El INCRA, hasta hoy, trabaja con un solo elemento: la productividad agrícola. Aunque es un elemento importante, no incluye la complejidad de la tierra y, menos aún, de una industria, como una planta. La constitución se ocupa del bienestar de los trabajadores, el cumplimiento de la legislación laboral, el cumplimiento de la legislación ambiental. En ese momento, adoptando una actitud de vanguardia, la agencia podría haber expropiado todas esas tierras.

No obstante, en 2006, durante el gobierno “Lula”, se produjo el mayor logro para los trabajadores del campo, que a pesar de no haber conseguido la desapropiación completa (de la parte industrial y del campo), tan solamente de las tierras utilizadas para el plantío totalizando 26.000 hectáreas, fue ejecutada en los moldes colectivos, lo que permitió que el trabajo asociado continuara en funcionamiento.

No obstante, el síndico indicado por los trabajadores fue acusado de desvío de recursos y alejado de la gestión, posteriormente considerado inocente de los cargos imputados, sin embargo ya estaba fuera de la gestión.

Se resalta que durante la gestión de los trabajadores ocurrieron dos grandes inundaciones y un incendio que tuvieron impactos negativos en la producción y recuperación fabril y financiera. Sin embargo, fue la unión de los trabajadores y el apoyo recibido del gobierno estatal e/o federal que permitieron que la experiencia saliera adelante.

Al final de agosto de 2009, fue solicitado un balance patrimonial y una demostración de lucros y pérdidas y se observa que los costos operaciones son altos al punto de no permitir que la actividad operacional obtenga superávit. El costo de los productos eran equivalentes a 222% del total de las ventas. Es decir el bajo precio del azúcar impacta negativamente en los resultados financieros de la Planta. Sintetizando, el perjuicio



llegaba a los 17 millones equivalentes a 79,76% del total de las ventas (informe financiero).

Esta situación de insolvencia es ocasionada en parte, debido a que el producto principal, el azúcar, es una commodity agrícola y, por lo tanto, su precio es determinado por el mercado internacional, por la cotización en las bolsas de valores y el precio nacional sigue esa tendencia además de los efectos de la variación cambiaria.

Las condiciones de estructurales en el campo de la división internacional del trabajo y de la macroeconomía remuneran al capital financiero y el valor pagado a los productores, en el caso del azúcar mal puede pagar los costos con la producción.

Reflexiones finales

Esta investigación analizó la Planta Catende como experiencia modelo en economía solidaria en Brasil y tiene como panorama general la cuestión agraria a partir del trinomio: latifundio, monocultivo y agro exportación, con la explotación de mano de obra en el sistema plantation utilizado en las colonias europeas de los países del sur que tuvieron una base esclavista.

En la división internacional del trabajo, en el caso específico del noreste de Brasil, Pernambuco, le corresponde la plantación de la caña y la fabricación del azúcar. Sin embargo a pesar de todo el esfuerzo productivo de los trabajadores y aunque consigan bajos costos de producción, que no era exactamente el caso de Catende, la volatilidad de los precios de las transacciones comerciales estimadas en moneda norteamericana, el dólar, hace que las plantan azucareras sufran las consecuencias socioeconómicas de tener un precio padrón que pone en riesgo la viabilidad de las industrias.

Este es un factor relevante en el análisis, porque amenaza la sostenibilidad e inclusive desafía el tejido social al poner en jeque la credibilidad del consejo gestor como si no supiera administrara los recursos, o existieran desvíos.

La superación de dos inundaciones y un incendio son indicativos de la unión de los trabajadores y del tejido social que funcionó en momentos de crisis, aunque los impactos financieros fueron más difíciles de vencer.

No obstante, son las relaciones de poder del campo político-económico que están estructuradas para que los rendimientos se queden en los países del sur y los del norte



como es el caso de Brasil no obtengan la utilidad financiera necesaria para su sobrevivencia.

Los éxitos que Catende obtuvo fue en otras áreas; el programa de seguridad alimentaria con el cultivo de agricultura de subsistencia, frutas, la cria de pescado. En el campo educacional, la reducción del analfabetismo, los cursos profesionales y de cooperativismo. Hubo mejorías significativas en el campo y sus indicadores de productividad del cultivo, así como también la gestión la participación fue ampliada en el consejo gestor.

Además de haber obtenido la desapropiación de 26.000 hectáreas de tierras, que se constituyó como el mayor logro para los trabajadores que residían en el campo, mientras que los trabajadores fabriles continuaron residiendo en las casas que tenían en la ciudad.

Debido a la maquinaria desfasada los indicadores de productividad industrial eran bajos y los costos altos por causa del uso extensivo del corte manual y por buscar siempre cumplir con las determinaciones de la convención colectiva como el límite de corte de 4 toneladas, ampliamente incumplido en un gran número de plantas de azúcar.

La sustitución arbitraria de síndico y su cierre fueron un duro golpe para los trabajadores que llevan consigo el aprendizaje y la experiencia de haber participado de una experiencia que enfrentaba a la elite social, económica y política de la región.

Notas

¹ Doctora en Ciencias Sociales por la *Universidade Estadual de Campinas* (UNICAMP), São Pablo, Brasil y profesora de la *Universidade Federal de Paraíba* (Brasil)

² Doctora en Ciencias Sociales por la *Universidade Estadual de Campinas*, (UNICAMP) São Pablo, Brasil y profesora en el Programa de Pos grado de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas en la UNICAMP.

³ En el caso del azúcar que se cotizó en la bolsa de Nueva York en 1916.

⁴ En relación al caso brasileño del proceso de desindustrialización vivido a partir de los años 1990, con la adopción de políticas neoliberales, la apertura de los mercados internacionales y remuneración al capital financiero.

⁵ Fue creado con el apoyo del *Instituto do Açúcar e Alcool (IAA)* ofrecía las siguientes facilidades: financiamiento de hasta el 90% del presupuesto de las inversiones fijas para



la planta industrial; interés a una tasa del 15% al año (a.a) con plazos de carencias de hasta 3 años con pagos semestrales.

⁶ Se trataba de una fiesta de reveillon, que se quedó conocida como “vermelhão” porque fue el equivalente de significado que encontraron para su realidad, que podría ser traducido como rojizo.

Referências bibliográficas

Antunes, R. (2013). Las desconstrucciones del trabajo, su nueva morfología y la era de las rebeliones. *Revista Izquierda*, 31(marzo), 18-23.

Bourdieu, P. (2003). *Questões de sociologia*. Miguel Serras Pereira (Trad). Coleção Margens. (2 ed). Lisboa, Portugal: Fim de século

Faria, J. H. (2009). *Gestão participativa: relações de poder e de trabalho nas organizações*. São Paulo: Atlas.

Gluckman, M. (2011). *Os rituais de rebelião no sudeste da África*. Série tradução. nº 3. Brasília: UNB.

Kleiman, F. (2008). *Lições de Catende: a construção de uma autogestão em Pernambuco*. São Paulo: Annablue.

Melo Neto, J. F; LIMA, L. M. S. (2010). *Usina Catende: para além dos vapores do diabo*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.

Ministério de Educação. (2010). Secretaria de educação continuada, Alfabetização. Cadernos pedagógicos do Projovem Campo. *Saberes da Terra*. Brasília, MEC, SECAD.

Nascimento, C. (2004). Do “Beco dos Sapos” aos Canaviais de Catende. SENAES. <https://bit.ly/3o5tCMO>

Ribeiro, B.(2010) Usina Catende: política e caminhos jurídicos. In: MELO NETO, JF; LIMA, L. M. S. *Usina Catende: para além dos vapores do diabo*. João Pessoa: Editora Universitária, p. 55-88, UFPB, Cap 3.

Schäfers, A. (2007). “Reforma agrária e economia solidaria: o caso da Usina Catende”. *Estudos Sociedade e Agricultura*. Rio de Janeiro,15, (1) 85-93

Scopinho,R; Vian, F; Silva, C. (1999). Novas tecnologias e saúde do trabalhador: a mecanização do corte da cana-de-açúcar. *Caderno de Saúde Pública*, 15, (1) 9. jan.-mar, 147-161.

Singer, P. (2002). *Introdução à economia solidária*. São Paulo: Perseu Abramo.



Tauile, J. R.; Rodrigues, H; VILUTIS, L; FARIA, M.S. (2005). *Empreendimentos autogestionários provenientes de massas falidas*. Brasília: MTE, IPEA, ANPEC, SENAES.

Svampa, M. (2015). Commodities Consensus: Neoextractivism and Enclosure of the Commons in Latin America. *South Atlantic Quarterly* , 114(1), 65-82.
<https://doi.org/10.1215/00382876-2831290>



La recuperación de tierras a partir de la organización comunitaria en resguardo indígena de Guachucal Nariño Colombia 1980-1992

Aura Patricia Canchala Aza

Resumen

Esta investigación se realizará bajo la problemática general que se ha vivido en Colombia y en Latinoamérica a raíz de la propiedad de la tierra, la división desigual de esta y de cómo las comunidades se han organizado para recuperar aquello que se le ha arrebatado, en este caso se investigará sobre la situación de los pueblos indígenas. Este trabajo tiene como punto de partida un interrogante; ¿Cómo fue el proceso organizativo por la recuperación de la tierra en el resguardo indígena de Guachucal en el departamento de Nariño en los años 1980 -1992? La investigación se adelantará desde un enfoque teórico de cohorte marxista e interpretativo; la metodología de abordaje se diseñó desde el paradigma cualitativo y un enfoque histórico hermenéutico. Esto permitirá hacer un trabajo de recuperación de memoria colectiva, dando legitimidad a la organización y el proceso de recuperación de tierras.

Palabras clave

Acción colectiva, liderazgo, organización comunitaria, territorio, tierra.

Introducción

“Los pueblos que no cultivan su memoria jamás podrán construir su propia historia y carecerán de independencia y soberanía y por lo tanto serán incapaces de: interpretar su pasado, enfrentar el presente y de proyectar su futuro”

Tupac Amaru – 1780

En Colombia, en los siglos XIX y XX, los resguardos se convierten en escenarios de defensa territorial e identitaria de los pueblos indígenas. El Estado Colombiano desde 1991 con la proclamación de la nueva constitución reconoce a las comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho, y con ello a la figura del resguardo como una unidad territorial y económica basada en la propiedad colectiva de carácter inembargable e inalienable, en correspondencia con el convenio 169 de la OIT que ordena reconocer a los pueblos indígenas la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 14). Con este reconocimiento, los pueblos indígenas de Colombia continúan ante el Estado, con el proceso de legalización colectiva de su territorio.



Este trabajo se elabora en el marco del desarrollo de mi investigación de tesis del pregrado de sociología de la universidad de Nariño, cuyo objetivo es Analizar el proceso de organización de la comunidad indígena de Guachucal por la recuperación de las tierras entre los años 1980 y 1992, la pregunta principal es ¿cómo fue el proceso de recuperar las tierras a través de la organización y el liderazgo? , y ¿porque tratar el tema de la recuperación de tierras? es por que es uno de los vértices que permite entender el contexto social, político y cultural en el que se enmarcan las memorias del resguardo de Guachucal.

Agradezco profundamente a todas las personas del Resguardo de Guachucal que colaboran en esta investigación por su tiempo y disposición para responder a mis preguntas, su amable atención y recibimiento en sus casas o en las oficinas del cabildo; de manera especial a la familia Inampues que han abierto su corazón para contar las memorias alrededor de fallecido taita Laureano Inampues que fue uno de los precursores para que se llevara a cabo la recuperación de tierras, y a la magister Ángela Roció Mora que de su labor de docente y asesor estamos llevando a cabo esta investigación.

Fundamentación del problema

América Latina tiene diferentes características socioculturales, una de ellas es su condición pluriétnica y pluricultural, sin embargo, la relación y la interacción entre las diferentes realidades existentes que se ha dado históricamente no ha sido pacífica. Esta situación es el resultado de las diferentes políticas económicas y sociales que apuntan siempre a un desarrollo económico más que social el cual afecta a las comunidades indígenas.

La histórica lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que fue forzosamente arrebatado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años, sino que también tiene que ver con su sentido de pertenecía al territorio, es por ello que es necesario tener en cuenta que "la tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblos indígenas: ella es la "madre que nos acoge" o "Pachamama" es el espacio donde la vida se crea y se re-crea" (Vargas J. , 2007, pág. 5). Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión el colonizador que veía la tierra como objeto de posesión: espacio de saqueo, extracción



de metales, piedras preciosas, y para la producción extensiva de la ganadería. Estas visiones opuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, llevándolos a procesos de organización para la recuperación y defensa de su derecho a la tierra.

La recuperación de la tierra es una respuesta de las diferentes comunidades indígenas, frente a los procesos de expropiación de la tierra para lograr reivindicar sus derechos sobre ella. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, hay un despertar para los indígenas de América Latina, donde se organizan para recuperar lo que les han quitado, algunos ejemplos de estos procesos se han dado en Bolivia, México, Guatemala, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia, la tierra ha sido el factor común de la disputa entre indígenas, el Estado, y los grandes terratenientes, una tarea valerosa que para los pueblos Indígenas ha dejado víctimas mortales, logrando resultados como los que expone Vargas (2007)

El caso colombiano no ha estado aislado de las demás acciones que se han llevado a cabo en América latina, las décadas ochenta y noventa fueron propicias para que diferentes actores tomen conciencia de su rol en el país: los campesinos, indígenas y clase obrera. Para los indígenas, la década de los años ochenta fue un tiempo donde lograron resultados que beneficiaron a sus comunidades con el reconocimiento y la aplicación de la ley 89 de 1890 donde se garantiza la tenencia de tierra y conformación de cabildos. También el convenio 69 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) buscó asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus valores culturales, sociales y económicos. En este sentido se puede mencionar a un personaje importante en el proceso de la recuperación de las Tierras y también precursor de la formación de las organizaciones indígenas y campesinas Manuel Quintín Lame quien fue el pionero de la recuperación de tierras y la eliminación del terraje esto por los años 1921 a 1938, Lame tuvo su gratificación en 1938 cuando se decretó la restitución de los resguardos de Ortega y Chaparral, escriturados en 1948" (Gomez Cardona, 2012, pág. 4). Este líder tuvo tanta acogida que en 1984 se activó la primera guerrilla indígena que lleva su nombre como precursor de la recuperación de tierras en el departamento del Cauca, (Movimiento Armado Quintín Lame) dando paso al proceso de recuperación de tierras y la creación de las distintas formas de representación indígena como la Organización Indígena de Colombia (ONIC), Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), en la década de los ochenta



estas organizaciones fueron replicando el reconocimiento de los derechos indígenas en cada pueblo étnico presente, con un objetivo; enseñar a más personas y que éstas puedan llegar a ser líderes comprometidos en el fortalecimiento de la comunidad, y la recuperación de tierras bajo la filosofía indigenista del despertar del indio desde una mirada de izquierda.

En los años ochenta con el auge del despertar indígena de diferentes comunidades indígenas se empiezan a movilizar y conformar redes de organizaciones de tipo regional y nacional, lideradas por las organizaciones mencionadas debido a la presión que estaban dando los indígenas tras haberse organizado. Hacia la década de los noventa, el Estado llevará a cabo "una acelerada titulación de territorios indígenas, el área de los resguardos llegaba a 25.447,348 hectáreas equivalente al 22,28 % de la superficie total del país" (Villa, 2011, pág. 43). Este reconocimiento de la tierra para los indígenas es más que una seguridad económica, pues conforma la "máxima expresión de su identidad cultural y espiritual" (Guereña, 2016, pág. 18).

En el departamento de Nariño (1) la recuperación de tierras ha llevado grandes procesos, puesto que han estado presentes organizaciones comunitarias indígenas como el movimiento indígena del sur occidente Colombiano, la ANUC, ONIC, AICO y los comuneros (indígenas que pertenecen a los resguardos), las cuales por principio de reciprocidad y solidaridad social, han llevado a cabo procesos que en su autonomía como organización beneficia a la comunidad, en este caso a los pueblos indígenas Pastos, Quillacingas, Awa, Kofan y Eperaras Siapidaras. Uno de los primeros municipios que empieza la lucha es Cumbal (2), donde las comunidades indígenas tanto del resguardo del gran Cumbal como de Panan invadieron la finca los Laureles. Esta acción es producto de la disparidad en la tenencia de tierras porque en Colombia la concentración de la tierra está en pocas manos, "el 75,4 % del territorio rural es de propiedad privada, y solo el 17,7% es de resguardos indígenas", (Centro de Memoria Historica, 2016, pág. 260).

Para esta investigación el proceso que se va analizar se produce en el municipio de Guachucal(3) donde también han existido procesos de recuperación de tierras; este resguardo está "ubicado en la cordillera de los Andes, formado en el nudo de los Pastos, cuenta con un clima frío y páramo al suroccidente del país, cuenta con una población aproximada de 5624 habitantes distribuidas en 1506 familias, en un área de 3900 has" (Guerrero, 2011, pág. 38), se desarrollan actividades económicas como la ganadería y



la agricultura. El accionar del resguardo indígena para recuperar sus tierras se fundamenta en la escritura 47(4) de agosto de 1895, por el cual se les adjudicó el resguardo de título colonial dando inicio al proceso y la organización para la recuperación de sus tierras que estaban en manos de terratenientes, así "para el año 1984 un 25 de noviembre, invaden una finca denominada Simancas" (Diario del Sur, 1984), también están las tierras del Corso, Común de Juntas y el Rosario. Este proceso de organización para la recuperación de tierras tiene en el trasfondo el trabajo del líder indígena y del comunero; el más notable en esta comunidad es el indígena Laureano Inampues, nacido un 23 de febrero de 1955, este personaje logró llevar a la comunidad a un tipo de organización firme para recuperar diversas tierras que en la escritura madre estaban estipuladas, gracias a su capacidad de liderazgo logro llevar un proceso de recuperación de tierras importante para la comunidad indígena de Los Pastos. También hay que mencionar que el INCORA (5) tuvo gran relevancia para ayudar en el proceso de la adjudicación y legalización de tierras que estaban siendo recuperadas por los indígenas Pastos, dando validez a la escritura 047 de título colonial, reconociendo el área que les pertenece a los indígenas "3900 has aproximadamente, el resguardo bajo la figura de posesión de cabildo tiene recuperado 1325 has" (Guerrero, 2011, pág. 52). Las diferentes acciones que se estaban dando a nivel micro, a nivel de cada resguardo logró que se reflejara en la lucha con el Estado, provocando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 haciendo que, "se rompieron muchos paradigmas de la sociedad colombiana en materia de participación política; uno de ellos fue el posibilitar a los indígenas una representación en dicho espacio de decisiones futuras. Con la elección de dos constituyentes indígenas, Lorenzo Muelas (20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (25.880 votos) se empezó a reconocer una realidad que hasta entonces había sido invisible para nuestro país: su evidente carácter multiétnico y pluricultural. La fuerza y el empuje de estos dos constituyentes fue evidente y marcó avances significativos en la Constitución de 1991. Su influencia fue notoria en tres aspectos que deben señalarse: el ordenamiento territorial; la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos. El reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva Constitución. (Londoño, S,F)

Esto fue la mayor ganancia por parte de las comunidades indígenas puesto que el derecho a la participación en actividades políticas fue trascendental para que las



organizaciones indígenas en todo el país tomaran fuerza para seguir luchando junto con los pueblos indígenas por el respeto a los derechos que se habían reivindicado gracias a las políticas enmarcadas en la constitución política de Colombia y también a las políticas internacionales que daban garantía a los procesos que las comunidades llevan entorno a su territorio mover a contexto nacional.

El año 1991 es importante destacarlo debido a que se logran grandes frutos de las diferentes luchas de los pueblo indígenas, sin embargo estas luchas siempre han dejado víctimas, el pueblo indígena Pasto (6) sufre una gran pérdida; el 14 de mayo Laureano Inampues (7) fue secuestrado por personas al margen de la ley y luego asesinado, su cuerpo fue encontrado días después en el río Guitara con signos de tortura, después de 24 años la comunidad lo sigue recordando. Laureano Inampues fue un líder que dejó un legado importante puesto que el cabildo de Guachucal no solo se proyectó en la recuperación de tierras, si no en un sentido amplio en todos los campos el de la salud y educación, hoy en día se ve reflejado en la existencia de la IPS indígena de Guachucal y Colimba, y el nombramiento de un establecimiento educativo como establecimiento indígena Genaro León de la cabecera del municipio de Guachucal, y todo esto gracias a la organización de los indígenas que desde su consigna "recuperar la tierra para recuperarlo todo" han hecho visibles sus derechos. (F. Malte, comunicación directa, 8 de mayo del 2018)

La problemática de la tenencia de tierras ha sido siempre un factor de disputa, entre diferentes actores, en este caso la recuperación de tierras ha tenido como principales actores a los más vulnerables: indígenas, campesino y afros, que luchan contra el Estado y los grandes terratenientes expuestos a la problemática de la recuperación de tierras. Lo que pretende la presente investigación es analizar el proceso de organización de la comunidad indígena de Guachucal por la recuperación de las tierras entre los años 1980 y 1992, puesto que en este periodo de tiempo se evidencia un gran auge en el proceso de recuperación de Tierras. Para adelantar esta tarea se requiere abordar categorías como: la tierra, el territorio, la territorialidad, la acción colectiva, la organización comunitaria y el liderazgo para responder el interrogante planteado el cual es ¿Cómo fue el proceso de recuperación de tierras a partir de la organización comunitaria en el cabildo indígena de Guachucal Nariño entre los años 1980-1992?



Método

El trabajo se desarrollará en el Resguardo indígena de Guachucal- Nariño que hace parte del gran territorio del pueblo de Los Pastos y se localiza en el municipio del mismo nombre. Es una investigación cualitativa, orientada desde el enfoque interpretativo con un método histórico-hermenéutico, La principal técnica de recolección de datos será la entrevista semiestructurada a profundidad, testimonios, también se utilizara la herramienta de construcción de historias de vida, cartografía social asociada con grupos focales, revisión documental en periódicos oficiales como son el Diario del sur, y documentos oficiales del resguardo de Guachucal, y la técnica para la selección de la muestra poblacional será muestra en cadena o por redes (bola de nieve) .

Resultados y discusión

Para esta investigación se tiene en cuenta las categorías clave como organización comunitaria, tierra, y liderazgo, las cuales son clave para analizar el proceso de la organización comunitaria indígena a través de la recuperación de la tierra, en este proceso investigativo en el resguardo de Guachucal, se mira necesario primero definir el móvil que hace que la comunidad se organice, el cual era recuperar la tierra para recuperarlo todo, un lema que acompaño a las luchas de los pueblos indígenas colombianos, el cual le permitió llegar a la comunidades que se identificaban con este lema, puesto que para ellos la tierra, Va más allá de un pedazo donde sembrar o dormir, es el espacio donde habitan vivos y muertos, el lugar donde se recrea el cuerpo y así mismo el espíritu, en donde están los mensajes y enseñanzas de sus antepasados y en donde se desarrolló su cultura. (Pavajeau, 2010), de esta manera tambien se afianza o que expresaba José Carlos Mariátegui

“La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que "la vida viene de la tierra" y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. (Mariátegui, 1928, pág. 24)

Y esto porque en la tierra para los indígenas está ligado su cosmovisión, su filosofía, su simbología, su forma de organización tanto social como cultural además es un elemento de sabiduría y madre de todo "pacha mama" como la llaman la mayoría de las comunidades indígenas. El concepto de tierra como "Madre Tierra" y manifestación de la "feminidad cósmica" para las comunidades indígenas es lo que marca la diferencia



fundamental con las sociedades modernas, puesto que éstas están basadas en el desarrollo tecnológico, de esta manera:

Conciben que están por encima de la tierra, que son superiores a ella y por lo tanto está al servicio del hombre, por ello pueden venderla, arrendarla, sobre explotarla; tratarla como mercancía y apreciarla solo en términos de rentabilidad económica. (Pavajeau, 2010, pág. 5)

Por lo anterior entendiendo el valor que para las comunidades indígenas tiene la tierra deciden organizarse, para defender su cultura y cambiar su modo de subsistencia y tener un mejor calidad de vida, puesto que participantes de la investigación mencionan que en el afán de cambiar su modo de vida puesto que mucho eran sirvientes de las grandes haciendas y no ganaban más que para comer, se animaron a organizarse y entender por qué defender la tierra es importante para perdurar en el tiempo, la organización bien fundamentada logra frutos y más si tienen un fin en común, en este caso la organización funciona como un tipo de estructura social pues funcionan como instrumentos con fines especiales orientados a la consecución de objetivos específicos. Visto de esta manera, son sin lugar a dudas uno de los inventos sociales más exitosos de todos los tiempos”(Scott W. , 2005). Y lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les exigen su unión para poder enfrentarlos, desde la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación la cual en el resguardo de Guachucal fue una organización que gracias a la unión y el liderazgo que ejercían los comuneros o recuperadores como ellos se nombraron fue importante para que se lograra el objetivo, sus códigos de seguridad, hermandad, el sentirse una sola comunidad hizo que el resguardo de Guachucal haya llevado un proceso de recuperación de tierras exitoso donde se han logrado recuperar tierras que en la escritura madre la 047 están estipuladas que le pertenecen al resguardo.

El proceso del ejercicio de la organización es importante puesto que en la dinámica de organizarse se conoce a la comunidad, se entiende por comunidad "un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de determinados recursos y que tienen determinadas demandas" (Liceaga, 2010, pág. 58). Una comunidad siempre es el conjunto de estos cuatro factores territorio, población, recursos y demandas con sus constantes y mutantes interrelaciones en el proceso de tener un cierto bienestar para sus integrantes. En este proceso investigativo cabe destacar la importancia de liderazgo, para este trabajo donde se toma los años de 1980 y 1992 , años que fueron cruciales a



nivel latinoamericano por todas las luchas que llevaban los indígenas , en Guachucal Nariño este proceso de recuperar la tierra y de cómo se organizan las comunidades indígenas para llevar a cabo esta acción, se reconoce que fue gracias a la presencia de grandes personas que estuvieron liderando estos procesos, nace la necesidad de examinar el liderazgo del taita Laureano Inampues, quien gracias a su carisma y poder de la palabra llevó a la comunidad a organizarse para recuperar la tierra y continuar con los procesos iniciados por sus antecesores. El liderazgo de Laureano Inampues se destaca por el legado que dejó, no solo en la recuperación de las tierras, si no en el cumplimiento de la consigna de su la lucha que era "recuperar la tierra para recuperarlo todo", hoy se entiende en la comunidad que gracias a la recuperación de tierra se puede contar con el sustento de las familias del resguardo, la vivienda, la educación y la salud.

El liderazgo en el sentido más general, "hace referencia a las capacidades relacionadas con la persuasión de una colectividad para el logro de objetivos concretos, o para el establecimiento de ellos por medios no coercitivos". (Velandia, 2003, pág. 3) En este aspecto el líder es quien ejerce más influencia que otro miembro cualquiera o es el individuo designado por el grupo los cuales Reorientan el descontento de sus pueblos hacia exigencias que se plantean a los sistemas políticos. Uno de los más influyentes investigadores sobre liderazgo destaca varios aspectos de este complejo fenómeno multidimensional Burns (1978), Reconoce que el liderazgo es "disensión", ya que está basado en el conflicto y en el poder sobre la asignación autoritaria de valores para una sociedad. En segundo lugar, el liderazgo es "colectivo" ya que está envuelto en la interacción entre líder-seguidores. En tercer lugar, el liderazgo es "resuelto" y "determinado", en el sentido de que lleva a la creación de ideas, movimientos, instituciones, naciones. En cuarto lugar, el liderazgo adquiere dos formas diferentes dependiendo de los "objetivos" implicados. Por una parte, el liderazgo de transacción o negociación consiste en el intercambio entre líder y seguidores para aproximar necesidades recíprocas y deseos (intercambio de trabajos por votos); este tipo de liderazgo persigue valores como la sinceridad, honestidad y la responsabilidad (Jimenez, 2008, pág. 191)

Por otro lado, el liderazgo está sometido a un proceso de construcción social, donde se evidencia las relaciones sociales donde prima el carácter colectivo sobre el personal .No hay individuo sin sociedad y sociedad sin individuo, por lo tanto en la sociología de acuerdo con Pierre Bourdieu, "consiste en la comprensión científica, teórica y empírica,



del sistema de poder y sus estrechas vinculaciones con las estructuras culturales" (Bourdieu, 1988, pág. 127)

Como se mencionó el liderazgo se encuentra en todos los campos sociales, de esta manera líderes nacen día con día dejando legados dentro de las comunidades, dentro de este estudio de analizar la organización comunitaria del cabildo indígena de Guachucal por la recuperación de las tierras, se debe observar al líder indígena quien han tomado este papel dentro de las comunidades teniendo la responsabilidad de velar los suyos y defender su territorio. Este liderazgo no se desliga del liderazgo político o tradicional del que se menciona anteriormente, sin embargo para las comunidades indígenas, un líder tiene acepciones particulares puesto que dentro de las pueblos indígenas hay jerarquías una de estas es la de las autoridades tradicionales "quienes son los que reproducen y guardan el cumplimiento a las normas sociales, donde la legitimidad de esas normas están en la devoción, la religión, en la sabiduría, en la eficacia de las artes curativas" (Velandia, 2003, pág. 24), si bien el líder tiene cualidades excepcionales en el espacio socio-político, quien va a la cabeza, y el liderazgo es la calidad o institución que cobijan las acciones de liderar. El líder indígena "es un líder tradicional que ha sido forjador de la lucha por la tierra, y es quien está para obedecer a los taitas mayores (ancianos) y a su comunidad que es la máxima autoridad para la resolución de conflictos y administración de justicia y del territorio" (Velandia, 2003, pág. 25) .Cómo ya se mencionó, que un líder tiene habilidades socio políticas, uno de los primeros en identificar los tipos de líderes fue Max Weber, identifico el líder carismático, tradicional y legítimo, dando así la posibilidad de poder identificar al tipo de líder en cada comunidad, en este caso de los pueblos indígenas se puede hablar de un tipo de líder carismático y democrático. Puesto que tiene la capacidad de generar entusiasmo donde su poder de líder en palabras de Weber se "legitima por el heroísmo personal o revelación personal, donde sus cualidades superiores a los demás puestas en la cotidianidad se certifican aún más, haciendo que su carisma ayude a la permanencia en el poder" (Weber, 2014, pág. 1146) También se habla de un tipo de líder carismático y democrático puesto que los líderes indígenas al estar sujetos a las autoridades máximas ellos adoptan el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo, no delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico.



Laureano Inampues fue una persona que desde su juventud se interesó por los procesos que estaba gestando la ANUC en Colombia, y cuando se presentó la oportunidad de entrar a esta organización se formó dentro de esta, con una fuerte ideología basada en los derechos y la forma de recuperarlos y entender que la tierra entraba en un derecho fundamental para las comunidades indígenas y no indígenas, llegó a ser presidente de la liga de usuarios campesinos de Nariño, luego hacer parte de la línea indígena de la ANUC en Nariño, y gracias a su trayectoria a ser gobernador indígena del resguardo de Guachucal gestando luchas de recuperación de importantes tierras. Este líder dio su vida en la lucha de recuperar la tierra, fue secuestrado y muerto un 7 de mayo de 1994 desapareciendo a la persona, sin embargo el ideal y la perseverancia de construir un entorno mejor no murió puesto que su legado aún persiste.

El liderazgo que ejerció esta persona fue por el trabajo que se llevaba en todo el territorio por los ideales de unos tantos líderes a nivel de Nariño, el Cauca, Tolima, la costa colombiana se unieron para formar las diferentes organizaciones como son, La ANUC, CRIC, ANUC- Indígena, Luego MAICO (movimiento de autoridades indígenas colombianas), el cual se transformó en AICO(8) (autoridades indígenas de Colombia), las cuales son organizaciones que empezaron a gestarse en la comunidad y gracias a la constitución de 1991 de Colombia se tuvo ya una notoriedad política de estas organizaciones en el senado logrando así que los derechos indígenas sean reconocidos y abrir la participación en todo ámbito social que el estado brinda, de este modo el liderazgo es una posición social que le permite al líder guiar o dirigir a otros, logrando la aceptación de su figura como dirigente de modo natural, por mostrarse comprometido, motivado por aspectos relacionados a la comunidad y por qué refleja la capacidad para enfrentarlos y solucionarlos.

Por lo anterior se puede evidenciar de un proceso complejo, donde la organización y el liderazgo juegan un papel importante para recuperar las tierras y el mismo territorio, especialmente en el resguardo de Guachucal el recuperar la tierras ha logrado que la comunidad indígena hasta el día de hoy sea una comunidad fuerte, como también sea una de las principales que manejan la economía del territorio puesto que la mayoría del territorio es de economía ganadera y agropecuaria, actividades practicadas por la mayoría de los recuperadores y demás comunidad.



Conclusión

En las memorias del resguardo indígena de Guachucal, las luchas territoriales son un eje central para la explicación de las dinámicas de las organizaciones existentes como también el actuar político y social de estas y de cómo esta comunidad ha ayudado a que el municipio de Guachucal en el crecimiento económico.

Si bien esta investigación se particulariza en los tiempos actuales, remonta sus orígenes al proceso de colonización, el cual se llevó en cada rincón de Latinoamérica, recorriendo diferentes momentos de la historia. Son así memorias largas que interviene en los sentidos y explicaciones del presente y en la elaboración de la identidad. Las acciones Del taita Laureano Inampues, son uno de los hitos de memoria en el resguardo de Guachucal, desde el cual se explica el comienzo de una organización comunitaria indígena mejor organizada puesto que tienen ideales definidos y un objetivo conjunto por que luchar. El recuerdo de las acciones de este líder indígena, marcan rumbos morales de acción y posibilidades de triunfo para las luchas actuales.

Las memorias de las luchas por las recuperaciones de tierra asumiendo los planteamientos de Marco Tobón son un modo de actuación política y cultural del pueblo indígena del resguardo de Guachucal, para enfrentar y asumir el papel que le correspondía en la sociedad.

La construcción de la identidad a través de las memorias de la recuperación de la tierra, involucra, por un lado, la permanencia en el cambio, y por otro lado, la relación con el “otro” no indígena encarnado en la figura del rico-colono-terrateniente. Esta identidad relacional se deriva de las fricciones y las resistencias del mundo indígena, desatadas desde el momento de la “conquista” y prolongadas en los demás momentos de lucha. Las tomas por la recuperación de la tierra, demuestran que “el territorio, por lo tanto, como resultado de las prácticas culturales, se torna refugio autónomo, entidad política en la que se despliega libremente, y con legítima autoridad, la vida cultural” (Tobón, 2016 pág. 21).

Notas

¹ Nariño: Departamento de Colombia ubicado en el sur occidente del país

² Cumbal municipio del departamento de Nariño ubicado al suroccidente de este de clima frío, de economía agropecuaria



³ Guachucal: municipio del departamento de Nariño ubicado al suroccidente de este de clima frío, de economía agropecuaria y ganadera, con comunidades indígenas de la etnia 'Pasto

⁴ Escritura 047 notaria primera de Ipiales 26 de Agosto 1895 escritura madre de título colonial que pertenece al resguardo de Guachucal la cual otorga las tierras válidas para ser recuperadas.

⁵ INCORA: instituto colombiano de la reforma Agraria, el cual funciono hasta el 2002

⁶ Indígenas Pasto: comunidad de personas de la etnia de pasto ubicadas en el departamento de Nariño y Parte de putumayo

⁷ Laureano Inampues (1955-1994) líder indígena del resguardo de Guachucal el cual lidero la recuperación de tierras en este resguardo,

⁸ AICO: (Autoridades Indígenas De Colombia) partido político y social liderado por comunidades indígenas.

Bibliografía

Bourdieu. (1988). *Espacio Social y Poder Simbolico*. Buenos Aires : Gedisa .

Centro de Memoria Historica. (2016). *Tierras y Conflictos Rurales* . Bogota: Centro de Memoria Historica.

Gomez Cardona, F. (2012). *Manuel Quintin Lame en la Confluencia de la Historia y el Mito*. Cali.

Guereña, A. (2016). *Desterrados, Tierra, Poder Y Desigualdad*. OXAM.

Guerrero, J. (2011). *Pueblos Indigenas de Nariño*. Pasto: Mados Print.

Jimenez, F. (2008). *Enfoque Sociologico Para el Estudio del Liderazgo Politico* . España: Revista Castellanos, Manchega de Ciencias Sociales .

Liceaga, G. (2010). *El Concepto de Comunidad, en las Ciencias Sociales Latino Americanas ,Apuntes Para una Comprension*. Argentina.

Londoño, B. (S,F). *La Constitucion de 1991 Y Los Indiegnas* . Bogota : biblioteca Virtual del Banco De La Republica .

Malte, F. (8 de mayo de 2018). Discurso, Aniversario de Muerte de Laureano Inampues. (A. Canchala, Entrevistador) GUACHUCAL.

Mariátegui, J. C. (1928). *Siete Ensayos De La Interpretacion De La Realidad Peruana*. Lima: Amatua.

Pavajeau, G. (2010). *COMUNIDADES INDÍGENAS, TIERRA Y RECURSOS NATURALES FRENTE A*. Bogota: Tesis, universiad libre de Colombia.



TOBÓN , Marco. 2016. “Reirse ante la guerra. Las bromas como actuación política entre los muina, Amazonia colombiana”. Ponencia ganadora de la octava edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UNAM).

Vargas, J. (2007). *Movimiento Indígena en América Latina: Resistencia y Proyecto Alternativo*. Mexico: Juan Pablo Editores.

Velandia, D. (2003). *Liderazgo Indígena*. Bogota: Universidad Nacional de Caldas.

Weber, M. (2014). *Economía y Sociedad*. Mexico: FCE MEXICO.



Imaginarios geográficos de la periferia. Aportes para una geografía de las relaciones de poder

Jaiber Orozco

Resumen

Las regiones y los paisajes periféricos, conocidos como umbrales, fronteras o territorios inhóspitos tienen una característica particular: la producción de imaginarios negativos sobre el espacio y sus sujetos. Esta producción discursiva ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, entre las que destacan: la integración de los estados-nacionales; la producción de la otredad; y la expansión de procesos globales como el capitalismo o el colonialismo; en las primeras han primado las miradas locales sobre las globales; en la última, por el contrario, se han privilegiado la globalidad sobre la realidad local, obviando otras escalas geográficas, especialmente la local. En la siguiente ponencia propongo un acercamiento multiescalar al tema desde la perspectiva de la construcción del espacio, tomada de la geografía posmoderna, y un acercamiento metodológico que combina estrategias de la geografía humana y la investigación antropológica e histórica. Para ellos retomo el concepto de lugar y la perspectiva de la construcción del espacio geográfico de la teoría geográfica posmoderna, buscando con ello comprender la forma en la que se produce el espacio de una forma discursiva y material.

Palabras clave

Construcción del espacio, fronteras, lugar, desarrollo, colonización.

Introducción

En los últimos años, la participación en diversas investigaciones en México y Colombia me han permitido realizar trabajo de campo algunas zonas rurales consideradas lejanas y periféricas con relación a los centros regionales o nacionales que han quedado como pequeñas franjas espaciales en medio del desarrollo rural y urbano e, incluso, en la periferia de la historia nacional. En estos espacios considerados como fronteras, umbrales, márgenes o franjas me he interesado por las actividades productivas de grupos humanos aparentemente separados de la vida rural y urbana moderna y las relaciones que construyen con su entorno, sin dejar de lado la influencia de agentes externos en la producción de sus espacios y la naturaleza. En estas experiencias algo puntual ha llamado mi atención: la producción discursiva de estas periferias espaciales



y la imagen negativa que en ellas pesa sobre sus pobladores, a quienes, desde diferentes fuentes, se refieren como a gente perezosa, montaráz, violenta y atrasada. Esta imagen se ha trasladado también a sus territorios, definidos, peyorativamente, como lugares inhóspitos, periféricos y salvajes, sumidos en una naturaleza al tiempo lejana y atractiva, exótica y amenazante. En esta doble imagen parece haber una correlación entre la producción de periferias geográficas, la construcción de la otredad y, por supuesto, de la naturaleza ¿A qué se debe esta idea negativa sobre ciertas poblaciones rurales y sus territorios? ¿Cuál es su relación con la producción del espacio y la naturaleza? Mi argumento es que esta idea del espacio lleva implícita una concepción de la naturaleza, que normalmente debe ser, como sus pobladores, civilizada e integrada al control territorial y que esto, a su vez, se soporta en la construcción de imágenes simplistas, esto es en la producción de imaginarios geográficos.

En la presente ponencia me interesa adentrarme en las periferias como producto de la construcción del espacio geográfico, del encuentro de procesos a diferentes escalas; como el resultado de una geografía de las relaciones de poder en la que la producción discursiva e imaginaria del espacio y la naturaleza juegan un papel central para la materialización de proyectos territoriales exógenos. Para ejemplificar esto mencionaré el caso del Samaná Norte, en Colombia, una pequeña zona rural ubicada a un par de horas de Medellín, en la denominada zona de embalses del Oriente antioqueño y cercana a una de las mayores fronteras internas de Colombia, el Magdalena medio. Con este ejemplo quiero, además, proponer un encuadre conceptual y metodológico para estudiar este tipo de lugares. Para complementar esto recurriré también a otros ejemplos.

Imaginarios geográficos de la periferia

Conocí Samaná Norte en el 2015 cuando hice mi investigación sobre las actividades económicas de subsistencia en esta parte de San Carlos (Orozco: 2017). Este corregimiento¹ está ubicado en las vertientes orientales de la cordillera central en el Oriente antioqueño, una de las regiones más desarrolladas de Antioquia, Colombia. Es, además, parte de la zona de embalses, donde se produce la mayor parte de la energía eléctrica del país y de un territorio rico en bosques y agua, cruzado por una enorme cantidad de riachuelos que desembocan en los cañones húmedos del río Samaná Norte que recorre el Oriente antioqueño de occidente a oriente.



A pesar de su cercanía al complejo hidroeléctrico y el altiplano de San Nicolás, esta zona rural es parte de una Antioquia anónima, distante del discurso triunfalista que ha caracterizado al departamento y la región. Su existencia se ha hecho notoria, quizás, por las consecuencias del conflicto armado, entre las que resalta el desplazamiento forzado de casi toda la población durante los primeros años del presente siglo, así como por los intereses que generan sus recursos en agentes externos, especialmente el agua, el bosque y los minerales. Sigue siendo, así mismo, una zona rural alejada, poco conectada y caracterizada por una economía de subsistencia en la que priman los pocos excedentes, las dificultades de acceso y una permanente fragilidad productiva. La riqueza ambiental y el desarrollo que generan sus recursos contrastan con las condiciones de vida de su población, ligada a una economía de subsistencia heredada de procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola de mediados del siglo XX, que combina la agricultura de subsistencia, con la minería, la pesca, la ganadería y la extracción de madera a pequeña escala.

Durante la investigación me causó curiosidad la opinión que muchas personas externas tenían sobre esta zona geográfica y sus habitantes a quienes consideraban seres rústicos, violentos, portadores de una cultura difícil de transformar y, sobre todo, destructores del medio ambiente por la extracción de madera. Al tiempo, el Samaná Norte parecía ser, en estas opiniones, un territorio apreciable por la riqueza de sus recursos naturales, pero difícil para el poblamiento humano por su morfología y sus condiciones ambientales. Debido a la presencia de grupos armados durante el conflicto armado colombiano de las últimas décadas, a esta imagen, ya negativa, se le sumó la de territorio de la guerra.

Estas imágenes son usadas en sentido peyorativo y han permeado, incluso, la producción académica. En trabajos regionales y de localidades realizados en los ochenta y noventa se nombró la zona a la que pertenece el corregimiento de Samaná Norte como “subregión de la cultura de la supervivencia y la resistencia” (CENICS 1989a: 66; Henao 2004:109). Denominación que, lejos de una descripción objetiva, mostraba una visión negativa su población a la cual describía como individualista, desarticulada, preocupada sólo por vivir al día y caracterizada por la ausencia de vínculos comunitarios que dificultaban todo tipo de organización; como desbrozadores de montes alucinados por la riqueza forestal que explotaban sin control; así como por el poco apego territorial y la baja iniciativa para transformar sus precarias condiciones de vida. Su territorio, además, era descrito como una zona difícil para el poblamiento por



su clima tropical cálido y húmedo, así como arduo para la producción agrícola por su morfología encañonada y la baja calidad de sus suelos (CENICS 1989^a: 66; INER 1993: 41; Giraldo y Muñoz 2012: 149).

La reducida rentabilidad de las actividades económicas y la baja productividad de la tierra eran los criterios para definir a la población como una cultura de supervivencia y la resistencia ya que no lograban (ni querían) estabilizar una agricultura como los grupos campesinos de otras partes de la región. Lo que llama la atención, además, es que las denominaciones peyorativas mencionadas no explican las causas de la inestabilidad productiva del Samaná Norte, ni su lógica social y espacial, sino que, en forma similar a los prejuicios del imaginario colonizador, centran el problema en los habitantes, en el carácter cultural del poblador, a quien se refiere como: “inestable, casi trashumante, y con poca disposición para atarse a la tierra, para el trabajo agrícola y para hacer vida campesina”, y al ambiente difícil que habitaban. En ellas, por supuesto hay un determinismo ambiental en el que se crean imágenes simplistas del espacio y sus habitantes.

Lo particular es que las investigaciones académicas reproduzcan estas interpretaciones y que, en muchos casos, las hayan producido y alimentado. Tal y como lo menciona Margarita Serje (2011), los estudios regionales han nutrido los prejuicios sobre las zonas consideradas periféricas y fronterizas y en ellos, paradójicamente, se ha sustentado el discurso del Estado y su accionar territorial. Esto es claro en el Oriente antioqueño, en donde los estudios de regiones y localidades (Iner, 1993) fueron una de las bases de la regionalización social y ambiental del territorio. Por su puesto, los pobladores, que tienen procesos históricos y sociales propios, no comparten estas ideas y no se sienten parte de una periferia.

Estas imágenes, que aquí llamaré imaginarios geográficos, ya que son una construcción discursiva del espacio y sus sujetos, son parte de un largo prejuicio sobre ciertas zonas geográficas con el que fue colonizada en general América Latina. Las zonas bajas, montañosas, selváticas y áridas, parecen escenarios perfectos para estas construcciones. Esta relación entre ambiente y cultura, como se sabe, fue uno de los temas centrales del determinismo geográfico decimonónico y tuvo una especial utilidad para los proyectos colonialistas. Por lo que llama la atención que se mantenga, incluso, en los estudios académicos. Con estos imaginarios se ha justificado la expulsión y el desplazamiento de los pobladores cuyos espacios son, casi siempre, “territorios



vaciales” o sacrificables para el desarrollo debido a la “baja productividad” que los caracteriza y a la poca capacidad de sus habitantes para hacerlos beneficiosos, un discurso íntimamente ligado al colonialismo, a la capitalización de los recursos naturales y a la instauración de formas productivas que gozan del prestigio del desarrollo y el mercado como el monocultivo y la ganadería. Esto es evidente en Samaná Norte, donde los ganaderos estaban mejor posicionados que el resto de la población y en donde, además de la guerra, han sido afectados por la por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.

Estas producciones discursivas, en fin, construyen una visión dicotómica de la realidad que genera divisiones y fronteras sociales y espaciales. En el caso del Samaná Norte, estos imaginarios geográficos, de enormes connotaciones ecológicas y políticas, son usadas para definir a los pobladores como gente poco trabajadora, sin iniciativa y apática a todo tipo de orden, frente al imaginario del antioqueño trabajador, organizado y exitoso de las tierras altas, representado por Medellín y sus zonas aledañas que se volvieron modelos a seguir dentro de los proyectos hegemónicos de desarrollo. Las zonas periféricas, por el contrario, serían su contraparte.

Los imaginarios geográficos de la periferia son una permanente construcción de otredades espaciales, ambientales y sociales que ha caracterizado a la modernidad y han fundamentado las ideas de progreso y desarrollo. Estos mismos calificativos son usados hoy para implementar proyectos de todo tipo y justificar de territorios y sus recursos. Así lo evidencian los diagnósticos sociales de las empresas constructoras de hidroeléctricas o las mineras en el Oriente antioqueño y otras zonas de Colombia, en cuya justificación aparecen los mismos calificativos ya mencionados, a veces un poco ocultos bajo el discurso de la responsabilidad social. Paradójicamente, estas producciones discursivas también son retomadas por algunos conservacionistas que prefieren ver una naturaleza desvinculada de su producción social, ya que ven la cultura del poblador como una amenaza para su equilibrio.

Es importante anotar que los imaginarios geográficos de la periferia reproducen las ideas occidentales de civilización y progreso, desde la cuales se valora de forma negativa a regiones y poblaciones que son calificadas como pobres, atrasadas y analfabetas. Es, asimismo, la manifestación de una visión de la historia y del desarrollo únicos, basados en criterios raciales y espaciales de superioridad bajo los cuales se califican al otro de holgazán, agresivo, perezoso, y se considera sus espacios como



poco productivos e insalubres, de los que nada bueno puede surgir debido al clima enervante que impide incluso la capacidad de razonamiento de sus habitantes (Ibid: 51).

En Colombia estos imaginarios geográficos de la periferia han sido comunes en la construcción de otredades espaciales, ambientales y sociales. Como lo ha mencionado Margarita Serje (2011), estas construcciones son el revés de un imaginario nacional, su contraparte, su negativo. La integración territorial desigual del país, que dejó enormes franjas poco integradas ha permitido se ha apoyado y ha alimentado estas construcciones. Sin embargo, como lo han mencionado varios autores (Serje, 2017; Maldonado, 2010) este fenómeno no caracteriza a una nación o se relaciona sólo con el fracaso de un Estado. Estos discursos han acompañado a la modernidad como parte de la producción espacial del capitalismo. En este sentido la producción de las periferias y lo imaginarios geográficos superan los estados nacionales en su configuración espacial y en sus procesos históricos (Serje, 2017) y se integran a una especialización global. Esto explicaría porque regiones disimiles y distantes son descritas en los mismos términos peyorativos, como la misma ya lo ha expuesto (Serje, 2011). Esto implica, necesariamente, que una multiplicidad de ambientes y “escenarios naturales”

Para ilustrar esto voy a dar un ejemplo. La Tierra Caliente mexicana ha sido también calificada como una región atrasada, malsana, como un lugar fuera de camino, un país tropical, cuyas condiciones climáticas y sociales le han merecido el apelativo de fondillo del mundo (González y González, citado por Maldonado: 59). A esta imagen del espacio le correspondía una visión racial y de inferioridad cultural que describía a sus pobladores como holgazanes y seres agresivos, conformados con vivir al día y rodeados de la lujuria y la violencia. Como en el ejemplo del Samaná Norte, este comportamiento incivilizado se debía a la “naturaleza” salvaje del poblador que había estado al margen de la civilización. A pesar de que esta imagen es heredada de la colonia española, ha sido un referente para interpretar a la población y su territorio. Como se sabe, la Tierra Caliente mexicana es una de las regiones mexicanas donde el narcotráfico ha construido parte de su control territorial y es, en general, considerada como una de las zonas más violentas de este país, lo que también ha acrecentado su imagen negativa.

Como lo ha argumentado Salvador Maldonado, estas ideas peyorativas en Tierra Caliente han servido para la implementación de planes de inserción al proyecto nacional y desarrollo económico ligados a leyes de baldíos y a leyes liberales que permitieron la colonización y comercialización de tierras para el latifundio y no son otra cosa que el



producto histórico de la expansión del capitalismo (Maldonado, 2010: 67). La interiorización de estos fenómenos globales, en el caso de esta zona, se hizo por medio de la colonización extranjera impulsada por el Estado mexicano.

En la mayoría de los estudios, sin embargo, los procesos globales dejan de lado las realidades locales, por lo que estos imaginarios geográficos son analizados como una producción hegemónica que borra las realidades locales y la organización social y productiva de los probadores. El espacio periférico sería entonces el resultado de una elaboración exógena y vertical, tal y como lo ha mostrado la geografía marxista. A pesar de las coincidencias entre los dos lugares mencionados, como se sabe, los procesos globales no son homogéneos y, ya sea el colonialismo o el capitalismo, se particularizan en su integración a la escala local ¿Cómo estudiar estos fenómenos en su globalidad y particularidad?

Fronteras, periferias y naturaleza

En Samaná Norte este imaginario geográfico está enormemente relacionado con su poblamiento reciente y sus características geográficas: su condición de frontera agrícola y boscosa hace que se le relacione todavía con la vastedad natural, lo salvaje, virgen e incivilizado; también está alimentada por una visión de las fronteras como zonas atractivas para forajidos e inconformes, espacios recónditos ubicados por fuera del orden estatal y social, perfectos para quienes quieren mantenerse al margen. Vistos desde afuera, especialmente desde la centralidad regional, estos espacios representan las antípodas del orden social, moral y ambiental. Por lo tanto, la idea de frontera, como lo menciona Margarita Serje, mantiene en sí este imaginario geográfico heredado del pensamiento colonial y, en la mayoría de los casos, en lugar de permitir una comprensión de los procesos sociales y espaciales, reproduce los imaginarios geográficos colonizadores.

El concepto de frontera ha sido retomado también por los estudios regionales en el Samaná Norte. Debido a sus características sociales y productivas, esta franja ha sido denominada por algunos investigadores como una zona de frontera sociopolítica y cultural (CENICS 1989a: 2) o una frontera interna regional (Escobar, 2007a:116). Con este concepto se quería designar el alcance socioespacial y el encuentro de dos procesos relacionados diferenciados en el espacio, el tiempo y en su composición social: La Colonización Antioqueña del siglo XIX, por medio de la cual se expandieron los rasgos sociales, políticos y productivos antioqueños por las vertientes; y el poblamiento



y colonización estratégica de los valles cálidos del Magdalena en el siglo XX. El concepto, además, ha sido ampliamente usada en los estudios colombianos.

A pesar de esto, en estas investigaciones no hay una clara definición teórica de la frontera que a veces se confunde con límite cultural o regional. La noción de, como se sabe, ha sido además ampliamente usada en las denominaciones del Estado y los estudios académicos para referirse a las zonas conflictivas y poco integradas a los procesos territoriales nacionales. Lo particular es que en el análisis de las fronteras la mayoría de autores retoma la división administrativa del espacio regional sin cuestionar su producción hegemónica. Es decir, no desligan la producción del espacio geográfico de los límites administrativos del Estado, ni, mucho menos integran el papel de procesos globales en la definición de estos espacios, su población y su naturaleza. En este sentido no aclaran como la construcción de imaginarios espaciales en diferentes escalas ha generado una visión particular de las periferias regionales.

Algo importante que se debe tener en cuenta en estas periferias es su proceso histórico de producción y cómo, en este, ha cambiado la visión de su naturaleza. Esto, necesariamente, remite a la historia, a una historia de enfoque ambiental. El Samaná Norte, por ejemplo, fue una zona que careció de interés para el Estado colombiano y, puntualmente para el desarrollo regional antioqueño, hasta los años sesenta del siglo pasado, cuando aquello que la había hecho una zona inhóspita y difícil para el poblamiento y la colonización sistemática, como su morfología encañonada y su abundante agua, se volvieron centrales para el desarrollo hidroeléctrico del país. Así mismo, el Magdalena medio, considerada una de las principales fronteras internas del país, fue considerada durante la Colonia y buena parte de la República como una zona malsana, tórrida, enfermiza, llena de toda clase de amenazas terribles y habitada por una población indolente, perezosa y lejana a todo orden y moral. Durante este tiempo sólo fue usada como vía para conectar los altiplanos, en donde estaban, ubicadas las principales ciudades, con el río Magdalena, que se volvió la principal ruta comercial entre el interior del país y las costas. Su colonización sistemática sólo se inició cuando esta se volvió una zona estratégica para la extracción de petróleo, el monocultivo y la ganadería. Su integración espacial, además, fue concebida como una auténtica conquista de la naturaleza que cambió radicalmente su paisaje de selva a pastos. Hoy, las zonas húmedas de Antioquia, entre las que se encuentra el Magdalena medio antioqueño, el Bajo Cauca y el Urabá, consideradas antes zonas tropicales bajas y húmedas inhabitables, son consideradas territorios estratégicos para desarrollo regional



y nacional. ¿Una frontera para quién? Por lo tanto, hay una relación cercana entre la producción discursiva de las periferias, con la producción de la naturaleza. A su vez, esto se ha relacionado con procesos globales en los que se han definido la riqueza natural de estas regiones.

Algo que caracteriza a los estudios de frontera es, además, la ausencia de una crítica del concepto ¿Qué es en sí una frontera? Y más importante ¿Frontera con respecto a qué o a quién? El concepto ha sido usado ampliamente en ciencias sociales y, cómo ocurre con muchos otros, su significado ha variado según el enfoque teórico y el contexto histórico y político de su uso. En términos generales se ha pasado de una noción moderna del concepto que lo entendía desde su relación con sociedades homogéneas y espacios delimitados (Turner, 2010), a una visión plural en la que, más que la línea divisoria, se privilegia el cruce y el diálogo, es decir el hibridismo sociocultural (Grimson 2004: 15; Yuln 2010: 2). Esta última teoría se ha apoyado en los estudios posmodernos de la identidad y ha sido especialmente usada para comprender la mixtura cultural en las franjas que limitan los estados o las regiones. Esto ha ampliado la idea que se tenía sobre las fronteras y la forma de entenderlas. Con todo, y a pesar de su amplio uso, el concepto ha tenido poco desarrollo teórico (Londoño 2003: 61) y ha seguido ligado a la idea de límite estatal y borde transnacional como lo evidencia una lectura de los trabajos recientes. En este sentido se ha mantenido también la idea de distancia física y social de los poderes centrales y, a pesar de los cambios en la teoría espacial, conserva en sí una noción de centro y periferia que caracterizaba a las propuestas espaciales clásicas como el *Modelo de zonas concéntricas* de Von Thunen (1966) y *La teoría de los lugares centrales* Christaller (1933). Así lo evidencia la analogía y confusión que se hace entre frontera y periferia en la mayoría de los trabajos, debido a la cual algunos académicos han preferido usar franja o umbral, como en el caso, nuevamente de Tierra Caliente. Esto, sin embargo, no cambia el contenido del concepto y, al carecer de una teoría geográfica compleja, sigue presente en ellos la idea de periferia.

La idea de límite estatal e internacional ha permanecido, además, a pesar de que diversos estudios han demostrado que la organización regional y la construcción de los estados nacionales y sus regiones se hizo de forma asimétrica, formando territorios desiguales y contrapuestos en su interior; es más, que su formación se apoyó en la desigualdad espacial, como lo han explicado para México los trabajos sobre Tierra Caliente Michoacana (Maldonado 2010; Montes 2011) y lo dejan ver en Colombia los



estudios ya clásicos de Darío Fajardo (1996) y Catherine Legrand (1994) y Clara Inés García (2007; 2011: 35) sobre el Oriente antioqueño, quien hace evidente la construcción regional desigual y su relación con algunos procesos nacionales y globales que, normalmente, no aparecen en estas nociones de frontera, concentradas sólo en la expansión de la frontera agrícola y la ausencia del Estado.

La ausencia del Estado, sería, precisamente una de las mayores razones para entender las periferias como límites y fronteras. Su distancia sería la razón de que estas zonas poco integradas carezcan ley y de que su población y naturaleza estén por fuera de todo orden y se caractericen por la violencia endémicas. Sin embargo, el papel del Estado ha sido replanteado por la teoría política y, como lo ha mencionado Serje, lejos de su ausencia, el Estado juega un papel central en la producción de las periferias y los imaginarios geográficos que ayuda a construir son parte central de la relación que establece con los habitantes, sus territorios y la naturaleza (2017: 19). Por supuesto, no es el único productor de estas imágenes, sino sólo uno de los agentes inmersos en una compleja red procesos y trayectorias. Uno de los problemas en el análisis de las periferias es, precisamente, que se desconoce la diversidad de agentes en su construcción, especialmente, los agentes locales y regionales.

Finalmente, a pesar del interés por las periferias, se ha estudiado poco la organización social y productiva al interior de estas fronteras, como lo indicaba Clara Inés García (2003: 47) desde los primeros años del presente siglo. Comprender esta realidad empíricamente requiere del análisis de los procesos que construyen el espacio geográfico y del estudio de la organización interna de la sociedad fronteriza, lo que no puede hacerse sin una inmersión en el lugar, esto es, sin el trabajo etnográfico directo y una metodología que permita ver los procesos locales y su inmersión en el desarrollo del capitalismo y el colonialismo, no ya vistos como un proceso homogéneo, sino como como una globalidad que se particulariza.

La construcción del espacio y el espacio construido

Lo mencionado sobre la producción de imaginarios espaciales y fronteras socioespaciales evidencia que en los estudios sobre el tema se mantiene una idea dualista del espacio, basada en criterios de centro periferia, y reproducen las ideas coloniales de la modernidad, como la desarrollo e historia única. Por otra parte, a pesar del creciente interés por el estudio de las periferias, no se ha estudiado mucho la organización interna de estas fronteras, ni sus formas productivas y organizativas, por



lo que siguen primando una idea vertical del espacio, en la que los pobladores locales son sólo agentes pasivos en su producción; o al contrario una visión localista y desconectada de procesos globales y regionales. Por otra parte, el papel del Estado en estas producciones discursivas debe ser replanteado, ya que no es el único agente; porque la producción de periferias lo supera en sus límites y, además, porque él es parte central en la construcción de esta otredad social, espacial y ambiental. Finalmente, al estar vinculadas a realidades globales y locales, estas producciones discursivas deben estudiarse desde una perspectiva multiescalar y no sólo como la producción del estado y su control territorial.

La denominación que hicieron los estudios citados es problemática por el sentido que adquieren en ella los conceptos cultura y región, esto es de los sujetos y su espacio: el primero, paradójicamente, tiende a “naturalizar” los problemas sociales haciéndolos pasar como una característica intrínseca de sus habitantes sin dar cuenta de los procesos en los que ellos están inmersos (Segato 2016), desligando así las representaciones mentales de procesos materiales e históricos (Wolf 200: 20); el segundo, al vincular categorías espaciales a adjetivos sociales, esencializa las relaciones entre el espacio y sus habitantes, creando una identificación “natural” y determinista que no explica los procesos que lo han construido.

Mi propuesta es que estas construcciones de espacios periféricos deben hacerse desde una estrategia multiescalar que permita ver la conexión de procesos en diferentes temporalidades y escalas geográficas. Así podrían integrarse los procesos globales y los locales, no como dos simples capas que se superponen, sino como un encuentro complejo de procesos y agentes en la localidad, la región y la globalidad; también deben ser abordados desde una teoría crítica, que permita cuestionar las formas discursivas de estos imaginarios, incluyendo los términos mismos de frontera y periferia.

Para ello, considero que el mejor concepto sigue siendo, más que el de territorio, el de lugar y la mejor perspectiva la construcción del espacio. El lugar, como lo ha referido Aletta Biersack, no es ni global, ni local, por lo tanto, refiere siempre al encuentro de procesos. Por su parte, considero que la teoría espacial crítica de Doreen Massey, es apropiada para entender el espacio geográfico de una forma material y discursiva y para entender las fronteras y periferias como parte de la construcción del espacio geográfico o, en otras palabras, como un resultado de una geografía de las relaciones de poder.



Massey lo define desde tres principios: como el producto de interrelaciones en diferentes escalas de la realidad, que van desde lo íntimo del hogar a los vínculos globales; en este sentido es el resultado de prácticas, relaciones, intercambios y conexiones que niegan la existencia de entidades territoriales o unidades espaciales, como sí lo hace, por ejemplo, la teoría de los flujos de Castells. Segundo, como la esfera que posibilita la existencia de la multiplicidad, la convivencia de distintas trayectorias. Esta comparecencia de lo heterogéneo, la presencia simultánea de más de una voz, permite pensar en la diversidad de agentes y su papel diferencial, así como las diferentes historias y caminos sociales, económicos y políticos que lo construyen. Con esto se rechaza la idea de una historia única y de un macrorelato del desarrollo social. Y, tercero, como un proceso, no como un producto terminado. Es, más bien, un “sistema” abierto al futuro, a nuevas configuraciones, está en constante construcción y transformación (Massey 2005a: 9; 2009: 17). Esto permite pensarlo como un “producto” de relaciones, un complejo de redes, vínculos y prácticas, no como una simple suma de territorios fijos, sino como una complejidad de interacciones en constante conexión (Massey 2004: 78). Con esto Massey toma distancia del esencialismo geográfico, dinamiza el espacio y lo deja abierto a la acción política (Albet y Benach 2012: 276).

Notas

¹ Un corregimiento es una división administrativa de las zonas rurales de Colombia. Están conformados por un conjunto de veredas y, normalmente, tienen una pequeña zona urbana formada de un par de calles.

Bibliografía

- CENICS (1989), *Determinantes sociales y culturales de la planeación en la región Rionegro Nare, T. I: generalidades*. Medellín, Universidad de Antioquia, CENICS, Cornare (inédito).
- Christaller, F. W. (1966) *Central Places in Modern Germany*
- Escobar, Iván (2007a), *Subregiones en Antioquia: realidad territorial, dinámicas y transformaciones residentes*, Tomo I, Medellín: Gobernación de Antioquia.
- Fajardo, Darío (1996), “Fronteras, colonizaciones y construcción social del espacio” en Chantal Caillavet y Ximena Pachón (Dir.), *Frontera y poblamiento: estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador*, Lima: Institut français d'études andines. <https://books.openedition.org/ifea/2509?lang=es>



García, Clara Inés (2003a), "Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios de frontera interna en Colombia", en Clara Inés García (Comp.), *Fronteras, territorios y metáforas*, Medellín: Hombre nuevo editores.

_____ (2009a), "Los estudios regionales en Colombia. Una crítica desde los estudios socioespaciales", en Clara Inés García y Clara Inés Aramburo (Ed.), *Universos socioespaciales, procedencias y destinos*, Medellín: Siglo del hombre editores, Iner, pp. 35-68.

_____ (2009b), "Nuevo enfoque para el análisis regional", en Clara Inés García y Clara Inés Aramburo (Ed.), *Universos socioespaciales, procedencias y destinos*, Medellín: Siglo del hombre editores, Iner, pp. 69-84.

_____ (2011), *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia: Oriente y Urabá Antioqueños 1990-2008*, Bogotá: Cinep, Odecofi, Iner.

Giraldo, Jorge y Muñoz, Juan Carlos (2012), *Informalidad e ilegalidad de la explotación del oro y la madera en Antioquia*, Medellín: Universidad de Antioquia.

Grimson, Alejandro (2000). *La fabricación cotidiana de la frontera política*, Ponencia presentada en el encuentro Latin American Studies Association, Miami.

Henao, Hernán (2004), *Familia, conflicto, territorio y cultura*, Medellín: Corporación Región.

INER (1990), *San Carlos. Estudio de localidades*, Medellín, Colombia, Iner y Cornare.

_____ (1993), *San Luis. Estudio de localidades*, Medellín, Colombia, Iner y Cornare.

Legrand, Catherine (1994), "Colonización y violencia en Colombia: Perspectivas y debate." Absalón Machado, (comp.): *El Agro y la Cuestión Social*. Bogotá Tercer Mundo Editores.

Londoño, Jaime Eduardo (2003), "La frontera: concepto en construcción", en Clara Inés García. (Comp.), *Fronteras, territorios y metáforas*, Medellín: Hombre nuevo editores, pp. 47-60.

Maldonado, Salvador (2010), *Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán*, Zamora: El Colegio de Michoacán.

Massey, Doreen (1993), "Power-geometry and a progressive sense of place", en John Bird, Barry Curtis, Tim Putman, y Lisa. Ticker, *Mapping the futures. Local cultures, global change*, New York: Routledge.

_____ (2005a), *for space*, London: Sage.

Montes, Octavio Augusto (2011), *Héroes, pioneros, padres y patronos: construcción de la cultura política en los pueblos del Medio Balsas. Tierra Caliente de Michoacán y*



Guerrero, Zamora: El Colegio de Michoacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Serje, Margarita (2011), *El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*, Bogotá: Ediciones Uniandes.

_____ (2017). Fronteras y periferias en la historia del capitalismo: el caso de América Latina. *Revista de Geografía Norte Grande*, (66), 33-48.

Turner, Frederick Jackson (2010), *The frontier in American history*, Courier Corporation

Von Thünen, Johann-Heinrich (1966) *The Isolated State*. Nueva York: Pergamon Press

Yuln, Melina (2010), "Una historia de fronteras: El territorio y los relatos culturales de la frontera en la construcción nacional de Argentina, Brasil y Estados Unidos", en *Pampa*, Santa Fe, Núm. 6, pp. 231-244.



La frontera rural Uruguayo-brasileña y sus territorios

Mauricio de Souza Silveira

Introducción

La presente tesis se elabora en el marco de la Maestría en Ciencias Agrarias opción Ciencias Sociales, asimismo, surge, a partir de las actividades que desempeñó como docente grado 2, del Polo de Desarrollo Universitario (PDU) Centro de Estudios de la Frontera (CEF) de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), de la Universidad de la República (UdelaR), radicado en la Casa de la Universidad de Cerro Largo.

En ese contexto y a partir de la publicación realizada por el CEF “La frontera rural uruguayo-brasileña: homogeneidades o heterogeneidades regionales” del año 2017, donde se pudo identificar hallazgos tales como, diferencias en lo que respecta a la estructura agraria, así como al crecimiento y retención de la población rural.

Así, el presente trabajo pretende identificar los principales aspectos que inciden en la construcción de territorios tan próximos entre sí, pero con diferencias entre sus realidades u aspectos referidos a la población rural, concentración de la tierra y acceso a servicios.

Desde esa perspectiva, este trabajo se propone como objetivo general:

Identificar y analizar las principales variables que inciden en la construcción de territorios disímiles en el espacio rural fronterizo uruguayo-brasileño, con énfasis en la retención o crecimiento de la población rural.

Y como objetivos específicos:

Caracterizar el área en estudio a partir del régimen de tenencia de la tierra, principales rubros productivos y extranjerización de la tierra.

Conocer los principales aspectos que afectan en el disímil crecimiento de las poblaciones rurales de uno y otro lado del límite fronterizo.

Describir las formas de acceso a servicios públicos y privados existentes en la zona.

Identificar las aspiraciones y expectativas a futuro de los productores y habitantes rurales de la zona, respecto a la migración rural.



Fundamentación del problema

Si bien no son muchos los trabajos existentes que aborden la realidad fronteriza uruguayo-brasileña desde su perspectiva rural a nivel binacional, el Centro de Estudios de la Frontera (CEF), instalado en la región noreste a fines del año 2010 viene trabajando sobre el abordaje de dicha realidad desde su instalación.

Cabe señalar además la, los trabajos sobre la realidad fronteriza rural de González (2014),

Apud et al. (2012) y Quintero et al. (2012) y Almeida Netto (2017), pero que se centran en cada uno de sus territorios nacionales o estaduales, objeto de sus estudios, sin considerar a nivel binacional a la realidad fronteriza.

De ese modo, esta tesis pretende considerar a la frontera desde su perspectiva binacional y más específicamente la rural, que, entre otras cosas, más allá de lo novedoso que puede resultar ello, nos permite identificar y conocer el “comportamiento” de ciertas variables en dos estados distintos, pero en territorios que a no ser por el límite internacional (sea este un río o un camino vecinal) a priori, no son más que un continuum.

Ya en el siglo pasado existían trabajos en nuestro país que señalaban errónea la idea de considerar el agro uruguayo como un espacio homogéneo e inmóvil; y lo visualizaban como un área de “varias realidades” en dimensiones tales como, culturales, productivas y sociales, en ese sentido, se destacan los trabajos de Solari (1958), Martorelli (1982) y Errandonea (1989).

Desde esa perspectiva, es de esperarse que, en la actualidad, la realidad del agro uruguayo sea aún más heterogénea y compleja. Así, en las últimas décadas, existe consenso en no considerar el ámbito rural separado de lo urbano, y la idea predominante es de una línea divisoria muy difusa entre éstos, situación a la cual algunos autores como García Bartolomé (1996), Riella (2008) y Grammont (2010), denominan como “nueva ruralidad”.

Por otra parte, son varios los trabajos que sostienen que nuestro país ha tenido distintas transformaciones en su espacio rural en las últimas décadas, Piñeiro y Carámbula (2006), Piñeiro y Moraes (2008), Riella y Mascheroni (2009), destacan el fuerte y acelerado incremento de la forestación, el aumento de la superficie del cultivo de soja,



la suba en el valor de la tierra, una fuerte y creciente extranjerización de ésta y una sostenida expulsión de la población rural, predominantemente de los pequeños productores.

Sin embargo, es de esperarse que estos cambios, no se produzcan de igual manera en los “diferentes territorios” existentes al interior del Uruguay, dada su diversidad social, demográfica, geográfica, topográfica, climática, productiva, cultural, y económica.

Desde esa perspectiva, la realidad social y económica uruguaya, es afectada por intensas transformaciones que “construyen y re-construyen” cotidianamente su territorio a partir de cambios en sus perfiles productivos y en sus relaciones sociales.

En ese sentido, la realidad social fronteriza uruguayo-brasileña se ha constituido en las últimas décadas en un escenario de transformaciones, resultado, entre otros factores de nuevas inversiones nacionales y extranjeras en diferentes rubros como el comercio, forestación, ganadería y de manera más reciente la soja, así como una mayor intervención del Estado a partir de políticas públicas dirigidas a los productores familiares rurales.

Este trabajo pretende identificar y describir cuáles son las principales características productivas, sociales y culturales del área fronteriza rural uruguaya con Brasil con énfasis en los departamentos de Rivera y Cerro Largo y los municipios de Santana do Livramento y Herval.

“Los habitantes habitan un territorio determinado y con ello lo conforman. Habitando existen: es su manera de estar en el mundo. Los seres humanos existen como habitantes y por ello necesitan construir. Construyen edificando y construyen cultivando. Transforman al territorio en un lugar: lo humanizan, lo cargan de significados e historias” (Urruzola, citado por Carámbula y Fernández, 2012: 90).

Este trabajo, surge a partir de las diferencias significativas observadas a nivel estadístico de las tasas de crecimiento de la población rural binacional uruguayo brasileña en territorios muy próximos entre sí, separados a veces por el curso de un río y otras por un camino vecinal.

Asimismo, cabe señalar, que si bien la zona de frontera a nivel binacional rural, pareciera ser que, comparten aspectos históricos y de tipo de producción, así como los vinculados a la estructura agraria, presenta diferencias significativas en lo que respecta al



crecimiento de su población rural, construyendo así territorios disímiles entre sí.

Este trabajo pretende identificar y describir cuáles son las principales características productivas, sociales y culturales del área fronteriza rural uruguaya con Brasil con énfasis en los departamentos de Rivera y Cerro Largo y los municipios de Santana do Livramento y Herval.

“Los habitantes habitan un territorio determinado y con ello lo conforman. Habitando existen: es su manera de estar en el mundo. Los seres humanos existen como habitantes y por ello necesitan construir. Construyen edificando y construyen cultivando. Transforman al territorio en un lugar: lo humanizan, lo cargan de significados e historias” (Urruzola, citado por Carámbula y Fernández, 2012: 90).

Asimismo, cabe señalar, que este, surge a partir de las diferencias significativas observadas a nivel estadístico de las tasas de crecimiento de la población rural binacional uruguayo brasileña en territorios muy próximos entre sí, separados a veces por el curso de un río y otras por un camino vecinal.

La región fronteriza uruguayo-brasileña comparte una serie de aspectos históricos en tanto formación del territorio el cual *“...se construye como un proceso histórico de apropiación de un espacio dotado de recursos naturales que forman ecosistemas singulares que predominan que determinan formas particulares de aprovechamiento y de estructuras económico productivas. Sobre esta base se construyen redes sociodemográficas redes institucionales y economías particulares. Los procesos de construcción del territorio establecen una tradición y una cultura sobre las cuales se soporta una identidad y una territorialidad. El territorio se constituye en un sistema complejo donde interactúan las diferentes dimensiones de la vida social y se define un entorno económico”.* (Dirven et al. 2011: 14).

Lo fronterizo en este caso y más específicamente el espacio rural binacional, uruguayo-brasileño, está signado por la condición histórica de lo fronterizo, a saber, *“A partir de la ocupación luso-brasileña se definen entre el territorio oriental dos espacios diferentes, uno al sur del río Negro, de neta influencia montevideana, vinculado al puerto capitalino y otra al norte de dicho río y zona de frontera con Brasil, de claro predominio social, cultural y económico brasileño, con extensas estancias, mano de obra esclavizada y vinculaciones comerciales con los centros saladeriles de Rio Grande del Sur”* (Palermo, 2013:84)



Metodología

Al estudiar la realidad fronteriza binacional uruguayo-brasileña, es necesario definir cuál es el área que incluye la faja binacional entre estos dos países. Así, a lo largo de la historia y partir de otros trabajos o instituciones se ha podido constatar distintos mapas o tipos de espacios fronterizos binacionales como ya se ha desarrollado en el capítulo de antecedentes.

Desde esa perspectiva en trabajos anteriores que el autor ha participado se optó por definir la faja fronteriza binacional uruguayo-brasileña a partir de la identificación y delimitación de las unidades políticas-administrativas de uno y otro lado del límite que separa a Uruguay del Estado de Río Grande do Sul como se muestra en el siguiente mapa 1:



El trabajo, va más allá de describir y caracterizar a la región binacional en función de las variables consideradas y pretende lograr identificar cuáles aspectos inciden en la construcción de territorios disímiles en áreas geográficamente tan próximas entre sí, o más bien contiguas. Así se tratará de caracterizar y especificar los aspectos más relevantes de esos territorios como ser habitantes rurales, concentración de la tierra, extranjerización de la misma, formas de tenencia, aspiraciones y expectativas de las y los productores de la región, presencia de productoras/es familiares; organizaciones sociales-rurales de la zona y/o espacios de encuentro entre productores y vecinos y acceso a servicios y su relación con la permanencia de la población rural.



Asimismo, se considerarán dimensiones más vinculadas a lo fronterizo como ser nacionalidad y lugar de residencia de las/os productoras/es, trabajadoras/es rurales; lugar de acceso y consumo de bienes y servicios.

Los datos a ser considerados por este trabajo serán de dos tipos, secundarios que abarcarán los 12 municipios brasileños y los 5 departamentos uruguayos que integran los 1068 kms de extensión fronteriza equiparando en la superficie según há a ambos lados del límite binacional y no por la dimensión político-administrativa.

Esta información será consultada a partir de los censos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) y de la Fundação de Economia e Estatística (FEE); así como de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay 2000 y 2011 y el Censo Agropecuario del IBGE de los años 1996-2006-2017.

Los datos primarios serán recabados a partir de una entrevista del tipo semi-estructurada, que será aplicada a los productoras/es que residan en la región en estudio y se utilizará el criterio de saturación para definir el universo a ser estudiado en cada uno de los municipios y departamentos seleccionados. Asimismo, se prevé la utilización de tal técnica a informantes calificados de instituciones públicas que trabajen en la zona y permitan acceder a información respecto a la zona en estudio desde otra perspectiva.

Así, dentro del área estudiada a nivel general, se seleccionarán productoras/es y vecinas/os, que estén dentro de los municipios que han incrementado su población rural, los que están ubicados más al norte y los departamentos uruguayos vecinos a ellos y los municipios que han mostrado el mayor nivel de decrecimiento de su población rural que son los que están ubicados más al sur y los departamentos vecinos.

Desde esa perspectiva y a partir del Cuadro 1 se observa el nivel de decrecimiento de los departamentos uruguayos vecinos de los municipios brasileños.



Cuadro 1- Crecimiento de la población rural de los departamentos de frontera con Brasil 2011-2004

Departamento	%
Artigas	-51
Rivera	-34
Cerro Largo	-43
Treinta y Tres	-37
Rocha	-33
Fronteriza	-40
Uruguay	-34
Datos elaborados a partir del Censo poblacional 2011-INE	

En el siguiente cuadro se presentan datos que corresponden al crecimiento de la población rural de frontera de los 12 municipios vecinos a Uruguay.

Cuadro 2- Crecimiento de la población rural de los municipios de frontera con Uruguay 2010-2000

Municipio	%
Barra do Quaraí	15
Uruguaiana	-4
Quaraí	-12
Santana do Livramento	16
Dom Pedrito	-21
Bagé	-11
Aceguá	s/d
Pedras Altas	s/d
Herval	-44
Jaguarao	-37
Santa Vitória do Palmar	-23
Chuí	-29
Fronteriza	-4
Rio Grande do Sul	-18
Datos elaborados a partir del Censo poblacional de 2010-IBGE	

Desde esa perspectiva, el presente trabajo considerará como área geográfica para la realización de entrevistas a los municipios rio grandenses de Santana do Livramento el cual aumentó en mayo medida su población rural durante el último período inter-censal y el de Herval que fue el que más perdió población rural durante el mismo período.

Resultados y discusión

Uno de los aspectos disímiles en la construcción de los territorios, tiene que ver con las diferencias observadas a nivel de la estructura agraria, respecto a la concentración y extranjerización de la tierra, así como a formas de uso de la misma.



Se destaca la diferencia en lo que tiene que ver a la retención, población en términos absolutos y relativos, así como el crecimiento de la población rural en cada uno de los territorios vecinos de referencia.

Otro de los factores que “juegan” en tales territorios diferentes, es lo que tiene que ver con el acceso a servicios de la población, “que hacen” a una distancia distinta en ambos territorios respecto de lo urbano-rural.

Se pudieron constatar diferencias respecto a tipo de producción y como ello se asocia a una mayor o menor retención de población rural, conjuntamente con variabilidades en la concentración de la tierra.

Existen diferencias significativas en lo que respecta a las políticas de acceso a la tierra en uno y otro territorio, al menos, desde el punto de vista del asentamiento de población rural en los espacios de referencia.

Todas estas dimensiones con otras, llevan a la construcción de territorios disímiles entre sí y también a la elaboración de una “ruralidad” distinta entre ellos, en tanto “hecho social” o institucionalización de la realidad, en dos espacios geográficos tan próximos entre sí, pero signados por estados-nacionales propios.

Bibliografía

Apud, Fernanda, González, Jimena, Guasque, Sergio e Podhajny, Gerardo. Maní caliente, manee: una mirada interdisciplinaria a la producción de maní en Cerro Largo. Fondos Concursables. Ministerio de Educación y Cultura, Cerro Largo. 2010.

Batthyány K, Cabrera M, Alesina L, Bertoni M, Mascheroni P, Moreira N, Picasso F, Ramírez J, Rojo V. 2011. Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial. CSE.UdelaR.

García Bartolomé, J. M. “Sobre el concepto de ruralidad: crisis y renacimiento rural”. Revista UCM en :[https://revistas.ucm.es › index.php › POSO › article › download](https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download)
Carámbula, M, Fernández, E. 2012. “Territorios en disputa: la producción familiar en el este uruguayo”. En Revista Pampa, número 08.2012. extraído de <https://dialnet.unirioja.es/revista/12489/A/2012>

Carambula M, Piñeriro D. 2006. La forestación en Uruguay: cambio demográfico y empleo en tres localidades. Revista Agrociencia. Vol. X. N°2. Facultad de Agronomía. Universidad de la República. Uruguay.



Dirve M, Echeverri P, Sabalin C, Rodriguez A, Canida D, Peña C, Faiguenbaum S. 2011. Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina. CEPAL. Santiago de Chile.

Errandonea A. 1989. Las clases sociales en el Uruguay. CLAEH-EBO, Montevideo.

Grammont, Hubert. La Nueva ruralidad ¿un concepto útil para repensar la relación campo- ciudad en América Latina”, 2010, revista Ciudades, RNIU, n°85, pp. 2-6, ISSN 0187-8611, México. Extraído

de: http://www.academia.edu/7405879/4._Carton_de_Grammont.

Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) Censo Población 2010-2000 y Censo Agropecuario 2006. [En línea]: www.ibge.gov.br disponible 20 de agosto 2018 https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/pecuaria.html

-Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo de Población 2011-2004. [En línea]: www.ine.gub.uy a partir de microdatos del INE disponibles junio 2016 en <http://www.ine.gub.uy/web/guest/marcos-censales>

Martorelli, H. 1982. “La sociedade rural uruguaya” Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo. Uruguay.

Mazzei E, De Souza M. 2016 Sociedades rurales fronterizas: homogeneidades o heterogeneidades regionales. En: Las sociedades fronterizas: visiones y reflexiones. Compilador Enrique Mazzei. CEF-CCI-UdelaR. Mastergraf. Montevideo. Uruguay.

Mazzei E, De Souza M. 2013. La frontera en cifras. CEF-CCI-UdelaR. Mastergraf. Montevideo. Uruguay.

Netto Almeida, T. 2017. A dinâmica agrária corrente da soja e da silvicultura na fronteira Livramento/Br e Rivera/UY y sus impactos en la agricultura familiar: 2006-2016. Tese apresentada ao curso de Pós-Graduação em Geografia de Universidade Federal de Santa Maria (UFMS, RS), como requisito para obtenção do título de Doutor em Geografia.

Palermo E. 2014 Tierra Esclavizada. El norte uruguayo en la primera mitad del siglo 19. Tierra adentro ediciones. Montevideo. Uruguay.

Piñeiro D, Moraes M, 2008. Los cambios en la sociedad rural durante el sigloXX. In: El Uruguay del siglo XX. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Banda Oriental. Montevideo. Pp. 105-136.

Riella A, Mascheroni P. 2009. “Explorando la calidad del empleo en la forestación”. DS.FCS.UdelaR.



Riella, A y Mascheroni, P. 2011 Riella, A y Mascheroni, P. "Desigualdades Sociales y Territorios rurales en el Uruguay" en PAMPA 07. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales



El problema de la tierra en el espacio rural de la Araucanía (1962-2017) Pobreza, desigualdad y conflicto.¹

Nicolás Pareja Arellano²

Resumen

La Araucanía se caracteriza principalmente por sus antiguos habitantes, quienes vivían en esta zona antes que chilenos y españoles, los mapuches. Durante la última parte de la colonia y la primera de la república esta zona se convirtió en la frontera que dividía territorio mapuche, en primera instancia con el territorio español y luego con territorio chileno, fue la última región en ser controlada por el Estado chileno. Una de las particularidades que caracterizó esta zona fue la constitución, y el desarrollo del régimen de la tierra en el espacio rural, que es donde más se marcan las características que se buscan en esta investigación: pobreza, desigualdad y conflicto. El objetivo es poder conocer la preponderancia que tiene la tierra en las diferentes características económicas sociales y políticas del espacio rural actual de la Araucanía.

Palabras clave

Mapuche, Araucanía, Conflicto, Pobreza, Desigualdad

Introducción

Chile posee el segundo lugar en concentración de la tierra en América Latina, al especificar este dato, se puede señalar que el 69,7% de la tierra está estructurada como una propiedad de más de 2001 hectáreas y el 30,3% se establece con menos de 2001 hectáreas, y dentro de este porcentaje un 20,8% posee menos de 500 hectáreas (OXFAM, 2016).

La región de la Araucanía se caracteriza por ser histórico territorio indígena. Los españoles en su proceso de conquista detuvieron sus incursiones a la altura del río Bio-Bio, donde actualmente comienza la región de la Araucanía, esto por la resistencia que opusieron los mapuche. A raíz de esto y como una forma de buscar la paz, españoles y mapuches se unieron en parlamentos, en los que se comprometían a no atacarse mutuamente, de esta forma el río Bio-Bio se estableció como la frontera entre estos dos pueblos (Bengoá, 2011). Este territorio tuvo su autonomía durante toda la colonia hasta pasado la independencia, firmada en 1810. Pero desde 1881 aproximadamente, comenzó un proceso llamado “pacificación de la Araucanía” que buscó integrar por la



fuerza a los mapuche a la nueva república, sumando también las tierras donde vivían a la lógicas jurídicas-políticas de la nueva nación (Bengoa, 2014). Esto se hizo mediante la justicia chilena, a través de remates, concesiones de colonización y formación de propiedad agraria familiar. (Correa, Molina y Yáñez, 2005). Lo anterior obviamente generó un malestar en la sociedad mapuche, el Estado los había despojado de sus tierras y generó reducciones que los enclaustraban en pequeñas porciones de tierra que los condenó a la pobreza (Saavedra, 2002).

Este conflicto se mantiene hasta estos días, y a esto se le suman importantes fenómenos que se desarrollan actualmente en el mismo espacio geográfico y social. Altos niveles de pobreza y desigualdad como lo muestra la encuesta CASEN (Ministerio de Desarrollo Social, 2006-2015), estos niveles de pobreza se encuentran directamente ligado en primera instancia a las zonas rurales y en segundo lugar al pertenecer a una etnia que en este caso es la mapuche (CASEN, 2017). Por otra parte la concentración de la tierra es uno de los problemas que aqueja a Latinoamérica, y Chile (Oxfam, 2016) y a la región de la Araucanía (Garín, Cristoph, Ortega, 2011).

Además la pobreza y exclusión social las sufre con mayor intensidad el pueblo mapuche (Cantero y Williamson, 2009). Por otro lado, también con datos del Mideplan, se ha establecido que en el país y en la región de la Araucanía existen desigualdades de ingreso, salud, educación con respecto a las etnias y los no pertenecientes a ellas, y obviamente esto se manifiesta principalmente en el pueblo mapuche por ser la etnia mayoritaria de la región y el país (Cantero y Williamson, 2009).

En el presente trabajo se busca analizar el espacio rural de la Araucanía y los problemas relacionados con su unidad económica principal, la tierra. La investigación se trabajará a través de un análisis histórico del desarrollo del régimen de propiedad de la tierra en la región de la Araucanía, Chile y un análisis cuantitativo de diversas bases de datos que servirán como información más actual de la pobreza y el conflicto de la región.

Este proyecto se compone de un acabado estado del arte sobre el problema de la tierra en la Araucanía y los mapuche. A esto se le suma la problematización o delimitación del problema. Luego se da a conocer la pregunta de investigación para posteriormente dar cuenta del objetivo general y los objetivos específicos. Como una forma de sustentar teóricamente el problema de investigación es que se incluye un marco teórico con la definición de conceptos básicos y la presentación de teorías que ayudan a entender el



problema de la tierra en la región. Luego se da a conocer los supuestos o hipótesis del trabajo para finalizar con la metodología y la respectiva bibliografía

El problema (problematización o delimitación del problema)

El espacio rural se puede analizar desde diferentes perspectivas, una de ellas son los aspectos más prácticos ligados a cuestiones eminentemente geográficas, pero para los efectos de la presente investigación se busca conocer los aspectos determinantes del espacio rural de la Araucanía y si bien, tiene que ver con una delimitación geográfica, se pretende encontrar algunas características en los ámbitos sociales, políticos y principalmente económicos. Esta búsqueda no se va a establecer como una indagación estática, sino que se van a buscar en la historia, las respuestas a los problemas que representan a la región.

Uno de los aspectos más importantes que se desarrolla dentro del espacio rural es la explotación de su mayor recurso, la tierra. Este recurso natural, que es diferente en calidad dependiendo del suelo donde se desenvuelva, es la base de la economía de toda zona rural, dentro de los aspectos económicos en los cuales se utiliza la tierra, el principal es el agro, traducido en la hacienda, organización económico-social herencia de la colonia española y portuguesa (Chonchol, 1994).

La hacienda hecho histórico fundamental para la presente investigación por la trascendencia y al mismo tiempo transformaciones que han devenido del agro. La aparición del latifundio tiene relevancia, económica, social, política y cultural y es por ello que es importante conocer lo que ocurrió antes y después de este acontecimiento.

El proceso de acumulación capitalista en Chile se desarrolla por diferentes fases, Salazar (2012) establece seis momentos importantes: 1) El origen del modo de producción y acumulación coloniales en Chile (1500-1580), 2) Primera transformación de la empresa productiva colonial del lavadero a la estancia (1580-1690), 3) Apogeo del modo de producción y acumulación colonial (1680-1873), 4) Transición al capitalismo industrial, 5) Capitalismo industrial en Chile: del liberal desarrollismo al nacional desarrollismo, 6) Del nacional desarrollismo al neoliberal (imperial) desarrollismo (1930-1976). El periodo después de 1976 se debe establecer necesariamente como lo que se ha llamado neoliberalismo o periodo neoliberal, pero nos quedamos como la fase de profundización del imperialismo. A estas últimas dos fases es a las que se apela indagar, es decir, el periodo de transición del nacional desarrollismo al neoliberal desarrollismo,



y a al siguiente periodo de acumulación que es el periodo neoliberal donde se profundiza el imperialismo.

Los cambios acaecidos en Chile en relación a la propiedad de la tierra actual, tienen su hito fundamental en el inicio de la reforma agraria en Chile bajo la administración de Jorge Alessandri Rodríguez quién dio el vamos a la primera ley de Reforma Agraria N° 15.020 en 1962. Este fue un proceso Latinoamericano en el que tenía por objetivo fundamental modificar la estructura agraria, que se caracterizaba por la concentración de tierras en manos de los grandes latifundistas para resolver ineficiencias del sector agrario y la situación precaria del campesinado (Correa, Molina, Yañez. 2005). Antes de esta fecha también se produjeron cambios importantes que fueron los que derivaron en lo que se conoció como reforma agraria. El contexto de las reformas agrarias en América Latina tiene que ver con la revolución cubana y la respuesta de EE.UU a través de la alianza para el progreso, quien mandato las reformas agrarias para evitar nuevos focos de rebelión en Latinoamérica.

En este plano buscamos ubicar social, económica y políticamente a la región de la Araucanía a través de un análisis histórico, y queremos encontrar la raíz de los problemas de la región. Es decir, construir un análisis estructural de la situación de la Araucanía en donde claramente el pilar será la economía manifestada en la tierra como unidad económica.

La región de la Araucanía se caracteriza social, política y económicamente por tres factores fundamentales. La pobreza, la desigualdad y el conflicto Estado-pueblo mapuche. Estas características se manifiestan principalmente en el espacio rural. A través de un análisis se establece la tierra como la unidad política y económica fundamental del espacio rural. El sistema capitalista por su parte, vive y se reproduce en base a procesos de acumulación, en el caso del espacio rural, se da en relación a la concentración de la tierra y expansión de esa concentración, en la Araucanía no solo se desarrolla por el latifundio sino que actualmente a través de las forestales.

Actualmente La Araucanía es la región con mayores niveles de pobreza del país; con una tasa del 27, 9% de pobreza (CASEN, 2015). El índice de Gini 2015 de la región, el cual mide la desigualdad, es de 0,498 en relación a los ingresos autónomos según la encuesta CASEN 2015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2016), dando cuenta de una desigualdad superior al promedio nacional (0,495). La población indígena se alza en un 31% según la encuesta CASEN 2015, la mayor cantidad en proporción a su población .



Por otra parte la región de la Araucanía es la segunda región más rural del país, con una tasa de ruralidad del 32,3% (CASEN,2015).

Abarcando otro aspecto de la estructura social, según un estudio de Cantero y Williamson (2009) la movilidad social en la Araucanía en relación con el estrato de los padres es de un 69%, mientras en Chile es cercano al 73,9% (Cantero y Williamson, 2009). Lo que nos describe otro aspecto ligado a la desventajosa posición de la región, relacionado con el país. Según el mismo estudio en lo que respecta a movilidad social, se muestra que el grupo “no mapuche” presenta índices más altos de movilidad social, luego en orden descendente viene el grupo “mestizo” y por último se encuentra el grupo “mapuche puro” quienes son los que poseen menor movilidad social, problema relacionado con los logros educacionales, según los autores (Cantero y Williamson, 2009).

La concentración de la tierra es una de las características más importantes de la economía de países no industrializados y exportadores de materias primas y es quizás uno de los puntos principales que influye en la estructura social de sociedades agrarias o semi-agrarias. Según la CEPAL las altas concentraciones de tierra en América latina solo fueron modificadas marginalmente por los procesos de reformas agrarias (Garín, et al: 2011). Según este mismo estudio de la CEPAL los índices de Gini (miden desigualdad o concentración) más altos en relación a las concentraciones de tierras en Latinoamérica corresponden a Chile México y Paraguay, con un Gini sobre el 0,90 (con un máximo de 1,0).

En la Araucanía el índice de concentración de tierra al 2007 para la provincia de Malleco era de 0,80 y de la provincia de Cautín de 0,77 (Garín, et al: 2011). Esta concentración de tierra deja de manifiesto a grandes rasgos la composición de la región de la Araucanía, de una forma en la cual se puede comprender mejor los futuros análisis a realizar, ya que es necesario contar con un contexto.

Los desigualdad, pobreza, conflicto Estado y pueblo Mapuche, sumado a la concentración de la tierra en la región, son procesos históricos que se han mantenido y reproducido a través de los años. Es decir han habido determinantes que facilitan y reproducen estas situaciones que permanecen hasta estos días. Si bien estos procesos no provienen de periodos históricos similares, si se puede señalar, que son producto de una cadena de acontecimientos producidos por el Estado y las empresas a través de sus requerimientos económicos y políticos.



¿En qué medida ha influido el régimen de propiedad de la tierra en los actuales problemas de pobreza, desigualdad y conflictividad que se presentan en el espacio rural de la Región de la Araucanía?

Acercamiento teórico

Proceso de acumulación capitalista

El valor se encuentra determinado por la plusvalía o plusvalor que es lo que extrae el capitalista como ganancia a costa del obrero (Marx, 2015 [1867]- En palabras simples, el capitalista lo que obtiene es la diferencia de lo que gana en el mercado menos los materiales para producir la mercancía y lo que paga al obrero, que es un costo menor de lo que realmente vale su trabajo, de ahí la plusvalía y de ahí la ganancia del capitalista. Esa diferencia se establece como la forma en que el capitalista explota laboralmente al trabajador (Marx, 2015 [1867]).

Esta es la base para plantear que el capitalismo se funda en lo que Marx (2015 [1867]) llamó acumulación originaria. Este hecho debe su nombre a un proceso de acumulación previo al de la acumulación capitalista, en palabras del propio Marx es el punto de partida de la acumulación capitalista, además agrega que este hecho cumple el mismo papel que el del pecado original, es decir, es el origen de las grandes riquezas y de la situación de pobreza que se vive hasta estos días. De esto se podría señalar que la acumulación originaria es el hecho fundante del capitalismo ya que como señala Marx (2015[1867] p709) “La llamada acumulación originaria, no es por tanto, otra cosa que el proceso histórico de escisión del productor y los medios de producción. Aparece como originaria porque constituye la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente”

Y para complementar, Marx señala una definición que puede ser utilizada incluso en los espacios rurales actuales: “La expropiación que despoja de la tierra al productor rural, al campesino, constituye la base de todo proceso. Su historia adopta distintos matices en países diferentes y recorre diversas etapas en secuencias y épocas históricas distintas.” (Marx,2015[1867] p709)

Harvey (2004) actualiza el concepto de “acumulación originaria” de Marx y lo lleva a una perspectiva actual, esta reconfiguración del concepto se basa en lo que señaló Rosa Luxemburgo sobre el actuar de una política colonial a nivel mundial a través del engaño, la opresión y la rapiña, esto se extrapola a lo que sucede dentro de las naciones, y lo principal de este concepto se relaciona a lo que Marx estructuraba en una etapa



“originaria” anterior al capitalismo, Harvey lo lleva a la actualidad y lo denomina acumulación por desposesión, donde la depredación, el fraude, y la violencia se mantienen y reproducen. El actuar de este proceso se traduce materialmente en:

“la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad .-común, colectiva, estatal, etc.- en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito.” (Harvey, 2004 p113)

En este proceso el rol del Estado es muy importante ya que es la institución que facilita estos procesos (Harvey, 2004). Y desde esta punto uno podría unir la relación entre Estados y hablar de esa relación que habla Rosa Luxemburgo, que están ligadas al imperialismo.

Acumulación en zonas atrasadas e imperialismo

En lo que se refiere a las condiciones materiales económicas, se encuentra la tierra como unidad económica principal de las naciones subdesarrolladas (Stavenhagen, 1971). La tierra posee diferentes caracteres, en términos económicos se hace referencia a la tierra agraria o tierra productiva. En el contexto del capitalismo actual, la acumulación es la forma de funcionar del sistema, y en el contexto geográfico de Latinoamérica, la acumulación de la tierra es el mecanismo con el cual los países centrales o desarrollados aseguran las materias primas para su exportación.

Las relaciones de explotación en las zonas rurales de países latinoamericanos son relaciones pre-capitalistas o atrasadas, en algunos aspectos se asemejan a la explotación capitalista de las zonas urbanas, pero las relaciones normalmente no se dan bajo el mercado capitalista puro propiamente tal, sino más bien en forma de inquilinaje o de arrendamiento de la tierra, es decir, de una forma rentista. Éstas son expresiones materiales de los resabios del régimen colonial, ya que estas relaciones se desarrollan en base al latifundio, que según Mariátegui (2005), es sinónimo de colonialismo, la expresión material-económica de la colonia, es la herencia semifeudal, dicha herencia



guarda relación con una sociedad anterior, en la que las clases que se debaten en pugna son los terratenientes y los campesinos.

Como habíamos mencionado, el capitalismo busca acumular capital, y dicha acumulación en la mayoría de las ocasiones genera crisis (Harvey, 2007). Por el contrario, cuando existe un crecimiento armonioso, para Harvey, es solo un hecho accidental, con esto nos quiere confirmar que la estructura del capitalismo establece las crisis como parte de su desarrollo. El proceso de acumulación se sustenta en ejércitos de mano de obra, por ello se estimula el crecimiento de la población, y se estimulan las corrientes migratorias. Sumado a esto es necesario la existencia de los medios de producción y la existencia de un mercado que absorba las grandes cantidades de mercancía (Harvey, 2007). En este sentido el capitalismo incentiva la creación de mercados y de mano de obra barata, en la época actual a escala mundial. Ésta es la relación que se va construyendo hacia los países subdesarrollados.

Para Harvey (2007) el capitalismo tiene la necesidad de expandirse, pero al mismo tiempo necesita eliminar las distancias para la circulación rápida de mercancías que se convierten en capital. Para ello, en su tiempo, se utilizaron los medios de transporte, como los barcos y los trenes, y hoy en día se utiliza la tecnología digital, que cumple un rol similar: aniquilación del espacio por el tiempo. Las concepciones geográficas son muy importantes en el capitalismo, en cuanto a mercados internos, pero lo son aún más en lo referido al mercado internacional, ya que en este punto es dónde se eliminan las grandes distancias y se comienza a configurar el comercio exterior, que establece una relación a escala con lo que ocurre internamente, es decir, la acumulación es dada en dirección a los países desarrollados o industriales, entonces surge una división del trabajo internacional, donde los países pobres o subdesarrollados proveen de materias primas a las naciones desarrolladas, convirtiéndose en los “obreros” y los países desarrollados extraen la plusvalía aplicando industria, siendo los países “burgueses” en este símil del mercado interno.

El capitalismo en este camino por evolucionar y mantenerse, tiene la necesidad de acumular y al mismo tiempo expandirse. Ésta es la relación tiempo-espacio que nos explica Harvey a través del concepto de mercancía y la teoría de la acumulación de Marx, que se encuentra estrechamente ligada a la teoría del imperialismo de Lenin. Aquí se señala que el tema económico deriva en un tema político, ya que la política es la expresión concentrada de la economía. El imperialismo, entonces, es una fase superior



del capitalismo, en cuanto éste busca expandirse y dominar a través del mercado, pero con el Estado como instrumento importante para su expansión y regulación internacional. Los países imperialistas son imperialistas porque subyugan económica y políticamente a los países subdesarrollados, y esto tiene que ver también con la relación tiempo-espacio y capital.

El imperialismo se inserta en las naciones subdesarrolladas y establece relaciones de acumulación que son extrapoladas a menor escala dentro de estas mismas repúblicas, lo que trae consecuencia negativas para las clases populares de dichas naciones. Muchas veces se ha querido dejar afuera de este análisis a los indígenas por poseer una cultura ancestral, pero los indígenas han asumido de alguna u otra forma la cultura de las naciones, y la mayoría se ha desarrollado en el espacio rural, codo a codo con los campesinos adquiriendo una cultura similar.

La identidad indígena y el espacio rural

La identidad juega un rol importante dentro de la cultura de los seres humanos en general. Dicha identidad está relacionada directamente con aspectos culturales que se comparten con diferentes grupos de personas. En el tema de la identidad como tal, se encuentran las identidades culturales individuales y las identidades culturales colectivas. Las primeras están construidas a partir de un cruce de muchas de las segundas y los individuos de una u otra forma son pluriculturales (Todorov, 2008), ya que en el interior de los sujetos se desarrollan las diferentes culturas que los constituyen. Además estas culturas no son estáticas sino que se encuentran en constante movimiento, reconstitución y reconstrucción. Por lo tanto, como señala Todorov (2008, p89): “La cultura que no cambia es una cultura muerta”.

De esta manera, las características de la cultura se resumen en pluralidad y variabilidad (Todorov, 2008). Estos aspectos son innegablemente dialécticos, en el sentido de que la generación de nuevas culturas devienen de muchas otras y el resultado de éstas siempre va cambiando de alguna u otra forma en el tiempo. Es, por tanto, un movimiento constante que avanza hacia un estado cultural más rico y diverso en contenido. Esta dialéctica, por su forma, se asemeja más a la dialéctica Hegeliana que a la marxista, por lo que, según la perspectiva de Hegel (1984), se daría cuenta de que la historia de la cultura, sería el desarrollo y evolución del espíritu en pos de la libertad.



En el caso de los indígenas de naciones latinoamericanas, se podría señalar que su identidad actual está conformada por dos grandes culturas (no las únicas) que se conforman a través de la unión entre la cultura ancestral de su respectivo pueblo, sumada a la cultura occidental de la nación en la cual se encuentran, la que está eminentemente ligada a la ruralidad (que se puede traducir en una cultura campesina). Este ejemplo constituye el estereotipo del indígena latinoamericano, pero innegablemente los individuos tienen más estructuras culturales de pertenencia que las ya nombradas. Sumado a lo anterior, cada sujeto jerarquiza de la forma que más le parezca pertinente los elementos de su cultura, para de esta forma construir su propia identidad. Los elementos de dicha jerarquía se determinan o se modifican a través de conflictos (Todorov, 2008), los que se ven plasmados en la práctica social o política, los conflictos indígenas que persisten hasta el día de hoy en Latinoamérica son ejemplo claro de esto.

Estos conflictos, de una u otra forma, han forjado la identidad de los pueblos indígenas, son parte de su historia y han adquirido un sentido en el relato histórico de la propia cultura que se traspasa de generación en generación. De hecho, en algunas ocasiones los conflictos relacionados no solo son tomados como un hecho histórico ligado a la cultura, sino que más bien son los que de alguna forma determinan ese “volver” hacia la cultura, la forma en que el “otros” toma la connotación del “nosotros” y viceversa, ya no son observados como las víctimas invisibilizadas, sino como luchadores por la permanencia de una cultura que los hace “regresar” a sus tradiciones. Todorov (2008 p99) entrega buenos ejemplos:

Hipótesis o supuestos

Los problemas que hoy en día vive la región de la Araucanía (pobreza, desigualdad y conflicto) se relacionan entre sí y estructuran como la expresión del colonialismo que actúa a través de las herramientas que le entrega el Estado de derecho liberal: Ley, propiedad privada y fuerzas policiales. El régimen de propiedad de la tierra es la materialización de lo anterior.

El proceso de acumulación que se desarrolla en el espacio rural de la región de la Araucanía es parte de lo que se denomina acumulación por desposesión (Harvey) con algunos matices de acumulación capitalista moderna. Que se plasma en el despojo y acumulación de la tierra que se vive hasta hoy en día. Esto deja a la región enclaustrada en un tipo de capitalismo que se basa en el espacio rural, a través del agro y el



monocultivo forestal. Esto como parte de la función que debe cumplir la región en el sistema de producción y acumulación nacional y a su vez, internacional.

El tipo de acumulación del espacio rural de la región, se caracteriza por ser una acumulación enfocado en las materias primas, y por lo tanto en las zonas rurales. Esto influye directamente en el conflicto del Estado Chileno con el pueblo mapuche, los altos y permanentes niveles de pobreza y desigualdad social.

La reforma agraria impulsada por el Estado no pudo cambiar la realidad del espacio rural de la región de la Araucanía, debido a las particularidades de la región los que se ratificó con las lógicas económicas arcaicas de la contrarreforma de la dictadura, las cuales se mantienen hasta ahora.

Notas

¹ Proyecto de investigación en curso enmarcado en la tesis de Doctorado del autor

² Sociólogo, Mg. En Ciencias Sociales. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales.

Bibliografía

Bengoa (1990) "Historia social de la agricultura chilena: Tomo II: Haciendas y campesinos". Santiago: Ediciones Sur.

Bengoa, José (2002) "La Historia del pueblo mapuche" Santiago: Editorial LOM

Bengoa, José (2011) Los mapuche: historia, cultura y conflicto. Revista Cahiers des Amériques Latines. Paris, N°68 P89-107. <https://journals.openedition.org/cal/118>

Bengoa, José. (2014) "Mapuche, colonos y Estado nacional" Santiago: Editorial Catalonia

Bengoa, José (2015) "Historia rural de Chile central. Tomo II: Crisis y ruptura del poder hacendal" Santiago: Lom ediciones.

Canales, Manuel (2018) "Casta y sumisión. Chile a 50 años de la reforma agraria" Santiago: Social-ediciones

Cantero, Violeta; Williamson, Guillermo (2009). "Movilidad social intergeneracional por origen étnico: evidencia empírica región de la Araucanía, Chile". Talca. Revista Universium.

Correa, Martín, Molina, Raúl y Yañez, Nancy (2005) "La reforma agraria y las tierras mapuches Chile 1962-1975" Santiago: Lom ediciones

Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2002) "Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato" Santiago.



Chonchol, Jaques (1994) "Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización conservadora" Mexico D.F. Editorial Fondo de Cultura Económica.

Garín, Alan, Albers, Christoph; Ortega, Evelyn (2011). "Las expresiones de la ruralidad en la región de La Araucanía, Chile, 1997-2007" . Revista Estudios Sociales.

Harvey, David (2004) "El nuevo Imperialismo" Ediciones Akal. Madrid.

Harvey, David. (2007). "Espacios del capital. Hacia una geografía crítica". Ediciones Akal. Madrid.

Mariátegui, José Carlos (2005) "7 ensayos de interpretación de la realidad nacional" Ediciones Cultura Peruana. Lima.

Ministerio de Desarrollo Social ENCUESTA CASEN (2009-2015). 2017 <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php>

Marx, Karl. (2010 [1867]) "El Capital" tomo I. Santiago: Editorial LOM

Salazar (2012) "Historia de la Acumulación Capitalista en Chile: Apuntes de Clase" Santiago. Editorial LOM.

Redondo, Jesús-Angel (2017) "Tierra, trabajo y libertad: Conflictos campesinos e indígenas en la provincia de Cautín". Santiago: Lom ediciones.

Stavenhagen, Rodolfo (1971), "Las clases sociales en las sociedades agrarias" México D.F: Siglo Veintiuno Editores.

OXFAM (2016) "Desterrados. Tierra, poder y desigualdad en America Latina"

Todorov, T (2008) "El miedo a los bárbaros: más allá del choque de civilizaciones" Barcelona: Editorial Galaxia Gutemberg



Límites de los emprendimientos de la economía solidaria que producen *commodities* agrícolas en el noreste brasileño: Planta catende

Victoria Puntriano

En la división internacional del trabajo los países del sur históricamente realizan la producción de las materias primas para exportación y los países del norte las industrializan o las importan. En este contexto la investigación tiene como objeto el Ingenio a Planta Catende, una empresa fundada en la *plantation* azucarera en 1890 en el estado de Pernambuco, región noreste de Brasil, que ante un contexto de dificultades se fue a la quiebra y sus trabajadores emprendieron una lucha por su recuperación desde 1995 y posteriormente pasaron a identificarse como del campo (Bourdieu, 2003) de la economía solidaria. El objetivo es mostrar las contradicciones que el sistema de *commodities* provoca en los emprendimientos de la economía solidaria. La cuestión planteada es: ¿Cómo pensar relaciones solidarias en un escenario dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional? La metodología utilizada fue de carácter cualitativo y cuantitativo, utilizando la investigación bibliográfica y documental, también una investigación de campo con los principales actores: trabajadores agrícolas, fabriles y agricultores familiares, miembros del consejo gestor, asesores y colaboradores. Los resultados muestran que se trató de una experiencia de resistencia que obtuvo avances: el enfrentamiento al hambre, al analfabetismo, a la participación representativa de los trabajadores en la gestión, la desapropiación colectiva de las tierras y la ampliación de la renta mediante el apoyo de políticas públicas. Sin embargo, la estructura del mercado internacional crea y recrea las asimetrías entre los países del norte y del sur, poniendo en riesgo la supervivencia de los trabajadores/agricultores debido a sus fluctuaciones.

Palabra clave

Economía solidaria; *Commodities*; Emprendimientos Económicos Solidarios; Noreste brasileño; Planta Catende.

Introducción

Este trabajo contextualiza en la perspectiva sociológica el caso de una Empresa Recuperada por los Trabajadores (ERT) del ámbito de la economía solidaria observando las condicionantes históricas y estructurales en la división internacional del trabajo entre países del norte y del sur. Estos últimos como productores de materia prima, principalmente agrícolas y minerales que van perdiendo valor y los países del sur con el



proceso de industrialización de la materia prima que es más valorizado y produce las mejores ganancias.

Desde el tiempo de las colonias hasta los días actuales este contexto no se ha alterado significativamente ni en el orden económico, político ni ideológico. Las actividades extractivistas en América Latina a pesar de promover crecimiento económico, continúan generando asimetrías, conflictos sociales, ambientales y políticos (Svampa, 2012)

Con el surgimiento de los commodities, principalmente agrícola¹, se dio un nuevo ropaje a la remuneración del capital financiero con la intensificación del modelo de acumulación capitalista que evidencia la reprimarización de las economías y la consecuente desindustrialización², los impactos negativos en la soberanía alimentaria manteniendo y generando nuevas formas de dependencia y dominación (Antunes, 2013; Svampa, 2012).

El estudio de caso presentado se desarrolló en un contexto "*Plantation*", el sistema agrario latifundista, pautado por el monocultivo y agro exportación con mano de obra explotada en un ambiente de dominación y violencia. Se trata de una planta azucarera denominada Catende, localizada en la región boscosa (zona da mata) de Pernambuco, un estado localizado en la región noreste de Brasil.

Esta planta azucarera fue fundada en 1890 con capital inglés y desde entonces fue expandida y recibió incentivos gubernamentales y préstamos a bajos intereses como parte de la política proteccionista como el *Programa Nacional do Álcool (Pró-álcool)*³.

Llegó a su auge bajo la administración de "*Seu Tenente*", un ex-militar que con estilo de gestión autoritaria y emprendedora, entre los años 1920 a 1950 condujo a la empresa a una alta productividad desde el punto de vista del capital agroexportador.

Sin embargo en los años 1970, la actividad azucarera de la región noreste estaba perdiendo en productividad frente a las regiones sur y sureste, en consecuencia de la mecanización adoptada en esas regiones. (Scopinho; Vian; Silva, 1999). En los años 1990, con la adopción de política neoliberal y la apertura de los mercados para los productos extranjeros, exacerbó la competencia con las empresas nacionales llevándolas en muchos casos a la quiebra.

En el caso específico de la Planta Catende, además de ese entorno negativo, el traspaso de la compañía a sus herederos afectó negativamente su funcionamiento lo que hizo



que ocurrieran diversas adquisiciones de la empresa por grupos empresariales. De forma que, la gestión de la Planta se quedó comprometida, además de las deudas acumuladas con los préstamos lo que condujo a la quiebra.

Fundamentación del problema

En 1993, continuando la Planta Catende en crisis, realizó el despido de 2.300 trabajadores rurales, sin el pago de sus derechos laborales y desalojándolos de sus precarias viviendas. Este despido masivo tendría un gran impacto en la región y en consecuencia de un proceso de redemocratización de la sociedad ocurrido en los años 1980, había activismo de los movimientos sociales.

En ese escenario se produjo una reacción conjunta de *Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR)*, de la *Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE)*, de la iglesia católica, y otras Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) por la lucha de los derechos laborales de los trabajadores y la permanencia de sus familias en esas tierras.

Hubo diversos intentos de acuerdos en la justicia para realizar el pago de los derechos laborales de los despedidos y del atraso del pago de los salarios de los trabajadores aún en actividad, sin éxito. Al final del año 1994 los trabajadores no habían recibido ni el pago del mes de diciembre, ni el aguinaldo navideño y estaban pasando necesidades.

Sin embargo, llegó al conocimiento de los trabajadores que una de las familias del grupo empresarial había realizado una gran fiesta de año nuevo⁴ que fue noticiada por los periódicos en Recife, la capital, y además alquilaron una avión para ir a la pose del presidente en Brasíla.

Esta situación de injusticia generó una reacción en todos los trabajadores uniendo los del campo y la fábrica. Esta alianza entre categorías de trabajadores consideradas históricamente rivales, en torno de un objetivo común es comprendida en (Gluckmann, 2011) que analizó el papel del conflicto en la manutención de la cohesión social.

Esos trabajadores decretaron una huelga que duró 19 días al inicio de 1995 y con los trabajadores despedidos impidieron el ingreso de los dueños a las instalaciones de la planta y su salida de forma temporal.



Ante esa situación los dueños requirieron la quiebra y enseguida los trabajadores lo solicitaron en su nombre.

Schäfers (2007) comenta, con la articulación de FETAPE, los sindicatos, el gobierno de Pernambuco la justicia concedió la quiebra favorable a los trabajadores junto a los acreedores designó como primer síndico al *Banco do Brasil*.

Así se dá inicio a una co-gestión entendida por Faria (2009) como una administración conjunta compartida con los trabajadores que estaban representados formalmente por los STR's de los cinco municipios (Catende, Palmares, Jaqueira, Xexeú e Água Preta) y el síndico.

Vale resaltar que, en 1995, la Planta Catende tenía un porte considerable ya que involucraba a más de 4.000 familias en 26.000 hectáreas distribuidos en cinco municipios de la Zona de la Mata Sur del Estado de Pernambuco (Kleiman, 2008).

A pesar de los avances que significaba emprender una co-gestión ,la Planta Catende había heredado problemas sociales, económicos, de infraestructura de la gestión de la dueños.

Nascimento (2004) menciona los mayores desafíos que en ese momento se enfrentaba: la recuperación de la estructura productiva que no había tenido manutención, levantamientos informales indicaban 90% del analfabetismo en la región, además del hambre que se producía en los períodos de entre zafra del ciclo productivo de la caña de azúcar, y la búsqueda por caminos que viabilizaran la producción y la co-gestión establecida en el emprendimiento.

Lo que inicialmente fue una lucha por los derechos laborales y por la permanencia en la tierra era un desafío importante del cual el grupo gestor aún no tenía referencias, hasta que en 1999, a través del sindicato descubrieron a la economía solidaria y las experiencias de las ERT que ocurrían en otros lugares del Brasil y del mundo.

La identificación con la economía solidaria ocurrió a partir de la visión de Paul Singer que fue secretario de la *Secretaria Nacional da Economia Solidária (SENAES)* y que influenció el desarrollo conceptual y empírico de la economía solidaria y sus experiencias en los más diversos ámbitos: desde las cooperativas en el ámbito productivo a los Fondos Rotativos Solidarios (FRS) y bancos comunitarios en las finanzas solidarias.



Conceptualmente Singer (2002) señala las principales características e la economía solidaria que además de tener como objetivo la producción de bienes o la prestación de servicios, sería realizado a partir de la propiedad colectiva de los medios de producción. El trabajo sería asociado promoviendo la igualdad entre los participantes pautado en los valores de cooperación y solidaridad y las decisiones serían colectivas y las sobras distribuidas equitativamente.

El trabajo asociado con vínculos solidarios se muestra difícil de realizar en una sociedad movida por la competitividad. Tauile et al., (2005) realizó un estudio con las ERT e identificó las variables de estructura: gestión, mercado, crédito, tecnología, forma de propiedad y la relación con el sindicato y su participación institucional.

En este sentido destacamos el mercado, dado que es uno de los aspectos más complejos de superar, ya que es un aspecto externo al emprendimiento. En este caso se trata de un mercado competitivo regido por la volatilidad de la bolsa de valores en relación al commodity azúcar, que puede poner en riesgo la viabilidad económica de la Planta Catende.

La cuestión problema propuesta es ¿Cómo pensar relaciones solidarias en un escenario dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional?. Ante tal tiene el objetivo de mostrar las contradicciones que el sistema de *commodities* provoca en los emprendimientos de la economía solidaria.

Metodología

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo y cuantitativo. La investigación cualitativa permitió una reconstrucción histórica de la trayectoria de esta Planta como una experiencia de Economía Solidaria. También realicé una investigación bibliográfica, documental y de campo con los principales actores: trabajadores agrícolas, fabriles y agricultores familiares, miembros del consejo gestor, asesores y colaboradores.

Para el análisis sociológico del proyecto Catende me remito a las categorías de Bourdieu: campo y habitus.

“Los campos se presentan a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones (o puestos) cuyas propiedades dependen de las posiciones en estos espacios y pueden analizarse independientemente de las características de sus ocupantes” [...] para que un campo funcione, debe haber objetos de disputa y personas listas para jugar, dotadas de habitus que impliquen el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes de los objetos de disputa, juegos, etc” [...] La estructura del campo es un



estado de fortaleza entre los agentes o instituciones involucradas en la lucha. (Bourdieu, 2003, p 119-120).

Y habitus Bourdieu (2005) define como:

“... sistema de separaciones diferenciales, que define las diferentes posiciones en los principales sistemas del espacio social, corresponde a un sistema de separaciones diferenciales en las propiedades de los agentes (o clases constituidas como agentes), es decir, en sus prácticas y en los bienes que poseen” (p.20)

Ambas categorías fueron utilizadas para interpretar los comportamientos incorporados y reproducidos por los individuos en el campo de la investigación y de las estructuras heredadas de la empresa capitalista y del mercado de *commodities*.

Resultados y discusiones

Los logros a nivel educacional se describen a seguir hubo una significativa reducción de 82% del analfabetismo entre los adultos en un intervalo de 7 años desde 1995 a 2002 resultantes de las acciones de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) (Nascimento, 2004).

Diversas acciones educativas fueron impartidas de un proyecto denominado “Catendão”, el cual incluía tanto cursos de especialización como de elevación de escolaridad y EJA con el apoyo de la ANTEAG y otras ONG’s (Kleiman, 2008).

Posteriormente se creó un equipo de formación de carácter permanente denominado de *Equipe Harmonia* conformada por técnicos educacionales, educadores del campo. La mayoría de ellos diplomados en la región y descendientes de los trabajadores del campo y de la industria. Esa proximidad entre familias favoreció la adhesión de los alumnos a los proyectos educacionales que condujeron a que este equipo pasase a formar parte del consejo gestor en 2004.

Por otro lado, la asociación con las universidades de la región UFPB, UFPE y UFRPE contribuyó para la mejoría de la educación, incluyendo la educación de los niños, así como programas de prevención para la salud de la mujer y contra la violencia doméstica sufrida por las mujeres, *con el Centro de Mulheres do Cabo*.

Algunos cursos de formación fueron apoyados por la iglesia católica holandesa, eran realizados en una de las casas grandes, en la forma de seminarios tanto para los trabajadores del campo como de la industria (Nascimento, 2004).



Los cursos de formación, en especial aquellos facilitados por el grupo de Educación de Jóvenes de Adultos (EJA) y Educación del campo fueron estructurados en los ejes temáticos descritos a seguir:

I - Agricultura familiar: cultura, identidade, gênero e etnia;

II - Sistemas de produção e processos de trabalho no campo;

III – Cidadania, organização social e políticas públicas;

IV – Economia solidária;

V – Desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque territorial;””””

(Ministério da Educação, saberes da terra, 2010).

Todos estos ejes definidos en la matriz curricular estaban basados en la propuesta de la educación popular y de lo que se supone sería el cotidiano de los alumnos, agricultores familiares y trabajadores del campo en general. Los conocimientos que les serían necesarios, entre ellos constando la economía solidaria.

Todavía según Melo Neto; Lima (2010) la educación popular pasó por algunas etapas en la Usina Catende: Entre 1999 a 2000 se buscó promover cursos en el área de educación para la autogestión y economía solidaria (dado que la conocieron y recibieron la colaboración de la ANTEAG, inicialmente). De 2001 en adelante, se pasó por un momento de educación sistematizada, como la educación ambiental para niños y adolescentes, cursos de formación para la producción de técnicas y producción agrícola y curso técnico en producción en la industria azucarera, de gestión del proyecto Caña del Habitante, entre otros.

Posteriormente esos proyectos fueron ampliándose buscando las transformaciones sociales. En el caso de la EJA se propició la alfabetización con un carácter de educación popular y solidaria, articulando el conocimiento formal con los conocimientos locales para la producción. Y en la seguridad alimentaria (piscicultura y agricultura de supervivencia) produjeron cambios en la cultura alimentaria, pero también tuvieron un papel pedagógico siguiendo la misma línea de la educación popular con adhesión de los trabajadores y sus familias, así como de los viveros en las escuelas y una de las actividades que posibilitó también la participación femenina.

Debemos considerar como factor positivo la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias, principalmente a través del Programa "Caña del



Habitante” que articula la producción colectiva y la familiar, que se desarrolla en el campo económico y político por los acuerdos necesarios para la distribución de la tierra para los trabajadores o sus descendientes. La renta que es generada a partir de este proyecto que posibilita, inclusive, que familias opten por no tener más vínculo laboral con la usina y dedicarse integralmente a la agricultura produciendo caña de azúcar para la misma. También ocurrieron mejorías en las condiciones de trabajo: como fue relatado por (Iqueño, ex-presidente de la cooperativa Catende Harmonia, entrevistado en feb/2017):

- a. *A primeira coisa foi que nenhum administrador andasse armado, trocaram por rádio que era para se comunicar um com outro.*
- b. *Que o trabalhador não podia passar de meio dia para a tarde ficar para ele para fazer outras coisas para ele, trabalhar para ele, plantar, já foi cedido já a terra para ele trabalhar (cana ou lavoura), não importava o cultivo;*
- c. *O trabalhador precisava sair hoje, ele avisava ao administrador, o administrador apontava o dia dele, para ele não perder o remunerado e quando o administrador precisasse ai ele ia final de semana que era pagar esse dia que estava devendo que era justamente para ele não perder o dia. A diferença é que antes incentivava para perder, depois incentivava para ele não perder”.*

Tauile et al. (2005) citan específicamente la Planta Catende en su investigación de las tipologías de las ERT's:

“El proyecto Catende, por lo que ya ha realizado en términos de cambiar las relaciones laborales y la cultura política, va mucho más allá de la simple recuperación de los negocios en bancarrota, ya que alcanza la dimensión de un proyecto alternativo de desarrollo económico, social, cultural y político para la región de la Zona Boscosa del Sur de Pernambuco”. (p. 70)

Aunque justamente por ese motivo, por ser un proyecto alternativo enfrentaba a la elite social, económica y política de la región.

Las narrativas exponen que se trató de resistir al nuevo síndico, pero no se obtuvo éxito y aquí me centro en el aspecto de que esas protestas no fueron realizadas con la misma intensidad de las otras. El tejido social presentaba fisuras y no era más posible accionar las alianzas que antiguamente habían funcionado muy bien en Catende.

Las expresiones: perdimos el rumbo, los trabajadores perdieron la confianza en Catende (en la cooperativa), una parte de los trabajadores no fue, en el sentido de expresar su disconformidad con esa actitud arbitraria.



Al final de agosto de 2009, fue solicitado un balance patrimonial y una demostración de lucros y pérdidas y se observa que los costos operaciones son altos al punto de no permitir que la actividad operacional obtenga superávit. El costo de los productos eran equivalentes a 222% del total de las ventas. Es decir el bajo precio del azúcar impacta negativamente en los resultados financieros de la Planta. Sintetizando, el perjuicio llegaba a los 17 millones equivalentes a 79,76% del total de las ventas (informe financiero).

Esta situación de insolvencia es ocasionada en parte, debido a que el producto principal, el azúcar, es una *commodity* agrícola y, por lo tanto, su precio es determinado por el mercado internacional, por la cotización en las bolsas de valores y el precio nacional sigue esa tendencia además de los efectos de la variación cambiaria.

Las condiciones de estructurales en el campo de la división internacional del trabajo y de la macroeconomía remuneran al capital financiero y el valor pagado a los productores, en el caso del azúcar mal puede pagar los costos con la producción.

Reflexiones finales

Esta investigación analizó la Planta Catende como experiencia modelo en economía solidaria en Brasil y tiene como panorama general la cuestión agraria a partir del trinomio: latifundio, monocultivo y agro exportación, con la explotación de mano de obra en el sistema plantation utilizado en las colonias europeas de los países del sur que tuvieron una base esclavista.

En la división internacional del trabajo, en el caso específico del noreste de Brasil, Pernambuco, le corresponde la plantación de la caña y la fabricación del azúcar. Sin embargo a pesar de todo el esfuerzo productivo de los trabajadores y aunque consigan bajos costos de producción, que no era exactamente el caso de Catende, la volatilidad de los precios de las transacciones comerciales estimadas en moneda norteamericana, el dólar, hace que las plantan azucareras sufran las consecuencias socioeconómicas de tener un precio padrón que pone en riesgo la viabilidad de las industrias.

Este es un factor relevante en el análisis, porque amenaza la sostenibilidad e inclusive desafía el tejido social al poner en jeque la credibilidad del consejo gestor como si no supiera administrara los recursos, o existieran desvíos.

No obstante, son las relaciones de poder del campo político-económico que están estructuradas para que los rendimientos se queden en los países del sur y los del norte



como es el caso de Brasil no obtengan la utilidad financiera necesaria para su sobrevivencia.

Los éxitos que Catende obtuvo fue en otras áreas; el programa de seguridad alimentaria con el cultivo de agricultura de subsistencia, frutas, la cria de pescado. En el campo educacional, la reducción del analfabetismo, los cursos profesionales y de cooperativismo. Hubo mejorías significativas en el campo y sus indicadores de productividad del cultivo, así como también la gestión la participación fue ampliada en el consejo gestor.

Debido a la maquinaria desfasada los indicadores de productividad industrial eran bajos y los costos altos por causa del uso extensivo del corte manual y por buscar siempre cumplir con las determinaciones de la convención colectiva como el límite de corte de 4 toneladas, ampliamente incumplido en un gran número de plantas de azúcar.

La sustitución arbitraria de síndico y su cierre fueron un duro golpe para los trabajadores que llevan consigo el aprendizaje y la experiencia de haber participado de una experiencia que enfrentaba a la elite social, económica y política de la región.

Notas

¹ En el caso del azúcar que se cotizó en la bolsa de Nueva York en 1916.

² En relación al caso brasileño del proceso de desindustrialización vivido a partir de los años 1990, con la adopción de políticas neoliberales, la apertura de los mercados internacionales y remuneración al capital financiero.

³ Fue creado con el apoyo del *Instituto do Açúcar e Alcool (IAA)* ofrecía las siguientes facilidades: financiamiento de hasta el 90% del presupuesto de las inversiones fijas para la planta industrial; interés a una tasa del 15% al año (a.a) con plazos de carencias de hasta 3 años con pagos semestrales.

⁴ Se trataba de una fiesta de reveillon, que se quedó conocida como “vermelhão” porque fue el equivalente de significado que encontraron para su realidad, que podría ser traducido como rojizo.

Referências

- Antunes, R. (2013). Las desconstrucciones del trabajo, su nueva morfología y la era de las rebeliones. *Subversiones intelectuales*. N° 31, Marzo de 2013 · Bogotá, Colombia.
- Bourdieu, P. (2003). *Questões de sociologia*. Tradução Miguel Serras Pereira. Coleção Margens. 2 ed. Lisboa: Fim de século.



- Bourdieu, P. (2005). *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Tradução de Mariza Correia. 7 ed. Campinas: Papirus.
- Faria, J. H. (2009). *Gestão participativa: relações de poder e de trabalho nas organizações*. São Paulo: Atlas.
- Gluckman, M. (2011). *Os rituais de rebelião no sudeste da África*. Série tradução. nº 3. Brasília: UNB.
- Kleiman, F. (2008). *Lições de Catende: a construção de uma autogestão em Pernambuco*. São Paulo: Annablue.
- Melo Neto, J. F; LIMA, L. M. S. (2010). *Usina Catende: para além dos vapores do diabo*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.
- Ministério de Educação. (2010). Secretaria de educação continuada, Alfabetização. Cadernos pedagógicos do Projovem Campo. *Saberes da Terra*. Brasília, MEC, SECAD.
- Nascimento, C. (2004). Do “Beco dos Sapos” aos Canaviais de Catende. SENAES. <https://docplayer.com.br/79369628-Do-beco-dos-sapos-aos-canaviais-de-catende.html>
- Schäfers, A. (2007). “Reforma agrária e economia solidaria: o caso da Usina Catende”. *Estudos Sociedade e Agricultura*. Rio de Janeiro, 15, (1) 85-93
- Scopinho, R; Vian, F; Silva, C. (1999). Novas tecnologias e saúde do trabalhador: a mecanização do corte da cana-de-açúcar. *Caderno de Saúde Pública*, 15, (1) 9. jan.-mar, 147-161.
- Singer, P. (2002). *Introdução à economia solidária*. São Paulo: Perseu Abramo.
- Tauile, J. R.; Rodrigues, H; Vilutis, L; Faria, M.S. (2005). *Empreendimentos autogestionários provenientes de massas falidas*. Brasília: MTE, IPEA, ANPEC, SENAES.
- Svampa, M. (2012). Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. (32). Argentina.



Alimentación, territorio y memorias del conflicto armado en la vereda el vergel del municipio san carlos, antioquia.

Yury M. Ocampo Buitrago¹

Resumen

El conflicto armado en Colombia acarreó transformaciones de tipo económico, cultural y político que se ven reflejadas, entre otras, en las dinámicas alimentarias. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, han identificado que los mayores índices de inseguridad alimentaria se dan en zonas con mayores índices de conflicto armado. Esta investigación cualitativa, realizada en uno de los municipios con mayor índice de afectación por conflicto armado, y siguiendo la Investigación Acción Participativa como línea metodológica general, tiene como objetivo principal: Identificar las transformaciones en la alimentación (producción, distribución, consumo) y el territorio generadas por el conflicto armado en la vereda el Vergel del municipio de San Carlos. En la metodología se incluyen espacios y técnicas de investigación-acción que indagan por las memorias del conflicto armado a la vez que sirven para la proyección comunitaria y territorial a partir de la agroecología. Los resultados muestran que el conflicto armado interfirió en diversos niveles de lo alimentario, en tanto, se afectó el nivel familiar por la fragmentación de la familia y por el detrimento de medios de producción y mano de obra familiar dados en los procesos de desplazamiento forzoso y retorno; y en el nivel social por la disminución de mano de obra y el detrimento a las iniciativas comunitarias y asociativas de producción, reflejadas en los daños que actores armados infringieron sobre los entables paneleros o trapiches. Lo que en la actualidad se refleja en escasez de mano de obra, bajo volumen de producción de alimentos y café, y ausencia de procesos comunitarios de producción.

Palabras claves

Alimentación, territorio, memoria, conflicto armado.

Keywords

Feeding, territory, memory, armed conflict.

Introducción

El conflicto armado ha generado transformaciones en múltiples aspectos, entre ellos en las dinámicas alimentarias. Organismos internacionales como FAO y PMA han



identificado que los mayores índices de inseguridad alimentaria se dan en zonas con mayores índices de conflicto armado. Esta investigación se desarrolló uno de los municipios con mayor afectación por el conflicto armado, San Carlos-Antioquia; asumiendo que la transformación de lo alimentario como parte fundamental de las relaciones sociales y territoriales alteraba no solo la seguridad alimentaria sino también la identidad y la soberanía alimentaria.

Objetivos

Identificar las transformaciones en la alimentación (producción, distribución, consumo) y el territorio generadas por el conflicto armado en la vereda el Vergel del municipio de San Carlos.

Metodología

Investigación cualitativa-descriptiva con elementos de la Investigación Acción Participativa. Se usó técnicas de investigación-acción, como cartografía social, grupos focales, entrevistas, teatro del oprimido, que a la vez que permitieron la indagación por las el conflicto armado y lo alimentarios, sirvieron para la proyección comunitaria y territorial. Los datos se sistematizaron en ATLAS.ti y se analizaron según categorías tales como seguridad alimentaria, conflicto armado y la relación entre ellas.

Resultados

Los daños generados por el conflicto en cultivos, entables paneleros, casas; la siembra de minas, la masacre y el desplazamiento, se reflejan en que hay escases de: mano de obra, producción de café, caña y pancoger, semillas propias, prácticas culinarias como el pilado del maíz y procesos comunitarios. El territorio apenas está siendo recuperando en tanto retorna la población y se reabren caminos, se restauran las casas, se vuelve a sembrar y se reconstruye el tejido social mediante nacientes asociaciones productivas y cívicas.

Conclusiones

En el Vergel las afectaciones por el conflicto armado aún se manifiestan en lo alimentario. Éstas generaron una ruptura en la producción agropecuaria que, aunque se está recuperando, aun se visibiliza en la escasez de mano de obra, en el aumento de la compra de alimentos y en que los niveles de café, caña y pancoger están por debajo de



la producción previa a la agudización del conflicto armado y el desplazamiento; lo cual revela problemas tanto en la seguridad como en la soberanía alimentaria y nutricional.

NOTAS

¹ Profesora ocasional de la Escuela de Nutrición y Dietética en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia



Línea Temática 6.

Género, juventud y desigualdades en la ruralidad contemporánea



Entre a escolha e a decisão: O papel das políticas públicas de educação do campo para a ampliação das liberdades dos jovens

Márcia Moreira da Cunha¹

Resumo

Este artigo apresenta uma analogia de como a atuação das políticas de Educação do Campo podem atuar decisivamente na ampliação das liberdades entre os jovens do campo. Analisamos as constituições brasileiras e os movimentos sociais dos quais emergiram várias ações que foram implementadas nessas políticas públicas. Este estudo evidenciou que somente nos últimos anos foram empreendidas políticas públicas para a educação do jovem do campo, tendo essas atuações sido negligenciadas ao longo de parte considerável da história do Brasil.

Palavras-chave

Jovens; Políticas Públicas; Educação do Campo.

Abstract

This paper presents an analogy of as an acting of country's education politics can act decisively in the enlargement of liberties among the country's young people. We analyzed the Brazilian constitutions and social movements which emerged many actions which were implemented in these public politics. This study showed that, only in the last years, we carried out these politics to education and to young people from the countryside, these actuations were neglected along of considerable part of Brazil's history.

Keywords

Young, Public Politics, Country's Education

Introdução

Este artigo tem como finalidade analisar as políticas públicas para a educação do jovem do campo no decorrer da história do Brasil, a partir da primeira metade do século XIX. Propõe-se também uma análise das políticas direcionadas para o meio rural que envolvem os jovens, ainda que tais políticas não sejam voltadas especificamente para questões educacionais. Com esses objetivos, busca-se sistematizar a trajetória temporal dessas políticas e avaliar criticamente a necessidade do seu (re) desenho. A



metodologia foi baseada na revisão de literatura e análise da legislação sobre juventude e educação do campo.

Historicamente, o meio rural sempre foi visto como lugar do atraso, de forma a inferiorizá-lo como modo de vida e *locus* de reprodução sociocultural. Na dicotomia campo/cidade e na educação, este conceito também é evidenciado, sendo que, ao longo da história brasileira, os processos educacionais foram pensados tendo em vista os conceitos e necessidades da cidade.

As reivindicações para políticas que considerassem o jovem rural mostram a participação popular nas decisões do governo. Para Beck (1997), a individualização não permanece privada, pois os indivíduos são construídos de forma interativa e complexa, mais aberta do que os clássicos papéis sociais propostos pelo funcionalismo. Para o autor, “‘subpolítica’ seria o espaço no qual os indivíduos alijados do sistema político formal podem se inserir de forma efetiva na política, segundo questões reflexivas, o que ‘significa moldar a sociedade de baixo para cima’” (Beck, 1997, p.35). Nesse sentido, o autor acredita que essa seria uma forma efetiva de fazer o retorno dos indivíduos à sociedade.

No decorrer das narrativas das políticas públicas voltadas para o jovem do campo, há pouca atuação por parte dos governantes. Nesse contexto, buscou-se analisar quais foram os avanços na ampliação das liberdades entre os jovens com tais políticas. Contudo, percebeu-se, ao analisar os impactos das políticas, que os dados ainda são escassos e divulgados de forma vaga nos sites oficiais do governo, dificultando a análise profunda da sua eficácia entre os programas.

Referencial Teórico: Políticas Públicas

Saraiva e Ferrarezi (2006) definem políticas públicas como decisões que visam a manter o equilíbrio social. São estratégias que apontam para vários fins, em que diversos grupos participam do processo decisório. Nesse processo, esses grupos visam a ações preventivas ou corretivas destinadas a manter ou a transformar a realidade de vários setores sociais por meio da definição de objetivos e estratégias e alocação de recursos necessários para atingir as finalidades estabelecidas.

Em abordagem mais sintética, a política pública definida por Souza (2007), busca colocar o governo em ação e, quando necessário, propor mudanças. Assim, essas políticas se constituem no estágio em que os governos democráticos traduzem seus



propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudança no cenário real.

A participação social no discurso das propostas políticas nas décadas de 1980 e 1990, o protagonismo dos estados e municípios, com uma representação mais próxima do problema e das possíveis soluções, ou seja, a participação e a descentralização eram postas como instrumentos centrais na democratização da relação entre Estado e a sociedade civil (Silva; Marques, 2004).

Em se tratando especificamente do meio rural, Grisa e Schneider (2015), destacam que as políticas públicas podem ser distinguidas em três gerações. A primeira geração, associada a demandas de segmentos sociais da agricultura familiar organizados em sindicatos e movimentos sociais, está ligada, principalmente, a questões agrícolas e agrárias, sendo reivindicadas também por acadêmicos como Caio Prado, Alberto Passos Guimarães e outros. A segunda foi marcada pela criação e expansão de políticas de assistência social, ainda que o processo de reformulação da previdência rural, a principal ação de Estado nessa área, tenha se iniciado com a Constituição de 1988. E a terceira geração está relacionada à construção de novos mercados para os produtos e serviços oriundos da agricultura familiar, tendo como focos a segurança alimentar e a sustentabilidade.

Pode-se afirmar que essas políticas somente foram implementadas a partir da segunda metade do século XX. Os processos de elaboração e implementação dessas políticas públicas não aconteceram de forma linear e não tiveram resultados plenamente satisfatórios. Segundo Grisa e Schneider (2015), as demandas feitas pelos atores sociais, sobretudo os do meio rural, não foram inteiramente atendidas e as mobilizações sociais permanecem buscando resultados positivos nessa direção.

Histórico das políticas educacionais e para a educação do campo no Brasil

O início do período de análise considerou como marco histórico a independência do Brasil, já que, antes disso, o país estava subordinado às leis portuguesas. Nesse sentido, a Constituição de 1824 foi utilizada como documento inicial da consulta bibliográfica. A primeira Constituição do Brasil Império, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25 de março 1824, estabelecia gratuidade no ensino primário e universitário.



Seguindo o padrão vigente à época, é possível notar que a constituição se mostra excludente, pois não considerava os membros da população escravizada, cidadãos brasileiros, que, nesse momento, eram bastante numerosos no Brasil. Segundo Carvalho (2008),

os escravos começaram a ser importados na segunda metade do século XVI. A importação continuou ininterrupta até 1850, 28 anos após a independência. Calcula-se que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia 3 milhões de escravos, na época da independência, uma população de 5 milhões, incluindo 800 mil índios, havia mais de um milhão de escravos (Carvalho, 2008, p. 19)

A constituição de 1891, nos artigos 34 e 72, adotando o modelo federal, se preocupou em explicitar a competência para legislar da União e dos Estados com relação à educação. De acordo com seu texto, a União deveria legislar sobre o ensino superior, enquanto aos Estados cabia legislar sobre o ensino secundário e primário, ainda que tanto a União quanto os Estados pudessem criar e manter instituições de ensino superior e secundário.

Percebe-se que, na primeira metade do século XX, quando a população rural era maior do que a urbana, o Estado não se preocupava com políticas educacionais voltadas para o campo. A constituição de 1934 assegurava que a educação possibilitaria a “fixação do homem do campo”, como mostra o trecho a seguir:

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.

§ 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas.

A constituição de 1937 conecta a educação a valores cívicos e econômicos. Cabe ressaltar que neste momento não é mencionada a educação do campo e também não há valores monetários destinados para esse fim, como mencionava a constituição anterior. Sem muitas inovações na área educacional.

Considerando os artigos descritos, percebe-se retrocesso na Constituição de 1937. A centralização é reforçada pela rigidez do regime ditatorial e, principalmente, pela previsão de competência material e legislativa privativa da União em relação às



diretrizes e bases da educação nacional, sem referência aos sistemas de ensino dos estados (Raposo, 2005).

A Constituição de 1946 (artigos 166, 167 e 168) retoma os princípios das Constituições de 1891 e de 1934. A competência legislativa da União limita-se às diretrizes e bases da educação nacional. A competência dos Estados é garantida pela competência residual, como também pela previsão dos respectivos sistemas de ensino.

A Constituição de 1967 mantém a estrutura organizacional da educação nacional, preservando os sistemas de ensino dos estados. Não faz diferenciação entre educação urbana e rural. Entretanto, são percebidos retrocessos no enfoque de matérias relevantes: há um estímulo em relação ao ensino particular, ressaltando a garantia de bolsas de estudos para os alunos em escolas particulares, no ensino médio e superior a gratuidade aconteceria mediante o bom desempenho e se fosse comprovada carência financeira; previa também a redução nos repasses para a educação (RAPOSO, 2005). Como descreve um segmento da constituição no artigo Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.

A constituição de 1969, ainda durante o regime militar, foi constituída por pequenas alterações.

Art. 178. As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer para aquêle fim, mediante a contribuição do salário-educação, na forma que a lei estabelecer.

A Constituição de 1988 ressalta que a educação é uma cooperação com o Estado, família e a sociedade civil organizada. A proposição desse direito a todos de uma educação de qualidade implicava a necessidade de avançar em alguns aspectos específicos. Assim, essas discussões foram fundamentais para a criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação em 1996. É possível destacar na LDB um aspecto fundamental, a educação rural e suas especificidades, não mencionadas na constituição de 1988:



Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996).

Em 2007, foi lançado pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) positivamente recebido pela sociedade, pois tratava da melhoria da qualidade do ensino. O plano propunha enfrentar diretamente essa questão, focando prioritariamente os níveis de qualidade do ensino ministrado em todas as escolas de educação básica do país. O plano ainda era mais ambicioso, abrangendo os mais variados aspectos da educação em seus diversos níveis e modalidades, com o compromisso de melhorar a educação em todo o país.

O PDE, entretanto, não tratava, especificamente, da questão da educação do campo. Segundo Mônica Molina, em entrevista à revista Nova Escola, em 01 de dezembro de 2012, mesmo levando em consideração a melhoria do acesso à Educação no país e sua qualidade, o PDE não era capaz de lidar com as especificidades da educação rural.

Em julho de 1997 foi realizado o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária – ENERA, resultado de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília (GT-RA/UnB), o Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem Terra (MST), representado pelo seu Setor de Educação, além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Fundo das Nações Unidas para a Ciência e Cultura (Unesco) e da CNBB (INCRA, 2018). Pode-se afirmar que o I ENERA permitiu a exposição pública de práticas educacionais e de formação do MST, ao mesmo tempo que procurou reforçar a necessidade de acesso à educação de qualidade e que considerasse as especificidades do campo.

Após o evento, representantes de algumas universidades se reuniram na Universidade de Brasília para discutir a participação das instituições de ensino superior no processo educacional nos assentamentos. Foram formalizadas algumas possíveis linhas de



ação com prioridade para a questão do analfabetismo de jovens e adultos, sem ser excluído o apoio a outras alternativas. Neste contexto, ao fim do encontro, foi eleito um grupo para coordenar a produção do processo de construção de um projeto educacional das instituições de ensino superior nos assentamentos. Foi elaborado um documento apresentado no III Fórum do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, nos dias 6 e 7 de novembro de 1997.

Como resultado é possível citar a Portaria nº. 10/1998, por meio da qual o Ministério Extraordinário de Política Fundiária criou o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Inicialmente o Pronera apoiava e propunha projetos de educação para assentamentos rurais, incluindo jovens e adultos dos projetos de assentamento criados e reconhecidos pelo Incra, quilombolas e trabalhadores acampados cadastrados na autarquia e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Em 2001, o Pronera foi incorporado ao Incra e foi editada a Portaria/Incra nº 837, na qual foi aprovada a edição de novo Manual de Operações.

Em 2004, frente à necessidade de adequar o Pronera às diretrizes políticas do governo Lula, que priorizava a educação em todos os níveis como um direito social, foi elaborado um novo Manual de Operações, aprovado pela Portaria/Incra nº 282 de 16/4/2004. Nesse ano, o programa estava voltado para os assentamentos rurais, capacitando os educadores e realizando cursos de educação básica e alfabetização, cursos técnicos profissionalizantes de nível médio e diferentes cursos superiores e de especialização.

O Pronera redefiniu sua área de atuação pelo Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo. O decreto definiu que a população do campo tem direito a uma Educação que contemple as especificidades da vida na zona rural e tratou da garantia do direito à Educação Básica e Educação Superior no campo. Ainda previa ampliar o investimento no sistema público de Educação no campo e a ampliação e a qualificação da oferta.

Nesse contexto, foram definidos os beneficiários da política de educação no campo:

§1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 1 - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.



A escola do campo também passa por nova definição. Dessa forma, o decreto nº 7.352 define escola do campo como:

(...) aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo. § 2o Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no inciso II do § 1º.

O Pronera é desenvolvido por meio de parcerias entre universidades e instituições de ensino públicas ou privadas, federais, estaduais e municipais. Entre 2003 e 2010, foram implantados no país cursos como Agronomia, Técnico em Agropecuária, Agroecologia, Pedagogia, História, Ciências Sociais, Magistério, Direito, Geografia, Letras, Especialização em Educação no Campo e Técnico em Saúde Comunitária (Projovem Campo, 2010).

Nesta parceria entre as várias instâncias da sociedade, busca-se atingir uma educação de qualidade, que contemple as diversidades locais onde a escola seja realmente uma troca de saberes. Assim, a Educação do Campo coloca-se como parte essencial do processo de valorização cultural, pois assume a responsabilidade de promover reflexões que contribuam para promoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, o campo, como contexto educacional em suas dimensões sócio educativas, requer o atendimento às especificidades, que nem sempre foram reconhecidas como este breve histórico permitiu entrever. A valorização da identidade do indivíduo do campo, sua cultura, conhecimentos, especificidades enxergando-os como sujeitos históricos, importantes na sociedade.

Relação campo cidade, os desafios para juventude

O jovem no contexto da sociedade “pós-tradicional”

Segundo Giddens (1995), a expressão “sociedade pós-tradicional” pode causar estranheza a princípio. A modernidade quase sempre definida em oposição à tradição, mas durante parte da sua história, a sociedade reconstruiu a tradição enquanto a dissolvia. A recriação da tradição foi fundamental para a legitimação do poder.

No contexto da sociedade pós-moderna, as atividades locais são influenciadas pelo processo de globalização, ou são até determinadas por ele, em diversas proporcionalidades. Esse processo provocou mudanças estruturais no meio rural, mas



não mudanças coletivas para a população, especialmente para os jovens. De acordo com Martins (1986), como as inovações não ocorreram de forma abrangente e homogênea para todas as pessoas, houve grande migração, sobretudo nas décadas de 1950 a 1980 para as cidades, mas com pouca ou nenhuma melhoria na qualidade de vida (IBGE, 2018). Pelo contrário, parcela considerável desses migrantes acabou ficando à margem da sociedade, vivendo nas periferias e com pouco acesso a trabalho e educação.

De acordo com Martins (2001), desde os anos 1970 a “modernização” forçada do campo, foi responsável por crescente redução de postos de trabalho. Tal crescimento econômico tendencioso mostra que este modelo imperante de desenvolvimento acarretou um contradesevolvimento social responsável por formas perversas de miséria no mundo. Nessa dinâmica, na maioria das vezes, na concepção rural, os homens obtêm lucratividade nos afazeres do campo. Nas regiões onde há trabalho assalariado, há uma predominância da permanência das mulheres.

Segundo Abramovay *et al.* (1997), na população migrante há uma maioria de jovens que deixam o meio rural, sobretudo de mulheres. Em algumas situações, a saída do campo pode estar ligada a dinâmicas intrafamiliares, em que as moças têm uma carga de trabalho pesada no interior das unidades de produção, sem qualquer contrapartida que lhes indique horizontes de que sua permanência no campo possa ser valorizada. Ainda há outra hipótese levantada por Abramovay (2001) para explicar a saída das mulheres do meio rural. Segundo o autor, trata-se da ligação entre processos migratórios e formação educacional. Nesse processo, muitas mulheres deixam o campo para buscar oportunidades de formação profissional não oferecida em suas regiões de origem.

As mudanças ocorridas no meio rural não significaram, entretanto, oportunidades melhores para a população jovem, que optam ou não por permanecer no meio rural. A permanência em seu local de origem muitas vezes é posta em risco e a população é obrigada a fazer escolhas e tomar decisões. Para Giddens (1995), existe diferenciação entre escolhas e decisões. O autor explica que muitas das atividades cotidianas podem ser uma escolha ou a escolha torna-se obrigatória. Uma decisão, é claro, é sempre uma escolha, mesmo aquelas dos mais pobres ou aparentemente impotentes sofrem relações de poder preexistentes.



Nesse contexto, a permanência ou a saída dos jovens não representa especificamente uma questão de escolha, mas uma decisão muitas vezes tomada em contextos adversos. O meio rural não é apontado como sinônimo de progresso, pois, segundo Kageyama (2008), o desenvolvimento rural não é identificado como crescimento econômico, mas visto como um processo que envolve múltiplas dimensões, sociocultural, econômica, política e ambiental.

O fator de atração da cidade em relação campo sobressai. O meio urbano é definido como: moderno, próspero e, assim, constitui uma fascinação para o jovem. Segundo Kageyama (2008), os jovens desejam melhorar seu padrão de vida, buscando alternativas nas cidades e tentando demonstrar para a família seu crescimento. Nessa dinâmica, muitas vezes imprecisa, está a tentativa de construção de uma nova identidade. Assim, o indivíduo se apresenta como rural, mas se vê refletido como jovem urbano, inserido em um mundo dito “moderno”. Essa dinâmica resulta em uma dualidade, já que, ao mesmo tempo, querem ser diferentes e iguais aos jovens da cidade e da localidade de origem.

A busca incessante por esta modernidade tão comum entre os jovens é algo muito complexo, pois, segundo Giddens (1995), a modernidade tornou-se experimental. Queramos ou não, todos estão presos em uma grande experiência que está ocorrendo no momento da nossa ação – como agentes humanos – mas fora do nosso controle, em um grau misterioso.

Os jovens rurais enfrentam grandes desafios no meio rural. De acordo com Durston (1994) *apud* Carneiro (1998), os jovens do meio rural são vistos apenas como aprendizes de agricultores, pois são enxergados a partir da ótica do trabalho. Recentemente, a juventude urbana tem um protagonismo maior entre os cientistas sociais e a juventude rural continua na situação de invisibilidade em função dessa visão estereotipada que tem dificultado a compreensão da sua complexa inserção num mundo culturalmente globalizado.

Neste contexto pós-moderno de desafios, o jovem se reconstrói em suas práticas e tradições morando no meio rural ou não. Os desafios enfrentados nos centros urbanos por um jovem de origem rural, segundo Carneiro (1998, p.17),

(...) com qualificação profissional e nível educacional normalmente mais baixo que os da cidade, a obrigação de pagar caro pela moradia, pelo transporte e pela alimentação, têm



levado os jovens a "descobrirem" que podem ter um padrão de vida bem satisfatório no campo, onde contam com um conjunto de facilidades inexistentes na cidade, sobretudo a da moradia. Estabelecer residência na localidade de origem passa a ser valorizado não só por motivos econômicos, mas também em decorrência da idealização da vida rural pelos moradores da cidade.

Contudo, com a desaceleração do meio do êxodo rural e a criação de políticas públicas, como relata Sheneider (2007), há novas oportunidades no meio rural, dentre as quais podem-se destacar o fortalecimento em torno da agricultura familiar, o debate sobre o desenvolvimento rural, a mudança de posição das elites agrárias sociais e compensatória para o meio rural e a sustentabilidade ambiental. Para o autor, as políticas públicas e os movimentos sociais são responsáveis por essa desacelerada no êxodo rural.

Os desafios encontrados no meio rural e urbano para o jovem são muitos, quer seja na esfera econômica ou cultural. Abramovay (2001) destaca que o êxodo, predominantemente jovem, mostra, ao contrário, que o campo se abre cada vez mais para o contacto com as cidades. Nesse contexto, “resta saber se esta abertura dará lugar a laços construtivos e interativos ou se levará à desagregação do tecido social existente hoje no meio rural” (Camarano; Abramovay, 1999, p. 24).

Favareto (2007), destaca que a racionalização da vida rural, é todo um universo ancorado na ruralidade agrária que se dilui, para dar lugar a novas significações. Permanência do rural, associada à heterogeneização e aos conflitos disso derivados passa a serem palavras-chave para compreender suas manifestações contemporâneas. Contudo, é necessário avançar nas políticas que são destinadas aos jovens rurais, para que sua decisão de sair do meio rural ou a sua permanência possa ser realmente uma escolha, e não mais um desafio entre tantos que o jovem já tem que enfrentar.

Escolhas, decisões e liberdades

Escolhas e decisões caminham juntas durante todo momento da vida do ser humano. No período da juventude, essas escolhas tornam-se mais evidentes, como a opção da carreira, do curso, a faculdade a permanência ou saída da casa dos pais. Todavia estas opções não apresentam como uma tarefa fácil dado a complexidade de elementos que são interconectados.



Segundo Beck (1994), as escolhas e decisões trazem duas conotações diferentes, pois muitas de nossas atividades cotidianas são feitas de escolhas, mas muitas vezes estas decisões tomadas, não são uma escolha. Isto é evidente na vida do jovem, “obrigados” a tomar decisões que irão refletir na sua vida adulta sem que possam, verdadeiramente, fazer escolhas.

Portanto, faz-se uma análise especificadamente da juventude rural, de como as decisões cotidianas podem ampliar ou retrair liberdade dos jovens rurais.

Segundo Sen (2000, p. 32), “liberdade deve ser entendida como expansão das ‘capacidades’ [capabilities] de levar o tipo de vida que valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser aumentadas pela política pública, a direção da desta pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo”.

Nessa perspectiva, a restrição do jovem do campo em fazer escolhas torna-se evidente, uma vez que a permanência no meio rural torna-se um desafio para o jovem. A liberdade de permanecer no campo é limitada por fatores como acesso ao ensino, diversidade de trabalho entres outros. Ao escolher em ir para a cidade terá que enfrentar o desafio de “afastar-se”

temporariamente da família e amigos, modificar sua cultura e encarar um novo desafio distante de casa e com modos de vida diversos. Se decidirem ficar, há de enfrentar outro tipo de desafio, conforme é explicado Valadares *et al.* (2016). Para o autor, “(...) constrói-se (...) a ideia de que permanecem no campo apenas aqueles que não tiveram ‘oportunidade’ de migrar, aqueles ‘que não tem jeito para os estudos’, ou os ‘menos capacitados’ a vida urbana” (Valadares *et al.*, 2016).

As políticas implementadas para os jovens nos últimos anos, tais como: acesso ao crédito, à terra, à educação, transferência de renda, comercialização e dinamização econômica e habitação obtiveram alguns progressos para os jovens do meio rural, mas ainda não foram significativas para a melhoria da qualidade de vida os jovens do campo. Ademais, entre 2000 e 2010, houve, de acordo com Valadares, *et al.* (2016), um crescimento de taxas de permanência no campo em todo, exceto na região Sudeste.

Segundo Castro (2013), a decisão de ficar ou sair do meio rural envolve múltiplas questões, que vão muito além de uma escolha pessoal. Ademais, para Valadares *et al.* (2016), esse ato não pode ser considerado como fator individual. Para os autores, “As



decisões são conformadas em contextos específicos, que podem ser radicalmente alterados pelos instrumentos de políticas públicas” (Valadares *et al.* p. 75.).

A liberdade de escolha pode de fato ter importância direta para a qualidade de vida e bem-estar de uma pessoa. “Agir livremente e ser capaz de escolher são, nesta concepção, diretamente conducentes ao bem-estar, não somente porque mais liberdade torna disponível um número maior de alternativas” (Sen, 2001, p. 92)

Nesse contexto, é necessário avançar nas políticas que são destinadas aos jovens rurais, para que sua decisão de sair do meio rural ou a sua permanência possa ser realmente uma escolha e não mais um desafio entre tantos que o jovem já tem que enfrentar.

Ao longo da história do Brasil, foram criados vários marcos, na educação do campo, através das lutas sociais, programas e governo e iniciativas como a Pedagogia

alternância iniciada em um vilarejo da França e no Brasil adotado em 1968 no Espírito Santo e que congrega as Escolas Famílias Agrícolas (EFAS) e no Paraná em 1986. “A Pedagogia da Alternância veio, então, possibilitar que a frequência à escola pudesse ser uma realidade também para quem vive fora dos centros urbanos” (Molina, 2006 p.78).

Contudo, facilitar o acesso às políticas públicas, reconhecer as especificidades do campo brasileiro, assegurar que tais políticas sejam, de fato, levadas a diante e, corrigindo os erros ao longo do processo. Isso garantirá a livre escolha, “pensando as aptidões e nos sonhos de cada jovem, e não uma imposição econômico-social, fruto da ausência de políticas públicas” (ValadareS *et al.*, 2016, p. 91).

Entretanto, é importante salientar que políticas públicas para o jovem rural e demais segmentos da sociedade, tenha uma continuidade não sejam apenas, políticas de governo, que finalizem a cada ciclo governamental é imprescindível reestruturá-la caso necessário para que tenha um bom êxito.

Considerações finais

Pode-se afirmar que é necessária uma ação conjunta entre o poder público, universidades, escolas, agricultores, jovens do campo e sociedade civil para que a realidade da Educação do Campo cumpra o seu papel de valorização local e melhoria



da qualidade de vida da população e promova a ampliação da liberdade dos jovens. É possível afirmar ainda que é preciso encontrar alternativas que contribuam para que a educação do campo avance, deixando de representar apenas discurso político e, assim, passe a valorizar os territórios com suas especificidades. Ou seja, deve-se avançar além da criação de leis e decretos.

As políticas públicas voltadas para a educação do campo tendem a promover o “desenvolvimento” territorial e contribuir para os avanços econômicos, sendo necessário levar em consideração os aspectos sociais, culturais e ambientais dentre outros elementos peculiares de cada região. Assim, a Educação do Campo apresenta-se como alternativa fundamental desse processo, pois tem a responsabilidade de gerar reflexões que contribuam para constituição de um novo modelo de desenvolvimento. O campo, como contexto educacional, em suas esferas socioeducativas, requer o atendimento às suas características específicas.

Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Notas

¹ Graduada em Geografia pela Universidade Presidente Antônio Carlos-UNIPAC /Barbacena – MG. Mestranda em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa – UFV. marciacunha1000@yahoo.com.br

Referências

- Abramovay, R. *Ruralidade e desenvolvimento territorial*. Gazeta Mercantil, 15 abr. 2001.
- Abramovay, R.; Silvestro, M.; Baldissera, I. T.; Cortina, N. ; Testa, V. M.
- Ferrari, D. *Juventude e agricultura familiar*. Brasília: Edições da UNESCO, 1998. 101p.
- BECK, Ulrich. Sobre a lógica da distribuição de riqueza e da distribuição dos riscos (p. 23-60). IN: *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade*. Editora 34, 2011
- Brasil, Constituição Política do Império do Brasil. Promulgada em 25 de março de 1824. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm.
- Brasil, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Disponível em <https://bit.ly/3nZl7mu>
- Brasil, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934: Disponível em: <https://bit.ly/3k4tzym>



Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 24 de janeiro de 1967 Disponível em <https://bit.ly/3IP6mR8>

Brasil, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 1 de novembro de 1937 Disponível em: <https://bit.ly/3iWP7eU>

Brasil, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 18 de setembro de 1964

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em 15 nov. 2018.

Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil (1988), promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui. Acesso em: 14 nov. 2018.

Brasil, Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Disponível em <https://bit.ly/343QZy0> . Acesso em 14 de Nov. de 2018

Brasil, Decreto-lei nº 311, de 2 de março de 1938. Disponível em: <https://bit.ly/31aDOK7>

Brasil, Instituto De Colonização e Reforma Agrária - Incra, Histórico Pronera- Disponível em: <http://www.incra.gov.br/pronerahistoria>.

Brasil, Lei Nº 11.692, de 10 de Junho de 2008. Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Pró-jovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá outras providências. Acesso em 30 nov. 2018.

Brasil, Ministério da Educação, Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro DE 2010 -Pronera- Disponível em (<http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-pdf/10199-8-decreto-7352-de4-de-novembro-de-2010/file>) Acesso em 17 de Nov. de 2018

Brasil, Ministério da Educação, Portaria do MEC nº 948/2015, Institui Grupo de Trabalho de Políticas de Fortalecimento da Educação do Campo. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/tagas/tag/36761> Acesso em 06 dez. 2018

Brasil, Ministério da Educação, portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013 Pronacampo- disponível em: <https://bit.ly/342tR31> Acesso em 06 dez. 2018

Brasil, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Secad. Edital de Convocação nº 09, de 29 de abril de 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/edital_procampo_20092.pdf. Acesso em 18 nov de 2018.



Brasil, Organização internacional do trabalho, OIT. Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. Disponível em: <https://bit.ly/318ppxJ>. Acesso em 03 Nov. 2018

Brasil, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural>. Acesso em 3 Nov. 2018

Brasil, Cria o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, acrescenta dispositivo à Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=145121 acesso em 4 Nov. 2018

Brasil. Educação do Campo: campo- políticas públicas – educação / Bernardo Mançano Fernandes ... [et al.]; organizadora, Clarice Aparecida dos Santos. Brasília: Inkra ; MDA, 2008. 109 p. .

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação, Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 21, n. 3, p. 379-408, set./dez. 2004

Camarano, A. A.; Abramovay, R. *Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: Panorama dos últimos 50 anos*. Rio de Janeiro: IPEA, 1999.

Carneiro, M. J. O ideal rurano: campo e cidade no imaginário de jovens rurais. In: Francisco Carlos Teixeira da Silva; Raimundo Santos; Luiz Flávio de Carvalho Costa.(Org.). *Mundo Rural e Política*. Rio de Janeiro: Campus, 1998, v., p. 95-118

Carvalho, José Murilo. *Cidadania no Brasil: o longo caminho* -11ªed- Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2008.

Castro, Elisa Guaraná de. *Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção social da categoria jovem rural*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.

Castro, E. G. de. *Entre ficar e sair: uma etnografia da construção social da categoria juventude rural*. Rio de Janeiro: Contra Capa/Faperj, 2013.

Favareto, A. *Paradigmas do desenvolvimento rural em questão*. FAPESP, 2007. Fundação Instituto Brasileiro de geografia e Estatística - IBGE.

Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

Giddens, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional (p. 73-133). IN: BECK, Ulrich; Giddens, Anthony; LASH, Scott. *Modernização reflexiva*. Unesp, 1995.

Grisa, Cátia; Schneider, Sérgio. *Políticas Públicas de desenvolvimento rural no Brasil*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.



Kageyama, Angela. Desenvolvimento rural: modelos e dinâmicas (p.51-83). *IN: Desenvolvimento rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro conceitos e aplicação ao caso brasileiro*. UFRGS, 2008

Martins, J. S. As coisas no lugar: Da ambiguidade à dualidade na reflexão sociológica sobre a relação cidade-campo. *IN: Introdução crítica à sociologia rural*. São Paulo: Hucitec, 1986.

Martins, J. S. O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a qualidade de vida rural. *Estudos avançados*, v. 15, n. 43, p. 31-36, 2001.

Molina, M. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Educação do Campo e Pesquisa: questões para reflexão. Brasília: MDA, 2006.

Raposo, Gustavo de Resende. *A educação na Constituição Federal de 1988*. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 641, 10 abr. 2005.

Sen. Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Sen. Amartya. *Desigualdade reexaminada*. Rio de Janeiro: Record, 2001.

Silva, Marcelo Kunrath; Marques, Moruzzi Paulo E. Democratização e políticas públicas de desenvolvimento rural. In: SCHNEIDER, Sérgio et al. Políticas públicas e participação social no Brasil rural. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

Souza, Celina. Estado da Arte da pesquisa em Políticas Públicas. In: Hochman, G.; ARRETCHE, M.; Marques, E. *Políticas Públicas no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

Valadares, Alexandre Arbex In *Dimensões da experiência juvenil brasileira e novos desafios às políticas públicas* / organizadoras: Enid Rocha Andrade da Silva,. – Brasília : Ipea, 2016. 329 p. : gráfs. Color



A educação no Maranhão: Indicações sobre a proposta político pedagógica do “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”

Zaira Sabry Azar¹
Cristiana Costa Lima²

Resumen

O artigo trata da educação como estratégica na construção de uma hegemonia político ideológica, destinada a desenvolver em cada sujeito a ideia de cultura geral, com sujeitos educados para a vida, tendo como referência o pensamento do italiano Antonio Gramsci, com destaque para as categorias educação, ideologia e cultura. Objetiva refletir criticamente sobre a proposta político pedagógica dos métodos de alfabetização “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”, adotados pela Jornada de Alfabetização do estado do Maranhão, coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Demarca o nexo entre cultura e hegemonia, que perpassa o processo político vinculado à luta pela hegemonia. O MST, como organização política que considera a educação e formação como dimensão política do sujeito histórico, articula, na experiência citada, o método cubano de alfabetização e os “círculos de cultura” defendidos pela experiência freyriana, para alfabetizar a população em regiões pobres do estado, o que implica grandes desafios pedagógicos e políticos. Metodologicamente, faz uma revisão bibliográfica e pesquisa junto aos sujeitos envolvidos sobre os resultados culturais do processo. Conclui destacando a importância da experiência, observando que as metodologias adotadas apresentam desdobramentos políticos importantes no processo de uma cultura geral, mas que o papel exercido pelo Estado não permite a ampliação e aprofundamento da dinâmica, posto que não lhe interessa a construção de uma nova hegemonia, o que implica desafios impostos pelas contradições próprias da sociedade moderna.

Palavras-chave

Educação, cultura, hegemonia, métodos de alfabetização, Maranhão.

Abstract

The article deals with education as strategic in the construction of an ideological political hegemony, designed to develop in each subject the idea of general culture, with subjects educated for life, having as reference the thought of the Italian Antonio Gramsci, with emphasis on the categories education, ideology and culture. It aims to critically reflect on the pedagogical political proposal of the “Sim, eu posso” and “Círculos de cultura”



literacy methods adopted by Jornada de Alfabetização do estado do Maranhão, coordinated by the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. It outlines the nexus between culture and hegemony, which runs through the political process linked to the struggle for hegemony. The MST, as a political organization that considers education and training as a political dimension of the historical subject, articulates, in the mentioned experience, the Cuban method of literacy and the “Círculos de Cultura” defended by the Freyrian experience, to literate the population in poor regions of the state, which entails major pedagogical and political challenges. Methodologically, it makes a literature review and research with the involved subjects about the cultural results of the process. He concludes by highlighting the importance of experience, noting that the methodologies adopted present important political developments in the process of a general culture, but that the role played by the State does not allow the expansion and deepening of the dynamics, since it does not interest the construction of a new hegemony. This implies challenges posed by the contradictions inherent in modern society.

Keyword

Culture, hegemony, literacy methods, Maranhão

Introdução

A educação expressa e media as relações contraditórias entre as classes sociais, cumprindo importante papel na dinâmica social, portanto nas transformações que resultam dos processos históricos, ou seja, nas formações econômica, social, política e cultural. Particularmente, na dimensão da formação da cultura, a educação pode assumir a perspectiva amoldadora ou libertária, no sentido que trabalha para “moldar indivíduos” à ordem social vigente ou forma sujeitos que, a partir de um conhecimento crítico busque proposições para a superação de suas realidades.

O Maranhão, estado do Nordeste brasileiro, segue a configuração geral da região, sendo particularmente caracterizado pela histórica e típica desigualdade do desenvolvimento dependente da economia periférica. De forma singular, politicamente vivenciou oligarquias que lhes marcaram profundamente a cultura, negligenciando os avanços sociais e democráticos que resultaram das lutas sociais. As negligências dos governos oligárquicos fazem o estado compor, de forma reiterada e sistemática, o *ranking* dos piores indicadores do país.



De forma especial, no que se refere à educação, os dados são alarmantes, principalmente, para as populações camponesas, como as quilombolas, indígenas, extrativistas, ribeirinhas e sem terra. A ausência de políticas públicas para estas populações as colocam em patamares próprios da falta de direitos, ferindo o preconiza as legislações brasileiras. Tal situação resulta no empobrecimento geral do estado nas várias dimensões da vida, apesar dos muitos recursos naturais existentes.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) luta pela terra, pela reforma agrária e pela superação da ordem social vigente, lhe sendo clara o papel da educação. Neste sentido, constrói, junto a outras organizações e movimentos do campo, a luta pela Educação do Campo, que combina, como diz Caldart (2012), “luta pela educação com luta pela terra, pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território” (p. 261). Como conquista desta luta resultou Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), política pública que garante a educação para as populações camponesas.

O MST, no processo de organização de luta pela terra tem desenvolvido práticas pedagógicas que se articulam com a concepção de educação popular defendida pelo educador brasileiro Paulo Freire, sendo, conforme Paludo (2012), este Movimento, “o que mais tem contribuído na discussão e efetivação de experiências de processos não formais, a chamada formação política, e de uma nova educação e uma nova escola, que resgatem os lineamentos centrais da educação popular” (p. 283), que se apresenta como “teoria e prática educativas alternativas às pedagogias e às práticas tradicionais e liberais, que estavam a serviço da manutenção das estruturas de poder político, de exploração da força de trabalho e de domínio cultural” (p. 281)

No Maranhão, este Movimento coordena a experiência de alfabetização de jovens e adultos implementada pelo atual governo estadual, na perspectiva de superação do analfabetismo no estado. Para tanto, articula as metodologias pedagógicas “Sim, eu posso!” e “Círculos de Cultura”. Considerando esta iniciativa, este artigo contextualiza a experiência, tendo como referencial a concepção gramsciana de educação e seu papel na construção da cultura, ou da superação da relação subalternizada entre as classes. O texto apresenta-se estruturado em dois itens, além desta introdução e das considerações. Inicialmente, trata da educação elemento central para a construção da cultura, e neste sentido, estratégica para a construção da hegemonia a classe trabalhadora. No segundo item, configura a Jornada de alfabetização no Estado



Maranhão e coordenada pelo MST, refletindo criticamente sobre os métodos adotados. Por fim, conclui por sua importância e necessidade da iniciativa, apesar das complexidades e contradições que mediam o processo.

A educação como projeto de sociedade na construção da hegemonia da classe trabalhadora

A educação não tem um “modelo ideal” que deve ser seguido. Ela deve ser entendida como expressão das contradições e disputas de projetos na sociedade. Sob a lógica do sistema do capital, a educação tem servido para (i) fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva e (ii) gerar e transmitir um conjunto de valores que legitima os interesses dominantes, como se não houvesse nenhuma alternativa a essa lógica.

Nesse contexto, é importante destacar que as determinações gerais do capital afetam cada âmbito particular com alguma influência na educação, e não apenas a educação formal. Elas estão totalmente integradas na totalidade dos processos sociais (Mészáros, 2008). Sob o domínio do capital, é necessário assegurar que os indivíduos internalizem a dinâmica da reprodução capitalista por meio da organização de uma cultura adequada do processo ideológico formador do modo de vida do capital, tendo em vista a consolidação de sua hegemonia.

O conceito de hegemonia de Gramsci nos ajuda a entender como a classe dominante integra à sua concepção de mundo as “massas”, garantindo uma aceitação pelas classes subalternas do modo de pensar que conformam a determinada visão de mundo.

Os aparelhos privados de hegemonia, tal como nos aponta Gramsci (2000), constituem-se como instâncias garantidoras da manutenção de uma hegemonia, na medida em que lhes cabem criar as condições necessárias de materialização de conteúdos e práticas integrantes do projeto político-ideológico de expansão da classe hegemônica. A função deles é obter o consenso das classes dominadas, garantindo a adesão e o consentimento ao projeto dominante. Para tanto, cria mecanismos e instituições próprias. Dentre elas, são as mais importantes

a escola, como função educativa positiva, e os tribunais, como função educativa repressiva e negativa, (...) na realidade, tendem para este fim uma multiplicidade de



outras iniciativas e de outras atividades ditas privadas que formam o aparelho da hegemonia política e cultural das classes dominantes. (Gramsci, 2000, p. 284).

Para Gramsci, a construção da hegemonia de um grupo não se restringe às relações no terreno da economia, mas remete à formação de uma cultura que torna hegemônica e universal a visão de mundo de uma classe. E mais: tal hegemonia é compreendida como “[...] direção intelectual e moral e domínio político exercidos por uma classe, em determinadas condições históricas” (Abreu, 2002, p. 24). Para que haja a adesão das classes a um projeto econômico, social, político e cultural que consolide a hegemonia de uma classe, é necessário socializar valores, visões de mundo e da sociedade.

Assim, ensina Mészáros (2008), uma das principais funções da educação formal na sociedade capitalista é produzir conformidade ou consenso. O projeto burguês de educação, desde o final do século XVIII, já era fortemente marcado pela concepção de educação para as massas como fator de racionalização à vida econômica, à produção e ao tempo dessa produção. A educação do trabalhador é subsumida à necessidade do capital de reproduzir a força de trabalho como mercadoria.

Entendemos que a educação é determinada pelo modo de produção da vida material. Ou seja, as relações de produção e as forças produtivas são fundamentais para apreender o modo como os homens vivem, pensam e transmitem as ideias e os conhecimentos que têm sobre a vida e sobre a realidade natural e social. Para Gramsci (1991), todos os homens são filósofos, pois todos possuem uma dada concepção de mundo. A questão está, conscientemente ou não, em qual concepção de mundo da qual fazemos parte.

[...] É preferível ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, ‘participar’ de uma concepção de mundo ‘imposta’ mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente [...] ou é preferível elaborar a própria concepção de mundo de uma maneira crítica e consciente e, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade na produção da história do mundo, ser guia de si mesmo e não aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade? (Gramsci, 1991. p. 12).

Para, então, explicitar a complexidade do processo de criação de uma nova cultura e para explicitar o momento da crítica e da consciência é que Gramsci (1999) aponta que



Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas ‘originais’, significa também, e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las”, por assim dizer; e, portanto, transformá-las em bases de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato ‘filosófico’ bem mais importante e ‘original’ do que a descoberta, por parte de um “gênio” filosófico, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos de intelectuais. (p. 13)

Assim, em relação à perspectiva da construção da hegemonia pelas classes subalternas, Gramsci dá destaque à construção de uma organização de uma nova cultura como um movimento necessário na constituição de uma nova hegemonia.

A construção da hegemonia insere-se em um quadro de reforma intelectual e moral, entendida como modo de ser, pensar e agir dos sujeitos, como um amplo movimento de crítica e destruição da cultura dominante e construção de uma nova cultura, na construção de uma vontade coletiva. Nesse sentido, Abreu (2019, p. 07) reflete

A vontade coletiva é, assim, a expressão de um processo de reforma intelectual e moral desenvolvido pelas classes subalternas, como a “consciência operosa da necessidade histórica como protagonista de um drama real e efetivo.” (Gramsci, 2000a, p. 17). Constitui, portanto, uma categoria complexa onde se evidenciam os nexos contraditórios entre a base econômica e a superestrutura na constituição de um novo bloco histórico, de uma nova hegemonia – que se apresenta como “possibilidade inscrita na totalidade social” (DIAS, 1996, p. 14). Gramsci refere-se a esse movimento como “catarse”, para indicar “a passagem do momento meramente econômico (egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto significa também, a passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade à liberdade’. (Gramsci, 1999, p. 314).

Assim, coloca-se como necessidade histórica da classe trabalhadora a construção de um movimento cultural na perspectiva da organização das classes subalternas como classe hegemônica. O que implica, em um primeiro momento, rompimento com a ideologia dominante que se tornou senso comum. Para tanto, a educação libertadora torna-se um importante instrumento nesse processo.

O princípio educativo que nos vem de Marx, reforçado por Gramsci, aponta para uma unidade entre ensino e trabalho, cujo objetivo é preparar os trabalhadores para assumir



o controle da sociedade, superando a dicotomia entre o pensar e o agir. Ou seja, entre a teoria e a prática.

Para um dos maiores educadores do Brasil, Paulo Freire, a escola tem o objetivo de ensinar o aluno a ler o mundo e a realidade que o rodeia para, assim, poder transformá-lo. Para o autor, a educação como prática especificamente humana, é uma forma de intervenção no mundo, e afirma

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História. (Freire, 1998, p. 60)

Assim, essa proposta de educação popular formulada por Paulo Freire tem como princípio educativo de que toda a aprendizagem e todo o ensino devem partir da realidade tendo como principais objetivos transformar a realidade das classes subalternas. Mas, segundo Freire (1981), esse processo só será possível quando o povo se reconhecer como sujeito de sua própria história. Isto é, entender a educação como um ato de conhecimento e de transformação política ou, como nos ensina Gramsci (1999) trata-se da “passagem do saber ao compreender, ao sentir, e, vice-versa, do sentir ao compreender, ao saber” (p. 221).

É com base nessa concepção que o Movimento dos Trabalhadores (as) Rurais Sem Terra (MST) vem desenvolvendo práticas educativas com uma concepção de educação popular fundamentada em Paulo Freire, a partir de uma educação voltada para a realidade do povo, suas experiências de vida, com vista a construir uma educação como prática libertadora. Essa concepção está assinalada em um dos documentos do Movimento intitulado “Como fazer a escola que queremos”, onde se destaca:

Realidade é o meio em vivemos. É tudo aquilo que fazemos, pensamos, dizemos e sentimos na nossa vida prática. É o nosso trabalho. É a nossa organização. É a natureza que nos cerca. São as pessoas e o que acontecem com elas. São os nossos problemas do dia a dia, também os problemas da sociedade que se relaciona com nossa vida pessoal e coletiva (MST, s/d, p. 02).



Dessa forma, parte-se de uma proposta educacional problematizadora da realidade que aponte para o desvelamento e a transformação da realidade, em um movimento de unidade entre teoria e prática. Fica evidente, assim, que o MST busca construir uma proposta de educação comprometida com a consciência histórica dos sujeitos a partir dos desvelamentos da luta de classes no campo, na qual deve ser enfrentada com organização e luta.

Como materialidade deste compromisso, o Movimento coordena a Jornada de Alfabetização do Estado do Maranhão, sobre o que será tratado a seguir.

Brigada Salete Moreno: Uma experiência político pedagógica de alfabetização

É público o compromisso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com a educação. Com iniciativas nos vários níveis de educação e ensino, em parcerias com inúmeras instituições de ensino, tem contribuído com o processo de educação e formação das famílias sem terra no país, com formação desde a alfabetização até cursos de pós-graduação em várias áreas do conhecimento. No Maranhão, teve suas iniciativas na educação formal, ainda na década de 1990, com a Educação de Jovens e Adultos, através de uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

Com base teórica referenciada em uma educação libertadora e tendo reconhecida sua proposta político pedagógica, em 2007 coordenou a Campanha de Alfabetização nas Áreas de Assentamentos e Acampamentos de Reforma Agrária no Estado do Maranhão, uma iniciativa do então governador Jackson Lago (2007 - 2009), com a ideia de um projeto piloto de erradicação do analfabetismo em áreas de reforma agrária. Atualmente, com o governo Flávio Dino (2014 -), coordena a Jornada de Alfabetização do Maranhão, ação que compõe o Plano Mais IDH, carro chefe da política de elevação de indicadores sociais e econômicos do atual governo e no caso específico para contribuir com a redução dos altos índices de analfabetismo no estado.

O Plano Mais IDH compreende um conjunto de ações destinadas a elevar os indicadores dos 30 municípios com piores indicadores do estado, sendo que concentram 6,2% da população estadual, mas possuem 10,4% da população extremamente pobre (IMESC, 2016, p. 65). Além disso, no que se refere ao analfabetismo é observado que “todos os 30 municípios apresentaram taxas superiores a do Estado (20,5%) em 2010.



Ressalta-se que o município que apresentou a menor taxa foi Cajari (21,8%), e a maior taxa observada foi no município de Marajá do Sena (40%)” (IMESC, 2016, p. 48)

Em comum às duas iniciativas a contribuição dos métodos *Sim, eu Posso!* e *Círculos de Cultura*. O primeiro, método cubano de alfabetização; o segundo orientado pelo pedagogo Paulo Freire. O distinto, na primeira, tratava de ação dirigida à superação do analfabetismo em áreas de reforma agrária e, devido às circunstâncias de impedimento político jurídico do governador, a experiência foi interrompida; na atual, são ações mais amplas, que alcançam municípios inteiros. Na primeira fase a Jornada, conforme Silva e outros (2017, p. 11), o trabalho realizado envolveu 9.492 alfabetizandos, 628 alfabetizadores; 71 coordenadores de turmas e 20 brigadistas de 10 estados brasileiros, alfabetizando mais de 7 mil pessoas em 8 municípios, sendo a meta para a segunda fase, 1.332 turmas de alfabetização, 20.075 educandos, 190 coordenadores de turmas e 37 brigadistas, para alfabetizar vinte mil pessoas em 15 municípios, com o desafio de, em oito municípios, superar o analfabetismo, fato jamais registrado no estado. Os sujeitos organizados na Ação compõem a coordenação pedagógica, coordenação de turmas, alfabetizadores e alfabetizados.

A Brigada Salete Moreno é composta por militantes do Movimento Sem Terra e homenageia a assentada da reforma agrária, pedagoga da terra, dirigente estadual do MST, que atuava, principalmente, na área da educação. Morreu em acidente em 2009.

Aqui, destacamos a proposta político pedagógica da Jornada de Alfabetização, que, como foi dito, é responsabilidade do MST e como para este Movimento educação é mais que saber ler as letras, a alfabetização é mais que o aletramento ou a decodificação da leitura e da escrita. E, como “Há uma vinculação direta da condição da pobreza, do latifúndio e da desigualdade social com a existência de pessoas que não sabem ler e nem escrever” (Araújo, 2012, p. 251), lembramos que no campo se concentra o analfabetismo, assim

Ao ousar a alfabetizar os adultos e elevar a sua escolaridade tendo como horizonte não apenas a qualificação para a força de trabalho, os movimentos de lutas sociais no campo demonstram que a emancipação não se dará apenas por meio da conquista econômica, mas, ao lado das conquistas econômicas, é necessário também a elevação cultural e qualificação de consciência, demonstrando assim, a função da educação e da escola e movimento. (Araújo, 2012, p. 256).



Compreendendo, ainda, que o analfabetismo “não é uma condição individual, mas produto de uma sociedade extremamente desigual, mantida por um sistema de dominação social do qual a ignorância é um dos pilares.” (Silva *et al*, 2017, p. 08), o MST assumiu a tarefa de organizar este processo, com a formação da Brigada Salete Moreno, composta de militantes de vários estados brasileiros, que encontram-se distribuídos nos municípios foco da Jornada. Ressalta-se que este grupo de militantes deixam suas tarefas políticas, sociais e familiares em suas regiões, para cumprirem uma deliberação política do MST de alfabetizar, por acreditar que “a emancipação de um povo passa, necessariamente, pelo acesso ao conhecimento produzido historicamente pela humanidade” (Silva *et al*, 2017, p. 08).

O projeto político pedagógico proposto quebra paradigmas de culpabilização do sujeito não alfabetizado e de jargões de que não há mais tempo para tal, como “papagaio velho não aprende a falar”, enfatizando que “sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar”, conforme a música “Sempre é tempo de aprender”, de Zé Pinto. Para tanto, como já dito, utiliza o método *Sim, eu Posso!* e os *Círculos de Cultura*.

A alfabetização tem início com a utilização do método *Sim, eu posso!*, método criado na década de 1990, orientado pela campanha de alfabetização no processo revolucionário cubano, que erradicou o analfabetismo no país. Cuba, com sua cultura de solidariedade internacionalista, através do método *Sim, eu posso!*, contribuiu com a alfabetização em mais de trinta países, ajudando a Venezuela ser declarada território livre do analfabetismo em 2005. O método foi adotado por países de diversidade cultural, econômica e política em várias regiões do mundo, como África do Sul, Argentina, Bahamas, Bolívia, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Equador, Espanha, Granada, Guatemala, Guiné Bissau, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Moçambique, Nicarágua, Nigéria, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, República Dominicana e Timor Leste.

No Brasil, o MST já desenvolveu alfabetização com o método cubano em assentamentos da Bahia, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e no próprio Maranhão. Neste, a Ação estadual, alcança 15 municípios de baixo IDH, envolve comunidades e populações historicamente excluídas dos serviços públicos, como quilombolas, indígenas, extrativistas e ribeirinhos. Destaca-se que são mais de mil e oitocentos indígenas em processo de alfabetização.



O método se efetiva no sentido de alfabetizar a população em sessenta e seis aulas, com atividades diárias de duas horas, quatro vezes por semana. Importante que a intenção no processo é “socializar o processo de alfabetização, de modo que cada um se sinta parte dele, contextualizando suas tradições culturais, sua identidade, aproveitando os conhecimentos construídos pelos educandos ao longo de suas vidas” (Silva, 2017, p. 10).

Após esta fase, segue-se com o os *Círculos de Cultura*, com duração de quatro meses, cujo objetivo é “além da continuidade do processo de alfabetização, iniciar o processo de leitura e escrita convencional, a partir da leitura do mundo e da cultura local”, contribuindo “coletivamente com a valorização da cultura dos sujeitos envolvidos, bem como estimular os educandos e educadores a continuarem seus estudos e sua escolarização” (Silva, 2017, p. 15).

Os *Círculos de Cultura*, como prática educativa, têm início nas experiências de alfabetização de jovens e adultos no contexto político da década de 1960, tendo papel de destaque Paulo Freire, para quem pensar criticamente a constituição social e o próprio ser humano é condição para a transformação da sociedade. Ou seja, para Freire, conforme (Silva, 2018), a prática educativa está intrinsecamente articulada com a cultura, “já que a educação não é mera transmissão de conhecimentos, de decodificação de letras e sim um aprender a ler o mundo, leitura que se faz coletivamente, de forma dialógica, onde se aprende e se ensina a um só tempo.” (p. 4). Assim, os *Círculos de Cultura* são formados com o sentido da igualdade e da partilha, sem posição de privilégio, com todos se olhando e podendo aprender e ensinar com a socialização de suas experiências.

A dinâmica dos *Círculos* é permeada de música e poesias, provocando para além da reflexão crítica dos processos, o resgate de manifestações culturais de cada grupo e comunidade envolvida na ação pedagógica. E, a participação de todos os sujeitos no processo de alfabetização reforma a ideia freiriana de que “as classes populares têm dois direitos básicos: o direito de conhecer melhor o que já sabem, em razão da própria prática e o direito de participar, de algum modo, do processo de produção do conhecimento novo” (Freire apud Camargo, 2016, p.22).

Para garantir o método, são feitos levantamentos a partir das realidades que mais se aproximam, a fim de serem definidos eixos temáticos a serem problematizados a partir do tema ou de uma palavra, com material de apoio referente, como música, vídeo,



poesia. Como indicação de uma educação libertadora, destaca-se os depoimentos de educadoras (os) e educandas (os), por ocasião do Seminário de Encerramento Estadual da Jornada de Alfabetização do Maranhão, onde avôs e pais, alfabetizados por suas filhas (os) e netas (os), em depoimentos evidenciam a satisfação em romper com o estigma e o preconceito do não saber ler; além da exigência feita ao Estado de continuidade da Ação, mas para além da alfabetização, pensada aí, o avanço dos estudos.

Também se pode perceber a importância deste processo em depoimentos feitos ao Jornal Brasil de Fato³ por várias trabalhadoras e trabalhadores destes municípios, como “a coisa que mais achei bom na vida foi ir pra escola”, “quem não sabe [ler] vive no mundo só pra dizer que está vivendo, mas não sabe de nada. É como se estivesse no escuro, entendeu? A gente vê as coisas, mas não sabe o que é”, “a melhor parte do meu dia é esta, a hora em que eu venho pra aula”.

Os resultados apontam, ainda, a perspectiva da cidadania, o que é evidenciado em situações como a exigência de pessoas alfabetizadas exigindo substituição de carteira de identidade e fazendo questão de assinar esta documentação, que antes lhes identificavam como pessoa “analfabeta”. Apesar de parecer algo simples, tal fato altera em muita a concepção da pessoa alfabetizada acerca do mundo e de suas relações na sociedade.

Considerações

A formação da cultura é mediada, dentre outras coisas, pela educação. Os valores disseminados pela ordem social hegemônica têm sido propagados ideologicamente por processos formativos e educativos organizados pelas classes burguesas. Estrategicamente, as classes subalternizadas têm organizado espaços e metodologias que se contrapõem à educação acrítica imposta pelos padrões tradicionais instituídos.

O MST, ao assumir, através da coordenação da Jornada, a responsabilidade de contribuir com o processo de alfabetização de jovens e adultos no Maranhão, cumpre a tarefa de construir uma educação com princípios e metodológicos com intencionalidade política, adotando a educação popular como estratégia de superar o doutrinamento ou o dogmatismo, como um caminho político para que a classe oprimida possa libertar-se e assim, construir uma sociedade livre, pois com sua liberdade, liberta o opressor, como preconizava Freire.



Com este compromisso para além das áreas de reforma agrária, o MST se pauta na necessidade de ir para além da luta corporativa das famílias camponesas, entendendo seu papel histórico de organizar as populações trabalhadoras a quem foram negados direitos humanos, sociais, políticos e culturais, sendo, para isto, a educação estratégia imprescindível.

A Jornada apresenta conquistas importantes para o processo de alfabetização em um estado caracterizadamente pobre. No entanto, considera-se a experiência mediada por contradições próprias do papel do Estado Moderno, enquanto sujeito garantidor da reprodução do capital. Acrescente-se a isto, limitações técnico-operativas da administração estatal, assim também, o descompromisso político de operadores da dinâmica com o projeto societário emancipador. Conclui-se afirmando a necessidade de processos político pedagógicos que desencadeiem a formação de sujeitos críticos como a iniciativa em pauta, ainda que com limites e dificuldades, para que a nova sociedade possa se formar.

Notas

¹ Doutora em Políticas Públicas. Professora do Departamento de Serviço Social - Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Pesquisadora do Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço Social e Movimento Social (GSERMS)

² Doutora em Políticas Públicas. Professora do Departamento de Serviço Social - Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Pesquisadora do Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço Social e Movimento Social (GSERMS)

³ Os depoimentos encontram-se na matéria “‘Eu vivia na escuridão’, diz agricultora que aprendeu a ler com método cubano”, editada pelo Jornal Brasil de Fato e reproduzido na página eletrônica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 09 de fevereiro de 2018. Disponível em <<http://www.mst.org.br/2018/02/09/eu-vivia-na-escuridao-diz-agricultora-que-aprendeu-a-ler-com-metodo-cubano.html>>.

Referências

Abreu, M. M. (2019). A cultura no pensamento de Gramsci: elemento constituinte do movimento histórico real de organização política das classes sociais, como forças hegemônicas. Artigo apresentado no VIII Seminário Internacional de Teoria Política do Socialismo e II Colóquio Internacional Gramsci: as categorias teóricas de Antônio Gramsci e a verdade efetiva das coisas. 2019.



- Abreu, M.M (2002). Serviço Social e organização da cultura: perfis pedagógicos da prática profissional, São Paulo, Brasil: Cortez
- Araújo, M. N. R. (2012). Educação de Jovens e Adultos (EJA). In CALDART, R. S. e outros (org). Dicionário a Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular.
- Caldart, R. S. Educação do Campo. In. CALDART, Roseli e outros (orgs). (2012) Dicionário da Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular
- Camargo, M.S. de. (2016). Primeiras palavras: Paulo Freire passou aqui. In: SPIGOLON, N. I, e CAMPOS, C. B. G. Círculos de Cultura: teorias, práticas e práxis, Curitiba, Brasil: CRV.
- Freire, P. (1998). Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa, Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.
- Freire, P. (1981). Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.
- Gramsci, A. (1999). Cadernos do Cárcere. Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Gramsci, A. (2000). Cadernos do cárcere: temas de Cultura, ação católica, americanismo e fordismo, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Gramsci, A. (1991). Concepção Dialética da História, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Mészáros, I. (2008). A Educação para além do capital, São Paulo, Brasil: Boitempo.
- MST. (1992). Cadernos de Educação n. 01. Como Fazer a Escola que Queremos. Mimeo.
- Paludo, C. (2012). Educação Popular. In. CALDART, Roseli e outros (orgs). (2012) Dicionário da Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular
- Silva, E. P. S. e outros (2017). Jornada de Alfabetização do Maranhão: Sim, eu Posso! – Círculo de Cultura. Caderno de orientações pedagógicas e metodológicas da/o educadora/o.
- Silva, G. F. e outros. (2018). Caderno das Educadoras e Educadores. Jornada de Alfabetização do Maranhão: Sim, eu posso! – Círculos de Cultura. São Luis, Brasil.



Autonomía femenina y turismo rural en Tzibanzá, Cadereyta de Montes, Querétaro

Ilithya Guevara Hernández¹

Resumen

Uno de los elementos que se ven trastocados por el desarrollo son los roles de género. Dichos cambios no siempre negativos, el objetivo es identificar si la participación de las mujeres en la cooperativa pesquera y el proyecto turístico de La Isla, posibilitan la construcción de autonomía. Tzibanzá desde los 90s ha sido blanco de una serie de proyectos de desarrollo que los han incluido o excluido en la toma de decisiones, pero que en todos los casos han dejado una huella en la forma de organización, actividades productivas y vida cotidiana. Se presentan resultados de una investigación aún en curso, que parte de la aproximación cualitativa combinando técnicas de recopilación de información cuantitativas: cuestionario a cooperativistas y no cooperativistas; y cualitativas: observación no participante, entrevistas a profundidad, grupos focales. La cooperativa de producción y proyecto turístico han operado por poco más de 20 años con un relativo éxito en cuanto a los ingresos, generación de empleo y participación. Las mujeres han sido incorporadas no necesariamente por decisión propia, sino ante la ausencia del marido como resultado de la migración o porque el cargo les fue heredado, no obstante, el participar en actividades consideradas “masculinas” las lleva a reconsiderar su papel en lo comunitario y familiar, posibilitando toma de decisiones a las que anteriormente no tenían acceso. Es cierto que la autonomía, necesita reconocimiento social para poder ejercerse, no obstante, consideramos que el incorporarse de manera activa y como protagonistas en actividades productivas permite avanzar hacia ella.

Palabras clave

Autonomía, turismo rural, género, mujeres, desarrollo

Introducción

Los procesos de desarrollo que han marcado el devenir del medio rural en México con mayor fuerza desde la década de los 90s en el siglo pasado, han incluido a las mujeres para cubrir una cuota de género, como medio para la promoción de igualdad, o con la idea de empoderamiento. No en todos los casos se les ha considerado protagonistas de los procesos, y muchas de las propuestas refuerzan roles tradicionales de género que



las ubican como reproductoras, cuidadoras y en el espacio privado. Sin embargo, en el caso de Tzibanzá las mujeres han sido participes de los cambios, logrado reposicionarse en el espacio público a partir de su inclusión en las actividades de la cooperativa de pesca deportiva y comercial, así como los proyectos turísticos. Particularmente con respecto a la pesca comercial y la toma de decisiones que habían sido consideradas como actividades masculinas ligadas a su papel de proveedores. Las páginas que siguen se desprenden de una investigación² que aún no concluye y que tenía como objetivo el identificar si la participación de las mujeres en programas y proyectos de desarrollo podía ser considerada un detonador de autonomía femenina; los cambios percibidos y si estos se encuentran tanto en el espacio privado como en el público.

Esta divido en cinco apartados, el primero de ellos es esta introducción en donde se esbozan los objetivos y los principales resultados. En el segundo se expone el contexto geoespacial y sociodemográfico de la comunidad seguido por la propuesta teórico conceptual que permitió el desarrollo de la investigación; y que van desde el desarrollo rural, turismo rural, género, roles y estereotipos de género, participación y autonomía femenina. El tercero se plantea la perspectiva epistemológica y metodológica del trabajo, que desde la perspectiva cualitativa buscaba rescatar la percepción de las mujeres con respecto a los cambios que traen consigo su participación en programas y proyectos de desarrollo. Se incluyen las herramientas de recopilación de información y los ejes que cada una de ellas contienen. En el cuarto se esbozan los principales resultados encontrados y la posibilidad que tienen las mujeres de construir autonomía desde la participación equitativa en la cooperativa de pesca deportiva y comercial, la toma de decisiones y como esto impacta en su vida cotidiana y en la forma que se perciben así mismas y frente a los y las otras. Finalmente, a manera de conclusión se plantea que cuando los programas y proyectos de desarrollo son reapropiados por los “beneficiarios” y se consideran protagonistas de a propuesta el impacto no sólo es económico, sino que se refleja en un cambio en las relaciones de género que posibilita a las mujeres ganar espacios en la vida pública y construir autonomía, a pesar de que no ha sido un proceso fácil.

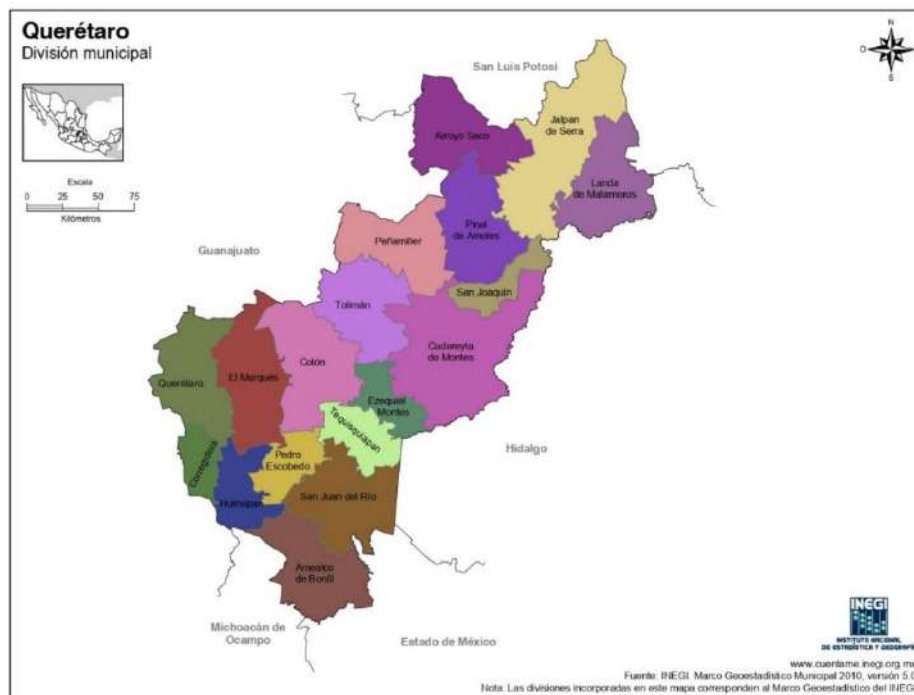
Tzibanzá: del contexto a la construcción de autonomía femenina

Para comprender el impacto que los programas y proyectos de desarrollo han tenido en la vida de los habitantes de Tzibanzá, particularmente en la de las mujeres, es importante ubicarnos contextual y conceptualmente.



Contexto geoespacial y sociodemográfico

Tzibanzá, pertenece a una de las 9 delegaciones que componen el municipio de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro (mapa 1). Este espacio pertenece al denominado semidesierto queretano, zona que ha estado marcada por las condiciones de pobreza y marginación, que dificulta la reproducción de los grupos. No obstante, los esfuerzos por parte de los gobiernos federales y estatales. El municipio cuenta con un total de 243 localidades, de las cuales 241 se consideran rurales y las otras dos urbanas. Según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 tiene una población total de 69,549 habitantes (Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, 2018). En Tzibanzá hay 372 habitantes, de los cuales 178 hombres y 174 mujeres (INEGI, 2019). Distribuidos en 128 familias³. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010), el 72.9% de la población del municipio vive en pobreza⁴. Tzibanzá es una de las 95 localidades con alto nivel de marginación a nivel municipal, a pesar de que este tiene una marginación media para el 2010⁵ (SEDESOL, 2018). Lo que nos explica, entre otras cosas, por qué la llegada de programas y proyectos de desarrollo.



Mapa 1

Del desarrollo rural a la autonomía femenina

Esta investigación surge de una propuesta anterior, en donde profesores de la UAQ fuimos invitados a realizar un diagnóstico previo a la construcción del nuevo hotel-spa-



restaurante El Anzuelo, que tuvo una inversión de 64.3 millones de pesos y que fue inaugurado en diciembre de 2018, la intervención tuvo el objetivo de identificar los problemas que han enfrentado en la organización de las diferentes propuestas y las posibles soluciones. De ahí que partimos de la propuesta crítica del desarrollo, considerando que no puede ser sólo entendido como crecimiento económico, sino que los “beneficiarios” deben ser protagonistas o bien reapropiarse de las propuestas para que logren sus objetivos. Se toma como referencia el desarrollo rural territorial, entendido como aquel que considera el territorio como una construcción social, más allá del espacio, como un lugar que crea identidad y cultura, en el cual los procesos deben ser entendidos desde la interacción de quienes posibilitan el desarrollo de la vida cotidiana. Considerando tanto a los actores de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, productores, capitales privados, líderes sociales hasta llegar a los habitantes que dependen de y explotan los recursos naturales y sociales con los que cuentan para sobrevivir con los suyos (Demattis y Governa, 2005; Flores, 2007; Giménez, 1996; González Casanova, 2004; Rodríguez, 2015; Sosa, 2012).

Una de las propuestas de desarrollo es el turismo rural, el primero se ha definido como un elemento dinamizador de las economías locales que incide en el diseño, planeación de políticas económicas, sociales y culturales, por lo tanto, el turismo es un factor para detonar desarrollo (este entendido como crecimiento económico) así, el turismo se considera una expresión más del sistema capitalista contemporáneo, dicha relación turismo-desarrollo supone diversos conflictos que van desde el acceso, uso de los recursos y la distribución de los beneficios (López y Palomino, 2015). Por otro lado, el turismo rural, es un término; que fue acuñado a mediados de los 90s, en oposición al turismo convencional o tradicional de playa y surge ante las nuevas demandas de consumo y necesidades de esparcimiento de turistas de clases media y alta de zonas urbanas altamente industrializadas. En México se ha definido como: “los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales productivas cotidianas de la misma” (Guevara, 2019, p.9). En este se consideran el agroturismo y todas aquellas actividades deportivas, culturales, gastronómicas, etc., que se desarrollen en el medio rural y que dependen de las características naturales, geográficas y etnológicas de cada región (Serrano y Molina, 2002). En el caso de Tzibanzá, dicha actividad da inició junto con la inauguración de la presa Zimapán⁶, y buscaba promover el paisaje natural y las actividades pesqueras – como deporte-, generando nuevas oportunidades de empleo e ingreso para la comunidad en general y para los cooperativistas en particular.



Ahora bien, las mujeres han sido incluidas en los procesos de desarrollo a partir de que se incluye el término género en la política social internacional. Se entiende el concepto como la construcción cultural de la diferencia sexual, es decir, el ser mujer o hombre, y no es un rasgo que se derive directamente de la pertenencia a un sexo u a otro. Es una categoría para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en un grupo determinado, que otorga características, comportamientos y creencias sobre lo que implica la feminidad y la masculinidad y por lo tanto el deber ser de mujeres y hombres, se encuentra situado en un tiempo y espacio determinado y varía entre las diferentes culturas (García, 2007; Lamas, 2002; Lagarde, 2000).

Las relaciones de género permiten la creación de roles. Los roles son una forma de vivir lo social como natural, su función responde a la interacción y reflejan formas de ser, actuar y sentir que un grupo social determinado confiere a sus miembros y cómo éstos se asumen y se expresan en la cotidianidad. También se reflejan en expectativas y exigencias colectivas y subjetivas que se asignan en función a diferentes criterios como la edad, el género, clase social, etc. Los roles de género son las normas y prescripciones, a partir de las cuales se asignan tareas y responsabilidades, están situados en un contexto histórico y sociocultural sobre el comportamiento femenino y masculino. Son aceptados socialmente y generan prohibiciones y expectativas entre los individuos que componen el grupo. Pueden variar de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas. Se delimitan de acuerdo con el conjunto de responsabilidades y obligaciones de mujeres y hombres, limitando el desempeño de ambos, estos pueden ser del tipo productivo (actividades desarrolladas en el ámbito público generando ingresos, reconocimiento, poder, autoridad y estatus), reproductivo (actividades relacionadas al cuidado de la vida) y comunitario (participación en la comunidad para asegurar la reproducción familiar) (García, 2007; Lamas, 2002; Murguialday, 2000; Sáenz, 2011).

Es por ello, que se considera la participación en los programas y proyectos de desarrollo, particularmente la pesca comercial y deportiva y la toma de decisiones como un elemento que modifica los roles de género y que al mismo tiempo posibilita la construcción de autonomía femenina. Para Lagarde (2013) la autonomía se encuentra enmarcada en las relaciones de poder que se construyen a partir de los roles de género, no existe plenamente encuentra en constante construcción. Se refiere a la capacidad de las mujeres para realizar una determinada actividad, sin requerir el consentimiento de su esposo, o algún otro integrante de la familia, que significa contar con la capacidad y



con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas (Casique, 2004). Se pueden identificar los siguientes tipos de autonomías: a) la autonomía económica, vinculada con la posibilidad de controlar los activos y los recursos; b) autonomía física, referida a la capacidad para decidir libremente sobre sexualidad, reproducción y derecho a vivir una vida libre de violencia y; c) autonomía en la toma de decisiones, que implica la plena participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus familias sus comunidades y la sociedad en general (CEPAL, 2016).

Es un pacto social que necesita reconocimiento y apoyo social. Se construye tanto en los procesos sociales vitales como en los económicos, en los políticos y es, también, un proceso con un fundamento sexual y psicológico. Para lograrla es necesario analizar todo el conjunto de aspectos normativos de la vida: tanto normas y procesos jurídicos como no jurídicos (consuetudinarios) que regulan la vida y que determinan los roles de género (Guevara, 2019).

Se ha dicho que la autonomía, en el caso de Tzibanzá se construye a partir de la participación entendida como comunitaria implica hacer, poseer, transformar y ser en movimiento, va de lo colectivo a lo individual y viceversa. Es un proceso voluntario asumido conscientemente, que se da a partir de una construcción social múltiple, está sujeta a valores y circunstancias contextuales que surgen en un determinado momento en el lugar en que se lleva a cabo. Adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y espacio, tiene como herramienta fundamental la organización del colectivo, debe ser libre, e incluyente, (Contreras, 2000, Montero, 2004). Posibilita el logro de objetivos compartidos que tienen su origen en la pertenencia al grupo, pues surge de la capacidad de poseer atributos o cualidades comunes, participar es compartir, una condición de estar, relacionado a un todo más grande, y en consecuencia sentirse incluido, para de esta manera poder tomar parte equitativa de algo, involucra tanto la sensibilización social sobre su importancia como el compromiso individual de las personas (Gil et al, 2008; Tamayo, 2002).

Posibilita la capacidad de decidir sobre ciertos cambios, lo que puede constituir alcanzar niveles crecientes de autonomía, es decir, la participación esta ligada estrechamente al poder. Implica alcanzar independencia con respecto al manejo de recursos y la toma de decisiones que competen al grupo y que pueden afectar diferenciadamente a los individuos que los componen (Contreras, 2000).



Es por ello, que consideramos la participación de las mujeres en los procesos en el desarrollo con un detonante de autonomía pues implica no sólo ser parte de las actividades económico-productivas que habían sido considerar como “masculinas” sino además les da la capacidad de decidir sobre su futuro y el de su comunidad.

Aproximación metodológica

Comparto la idea de que la realidad sólo puede ser cognoscible si la investigadora convive con ella, es por eso que la propuesta se hace desde la perspectiva cualitativa, que permite acercarse a los fenómenos desde la percepción de quienes los viven, desde la cual el conocimiento se construye a través del sentido que los individuos asignan a sus propias vivencias, prácticas y acciones, significados y significantes que hay en un determinado contexto cultural, social e ideológico y que permite identificar patrones de conducta que se construyen en esta realidad específica (Corbetta, 2007; Lerner, 1999).

No obstante, se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas de recopilación de información. Como se ha mencionado, esta investigación surge de una intervención previa, por lo que la información recopilada en esta primera experiencia posibilitó la construcción de las nuevas herramientas. De esta manera se utilizaron cuestionarios que fueron aplicados a 20 mujeres cooperativistas y 32 no cooperativistas, la intención era poder aplicarlos los primeros a las 29 mujeres que participan en la cooperativa, por cuestiones ajenas a la propuesta solo se lograron 20. La selección de las no cooperativistas se hizo en función a aquellas mujeres que quisieran participar. En el primer caso incluía 3 ejes: a) identificar roles y patrones de género, con preguntas cerradas con opción múltiple; b) actividades que realizan en la cooperativa, particularmente la toma de decisiones y si existe una diferenciación entre lo que pueden o no hacer mujeres y hombres, con preguntas cerradas y abiertas; y c) una escala de Likert para medir las actitudes con respecto a la autonomía, que buscaba identificar si las mujeres perciben que tienen más o menos capacidad de decisión con respecto a su vida individual, económica, familiar y comunitaria a partir de su participación en las actividades de la cooperativa. En el segundo caso se modificó el apartado de la cooperativa, y las preguntas estaban dirigidas a saber porque no participan, si les gustaría hacerlo, y que diferencias perciben entre ellas y las cooperativistas y si notan algún cambio a partir de que otras mujeres participan.

Con los resultados de los cuestionarios se elaboró un guion de entrevista que buscaba enfatizar sobre el sentir de las mujeres, si percibían que participar modificaba la



posibilidad de tomar decisiones individuales, económicas, familiares y comunitarias. Se levantaron dos entrevistas y por las dificultades que implica coincidir en horarios se tomó la decisión de aplicar un grupo focal en el que participaron 6 mujeres, también cooperativistas. Aquí se recupera la información contenida esta información. Se analizó tanto de forma estadística como recuperando el discurso de la participación de las mujeres en el turismo rural para el desarrollo.

Mujeres construyendo autonomía desde la participación

La participación de las mujeres en Tzibanzá que da inicio en 1995 con la inauguración de la hidroeléctrica Zimapán y la llegada del programa Mujeres en Solidaridad, este tenía como objetivo incorporar a las mujeres en el combate a la pobreza a partir de su inclusión en propuesta de infraestructura, reubicación y reconversión productiva para mejorar sus condiciones de vida, alimentación y en ocasiones generar fuentes de ingreso. Fue un punto de partida, pues este incluía la construcción de viviendas que habían sido reubicadas con la inundación de la presa, la limpieza de los terrenos y la construcción de un sistema de riego para la producción comercial de jitomate y calabaza. Si bien es cierto, que sólo participaron 20 mujeres y sus familias, el impacto que tuvo en su vida cotidiana, pero particularmente en la forma en que se percibía a las mujeres fue enorme.

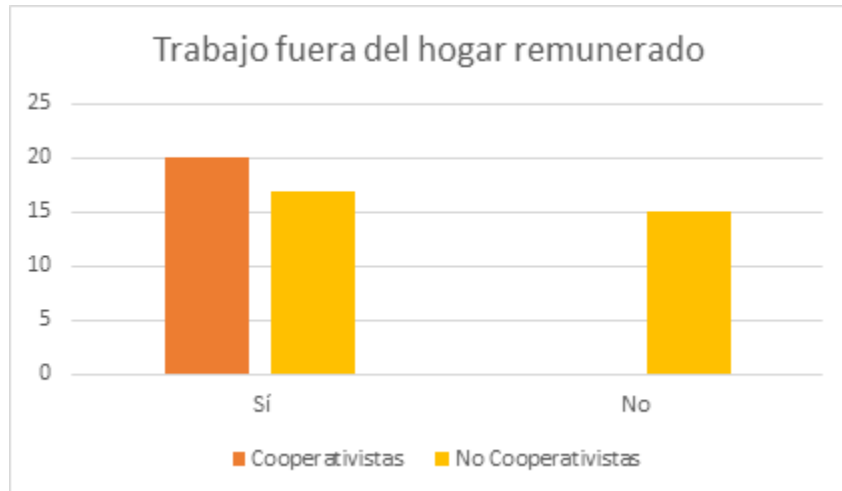
Así, por ejemplo, Doña Toña y su esposo recuerdan como: *todos participamos...a pesar de que era para las mujeres, todos trabajamos por igual...en lo que podíamos, pero no hubo una casa que se construyera sola, el desmonte y el riego también se hizo entre todos, pues sólo nos dieron los materiales* (2019). Recuerdan también como el riego permitió, pero por algunos años tuvieron suficiente producto para vender al mayoreo. La participación de las mujeres las posicionó como protagonistas del cambio, con la posibilidad de salir de su hogar y realizar otras actividades. Esto no quiere decir que los roles de género cambiaran hacia la equidad, pues en los cuestionarios nos encontramos que para todas las mujeres tanto cooperativistas como no cooperativistas, la principal actividad sigue siendo el hogar, que incluye los quehaceres domésticos y de cuidado. Sin embargo, consideran que este tipo de actividades se han vuelto “más sencillas”, para quienes forman parte de la cooperativa pues realizan los quehaceres del hogar cuando no tienen otros compromisos, al menos así lo afirmaron en el grupo focal.

Por otro lado, la agricultura de riego les dio un ingreso económico que posibilitó pagar por labores en el campo y tener la posibilidad de que las nuevas generaciones continúen



estudiando. En cuanto a la cooperativa, esta también surge como resultado de la construcción de la presa, que al inundar la mayor parte de las tierras de cultivo lleva a los habitantes de Tzibanzá a la pesca comercial, en un principio sin permiso, las multas y los problemas que ocasionaba esta actividad con las autoridades los llevó a explorar la posibilidad de constituir una cooperativa de producción. La consolidación fue un trabajo que requería de organización y participación comunitaria, pues implicó horas de faenas, aportaciones económicas y otros trabajos no remunerados. No obstante, para el 2000 ya estaban consolidados, un total de 93 cooperativistas entre ellos 29 mujeres que trabajan a partir de 4 comités distintos que coordinan cada una de las actividades: pesca comercial, restaurante, hotel El Anzuelo y La Isla. A pesar de que por casi una década las funciones de los comités eran no remunerados, hoy en día cuentan con un total de 40 empleos formales en las diferentes áreas y los ingresos que se perciben de las diferentes actividades turísticas se distribuyen entre todos los socios por partes iguales. En cuanto a la pesca comercial es una actividad que se lleva a cabo de manera independiente, es decir, cada uno cuenta con su permiso y su lancha, lo que pescan es recopilado en el acopio de la cooperativa y tienen contactado un vendedor que recoge periódicamente la pesca, cada uno recibe un pago por kilo según lo pescado, a un precio aproximado de 30 pesos por kilo en este año.

A pesar de que no hubo una restricción para ingresar a la cooperativa en función al género, la mayoría de las mujeres ingresaron ante la ausencia de sus esposos que eran migrantes o por que heredaron el permiso de alguien que ya no vive en la comunidad. Pero reconocen que en el tiempo que tienen de participar: *nadie las hace menos...aprendimos a pescar mirando, a unos nos enseñó un hermano, un hijo o el esposo. Además de que para ellas salir a pescar representa que me desestresó, a mí me gusta porque me distraigo, somos nuestro propio jefe y podemos ganar nuestro dinero.* El ingreso les ha posibilitado poder decidir sobre como se invierten los recursos en el hogar, el poder decidir que hacer con el dinero que ganan les hace sentir que son más libres que como lo eran sus mamás, aunque no consideran que se les haya tratado mal (GFC, 2019). Es una realidad, que la mayoría de las mujeres han ingresado al mercado laboral remunerado, como lo vemos en el siguiente cuadro, lo que representan que cuentan con un ingreso propio



Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios levantados durante 2019.

Tanto cooperativistas como no cooperativistas se percibe con mayor autonomía, que encuentran en la posibilidad de trabajar y percibir un ingreso, la toma de decisiones al interior del hogar y la posibilidad de hacer otras actividades fuera del hogar.

Conclusiones

Si bien es cierto, que la función principal de las mujeres sigue considerándose el “hogar”, es posible afirmar que el participar en la toma de decisiones en igualdad con los hombres en la cooperativa es un detonador que las puede llevar a la construcción de autonomía, pues esto permite que se perciban con las mismas oportunidades que los hombres, aunque aún piensan que hay actividades que es “mejor” que hagan los hombres. Lo que resulta contradictorio cuando hablamos de la pesca comercial, que implica destreza y fuerza que las mujeres no pensaron tener antes de que se les presentará la oportunidad, o la obligación de hacerlo.

Es además un reconocimiento social, pues los hombres son conscientes que los programas y proyectos no serían posible sin la participación de las mujeres, ya sea que esta se considere en el hogar y el cuidado de los hijos e hijas, en el campo o en la cooperativa. Para quienes no son cooperativistas se encuentran con la oportunidad de obtener un trabajo remunerado en las actividades turísticas que se crean, pequeños negocios, limpieza en las nuevas construcciones que se rentan a los visitantes o en otros espacios fuera de la comunidad. Es decir, el acceso al ingreso económico es lo que les ha permitido sentir la independencia que posibilita tomar decisiones en todo lo que respecta a su vida personal y la de los suyos.



Aún quedan preguntas por responder con respecto a lo que representan las propuestas de desarrollo en el cambio de las relaciones de género, pero puedo afirmar que cuando los “beneficiarios” se apropian de la propuesta el ingreso económico no es lo más importante, sino la posibilidad de decidir sobre el rumbo que tomaran sus vidas, al menos en el caso de las mujeres de Tzibanzá, hay un detonador que posibilita la construcción de autonomía.

Notas

¹ Antropóloga Social-UAQ, Especialista, Mtra. Y Dra. En Desarrollo Rural UAM-X. Profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UAQ-México. Temas de investigación: desarrollo rural, migración, género, identidad. ilithya.guevara@uaq.mx

² La investigación lleva por título: *Impacto de la cooperativa pesquera y proyecto turístico la Isla en la autonomía de las mujeres de Tzibanzá, Cadereyta de Montes*, que da inició en octubre de 2018 y está programado para finalizar en marzo de 2020, que ha sido financiada por el Programa FOFI-UAQ y contó con la colaboración de la Mtra. Anayetzin Rivera.

³ Información recuperada de la entrevista realizada a la enfermera Elsa Ramírez en 2018.

⁴ Se entiende la pobreza desde la perspectiva de la CEPAL: una situación de carencia, de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales, de referencia, que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Dichas normas se expresan en términos tanto absolutos y relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales (citado en Velázquez y Castillo, 2015).

⁵ Es importante señalar que uno de los indicadores de marginación tiene que ver con el acceso a la educación y la cabecera municipal cuenta desde hace poco más de una década con un campus de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que no necesariamente refleja la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes

⁶ No es el objetivo de este trabajo ahondar en la construcción de la presa, pues ya ha sido revisado en artículos anteriores: Guevara, Rivera y Hernández (2018), Guevara, 2019^a, Guevara 2019^b. Así que sólo mencionaré que su construcción se incluye en la propuesta de megaproyectos que busca detonar la economía y/o proveer de servicios - en este caso electricidad- a una población más grande que la que se ve afectada. Se ubica en los límites de los estados de Querétaro e Hidalgo y se construyó entre 1980 y



1990, pero fue inaugurada en 1995, este es el parteaguas de los programas y proyectos de desarrollo que llegan a la comunidad.

Referencias

Entrevistas

Toña (2019). Entrevista por Ilithya Guevara, enero de 2019, Tzibanzá.

Grupo Focal Cooperativistas (2019). Elaborado por Ilithya Guevara, octubre 2019 Tzibanzá.

Bibliográficas

Casique, I. (2004). Poder de decisión y autonomía de 1as mujer mexicana. Análisis de algunos condicionantes. Vol. V. México: UNAM

CEPAL (2016). Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. XIII Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Montevideo 25-28 de octubre.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2010) Recuperado de: <https://bit.ly/2HdPgNF>

Contreras, R. (2000). Empoderamiento campesino y desarrollo local. En: *Revista Austral de Ciencias Sociales*. N. 4, pp. 55-68

Dematteis, G., y Governa, F. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local. La contribución del modelo SLOT. Boletín de la AGE, 39, Pp. 31-58

Flores, M. (2007). La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. En: *Revista Opera*, pp. 35-54, (7).

García, M. (2007). ABC de género en la administración pública. *Instituto Nacional de las Mujeres/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México*.

García, A. (2003) *Las contradicciones del desarrollo. El impacto social de los reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo*. México: Universidad Autónoma de Querétaro.

Gil Lacruz, M., Izquierdo, A. y Martín, P. (2008). La participación de las mujeres en el desarrollo rural y el bienestar social. **Persona**, (11), pp.129-142. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147117608008>

Giménez, G. (1996). Territorio y cultura, en *Estudios sobre culturas contemporáneas*, Época II, Vol. II, no. 4, Universidad de Colima; Colima, México; pp. 165-173.

González-Casanova, P. (2004). Comunidad: la dialéctica del espacio, en *Revista Temas* N. 36, enero- marzo. La Habana, Cuba, Pp. 4-15



Guevara, I. (2019) Turismo rural. Construyendo autonomía femenina desde la participación. Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional, Vivir, sobrevivir y resistir en el campo mexicano. AMER

INEGI, (2018). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Inegi.org.mx. Consultado 30 noviembre de 2018: <http://www.inegi.org.mx/inegi/>

Lagarde, M. (2013). Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Memorias. Puntos de encuentro, Managua. Disponible en: <https://bit.ly/3IU7WRA>

Lamas, M. (2002). La antropología feminista y la categoría género, en *Cuerpo, Diferencia Sexual y Género*, Taurus, México

Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria: desarrollo conceptos y procesos*. Argentina, Paidós.

Murguielday, C. (2000). Roles de género. En: *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*, recuperado en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/115>

Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes (2018). Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Rodríguez W., C. (2015). Capítulo 1. Geopolítica local: territorialidad y desarrollo. En: *Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por los territorios y bienes naturales en el México rural*, pp. 23-38. México, UAM-X, ITACA

Sáenz, A. (2011). *Una mirada a la racionalidad patriarcal en México en los años cincuenta y sesenta del siglo XX*. México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Plaza y Valdés.

Serrano, L. M., y Molina, A. V. (2002). Análisis del concepto de turismo rural e implicaciones de marketing. En: *Boletín económico de Ice*, 2002, pp. 25-36

Sosa, M. (2012) *¿Cómo entender al territorio?* Universidad Rafael Landívar, 1ª Edición, Guatemala

Tamayo, S. (2002). Ciudadanía e identidades urbanas, ponencia presentada en el VI Encuentro de Cultura y Ciudades Contemporáneas, CIESAS, ITESO, Universidad de Guadalajara



La construcción- de las agendas de género en la ruralidad argentina: Urgencias en disputa. Tensiones entre las Organizaciones y el Estado¹

María Marta Muro²

Resumen

"Si bien la perspectiva de género y los estudios sobre las mujeres hayan cobrado fuerza durante los últimos años en nuestro país, los trabajos que abordan la cuestión de la mujer rural son aún escasos. Se conocen estudios de caso y experiencias relativas a los territorios, sus actores y los conflictos donde participan mujeres, sin embargo las teorías más explicativas que incorporen nuevas perspectivas aún no asoman en el campo académico.

Pretenderemos aquí realizar un aporte desde las nuevas corrientes que se inscriben en las teorías decoloniales, cuyos aportes de la interseccionalidad, -entendida como la confluencia de distintas formas de discriminación y desigualación sobre la base de ciertas dimensiones como raza, etnia, clase social, edad, orientación sexual- podrían contribuir a explicar la cuestión de la mujer rural como problemática peculiar cuya reproducción está ligada al mundo agrario.

La incorporación de este marco de análisis nos permitirá problematizar la forma en que esas categorías se imbrican y se relacionan con las estructuras de poder generando formas específicas de desigualdad, mostrando lo que se pierde en el sistema colonial moderno que utiliza categorías absolutas para establecer la norma.

Palabras claves

Ruralidad, mujeres, interseccionalidad

Introducción

En esta ponencia busco problematizar la manera que se producen/construyen las agendas de género -como problema de gobierno en diálogo con las agendas de género- mujeres construidas por organizaciones de la sociedad civil en las que esta agenda cobra relevancia. Una de las preguntas tendrá que ver con si hay dos agendas o si estaríamos frente a una agenda feminista que aborda problemáticas planteadas



por actoras que son canalizadas algunas veces por las agencias estatales y otras veces no lo logran/ o va en contra de algo intrínseco al Estado como tal.

El objetivo será comprender cómo y porqué determinados temas de estas agendas son jerarquizados como demandas urgentes y susceptibles de ser gubernamentalizados desde las agencias estatales, así como aquellas que quedan por fuera de la órbita que proponen los límites estatales y que las organizaciones deciden dejar en las propias agenda ya sea porque no creen que el Estado pueda dar respuesta o porque no logran dialogar con él interpelándolo.

Indagar acerca de esta agenda en diálogo con las agendas de las organizaciones permitirá no sólo comprender el sentido de la *cuestión*³ de género para las organizaciones que tienen acceso a estas problemáticas en el territorio, sino también iluminar qué *idea de Estado y género* se cuele en las agencias tanto estatales permeadas por las internacionales, en las organizaciones y en la relación entre ellas.

Por otra parte se vuelve imprescindible analizar la relación Estado-sociedad civil en busca de comprender una formación social particular que circunscribiríamos dentro de este territorio y en un tiempo determinado. Tal como plantea Trouillot (2011), la mayoría de los autores que estudia dicen que el Estado no es reducible al gobierno. En palabras de Miliband: “Lo que ‘el Estado’ significa es un número de instituciones particulares que, juntas, constituyen su realidad y que interactúan como parte de lo que puede ser llamado el sistema estatal.” El tratamiento excesivamente sociológico de ese sistema por Miliband debe ser apoyado por las conceptualizaciones más elaboradas de Poulantzas y Gramsci sobre el Estado como un sitio privilegiado de poder y lucha. En ese sentido es fundamental la insistencia de Gramsci de pensar juntos al Estado y a la sociedad civil por medio de conceptos como hegemonía y bloque histórico. (...) No se puede teorizar el Estado y, después, teorizar la sociedad o viceversa; más bien, el Estado y la sociedad están unidos por el bloque histórico que toma la forma del contrato social específico de —y, por lo tanto, la hegemonía desplegada en— una formación social particular. La visión ampliada del Estado de Gramsci es inseparable de conceptos como hegemonía, sociedad civil y bloque histórico y otorga el punto fundamental de partida de que, en el contexto del capitalismo, las teorías del Estado deben cubrir toda la formación social porque el Estado y la sociedad civil están entrelazados.



Estado del arte

La literatura disponible en materia de análisis de participación femenina o con incipiente perspectiva de género (Chiappe, 2005; Biaggi y otras/os, 2007; Arce, 2015) en las áreas rurales de la región y argentinas en particular, es lo que más se acerca al mundo que incluye dos de los pilares en relación a nuestro objeto de estudio: la ruralidad y el género. Allí encuentra consenso la reposición de las características particulares que generan una serie de problemáticas, entre las cuales: la exclusiva responsabilidad del trabajo reproductivo, tanto labores domésticas como de cuidado; la convivencia de los espacios reproductivo⁴ y productivo generando la invisibilización de este último, incluso por las mismas mujeres, siendo considerados “ayuda al varón” (Biaggi y otras/os, 2007). Por otro lado, la pluriactividad o búsqueda de empleo dentro y fuera de la agricultura que las mujeres se vieron forzadas a realizar en tiempos de crisis, produjo un aumento de la participación económica de las mujeres rurales, a través de su incorporación al trabajo asalariado, no sólo en el sector agrícola, sino también en el sector servicios, comercio e industria. Sin embargo, lejos de modificar la asimetría en el reparto de actividades o modificar la división sexual del trabajo, dio lugar a la “doble jornada” o a lo que Magdalena León (1987) denomina “jornada redonda”, ya que la división del trabajo en el hogar, el trabajo doméstico, el cuidado de los niños y adultos mayores y la participación comunitaria permanecen inalterados. (Chiappe, 2005). Contemplando otra de las especificidades del ámbito rural como lo es la dispersión geográfica y la lejanía de los centros urbanos se arguye que el aislamiento puede contribuir además al incremento de horas de trabajo ya que la recolección de algunos insumos requiere tiempo para las mujeres allí donde se profundizan problemas de acceso a los recursos naturales. (Biaggi y otras/os, 2007). Por otra parte, este aislamiento no sólo dificulta el acceso a servicios básicos y de calidad en relación a la educación y la salud, especialmente en cuidados ginecológicos, sino también dificulta la visibilidad de las situaciones de violencia o las rechaza debido a la cercanía de las personas pertenecientes a las fuerzas policiales con la familia.

Una de las mayores consecuencias que trae aparejada esta invisibilización tiene que ver con la dificultad del registro de la actividad de las mujeres en las herramientas censales debido a la poca fiabilidad de los datos estadísticos. (Arce, 2015) Las mismas mujeres o las/os censistas encuentran dificultad para diferenciar las tareas en el ámbito periurbano, situación que se agudiza en áreas rurales donde los trabajos permanecen ocultos o históricamente desvalorizados.



Otra de las problemáticas tiene que ver con el acceso a la propiedad de la tierra. Es menester citar el libro de Silvia Ferro (2013) donde se expresa cómo la igualdad jurídica queda soslayada frente a tradiciones culturales, impidiendo la garantía de ejercicio de derechos: en nuestro país varones y mujeres gozan de los mismos derechos en materia de herencia, sin embargo, la tierra la suelen heredar los hijos varones y si estuviera en manos de una heredera, se suele escriturar a nombre del marido. (Cowan Ros, 2011)

Algunas autoras incorporan el Estado para estudiar políticas llevadas a cabo en otros momentos históricos. Talía Gutiérrez (2007, 2014) estudia las políticas encaradas desde el Estado desde principios de siglo XX que tenían a las mujeres como público objetivo. Se esperaba que favoreciendo su nivel de vida y su mayor participación en producciones para consumo familiar o comercial, se lograría no sólo la construcción de un hogar confortable, sino también el asentamiento estable de la familia en el campo. Ello se abordaría a través de estrategias y cursos brindados por los Clubes Hogar Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA-. Según definía la misma institución, el “club Hogar Rural”, era “un grupo de mujeres rurales que se reúnen una o dos veces al mes. Aprenden a pensar, planear y orientar actividades del hogar según un plan de trabajo: aprender haciendo. Desarrollan trabajos para poder tener un hogar alegre y feliz”. (Gutiérrez, 2012) Con este fin, el Ministerio de Agricultura – que desde 1946 tuvo una sección específica- enviaba maestras para la enseñanza de distintos aspectos de la administración del hogar como la higiene y la puericultura. Estas temáticas dan cuenta del papel adjudicado a la mujer por aquellos años: su rol materno y doméstico sumado a actividades de la chacra considerados extensión del deber hogareño, inscribiéndose en la clásica división sexual del trabajo. El Instituto Interamericano de Capacitación Agrícola -IICA- si bien advierte la preocupación por incluir a las mujeres en los programas de desarrollo, no logra incluir la perspectiva de género durante los años 60 y 70. Se continúan inscribiendo el rol de la mujer en esposa y madre, colaborando con los varones en el desarrollo de la comunidad.

Trabajos como el de Alejandra de Arce e Isabel Patiño Alcívar (2008) buscan estudiar los roles de las mujeres del campo argentino que se plasman en las construcciones discursivas de revistas como “La Chacra” durante y después de los años peronistas. Allí las autoras notarán muchas de las problemáticas del medio rural tales como la invisibilización del trabajo reproductivo así como la asignación de tareas por género.



Desde la historiografía Alejandra de Arce y Marina Poggi (2015) también traen la cuestión educativa pero desde la Federación Agraria Argentina. Los “Clubes de Juventud Agraria” arguyen las autoras, permiten conocer los estereotipos y prácticas que circulaban en 1950 en la región. Aquellos cursos separaban a varones y mujeres, contando con instrucción técnica y tecnológica para los primeros y manualidades hogareñas que preparaban para el rol de ama de casa rural para las segundas. Las autoras analizaron también en este trabajo la participación de mujeres en espacios de conformación de movimientos y/o corporaciones. La FAA tuvo desde su nacimiento en 1912 altas tasas de participación femenina tanto en el llamado “Grito de Alcorta” que le da nacimiento, como en huelgas agrarias previas. Se menciona el escaso registro histórico que tuvo este dato, teniendo en cuenta no sólo la relevancia que tienen actualmente las mujeres en estos espacios, sino que han sido inéditos para su época si los pensamos como espacios de sociabilidad pública muy lejos del hogar rural al que quedaban circunscriptas las actividades femeninas.

Por su parte, Biaggi, Canevari y Tasso (2007) confirman a principios del siglo XXI la continuidad de la desventaja en la que la mujer rural se inscribe: son las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza teniendo en cuenta que tienen menos acceso a educación, propiedad de la tierra, salarios más bajos por el mismo trabajo, menos acceso a trabajos estables y bien remunerados y la absoluta responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los niños.

Norma Giarraca (1994) en “Tucumanas de ojos grandes: un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras” describe el proceso en el cual un grupo de mujeres en 1984 hicieron consciente la importancia del propio trabajo en la producción del cultivo. Tanto esta autora como Karina Bidaseca (2007) se han convertido en referentes en trabajos sobre la acción colectiva protagonizada por mujeres como es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, consolidado en la década del 1990.

Otros estudios que han vinculado la presencia de la mujer en mercados de trabajo del ámbito rural, son en general estudios de caso que contemplan su participación en distintos mercados regionales, tales como los de Vanesa Vázquez Laba sobre mujeres insertas en la producción tabacalera en la provincia de Jujuy y la citrícola en Tucumán (2008); mientras que Cynthia Pizarro analiza el trabajo hortícola en Córdoba (2001) o aquellos del Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) que llevaron a cabo



investigaciones sobre el empleo de mujeres en la clasificación y empaque de fruta y su presencia en la organización sindical y sobre las migrantes chilenas en las chacras frutícolas (Bendini y Bonaccorsi; 1997; Miralles; 2004; Radonich y Trpin; 2013, en Trpin, Rodríguez, Brouchoun; 2016)

Estudios más actuales con perspectiva de género (Trpin, Rodríguez, Brouchoun; 2016) que buscan reponer la interseccionalidad de las categorías clase social, etnia y género, muy poco exploradas en los estudios agrarios, intentan no encubrir las desigualdades de género que son reproducidas en los espacios rurales. Las autoras se preguntan cómo captar la complejidad de estas inequidades cuando las categorías que se emplean son hegemónicas y patriarcales (Pateman, 1988), así como cómo sostener aportes que no fetichicen lxs sujetxs. No debe ser la mujer una actora más, arguyen, sino también los lenguajes que las hablan, se trata de deconstruir también la teoría, aportar desde una epistemología feminista, desnaturalizar supuestos. Buscan ser interpeladas también como investigadoras y no mirar el campo con “una lupa androcéntrica” que no deja de ser también producto de la matriz patriarcal en la que todxs fuimos formadxs.

Partiendo de la ficticia escisión entre espacio público y privado, las autoras pretenden destacar que el género se reproduce en ambas esferas, continuando en el ámbito de la producción. La ausencia de valor de cambio del trabajo en el ámbito doméstico, se trasladó a las ocupaciones desempeñadas por ellas en el ámbito de la producción para el mercado.

Hasta acá podríamos decir que hay muchos aspectos relacionados a los que se configura como *la cuestión de género* y la problemática específica de las mujeres rurales quedaría explicada y consensuada. Existen incluso análisis que buscan dar cuenta del rol del Estado a través de la producción de políticas estatales desde mitad de siglo. Sin embargo las tensiones entre aquello que las organizaciones y el Estado producen como *cuestión* e incluso aquello que jerarquizan no parece abordarse. Los marcos teóricos en relación al Estado no parecen incluirse como disputando sentidos de aquello que implica al quehacer estatal. Lo que aquí propongo es echar luz sobre estas disputas reflexionando acerca de las teorías del Estado, incluyendo perspectivas feministas.

Perspectivas teóricas a contemplar

Entre las perspectivas teóricas que utilizaremos para la construcción de nuestro objeto de estudio se destacan aquellas que problematizan la *cuestión* del Estado como *idea* en



relación al gobierno, a su relación con la sociedad civil y por último aquellas que lo harán dialogar con el feminismo y sus implicancias en el marco de las demandas del colectivo de mujeres en principio.

Nos será útil entender al Estado como la *idea* del Estado tal como Abrams (2015) lo explica: “reconocer su carácter persuasivo de la *idea* de Estado como poder ideológico y tratarla como objeto de análisis convincente.” (pág 58). Nos preguntamos cuáles serán las ideas de Estado que las agencias estatales que incluyen la agenda en cuestión tienen y por sobre todo qué demandas en relación a esta *idea* realizan las organizaciones así como en qué medida juegan a ponerse la misma máscara del Estado exigiendo demandas que son partes estructurales de su Estado como tal. Si el Estado en un Estado capitalista y patriarcal ¿qué demandas le exigiremos que vengan a poner en cuestión esto si las respuestas no podrán ser otras que aquellas factibles dentro de esos marcos?

Para esto será interesante lo que plantea Kantola (2008) en términos de pensar en la dicotomía de adentro o fuera del Estado por el riesgo no sólo de comprometer la agenda feminista sino de ser cooptadas por las instituciones estatales que darán forma a la manera que piensan sus problemas. ¿Es viable pensar la lucha feminista dentro del Estado cuando el Estado mismo es acusado de patriarcal? Pero también Kantola refiriéndose a las contribuciones posestructuralistas se pregunta acerca de las estrategias más efectivas para empoderar a las mujeres en sus compromisos con el Estado (Randall 1998: 200). En otras palabras, el objetivo feminista se convierte en tener en cuenta no solo el impacto del estado en el género, sino también las formas en que puede ser utilizado y cambiado a través de las luchas feministas. Los análisis permiten tener en cuenta las relaciones complejas, multidimensionales y diferenciadas entre el estado y el género. Reconocen que el estado puede ser tanto un recurso positivo como negativo para las feministas.

Ahora bien, si debiéramos realizar un análisis local de la *cuestión* feminista (o de género para poner en términos de lo que el mismo Estado puede enunciar), en relación a la *cuestión* del Estado, Anzorena (2018) plantea que a partir de la reinstauración de la democracia en 1983 y la revalorización de los derechos humanos, las feministas lograron poner en lo público aquellas reivindicaciones que habían estado circunscriptas al campo de lo privado. Sin embargo, sostiene la autora, son varias las teóricas-activistas feministas que vienen pensando en torno al Estado, en vistas a que, por su propia



conformación capitalista, colonial y heteropatriarcal, difícilmente sus respuestas sean satisfactorias. Entre ellas Segato critica las expectativas puestas en las respuestas estatales: “las mujeres en todos los países se organizan y articulan para frenar el avance de nuevas y viejas formas de violencia, pero lo hacen con una confianza excesiva en la protección estatal y legal”. (Segato, 2015) Por su parte Valobra (2015) reflexiona acerca de ese Estado, entendido como capitalista, colonial y heteropatriarcal, teniendo en cuenta que la discriminación sexual es una de las bases fuertes en la que se sustenta el Estado occidental. La pregunta será si tiene sentido interpelar este Estado, sabiendo que por un lado la práctica feminista se construye en cómo obtener algo de ese Estado y no en cómo cambiarlo o correrlo de escena.

El hiato presente entre teoría y práctica sigue siendo de una distancia tal que a pesar de saber que solicitar al Estado transformaciones en las relaciones des-iguales de género es un contrasentido a nivel teórico en términos de lo que dirán Pateman y MacKinnon, ya que somos conscientes de que “las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo (Lorde, 2003:115)”, nos encontramos con el hecho de que una parte importante, al menos la más visible, de los movimientos feministas en Argentina dirigen sus pedidos concretos principalmente a las instituciones estatales. En términos de Abrams si el Estado se presenta como máscara, diríamos que las organizaciones que exigen que el amo sea feminista, o en menor grado de que pueda pensar con perspectiva de género, ¿lo hacen en términos de máscara también?

Nos apoyamos en la definición que describe Foucault (2006 [1978]) acerca de que el Estado es algo más que el gobierno comprendido en aquella definición de *gubernamentalidad* entendida como “el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer en forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población.” (pág.136)

Por otro lado planteamos la necesidad de estudiar al Estado en relación con la sociedad civil, tal como lo plantea Trouillot (2011) de no sólo no reducirlo al gobierno, sino de plantearlo, como el autor propone siguiendo a Miliband, como un sistema estatal producto de la interacción de un conjunto de instituciones que constituyen esa realidad, en ese campo privilegiado de poder y lucha, agregará Trouillot sobre conceptos de Poulantzas y Gramsci. El autor subrayará la cuestión de estudiar al Estado junto a la sociedad civil “unidos en un bloque histórico que toma la forma de contrato social



específico –y por lo tanto, la hegemonía desplegada en- una formación social particular- .“ (Trouillot, 2011: --) Dado que la sociedad civil y el Estado están entrelazados, es menester apoyarse en una visión ampliada del Estado.

Problematización del fenómeno empírico

PP ¿Cómo se construye la agenda de género en la ruralidad argentina?

Al Estado

¿Cómo se construye esa agenda?

¿Qué agencias estatales son las que incorporan la *cuestión* en sus agendas? ¿Quiénes son lxs interlocutores que dialogan con las agencias estatales involucradas?

¿Lxs actorxs seleccionados dialogan con el Estado? ¿En qué instancias? ¿Cómo dialogaban estxs actorxs u otrxs antes del 2015? ¿Cuáles continuidades o rupturas se dieron?

¿Cómo se dirimen los conflictos para que algunas demandas queden por dentro y otras por fuera del Estado? ¿Por qué se deja afuera a algunas y otras no? ¿Aquellas que quedan por fuera, qué motivos se arguyen para que así sea?

¿Quiénes son y cuáles son las trayectorias de las personas que ocupan los lugares de decisión en lo que a esta problemática atañe?

A las organizaciones

¿Cuentan con una agenda de género? ¿Tiene lugar en su institucionalidad? ¿Cómo fue la emergencia y trayectoria de esa institucionalidad?

¿Cuáles son los puntos de contacto con la agenda planteada por las agencias estatales? ¿Qué distancia tiene con ella? ¿A qué se le atribuye esa distancia?

¿Qué demandas se plantean al interior de las organizaciones? ¿Cuáles son establecidas como urgentes? ¿Cuál es el motivo de la jerarquización? ¿Cuáles son susceptibles de ser presentadas como demandas hacia el Estado? Aquellas que no, ¿Por qué y cómo se busca dar respuesta? ¿Cuáles son las ideas de Estado que surgen allí? ¿Con eso tiene que ver que algunas queden por fuera?

¿Quiénes son y cuáles son las trayectorias de las personas que ocupan los lugares de decisión en lo que a esta problemática atañe al interior de estas organizaciones?

¿Cómo y en qué partes el Estado es permeable a recibir las demandas de estas organizaciones/actorxs?



A las PE

Las PE que surgen de esta arena de luchas, ¿entraron en diálogo con agencias internacionales? Las respuestas de las agencias internacionales en materia de PE ¿intentan ser prescriptivas de aquello que entienden como la *cuestión* de género entrelazada con la *cuestión* del Estado?, pero ¿cómo se usaron esas PE? ¿cómo fueron recibidas? ¿Cómo y quiénes, bajo qué diagnóstico realizaron su diseño? ¿Cuál es la distancia entre estas PE y las cuestiones planteadas por las organizaciones?

La agenda feminista incorporada a partir de la nueva gestión y a partir de la visibilización de las reivindicaciones que fueron presentadas a partir del 2015, ¿cambiaron el curso de la agenda de género que se venía confeccionando? ¿Cómo afectaron el curso de la misma?

¿Entraron en conflicto?

Cuestiones metodológicas

Se analizarán aquellos *lugares* donde entre el Estado y la sociedad civil emerjan las demandas en materia de género para la ruralidad argentina. Nos referimos a las asambleas, reuniones, documentos donde se planteen cuestiones referidas a las problemáticas que aquejan a las mujeres rurales en tanto sujetxs subalternizadxs del medio rural.

Serán seleccionadas algunas entidades de la sociedad civil que entendemos son interlocutores del Estado o intentan serlo para dirimir cuestiones que tengan que ver con las problemáticas que las mujeres rurales sientan como tales.

Como no es posible ser exhaustivos en recoger las demandas de las mujeres, seleccionamos

3 espacios donde entendemos que distintas mujeres rurales son representadas. Nos referimos a la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina y la Sociedad Rural Argentina. Aun me debato si la entidad que represente a las mujeres que cuentan con otros capitales económicos, sociales y simbólicos, deba ser SRA, ACREA, CRA, CONINAGRO o la FAA. Mi elección en primer término están entre SRA y ACREA, dado que son las que pueden dialogar directamente con agencias internacionales que tendrán injerencia en las PE llevadas a cabo por las agencias locales.

Después de la primera entrevista que tuve con una mujer de SRA, con un cargo



institucional elevado y cuya trayectoria da cuenta de haber sido la primera, sino casi la única mujer en ocupar lugares de decisión en la institución, me pregunto si será necesario convocar otras organizaciones que incluyan red de mujeres, como podría ser FAA. Varias de estas organizaciones son parte de un grupo llamado #MujeresRurales en el que aún no estoy logrando ser incorporada.

Estas organizaciones cuentan con documentos que son puestos a consideración de agencias estatales. Dos de ellas han llegado a poner sus reflexiones en documentos del llamado W20 en el marco de la reunión del G20 en Argentina durante noviembre de 2018. Por su parte, la Secretaría de Género de la UTT dialoga en pos de no representar a esas mujeres en una reunión que va en contra de los valores que representa, lo cual también sería pertinente para nuestro análisis.

El recorte temporal será a partir del 2015 hasta la actualidad, entendiendo esta como años durante el transcurso de la beca doctoral, es decir podría terminar en 2019/2020. Esta elección tuvo que ver con dos cuestiones:

El cambio de gestión de gobierno que implicó cambios en la jerarquización y/o desaparición de agencias estatales que contemplaban la cuestión de género entre sus asuntos.

Visibilización de la agenda feminista en Argentina a partir de la primera movilización “NI UNA MENOS” el 3/6/2015 después de sucesivos femicidios cometidos en nuestro país.

Si bien se van a reponer las PE llevadas a cabo desde las carteras que puedan estar incluidas en nuestro mapa (Ministerios de Agroindustria/Desarrollo/INAM) anteriores al 2015, surge la necesidad de circunscribir un período temporal.

Estoy en búsqueda bibliográfica que respalde que nos encontramos frente a una nueva ola feminista en la región.

La estrategia de análisis que nos permitirá echar luz acerca de la confección de estas agendas de género deberá ser en una primera instancia un estudio sobre la construcción de los espacios de diálogo que las mujeres en tanto sujetxs subalternxs hayan logrado realizar al interior de estas organizaciones. Entendemos esto en términos de procesos dentro de agencias estatales donde encontremos que hayan llegado a marcar agenda las problemáticas. En este sentido será de utilidad el acceso a documentos que hayan sido producidos por las mismas agencias estatales, así como aquellos redactados al



interior de las organizaciones seleccionadas. Para ello usaremos el análisis de discurso. Esta herramienta también podrá ser instrumentalizada en las entrevistas que podamos realizar a referentes que hayan llevado adelante programas, cursos, asambleas u otro tipo de reuniones en donde se haya establecido por objetivo la presentación y problematización de las cuestiones que atañen a las mujeres del medio rural argentino. De ser posible la participación a estas reuniones será de sumo valor poder realizar una etnografía para poder dar cuenta de quiénes son lxs que participan, quienes toman la palabra, como se da esa palabra, como se dirimen las faltas de consenso alrededor de un tema, en el caso de redactarse algún documento, quién lo hace, con qué fines y hacia quién se dirige. Entendemos que la heterogeneidad que buscamos en la selección de organizaciones busca justamente que estos objetivos sean disímiles y logremos realizar un análisis comparativo de los mismos con vistas a describir “la conformación social” de una coyuntura.

Notas

¹ Para la realización de esta ponencia se contó con el apoyo institucional y financiero del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a través del proyecto PIP 2015-0247

² Socióloga (UNLP), Magister en Sociología (Roma Tre), Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), Becaria doctoral Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR - CONICET maria.muro@conicet.gov.ar

³ Entendemos como cuestión “aquellas necesidades y demandas “problematizadas” por sus integrantes en el sentido de que ciertas clases o fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados creen que pueden y deben hacer algo al respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes” (Ozslak y O’Donnell, 1980)

⁴ Esta superposición de unidades sumada a la exaltación de la mujer-madre-naturaleza como representación social común en las sociedades latinas sobre todo, encubre y desplaza las posibilidades de las mujeres de ejercer su ciudadanía plena. (Peredo Beltrán, 2004)



Bibliografía

Anzorena Claudia (2018) "El campo estatal en cuestión. Brechas entre demandas feministas y políticas públicas" *ReviISE*. Vol 11, Año 11. Dossier Hacia un buen vivir feminista. www.reviise.unsj.edu.ar

Arce, A., & Patiño Alcívar, I. (2008). Género y trabajo en el campo argentino. Discursos y representaciones sociales (1946-1962). *Mundo Agrario*, 9 (17)

Arce, Alejandra de; Poggi, M. (2015) Las mujeres en el agro argentino. En *Historia, cultura y memoria en el mundo rural*. Disponible en: <https://bit.ly/2T0RYsy>

Baca Tavira, Norma y Herrera Tapia, Francisco. (2008) Emergencia de la relación desarrollo rural-género. *Convergencia* [online]. Vol.15, n.48, pp.223-253. ISSN 2448-5799.

Biaggi, C.; Canevari, C. y Tasso, A. (2007), *Mujeres que trabajan la tierra. Un estudio sobre las mujeres rurales en Argentina*. Serie Estudios e Investigaciones 11. PROINDER- SAGPYA.

Bidaseca, K., (2004), "Un estudio comparativo acerca de las luchas de las mujeres rurales en Argentina y Brasil desde la perspectiva de género." En *Revista IADE/Realidad económica*. <http://www.iade.org.ar/noticias/un-estudio-comparativo-acerca-de-las-luchas-de-las-mujeres-rurales-en-argentina-y-brasil>
de las mujeres rurales.

Beauvoir, S. (1954), *El segundo sexo*. Editorial Psique. Buenos Aires. Bourdieu, P. (2012), *La dominación masculina*. Editorial Anagrama. Barcelona.

Butler, J. (2007), *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós, Barcelona.

Caracciolo, M. y Cowan Ros, C. (1997), *Modalidades de asistencia técnicas a los Productores Agropecuarios en la Argentina*. IICA, Buenos Aires.

Chiappe, M. (2005). *Asociación Latinoamericana de Organizaciones de promoción al Desarrollo*. Centro Cooperativista Uruguayo. "La situación de las mujeres rurales en la agricultura familiar de cinco países de América Latina. Montevideo.

Cowan Ros, C. (2011), *Informe final de la Consultoría de Asistencia Técnica para la Formulación de Políticas de Igualdad de Género en la Agricultura Familiar en el MAGYP*. MAGYP, Buenos Aires.

Economic and Social Council (2002), *Gender Mainstreaming. An Overview*. United Nations. New York.

Ferro, S. L. (2013), *Género y propiedad rural: República Argentina*. 2da edición. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Unidad para el Cambio Rural.



Buenos Aires.

Foucault, M. (2008), *Historia de la sexualidad*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Foti, M. (2009) *Mujeres en la agricultura familiar del MERCOSUR*. Organización e incidencia política. Red Internacional de Género y Comercio. Buenos Aires.

Fraser, Nancy (2015) "Fortunas del Feminismo Del Capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal" Selección Prefacio y Prólogo pp 13-17, pp 17-36.

Giarracca, Norma. (1994) "'Tucumanas de ojos grandes': un estudio sobre acciones colectivas de campesinas tabacaleras" en Knecher, L. y Panaia, M. (comps.) *La mitad del país. La mujer en la sociedad argentina* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina / Facultad de Ciencias Sociales, UBA / FIHES / Ministerio de Cultura y Educación).

Giarraca, N. (2001) "'El Movimiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha": protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina." CLACSO, Buenos Aires.

Girón, A. (2009): *Género, globalización y desarrollo*. In: *Género y globalización*. Grupos de Trabajo . Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, Argentina, pp. 77-97. ISBN 978-987-1543-16-8

Gutiérrez, Talía Violeta. (2014). *Estado, agro y hogar: Políticas públicas hacia las mujeres rurales*, Buenos Aires (Argentina), 1958-1991. *Secuencia*, (88), 217-248.

Guzmán, V. (2001), *La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de análisis*. CEPAL Santiago de Chile.

Kantola, Johanna (2006). *Feminists Theorize the State*. Chapter 1: Gender and The State: Theories and Debates. pp. 1-21

Lamas, M. (2003): "Género: claridad y complejidad", <https://bit.ly/31ekGed>

Lattuada, M., Nogueira, M. y Urcola, M. *Tres décadas de desarrollo rural en la Argentina. Continuidades y rupturas de intervenciones públicas en contextos cambiantes (1984-2014)*. Teseo, Bs. As.

MacKinnon, C. (1995) *Hacia una teoría feminista del Estado*. Ediciones Cátedra, Madrid.
----- (1995) *El Estado Liberal* Ediciones Cátedra pp. 277-304

Osorio, C. (2011). La emergencia de género en la nueva ruralidad. *Revista Punto Género*, (1). doi:10.5354/0719-0417.2011.16851

Oszlack, o. y O'Donnell, G. (1981), *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. CEDES, Buenos Aires.

Pateman, Carol (1995) *El Contrato Sexual*. Barcelona, Antrophos.

Peredo Beltrán, E. (2004) *Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina*. Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile.



Scott, Joan (2008) "El género una categoría útil para el análisis histórico" en Género e historia. Fondo de cultura económica, México (pp.48-74)

Rahgerber, E. (1990) Mujer y desarrollo y género y desarrollo: Tendencias en la investigación y la practica. Disponible en: <https://bit.ly/2SYh6Af>

Telechea, R., & Muñoz, R. (2011). Protesta agraria. Los casos del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y Chacareros Federados. Argentina, 1995-2008. *Revista Izquierdas*, (10), 1-29.

Trpin, V., & Rodríguez, M., & Brouchoud, S. (2017). Desafíos en el abordaje del trabajo rural en el norte de la Patagonia: mujeres en forestación, horticultura y fruticultura. *Trabajo y Sociedad*, (28), 267-280.

Trouillot, M. (2001): "The Anthropology of the State in the Age of Globalization" en: *Current Anthropology*, 42(1).

Valobra, Adriana (2015) "El estado y las mujeres: Concepciones en clave feminista" *Revista Estudios Sociales del Estado* vol1.núm.2 213-227



El trabajo de mujeres rurales en México: Las artesanas y las economías comunitarias

Jozelin María Soto Alarcón¹
Rosalba Díaz Vázquez²
Angélica María Vázquez Rojas³
Mario Martínez Rescalvo⁴

Resumen

El objetivo es analizar las prácticas de mujeres artesanas rurales para generar sustento en el contexto neoliberal en dos latitudes de México: Guerrero e Hidalgo. Primero se discuten los estudios realizados sobre el trabajo de las mujeres rurales, posteriormente se analizan las políticas públicas implementadas para apoyar este tipo de proyectos, los límites y retos que enfrentan, así como las estrategias para mantener proyectos colectivos, el papel de diversos actores y los efectos en las relaciones de género. Se utiliza el enfoque de las economías comunitarias, para identificar a los actores, las estrategias y repercusiones en el ámbito de las relaciones de género en los hogares y contextos comunitarios. En las conclusiones se presentan algunas pistas para reestructurar la política pública dirigida a la promoción del trabajo de las mujeres rurales artesanas desde la formación de colectivos. Se problematiza el género como un proceso relacional e histórico y analizan los esfuerzos colectivos de mujeres de base para proponer políticas que faciliten su agencia individual y colectiva.

Palabras clave

Genero, economías comunitarias, cooperativas, políticas públicas

Introducción

En el ámbito rural, las dinámicas laborales de las mujeres respondieron a la crisis de la economía campesina y las reformas estructurales de 1980 (Arizpe y Botey, 2014). Para proveer sustento los hogares diversificaron estrategias: la emigración masculina, el jornaleo femenino y la maquila (Wilson, 1993) fueron de las primeras alternativas. La reorganización del trabajo no se limitó al contexto doméstico, la reestructuración de los mercados industriales y agrícolas demandó trabajo de mujeres rurales en cultivos de exportación, parques industriales y en la maquila a domicilio (González, 1999). En los últimos treinta años, la participación de mujeres rurales en actividades remuneradas es activa, heterogénea y se caracteriza por la pluriactividad. Las mujeres se emplean en el sector servicios, el jornaleo, trabajan la parcela, además bordan y venden artesanías. En sintonía con la realidad de las mujeres rurales, los estudios sobre su trabajo en



México y Latinoamérica han sido fructíferos, se observan aportes desde la demografía, la sociología, la economía, la antropología entre otros campos. Las teorías analizan las dinámicas de género en el trabajo remunerado y no remunerado (Rendon, 2008). Conceptos como el patriarcado y el sistema sexo/género (Rubin, 1986) dan cuenta de la necesidad de situar los sistemas políticos y culturales desde donde emergen las desigualdades de género. La crítica marxista con las nociones de trabajo productivo y reproductivo ilustra la relación entre la reproducción social y la acumulación de capital (Mies, 2012) y el papel de la subordinación de las mujeres desde la división sexual del trabajo en la reproducción de asimetrías entre hombres y mujeres en el hogar y el ámbito laboral.

Aunque el marxismo estudia la desigualdad, no incorporaba el trabajo autónomo o independiente, por ejemplo el de los pequeños negocios familiares, el trabajo campesino o los empleos informales, asociados con la subsistencia de los hogares y con diversos procesos de clase en los que se apropia y distribuye el excedente del trabajo en una economía diversa (Gibson, Law y McKay, 2001). Mies con el estudio de las bordadoras de Narsapur (2012) desde el marxismo, analiza la relación entre el trabajo de mujeres en el espacio doméstico en contextos de pobreza con la acumulación, el comercio internacional y el patriarcado. El trabajo autónomo de las bordadoras expresa una forma de explotación para las mujeres ubicadas en el eslabón más desprotegido de la cadena en el ámbito doméstico y productivo-remunerado. Aunque el trabajo autónomo se manifiesta en formas variadas de organización económica, el enfoque centrado en la acumulación de capital y la producción coloca la aportación económica de las mujeres rurales como marginal y subordinada al capital. En contraste, en los estudios del trabajo de mujeres rurales se analiza la complejidad del espacio doméstico en la producción del sustento, las relaciones de poder entre los géneros, el vínculo entre el cambio estructural y las identidades de género (Pérez y Mummert, 1998), así como la interacción entre el hogar, la comunidad y el mercado (González, 1999). El trabajo de las mujeres rurales se caracteriza por la pluriactividad y articulación intra y extradoméstica (Moctezuma, 1998; Buendía *et al.*, 2008). A diferencia del enfoque centrado en la acumulación de capital, la lente de las economías comunitarias parte de reconocer la diversidad económica e identifica diversos procesos de apropiación y distribución del excedente con el que generan formas de organización económica ocupadas por el bienestar en distintas escalas. Las directrices de esta lectura marxista anti-esencialista de la economía son: el consumo, los encuentros propiciados en la búsqueda de bienestar, los mecanismos de apropiación y distribución del excedente, la construcción de comunes y



las finanzas (Gibson-Graham, Cameron y Healy, 2013). En paralelo, se analizan los cambios en las relaciones de género como un proceso performativo, a través de la repetición de actos individuales y colectivos preocupados por el sustento en sus respectivos contextos (Butler, 1988). A continuación se presenta la metodología, seguido de los resultados y conclusiones.

Metodología

Se informan las prácticas de dos grupos de artesanas en Acatlán, Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (sur del país) y en San Andrés Daboxtha Cardonal en el estado del Hidalgo (centro del país). La investigación se realizó con población indígena. En Acatlán mujeres nahuas elaboran prendas en telar de cintura y bordado a mano y en Hidalgo las mujeres hñahñus (otomíes) elaboran artesanías con fibra de maguey o ixtle, tejen textiles, adornos personales y esponjillas para el aseo personal. La información se recopiló a partir de entrevistas a profundidad con las artesanas. Las preguntas se centraron en la descripción del trabajo, el acceso a medios de producción, los problemas relacionados con la organización y las ventas, los apoyos públicos y los efectos de la actividad en los hogares y el entorno comunitario. Se emplean técnicas de observación participante, ya que dos investigadoras han colaborado con las organizaciones como asesoras de producción y comercio en los últimos quince años. Los resultados de las entrevistas y la observación participante son ordenados y analizados a partir de las directrices propuestas por el marco teórico de las economías comunitarias. Se privilegia un enfoque etnográfico para identificar elementos cualitativos como las emociones de las mujeres, sus expectativas y desconfianzas. Dichos elementos nos permiten comprender porque el desarrollo de los grupos de artesanas no siempre depende de los apoyos económicos de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, la desconfianza entre los diferentes grupos no permite llevar a cabo censos o análisis de costo-beneficio para proyectar mejores condiciones de ingreso y valoración del trabajo artesanal.

Resultados

Política neoliberal hacia las mujeres en el campo

En el campo mexicano las políticas públicas fomentaron actividades agroexportadoras mientras la pequeña producción campesina se asoció con una política social de corte asistencialista en los últimos 30 años (Robles, 2013). Para las mujeres rurales, la política social se centró en el rol reproductivo financiado con programas de transferencia condicionada como Prospera. El Estado delegó a las mujeres la responsabilidad de



vigilar la alimentación y la salud de sus familiares, (Molyneux, 2006). Aunque la perspectiva anti-pobreza del trabajo de las mujeres focaliza recursos para el desarrollo, no capta las dinámicas de género de quienes participan en ellos (Moser, 1991). Desde el ámbito productivo, las experiencias de proyectos productivos generadores de ingreso han sido una estrategia recurrente e intermitente del Estado para incorporar al trabajo remunerado a mujeres desde una perspectiva autónoma (Mummert y Ramírez, 1998; Angulo, 2000). A pesar de los esfuerzos de las mujeres por generar medios de vida y proveer cuidado a sus familias, la precarización y la pobreza caracterizan sus condiciones de vida. De acuerdo al informe “Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México para el año 2015”, el 51.1% de las mujeres indígenas no tenían acceso a la educación (encuesta intercensal, Inegi, 2015), mientras la pobreza alcanzó al 77.6% de la población indígena en 2016 (encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, Inegi, 2016). En este contexto, se analizan las prácticas de las artesanas, los efectos de su trabajo y se proponen algunas pistas para apoyar sus esfuerzos desde la política pública.

El trabajo de las artesanas nahuas de Acatlán y hñähñus de San Andrés Daboxtha

Una de las principales actividades económicas en la comunidad nahua de Acatlán es la elaboración de prendas en telar de cintura y bordado a mano de huipiles, rebozos, blusas y manteles (Díaz, 2003). La comunidad es reconocida por la elaboración del conjunto de falda y blusa conocido como traje de acateca¹. Vestimenta también utilizada por mujeres del pueblo vecino de Zitlala. Más de 500 artesanos y artesanas se dedican a esta actividad (cálculo estimado por los artesanos 2015), por lo que la variedad en el diseño es cada vez más complejo, incluso incorporan toques de modernidad para preservar la indumentaria, sin perder su esencia y tradición. Se confeccionan blusas de algodón, gaza o satén, con hilos de seda o hilo vela. El trabajo de las artesanas se divide en tres áreas: la elaboración de las telas en telar de cintura para la falda de acateca y el teñido de hilos; las que dibujan y diseñan, y las que bordan. En su mayoría son mujeres y algunos hombres que combinan esta actividad con otras labores como la agricultura, la migración, el comercio o el trabajo asalariado.

La mayoría de las artesanas de Acatlán no disponen de maquinaria e insumos para realizar los textiles, la elaboración es manual. Las mujeres además de ser artesanas, trabajan en el hogar y en la parcela familiar, siembran maíz, frijol, cilantro, camote, flores, principalmente. El horario de trabajo de la artesanía es complementario a otras actividades y flexible. Inician a las cinco de la mañana y bordan hasta las 10 a.m.,



suspenden para preparar el desayuno e ir al campo, regresan a su casa aproximadamente a las doce del día para continuar bordando, suspenden nuevamente a las tres de la tarde para cocinar y realizar labores domésticas. A partir de las diez de la noche, regresan al bordado y duermen entre las 12 y una de la madrugada (observación participante, Rosalba Díaz, 2018). Para las bordadoras la dinámica es pesada y aumenta con la calidad en los acabados de la prenda, cuando se utiliza un hilo más prensado o de seda, también con dibujos más pequeños, el esfuerzo para la vista es mayor, sobre todo durante la noche. Aunque estas prendas tienen un precio más alto en el mercado, su venta es poco frecuente en la región.

La enseñanza del trabajo del bordado en seda y en telar de cintura en Acatlán es transmitido entre generaciones, para los hombres jóvenes se aprende a través de la observación. En la situación de las mujeres, la enseñanza es desde muy pequeñas de madres y/o abuelas y perfeccionan su técnica y destreza en el transcurso de su vida. Las bordadoras de Acatlán presentan productos con calidad diferente, algunas elaboran prendas muy delicadas, otras trabajan de manera más sencilla y a destajo. Los niveles de producción, la calidad de los materiales, la elaboración de artesanías y las características socioeconómicas de las bordadoras son diversas. Hay mujeres que elaboran algunas prendas al mes y las almacenan para eventos específicos, cuando la venta se incrementa. Otras artesanas bordan una mayor cantidad de prendas y las comercializan en el mercado Dominical de Chilapa y en los municipios de Tixtla, Chilpancingo, Acapulco donde la venta es directa. También revenden, ya que obtienen recursos relativamente seguros pero en detrimento del precio real de sus productos.

Además del trabajo independiente de las artesanas, se han generado dinámicas de subcontratación de algunos talleres de costura, estos pagan a las bordadoras para dar un acabado artesanal. Aunque estas prendas se vendan a precios más elevados, la remuneración para las artesanas es baja, se paga a destajo. Las mujeres artesanas se enfrentan al riesgo permanente de pérdidas en el precio de las prendas, ausencia del pago o remuneración parcial de su trabajo. La venta al interior de Acatlán es significativa, ya que las prendas se utilizan como parte de la vestimenta de los danzantes. En los últimos diez años se ha observado una revaloración del trabajo artesanal, muchos jóvenes usan cotidianamente prendas bordadas de su localidad, consideradas “modernas”. En este contexto surge el grupo de mujeres de Akatl.



Akatl-Bordados de Acatlán se constituye en 2014 por diez mujeres artesanas, una organización civil dona máquinas industriales para la elaboración de prendas de vestir, además de capital inicial para la compra de insumos básicos como hilos y telas (entrevista a profundidad, 2016 realizada por Rosalba Díaz). A partir de este año el colectivo se mantiene organizado. Han diversificado la elaboración de ropa y mejorado el diseño de sus productos. Sin embargo, el bajo precio del producto no permite que las socias inviertan más tiempo en los acabados y la calidad se mantiene parcialmente a la baja a pesar de los esfuerzos colectivos (entrevistas a clientes compradores frecuentes, la mayoría revendedores, 2016). Las artesanas venden sus productos al interior de la comunidad y externamente; participan en exposiciones o ferias. Las salidas por ventas involucran mayores gastos frente a un ingreso inseguro, por ejemplo los municipios cobran aproximadamente 200 dólares E.U. por exponer las artesanías. Para la comercialización, las artesanas venden a intermediarios a precios bajos, son quienes se llevan las ganancias. Aunque los ingresos son poco frecuentes alcanzan para reponer los insumos (hilos, telares, lienzos) y el resto lo destinan al consumo de alimentos para el hogar. Además, destinan una parte de su ingreso a las fiestas comunitarias. Las familias asumen alguna mayordomía o colaboran con la de algún otro miembro de la familia extensa. Aunque la fiesta no es una actividad obligatoria, la mayoría de la población asume el compromiso por apego a la fe y para contribuir a la cohesión comunitaria.

La organización colectiva para las artesanas de Akatl ha posibilitado la compra al mayoreo de insumos y distribuyen los costos de traslado entre las integrantes. También han logrado estandarizar la calidad de sus productos para mejorar los precios de venta. Ya que son un grupo organizado, las consideran para asistir a ferias y/o exposiciones en donde es posible encontrar un precio menos inequitativo por su trabajo. En paralelo, la organización ha posibilitado el acceso a recursos externos y apoyos públicos.

La elaboración de artesanías es una alternativa para completar el gasto doméstico. Aunque enfrentan dificultades por ejemplo: altos costos en los insumos, mercados que no remuneran el trabajo, baja calidad de los productos, uniformar los costos y asociarse. Han existido varios intentos para potenciar la organización colectiva de las artesanas, hasta ahora sin mucho éxito, ya que sigue siendo una actividad individual y familiar a excepción de la cooperativa de bordadoras que se mantiene trabajando en colectivo.



Los cambios en las relaciones de género se relacionan con el aporte al gasto doméstico de las mujeres artesanas. Al observar dicho aporte los esposos apoyan la actividad, por ejemplo, cuando tienen pedidos de muchas piezas colaboran bordando o acompañan a las mujeres a los lugares de venta. El trabajo de las bordadoras (y de otras mujeres que trabajan fuera del hogar) contribuye a desnaturalizar la exclusividad del trabajo doméstico asociado con las mujeres. Así, las labores de las artesanas incorporan trabajo intra y extra doméstico. Dentro del hogar se borda y fuera del hogar gestionan la compra de insumos y la comercialización, además de los apoyos públicos. En ambos espacios la colaboración de los esposos y familiares masculinos se observa.

En el Mezquital, los textiles se elaboran con fibras duras y los hilados y tejidos de lana y algodón son considerados suaves. La elaboración de textiles de fibra de maguey se realizan entre la población otomí de la región semidesértica. En el Alto Mezquital las artesanías de fibra del maguey-duras (ixtle, en hñahñu) y de lechuguilla (xithe en hñahñu) han sido una estrategia de sustento del pueblo otomí desde el periodo colonial. Los ayates de fibra de maguey son prendas tradicionales usadas por hombres y mujeres. Tienen un significado ritual ya que se ofrecían a la Señora de la Concepción en el Cardonal (Medina y Quezada, 1975). Aunque la elaboración de textiles de ixtle y lechuguilla es común entre las mujeres hñahñus de la región, el conocimiento de la práctica completa es conocido sólo por algunas mujeres de mayor edad. El procesamiento incorpora, el secado de la penca o fermentación, el tallado, lavado, secado e hilado de la fibra. Además, las artesanas requieren de conocimientos campesinos para identificar el maguey con la penca más apta para el procesamiento (entrevista a profundidad, Jozelin María Soto Alarcón, 2016).

Para la elaboración de fibra se selecciona el maguey maduro, se cortan las pencas. Existen dos procesos para desfibrarla; el crudo consiste en dejar secar las pencas al sol o en el que asan y fermentan la penca por dos días. Una vez que la penca se seca o fermenta se coloca sobre una piedra y se golpea con un mazo de madera para machacarla y despulparla hasta que queda la fibra. Esta se sumerge en 'sangregrado' (planta medicinal de la región árida) o en agua y jabón o en agua de nixtamal, se colocan al sol y los finos hilos se peinan una vez secos (Medina y Quezada, 1975). Anteriormente el ixtle se utilizaba para elaborar ayates, lienzos que aún se utilizan en la vestimenta tradicional de las hñahñus. Los más finos son regalos de bodas y denotan prestigio de la bordadora. Aunque también se tejen ayates menos finos para el uso doméstico y de carga. En la actualidad (2019), los ayates tienden a sustituirse por bolsas de fibras



artificiales, sin embargo la fibra de maguey se utiliza para bordar adornos personales como aretes, pulseras, bolsas, manteles o artículos de limpieza como esponjillas de distintos tamaños, los ayates se usan en ceremonias o para regalos. Las artesanías pueden venderse en color natural o teñir la fibra con pinturas naturales de flores y algunos frutos.

El grupo de mujeres Milpa Maguey se integró a finales de 1990 para procesar néctar de aguamiel. La cooperativa está integrada por 20 mujeres y un hombre hñähñus. Además de procesar el néctar de aguamiel, diez socias hilan y bordan artesanías de ixtle: esponjillas, aretes, manteles y ayates. Aunque sólo tres integrantes dominan todo el proceso desde despulpar la penca hasta el lavado, secado, peinado e hilado de la fibra. El procesamiento del ixtle involucra al menos dos semanas para convertirse en fibra. Aunque si desean pintar la fibra, el proceso puede tomar al menos tres días más. La mayoría de las bordadoras interviene en la última fase: el bordado y diseño de la artesanía, el periodo de tiempo depende del tamaño y complejidad del bordado además de la habilidad de la artesana. Las socias bordadoras compran el ixtle por kilo ya hilado en la comunidad.

El diseño, bordado y acabado lo realiza cada socia desde el espacio doméstico, aunque en las reuniones organizativas de la cooperativa también intercambian prácticas de bordados, ideas y nuevos diseños. La venta de la artesanía es individual, además cuando hay clientes en la cooperativa se exponen y venden. Al igual que las bordadoras de Acatlán, las artesanas de la Milpa Maguey usan los tiempos que consideran inactivos para bordar, incluyendo las noches. El precio de las artesanías es muy variado, su determinación está en función del tiempo de trabajo invertido. Por ejemplo, un ayate de tipo ceremonial utilizado en bodas puede alcanzar un precio de entre 2000 a 4000 pesos MX. (200 a 400 dólares) e involucra meses de trabajo. Sin embargo, las artesanías que venden las socias oscilan entre los 40 y 200 pesos mexicanos. La elaboración de artesanía es una actividad económica ampliamente difundida entre las mujeres jóvenes y adultas. Las artesanías acompañan a las mujeres al mercado, al taller de la cooperativa, a la escuela primaria cuando recogen a sus hijos. En cualquier encuentro se intercambian bordados o se vende alguna pieza. Durante el 2014, los ingresos provenientes de la artesanía de fibra del maguey contribuyeron con el 2% del ingreso del hogar de las socias de la cooperativa (encuesta socioeconómica, 2014). El excedente del trabajo de las artesanas se destina para ampliar la disponibilidad y consumo de alimentos en los hogares.



El tejido y bordado de ixtle es una actividad complementaria en los ingresos de las mujeres. Los esposos colaboran con el trabajo: despulpan las pencas ya que es un trabajo físicamente pesado y el jugo de la penca genera salpullido en la piel. A diferencia de las artesanas en Acatlán, la colaboración de los esposos se limita al ámbito doméstico, los hombres no bordan, diseñan o comercializan ninguna artesanía de Ixtle, este proceso es exclusivo de las mujeres. En general el trabajo de las mujeres artesanas es bien visto entre los miembros masculinos de la familia, ya que la esposa realiza un trabajo adicional con el que consigue ingresos sin descuidar las labores domésticas. Sin embargo, el sobreesfuerzo de las mujeres no es recompensado por el limitado precio al que venden sus productos, dicho valor se asocia con la idea de que el trabajo de las mujeres es de menor calidad. Aunque los ingresos de las mujeres favorecen el consumo no alcanzan para acumular y reinvertir en dicha actividad.

Tanto entre las bordadoras de Acatlán como en las bordadoras de la Milpa Maguey, el conocimiento sobre esta práctica se transmite considerando las diferencias de género, las madres enseñan a las hijas pero los hombres aprenden observando. En el caso de la Milpa Maguey, el conocimiento no se limita al bordado, incorporan también conocimientos campesinos sobre los tipos de magueyes más aptos para la fibra, estas prácticas se comparten entre hombres y mujeres, sin embargo, el hilado, bordado, diseño y comercialización es realizado exclusivamente por mujeres. La transmisión de dichos conocimientos forma parte de la ampliación y divulgación del conocimiento campesino situado de las mujeres –comunes- y fomenta el cuidado de las plantas locales.

Conclusiones

El trabajo de las mujeres rurales ocurre en una economía dual; se desempeñan como productoras de bienes y servicios, asumen tareas de reproducción social en el ámbito doméstico y en la parcela familiar. La elaboración de la artesanía en los dos grupos, es una actividad donde se alternan espacios domésticos, individuales y colectivos, con efectos en las economías comunitarias locales asociadas con el consumo, la distribución de excedente y los encuentros. En el ámbito doméstico hilan y bordan en los tiempos que consideran libres. En los espacios colectivos propician dinámicas para mejorar la calidad, innovar diseños, generar nuevos conocimientos asociativos para gestionar compras y ventas colectivas, y elaborar propuestas de financiamiento público y con organizaciones civiles. Para la elaboración de artesanías, las mujeres consideran conocimientos culturales y ambientales situados. Las prácticas para hilar, realizar el



telar, diseñar y bordar se enseñan, reproducen y amplían en los *encuentros* entre compañeras, en ellos comparten “puntadas”, hilos, o recomendaciones para hacer una mejor artesanía.

La actividad de las bordadoras tiene impactos en la economía doméstica, los ingresos se integran al gasto doméstico e incrementan la disponibilidad del *consumo* de alimentos, educación y cobijo de los integrantes de la familia, aunque las posibilidades de *distribución del excedente* no contribuye a la *acumulación* en el sector, ya que los ingresos de ventas apenas son suficientes para reponer el costo de la materia prima. A pesar de los esfuerzos de las mujeres, el valor de las artesanías se enfrenta al limitado mercado local, el intermediarismo que en Guerrero se asocia a la subcontratación y el trabajo a destajo, con peores remuneraciones para las mujeres, además de los altos costos de comercialización que implica la participación en ferias con ingresos inseguros. Sin embargo, para las mujeres parece una alternativa ya que la asocian con sus tiempos libres, a costa de su descanso y tiempo de disfrute.

Por otro lado, el continuo esfuerzo de las artesanas en algunas ocasiones encuentra correspondencia entre los familiares masculinos, quienes al observar la contribución al gasto doméstico colaboran en actividades propias de la artesanía o asumen labores domésticas para descargar las tareas de las artesanas. Compartir dichas labores para aliviar el exceso de trabajo y desnaturalizar el trabajo doméstico de las mujeres contribuye en la alteración de las relaciones de género en los hogares. Contradictoriamente estos cambios se originan en un contexto de intensificación de trabajo de las mujeres, se destaca la importancia de incorporar a otros actores en las actividades para la reproducción social de los hogares.

Las políticas públicas vinculadas al sector de la artesanía deberán identificar la relación entre los espacios domésticos, individuales y colectivos, así como la participación de organizaciones civiles en la capacitación, financiación y comercialización de las mujeres artesanas. En el espacio doméstico familiar, las políticas públicas deberán adecuar esquemas de atención o mitigación del exceso de trabajo de mujeres rurales, ya que se desempeñan en las labores domésticas, el jornaleo, la artesanía y en las parcelas. Mientras en el espacio colectivo, es posible fomentar la asociación de grupos de artesanas a partir de esquemas de capacitación, técnicas para mejorar y estandarizar la calidad e incrementar puntos de venta que remuneren precios más justos por el trabajo de las mujeres y generen más confianza entre compañeras



Notas

¹ El traje se compone de dos piezas el enredo o tecuetl que es una hermosa y larga falda hecha de telar de algodón, bordado con hilos de seda o estambre, en algunos casos con aplicaciones de lentejuelas, de acuerdo a fuentes fotográficas estas se incorporaron recientemente. Mientras el “huipil”, es una blusa holgada y cuadrada de color blanco en tela de satín lleva un bordado de grandes flores de colores en artisela. El traje es usado para los actos cívicos, políticos, fiestas patronales, entre las mujeres del municipio y de otras regiones del estado, es decir, ha sido folklorizado sin embargo, para los pobladores de la comunidad su traje es ocupado solo para actos ceremoniales o civiles de importancia. El costo es de aproximadamente 5000 pesos (250 dólares E.U.).

Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Área académica de Economía. Correo electrónico: jmsoto@uaeh.edu.mx

² Profesora investigadora de la Escuela Superior de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero. Correo electrónico: rosaldiaz@yahoo.com.mx, diazrosalba190574@gmail.com

³ Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Área académica de Economía. Correo electrónico: angelica_vazquez4048@uaeh.edu.mx

⁴ Profesor-Investigador de la Escuela Superior de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero. Correo electrónico: rescalvo@yahoo.com

Referencias

Arizpe, L. y Botey, C. (2014). Mexican agricultural development policy and its impact on rural women. En Arizpe, L. *Migration, women and social development*. (pp. 96–113). New York: Springer International publishing. Springer Briefs on Pioneers in Science and Practice 11. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06572-4_8

Angulo, A. (2000). Déjate sacar un ojo para luego sacar los dos. *Revista de Estudios de Género La Ventana*, 1 (11), pp. 120-143.

Buendía, A., Alberti, P., Vázquez, V. Pacheco S. y García L. (2008) Factores que limitan el éxito de los proyectos productivos de mujeres en el municipio de Texcoco. Un análisis de género. *Espacios públicos*, 11 (23), pp. 279- 297.

Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory. *Theatre Journal*, 40 (4), pp. 519-531.



- Díaz, V., R. (2003). El ritual de la lluvia en la tierra de los hombres-tigre. Cambio socio cultural en una comunidad nahua. Acatlán, Guerrero 1998-1999. CONACULTA, pp. 41-43
- González, S. (1999) Mujeres, trabajo y pobreza en el campo mexicano: una revisión crítica de la bibliografía reciente. En Alatorre J., Careaga, G., Jusidman, C., Salles, V., Talamante, C. y Townsed, J. (Coords.). *Las Mujeres en la pobreza*. (pp. 179-214). México D.F.: GIMTRAP-El Colegio de México.
- Gibson, A., Law, L., y Mckay, D. (2001). Beyond heroes and victims. Filipina contract migrants, economic activism and class transformation. *International Journal of Politics*, 3 (3), pp. 365-386.
- Gibson-Graham, J.K, Cameron, J. y Healy, S. (2013). *Take back the economy. An ethical guide for transforming our communities*. Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
- Medina, A. y Quezada, N. (1975). *Panorama de las artesanías otomíes del Valle del Mezquital*. Cd. De México: Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Mies, M. (2012). *The lacemakers of Narsapur*. Spinifex Press.
- Molyneux, M. (2006). Mothers at the service of the new poverty agenda: Progres/Oportunidades, Mexico's Conditional Transfer Programme. *Social Policy Administration*, 40(4), pp. 425-449. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9515.2006.00497.x>
- Moctezuma, P. (1998). Las artesanas endeudadas de Patamban. En G. Mummert y L. Ramírez (Eds.), *Rehaciendo las diferencias* (pp. 73-102). Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Yucatán.
- Moser, C. (1989). Gender planning in the third world: Meeting practical and strategic gender needs. *World Development*, 17(11), 1799-1825. doi: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(89\)90201-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(89)90201-5).
- Mummert, G. y Ramírez, L. (1998). Rehaciendo las diferencias: Identidades de género en Michoacán y Yucatán. Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Yucatán
- Pérez, L. y Mummert, G. (1998). La construcción de identidades de género vista a través del prisma del trabajo femenino. En Mummert G. y Ramírez L. (Eds.) *Rehaciendo las diferencias: Identidades de género en Michoacán y Yucatán*. (15-34). Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma de Yucatán.



Rendón, T. (2008). *Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el siglo XX*. (2da edición). Ciudad de México: CRIM, UNAM.

Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. *Revista Nueva Antropología*, 8(30), pp. 95-145.

Robles, H. (2013). *Los pequeños productores y la política pública*. Subsidios al campo en México. <https://bit.ly/2T2tQFS>

Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México. (2017). Serie Informes/País. Mexico. Mujer Rural y Derecho a la Tierra América Latina y el Caribe. International Land Coalition America Latina y el Caribe. <https://bit.ly/3nYcad5>

Wilson, F. (1993). Workshops as domestic domain: Reflections on small-scale industry in Mexico. *World Development*, 21(1), pp. 67-80. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(93\)90137-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90137-X)



Las mujeres rurales y su inserción en los procesos de producción agrarios. Dos regiones argentinas: Estudio de casos

Claudia Marcela Torres Zanotti
Adhemar Enrique Pascuale
Marisa de Luján Gonnella

Resumen

La identidad de las mujeres rurales está ligada a los procesos agrarios de producción. Su inserción varía según las regiones geográficas de nuestro país y se vincula a los intereses y relaciones de poder presentes en los actores sociales participantes de dichos procesos de producción. Este trabajo propone visibilizar la inserción de las mujeres rurales y sus problemáticas, desde las perspectivas de género, a partir de su inserción como productoras agrarias, asalariadas y con acceso a recursos, en las nuevas delimitaciones territoriales de las regiones pampeana y patagónica de la República Argentina, desde la década de los noventa, aunque la recopilación de información se focaliza a partir de las últimas dos décadas. Nuestro objetivo es caracterizar el acceso a los recursos y las actividades llevadas a cabo por las mujeres rurales de las zonas antes mencionadas, atendiendo a sus historias personales y trayectorias de vida. Si bien los datos obtenidos no son generalizables al total de las mujeres rurales, resulta interesante encontrar en el análisis lo que las acerca y aleja en la problematización desde realidades diferentes. Metodológicamente se trabaja con datos secundarios, provenientes de informantes calificados y datos primarios, obtenidos de encuentros y entrevistas. En los comentarios finales se hace referencia a los interrogantes que se suscitan desde el abordaje teórico-metodológico de la complejidad que enfrentan las mujeres agrarias, vinculadas e insertas en los procesos de producción, de recolección y de producciones artesanales de estas dos regiones, cuya base es un trabajo previo de caracterización social de dichas zonas.

Palabras clave

Mujeres rurales; nuevos territorios; producciones agrarias; regiones Pampeana y Patagónica; República Argentina.

Abstract

The identity of rural women is linked to the agrarian production processes. Its insertion varies according to the geographical regions of our country and is linked to the interests



and power relations present in the social actors participating in these production processes. This work proposes to make visible the insertion of rural women and their problems, from gender perspectives, from their insertion as agrarian producers, salaried and with access to resources, in the new territorial delimitations of the Pampa and Patagonian regions of the Argentina Republic, since the nineties, although the collection of information is focused on the last two decades. Our objective is to characterize access to resources and activities carried out by rural women in the above-mentioned areas, based on their personal histories and life trajectories. Although the data obtained cannot be generalized to all rural women, it is interesting to find in the analysis what brings them and away in the problematization from different realities. Methodologically we work with secondary data, from qualified informants and primary data, obtained from meetings and interviews. The final comments reference is made to the questions that arise from the theoretical-methodological approach of the complexity faced by agrarian women, linked and inserted in the processes of production, collection and artisanal production of these two regions, whose base it is a previous work of social characterization of these areas.

Keywords

Rural women; new territories; agricultural productions; Pampas and Patagonian regions; Argentina Republic

Introducción

Se parte de analizar el contexto histórico de la expansión del capital en el agro a partir de la internacionalización, como un marco global que deja improntas en las regiones y que se relaciona las valorizaciones de las producciones y de los actores sociales insertos y que conforman las mismas. Se focaliza en el tema de mujeres rurales.

Características de las dos regiones con sus localidades.

Las localidades de región pampeana así como de la región patagónica presentan características de origen las cuales están presentes en el circuito internacional y local, vinculados al mismo a los contextos internacionales, desde la internacionalización. Cercanías entre las localidades y migraciones a centros urbanos, con dinámicas de producción que superan al denominado sector agrario, hacen que en estas localidades se encuentran especificidades de los procesos agrario-urbanos históricos y actuales.



Localidad	Fundación	Población censo 2010
Firmat	20/12/1894	19.917 (2010)
<p>Actividades agropecuarias principales: La actividad agropecuaria registrada censalmente muestra un predominio de actividad agrícola-ganadera y dentro de ésta una tendencia a la actividad agrícola. Hay un total de 292 unidades de producción que abarcan 16.730 has según datos registrados por la provincia al 2014. Relacionados a éstas unidades de producción se encuentran producciones familiares capitalizadas, con ciclos de capitalización y de subsistencia. Contratistas de servicios y de producción, y producciones capitalistas. A estos se agregan aquellos que constituyen mano de obra rural o rural urbana según las épocas de trabajo.</p>		
Roldán	01/05/1866	14.299 (2010)
<p>Actividades de producción: De las 70 unidades de producción registradas en 2016 (Según IPEC; Instituto Provincial de estadísticas y Censos. Agosto 2017) productores registrados (datos estadísticas y Censos. Agosto 2017) productores registrados (datos estimados), 13-15 se encuentran en situación de limitar franjas urbanas y presenta riesgo la continuidad de producción bajo el esquema de producción agrícola, principalmente soja. La mayor superficie se destina a agricultura y mantiene ganadería en una proporción 75/15, en la cual hay tambos, cría y algo de invernada por lo cual los lotes que están lindantes a la ciudad y se alquilan en algunos casos para realizar alfalfa u otras especies de bajo uso de productos agroquímicos.</p>		



Funes	1875	23.520 (2010)
<p>Actividades de producción: En esta localidad encontramos 28 productores agropecuarios, con una superficie total de 4.299 has, que varían entre quienes son propietarios y trabajan sus tierras y quienes ceden las tierras para ser trabajadas por contratistas de servicios. La superficie agrícola se destina en mayor proporción a soja, cultivo que desplazó a la actividad mixta agrícola-ganadera. Datos del 2007-2008</p>		
Región Patagónica		
El Bolsón	28/01/1926	19.009 (2010)
<p>Actividades agropecuarias principales Según el relevamiento anual del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal) para el 2013, el 55% de los productores tenían menos de 10 hectáreas netas plantadas con frutales de pepita y carozo que representaban el 16,3% de la superficie neta. En el otro extremo, el 2,2% de los productores de más de 100 hectáreas poseían el 34% de la superficie neta. Los que producen entre 20 y 40 hectáreas, están orientados principalmente a la producción de tomate para industria o cebolla para exportación.</p>		
Lago Puelo	1928/1971	6.038(2010)
<p>El 46,7% de la superficie se concentra en frambuesa, cerezo, frutilla y grosellas. Lúpulo: 45 has en 4--5 unidades de producción. La producción e implantación de bosque y reservorio de agua del Lago son recursos anhelados.</p>		
Epuyén	1950	1.749 (2010)
<p>La asociación de productores de Epuyén declara 30 productores (hay productores/productoras que no son parte de la asociación), los cuales son de mediana producción y/o superficie o minifundistas. Hay productores de subsistencia o de producción de comunidades originarias vinculadas a las explotaciones de los bosques y se tiene un registro poco preciso. La mano de obra rural es escasa; sin embargo, en las épocas de cosecha llegan los denominados recolectores de frutos a la región. Lo mismo sucede con quienes trabajan en los bosques relacionados a los aserraderos.</p>		

Fuente: (Agencias de Extensión Rural: AER Trevelin, AER El Hoyo y AER Esquel. Municipios: Esquel, Trevelin y sus parajes: Aldea Escolar, Los Cipreses, Lago Rosario y Sierra Colorada, Corcovado, El Hoyo, Cholila, Epuyén, Lago Puelo, Comuna Rural de Cerro Centinela, Carrenleufú).



En ambas regiones se encuentran circuitos locales generados entre actores sociales que se identifican al territorio y a los recursos, como tierra y trabajo y también hay un circuito internacional en ambas regiones vinculado al agro- negocio y relaciones locales e internacionales. Las mujeres son parte de la conformación de ambas regiones.

Registros censales, institucionales y sociales

El registro simbólico, aquel que se establece socialmente, trasciende la letra escrita de los campos de registros censales y se acentúa un registro social, que se relaciona a las mujeres en el contexto rural.

Nos proponemos analizar la formalización del registro escrito, por ejemplo, en censos y catastros respecto a la presencia de las mujeres como propietarias de medios de producción y las formas de acceso a los mismos, así como a la posibilidad de las mismas de ser o constituirse en productoras. Las valoraciones sociales, cuando se analiza el registro social, se evidencia en las relaciones sociales. Las diferencias entre regiones nos dan la posibilidad de salir de la especificidad de nuestra región (la pampeana) y ver las especificidades de la inserción de las mujeres como actores sociales de las producciones con relación a otra región, lo cual da riqueza al marco teórico-metodológico y a las referencias que el trabajo puede brindar, por ejemplo, para generar procesos de desarrollo.

Marco de análisis

El tema de género, se pone en agenda desde los márgenes sociales, lo que implica que no es solamente un tema relacionado al origen económico, ya que de considerarlo así omitiríamos la complejidad que internalizan las sociedades en las concepciones y dinámicas dominantes que las definen como tales y por las cuales se identifican como parte de las mismas. La globalización pone en cuestión estos márgenes y principalmente hasta donde rige la concepción de cada sociedad cuando los límites de las fronteras geográficas se desdibujan desde procesos migratorios de trabajo, de interacción entre culturas, desde las comunicaciones, desde la movilidad de capitales, entre otros aspectos. La problematización de las sociedades en los márgenes trasciende a la delimitación geográfica como espacio social. Es la frontera social donde se problematizan las dimensiones, donde se expresan los conflictos en el espacio social, no solamente los referidos a reproducción de las condiciones de un grupo social, sino también aquellos derivados de valorizaciones e instituciones, formas de institucionalizar,



del derecho y de las realidades culturales, es decir, aquello que se reconoce e identifica como parte y margen de las sociedades.

La asignación de tierras en la región Pampeana, post campaña al desierto, el protagonismo de los conflictos por el acceso a la tierra se relaciona a unidades familiares por un lado y a grandes estancias por otro. Se consolida así una identidad entre el acceso a tierra y al trabajo familiar. Formas del trabajo que se difiere del trabajo de peones, como el actor social poseedor solamente de trabajo y relacionado a la retribución como asalariado. Ambos actores sociales, se identifican con la figura de los trabajadores, pero sus intereses se vuelen antagónicos. Esto se pone en evidencia con las reformas que introduce el Consejo Agrario Nacional, que tiene injerencia en los temas agrarios en las propuestas e implementación de reformas agrarias referidas a la tenencia y propiedad de la tierra y al acceso a tecnología (capital). El acceso a la propiedad por parte de las mujeres es posible legalmente, sin embargo, no se hace mención a las mismas, solo se utiliza el lenguaje de unidades de producción y las decisiones en estas se relaciona, genéricamente, al "jefe de familia", término que jerarquiza los roles. En los hechos, actualmente para las mujeres, sigue siendo difícil acceder a recursos de producción y no escapa al contexto de América Latina, a pesar que, en la región Pampeana, a diferencia de la región patagónica, la genealogía, las relaciones sociales y la valorización se registran con identidades culturales diferentes.

La fuerza de trabajo que supone la unidad familiar de producción, así como se constituyó bajo diversas modalidades en una fuerza impulsora del desarrollo de los territorios, también, en parte, relega el trabajo de las mujeres a la esfera doméstica, a la reproducción de las condiciones de la unidad de producción, incluso de los poderes al interior de las mismas. Estas organizaciones familiares, son parte sustancial de la fuerza de trabajo del agro y de la producción de alimentos. También la presencia de las mujeres en actividades agrarias como asalariadas marca presencia en diferentes países, aunque históricamente se visualiza como un trabajo que no establece los mismos lazos sociales en los territorios, con relación a quienes acceden a la propiedad o son parte constitutiva de las unidades de producción. Dimensiones culturales atraviesan los territorios con relación a las producciones y a la inserción de las mujeres en las mismas. Las relaciones sociales pueden establecerse y re- configurarse, insertarse en términos de los valores que incluyen y excluyen en la representación de significados binomiales y funcionales



de las sociedades. Las tramas sociales, son complejas y van más allá de clasificaciones binomiales.

Luego de la Conferencia Internacional de la Mujer, en 1975, y en la década de la mujer de la ONU (1975-1985), dos temas se privilegiaron, ambos dirigidos a hacer visible a la mujer y su aporte a la sociedad: mujer y mercado de trabajo y la división sexual del trabajo. Los temas sobre propiedad de bienes y en particular de la tierra, quedaron desdibujados en los análisis; en parte esta ausencia se debió a la carencia de información agregada en las estadísticas oficiales sobre ellos. (León, M.: 2011)

Se contraponen y tensionan de esta forma la jerarquía social relacionando ésta a la institucionalidad y al orden social prevaleciente, como los valores predominantes. Las formas de organización social, o grupos de representación de poderes incluye y excluye a la vez en lo local e internacional, así como incluye y excluye la valorización del trabajo de las mujeres como actores sustanciales de las producciones. Es decir, la inclusión/exclusión, recorre tramas sociales en dinámicas permanentes en que se delimitan márgenes y bordes sociales. Sin embargo, en los márgenes en donde se incluye y excluye socialmente, a través de las tensiones sociales, la problematización de los temas referidos a género, adquieren visibilidad en las últimas décadas, con diferentes connotaciones según los distintos países a que hagamos referencia.

América Latina: antecedentes de la temática de género. El acceso a recursos en el contexto de las producciones agrarias y agropecuarias. Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos en todo el mundo. En los países en desarrollo responden por el 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola.

Participación laboral femenina en los países de América Latina (%) Mujeres entre 25 y 54 años, circa 2015 (en <https://bit.ly/3k3oiHp>)

Así, mientras que en los años 60 sólo un 20% de las mujeres adultas trabajaban o buscaban trabajo activamente, el porcentaje ha subido hasta alcanzar el 65% en la actualidad (Banco Interamericano de desarrollo: 2019). En el mismo estudio, tomando las diferencias entre México y Perú, se encuentra que las mujeres rurales trabajan sin percibir remuneración y que, en la categoría de asalariadas rurales, solo en México se encuentra un 11% registradas como mujeres rurales asalariadas. La posibilidad de empleo radica en las zonas urbanas, y las mejores condiciones de acceso a educación y trabajo.



Según el ATLAS de mujeres rurales de América Latina y El Caribe realizado por FAO (Nobre, M., Hora, K., Brito, C., y Parada, S. (2017), en la región Las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina en 2010, con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas u otras unidades productivas. En algunos países de América Latina se amplió de forma considerable la participación de las mujeres en la agricultura, ya sea como trabajo asalariado en empresas de agro-exportación de productos no tradicionales e intensivos, o por el incremento de mujeres responsables de una explotación. En cuanto al trabajo agrícola asalariado, la tasa de actividad promedio de la región pasó de 32,4% en 1990 a 48,7% en 2010.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en 1979, y su Plan de Acción, representaron un marco importante en esta lucha, en <http://www.fao.org/3/a-i7916s.pdf>. En este documento se menciona que al analizar el ordenamiento jurídico de los Estados y las prácticas consuetudinarias aplicadas en la sociedad, se hace evidente que las mujeres se encuentran en desventaja respecto al sexo opuesto. Los reglamentos tienden a concebir los “derechos” y la “ciudadanía” a partir de un núcleo familiar específico, no distinguiendo las relaciones de poder jerárquicas que allí existen. Esta concepción, al elegir la figura masculina como representante de la familia, limitaba el acceso de las mujeres a la ciudadanía, a la vez que le negaba el derecho al patrimonio. En el caso de las mujeres rurales, esto contribuyó a su bajo acceso a la propiedad de la tierra, principalmente debido a los principios de herencia familiar o que regían el divorcio, que en general privilegiaban al hombre.

Las luchas iniciadas en las décadas de los '60 y '70 del siglo XX para las mujeres rurales, se refleja en logros como la convención de Brasilia, de forma que ratifica la Declaración de Brasilia, resultante de la I Conferencia de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, en la Estrategia de Género del Plan de Seguridad Alimentaria de la CELAC, aprobada en 2016.

El derecho al acceso a la tierra, las concepciones de trabajo productivo y reproductivo, asociado al doméstico, se vuelven centro de debates para interpretar dinámicas colectivas e individuales de las mujeres rurales, de sus formas de vidas y posibilidades



de acceso a recursos en marcos diversos como son los diferencias movimientos que se generan en los países.

En la Argentina constituyen una referencia los trabajos de Norma Giarraca (2001) y de Karina Bidaseca (2007; Vanesa Vázquez Laba (2008). En el Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) se han realizado investigaciones sobre el empleo de mujeres en la clasificación y empaque de fruta y su presencia en la organización sindical y sobre las migrantes chilenas en las chacras frutícolas (Bendini y Bonaccorsi; 1997; Radonich y Trpin; 2013). Sin ser estos los únicos trabajos a la actualidad.

La situación en Argentina

En Argentina los primeros censos son previos al 1900, aunque en 1969 se comienza a tener presencia de la división por trabajo asalariado, pero este registra mayor cantidad de mujeres asalariadas en la industria. En el agro, quizás es más visible el registro como unidades de producción y quienes

componen la misma y pocos los registros que se realizan del trabajo de las mujeres y la valoración del mismo, salvo el referido a la esfera doméstica. Los trabajos que incluso realizan con relación a las producciones, se relacionan a parte del trabajo doméstico. Es decir, la división del trabajo se registra en roles y esto cosifica el rol respecto a las relaciones sociales y actividades inherentes, el cual permanece durante generaciones, es decir pueden ser madres, abuelas, hijas o hijos.

Según relevamiento Núñez P. y Michel C.:(2019) es en 1914 y 1969, los años en que metodológicamente, se producen modificaciones en los censos, en las unidades a relevar y formas de registrar la información, se encuentra que:

Año de referencia 1869: las labores masculinas se toman como profesiones, analizándose qué tipo de profesionales están armando el país y ubicando allí los “curanderos y curanderas” (de la Fuente 1872: XLIV). El trabajo femenino, citado como “costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras, amansadoras, etc.” (De la Fuente 1872: XLV) se plantea como población que “espera con incertidumbre el sustento de jornal”. En este primer censo, el trabajo femenino se muestra de debilidad y el trabajo de los varones es condición de crecimiento del país.

Año de referencia 1895: respecto de la población considerada según sus profesiones llama la atención el reconocimiento y la preocupación que se le da a la gran cantidad de



mujeres sin profesión. Hay una crítica hacia el mismo Estado al afirmar que “Esto demuestra que todavía no se ha sabido dar una dirección útil y directamente remuneradora al trabajo de la mujer, que destituida de medios de subsistencia propios tiene que confiarse a la protección del hombre” (de la Fuente 1898: CXLII). A diferencia del primer censo, el de 1895 unifica en un mismo cuadro las profesiones de las mujeres y de los varones, reconociendo la capacidad que poseen las mujeres para participar de la estructura productiva del país. Los principales trabajos reconocidos son como personal de servicio, luego como costureras, horneras, tejedoras y agricultoras, entre otras.

Año de referencia 1914: La conclusión de este censo es que para 1914 la inmensa mayoría de las mujeres patagónicas no trabajaba. Los cuadros no ignoran el hacer de la mujer, directamente lo grafican como no-trabajo, omitiendo su importancia y desconociendo la estructura social de esfuerzo que hace la vida posible en la región.

Estos resultados se enmarcan también en los censos nacionales, donde la población femenina ligada al trabajo rural fue del 7%, mientras que el porcentaje de mujeres trabajadoras en general fue del 14%. En el caso patagónico solo se destaca el caso de Neuquén. Estos guarismos merecen dos observaciones: por una parte, son notablemente menores a los del censo previo de 1895, que había registrado para el país un 30% de mujeres trabajadoras con un 17% de trabajadoras rurales; por otra, dada la relevancia del trabajo rural en un territorio que se organizaba como agro-ganadero, es notable la decisión de omitir las tareas femeninas asociadas a estas prácticas.

En el censo de 1914, tal vez por una estructura social más jerárquica, lo femenino se desdibuja respecto del trabajo masculino del “esposo”, presentando a la Patagonia explícitamente casi sin mujeres trabajando, en contra de lo que el censo precedente permitía sugerir o como la poesía y el folclore patagónico recuerdan (Núñez P. y Michel C. 2019).

En la región pampeana se presentan condiciones similares, aunque cobra mayor importancia la imagen de las mujeres que establecen su poder en instituciones vitales para las comunidades como son hospitales, hogares de huérfanos, escuelas, sociedades de fomento, entre otras. Estas actividades no aparecen registradas como trabajos en los censos. Es considerada una actividad social, la cual les permite trascender de la esfera doméstica del trabajo y situarse en el espacio común de las sociedades. Las imágenes de las esposas de hacendados, en la región, se contraponen



con la imagen de la esposa del denominado chacarero. Los círculos de relaciones sociales son diferentes. Los espacios generados institucionalmente como las escuelas rurales, Hogar rural de INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) tienen distintas visualizaciones respecto al reconocimiento social por un lado y del trabajo por otro.

En ambas regiones el poder se establece en las relaciones sociales en el nivel institucional, así como en el laboral. El registro de trabajadoras rurales, quizás es más visible en la región patagónica debido a una mayor necesidad de mano de obra en las actividades frutícolas y hortícolas y en menor medida en la actividad forestal o ganadera.

La Región Pampeana y la Región Patagónica presentan la forma de organización de la producción de base familiar, como aquellas unidades de producción que consolidan relaciones estructurales respecto a la producción, al acceso a recursos y a relaciones institucionales en los territorios. En esta trama social, el trabajo de las mujeres, se puede visualizar, como de constante precariedad. Es decir, el trabajo es constante en tanto la visualización del mismo es intermitente, así como la valorización de éste por actividades. Tales características han sido observadas en los espacios agrarios que deja un papel subordinado de la mujer en el trabajo y estereotipos de género que operan en la definición de las calificaciones y de las ocupaciones. (Nuñez P y Michel C.:2019).

El acceso a la propiedad por parte de las mujeres en región pampeana es posible, sin embargo, son pocas las que deciden ser productoras y ponerse al frente de las unidades de producción. En la región sur, cuando estas son producciones familiares o de subsistencia, las mujeres suelen llevar adelante las mismas; sin embargo, es dificultoso el título de propiedad de las tierras, aunque legalmente no hay restricción para que las mujeres sean propietarias de tierras. El incremento del precio de la tierra en ambas regiones (INTA 2008), aleja aún más las posibilidades de acceso a la tierra por compra de campos por parte de pequeñas y medianas unidades de producción, más aún por parte de las mujeres. Hay que recordar que se agudiza la concentración de tierras de tal forma que se comienza a denominar acaparamiento de tierras.

El registro censal, marca el registro simbólico y éste a su vez el registro censal, en tipos sociales que sin llegar a ser categorías, inciden en las conceptualizaciones entre márgenes conceptuales por los cuales se conceptualizan las sociedades, los grupos sociales, las identidades, los territorios, las culturas, las economías, los roles, es decir relaciones sociales estructurales.



Comentarios finales

Las dimensiones que atraviesan a los actores sociales modifican las relaciones de estos entre ellos. Este protagonismo redefine las relaciones sociales y empodera lo femenino. Aunque se visualizan avances, falta mucho todavía para que el sector escuche sus reclamos, los visibilice y modifique situaciones de violencia e injusticias por tenencia de tierras o legales.

Haber trabajado con dos regiones bien distantes y diferentes nos sirvió para delimitar semejanzas y diferencias en torno al rol asignado a las mujeres y al registro de éstas en el agro en nuestro país y por extensión en América Latina.

Reconocemos al contexto (social, político, cultural, económico) como determinante e influyente de todos los actores sociales, tanto hombres como mujeres, por eso hablamos de una violencia situada, marcada por el territorio. La relación de género es una relación de poder, donde los sujetos que intervienen no son iguales. En esta relación desigual están los que tienen autoridad para decidir sobre la vida de los demás y quienes obedecen, apareciendo las figuras de dominante y dominado.

En América Latina, quizá como en todo el mundo, se articulan tres formas de discriminación: de clase, de género y de etnicidad. Las mujeres no han quedado al margen de esta discriminación, especialmente las indígenas, las rurales, las trabajadoras domésticas, las niñas y las jóvenes.

Es necesario desarrollar nuevas experiencias de alteridad básicas que poder lograr una convivencia en comunidad, en el más profundo sentido de la palabra.

La globalización, la expansión del capital financiero, el avance de las multinacionales sobre territorios y recursos y las crisis tanto locales como regionales e internacionales han agravado el problema de la desigualdad, poniendo cada vez más en evidencia los dos modelos de desarrollo existentes: uno con equidad y respeto a la naturaleza, a la biodiversidad y otro neoliberal y al servicio del capital financiero.

Los Estados no visibilizan el trabajo que las mujeres realizan en las economías rurales y urbanas, en la producción de patrones culturales, en la administración de ecosistemas, en los procesos de representación social y otros de vital importancia para el desarrollo. Son Estados excluyentes de ciudadanía, de negación del otro, es decir el Estado es hegemónico y no parece existir un otro Estado posible.



En síntesis, sostenemos la necesidad de desarrollar políticas de equidad de género, de visibilización de lo femenino, que no solo van a dignificar a las mujeres y ubicarlas en el lugar social que les corresponde, permitirán crear un nuevo paradigma igualitario y de derechos humanos, que incluya y no excluya; a la vez que incluye.

Referencias Bibliográficas

Bendini M y Pescio C. (1997). Mujer y trabajo: las empacadoras de fruta del Alto Valle. En Bendini M. y Bonaccorsi N (comp.). Con las puras. Mujer y trabajo en regiones frutícolas de exportación. Buenos Aires. La Colmena.

Bidaseca; K. 2005. Cuando las mujeres no migran... Trabajo; salud y reproducción en Huasa Pampa. En Giarraca; N. y Teubal; M. (Comp.): El campo argentino en la encrucijada. Buenos Aires: Alianza.

BID-CEDLAS (2019). Participación Laboral femenina: ¿Qué explica la Brecha entre países? En <https://bit.ly/3k3oiHp>

Laba, V. V. (2008). Re-pensando la división sexual del trabajo familiar. Aspectos teóricos y empíricos para la interpretación de los modelos de familia en el noroeste argentino. Trabajo y Sociedad, 10(11).

León, M. (2011). La desigualdad de género en la propiedad de la tierra en América Latina. Du grain à moudre. Genre, développement rural et alimentation, 189- 207.

Nobre, M., Hora, K., Brito, C., y Parada, S. (2017). Atlas of rural women in Latin America and the Caribbean. Atlas of rural women in Latin America and the Caribbean. En www.fao.org

Núñez, P. G., & Michel, C. (2019). Territorios conquistados y trabajos invisibles. Las mujeres en el ordenamiento territorial patagónico. Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, 22(2), 13-23.

Ferro, S. L., & Quiroga, M. D. C. (2008). Género y propiedad rural; coordinado por Maria del Carmen Quiroga. - 1a ed. - Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires, Argentina.

Giarracca, N. (2001). El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina. Una nueva ruralidad en América Latina, 129-151.

Proyecto FAO UTF ARG 017 – Desarrollo Institucional para la Inversión - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios, Población Rural y Pueblos Originarios.



Proyecto FAO UTF ARG 017 – Desarrollo Institucional para la Inversión - Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N° 1 “Características económicas, sociales e institucionales”

Radonich, M., & Trpin, V. (2013). Mujeres migrantes en la organización de territorios rurales en el Alto Valle de Río Negro. Migraciones internacionales: reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial contemporánea. Buenos Aires: CICCUS, 279-304.

(<https://bit.ly/2H6L5Dq>) (Ingreso agosto 2017)

(<https://bit.ly/342ImFd>) (Ingreso agosto 2017).

(<https://bit.ly/31bOPdQ>) (Ingreso agosto 2017).



Relações identitárias e modo de vida camponês: Uma análise sobre os jovens do assentamento Pirituba, do MST, em Itapeva (SP)

Camila de Araújo Maciel

Resumo

Este artigo apresenta parte dos resultados observados em dissertação que analisa alguns dos elementos identitários com a luta pela terra mobilizados pelos jovens do assentamento da Fazenda Pirituba — em Itapeva (SP), onde o MST atua. O assentamento foi criado em 1984, resultado de processos de mobilização e organização dos trabalhadores sem terra da região do sudoeste paulista. Com base nos conceitos de movimento social, ruralidade, memória e identidade, a pesquisa investigou as relações que os jovens hoje estabelecem com elementos que constituem o assentamento historicamente e na atualidade, buscando identificar, com base na literatura sobre juventude rural, possíveis conflitos contemporâneos no modo de vida camponês. Para isso, foi realizada pesquisa de campo no assentamento, com uso de três procedimentos metodológicos: a) observação participante que totalizou uma incursão de cerca de três meses; b) aplicação de questionários com 32 jovens; c) e entrevistas em profundidade com sete desses jovens, sendo utilizada a Análise de Discurso como método interpretativo dos dados coletados durante esse terceiro procedimento. Serão abordados neste artigo, portanto, os resultados vinculados à relação identitária dos jovens com o assentamento, os quais revelam a busca de alternativas não agrícolas como modo de vida e tensões nas relações comunitárias.

Palavras-chave

MST. Juventude Rural. Memória. Identidade. Movimento Social.

Introdução

Ficar ou partir. Este é um impasse recorrente nos trabalhos que abordam a juventude no campo brasileiro. No contexto rural, as vidas dos jovens parecem se desenvolver entre essas duas possibilidades (Castro, 2009). E, no meio delas, diversos fatores concorrem para a permanência ou a migração: relações sociais, condições estruturais, oportunidades de lazer, acesso a atividades agrícolas ou não agrícolas, entre outras.

Apresento, neste artigo, parte dos resultados encontrados durante a pesquisa de dissertação de mestrado em Sociologia na Universidade Estadual de Campinas



(Unicamp). Neste trabalho, me propus a refletir sobre a permanência dos jovens do assentamento da Fazenda Pirituba, em Itapeva, no sudoeste paulista, a partir de elementos identitários relacionados à luta pela terra em uma área conquistada há mais de 30 anos. Permeados pela constituição histórica do assentamento e pela memória relacionada a essa trajetória de mobilização e organização dos trabalhadores sem terra, os discursos e as práticas dos jovens do Pirituba se vinculam, também, a outros elementos identitários e a relações sociais como a identificação com o modo de vida camponês e a relação com o urbano.

Há, no Brasil, 972.289 famílias assentadas em pouco mais de 9,3 mil assentamentos, de acordo com o painel de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com dados de dezembro de 2017. As percepções da juventude sobre a luta por terra e a identificação com a vida no campo nos ajudam a entender as relações sociais no meio rural brasileiro.

A Fazenda Pirituba, localizada nos municípios de Itapeva e Itaberá, foi incorporada ao patrimônio público estadual em 1950 por meio da execução de dívida da Companhia Agrícola e Industrial de Angatuba. A área de 17.500 hectares passou a ser propriedade do Banco do Estado de São Paulo. Segundo informações da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), o governo paulista pretendia destinar essas terras para colonização, mas a fazenda foi arrendada para um grupo de pecuaristas, mantendo a lógica do latifúndio. Foi na década de 1980 que trabalhadores sem terra da região passaram a disputar esse território.

As primeiras áreas – Agrovila 1 e Agrovila 2 – foram destinadas para assentamento em 1984, resultado de processos de acampamentos para reivindicação da área. Junto com a organização dos trabalhadores sem terra na região, nascia o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A fundação do MST se deu em Cascavel, no Paraná, aglutinando ações de luta por terra que despontavam nos anos 1980 junto com o processo de redemocratização do Brasil. No Pirituba, o processo de acampamento da Agrovila 3 já ocorre sob a organização do movimento. Nos anos seguintes, novas áreas – hoje com um total de seis agrovilas – foram sendo conquistadas e ainda hoje o MST reivindica terras que compõem a Fazenda Pirituba, fazendo com que a região conviva com acampamentos sem terra.

O MST se torna uma organização que, para além de reivindicações por terra, projeta um modelo de desenvolvimento para o país que põe em cena o trabalhador rural como



um sujeito de direitos, assim, ao se constituir como movimento social, o MST forja a identidade sem terra (Chaves, 2000). Essa forma de atuação do MST reverbera dentro do assentamento da Fazenda Pirituba.

Recorremos à ideia, desenvolvida por Pierre Bourdieu (1989), de que as representações da realidade social são construídas como produto de imposições arbitrárias e respondem a uma relação de forças nas lutas por delimitações legítimas. Lançamos mão ainda do conceito de memória (Bosi, 1993), entendido como uma construção social do grupo em que se vive e, portanto, o que é lembrado faz parte de um processo de escolha e rejeição. Compreende-se que esses dois conceitos – memória e identidade – nos ajudam a compreender a relação analisada nesta pesquisa como processos carregados de simbologias e construídos socialmente.

Outros dois conceitos-chave nos levam às especificidades do ambiente e dos sujeitos que são foco desta pesquisa: como as transformações no meio rural brasileiro, com a expansão do modelo do agronegócio globalizado (Elias, 2013), levam a mudanças nas dinâmicas socioespaciais do campo. Essas transformações, contudo, não são suficientes para fazer desaparecer as sociedades rurais. O “rural” é entendido não como essência (Wanderley, 2009), mas como uma categoria histórica, sujeita a mudanças. Nesse contexto, recorreremos à noção de “juventude rural”, a partir da qual nos voltamos para a caracterização do grupo social que tem desdobramentos próprios da vida no campo. Como nos lembra Elisa Guaraná de Castro (2007), não se trata apenas de um recorte populacional, mas de uma identidade social que deve ser lida a partir de processos de interação social e pelas configurações em que ela se encontra.

Metodologia

A pesquisa em campo teve início em fevereiro de 2016 em uma visita na qual fui apresentada às principais estruturas existentes no assentamento, como escola, rádio, cooperativas, entre outros espaços. Maria Cecília de Souza Minayo (2010) destaca a importância da aproximação com o campo de pesquisa de forma a estabelecer interações que ofereçam elementos substanciais para a análise interpretativa.

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os “atores” que conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social (Minayo, 2010, p.61).



Em campo, trabalhamos com observação participante desde a fase exploratória, sempre mantendo um diário de campo. Optamos, no seguimento da pesquisa, por uma abordagem por meio da aplicação de questionários que tinham como propósito traçar um panorama de hábitos socioculturais dos jovens do assentamento da Fazenda Pirituba, conhecendo aspectos da história de vida, meios de interação, consumo cultural e trajetória profissional e escolar. Foram entrevistados nesta fase 32 jovens, sendo 19 mulheres e 13 homens, na faixa etária de 20 a 29 anos.

Por fim, selecionamos 7 dos 32 jovens entrevistados para a etapa qualitativa, em que faríamos entrevistas em profundidade. Trabalhamos com um roteiro semi-estruturado que abordava pontos como as memórias da infância, a chegada dos pais ao assentamento, as informações que tinham sobre a origem do assentamento, a relação com a escola, com a cidade, com o MST, projetos de vida, entre outros.

Para empreender a análise dos dados coletados, recorreremos à Análise de Discurso. A teoria da Análise de Discurso, conforme explica Eni Orlandi (2000), trabalha com o conceito de que o discurso é um objeto sócio-histórico, não se tratando de uma expressão linguística fechada em si mesma. A teoria relaciona a linguagem à sua exterioridade. A autora esclarece que essa proposta de análise confronta o simbólico e o político, interpelando campos como a Linguística e as Ciências Sociais. A Análise de Discurso parte, então, da ideia

de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua-discurso-ideologia. Essa relação se complementa com o fato de que, como diz M.Pêcheux, não há discurso em sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido (Orlandi, 2000, p.17).

Patrick Charaudeau (2006, p.40) destaca que o discurso “resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas da troca) com a maneira pela qual se fala”. Nesse contexto, não se deve esquecer que “o acontecimento é sempre construído” (Charaudeau, 2006, p.95).

Relação identitária dos jovens com o assentamento

A maioria dos jovens desta pesquisa nasceu quando o território do assentamento da Fazenda Pirituba já havia sido conquistado. Aqueles que, contudo, já eram nascidos



dizem não ter lembranças desse período de luta pela terra por serem muito pequenos. O processo de desenraizamento de que fala José de Souza Martins (2009), próprio dos que enfrentam o desafio de lutar por reforma agrária, não se aplica diretamente à vivência desses jovens. Essa trajetória coletiva, contudo, perpassa as relações sociais no assentamento e o modo de vida da juventude.

Ao dizer que “o mundo social é também representação e vontade, e existir socialmente é também ser percebido como distinto”, Bourdieu (1989) nos leva a perceber como os discursos de valorização do meio rural são estratégias de diferenciação, no sentido de delimitar a existência do rural e, por consequência, dos sujeitos que lá habitam. Entre os jovens entrevistados, diferentemente do que se poderia esperar, ouvimos muitos relatos de valorização da vida no campo, normalmente demarcado por oposição ao urbano. “Todo mundo quer morar aqui”, disse Sílvia, 20 anos, em entrevista. Ela descreve o assentamento como um lugar “tranquilo”, “não muito barulhento”, e faz referência à opinião “urbana”. “Aqui, até quem mora na cidade fala que é um lugar muito gostoso de morar. [...] Porque é um lugar calmo”.

A condição de ser um espaço marcado pela vinculação com a natureza, destacada por Wanderley (2009) como uma especificidade do meio rural, aparece na fala dos jovens quando buscam valorizar essas particularidades. Sílvia, 20 anos, refere-se à qualidade do ar para justificar a falta de interesse em morar na cidade. “Não tenho vontade, não. Parece que toda vida que a gente vai, fica ruim. Porque é um ar muito... Estranho. É poluído. Aqui é mais tranquilo, mais gostoso” (Sílvia, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

Outros relatos similares apontam a qualidade da água e a preservação ambiental como fator de diferenciação:

Eu não gosto do barulho, o carro passando toda hora, me dá dor de cabeça. A água também é uma coisa que me incomoda muito. A água da cidade não mata a minha sede. Acho que por causa do cloro, né? Tanto que eu levo uma garrafinha de água pra Itararé [onde faz faculdade] pra eu beber. E se acabar minha água, vou embora com sede. Não bebo a água de lá. Acho que são as minhas maiores dificuldades (Rita, 23 anos, entrevistada em maio de 2018).

A tranquilidade daqui me faz querer ficar aqui. A paz que oferece. Perigo tem em todo lugar, mas ainda assim eu acho que o índice é bem menor no campo. Tem uma



tranquilidade maior do que na cidade. E o contato com a natureza que pra mim é muito importante. Na cidade está cada vez menos essa preservação ambiental. Uma coisa agitada (Simone, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

O assentamento foi descrito, em entrevista, pela jovem Letícia, 21 anos, como “sossegado”, onde “a única coisa que é ruim é que não tem nada”. Ela mesma diz adiante que prefere fazer deslocamentos diários para a faculdade em Itaberá do que morar na cidade, adiando uma situação que para ela será inevitável.

Não vou morar lá agora, vou todo dia de ônibus já por causa disso, mas um dia vou ter que sair daqui, né? Quando terminar [a faculdade], por exemplo. Eu queria continuar aqui, mas aqui é difícil, né? Não tem emprego. Agora eu vou todo dia de ônibus porque eu acho que não me acerto muito no momento na cidade, porque é diferente lá. Às vezes, minha avó mora em Itaberá, eu vou. Fico o dia todo lá e dali a pouco já quero ir embora, porque não tô gostando. É bem diferente (Letícia, 21 anos, entrevistada em agosto de 2018).

A dualidade que aparece no discurso desta jovem, entre as oportunidades na cidade e a tranquilidade do meio rural, é descrita por Anita Brummer (2007), que se apoia nas reflexões de Nazareth Wanderley.

Apesar de a cidade ser avaliada de forma negativa, devido à violência, drogas e miséria e à dificuldade de estabelecer relações de confiança, ela também é valorizada positivamente por constituir um centro de serviços e oferecer possibilidades de progresso e educação, como completo necessário à vida no meio rural. A vida no assentamento é valorizada principalmente pelas relações de amizade e solidariedade e pela maior tranquilidade (Brummer, 2007, p.39).

A partir de Wanderley (2007), podemos dizer que as manifestações de valorização dos aspectos associados ao rural fazem parte de uma referência identitária da juventude do assentamento da Fazenda Pirituba.

Tomamos como ponto de partida dois pressupostos: em primeiro lugar, consideramos o meio rural como um espaço físico diferenciado, que é um lugar de vida, isto é, lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar onde se vê e onde se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção na sociedade nacional) (Wanderley, 2007, p.21).



Considerando os debates sobre uma nova ruralidade (Carneiro, 1998), vemos a inserção desses jovens numa dinâmica social em que eles absorvem as oportunidades do meio urbano, sem abrir mão de valores e de uma visão de mundo definidos nesse contexto especificamente.

Como dissemos, a valorização do rural pelos jovens do Pirituba parte de uma oposição ao urbano. Citando Shalins, Carneiro aponta que a experiência “fora” contribui para reafirmar essa valorização. “[...] Sahlins conclui que a experiência na cidade é também uma experiência de valorização da vida da aldeia pra onde as pessoas querem voltar ‘levando consigo as vantagens da cidade’. [...] A valorização da aldeia não implica a negação dos bens imateriais e materiais urbanos” (Carneiro, 2007, p.63).

Eles entendem mais da cidade, mas eu entendo mais do campo. Se alguém tirar sarro de mim porque não sei uma coisa de lá, vou perguntar pra ele: “Mas o que você sabe da terra?”. A gente sempre faz isso na faculdade. As minhas amigas: “Você sabe tal coisa?” Eu digo: “Não, mas você sabe como planta um pé de milho?”. [...] Mais valorizado é o conhecimento da cidade. É mais valorizado. O povo acha que quem é do sítio pode ser descartado. Eu vejo muito isso (Rita, 23 anos, entrevistada em maio de 2018).

Ainda segundo Carneiro, as trocas simbólicas frequentes com o mundo urbano levam a um reforço de identidades apoiadas no pertencimento a uma localidade. Ao falar sobre as diferenças entre jovens que vivem na cidade e que vivem no assentamento, uma das jovens fez referência ao modo de falar. “Eu acho que sim, [tem diferença] até no modo de falar. Mas eu não ligo. Eu gosto de falar assim. E tem gente que acha até melhor lidar com as pessoas daqui do que com as pessoas da cidade. Melhor lidar com pessoas daqui. É mais simples. (Letícia, 21 anos, entrevistada em agosto de 2018). Ao demarcar a diferenciação, ela expressa ponderação sobre o modo como fala, demarcando uma tradicional relação de subalternidade em relação ao meio rural.

Carneiro propõe pensar sobre uma valorização em sentido oposto – do meio rural sendo revalorizado por segmentos urbanos –, o que provoca mudanças “nos projetos juvenis e na maneira como percebem a si próprios e os outros” (Carneiro, 2007, p.53).

Mesmo sob uma perspectiva relacional em relação às cidades do entorno do assentamento, os jovens buscam uma diferenciação por meio de aspectos naturais ou simbólicos. “Itararé é uma cidade bem do interior, né? Então o povo já é bem [referindo-



se a uma aproximação com os assentados]... Mas pra mim o que conta mais é a questão do barulho, tudo muito apertadinho, não gosto dessas coisas. Eu gosto de espaço” (Sílvia, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

Se, por um lado, verificamos que o discurso dos jovens se pauta pela valorização do rural, notamos estratégias discursivas, especialmente na relação com o urbano, que tem o objetivo de se ajustar ao interlocutor. Em uma referência simbólica ao local de moradia, registramos entre os jovens o uso recorrente da palavra “sítio” para se referir ao assentamento, especialmente para relatar situações ocorridas na cidade.

Do ponto de vista da Análise do Discurso, Rosalind Gill (2002) destaca que “o uso construtivo da linguagem” demonstra a forma como lidamos com o mundo, além de o discurso ser uma forma de ação. Ao utilizar a palavra “sítio” na relação com moradores de áreas urbanas, os jovens abrem mão de expressões mais recorrentes, as quais pude constatar na vivência do Pirituba, como “agrovila”, com maior frequência, ou mesmo assentamento.

*Geralmente, as pessoas falam: nossa, você mora num **sítio** (grifo nosso). Ai, eu gosto daqui. Não tenho o que falar. Tem gente que não gosta, mas, geralmente, a maioria das pessoas em Itaberá conhece aqui. Ah, da Agrovila 5. A Agrovila 2 também é conhecida. Às vezes dá um espanto, dependendo da pessoa (Leticia, 21 anos, entrevistada em agosto de 2018).*

*Por ser do **sítio** (grifo nosso), tem muita coisa que a gente conhece aqui que eles não conhecem lá. Por exemplo, ontem mesmo, na hora que eu tava respondendo a sua mensagem, eu tava colhendo mexerica e eu tirei uma foto do pé de pitanga que tem ali e mandei pra minha amiga e a primeira pergunta dela foi: "O que é isso?". Eu fiquei tipo: "Como assim, você não viu uma pitanga?" (Rita, 23 anos, entrevistada em maio de 2018).*

Um dos jovens explicita o que está oculto na fala de alguns deles, quando revela estratégias discursivas no relacionamento com pessoas da cidade. “Quando fala que é do assentamento. Falo que moro aqui mesmo, e muitos nem sabem o que é, não conhecem o assentamento. A gente não explica também. Ah, tal lugar é sem-terra, não fala. Porque tem muito preconceito. As pessoas têm muito preconceito” (Pedro, 22 anos, entrevistado em agosto de 2018).

Em diferentes passagens nota-se que as atividades cotidianas dos jovens são atravessadas por posturas que revelam microrresistências políticas que se expressam



na valorização do rural. Ao dizer que se recusa a beber a água da cidade, que ela não teria qualidade, a jovem demarca, em termos qualitativos, a superioridade do rural sobre o urbano. Essa demarcação é feita em um sentido pessoal (para ela mesma), para as pessoas com as quais ela convive no espaço urbano e para mim, pesquisadora, ao falar desta forma em entrevista.

O mesmo ocorre quando a mesma jovem se impõe diante dos colegas de faculdade defendendo a importância da terra, definindo-se como jovem oriunda do espaço rural e afirmando estar identificada com o campo. A demarcação política na vida cotidiana aparece também no discurso que demarca uma diferenciação no modo de falar entre os que moram no assentamento e na cidade: “(...) Mas eu não ligo. Eu gosto de falar assim”. Na interação frequente com o meio urbano, os jovens do Pirituba reforçam as marcas identitárias que associam ao rural.

Alternativas não agrícolas de vida

As mudanças nas dinâmicas socioespaciais do campo, a partir do modelo do agronegócio, trouxeram novas formas organizativas na sociedade, que incluem tensões entre diferentes gerações a respeito das alternativas de vida entre os jovens. Brummer (2007), apoiando-se em Wanderley (2000) e Kayser (1990), destaca que a “a rejeição à atividade agrícola não significa necessariamente rejeição à vida no meio rural” (Brummer, 2007, p. 38). O meio rural, portanto, é considerado um espaço de vida singular e que não se relaciona apenas à esfera do trabalho.

Carneiro (1998) aponta, entre um dos fenômenos que permite pensar uma nova ruralidade, a compreensão de que o espaço rural não se define como exclusivamente agrícola, mas como um lugar de vida. Ela propõe pensar ruralidade

como uma “representação social” que é definida culturalmente por sujeitos que desempenham pluriatividades.

Entre os jovens do Pirituba, cuja maioria concluiu o Ensino Médio e muitos ingressaram no Ensino Superior, as alternativas agrícolas não são consideradas, o que não significa dizer que eles desvalorizam a vida no campo, como vimos anteriormente. Em alguns casos isso ocorre pela não identificação com o trabalho com a terra e, em outros, pela percepção da necessidade de um trabalho assalariado.



Aqui seria bom se tivesse bastante lugar pra gente trabalhar. Aqui não tem. Não tem muitas opções. Só tem o mercadinho ali, essas coisas (Sílvia, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

Viver de lavoura não tem condições. Nós mesmos plantamos milho. Teve uma chuva sexta-feira à noite e acabou com o nosso milho. Pai já tá contando com lavoura perdida, então já é um dinheiro que não vai entrar. É muito difícil. Se você tem emprego fixo, você sabe que todo mês tem salário. E gente que vive de lavoura a gente não sabe se vai ter ou não. Hoje em dia... Pra quem tem faculdade tá difícil, imagina pra quem não tem. É por isso que faço faculdade, pra ajudar mesmo em casa (Rita, 23 anos, entrevistada em maio de 2018).

Agora deve ter plantado soja. É soja, milho, trigo. Eu praticamente não entendo nada de terra, falar de terra pra mim é... Não me dou bem com essa parte de lavoura. Eu não sou chegado muito em plantação (Lucas, 25 anos, entrevistado em agosto de 2018).

Não penso em ficar por aqui, não. Penso em achar um lugar bom pra trabalhar. Aqui eu não vejo como lugar bom, como oportunidade ou lugar bom pra trabalhar (Pedro, 22 anos, entrevistado em agosto de 2018).

Apesar de, entre as alternativas de sobrevivência, os jovens não considerarem o trabalho agrícola, quase todos os entrevistados relataram desempenhar algum trabalho na lavoura com a família (pluriatividade). Ainda assim é possível notar a existência de cobranças dirigida aos homens em torno da sucessão do lote familiar. Em uma das entrevistas, por exemplo, uma jovem faz a cobrança em relação aos homens no assentamento, exemplificando um modelo sucessório tradicional no campo: “São poucos os meninos que continuam o que o pai faz, o pai planta, o menino cresce e arrenda a terra. Não quer cuidar do lote, arrenda, essas coisas. Eu acho que isso é muito triste, mas não é só aqui. Os jovens em geral”. (Simone, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

Carneiro (2007) aponta que essa situação é, comumente, vivida de forma diferente para homens e mulheres do campo. Ela revela uma tendência migratória maior entre mulheres. “Em geral, a mulher não é reconhecida como trabalhadora agrícola ou não deseja para si esse papel, fato que ao mesmo tempo é resultado de uma discriminação mas que acaba por impulsionar as jovens a níveis mais elevados de educação e à migração para o meio urbano (...)” (Carneiro, 2007, p.60). Nesse sentido, percebemos



no Pirituba, que a exigência moral de permanência no campo se volta aos rapazes, embora a atividade agrícola esteja sendo desenvolvida, na maioria dos casos, de forma complementar às atividades escolares de formação profissional.

Novas dinâmicas no meio rural permitem, por exemplo, a opção do campo como local de moradia. Trata-se da lógica da residência rural. Carneiro aponta que muitos jovens preferem continuar morando na zona rural, mas não abrem mão do acesso à educação e a novas áreas de conhecimento que fazem uso da tecnologia e da internet.

Eu não me vejo sem lavoura. É a lavoura e o trabalho. E isso é uma das coisas também porque eu não me vejo morando na cidade. Por mais que eu não mexa no lote, eu não me vejo sem ter a lavoura, sem ter uma horta, sem ter pé de fruta. A gente está tão acostumado que é difícil mudar o pensamento. Eu não me vejo sem esse meio (Rita, 23 anos, entrevistada em maio de 2018).

É muito afastado da cidade e aqui não tem nada que você possa desenvolver. Eu mesmo, que preciso estudar na cidade, é difícil transporte. É complicado. Lazer não tem, tem que sair daqui pra ter lazer, então é bem dificultoso, tudo exige um pouco de dedicação, de esforço. Eu gosto muito do sítio, dessa vida, mas no momento agora, se eu pudesse morar na cidade, facilitaria pra mim, então eu preferia. Mas pra viver, com certeza, eu prefiro viver aqui. No futuro, com um carro (Simone, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018).

É bom em partes. Você fica longe de muita coisa ruim, mas não é tão favorável pelo fato de não ter nada, ser tudo longe. Faculdade, se quer fazer curso, tudo tem que ir lá na cidade, longe também. Emprego não tem. Tem que ajudar na roça. Não que seja ruim trabalhar na roça, mas aqui é bem menos vantajoso nessa parte. Não tem serviço pra todo mundo assim. A gente planta trigo, soja, terra inteira disso e fica, né? Aí lá na cidade já é melhor. É tudo mais perto. Se precisa de alguma coisa, uma farmácia, do médico (Letícia, 21 anos, entrevistada em agosto de 2018).

Por mim não. Eu já morei um tempo na Fratelli [fazenda que trabalha com produção de sementes]. Demorei um tempo na Coapri [cooperativa regional de produção e distribuição, ligada ao MST]. Não sei, pretendo ficar por aqui mesmo. Se fosse pra fazer um trabalho assim na cidade, é “vai e volta”. Eu tenho tia quemora em Itapeva, qualquer coisa a gente vai e volta (Lucas, 25 anos, entrevistado em agosto de 2018).



Nesse sentido, verificamos que a forma como os mais jovens do Pirituba decidem pela permanência no campo se dá, menos pela identificação com o trabalho agrícola e mais pela perspectiva da residência rural. Mantendo o que Carneiro chama de “combinação melhor dos dois mundos” (2007, p.60).

Ao não considerar o trabalho agrícola como alternativa para subsistência, os jovens do Pirituba associam a atividade rural à instabilidade, à insegurança e à informalidade. Percebemos, nesse sentido, uma relação conflituosa entre jovens na percepção entre o “tempo do campo” e o “tempo da cidade”. Se por um lado, o campo é valorizado pela “tranquilidade”; por outro, quando ele é avaliado na perspectiva da atividade econômica, o tempo da produção é tomado como algo negativo, com baixo retorno financeiro. “Planta, tem que esperar, depois colhe, depois de ‘não sei quanto tempo’ planta de novo” (Sílvia, 20 anos, entrevistada em agosto de 2018). A espera da colheita é percebida como falta de produtividade, algo que se aproxima da máxima capitalista “tempo é dinheiro”. Entre os jovens do Pirituba que fazem ou fizeram cursos profissionalizantes (superior ou técnico), ao se referirem à escolha de uma área, não a vinculam às alternativas de emprego na cadeia produtiva do agronegócio, mas, sim, às oportunidades do meio urbano. Dos jovens que responderam aos questionários e estão no Ensino Superior (ou concluíram), três fizeram escolhas diretamente ligadas ao trabalho no campo, como Agronomia e Engenharia Florestal. Os demais optaram por áreas como Direito, Pedagogia, Enfermagem e Administração. Não descartamos, contudo, a absorção de algumas dessas áreas pelo agronegócio. O que os jovens apontam, no entanto, em seus discursos está mais diretamente ligado a alternativas no meio urbano.

A percepção dos jovens sobre o aproveitamento do tempo no campo, conforme expomos anteriormente, se aproxima de uma temporalidade do emprego urbana, isto é, produtividade medida mensalmente e remunerada de forma fixa. Retomamos, nesse sentido, a fala da jovem Letícia, que se refere ao trabalho no campo e à espera pela colheita, quando comparada à cidade, como “menos vantajoso”. “A gente planta trigo, soja, [planta a] terra inteira disso e fica [esperando], né? Ai lá na cidade já é melhor. É tudo mais perto. Se precisa de alguma coisa, uma farmácia, do médico” (Letícia, 21 anos, entrevistada em agosto de 2018). Ao referir à espera da colheita (tempo), Letícia relaciona o espaço dedicado à plantação à oferta de serviços da cidade. O espaço que a rodeia no campo é de espera e sem aproveitamento por um certo período, o que seria “pior” em relação à cidade que “já é melhor



Considerações finais

A luta por reforma agrária atravessa a trajetória e as vivências dos jovens do assentamento da Fazenda Pirituba. Embora não tenham vivenciado diretamente o momento da conquista do território, tais atravessamentos ocorrem por meio de processos de construção de identidades e memória que perpassam o cotidiano, as expectativas, as escolhas profissionais e o modo de vida desses jovens. Neste artigo, refletimos sobre este contexto a partir da relação identitária dos jovens com o assentamento.

Identificamos distinções nos sentidos conferidos à terra, especialmente na relação com “os de fora”. Quando o rural é associado à natureza, ao idílico, há uma explícita valorização da vida no campo, elaborada a partir de uma oposição ao urbano. No discurso dos jovens, observamos, por exemplo, questionamentos quanto à qualidade da água na cidade, o barulho excessivo e a violência. Essas características levam a um reforço da vida no campo como uma escolha afirmada por eles. Nesse sentido, entre os jovens do Pirituba, os deslocamentos para a cidade facilitados pelo acesso ao transporte público – embora ainda caros e com pouca oferta – são frequentes como meio de acesso à educação profissional, entre outros serviços próprios do meio urbano.

Por outro lado, ainda que para alguns jovens a relação com “os de fora” seja por conta dos estudos, observamos uma posição de desconforto quando confrontados com a condição de sem-terra. Uma identificação como sem-terra, que internamente é afirmada, com o interlocutor externo não é explicitada. Não há uma negativa da posição como sem-terra, mas, sim, um silenciamento dessa condição perante “os de fora”. Ao não explicitar essa identidade no espaço da cidade, notamos que os jovens agem de forma estratégica, negociada, como meio de fugir dos possíveis estigmas resultantes dessa posição. Na relação com o exterior, notamos também recursos linguísticos, como dizer que “mora no sítio”, para não associá-lo diretamente ao assentamento.

Nas atividades cotidianas e na convivência com “os de fora”, ficam evidentes os processos de microressistências políticas, que se expressam na valorização do rural, em uma perspectiva de diferenciação identitária (Bourdieu, 1989). Retomamos a ideia do autor francês de que “existir socialmente, é também ser percebido como distinto” (BOURDIEU, 1989, p.118). Esse lugar, por sua vez, é reivindicado externamente pelo contexto rural, e não pela defesa da identidade sem-terra.



Esta pesquisa mostrou, ainda, em relação aos processos identitários dos jovens com o assentamento, que eles não vislumbram o trabalho agrícola como meio de subsistência. Vimos que as novas dinâmicas socioespaciais no meio rural permitem que o campo seja tomado como um local de moradia e valorizado pelos jovens por benefícios como o convívio com a natureza e a tranquilidade, mas eles não abrem mão do acesso à educação e aos serviços disponíveis no meio urbano. A mobilidade virtual, possibilitada pela melhoria do acesso à internet no assentamento, também contribui para uma vivência identificada com o urbano. Ao considerarem a atividade agrícola, os jovens do Pirituba a associam a condições instáveis, inseguras e informais de trabalho. A percepção dos jovens sobre o aproveitamento do tempo no campo se aproxima, portanto, a uma temporalidade urbana.

Este trabalho lançou um olhar sobre os anseios, as vivências e os sonhos dos jovens do assentamento da Fazenda Pirituba, mas certamente não esgota a complexidade das experiências de vida que os constituem como sujeitos sociais e que os fazem entrar e sair, ficar e partir.

Referências bibliográficas

- Bourdieu, Pierre. (1989). A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão crítica sobre a idéia de região. In: *O Poder Simbólico* 2. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- BOSI, Ecléa. (1993). Pesquisa em memória social. *Psicologia USP*, São Paulo, v.4, n.1/2, p.277-284.
- Brumer, Anita. (2007). A problemática dos jovens rurais na pós-modernidade. In: Carneiro, Maria José; CASTRO, Elisa Guaraná (orgs.). *Juventude Rural em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Mauad X.
- Castro, Elisa Guaraná de; et al. (2009). Os jovens estão indo embora? *Juventude rural e a construção de um ator político*. Rio de Janeiro: Mauad X.
- CARNEIRO, Maria José. (1998). Rurality: novas identidades em construção. In: *Estudos Sociedade e Agricultura*, 11. Editora UFRRJ.
- Carneiro, Maria José. (2007). Juventude e mentalidades no cenário rural. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Guaraná (orgs.). *Juventude Rural em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Mauad X.
- Charaudeau, Patrick. (2006). *Discurso das mídias*. São Paulo: Contexto.
- Chaves, Christine de Alencar. (2000). *A Marcha Nacional dos Sem-Terra*. Rio de Janeiro: Relume Dumará.



- Elias, D. (2013). Globalização, agricultura e urbanização no Brasil. In: Revista ACTA Geográfica, Boa Vista, Edição Especial Geografia Agrária, p.13-32.
- Gill, Rosalind. (2002). Análise de discurso. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, Vozes.
- Minayo, Maria Cecília de Souza (org.). (2010). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis: Vozes.
- Orlandi, Eni P. (2000). Análise de discurso – princípios e procedimentos. Campinas: Pontes.
- Wanderley, Maria de Nazareth B. (2009). O mundo rural como um espaço de vida – Reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: Editora UFRGS.
- Wanderley, Maria de Nazareth B. (2007). Jovens rurais de pequenos municípios de Pernambuco: que sonhos para o futuro. In: CARNEIRO, Maria José; CASTRO, Elisa Guaraná (orgs.). Juventude Rural em Perspectiva. Rio de Janeiro: Mauad X.



A retração da política fundiária brasileira e o reverso geracional nos assentamentos rurais do Brasil

Adelma Ferreira de Souza
Eonilson Antonio de Lima
Glaucyo Ramos de Sousa

Resumo

Uma questão estrutural e estruturante na reprodução geracional camponesa é o acesso à terra para continuidade do ciclo biológico. Nos assentamentos rurais do Brasil, o tamanho do lote e a indivisibilidade da terra não permitem acolher todos os filhos, provocando o êxodo rural. Para contornar esses obstáculos as famílias engendraram diferentes estratégias assegurando a permanência dos jovens no campo. Os estudos tratam da questão de sucessão camponesa são de realidades camponesas distintas das áreas de assentamentos rurais no Brasil. É nesta perspectiva que este trabalho está orientado. A pesquisa foi mediada pela História Oral, e analisa as estratégias de reprodução social, econômica e cultural de famílias camponesas no vale do Juari, Tocantins, as suas lutas e entraves à permanência no campo por três gerações. Foram entrevistadas três gerações que, por diferentes motivações, escolheram ficar no campo. 16 jovens entre 18 a 29 anos e 27 adultos. Nessa região, diferente de outros estudos sobre sucessão rural, os filhos e netos querem ficar no campo. São 27 assentamentos rurais implantados, efeito de intermitentes lutas pela reapropriação ou acesso à terra que subsistem há três décadas, engendrando entre as novas gerações, a perspectiva do campo como um projeto rendável. Porém, tal projeto está ameaçado com a implantação da política de titulação de terras do governo Michel Temer, intensificada do novo governo brasileiro, que na análise dos movimentos de luta pela terra, encaminha-se para a reconcentração das terras já descentralizadas nas lutas históricas do campesinato.

Palavras chaves

Juventude, Assentamentos rurais, Reprodução Social, Política de Regularização Fundiária.

Introdução

O mundo e uma parte da população brasileira está perplexa com os retrocessos que estão acontecendo no Brasil nos últimos dois anos, com agenda de desmonte das políticas sociais, de educação e ambientais, deflagradas após o Golpe Civil Midiático



que derrubou a Presidente Dilma Russef. No que se refere a questões agrárias, o cenário não para os povos do campo atualmente é de paralisia e asfixia. Há um desmonte nas políticas e programa para agricultura familiar e para outras categorias sociais e os povos do campo e comunidades tradicionais, conquistados através das lutas e mobilizações dos camponeses brasileiros ao longo de décadas.

Porém, os camponeses do vale do Juari, já vem testemunhando as transformações socioeconômicas, políticas e culturais no espaço agrário brasileiro desde 1960, que incidem diretamente nas condições materiais e no modo de vida rural. Os processos sociais de expansão territorial do capital e de reordenamento produtivo econômico da agricultura, a redefinição do processo de produção e a intensificação do desenvolvimento técnico ativaram a interação do espaço agrário com o mundo urbano industrial; mudaram o modo de (re)produção material e espiritual dos povos do campo — diria Ianni (2002).

Em parte, resultado da tese de Doutorado defendida em 2017 na Universidade Estadual de Campinas, este artigo objetiva analisar as estratégias desenvolvidas por três gerações de famílias camponesas para obter e manter-se na terra. Acompanhou-se pela narrativa dos camponeses residentes em seis assentamentos rurais localizados no vale do Juari para apreender os processos sociais desenrolados nesse espaço rural a partir da década de 40 e no fim dos anos de 60 — quando houve choque de duas racionalidades: a camponesa e a capitalista. Fazendas pecuaristas avançaram na região, enquanto a concentração fundiária ativou conflitos agrários. “Naturalizou-se” a saída dos camponeses para cidade, o que afetou a continuidade da existência material das famílias campesinas.

A reprodução da condição camponesa está intrinsecamente ligada à capacidade da família de ter acesso à terra para equilibrar a quantidade de filhos e o tamanho da área do patrimônio familiar sem comprometer a economia do grupo doméstico. Analisamos que a política de reforma agrária promove o retorno ou a permanência das novas gerações ao campo e à ocupação agrícola. Os assentamentos rurais, resultantes das lutas engendradas pelos camponeses brasileiros, desde a segunda metade do século XX, vem transformando o meio rural na região do vale do Juari, provocando modificações no modo de vida dos camponeses.

As estratégias engendradas para se reproduzirem, material e socialmente, possibilitaram aos camponeses e seus descendentes reapropriações do território,



garantido o acesso à terra e assegurando a sucessão patrimonial e profissional no território. Entretanto, tal projeto de continuidade camponesa está ameaçado pela agenda de desmonte das políticas públicas para agricultura familiar no Brasil, e para os povos tradicionais, como a implantação da política de titulação de terras iniciada no governo Michel Temer, intensificada do atual governo brasileiro, que na análise dos movimentos de luta pela terra encaminha-se para a reconcentração das terras já descentralizadas nas lutas históricas do campesinato.

Este trabalho objetiva-se apresentar as lutas, trajetórias sociais e estratégias de reprodução social de seis famílias camponesas para ter o acesso à terra no vale do Juari, região noroeste do Estado do Tocantins, norte do país, como também, analisar as consequências do desmonte da política de reforma agrária e empecilho a reprodução camponesa no Brasil.

Justificativa

Estudar as estratégias de reprodução social e geracional do território do vale do Juari permitiu recolocar, no cenário sociopolítico e acadêmico, as categorias sucessão hereditária e continuidade do modo de vida camponês tendo em vista o cenário rural das últimas décadas. O cenário que se apresenta como força de atração para a juventude do campo e a reconversão da ocupação camponesa. Convém frisar o sentido de reprodução social neste texto; é entendido como conjunto de práticas “[...] pelas quais os indivíduos ou as famílias tendem, inconsciente e conscientemente, a conservar ou aumentar seu patrimônio e, correlativamente, a manter ou melhorar sua posição na estrutura da relação de classe (Bourdieu, 2007a, p. 122).

Entretanto, discutir sucessão geracional camponesa no Brasil requer ter em mente que o campesinato é marcado pelo seu caráter migratório. As populações são sempre forçadas a se deslocarem para possuir terra e garantir a reprodução familiar, física e social. Sempre tiveram acesso à terra — ainda que tenha sido bloqueado por setores conservadores e pela política do Estado. Diferem-se do camponês parcelar europeu, que obtém a terra pela transmissão tradicional de geração para geração em sistemas de sucessão patrimonial. Eis por que indagar: como pensar em sucessão camponesa num país de migrantes? Como falar em transmissão de patrimônio tendo em vista uma categoria que está sempre na condição de luta para ter terra? Não parece ser um contrassenso?



Talvez por isso haja poucos estudos sobre o processo sucessório. Pesquisas acerca dos problemas de reprodução econômica e social do campesinato dignas de menção se concentram em áreas do Sul. Incluem os estudos de Abramovay et al. (1998), Schneider (2003), Silvestro (2001), Stropasolas (2002), e Woortmann (1995). Moura (1978) enfocou o Sudeste; Garcia Júnior (1989), o Nordeste. Não por acaso, regiões de colonização antiga de imigrantes e de ocupação para produção agrícola com padrões sucessórios mais consolidados. Todavia, é plausível a discussão sobre a transmissão de patrimônio em áreas de fronteiras ou regiões onde predomina a posse como condição

social de acesso à terra. É o caso da região amazônica. Guardadas as devidas proporções, terras coletivas indígenas, quilombolas e até propriedades camponesas — na acepção tradicional da palavra — que são repassadas de geração para geração mesmo sem estatuto jurídico do código civil — apenas pelo direito de *posse* — estão ameaçadas pelo avanço da reprodução ampliada do capital na forma do agronegócio (Almeida, 2008). Considerar a transmissão de patrimônio como algo além da herança da terra permite entendê-la como experiência social e como conjunto de processos de ordem econômica e, sobretudo, simbólica que envolve o mundo camponês. A discussão passa a ter sentido porque permite compreender a tenacidade e capacidade de resistência dos camponeses, além de possibilitar apreender um fenômeno recente: a revitalização do meio rural no país com o retorno de gerações mais novas ao campo e sua permanência nesse meio.

O atual cenário político-econômico brasileiro, temos acompanhado uma agenda de desmonte dos assentamentos rurais e das políticas de apoio à agricultura familiar em geral, que reflete em todas as categorias sociais do meio rural brasileiro camponeses e povo tradicionais.

Metodologia

Para analisar as estratégias de reprodução social, econômica e cultural de família camponesas e seus descendentes residentes no vale do Juari, Tocantins, e suas lutas e entraves que possibilitaram a permanência no campo por três gerações, elegemos como tática metodológica a História de vida.

Buscamos representatividade intencional entre cinco famílias: *Soares, Rocha, Marujadas, Lima e Reis* a fim de apreender sua trajetória social e suas estratégias



geracionais para obter a terra. O objetivo foi entender as estratégias desenvolvidas pelas famílias para conquistar a terra, e apreender por quê nesse território, diferente outros estudos sobre sucessão rural, os filhos e netos querem ficar no campo. Pretende-se também analisar o risco à que estão submetidos esses processos sucessão camponesa na atual conjuntura político-econômica brasileira. Para este propósito, buscou-se apoio na pesquisa documental para analisar documentos, leis e medidas governamentais expedidas nos dois últimos anos que, de algum modo, afetam os camponeses.

Em relação a História de vida, Bourdieu (2013) em “Ilusão biográfica”, a analisa como relato biográfico, não redutível a uma sequência cronológica de fatos e acontecimentos coerentes, encadeáveis e que transcorrem em harmonia. Antes, deve ser

compreendida como construção, consciente ou não, realizada pelos agentes acerca das suas colocações ou deslocamentos dentro de um campo. Com base nessa perspectiva, história de vida é entendida, aqui, como artefato socialmente construído que “[...] leva à construção da noção de trajetória e como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em um espaço ele próprio em devir e submetido a transformações incessantes” (p. 81).

Queiroz (1988) argumenta que, no quadro dos relatos orais, a “história de vida” compõe uma forma, mas tem definições diferenciadas. A história de vida “[...] se define como o relato de um narrador sobre a sua existência através do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu (p. 20). Assim, foram entrevistadas três gerações que, por diferentes motivações, escolheram ficar no campo. Sendo 16 jovens entre 18 à 29 anos e 27 adultos. Essas famílias vivem em assentamentos rurais no Vale do Juari.

De geração em geração, a luta de famílias camponesas no vale do Juari por um pedaço de chão.

A região do vale do Juari começou a receber seus ocupantes no fim dos anos 30, atraídos pela mineração do cristal e terras fartas e férteis da Amazônia Legal. Eram camponeses-garimpeiro-posseiros oriundos do Nordeste, sobretudo do Piauí e do Maranhão. Na região de origem, eram posseiros que partiram em busca de melhoria para “tocar a vida” na atividade garimpeira e no plantio de roças em terras devolutas. Migravam “puxados” e amparados por redes familiares, que facilitaram os deslocamentos pelos novos espaços sociais.



Localizado na região noroeste do Estado do Tocantins (antigo norte de Goiás), na divisa com Estado do Pará, as terras do vale do Juari, na primeira metade do século XX, eram ainda “liberadas”, ou seja, eram terras devolutas. Esta condição atraía famílias da região nordeste e centro-oeste do país para esse território, pois, possibilitava às famílias camponesas se “situarem” e assegurar suas condições de existência social. Conseguir um “pedaço de chão” era realizar o sonho da conquista da terra; era a autonomia dos domínios e da sujeição a patrões; era a liberdade de decidir o que produzir; era dispor de tempo para trabalho e lazer. A terra era percebida pelos camponeses como direito de todos. Por isso se estabeleciam em posses individuais, mas compartilhavam as áreas comuns, cujas regras de uso eram norteadas pelo costume que o tempo consagra (Thompson, 1998).

As relações de apropriação individual e uso comum da natureza entre criadores de gado, posseiros-fazendeiros e camponeses-garimpeiros-posseiros no vale do Juari se assemelham, em alguns aspectos, ao caso estudado por Thompson (1998). A transmissão de conhecimentos e processos de socialização estava circunscrita à vida local, mediada por relações cotidianas e práticas de reciprocidade entre moradores.

Essa lógica camponesa perdurou na região do vale do Juari até início do decênio de 60, quando foi interrompida com a chegada do capital agrário à região, que impôs sua lógica econômica no interior desse mundo social. Tal lógica modificou os mecanismos de reprodução e o modo de vida no campo. Conforme se desenrolavam os processos de ocupação desse território pela grande propriedade, os camponeses eram expropriados de suas terras e excluídos das políticas de desenvolvimento para a Amazônia. As famílias se defrontaram com situações de restrição ao acesso à terra para plantar, trabalhar e garantir sua reprodução; ou seja, manter suas posições nessa estrutura social que se delinea.

É neste contexto de restrição, exclusão e sujeição que as cinco famílias pesquisadas neste trabalho estavam inseridas. As primeiras gerações das Famílias *Soares*, *Rocha*, *Marujadas*, *Lima* e *Reis*, que foram entrevistadas, vivenciaram todas essas vicissitudes provocadas pela implantação das grandes fazendas de gado, e assim, foram compelidas a desenvolver estratégias para ocupar o espaço como respostas às situações-limite vivenciadas entre as décadas de 60 e 90, período de expansão do capitalismo nesse espaço agrário.

Conforme a narrativa dos camponeses, a chegada da frente pioneira (MARTINS, 2009)



ao norte de Goiás nos anos 60 iniciou um movimento acelerado de conversão das terras em propriedade privada. Houve concentração fundiária e expansão da pecuária bovina. Com a instalação de latifúndio pecuarista cessou a disponibilidade de terras devolutas. As atividades de grilagem de terras se estabeleceram com vigor na região, a ponto de provocar a expulsão de camponeses de suas terras e ocasionar conflitos agrários. Ante a valorização da terra pelo capital, ela se torna mercadoria (Martins, 1980). Cenário que pode ser apreendido pela narrativa de D. Benedita Soares (69 anos).

Quando esses homens chegava na casa do Antônio Arruda, [ele] saía nas casas do povo dizendo que isso é deles, isso aqui é de fulano... “isso é fiscal florestal, você não pode bater de frente, fazer nem isso... isso”. Mostrava para gente dizendo: “Eu sou dono, se vocês quiser ler, mas aí nós não sabia ler. Aí, meu pai saiu. Nós tudinho saiu. Antônio Arruda sempre falava assim: “Nós tinha que sair”, porque a terra era de fulano, a terra era de sicrano, tem aqui o comprovante como a terra que a terra era de fulano, era de sicrano, então vocês têm sair. “E aí... meu serviço?” Aí nos indeniza o serviço. “Como você indeniza?”. ‘Nós damos...’”. Aí, dava uma mixaria, nem sei como falava o dinheiro naquele tempo. A bola grande começou a pisar na pequena e passar o pé em cima e pronto! Daí acabou... Daí pra cá.

Os camponeses posseiros foram expulsos com suas famílias e sob anuência do Estado, ou seja, com a política estatal de ocupação da Amazônia. Migraram para Colinas do Goiás, Couto de Magalhães e Pequizeiro, pequenas cidades circunvizinhas ao vale do Juari onde engrossaram a fileira de trabalhadores rurais proletarizados, passando atuar na formação de fazendas pecuaristas, arregimentada pelo sistema de “peonagem”.

As transformações econômicas, sociais e fundiária ocorridas na região do vale do Juari provocou a desagregação do modo de vida camponês e a proletarização das famílias para além do desposseção material, pondo em risco a reprodução física dos membros na periferia das cidades, foi também simbólica, sobretudo para crianças e filhos e filhas mais novos das famílias Marujadas, Soares e Lima, que internalizaram categorias sociais urbanas de julgamento e passaram a ter vergonha de si, vista por Bourdieu (2006b), como a forma suprema de dominação simbólica.

Contudo, o que fizeram os camponeses em respostas às situações limites impostas a seu modo de vida pelos fazendeiros pecuaristas? Conforme Bourdieu (1983; 2007; 2011), a luta política — a passagem de uma “classe no papel” para uma classe mobilizada



— requer tempo para maturar as condições objetivas, compreender o “jogo” social que se desenrola e a posição nele ocupada e permitir, aos indivíduos ou grupos, construir pontos de vistas e estratégias para manter ou transformar o espaço.

Foi o que aconteceu no território do vale do Juari, por quase duas décadas, os camponeses aceitaram a “ordem das coisas”, ou seja, submeteram-se a opressão, subjugação e proletarização na condição de peão, agregado na fazenda, vaqueiro e trabalhadores temporários, morador de favor. Até porque, a história agrária brasileira demonstra que o “senhor de terra”, além de arbítrio absoluto no enclave da propriedade

— gerida sob direitos próprios e na maioria das vezes ilegalmente —, torna-se senhor de consciências e pessoas. Donos de extensões de terra e detendo poder extraordinário sobre o trabalho e o corpo do trabalhador, os latifundiários agropecuaristas não só detinham, e ainda detém, o poder econômico, como ampliam seus espaços de poder para outras esferas, como a política, para ação política governamental em nível nacional, estadual, e local, apoiando ou candidatando-se a cargos governamentais, influenciando nas ações da justiça e da polícia contra os trabalhadores.

Martins (1994), em seu prefácio ao livro *Trabalho escravo — um elo da cadeia da modernização no Brasil*, faz uma crítica contundente à omissão do Estado ante a situação de desamparo legal em que as populações pobres da Amazônia conviviam e convivem:

[...] um aterrador quadro de fragilidade judicial e moral dos trabalhadores pobres da Amazônia, de omissão deliberada de quem deveria zelar pelos direitos das pessoas, de desmoralização das instituições e das autoridades, que têm mandato público de assegurar, a impessoalidade da lei e a igualdade dos cidadãos. Mesmo na fictícia vigência da lei e da igualdade jurídica, o Brasil é hoje desgraçadamente, um país não só de desigualdades econômicas escandalosas, não só mas também de desigualdades jurídicas e sociais reais. Porque a autoridade relapsa que teme cumprir seu dever de assegurar que ninguém deixará de ser tratado como pessoa e que ninguém será tratado como coisa contribui efetivamente para anular os direitos que os legisladores, por mandato popular, reconheceram como legítimos de todos e de cada um. Como os anula arbitrariamente o arbítrio e magistrado que, para favorecer amigos, cúmplices e protegidos, e a pretexto de cumprir a lei, escamoteia está em detrimento de direitos sagrados que a sociedade por consenso tácito, concedeu até a pessoa mais humilde de remotas regiões do país.



Passados 25 anos, a crítica deste sociólogo é extremamente atual, exemplo do conluio entre a maioria dos representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário no atual governo brasileiro com os empresários do agronegócio no assolamento dos direitos dos camponeses e povos tradicionais a terra e ao território e aniquilamento das políticas de proteção ambiental.

Retomando as trajetórias das famílias *Soares, Rocha, Marujadas, Lima e Reis*, continuavam ansiosos pelo seu pedaço de chão, mas, receavam as práticas violentas de repressão dos fazendeiros mediadas pela ação de pistoleiros e polícia. Contudo, as transformações políticas e sociais que ocorreram no Brasil em meados dos anos 80 — após o fim o governo militar e o movimento de redemocratização impulsionado por organizações sociais e partidos políticos de bases populares — e o arrefecimento dos subsídios financeiros governamentais para projetos agropecuaristas na Amazônia alteraram o espaço agrário da região do médio Araguaia, engendrando condições sociais objetivas e probabilidades reais de sucesso para lutar pela terra.

Assim, na segunda metade da década de 80 e nos anos 90, o vale do Juari se transforma num campo de força, em um estado de tensão permanente entre latifundiários e camponeses. Inicia-se a recamponização do vale do Juari, através das organizações sociais e sindicais camponesa.

A reapropriação da posse da terra no território vale do Juari se deu em três fases e tempos distintos, (ver figura 1), contando com a disposição dos camponeses e tendo a participação de três gerações das famílias *Soares, Rocha, Marujadas, Lima e Reis*, pais, filhos e netos, para ter o seu pedaço de chão. A primeira fase, marca o início da luta pela terra na região e compreende os anos 1985–9, representa a conquista de dois assentamentos rurais: Juari e Nossa Senhora Aparecida, criados pelo governo federal; a segunda, vai de 1995 a 2000, quando surgem uma série de ocupações, acarretando a criação de mais 15 assentamentos na região do entorno (só no território do Vale, foram quatro: Vitória, Mata Azul I, Progresso e Conquista); a terceira — a mais atual — inicia-se em 2003, período da retração da política de assentamento rural pelo governo federal. Ainda assim, ocorreram novas ocupações no Juari, que resultaram em mais dois assentamentos: Vale do Barreira (2007) e Província (2008); na região de seu entorno, foram criados mais 11. No total, no entorno ao vale do Juari, foram criados 27 assentamentos rurais, com 2.098 famílias assentadas em uma área de 107.282,293 hectares, SIPRA/INCRA (2016) transformando-se em um território camponês.



Figura 1. Reocupação do vale do Juari: 1983-2008
Fonte: dados da pesquisa de campo

Retração da Política fundiária no Brasil e sucessão nos assentamentos: Trabalho de Sísifo

Bourdieu, nos anos 60, e Champagne, na década de 80, estudaram os processos de crise e reprodução social do campesinato na França gerados pela “dinâmica de urbanização” ou pelo “alagamento social do espaço”. Desde então, a migração camponesa para meio urbano se fez presente em estudos sobre campesinato, juventude e mundo rural. Em que pesem as particularidades históricas, no Brasil a conjuntura não foi diferente. A literatura que tangencia a “juventude rural” como temática aponta o “tema problema”: ficar/sair do campo, migração, circulação (Castro, 2013). Sair ou ficar no campo é um dilema que permeia o universo do jovem — especialmente as mulheres, tidas, em tais estudos, como mais propensas à emigração — e se relaciona com “arranjos” para realizar projetos de vida e a autonomia econômica, individual e do grupo geracional.

Juventude rural não é categoria homogênea. É entendida conforme os contextos econômicos, políticos, sociais e as realidades culturais, como se lê em Abramovay (1998),

Durston (1996), Brumer, Souza e Zorzi (2002), Brumer (2007), Wanderley (2003), Weishemeier (2004), Stropasolas (2006), Castro (2013); Wanderley (2013a). Não se pode definir “jovens” apenas pela idade cronológica ou pelo ciclo de vida. “[...] são arbitrários culturais e regras socialmente construídas que determinam quando, como e por meio de quais rituais as sociedades reconhecem as passagens entre estas fases da vida” (Novaes, 2004, p. 1).



Embora seja diversa a concepção, em geral a categoria juventude é definida por pesquisadores e estudiosos como fase de transição gradual para o papel de adulto e a posição hierárquica de subalternidade à família. Do ponto de vista dos deveres e das obrigações, é uma fase de transição, aprendizado e preparação para o futuro, para a sucessão dos pais via transmissão de bens e terra ou para a realização de projetos de vida. Castro (2013), em seu esforço para analisar a construção e reordenação da categoria “juventude rural”, diz que esta envolve questões objetivas — renda, trabalho, acesso à escola — e subjetivas — autoridade paterna, divisão sexual do trabalho, disputa por poder e privilégios em contextos múltiplos, conforme a posição dos agentes no espaço de sociabilidade onde atuam.

Uma questão estrutural e estruturante na reprodução geracional camponesa é o acesso à terra aos herdeiros para que possam garantir a continuidade do ciclo biológico após a constituição de suas famílias. Nos assentamentos rurais no Brasil, o tamanho do lote (média de 50 hectares na região) e a indivisibilidade não permitem acolher todos os filhos. Essa limitação é entrave a reprodução e motiva a dispersão do grupo familiar.

Para contornar esses obstáculos e dar segurança material aos filhos, as famílias nos assentamentos rurais no vale do Juari, vêm produzindo arranjos fundiários a fim de viabilizar o acesso à terra aos descendentes, pela aquisição de lotes, mas sobretudo, pela ocupação de latifúndios forçando a descentralização da terra.

Para jovens e adultos de hoje, filhos e netos das Famílias Soares, Reis, Lima, Rocha e Marujadas, que nasceram ou cresceram nos assentamentos do vale do Juari, a terra lote, “chácaras” ou “sítios”, como definem, é a representação do *lugar de vida*, especialmente para aqueles que vivenciaram a situação de proletarização das famílias na cidade após a expropriação das terras e que trazem na memória as marcas da fome. O assentamento é o lugar onde se constrói relações identitárias fundadas nos laços de parentesco e vizinhança que não só envolvem a vida cotidiana e a inserção na sociedade, mas também determinam os ciclos da vida familiar e as manifestações culturais e religiosas (Wanderley, 2000a).

A entrada na terra — o trabalho familiar e a vida no assentamento — permitiu aos jovens incorporar as condições objetivas e subjetivas do modo de vida rural. Deu-lhes elementos para perceber o campo como espaço de vida, “segurança, liberdade, tranquilidade e de construção de boas amizades”, em contraposição à vida da “rua”, gerou laços identitários com o lugar, engendrando o “gosto pela vida no campo”. Como



pode-se notar no depoimento de Marcos Marujada (36) que mora no assentamento vale do Barreira desde 2008,

Eu me senti ancorado, tenho minha terra, minha casa. [...] O campo pra mim é lugar de fartura. Eu percebi que dá para viver dignamente no campo a partir do momento que o campo teve um desenvolvimento. A gente tem todas essas possibilidades aqui no campo. Além de não existir violência, roubo, tem liberdade e silêncio, a sua família está unida, você senta, conversa. Eu tenho possibilidade de criar um frango só no milho, de plantar uma horta, de ter ovos, de ter água gelada, suco natural.[...] O campo te favorece tudo isso. [...] Eu me defino camponês! [Por]Que eu moro no campo, gosto do campo e hoje quero ficar no campo, mas com essa perspectiva...de estar buscando conhecimentos... de querer algo melhor.

O alargamento do espaço social com a territorialização dos assentamentos rurais possibilitou maior circularidade dos jovens nesse espaço social, trazendo outra perspectiva de rural às novas gerações. Filhos e netos das famílias pesquisadas de ambos os sexos percebem o campo como “negócio possível” (Champgne, 2002). Dados estatísticos sobre a população no território do vale do Juari fortalece essa observação. Nos cinco municípios circundantes, 54% da população reside no campo: sua composição inclui média de 25% de crianças na faixa etária 0–9 anos e 48% de adolescentes e jovens na faixa etária 10–29 anos. Somam 73% da população rural. Nesta última faixa etária, 43% são do sexo feminino (IBGE, 2010).

A pesquisa constatou que a região em torno do vale tem particularidades que afetam a decisão de “ficar ou sair” do campo em meio a novas gerações de assentados. Por um lado, há pujança na vida rural, decorrente do número de assentamentos rurais (27), os quais agregam uma população de 6,2 mil residentes, superior à população urbana de municípios circundantes. Por outro, a implantação de políticas públicas para o meio rural PRONAF, habitação, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Luz para Todos, que trouxeram melhoria na qualidade de vida da família em forma de renda mensal, com a venda do leite e das políticas sociais para meio rural – Programa Bolsa família, aposentadoria rural, auxílio-maternidade, melhoria da educação e saúde no assentamento.

No entanto, é preciso analisar as possibilidades de sucessão e a questão do patrimônio em assentamentos rurais no Brasil porque estes apresentam peculiaridades sociojurídicas e culturais, como analisa Castro (2013). As regras da Política de Reforma Agrária definem o lote como “concessão de uso” e só o tornam propriedade com efeito



após a titulação definitiva. Enquanto as famílias assentadas não liquidarem as dívidas, os créditos e o valor da terra nos órgãos governamentais, fica proibida a sua divisão ou venda.

Segundo orientação do setor de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária, órgão responsável por executar a Política de reforma agrária, INCRA-Tocantins, em caso de falecimento dos pais, o filho tem que se encaixar nos critérios de seleção de beneficiário desse órgão. Caso contrário — o filho não ter perfil ou a família não ter herdeiro —, a transferência do domínio não ocorre. O lote volta a integrar o acervo fundiário do INCRA, que reassenta outro candidato com perfil de beneficiário da reforma agrária.

Concessão de uso é transferência do imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e que assegura aos assentados o acesso à terra, aos créditos disponibilizados pelo INCRA e a outros programas do governo federal (INCRA, 2017). O *título de domínio* é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo. É garantido pela lei 8.629/93, quando verificado que foram cumpridas as cláusulas do contrato de concessão de uso e o assentado tem condições de cultivar a terra e pagar o título de domínio em 20 parcelas anuais (INCRA, 2017).

Conforme dados do cadastro de beneficiários da reforma agrária, os critérios de seleção do INCRA são: não ser funcionário público nem ter cônjuge em tal posição; não ter renda acima de três salários-mínimos provenientes de atividades não agrícolas; não ter sido assentado; não ter incapacidade física ou mental. Em entrevista com técnico da divisão de assentamentos da unidade avançada de Gurupi, TO, ele explicou que o novo candidato ao lote assume as dívidas deste e se responsabiliza por indenizar herdeiros pelas benfeitorias. O valor é levantado em vistoria realizada pelo órgão.

A titulação do lote — ou “título de domínio” — é um tema controverso entre estudiosos da questão agrária e para o movimento social do campo. É um debate que ganhou relevância nos últimos anos devido a mudanças nas regras jurídicas para titulação de terras da reforma agrária. São exemplos das mudanças a lei 13.001/12 e a medida provisória 636/2013, que tratam da titulação de lotes da reforma agrária, dentre outros temas. Nesi (2011), Ferreira et al. (2014), Valadares et al. (2015) e representantes dos movimentos de Luta pela Terra fazem críticas à forma como a política de regularização fundiária dos assentados tem sido conduzida. Advertem que esses dispositivos legais



estimulariam a reconcentração das terras já descentralizadas nas lutas históricas do campesinato, uma vez que, essas medidas jurídicas não dispõem de mecanismos que assegurem os beneficiários o direito de legar a terra, por sucessão hereditária, aos descendentes das famílias assentadas.

Esse cenário se agravou após a implementação da agenda de desmonte da Política de Reforma Agrária e de apoio à agricultura familiar em geral, que se reflete em todas as categorias sociais do meio rural brasileiro. Como a medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, cujas novas regras para regularização fundiária se apresentam como retrocesso aos direitos conquistados. Os problemas incluem a liberação de terras à venda. Pelo artigo 18-A, o INCRA fica autorizado a atribuir o “título de domínio” apenas aos assentamentos criados dois anos antes da data de publicação dessa medida. Esta desonera o INCRA de obrigações perante famílias assentadas. Mesmo permanecendo a carência de dez anos para negociar o lote — como prescreve o artigo 189 da Constituição Federal —, esse processo acelera a “liberação” de terras para o mercado imobiliário e bloqueia a continuidade da exploração familiar pelas novas gerações. Por consequência, poderá potencializar a emigração rural. Talvez se possa dizer que esse cenário de instabilidade política e jurídica o destino das terras conquistadas através das lutas camponesas faz com que o “título de domínio” seja um aspecto valorizado entre assentados, orientados pela lógica familiar de liberdade e autonomia para agir como proprietário e na gestão do patrimônio.

Se assim o for, então cabe dizer que essa concepção está eivada de contradição, pois os camponeses compreendem a terra nos assentamentos como direito: é como “terra de trabalho”. Mas não sentem que têm liberdade jurídica sobre a terra. O paradoxo dessa concepção pôde ser captado no desabafo de Benedita Soares (69) sobre sua condição de direito no assentamento Juari: “Eu ‘tou nesta terra aqui, mas não vou dizer que tenho liberdade, porque eu ‘tou nela, mas não posso dizer que ela é minha. Eu tenho direito a essa terra, só que, enquanto eu não ‘cabar de quitar ela, não é minha!”.
Raimundo Lima

(66) compartilha desse sentimento sobre a terra: “Hoje ‘tou tranquilo, graças a Deus! [...] aqui... não é meu! Porque terra de reforma agrária nunca é da gente enquanto você não pegar o título definitivo. Eu não posso falar que é minha, mas, de qualquer maneira, agora ‘tou sossegado”



Diante do empecilho jurídico do estatuto da terra de reforma agrária para a transmissão fundiária nos assentamentos rurais e do cenário atual de retrocesso na política agrária, há contexto que impele os jovens a sair do campo, comprometendo a sucessão camponesa nos assentamentos de reforma agrária. É nesse sentido que se pode dizer que a reforma agrária no Brasil vem se caracterizando como tarefa longa, exaustiva, difícil de mover a pedra da concentração fundiária, que de tempos em tempos é desfeita antes de se dar por completa, um verdadeiro “trabalho sisífico” (Ferreira, Valadares, Souza & Silva, 2014, p. 291).

Considerações finais

O problema da reforma agrária brasileira não é falta de terras para agronegócio, nem a ineficiência dos assentamentos. No primeiro caso, conforme o cadastro do Incra/2003 há mais 120 mil ha de terras improdutivas, suficiente para fazer reforma agrária em todos os estados. No segundo caso, inúmeros estudos sobre assentamentos apresentam resultados satisfatórios no aumento do nível de renda, geração de emprego para membros da família, produção de alimentos para autoconsumo, melhora nos níveis de educação e o desenvolvimento da dignidade das famílias.

A questão é outra, o capitalismo tardio e arcaico modificou os empresários industriais urbanos em latifundiários, mantendo como base da produção a exportação de produtos primários repaginada pela moderna agricultura. Este aspecto torna mais grave a concentração de terras brasileiras que nos últimos anos vem travestida do mito do “desenvolvimento” e “progresso” pelo agronegócio gerando intensas pressões sob as terras tradicionalmente ocupadas (indígenas, quilombolas, camponeses) ou terras do Estado aumentando o interesse e preços das terras no Brasil.

O atual governo brasileiro vem exacerbando a política neoliberal, botando em risco a sucessão da condição camponesa no vale do Juari e no meio rural brasileiro, pois, colocou em pauta a retração das políticas públicas voltadas para as populações do campo: titularidade dos lotes, nos assentamentos rurais, sem criar mecanismo que garanta aos descendentes o direito à terra, paralisação da Política de Reforma Agrária com a suspensão da criação de novos assentamentos, corte no orçamento de políticas públicas para o setor da agricultura familiar, sucateamento dos programas e órgão públicos de apoio ao desenvolvimento sustentável – PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e



Nutricional (Consea), corte nos créditos, para o fortalecimento da agricultura familiar como PRONAF, extinção do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, cortes e congelamento do orçamento da saúde e da educação, Reforma da Previdência, violação da legislação e de acordos de proteção ambiental, como o Acordo de Paris e o Código Florestal. Enfim, há, em curso, um desmonte das políticas públicas conquistadas pelos movimentos sociais nas últimas décadas, que coloca em risco a soberania alimentar e afeta diretamente a reprodução geracional nos assentamentos rurais, uma vez que, sem apoio das políticas para o campo ou continuidade da política de reforma agrária a possibilidade de reprodução biológica dos jovens no meio rural é interrompida.

Bibliografias

Almeida, Alfredo Wagner Berno de (2008). Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras Tradicionalmente ocupadas. 2. ed. Manaus: PGSCA–UFAM.

Castro, Elisa Guaraná (2013). Entre ficar e sair: uma etnografia da construção social da categoria jovem rural. Rio de Janeiro: Contra Capa.

Champagne, Patrick (2002). *l’heritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française (1950–2000)*. Paris: Seuil.

Bourdieu, Pierre (2002a). Estrategias de reproducción y modo de dominación. Colección Pedagógica Universitaria, n. 37–8, enero–junio/julio–diciembre.

_____. A distinção (2007a): crítica social do julgamento. São Paulo: ed. USP; Porto Alegre: Zouk.

_____. Razões práticas. Sobre a teoria da ação. Campinas: Papius, 2013.

Ferreira, B. Valadares, A.A., Souza, M.G.P, Silva, R.P. (2014). O trabalho de Sísifo da reforma agrária: a estratégia da titulação das terras dos assentamentos rurais na Lei no 13.001, de 2014. In: BRASIL em Desenvolvimento 2014: Estado, planejamento e políticas públicas, Brasília, v. 1, c. 13, p. 275–294.

Ianni, Otávio (2002). O mundo agrário. In:_. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 33–50

Nesi, Paula Pagani (2011). Titulação de domínio e concessão de uso: os direitos reais nos assentamentos destinados à reforma agrária. 2011. Monografia (Graduação) — Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2011.

Thompson, Edward P (1998). Costumes em comum. Editora Companhia das Letras.

Queiroz, Maria Isaura Pereira de et al (1978). Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In:



VON SIMSON, O. M. (Org. e intr.). Experimentos com histórias de vida (Itália–Brasil). Vértice, São Paulo: editora Revista dos Tribunais, Enciclopédia Aberta de Ciências Sociais, v. 5, p. 68–80, 1988, Hucitec..

Wanderley, Maria de Nazareth Baudel (2013). Juventude rural: vida no campo e projeto para o futuro. Recife: ed. UFPE.



Trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales: El papel del territorio y de las políticas públicas¹

Juan Fernández Labbé²
Eugenia Quingaísa³

Resumen

Los jóvenes en América Latina abandonan cada vez más la agricultura mientras luchan por encontrar empleo en otros sectores, y muchos se ven obligados a emigrar a las ciudades como una forma de enfrentar la violencia local o la falta de oportunidades de empleo o acceso a recursos productivos. El tipo de territorio (rural/urbano/rur-urbano) donde los jóvenes viven tiene una relación significativa con sus aspiraciones de inclusión económica, así como con sus trayectorias. Estas son diversas y algunas transiciones clave (acceso a educación, trabajo, parentalidad, migración) varían según el contexto territorial donde se reside, pues distintas dinámicas socio-territoriales abren horizontes de oportunidad a la vez que restricciones para su desarrollo. Las políticas públicas juegan un rol relevante. La ponencia profundiza en la comprensión de las aspiraciones y trayectorias de los jóvenes rurales y su interacción con el territorio y con las políticas públicas, en relación a sus oportunidades y restricciones de inclusión económica. Tiene como marco general de análisis la situación en cuatro países de América Latina, pero profundiza en el caso de Ecuador, mediante información cuantitativa y cualitativa (entrevistas en profundidad a jóvenes rurales, varones y mujeres).

Palabras clave

Juventud rural, territorio, inclusión económica, trayectorias, aspiraciones.

Introducción

Los jóvenes de América Latina se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que las generaciones mayores de la región, así como respecto al promedio de países de la OCDE (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Además, las juventudes rurales se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en relación con sus pares urbanos, contando con menores oportunidades laborales de empleo decente, menores posibilidades de acceso a educación de calidad, y con altas tasas de pobreza, además de una proporción mayor de personas que no se encuentran estudiando ni en un trabajo remunerado, especialmente mujeres jóvenes rurales (Espejo, 2017). Si bien la población joven cuenta con un nivel educacional más avanzado que el de las generaciones previas -como consecuencia de las mayores coberturas educativas en la región de las últimas décadas-, las brechas territoriales en educación siguen vigentes, observándose



menores tasas de participación y de conclusión educativa en los sectores rurales. La importancia de los jóvenes para el desarrollo de los países de América Latina y los desafíos específicos que este grupo encuentra en el proceso de inclusión económica y social, son reconocidos por expertos y organismos internacionales: se ha planteado que la región se encuentra en una ventana de bono demográfico que debe ser aprovechada, donde la fuerza productiva de este grupo debe ser un motor de desarrollo y crecimiento de los países, y por lo tanto deben ser incluidos plenamente dentro de las sociedades (CEPAL, OIJ, IMJUVE 2014 OECD, CEPAL, CAF, 2016; Espejo & Espíndola, 2015).

En la literatura, la juventud latinoamericana ha sido mayormente estudiada desde una mirada urbana. Son pocos los estudios enfocados en los jóvenes rurales, y menos aun los que toman en cuenta sus percepciones, expectativas y aspiraciones (FIDA, 2015; Dirven, 2016; Díaz y Fernández, 2017; Espejo, 2017; Kessler, 2005). Por otro lado, la política pública dirigida a los jóvenes también tiene un sesgo urbano, además de una escasa inversión en general, lo que contribuye a la invisibilización de los jóvenes rurales (Urrutia, 2017; Fernández, 2018).

La juventud rural en América Latina es diversa, los jóvenes tienen múltiples trayectorias, experiencias y aspiraciones, pero comparten limitaciones y también potencialidades que deben ser reconocidas, valoradas y apoyadas (Fernández, 2019). En dichas trayectorias y aspiraciones, influyen cuatro factores

interrelacionados: los condicionantes estructurales que afectan a la cohorte demográfica (al grupo etario joven); los factores específicos del territorio donde viven; sus condicionantes personales/familiares; y sus propios proyectos de vida, que pueden partir de los condicionantes antes señalados o bien tratar de superarlos (Hernández, 2019).

Conceptualmente, la juventud se puede definir como una categoría social moldeada por fuerzas políticas y económicas, y por las normas sociales y expectativas que existen en localidades específicas (Hardgrove et al., 2014). Se caracteriza por ser una etapa de transición entre la dependencia y la independencia, y está marcada por una serie de decisiones que influirán en el resto de la trayectoria de vida de cada individuo, así como en el desarrollo de la sociedad. Una transición exitosa puede derivar en una vida adulta próspera y autónoma, mientras que una fallida, puede llevar a transmisiones intergeneracionales de la pobreza, marginalización social e impactos negativos en el desarrollo personal y familiar a lo largo de la trayectoria de vida (FIDA, 2019; Urrutia y Trivelli, 2019).



En América Latina, hay casi 100 millones de jóvenes. Además, los jóvenes constituyen una proporción importante de la población rural (un 25%), mayor en general que en la población urbana, por lo que en las zonas rurales las cuestiones relativas a la juventud son especialmente pertinentes (FIDA, 2019).

Para la región, sabemos que el tipo de territorio donde los jóvenes viven (rural, rural-urbano o urbano) tiene una relación significativa con sus aspiraciones de inclusión económica (Cazzuffi et al, 2018); que las trayectorias de los jóvenes rurales son diversas y algunas transiciones clave, como el acceso a educación, inserción en el trabajo, parentalidad y migración, definen sus aspiraciones (Urrutia y Trivelli, 2018); y que, si bien los jóvenes son más móviles geográficamente que los adultos y los polos de expulsión de la población más joven se concentran en las áreas rurales, no todas las áreas rurales están perdiendo jóvenes, sino que lo hacen las que tienen mayores niveles de pobreza y dependencia de la agricultura, y menores niveles de capital humano (Cazzuffi y Fernández, 2018).

Por su parte, el gasto agregado en programas para la inclusión económica de la juventud rural en general representa un bajo porcentaje del gasto total de los gobiernos (entre el 0,01% y el 1,16%); una cantidad muy pequeña de los programas para la inclusión económica de la juventud rural está dirigida de manera exclusiva a dicho grupo, pues la gran mayoría de los programas atiende a más segmentos de la población; y los apoyos son fuertemente sectoriales hacia actividades agropecuarias y van desde el desarrollo de capacidades hasta la capitalización de proyectos productivos. Lo anterior da cuenta en general de que no se están atendiendo adecuadamente las necesidades de la juventud rural, por cuanto no se consideran sus particularidades (Rodríguez, 2018; Leyton y Aguirre, próximamente).

En Ecuador, la población joven, es decir, entre 15 y 29 años, alcanza un total estimado de 1,5 millones en áreas rurales, y 2,7 millones en espacios urbanos; valores que corresponden al 9,2% y 16,5% de la población total respectivamente (ENEMDU, 2015).

Este documento busca profundizar en la comprensión de las trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales y el rol del territorio y las políticas públicas en ellas, desde la perspectiva de su contribución a la reducción de las restricciones para su inclusión económica en Ecuador. Las preguntas guía del estudio son:



¿Qué trayectorias tienen los jóvenes rurales (considerando, entre otras transiciones, acceso a educación, trabajo, parentalidad, migración) y qué rol cumplen las políticas públicas en ellas?; ¿Qué aspiraciones tienen y cómo influyen las políticas públicas en su conformación?; ¿Qué características de los territorios marcan la experiencia, trayectorias y aspiraciones de los jóvenes rurales en relación a su inclusión económica?; ¿Qué barreras y facilitadores existen para su inclusión económica? y ¿Qué estrategias de generación de ingresos (actuales y futuras) tienen?

Métodos

El enfoque metodológico considera una estrategia y análisis predominantemente cualitativo, con entrevistas en profundidad a 22 jóvenes rurales, hombres y mujeres entre 18 y 35 años, de cuatro territorios rurales del país (como territorio principal la parroquia rural Cayambe, perteneciente al cantón Cayambe de la provincia de Pichincha, y como secundarios otras parroquias rurales de los cantones Cayambe, Quito y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha y parroquias rurales de las provincias de Imbabura, Tungurahua y Manabí) y diversos en cuanto a trayectorias (típicas y excepcionales). En 19 de ellos se construyeron relatos biográficos a partir de las entrevistas, mientras que los tres restantes fueron informantes clave para comprender mejor la situación general de los jóvenes de sus territorios⁴. Adicionalmente, se combina lo anterior con un análisis descriptivo cuantitativo en base a estadísticas oficiales.

Principales tendencias de los jóvenes rurales: diversos, con arraigo a sus comunidades, ganas de emprender y enfrentados a obstáculos de distinto tipo

Los jóvenes rurales tienen trayectorias y aspiraciones diversas, configuradas a partir de múltiples experiencias familiares, educativas, laborales y de movilidad territorial.

Si alguna vez fue usual caracterizar lo rural como un espacio relativamente homogéneo, donde la actividad agrícola era predominante y las nuevas generaciones tendían a reproducir las posiciones y actividades de las generaciones anteriores, hoy ya no lo es. Las sociedades rurales de América Latina están atravesando grandes transformaciones: los patrones de urbanización han cambiado, cobrando una creciente relevancia los centros urbanos de tamaño pequeño y medio, y las interacciones rurales-urbanas (CELADE-CEPAL, 2008; UN, 2002; Ferré y otros, 2012; Berdegué y otros, 2015; Berdegué y otros, 2015 y Christiaensen y Todo, 2013); los mercados laborales se han diversificado y el empleo rural no-agrícola ha ido ganando terreno (Dirven, 2016; CEPAL/FAO/IICA, 2015; Srinivasan & Rodríguez, 2016); el campo se ha envejecido y



feminizado, pues los jóvenes, especialmente los varones, están migrando; y los sistemas agroalimentarios se han complejizado, a la par que se ha profundizado una dualidad entre un segmento altamente productivo inserto en los mercados globales y otro más rezagado y precario (FAO, 2017; Fernández et al., 2019). Sus habitantes experimentan estas tensiones de diversas formas y, en el caso particular de los jóvenes, se enfrentan tanto a barreras como a potencialidades: los jóvenes rurales tienen mayores niveles educativos, más cercanía a las nuevas tecnologías y mayor inclinación a la innovación comparado con sus padres, pero al mismo tiempo, tienen altas tasas de migración hacia las ciudades en busca de oportunidades, ante la falta de expectativas de un futuro atractivo en el campo (Procasur, FIDA, International Land Coalition, 2015) y las barreras para su inclusión económica, como las formas de tenencia y traspaso de la tierra y las dificultades de acceso al crédito y a otros activos productivos (FAO/CTA/FIDA, 2014; Hernández Asensio, 2012).

En ese marco, los jóvenes rurales en Ecuador despliegan diversas trayectorias en su recorrido hacia el mundo adulto, enfrentándose a obstáculos, desarrollando estrategias y configurando proyectos de vida muy distintos entre sí. La primera afirmación que surge del análisis de los relatos de los jóvenes es que no existe *una* juventud rural, sino que varias y diversas juventudes rurales.

Los proyectos de los jóvenes rurales se configuran fundamentalmente en torno a la realización de estudios superiores, la vinculación con sus comunidades, la aspiración de impulsar un emprendimiento económico y la creciente preferencia por retrasar la maternidad, precisamente con el objetivo de desarrollar sus estudios o trabajo. En cuanto a las aspiraciones en torno a los estudios, el panorama nacional indica que la participación en educación superior se mantuvo desde el 2010 al 2015 en 19% de los jóvenes entre 18 y 24 años; reflejando que, entre los graduados del último año de BGU (Bachillerato general unificado), solo 55% se presentó al examen para la Educación Superior, y 5% se registró en universidades privadas (OSE, 2016). Esta situación se acentúa en lo rural, donde solo 8,1% de la población accede a educación superior y 5,9% tiene un título universitario; mayoritariamente en el caso de las mujeres (7,2% vs. 4,6% de los hombres) (ENEMDU, 2013). Efectivamente, a nivel nacional no es la norma la conclusión de los estudios superiores por parte de los jóvenes rurales. Según el último Censo Nacional (2010), el 9,2% de la población rural de 24 años y más ha completado la educación superior. En el grupo de entre 24-29 años esta cifra crece, diferenciadamente para hombres (13,5%) y mujeres (15,5%), pero muy por debajo de



las zonas urbanas, donde el promedio es 28% y en el grupo de entre 24-29 años alcanza a 35% en los hombres y a 40% en las mujeres. Pese a lo anterior, en los relatos de los jóvenes está muy presente la realización de estudios superiores como herramienta de movilidad social y desarrollo económico posterior. En relación al ámbito laboral, en los espacios rurales los índices de desempleo y empleo inadecuado son significativamente más altos que en los urbanos, alcanzando porcentajes de 10% y 75% respectivamente, mientras que en las zonas urbanas llegan a 6% y 47% (SIISE, 2015). En el caso de los jóvenes, si bien el desempleo es mayor en las zonas urbanas y en las mujeres (7,8% en varones urbanos y 13,4% en mujeres urbanas, contra 8,1% en mujeres rurales y 4,9% en varones rurales), el subempleo⁵ afecta con mucha más fuerza a los jóvenes rurales: 83% de las jóvenes rurales y 72% de los jóvenes rurales, contra 49% de las jóvenes urbanas y 46% de los jóvenes urbanos (ENEMDU, 2013). No existen cifras oficiales sobre el autoempleo, pero los relatos de los jóvenes, que desde pequeños han trabajado y han experimentado condiciones precarias y bajos salarios, se proyectan a futuro desarrollando una actividad remunerada principalmente a través de emprendimientos (individuales o familiares) y no como asalariados.

Ya sea para continuar estudios o en búsqueda de oportunidades laborales, los jóvenes rurales están migrando a las ciudades. Entre 2001 y 2014, en los espacios rurales, el número de personas con menos de 15 años es el doble de aquellas entre 15 y 24 años; en tanto que en la zona urbana es este último segmento de la población el que tiene mayor crecimiento (CPV, 2001; ENEMDU, 2015). De acuerdo a Cazzuffi y Fernández (2018), entre 2002 y 2007, el 20,4% de los jóvenes rurales migró hacia otros municipios, cifra mayor al 14,6% de jóvenes urbanos que cambiaron su lugar de residencia. Si bien no es mayoritario, en las trayectorias de los jóvenes está presente la movilidad geográfica, tanto de manera puntual temporalmente (unos meses o un período acotado) como definitiva.

Finalmente, en cuanto a la formación de familia y parentalidad, la tasa de fecundidad en Ecuador, entre 1989 y 2012, varió de 3 a 2,9 hijos por mujer en el área urbana, y de 4,6 a 3,2 en el área rural; disminución que ha sido directamente relacionada con el nivel de instrucción de la madre –a más años de estudio, menor número de hijos– (MSP, 2015). En términos relativos, las mujeres rurales tienen hijos más tempranamente que las urbanas. De acuerdo al último Censo (2010), a los 18 años de edad, el 28% de las mujeres rurales ya tiene al menos un hijo (contra el 23% de las urbanas), cifra que aumenta a 70% a los 24 años en las rurales (y a 62% en las urbanas), y llega a los 29



años a 83% (77% en las urbanas). Esta brecha probablemente se mantiene en la actualidad, pero en términos de proyecto de vida se observan cambios significativos en los entornos rurales, donde para muchas mujeres jóvenes, la familia y el cuidado de los hijos no es una meta excluyente o prioritaria frente a otras relacionadas con los estudios o el trabajo. El cambio en las zonas rurales se evidencia en los relatos de los jóvenes, con una parte importante de las mujeres más jóvenes planteando retrasar tener hijos y reducir el número de hijos esperados.

Las inserciones económicas de los jóvenes rurales en Ecuador son muy diversas, aunque las largas jornadas mal remuneradas son comunes, y las proyecciones apuntan hacia el autoempleo. Los jóvenes se han insertado en el mundo laboral de modo diverso, desde actividades en la finca familiar, empleos en florícolas, avícolas, ganadería lechera, artesanía, comercio (venta de ropa, de café), emprendimientos de distinto tipo (cooperativas de hongos secos, jugo de penco, gastronomía, etc.), eventos culturales (música, montaje) y audiovisuales. Buscan nuevas actividades productivas que aún no tienen actores posicionados (por ejemplo, servicios asociados a las florícolas, como la instalación de invernaderos), lácteos procesados o licor de jugo de penco, vinculados a las dinámicas de los territorios. Dos importantes vías de inserción, comunes en los jóvenes, son, por un lado, la participación en la actividad de la familia, y por otro, las pasantías o prácticas laborales no remuneradas que realizan los jóvenes estando en el colegio y la universidad; estas últimas ahora por norma tienen un área de vinculación con la comunidad y los estudiantes deben realizar proyectos sociales o productivos con poblaciones cercanas.

En general, los tipos de empleo al que acceden, si bien son muy diversos, tienen jornadas muy largas y/o remuneración baja, lo que lleva a una búsqueda de autoempleo como una opción considerada mejor, lo que va marcando sus trayectorias. Si desean trabajar en algo diferente a la ganadería, agricultura, floricultura, y no tienen recursos para emprender por su cuenta en la comunidad, deben buscar oportunidades en la ciudad y, en la mayoría de los casos, se ven obligados a trabajar en actividades que no están relacionadas a lo que estudiaron o a lo que querían emprender: las mujeres como enfermeras, niñeras, empleadas domésticas; y los hombres en albañilería, choferes, policías o militares.

La familia es un factor de gran relevancia siempre, aunque ambivalente

Puede fungir como soporte y apoyo esencial, como ocurre la mayoría de las veces



(costeo de gastos, ayuda cotidiana, inspiración y consejo), pero también como barrera para el logro de los proyectos de los jóvenes (oposición de padres a proyectos personales, necesidad de colaboración con horas o ingresos al hogar, enfermedad o necesidad de cuidado de parte de algún miembro, maternidad y consiguiente necesidad de cuidado y crianza). En los relatos, la referencia a la familia siempre está, tanto en retrospectiva y presente, como en horizonte futuro (cuidar a los padres cuando ancianos, proveer de las mejores condiciones posibles a los hijos).

Movilidad, arraigo y papel del territorio

Si bien el número de jóvenes rurales que migra entre municipios dentro del país es relevante, los relatos nos indican que existe en los jóvenes un mayoritario y significativo deseo de mantenerse vinculados a su territorio, viviendo allí o regresando después de realizar estudios y/o trabajar fuera. La comunidad, las tradiciones, la naturaleza, la tranquilidad y la seguridad, son valores que los movilizan y que los configuran en su identidad y pertenencia. Incluso en quienes van a la ciudad está presente la idea de ayudar a su comunidad, ya sea volviendo a ella los fines de semana o definitivamente después de haber estudiado o bien ayudando a sus miembros desde donde se encuentren. No se plantea la migración como un desarraigo, sino manteniendo vínculos con sus familias y comunidades a medio y largo plazo.

Contribuye a ello, la cercanía del territorio a las grandes ciudades ya que, por ejemplo, Cayambe, al estar relativamente cerca de Ibarra y Quito, les brinda una oportunidad a los jóvenes para trasladarse a estudiar o trabajar y retornar a su comunidad para no perder el vínculo con sus familiares y amigos.

Ser joven y ser mujer son condiciones que implican distintos grados de desventaja, discriminación y desconfianza

Las prácticas de discriminación de género existen, pero comparativamente son diferentes que las que experimentaron sus madres y abuelas. Antes el maltrato y la violencia era más común y tolerado que lo que es ahora y que lo que se espera sea para las nuevas generaciones; la crianza de los hijos en este sentido es ahora más equitativa, por lo que se trata de un cambio cultural que se va acentuando.

La estructura familiar está cambiando (menos hijos y más tarde) y circulan discursos de mayor equidad de género, pero tener hijos es clave en las trayectorias de las mujeres, pues, aunque los roles comienzan a ser más compartidos (hombres que dedican más



tiempo a la casa y los hijos), la mayor responsabilidad y carga se la siguen llevando las mujeres, limitando muchas veces sus planes fuera del ámbito doméstico. Ellas se han visto enfrentadas a una primera resistencia familiar ante la idea de irse solas a estudiar a la ciudad, rompiendo así modelos tradicionales (casarse joven y tener hijos), a la vez que han experimentado discriminación en ámbitos laborales tradicionalmente masculinos (por ejemplo, en el café).

Si a ser mujer joven rural se le suma ser indígena, más desventajosa es la situación de las personas. Sin embargo, las brechas de género y etarias se tienden a suavizar en los entornos urbanos, mientras que con los elementos étnicos ocurre lo opuesto.

Obstáculos significativos para la inclusión económica

Uno de las barreras que enfrentan es la propiedad y uso de la tierra, cuando son varios hermanos y sus padres van subdividiendo los terrenos a mayor edad cada vez. Junto con ello, existen obstáculos para acceder a servicios financieros, como créditos, que les permita comprarse un terreno, una casa o poner un negocio; sobre todo por la falta de garantías. Por otra parte, las ya mencionadas dificultades para acceder y concluir estudios superiores y el acceso a una inserción laboral adecuada, con niveles salariales y condiciones de trabajo decente.

En las estrategias desplegadas por los jóvenes rurales para llevar a cabo sus proyectos, juegan un rol importante su familia, su empeño personal y políticas públicas y programas de apoyo impulsados por organismos de cooperación o privados

Las trayectorias de los jóvenes dan cuenta de que las formas de inclusión económica se relacionan con lo que sus familias han podido transmitirles, ya sea como actividad familiar (oficio o trabajo tradicional), como capitales materiales (tierra, animales, máquinas, dinero) o capitales intangibles (conocimientos, redes personales, prácticas y actitudes ante la vida). También, extensivamente, lo que les hayan traspasado sus comunidades. Por ejemplo, la voluntad de trabajar y perseverar en la realización de una actividad, junto con ser una característica personal, también tiene que ver con su entorno más próximo.

Pero lo anterior se inserta en un contexto más amplio, en un territorio específico y en el marco de estructuras públicas y privadas de inversión y de apoyo. Las políticas públicas como la conectividad vial, la cobertura de servicios de educación y salud, programas



específicos de apoyo a productores, emprendedores o deportistas, son de gran relevancia para comprender la situación de los jóvenes.

El territorio principal del presente estudio es muy accesible en cuanto a vías por las inversiones en infraestructura de los últimos años, lo cual marca el territorio y el horizonte de los jóvenes en términos de vínculos con la ciudad. Lo mismo en cuanto a conectividad en materia de comunicaciones (teléfono, internet y TV cable). En materia de educación, si bien en primaria y bachillerato existen centros en los territorios rurales o en cabeceras cercanas, la diferencia se produce con fuerza en el acceso a la universidad. Las universidades públicas son gratuitas, pero no hay en todos los cantones del país ni todas las carreras en todas las provincias, y para acceder se debe lograr un puntaje en el examen de la SENESCYT, según el cual se puede postular a los cupos disponibles, que se asignan según puntaje. Los jóvenes rurales suelen obtener puntajes más bajos, por lo que las universidades y carreras a las que pueden acceder generalmente no son las que desearían en primer término. Tomar la decisión de estudiar supone, en estos casos, recursos, tiempo y mucha voluntad.

También destacan las políticas de reconocimiento de los derechos de la población indígena, que en las décadas pasadas cobraron relevancia en pos de una menor discriminación y un mayor ejercicio de derechos. También hay algunos apoyos de gobiernos locales o provinciales para jóvenes emprendedores.

Recuadro 1. El territorio central del estudio: Cayambe, Pichincha, Ecuador.

El Cantón Cayambe, situado en la provincia de Pichincha, es un territorio con dinamismo económico y social, diversificado en cuanto a actividad agrícola (flores, lácteos, cebolla larga, trigo, papas, cebada, entre otros), turismo y gastronomía. Es un territorio rural-urbano, con parroquias rurales vinculadas a una cabecera urbana.

Con mayoría población mestiza y una presencia relevante de población indígena, se habla el idioma español y el kichwa (pueblo Kayambi).

Es accesible desde Quito (2 horas en bus) y tiene como atractivos turísticos el volcán Cayambe, el monumento a la Mitad del Mundo, la laguna de San Marcos y la reserva ecológica Cayambe-Coca (área natural protegida ubicada entre las provincias de Napo, Pichincha, Sucumbíos e Imbabura). Su cercanía a Quito, la localización de “la mitad del mundo” y las acciones de las comunidades lo hacen relevante en la agenda nacional.



Provincia de Pichincha en Ecuador:



Cantón Cayambe, en Pichincha



Indicadores total cantón			Indicadores rurales		
Población total	85.795 hab.		Población rural	46.767 hab.	
Área residencial					
	Urbano	45,5%			
	Rural	54,5%			
Sexo			Sexo		
	Hombre	48,9%	Hombre	48,6%	
	Mujer	51,1%	Mujer	51,4%	
Raza			Raza		
	Indígena	33,9%	Indígena	55,9%	
	Blanca	1,9%	Blanca	1,0%	
	Mestiza	60,8%	Mestiza	41,5%	
	Afroecuatoriana	2,3%	Afroecuatoriana	1,2%	
	Montubia	1,0%	Montubia	0,5%	
Edades			Edades		
	De 0 a 11 años	27,7%	De 0 a 11 años	29,0%	
	De 12 a 17 años	13,0%	De 12 a 17 años	13,9%	
	De 18 a 29 años	21,7%	De 18 a 29 años	20,7%	
	De 30 a 64 años	31,8%	De 30 a 64 años	30,1%	
	De 65 años y más	5,9%	De 65 años y más	6,3%	

Algunos indicadores de Cayambe se presentan a continuación
(fuente: INEC-CPV 2010): Fuente: CPV 2010.

Indicador	Cantón Cayambe	Provincia Pichincha	Región Sierra	Ecuador
Pobreza y desigualdad				
Pobreza por NBI	66,9%	33,5%	50,5%	60,1%
Educación				
Tasa de analfabetismo	11,1%	3,6%	6,9%	6,8%
Promedio de años de escolaridad	7,9	11,4	9,9	9,6
Empleo				
Tasa de participación laboral global	68,5%	67,0%	63,9%	60,5%

Fuente: CPV 2010.

Indicadores total jóvenes cantón			Indicadores jóvenes rurales		
Población joven 18-29 años	18.582 hab.		Población joven rural	9.685 hab.	
Área residencial					
	Urbano	48%			
	Rural	52%			
Sexo			Sexo		
	Hombre	49%	Hombre	48%	
	Mujer	51%	Mujer	52%	
Raza			Raza		
	Indígena	31,7%	Indígena	52,7%	
	Blanca	1,7%	Blanca	0,8%	
	Mestiza	61,5%	Mestiza	43,8%	
	Afroecuatoriana	3,4%	Afroecuatoriana	1,9%	
	Montubia	1,7%	Montubia	0,8%	

Fuente: CPV 2010.



Proyectos de vida de los jóvenes: estudiar y emprender, para lograr tranquilidad

Las aspiraciones de los jóvenes son diversas, pero hay tres elementos presentes de manera muy significativa en su configuración de aspiraciones hacia el futuro. En primer lugar, tiene mucha fuerza la expectativa de realizar estudios superiores. Jóvenes de distintos territorios rurales, hombres y mujeres, especialmente quienes tiene menos edad, se proyectan en la experiencia de concluir estudios universitarios. Ya sea que se trate de una experiencia presente (estar estudiando), pasada (haber iniciado e interrumpido sus estudios) o futura, la mayoría tiene en el horizonte dicho objetivo. Las modalidades para cumplirlo son varias, mudarse a otro lugar, asistir a un centro cercano y viajar todos los días o bien hacer cursos semipresenciales o con metodologías a distancia.

Pese a su presencia en los relatos, en muchos casos se ve como una aspiración difícil y en algunos como inalcanzable, especialmente en quienes ya tienen hijos y trasladan más bien este proyecto hacia aquellos.

Las carreras de interés son diversas: turismo, contabilidad, ingeniería agrícola, ingeniería de sistemas, ingeniería agroindustrial, enfermería, gastronomía e idiomas. La mayoría son estudios que los mantienen vinculados al ámbito rural, pero desde espacios y perspectivas diversas. De la mano de dicha aspiración, está regresar a sus comunidades después de eso, es decir, aunque estudiar implique trasladarse a otro lugar, lo ven como una etapa que culmina con ellos volviendo a sus territorios o bien manteniendo un contacto estrecho con ellos y aportando de diversas maneras a sus comunidades. En algunos casos, ya viven o esperan vivir en la ciudad, pero lo plantean con nostalgia respecto de su lugar de origen.

“Quiero graduarme y estudiar una maestría en la Universidad Católica o migrar para estudiar en el Zamorano. Cuando culmine mis estudios, quiero volver a mi comunidad para trabajar en la tierra de mis padres y tener mi propio ganado. No quiero todavía casarme ni tener hijos”. (Mujer de 19 años, trayectoria típica, Cayambe).

“Si se termina la casona, sería vender algo para los turistas que vengan...mi aspiración es poder vivir tranquila, solo eso (...) mi meta hacia el futuro es que mi hija vaya a la universidad, ahora está estudiando bachillerato. Los estudios son la única esperanza para que no sufra como he sufrido (...) nada es imposible, así que espero que mis hijos lo logren”. (Mujer de 35 años, trayectoria típica, Cayambe).

En segundo lugar, está en el horizonte el crear un negocio (emprendimiento) o bien apoyar y participar en un negocio familiar, que les permita generar ingresos desde un espacio distinto al del común de los empleos que han podido conocer, por experiencia propia o por cercanos en su entorno, caracterizados por largas jornadas mal



remuneradas. El modelo del emprendimiento ha permeado fuerte en los jóvenes como vía deseada de inclusión económica.

“Tengo un emprendimiento que consiste en armar canastas con hortalizas y frutos de la granja y llevarlos a domicilio, es una canasta con 20 productos. Los días viernes hago puerta a puerta en Quito para dar a conocer y ofrecer el servicio (...) Estudié gastronomía para tener una granja restaurante, pero no tengo el dinero necesario” (Mujer de 25 años, trayectoria excepcional, El Quinche).

“Mi hermano está montando un emprendimiento turístico, con cabañas y canopy, y tengo la idea de volver para apoyarlo en ese trabajo, también para estar con mi hijo y con mi papá (...) Mi hermana quiere poner también una escolita de valores y principios, música y cultura” (Hombre, 29 años, trayectoria típica, Cayambe).

“A futuro, quiero ver un mercado para vender mis bordados y heredarle el negocio a mi hija...” (Mujer de 29 años, trayectoria excepcional, Cayambe).

Finalmente, ante la posibilidad de maternidad, las mujeres que aún no tienen hijos, señalan en general que desean aplazar dicho proceso vital, principalmente para poder trabajar. Independiente de cuándo tenerlos, incluso si ya los tienen, tener un menor número de hijos que sus padres y abuelos es una referencia transversal. En el caso de los hombres, la referencia a la paternidad no surge espontáneamente como proyecto ni como un aspecto central en sus aspiraciones.

“No quiero tener más hijos, fue duro tenerlo tan joven, veo a otras personas que son ingenieras y tienen mi edad, pero yo no pude...el embarazo es un obstáculo en el trabajo también” (Mujer de 28 años, trayectoria excepcional, Tabacundo).

“En mi pueblo, es tradicional que a los 15 años las mujeres se casen y tengan hijos. Yo era una hija de madre soltera y tenía un abuelo alcohólico, todos me decían que ese estigma me marcaba y que mi destino era el tradicional... pero mis ganas de estudiar me empujaron a no seguir ese camino. Hubo gente que me apoyó y que me dijo que sí podía y eso me impulsó. Mi abuela es soñadora y mi mamá práctica, entonces tengo de ambas (...) Sigue habiendo alcoholismo y matrimonios forzados en mi pueblo, hijos no deseados, es difícil, pero está cambiando, porque hay mujeres que están queriendo estudiar y no tener hijos” (Mujer, 26 años, trayectoria excepcional, Imbabura).

Por otro lado, hay dos aspectos presentes en los relatos de los jóvenes, aunque no de manera mayoritaria. Uno es la resistencia a proyectarse, a imaginarse el futuro de una u otra manera, por lo que se adopta la actitud de “vivir el presente”, “ir paso a paso” y “no pensar en el futuro”.

Otro es el de proyectarse no ya en sí mismos, sino que, en sus hijos, “que ellos puedan estudiar en la universidad”, “que ellos puedan tener una tranquilidad económica”. Se trata de que ellos tengan condiciones y oportunidades para una vida mejor. Quieren romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza, por lo que tienen



expectativas muy concretas: una casa, un automóvil, unas vacas, un invernadero, para que la vida de sus hijos sea más fácil y para que tengan más opciones para decidir sus propios proyectos.

El tránsito al mundo adulto: los muros en el camino y las estrategias para superarlos

El tránsito al mundo adulto de los jóvenes rurales está marcado por sus transiciones (Hardgrove et al., 2014), siendo fundamentales el acceso a educación, su inserción en el trabajo, la parentalidad y la migración. En estas transiciones, los jóvenes en general en Ecuador suelen enfrentar barreras y obstáculos, las que usualmente se agudizan en el caso de los jóvenes rurales.

El muro del acceso a la educación superior

En la transición educativa, a diferencia de las generaciones anteriores, donde las tasas de analfabetismo y logro sólo de educación primaria eran altas, los jóvenes rurales de hoy alcanzan mayores niveles de escolaridad, con primaria y bachillerato, y el gran muro ha pasado a ser el acceso a la educación superior. En el acceso a la educación superior, un obstáculo lo constituye la prueba de la SENESCYT que arroja un puntaje obtenido, según el cual se puede optar por determinadas carreras. Los jóvenes rurales en general obtienen puntajes más bajos que los urbanos. El siguiente cuadro expresa los bajos niveles de logro de los jóvenes ecuatorianos en general en la prueba “Ser Bachiller” 2016-2017,

donde, aunque no existen grandes brechas, en lo rural los resultados son más negativos que en lo urbano.

CATEGORÍA	INSUFICIENTE	ELEMENTAL	SATISFACTORIO	EXCELENTE	TOTAL
Ser Bachiller Rural	33	45	21	0	100%
Ser Bachiller Urbana	28	44	27	1	100%

*Tabla 1. Porcentaje de niveles de logro SER BACHILLER 2016-2017
Fuente: SENESCYT, extraído de [Torres \(2018\)](#)*

Aunque la brecha no es tan significativa, en los relatos obtenidos, la mayoría de los jóvenes indica que el puntaje no le alcanzó para la carrera que quería o la universidad de su preferencia, teniendo frecuentemente que postergar su continuidad de estudios o bien entrar a una carrera que no era su elección.



“Ha sido difícil, el Estado discrimina y no da oportunidades a los indígenas, tuve que intentar tres veces dando los exámenes de admisión a la universidad, porque me daban cupos lejos [por el puntaje], entonces no se estaba cumpliendo que la educación es un derecho (...), luego de reclamar, me dieron una beca” (Mujer, 26 años, trayectoria

“En marzo de este año postulé a la Universidad Central [pública] para estudiar biología o geología, pero no quedé, el puntaje no me alcanzó, así que estoy estudiando para darlo nuevamente el próximo año” (Mujer, 25 años, trayectoria excepcional, Pichincha).

En términos de calidad, los jóvenes consideran que las universidades en Quito son de mejor calidad que las que se encuentran en las provincias, por lo que cuando hay altas expectativas, se plantea ir a estudiar a la capital. Otros, incluso han estudiado el bachillerato en Quito.

Trabajo no remunerado, trabajadores precoces, largas jornadas y bajos salarios

Todos los jóvenes entrevistados, sin excepción, relatan que desde pequeños han trabajado ayudando en labores familiares, ya sea de cuidado o relativas a la finca.

Relato N°1: Hombre, 26 años, trayectoria típica, Imbabura.

A los 13 años, “H” se fue a vivir y a trabajar con su hermano mayor en una comunidad cercana y ayudaba a recolectar choclos. Durante este tiempo recibió una remuneración semanal; con ese dinero se compraba ropa y ayudaba a su madre en los gastos del hogar. A los 17 años viajó a Quito para vivir con su hermana. Se dedicó al trabajo de la construcción con la pareja de su hermana. No tenía una buena relación con el esposo de su hermana, pero ayudaba a cuidar a sus sobrinas. Todos los domingos iban a misa porque sus sobrinas seguían el catecismo; en esa iglesia Hernán conoció a la que sería la madre de sus hijos.

Relato N°2: Mujer, 25 años, trayectoria excepcional, Pichincha.

Desde pequeña, “J” ayudaba en la finca en las vacaciones y fines de semana, a despulpar el café, a la fermentación y lavado, cocina (traer y cortar plátano para hacer tortillas de verde) y no tanto cosechar, porque cuando era pequeña unos gusanos la picaban fuerte en la cosecha. También ayudaba alimentando a los animales (chanchos y pollos).

En relación a los trabajos remunerados, la experiencia de los jóvenes es diversa, pero en la mayoría de los casos marcada por la pluriactividad, los bajos salarios y las largas jornadas. Las actividades en las que han participado los jóvenes entrevistados son: cultivos agrícolas, florícolas, ganadería (carne, leche, cuidado de pastos), cafetería, chofer, jornalero, construcción, recepcionista planta de acopio, contadora, cocinera, mesera, mucama, cosechadora de hongos, cuidadora de chanchos, cuyes y conejos, bordadora, contratista en empresa de televisión digital, vendedora de ropa, vendedora de chifles y cacao, peladora de pollos, entre otros.

En el cantón Cayambe, una de las actividades que ha ido creciendo es el de la floricultura, con florícolas que van siendo cada vez más comunes en los campos, tanto, que es la principal competidora en la actualidad de la actividad ganadera, que hasta



hace poco era la principal con largueza. La floricultura atrae a los jóvenes, sin embargo, según ellos mismos relatan, las jornadas de trabajo son muy largas y, por otro lado, es intensivo el uso de agroquímicos, por lo que son recurrentes los mareos y malestares, sugiriendo, incluso, que en el mediano plazo los tóxicos podrían generar daños más graves. Adicional al trabajo con las flores, la actividad genera otros servicios asociados en los que los jóvenes también ven oportunidades, como la instalación de invernaderos o el transporte.

La inserción no ha sido difícil en cuanto a acceso, sino más bien precaria en cuanto a calidad, lo que empuja a buscar constantemente una nueva actividad a la que dedicarse para obtener ingresos mayores.

Relato N°3: Hombre, 22 años, trayectoria excepcional, Cayambe.

Cuando "J" cumplió 20 años, quiso emprender con un negocio, así que le pidió a su mamá un espacio en su casa para poner un restaurante de comida rápida; como no existían negocios de ese tipo en la comunidad, y gracias a la experiencia que fue adquiriendo, a "J" cada vez le iba mejor. Este fue su primer trabajo relacionado a la gastronomía y le gustó mucho. En la actualidad, sigue con su negocio y ofrece servicios para eventos, a pesar de la fuerte competencia existente en su propia comunidad y en comunidades aledañas.

Relato N°4: Mujer, 26 años, trayectoria excepcional, Imbabura.

"A" trabaja desde niña, su abuelo era artesano y le ayudaba a vender sus productos. A los 17 años tuvo su primer trabajo remunerado, en una tienda de ropa, los fines de semana le pagaban 10 dólares al día. Después, trabajó en un cibercafé durante 5 años. Ahora trabaja en producción audiovisual desde hace 4 años. Esto sí es lo que quiere hacer, hace cámara, fotos, guion y dirección. Dice que "los pueblos necesitan y pueden tener voz, la comunicación aporta a parar el despojo y valorar lo indígena, exigir lo que es nuestro".

Relato N°5: Mujer, 28 años, trayectoria excepcional, Tabacundo.

"A", en la empresa entró como pasante de contabilidad a los 20 años, con miedo y sin saber, pero aprendió computación, Excel, fue conociendo gente y siempre con ganas de salir adelante. La contrataron como asistente contable, trabajó en bodegas y después la destinaron a limpieza, lloró mucho por eso, pero necesitaba el trabajo. Estando en limpieza conoció a "los de arriba", a los ingenieros y a la jefa, se quedaba ayudando y le enseñaron cosas. La recomendaron para quedar en la unidad de compras públicas (el que era encargado se fue y la recomendó a ella para el puesto, porque le había enseñado cómo se hacía), quedó y se superó. Pero los horarios eran muy largos, de 8am a 22hrs, así que quiso tener un emprendimiento, pero antes tuvo que seguir trabajando empleada, aunque en otros sitios. Cambió su jefe en la empresa y ella se fue a trabajar a un hospital y después llegó a una florícola. Aprendió con su jefe ahí a vender flores al extranjero, su jefe se fue de vacaciones y la dejó encargada a ella. Después, se repitió la historia, su jefe se fue de la empresa y quedó ella en su puesto.

La familia es importante siempre, como apoyo o como barrera

La familia es importante para los jóvenes. Cuando no se vive con los padres, se los visita fines de semana y vacaciones. En varios casos, representa un apoyo anímico y económico para seguir estudios o trabajar, incluso en emprendimientos y actividades conjuntas (por ejemplo, iniciativas turísticas o de comercio familiares). También de la



familia se aprende a desarrollar una actividad y a valorar el trabajo: los más jóvenes aprenden de sus hermanos mayores o abuelos y adquieren un interés, por ejemplo, en practicar un oficio concreto (barista, agroecología, extracción de penco, bordados).

En algunos casos (la minoría), es también fuente de obstáculos, por visiones tradicionales o la predominancia de la urgencia económica, que no permite invertir tiempo pensando en algún retorno posterior (ejemplo de trabajar vs estudiar).

También hay situaciones familiares que afectan las trayectorias de los jóvenes, destacando la subdivisión y herencia de tierras.

"Ahora estoy en un problema legal con mis cuatro tíos -uno vive con su familia al lado, pero otros viven en Quito- para legalizar la herencia del terreno y la casa, porque no han logrado ponerse de acuerdo para la distribución del terreno". (Hombre, 26 años, trayectoria típica, Imbabura).

"Hace 8 años le pedí a mi papá que me regalara un pedazo de tierra, conseguí una cuadra, la menos productiva, y ahí comencé a producir cacao, con inversión en tecnología logré buena productividad y por eso después me regaló una hectárea en una finca vieja, que reconvertí y ya llevo 3 años y el cultivo ha presentado buen rendimiento" (Hombre, 30 años, trayectoria excepcional, Manabí).

"Mis papás siempre me decían que tengo que estudiar, superarme, y que ellos me apoyarían en cualquier decisión que tomara" (Mujer, 27 años, trayectoria típica, Tungurahua).

El nacimiento de un hijo tiene efectos diferenciados entre hombres y mujeres. Entre las primeras, obliga a destinar un período de tiempo con dedicación intensiva a labores de cuidado, que pueden extenderse si es que se tiene un segundo hijo, redundando en falta de conclusión escolar y alejamiento de las actividades remuneradas. En los hombres, suele significar el abandono de los estudios para ingresar al mercado laboral, que puede, a la vez, implicar procesos de migración interna.

"Me gradué de la especialidad de químico-biólogo en el bachillerato y después ingresé a la universidad pública en Ibarra, a la carrera de ingeniería agroindustrial, pero me retiré cuando quedé embarazada, mi mamá había fallecido y no tenía quien me ayudara...quiero retomar los estudios, me gusta agroindustria, pero me conviene estudiar en la salesiana, porque tiene semipresencial, pero no está la carrera que quiero...podría seguir idiomas" (Mujer, 26 años,

"Cuando nació mi hijo, dejé los estudios técnicos que cursaba, para trabajar, me fui a trabajar a Quito hace 10 años" (Hombre, 29 años, trayectoria típica, Cayambe).

Nacer hombre o mujer en territorios rurales: género y juventud en transformación

Los relatos indican un sistema de género en cambio, aunque lentamente. Los jóvenes sostienen que antes había mucho machismo, con un nivel de maltrato físico a la mujer bastante normalizado. Ahora están operando procesos de cambio, pero a la vez con prácticas arraigadas que entran en cuestión.



En los territorios rurales aún son significativos ciertos patrones tradicionales de conducta y roles en relación a los géneros, en cuanto a lo que se espera que haga la mujer (en casa, cuidando de los hijos) y el hombre (trabajando para mantener a la familia). No obstante, en las generaciones jóvenes esto ha ido cambiando y se están transformando esas visiones.

Es común en el relato de las jóvenes, la experiencia de sus madres dedicadas a las labores domésticas y el trabajo en la finca familiar, lo que se transmite como modelo de acción general (que en algunos casos es reproducido por sus hermanas mayores). En el caso de las jóvenes, tienen proyectos diferentes, quieren estudiar y trabajar, retrasar la maternidad o no tener hijos.

“La mentalidad ha cambiado, mi hija menor me dice que no quiere casarse nunca, y que, si lo hiciera, hombre y mujer deben saber hacer de todo, cocinar, lavar y barrer. En mi caso, a mi hijo pequeño le enseñé a lavar también...” (Mujer, 35 años, trayectoria típica, Cayambe).

“En el campo existe mucho machismo; se considera que la mujer debe quedarse en la casa, cocinar y cuidar de los hijos. en la mesa te mandan a callar...cuando era pequeña, mi papá nunca levantó un plato de la mesa y mi mamá fomentaba el machismo ya que lavaba la ropa de mis hermanos; sin embargo, con el paso del tiempo, y gracias al apoyo de toda la familia, ahora mi papá ha cambiado y ya apoya en las labores del hogar, además mi mamá ya dejó de lavar la ropa, cada uno se encarga (...), yo no he tenido que enfrentar problemas de discriminación de género ni en la universidad ni en el trabajo” (Mujer, 28 años, trayectoria excepcional, Tungurahua).

“En el mundo del café hay discriminación y clasismo, a mi me han discriminado los baristas por venir del campo y también por ser mujer, creen que no voy a saber hacer un buen café, la mayoría de baristas son hombres y no son hijos de productores” (Mujer, 25 años, trayectoria excepcional, Pichincha).

Un posible aliado: el papel de las políticas públicas

Destacan como inversiones públicas relevantes la oferta educativa (en sus distintos niveles, con primaria y bachillerato con oferta de relativa calidad y cobertura en transición desde las escuelas milenio, que concentraron los centros y aumentaron la distancia respecto de las localidades más pequeñas; y la superior con oferta pública y gratuita, pero sujeta al examen de admisión, que distribuye los cupos en las carreras y que limita el acceso a los jóvenes rurales porque obtienen en general puntajes bajos). El principal reclamo de los jóvenes en cuanto al ámbito educativo, es el relativo a las dificultades de acceso a la universidad por los puntajes que se piden en las carreras.

En el ámbito de salud, existen centros de salud del Seguro Campesino al que pueden acceder los afiliados y el resto acudir a los dispensarios del Ministerio de Salud, en la cabecera del territorio. Pese a estar cerca, los jóvenes señalan que en los centros de



salud no hay los especialistas ni los medicamentos necesarios.

De forma positiva, la infraestructura vial (caminos y carreteras) ha mejorado con el tiempo y ha hecho posible que la conectividad de las localidades con centros urbanos sea más rápida y fácil. En relación a lo anterior, el transporte permite acceder desde las distintas localidades hasta el centro urbano de Cayambe en aproximadamente 30 minutos, y desde ahí hasta Quito existen buses que hacen el trayecto en dos horas.

“En comparación con lo que tuvieron que vivir mis abuelos y sus padres, los jóvenes de la comunidad están mejor. Mis abuelos son analfabetos, ellos se transportaban en caballos, burros o a pie. Hoy hay facilidad de ingresar a centros educativos, buenas carreteras y transporte público que llega a la comunidad” (Mujer, 26 años, trayectoria excepcional, Cayambe).

“La mayoría de los jóvenes migra y no quieren dedicarse a la agricultura, prefieren buscar un trabajo con sueldo fijo...los que siguen en la comunidad trabajan en florícolas y pocos jóvenes se vinculan al pencho, lo que es una pena, se han perdido las tradiciones” (Mujer, 24 años, trayectoria excepcional, Cayambe).

“Vivo en Quito de lunes a viernes y los fines de semana vuelvo a Otavalo, que está a dos horas en bus” (Mujer, 26 años, trayectoria excepcional, Imbabura).

“Siento orgullo de vivir en Paquiestancia, sobre todo por las festividades que se hacen. Los grupos se organizan, en cada barrio eligen reina y hacen bailes, hacen toros populares en la plaza de toros, concurso del lazo y desfiles, y en la noche cantan grupos folclóricos...No me gusta la ciudad, hay humo y bulla, mientras que en mi comunidad la gente es tranquila y se ayuda mutuamente. Por eso, después de ir a estudiar, quiero volver a mi comunidad y vivir aquí, en el campo, y dar clases de música a los niños” (Hombre, 19 años, trayectoria típica, Cayambe).

En cuanto a programas públicos e iniciativas de cooperación u ONGs, los jóvenes han estado vinculados a distintos programas. Desde la oferta pública, dos jóvenes indicaron haber recibido apoyo del Ministerio del Deporte por su participación en actividades deportivas (residencia en la ciudad para entrenamiento y competiciones), una joven afirmó haber participado en una iniciativa de la Agencia de Promoción Económica CONQUITO dirigida a hijos de productores, gracias a la cual viajó a Honduras a aprender sobre poda y plagas del café, y unos técnicos hondureños también visitaron Ecuador para enseñar sus prácticas (lo recuerda con emoción, pues su primer viaje en avión y fue una experiencia de mucho aprendizaje). Dos jóvenes señalan que después del terremoto que afectó al país, accedió a un crédito de BANECUADOR especial para reconversión productiva en Manabí. Otros dos señalaron que sus padres habían construido sus casas gracias a un “bono de vivienda” otorgado por el gobierno.

Por el lado de las ONGs, destaca una iniciativa impulsada por una empresa y el gobierno, a la cual se sumó una organización Belga, que apoya a productores de papa



con capacitación, asistencia técnica y fomento a la generación de valor agregado.

Por otro lado, los obstáculos para el acceso al crédito y a la tierra son factores que dificultan el desarrollo de los proyectos de los jóvenes. Una joven relata que tenía la idea de comenzar un emprendimiento y no conseguía crédito, yendo de una cooperativa a otra, hasta que finalmente tuvo que pedirle a su papá que él lo pidiera.

Asimismo, en el caso de la población indígena, se señala que durante el gobierno de Rafael Correa se impulsaron cambios importantes para el reconocimiento de la población indígena en sus derechos y se redujo la discriminación, aunque aún persiste en alguna medida y, de hecho, se estaría repotenciando en el último tiempo.

Varios de los jóvenes entrevistados participan en alguna agrupación, asociación o asisten a las reuniones de Cabildo y Juntas, sin embargo, no son muy considerados por los adultos y en general se decide lo que ellos dicen. A los mayores les cuesta aceptar las ideas innovadoras que proponen los jóvenes.

“Tenemos un grupo de vendedoras mujeres que ofrecemos comidas, hortalizas, granos en las ferias de la comunidad, y cuando son las fiestas y hacemos propuestas, tenemos muchos problemas con las mujeres mayores, porque no quieren aceptar nuestras ideas más innovadoras” (Mujer, 29 años, trayectoria excepcional, Cayambe).

Desde los adultos hay barreras y resistencias ante algunas iniciativas de los jóvenes.

“Cuando inicié con el negocio de comida rápida, con un primo, para emprender ofreciendo paquetes turísticos que incluyera caballos, camping, música, danza, alimentación, hospedaje en lugares rústicos...por ese motivo, conversamos con otros jóvenes para que todos conocieran la historia de la comunidad. Lastimosamente, la gente adulta se opuso, por miedo a la destrucción de sus terrenos y al páramo, entonces los jóvenes se desanimaron y nosotros ya no seguimos adelante con la idea” (Hombre, 22 años, trayectoria excepcional, Cayambe).

Conclusiones (preliminar)

El análisis de los relatos de jóvenes rurales de diferentes territorios de Ecuador, permite configurar algunos mensajes sobre la diversidad de trayectorias y aspiraciones de los jóvenes; la importancia que ha ido adquiriendo en estas últimas la transición hacia la educación superior, aunque en la práctica alcance a un muy bajo porcentaje; la proyección laboral a través del autoempleo, como espacio esperanzador ante experiencias asalariadas precarias, pero incierto y con altas probabilidades de fracaso; y el importante arraigo a sus comunidades y territorios de origen.

También queda graficada la familia como espacio esencial para los jóvenes, así como cambios en curso -incipientes- a en cuanto a los sistemas de género y a las aspiraciones de las mujeres jóvenes rurales en cuanto a retrasar la maternidad, para desarrollarse en



otras áreas como los estudios y el trabajo.

En las estrategias desplegadas por los jóvenes rurales para llevar a cabo sus proyectos, juegan un rol importante su familia, su empeño personal y políticas públicas y programas de apoyo impulsados por organismos de cooperación o privados, situados territorialmente. Por ello, se requieren inversiones para el desarrollo rural general e inversiones orientadas de modo específico a los jóvenes, es decir, una combinación de políticas dirigidas al territorio y políticas orientadas a los individuos, específicamente considerando el curso de vida y sus etapas. Referencias (pendiente)

Anexo 1



	ACTIVIDAD	EMPREN- DAMIENTO/ ASOCIACIÓN	LUGAR DE LA ENTREVI STA	PROCEDEN CIA	SEXO	EDAD	INSTRUCCIÓN	TIPO DE ENTREVISTA	TIPO DE TRAYECTORIA
1	Servicios no agrícolas	Cafetería Careli	Quito	Pichincha- Tabacundo	F	28	Tecnóloga	Relato de Vida	Excepcional, vinculada a la dinámica del territorio
2	Procesados agrícolas/Servicios	Café Perla Negra	Quito	Pichincha- Noroccident e	F	25	Bachiller	Relato de Vida	Excepcional, vinculada a la dinámica del territorio
3	Servicios no agrícolas (comunicación, periodismo)	Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas APAK	Quito	Imbabura- Otavalo	F	26	Estudiante universitaria	Relato de Vida	Excepcional, no vinculada a la dinámica del territorio
4	Agricultura o turismo	No es emprendedor ni líder	Quito	Imbabura	M	26	Primaria	Relato de Vida	Estándar
5	Procesados agrícolas	Papas chips AGROPAPA	Quito	Tungurahua- Ambato	F	28	Ingeniería	Relato de Vida	Excepcional, vinculada a la dinámica del territorio
6	Agricultura	No es emprendedora ni líder	Quito	Tungurahua- Quero	F	26	Bachiller	Relato de Vida	Estándar
7	Agricultura	Corporación Fortaleza del Valle	Quito	Manabí- Calceta	M	30	Administrador de empresas	Relato de Vida	Excepcional, vinculado a la dinámica del territorio
8	Agricultura	No emprendedor ni líder	Quito	Manabí- Tosahua	M	18	Bachiller	Relato de Vida	Estándar
9	Agricultura	Canasta de productos agroecológicos	Quito	Pichincha-El Quinche	F	25	Bachiller	Relato de Vida	Excepcional, vinculado a la dinámica del territorio
1	Agricultura	No es emprendedora ni líder	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Paquiestancia	F	26	Bachiller	Estudio de caso	Estándar
2	Agroindustria	Pasantía en INDES LAE, licor Tzawarmishki	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Juan Montalvo	F	24	Tecnóloga en Biotecnología	Estudio de caso	Excepcional
3	Agroindustria	Encargada de procesos planta de lácteos	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Santo Domingo No. 1	F	26	Ingeniera Agroindustri al	Estudio de caso	Excepcional
4	Ganadería	No es emprendedora ni líder	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Paquiestancia	F	19	Bachiller	Estudio de caso	Estándar
5	Artesanías	Bordados	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Pesillo	F	29	Bachiller	Estudio de caso	Excepcional
6	Gastronomía/Turismo	Local de comida rápida	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Paquiestancia	M	22	Estudiante universitario	Estudio de caso	Excepcional
7	Servicios	No es emprendedor ni líder	Cayambe	Pichincha- Cayambe	M	29	Bachiller	Estudio de caso	Estándar
8	Agroindustria	No es emprendedora ni líder	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Pesillo	F	35		Estudio de caso	Estándar
9	Servicios	No es emprendedor ni líder	Cayambe	Pichincha-Cayambe- Paquiestancia	M	19	Bachiller	Estudio de caso	Estándar



10	Agricultura	No es emprendedora ni líder	Cayambe	Pichincha- Cayambe- Pambamarquito	F	25	Bachiller	Estudio de caso	Estándar
11	Procesados agrícolas	Aliños artesanales	Quito	Pichincha- Tabacundo	F	30	Ingeniera	Entrevista complementaria	Excepcional, vinculada a la dinámica del territorio
12	Procesados agrícolas/Servicios	Café Perla Negra	Quito	Pichincha- Noroccidente	F	34	Tecnóloga	Entrevista complementaria	Excepcional, vinculada a la dinámica del territorio
13	Agropecuaria/procesados agrícolas	Asociación Lácteos Nuevo Futuro y Harinas Andinas	Quito	Pichincha- Cayambe	M	34	Tecnología/ Administración empresas	Entrevista complementaria	Excepcional, vinculado a la dinámica del territorio

Notas

¹ Este documento es resultado del Programa “Jóvenes Rurales, Territorios y Oportunidades: Una estrategia de diálogo de políticas” coordinado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y fue posible gracias al financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

² Juan Fernández Labbé. Doctor en Sociología y Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH); Eugenia Quingáisa. Economista. Investigadora en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp-Ecuador.

³ En anexo se incluye el detalle de las entrevistas.

⁴ De acuerdo a la ENEMDU, el subempleo se refiere a personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajaron menos de la jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.



El agronegocio en Uruguay y sus asalariados: Desigualdades generacionales

Juan Ignacio Romero Cabrera

Resumen

La última década, la estructura productiva agropecuaria del Uruguay ha tenido un aumento en la inversión productiva internacional en cadenas de producción de valor, generando territorios rurales integrantes del mercado global de alimentos, cadenas que representan el 69% de las exportaciones. Tales transformaciones se enmarcan en la reestructuración del proceso capitalista, (iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica) y su integración a la producción agropecuaria. Este trabajo analiza el mercado de trabajo (como parte de dicho proceso productivo) las condiciones sociales de los asalariados, las dimensiones de análisis de calidad de empleo, generacional, niveles de pobreza y características productivas de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y soja que explican el 57% de las exportaciones de alimentos del Uruguay. La principal pregunta problema de investigación es ¿cuál ha sido la evolución de la pobreza de los asalariados rurales en tales cadenas? A la que se agrega ¿en qué condiciones de empleo trabajan? La fuente de datos serán las Encuestas Continuas de Hogares entre 2012 y 2017, dado que incorporan los territorios rurales y es el período de crecimiento y estabilización de la producción agroalimentaria. En definitiva, debatir acerca de las condiciones de empleo y sociales generadas por el agronegocio en mercado de trabajo rural integrado al mercado global agroalimentario. Se concluye que las mejoras formales del trabajo no implican mejoras en las condiciones sociales de vida y de empleo de los asalariados.

Palabras clave

Asalariados rurales. Agronegocios y trabajadores. Desigualdades sociales en asalariados rurales. Generaciones y asalariados rurales.

Introducción

La última década, la estructura productiva agropecuaria del Uruguay ha tenido un aumento en la inversión productiva internacional en cadenas de producción de valor, generando territorios rurales integrantes del mercado global de alimentos, cadenas tales como la cárnica, celulosa, soja, lácteos y arroz que representan 76% de las exportaciones. Tales transformaciones se enmarcan en la reestructuración del proceso



capitalista, (iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica) y su integración al proceso productivo agropecuario. Este trabajo pretende analizar en el mercado de trabajo (como parte de dicho proceso productivo) las condiciones sociales de los asalariados, considerando las dimensiones de análisis de calidad de empleo, niveles de pobreza y características productivas de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y soja que explican el 57% de las exportaciones de alimentos del Uruguay. ¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza de los asalariados rurales en tales cadenas? ¿En qué situación social y condiciones de empleo viven y trabajan? Se plantea necesario debatir acerca de estos procesos productivos integrados al mercado global, y las condiciones de empleo y sociales que generan los mismos. La fuente de datos serán las Encuestas Continuas de Hogares entre 2012 y 2017, dado que incorporan los territorios rurales y es el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria. En definitiva, las transformaciones productivas generadas por el actual modelo socioproductivo, ¿qué condiciones sociales y de empleo genera para sus trabajadores?

Transformaciones productivas, agronegocios y trabajo asalariado: consolidando el capitalismo agrario.

En los últimos 25 años, aproximadamente, se han intensificado los efectos socioespaciales y político institucionales de la reestructuración en los procesos productivos capitalistas post fordistas, los cuales no solamente se globalizan, sino que recomponen e impactan determinados espacios sociales.

La ruralidad de Uruguay no escapa de las tendencias globales en materia de transformaciones productivas y sociales, el crecimiento a nivel internacional de los precios de las materias primas, a raíz de la demanda de energía y alimentos (Rubio, 2008), produce un ciclo de expansión productiva y alza de los precios que transforma al sector agropecuario nacional. Un indicador claro de estos cambios es la evolución del precio de la tierra en el país que en esos años aumenta casi ocho veces su valor, con precios record, alcanzando en los casos de las tierras más fértiles precios similares a los de la región fronteriza.

Este nuevo contexto como se ha mencionado en Riella y Romero (2014) está signado por cuatro factores que conjugados entre sí componen el escenario socio económico actual sobre el cual debe analizarse la estructura agraria contemporánea nacional. Ellos



son las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales para la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras.

El corolario de todos estos factores ha sido el aumento del precio de la tierra que al inicio del año 2000 tenía un valor de precio promedio por hectárea vendida de U\$S448, pasando en el 2011 a un valor promedio de U\$S3196. En las regiones con mayor aptitud agrícola el precio promedio superó los U\$S5000 a fines del período. Los precios de los arriendos también mostraron un aumento importante en el período, pasando de U\$S28 promedio en el año base a U\$S152 la hectárea en el 2011, y en los predios agrícolas el precio de arriendo promedio se ubicó por encima de los U\$S300 para ese año. El acceso a la tierra, la democratización de la estructura agraria y los intentos por reducir su grado de concentración se han visto detenidos por las dificultades y por el papel de los actores que actúan en ella.

Los impactos territoriales han sido muy heterogéneos dando lugar a una nueva regionalización de las áreas rurales, por otro lado, se observan cambios generados por las dinámicas laborales en los grupos etarios que integran el mercado laboral en especial a los jóvenes, quienes pasan a integrar los mismos de manera precaria e informal, aunque en porcentajes menores que en el resto del continente.

En las últimas dos décadas se ha consolidado el proceso de modernización agraria en el cual las relaciones sociales capitalistas y de contratación salarial pasan a ser predominantes, en la última década en particular debido a factores de la demanda mundial hay un crecimiento de trabajadores asalariados para luego estabilizarse, en tal proceso se configura una forma de explotación secundaria en la cual la racionalidad del “intercambio de equivalencia” deja de aplicarse o sólo se aplica de forma limitada (Dörre 2013a en Cerda, 2016), utilizándose formas simbólicas y la fuerza política para devaluar el trabajo de ciertos grupos sociales o para excluir a ciertos grupos.

Las transformaciones en el proceso de producción agrario contemporáneo han consolidado el predominio productivo del trabajo asalariado, reafirmando el carácter capitalista del mismo. Ahora, como bien dice Villulla. J.: “Sin embargo, limitar la cuestión agraria al –grado de desarrollo del capitalismo- y medir el mismo por –el peso del trabajo asalariado- llevaría a equívocos importantes a la hora de caracterizar con exactitud una estructura social agraria de modo más integral, así como de identificar y explicar sus problemáticas específicas y prefigurar posibles soluciones y sujetos de cambio” (Villulla. J.: 2019: pp.56).



De este forma, se considera una dimensión a tener en cuenta en el diseño analítico las condiciones precarias de empleo que se generarían en el sector agroexportador, lo que implica la instalación de diferencias y jerarquizaciones con base en la segmentación y categorización de los/as trabajadores, en este caso por la edad. Diferenciaciones y jerarquizaciones que implican una lógica de devaluación del otro que, a su vez, legitima la distribución diferenciada de protecciones así como el acceso diferenciado a derechos (Cerde, 2016).

En definitiva, esta última década ha marcado un quiebre en el proceso de estancamiento dinámico que caracterizaba a la estructura agraria nacional desde mediados de los años 70, dicho quiebre ha significado profundizar las relaciones sociales de producción capitalista en la sociedad rural uruguaya de inicios del siglo XXI. Proceso que se fundamenta en la articulación contradictoria entre una realidad técnica agropecuaria precapitalista y formas nuevas de sociedad y tecnología, que se han intensificado, consolidado y generado una base social ampliada de propietarios de los medios de producción.

Metodología

La metodología aplicada fue de diseño cuantitativo, la fuente de datos las Encuestas Continuas de Hogares (en adelante ECH) entre 2012 y 2017 del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), dado que incorporan los territorios rurales y es el período de mayor crecimiento de la producción agroalimentaria. Por otra parte, la desagregación por sectores y subsectores de actividad se realiza de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme - Revisión 4 (CIIU Rev. 4) empleada en la ECH, lo que permitió la construcción de los sectores de actividad involucrados en cada cadena productiva y posteriormente analizar las características de sus trabajadores de acuerdo a los datos que se presentan.

El análisis empleado con técnicas de análisis exploratorio (estadística descriptiva univariable), de análisis bivariante con fines descriptivos (descripción del conjunto de la población observada) y de análisis factorial por correspondencias entre el índice de desarrollo departamental y cadenas de agronegocios. Cabe advertir que la ECH se realiza a partir de una muestra de la población, las cifras presentadas son una referencia válida pero no son exactas y la confianza se reduce a medida que aumenta el nivel de desagregación y las respuestas abarcan un conjunto de personas cada vez menor.



Al referirse a calidad del empleo estará considerado la dimensión de la formalidad sobre el cual el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE) informa por medio del dato sobre el empleo no registrado en la seguridad social (Leal, J. 2018: 30-31), pero también se agrega el cobro de aguinaldo entendido como sueldo anual complementario se entiende la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero por el patrón en los doce meses anteriores al 1º de diciembre de cada año, según la ley la Ley N.º 12.840, de 22 de diciembre de 1960 y por último, la cantidad de horas de trabajo semanal, es decir, que no se superen las 48 horas de trabajo semanal más allá de la rama de actividad laboral del trabajador. Es decir, que aquel trabajador que desarrolle un empleo de acuerdo a la normativa vigente en las dimensiones señaladas se considerará un empleo de calidad.

El método empleado para la construcción de los indicadores de pobreza Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI en adelante) e indirecto, línea de la pobreza se lo realizó en forma conjunta, también conocido como análisis integrado de la pobreza (Katzman, R. 1989), y así obtener una nueva medición con mayor nivel de exhaustividad. Esta genera cuatro categorías, a saber: pobreza crónica: comprende aquellos hogares que tienen ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza y una o más necesidades básicas insatisfechas; pobreza reciente: incluye a los hogares pobres por ingresos (o consumo) pero con necesidades básicas satisfechas; pobreza inercial: se refiere a hogares con necesidades básicas insatisfechas e ingresos (o consumo) sobre la línea de pobreza; y por último, integración social: se trata de la población que no es pobre por ninguno de los dos criterios; es decir, tiene ingresos por encima de la línea de pobreza y sus necesidades básicas están satisfechas (SIISE, 2013).

En relación a la metodología adoptada para la construcción del índice de desarrollo departamental, es tomada del trabajo “Desarrollo económico regional y clubes de convergencia en Uruguay” (Diego Aboal; Bibiana Lanzilotta; Martín Pereyra y Paz Queraltó

– CINVE: pp7 - 2018) y aplicada en la clasificación de los Departamentos analizados de acuerdo a tres categorías: 1- Departamentos por encima del Índice de Desarrollo (en adelante ID) promedio del período 2007-2015; 2- Departamentos en el promedio del ID del período citado y 3- Departamentos por debajo del ID promedio del período 2012-2017.



En síntesis, se aplicó el análisis estadístico descriptivo e inferencial de fuentes secundarias de datos durante el período 2012 – 2017 del mercado de trabajo rural sectores agroexportadores del Uruguay, lo que posibilita la evaluación de tendencias y la comparación de los datos disponibles (Stewart, 1984: 11 *in* Cea D´Ancona, 1996: 222).

Resultados

A continuación se presenta la evolución del PIB agrícola y se observa el notorio crecimiento que tuvo a partir de 2002, incluidos los picos entre 2011 y 2013 indicando el liderazgo del sector agrícola en las transformaciones productivas.

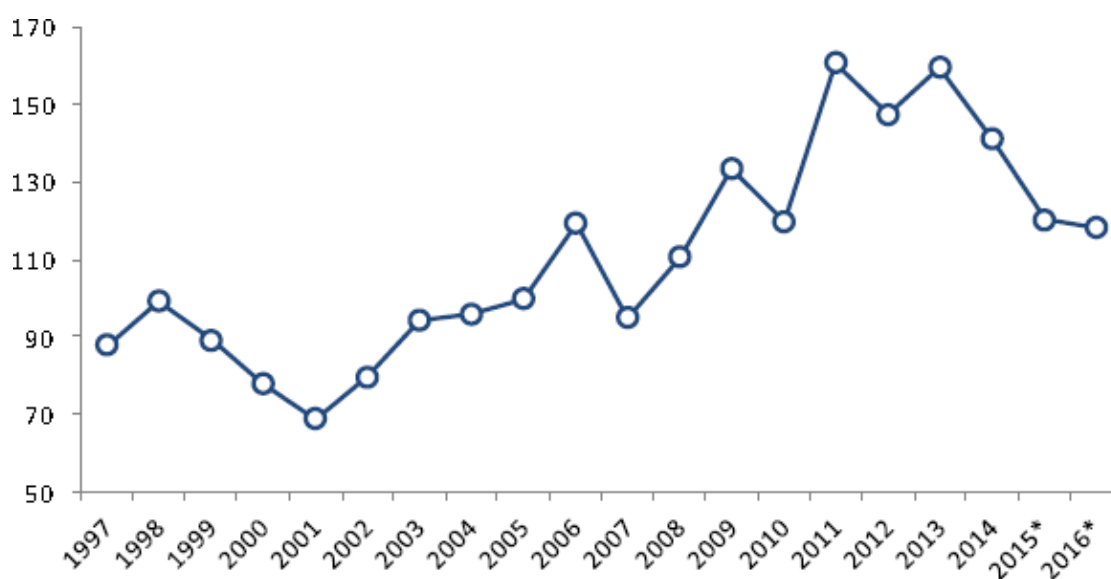


Gráfico 1. Evolución PIB Agrícola (base 100= 2005)
Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central del Uruguay.

La gráfica que sigue a continuación indica la evolución de las exportaciones de carne vacuna.

En 2017, las exportaciones de carne bovina sumaron US\$ 1.511 millones, lo que significó un crecimiento de 6% con respecto al año anterior. De esta manera, la carne bovina tuvo una participación de 17% sobre las ventas totales (Uruguay XXI, 2018).

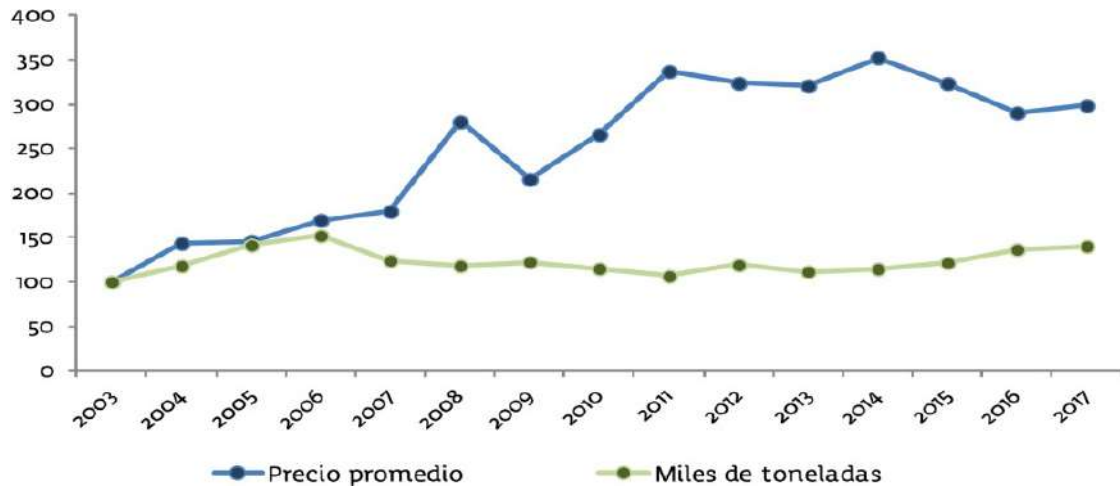


Gráfico 2. Evolución exportaciones carne vacuna

Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas e Instituto Nacional de Carnes.

A pesar de la creciente competencia de la agricultura por el uso de la tierra, la ganadería bovina no ha perdido su importancia en los últimos años, el número de vacunos se ha mantenido relativamente estable durante la última década.

El gráfico indica el incremento en el valor exportado de la última década basada en el aumento del precio, incremento asociado principalmente a las ventas hacia la Unión Europea. Tanto el volumen como el precio promedio mostraron desempeños positivos en 2017. Ambos indicadores crecieron a una tasa de 3% en la comparación interanual, esta situación señala la importancia de dicha cadena productiva en la estructura del agronegocio uruguayo, pero también el papel en el mercado global dado que se encuentra entre los 10 países mayores en la exportación de carne vacuna. A continuación los principales mercados del agronegocio uruguayo, para tener presente como el mismo se ha integrado al mercado global de alimentos.

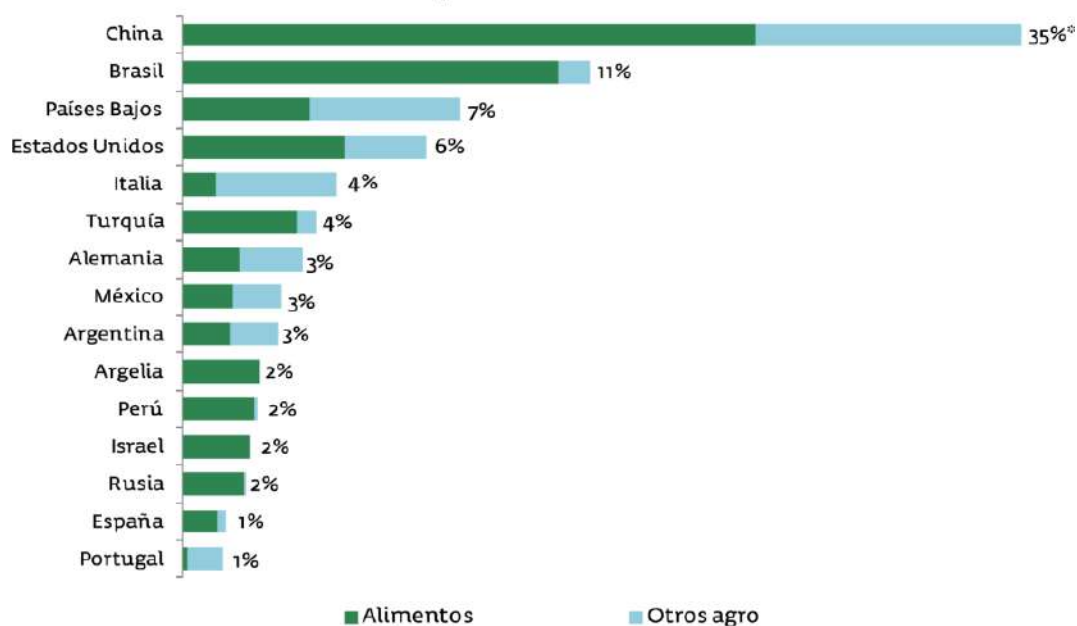


Gráfico 3. Principales destinos del agronegocio uruguayo - 2017

Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira, Montes del Plata y Penta Transaction.

El 35% de las ventas agroindustriales se dirigieron a China, principal destino de la carne bovina, celulosa, soja, madera, subproductos cárnicos, y lana. Brasil es el segundo destino de exportación, posicionándose como el primer destino para lácteos, pescado, caucho, carne ovina, malta y cebada. Mientras que a la Unión Europea se la analiza como un todo y no por país separado, constituyen el segundo destino de los productos del agronegocio con un monto cercano a US\$ 1.361 millones, y siendo principal destino de cueros, cítricos, carne equina, miel, frutas no cítricas, y preparaciones de fruta (Uruguay XXI, 2018:12).

Los datos previos posibilitan contextualizar la importancia por un lado del agronegocio en la estructura productiva del Uruguay, pero también como el mismo forma parte del mercado global de alimentos. Los datos a continuación dan cuenta de la evolución entre 2012 y 2017 de las condiciones laborales y sociales, de los asalariados rurales en las cadenas del agronegocio de la carne, forestación y oleaginosos. Al referirse de condiciones laborales se trabaja con la formalidad del empleo y la construcción de un índice de calidad del empleo, el cual se compone por la cantidad de horas trabajadas por semana, trabajo en blanco y pago del aguinaldo (decimotercer salario). Las variables de condiciones sociales son las Necesidades Básicas Insatisfechas y el índice multidimensional de la pobreza de Katzmann.



2012	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Cadena Carne	2589	75,7	75,7
Cadena Forestación	590	17,3	93,0
Cadena Cereales_Soja	239	7,0	100,0
Total	3418	100,0	
2017	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Cadena Carne	3011	69,4	69,4
Cadena Forestación	724	16,7	86,1
Cadena Cereales_Soja	604	13,9	100,0
Total	4339	100,0	

Tabla 1. Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales_Soja y Transporte)

Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

Al considerar los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios mencionadas en la tabla, se lo hace porque las mismas estarían representando el 65% de los trabajadores asalariados del sector agropecuario (53% ganadería, 4% oleaginosos y 8% forestación), según L. Nion (2013: 15).

Por otro lado, representan el 57% (21% carne bovina, 19% celulosa y 17% soja) de las exportaciones agropecuarias del Uruguay lo que significa aproximadamente USD 4.090: señalando la importancia de dichas cadenas de agronegocios. Considerando lo expuesto, se aprecia en la tabla presentado estabilidad con relación al peso del sectores en el empleo pero variación en los mismos, un descenso del 7% aproximadamente en la cadena de la carne y un aumento del 7% en la cadena de oleaginosos.

En definitiva, la forestación ha sido estable en la composición de su fuerza de trabajo asalariada, mientras que ha descendido en la carne y aumentado en los oleaginosos.

A continuación se presentará la situación de tales trabajadores acerca de la formalidad de sus ocupaciones.

Tasa de formalidad del empleo de los trabajadores.			
2012	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Formal	1733	50,7	50,7
No Formal	1685	49,3	100,0
Total	3418	100,0	
2017	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Formal	2308	53,2	53,2
No Formal	2031	46,8	100,0
Total	4339	100,0	

Tabla 2 . Empleo formal.

Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.



Al referirse de empleo formal implica aquel comprendido y amparado por la normativa laboral y social uruguaya, es decir, trabajo en “blanco”, descuentos del salario para la jubilación, derecho al salario vacacional, al pago de la hora extra, semana inglesa en horas de trabajo, pago de aguinaldo (décimo tercer salario), etc. Definido ello, se observa que entre los años analizados el empleo formal tuvo un incremento de prácticamente dos puntos porcentuales entre los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios mencionadas.

En resumen, entre 2012 y 2017 el empleo formal aumento un 2%.

2012	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Empleo de calidad	1363	39,9	39,9
Empleo de no calidad	2055	60,1	100,0
Total	3418	100,0	
2017	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Empleo de calidad	1752	40,4	40,4
Empleo de no calidad	2587	59,6	100,0
Total	4339	100,0	

Tabla 3. Índice de calidad del empleo.
Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

Índice calidad de empleo	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales, Soja) – 2012			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales Soja	Total
Empleo de calidad	79,8% 42,0%	11,3% 26,1%	9,0% 51,0%	100,0% 39,9%
Empleo de no calidad	73,1% 58,0%	21,2% 73,9%	5,7% 49,0%	100,0% 60,1%
Total	75,7% 100,0%	17,3% 100,0%	7,0% 100,0%	100,0% 100,0%
Índice calidad de empleo	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales, Soja) – 2017			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales _ Soja	Total
Empleo de calidad	69,8% 40,6%	14,3% 34,5%	15,9% 46,2%	100,0% 40,4%
Empleo de no calidad	69,1% 59,4%	18,3% 65,5%	12,6% 53,8%	100,0% 59,6%
Total	69,4% 100,0%	16,7% 100,0%	13,9% 100,0%	100,0% 100,0%

Tabla 4. Calidad del empleo por cadena de agronegocios 2012 – 2017
Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.



Se aprecia que la variación entre las dos categorías acerca de la calidad del empleo, empleo de calidad y de no calidad ha sido dentro de los valores esperados. Es decir, que prácticamente la variación ha sido mínima (crecimiento de medio punto porcentual del trabajo de calidad) en el período analizado.

Al considerar la información de la Tabla 2, los datos indicarían crecimiento de la formalidad laboral pero que no es lineal con el aumento de empleos de calidad. Ante lo cual, se plantea la interrogante ¿acaso se puede tener un empleo formal y precario?

Para el período analizado entre las diferentes cadenas de agronegocios, se aprecian cambios y estabilidades. Estabilidad observada en la cadena forestal, dado que es la que presenta el mayor porcentaje de empleos de no calidad, y los cambios al interior de las cadenas de agronegocios ya que cereales y soja conjuntamente con forestal aumenta el porcentaje de empleos de calidad, mientras que la cadena de la carne los disminuye.

En definitiva, aunque se advierten cambios en la mejora de empleos de calidad en algunas de las cadenas analizadas, lo que no se altera es que la cadena forestal es la que genera el mayor porcentaje de empleos de no calidad, seguida de la cárnica y luego, la de cereales y soja.

2012	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
NBS	2360	69,0	69,0
NBI	1058	31,0	100,0
Total	3418	100,0	
2017	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
NBS	2619	60,4	60,4
NBI	1720	39,6	100,0
Total	4339	100,0	

*Tabla 5. Situación de las NBI en los trabajadores de los agronegocios.
Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.*

Se aprecia que durante el período analizado las NBI de los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios en cuestión, aumentaron aproximadamente 9%.

Es decir, que ha mejorado la formalidad laboral, no ha sido así con la calidad del empleo



y se suma ahora que las condiciones materiales de los asalariados también no han mejorado.

Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales, Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	Total
Integrados	78,8% 70,0%	13,4% 52,4%	7,7% 74,5%	100,0% 67,3%
Pobreza reciente	45,0% 1,0%	41,7% 4,2%	13,3% 3,3%	100,0% 1,8%
Pobreza inercial	74,5% 26,9%	21,0% 33,2%	4,5% 17,6%	100,0% 27,4%
Pobreza estructural	42,3% 2,0%	48,8% 10,2%	8,9% 4,6%	100,0% 3,6%
Total	75,7% 100,0%	17,3% 100,0%	7,0% 100,0%	100,0% 100,0%

Tabla 6. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja) – 2012.

Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

Siguiendo la línea de análisis de las condiciones sociales de los trabajadores, la situación de los trabajadores de la cadena cárnica sería intermedia en las diferentes categorías multidimensionales de la pobreza, entre los trabajadores de la cadena de cereales y soja se presentarían los mejores indicadores de integración social, mientras que los de la forestación serían aquellos con mayor porcentaje de pobreza estructural e inercial, indicando no solo ellos sino en general para las tres cadenas un porcentaje importante de pobreza inercial lo que implica una condición de vulnerabilidad social ante los ciclos a la baja de los negocios de dichas cadenas productivas y el impacto que implica en los ingresos vía salario.

A continuación se continuará en el análisis pero con datos al 2017 para observar las características de las tendencias observadas en 2012.



Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	Total
Integrados	69,7% 60,1%	14,8% 53,2%	15,4% 66,4%	100,0% 59,8%
Pobreza reciente	34,8% 0,3%	52,2% 1,7%	13,0% 0,5%	100,0% 0,5%
Pobreza inercial	71,5% 38,2%	17,5% 38,8%	11,1% 29,5%	100,0% 37,1%
Pobreza estructural	38,2% 1,4%	41,8% 6,4%	20,0% 3,6%	100,0% 2,5%
Total	69,4% 100,0%	16,7% 100,0%	13,9% 100,0%	100,0% 100,0%

Tabla 7. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja) – 2017.

Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

Analizando la trayectoria de la pobreza multidimensional entre los asalariados de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y cereales y soja entre 2012 y 2017, se observa que la mayoría se encuentra integrado socialmente especialmente los asalariados de cereales y soja, disminuye la pobreza estructural en las tres cadenas y finalmente, aumenta la vulnerabilidad social de los asalariados en general y especialmente entre los forestales como se ha señalado anteriormente.

Los datos a continuación siguen en la línea de análisis anterior pero agrega la dimensión generacional, por lo tanto se apreciará la trayectoria de la pobreza dimensional en los trabajadores asalariados de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y cereales y soja de acuerdo a la generación de pertenencia.



Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Jóvenes (14 – 30 años) Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	Total
Integrados	65,9% 60,2%	17,8% 48,3%	16,3% 60,8%	100,0% 57,8%
Pobreza reciente	44,4% 0,6%	55,6% 2,4%	0,0% 0,0%	100,0% 0,9%
Pobreza inercial	62,4% 36,8%	23,7% 41,6%	13,9% 33,3%	100,0% 37,3%
Pobreza estructural	37,5% 2,4%	40,0% 7,7%	22,5% 5,9%	100,0% 4,1%
Total	63,2% 100,0%	21,2% 100,0%	15,5% 100,0%	100,0% 100,0% (n= 985)
Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Jóvenes (> 30 años) Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	Total
Integrados	68,7% 60,3%	14,8% 54,8%	16,5% 69,2%	100,0% 60,7%
Pobreza reciente	28,6% 0,2%	50,0% 1,6%	21,4% 0,8%	100,0% 0,5%
Pobreza inercial	72,4% 38,2%	16,9% 37,7%	10,7% 26,8%	100,0% 36,5%
Pobreza estructural	37,5% 1,3%	42,2% 6,0%	20,3% 3,3%	100,0% 2,3%
Total	69,1% 100,0%	16,4% 100,0%	14,5% 100,0%	100,0% 100,0% (n= 2751)

Tabla 8. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja) según Generación– 2017.
Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

La situación para el 2017 para los asalariados jóvenes mejora en más integrados socialmente aumentando aproximadamente 6%, y disminuyendo en situación de pobreza en general y especialmente en la estructural, por otra parte, se mantiene el agronegocio de la carne como aquel que agrupa la mayoría de los jóvenes asalariados pero aumenta el de cereales.

En definitiva, la tendencia se sostiene en las condiciones sociales de los jóvenes asalariados aumentando la situación de integración social, siendo el agronegocio forestal



como aquel que mayor porcentaje de jóvenes asalariados tiene y la carne el que más concentra a estos trabajadores con un crecimiento en la cadena de cereales.

Al analizar los adultos la situación cambia, disminuye aproximadamente 13% los integrados socialmente y aumenta la pobreza en similar porcentaje especialmente en la inercial, indicando la vulnerabilidad social en la que se encuentran en la medida que continúe la pérdida de salario según las características metodológicas de tal categoría. Por otra parte, disminuye el peso de adultos trabajando en el agronegocio de la carne y aumenta en la de los cereales tendencia observada entre los jóvenes indicando la captación de mano de obra asalariada en la misma en tal período a expensas de la cárnica. A pesar de ello lo que no se altera es que quienes trabajan en la carne o cereales presentan los mayores porcentajes de integración social, y los de la forestación los mayores de pobreza.

En suma, para los adultos la tendencia indica un “quiebre” con relación a 2012 dado que aumenta en prácticamente 13 puntos porcentuales la pobreza de los mismos, especialmente en la inercial indicando pérdida de ingresos salariales y situando a los mismos en mayor vulnerabilidad social. Continúan siendo el agronegocio de la carne y cereales como aquellos con más adultos asalariados integrados socialmente y mayor pobreza en la forestación.



Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Jóvenes (14 – 30 años)			Total
	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	
Integrados	69,5% 55,1%	22,0% 42,3%	8,5% 58,2%	100,0% 51,9%
Pobreza reciente	63,2% 2,1%	26,3% 2,1%	10,5% 3,0%	100,0% 2,1%
Pobreza inercial	64,1% 38,2%	30,4% 43,9%	5,5% 28,4%	100,0% 39,0%
Pobreza estructural	43,5% 4,7%	45,2% 11,7%	11,3% 10,4%	100,0% 7,0%
Total	65,4% 100,0%	27,0% 100,0%	7,6% 100,0%	100,0% 100,0% (n= 885)
Índice Multidimensional de la Pobreza (Katzman)	Jóvenes (> 30 años)			Total
	Trabajadores de Cadena de Agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja)			
	Cadena Carne	Cadena Forestación	Cadena Cereales, Soja	
Integrados	81,2% 74,3%	11,3% 59,3%	7,6% 80,8%	100,0% 72,7%
Pobreza reciente	36,6% 0,7%	48,8% 5,7%	14,6% 3,5%	100,0% 1,6%
Pobreza inercial	80,7% 23,7%	15,4% 25,9%	3,9% 13,4%	100,0% 23,3%
Pobreza estructural	41,0% 1,2%	52,5% 9,1%	6,6% 2,3%	100,0% 2,4%
Total	79,4% 100,0%	13,8% 100,0%	6,8% 100,0%	100,0% 100,0% (n= 2553)

Tabla 9. Condiciones sociales de los trabajadores de los diferentes agronegocios (Carne, Forestación, Cereales-Soja) según Generación– 2012.
Fuente: elaboración propia, ECH – INE 2012-2017.

Para el año 2012 se aprecia entre los asalariados jóvenes de los agronegocios analizados que la mayoría se encuentra en situación de integración social y luego en pobreza inercial, agrupando 9 de cada 10 en tales categorías. Ahora, son los que trabajan en la carne y cereales quienes presentan porcentajes mayores en integración social y los de forestación en pobreza inercial y estructural. Por otra parte, la mayoría de los jóvenes asalariados trabajan en el agronegocio de la carne y le sigue la forestación.

En suma, los jóvenes asalariados se concentran en el agronegocio de la carne y conjuntamente con el de cereales indican los mejores porcentajes de integración social mientras que en la forestación se observan los mayores porcentajes de pobreza inercial y estructural.

Entre los trabajadores adultos, 7 de cada 10 está integrado socialmente y 2 de cada 10



serían pobres inerciales, indicadores mejores que el de los jóvenes, por otra parte 8 de cada 10 trabajan en el agronegocio de la carne. Aquellos que trabajan en la forestación presentan los mayores porcentajes de pobreza inercial y estructural, mientras que los de la carne y cereales los mejores porcentajes en integración social.

En definitiva, la situación de integración social es mejor en los adultos especialmente aquellos que trabajan en el agronegocio de la carne y cereales, en la forestación se presentan los mayores porcentajes de pobreza inercial y estructural pero los más afectados serían los jóvenes asalariados.

Conclusiones.

Las transformaciones productivas en la ruralidad en los últimos casi 20 años han dinamizado diferentes cadenas de agronegocios, en términos de mercado de trabajo la forestación ha sido estable en la composición de su fuerza de trabajo asalariada, mientras que ha descendido en la carne y aumentado en los oleaginosos. Entre 2012 y 2017 el empleo formal aumento un 2% en términos generales en las cadenas analizadas, aunque se advierten cambios en la mejora de empleos de calidad en algunas de las mismas. Lo que no se altera es que la cadena forestal genera el mayor porcentaje de empleos de no calidad, seguida de la cárnica y luego, la de cereales y soja.

Durante el período estudiado se puede resumir que ha mejorado la formalidad laboral, pero no implica linealmente que mejore la calidad del empleo o las condiciones sociales de los asalariados. Analizando la trayectoria de la pobreza multidimensional entre los asalariados de las cadenas de agronegocios de la carne, forestación y cereales y soja entre 2012 y 2017, la mayoría se encuentra integrado socialmente especialmente entre los asalariados de cereales y soja, disminuye la pobreza estructural en las tres cadenas y finalmente, aumenta la vulnerabilidad social de los asalariados en general especialmente entre los forestales. Al analizar por generaciones, los asalariados adultos se encuentran más integrados socialmente que los jóvenes aunque en el período de estudio estos últimos han tendido a equipararse a los adultos, por otra parte, se especifican las condiciones sociales por agronegocio según generaciones es decir, en la forestación en mayor pobreza se encuentran los jóvenes y los adultos más integrados socialmente en la carne y cereales.

Finalmente, las cadenas de agronegocios no generan condiciones sociales y socio laborales *per se* en forma de cascada en sus trabajadores, existen desigualdades según



las generaciones pero también en dónde se realiza el trabajo y por último, las tendencias actuales observadas en el aumento de la vulnerabilidad social de los asalariados plantean si se está ante la emergencia de precarios empleos formales.

Bibliografía.

CEA D'Ancona, M.A. (1996) Metodología cuantitativa estrategias y técnicas de investigación social. Editorial Síntesis. Madrid, España.

Cerda, C. (2016) Precariedad laboral en el sector agroexportador: una propuesta conceptual. Ponencia presentada en el XXXIV International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), New York.

Dörre, K. (2013a): *Landnahme. Triebkräfte, Wirkungen und Grenzen kapitalistischer Wachstumsdynamik*, in: Maria Backhaus, Olaf Gerlach, Stefan Kalmring, Andreas Nowack (Hrsg), Die globale Einhegung – Krise, Ursprüngliche Akkumulation und Landnahmen im Kapitalismus, Westfälisches Dampfboot, Münster. S. 112-140.

Katzman, R. (1989) The Heterogeneity of Poverty. The Case of Montevideo. Santiago de Chile. CEPAL Review, No. 37.

Leal, J. (2018). Aproximaciones críticas a la relación Estado y territorio en contextos de globalización neoliberal. Jorge Leal (et al); editado por María Fernanda Sañudo Pazos; Jorge Leal. 1ra edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Montevideo: Universidad de la República; Montevideo: CENUR; Bogotá: Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar.

Riella, A; y Mascheroni, P. (2011) Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay. In: Revista Pampa. Nro. 7: 39-64, Santa Fe – Argentina.

Riella, A. y Romero, J. (2014) Continuidades y Rupturas en la Estructura Agraria en el Uruguay del Siglo XXI. In: Revista Pampa. Nro. 10: 159-171, Santa Fe – Argentina.

Rubio, B. (2008). De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impacto sobre el campo mexicano. Argumentos [en línea] 2008, vol. 21 [citado 2013-06-10]. Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59511124003>. ISSN 0187-5795.

Uruguay XXI (2018). Oportunidades de inversión: agronegocios. Marzo, Montevideo.

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE (2013), Información general, número de miembros del hogar y sección 1, 2 y 13. Ver sitio web: <http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sisema=1#> (visitado el 01/03/2016).

Villulla. J.M. (2019) Capitalismo, cuestión agraria y trabajo asalariado: una relectura de



los debates clásicos a partir de datos de la pampa húmeda argentina y en el *corn belt* estadounidense. Revista Estudios. N° 41, ISSN 1852-1568, (enero – junio), pp. 35-61, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.



Los jóvenes rurales en México y su invisibilidad en las políticas públicas

Lorenzo Alejandro López Barbosa¹

Resumen

El presente trabajo describe y analiza diferentes experiencias de aplicación de políticas públicas para jóvenes rurales impulsados por el gobierno mexicano en el período 2010-2018. A partir de los testimonios de las experiencias vividas por los jóvenes que participan en dichos procesos, se determinó qué estrategias han favorecido la formación de una nueva generación de promotores jóvenes, puntos de la sensibilidad y las herramientas para el trabajo con actores rurales y de una energía social que no llegó a transformarse en una inteligencia social que asegure su madurez, la sistematización de experiencias y su institucionalización. Frente a una creciente demanda doméstica de alimentos lo cual representa una oportunidad única para avanzar hacia la creación de empleo digno para los jóvenes rurales, la seguridad alimentaria y la producción sustentable, se amplía la brecha entre las aspiraciones de trabajo de los jóvenes rurales y la realidad del mercado laboral. Se concluye la necesidad de diseñar un enfoque de apoyo a los jóvenes a partir de identificar y explorar oportunidades de medios de subsistencia a través de una combinación de experiencias de aprendizaje informales y formación práctica. De igual manera, se reconoce que las actividades de apoyo deben operar bajo un enfoque participativo y que no se ha aprovechado el capital social ya formado.

Palabras clave

Jóvenes rurales, desarrollo rural.

En el caso de México, las políticas públicas en términos normativos y programáticos, no reconocen a la juventud rural como grupo de población objetivo, con excepción de un par de programas de apoyo con escaso impacto. La juventud rural se beneficia sólo de manera limitada e indirecta tanto de marcos regulatorios, como de políticas públicas y asignaciones presupuestales, ya sea en su calidad de jóvenes o de integrantes de poblaciones rurales, pero no como un grupo determinado e identificado. Y si bien se han tratado de impulsar diferentes políticas públicas que tratan de integrarlas, estas no han tenido la continuidad ni la claridad para conceptualizarlos y atenderlos, amén de que se tiene un vacío conceptual sobre lo que se entiende por "juventudes rurales" dada la complejidad y diversidad que representan. Es importante no subestimar las



capacidades de los jóvenes rurales, en términos de educación formal tanto como de habilidades adquiridas a través de la migración y de la familiaridad con los medios de comunicación masiva; lo que permitiría contar con diseños flexibles y adaptables que tomen en cuenta la gran heterogeneidad de este grupo, para que se conviertan no solamente en un asunto de justicia social equidad, sino también de seguridad y soberanía alimentaria y de la viabilidad de un proyecto nacional de desarrollo.

Un acercamiento a las juventudes rurales

El sector rural es considerado como el de mayor vulnerabilidad y abandono entre las políticas públicas del desarrollo de México. En la actualidad, en la mayor parte de los territorios rurales prevalecen condiciones de vida ligadas al autoconsumo y a la subsistencia que coexisten con regiones privilegiadas de producción exportadora. En general, en la sociedad rural mexicana se generalizan los rezagos, que se profundizan en el caso de las mujeres, los niños y los jóvenes, ya que se limita el acceso a la educación y la salud, por lo que las condiciones de vida y la infraestructura son escasas, además de que la tecnología tiende a ser un bien prácticamente inaccesible, favoreciendo en algunos casos, el desarrollo de actividades como el narcotráfico, la siembra de cultivos ilícitos o el robo de combustible.

Se coincide por muchos expertos en la necesidad de impulsar en el campo una visión de desarrollo sustentable, que considere los ecosistemas naturales, que exigen una acción multisectorial adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada región y territorio, lo que implica el replanteamiento de los esquemas de planeación multianual, coordinación de instituciones y promoción de modelos productivos específicos para cada zona productiva, con lo que se favorece el progreso social y económico, al tiempo que se promueve el arraigo con visión productiva y cultural y de reconocer la necesidad de generar acciones de política pública que atiendan una elevada existencia de pequeños productores, primordialmente campesinos de muy bajos ingresos, a través de una verdadera articulación de políticas productivas, sociales y ambientales, que superando la atención clientelar, conlleve una visión de desarrollo local y regional sustentable a partir de un espacio real de participación, gobernabilidad, gobernanza y concertación entre distintos actores que inciden en el ámbito rural y que esté dotado de capacidad real para incidir en el diseño de políticas públicas.



Frente a esta necesidad de una nueva generación de políticas públicas rurales, se hace indispensable poner un énfasis especial en estimular la participación de mujeres y jóvenes, en el marco de una profunda reforma en la institucionalidad, para abordar de manera integral la producción, productividad y manejo sustentable de los recursos naturales, en el diseño de estrategias que hagan frente a una agudización de la marginación en el medio rural debido a las disparidades existentes entre regiones, zonas, comunidades y aun entre los productores de una misma comunidad, en un contexto nacional donde prevalece la disminución de los niveles de vida, el desempleo, el deterioro de los servicios, la inestabilidad social y la inestabilidad política.

La sociedad rural mexicana es una constelación de actores, con especificidades culturales, étnicas, históricas y geográficas, entre los que destacan las juventudes rurales de los que se sabe poco y del quienes las políticas públicas se ocupan escasamente de atender sus necesidades.

Si bien hay estudios sobre la juventud en México, principalmente orientados en aportes teóricos, investigaciones etnográficas y el análisis global de sus problemáticas en el marco de las áreas urbanas (Mendoza, 2011:193), existe un vacío en la comprensión de la juventud rural, ya que la mayor parte de los estudios existentes son poco profundos en describir los elementos que componen la identidad de las juventudes rurales (Avalos, 2009: 1) por lo que se conoce muy poco acerca de sus aspiraciones y problemática, sin embargo, se da cuenta de las condiciones de pobreza, aislamiento, violencia, marginación, discriminación étnica, vulnerabilidad y falta de equidad en el acceso a ciertos satisfactores que padecen en general las juventudes rurales que se traducen en su exclusión con ello "...no tener la posibilidad de compartir un espacio y un tiempo común en una determinada sociedad..." (Bonfil, 2001:527-531). A este escenario de exclusión, se suma la desinstitucionalización en cuanto a la atención de su problemática, ya que "...los jóvenes rurales, hombres o mujeres, tienen ideas diferentes sobre como ocurre la vida, las leyes que rigen a la sociedad o sobre el cuerpo, la procreación, el sentido de la obediencia y la autoridad." (Pacheco, et al.,2013:16)

En este escenario, la juventud rural está empezando a perder su invisibilidad en la discusión sobre el futuro del mundo rural en América Latina, recientemente se reconoce su papel crucial en las transformaciones en marcha en la agricultura y en las demás facetas de la vida en el campo, pero se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en relación con sus pares urbanos, contando con menores oportunidades



laborales de empleo decente, menores posibilidades de acceso a educación de calidad, y con altas tasas de pobreza (Cazzuffi, 2018:6).

Sin embargo, es mucho lo que falta conocer de las realidades diversas que viven las diferentes juventudes rurales que existen al interior de cada región y más que datos sólidos, se manejan estereotipos de los jóvenes rurales, en muchos casos sustentados en los efectos de una socialización temprana para la vida en el campo que incluye una inserción infantil en el trabajo, ya sea doméstico o agrícola, lo que favorece su invisibilidad e inclusive se cuestiona su existencia misma, dado lo efímero que sería frente a la temprana asunción de roles adultos: la juventud rural, en esta visión, terminaría casi en el momento de empezar, limitándose a una mera categoría estadística, como una "gradual transición" hasta la asunción plena de los roles adultos en todas las sociedades, pero los jóvenes rurales de diferentes viven este pasaje de juventud a adultez a ritmos muy diferentes; predominantemente de los 11 a los 21 años, y en otros de 15 a 29 años, por lo que resulta estéril definir edades límites fijas para la juventud rural.

Lo que debe interesar también, es comprender los procesos y transiciones que viven los y las jóvenes rurales, y la medida en que algunos de ellos viven estos cambios en forma sana y exitosa mientras que otros sufren distorsiones en el pasaje de la infancia a la adultez, ya que incluso, la juventud en el campo puede también prolongarse excesivamente por no resolverse la transición a roles y derechos adultos - por ejemplo, debido a la falta de acceso a una vivienda o tierra propia - y durar hasta alrededor de los treinta años de edad, provocando entonces una etapa de transiciones bloqueadas, obstaculizadas, no adecuadamente apoyadas por la sociedad, por lo que es un error común pensar en las políticas relativas a los jóvenes sólo en términos de su futura condición de adultos. Los jóvenes rurales requieren de políticas para mejorar sus oportunidades futuras, pero también para enfrentar sus problemas actuales y para dar sentido de utilidad a sus vidas como jóvenes, en el presente.

La sobrevivencia de los grupos domésticos campesinos depende cada vez menos de los productos generados por las actividades agropecuarias y cada vez más de salarios e ingresos muy diversificados que se obtienen mediante la pluriactividad, es decir, gracias a la combinación de actividades y empleos de muy diversa índole, generados en condiciones y espacios muy distintos donde participan hombres y mujeres, mientras



que el mundo rural se ha convertido en el ámbito más empobrecido de la geografía mexicana.

La situación de las juventudes rurales en América Latina se caracteriza por las limitadas oportunidades de desarrollo debido a factores tales como: a) una fuerte dominación y discriminación por persistencia de estructuras patriarcales (a pesar de que para algunos autores hay una incipiente modernización), b) sobrecarga de trabajo doméstico no valorado, c) pocas oportunidades laborales fuera del ámbito familiar, c) limitado acceso a la educación, d) baja calidad de la oferta educativa, e) falta de acceso a la educación sexual y reproductiva, f) violencia familiar, g) trabajo y maternidad temprana (Kessler, 2005).

Existe un extendido estereotipo del joven rural: “un muchacho campesino de 16 años analfabeto funcional, que ya se casó, ya tiene hijos y trabaja en la agricultura familiar de subsistencia” contribuye en gran medida a perpetuar esta situación, ya que está implícita en muchas de las reflexiones y propuestas poco concretas que se hacen en relación a la juventud rural (Durston, 2001).

En México viven 22.5 millones de jóvenes en el medio rural, y destacan que los jóvenes urbanos representan entre el 24% y 56% del total de su población municipal, en cambio en las zonas rurales se observa una gran heterogeneidad, desde una población del 12 % al 88% mientras que el 61% de los jóvenes indígenas viven en zonas rurales (Díaz y Fernández, 2017:9-13).

Las desigualdades territoriales afectan negativamente a los jóvenes. Mientras que 39.2% de la población urbana se encuentra en pobreza y 4.7% está en pobreza extrema, 65% de la población rural se encuentra en pobreza y una cuarta parte de ella sufre pobreza extrema. En el sur sureste y en las poblaciones indígenas es donde se concentra la pobreza y particularmente la pobreza extrema.

Existe una mayor proporción de mujeres jóvenes rurales que no están trabajando ni estudiando, y la gran mayoría de ellas se encuentra realizando trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, reproduciéndose así los roles estereotipados de género que las dejan a cargo del espacio familiar y privado, a pesar de estar alcanzando o incluso superando los niveles educacionales de sus pares hombres. El 40% de quienes viven en localidades de hasta 15 mil habitantes solo estudia, lo cual es similar a las zonas urbanas.



Pero el porcentaje de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan es mayor en el medio rural que en el urbano. El 9.5% de las personas de 20 a 24 años de edad rurales están en esta condición, contra 7% en el medio urbano; en el rango de 25 a 29 años de edad es 8.8% contra 6.7%, y de 15 a 19 años, 6.3% contra 4.1%. En el ámbito rural profundo (localidades con menos de 2 mil 500 habitantes) los jóvenes que no estudian ni trabajan suman más: el 25.2% de las mujeres y 7.6% de los hombres, en comparación con el ámbito urbano, donde los porcentajes en este rubro son 14.3% en mujeres y 4.8% en hombres.

Los jóvenes excluidos del desarrollo económico potencialmente pueden incrementar otros problemas sociales de por sí graves tales como la violencia, la criminalidad, el embarazo temprano y las adicciones. En la práctica estos jóvenes constituyen un botín muy deseable para las redes y organizaciones del crimen organizado, dado que son quienes se están incorporando a las actividades del narcotráfico, el secuestro, el robo, ya sea como mecanismo de subsistencia o bien como la única salida a la creciente frustración de expectativas.

Mención aparte son las juventudes rurales indígenas, de los que desconocen sus especificidades, dejando de lado la riqueza que puede rescatarse de la dinámica de los procesos comunitarios y sus particularidades.

La orientación de las políticas públicas para las juventudes rurales

Se ha presentado un panorama poco alentador y carente de oportunidades educativas y laborales para las juventudes rurales. Hoy en día se acepta que el concepto de pobreza va más allá de la mera carencia de recursos económicos o de bienes materiales. La condición de pobreza tiene que ver con la privación de oportunidades y de opciones para que la población pueda alcanzar una calidad de vida adecuada; es decir, tener posibilidades reducidas o nulas de lograr la satisfacción a sus necesidades y aspiraciones. De esta forma está condenada a reproducir en sus descendientes las condiciones de pobreza y de marginación en las que vive, ya que carece de los medios y de las capacidades necesarias para superarlas. La pobreza vista así, se convierte en un problema de falta de oportunidades reales para poder vivir una vida digna. La falta de acceso a servicios apropiados de educación, salud, y nutrición no les ofrece las condiciones necesarias para que los pobres puedan escapar de la pobreza.



Se estima que, en el año 2020, el 60% de los pobres continuarán viviendo en las áreas rurales (Rodríguez et al. 2010), donde la juventud rural es sin duda uno de los sectores sociodemográficos más excluidos de la sociedad latinoamericana.

Estas cifras, muestran un nada alentador panorama acerca de la condición de las juventudes rurales en México, donde la exclusión y la vulnerabilidad se hacen evidentes, especialmente para enfrentar el reto del llamado “relevo generacional”, ya que la mayor parte de los productores rurales son de edad avanzada y en promedio superan los 54 años de edad (FAO, 2014:3-4), por lo que se presentará un proceso cada vez más acentuado de envejecimiento de la población rural, y que el esperado relevo generacional en el campo mexicano se ve limitado por la rigidez del mercado de tierras que obstaculiza el acceso de la población joven a dicho factor de la producción y a la baja rentabilidad de la actividad agropecuaria (FAO, 2014:40).

Frente a los desafíos del relevo generacional en el campo, es imperativo proponer políticas y programas acordes con la realidad de juventud rural, que principalmente se ocupen de las necesidades insatisfechas de este grupo social, como una de las mejores inversiones que se puede hacer para la seguridad alimentaria, a fin de impulsarlos al rol dinamizador, dentro del desarrollo.

Se debe partir de la premisa, que las juventudes rurales como futuros adultos, debe de estar preparada en mejorar sus capacidades para producir alimentos y conservar los recursos productivos en el medio rural; desarrollar habilidades para llevar a cabo actividades generadoras de ingresos en áreas rurales; y, conformar el liderazgo y la capacidad de trabajar bien con otros en situaciones grupales y comunitarias.

Sin embargo, las tendencias mundiales de preocupación por los jóvenes son:

- Una disminución dramática en la mayoría de los países en las oportunidades de empleo del sector formal
- Aumento de la urbanización y aumento de la concentración de recursos en la juventud urbana a expensas de la juventud rural.
- La creciente presión de la población sobre la tierra y otros recursos.

La creciente urbanización de la sociedad, llevan a la conclusión de que los productores agrícolas tendrán que ser más eficientes que los actuales y que los precios agrícolas estarán cada vez más a merced de una voz urbana políticamente poderosa.



Las soluciones adecuadas a los problemas de las juventudes rurales requieren un reconocimiento y acción sin precedentes en las áreas de la reforma agraria, incentivos para la producción agrícola, oportunidades de empleo, capacitación para el trabajo productivo en las áreas rurales, capacitación de líderes, servicios comunitarios, programas de salud, y servicios sociales.

Cuando los jóvenes no pueden encontrar empleos viables en sus comunidades, comienzan a migrar desde las áreas rurales en busca de oportunidades en ciudades más grandes o en diferentes países donde enfrentan un futuro incierto. Cuando los jóvenes pueden participar en la toma de decisiones de la comunidad y asumir roles de gestión en las organizaciones locales, mejoran su situación al tiempo que contribuyen con su energía y creatividad a sus comunidades. Los jóvenes tienen muchas ideas innovadoras, pero a menudo están excluidos de los procesos de planificación y políticas relacionados con el futuro de las áreas rurales.

Con respecto al mundo del trabajo, los jóvenes rurales tienen un contacto más temprano con él, en la mayoría de los casos vinculados con la agricultura familiar. La situación ocupacional de éstos se caracteriza por la proletarización, la desocupación, por una heterogeneidad laboral con mayor peso en la ayuda familiar no remunerada y por la pluriactividad como complemento del trabajo en las unidades laborales (Kessler, 2005).

Bajo estos elementos, se considera importante la existencia de políticas públicas que favorezcan la participación de las juventudes rurales en sus territorios. En una búsqueda de políticas públicas exitosas, se puede destacar el último informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) sobre el futuro de la juventud rural (OECD, 2018) el cual revisa 10 iniciativas dirigidas en la creación de empleo dirigidos a jóvenes rurales desfavorecidos, cuyos factores de éxito fueron el involucrar a los jóvenes en el desarrollo de una comprensión del mercado, hacer que los jóvenes tomen conciencia del potencial de la agricultura como sector laboral; desarrollar la capacidad de los jóvenes a través del aprendizaje entre iguales y mediante tutoría; proporcionar formación en alfabetización básica y aritmética y habilidades para la vida; facilitar el acceso al financiamiento y a la tierra y de construir capital social.

Parece ser más efectivo entre los jóvenes el aprendizaje entre iguales, donde gente joven se convence por otros jóvenes, por ejemplo, en los servicios de extensión o por medio de reuniones e interacciones.



Los programas de formación profesional también deben considerar la enseñanza de habilidades blandas, además de mejorar habilidades de emprendimiento, no solo en gestión empresarial, sino también en negociación, liderazgo y equipo. Estas experiencias, muestran lo valioso de establecer la inclusión de la juventud rural y el empleo decente como objetivos.

Políticas públicas para los jóvenes rurales en México 2012-2018

En el caso de México, las políticas públicas en términos normativos y programáticos la juventud rural del país no es reconocida como grupo de población objetivo, con excepción de un par de programas de apoyo a proyectos productivos con escaso impacto y que no toman en cuenta sus condiciones reales, por lo que se beneficia sólo de manera limitada e indirecta tanto de marcos regulatorios, componentes y asignaciones presupuestales, ya sea en su calidad de jóvenes o de integrantes de poblaciones rurales, pero no como un grupo determinado e identificado.

En la revisión de políticas públicas se puede identificar que existen componentes aislados de programas con baja cobertura y cuyos efectos en general no han sido evaluados.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras se puso en marcha en 2004 y operó hasta el año 2014, tuvo como objetivo general: lograr que el joven emprendedor rural creara su propia agroempresa rentable y sustentable en el núcleo agrario al que pertenece mediante capacitación y adquisición o renta de derechos parcelarios, insumos y servicios de acompañamiento empresarial, con el fin de propiciar el arraigo, relevo generacional en la tenencia de la tierra social y mejora de sus ingresos.

Este programa, contó en su diseño en dos etapas (el proyecto escuela y la realización del proyecto agroempresarial) para propiciar el desarrollo previo de habilidades y capacidades técnico-productivas y empresariales en los jóvenes que posteriormente emprenderán un proyecto productivo.

La estrategia que el programa impulsó fue la organización para que, en los casos pertinentes, el proyecto tuviera un carácter colectivo, por medio de la asociación de varios jóvenes que les permitan incrementar sus ingresos. El programa partió de un diagnóstico realizado por el Banco Mundial (México, proyecto piloto para posibilitar el acceso a la tierra a sujetos agrarios) que justificó la intervención de forma empírica y teórica, ya que los jóvenes en el sector rural enfrentan problemas para incorporarse a



las actividades productivas y en la toma de decisiones de sus comunidades. Dicha incorporación debiera contribuir a que el sector agrario incremente su productividad mediante tres factores complementarios: a) El fortalecimiento del capital humano, b) La adopción de nuevas tecnologías y c) La participación de los jóvenes; sin embargo, no se incluyó un apartado de género y tampoco se definió el plazo para su revisión y actualización y se atendió aproximadamente a 12 mil jóvenes beneficiarios (Conde, 2012).

Otro de los programas fue el llamado Componente Arráigate SER Joven, o Arráigate Joven impulso emprendedor, que operó en los ejercicios 2016-2018, pero no existen evaluaciones de resultados y la cobertura fue menor a los 300 mil jóvenes beneficiados, presenta problemas de transparencia y de definición de la población objetivo. En los años 2017 y 2018, el programa operó eventos deportivos, culturales y conferencias a jóvenes que no necesariamente eran rurales.

La cobertura rural de programas laborales y de emprendimiento es casi nula, ya que en México no hay políticas concretas orientadas a la inclusión laboral de las y los jóvenes, sólo acciones dispersas sobre las cuales no hay información de resultados ni indicadores de ningún tipo.

Las juventudes rurales representan nuevas posibilidades de relaciones sociales y de ser los generadores de innovadoras expresiones culturales y de generar soluciones a problemas personales y colectivos; sin embargo, estas se dan en un contexto complejo de condiciones de exclusión y vulnerabilidad; frente al crimen organizado, la pobreza y la falta de oportunidades, que favorecen expresiones de transgresión que se desarrollan bajo nuevos contextos de acceso a información e interacción con otros actores.

La falta de conceptualización, comprensión y reconocimiento en las políticas públicas acentúa la problemática descrita, pero abre la oportunidad de construcción de novedosas alternativas frente a la modernidad insustentable, como un fenómeno multidimensional complejo. En lo particular, he sido testigo de la importancia que representa para los jóvenes rurales la conservación del medio ambiente, de enfrentar los riesgos del cambio climático y de generar alternativas de ingreso amigables con el entorno. A los jóvenes rurales les atrae la agroecología, la permacultura, se oponen a los transgénicos, independientemente de pasar horas en sus cuentas de Facebook o Instagram.



En un planeta abarrotado, diverso y global, tienen cabida formas de vida distintas a las impuestas por la modernidad hegemónica corporativa y multinacional, nutridas de luchas, teorías y experiencias, donde la pobreza no es miseria, en el ejercicio de una auténtica libertad, donde impere el valor de la reciprocidad en una relación de complementariedad con la naturaleza que expanda los ciclos vitales y con ello las potencialidades de los futuros adultos, los futuros ciudadanos en la senda hacia su plenitud.

Debiera comenzarse con un nuevo discurso en torno a las juventudes rurales para ser capaces de materializarla en una colectividad, y con ello dejar en la historia la exclusión que padecen para enfrentar los retos futuros. Las juventudes rurales, desposeídas de medios de producción, de tierra y de oportunidades, a merced de intereses criminales, constituyen una inmejorable oportunidad para transformar la ruralidad y porque no, el futuro que nuestros espacios urbanos demandan.

Conclusiones

Las juventudes rurales son el grupo de jóvenes que más dificultades presenta en términos de inclusión económica, social y educativa; su atención podría contribuir a disminuir la migración del ámbito rural al urbano y propiciaría también la reducción de su participación en actividades criminales. Promover la inclusión económica y social de los jóvenes permitiría mejorar sus condiciones de vida y ampliar su acceso a oportunidades de desarrollo, y mejorar la caracterización de los jóvenes en México facilitaría el diseño de políticas públicas más pertinentes para las juventudes rurales.

Sin embargo, toda política dirigida a ellos tiene que ser compatible y complementaria con las dos visiones estratégicas de los jóvenes rurales, la de corto plazo, referida a la etapa de vivencia actual y, especialmente, la que concierne a su vida a mediano y a largo plazo. La política dirigida a la juventud rural que tendrá éxito y optimizará su contribución al desarrollo en ese ámbito será la que se base en un conocimiento de las estrategias de vida de la juventud que constituye y que complemente dichas estrategias.

Si el Estado es capaz de poner en práctica políticas y programas en armonía y complementariedad con las aspiraciones y estrategias de los y las jóvenes rurales, asegurará mayores tasas de arraigo rural y forjará actores sociales partícipes del quehacer público local que potenciará procesos inclusivos de desarrollo rural.



Es importante no subestimar las capacidades de los jóvenes rurales, en términos de educación formal tanto como de habilidades adquiridas a través de la migración y de la familiaridad con los medios de comunicación masiva. Para ello, es importante contar con diseños flexibles y adaptables que tomen en cuenta la gran heterogeneidad de juventudes rurales.

Reflexionar sobre la opción del o de la joven de quedarse en el medio rural, desde una condena a la cual se resigna, a un componente central de un proyecto de vida atractivo que ofrece esperanzas fundadas de un nivel de vida que está más allá de la mera sobrevivencia. Tampoco puede formar parte de una política global hacia los jóvenes rurales, el vedarles las opciones de competir por puestos de trabajo y ocupaciones de alta productividad, en la ciudad tanto como en el campo. Avanzar en ambas direcciones implica mejorar la oferta educativa y de capacitación en el campo; implica dar al joven y a la joven rural la información necesaria para elegir; y obliga a combatir la pobreza rural que actualmente les impide convertir sus aspiraciones y estrategias en realidad.

Es necesario encontrar formas de promover las oportunidades capacitación a nivel local, desarrollo de liderazgo, apoyo organizativo y varios tipos de redes, para evitar que la exclusión en sí misma constituya un riesgo para la cohesión social del país (económica, política y cultural) pues ninguna sociedad puede prosperar donde una parte se encuentra fuera de toda posibilidad de desarrollo. Cuando esta problemática se enfoca en el sector rural, se convierte no solamente en un asunto de equidad, sino también de seguridad y soberanía alimentaria y de la viabilidad de un proyecto nacional de desarrollo.

Referencias

Avalos Aguilar, Spencer Radames (2009). *Los jóvenes rurales en México. Retos y desafíos en los Estudios actuales*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-062/1787>

Bonfil, Paloma (2001). *¿Estudiar para qué? Mercados de trabajo y opciones de bienestar para los jóvenes del medio rural. La educación como desventaja acumulada*, en Pieck, Enrique (coord.), *Los jóvenes y el trabajo. La educación frente a la exclusión social*. México.



- Cazzuffi, Chiara., Díaz, Vivían., Fernández, Juan. & Torres, Javiera. 2018. *Aspiraciones de inclusión económica de los jóvenes rurales en América Latina: El papel del territorio*. Serie documento de trabajo N° 231 Programa Jóvenes Rurales, Territorios y Oportunidades: Una estrategia de diálogos de políticas. Rimisp, Santiago, Chile. Disponible en: <https://bit.ly/3dw64LU>
- Conde Bonfil, Carola. (2012). *Informe final de la evaluación de consistencia y resultados del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (Jerft)*. Disponible en: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Evaluaciones/CHPF2012/15s203ecyr11.pdf> Consultado en fecha marzo de 2019.
- Díaz, V. & Fernández, J. 2017. *¿Qué sabemos de los jóvenes rurales? Síntesis de la situación los jóvenes rurales en Colombia, Ecuador, México y Perú*. Serie documento de trabajo N° 228, Grupo de Trabajo Inclusión Social y Desarrollo. Programa Jóvenes Rurales, Territorios y Oportunidades: Una estrategia de diálogos de políticas. Rimisp, Santiago, Chile. <https://bit.ly/3khfqOx>
- Durston J. 2001. *Juventud rural y desarrollo en América Latina: Estereotipos y realidades*. En : D. B. Solum (ed). *Adolescencia y juventud en América Latina*. Costa Rica: Libro Universitario Regional 99-116.
- FAO, 2014. *Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México*. <https://bit.ly/35ivLw7>
- IMJUVE, 2013. *Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México*. <https://bit.ly/2lvySsx>
- Kessler G. 2005. *Estado del arte de la investigación sobre juventud rural en América Latina*. <http://juventudruralemprendedora.procasur.org/wp-content/uploads/2013/08/060100-Estado-del-arte-de-la-investigacio%CC%81n-sobre-Juventud-Rural-Kessler.pdf>
- Mendoza Enríquez, Hipolito. 2011. *Los estudios sobre la juventud en México*. En: Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. XVIII No. 52 □ Septiembre / Diciembre de 2011
- Negrete R., Leyva G. 2013. *Los ninis en México: una aproximación crítica a su medición*. Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía 4: 90-121.
- OECD 2018. *The Future of Rural Youth in Developing Countries. Tapping the Potential of Local Value Chains*. Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264298521-en>
- Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes et al. 2013. *Jóvenes rurales. Viejos dilemas, nuevas realidades*. Universidad Autónoma de Nayarit, Juan Pablos editor, México.



Rodriguez C., Sánchez F., Armenta A. 2010. *Do Interventions at school level improve Educational Outcomes? Evidence from a rural program in Colombia*. *World Development* 38:415-428.



Crisis y desigualdad y vulnerabilidad social: Una lectura de la brecha rural-urbana

Luis Camarero
Rosario Sampero

Resumen

Buena parte de las áreas rurales del sur de Europa vienen experimentando un importante declive demográfico a esta situación se añaden los efectos de la crisis financiera de 2008 que produjeron la intensificación de la emigración rural, la paralización del reagrupamiento familiar de los grupos de extranjeros, así como la drástica reducción de la aportación de fondos públicos y la retirada de operadores privados de servicios en áreas de baja densidad.

El texto con la perspectiva temporal de una década después del estallido de la crisis busca valorar los efectos que esta ha tenido en el incremento de las desigualdades sociales no sólo en el interior de la propia estructura social de la población rural sino también y especialmente en el incremento de la denominada brecha rural-urbana.

Este trabajo es parte del proyecto “*Crisis e inmigración en el medio rural de Castilla y León: Escenarios socio-territoriales para el arraigo de los inmigrantes y la sostenibilidad social de las áreas rurales*” (CSO2015-67525-R, MINECO/FEDER) y de la Red de Excelencia Iso-Rural. (CSO2016-61728-REDT).

Palabras clave

Desigualdad, rural-urbano, inmigración

Declive demográfico y descapitalización social

Lo que ha sucedido durante la última década nos muestra el motivo del creciente interés adquirido por el despoblamiento rural para la opinión pública: todos los componentes del crecimiento demográfico se han colocado en valores negativos haciendo patente la pérdida de vitalidad demográfica de las áreas rurales. Esta falta de vitalidad es notoria a partir de 1988 cuando el número, cada vez menor, de nacimientos en las áreas rurales no llega a compensar el número, cada vez mayor de fallecimientos. La caída progresiva de la fecundidad y el aumento de la mortalidad por el envejecimiento progresivo producen un panorama de crecimiento vegetativo negativo. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI la llegada de nuevos residentes y extranjeros había moderado



la percepción de este declive e incluso la entrada de población extranjera mejoraba la fecundidad y la natalidad rurales. La crisis de 2008 produce, sin embargo, un vuelco importante y todos los indicadores se tornan por primera vez negativos. No hay crecimiento.

El proceso de concentración demográfica tiene su reverso en el proceso de descapitalización social de las áreas rurales. La emigración juvenil no solo debilita la capacidad demográfica y genésica rural sino que supone también una pérdida del capital humano necesario para organizar el desarrollo económico y el bienestar social. El concepto de *capital social* condensa el solapamiento que muestran en la vida real las relaciones económicas y sociales, y ha sido considerado como el factor que predispone para el desarrollo local (Garrido y Moyano: 2002). Por un lado, define la capacidad de los territorios de mantener culturas de colaboración y organización cívica; estructuras y redes sociales. Pero también la capacidad de promover proyectos, cambios o la resiliencia frente a los retos que afronta el mundo rural. Los territorios ricos en *capital social* incrementan sus oportunidades y el bienestar social de su población (Li, Westlund y Liu 2019).

El gráfico -figura 1- muestra con claridad la contracción de las áreas rurales en términos de capital social, medido en vitalidad demográfica a través de la población de entre 25 a 44 años que es donde se concentran las tasas de actividad y ocupación más elevadas así como la capacidad genésica. Observamos que mientras en los municipios mayores de 10.000 habitantes el 30%, cerca de la tercera parte, de su población se sitúa en este grupo vital, para los de menor tamaño esta cifra se reduce a la cuarta parte e incluso por debajo de la quinta parte.

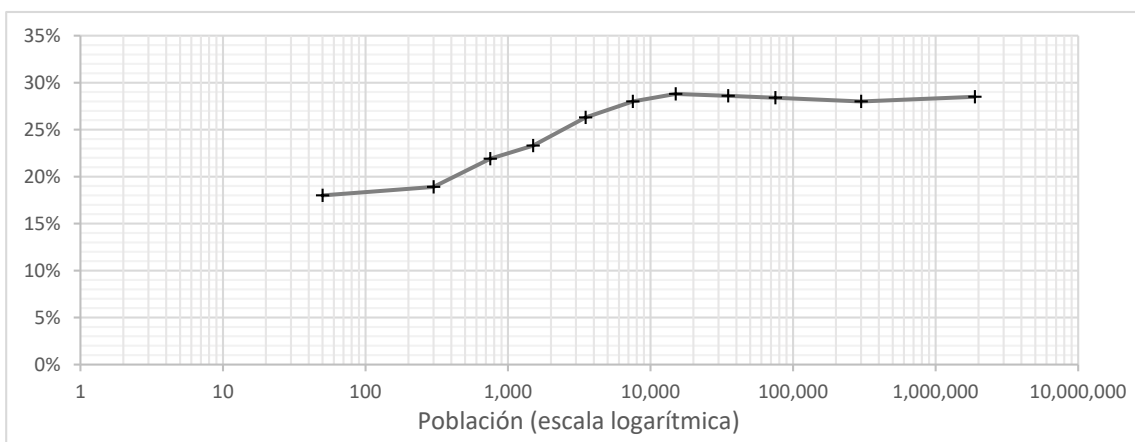


Figura 1. Porcentaje de población entre 25 y 44 años por tamaño de municipio. 2018
Fuente: Encuesta Continua de Población. 2018. INE. Elaboración propia.

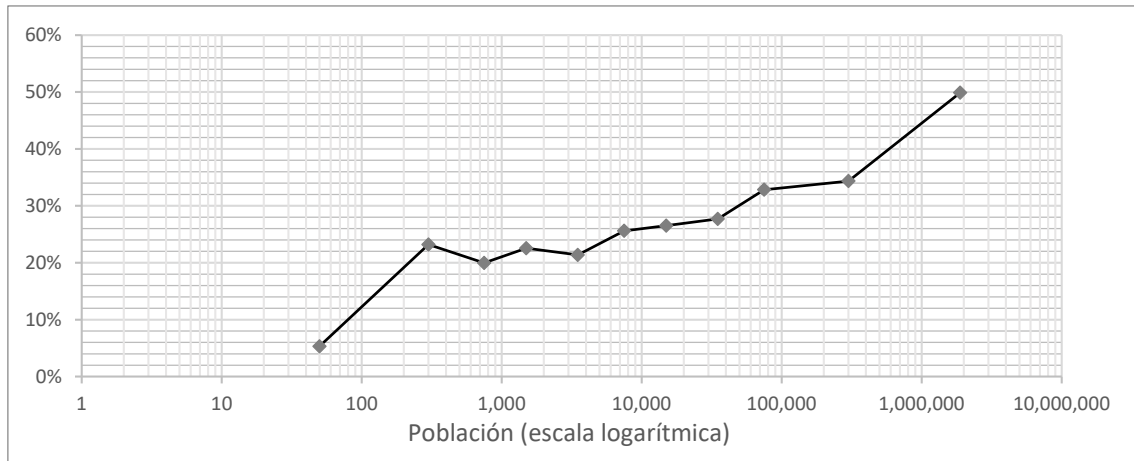


Figura 2. Porcentaje de población con estudios universitarios por tamaño de municipio. Personas de 25-44 años. 2018

Fuente: Encuesta Continua de Población. 2018. INE. Elaboración propia.

En consonancia también se observa la concentración de talento y capital cultura en las áreas metropolitanas -figura 2-. Mientras los universitarios rondan el 20% en los municipios rurales estas cifras llegan a doblarse en los grandes centros urbanos. El despoblamiento actual produce también un fuerte desequilibrio en recursos humanos y capacidad de innovación. Hay una fuerte desigualdad territorial en términos de conocimiento que dificulta a las economías locales insertarse en los flujos económicos. La retroalimentación entre emigración, conocimiento y capital social genera círculos de declive que se transmiten a la larga en círculos de exclusión social. Diferentes estudios coinciden en señalar que las zonas europeas en términos de despoblación muestran una mayor tasa de deserción escolar y una mayor proporción de personas en riesgo de pobreza (Delivorias y Sabbati, 2005).

En este sentido un indicador relevante, que pertenece al AROPE², son los hogares con baja intensidad de empleo³. La crisis ha supuesto un incremento generalizado de estos hogares durante el periodo 2009-2014 (Vid. figura 3). Las áreas rurales han llegado durante la crisis a valores muy elevados, cerca de un quinto de los hogares no llegaban a mínimos de ocupación. Y, aunque desde 2014 se observa que lentamente se van recobrando los valores anteriores a la crisis lo que no se reducen son las diferencias rural-urbano en términos de exclusión. La crisis ha ampliado y cronificado dichas diferencias. Se ha amplificado la brecha rural. Precariedad y descualificación se concentran en las áreas rurales y se añaden a la falta de capital social. El resultado es especialmente dañino para las áreas rurales porque reduce drásticamente su capacidad de inserción en las economías de la información.

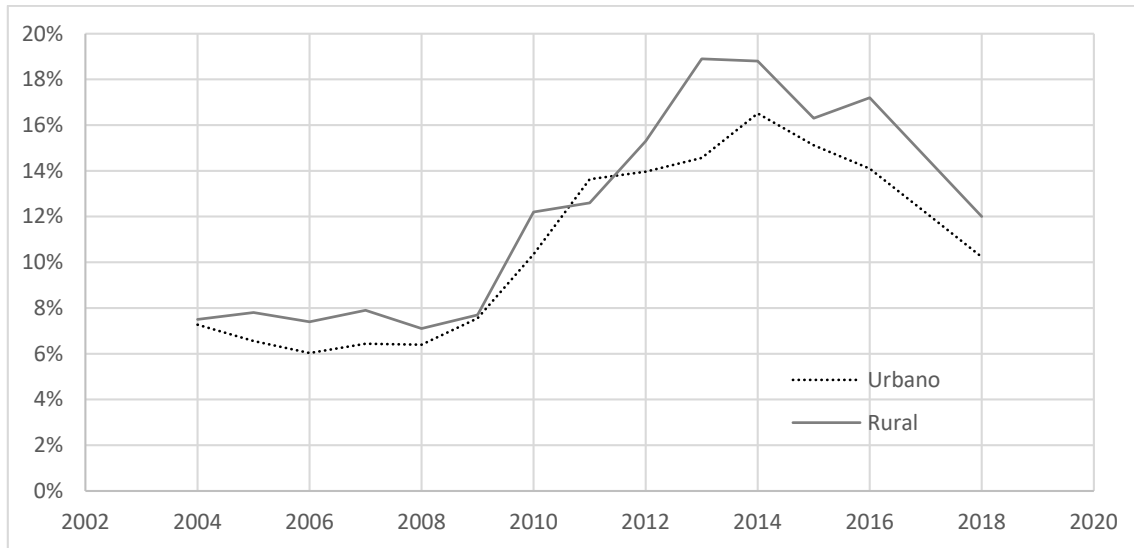


Figura 3. Porcentaje de personas en hogares con muy baja intensidad de empleo. Evolución 2004-2018
Fuente: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Eurostat.

Elaboración propia.

En zonas urbanas se han incluido las categorías de la clasificación Degree of urbanisation correspondientes a Cities, towns and suburbs.

Círculos de declive y brecha urbano-rural

Las sociedades modernas se basan en la premisa de la igualdad en el acceso a oportunidades y los recursos. Esta cuestión continúa siendo un desafío importante para las zonas rurales. Por una parte, las carencias en términos demográficos impiden a las áreas rurales alcanzar volúmenes críticos en términos de capital social. En el contexto actual de avance de la economía del conocimiento la carencia de capital social en áreas rurales termina dirigiendo los procesos de innovación hacia las áreas urbanas y, consecuentemente, se acrecienta la marginalización de las áreas rurales. (Li, Westlund and Liu, 2019). Por otra parte, la distribución de los dispositivos de bienestar en función de criterios de demanda agregada, frente a criterios de equilibrio territorial, supone un acceso desigual por parte de la población rural a los servicios públicos. (Shuckmith and Brown, 2016. Bock, 2019).

Nos encontramos ante una concatenación de círculos viciosos. El *círculo de declive demográfico* deteriora la posibilidad de revitalización poblacional de muchas áreas rurales (migración juvenil, envejecimiento). El *círculo de la accesibilidad* (precarización de infraestructuras, erosión del potencial económico); el *círculo de la formación* (bajo nivel educativo, descualificación, baja empleabilidad); y el *círculo del mercado de trabajo* (precarización del empleo local, emigración profesional y pérdida de talento). (European Commission, 2008) Estas cuatro esferas de problemas rurales (demografía, accesibilidad,



educación y mercado de trabajo) interactúan produciendo auténticas espirales de deterioro de las condiciones locales que amplifican las diferencias urbano-rurales en términos de oportunidades de desarrollo vital.

La brecha rural se refiere a la incapacidad de las áreas rurales para equipararse en los estándares de calidad de vida, servicios y oportunidades con los entornos urbanos (Camarero y Oliva, 2019). Puede definirse como el efecto acumulativo de diferentes procesos (demográficos, económicos, ...) y disparidades (accesibilidades, mercados de trabajo, ...). Estas diferencias y condicionantes tomadas en conjunto conforman un importante hándicap para el bienestar y el futuro de muchas áreas rurales insertas en fuertes desequilibrios y evidentes desigualdades.

Las desventajas territoriales a las que se enfrentan las áreas rurales exigen sobre sus habitantes un esfuerzo en movilidad a través de los desplazamientos cíclicos y diarios para acceder a los mercados laborales, educación y salud, ocio o bienes de consumo. La movilidad como principal mecanismo de reequilibrio vuelve a generar nuevas desigualdades en la medida en que la capacidad para la movilidad no es homogénea. En las sociedades modernas existen fuertes interconexiones entre la movilidad física y social hasta el punto, que podemos considerar a la movilidad al mismo nivel que la equidad o la individualidad en cuanto principios definitorios de la modernidad. (Canzler et al. 2008).

Notas

¹ Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. lolopez@uaaan.edu.mx

² AROPE, es la abreviatura de la expresión At Risk of Poverty and/or Exclusion.

³ Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista.

Referencias

Camarero, L. y Oliva, J. (2019) Thinking in rural gap: mobility and social inequalities. *Palgrave Communications*, 5: 95: 1-7.

Canzler, W., Kaufmann, V. and Kesserling, S. (eds.) (2008) *Tracing Mobilities. Towards a Cosmopolitan Perspective*. London, Routledge.

Delivorias, A. and Sabbati, G. (2015) EU demographic indicators: Situation trends and potential challenges. *EPRS*, 2015.



<[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551335/EPRS_BRI\(2015\)551335_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551335/EPRS_BRI(2015)551335_EN.pdf)> [Acceso 10-marzo-2020].

European Commission, (2008) *Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final Study Report*. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Unit E2.

<<https://epthinktank.eu/2016/12/16/rural-areas-and-poverty/>> [Acceso 30-julio-2019].

Garrido, F. y Moyano, E. (2002) Capital social y desarrollo en zonas rurales: Un análisis de los programas Leader II y Proder en Andalucía. *Revista internacional de sociología*, 33:67-96.

Li, Y., Westlund, H. y Liu, Y. (2019) Why some rural areas decline while some others not: An overview of rural evolution in the world. *Journal of Rural Studies*, 68: 135-143.

Shucksmith, M. and Brown, D. (2016) Framing Rural Studies in the Global North. En: M. Shucksmith, M. and D. Brown (eds.) *Routledge International Handbook of Rural Studies*. New York, Routledge 1-26.

Bock, B. (2019) Rurality and multi-level governance. Marginal rural areas inciting community governance. En: Scott, M., Gallent, N. and Gkartzios, M. (eds.) *The Routledge Companion to Rural Planning*. Routledge: New York, pp 103-113.



Línea Temática 7.

Desagrarización y cambios de la sociedad rural



Antes era mais bonito! O tempo do sítio e da comunidade utópica

Alice Miguel de Paula Peres¹

“A seiva da folhagem só é elucidada no segredo das raízes”.
(Chaimoiseau, 1993:39)

Resumo

O objetivo do artigo é mostrar como os sitiantes e meeiros moradores de um antigo bairro rural, localizado no município de Piracicaba, interior do estado de São Paulo – Brasil vivenciaram as mudanças que ocorreram no bairro. O bairro rural de Anhumas foi ocupado pela monocultura canavieira e transformou-se em uma área urbana isolada. Como os antigos moradores que viviam da terra sentiram essas transformações? Trata-se de dar visibilidade para as relações sociais e experiências vivenciadas no mundo rural antigo e dos processos desencadeados pelo aprofundamento das relações capitalistas no campo. A metodologia utilizada foi a História Oral. Articulando estrutura, processos e sujeitos sociais, por meio da História Oral, buscamos compreender o que os antigos moradores do meio rural tradicional estavam dizendo ao fazer uso da expressão: *antes era mais bonito!*

Palavras chave

História Oral, Bairro Rural, Avanço do Capitalismo

Apresentação

No caminho para a modernidade o mundo urbano ocupou um lugar central. Permitiu às populações de diferentes países acessarem um conjunto de benefícios materiais e de direitos institucionais. Embora os processos de urbanização tenham sido carregados de contradições, percorreu pelo mundo a seguinte assertiva: o espaço urbano e moderno é melhor do que o tempo “antigo”, “tradicional”, “arcaico”, e/ou “atrasado” muitas vezes também associado ao espaço rural. A circulação de uma visão de mundo ancorada na ideia do progresso também deu suporte à legitimação das transformações técnicas (tecnológicas) desde a Revolução Industrial. Como cada área rural se articulou a esse processo na história e a velocidade como isso ocorreu são temas clássicos da literatura acadêmica.²

No Brasil, nos últimos 20 anos, as discussões sobre o rural parecem ter flertado com essa assertiva dando ênfase às tecnologias modernas disponíveis para a vida, produção e consumo no campo. No limite, o avanço da modernidade e da modernização alimentou



o debate onde o rural “moderno” aparece e nele os “atores sociais” ganham visibilidade e vozes. No espaço “democrático” e de “conciliação”, as tensões e os interesses contraditórios poderiam ser resolvidos em suas especificidades de territórios, identidades, cultura, consumo, etc. A possibilidade de construir um rural plural desarticulado da nossa formação histórica escravocrata, patriarcal, latifundiária e das limitações impostas pela condição periférica do país no capitalismo, estava no horizonte. Enquanto uma conjuntura favorável alavancou o crescimento econômico, acreditou-se possível administrar e/ou fazer a “gestão” dos conflitos e tensões e não valia a pena preconizar desastres enquanto os ventos soprassem a favor. No limite, chegou-se a defender o desaparecimento da questão agrária no Brasil.³

Os ventos mudaram. A crise elucidada como uma crise fiscal gesta como antídoto um projeto de país sem conciliação. Já circula nos meios acadêmicos e jornalísticos o tema: “a erosão da democracia”. Todavia, não sabemos ainda a extensão da correspondência desse projeto com a expectativa de uma parcela da população, incluindo os segmentos da população rural. Para os estudiosos do mundo rural os desafios estão colocados. De que maneira as transformações do espaço rural se articulam a esse processo que se instaura, trata-se de um tema a ser pesquisado. Nesse empenho, algumas reflexões chamam atenção para os efeitos das políticas direcionadas à inclusão pelo consumo no mundo urbano, produzindo como resultado a alteração do sentido da vida, o esvaziamento da lógica coletiva e a despolitização nos espaços de periferia.⁴ Transportar essas reflexões para o processo que produziu o rural “moderno” também são importantes. É nesse sentido que resolvemos retomar os resultados da pesquisa de campo realizada em 2013. Naquele momento, estudando um bairro rural que se tornara área urbana isolada percebemos que muitos moradores faziam uso da expressão: *antes era mais difícil, mas era mais bonito! Antes era mais bonito!* Talvez, após alguns anos, possamos encontrar aí mais do que um lamento, mas um sinal das transformações mais profundas que estavam ocorrendo no corpo social e nas subjetividades.

incluindo os segmentos da população rural. Para os estudiosos do mundo rural os desafios estão colocados. De que maneira as transformações do espaço rural se articulam a esse processo que se instaura, trata-se de um tema a ser pesquisado. Nesse empenho, algumas reflexões chamam atenção para os efeitos das políticas direcionadas à inclusão pelo consumo no mundo urbano, produzindo como resultado a alteração do sentido da vida, o esvaziamento da lógica coletiva e a despolitização nos espaços de periferia.⁴ Transportar essas reflexões para o processo que produziu o rural “moderno”



também são importantes. É nesse sentido que resolvemos retomar os resultados da pesquisa de campo realizada em 2013. Naquele momento, estudando um bairro rural que se tornara área urbana isolada percebemos que muitos moradores faziam uso da expressão: *antes era mais difícil, mas era mais bonito! Antes era mais bonito!* Talvez, após alguns anos, possamos encontrar aí mais do que um lamento, mas um sinal das transformações mais profundas que estavam ocorrendo no corpo social e nas subjetividades.

O problema e a metodologia – o desaparecimento do bairro rural e a História Oral

O município de Piracicaba, localizado no interior do estado de São Paulo, tem sua história econômica e social marcada pela posição do Brasil na gênese do capitalismo. No período da acumulação primitiva os indígenas foram violentados e suas terras apropriadas pela Coroa Portuguesa. Na forma de sesmarias, onde localiza-se o município de Piracicaba, terras foram concedidas pela Coroa aos que abriam o sertão. Na sequência, o local se tornou uma base de produção de alimentos destinados ao abastecimento das áreas de extração de ouro em Minas Gerais. Já no século XVIII a produção de cana de açúcar se estabeleceu como uma produção mercantil e escravocrata, deixando suas marcas para o desenvolvimento regional⁵. O crescimento econômico ao lado das transformações do setor canavieiro nos séculos seguintes produziram efeitos como: aumento demográfico, urbanização e expulsão da população do campo. Em 2006 a área total dos estabelecimentos rurais agropecuários de Piracicaba alcançou quase 87 mil hectares, sendo que a produção de cana de açúcar em 2010 chegou a ocupar 60 mil hectares, representando aproximadamente 70% da área total. Ao mesmo tempo, a população rural reduziu de aproximadamente 34 mil habitantes nos anos de 1950 para um pouco menos de 8 mil, em 2011⁶.

Na contramão do esvaziamento dos campos, o bairro rural de Anhumas situado à 30 km do centro da cidade apresentou outro movimento. Nesse bairro, a produção de cana avançou sob o controle das Usinas e dos grandes fornecedores de cana. Ao mesmo tempo, as terras e propriedades rurais estavam sendo loteadas e, como consequência, os sítios tradicionais estavam desaparecendo. Uma nova configuração populacional emergia. Famílias de trabalhadores rurais e urbanos se deslocavam de outras regiões do país em busca de um lugar para morar e trabalhar e encontravam em Anhumas esse refúgio. O povoado crescia como nos espaços urbanos, com casas situadas lado a lado. No ano de 2014, o bairro rural de Anhumas não existia mais. Para os órgãos oficiais outra nomenclatura surgia como uma nova identidade. Havia ali uma área urbana isolada. De



uma perspectiva nacional, Valadares (2014) alertou: em 2011, 3,9 milhões de pessoas no Brasil estavam vivendo nos espaços com o nome de áreas urbanas isoladas. Para o autor, embora essa população fosse contabilizada como urbana, tratavam-se de famílias de origem e cultura rural.⁷

Para conhecer os antigos moradores desse espaço e o sentimento experienciado pelas mudanças, utilizamos a metodologia da história oral. Segundo Queiroz (1991), a história oral permite ao pesquisador adentrar no ponto de intersecção das relações entre o que é exterior ao sujeito e o que ele traz em seu íntimo. Trata-se de uma técnica quando

o intuito é penetrar no que não foi registrado oficialmente, atribuindo à história oficial outras interpretações. Segundo a autora, a história oral permite ao pesquisador entrar na esfera sensível da existência humana, nas relações sociais, à forma como a população viveu e sentiu seus problemas de vida, chegando à interioridade do ser social e à sua subjetividade. No bairro de Anhumas, foi realizada o total de 70 horas de gravação com 60 moradores, mais de 1.000 fotografias e 10 horas de filmagens das festas tradicionais. Deste envolvimento, a seguir, vamos destacar o lamento dos antigos sitiantes, proprietários ou não de terras. Um lamento manifestado na expressão: *antes era mais bonito!* O que os antigos moradores estavam dizendo?

Resultados e discussões

Pesquisadora: *Antes tinha lavoura, era arroz, feijão, milho, e depois veio a cana?*

Epaminondas: *Algodão...Tinha fartura. (...) Tinha um quarto que era reservado só para colocar sacaria do que ele colhia. Sacaria de milho, amendoim, tudo. Arroz ia até o teto de saco de arroz. Tudo, tudo colhido. Meu pai jogava arroz com casca para galinha comer. Tinha fartura, tinha porco no chiqueiro, tinha galinha, tinha ovo, tinha de tudo.(...) hoje o mundo ficou bem diferente. (...) Hoje você não consegue criar nem um passarinho na roça. Você fala: Vou parar de trabalhar, vou viver só de plantação. É dois meses e está passando fome. Porque eu não vivo só do alimento mais. Hoje você tem que ter um convênio, você tem que ter um dentista, tem que ter médico, remédio, um caderno, celular, um telefone, um carro. Viu, isso aí você não consegue manter com lavoura. Antigamente não, era só comida, saía de cavalo, de carroça, não gastava nada. Aí já criava uma porquinha, já vendia um porquinho, matava um franguinho (...) Hoje é Nossa, não tenho dinheiro para comprar um pão, comprar um leite. Que nada, a mãe já fazia o bolo cedo, o pão, o queijo. Matava porco, fazia linguiça, pendurava no varal, durava lá dois, três meses. Não comprava óleo, era toicinho. Então, era um faturão. Roupa era tudo feito*



em casa e ganhado (...) Agora hoje, todo mundo tem a mordomia de ter a fralda descartável. Tudo descartável e joga no lixo. Tudo descartável é uma beleza. Por isso que eu falo, então, nós não precisávamos de dinheiro, no passado não precisava de dinheiro (...)

(Entrevista realizada com morador de 38 anos, dia 27/04/2013)

Pesquisadora: Mas o senhor fala que aquele tempo era mais difícil, mas era mais bonito?

Elesbão: Mais bonito, né. Era mais bonito.[...] Era mais bonito, assim. Era mais bonito porque um era mais amigo do outro, era mais, tinha mais, tinha, como é que fala? Tinha, não tinha conforto, que nem hoje tem, hoje tem todo o conforto, nego tem carro, tem tudo, mas naquele tempo, tinha, fugiu da mente o que eu ia falar. É, solidariedade e tinha... fartura! Fartura! Porque o cara tinha mais coisa para comer, tinha, tinha mais coisa. Tinha, nós falamos fartura, eu não sei como é que fala. Então, tudo era do bom e puro. E puro porque era puro. E hoje, tem isso, mas já tudo é, não é mais puro. Hoje não é mais, nós falamos que não é puro. Hoje tem dinheiro, vai comprar e não é puro. A maioria é falsificado. É o leite, é uma laranja, é um suco, então.

Fúlvia: Não. A gente trabalhava tanto, tanto, tanto. Era como se fosse da gente. A gente tinha de tudo. Então a gente pouco comprava. A gente produzia, era uma maravilha. Eu fui criada assim. Criando coisas, assim, nativo, do que a gente colhia, do que a gente plantava. É, foi a infância. Depois que eu saí de lá, meus pais foram tudo embora para a cidade. Que daí, eu casei. E fiquei no sítio, que da minha família, assim, não é, éramos só eu e meus filhos, aqui assim, nessas redondezas.

(Entrevista realizada com moradora de 59 anos, dia 26/03/2013)

Elesbão: [...] No começo a gente era lavrador, fazia lavoura com a família. Aí sobrava um tempinho a gente ia ajudar o vizinho numa colheita de arroz. Naquele tempo tinha muita colheita de arroz. Tipo mutirão, um ajudava o outro. Depois, sempre tem um serviço, não é? Arrumar cerca, aparar a moita, o mato, sempre o sitiante tem um serviço, nunca fica parado. Naquele tempo tinha gado de leite. Era bonito. Tinha porco para o gasto, galinha, cavalo. E agora você vê, não tem mais nada. As coisas mudam.

(Entrevista realizada com morador de 64 anos, dia 17/04/2013)

Pesquisadora: E quando veio a cana...

Epaminondas: Ah, aí já começou né, começou mais... Daí veio a usina, aquelas máquinas, já veio detonando tudo. Aí acabou com tudo, acabou com passarinho, acabou com peixe (...) A máquina veio, já derrubou tudo, e cana. E já dividiu tudo, cada filho vai no banco com o cartãozinho só pegar o dinheiro só. (Entrevista com morador de 38 e 45 anos, dia 27/04/2013)



No bairro de Anhumas a vida moderna foi experienciada como um processo de violência e desorganização veloz do espaço social e do espaço de produção, dos sentidos e das hierarquias existentes, muito embora acompanhados pela suposta possibilidade de entrada no mundo do consumo, mas sem garantias de permanência no acesso. Mesmo quando as condições de emprego se expandiam, sinais já apareciam em relação à percepção das mudanças em curso. É nesse contexto que a imagem de uma *comunidade utópica* emergiu como explicação para o modo de vida antigo. Muitas foram as narrativas que nos encaminharam para essa perspectiva. Percebemos então que nos relatos havia a experiência da perda, não apenas referente à perda da propriedade da terra, já que muitos moradores não eram proprietários das terras, mas também a perda de uma forma de se viver no mundo.

Os antigos moradores lembraram do passado e destacaram em suas lembranças a forma como os sitiantes produziam seus meios de vida, da produção ao consumo, enaltecendo a capacidade dos sitiantes de prover internamente as suas necessidades. Necessidades que não estavam determinadas pela sociedade circundante. Havia ali um modo de vida particular, distinto da vida moderna marcada pela mercantilização, dependência do dinheiro e por um aprofundamento da alienação. No bairro de Anhumas, apareceu nas lembranças relatos da experiência de uma vida rural em comunidade. E foi buscando desvendar o sentido de comunidade que chegamos em um sentido para compreender o que os antigos moradores estavam nos dizendo com seu lamento: *Antes era mais bonito!*

Candido (2001), quando pesquisou como viviam os caipiras no interior do Estado de São Paulo nos anos de 1960, encontrou um modo de vida e uma sociabilidade próxima ao que se verificava em comunidades isoladas, a qual ele chamou de economia semifechada e rústica. Segundo o autor, os moradores das áreas rurais formavam um lençol de cultura conhecido como cultura caipira, onde viviam do trabalho na terra produzindo seu próprio alimento e moradia, por meio de relações familiares e de vizinhança, marcadas pela ajuda mútua e os mutirões. Um modo de vida tipicamente rural associado às práticas partilhadas de solidariedade provindas do catolicismo rústico e com elementos não contemplados pela racionalidade econômica. Tal apreensão sobre o modo de vida caipira tornou-se referência para a construção dos fundamentos das sociabilidades nos bairros rurais paulistas no Brasil, distinguindo estas sociabilidades das sociabilidades urbanas. O entendimento da comunidade fechada como totalidade também abriu para a compreensão da cultura como modo de vida resultando em uma



identidade rural particular. No caso do bairro de Anhumas, esses aspectos também apareceram. Os antigos moradores transmitiram a imagem do bairro como se esse bairro tivesse sido uma comunidade fechada, capaz de suprir as necessidades de seus moradores, sendo estes mesmos moradores guardiões da moral e das hierarquias, da produção e do abastecimento de alimento. Pode-se dizer que o bairro apareceu nas lembranças como uma totalidade. Uma totalidade vivenciada pelos moradores. Nessa totalidade o método de cura e a sabedoria estavam vinculados à experiência de vida localizada no próprio bairro. O saber construído internamente pela experiência de trabalho na terra e transmitido por gerações. O tempo da produção apareceu vinculado ao tempo da vida, como se estivessem sincronizados e misturados: o tempo do trabalho no compasso da vida. O ritmo e dinâmica da vida determinados pelas famílias e seu círculo de vizinhança. Produção e consumo circunscritos ao meio social rural e a sociabilidade prosseguia ancorada em regras e valores do catolicismo rústico. A experiência de viver a comunidade como totalidade produzia a sensação de relativa autonomia e controle do conjunto da vida social. Acreditavam e sentiam poder controlar os seus destinos, como se pudessem assegurar e conduzir o futuro.

É dessa experiência que Martins(1973) explicou o que seria a *comunidade utópica*. Martins (1973), preocupado com a inadequação do termo comunidade em estruturas capitalistas utilizou a expressão *comunidade utópica* com o intuito de explicar como as famílias de imigrantes camponeses, que se deslocaram da Itália para trabalhar nas fazendas de café e núcleos coloniais no Estado de São, buscavam preservar e conservar seu modo de vida antigo. Na consciência das famílias havia uma *comunidade utópica* uma vez que subjetivamente continuavam a trabalhar na terra segundo um modo de vida pré-capitalista. Entretanto, essa realidade já encontra a terra e o trabalho articulados às relações capitalistas e a atividade camponesa já inserida na dinâmica da reprodução ampliada do capital. Para Martins (1973) o campo de percepção dos sujeitos sociais (camponeses) estava vinculado à sua vida cotidiana, circunscrita às sociabilidades dos bairros rurais. Como moradores dos bairros rurais, sentiam sua forma de viver ou modo de vida, levando em conta as experiências que tiveram de relações pré-capitalistas acreditando viver em relações de comunidade. Os camponeses ou sítiantes em suas experiências reais produziam seus meios de vida, viviam do trabalho direto na terra, muitas vezes sem a mediação do dinheiro. Subjetivamente reproduziam um modo de vida cujos nexos estavam ancorados em uma relação direta com o meio natural – relações de não alienação com o trabalho e consigo, vivendo relações de parentesco, face a face,



pessoal e de vizinhança. Relações que estavam circunscritas aos bairros rurais como uma “comunidade”. Por isso, o camponês em suas relações pessoais sentia-se com autonomia e acreditava controlar a ordem e seu destino, incluindo todas as dimensões da vida no processo de produção e reprodução social. Segundo Martins (1973), por esse motivo a *comunidade utópica* poderia ser tomada como uma forma intersubjetiva de resistência às rupturas estruturais, e constituiriam formas sociais transmitidas por gerações, cuja origem remete-se a outros tempos e espaços, na forma de um modo de vida particular, uma forma específica de posicionar-se no mundo.

Candido (2001) quando pesquisou os bairros rurais e a desorganização e desintegração do mundo tradicional, utilizou a noção de *utopia retrospectiva*, salientando o aspecto transfigurador da imagem do passado, quando os caipiras recordavam suas vidas, por vezes ocultando o sofrimento e agruras do passado, enaltecendo a *fartura* que tinham no tempo antigo. Candido (2001) ressaltou justamente esse aspecto e considerou que a desorganização social não passa despercebida pelo morador da área rural, que manifesta a seu modo os sintomas de inquietações. Para o autor, o desconforto com o novo mundo ocorre quando os sujeitos sociais perdem sua posição econômica vinculada à propriedade ou à posse da terra e seus referenciais de mundo. Os mais idosos podiam comparar a vida tradicional com o presente criando uma *utopia retrospectiva*, como um *saudosismo transfigurador*. Candido (2001) utiliza essa noção para justificar o porquê de os caipiras, quando lembravam do passado, comentarem sobre a abundância e a *fartura* que existiam, a solidariedade e a sabedoria do mundo antigo, enaltecendo sempre os aspectos positivos, muito embora não desconhecêssem as agruras e a vida difícil que levavam.

Seja como uma resistência intersubjetiva na forma de *comunidade utópica*, ou como uma *utopia retrospectiva* apresentando um *passado transfigurador*, o fato é que no bairro de Anhumas as lembranças de um passado mais bonito chamou nossa atenção. E a questão que vamos destacar é que isso ocorreu em razão do caráter das transformações e pela forma como os moradores as vivenciaram e sentiram. Além de violentas, por desapropriar a terra e as relações sociais ao longo do tempo, espoliando o espaço rural e as possibilidades de identificação com uma forma de viver, os moradores não se envolveram como participantes conscientes do processo. A espoliação das referências de mundo produziu o esvaziamento do sentido da vida expresso pelo lamento: *Antes era mais bonito!* Aquela sensação de autonomia e controle de seus destinos, de certa forma correspondente à relação de alguns com a possibilidade de



produção dos seus meios de vida, desapareceu. O avanço do capital e o aprofundamento da mercantilização, como forças fantasmagóricas, desintegrou o espaço social e suas relações envolvendo os antigos moradores nessa trama como subordinados e subjugados. Vale lembrar que uma moradora comentou que quando ouviram falar a primeira vez em banco, não sabiam nem o que era um banco e por isso tinham medo do banco. Muitos quando tinham um dinheiro, escondiam seu dinheiro no colchão. Cabe-nos perguntar: que tipo de vida moderna os antigos moradores do bairro de Anhumas tiveram contato?⁸

Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicou que, na época da pesquisa, no bairro de Anhumas haviam 1.105 moradores distribuídos em 324 domicílios. Em 2010, o rendimento mensal (médio) do responsável pelo domicílio foi 578,7 reais, enquanto esse valor para o município de Piracicaba alcançou 1.919 reais. Em relação às ocupações profissionais dos moradores, podemos afirmar que estes se envolviam nos setores e nos trabalhos de menor remuneração.⁹ O bairro rural, onde antes viviam sitiantes, agregados e trabalhadores rurais que dependiam do trabalho na terra e da produção de seus meios de vida para sobreviverem, agora tiravam sua sobrevivência do mercado de trabalho, e muitas vezes, do mercado de trabalho urbano. A transformação do espaço rural em um espaço urbano isolado, se tornou um espaço de reprodução da pobreza material e ao mesmo tempo de espoliação cultural. Como um espaço urbano e periférico, o bairro de Anhumas apresenta carências por serviços públicos como educação, lazer, saúde, saneamento básico, etc. onde se aglomeram antigos sitiantes sem sítios, antigos meeiros e agregados sem terrenos para o cultivo, e famílias de migrantes expropriados em seus locais de origem. Trata-se portanto de um rural transfigurado que agrega aqueles mais injustiçados do sistema.

A lógica do capital na determinação do progresso técnico cria e se apropria de tecnologias que entram no meio rural e nas relações sociais. Esses processos afetam a produção, produtividade, desorganizando a produção tradicional e posicionando-a como atrasada. Ao mesmo tempo, a subjetividade também sofre com o processo. A própria cultura local vinculada ao sistema mental de classificação social é violentada pelo paradigma do progresso, que modifica a hierarquia de prestígio e os nexos sociais. Candido (2001) citou o exemplo das mulheres que passaram a sentir vergonha quando ainda tinham que pilar o arroz quando este poderia ser comprado. A questão aqui não é levantar o problema gerado pela tecnologia em si, mas destacar a força por detrás do progresso. Uma força impulsionada pelo capital e pela racionalidade econômica,



submetendo o conjunto da vida social aos seus interesses.

É por esse percurso que chegamos ao sentimento da melancolia. A melancolia como um sentimento experienciado pelos moradores de Anhumas e que os levou a comunica-lo na expressão: *Antes era mais bonito!* A melancolia como um sentimento despertado pela perda e espoliação. Uma perda difícil de ser ressignificada por estar associada ao conjunto da vida social e a forma como a vida se articula, daí a razão da perpetuação do sentimento de ausência e da perda. Perda das relações não mercantilizadas, não mediadas pelo dinheiro. No bairro de Anhumas, as exigências de eficiência econômica e produtividade estavam distantes, assim como a racionalidade econômica não conduzia a vida dos moradores no passado. Em muitas narrativas foi visível como as relações pessoais e os vínculos afetivos criavam garantias para a reprodução da vida, na medida em que controlavam a base da produção material e satisfação das necessidades por meio dos mutirões e compartilhamento do trabalho e do alimento. Estavam diante de uma sociabilidade de proximidade, baseada em vínculos de parentesco, onde todos reconheciam os códigos morais que definiam os padrões de sociabilidade. Quando o mundo moderno se faz presente no bairro, os moradores são espoliados e perdem essa autonomia (relativa) que usufruíam.

Dessa forma, podemos compreender o sentido do uso do termo *furtura* utilizado pelos moradores. Nos perguntamos: como é possível ter havido a *furtura* no tempo antigo?: no passado. Um modo de vida voltado para a produção do alimento. Dessa forma, todo o conjunto da vida social estava vinculado à necessidade de suprir essa carência. Diferente do tempo moderno, o alimento aparece nos relatos como algo que possui alto valor. Dentro da hierarquia, o alimento aparece na escala como o item principal e de maior importância. Além disso, a sua produção organizava e dava sentido ao tecido social. A sensação de *furtura* presente nos relatos está revelando o lugar das coisas quando a produção para o mercado não constituía o fundamento da atividade econômica e produtiva do bairro. A produção era para o *gasto*, ou melhor, para o uso. Como lembrou Moura (1978:16), a produção para o *gasto* é a produção para o estômago. Muitos narradores utilizaram essa expressão: *era para o gasto*, revelando a prioridade por detrás da atividade na terra: satisfazer uma necessidade elementar e primária da vida – a fome. Portanto, a expressão *furtura* vem acompanhada de referências que se reportam aos mínimos vitais, quando as necessidades humanas estavam submetidas à produção e reprodução de um modo de vida particular, a produção de valores de uso e não de mercadorias.



Levando em conta essas pontuações, podemos perceber que a vida no bairro de Anhumas como um bairro rural, apresentou relações sociais que não se restringiam às relações estritamente capitalistas. Nesse caso, podemos frisar que o problema ocorreu quando a produção para o mercado (produção de mercadoria) condicionou e organizou a vida e o trabalho dos moradores do meio rural e ao mesmo tempo não abriu possibilidades de emancipação e realização do ser. O desdobramento desse processo foi a dissolução do modo de vida rural como um modo de vida total - vivido intersubjetivamente como total -, culminando no empobrecimento. Um empobrecimento que se visualiza não apenas na dimensão material com a perda da terra, mas que atinge a interioridade e subjetividade do ser, na medida em que está associado à expropriação da cultura e seus mecanismos de produção e reprodução social.

Reflexões finais

No município de Piracicaba a presença do agronegócio tem expressão histórica como símbolo do progresso associado aos rendimentos econômicos. Dessa forma, o discurso hegemônico apropriou-se de uma articulação entre o setor sucroalcooleiro e a geração de emprego e renda enfatizando os efeitos para o bem-estar social. Entretanto, o que ouvimos no caso do bairro de Anhumas caminhou na contramão dessas considerações. Os antigos moradores revelaram as perdas que sofreram referentes às relações comunitárias de bairro rural. Ao contrário da associação entre progresso, urbanização e emancipação humana, mostraram as tensões vividas quando as mudanças estruturais usurpou a terra e suas referências identitárias impondo a mercantilização de todas as esferas da vida. Em meio ao debate em torno das transformações do mundo rural, sobretudo quando o rural tradicional caminha na direção de um rural “moderno”, há que se destacar os efeitos dessa modernidade e os processos que ela oculta¹⁰. Para Martins (2010:19) *a modernidade é uma mistificação das imensas possibilidades de transformação humana e social que o capitalismo foi capaz de criar, mas não de realizar*. E isso ocorre porque:

põe diante da consciência de cada ser humano, e na vida cotidiana de cada um, todo um imenso catálogo de concepções e alternativas de vida que estão disponíveis no mercado globalizado. Basta ter os recursos para consegui- lo. (...) anuncia que são coisas possíveis de um mundo possível, mas não contém nenhum item no seu mercado imenso que diga como conseguir tais recursos, que faça o milagre simples de transformar o possível em real. Isso cada um tem que descobrir; isso a coletividade das vítimas, dos



incluídos de modo excludente, e não raro, perverso, tem que descobrir (Martins, 2010: 19).

Em um bairro rural que se torna periferia urbana, o moderno chega como expropriação e violência, e esses elementos não devem ser desconsiderados, pois se trata de um processo articulado ao movimento do capital. O descontentamento da realidade os encaminham à *utopia retrospectiva*, já que buscam as referências de sentido na *comunidade utópica*. Esta reflexão nos auxilia na tentativa de compreender os fenômenos recentes presentes na vida econômica e política no Brasil. A tentativa de levantando os benefícios da expansão canavieira na geração de emprego e renda. Enaltecendo o setor como um caminho para o alcance do desenvolvimento. Ver Puls (2016).

Retomar o projeto desenvolvimentista, também impactou o meio rural, com as políticas públicas também individualizadas e entrada da população no mercado. Entretanto, esforços não foram direcionados para compreender os efeitos mais profundos destas políticas na transformação interna da vida, em como se vive e sente a vida. Em uma democracia restrita de capitalismo periférico, as promessas não cumpridas (porque são voláteis) abrem fissuras para que as transformações mais silenciosas e não visíveis a todos apareçam na cena do mundo. E como um espírito do tempo, pode trazer consigo uma crítica social e anticapitalista, porém conservadora. Lowy e Sayre (1993:22) quando analisaram os românticos anticapitalistas que utilizavam o passado como parâmetro para uma avaliação qualitativa das mudanças das relações sociais, destacaram a experiência da perda ligada à revolta salientando que: *a visão romântica caracteriza-se pela dolorosa convicção de que faltam ao real presente valores humanos essenciais que foram alienados.*

Notas

¹ Professora Doutora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), do Centro de Ciências da Natureza *campus*

Lagoa do Sino. E mail: peresalic@gmail.com.

² Marx (2013) no cap. 24 do Vol. I, ao explicar o processo de acumulação primitiva e Polanyi (1980) quando reportou-se à conversão da terra, trabalho e dinheiro em mercadoria, deixaram explícitos como o meio rural se integra ao meio social maior e não pode ser compreendido isolando-o dos processos mais amplos de acumulação de capital e mercantilização da vida. Também devemos chamar atenção para o que ocorreu



na Europa ocidental no pós II Guerra, quando os espaços rurais foram introduzidos nas políticas de incentivos direcionadas à alavancagem da produção com alta eficiência econômica e produtividade, repercutindo no volume de suas exportações. O impacto disso no aprofundamento da integração e interdependência entre espaços e setores, e como outros países seguiram este modelo (no Brasil ficou conhecido como modernização conservadora) revela o caráter permanente de um processo que aprofunda a integração, interdependência e, do outro lado, a vulnerabilidade e as crises (Martine, 1991).

³ Nos estudos do rural moderno algumas pesquisas tiveram mais visibilidade fazendo parte do debate. No Brasil a pesquisa do RURBANO constatou a emergência de novas configurações sociais e econômicas onde rendas não agrícolas e a pluriatividade assumiam importância central para as famílias que viviam no campo. Esses resultados buscavam mostrar, cada vez mais, que o rural não se restringia a atividades vinculadas à terra, pois outras demandas, sujeitos e atividades econômicas surgiam no espaço rural (Graziano, 2001 e 2002). Na perspectiva da Sociologia Rural, podemos destacar as contribuições de Wanderley (2000) e Carneiro (2008). A primeira, quando recuperou a literatura internacional e repensou o lugar do rural na sociedade moderna e na formulação de políticas públicas. A segunda, quando tratou o rural como uma categoria de pensamento em que o rural assume diversos usos e significados levando em conta as diferentes instâncias institucionais. Sobre um panorama da questão rural, ver Wanderley (2011) e Biazzo (2008). Quanto ao desaparecimento da questão agrária ver Buainain *et al* (2013).

⁴ Em artigo publicado na mídia eletrônica (The Intercept_Brasil), Machado (2019), recuperou os estudos de antropólogas sobre a periferia de Porto Alegre (RS), destacou como as políticas públicas neoliberais individualizadas e despolitizadas levaram à erosão da lógica coletiva e da democracia.

⁵ Como exemplo podemos explicitar alguns dados. Em 1828 havia na região de Piracicaba o total de 1.089 casas, 85 engenhos de açúcar com 2.299 negros africanos escravizados e 42 agricultores (agregados). Quanto aos lavradores independentes (fazendas de criação de gado) somaram-se 552 fazendas, com 123 agricultores e 529 negros africanos escravizados. Em 1836, com 78 engenhos, em Piracicaba não havia mais terras devolutas para serem legalizadas (Torres, 1975).



⁶ Os dados foram retirados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a história econômica do município de Piracicaba (SP) e sua evolução podem ser encontradas em Petrone (1968), Terzi (2001) e Peres (2014).

⁷ Apenas após a realização da pesquisa de campo conseguimos identificar os residentes do bairro de Anhumas. Lá encontramos: 1) Os filhos dos antigos sitianteiros do bairro constituído por famílias descendentes dos pequenos proprietários de terras; 2) Os filhos dos antigos parceiros e ou meeiros das fazendas do local e regiões circunvizinhas que para lá se deslocaram e fixaram suas residências; 3) As famílias que se deslocaram em busca de trabalho no corte de cana e eram provenientes de outros estados do Brasil; E o fenômeno mais recente: 4) As famílias de meeiros e sitianteiros que haviam partido para cidade e com idade avançada voltavam para o bairro de Anhumas; 5) As famílias em busca de trabalho na área rural – nesse caso, encontramos os trabalhadores tratoristas das máquinas do corte de cana provenientes do Paraná, e as famílias que sempre trabalharam na terra, mas na condição de aposentadas e com problemas de saúde, e estavam à procura de uma ocupação como caseiros nas chácaras rurais; 6) As famílias provenientes das periferias urbanas que, sem condições financeiras para morar na cidade em razão dos elevados aluguéis, buscavam um local com o custo de vida mais baixo; 7) As famílias ou indivíduos que compraram sítios e chácaras para lazer no final de semana.

⁸ Um exemplo da participação não consciente pode ser encontrada quando os moradores sitianteiros relataram que a terra foi perdendo força e que esse é um processo natural de desgaste, sem vínculo ao modo de produção. Esse foi o motivo dado por alguns para justificar a necessidade de venda de parte do sítio em que viviam. Posteriormente, após realizada a pesquisa de campo, percebemos que a produção inicial era para a subsistência, mas quando parte da produção se mercantiliza, a tentativa de acompanhar a produção e produtividade leva ao endividamento e vulnerabilidade. As perdas de safra ocorrida por intempéries da natureza fragilizando a produção mercantil agrícola.

⁹ Em uma pesquisa realizada em 2003 no bairro de Anhumas, indicou que as ocupações por pessoa de referência dos domicílios foram: ocupações do setor rural por conta própria: agricultura, ambulante, sucateiro, comércio; ocupações por setor rural como trabalhador: marinheiro fluvial, operador de abastecimento de água, Operador agrícola; ocupações do setor urbano: comércio, construção civil, indústria da transformação. Fonte: Dados reformulados, citados por Corrêa et al (2003).



¹⁰ Em 2016 na Revista Fapesp foi publicada uma reportagem levantando os benefícios da expansão canavieira na geração de emprego e renda. Enaltecendo o setor como um caminho para o alcance do desenvolvimento. Ver Puls (2016).

Referências Bibliográficas

Biazzo, P. Paulo. *Campo e Rural, Cidade e Urbano: Distingões necessárias para uma perspectiva crítica em geografia agrária*. ENGRUP, 2008.

Buainain, Márcio Antônio, et al. *As sete teses sobre o rural brasileiro*. Revista Política Agrícola, n. 2, 2013.

Candido, Antônio. *Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida*. São Paulo: Duas Cidades, 2001.

Carneiro, M. J. O rural como categoria de pensamento. *Ruris*, v. 12, n.1, p.09-38, 2008.

Chamoiseau, Patrick. *Texaco*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

Correa, A. et al. Ocupação e renda da População Rural de Piracicaba, SP: Estudo de caso de Anhumas. In: *O Novo Rural Brasileiro – rendas das famílias rurais*. Brasília: Embrapa Informações tecnológicas, 2004

Faleiros, Maria Isabel Leme; Crespo, Regina A Aída (Org.). *Humanismo e Compromisso: ensaios sobre Octavio Ianni*. São Paulo: Editora UNESP, 1996.

Fernandes, Florestan. *Comunidade e Sociedade no Brasil: leituras básicas de introdução ao estudo macro-sociológico do Brasil*. São Paulo: EdUSP, 1972.

_____. Anotações sobre o capitalismo agrário e a mudança social no Brasil. In: Szmrecsanyi,

T. & Queda, O. (Orgs.) *Vida Rural e Mudança Social*. São Paulo: Nacional, 1976, p.105-121.

Franco, Maria Sylvia de Carvalho. *Homens livres na ordem escravocrata*. São Paulo: Editora UNESP, 1997.

Graziano da Silva, J. Velhos e novos mitos do rural brasileiro. *Estudos Avançados*. v 15 n 43, 2001.

_____. et al. O que há de realmente novo no rural Brasileiro. *Cadernos de Ciência e tecnologia*,

Brasília, v.19, n 1, p.37-67, jan/abr.2002.

Löwy, Michael; Sayre, Robert. *Romantismo e Política*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

Machado, Rosana Pinheiro. Da esperança ao ódio: como a inclusão pelo consumo da era Lula atíçou o recalque nas elites. *Disponível em the intercept_Brasil*



<<https://theintercept.com/2019/07/22/era-lula-criou-vacuo-recalque-elites/> Acessado em 13/08/2019.

Marx, Karl. *Formações econômicas pré-capitalistas*. Tradução de João Maia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 3ª edição, 1981.

_____. *O Capital*. A Assim Chamada Acumulação Primitiva. Cap. 24. Vol. I, 2013, 785 – 833p.

Martine, George. A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia? *Revista Lua Nova*, N. 23 Março, 1991.

Martins, José de Souza. *A Imigração e a crise do Brasil agrário*. São Paulo: Pioneira, 1973.

_____. *Os camponeses e a política no Brasil*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986.

_____. *Florestan. Sociologia e consciência social no Brasil*. São Paulo: Fapesp, 1998.

_____. *A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala*. São Paulo: Contexto, 2010

Monbeig, Pierre. *Pioneiros e fazendeiros de São Paulo*. São Paulo: Hucitec, 1984.

Moura, Margarida Maria. *Os herdeiros da Terra: parentesco e herança numa área rural*. São Paulo: Hucitec, 1978.

Peres, Alice Miguel de Paula. *(Re)Descobrimos outros mundos rurais por detrás dos canaviais: um estudo do município de Piracicaba e do bairro de Anhumas*. São Carlos, 2014. Tese de Doutorado em Sociologia, pós-graduação da UFSCar, 2014.

Petrone, Maria Thereza Schorer. *A lavoura canvieira em São Paulo: expansão e declínio (1765-1851)*. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968.

Polanyi, K. *A Grade transformação. As Origens da nossa época*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

PULS, Maurício. As boas novas da cana de açúcar. *Revista Fapesp*, janeiro de 2016. Disponível em <http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/01/12/as-boas-novas-da-cana-de-acucar/>. Acesso em 11 ago. 2016.

Queiroz, Maria. Isaura. Pereira. *Bairros Rurais Paulistas: dinâmicas das relações bairro rural- cidade*. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1973.

_____. *Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva*. São Paulo: T. A. Queiroz, 1991.

Simão, Azis; Goldman, Frank. *Itanhaém: estudo sobre o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade litorânea*. São Paulo: FFLCH-USP, Boletim n. 226, Sociologia II, n. 1, 1958.



Terci, Eliana. Tadeu. (org.) *O Desenvolvimento de Piracicaba - história e perspectivas*.

Piracicaba, SP: Editora Unimep, 2001.

Torres, M. C. T. M. *Aspectos da evolução da propriedade rural em Piracicaba – no tempo do império*. Piracicaba: Academia Piracicabana das Letras, 1975.

Valadares, Alexandre. Arbex. *O gigante invisível: território e população rural para além das convenções oficiais*. Texto para discussão: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília/Rio de Janeiro: IPEA, 2014.

Wanderley, M. de N. B. *Um saber necessário os estudos rurais no Brasil*. Campinas: Unicamp, 2011.

_____. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas avançadas: o “rural” como espaço singular e ator coletivo. *Estudos Sociedade e Agricultura*, p.87-145, 2000.

Willems, Emílio. *Cunha, tradição e transição de uma cultura rural do Brasil*. Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 1947.



La participación de población destinataria en los proyectos de desarrollo: La experiencia de la ONG CEDER

Ana Rosario Miaury Vilca

Resumen

El trabajo tiene como objetivo: Conocer los principales factores que influyen en la participación de los beneficiarios en los proyectos de desarrollo rural, tomando como caso la experiencia de la ONG CEDER. Los problemas que busca resolver son: ¿Cuál es la concepción de participación que tiene la ONG?; ¿Qué factores externos influyen en proceso participativo?; ¿Cuáles son las características de la participación?; Este trabajo es de corte cualitativo; se basa en el análisis de información recogida mediante entrevistas a profundidad y revisión documental.

Los resultados son: la ONG tiene una concepción de la participación, funcionalista y economicista; carente de mecanismos de participación democrática; sin embargo, atribuye a la participación importancia para la consecución de sus fines; los miembros del equipo líder por su parte reproducen la misma concepción, aun cuando se esfuerzan para lograr un enfoque democratizador.

Respecto a los factores externos que influyen en la participación, se encontró que otras instituciones de desarrollo implementan actividades parecidas de manera simultánea, lo que afecta la participación democrática.

En conclusión, la participación se caracteriza principalmente por: se da a lo largo del ciclo del proyecto, pero solamente en aspectos utilitarios y operativos como: definición de lugares y cronogramas para ejecución de actividades; aporte de mano de obra y materiales de construcción; talleres de capacitación y para otras actividades.

El enfoque de participación de ceder se puede afirmar que el enfoque de participación de ceder es de carácter funcionalista y utilitaria pues busca genera beneficios económicos concretos, antes que la democratización de la sociedad.

Palabras clave

Participación, Democracia, Desarrollo rural, Población



Introducción

Durante las últimas décadas la sociedad peruana ha venido sufriendo una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Precisamente una de las más importantes es la consagración del derecho de participación social que tienen los ciudadanos en los diferentes escenarios y niveles de la gestión pública y privada. En este contexto, la mayor parte de las ONG peruanas vienen impulsando procesos de participación con diferentes enfoques y metodologías, muchas veces de manera espontánea.

El CEDER, organización no gubernamental de desarrollo que trabaja en el sur del Perú, no ha sido ajeno a estos procesos, desde su creación, en 1983 ha venido intentando implementar políticas participativas en los proyectos de desarrollo que ejecuta.

Espacio en el que se desarrolló el proyecto denominado:

“Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización de fibra de alpaca en las zonas altas andinas de Moquegua”, cuya población objetivo es de 700 familias

Que cuenta con los siguientes componentes:

1. Incremento de la disponibilidad de alimentos para la crianza de alpacas
2. Mejorar las prácticas técnico-productivas en la crianza alpaquera
3. Mejoramiento de la calidad genética del ganado alpaquero
4. Mejorar la organización y gestión de la comercialización en los productores alpaqueros

En resumen, estos cuatro componentes buscan establecer la relación entre capacitación y la promoción del empleo mediante diferentes acciones tales como: capacitación, asistencia técnica, asesoramiento comercial, pasantías, producción y difusión de materiales educativos. Establecimiento de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, que conjuntamente con las demás acciones, permitirán desarrollar en los criadores de alpacas nuevas habilidades y destrezas, para el mejoramiento de sus prácticas tecnológicas en condiciones agroecológicas, y socioeconómicas de la zona.



Principales enfoques y aspectos teóricos

Enfoque de participación comunitaria

Constituye un elemento fundamental en el desarrollo de las políticas públicas, así como en la sostenibilidad de sus resultados, visto como alternativa con ventajas para generar resultados en relación a las vías regulares utilizadas en las políticas públicas y acciones de desarrollo, en cuanto la

Participación social: vista como elemento importante para el ejercicio de la ciudadanía, cuyos rasgos más importantes en nuestro país fueron:

En la década del cincuenta: Bajo el contexto mundial de la guerra fría, se condicionaron elementos que marcaron la ideología frente a los conceptos de democracia y ciudadanía, al respecto podemos citar:

- a) La participación como manipulación ideológica:
- b) La participación como mano de obra barata:
- c) La participación como subversión

En década de los setenta en el mundo:

- a) La participación desde un sentido ético:
- b) La participación como medio potente de superación de la opresión. (Salcedo 2010:

Sin embargo, en América Latina la participación cuenta con algunas características particularidades:

La desigualdad social fue aceptada como una relación natural.

La conformación del sistema capitalista en Latino América trajo consigo la colonia que subsiste en relaciones de poder que asume un constructor mental denominado *raza*.

Al igual que en otras partes del mundo las luchas y movimientos sociales han permitido a muchos sectores sociales ir obteniendo derechos progresivamente, aunque no han logrado la eliminación total de la exclusión social que se ha ido reproduciendo, (Salcedo 2010:18).

La participación en la década del setenta en América Latina: Bajo el

- a) La participación como movimiento de masas
- b) La participación como promoción popular



En la década del ochenta: En este contexto de los programas de ajuste pasó a cobrar importancia factores como los derechos humanos, protección del medio ambiente y los desequilibrios fiscales (Salcedo 2010:14). Que dieron como resultado una época de convulsión social que fue canalizada por los sindicatos y partidos políticos casi de manera exclusiva debido a la débil capacidad organizacional, es en esta coyuntura que se crean y aplican medidas de alto contenido asistencialista como contención de la convulsión social.

La participación en la década del noventa: En el contexto de la participación para la democracia, la influencia del sistema internacional genera grandes transformaciones sobre los países latinoamericanos, los efectos de la globalización traspasan los espacios socioeconómicos, tecnológicos, culturales, ideológicos, medioambientales, factores que deben ser abordados con lógicas de soluciones globales, retomándose nuevamente la relación del estado con la sociedad.

Enfoque de participación y políticas sociales

Las políticas sociales deben contener elementos que faciliten la participación comunitaria no sólo para generar desarrollo humano, sino también para asegurar la sostenibilidad de sus resultados.

Participación en la fase del diseño. La comunidad puede ser la fuente más precisa para la detección de necesidades relevantes y de priorización de las mismas

1. En la determinación de los mecanismos de ejecución.
2. En la decisión presupuestal
3. En la decisión sobre los mecanismos de seguimiento y la evaluación.

(Salcedo 2010: 41).

La participación en la fase de la ejecución. Esta etapa de la política pública podemos definirla bajo tres conceptos sobre la estrategia de gestión en las políticas públicas:

1. Sobre el enfoque de participación comunitaria: este enfoque que asocia la participación a la solución más efectiva de los problemas de la comunidad, de esta manera al concebir la participación implica un proceso político que va más allá de la sola gestión de una necesidad concreta, por cuanto la organización y la participación requiere de un grado de poder un grado de empoderamiento, y de un ejercicio democrático de involucrarse en una política y programa.



2. La participación funcional: Bajo este enfoque la participación es asumida como un estricto medio técnico que permita la aceptación de la política y su mejor funcionamiento, y ha servido para suplir deficiencias del aparato promotor de la política, por ejemplo cuando los recursos económicos no son suficientes y se requiere el consumo de mano de obra o contribución de los beneficiarios.
3. Desde el enfoque participacionista. Esconde una concepción disfrazada de participación de la comunidad, pero donde hay interés de poder de subordinación y manipulación política de la población, tal vez legitimando la presencia de algún actor interesado. (Salcedo 2010: 51).

La participación en la fase de evaluación. La participación de los actores sociales en los procesos de evaluación de asuntos públicos y en políticas sociales de implementación no gubernamental «es un proceso que se realiza muy débilmente, es por ello quizá que la legalización no contempla modalidades de evaluación participativa» (Salcedo 2010: 79).

Problemas, resistencias e intereses

En este sentido, Kliksberg ha clasificado cinco aspectos sobre resistencia a la participación conceptualizándolos de la siguiente manera:

1. Enfoque cortoplacista
2. El reduccionismo economista
3. La subestimación de los pobres
4. Las llamadas elites ilustradas.
5. La tendencia de la manipulación a la sociedad: "(Kliksberg 1999: 28).

Planteamiento del problema

La lucha contra la pobreza constituye un eje central en la política social del país, sobre todo en los gobiernos central, regional y local, así como en las instituciones de desarrollo.

Son diversas las organizaciones que actualmente implementan acciones de desarrollo integral; estas enfatizan el logro de capacidades en los sectores más pobres del país a fin de mejorar sus ingresos económicos e impulsar la creación de capital social y humano, para lo cual despliegan varias estrategias y ejecutan actividades en los sectores intervenidos.



En este sentido, para la creación de capital social y humano, conocer las características de la participación de los involucrados es esencial, porque de allí que se logren resultados y la sostenibilidad de las acciones.

En este marco, la organización no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER), viene realizando acciones de desarrollo estrechamente ligadas a su misión, la cual es impulsar el mejoramiento integral de los más pobres y desfavorecidos mediante el desarrollo económico y social en las zonas que interviene.

En esta perspectiva, viene ejecutando el proyecto “Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización de fibra de alpaca en las zonas alto andinas de Moquegua”, desde el año 2008 a la fecha, teniendo como ámbito de acción los distritos de Ichuña y Chojata, en la provincia General Sánchez Cerro; y los distritos de Carumas y San Cristóbal, en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Estos distritos están ubicados por encima de los 3,800 metros de altura sobre el nivel del mar y son además los más pobres del departamento de Moquegua, cuya población vive básicamente de las actividades agropecuarias, siendo la cría de camélidos sudamericanos la más importante.

El proyecto busca mejorar los ingresos de aproximadamente 700 familias a través de la implementación de diversas actividades como el “mejoramiento en la infraestructura de riego y protección del ganado; implementación de nuevas especies forrajeras; mejoramiento genético del ganado alpaquero; desarrollo de buenas prácticas de crianza, esquila, categorización y selección de fibra; y mejoramiento del sistema de comercialización” (CEDER 2009: 30).

La participación de los beneficiarios en las actividades del proyecto y en sus organizaciones productivas para el CEDER constituye, al mismo tiempo, un fin y un medio para el logro de los objetivos. Como medio, impulsa el desarrollo de actividades para alcanzar metas; y como fin, constituye un objetivo para desarrollar el capital social de los productores.

Sin embargo, actualmente se vienen presentando una serie de dificultades y problemas en los procesos de participación de los beneficiarios del proyecto: bajo compromiso para adquirir cargos de responsabilidad en las organizaciones conformadas por el proyecto, manifestaciones de apatía en el involucramiento de las actividades, baja participación efectiva en los talleres de capacitación, escasa presencia en la comercialización



asociativa, conducta pasiva ante las responsabilidades colectivas, actitudes clientelistas y asistencialistas, entre otras. De tal manera que se configuran, básicamente, como receptores de donaciones e informantes.

Metodología de la investigación

Forma de investigación

La investigación se define como un estudio de caso,

Se trata, además, de un estudio de carácter transversal ya que se evalúa un conjunto de factores en un momento determinado.

Estrategia metodológica

La estrategia metodológica de esta investigación corresponde a un estudio cualitativo, en tanto se busca conocer la concepción de participación del CEDER y del equipo líder, las percepciones de los beneficiarios sobre el proyecto y los procesos de participación; los factores externos que influyen en la participación; y las características de la misma.

Para el recojo de información se constituyó una muestra no probabilística, compuesta por informantes clave provenientes de las siguientes categorías.

- 1.- Beneficiarios del proyecto en condición de titulares (700 jefes de familia),
- 2.- Beneficiarios del proyecto en condición de promotores comunales (40 personas),
- 3.- Equipo líder del proyecto (5 personas).
- 4.- Autoridades locales (3 personas).

Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

Para los beneficiarios en condición de titulares se buscó que estos participen en las tres actividades más importantes del proyecto. Luego de obtener una lista de beneficiarios que cumplieran esta condición se seleccionaron un total de 50 personas al azar, procediéndose a aplicar las entrevistas hasta lograr la saturación de respuestas.

Para los beneficiarios en condición de promotores comunales se procedió de manera similar, seleccionándose aleatoriamente a 10 de los 40 beneficiarios promotores comunales.

Para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas al equipo líder se consideró al 100% de sus integrantes.

En el caso de las autoridades locales se tuvo previsto realizar tres entrevistas.



Técnicas

- a) Entrevista semiestructurada
- b) Observación simple
- c) Revisión documental
- d) Focus groups

Conclusiones y reflexiones

El CEDER tiene una concepción funcionalista y economicista de la participación, en tanto que la reduce a categorías puramente económicas, siendo las relaciones más importantes las de costo y beneficio, bajo unidades de análisis totalmente medibles económicamente, dejando de lado categorías socio-culturales, como grado de organización, cohesión social, grado de confianza, etc. Su preocupación central es lograr los objetivos del proyecto de la manera más eficaz y eficiente posible. Empero, este tipo de concepción le permite romper con cualquier tipo de prácticas asistencialistas y de clientela.

La concepción de participación que tienen los miembros del equipo líder del proyecto, reproduce la concepción que tiene CEDER, aun cuando todos ellos tienden a hacer algunos esfuerzos por incorporar en sus prácticas aspectos relacionados con la concepción de la participación que conduce a la democratización de la sociedad. Todos ellos consideran que el objetivo principal de la participación en el proyecto es asegurar el logro de las metas y sobre todo la sostenibilidad del mismo; piensan que al incorporarse la población en las actividades del proyecto, ella termina comprometiéndose con el mismo, condición fundamental para su sostenibilidad.

CEDER no cuenta con mecanismos de participación propiamente dichos para el proyecto; sin embargo, y como expresión de la concepción de participación que tiene, estos, se encuentran implícitamente al interior de las actividades del proyecto. CEDER considera tres espacios para la participación según el ciclo de la actividad: planificación, ejecución y evaluación de la actividad. Es en estas instancias donde el CEDER pone todos los esfuerzos para conseguir una mayor participación de la población que asegure el logro de los objetivos y la sostenibilidad del proyecto. Los aspectos más importantes trabajados en estos espacios son los siguientes: participación en las asambleas de planificación; determinación de calendarios y lugares de ejecución de obras; aportes de recursos (mano de obra, materiales de construcción, terrenos, vientos, etc.); asistencia a las capacitaciones; sanción al incumplimiento de los compromisos; control de los



recursos; opiniones sobre los resultados de las actividades; aporte de información para cambios o modificaciones en el proyecto.

El equipo líder del proyecto cuenta con un buen nivel de capacidades motivadoras, las mismas que son utilizadas para: lograr un buen aprendizaje de los procesos tecnológicos; identificar los intereses de los distintos grupos sociales y facilitar su participación en las diferentes actividades del proyecto; y promover el concurso de otras instituciones, como los gobiernos locales, con la gerencia agraria de la región Moquegua, etc. Convirtiéndose de esta manera en una especie de líderes frente a los beneficiarios.

El grado de conocimiento que tiene la población sobre las actividades del proyecto, es heterogéneo: un grupo (la mayoría) de entrevistados manifiestan conocer únicamente las actividades en las que participa; siendo capaz de escribir correctamente el para qué, cómo, con quiénes y por qué se realiza la actividad en que participa. Mientras un segundo grupo manifiestan conocer entre dos y tres actividades, más la actividad en que participan y es capaz de describir para qué, cómo, con quiénes y por qué se realiza la estas actividades; finalmente como un tercer grupo, (más reducido), manifiesta conocer la totalidad de las actividades del proyecto y describe parcialmente el para qué, cómo, con quiénes y por qué se realizan estas actividades, reconociendo que las actividades más importantes son aquellas donde se puede obtener un beneficio concreto (construcción de micropresas, empadre controlado, comercialización de la fibra).

La mayoría de beneficiarios entrevistados perciben 3 tipos de beneficios procedentes del proyecto: familiares, comunales y personales. Los beneficios familiares provienen generalmente de las mejoras en la comercialización de la fibra y en la calidad genética del ganado; los beneficios tipo comunal provienen de las mejoras en la infraestructura; y los beneficios personales proceden principalmente de las acciones de capacitación.

Uno de los factores externos que limita la participación de la población es la presencia de programas de corte asistencialista implementados por el Estado o la empresa privada. En la zona operan dos minas que entregan gratuitamente reproductores, medicamentos para el ganado y materiales para construir infraestructura. Además, en el pasado reciente el gobierno regional de Moquegua observó el mismo comportamiento, entregando a los beneficiarios reproductores, semillas, medicamentos para el ganado, sin exigir contrapartidas; estas prácticas ha desarrollado en la población



la actitud de considerar que es “su derecho recibir” apoyo gratuito de parte del Estado y de parte de la empresa minera, porque es una forma de compensación por el abandono del Estado y por la extracción de recursos minerales de su territorio.

La participación de la población es relativamente baja, limitándose a las tres etapas que forman parte del ciclo de la actividad: planificación, ejecución y evaluación, no existiendo otros espacios de participación.

La fase de planificación se da a través de reuniones de trabajo y asambleas comunales

La fase de ejecución se da a través de la implementación de las actividades, donde el CEDER se encarga de la dirección técnica y de aportar materiales e insumos que no existen en la zona; los campesinos, en cambio, asumen la responsabilidad de aportar materiales de la zona, mano de obra, terrenos, reproductores, etc.; así como supervisar y controlar el avance de las actividades.

La fase de evaluación se da a través de reuniones de trabajo, talleres y asambleas comunales, que básicamente están destinadas a la discusión sobre el logro de las metas y beneficios obtenidos en base a las actividades culminadas; así como la transferencia de los bienes obtenidos.

La participación de los beneficiarios con las características anteriormente anotadas se explica por los siguientes factores:

Concepción funcionalista y economicista del CEDER y el equipo líder; carencia de mayores espacios de participación; superposición de actividades con otros proyectos; la concepción utilitarista que tiene la población de la participación y la limitada visualización de los beneficios de las actividades.

Bibliografía

Arroyo, Juan e Irigoyen, María (2005) «Desafíos de la democracia participativa en la descentralización». Lima: Care Perú-Fondo Editorial.

ASDE 1997 «Participación en la zona alto andina de Caylloma». Arequipa: Impresores “Colca”.

Benhamou, Françoise (1997) «Economía de la cultura». Uruguay: Trilce.



Briceño-León, Roberto (1998) «El contexto político de la participación comunitaria en América Latina». Scientific Electronic Library Online – SciELO. Fecha de consulta: 02/10/2009. <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v14s2/1333.pdf>>

Cuc (Centro de Estudios Comunales) (1990) «Pesca y Participación comunal en la Reserva nacional de Pacaya y Samiria». Centro de Estudios Comunales. Fecha de consulta: 17/07/2009. <<http://www.crid.or.er/digitalización/pdf/spa/doc10011/doc10011>>

CEDER y otros (2005) «Manual de manejo y crianza de camélidos sudamericanos». Arequipa: CEDER

CEDER y FONDOEMPLEO (2008) «Convenio proyecto: “Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización de fibra de alpaca en zonas alto andinas de Moquegua». Arequipa, enero.

CEDER (2009) «Cadena productiva de la fibra de alpaca». En testimonio de acción 25 años. Arequipa: Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER). pp. 27-29.

Coraggio, José Luis (2007) «La Economía Social como vía para otro desarrollo social». Organización Rebelión. 12/10/2009. <<http://www.rebellion.org/noticias/2007/6/51725.pdf>>

Fernández, Raúl (compilador) (2008) «Instituciones. Crisis de la modernidad». Arequipa: Centro de Estudio e Investigación Jurídico Social (CEIJUS).

García, Milagros y Cabañeros C. (2007) «Participación social clave de los procesos de desarrollo rural». Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos [CETI] Universidad de Castilla-La Mancha. Fecha de consulta: 5/12/2009. <<https://bit.ly/3nVbyVj>>

Gobernado arribas, Rafael (s/f) «Individualismo y colectivismo en el análisis sociológico». Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 04/10/2009. <<https://bit.ly/342Crij>>

Kliksberg, Bernardo (1998) «Seis tesis no convencionales sobre participación». Organización Participar. Fecha de consulta: 24/05/2009. <<https://bit.ly/3duKzv0>>

1997 «Capital social y cultura claves olvidadas del desarrollo». El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL). Fecha de consulta: 15/12/2009. <<https://bit.ly/3IUwrOy>>

Marchioni, Marco.

1967 «Iniciativas para el desarrollo comunitario en comarcas rurales». Revista de Estudios Agrosociales. Fecha de consulta: 26/07/ 2009. <<https://bit.ly/2H6thse>>

1999 «Comunidad, participación y desarrollo». Madrid: Editorial Populal.

Muller Eguren, Ricardo (s/f) «Instructivo para la elaboración de proyectos para el VII concurso de proyectos de Fondoempleo». s/l. Fondoempleo.



Oliveira, Alberto (2000) «La sociedad civil de la teoría a la realidad». México: Centro de Estudios Sociológicos.

Ortiz Rescaniere, Alejandro (2009) «Cultura y desarrollo». Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rivas, Alex y Lara, Romel (2001) «Conservación y petróleo en la Amazonía Ecuatoriana: un acercamiento al caso Huaorani». Quito: Ecociencia Abaya – Yala.

Rebollo, Óscar (2003) «Bases político-metodológicas para la participación». BANTABA: Recursos para el desarrollo humano, la educación global y la participación ciudadana. Fecha de consulta. 05/10/2009. <<https://bit.ly/342XZvl>>

Saenz, Alejandro (1999) «Contribuciones al desarrollo endógeno: participación comunitaria, poder local, ONG». Scripta NovaRevista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Fecha de consulta: 07/02/2009. <<http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-26.htm>>

Salcedo Lobatón, Elizabeth (2010) Enfoques y estrategias para la participación comunitaria. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Radl, Alejandra (2000) La dimensión cultural, base para el desarrollo de América Latina y el Caribe: desde la solidaridad hacia la integración. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe – INTAL. Fecha de consulta: 07/12/2009. <<https://bit.ly/2SZVjIw>>

Toledo, Víctor (2004) «Principios etnoecológicos para el desarrollo sustentable de comunidades campesinas». Organización Rebelión. Fecha de consulta: 6/10/2009. <<http://www.rebelion.org/noticias/2004/8/3380.pdf>>

Uribe, Consuelo (2008) Un modelo para armar teorías y conceptos de desarrollo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo editorial.



Sociología rural y decolonialidad en América Latina

Armando Sánchez Albarrán¹

Resumen

La mirada desde el Sur, con el enfoque descolonial, evidencia la presencia de temas de la construcción de la agenda de investigación de la sociología rural desde autores como Aníbal Quijano, Florestán Fernández, Agustín Cueva, Rodolfo Stavenhagen, por los años setenta. En los últimos treinta años, en la vena decolonial, destacan los temas ecológicos, la economía solidaria y especialmente la ecología política con Arturo Escobar, Boaventura de Sousa Santos, Víctor Manuel Toledo, Enrique Leff, por citar algunos autores. El objetivo de este trabajo es poner en relieve los temas rurales que subyacen en la perspectiva epistemológica decolonial. La metodología consiste en contrastar la crítica y la propuesta de los temas rurales. Como resultado, se destacan ocho sub temas: a) La perspectiva epistemológica rescata los saberes (campesinos), de su cosmovisión, como parte de la sociología de las ausencias; b) la revaloración de la cuestión indígena y la opción por una sociedad más incluyente y pluriétnica; c) la cuestión agraria actual se opone a los megaproyectos y propone la recuperación de los territorios de los pueblos originarios; d) los nuevos movimientos sociales reivindican valores tales como la soberanía alimentaria o el respeto a la “madre tierra; e) la crítica al desarrollo y la propuesta por proyectos ecoturísticos y de consumo de alimentos orgánicos.

Palabras clave

Sociología rural, epistemología del Sur, aporte decolonial

Introducción

El problema a analizar será la cuestión agraria, desde una epistemología decolonial desde donde se atrevieron a cuestionar a los paradigmas dominantes. El primer viento sopló a finales de los años cincuenta y hasta los años ochenta, a partir de autores como Florestán Fernández, José Carlos Mariátegui, Raúl Prebisch, Agustín Cueva, Octavio Ianni, Rodolfo Stavenhagen, René Zavaleta, Franz Fanon, Aníbal Quijano o Pablo González Casanova. Algunos de ellos con una formación teórica en los países desarrollados aunque con una interpretación diferente de las teorías. La mayoría provenía de países con férreas dictaduras militares, como en el Cono Sur. El segundo, después de la crisis de paradigmas de finales de los años ochenta, aunque algunos ya



habían escrito desde antes, con autores como el mismo Aníbal Quijano o Pablo González Casanova. De manera más reciente se le añaden autores como Boaventura de Sousa Santos, Víctor Toledo, Enrique Leff, Marcos Roitman, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Armando Bartra, por citar algunos.

La metodología consistirá en contrastar los diversos paradigmas para el estudio de la compleja realidad rural de mediados del siglo XX a la actualidad. Una gran parte de los estudios de lo rural fueron interpretados desde la mirada del desarrollo rural, sociología rural o antropología social siguiendo la concepción de modernización “occidental” (Sousa, 2012). Desde luego, la hegemonía norteamericana coadyuvó, además, a sobrevalorar la modernización a través de la industrialización y la urbanización. El paradigma folk-urbano sería la matriz teórica que impulsó los programas de modernización (Rogers, 1973). En este andar, en los setentas Rogers Everett Mitchell y Lynne Sevenning publicaron un influyente libro que impactó en la sociología rural en “*La modernización entre los campesinos*” (1973). Ahí se le imponen las características de las pautas de cambio social, desarrollo agropecuario y modernización (Everett y Sevenning, 1973).

En los años setenta, se van a extender los programas de modernización rural y proyectos de desarrollo agropecuario a partir de la fuerte intervención estatal y con una perspectiva eurocéntrica. Sin embargo, con el auge de la sociología rural a mediados de los años sesenta y setenta no le siguió un interés por fomentar la teoría de la sociología rural como bien lo indicó Rodolfo Stavenhagen en “Estado actual de la sociología rural en América Latina” (1965), en donde afirmó que la sociología rural destacaba más el aspecto técnico que el propiamente sociológico (Stavenhagen, 1965).

En los años setentas, se difundieron otros enfoques teóricos como el derivado del marxismo y la ecología cultural cuando se institucionaliza la sociología rural en las instituciones de educación superior (Paré, 1997). En los años ochenta, con la crisis financiera del Estado benefactor, entró en una aguda crisis que modificó las formas tradicionales de intervención estatal en la economía lo cual provocó el proceso de reducción del Estado disminuyendo la su presencia en la promoción del desarrollo agropecuario. Para ello, inició una etapa de liquidación, desaparición o fusión de empresas estatales y paraestatales. De esta forma los gobiernos neoliberales impusieron un nuevo paradigma económico sustentado en el libre mercado que implicó el retiro del Estado y sus instituciones en el fomento del desarrollo rural. En ese proceso



de profundos cambios, la sociología rural experimentó transformaciones en sus paradigmas, teorías y metodologías en las ciencias sociales (Hewitt, 1988). En reacción a la tempestad neoliberal, dio paso a una nueva mirada de interpretación de la complejidad rural desde la epistemología decolonial.

Antecedentes de un pensamiento rural latinoamericano

Varios intelectuales se encargaron, tempranamente, de reflexionar en torno al papel de los campesinos y los indígenas, en particular, de la sociedad rural latinoamericana, en el marco de un proceso de modernización capitalista de mediados del siglo pasado. Entre los más conocidos podremos mencionar a Florestán Fernández, Agustín Cueva, Rodolfo Stavenhagen, René Zavaleta Mercado, Pablo González Casanova, Pedro Vuskovic, Agustín Silva Michelena, Julio César Jobet, Gregorio Selser, Alberto Flores Galindo, Florestán Fernández, Ricaurte Soler, Raúl Prebisch o José Aricó quienes fundaron un importante cuerpo teórico, aunque disperso, de la realidad rural latinoamericana (Sánchez, 2014)

El brasileño, Florestán Fernández, reflexiona en torno a la necesidad de la descolonización y, especialmente, en el problema de la incorporación de la población afrodescendiente a la sociedad brasileña (Fernandes, 1980) (Ianni, 1996); el ecuatoriano Agustín Cueva, sostuvo que el desarrollo de una ciencia social latinoamericana no consistía exclusivamente en fomentar una tendencia nacionalista sino que, sugiere a los intelectuales latinoamericanos, aventurarse a la elaboración de una teoría propia *“rompiendo lanzas contra todos los conceptos tildados de “eurocentristas”* (Cueva, 1979); el Boliviano René Zavaleta, aventuró la idea de que el atraso socio económico del continente americano era producto del papel asignado a América Latina por parte de los países industrializados en la división internacional del trabajo (Ouviña, 2010) (Zavaleta, 1986); el peruano José Carlos Mariátegui, expone un crudo diagnóstico sobre la situación de la tierra e indígenas (Mariátegui, 1970). El también peruano, Aníbal Quijano, elabora una reflexión desde una perspectiva histórica y epistemológica. Dicho autor fue de los primeros en utilizar y legitimar el concepto de movimientos campesinos para hablar de las luchas por la tierra en América Latina (Quijano, 2006).

Mientras tanto, desde el marxismo existían algunos debates infructuosos. Uno de ellos era la polémica en torno a la convivencia de varios modos de producción, sobre todo a partir de la influencia de Poulantzas y Althusser, seguida muy de cerca por Roger Bartra



en su libro “Estructura agraria y clases sociales en México” (1974) sugiere hablar del Modo de producción articulación. En base a lo anterior desestima la lucha por la tierra. En reacción, Armando Bartra, en “*El comportamiento económico de la producción campesina*” (1982) aclara que en el capitalismo únicamente existe un modo de producción, que domina como totalidad, el cual puede incluir, por una parte, varias formaciones sociales y, por la otra, diversas formas de producción, de trabajo y de circulación que no son capitalistas, como la economía campesina. Derivaba de lo anterior, que la lucha por la tierra resultaba legítima en el actual modo de producción (Bartra, 1974).

La polémica anterior puede comprenderse mejor por la frecuente tendencia a la imitación o recuperación de nociones que provienen de Europa o de otros contextos ajenos al latinoamericano y que son utilizados por los científicos de América Latina, sin crítica, como nociones válidas, ocasionando más confusión en la medida en que no fueron conceptos construidos para la realidad y complejidad de América Latina. En este sentido, el chileno Marcos Roitman alerta respecto a que dichas nociones eurocentristas tienden a confundir, más que aclarar y explicar la realidad.

“Sin embargo, hay ocasiones donde las nuevas definiciones tienden a confundir, cuando no a oscurecer, lo ya enunciado. Con esto quiero llamar la atención hacia problemas comunes y casi diarios en el quehacer de las ciencias sociales. En un afán plus creativo se proponen nuevas definiciones no siempre acertadas, aunque estas puedan gozar de una aceptación social y política generalizada” (Roitman, 2005).

A mediados de los años cincuenta, aparece la ecología cultural, con antecedentes en la Escuela de Chicago, revalorará las variables de ambiente y los aspectos económicos al tiempo en que hacía una síntesis entre ecología, economía marxista y estructural funcionalismo. Julian H. Steward, estaba interesado en analizar la relación entre los organismos y el ambiente, así como “la adaptación al ambiente” por parte de la población. Destaca “la interacción de los rasgos físicos, biológicos y culturales al interior de una localidad” (Steward, 1955). La ecología cultural contó, de igual manera, con investigadores en América Latina, entre ellos se encuentran: Ángel Palerm; Erik Wolf, Arturo Warman, entre otros. Ángel Palerm, de origen español, retoma el etnoevolucionismo de Julian Steward (Palerm, 1980). Se opuso a la explicación marxista de la desaparición del campesino y su proletarización al revalorar los “*procesos adaptativos de los campesinos a las transformaciones de la sociedad mayor*” (Palerm, 1989: 183). Desde esta trinchera de pensamiento, se sostendrá la idea de la persistencia



de los campesinos frente al embate capitalista lo cual formó parte del debate: campesinistas - proletaristas.

En México, Rodolfo Stavenhagen, considera que, para los años sesenta, la sociología rural se encontraba en crisis, dividida, una parte, con base en una reflexión sociológica latinoamericana y, la otra, en la versión técnica impuesta por la sociología rural norteamericana (Stavenhagen, 1964). Pablo González Casanova, uno de los pensadores más originales y fecundos de Nuestra América propone el análisis del colonialismo interno para explicar que no únicamente existe una dominación de países del centro a la colonia, sino que, incluso, también existe colonialismo interno en el mismo país entre regiones centro - periferia debido a las relaciones desiguales de intercambio. Ese colonialismo interno se asienta en relaciones de explotación, en el caso de México, a partir de la dominación de una sociedad blanca-mestiza ladina sobre los pueblos indios (Casanova, 1993; Casanova, 1995; (González Casanova, 1997).

De esta forma, resulta claro que, desde finales de los años cincuenta a los setentas, existe una importante brecha de pensamiento rural iniciada por intelectuales latinoamericanos que habría que recuperar para sustentar mejor el desarrollo de la crítica decolonial.

Desarrollo teórico epistemológico de la sociología rural

La etapa de institucionalización de la sociología rural surgida en los años setenta y ochenta se encontró abruptamente, a finales de los años ochenta con la discusión en torno a la crisis de los paradigmas y la pérdida de vigencia de los grandes relatos. En el último cuarto del siglo XX, después de la llamada crisis de paradigmas representado simbólicamente por la caída del muro de Berlín, surgirán nuevas perspectivas de análisis, supuestas teorías, enfoques y conceptos para explicar los cambios vertiginosos en la sociedad rural. Sin embargo, no en todas las situaciones los conceptos surgen de debates desde “Nuestra América”. En la mayoría de los casos las supuestas nuevas teorías y conceptos son trasladados del viejo continente o de los Estados Unidos sin un previo debate serio, en los grupos de investigación y sustentados desde un programa de investigación, para decantar dicho concepto y confrontarlo con la realidad. Así, podemos hablar de nociones como nueva ruralidad, empoderamiento, gobernanza, sociedad civil, sujetos sociales, nuevos movimientos sociales, estrategias de sobrevivencia, entre otros, en los que se observa simplemente la adopción y su



utilización a la realidad latinoamericana. No obstante, en algunos casos, la discusión conceptual recién comienza.

La construcción de una epistemología del Sur parte de autores como Boaventura de Sousa Santos; Aníbal Quijano, Marcos Roitman, Serge Latouche, Arturo Escobar, Enrique Leff, Armando Bartra, Pablo González Casanova, entre otros, que apuestan por una construcción epistemológica decolonial desde el Sur, y que plantea partir de la crisis de la civilización en lugar de la globalización; la economía solidaria, el comunalismo y la economía del decrecimiento en lugar de mejoras al libre mercado (Escobar, 2014). Si bien, el problema de dicho enfoque radica en que aún persiste la pluralidad de enfoques, definiciones y metodologías.

En un texto más reciente, Pablo González Casanova sostiene que la globalización es más que una nueva forma de denominar a la economía:

"El discurso de la globalidad no solo obedece a una realidad epistémica legítima. Se está usando también para una reconversión de la dependencia. A menudo, contribuye a ocultar u ocultarse los efectos de la política liberal neoconservadora en los países del Tercer Mundo y los problemas sociales más graves de las cuatro quintas partes de la humanidad. En las líneas esenciales del mundo actual es indispensable ver lo nuevo de la globalidad, pero también lo viejo; y en lo viejo se encuentra el colonialismo de la Edad Moderna, un colonialismo global que hoy es también neoliberal y posmoderno. La reconversión es en gran medida una recolonización". (Casanova, 1995: 12).

Desde una concepción epistemológica Sur-Sur, Boaventura de Sousa Santos, sugiere subvertir los conceptos provenientes de los países desarrollados a través de la imposición del eurocentrismo e invita a reconstruir y repensar opciones a partir de necesidades concretas. La estrategia analítica, seguida por la ecología política, consiste en propiciar confrontar los proyectos de investigación opuestos. Por ejemplo, entre quienes justifican las tecnologías de las semillas genéticas y quienes se oponen a ellas; entre los partidarios de buscar la transformación de los alimentos en biocombustibles o de quienes se manifiestan en contra; entre quienes justifican la inversión del capital extranjero para, supuestamente, generar empleos en los llamados megaproyectos y quienes se oponen, con argumentos, a dichas inversiones.

La descolonización epistémica exige un esfuerzo por visibilizar problemas de imposición de un paradigma para cuestionar el desarrollo y la modernización rural. El primero, la imposición occidental de la modernización rural, como adopción del estilo de vida rural



en los países desarrollados, el cual, parte del supuesto de una sociedad polarizada (tradicional-moderna) (Sousa, 2012). En segundo lugar, en América Latina se impulsó el desarrollo rural como sinónimo de tecnología. A mediados de los años treinta del siglo pasado el Ingeniero Edmundo Taboada ya contaba con una concepción de desarrollo rural que partía de la tecnología de los campesinos para beneficiar a la población rural del país (Hewitt, 1988). El cambio social no sería únicamente “estudiado” sino, más enfáticamente, “inducido” hacia prácticas, conductas, patrones, actitudes y expectativas orientadas hacia la modernización mediante programas como la llamada “Revolución Verde”, los programas de infraestructura rural, desarrollo social, desarrollo rural integral y desarrollo rural sustentable. En tercer lugar, con frecuencia los antropólogos, demógrafos y sociólogos invisibilizan a la familia rural. Lo anterior lleva a considerar que predominó en la antropología, demografía y sociología una perspectiva eurocentrista. Durante años prevaleció la perspectiva occidental de familia nuclear; sin embargo, David Robichaux, encuentra el patrón familiar mesoamericano sugiriendo que la reproducción social depende de las reglas de residencia y de herencia y éstas son determinadas social y culturalmente (Robichaux, 2000). El cuarto nivel, lo evidenciamos con el análisis de los movimientos sociales, que muestra otra área dominada por la fuerte presencia eurocentrista desde la perspectiva de la teoría del Comportamiento Colectivo, la teoría accionista, la teoría de la Movilización de Recursos y el Marxismo Ortodoxo de los años setenta. Estas cuatro vertientes se construyen, en y desde, los países desarrollados. A pesar de ello, en textos más recientes y frente a la realidad del levantamiento indígena del EZLN, han tenido que rectificar o matizar su perspectiva y reconocer el carácter moderno de las luchas de indígenas y campesinas de América Latina (Sánchez, 2014).

Marcos Roitman señala que los intelectuales europeos o norteamericanos se ubican fuera del continente, y sus conocimientos de Latinoamérica sirven para avanzar, individualmente, en los escalafones administrativos de la carrera particular (Roitman, 2005). Por ejemplo, en Alain Touraine persiste una mirada eurocentrista, puesto que percibe a América Latina como una realidad inconclusa sin burguesía, sin democracia, pero con tradicionalismo y con dictaduras. *“No existe una verdadera clase dirigente en América Latina, ni siquiera en Monterrey o en Sao Paulo”* (Touraine, 1993: 36).

Empero, y a la luz de los hechos del levantamiento armado indígena en Chiapas o de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), existe una



rectificación en las posturas iniciales de Touraine, Melucci, y Claus Offe (Touraine, 1995; Offe, 1991; Melucci, 1997).

Evidencias de una nueva epistemología de la sociología rural latinoamericana

A la luz del pensamiento epistemológico Sur-Sur, es factible cuestionar la “cientificidad” de esquemas de interpretación del ruralismo o desarrollismo rural definido e impulsado, desde el Norte sobre los países de Nuestra América. Dan cuenta de lo anterior innumerables ponencias, artículos en línea, congresos y foros desde donde se detecta una nutrida participación de autores que constatan la validez del pensamiento decolonial.

Víctor Manuel Toledo y otros estudiosos, desde la ecología política y con un enfoque claramente decolonial publicaron el libro “La modernización rural de México: un análisis socioecológico” (Toledo, 2002). Ahí invitan hacia la re conceptualización de lo rural desde una perspectiva multidisciplinaria. En dicha publicación atraen a reflexionar los temas rurales a partir de una perspectiva epistemológica diferente al desarrollo para proponer el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Ahí se critica de entrada la concepción de desarrollo rural en la que subsiste la idea positivista de progreso. Entre sus propuestas se encuentra el índice de campesinidad-agroindustrialidad (Toledo, 2002).

Dicha reflexión reclama develar el sentido neocolonial de algunos conceptos que definen lo rural, en un contexto de políticas económicas, introyectadas de manera autoritaria, por gobiernos neoliberales (Sousa, 2012). El hilo conductor de este trabajo pretende responder a la pregunta de cómo explicar el surgimiento de otras formas de examinar lo rural en sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y políticas desde la perspectiva del Sur.

En los años setenta, Iván Illich comprendió que la contradicción histórica fundamental del siglo XX no consistía oponer el capitalismo del socialismo, sino entre sistema industrial y modos de vida social no industriales. Cuestionó que los saberes mercantilizados se transformaran en “conocimientos” enseñados por “profesores” certificados grado a grado por los “expertos” en el sistema oficial “educativo”, “económico”, “científico” hasta quedar alejados de la comunidad de donde surgieron. Illich, en oposición al concepto de desarrollo construyó el concepto de “convivencialidad” (Illich, 2006). Al hablar de los ámbitos de comunidad se refería a las tierras a las que



todos los habitantes de una comunidad tenían derechos de uso adquiridos para asegurar la subsistencia familiar y no para obtener ganancias monetarias (Esteva, 2012).

Arturo Escobar, reconoce que ha surgido en Europa una visión decolonial, no únicamente con respecto a autores como Ulrich Beck al hablar de la tendencia a la separación entre Estado y sociedad para dar paso a la “sociedad del riesgo” y la “acción reflexiva”. Otra noción alternativa de desarrollo la encontramos en Francia, con Serge Latouche quien se refiere a la propuesta del decrecimiento (2012). De manera más reciente, el español, Manuel Castells, coordina el libro “Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis” (2017) en donde se discuten las alternativas, algunas de ellas de corte no capitalistas, como en el caso de experiencias de economías comunitarias, las alternativas tecnoeconómicas o bien los servicios financieros alternativos (Castells, 2017)

El mismo Boaventura de Sousa coordinó el libro “Soberanía Alimentaria” (2011) en el que se discuten, confrontando las ideas, diferentes actores en torno al problema alimentario. Por ejemplo, partir de elementos tan esenciales como de la alimentación sana, de producción agrícola sustentable orgánica y a partir de los pequeños productores; de democracia real desde las organizaciones rurales; y de un cuidado de los recursos naturales (Sousa, 2011). En un libro más reciente de éste autor “Producir para vivir” (2014) sostiene la necesidad de partir de bases epistemológicas y casos verdaderos relativos a la alimentación para generar programas que tiendan a solucionar los problemas de la soberanía alimentaria, del hambre sin caer en la dependencia hacia las grandes potencias económicas (Desmarais, 2007).

Por su parte, Enrique Leff, Ekgar Boege, y Víctor Toledo, desde la ecología política, proponen, frente al deterioro de los recursos naturales a causa de la característica depredadora de los mega proyectos, experiencias concretas de una modalidad de gobernanza de partir de ciertos principios sociales comunitarios y ecológicos tales como: recuperar, recobrar, reparar, renovar. Es decir, desde un enfoque biologicista impulsa “...el inventario, el conocimiento, la defensa, la conservación de la biodiversidad...” (Toledo, 2013). Añade el autor que el paradigma biocultural se propone vincular el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la conservación de las culturas (Toledo, 2013).



David Barkin pone énfasis en las propuestas de carácter comunitario de las soluciones de desarrollo alternativo: *“...descubrimos un resurgimiento de programas autogestivos para revitalizar el campo, dirigidos a la conservación y rehabilitación de los ecosistemas locales... Muchas de estas comunidades están involucradas en proyectos originales que están contrarrestando los efectos económicos y ambientales desfavorables de los procesos normales de expansión de los mercados”* (Barkin, 2001).

El Buen Vivir se propone como nueva forma de vida hombre-naturaleza, frente a la consigna capitalista e individualista de la búsqueda del lucro y del beneficio, a partir de la recuperación de la cosmogonía indígena. Muchas organizaciones rurales, urbanas y no gubernamentales, así como campesinos o indígenas, establecen una política cultural activa en función del sujeto del aprendizaje, y se encamina hacia la construcción de un nuevo ciudadano más responsable con el medioambiente y la cultura: la búsqueda del “Buen Vivir, y la “Maximización de la “felicidad” (Sousa, 2012; Sánchez, 2006; Escobar, 2014; Cenceña, 2013).

Varios autores van a pensar desde el llamado giro decolonial con algunos matices. Uno, Boaventura de Sousa Santos desde la epistemología del Sur; Dos, autores que reflexionan desde la decolonialidad; Tres, otros con un pensamiento más crítico, desde la descolonialidad. Por el momento existe un cierto consenso respecto a la triple dimensión de la colonialidad. Aníbal Quijano fundamenta los análisis de la colonialidad del poder; la colonialidad del saber, nicho desde donde se cuestiona la racionalidad tecno-científica analizadas por Quijano o bien por Boaventura de Sousa Santos; La colonialidad del ser “europeo”, frente al “no ser” (indígena, mujer, afrodescendiente, joven, etcétera). Franz Fanon lo identifica bien en su libro “los condenados de la tierra”. La colonialidad de la naturaleza a partir de la propuesta de Edgardo Lander es otra dimensión de la colonialidad.

Una propuesta a la noción de desarrollo la encontramos en autores como Aníbal Quijano, con la noción de “socialización del poder”; a Enrique Dussel y la idea de “transmodernidad”; o bien en Walter Mignolo como “diversadlidad como proyecto universal”. Arturo Escobar propone hablar del “postdesarrollo” o el pluriverso como parte de los conceptos elaborados desde la perspectiva decolonial por dicho autor. En la actualidad no existe el consenso suficiente entre los autores respecto a los antecedentes teóricos (teología de la liberación, filosofía latinoamericana, pedagogía liberadora, estudios culturales, marxismo, filosofía afro-caribeña, feminismo y posestructuralismo)



los conceptos centrales de esta propuesta, sin embargo, continúa la discusión en congresos y seminarios desde donde se van consolidando algunos conceptos que nuclean la propuesta decolonial. Enrique Dussel, construye la noción de “trasmodernidades”. Para ello realiza un recorrido histórico para explicar la manera en que se impuso el orden económico neocolonial. Para hacer frente a dicha realidad habla de la filosofía de la liberación. En cambio, la perspectiva eurocentrista revaloriza al individuo impersonal, inexistente. En cambio, cada rostro representa una parte de un todo que nos informa de su sexo, generación, clase social, nación, grupo cultural o de una edad en la historia. Así la alteridad es social, histórica y popular (Dussel, 1996). Aníbal Quijano habla de una “socialización del poder” como una nueva forma de imaginario universal radical anticapitalista para descolonizar las perspectivas tanto marxistas como socialistas de sus trabas eurocéntricas (Quijano, 2014). Ramón Grosfoguel construye un lenguaje crítico identificado con la descolonización como un proyecto de liberación opuesto a la lógica económica global impuesto en nombre de la civilización. Walter Mignolo se refiere a las diversas teorías críticas de la modernidad al hablar de la “diferencia epistémica colonial”. Parte de la idea del hacer-conocimiento para “bien estar”, y no para controlar o administrar poblaciones, surge de experiencias y necesidades locales. Las regiones y los pueblos enfrentaron el racismo como una descalificación del cuerpo, ya que se les hizo creer que eran inferiores a otros, y además, que eran menos inteligentes. Se estableció así un coro-política del conocimiento.

Conclusiones

Existen aún varias líneas de investigación hacia la construcción epistemológica. Dicho camino supone cuestionar aspectos como la misma noción de modernización, desarrollo, la familia, los movimientos sociales, capital social, gobernanza, megaproyectos, empoderamiento, oportunidades de inversión, sociedad civil, nueva ruralidad, nuevos movimientos sociales, entre otros; nos muestra que, dichos conceptos, son polisémicos. Por el contrario, las concepciones de la teoría decolonial del Sur, rompen lanzas contra esos usos descuidados de los términos y, en su lugar, proponen conceptos destinados a lograr un mundo mejor desde una decolonialidad del saber, del ser y del poder.

Por otra parte, se encuentran los nuevos derroteros que, tras la sacudida de la crisis de los años ochenta (crisis económica, crisis política, crisis social, etcétera), llevó a varios autores hacia un empantanamiento teórico identificado como crisis de los sociólogos, más no crisis de la sociología rural. Desde la epistemología del sur; desde la práctica;



desde el conocimiento real y de los saberes prácticos, desde la sociología de las ausencias resurgen nociones latinoamericanas: la soberanía alimentaria, la producción y consumo de productos orgánicos; el Buen Vivir frente a la especulación capitalista; así como la recuperación del territorio y del derecho de los pueblos originarios a la propiedad colectiva de la tierra; y de una nueva alianza obrero (sociedad civil) -campesina (sociedad civil rural) encaminada a mejorar la producción orgánica y el consumo más sano.

Notas

¹ Profesor investigador del Departamento de Sociología, integrante del Cuerpo de Investigación Sociología Rural, Prodep, Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. Correo: armando_sa2002@yahoo.com.mx; armando.salbarran@gmail.com

Referencias bibliográficas

- Barkin, David (2001). "Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular sustentable", en CLACSO (2001) "Una nueva ruralidad en América Latina?", Editorial Clacso, Argentina, pp. 81-99
- Bartra, Armando (1982). "El comportamiento económico de la producción campesina", México, Universidad Autónoma Chapingo, México.
- Bartra, Roger (1974). "Estructura agraria y clases sociales en México" Ediciones Era S.A. México 1974, 172 págs.
- Dussel, Enrique (1996) "Filosofía de la liberación: Metodología; Ciencia; Liberación; Política; Historia; Filosofía; Relaciones sociales; Geopolítica", en Clacso, (Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar>, consulta 07/04/2019).
- Esteva, Gustavo (Coord.) (2012) "Repensar el mundo con Iván Illich" en Taller Editorial La casa del mago, Guadalajara, Jalisco.
- González, P. (1976). *Sociología de la Explotación*. México D.F.: Siglo XXI.
- González, P.. (1993). *La democracia en México*. Ciudad de México: ERA.
- González, P.. (1995). *Globalidad, neoliberalismo y democracia*. México D.F.: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
- González, P.. (1997). La democracia de Todos. *Conferencia al XXI congreso de ALAS, Sao-Paulo, Brasil*. (págs. 25-87). Sao Paulo: ALAS.
- Castells, Manuel, et. al. (2017) "Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis", Editorial Alianza, España.



- Ceceña, Ana Esther (2013). "Subvertir la modernidad para vivir bien", en Raúl Ornelas, Crisis civilizatoria y superación del capitalismo, México, iiec
- Cueva, A. (1979). El desarrollo de nuestras ciencias sociales en el último período. En A. Cueva, *Teoría social y procesos políticos en América Latina* (págs. 1-77). México D.F.: EDICOL.
- Desmarais, Annette (2007). "La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado", Editorial Popular, España.
- Escobar, Arturo (2014) "Sentipensar com la tierra. nuevas lecutras sobre desarrollo, territorio y diferencia", Editorial UNAULA, Colombia.
- Fernandes, F. (1980). *A natureza sociológica da sociologia*. Sao Paulo: Ática.
- Gutiérrez R. y Salazar, H. (2013) "El accidentado camino del Buen Vivir: horizontes indígena-originario-campesinos en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales", en revista *ALASRU*, México. pp. 75-99.
- Hewitt de Alcántara (1970) " La modernización de la agricultura mexicana, 1940 - 1970", Siglo XXI, México.
- Hewitt de Alcántara (1988) "Imágenes del campo. Una interpretación antropológica del México rural", El Colegio de México, México
- Ianni, O. (1996). A Sociologia de Florestan Fernandes. *Estudos Avanzados* 10, 25-33.
- Latouche, Serge (2012). "Salir de la sociedad de consumo. Voces y vías del decrecimiento", Editorial Octaedro, España, pp. 1-206.
- Lewis, Oscar (1951) *Life in a Mexican Village: Tepoztlán restudied*, Urbana, Ill, University of Illinois Press, 512 p
- Mariátegui, J. C. (1970). *Siete ensayos de la realidad peruana*. Lima: Biblioteca Amauta.
- Mignolo, Walter (2005) "Desobediencia Epistémica (II), Pensamiento Independiente y Libertad De-Colonial", en Otros Logos. Revista de estudios críticos, Año i, No 1, (Disponible en: <http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/Revistas/0001/Mignolo.pdf>, Consulta 15/03/2019).
- Mignolo, Walter, (2010) "Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad", en Colección Razón Política, Argentina,
- Offe, Clause (1991). *Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Facing the Triple Transition in East Central Europe*. Hertie School of Governance, Berlin
- Ouviña, H. (2010). "Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina. Un acercamiento al pensamiento político de René Zavaleta". *OSAL, Año XI, No 28, Noviembre*, 1-15.



- Palerm, Ángel, (1989) "Antropología y marxismo", Nueva Imagen, México.
- Paré, Luisa, (1997) "Tendencias en la investigación sobre temas rurales en los últimos veinte años" Nueva Antropología, vol. XV, núm. 51, Febrero, México. debates teóricos 36 textual
- Paré, Luisa (1991). "El debate sobre el problema agrario en los setenta y ochenta", en revista Nueva Antropología, Vol. XI, Núm. 39, junio, México
- Prebisch, R. (1981). *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*. México D.F.: FCE.
- Quijano, Aníbal (2006). "El movimiento indígena y las cuestiones pendientes en América Latina", en revista Argumentos, Vol., 19, núm., 50, enero-abril, 2006, pp. 51-77.
- Quijano, Aníbal (2014) "Poder y democracia en el socialismo", Clacso, Argentina (Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar>, 05/052019).
- Redfield, Robert. (1930). *Tepoztlán, a Mexican Village: A Study of Folk Life*. Chicago: University of Chicago
- Rogers, E., M (1973) "La modernización entre los campesinos", FCE, México. Roitman, M. (2005). *Pensamiento sociológico y realidad nacional en América Latina*. Ciudad de México: Libro electrónico.
- Sánchez, Armando (2006) "La nueva agenda de investigación de la sociología rural" en Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, No 3, México.
- Sánchez, A. (2012) "Movimiento campesino e indígena en América Latina", en Cisneros, A. (coord.), *Protesta social en América Latina*, México, UAM-A, Colección Saberes. pp. 47-132.
- Sánchez, Armando "La sociología rural en perspectiva", en *Revista Textual*, México, D.F.
- Sánchez, Armando (2012) "*Sociología rural, el nuevo campesino entre la globalización y la tierra prometida*", *Espacio Abierto*, vol. 20, núm. 4, octubre-diciembre, 2011, pp. 561-577 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
- Sánchez, Armando (2014) "Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural en América Latina", *Revista ALASRU, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, N10, octubre, México.
- Sousa, Boaventura (2011) "Introducción: las epistemologías del sur", en *Formas-otras: Saber, nombrar, narrar, hacer*. CIDOB, Barcelona
- Sousa, Boaventura (2012) "Una epistemología del Sur", Editorial Clacso-Siglo XXI, México D.F.
- Sousa, Boaventura (2005) "El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política", Editorial TROTITA/ILSA, Bogotá.



Sousa, Boaventura (2006) "Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (Encuentros en Buenos Aires). Editorial, CLACSO, Argentina <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/Sousa/Sousa.html>)

Sousa, Boaventura (2014) "Producir para vivir", Siglo XXI, México.

Stavenhagen, Rodolfo (1964) "La sociología del campo en Brasil", Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, abril-enero, Rio de Janeiro.

Stavenhagen, Rodolfo (1965). "Estado actual de la sociología rural en América Latina"; en *Foro Internacional*, vol. 5, núm.4, Apr-Jun, 1965, pp. 592-604

Steward, Julian (1955). El Concepto y el método de la ecología cultural, Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Cap. 2, de *Theory of Culture Changes*, University of Illinois Press, Urbana, 1955

Toledo, Víctor (2002). "La modernización rural de México: un análisis socioecológico", Editorial Semarnat, México. 132 p. 1

Toledo, Víctor (2013) "El paradigma biocultural: crisis ecológica, modernidad y culturas tradicionales", en *Sociedad y Ambiente*, año 1, vol. 1, núm. 1, marzo-junio de 2013

Touraine, Alain (1995) Los problemas de una sociología propia en América Latina"; en *Revista Mexicana de Sociología*, N°3, 1989, UNAM, México, pp. 3-22.

Touraine, Alain (1993) "La sociología de la acción en América Latina", en Pozas, Ricardo (Coord.) "Las ciencias sociales en los años noventa", en Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Villa, Alfonso, (1969) (en inglés) "The Mayas of Tucatán", en Wauchope and Nash ed *Handbook of Middle American Indians, Ethnology*, University of Texas Press, Austin

Wolf, E. (1976). *Los campesinos*. México D.F.: Labor.

Zavaleta, R. (1986). *Lo nacional-popular en Bolivia*. México D.F.: Siglo XXI.



Dinámicas culturales en la comunidad de Santiago Tenango influencia y su papel sobre la desarrollo comunitario político social

Miguel Angel Maximino Rojas

Resumen

"La formalización de los jornaleros e indígenas como grupos campesinos posterior a la revolución, han ido configurando una identidad que hoy en día sitúan al campesino como un agente de lucha, por ello el objetivo de esta investigación es el de comprender la configuración de la identidad campesina, así como el sentido que confieren a las estrategias de reproducción campesina a partir de las políticas neo liberales en México.

Durante los inicios de proceso neo liberal en México se comenzó a hacer notorios los cambios producto de un proyecto de urbanización junto con los acuerdos (TLCAN), que excluía el sector agrícola reduciendo la exportación del producto agrícola nacional, además la modificación del artículo en artículo 27 de 1992 ponían en desventaja al campesino frente al mercado global. La metodología utilizada para esta investigación desarrolla un estudio de caso en municipio de Felipe Ángeles vinculando la identidad, la inserción de mega industria agraria y las políticas asistencialistas con la categoría de estrategia de reproducción campesina. los resultados obtenidos plantean el arraigo a la tierra se encuentra mediado por la identidad destacando como elementos latente el núcleo familiar vinculando su integración en el repudio del cultivo genéticamente modificado, considerando afectada su visión del trabajo convencional en el campo, manifestando su relación comunitaria eventos tradicionales religiosos y en el reconocimiento del malestar que genera las políticas asistencialista como elemento de desintegración social que lejos de beneficiar al campo fragmenta el trabajo comunitario cada vez más desangrado."

Palabras clave

Estrategias de reproducción, mega industria, fragmenta el trabajo comunitario, identidad y políticas asistencialistas.

El objetivo del presente trabajo surge con la inquietud de plantear la comprensión de la historia, la situación y la diversificación social del campesinado, planteado como elemento central de la discusión el papel que desempeña la cultura étnica cultural y la dinámica que esta ha sufrido en la reconfiguración de nuevos espacios de identidad



comunitaria. Por otra parte debe resaltarse la inminente influencia que la globalización y el neoliberalismo ejerce sobre la ruralidad Latinoamérica, como una primera parte conformada por el estudio de la configuración campesina, partiendo de un esbozo histórico que permitirá analizar de forma secuencial las pautas y procesos que en cierta medida modificaron, al mismo tiempo que afectan hoy en día la conducta del campesinado mexicano, en su prácticas y su forma de relacionarse e identificarse posterior al periodo revolucionario, desarrollando dichos procesos en la esquematización de estos procesos en tres oleaje; la primera parte es constituida por la ola post- revolucionaria, parte del desarrollo productivo que tuvo el campesinado propiamente como agente activo de relevancia social, principalmente el trabajo agrario se fragmenta en dos figuras de propiedad ya existentes pero en contraste con la producción hacendaria se consideraban irrelevantes, la creación de una nueva clase social y una lucha incesante por las tierras. La segunda ola involucra una caída del bastante notoria de la producción de grupos campesinos, considerada como una crisis en la agricultura mexicana añadiendo también la delimitación de acuerdos internacionales, la crisis que presentaba la agroindustria y su inminente privatización. La tercera ola parte modificación y adaptación del país a un nuevo modelo económico social, que junto con el estado excluía el campo por completo, y el cómo el campesinado modifica sus prácticas en un esfuerzo de subsistencia ante esta oleada.

la exclusión económica conceptualiza Armando Bartra “es la peor condena imaginable pues clases subalternas como la obrera o la campesina están articuladas en interioridad al sistema – así sea de manera asimétrica- y por tanto sujeta a mecanismo de explotación y opresión, que al definir sus contradicciones y antagonismos definen también el campo de lucha”, en cambio los excluidos: “aquellos cuyo trabajo, cuyo consumo y cuya existencia están ni siquiera tienen el privilegio de rendir plusvalía de forma que el rostro de sus enemigos se limita al sistema que los expulsa”. Para los trabajadores que siguen siendo funcionales para el sistema o aquellos que, habiendo sufrido el proceso de exclusión, la lucha es difícil pero frontal hacia sus antagonistas y sus propósitos.

Contexto actual uno de los grandes retos que presenta hoy en día la agricultura mexicana es poder dar respuesta a una serie de elementos que se encuentran en el campo mexicano y que se han hecho de lado, primero la identidad y movilización agrícola han formado parte de la configuración campesina, y sin embargo hoy en día las organizaciones campesinas son escasas donde se puede notar con gran frustración en



los pequeños parceleros en una movilización pasiva, la fractura entre los grupos campesinos, lo que da pie a un inminente derrumbe del proyecto utópico que se planteó en la revolución, empieza perder el sentido de unidad, los ideales de lucha esta sometidos al orden estricto, hay una crisis en la producción la cual podemos ver en los estudios hechos por la Encuesta Nacional Agrícola (ENA) en el 2017, donde haciendo una comparación respecto a la superficie sembrada a comparación con el año 2014 donde hubo una reducción en la producción de trecientas mil toneladas en el caso del chile y de cuatrocientos mil toneladas en el caso de la cebolla, pero la mayor crisis alimentaria la sufrió la producción, donde en algunos caso se estancó comparación de hace 5 años e incluso disminuyo como es el caso del limón, donde en el 2012 su producción en tonelada era de 1 981 128 y disminuyo en el 2017 a 1 110 840, en el caso de la manzana también disminuyo en un periodo más corto del 2014 a 2017 hubo una disminución de más de ciento cincuenta hectáreas de siembra.(ENA. 2018, p. 30-31)

Uno de las problemáticas que también falta por atender el papel que juega el estado en la actualidad en relación a ¿un proyecto de rescate agrario o un proyecto de modernización? Tomando en cuenta la estabilidad que ha generado la inversión extranjera, el modelo de desarrollo rural, como es el programa procampo, no dio solución a la productividad agrícola; los subsidios y créditos no tenía la eficiencia ni la expansión que deberías, otro una de las discusiones emergente que es de llamar la atención, para un estudio a fondo de lo es la política pública que fortalece los megaproyectos ¿pero estos son proclamados para enfrentar la pobreza en el campo? es lo que Dante Ayala señala;

“los megaproyectos son normalmente extractivos substrayendo sin ningún control, la riqueza natural de grades territorios, contribuyendo esto a una mayor miseria y contaminación ambiental, un ejemplo tangente es la minería, lo mismo sucede con actividades que a un son defendidas como limpias, como lo es la energía eólica la forma en que se ha estado maneado esta industria en el país están generando despojo de tierras” (Ayala, 2010, p. 9)

Un elemento que no podemos dejar pasar de lado durante la configuración de un clara imagen campesina posterior a la revolución, es considerar como elemento histórico una modificación constitutiva en la cual se comenzara a visibilizar al campesino, y que además este proceso constitutivo tendrá injerencia directa dentro un modelo económico social en México durante los siguiente años, encontraría en la ley agraria del 6 de enero 1915, unos primeros tintes de integración de los excluidos, tanto como



Armando Bartra y Elena del Rosario Patiño consideran, que partir de este proceso constitutivo jurídico es que el campesinado en México atravesara por una etapa de agrarismo institucionalizado, si bien por un lado armando Bartra considera al agrarismo institucionalizado lejos ser un anhelo de la lucha de los zapatistas, o una política que cubría las necesidades y demandas por la restitución de la tierra, que considera Armando Bartra

El agrarismo institucionalizado es, ante todo, una acción política por la que el estado ratifica su poder institucional sobre la tenencia de territorial, y cuando este poder se materializa en la reforma agraria quien se refuerza, en principio, no es una u otra clase social sino el propio estado posrevolucionario, que aparece como instancia superior capaz de arbitrar los conflictos, regular las relaciones entre clases y eventualmente privilegiar a otros sectores.

El sujeto del agrarismo institucional no son los campesinos, sino el propio estado: pero su primera tarea es la pasificación del campesino revolucionario, la transformación del movimiento campesino de sujeto de la lucha rural en objeto de la política gubernamental. Y en este sentido la prueba de fuego del agrarismo hecho gobierno es la transformación del zapatismo en un agrarismo institucionalizado.

Pero encontramos a la vez una postura más optimas, por otro lado, en el sentido de interpretar el proceso del agrarismo institucionalizado, considerar como parte importante en la formación de un campesinado o lo que hoy en día entendemos como campesinado, se encuentra vinculado principalmente en la propiedad social, Elena del Rosario Patiño destaca como elemento central la ley agraria del 6 de enero 1915 como la pionera en la construcción de un marco jurídico necesario para el campesino, que hasta hoy en día, mantiene característica muy particulares en la forma de producción o de trabajo en gran parte de todo el país, considerar la ley agraria como “ la semilla que permitió que hace posible que actualmente se consideren en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tres tipos de tenencia de la tierra más importantes: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad”,(Patiño, 2015, p. 3) la presencia de estos tres tipos de tenencia de tierra que prevalecen en México, no forman parte un política de estado esporádica, que entrelazaba la simple idea una distribución de tierra. Es necesario ubicar que la promulgación de la ley no se da con base en las cuestiones y demandas de una clase social de un contexto específico, más bien, resulta pertinente entender como un proceso histórico bastante largo, que parte de desde la colonia con el despojo de gran parte de



sus bienes y medios de trabajo como lo es la tierra a un gran número de habitantes originarios. Con el movimiento de independencia pareciera encontrar el camino hacia una reivindicación de las tierras, la cual tuvo que esperar hasta la etapa revolucionaria para poder visibilizarse al menos de manera. (Armando Barra, 2012, p. 36)

Hay tres elementos que intervienen de forma directa en la ley agraria de 6 de enero de 1915, el primero a considerar está relacionado con la ley de desamortización, de baldíos y colonización, esta ley cumplían el papel de desamortizar las tierras en poder del iglesia, lo que llevo consigo una cuchillada para un gran número de habitantes indígenas que fueron despojados de sus tierras y que pasaron a manos de los latifundistas laicos, el segundo elemento importante en este proceso de las tenencia de tierra fueron as leyes de reforma, en las leyes de reforma se pude identificar una destitución de importante que se hizo una clase acaparador agrario dominante como lo eran los latifundistas laicos, sin embargo esta no represento para nada un apoyo a la lucha por la tierra, puesto que todas las tierras destituidas pasaban a ser otorgadas a quien estuviera dispuesto a pagar por ellas. Por último se debe dar el justo valor que prácticamente permitió la reivindicación del campesinos, la etapa de revolucionaria llevo a la creación de dos documentos que expresan la problemática y el sentido de lucha campesina en la revolución, ambos resumidos en dos planes: el plan de san Luis y el plan de Ayala, el primero expresa de manera tenue, además de ser con el que comenzó el movimiento revolucionario, y representa índole de una modificación es el sistema de gobierno, más que en la atender la necesidad territorial aquejada por los campesinos, bajo el discurso no reelectico plantea este plan, sin embargo dentro del plan se encuentra estipulado únicamente un artículo que plantea la problemática del campo (Patiño, 2015,p. 7)) “ con abuso de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, habían sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los Tribunales de la República, por lo que era justo restituir a sus poseedores de dichas superficies” (Patiño, 2015,p. 8)

El segundo plan, el plan de Ayala se realiza de forma más abierta al interés de lucha revolucionario, específicamente tras la subida del poder Francisco I. madre y el incumplimiento de la devolución de las tierras despojadas, los zapatistas elaboran dicho plan ajustado a la demandas de dotación territorial, el plan de Ayala tienen una tal relevancia que “mismos que serán retomados por la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y posteriormente incorporados en la Constitución de 1917, en su Artículo 27”(Patiño, 2015,p. 8).



Los elementos que guiaban la revolución quedan plasmados en, pueden ser resumidos en dos demandas principales, la primera integra una restitución de los ejidos a todos los pueblos y comunidades despojados, así como la dotación territorial como un derecho constitutivo, demanda planteada en el plan de Ayala. La segunda demanda planteada por los zapatistas es la ley agraria del 6 de enero del 1915 contempla como problemática a fondo que las grandes extensiones de tierras solo estaban distribuidas entre unos cuantos, por lo cual era necesario la fragmentación de los latifundios:

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, que no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su situación y condición social ni poder dedicarse a la industria o la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura y de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. (Bartra, 2012, p. 76)

Analizando con más detenimiento la ley del 6 de enero de 1915 y el llamado proceso del agrarismo institucionalizado que cuestiona Armando Bartra, para poder extrapolar los posibles vínculos con las formas de trabajo que se configuran en gran medida a través de estos procesos, que sostienen una figura jurídica del campesino, tanto como productor como en propiedad social “ ejido y uso común”, a partir de la ley de 6 de enero de 1915 se comienza a estipular las primeras restituciones de tierras y dotaciones, específicamente

se dice que es palpable la necesidad de volver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia, como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres, sin que a esto obsten los intereses creados a favor de las personas que actualmente poseen los predios en cuestión; porque aparte de que estos intereses no tienen fundamento legal, desde el momento en que fueron establecidos con violación expresa de las leyes que ordenaron solamente el repartimiento de los bienes comunales entre los mismos vecinos y no su enajenación a favor de extraños, tampoco han podido sancionarse o legitimarse esos derechos. . (A. Bartra, p.25)



una de las cuestiones que complicaran las condiciones de los pueblos, serán los pueblos que aquejan en la restitución de las tierras será la resolución que no puedan cumplir con los requisitos estipulados:

para concluir una de las principales problemáticas que discutían los grupos revolucionarios era que no se dejara la posibilidad de la creación en nuevos latifundistas, que tuvieran el control un selecto grupo sobre las tierras de propiedad social, con base en ello cumple la función de especificar en del 1 al 12;

- La restitución de tierras usurpadas por algún orden de gobierno o externo durante
- Se dispone que la división o reparto que se hubiere hecho entre los vecinos de un pueblo, y en la que haya habido algún vicio, solamente podrá ser nulificada
- En caso de no contar con la documentación expedida de los títulos de propiedad, si la comunidad necesita ejido se les dotara de extensiones territoriales de acuerdo a la necesidad de pueblo
- La creación de una autoridad agraria capaz de cubrir las disposiciones legales, la cual estará conformada por; Una Comisión Nacional Agraria, Una Comisión Local Agraria, Los Comités Particulares Ejecutivos que en cada estado se necesiten
- Creación de dependencias que colaboren en; orientación y asesoría sobre cómo realizar el proceso de la restitución de tierras
- Preservar los derechos de restitución “Los interesados que se creyeran perjudicados con la resolución del Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los Tribunales a deducir sus derechos, dentro del término de un año, a contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado ese término ninguna reclamación será admitida”. (Patiño,2010, p. 10)

Todo lo anterior pareciera parte de un modelo jurídico que satisface las necesidades, de uno de los movimientos sociales más importantes de México, y que, además, cubría con todos los reclamos de indígenas y jornaleros, pero Armado Bartra, considera que este tipo de política solo fue un medio para apaciguar el movimiento armado revolucionario “El reparto agrario precarista no es un modelo de desarrollo ni pretende transformar radicalmente la propiedad rural. Se trata de un agrarismo político necesario coyunturalmente para restablecer el orden y una base de sustentación para el nuevo orden de estado” Armado Bartra



La comunidad a estudiar se encuentra ubicada en el estado de Puebla perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles que tiene colinda al norte con los municipios de Acatzingo, Mazapiltepec de Juárez y San Salvador el Seco; al este con los municipios de San Salvador el Seco, San Juan Atenco y Quecholac; al sur con el municipio de Quecholac; al oeste con los municipios de Quecholac y Acatzingo. Ocupa el 0.3% de la superficie del estado Cuenta con 20 localidades y una población total de 17 447 habitantes. (Inegi,2009)

El Municipio de General Felipe Ángeles, fue fundado por grupos nahuas que lo llamaron Nochtitlán, que significa "lugar de nopales"; sus radicales nahuas son: "nochtli": nopal; y "tlan": lugar. Antes de 1923 fue nombrado San Pablo de las Tunas, ya que dentro de su vegetación se encuentra el nopal y por consiguiente la tuna; contradictoriamente es el cultivo que con mayor facilidad se produce y es el que menos se comercializa, siendo este destinado exclusivamente como cultivo de auto consumo, dando prioridad al cultivo de maíz y hortalizas.

Anteriormente formaban parte de pequeñas comunidades que pertenecía al Municipio de Quecholac. En ese mismo año, por gestiones del Capitán Enrique Claudio Pozos se decretó su constitución y se consolidó como Municipio, por lo que adoptó el nombre de General Felipe Ángeles. Este Municipio se conformó por las Juntas Auxiliares de Santiago Tenango, Santa Úrsula y San Antonio Portezuelo y por la ranchería de Candelaria Portezuelo. La Cabecera Municipal es el Municipio de San Pablo de las Tunas.

El Municipio se ubica dentro del Valle de Tepeaca, planicie que se extiende al centro de la meseta poblana y se caracteriza por su suelo eminentemente calizo, así como por sus yacimientos de mármol, el relieve está determinado por la presencia de la alta y grande sierra que cruza el Oriente y que continúa por el Municipio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán); alcanza más de 700 metros de altura y culmina en los Cerros Chalconquiahuitl, El Coyote y el Ocotál. El Municipio no cuenta con corrientes superficiales importantes, tan solo es bañado por arroyos intermitentes procedentes de la sierra que se alza al Oriente. El Municipio pertenece a la zona de los climas templados del Valle de Tepeaca y de Puebla, presenta dos tipos de climas: templado subhúmedo con lluvias en verano, en las zonas Sur y Oriente del Municipio; y templado subhúmedo, el cual se presenta al centro y Oeste del Municipio.



La mayor parte del territorio está dedicado a la Agricultura de riego. Forma parte de la zona de regadío del Valle de Tepeaca, los cerros están cubiertos por pastizal inducido, al suroeste existe una pequeña área dedicada al cultivo por temporadas. Sus recursos naturales son los yacimientos de mármol. Se identifican tres tipos de suelo: el Litosol, Regosol y Cambisol (INAFED, 2017)

El municipio de General Felipe Ángeles presenta índices de pobreza arrojados por el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad (MEC) del MCS-ENIGH, entregado por INEGI el 28 de agosto de 2017, permite recuperar la continuidad histórica y analizar las variaciones en la pobreza entre 2010 y 2015. Este instrumento es consistente con otras fuentes de información, tales como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y con lo reportado trimestralmente por el CONEVAL a través del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza.

La base antigua del ejido

El estudio del ejido de Santiago Tenango, parte de lo que se podría considera un amplio bagaje histórico que data de miles de años, pero es importante tomar en consideración el aspecto de la auto identificación de los propios campesinos de ejido, tomando en cuenta para el estudio de la conformación de la comunidad, con base a lo reportado por la junta auxiliar no tiene más de 300 años en que comenzó a ser poblada, además de que los habitantes de la comunidad se identifican como jornaleros trabajadores de la hacienda “San José”, de raíces mestizas que comenzaron a ocupar las tierras de ejido primero como jornaleros, y posterior a la revolución,.

Pero las tierras del ejido tienen una historia antigua, que incluso prevaleció durante gran parte de la colonia, prueba de ello es que en la resolución presidencial con títulos con cedula real que datan de 1665, que prueban que, en gran parte de la colonia podían trabajar sus tierras con cierta autonomía. Incluso resaltar con mayor importancia el hecho de que el trabajo de la tierra se realizaba además es importante destacar que existen raíces indígenas, con base en la anterior surgen nuevos cuestionamientos como: ¿Por qué a los habitantes de la comunidad presentan dificultades para su propia reconstrucción histórica? ¿Cómo validar todo lo que lo describen los habitantes?,

La constitución del ejido

En cuanto a entender la forma que se pudo haber tenido en cuanto a la organización durante proceso de solicitud de la dotación de las tierras, dichas tierras del ejido de



Santiago Tenango comenzaron a ser trabajadas en uso común después de los años 30's, el estudio se complejiza si se toma en consideración las narrativas de los campesinos de la comunidad, los cuales aluden su buena organización en la solicitud de dotación a la figura de un poblador, que fue quien asesoró a los habitantes de la comunidad de nombre "Juan Reyes", quien además los habitantes de la comunidad señalan que fue el primer comisariado ejidal de la comunidad e incluso algunos señalan que fue el primero de toda la zona. pero realizando una revisión documental de la resolución presidencial sobre el ejido y con base en vestigios de piezas antiguas que datan de periodos mucho más extensos en el museo de la comunidad en colaboración con el INAH, todo ello contrasta con el imaginario que los propios campesinos tienen de origen de su comunidad. La repartición de tierras y el trabajo campesino se encuentra marcado mediante los tabulados básicos ejidales: el municipio de General Felipe Ángeles cuenta con 5 ejidos, pero con cartografía entregada 4 con un total de 5562.897 hectáreas, de las cuales 1353.903 hectáreas son de uso común, 4176.509 hectáreas son parcelada y 32.485 hectáreas son de asentamiento humano.

En el caso de elegido de Santiago Tenango este presenta con base en el documento básico que ampara la propiedad social y posesión de la tierra, en la resolución presidencia expedida por José López portillo en ley cual los vecinos con fecha 20 de junio de 1915 solicitaron la restitución de tierras de que fueron despojadas.

Es importante destacar lo importante de este proceso es evidente que los campesinos de la comunidad de Santiago Tenango han sido un actor social en constante lucha por su trabajo, sus prácticas con una amplia historia y por su territorialidad, que incluso con las dificultades que presentaron para, entrar a ciertos espacios (hablando en el marco legal), para poder realizar la solicitud no solo de dotación territorial, sino también y haciendo hincapié de una restitución territorial de las que habían sido despejados, en dicho despojo los campesinos, argumentaban tener títulos de propiedad entre los que destaca: un testimonio original que parte de 1787, además en los que consta diligencia de propiedad que fueron otorgado al pueblo en fondo legal propias de una cedula real, lamentablemente no habían planos en los cuales se pudiera identificar los linderos de los pueblos que fueron de su propiedad y puesto que no contaban con la mayoría de os títulos solicitados en la resolución, no se pudo preceder la restitución de los tierras usurpadas, pero se les doto de: añadiendo que si no se les restituía las tierras usurpadas piden con fundamento en el artículo 50 de la ley de enero de 1915, que sean concedidas en calidad de dotación las tierras de que carecen, teniendo resolución desfavorable



puesto que no contaban con los títulos requeridos para la restitución, dotando de tal manera de únicamente de con 560 hectáreas que deberían expropiarse de las fincas colindantes.



Economía social y género: El caso del Hotel Taselotzin

Nadia Eslinda Castillo Romero

Resumen

La presente ponencia integrará una sistematización de los primeros resultados de la investigación titulada “Economía social y género el caso del hotel Taselotzin en México”, de la Universidad Iberoamericana Puebla. Esta investigación tiene por objetivo analizar los resultados que ha generado el proyecto del Hotel Taselotzin (Cuetzalan del Progreso, Puebla), desde la perspectiva de la economía social y el género en la construcción de una sociedad más justa en el contexto de pertenencia al Sur global y al ser impulsado por mujeres, rurales e indígenas. La metodología se centra en el paradigma cualitativo, el método es un estudio de caso y las técnicas son entrevista a profundidad, entrevista de panel y observación.

Las experiencias de Economía Social (ES) colocan al trabajo como el elemento principal para generar valor en beneficio de las personas que participan en estas cadenas productivas, privilegiando la propiedad colectiva de los medios de producción y con ello, el valor de uso sobre el valor de cambio, repartiendo los beneficios de manera equitativa entre sus miembros y en beneficio de los territorios donde se insertan estos ejercicios. Estudiar los ejercicios de economía social nos permitirá recuperar su experiencia de impulsar y gestionar organizaciones que privilegien los valores de trabajo asociativo, para entender los retos y desafíos que presentan al introducirse en un mercado que privilegia el capital sobre el trabajo.

La pregunta central de la investigación: ¿Cuáles son los resultados, desde la perspectiva de la economía social y el género que ha generado el proyecto del Hotel Taselotzin en la construcción de una sociedad más justa en el Sur global al ser impulsado por mujeres, rurales e indígenas?

Palabras clave

Economía social, género, Taselotzin.

La presente ponencia tiene por objetivo dar cuenta de los primeros resultados de la investigación “Economía social, género y emprendimiento: el caso del Hotel Taselotzin”, cooperativa de mujeres indígenas ubicada en la Sierra Nor oriental del estado mexicano de Puebla. Dicha investigación está adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrado de Universidad Iberoamericana Puebla.



La Economía Social como modo de producción en solidaridad

Tomando en cuenta que las mujeres ocupan una posición de subordinación, dependencia y discriminación que se traduce en su sujeción al poder y que define las relaciones de opresión genérica que hace cualitativamente más intensa la explotación a la que están sometidas, como productoras a subordinadas al capital y sujetas a los poderes (Lagarde en Oulhaj, 2019: 29).

Las experiencias de Economía Social (ES) ensayan nuevas formas de organizar, gestionar, producir, comercializar y consumir, a partir de la apropiación de valores que permitan construir relaciones sociales basadas en la cooperación, la equidad, la justicia, la autonomía, autogestión y la solidaridad. Por tal motivo, la ES coloca al trabajo como el elemento principal para generar valor en beneficio de las personas que participan en estas cadenas productivas, privilegiando la propiedad colectiva de los medios de producción y con ello, el valor de uso sobre el valor de cambio, repartiendo los beneficios de manera equitativa entre sus miembros y en beneficio de los territorios donde se insertan estos ejercicios (Castillo, 2018, p. 13).

Entonces, entendemos a la Economía Social como una respuesta a las desigualdades e inequidades históricas consecuentes de la acumulación del capital y agravadas por la etapa neoliberal que privilegia la generación de capital a través del despojo (Harvey, 2004), es decir, la libre circulación del capital financiero en detrimento del trabajo, generando con ello más pobreza y desempleo y, en consecuencia, ensanchando la brecha de la desigualdad. Por lo tanto, bien podemos decir que la ES es un proyecto político que ensaya formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de esa propuesta es la introducción de niveles crecientes de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas. Tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia de las economías locales para generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorezcan a toda la sociedad. La ES postula así un nuevo tipo de desarrollo: integral, a escala humana, sostenible, con énfasis en la reducción de las desigualdades y del desarrollo territorial (Castillo, 2018, p.15).

Consideramos que estudiar los ejercicios de economía social nos permitirá recuperar su experiencia de impulsar y gestionar organizaciones que privilegien los valores de trabajo asociativo, autónomo, autogestivo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con el fin aprender de los retos y desafíos que han enfrentado en su gestión y también,



para replicar su actuar con otras organizaciones que deseen gestionarse desde la lógica de la Economía Social.

En este sentido, estudiar el grupo de mujeres que integran el Hotel Taselotzin, nos permitirá evidenciar su experiencia de trabajo colectivo con el fin de socializarlo entre otros grupos de mujeres rurales e indígenas que quieran replicar experiencias de trabajo autónomo y autogestivo.

Economía Social y género

Entre los valores reconocidos de la ES, la igualdad de género se inscribe en “la lucha contra toda forma de discriminación y dominación. Especialmente, la subordinación, discriminación y opresión a las mujeres a los niños, jóvenes, adultos mayores, pueblos originarios, pobres, personas con discapacidad debe ser erradicada. Ante esto ¿tiene la ES a ser una propuesta contra-hegemónica que lucha como oposición a las formas de dominación patriarcal? (Oulhaj, 2019: 31)

El cooperativismo y la economía social han sido ejecutados de maneras distintas en cada caso y los resultados también han sido diversos. Desde la perspectiva de género, las empresas de economía social hacen esfuerzos por promover la igualdad de género mejorando las condiciones de acceso y permanencia en el puesto laboral de las mujeres, diversificando los puestos directivos, así como disminuyendo la diferencia y la discriminación salarial (Santero y Castro, 2015). No obstante, el principal cuestionamiento que se realiza a la fecha es si verdaderamente la economía social y las cooperativas han logrado romper o ablandar las estructuras socioculturales regidas por el sistema patriarcal.

“La economía feminista parte de una noción más amplia del ser humano existe una preocupación sistemática para analizar la dimensión del género dentro de los problemas económicos, sociales ambientales y de políticas públicas. Esta economía representó un paso importante al cuestionar los modelos hegemónicos existentes, introduciendo en las discusiones económicas las desigualdades de género como un elemento central” (Aldrete, et. al: 2018 p. 217)

La revaloración que produce el trabajo colectivo frente a la sociedad tiene ventajas más allá que las económicas. Se genera un sentido de pertenencia y respaldo que facilita se identifiquen u se organicen para trabajar de forma colaborativa, revalorando los frutos de su trabajo



Otros beneficios: pertenencia al grupo, lazos de confianza, compartir con otras mujeres sus necesidades, ayuda mutua, así como saberse dueñas de su propio trabajo en beneficio de ellas y sus familias y sus comunidades (Aldrete, 228).

Ante esas premisas conceptuales nos preguntamos: ¿el Hotel Taselotzin está gestionado como una experiencia de economía social? ¿Cuáles son los principales retos que desafían su gestión como empresa de economía social? ¿Cómo se insertan al mercado del turismo indígena? ¿Cómo conviven con otras cooperativas de turismo indígena? ¿Cuáles son sus estrategias de formación a las socias del grupo Taselotzin? ¿Cuáles son sus estrategias de acompañamiento a otros grupos de mujeres indígenas? ¿Cómo enriquecen su gestión con otras organizaciones cooperativas y de economía social?

La organización

Antecedentes

El *Hotel Taselotzin* se encuentra ubicado en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, en específico en la localidad de Cuetzalan del Progreso. Este hotel nació de la iniciativa de la organización de mujeres *Masehual Siuamej Mosenyolchicauani*, (a lo largo de este texto se les denominará como cooperativa Masehual o agrupación de mujeres Masehual, en todos los casos debe entenderse como sinónimos), un nombre náhuatl que en español significa: mujeres indígenas que se apoyan. La construcción de la edificación inició en el año de 1996 y el hotel abrió sus puertas en 1997 con servicio de hospedaje y alimentos. Esta empresa es consecuencia de una serie de actividades económicas que algunas mujeres de las comunidades cercanas a Cuetzalan, llevaron a cabo con la finalidad de contribuir a los ingresos económicos del hogar cuando estos escasearon como resultado del aumento en las precipitaciones pluviales de la zona y, como consecuencia de ello, los campesinos dejaron de sembrar y comercializar sus cosechas, lo cual, a su vez, disminuyó los ingresos de los hogares que históricamente dependían de la producción e intercambio agropecuarios, develando con ello la poca diversificación económica de la región .

Las mujeres de la *Masehual*, antes de abrir el hotel, se capacitaron en temas de hotelería y servicio de alimentos con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Con base en esos primeros insumos identificaron los puestos administrativos y operativos (gerenta general, administradora, cocinera, meseras, ama de llaves, recamarera, jefa de mantenimiento y velador, además de un contador que fue contrato como *outsourcing*).



Después de un poco más de veinte años de operación, la organización de la iniciativa aún es similar a la de sus inicios, pero han crecido en su oferta de servicios. Actualmente el hotel cuenta con habitaciones (diez), albergues (dos), restaurante, servicio de masajes, temazcal tradicional (dos), limpia curativa, recorridos guiados y talleres de idioma náhuatl y demostración a grupos de telar de cintura, pláticas de herbolaria y difusión de la historia de la organización. Además, la iniciativa ha logrado consolidar ciertas acciones sustentables como fosa séptica, trampas de aceite y un área de reserva ecológica (Masehual, 2016; Tapia, González, Barra, 2018). Sin duda, el *Hotel Taselotzin* es a la fecha una empresa de economía social rentable, pero además es un referente para la organización comunitaria y de las mujeres indígenas en el estado. 100 mujeres que componen la organización Masehual Monsenyolchicauani se constituye de manera formal en 1992, sin embargo, desde la década de los ochenta vienen trabajando asociativamente.

En 1995 después de haber trabajado en temas de equidad de género, derechos humanos, alfabetización y de la consolidación del fondo de artesanías, toman la decisión de abrir un proyecto turístico dado el potencial de Cuetzalan, es así como en 1997 abre el hotel Taselotzin es la piedra angular de la organización es el proyecto prioritario, se ha venido consolidando como el espacio de promoción y donde convergen los proyectos de la Masehual.

De las 100 integrantes de Masehual, 45 se asocian para el hotel, no solo se trataba de aportar dinero, sino trabajo a través de las prácticas indígenas comunitarias como el tequio y la faena.

El Hotel Taselotzn es el centro de la organización, ahí se comercializan las artesanías, se reúnen las mujeres para dialogar e impulsar otras actividades que les permitan completar y potenciar sus servicios turísticos como la herbolaria y servicios de temazcal y masajes que ofrecen a los huéspedes. El Hotel Taselotzn es una cooperativa de mujeres indígenas que fomentan un turismo ecológico.

En el 2015 iniciaron con el proyecto Turismo Comunitario que se trata de hospedarse en las comunidades de las socias



Hotel	Artesanías	Herbolaria
Hospedaje	Telar de cintura	Jabones
Restaurante	Bordado a mano	Productos de herbolaria
Turismo Comunitario	Cestería de jonote	Temazcal en el hotel
	Otros.	Masajes en el hotel

Gama de productos

El órgano máximo de la Masehual es la Asamblea y se reúne cada año, en esta asamblea se eligen a 6 representantes del consejo de administración, una por cada comunidad y también ahí se eligen a las responsables de cada proyecto (hotel, artesanías, herbolaria). El consejo de administración sesiona cada vez y observa el curso de la planeación anual votado en la Asamblea. También, están los Comités Comunitarios donde se estructura la base social de manera continua y dinámica. Hay un comité por cada comunidad de origen de las socias Masehual: Tzicuilan, Tzinacapan, Pepexta, Xiloxochico, Chihueyaco, Cuahtamazaco. Estos comités se reúnen de manera constante para discutir temas organizativos y productivos, siendo el canal permanente de comunicación e información ante el Consejo de Administración. Las 45 socias del hotel se reúnen cada dos meses

Redes

Corazón Verde en donde comercializan

Flor de Mayo (Juanita Chepe, entrevista julio, 2, 2019).

Red Indígena de Turismo de México (RITA) de donde son fundadoras. Federación indígena empresarial y comunidades locales de México A.C. (CIELO)

Huitziki Tijit (camino del colibrí) red estatal de empresas comunitarias Nahuas y Totonacas de donde son fundadoras.

Además del impacto económico generado en las socias de Masehual, impulsan distintos proyectos que trabajen en educación ambiental, derechos humanos, equidad de género, y participan activamente en la planeación territorial.



Juanita Chepe quien es la Gerente General del hotel Taselotzin menciona que los valores comunitarios que observa se ponen en juego en la organización y operación del hotel son la mano vuelta y las faenas. También, señaló que los retos que observa que tiene la organización son: la responsabilidad del trabajo organizado y la puntualidad en el trabajo. Señala que lo que las distingue es que son mujeres de comunidades indígenas que utilizan su lengua, su cultura y su traje típico como servicio.

Además del impacto generado a las 100 integrantes de la Masehual por la venta de las artesanías y a las 45 socias del hotel Taselotzin, Masehual cada año beneficia a sus socias

con apoyos en especie según las necesidades, por ejemplo: materiales para artesanía, materiales para construcción para las socias de hotel, cada una decide en qué lo utilizará, y anteriormente se daban despensas a las socias.

Por su parte la Sra. Rufina, administradora del hotel señala que el valor de estar organizadas es que resuelven sus necesidades de manera colectiva y el trabajo que tienen en la organización y el hotel les permite vivir dignamente cuidando la naturaleza, como valor de su forma de vida indígena.

En el caso del Hotel Taselotzin, observamos que las socias se hacen cargo de todas las actividades del hotel, a excepción del trabajo de vigilancia nocturna y jardinería. Las socias del hotel Taselotzin llevan a cabo las actividades de gerencia y administración del hotel, toman las decisiones financieras, toman el conjunto de decisiones en torno a los excedentes del hotel, los proyectos a invertir, las alianzas que generar, los proyectos a impulsar, las capacitaciones a recibir, además de hacerse cargo de las actividades cotidianas del hotel y del restaurante. Observamos entonces que las socias del Hotel Taselotzin al hacerse cargo del conjunto de actividades y decisiones de la organización, incluidas las financieras, toman el control del curso de su organización cooperativa y también, a lo largo del tiempo y de las experiencias vividas, se saben fuertes y capaces de ejecutar estas acciones, aliándose con más mujeres que les permite aprender y enseñar formas de hacer organización.

En su vida cotidiana la organización repercute en saberse acompañadas en la resolución de necesidades sociales y económicas, por ejemplo, a lo largo del tiempo han tenido ingresos que les han permitido completar sus ingresos familiares, han podido enviar a sus hijos a la escuela, comprar medicinas cuando se han enfermado, es decir,



el ingreso generado por su trabajo en la organización les ha permitido reconocerse como mujeres trabajadoras y también capaces de resolver sus necesidades económicas y sociales.

También, observamos en las mujeres al interior de las organizaciones de economía social y solidaria que se hace cargo del trabajo productivo, del trabajo de cuidado o reproductivo y del trabajo comunitario (escuela, barrio, colonia, comunidad), por lo cual, la economía

social de acuerdo a sus principios y valores que promueven la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como promover condiciones de equidad entre los distintos grupos sociales, abre oportunidades y desafíos para transitar de las actividades históricamente destinadas a las mujeres a ejercer roles y actividades que les habían sido negadas por su condición de mujeres, por ejemplo: el trabajar fuera de casa, tener un salario, hacerse cargo de sus decisiones financieras, tomar decisiones económicas, financieras y productivas de las actividades de la organización, para algunas aprender a leer y escribir, aprender a hablar públicamente, externar sus ideas y que se les escuche y respete, que ellas mismas valoren su propia voz, conocimiento y trabajo.

A manera de conclusión

Como resultados de esta primera etapa de investigación observamos que, en el caso del Hotel Taselotzin como en otros proyectos liderados por mujeres, éstas al ser reconocidas como agentes económicos, comienzan a ocupar un lugar determinante dentro del territorio y conquistando con ello un mayor reconocimiento social y comunitario.

En este sentido, si las prácticas de la economía social se plantean como alternativas al sistema hegemónico tendrán que transformar las desigualdades entre hombres y mujeres en el sentido de eliminar la subordinación/dominación que es parte del sistema capitalista/patriarcal. Es decir, si la ES es la economía que pone en el centro a las personas, es prioritario reconocer si lo es (o no) de forma igualitaria para hombres y mujeres, es decir, si se posiciona en una franca crítica a este sistema de dominación e intenta día a día en construir posiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Finalmente, consideramos que para poder avanzar en la consolidación de la economía social como una economía en para y por las personas en igualdad, es necesario que la ES sea feminista, es decir, que no solo visibilice las diferencias y las desigualdades que



generan las relaciones de poder, sino que también se proponga transformarlas y trace un camino para hacerlo.

Fuentes de información

Entrevistas realizadas en el recorrido de campo del 1 al 4 de julio de 2019.

Aldrete, Paola; Pavovi, Patricia; Robles, Josefina “La mujer y la construcción del bien común” en Albornoz-Arias y Mazuera-Arias (Edits.) Mujer, emprendimiento y empleabilidad: una mirada interdisciplinaria. Barranquilla. Ediciones Simón Bolívar.

Castillo Romero, Nadia E. (2016) “El Proyecto Mesoamérica y los movimientos de Economía Social” en González Arana Roberto y Alejandro Schneider (coords.) Movimientos Sociales en América Latina en el Siglo XX. CLACSO. Buenos Aires.

Oulhaj, Leïla (2013) “Breve revisión conceptual del tercer sector” en Oulhaj, Leïla y Francisco Saucedo Pérez (coords.) Miradas de la economía social y solidaria en México Universidad Iberoamericana Puebla. Puebla.



Crisis y disolución de la identidad cultural en las comunidades campesinas. Caso CC San Mateo de Penachí. Distrito de Salas. Región Lambayeque. 2019

Carlos Ravines Zapatel

Resumen

"La necesidad de estar juntos y de ser recíprocos en su existencialidad material (Mingas y Faenas), han tenido su expresión espiritual en una sólida identidad cultural como es una historia compartida, lengua, danzas, vestimenta, creencias religiosas, alimentación, rituales varios, etc.

La aparición y desarrollo invasivo de las actividades mercantiles en un contexto neo liberal y Globalizado han traído como consecuencia el acelerado debilitamiento de este ensamblaje Material y, en consecuencia, del espíritu comunitario que caracteriza la Identidad Cultural de un Pueblo.

Situación que se ha generado y acrecentado a partir de la presencia y predominancia de relaciones mercantiles en un modelo neo liberal y globalizado que administra un Estado ajeno a la problemática de las familias campesinas.

La creciente vocación productiva para el mercado traído como consecuencia un doble y simbiótico proceso de empobrecimiento: 1.- Empobrecimiento de la tierra. Toda vez que la producción para la venta (mercantil, que ha ido reemplazando paulatinamente al autoconsumo) logra ingresos monetarios que lo consume el productor y su familia, sin embargo no le queda recursos dinerarios para realimentar a la tierra de los nutrientes que le han sido consumidos por los productos cosechados y, 2.- El Empobrecimiento de las Familias, toda vez que la menor productividad (por empobrecimiento de la tierra) sostiene, cada vez, a menor número de personas, quienes se ven obligadas a emigrar, temporal o definitivamente, a otros espacios (principalmente urbanos)

La agricultura se está convirtiendo de ser la actividad Principal de las familias a ser una actividad complementaria."

Palabras clave

Comunidad campesina, identidad natural, existencialidad material, empobrecimiento, agricultura



Ubicación y límites

La CC San Mateo de Penachí se encuentra ubicada en la parte extremo Este del distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. Abarca aproximadamente 10,000 has de las cuales 3,500 has son de uso agropecuario. Cuenta con siete Centros Poblados, dos de ellos en proceso de conformar una comunidad aparte desde hace más de dos décadas; Si territorio va desde los 600 hasta 4,000 msnm.

Antecedentes de la identidad cultural de las comunidades quechuas de Lambayeque

La Identidad Cultural de éstas Comunidades se han configurado a través de los últimos, aproximadamente, 650 años de permanencia y convivencia en el espacio territorial que actualmente habitan; Lo explicación más probable de su llegada a estos parajes del Norte Peruano es que arribaron bajo la dirección de Tupac Yupanqui, un joven noble Inca (hijo del Inca Pachacutec) que en su multitudinario desplazamiento conquistador desde la Ciudad Imperial del Cuzco hacia Cuenca (Ecuador) habría ido “sembrando” asentamientos humanos quechuas , tal vez en condición de mitimaes, no solo en la actualmente reconocida CC Penachí, sino que esta práctica se dio de manera simultánea en las vecinas comunidades de Inkahuasi y Cañarís, las mismas que en su conjunto ocupan un territorio dekm2 equivalente al de No está demás señalar que existe una teoría de que los quechuas de estas tierras habrían venido de la zona de Cuenca (Ecuador) sin embargo, considero poco probable este desplazamiento toda vez que el recorrido quechua ha tenido que ser de Sur a Norte; Sin embargo, forzando una conciliación con éste planteamiento, podría haber ocurrido que después de la llegada de Tupac Yupanqui a Cuenca y en donde asentó población quechua (mitimaes), pasados unos años un grupo de éstos fue trasladado hacia el Sur de este lugar, entre estos destinos estuvo Penachí y Cañarís en donde existe referencias de esta migración; Cabe anotar de que entre el arribo quechua a la zona de Quito y Cuenca (Ecuador) fue aproximadamente en los años 1465 en tanto que el arribo de los españoles a América fue en 1492 y a Perú 1532; Es decir que los asentamientos hacia los espacios mencionados se habrían dado en un período de 70 años, lo cual debilita la teoría de que los quechuas de Penachí hayan sido nativos de Cuenca (Ecuador) y menos aún que hayan sido desplazamientos voluntarios, tienen que haber sido ordenados por el Imperio Inka, absolutamente vigente en esos momentos.



Esta Población etnolingüística cuando arribaron y se establecieron en estos nuevos espacios territoriales ya se encontraban constituidas en una sólida Identidad Cultural: Con una misma historia, una misma lengua, similares procedencias, mismo liderazgo Imperial (Inka), compartían formas colectivas de trabajo, religión y ritos sociales; Y, sobre todo, mismo destino (El de ejercer el papel de Mitimaes). A ello se le suma el hecho de que, en su condición de invasores (conquistadores) requerían necesariamente el estar unidos a fin de poder enfrentar a los pueblos nativos invadidos o conquistados, toda vez que como es natural debe de haber habido resistencias a los invasores o conquistadores. De los pueblos nativos pre quechuas solo se encuentran vestigios como pinturas rupestres y petroglifos en diferentes partes de este territorio.

La territorialidad que mantienen estas poblaciones, ahora quechuas, constituyen espacios geográficos de difícil acceso, marcadamente accidentadas y altamente exigente para el desarrollo de las actividades agropecuarias, estas características deben de haber determinado el desinterés de los conquistadores españoles y que, a la vez, deben de haber facilitado la condición de aislamiento en relación al resto de la Sociedad en que, hasta la fecha, se encuentran estas comunidades.

Con la caída del Imperio Inca desaparece un factor fundamental de cohesión e Identidad del grupo quechua, que daba unidad política y orden económico, social y militar a los invasores. Se asume que se inicia una etapa de carencia de Unidad Política de los grupos quechuas dispersos (en condición de mitimaes) en todo el territorio Imperial Inca; Iniciándose una etapa de autonomía de cada uno de estos grupos o comunidadesde aglutinamiento y orden....., y por la evidencia que se tiene hasta ahora, asentados en espacios aislados y accidentados de la sierra norte del Perú.

Con la ausencia del liderazgo político Inca los factores materiales o básicos de cohesión comunal e Identidad Cultural se van a reducir a su condición natural o primigenia de Identidad Cultural: En lo Económico: Aseguramiento de su existencia o subsistencia con el trabajo productivo familiar y comunal (Mingas y Faenas); En lo Social Cultural; Reproducción de vestimenta, ritos, creencias y costumbres; En lo Político: Organización Comunal con liderazgos para tareas de relaciones interinstitucionales, defensa frente a otros grupos o factores perturbadores.

Con el establecimiento de la dominación española o virreinato no se modificó de manera sustantiva la naturaleza material ni las expresiones subjetivas de Identidad Cultural de estas comunidades; Además de las expropiaciones forzadas de parte del



territorio comunal (caso, Penachí, Inkahuasi y Cañaris) y la incorporación religiosa católica, de “manera pacífica”, en el imaginario campesino, no se cuenta con otras significativas intromisiones que hayan afectado el espíritu de Identidad.

Hasta esta parte se puede decir que desde hace, aproximadamente, 587 años en que llegaron los conquistadores españoles y desplazaron a los conquistadores incas, la Identidad Cultural históricamente configurada de CC San Mateo de Penachí se ha sustentado en una agricultura familiar y colectivista, que ha generado y sostenido una sólida convivencia y espíritu comunitario.

Durante todo este tiempo la Identidad Cultural de las comunidades sustentadas en el trabajo familiar y comunal, el quechua como lengua común y hablada en su cotidianidad han tenido sus expresiones en la unidad de creencias religiosas, cosmovisión del mundo y la naturaleza; Vestimenta, danzas, comidas, corte de pelo, rapto de la mujer, arreglo, pedida de mano, matrimonio, corte de pelo, etc., etc... Con bastante similitud entre las comunidades vecinas de Cañaris, Penachí e Inkahuasi, pero con particularidades en cada una de ellas.

En la época de dominancia del Latifundio, las comunidades campesinas quechuas estaban caracterizadas por su confinamiento territorial, por ser una economía básicamente de autoconsumo, de difícil acceso al mercado, con limitadas o inexistentes vías de comunicación y la total inexistencia de políticas de Estado orientadas a desarrollarlas. Característica Geoeconómica que ha sido condición básica para la persistencia una Identidad Cultural sólida.

Esta condición material de aislamiento e Identidad Cultural se ha presentado con claridad hasta fines de los años 1960 e inicio de los 70, cuando se implementa la Reforma Agraria en la que se liquidan los latifundios, se entrega las tierras a los campesinos, otrora siervos, se desarrolla el mercado interno en el país y con ello se desarrolla de manera acelerada el mercado para las producciones agropecuarias y para la mano de obra asalariada de estos campesinos; Afectando en esta tendencia a las Economías Campesinas en espacios comunales y no comunales.

Este nuevo proceso que inaugura un replanteamiento del sistema económico vigente en el país, va a afectar de manera paulatina los factores materiales y las expresiones inmateriales de la Identidad Cultural de las Comunidades; Lo cual es absolutamente natural y dialéctico en la evolución de toda sociedad.



La identidad cultural del pueblo de Penachí

En el caso de la CC San Mateo de Penachí se inicia un lento proceso de cambio en algunas expresiones de su Identidad, siendo el más significativo la sustitución definitiva del quechua por el castellano como lengua cotidiana entre sus habitantes, sobre todo en las partes más bajas de la comunidad, en tanto que en las partes altas aún se utiliza la lengua nativa entre sus habitantes, en tanto que el castellano con gente de otro lugar (lo cual hace que la totalidad de su población de las partes altas sea bilingüe). Las prendas de vestir han cambiado cualitativamente en el caso de los hombres (los cuales han cambiado los llanques por zapatillas u otros, los pantalones de lana y camisas por prendas de vestir de procedencia industrial, en tanto que gran parte de las mujeres, sobre todo mayores, conservan la mayor parte de prendas tradicionales (sin embargo las mujeres más jóvenes, en su gran mayoría y a partir de la última década, se visten mayormente con prendas no típicas). La música cotidiana escuchada a través de los medios de comunicación esta combinada con melodías de otros géneros y modernas. Los Jóvenes son la expresión más radical de la sustitución de la melodía nativa; etc...

A pesar de estos cambios en las expresiones de la subjetividad de su Identidad estos se han mantenido a un ritmo moderado de modificaciones hasta, aproximadamente, fines de los años 2010, a partir de los cuales se aprecia un acelerado cambio de los elementos sustantivos de Identidad Cultural como consecuencia de la consolidación de una política económica neo liberal y globalizadora que actualmente rige los destino de la Sociedad.

La necesidad de estar juntos y de ser recíprocos en su existencialidad material a través de las Mingas y Faenas para trabajar la tierra , cosechar, construir casas y edificaciones comunes, construir y mantener acequias y caminos, principalmente (relaciones reproducidas a través de una historia centenaria compartida e interactuada y transmitida a las generaciones sucesivas) , han tenido su expresión espiritual en una sólida identidad cultural expresada en su compartir de las mismas danzas, vestimentas, creencias religiosas, alimentación, rituales varios, etc.

Durante cientos de años la vocación productiva ha sido, básicamente para el autoconsumo; Sus niveles tecnológicos marcadamente tradicionales, el aislamiento geográfico que los ha alejado de los espacios urbanos y rurales más poblados y tecnificados y con ello de la demanda de productos agropecuarios que habría permitido estimular una producción mercantil, han reproducido condiciones de vida sumamente precarias, con notables niveles de pobreza y extrema pobreza expresadas en marcadas



insatisfacciones de sus necesidades de bienes y servicios (alimentación, salud, vivienda, educación.....) y sin actividades complementarias como es el trabajo asalariado (no al interior de su comunidad, puesto que no existía) sino en espacios externos de costa principalmente), lo cual ha mantenido como una característica endémica la desnutrición, anemia y enfermedades como la utha,.....; otra de las manifestaciones de esta precariedad ha sido la entrega de niños a familias de la costa con la finalidad que los críen, sin embargo en muchos casos estos terminaron haciendo papel de sirvientes domésticos de éstas familias

Es a partir de la década de los setenta, ya desaparecidos los latifundios en los espacios vecinos a la Comunidad (que a la vez constituían tierras de tránsito a la costa), en que la construcción de vías de comunicación hacia espacios comunales hace que la accesibilidad a la costa sea más factible y frecuente; Simultáneamente se aprecia un acelerado crecimiento demográfico de las ciudades y centros urbanos de menor jerarquía. Estas nuevas condiciones promueven que estas unidades económicas campesinas inicien o incrementen notablemente la vocación productiva hacia este mercado en crecimiento, así como que la venta eventual de su fuerza de trabajo a cambio de un salario se convierte en una excelente fuente de ingresos complementaria. Es en estas nuevas circunstancias en que se aprecia con claridad que la venta de productos agropecuarios excedentes (después de satisfacer el autoconsumo) y la mano de obra asalariada pasan a constituir ingresos familiares complementarios (toda vez que la producción para el autoconsumo continúa siendo la fuente principal de ingresos)

Es a partir de estas nuevas circunstancias que las familias reducen notablemente (hasta convertirse en casos excepcionales) la entrega de sus hijos a las familias de la costa a fin de que los críen, etc...

El desarrollo mercantil paulatino y sostenido impacta las formas de vida de estos espacios. A las producciones destinadas al autoconsumo se le suman, cada vez con más frecuencia y volumen, las producciones destinadas a la venta (café, caña para yonque, maíz, frutas,....); de igual manera al trabajo que el campesino realiza en su parcela se le suma el trabajo asalariado que eventualmente realiza en otros espacios principalmente rurales, sobre todo en la costa; de tal manera que la obtención de dinero por la venta de sus productos y/o el trabajo asalariado promueven el reemplazo de algunos productos nativos como las prendas de vestir, calzado, alimentos (arroz, fideos, etc.) y a la vez promueven la mejor satisfacción de necesidades como educación, (regular y superior), Salud,.....; Estas nuevas y/o mejores satisfacciones estimulan que



los campesinos recurran, cada vez más, a producir para vender y recurrir a la venta de su fuerza de trabajo como jornaleros o peones agrícolas (principalmente) y otras actividades complementarias a las labores en su parcela, como una forma de obtener ingresos complementarios para el mantenimiento de sus familias

Con estos vientos mercantiles a babor se han ido reproduciendo las economías campesinas, en sus trabajos familiares, comunales y solidos espíritu de Identidad Cultural

Cabe aclarar que las poblaciones que han sido expuestas a un más frecuente y mayor impacto en estas modificaciones son aquellas que se encuentran con mayor interrelación con los mercados, por lo general aquellos espacios por donde pasan las carreteras o se encuentran más próximos a ellas, las cuales conforme han ido avanzando van estimulando estos cambios.

Sin embargo, todo tiene un límite.....

Estas modificaciones de la lógica económica campesina que se han ido sumando a través de los años, han ido arribando a un punto en su existencialidad que las han puesto en una severa disyuntiva: Mutar o Perecer

Crisis de la identidad

Las políticas neoliberales que han significado ignorar la problemática de las economías campesinas (marginales económica, social y políticamente en la sociedad) han tenido como consecuencia

El desarrollo invasivo de las actividades mercantiles a partir de los años 1990, en un contexto Neo liberal y Globalizado, han traído como consecuencia la dedicación cada vez mayoritaria a las de obra asalariada fuera del ámbito comunal; En creciente perjuicio de la producción de autoconsumo actividades complementarias a la agricultura doméstica: La producción agraria mercantil y la venta de mano y del trabajo familiar y/o comunal como práctica sostenida de las Unidades Económicas Campesinas; Lo cual equivale al debilitamiento de este ensamblaje material y, en consecuencia, del Espíritu Comunitario que caracteriza la Identidad Cultural de un Pueblo Campesino

Situación que se ha generado y acrecentado a partir de la presencia y predominancia de relaciones mercantiles en un Modelo Neo Liberal y Globalizado que administra un



Estado ajeno a la problemática de las familias campesinas que siembran, cosechan y venden lo que puedan u como puedan;

Lo que en un Mercado Globalizado significa “competir en igualdad de condiciones” con los productores del Perú y el Mundo, es decir: **imposible**; Ni por tecnología, ni por financiamiento, ni por subsidios , ni por costos ni precios, etc.; Con Estados protectores de la Gran Empresa Agroindustrial, por Estados que subsidian a sus productores agropecuarios como EEUU, etc., es imposible que las pequeñas unidades económicas campesinas compitan, más aún se encuentran atravesando situaciones que las están conduciendo a mutar o perecer.

Factores que determinan el deterioro de la identidad comunal

Este desgaste de la tradicionalidad productiva se lleva a cabo en una endémica situación de pobreza y extrema pobreza de sus pobladores, toda vez que, en el transcurso de todo este período (hasta la actualidad) si bien se han agregado o incrementado los ingresos dinerarios (por la creciente vocación productiva y laboral para el mercado), sin embargo y por lo general, no han tenido un efecto sustantivo en el nivel de vida de la población debido a que este proceso genera y reproduce inevitablemente un doble y simbiótico proceso de empobrecimiento:

1. El Empobrecimiento de la tierra
2. El Empobrecimiento de las Familias

Empobrecimiento de la tierra

En este proceso se aprecian dos momentos:

1. En un primer momento, cuando las parcelas familiares eran de mayor extensión y la producción era principalmente para el autoconsumo, la retroalimentación del suelo se llevaba a cabo de manera natural (recuperaba nutrientes con desechos de las mismas plantas y, en excepcionales casos, las excretas del ganado que poseían), toda vez que se producía lo necesario para la subsistencia familiar y no se le sobre explotaba, adicionalmente, para la venta.
2. En un segundo momento hasta la actualidad, se aprecia la reducción del tamaño de la parcela por familia (por herencia, toda vez que el territorio comunal agrícola tiene un límite frente al crecimiento demográfico) y se produce de manera creciente la producción para la venta (o mercantil, que ha ido



reemplazando paulatinamente al autoconsumo). El productor campesino va a sobre explotar la tierra, logrando ingresos monetarios que ya se han convertido en necesarios e indispensables para su subsistencia por lo que son requeridos y totalmente consumidos por él y su familia; En consecuencia ya no le quedan recursos dinerarios para comprar y realimentar la tierra con los nutrientes que le han sido extraídos por los productos cosechados y vendidos. Teniendo en consideración de que ésta devolución no ha sucedido a través de décadas de producción agraria para la venta, lo que se ha provocado en los últimos años es la desnutrición o degradación de la tierra por lo que han disminuido considerablemente los rendimientos o productividad de todas sus producciones, sobre todo de las destinadas a la venta como del café, caña para aguardiente y frutas; Así como que en las últimas décadas haya desaparecido (por enfermedad y degradación de la tierra) la producción de Chirimoya, granadilla y, en camino, la naranja y la lima, entre lo más destacado.

El Empobrecimiento de las Familias

Ocasionado por la disminución sostenida de sus ingresos, tanto en productos (disminución de la producción para el autoconsumo) como en dinero (por la venta de parte de su producción, el intercambio desigual y la reducción del salario real)

Por la menor producción destinada al autoconsumo, ocasionada por la disminución de la productividad

1. Por la menor producción destinada a la venta. La menor productividad ocasiona la disminución de ingresos por vender menos cantidad
2. Por el Intercambio Desigual entre el campo y la ciudad, evidenciada en un proceso inflacionario que de manera sostenida se viene dando a través de todos los años donde la evolución de precios de los productos agropecuarios se elevan a menor velocidad de los precios de los productos procedentes de la ciudad o industriales (alimentos, medicinas, artefactos, abonos.....), en marcado perjuicio de los productores del campo; Y,
3. Por La pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios reales que estos campesinos reciben ocasionalmente, toda vez que estas remuneraciones están sujetas al proceso inflacionario caracterizado por una elevación de los precios de los productos de consumo de la población a niveles muy superiores al aumento del monto de los salarios nominales; Tendencia reforzada por la



presión hacia la baja que ejerce los niveles de desocupación, cada vez más creciente, que se aprecia en todas las actividades económicas de la sociedad.

En todos los casos los ingresos reales de las familias campesinas se ven reducidos. Este doble empobrecimiento expresa una cadena de correspondencias a partir del tamaño de la parcela campesina y la calidad de la tierra.

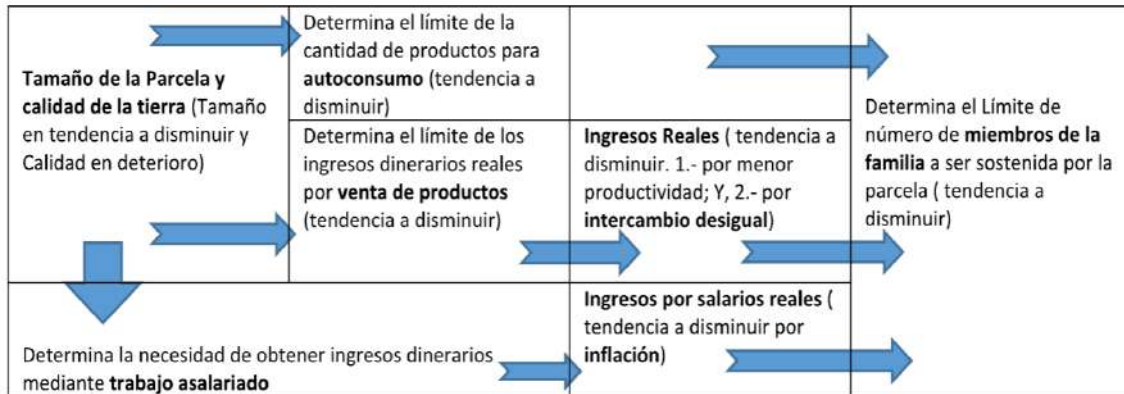


Gráfico 1. Correspondencia y tendencia entre el tamaño y calidad de la parcela con el número de miembros de la familia campesina

Con las tendencias de reducción de la parcela familiar y la degradación de los suelos cuyas consecuencias son el doble empobrecimiento: si bien se continúa produciendo para el autoconsumo, este destino ha sido notablemente perjudicado, al haber disminuido su producción (por menor productividad); A lo cual se le agrega los ingresos dinerarios en constante disminución por venta de sus productos en cada vez menor volumen (por menor productividad) y por el Intercambio desigual con productos de otras actividades económicas, sobre todo de procedencia industrial; Y, la disminución sostenida del Salario Real procedente de sus labores como jornalero agrícola fuera de su parcela (principalmente en la costa). Situación que ha determinado que el límite de miembros de una familia a sostenerse de su parcela se ha visto reducida (lo que equivale a que esta zona campesina va a sostener a menos población); provocando que la población sobrante arrastre a todos los miembros de su familia a una cada vez mayor pobreza o a que tenga que recurrir al trabajo asalariado eventual o a emigrar en forma definitiva a otros espacios, tal y como está sucediendo.

Debilitamiento y mutación del soporte material de la identidad

El persistente empobrecimiento de la tierra y de la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero obtenido por la venta de productos y de su fuerza de trabajo han



continuado reproduciendo y acentuado las condiciones de pobreza y extrema pobreza históricamente instaladas en la zona, por lo que en las últimas dos décadas (aproximadamente), las familias campesinas se han visto más presionadas para mantener sus niveles de vida; por lo que en este esfuerzo se han debilitado hasta hacer evidente la pérdida de identidad; des identidad diferenciada en sus dimensiones por grupos que van desde su debilitamiento hasta una identidad ligera o de ejercicio eventual.

Son tres los procesos básicos que están definiendo las modificaciones esenciales en la materialidad de la Identidad:

1. La disminución del trabajo familiar y significativa disminución del trabajo en Minga para la actividad agrícola, expresada en tres significativos procesos: a.- Incremento del trabajo individual en la parcela; b.- Incremento del trabajo asalariado en la parcela propia; Y, c.- Incremento de trabajo asalariado entre comuneros
 - a) Incremento del trabajo Individual en la parcela familiar (por lo general solo del jefe de familia y/o esposa) debido a que en muchos casos son suficientes para la atención de la parcela, motivado por la reducción significativa del tamaño de la parcela ocasionada por las sucesivas herencias generacionales; así como por la ausencia de adolescentes y jóvenes del núcleo familiar (por emigración)
 - b) El incremento del uso de trabajo asalariado para las actividades agrícolas en las parcelas propias

Simultáneamente a la emigración definitiva de la gran mayoría de jóvenes integrantes de las familias, por lo que omiten su participación en el quehacer productivo familiar, se está produciendo una paulatina disminución (y en algunas tareas desaparición) del trabajo en Minga lo cual ha traído como consecuencia de que ésta sea sustituida por mano de obra asalariada. Esto sucede en el caso, por ejemplo, de la cosecha de maíz, toda vez que con el transcurso del tiempo y avance del mercantilismo, ahora resulta ser más beneficioso para el propietario de la parcela cosechada, pagar a jornaleros un monto dinerario por su trabajo antes que invitar a los amigos o familiares en estas tareas, toda vez que al finalizar la minga es de costumbre obsequiarles parte de la cosecha, lo cual resulta ser más oneroso que contratarlos para este trabajo a cambio de



dinero. En la cosecha del café, en la cual ya no es suficiente la mano de obra del propietario con su familia, ahora éste tiene que contratar jornaleros asalariados, etc...

- c) El incremento del trabajo asalariado, entre comuneros, como ingreso complementario

No es alentador para los agricultores campesinos ofrecer su trabajo en condición de minga (o préstamo de trabajo a cambio de una futura devolución, también en trabajo); Tal y como ahora se desenvuelven las relaciones mercantiles y las dificultades de sobrevivencia, más alentador y estimulante es trabajar por un salario: debido a que la disposición dineraria, que omite compromisos a futuro por contraprestaciones de mano de obra, le permite una decisión autónoma y priorizada sobre el objeto del gasto que puede hacer (con el dinero procedente del salario) a fin de satisfacer sus necesidades

Disminución de las labores en Faenas

La presencia de los trabajos comunales para beneficio de la población se han visto disminuidos, toda vez que los requerimientos de mano de obra para el arreglo o construcción de caminos “principales”, ahora carreteras vehiculares y otros trabajos de infraestructura y equipamiento se realizan bajo la dirección y financiamiento de la Municipalidad del Distrito de Salas, la Municipalidad Provincial o el Gobierno Regional de Lambayeque, por lo que el personal que participa en estos trabajos es debidamente remunerado, prescindiendo de la participación en la decisión y fiscalización de las organizaciones comunales. Promoviendo el debilitamiento del aparato organizativo tradicional de la comunidad y, con ello, el aparato social organizado como soporte básico de la Identidad Comunal.

La conversión de la actividad agrícola: De ser la principal fuente de ingresos de las familias a ser una actividad de ingresos complementarios

Las labores asalariadas o independientes (en otras actividades económicas como comercio, servicios, etc.) se están constituyendo en las más importantes fuentes de ingreso familiar; Tan fuerte es este impacto que, en muchos casos, familias enteras han emigrado y residen, principalmente, en centros poblados urbanos mayormente de la costa; solo algunos de sus miembros regresan, eventualmente, a su lugar de origen por unos días o semanas al año, y (principalmente, sino únicamente) en temporadas de siembra y cosecha.



De la descampesinización a la desruralización

El desarrollo capitalista convencional en el Campo, como el ocurrido en EEUU y Europa trajo como consecuencia un proceso de descampesinización que dio lugar a que un grupo minoritario de campesinos se convirtieron en empresarios capitalistas en tanto que la mayoría en obreros asalariados al servicio de los primeros.

En el caso de sociedades como las nuestras caracterizada por un desarrollo desigual, tanto en su base económica como es su estructura social y superestructura, el proceso de descampesinización tiene formas sucesivas y coexistentes de diversos niveles: a) Los menos mantienen su esencia campesina, básicamente con el trabajo familiar y mingas; b) Otros se convierten en más trabajadores asalariados o independientes que campesinos; Y, finalmente otros se convierten en no campesinos.

Esta sumatoria de procesos está conduciendo a un cambio sustantivo de la esencia comunitaria campesina de estas poblaciones, está trayendo como consecuencia una doble mutación: La Descampesinización y la Desruralización de la comunidad

La descampesinización

Consistente en que estos trabajadores están perdiendo su naturaleza campesina, es decir trabajadores únicos y exclusivos en su parcela, a través de los siguientes procesos:

- a) El campesino eventualmente en asalariado, equivalente en ser campesino-obrero, es decir que, en su condición de campesino en su parcela, labora en la condición de asalariado en otras parcelas o se traslada temporalmente a otros espacios sobre todo de la costa (Los campesinos se diferencian entre en que algunos le dedican mayor tiempo que otros a este trabajo asalariado);
- b) El campesino comparte, de manera frecuente o en forma permanente, ésta condición con labores en otras actividades económicas;
- c) El campesino deja de ser principalmente campesino al dedicar el mayor tiempo laboral a trabajos como asalariado o a desempeñar labores independientes como en comercio, servicios, etc., en otros espacios principalmente de la costa
- d) El campesino se retira definitivamente de la parcela, apreciándose dos tipos de estos casos:



- Aquellos que conservan su parcela en su lugar de origen a la cual retornan, en algunas ocasiones, desde donde trabajan y viven (principalmente desde las ciudades de la costa), sobre todo en épocas de siembra y cosecha; Y,
 - Aquellos que se van definitivamente porque no tienen parcela (no heredaron; O, si la han tenido la cedieron o la han vendido)
- e) Los hijos de los campesinos que salieron de las tierras comunales por estudio o trabajo, los cuales ahora se desenvuelven en otras actividades económicas, ya no son ni quieren ser campesinos

La desruralización




Como consecuencia de estos procesos sucesivos, no pocas veces simultáneos, se está desencadenando un sólido proceso de DESRURALIZACIÓN equivalente al despoblamiento del campo.

Quedándose en estos espacios solo el número suficiente de miembros de una familia que sería capaz de sobrevivir con lo que produce su pequeña y poca productiva parcela, los restantes se retiran de la zona.

No se contraponen el hecho de que pese a apreciarse numerosos casos de familias nucleares que se trasladan de manera definitiva a vivir a otros espacios, los jefes de familia retornan eventualmente, pero solo en épocas de siembra y cosecha, excepcionalmente a otros quehaceres.

Cabe destacar que si bien algunas familias han atravesado por todas estas etapas, desde su descampesinización hasta emigrar a vivir a otros lugares (mayormente a ciudades de la costa), otras familias se encuentran en cualquiera de estos momentos aunque reproduciendo la dinámica de pobreza, descampesinización y desruralización. Las etapas de éste doble proceso se aprecia en forma estructural y gráfica de la siguiente manera:



1ra Etapa	2da Etapa	3ra Etapa	4ta Etapa
<p>Las Familias Campesinas viven y producen en su parcela</p> <p>(Economía Campesina Típica)</p>	<p>Viven y Producen en su parcela: El trabajo asalariado es ingreso complementario a la economía campesina</p> <p>(Economía Campesina más trabajo asalariado)</p>	<p>Viven principalmente en ciudades de Costa. El trabajo asalariado y/o independiente es la principal fuente de sustento, la parcela es un ingreso complementario</p> <p>(No Campesino)</p>	<p>No viven en zona campesina, no son campesinos. El trabajo asalariado y/o independiente en espacios extra comunales (principalmente de Costa son las únicas fuentes de ingreso.</p> <p>(No Campesino)</p>
<p>Producción: Autoconsumo</p>  <p>Trabajo: Familiar Milngas, Faenas</p>			
<p>Producción: Autoconsumo y</p> <p>Trabajo: Familiar y asalariado</p>	<p>Mercado</p> <p>Trabajo asalariado</p>		
<p>Producción:</p>		<p>Mercado</p>  <p>Trabajo: Asalariado y/o independiente</p>	
			 <p>Trabajo asalariado y/o independiente</p>

 = Vivienda


 = Parcela

Grafico 2. Proceso de descampesinización-desruralización
Etapas sucesivas - simultáneas

Migración - Identidad cultural - Individualización

La dinámica de este proceso de Descampesinización y Desruralización se produce de manera simultánea un doble proceso migratorio: Intercomunal y Extracomunal que afecta la Identidad Comunal y, como contraparte, genera la Individualización.



Migración Intercomunal. Constituye la resistencia de las economías campesinas por mantenerse como tales; Está evidenciada en los frecuentes procesos migratorios (eventuales y/o permanentes) entre los caseríos de la misma comunidad o con las comunidades vecinas (Inkahuasi y Cañaris) motivados por los arreglos matrimoniales, compadrazgos, festividades, etc..., los cuales constituyen factores de refuerzo en la reproducción de la Identidad Cultural, toda vez que son poblaciones que tienen **arraigo territorial** y, en su existencialidad, se sostiene en una lógica económica social y cultural campesina

Migración Extra comunal. Conformada por la población (individuos y/o familias) que han dejado de ser campesinos y han emigrado a otros espacios, principalmente a ciudades de la costa; Se pueden distinguir dos grupos:

- a) El primer grupo conformado por la población que ha emigrado en los últimos diez años (aproximadamente): reproducen de manera ocasional algunos aspectos subjetivos de la Identidad: creencias, bailes y festividades, en éstas últimos a manera de reencuentro (añoranzas) con sus coterráneos y/o coetáneos, pasadas las fiestas o reuniones retornan a su vivienda no campesina (casi siempre es ciudades de la costa) y se desempeñan como tal hasta nueva oportunidad;
- b) El segundo grupo conformado por anterior generación de emigrantes, es decir aquellos que salieron hace más de diez años de su pueblo o caserío, reproducen con mucha menor regularidad las expresiones subjetivas de identidad señaladas (creencias, bailes y festividades), en otros casos lo realizan en ocasiones sumamente excepcionales o ya no participan.

El espíritu comunitario o de identidad comunal está sufriendo cambios cuantitativos y cualitativos, en ambos casos se producen el inicio y avance de un espíritu individualista, totalmente contrapuesto al de identidad comunitaria, los que se quedan han disminuido su participación colectiva en la atención y solución de sus problemas básicos existenciales (minga y faenas); En tanto que aquellos que se han ido solucionan sus problemas de existencialidad y otros de manera individual.

En ambos casos es evidente el cambio cualitativo del **espíritu comunitario** a un **espíritu Individualista**: Ya no se toman decisiones colectivas para asuntos laborales y/o de interés común, ahora son decisiones individuales para solucionar problemas de existencialidad, trabajo, estudios, etc...



El modelo económico alienta el proceso de descomunalización y, con ello, promueve el proceso de individualización

Como se puede apreciar la tendencia que para las economías campesinas comunales ha señalado un Modelo de Desarrollo que prioriza a las unidades económicas “modernas” (capitalistas), sobre todo a partir de la década del 1990 con la aplicación acelerada de un modelo neoliberal orientado al beneficio de las Grandes empresas transnacionales, ha traído como consecuencia un paulatino proceso empobrecimiento generalizado de las familias campesinas, determinando con ello procesos de descampesinización, desruralización y el debilitamiento de la materialidad de la Identidad Cultural Campesina expresada en el desgaste de los trabajos en Mingas y Faenas, principalmente.

El impacto del modelo económico en la zona marginales de la sociedad, en este caso en las economías campesinas y en las instituciones comunales a las que pertenecen, es que promueve un sólido proceso de Descomunalización, es decir que al debilitarse o desaparecer los aspectos básicos materiales que durante siglos han sustentado la Identidad Campesina y Comunal, se debilitan las centenarias Instituciones forjadas y fortalecidas en la reproducción de estas relaciones: La Comunidad; Proceso que se le puede tipificar como Descomunalización de la Comunidad. (Caracterizada con procesos anteriormente descritos)

Al resquebrajarse los lazos materiales de colectivismo comunitario queda el debilitamiento de la Identidad Comunal, entendida ésta desde una doble perspectiva: Individual-familiar e Institucional.

La contracorriente natural del campesino en su lucha por su supervivencia y mejorar sus condiciones de vida es el fortaleciendo su identidad cultural en toda su integridad

Los esfuerzos por mantener el espíritu Comunal pasan, necesariamente, por mantener claridad en sus intereses comunes y constituye una lucha en contrasentido al Modelo de Desarrollo que en las últimas décadas están determinando los destinos del país

Los intereses materiales comunes que permitirían identificar un sólido eje de Promoción y Fortalecimiento de un espíritu de Identidad Comunal consisten básicamente en: la Superación de la Pobreza y Extrema Pobreza en la que se encuentran y reproducen sus comunidades



Es el caso ejemplar de la “Asociación de Agricultores Kergueranos” (CC. San Mateo de Penachí) Distrito Salas-Lambayeque y de la “Cooperativa de Caficultores de la Comunidad San Mateo de Penachí”- Distrito Salas-Lambayeque. El primero integrado por 50 socios y ha obtenido financiamiento para mejorar el cultivo de Café al haber ganado un concurso nacional convocado por el Programa Nacional de Innovación Agraria (Proyecto en Ejecución); El segundo conformado por 25 integrantes y se han presentado a un concurso de proyectos productivos para financiamiento en una fuente cooperante internacional.



Cambios socioeconómicos en familias rurales a causa de la migración rural-urbana. El caso de Santa Sofía (Boyacá, Colombia)

Natalia Espinosa-Becerra¹
Katherin Rojas Gamboa²
Katherine Schuhayre Vanegas³

Resumen

Históricamente, en Colombia se han privilegiado los entornos urbanos como escenario del progreso y se han relegado las agendas públicas en lo rural; es así que durante los siglos XX y XXI se presentan procesos continuos y acelerados de migración rural-urbana, sin considerar aquí el problema de desplazamiento forzado derivado de la violencia política colombiana. Esta situación de migración rural-urbana puede perpetuar las tensiones existentes entre el abandono estatal en lo rural y una sobreocupación urbana, con todas las problemáticas socioeconómicas que de allí se derivan. Este estudio cualitativo indagó sobre los principales cambios socioeconómicos generados por la migración rural-urbana en Santa Sofía (Boyacá), y empleó un diseño narrativo fundamentado en entrevistas semiestructuradas a 17 familias. Los resultados muestran tres componentes: 1. causas de la migración, 2. condición socioeconómica actual de las familias rurales migrantes y 3. ventajas y desventajas de la migración. La crisis agraria (y sus implicaciones socioeconómicas y familiares) es la causa determinante de la migración, pues es el resultado del desbalance entre los costos de producción y el precio inferior de los productos en el mercado, la carencia de recursos propios o estatales para producción, y las variaciones climáticas. A ello se suman los deseos de autorrealización de las familias, que las motivan a migrar para estudiar o trabajar. Finalmente, las familias consideran que la migración ha aumentado sus oportunidades materiales e inmateriales, pero que ha generado rupturas familiares, inestabilidad en empleos urbanos informales y sobrecarga de tareas para las que no estaban capacitados.

Palabras clave

Migración rural-urbana, Familias rurales, Crisis Agraria, Migración de retorno, Jóvenes rurales

Introducción

En Colombia la idea hegemónica de desarrollo se establece dentro del Modelo Neoliberal, que plantea “el desmonte de los regímenes de protección sobre las exportaciones, la reducción de aranceles para la importación de productos



agropecuarios, y el incentivo a la participación del sector privado” (Pérez & Pérez, 2002, p.18), con una visión modernizante que privilegia los entornos urbanos como escenario del progreso, y a partir de allí, las formas de producción rurales se relegan a un segundo plano dentro de las agendas públicas, con reformas agrarias y territoriales desiguales y parcializadas se han favorecido las iniciativas privadas y en perjuicio de las economías campesinas locales. De acuerdo con lo anterior, en el país se ha presentado durante los siglos XX y XXI un proceso continuo de migración y concentración de la población en los centros urbanos bastante acelerados. De hecho, un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2003, p.4), revela que “más del 50% de la migración del país tiene como destino las capitales y áreas metropolitanas”. Este flujo migratorio rural-urbano surge porque los espacios rurales de asentamiento carecen de oportunidades, y los individuos y poblaciones van en busca de movilidad social ascendente, reflejada en un bienestar familiar permanente y una calidad de vida superior, traducidos en la posibilidad de obtener un buen empleo y aumentar su nivel de ingresos, un mejor acceso a los servicios básicos de educación, salud y seguridad.

Con ello, surge este proceso de investigación cualitativa con familias provenientes del municipio de Santa Sofía (Boyacá), donde se conocieron los principales cambios socioeconómicos generados por la migración rural-urbana, del mismo modo se identificaron las causas asociadas a este proceso migratorio rural-urbano de las familias, además se conocieron aspectos de las condiciones socioeconómicas actuales de las familias migrantes.

Fundamentación del problema

Durante el siglo XX se han ejecutado diversos modelos de desarrollo en América Latina: Keynesiano y estado de bienestar; modelo basado en sustitución de importaciones; modelo Neoliberal y un modelo de planificación económica central (Franco & Mejía, (2007), todos orientados hacia la “modernización” de la agricultura, que ha generado crisis agrarias manifiestas en diversos aspectos: concentración de la propiedad, disminución de las áreas sembradas con una consecuente pérdida de productividad, procesos de producción de un orden altamente excluyente y el desplazamiento de pequeños productores hacia tierras que no tienen vocación agrícola, la desagriculturización del empleo rural, el aceleramiento de las migraciones, la reducción de los cultivos temporales, la ampliación de los permanentes y el aumento de las importaciones de alimentos (Fajardo, 2002).



Así, la cuestión agraria se ha convertido en el centro histórico del conflicto político colombiano, puesto que la tierra ha sido un componente de disputa. Colombia, así como otros países latinoamericanos, ha reflejado la existencia y permanencia de la estructura latifundista con respecto a la tenencia de la tierra (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), manifestando un uso del poder para beneficiarse de las políticas y programas que se han establecido a favor de los señores de la tierra (terratenientes, latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros), afectando así el bienestar del país específicamente en el sector rural, que desencadenan luchas agrícolas y conflictos por la tierra generadas por la baja capacidad del Estado para la protección y garantía de los derechos de propiedad, además de la tenencia de títulos informales sobre las tierras que han enfrentado a los campesinos y terratenientes de forma constante.

Sumado a lo anterior y dada la ausencia de garantías del gobierno colombiano a la población rural, se han generado diversos procesos de migración forzada y migración voluntaria: la primera, afecta a personas que abandonan sus hogares, forzados por conflictos sociales, persecución o violencia criminal. En todo caso, las razones de los desplazados internos y los refugiados para dejar sus hogares suelen ser las mismas: conflicto armado, violencia, abusos, violación de los derechos humanos, desastres naturales, entre otros (Gómez–Johnson, 2015). Por otro lado, la migración voluntaria se refiere a movimientos geográficos de las personas a través de una frontera específica con el propósito de establecer una nueva residencia permanente o semipermanente, por razones de estudio turismo o trabajo (González, 2011; Pardo, 2012).

Según el informe de empalme disponible del DANE (2010, p. 9), en el departamento de Boyacá se evidencian altos porcentajes de migración poblacional, reflejando que “para el 2003, Boyacá contaba con 760 mil personas por fuera del departamento, esto equivale al 33,4% de la población nativa, representando un 70,7% establecido en Bogotá y 15,3% en Cundinamarca”.

Estos aspectos migratorios se presentan en el municipio de Santa Sofía (Boyacá), que para el año 2014 contaba con una población de 2.976 habitantes y para el año 2018 disminuye con 2.819 (Secretaría de Planeación 2016-2019), teniendo en cuenta los siguientes datos, los cuales permiten analizar y comprender que dentro del municipio en mención se ha evidenciado un proceso de movilización, lo cual ha tenido una doble afectación, en lo rural: la despoblación del sector afectado la economía interna y lo urbano, el aumento de los cordones de miseria.



Metodología

Este estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, dado que buscó entender la visión de los participantes, con el fin de “profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.36). Se articularon elementos del diseño narrativo (Mertens, 2005), que permitió conocer a través de relatos, las características de los procesos migratorios de los informantes. Se empleó la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información (Cerdeña, 2013), desarrollada en dos cuestionarios: Cuestionario 1, integrado por 25 preguntas, con el fin de conocer aspectos socioeconómicos de la migración rural-urbana, y Cuestionario 2 (conformado por siete preguntas), que surge por la necesidad de profundizar en aspectos asociados a las ventajas y desventajas de la migración, así como la migración de retorno, una categoría emergente en el proceso. El proceso de selección de los participantes se realizó teniendo en cuenta criterios de “muestreo” cualitativo (Hernández Sampieri et al, 2010: muestreo de casos-tipo y muestreo en cadena. Así, el muestreo se fundamentó de la siguiente manera: familias de Santa Sofía, migrantes a entornos urbanos (Bogotá, Tunja, etc.), que tuvieran plena disposición en cuanto al proceso de investigación, y que pudieran remitir a otros informantes con las mismas características. Con estas condiciones, se obtuvo como resultado la participación de 17 familias dentro de este proceso de investigación. Las categorías de análisis que se construyeron para organizar los resultados, fueron las siguientes:

Objetivos Específicos	Categorías
Identificar las causas asociadas a la migración rural-urbana en las familias migrantes	Familiares Socio-económicas Situación crisis agraria Redes Sociales
Conocer aspectos de las condiciones socioeconómicas actuales de las familias migrantes	Composición familiar Percepción de ingresos. Asignación de gastos Actividades productivas. Condiciones laborales. Tenencia de vivienda-Habitabilidad. Nivel educativo. Condiciones de acceso y calidad
Indagar sobre las ventajas y desventajas de la migración desde la perspectiva de las familias migrantes	Ventajas y desventajas
	Migración de Retorno (categoría emergente)

Tabla1. Categorías de análisis



Resultados y discusión

Causas de la migración rural – urbana

La búsqueda de bienestar en la gran mayoría de áreas intrapersonales como extrapersonales en el ser humano, son causales para emprender un proceso migratorio; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2012), menciona que las causas atribuidas principalmente a la migración de campesinos y habitantes rurales, es debido al aumento en los costos de producción, la limitación de acceso a factores productivos, las afectaciones ambientales, los escenarios de violencia, las crisis económicas, causas familiares, entre otras. Para nuestro caso se encontraron estas particularidades: (se aclara que en lo sucesivo, se mostrarán fragmentos de las entrevistas, codificadas con la letra I (Informante), y el número de informante: I1, I2, hasta I17)

Causas Familiares

Solamente dos de los 17 informantes señalaron que una de las principales causas para realizar el proceso de migración rural-urbana fue a nivel familiar: “Cuando yo llegue, una prima me colaboró, porque el estar allá es muy duro, el no conocer no saber uno para dónde anda el perderse y la inseguridad es terrible (I.2)” (4). “Me influenció una hermana, ella me llevó a trabajar a Bogotá, yo tenía 15 años. No estaba casada. (I.11)”, en estos casos la migración se dio por motivación de familiares que influenciaron en la toma de esta decisión. La familia muchas veces influye en la toma de decisiones al impulsar al individuo a su autodesarrollo, a partir de ese proceso de migración voluntario en busca de mejores oportunidades para su crecimiento dentro del sistema familiar.

Causas Socioeconómicas

“La verdad, la verdad, la causa que me llevó a migrar fue la falta de dinero, es que acá es muy difícil para sobrevivir porque pues la verdad hay muy buen trabajo, pero entonces pagan muy poquito” (I.14). “Ehhhh la falta de oportunidad pues porque aquí desafortunadamente no hay oportunidades laborales entonces así mismo me era difícil realizar mis estudios teniendo bajos ingresos, entonces por ellos me desplacé hacia la ciudad de Bogotá y poder cumplir mis sueños en el estudio. (I.9)

Se refleja por medio de estas entrevistas que existe causas económicas y sociales asociadas al proceso de migración dentro de las cuales encontramos, falta de oportunidades tanto laborales como a nivel educativo, en vista de ello muchos de las familias migrantes salieron de su lugar natal a las ciudades.



Situación de Crisis Agraria

Es importante tener en cuenta que la crisis agraria es una de las causas principales para que los habitantes del municipio de Santa Sofía emigren a zonas urbanas teniendo en cuenta que en algunas familias la agricultura familiar era su único centro de ingreso económico. La crisis agraria que se presenta actualmente en Colombia es el resultado de un desbalance entre los costos de producción y el valor de los productos en el mercado que para algunos de ellos es inferior a los costos de producción, dados los altos precios de los insumos (por ausencia de políticas nacionales de regulación de precios) y el alto costo de contratación de mano obra, debido precisamente a la ausencia de trabajadores en la zona.

“Si, pues porque mis padres se dedicaban a la agricultura. La agricultura dentro del municipio ha tenido muchos cambios porque antes Santa Sofía era catalogada como un municipio capital de la curuba y eso hoy en día ya no existe por la situación económica de la persona o familia por el mismo terreno, por las circunstancias... la agricultura dentro del municipio se deterioró tal es el caso que considero que esto ya no es una fuente de ingresos para los sofileños” (I.10). “En ese momento sí, la falta de oportunidades en el campo lo lleva a uno a tomar la decisión de irse, mis papas trabajaban en el campo-agricultura, sembrando papa, maíz, curuba, alverja; pero ya uno no veía ganancia en esa labor por eso me fui” (I.3).

Redes Sociales

Las redes sociales sirven de puente entre las comunidades de origen y los centros urbanos dentro y fuera del país, entre la tradición y la modernización, entre las comunidades de sobrevivencia y la sociedad de mercado. El arraigo al territorio, al entorno regional, cultural y político, así como los estados emocionales entre amigos, conocidos de una misma comunidad, hacen que los migrantes trasladen en la medida de lo posible su forma de vida original a las ciudades, que en situaciones concretas llegan a culminarse en organizaciones formales (Ramos, 2008, p. 7).

“...Una señora me ofreció trabajo allá y me fui antes nosotros no teníamos oportunidades de nada el campo se trabajaba desde pequeño aquí no hay oportunidades de nada para los jóvenes y por eso ellos emigrar a otros lugares”. (I.12)
 “No, esa decisión fue personal. Pero para ese momento me fui a trabajar en una panadería de unos conocidos de acá de Santa Sofía que me ofrecieron trabajo y unas tías que tengo allá en ese momento me dijeron que me quedara con ellas en su casa” (I.3). Las redes migratorias, basadas entre familiares, paisanos y amigos, encierran un



conjunto de elementos que mitigan los costos de vida. El alto grado de solidaridad entre ellos se produce desde la decisión para emigrar, el viaje, el alojamiento, el acceso a la estructura laboral, la adaptación al nuevo lugar de residencia, hasta la participación en las organizaciones para conservar y fortalecer el vínculo entre los lugares de destino con los de origen.

Condiciones socioeconómicas actuales de las familias migrantes

Composición Familiar

Se encontraron tipologías de familias como: la nuclear (padre-madre e hijos), extensa (primera, segunda y tercera generación) unipersonal (única persona), monoparental con jefatura femenina (madre e hijos). “Casada, tengo dos hijos uno de seis años otro de dos años, cuando vivía acá en Santa Sofía vivía con mi mamá y mi hermana menor y yo era soltera” (Nuclear) (I.7) “Vivo en Bogotá en Soacha con mi hijo soy madre soltera” (Monoparental) (I.10). “Mis padres y 4 hermanos mis abuelos y unos tíos” (Extensa) (I.1). “Soy soltera y no tengo hijos, mis papás y tengo diez hermanos, yo soy la sexta, en Bogotá están cuatro hermanos. (I.8) (Unipersonal). No obstante, en esta investigación prevalecen más las familias de tipología nuclear, en dónde existen dentro de cada hogar la difusión de roles que en si ayudan a constituir el sistema familiar.

Percepción de Ingresos. Asignación de Gastos

Se encontró que los ingresos dentro de las familias han mejorado a través de ese proceso de migración rural- urbana: “Diariamente un millón de pesos, mi situación económica mejoro a un 100% muchísimo allá que cuando estaba acá en Santa Sofía, yo apenas estaba en el colegio y no recibía ningún ingreso, todos los gastos los cubrían mis papas para la casa” (I.3) “Aproximadamente 4 millones, entre mi esposo y yo, esto mejoro la decisión de migrar si fue buena porque si no lo hubiéramos hecho no estaríamos obteniendo ese ingreso” (I.5) “Bueno estamos ahorita por el nivel de 4 salarios mínimos, esto mejoro porque nosotros optamos por irnos, si nos hubiéramos quedado aquí para acceder a un cargo aquí es solo por la alcaldía y en el pueblo es solo por contactos” (I.9).

En cuanto a la asignación de gastos se evidenció, que los habitantes que han optado por la migración hacia ciudades, tienen asignación de gastos de acuerdo a su sustento diario. “Bueno son muy concretos, estamos pagando el apartamento, servicios, alimentación los gastos de mis hijos” (I.9) “Para alimentación, arriendo, los servicios la salud, el impuesto, el vestuario para el sustento de todos los días, ¡no! ahora gasto el



triple” (I.12). se evidencia dentro de estos resultados, que los habitantes provenientes de Santa Sofía que realizaron el proceso de migración obtienen ingresos pertinentes, aunque sí manifiestan que estar en la ciudad implica muchos más gastos ya que el costo de vida se incrementa.

Actividad Productiva

A continuación se reseñan algunas de las actividades productivas actuales y previas desempeñadas por los migrantes, y conocer aspectos de las condiciones socioeconómicas en torno a las perspectivas de calidad de vida como factor de mejora o detrimento:

“Yo me dedicaba a la agricultura, en el municipio sembrando tomate en un invernadero, yo trabajé allá cinco años, pero por la competencia que había, se complicó mucho y ese negocio dio a quiebra” (I.1) “Un hermano trabaja conmigo aquí en el negocio, soy comerciante de papa, verduras, frutas-Fruver, soy independiente, el negocio es propio.” (I.1). “Me dedicaba a estudiar en el Instituto Técnico, yo Salí de bachiller y me fui para Bogotá” (I.8). “Soy secretaria de Auxiliar Contable, Me encanta mi trabajo, porque pues, soy secretaria de salones de belleza una cadena de salones de belleza grande y soy muy feliz porque me encanta mi trabajo ya llevo 24 años trabajando allá” (I.8). “Iniciando, trabajé en una peluquería hacia shampoó, la de aseo, tintos y después trabajé en un almacén de seguridad. Pues uno tiene muchas expectativas uno de pueblo da todo en el trabajo, uno espera que le paguen de la misma forma. Él viajaba, nos veíamos muy poco porque él era transportador y no nos dedicaba tanto tiempo, entonces por eso decidimos venimos para acá a Santa Sofía a formar un hogar donde todos estemos más pendientes porque la rutina muchas veces lo acaba todo” (I.2).

Condiciones Laborales

Reúnen una serie de aspectos concretos que permiten conocer el nivel de satisfacción del empleado en cuanto a ingresos (sueldo), beneficios legales (parafiscales), clima laboral. De tal manera a partir de la perspectiva de los sujetos, se pueden visualizar tales consecuencias del proceso migratorio.

“No, señora, solo tengo lo de las cesantías- pensión y salud igual yo no cantaba con estos mismos beneficios que cuando vivía y trabajaba acá en cuanto al aporte de pensión” (I.4). “Pues, el jefe molesta mucho, pero uno se acostumbra, se adapta al trabajo, a la rutina igual de trabajo son 48 horas semanales que tengo, me lo dio un familiar un cuñado” (I.4). “Por ahora no se gana igual que antes, el trabajo está muy duro, hay mucha competencia, la situación económica en Bogotá está muy difícil.” (I.3);



“Como yo trabajo como independiente entonces yo solo tengo salud. y pues antes ni salud tenia porque en esa época tocaba pagar si uno se enfermaba” (I.3) “El trabajo es bueno porque uno anda en la calle, no tengo jefe, se habla con la gente y a mí me gusta, pero a veces toca duro, trabajo 60 horas semanales pero en esta vida no hay nada fácil.”(I.3)

“Si mejoró, claro, cuando vivía acá en Santa Sofía yo no tenía el ingreso económico como tal, siempre lo manejaba mi mamá, porque yo dependía de ella.” (I.7) “No, como yo apenas estoy empezando en ese trabajo entonces no se maneja así, uno paga independiente”.(I.7)” Pues, bueno, porque soy independiente, porque no estoy sometida a un jefe a un horario , no tengo que cumplir metas para nadie más que para mí misma, no tenemos empleados, tenemos asociación y cada uno se encarga de cumplir sus metas para fortalecer un poco más el proyecto, porque acá si nos toca de lunes a lunes, si no se propone metas no tiene horario, solo que cuando uno tiene hijos tiene uno que parar yo le pongo 10 a 12 horas diarias, 60 horas semanales”(I.7).

Tenencia de la Vivienda-Habitabilidad

“Nosotros vivimos en arriendo, es una casa, vivimos con una tía y con los hijos de una tía. Pero nosotros pagamos por aparte. Cuando yo me fui vivía con mis papas, yo siempre he vivido con ellos y la casa acá es propia” (I.4). Teniendo en cuenta la anterior condición de tenencia de vivienda, durante las narrativas obtenidas por los informantes (I.1) (I.2) (I.3) (I.4) (I.6) (I.10) se observó, que en general las condiciones de habitabilidad son de arriendo, en relación a los ingresos obtenidos por el tipo de profesión, ocupación u oficio.

En menor proporción, algunos participantes manifestaron como logros personales, bienes materiales como la vivienda (arriendo, en proceso de pago, paga en totalidad), obtenidos mediante la consecución de un empleo en la ciudad partir del proceso de migración rural-urbana realizado; “Propia, la estamos pagando por crédito con banco y ayuda de los familiares (mis suegros) por mi esposo. Porque muchas veces nosotros optamos por adquirir el subsidio de vivienda, pero no eso no fue posible (I.5) (I.7) (I.8) (I.9); “La vivienda en la cual residimos hoy en día es propia gracias a Dios. Se adquirió por medio de: un crédito, fondo de empleado que saco mi esposo a un banco” (I.11) / (I.12)



Nivel educativo. Condiciones de acceso y calidad

Es importante mencionar que a través de este proceso de investigación se encontraron familias donde han cruzado por niveles educativos de primaria, secundaria y algunos por educación superior donde lo han adquirido a través de ese proceso de migración rural-urbana que realizaron con el fin de acceder a una educación de calidad para mejorar sus condiciones de vida. “Mi papá tiene hasta 4 de primaria y yo terminé mi bachillerato y me fui a Bogotá a realizar un técnico en seguridad y salud en el trabajo y el tecnólogo lo estoy haciendo en gestión de talento humano. Y mis hermanos están en primaria” (I.6) “Mi esposo es profesional en transporte de vías y mis dos hijos el mayorcito está en el colegio, apenas tiene seis años y está en primero, el menor tiene dos años y el constantemente está trabajando conmigo, a donde valla voy” (I.7) “Mi esposo también es administrador de empresas trabaja en la fundación Escuela Taller de Bogotá es coordinador administrativo y financiero pues afortunadamente cuenta con el nivel económico para sostenernos a la familia” (I.9) “Yo soy, bachiller luego me fui para Bogotá e hice un tecnólogo en el Sena y de eso tengo pues mi trabajo hoy en día” (I.10)

Sin embargo, se encontraron familias que obteniendo un nivel de educación superior (tecnólogo) se dedica a otra actividad productiva teniendo en cuenta que no encontraron ofertas laborales de lo que actualmente había estudiado. “Yo hice hasta once, después hice un tecnólogo en el Sena de contabilidad y finanzas, y mi esposo si hizo hasta noveno de bachiller y yo trabajo en una panadería como administradora. (I.4).

Por consiguiente, muchas de las familias han tenido la oportunidad de acceder a una educación superior para mejorar las condiciones de vida, se reconoce por medio de los investigados que este suceso ha sido posible a través de ese proceso de migración rural urbana. Del mismo modo, se evidencia la carencia de estudios en familias donde los recursos económicos es un factor que imposibilita llevar a cabo el cumplimiento de sus sueños. “Pues naturalmente empecé hacer un curso, pero la economía no me lo permitió terminar, si llegara a ver la oportunidad si me gustaría al menos hacer un curso, pero pues por el momento, trabajar” (I.2)

Ventajas y desventajas de la migración

“Si, precisamente en la ciudad hay un campo abierto de trabajo digámoslo así en Tunja, porque yo viví en Bogotá un tiempo, pero allá es muy difícil. En Tunja, hay un sin número de propuestas que estudiar, sea universidades públicas, privadas, instituciones o



directamente el Sena, y si hay oportunidades en cuanto al proceso académico, laboral.”(I.7)...”Pues ventajas porque hay superación, y entonces muchas personas retornan para realizar lo que aprendieron acá en el pueblo, desventajas es que nuestros campesinos ya están muy viejitos, entonces ya no hay quien cultive la tierra, quien esté pendiente en el municipio ya toda la gente se fue a trabajar por un sueldo, pero no se dan cuenta que la desventaja es quedarse en el municipio y trabajar en el municipio, entonces la gran desventaja es como haber perdido la idiosincrasia de que acá me quedo, yo puedo cultivar y acá también puedo trabajar” (I.7)

“Muchas, personalmente Bogotá me parece muy bonito porque tiene una muchas oportunidades tanto laborales como para formarse, si claro muchas oportunidades para progresar.”(I.8)...” Positivas pues porque he tenido un trabajo estable pues ya tengo económicamente mi casa, mi carro y me he desempeñado muy bien, más las ventajas si claro, y desventajas... extrañar de pronto el pueblo igual procuro venir seguido, pero de lo contrario no, me siento muy contenta claro que lógicamente con el tiempo me gustaría venirme a vivir a acá porque para mí, Santa Sofía es un paraíso (I.8).

“¿Bien, las ventajas eh... mejor calidad de vida, mayores oportunidades para servir a la comunidad, las desventajas, pues que allá no se gasta como acá ¿cierto? las desventajas pues... gasto, desintegración familiar, programar para ir a compartir ya que yo no puedo ir cada ocho días, no me es fácil uno por el tiempo, dos por los gastos ¿cierto? Porque ya se tiene cosas y si yo me voy ya descuido mi casa, en lo que es organización mientras uno está allá está organizando la casa de todos, cocinando para todos, está lavando la ropa y esta con todos y acá ya se presentan dos situaciones, dos hogares el mío y el de ellos. Entonces no es fácil ir con frecuencia cada ocho días, la otra desventaja es el incremento de gastos, esas básicamente” (I.13).

Migración de Retorno

Para la OIM (2013), este tipo de migración comprende el “movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario e incluye la repatriación voluntaria” (p. 39). Sin embargo, para Mendoza (2013), también la migración de retorno se lleva a cabo cuando los migrantes no logran cumplir sus expectativas de beneficio derivado de la migración y no logran maximizar sus ingresos y alcanzar la permanencia en la región destino. De esta manera, se hace necesaria la visibilización de aquellas narrativas obtenidas en las entrevistas en relación a las causas de optar por el retorno urbano-rural, a continuación, se muestran algunas de las perspectivas encontradas durante este proceso de investigación. “Bueno, lo que pasa



es que estando allá en Bogotá, mi esposo se enfermó el duro un mes hospitalizado y pues en el momento no había quien me colaborara en ir a surtir, sí, a estar pendiente y yo no podía estar pendiente en la clínica tampoco bien de él, entonces ese fue el motivo principal por el que nos devolvimos, no teníamos empleados yo sola trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche de domingo a domingo” (I.15)... “Acá estamos enfocados en unos invernaderos de tomate y unos cultivos de tomate que hicimos con la plata que recogimos de la venta del negocio, nos ha ido bien todo nos ha salido bien, esperando que todo siga así. Eh pues bueno, hay lo que paso fue, que, no pudimos a horrar cuando nos fuimos, hemos conseguido más cosas acá en el pueblo pues de las que teníamos allá, acá nos ha quedado más fácil económicamente y hemos tenido menos estrés, menos gastos” (I.15)

“Primero que todo por el sentido de pertenencia al pueblo por uno querer darle o contribuir uno con el progreso del pueblo pues como ve tengo mi negocio y es otra cara que se le da al pueblo, y también pues el ritmo de vida que se lleva en la ciudad es un poco complicado que afecta la calidad de vida de uno. La razón fue porque acá uno tiene otra calidad de vida, aquí uno vive tranquilo económicamente no se tiene tanto ingresos, pero tampoco los gastos son exagerados como la ciudad que allá los ingresos son mejores pero el gasto es mayor. Yo allá trabajaba todo el día en la panadería y todos los días. Acá yo pues como es mi negocio ya manejo mi tiempo. (I.16)

En relación a lo anterior, se articulan diferentes percepciones de los sujetos voluntarios en relación al proceso de migración como prospecto de superación social y económica teniendo en cuenta las motivaciones laborales, educativas, iniciales manifestadas, así como los efectos que este trajo para estas familias, el “descontento” que llevo al retorno. “Muchas veces la gente piensa que uno solo progresa en la ciudad y eso es mentira ahorita la oferta laboral está muy congestionada allá poco trabajo y las deudas son terribles, nosotros acá compramos un carro, ahorita optamos por la casa porque uno acá lo puede en cambio sí nos hubiéramos quedado en Bogotá allá es más complicado tener más cosas, acá las metas y sueños a nosotros se nos están cumpliendo pues de todas maneras yo agradezco a Bogotá porque me permitió crecer como persona y profesional y adquirir los mejores oportunidades y aprendizajes” (I. 17).

Conclusiones

Dentro de las causas asociadas a migración rural- urbana de las familias provenientes de Santa Sofía Boyacá, se encontraron causas familiares, teniendo en cuenta que la familia influye en la toma de decisiones al impulsar al individuo en busca de mejores



oportunidades para su crecimiento dentro del sistema familiar. Las causas socioeconómicas son un factor determinante migratorio en busca de mejores propuestas laborales, teniendo en cuenta que el municipio, según las opiniones obtenidas por los entrevistados, carece de oportunidades laborales, dificultando la posibilidad de un ingreso económico que permita el proceso del sistema familiar.

La crisis agraria es una causa determinante del proceso migratorio como resultado de un desbalance entre los costos de producción y el valor de los productos en el mercado que para muchos de ellos es inferior a los costos de producción, sumado a la carencia de recursos propios y asignados por el Estado para la productividad agropecuaria, así como las condiciones climáticas son aspectos que influyen para la despoblación del área rural. Por último, se evidenció la causa de redes sociales como puente entre la tradición y la modernización haciendo que los migrantes se trasladen a las ciudades.

En relación con las condiciones socioeconómicas actuales de las familias migrantes, las composiciones familiares se han visto afectadas por los procesos de migración rural-urbana, ya que se refleja el desprendimiento de algunos integrantes de la familia, por las motivaciones personales que dicho proceso enmarca. También es importante mencionar que el nivel educativo, en algunos casos fue el principal eje motivador para tomar la decisión de migrar, teniendo en cuenta los deseos de autorrealización en educación primaria, secundaria y superior. Sin embargo se observa que la competencia laboral, disminución de fuentes de trabajo en relación a lo estudiado, incrementan las posibilidades de buscar trabajos informales.

Para el ámbito económico, se reflejó un aumento en la percepción de ingresos en comparación a la situación económica percibida por las familias en el municipio, así mismo se verificó que los gastos o costos de vida son mayor en la ciudad que en el municipio. A partir de lo anterior, se comprendió que tanto ingresos como gastos son proporcionales a las actividades productivas dentro del contexto ya sea área urbana como la rural. De acuerdo a la anterior, las actividades productivas desempeñadas por las familias que optan por la migración, en su gran mayoría se ubican en el sector de la manufactura, siendo esta correspondiente a la oferta que más prevalece dentro del contexto urbano. Por consiguiente, el acceso a este sector ha sido posible a partir de los niveles de educación, conocimientos adquiridos durante ese proceso de migración rural-urbana. De igual forma, se observó que a partir de las actividades productivas de algunas familias el régimen de tenencia de vivienda en algunos de estos casos es propia



obtenida por créditos hipotecarios, aunque se encontró con mayor relevancia dentro de algunos grupos familiares que la condición de habitabilidad corresponde a la de arriendo, lo anterior en relación a los ingresos resultantes de las actividades productivas.

La migración rural-urbana generó ventajas y desventajas: aumento de oportunidades para la superación personal en relación al acceso laboral y educativo, lo que indica una ampliación de experiencias y conocimientos que facilitan la vinculación a las ofertas de empleo y además el afianzamiento y fortalecimiento desde un nivel inicial académico hasta el superior. Del mismo modo, el aumento de tenencia de bienes materiales por medio de los ingresos que dentro de la familia se perciben. En cuanto a las desventajas se debe tener en cuenta que algún caso de la investigación arrojó el desprendimiento de los integrantes del núcleo familiar a raíz de la migración puesto que se evidencia una ruptura en los lazos familiares como consecuencia de la distancia. Además, los integrantes de las familias que no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior por la carecía de recursos económicos, imposibilitó obtener un empleo estable lo que fomenta la incursión de estas familias a empleos informales lo que dificultan las condiciones laborales mínimas.

A partir de lo anterior, se observa el exceso de trabajo; estrés, poca interacción entre las relaciones interpersonales, por lo tanto, desde las perspectivas de algunas familias se concibe que no existe calidad de vida que permita un bienestar general para la familia, que permita el goce efectivo de espacios de ocio, esparcimiento, tiempo libre ya que las jornadas laborales y los ingresos económicos limitan el desarrollo de estas actividades. Desde las perspectivas de algunas familias se vio la imposibilidad de lograr calidad de vida, con la migración, por lo que se observó como fenómeno emergente la migración de retorno, pues se presencia una inestabilidad laboral y económica, sumada a la situación actual del contexto urbano (competencia laboral, presión demográfica, inseguridad).

Notas

¹ Socióloga, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Desarrollo Rural, Pontificia Universidad Javeriana. Docente, Grupo de Investigación “Ciclo Vital, Familia y Desarrollo Humano”, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja (Colombia). e-mail: nespinsa@jdc.edu.co

² Trabajadora Social, Integrante Semillero de Investigación Newén Mapu. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. e-mail: katherinrojasgamboa@gmail.com



³ Trabajadora Social, Integrante Semillero de Investigación Newén Mapu. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. e-mail: kathe.schuhayre@gmail.com

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucional. Recuperado de: <https://bit.ly/351ycTv>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2010). Informe de empalme 2010. Dirección de Metodología y Producción Estadística. Recuperado de: <https://bit.ly/2H9E4BW>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2003). Evidencia reciente del comportamiento de la migración interna en Colombia a partir de la Encuesta Continua de Hogares. Recuperado de: <https://bit.ly/37eMKIk>

Fajardo, D. (2002). Tierra, poder político y reforma agraria rural. Cuadernos Tierra y Justicia. No.1. ILSA: Bogotá.

Franco, A. & Mejía, L (2007) Protección Social y Modelos de Desarrollo en América Latina. Rev. salud pública, Rev. salud pública 9 (3), 471-483. Recuperado de: <http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v9n3/v9n3a16.pdf>

Gómez-Johnson, C. (2015). De la migración económica a la migración forzada por el incremento de la violencia en El Salvador y México. Estudios Políticos (47) 199–220. DOI: 10.17533/udea.espo.n47a12

González, D (2011) Taller Regional sobre Potencialidades y aplicaciones de los datos censales. Recuperado de: <https://bit.ly/340sm5y>

Hernández- Sampieri, R. Fernández, C.& Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ta Edición. Ed McGraw-Hill: México, D.F.

Mertens, D. (2005). Research and evaluation in Education and Psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks: Sage.

Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2012) Perfil migratorio en Colombia. Recuperado de: <https://bit.ly/352WjB5>

Pardo, J (2012). Análisis del papel de la migración voluntaria en la configuración de la cultura política del sujeto estudio de caso: Creación de comunidades colombianas en Buenos Aires 1998-2010. Recuperado de: <https://bit.ly/343hmo8>

Pérez, E.& Pérez, M. (2002) El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de Desarrollo Rural (48) 35-58. Recuperado de: <https://bit.ly/2HegzaD>

Ramos, D (2008). Migración rural-urbana y redes sociales. El caso de la Sierra Norte de Oaxaca. El Cotidiano (148). Recuperado de: <https://bit.ly/3k4yEqo>



Secretaria de Planeación (2016-2019) Marcando la diferencia con experiencia, compromiso y gestión. Documento Institucional, Municipio de Santa Sofía (Boyacá).



Desagrarización del campo en el norte de México. El caso de La Laguna.

Hilda Georgina Hernández Alvarado

Resumen

A partir de la implementación de las políticas neoliberales en el campo mexicano en la década de 1990, las sociedades rurales se han venido transformando bajo la lógica de desagrarización. En este contexto se analiza la expresión de este fenómeno en el norte de México, en la Región Lagunera, zona emblemática por su papel trascendente en el reparto agrario cardenista de 1936. Este estudio tiene como objetivo caracterizar la forma en que una nueva ruralidad se configura en un microespacio. El método utilizado yuxtapone la mirada cualitativa y cuantitativa a través de la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas de historia oral en una localidad rural de la Comarca Lagunera. Los resultados muestran importantes transformaciones: la concentración de agua y tierra en manos de productores privados; el incremento de la inserción laboral en el sector industrial y de servicios; la resignificación de la tierra y el agua; y la pluriactividad propia de la nueva ruralidad.

Palabras clave

Nueva ruralidad, agua, tierra, resignificación

Introducción

El reparto agrario de 1936 delineó, en la Comarca Lagunera, un modelo de desarrollo para la región, una forma de organización ejidal y una peculiar forma de relación estado-productores rurales en que la intervención y control gubernamental se fortaleció, lo que fue seriamente cuestionado por la política federal hacia el campo de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. El modelo neoliberal del gobierno salinista, impulsó formalmente la modernización del sector, el incremento de la productividad; la competitividad de los productores rurales; y la capitalización del agro a través de la inversión nacional y extranjera. En la práctica se redujo drásticamente el otorgamiento de créditos, se terminó con la asesoría técnica y se modificó sustancialmente la legislación en la materia. La propuesta apostaba, en el discurso, a la reconfiguración del ejidatario como productor eficiente con mentalidad empresarial y mejores niveles de vida.

La aplicación de tales políticas en el ámbito nacional asumieron distintas connotaciones



en función de las particularidades territoriales, sin embargo, en lo general los críticos de las medidas neoliberales auguraban el fin de los ejidos y los ejidatarios, o bien, una radical transformación de las comunidades rurales, así es posible visualizar a la desagrarización y a las nuevas ruralidades como sus consecuencias esperadas. Sin duda el agua y la tierra constituyen elementos fundamentales en este proceso, la apropiación, pérdida o despojo de ellos se convierten en factores determinantes de la desagrarización y de las nuevas formas que asumen las ruralidades.

Tales consecuencias son observadas desde la perspectiva microsociológica en la Comarca Lagunera, cuyo surgimiento fuera ponderado como expresión de la política modernizadora y el dinamismo económico del porfiriato. La misma zona que puso en evidencia la necesaria intervención del gobierno federal en el control y manejo del agua a partir del conflicto de la Compañía Agrícola de Tlahualilo en la década de 1880. La región tendría igualmente importancia en la revolución mexicana, en tanto, los conflictos entre los ribereños inferiores y superiores del río Nazas se convirtieron en elementos determinantes en el movimiento revolucionario en la zona. La misma región fue escenario destacado del reparto agrario cardenista de 1936, decretado después de la importante movilización de los trabajadores agrícolas laguneros. La visión del gobierno cardenista estimuló la creación de ejidos colectivos que en la comarca lagunera tuvieron, en lo general, escasa duración, aún cuando en la actualidad existen pocos casos que conservan una estructura organizativa de carácter colectivo gestada en el sexenio cardenista. Sin embargo, al interior de los ejidos permanecieron durante largo tiempo formas organizativas sustentadas en grupos de trabajo articulados principalmente en torno a la gestión de créditos para la producción y a la explotación y distribución del agua subterránea.

Después del reparto agrario y hasta la década de 1980 las comunidades rurales se articulaban en torno a las actividades agropecuarias al tiempo que tanto ejidatarios como vecindados reconocían en la figura del ejido, su estructura, ciclos productivos y autoridades, elementos preponderantes en el repertorio de significados compartidos que les daban identidad.

“... en 1989, Carlos Salinas de Gortari impulsó la industrialización de la agricultura con un nuevo programa de modernización del Campo (...) enmarcado en el modelo neoliberal (...), las reformas (...) comprendieron, en primer lugar, la cancelación del proceso de reforma agraria iniciado por la revolución en 1917, mediante una reforma a la ley agraria, presentada por Salinas y aprobada por el Congreso en 1992, que decretó el fin del



proceso de reforma agraria y abrió las puertas a la privatización de la tierra del sector social y su incorporación al mercado de tierras (...) se abrió el sector agropecuario al mercado internacional abandonando la protección y fomento a la producción nacional y suprimiendo la política de seguridad alimentaria (...) El estado se retiró de la esfera de la producción y suprimió la mayor parte de los subsidios al crédito, fertilizantes, agroquímicos y comercialización. Esta nueva propuesta de modernización que persiste hasta hoy, ha implicado la profundización de la desigualdad social en el campo al propiciar el cada vez mayor enriquecimiento de un pequeño grupo de agroempresarios transnacionales y nacionales, y el empobrecimiento de los ejidatarios y pequeños productores en general. (Steffen y Tarrío, 2010: 18).

Tal situación ocurre en el contexto nacional y adquiere connotación particulares en su dimensión territorial, las comunidades rurales ubicadas en el norte del país caracterizado por su alto estrés hídrico, derivado de la significaba superioridad de la demanda y social del agua y sobre la disponibilidad natural del recurso, aunado al establecimiento de zonas de veda para la extracción del agua subterránea genera un contexto en que el agua adquiere relevancia equiparable a la tierra, de tal forma que la apropiación de derechos de agua deviene en factor determinante del devenir de las localidades rurales en La Laguna.

Problema

El impacto de las políticas neoliberales en el campo lagunero configuró el ambiente propicio para el resquebrajamiento del modelo productivo con la dimensión simbólica que le es inherente. Los cambios al artículo 27 constitucional generaron el marco propicio para la formalización de la venta de tierras iniciada desde tiempo atrás, así como para el tránsito de la renta a la venta de la tierra. La combinación de estos factores con el deterioro económico de las comunidades rurales y el desapego y desinterés de las nuevas generaciones en las actividades agroproductivas, provocan una nueva ruralidad y la desagrarización de las localidades, lo que se consolida con la generación y fortalecimiento de discursos que van desde la desestimación hasta el desprecio hacia el estereotipo del campesino pobre que trabaja en condiciones inclementes y, por otro lado, la ponderación de la vida urbana y las actividades productivas que le son propias, en este contexto se observa la desagrarización del campo lagunero a través de su estudio en la localidad de Albia, formada como ejido gracias al reparto agrario cardenista.



El reconocimiento de este problema tiene como punto de partida a la nueva ruralidad como “el surgimiento de nuevos actores, nuevas actividades y oportunidades económicas” (keilbach en Sánchez Albarrán, Armando, 2018: 567) y su aplicación para describir genéricamente las maneras de organización y el cambio en las funciones de los espacios tradicionalmente “no urbanos”: aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes, deslocalización de actividades económicas, nuevos usos especializados (maquilas, segunda residencia, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo), surgimiento de nuevas redes sociales, así como diversificación de usos (residenciales, de esparcimiento y productivas), que los espacios rurales ejercen de manera creciente. (Arias y Linck en Ruiz y Delgado, 2008).

Método

La investigación, actualmente en proceso, cuyos resultados aquí se presentan se desarrolla a través de tres etapas que se yuxtaponen ocasionalmente en virtud de las necesidades de la investigación. La primera de ellas concierne a la revisión de archivo, hemerográfica y bibliográfica. La segunda incluye la aplicación de entrevistas semi estructuradas, su transcripción procesamiento e interpretación, mientras que la tercera etapa corresponde a la aplicación de una encuesta a hombres y mujeres mayores de edad habitantes de la localidad de Albia.

Hallazgos

El Ejido Albia

En virtud de que a través de un escrito del 26 de enero de 1936, los vecinos del poblado solicitaron dotación de tierras. El Diario Oficial del 17 de noviembre del mismo año estableció la resolución de dotación, argumentando “que el caserío del poblado solicitante se encuentra enclavado en terrenos de la hacienda denominada Albia” por lo que resultaron afectadas las predios de Albia, Hormiguero y Purísima, las autoridades federales lo sustentaron de la siguiente forma:

...la capacidad del poblado solicitante para obtener ejidos, ha quedado demostrada al comprobarse que en el mismo existen 304 individuos, con derecho a dotación, los que carecen de las tierras que les son indispensables para satisfacer sus necesidades agrícolas; y porque se comprobó que dicho núcleo no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de excepción (...) procede (...) conceder al poblado de Albia, una dotación de 2089 hectáreas (...) con las tierras de cultivo que se dotan se formarán 271 parcelas de 4 hectáreas cada una, Incluida la escolar.... Es procedente la dotación de



ejidos solicitada por los vecinos del poblado de Albia, Municipio de Torreón, Estado de Coahuila” (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1936: 11 y 12).

En un contexto natural en que el riego, de origen superficial y subterránea es indispensable, el reparto de las tierras estuvo vinculado al acceso al agua de ambos tipos. La disposición de las aguas del subsuelo estuvo garantizado por la asignación de las norias que operaban en las haciendas cuyas tierras fueron entregadas a los ejidos.

...se hace constar qué dentro de los terrenos afectados a la hacienda de “Alvia” (sic) quedaron comprendidas cuatro norias, todas equipadas con bombas (...) las que son movidas con motores de gas-oil, siendo para las cuatro un tubo de descargas de 10 pulgadas, y dentro del terreno afectado a la hacienda de Purísima quedó comprendida la Noria número ocho (Departamento Agrario Delegación en la Comarca Lagunera, 1936: 2).

Con agua superficial y del subsuelo, los campesinos de la localidad se dedicaron, primordialmente, al cultivo del algodón en una primera etapa y a la producción de forrajes en un segundo momento. Adicionalmente, los grupos organizados intentaron desarrollar proyectos productivos de carácter colectivo, sin embargo tales esfuerzos fueron infructuosos. Por ejemplo, en la década de 1980, dos grupos de ejidatarios lograron el financiamiento para la instalación, para cada grupo, de un hato de vacas lecheras. En ambos casos, después de un periodo de 10 años aproximadamente de enfrentar dificultades organizativas y problemas financieros derivados de la incapacidad de pago de la deuda contraída, y después de diversos procesos de reestructuración crediticia, uno ellos incluido en la *cartera vencida* terminó por traspasar el mencionado establo a un particular en el acuerdo de que éste se haría cargo del pago de la deuda, lo que no ocurrió y los ejidatarios continuaron en *cartera vencida* imposibilitados para ser acreedores de nuevos créditos. El segundo grupo gestionó y se benefició de diversas condonaciones que permitieron la reducción de la deuda, la cual quedó finiquitada cuando el Banco embargó el hato, equipo y demás implementos financiados con los recursos del dicho proyecto. Así se muestra en la siguiente enunciación:

El problema (fue que) no cubríamos la cobertura de banco porque la inversión nos la dividieron por decir así en 10 años, ¿eda?, la inversión, pero como no nos surtieron al momento las 240 vacas tuvimos que andar consiguiendo vacas no de registro, de medio registro y este, no era negociable porque daban menos leche que las buenas, de americanas (...) Entonces el banco vio que no pagábanos (...) los vencimientos de la



cobertura del dinero, nos exigía, nos exigía (...) no podíamos porque la producción no era compatible (...) ellos nos decían que teníamos que, si eran 200 vacas que el promedio eran 30 litros nosotros teníamos que llevar a (...) a las queserías (...) porque en ese año del 86 se abrió una, porque dieron (créditos) así en todos los ejidos y pusieron también el mismo programa y la gente accedió a también a vacas, y entonces en los ejidos también les dieron vacas y se formó una que recibía la leche, se llamaba "Felsa", esa era de los ejidatarios "Felsa", en el 84 por ahí 85, nosotros ya fue cuando entregábanos a Felsa, pero esos años (antes) pos tuvimos pérdidas porque la malbaratábanos y no vendíamos lo necesario... el producto no rendía porque para dar el abono era mucho lo que teníamos que sacrificarse uno y las vacas no daban más...: No funcionó, no, ni con Felsa. Felsa tuvo que cerrar y todos, casi todos los establos tuvieron el mismo fracaso... (José Chávez Zúñiga, 70 años, entrevistado por Hilda Hernández, Ejido Albia Coahuila, 4 Octubre 2019).

El declive de la actividad agropecuaria en el ejido Albia se agudiza con el paso del tiempo, mientras que se incrementa la inserción en las actividades predominantemente urbanas, como se mostrará más adelante. Actualmente Albia es una localidad de 1906 habitantes, el 49.33 % de sexo masculino y el 50.63 % del sexo femenino. Según datos del 2010 la población ocupada alcanzaba el 90%. El 75% de la población contaba con servicios de salud (IMSS, ISSSTE, y seguro popular). En ese año se registraron 398 viviendas habitadas; el 98.48 con luz eléctrica; 96.46 con agua entubada; 90.13 con drenaje; 96.20 dispone de televisión y; 93.92 de refrigerador. (Servicio de Información Georreferenciada Región Lagunera [seig-laguna], 2019).

Resultados y discusión

Concentración de agua y tierra

La década de 1980, fue particularmente importante para los ejidos de La Laguna, fue entonces cuando se registró el *colapso algodoner*, período en el se fracturó uno de los pilares de la economía regional campesina: el cultivo del algodón. En la búsqueda de alternativas productivas, la inclusión ejidal al sistema lechero aparecía para algunos sectores como una posibilidad. Sin embargo, participar en un sistema lechero regional liderado por los productores privados, con una sólida estructura y modelo de operación, los intentos del sector social fueron claramente fallidos. En extremadamente pocos casos la ganadería lechera se convirtió efectivamente en una oportunidad de desarrollo social en los ejidos. En general los ejidatarios de Albia enfrentaron graves problemas por la falta de créditos, la caída de los precios del algodón y el débil reemplazo



generacional. Paralelamente Albia representaba un importante foco de atracción para los productores privados y especuladores del suelo, en tanto los ejidatarios eran propietarios de cinco pozos para la extracción de agua subterránea y, por otro lado, su localización contigua a la ciudad de Torreón, nodo de la zona metropolitana de La Laguna, convertía a la zona en un foco de atracción para quienes visualizaban su potencial para el crecimiento urbano.

En un contexto de importantes obstáculos para la producción agraria y de importante valoración del suelo, se registró la renta de parcelas ejidales y derechos de agua que generalmente culminó con la venta, aún cuando el marco normativo no lo permitía. Con la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) terminaron por formalizarse las transacciones comerciales realizadas con anterioridad. Este programa se sustentó en el propósito de ofrecer certidumbre jurídica en la propiedad de la tierra, su implementación implicó la división de las tierras ejidales y la propiedad individual de las parcelas correspondientes, lo que permitió formalizar el cambio de propietarios de la tierra, que generalmente ocurrió del ejido a la pequeña propiedad. El proceso de concentración de la tierra en México a partir de las reformas neoliberales de la década de 1990 ha sido ya documentado por diversos estudios, en la localidad de Albia, Coahuila las entrevistas y encuestas aplicadas a los habitantes ex propietarios de tierra en el Ejido, mostraron como pauta recurrente la renta y la posterior venta de la tierra a los pequeños propietarios, empresarios de la región e intermediarios/especuladores, conocidos localmente como “coyotes”.

Tuvimos que vender (...) ahora que entró Salinas de Gortari, dio facultades con el artículo 27 de vender las tierras y se hizo el desastre (...), pos si ta' uno acabado, de perdido decía uno el ejidatario verdad, pos voy a vender mi tierra y fue lo que le vino dando valor ese artículo, porque antes no valían las tierras y con ese artículo ya se amparó el precio y hubo tierras que estuvieron vendiendo a 500, a 500 mil pesos la hectárea, (José Chávez Zúñiga, 70 años, entrevistado por Hilda Hernández, Ejido Albia Coahuila, 4 Octubre 2019).



Además de la tierra, el agua en una zona deficitaria se convierte en recurso de atracción para los productores agrícolas. A la de origen subterráneo se le agregan una variedad de factores que tienen que ver con los costos de operación, como el mantenimiento y el pago de la energía eléctrica, lo que frecuentemente supera la capacidad económica de los ejidatarios, quienes adicionalmente deben comprobar su funcionamiento para mantener la vigencia de la concesión.

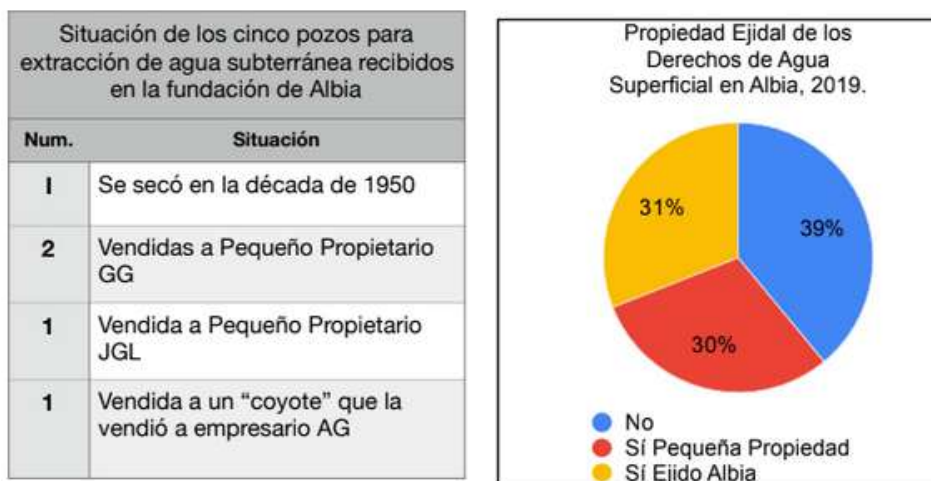


Figura 1. Propiedad del agua en Albia

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas en el caso de los pozos de agua subterránea. Padrón de usuarios de agua superficial (SEDATU, 2017) y Registro de títulos parcelarios, en el caso de la propiedad de derechos de agua superficial (SEDATU, 2019).

En la gráfica anterior, sobre la propiedad de derechos de agua superficial, lo señalado como pequeña propiedad, implica reconocimiento formal de que el derecho de agua está vendido o rentado, alojado en una pequeña propiedad.

El área que señala como "No" significa que el Derecho de agua se vendió/transmitió, mientras que el "Sí" implica reconocimiento formal de que la propiedad es ejidal, pero existe la posibilidad de que esté efectivamente usado por ejidatario, o bien, vendido sin que se hayan actualizado los datos, o rentado por acuerdo informal, por lo tanto, solamente la tercera parte de los derechos podrían estar en manos de los ejidatarios de Albia. La mayoría de los derechos de agua superficial ya no pertenecen a los ejidatarios de Albia. A pesar de no contar con la propiedad de las tierras cultivables ni derechos de agua, ponderan seguir siendo ejidatarios, con reconocimiento formal, en virtud de que en colectivo aún poseen el eriazó que recibieron en el Reparto Agrario.



Pluriactividad y desagrarización

El proceso de diversificación laboral y la pluriactividad es evidente en el ejido Albia, tanto en lo que concierne a sus pobladores en general como en los *ejidatarios*, en lo que refiere a estos últimos la apluriactividad se hace visible a través de los siguientes relatos:

El Sr. J. C. hijo de ejidatario trabajó en las tareas agrícolas desde la infancia ayudando a su padre. Al morir éste los derechos parcelarios quedaron en manos de la madre, quien “imposibilitada” por ser mujer lo estimuló a hacerse cargo de la parcela y del sustento familiar. Con el paso del tiempo y con la muerte de la madre las tierras quedaron en sus manos, el hermano que podría ser beneficiario del derecho sucesorio contaba ya con una carrera y había emigrado a la ciudad de Torreón.

Una vez convertido en ejidatario, el Sr. J.C. continuó siendo parte de un grupo, propietario de dos norias. En la década de 1980 su grupo, gracias a la estructura crediticia y las políticas del campo de la época, obtuvo un crédito para la instalación de un establo de vacas lecheras, que funcionó durante diez años y después de varios obstáculos financieros entregaron al Banco lo que quedaba del establo, posteriormente vendieron la tierra y el agua a un pequeño propietario. Actualmente es el juez del comisariato ejidal, figura que permanece en el ejido pero que no implica más que exiguos y esporádicos ingresos, adicionalmente recibe apoyo económico de los hijos, ninguno de los cuales se dedica a las actividades del campo.

El Sr. JH ejidatario de Albia, después de el intento fallido de trabajar en colectivo en un establo, que perdieron, desde su perspectiva, por el contubernio entre coyotes y funcionarios de Banco Rural vendió su tierra y derechos de agua. Continuó trabajando algunos años como jornalero en las tierras de ejidos cercanos, posteriormente aprendió el oficio de albañil al trabajar cerca de una década como auxiliar y luego como “maestro” después de la década , cuando sus cualidades físicas disminuyeron y al no encontrar trabajo por su edad se convirtió en “pepenador” de pet, lamina y fierro, fue entonces cuando estimulado por un amigo empezó a desempeñarse como empacador en un supermercado cercano a la localidad, de las propinas proceden sus ingresos actuales, tiene cinco hijos ninguno interesado en actividades del campo, sino más bien en la industria de la construcción y en las maquiladoras de la región.



En lo que corresponde a la población en general, como se muestra en la gráfica solamente el seis por ciento se dedican a actividades agropecuarias y la mayor parte es trabajador por cuenta propia o bien se ubican en el sector servicios e industrial, lo que constituye una clara muestra de la desagrarización del Ejido Albia.



*Figura 2. Población de Albia según tipos de empleo
Distribución de la población mayor de 18 años en tipos de empleo.
Fuente: elaboración propia a partir de encuesta*

Resignificación

Implica la reconfiguración simbólica, tiene como ejes el significado de la tierra, el Reparto agrario y la condición de “ejidatario”. El significado de la tierra se entrecruza con la pluriactividad y la desagrarización, vinculados a la nueva ruralidad, lo que implica la reconfiguración de la representación social que las personas tiene sobre la tierra, no solamente como elemento del mundo natural sino su visualización como objeto significativo derivado del tipo y forma de relación que se establece con ella y, ligado con lo anterior, la valoración de la misma. En los relatos de los viejos habitantes de Albia aparece la descripción, con una importante carga afectiva, del paisaje de la localidad donde las parcelas, el algodón y el maíz ocupaban un lugar especial. En torno a ello giraba la vida cotidiana expresada en la costumbre de que los niños acompañaran a los padres a la parcela, así ayudaban en la faena diaria, al tiempo que se capacitaban y se perfilaban como el relevo generacional. Se expresaba también en los relatos de los



padres que describen las tareas agrícolas, las dificultades económicas para satisfacer las necesidades familiares, los esfuerzos para lograr que los hijos estudiaran lo suficiente para mejorar sus ingresos. No puede faltar la mirada de las mujeres que cuentan la experiencia de levantarse muy temprano para preparar el “lonche” que calmara el hambre de su pareja en una jornada de trabajo, tarea en que se habilitaban las hijas y a través de la cual reestructuraban su mundo de significados que las llevaría posteriormente a tomar una postura hacia el mundo del agro.

Por otro lado, el ciclo agrícola permeaba la vida de la localidad: el acceso a recursos económicos de la banca ejidal, las rutinas familiares marcadas por la siembra, la pizca y demás etapas del proceso productivo, los festejos familiares, el mantenimiento de la vivienda y la satisfacción de otras necesidades cotidianas dependían de tal ciclo.

En la nueva ruralidad en Albia la tierra deviene en insumo para la producción de alimentos, esos que son consumidos por todos y que actualmente en su totalidad deben ser comprados. Los viejos habitantes cuentan que antaño, además de los cultivos orientados al mercado, comúnmente se contemplaba una parte de la parcela o un periodo de siembra con fines de auto consumo, razón por la cual en su perspectiva, aunque no hubiera mucho dinero no carecían de alimentos.

Las representaciones sociales sobre la tierra tienen sin duda una dimensión histórica. Los ejidatarios de La Laguna tienen en su acervo de significados un referente fundamental en el Reparto Agrario. Los antecesores de los actuales ejidatarios formaron parte del grupo de peones que demandaban tierra y mejores condiciones de vida, quienes se movilizaron y tuvieron la capacidad de hacer una huelga general, lo que se convirtió en factor importante para que el gobierno cardenista decretara el reparto agrario que tuvo como resultado la creación de ejidos en la región. Este hecho ha sido frecuentemente ponderado y utilizado con la pretensión de generar un alto reconocimiento a los trabajadores del campo del sector social, ese grupo de personas que, por razones naturales, disminuye hasta desaparecer en el tiempo, reconocidos como los “primordiales” en cada ejido de La Laguna. La conmemoración del reparto agrario en los ejidos laguneros constituye un referente de identidad del agro lagunero. Encabezar el desfile conmemorativo a la par de los primordiales constituía un privilegio exclusivo de los ejidatarios. Al respecto una enunciación sobre una reciente situación así lo muestra:



... fue una señora y le dijo: “porque te atreves a venir a desfilando si ni ejidataria eres, ni eres ejidataria ni eres comisariada”, esa señora sí se llenó de valor y fue y le dijo, ya lo que hizo fue que muy disimulada se fue saliendo y se fue mejor pa’ su casa, dijo “no tendrás vergüenza de venir desfilando, eso déjalo para los hijos de ejidatarios, porque tu ni hija de ejidatario eres”, y no, no era ni ejidataria ni el papá (Modesta Rodríguez Rubio, 73 años, entrevistada por Hilda Hernandez, Ejido Albia, Coahuila, 4 de octubre de 2019).

En este tradicional desfile participan también la reyna del Ejido y los jóvenes de las escuelas locales. A medio día el pueblo y los visitantes llegan a degustar la comida preparada por las mujeres del ejido, para luego cerrar la celebración con el baile nocturno. Todo ello muestra que tanto ejidatarios como vecindados convergen en esta actividad que cumple la función manifiesta de conmemorar el reparto agrario, pero que de manera latente se convirtió en un ritual que desemboca en la cohesión social, y refuerza mecanismos cooperativos y de retroalimentación a la estructura de la localidad en que la máxima autoridad formal e informal estaba en manos del comisariado ejidal.

A partir de la evidente renta y venta de derechos de tierra y agua y el indiscutible proceso de desagrarización en las localidades y después del agudo cuestionamiento de si en el contexto actual hay razones para celebrar, a casi 30 años de formalizada la venta de la tierra, aún en ejidos en que quedan ya pocos ejidatarios el desarrollo del ritual permanece, con variaciones más o menos profundas, desde las que dan cuenta de rasgos típicamente reconocidos como urbanos hasta los que notoriamente son promovidos por quienes forman parte de los procesos migratorios temporales hacia los Estados Unidos. En este contexto, en Albia se observa una recomposición de la estructura hegemónica, antes centrada en el comisariado ejidal, evidenciada por un sector de vecindados que intenta apropiarse del ritual, mostrando claramente el declive de la figura ejidal.

Derivado del control, autoridad y poder del comisariado ejidal y del ejido como detonador del crecimiento de la localidad, ser ejidatario confería reconocimiento y valoración, no solamente por lo que se ha mencionado antes sino también por dos razones importantes. Considerando que la superficie ejidal tiene limitaciones, y el promedio de la superficie de las parcelas es también estable, los primeros propietarios de las parcelas podrían determinar a la persona que le sucedería, de ahí que la lista de sucesores y la designación escrita y entregada en sobre cerrado adquirirían un poder simbólico importante, pues generalmente la esposa y posteriormente uno de los hijos o hijas podría tener el derecho a ser ejidatario.



En esta situación es importante considerar que cada uno de los ejidatarios tiene la propiedad de cuatro hectáreas pero no puede regarlas todas, tres y media en promedio, y en ocasiones menos, dependiendo del volumen de agua almacenada en la presa. Tal situación aparece como un problema de distribución de un bien escaso con reglas reconocidas y aceptadas, por lo que ser ejidatario tenía un alto reconocimiento en la comunidad. A lo anterior se agrega que la vida de los ejidatarios y de la localidad estaba regida por las decisiones tomadas por los ejidatarios en asamblea, así que tener voz y voto representaba la posibilidad de incidir en la toma de decisiones bajo la condición de ser ejidatario.

Por otro lado, en el proceso resignificación y reconfiguración del universo simbólico es relevante que las aspiraciones predominantes entre los habitantes del ejido se encuentran en primer lugar la de tener un negocio propio y en los últimos lugares de preferencia la tierra, el agua y el ganado.

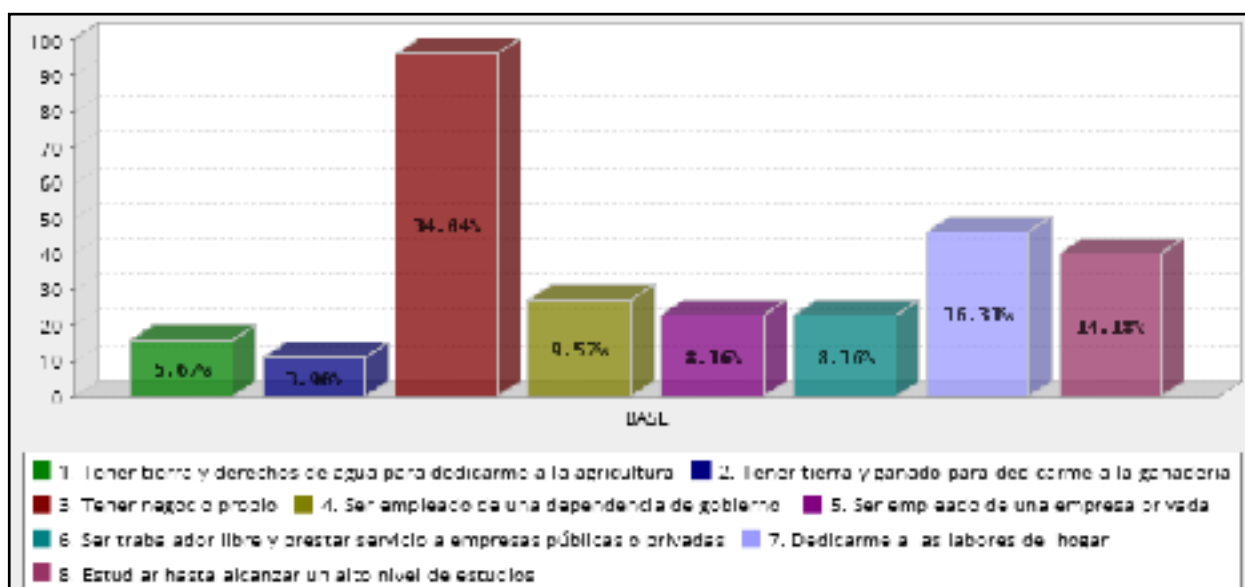


Figura 3. Aspiraciones de los habitantes de Albia
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta

Reflexiones finales

En México las políticas neoliberales hacia el campo han provocado cambios profundos en los habitantes de las localidades en sus distintas dimensiones. Lo económico, lo político y lo cultural se entrelazan para dar lugar a la desagrarización que podría tener como resultado una nueva forma de ruralidad, queda pendiente evaluar cómo en las localidades del norte del país se presenta, así como visualizar cuáles rasgos permanecen como esencia de la ruralidad. Para el caso de La Laguna surge la pregunta



de si la reacción de los ejidatarios a este avasallamiento neoliberal en el campo será resultado de una patología social de asumir los males derivados de las decisiones gubernamentales como recurso legitimador del deseo inconsciente de abandonar la actividad agrícola, en tanto un abandono voluntario y manifiesto sería socialmente inaceptable. Dos indicios que podrían suponer esta idea es en primer lugar los discursos de los ejidatarios que manifiestan el desatino de haber vendido la tierra, más que por la importancia que tenga por sí misma, sino por haberla vendido a bajo precio. El segundo indicio corresponde a la aspiración de que sus hijos se dediquen a actividades que no sean las agropecuarias pues con esta lógica tarde o temprano el abandono de la actividad agrícola por el sector social sería inminente. Lo cual sugiere la determinación económica, pues cómo, o por qué justificar una actividad sin ganancia económica. Claramente hay otras razones que parecen no aplicar para el caso de La Laguna, como la apropiación, la pertenencia, el apego a la tierra. Como puede observarse, como resultado de este trabajo abundan las preguntas y temas para la reflexión en una investigación en proceso.

Lo que resulta incuestionable es que la desagrarización de las sociedades rurales de La Laguna es un fenómeno irreversible que transforma de manera trascendental las prácticas sociales y las significaciones culturales, surge como necesidad revisar también de qué manera impacta el proceso de desagrarización en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y hacia dónde se dirige la reconfiguración identitaria inherente a este fenómeno.

Referencias

Departamento Agrario Delegación en la Comarca Lagunera (1936) Acta de posesión y deslinde relativa a la dotación de ejidos al poblado de "Alvia", municipio de Torreón, Coahuila, noviembre 7.

Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (1936), Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado Albia, Estado de Coahuila, Departamento agrario. Tomo XCIX, Núm. 14, noviembre 17.

Registro Agrario Nacional (RAN) (2005) Títulos parcelarios, ejidatarios-posesionarios, Coahuila. Documento de circulación interna.

Ruiz Rivera Naxhelli, Delgado Campos Javier (2008) Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad Revista Eure, Vol. XXXIV, No. 102, pp 77-95, agosto.



Sánchez Albarrán, Armando (2011), Sociología rural: el nuevo campesino entre la globalización y la tierra prometida. Espacio Abierto, vol. 20, núm 4, octubre- diciembre, Universidad de Zulia, Venezuela, pp 561-577.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2017), Ejidos certificados parcelas certificadas y parcelas con dominio pleno, Documento de circulación interna.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2019), Registro de títulos parcelarios, Ejido Albia, Documento de circulación interna.

Servicio de Información Georreferenciada Región Lagunera [seig-laguna], (2019). Datos demográficos de Albia, Torreón, Coahuila de Zaragoza, disponible en seig_laguna.lag.itesm.mx, consulta realizada el 23 de noviembre de 2019.

Steffen Riedemann y Tarrío García María (2010) Neoliberalismo y crisis agroalimentaria: adaptación y resistencia de los ejidatarios mexicanos, Textual Análisis del medio rural latinoamericano, año 2010, Núm 56 julio-diciembre, Universidad Autónoma de Chapingo, disponible en chapingo.mx.

Entrevistas

Juan Manuel Herrera de Santiago, 71 años, entrevistado por Hilda Georgina Hernández. Ejido Albia Coahuila, 8 de octubre del 2019.

José Chávez Zúñiga, 70 años, entrevistado por Hilda Hernández, Ejido Albia Coahuila, 4 Octubre 2019.

Modesta Rodríguez Rubio, 73 años, entrevistada por Hilda Hernandez, Ejido Albia, Coahuila, 4 de octubre de 2019.

ALAS

Asociación Latinoamericana de
Sociología

DOSSIER

DESARROLLO RURAL Y CUESTIÓN
AGRARIA EN AMÉRICA LATINA

GRUPO DE TRABAJO 5

Lima, Perú 2020

ISBN: 978-612-48166-5-9



9 786124 816659

